Año I REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 1.°

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 12 de Febrero de 1887.

REPÚBLICA DE COLOMBIA BIBLIOTECA CORTE DE JUSTICIA

CONTENIDO.

	Pág.
Objeto de este periódico	1
Decreto número 62 sobre creación de la *Gaceta Judicial*	2
ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.	
Instalación de la Cort Suprema	2
Acuerdo número 3 sobre suministros, empréstitos y expropiaciones.	3
Id. número 4 sobre asuntos jurídicos	3
Id. número 22 sobre varios asuntos	4
NEGOCIOS CIVILES.	
Sentencia sobre una pensión	
Id. sobre un juicio ejecutivo	
NEGOCIOS CRIMINALES.	
Sentencia sobre causa por sustracción de documentos	5
AUTOS INTERLOCUTORIOS.	
Sobre responsabilidad de un telegrafista	6
Sobre delito político	6
Sobre hurto de unas alhajas	6
Sobre una capellanía	7
ANUNCIOS	8

GACETA JUDICIAL.

OBJETO DE ESTE PERIÓDICO.

El régimen federal absoluto que imperó en la República desde 1863, había creado diferencias más ó menos profundas y sustanciales en la legislación de los nueve Estados que al presente son Departamentos nacionales, produciendo discordancias en la vida social, en la familia, en la constitución de la propiedad, y en los procedimientos judiciales de los colombianos, que á la verdad no tenían razón de ser en el seno de un pueblo natural é históricamente unido por comunes sentimientos, caracteres y necesidades. Al mal de la diversidad de nueve cuerpos de legislación se añadía toda la legislación propiamente nacional, y nada era más difícil que hacer imperar en Colombia la unidad del Derecho y la uniformidad en la Justicia.

Guiado por altos propósitos de concordia nacional y de unificación de todos los grandes elementos de prosperidad con que contaba el país, el Consejo Nacional Constituyente reconoció la verdad de los hechos históricos y la necesidad de acomodar á ellos las instituciones políticas, y resueltamente proclamó la unidad de la República, como la base fundamental de la reconstitución y de toda reforma en lo futuro. Procediendo con la necesaria consecuencia, dió nuevas formas al Poder Judicial, y admitió los recursos de casación, entre los nuevos procedimientos judiciales, con el fin muy loable de asegurar la justicia en todas partes y abrir campo á la fijación, por medio del más alto Tribunal, de principios y reglas que, estableciendo una Jurisprudencia nacional, sirviesen de sólida garantía á todos los intereses que tienen en la ley su salvaguardia.

Cónsona con estas miras es la ley 61 de 1886 (25 de Noviembre) "provisional sobre organización y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio público, y algunos procedimientos especiales." En ella se han adoptado las disposiciones necesarias para hacer efectivos los recursos de *casación*, de *revisión* y de *hecho*, cuyas decisiones han de formar regla en la República, una vez que constituyan la uniformidad necesaria. De aquí la necesidad de mantener un órgano permanente de publicidad de los actos de la Corte Suprema de Justicia, dando cabida en él á las exposiciones jurídicas del Procurador general, y á todos los escritos y documentos que, á juicio de la misma Corte, puedan ilustrar la Jurisprudencia colombiana y crear hábitos de estudio y de compilación de todos los actos que se refieren á la teoría y la práctica del Derecho.

Pero el *Diario Oficial*, sujeto á las multiplicadas é imperiosas necesidades de publicidad que son propias del Gobierno, no podía prestar sus columnas con entera y metódica regularidad á la publicación de los actos judiciales superiores; y además, dispersos estos actos en muchos números del *Diario*, y con inevitables interrupciones, no era posible que ellos sirviesen para formar un cuerpo de doctrina y de historia de la alta administración de justicia. Estas consideraciones movieron al Legislador (*Disposiciones varias* de la ley 61 citada) á mandar establecer un periódico especial que sirviese de órgano á la Corte Suprema para hacer conocer sus decisiones y prestar importantes servicios al foro colombiano. Con estos objetos ha sido creada la *Gaceta Judicial*, que en lo sucesivo será el medio oficial de publicidad de las decisiones de la Corte, y de los demás documentos que ella mande insertar.

El decreto ejecutivo que en seguida se reproduce, satisface cumplidamente la necesidad que se había hecho sentir.

Para hacer más fructuosa esta publicación, la Corte ha resuelto que se reproduzcan, en su orden cronológico, todos los acuerdos, autos y sentencias que desde Septiembre de 1886 se han publicado en el *Diario Oficial*. De esta manera, los que hayan de consultar esta *Gaceta*, hallarán en sus páginas íntegramente reunido el cuerpo de los procedimientos y doctrinas que la nueva Corte Suprema de Justicia, desde su instalación, ha ido adoptando en el desempeño de sus funciones.

Es de esperar que así todos los que tienen el delicado encargo de administrar justicia ó de servir el Ministerio público, y los ciudadanos que se interesan en los negocios forenses, presten á la *Gaceta Judicial* la atención y el apoyo que á todos conviene.

DECRETO NUMERO 62 de 1887

(21 DE ENERO),

sobre ejecución especial del artículo 145 de la ley 61 (25 de Noviembre) de 1886.

El Presidente de la República de Colombia,

Vistas las disposiciones contenidas en el artículo 145 de la ley 61 de 1886 (25 de Noviembre) "provisional sobre organización y atribuciones del Poder Judicial, etc.,"

DECRETA:

Art. 1.° Créase un periódico oficial de la República, denominado *Gaceta Judicial*, destinado á servir exclusivamente de órgano de publicidad de la Corte Suprema de Justicia y del Procurador general de la Nación, que contendrá, conforme al citado artículo 145, las materias siguientes:

1.° Todas las sentencias que dicte la Corte Suprema sobre recursos de casación, de revisión y de hecho;

2.° Todos los acuerdos y las demás sentencias que dicte la misma Corte;

3.° Las vistas del Procurador general que sean de mayor importancia, á juicio de la Corte;

4.° Los fallos de los Tribunales Superiores y Juzgados que, á juicio también de la Corte, convenga hacer insertar;

5.° Los avisos oficiales sobre el personal de la Corte y mutaciones que ocurran; y los edictos, emplazamientos y demás avisos que ella deba ó disponga hacer publicar; y

6.° Las exposiciones, memorias ó estudios sobre puntos de Derecho, é informes ó exposiciones de la Corte, que ésta considere dignos de publicidad.

Art. 2.° Corresponde al Ministerio de Gobierno, por medio de la sección encargada de las impresiones oficiales, contratar por cuenta del Gobierno la impresión y edición de la *Gaceta Judicial*, y cuidar con el mayor esmero de suministrar á la imprenta los materiales necesarios, corregir debidamente las pruebas de impresión, así en tiras como en páginas, hacer distribuír el periódico, tanto en la capital de la República como por medio de los correos, entre todos los funcionarios y oficinas públicas á quienes se distribuye el *Diario Oficial*, y ejecutar toda operación que sea necesaria para la regular y cumplida publicación, distribución y venta del periódico.

Art. 3.° Queda reservado á la Corte Suprema de Justicia el determinar el orden de preferencia en que deban insertarse en la *Gaceta Judicial* las sentencias, autos, edictos y demás resoluciones de la misma Corte, las vistas del Procurador general de la Nación, y todos los documentos y escritos que, conforme al parágrafo 2.°, del citado artículo 145 de la ley 61 de 1886, han de ser publicados en dicho periódico. Al efecto, la Corte Suprema designará cada año, en el mes de Enero, uno de sus Magistrados para que, recibiendo de ella las instrucciones del caso, se entienda con el Editor-corrector oficial del Ministerio de Gobierno, ó directamente con el impresor, en los casos en que fuere urgente ó necesario, con el fin de señalar el orden de preferencia y colocación de los materiales que, por disposición de la Corte, se suministren para su publicación.

Art. 4.° El Secretario de la Corte irá suministrando en cada semana los materiales, á medida que los tenga preparados para su publicación, y á más tardar habrá completado dichos materiales cuarenta y ocho horas antes del promedio del día en que ha de salir á luz cada número de la *Gaceta Judicial*.

Art. 5.° La *Gaceta Judicial* contendrá seis Secciones oficiales, á saber:

1.° De *Sentencias definitivas* de la Corte Suprema de Justicia;

2.° De *Autos interlocutorios* de la misma Corte;

3.° De *Acuerdos y resoluciones* de la Corte;

4.° De *Vistas del Procurador general de la Nación*, emitidas en los asuntos que cursen ante la Corte;

5.° De *Documentos varios judiciales*, propios de la Corte, ó que ella mande insertar, emanados de otros Tribunales ó Juzgados de la República; y

6.° De *Edictos y avisos judiciales* que la Corte estime conveniente ú obligatorio hacer publicar.

Art. 6.° Además de las seis secciones oficiales de que trata el artículo anterior, podrá crearse otra *No oficial*, para insertar en ella aquellas disertaciones jurídicas, memorias científicas sobre Jurisprudencia y otros escritos ó estudios sobre puntos de Derecho que la Corte puede mandar insertar, conforme al inciso 6.° del artículo 145 de la citada ley 61 de 1886.

Art. 7.° Con el fin de hacer tan metódica cuanto más sea posible la publicación de los documentos de que trata este decreto, en cada una de las Secciones oficiales de que habla el artículo 5.° se hará siempre la conveniente subdivisión en partes bien marcadas, según que las sentencias ó los autos se refieran á recursos de *casación*, de *revisión* ó de *hecho*, á negocios *civiles* ó á negocios *criminales*, y entre éstos, á los *comunes* ó los de *responsabilidad*.

Art. 8.° La *Gaceta Judicial* será impresa de manera que sus números puedan ser fácilmente empastados formando libro, y se publicará un número el sábado de cada semana. Tendrá el tamaño de impresión fuera de márgenes, de 30 centímetros de altura por 19 de anchura, y se compondrá de ocho páginas cada una dividida en dos columnas. Si la experiencia comprobare que dichas ocho páginas son insuficientes, podrá hasta duplicarse su número, ó podrán publicarse dos números semanales, á juicio del Ministerio de Gobierno, pero consultando previamente la opinión de la Corte Suprema.

Art. 9.° La edición de la *Gaceta Judicial* será por lo menos de dos mil ejemplares, á fin de que pueda ser distribuída á todos los Jefes de oficinas nacionales, á todos los Tribunales y Juzgados de la República, desde la Corte Suprema hasta los Juzgados municipales, á los Agentes del Ministerio público en todas sus escalas, y á cuantos funcionarios públicos deban intervenir en la administración de justicia ó tener conocimiento de ella; todo sin perjuicio de los ejemplares que puedan ser necesarios para atender á la demanda de los particulares.

§. El Ministerio de Gobierno dispondrá ó estipulará lo conveniente acerca del precio á que deba ser vendido el periódico á los particulares, ya sea en números sueltos ó por suscripciones.

Art. 10. La edición de la *Gaceta Judicial* se hará en papel de buena calidad, con los tipos denominados *small-pica* y *long-primer*, acomodándola rigorosamente á la nueva ortografía de la Academia Española.

Art. 11. Cada año se formará por Secciones, según la naturaleza de los negocios, un índice cronológico de los documentos publicados en la *Gaceta Judicial*, del primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del último año, con expresión de las páginas respectivas; índice que será redactado por el Oficial Mayor de la Corte Suprema, y se insertará al fin del último número del año á que corresponda.

Art. 12. Tan luégo como se comience la publicación de la *Gaceta Judicial*, este periódico será el órgano oficial de publicidad de la Corte Suprema de Justicia y del Procurador general de la Nación, dejando de serlo el *Diario Oficial*. En consecuencia, todas las autoridades, corporaciones y funcionarios públicos de Colombia, darán entera fe á los documentos oficiales que en dicha *Gaceta* se publiquen, así como la han dado hasta ahora á las publicaciones de igual clase del *Diario Oficial*.

Art. 13. El Editor oficial tendrá el deber de verificar, por medio de los correos y por distribuciones, canjes de la *Gaceta Judicial* con otros periódicos de igual naturaleza, así nacionales como extranjeros; á cuyo efecto el Magistrado de la Corte Suprema que haya sido designado para entenderse con dicho Editor, suministrará á éste la lista de los periódicos cuyo canje ha de ser solicitado. Los canjes que se obtengan pertenecerán á la Biblioteca de la Corte Suprema, donde serán convenientemente encuadernados y conservados.

Dado en Bogotá, á 21 de Enero de 1887.

ELISEO PAYAN.

El Ministro de Gobierno, FELIPE F. PAÚL.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

INSTALACIÓN DE LA CORTE SUPREMA NACIONAL.

En la ciudad de Bogotá, capital de la República de Colombia, á los tres días del mes de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis, se reunieron en acuerdo los señores Magistrados doctores Rito Antonio Martínez, José María Samper y Antonio Morales, nombrados principales, y los suplentes primero, tercero, cuarto y séptimo, señores doctores Froilán Largacha, Manuel José Angarita, Luis S. de Silvestre y Salomón Forero, por ausencia de los principales, y declararon instalada la Corte Suprema, en cumplimiento de lo preceptuado en el inciso 4.° del artículo *A* de las disposiciones transitorias de la Constitución de la República.

Constituída así la Corte bajo la Presidencia del señor Magistrado doctor Angarita, por orden alfabético de apellidos, éste nombró para Secretario *ad-hoc* al señor Magistrado doctor Morales, con lo cual se declaró abierto el acuerdo.

En consecuencia, se procedió á la elección de Presidente para el período legal en curso y por el término que señala el artículo 148 de la Constitución. Practicada la votación, sirviendo de escrutadores los señores Magistrados doctores Forero y de Silvestre, dió el siguiente resultado: cinco votos por el señor Magistrado doctor Martínez, y dos por el señor Magistrado doctor Samper; en tal virtud, la Corte declaró legalmente elegido al primero.

En seguida se procedió á la elección de Vicepresidente, sirviendo de escrutadores los mismos señores Magistrados que en

la anterior; practicada la votación resultó así: cinco votos por el señor Magistrado doctor Samper y dos por el señor Magistrado doctor Largacha; en consecuencia, la Corte declaró legalmente elegido al primero.

Acto continuo, y sirviendo de escrutadores los señores Magistrados doctores Angarita y de Silvestre, se procedió á la elección de Secretario, la cual dió este resultado: cinco votos por el señor doctor Ramón Guerra Azuola, y dos votos por el señor Flavio González M., por lo cual la Corte declaró legalmente elegido al primero.

En este estado, el señor Presidente dispuso que se comunicaran estas designaciones á los Excelentísimos señores Presidente de la República y Presidente del Honorable Consejo Nacional Legislativo, á su Señoría el señor Procurador general de la Nación, á los señores Ministros del Despacho, al señor Gobernador del Distrito Federal de Cundinamarca, al señor Jefe Civil y Militar del Territorio nacional de Panamá, á los señores Gobernadores ó Jefes civiles y militares de los Departamentos, á los señores Presidentes de las Cortes ó Tribunales de los mismos y al señor Presidente de la Oficina general de Cuentas. Ordenó también el señor Presidente de la Corte que se comunique lo más pronto el nombramiento de Secretario con el fin de que, si acepta, se sirva concurrir inmediatamente al Despacho, á efecto de tomar posesión; y que se publique esta acta en el *Diario Oficial*.

Con lo cual se dió por terminado el presente acuerdo, que firman el señor Presidente y demás señores Magistrados, con el infrascrito Magistrado Secretario *ad-hoc*.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER.—*Manuel J. Angarita.—Salomón Forero.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Luis S. de Silvestre.* El Magistrado Secretario *ad-hoc*, *Antonio Morales*.

Secretaría de la Corte Suprema—Bogotá, diez de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Es copia conforme.—*Ramón Guerra A.*

ACUERDO N.° 3.

(SOBRE SUMINISTROS, EMPRÉSTITOS Y EXPROPIACIONES.)

En Bogotá, á 21 de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis, reunidos en la Sala de conferencias los señores Magistrados de la Corte Suprema, Su Excelencia el Presidente hizo notar que, habiéndose resuelto en el acuerdo del día nueve del mes en curso aplazar provisionalmente las decisiones relativas á asuntos pendientes sobre empréstitos, suministros y expropiaciones, motivados por hechos anteriores á la última guerra civil, por cuanto había motivos para suponer que sobre este particular adoptase alguna resolución el Consejo Nacional Legislativo, parecía conveniente que la Corte tomase la iniciativa para provocar alguna decisión que pusiese término á la expectativa. Como los demás señores Magistrados abundasen en las mismas ideas, el señor Magistrado doctor Samper fijó la siguiente proposición que, suficientemente discutida, fué aprobada por unanimidad de votos:

"La Corte Suprema acuerda dirigir, por medio de su Presidente, una nota á Su Excelencia el Presidente del Consejo Nacional Legislativo, con el fin de manifestar á este augusto Cuerpo la convicción que tienen todos los Magistrados de la conveniencia que habría para los intereses de la Nación, y acaso también para los particulares, en que todas las reclamaciones sobre suministros, empréstitos y expropiaciones quedasen sometidas á una sola jurisdicción, y de manera que la entidad calificadora de la justicia y cuantía de aquellas reclamaciones, pudiese tener mayor libertad que un Tribunal, para amparar los intereses nacionales contra excesivas pretensiones. De esta suerte, habiéndose creado, por recientes decretos del Gobierno, una Sección especial en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y una Comisión distinta para el común de los negocios, encargadas de estudiar y resolver las reclamaciones por suministros, empréstitos y expropiaciones, provenientes de la última guerra civil, bien pudiera convenir que á dicha Sección y dicha Comisión, respectivamente, pasasen las reclamaciones de igual naturaleza, provenientes de hechos anteriores al 18 de Diciembre de 1884, en que han conocido hasta ahora los Jueces nacionales y la Corte Suprema, á virtud de disposiciones legales.

"Caso que el Consejo Nacional Legislativo creyere conveniente la medida que se indica, se pondría término inmediatamente á los procedimientos judiciales pendientes, á virtud de la disposición legal que se adoptase, y al punto serían remitidos á su nuevo destino los expedientes que se hallan en tela de juicio, sin demora para los reclamantes ni riesgo de perjuicio para la Nación. Si, al contrario, el Consejo Nacional resolviere prontamente el punto, declarando que en su concepto no debe hacerse alteración en lo existente, la Corte se aplicará con actividad á resolver sobre los juicios pendientes relativos á empréstitos, suministros y expropiaciones, bien que con el temor de que el estudio y decisión de estos delicados asuntos causen inevitables demoras en los muchos otros negocios de que conoce la Corte.

"Comuníquese copia de este Acuerdo al Excelentísimo Señor Presidente del Consejo Nacional Legislativo, y publíquese en el *Diario Oficial*."

Con lo cual se dió por concluido el presente Acuerdo, que firman todos los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTINEZ—El Vicepresidente, JOSÉ MARÍA SAMPER—*Manuel J. Angarita—Salomón Forero—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre.*

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

Secretaría de la Corte Suprema—Bogotá, veintidós de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis.—Es copia.

Ramón Guerra A.

ACUERDO N.° 4.

(SOBRE ASUNTOS JURÍDICOS.)

En Bogotá, á veintisiete de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis, habiendo solicitado el señor Magistrado doctor Samper que se reuniese la Corte Suprema en Sala de acuerdo para considerar un asunto importante, reuniéronse todos los señores Magistrados, y abierta la sesión por el señor Presidente, el mencionado señor doctor Samper hizo la siguiente exposición verbal:

"El artículo 69 del Código Penal de la nación dispone que toda pena se prescriba por el decurso de cierto tiempo, según su naturaleza, y el 71 señala como tiempo para la prescripción, diez años para las penas corporales y cuatro para las demás; salvo los casos especiales, á que se refieren los artículos 69 y 70. En consecuencia, el artículo 1,419 del Código Judicial (cuadragésima reforma de 1876), manda que cese todo procedimiento cuando llegue el caso de prescripción, lo mismo que en los de muerte del reo y de indulto ó amnistía.

"Conforme á estas disposiciones, han ocurrido y siguen ocurriendo muchos casos en que, ya por demoras en los procesos, ya porque los acusados procuren entorpecerlos con un propósito deliberado, ó por abandono de los funcionarios de instrucción ó los Jueces de primera instancia, á veces se cumplen los diez años, y muy frecuentemente los cuatro del término de la prescripción, antes de que se pronuncie la sentencia condenataria ó el auto de seguimiento de causa, y es necesario entonces mandar que cese todo procedimiento; con lo que fácilmente se asegura la impunidad de los reos ó sindicados.

"Es principio universal de jurisprudencia civil, que la prescripción se interrumpe por juicio formal en que comparece la parte que la puede alegar; y es absolutamente lógica y racional la aplicación de este principio á los asuntos criminales, por ser una misma la razón de la ley. Esto está reconocido por los Códigos de varios de los extinguidos Estados, según los cuales la prescripción de las penas se interumpe por el juicio criminal en qué comparece el reo. Desde el momento en que está *sub judice*, sabe que se le exige la responsabilidad merecida por el delito que ha cometido, y por lo tanto, falta el motivo para alegar prescripción de la pena respectiva.

"Por estas consideraciones, estimo conveniente que se reforme el artículo 71 del Código Penal, haciendo alguna distinción entre los funcionarios públicos y el común de los particulares, y aumentando, para esto el término de la prescripción respecto de los primeros, por cuanto, en igualdad de circunstancias, su delincuencia es más grave y perniciosa que la de los particulares; y que se adicione el artículo 76, agregándole lo necesario.

"Propongo, por tanto, la siguiente resolución:

"Manifiéstese al Excelentísimo Consejo Nacional Legislativo que, en concepto de la Corte Suprema, conviene aprovechar la ocasión de la expedición que va á hacerse de un nuevo Código Penal, para reformar el artículo 71 y adicionar el 76 del modo siguiente:

Art. 71. En los demás delitos y culpas que tengan señalada pena corporal, la pena se prescribe por diez años. En los delitos y culpas que tengan señalada otra pena, ésta se prescribe por el trascurso de cuatro años, si el acusado no era funcionario público, y por el de seis, si era funcionario público cuando cometió el delito.

Art. 76. El término de la prescripción no se contará respecto del reo rematado que se fugue de un establecimiento de castigo, sino desde el día de la fuga. Tampoco se contará en el tiempo de la prescripción el de la duración del proceso, desde la fecha de la comparecencia del acusado contra quien se ha pronunciado auto de formación de causa, á menos que el proceso haya durado, desde aquella fecha, por un tiempo igual al de la prescripción, ó que el sindicado haya estado detenido.

Detenidamente consideraron los señores Magistrados este proyecto de acuerdo, y lo aprobaron por unanimidad de votos.

Con lo cual se dió por terminado el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER.

Manuel J. Angarita.—Salomón Forero.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Luis S. de Silvestre.—Ramón Guerra A., Secretario.

ACUERDO N.° 22.

(SOBRE VARIOS ASUNTOS).

En la ciudad de Bogotá, á siete de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete, se constituyó la Corte Suprema Nacional en Sala de acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, con el objeto de tomar en consideracion los siguientes asuntos:

Consideróse en primer lugar, á indicación del señor Presidente, la obligación que tenía la Corte de nombrar, para el presente año, el Revisor del Banco Nacional. Procedióse á hacer el nombramiento y obtuvo la totalidad de los votos el señor Matías de Francisco; por lo cual el señor Presidente lo declaró nombrado, y dispuso se comunicase el nombramiento al señor Ministro del Tesoro, al Director Gerente del Banco Nacional y al señor de Francisco.

Dióse lectura al siguiente telegrama, recibido por la Corte.

Medellín, 1.° de Febrero de 1887.

A Su Excelencia el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Bogotá.

Instalóse Tribunal Superior del Distrito y acordó someter á la Corte los siguientes puntos de consulta, por si estuviere en sus facultades resolverlos:

1.° ¿Fiscales del Tribunal tienen voto en el nombramiento de Jueces?

2.° ¿Debe el Tribunal nombrar suplentes de Jueces Superiores de Distrito, y en qué número?

3.° ¿Pueden los Jueces que se nombran funcionar válidamente, si el primero de Marzo no se tiene constancia oficial de aprobación de la Corte?

Caso negativo, ¿qué se hace?

¿Siguen los actuales ó quedan acéfalos los Juzgados?

4.° ¿Bastará como prueba de idoneidad certificación de empleados antioqueños residente en esa ó de Gobernador de aquí?

Requiérese inmediata resolución si la Corte fuere competente, para poder obrar con acierto.

"Dios guarde á Su Señoría.

Silverio Arango P."

El señor Magistrado Samper propuso la siguiente resolución, que fué aprobada por unanimidad:

Señor Presidente del Tribunal del Distrito de Antioquia.—Medellín.

Esta superioridad ha considerado hoy, en Sala de acuerdo, la consulta que le hace Su Señoría en telegrama del primero (1.°) recibido el cinco, y ha resuelto lo siguiente:

La Corte no se considera competente, por falta de facultad legal expresa, para resolver sobre la consulta del Tribunal Superior del Distrito de Antioquia; mayormente cuando la opinión que expresase podría anticipar fallos en futuros juicios.

La Corte no puede adoptar resoluciones generales en ningún asunto, sino emitir fallos especiales, en vista de autos, y menos cuando los asuntos generales tienen carácter administrativo.

Trasmítase la consulta á su Señoría el Ministro de Gobierno, por ser más natural que la resuelva el Poder Ejecutivo.

Comuníquese al Tribunal Superior de Antioquia y al Ministerio de Gobierno.

Además, el señor Magistrado doctor Samper fijó la siguiente proposición, que fué aprobada por unanimidad:

No siendo posible á la Corte resolver, en muchos casos, con pleno conocimiento de la idoneidad de las personas, sobre aprobación ó desaprobación de los nombramientos de Jueces de Circuito que hagan los Tribunales Superiores,—se dispone que se dirija una orden circular á todos los Presidentes de dichos Tribunales, en la cual se les pida remitan siempre á la Corte, con los nombramientos de Jueces de que den cuenta, los informes ó documentos, ó copia de éstos, que hayan tenido á la vista para comprobar la idoneidad constitucional de los individuos nombrados para las judicaturas de Circuito; á fin de que la Corte pueda resolver, con pleno conocimiento, si aprueba ó nó los nombramientos.

Se consideró en tercer lugar una nota de Su Señoría el Presidente del Tribunal de Cundinamarca, de fecha tres del presente mes, número 82, en la cual comunica al Secretario varios nombramientos hechos por dicho Tribunal, de Jueces de Circuito; y la Corte, á moción del Magistrado señor Angarita, resolvió lo siguiente:

No teniendo la Corte la completa certeza exigida por el artículo 115 de la ley 61 (25 de Noviembre) de 1886, "provisional sobre organización y atribuciones del Poder Judicial etc.," certeza sin la cual no es posible aprobar los nombramientos de todos los Jueces á quienes se refiere la nota oficial que se considera, la Corte se abstiene por ahora de resolver, y dispone que para aprobar ó desaprobar estos nombramientos, se pidan previamente al Tribunal de Cundinamarca los datos, informes y documentos que haya tenido á la vista para cerciorarse de la idoneidad que tengan los nombrados, conforme al artículo 157 de la Constitución.

Trasmítase por el telégrafo la resolución general anterior, á todos los Presidentes de los Tribunales Superiores de Distrito.

No habiendo otro asunto de qué tratar, Su Señoría el Presidente levantó la sesión.

El Presidente, JOSÉ M. SAMPER.—*Manuel J. Angarita.—Julián R. Cock Bayer.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Benjamín Noguera.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A.*, Secretario.

Es copia fiel.—Bogotá, diez de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete.

El Secretario,—*Ramón Guerra A.*

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintidós de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis.

VISTOS:—Antonia, Felisa y María Francisca Sandino, han solicitado se les declare con derecho al goce de pensión del Tesoro nacional, como huérfanas de su legítimo padre el Capitán de la Independencia, José Sandino. El Jefe del Estado Mayor general del Ejército, por cuyo conducto se ha hecho la solicitud y el Ministro de Guerra y Marina, han informado, en 20 de Abril y 25 de Mayo de 1885, respectivamente, de un mo-

do favorable á las solicitantes, y el expediente ha sido remitido á la Corte para la resolución respectiva.

Están comprobados los siguientes hechos:

1.° Que José Sandino sentó plaza de soldado al servicio de la causa de la Independencia, en primero de Enero de mil ochocientos doce, y que se retiró del servicio, por invalidez, en tres de Mayo de mil ochocientos diez y ocho en el grado de Alferez 1.°; que concurrió á las acciones de guerra de Chire, Guadualito, á las dos de La Mata de la Miel, Yagual, San Fernando, Mucuritas, Barinas, Calabozo, Sombrero, Ortiz y Cojedes, quedando en la última por muerto sobre el campo de batalla, á consecuencia de seis heridas que le causaron una perpetua invalidez; y que abonado el doble tiempo de campaña, tuvo diez años, cinco meses, tres días de servicio. Todo lo cual aparece de la respectiva hoja de servicios formada por el Estado Mayor en veinte y seis de Mayo de mil ochocientos treinta y siete, que en copia autorizada se ha acompañado.

2.° Que Sandino fué ascendido á Capitán en mil ochocientos cuarenta y uno, según el despacho expedido á su favor por el General en Jefe del Ejército del Sur, despacho que fué refrendado por el Poder Ejecutivo en once de Diciembre del mismo año.

3.° Que el Capitán Sandino contrajo matrimonio con Alberta Orjuela, en diez de Mayo de mil ochocientos cuarenta y uno, según la certificación del Párroco que obra en el expediente. Que de ese matrimonio proceden las solicitantes, como lo acreditan las partidas de bautismo de cada una de ellas, reforzadas con las declaraciones de varios testigos.

4.° Que dicho militar murió en Soatá el cinco de Septiembre de mil ochocientos cincuenta y cuatro como aparece de la partida de defunción que obra en copia, autorizada por el Notario 1.° de ese Circuito.

5.° Que las reclamantes dependían de su padre del cual recibían los medios de subsistencia; que son solteras y se hallan en absoluta pobreza; que observan una conducta honorable; que hay identidad real entre [illegible] las mencionadas hijas del Capitán Sandino y las peticionarias y que no han recibido recompensa alguna del Tesoro nacional, según lo asegura el Secretario del Tesoro.

Están, pues, llenados todos los requisitos fijados por el artículo 879 del Código Militar para optar las solicitantes al goce de la pensión en los términos del artículo 858, inciso 1.° del mismo Código.

Por estos fundamentos, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el dictamen del señor Procurador general, resuelve lo siguiente: Antonia, Felisa y María Francisca Sandino, huérfanas del militar de la Independencia, José Sandino, tienen derecho al goce de pensión del Tesoro nacional mientras permanezcan solteras, la que se fija en la cantidad de cuarenta y ocho pesos mensuales, divisible por iguales partes entre las interesadas; con derecho á su goce desde la notificación de esta sentencia, conforme al artículo 893 del Código citado.

Notifíquese, cópiese, publíquese en el *Diario Oficial*, remítase en copia al Cuerpo Legislativo para los efectos legales y archívese el expediente.

R. Antonio Martínez.—José M. Samper.—Manuel J. Angarita.—Salomón Forero.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Luis S. de Silvestre.—Ramón Guerra A., Secretario.

La anterior sentencia fué publicada en la audiencia del veintidós de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Guerra A., Secretario.

En veintitres de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis notifiqué la anterior sentencia al señor Procurador general de la Nación.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

En veinticinco de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis notifiqué la sentencia anterior al apoderado señor Marcos Naranjo.

Marcos Naranjo.— Guerra A., Secretario.

Es copia conforme. Bogotá, Septiembre veintiocho de mil ochocientos ochenta y seis.

El Secretario, *A.*

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintisiete de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos: El Juez de ejecuciones nacionales libró, en veintisiete de Agosto de mil ochocientos ochenta y tres, mandamiento de pago por la vía ejecutiva contra Manuel José Matta, por cantidad de setenta y un pesos, de que le declaró definitivamente responsable la Oficina general de Cuentas por auto del veinte del mismo mes. Al notificarse el auto del Juez, interpuso apelación el ejecutado, la que le fué concedida para ante la Corte.

El apelante no ha suministrado papel con estampillas para dar curso al negocio, por cuyo motivo el señor Procurador general ha promovido articulación para que se declare que el apelante ha desistido de la instancia. Sustanciado el incidente conforme al artículo 423 del Código Judicial, y no habiendo consignado el interesado las estampillas necesarias, según informe del Secretario, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, declara desierto el recurso introducido por Manuel José Motta, quedando ejecutoriado el auto de primera instancia á perjuicio del recurrente, de cuyo cargo será las costas.

Notifíquese, cópiese, publíquese en el *Diario Oficial* y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Salomón Forero—Froilán Largacha—Antonio Morales. Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintisiete de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis notifiqué al señor Procurador general la resolución que antecede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme.

Bogotá, Octubre nueve de mil ochocientos ochenta y seis.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintitrés de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos—Por auto de [illegible] y seis de Octubre de mil ochocientos ochenta y cinco, dictado por el Juez 6.° del Circuito de Bogotá (fojas 40), fueron sometidos á juicio criminal Luis V. Herrera y Manuel de J. Calle, por infracción del capítulo 5.° título 6.° del Código Penal, que trata de la sustracción de efectos custodiados en archivos públicos.

Seguido el juicio por los trámites legales, el Juez dictó sentencia en nueve de Febrero del presente año, por la cual condenó á Herrera, como responsable en tercer grado del delito expresado, á sufrir la pena de un año de reclusión, y á Calle á la suspensión, por dos meses, del empleo que ejercía de Archivero y á pagar una multa de veinte pesos.

Esta sentencia, apelada por ambos reos, ha venido á la Corte por haber sido concedido el recurso.

Oídas las partes en esta segunda instancia, el señor procurador general refiere el hecho de la siguiente manera, de acuerdo con los autos:

"El enjuiciamiento de los citados Herrera y Calle se originó por el hecho de haber sustraído aquel del Archivo de la Oficina general de Cuentas, un considerable número de expedientes de los cuales apenas se ha conseguido recuperar una parte.

"En tal hecho, la responsabilidad de autor único y principal corresponde á Herrera, siendo así que á Calle solamente se le puede hacer el cargo de negligente como encargado de la custodia del Archivo de donde Herrera sustrajo los expedientes, sirviéndose para ello de la llave que Calle le confiaba para asuntos particulares, pues Herrera ni aun siquiera era empleado de la Oficina.

"Lo anteriormente extractado, consta de una manera sucinta en el proceso, sin que haya la más ligera duda respecto de la existencia del hecho criminoso y de sus responsables, pues por propia confesión de Herrera y por el testimonio de varios individuos que lo vieron salir repetidas ocasiones del Capitolio, ya solo ó ya acompañado de un muchacho, llevando abultados rollos de papel en horas en que estaban cerradas las oficinas

públicas situadas en aquel local, como por las declaraciones terminantes de las personas que compraron á dicho Herrera los expedientes sustraídos en cantidad de cuarenta arrobas, poco más ó menos, se ha establecido hasta la evidencia, la culpabilidad del citado individuo.

" Por lo que hace á Calle, aun cuando Herrera lo indica como su cómplice, resulta que tal inculpación no ha sido justificada por no ser bastante para ello el dicho singular interesado del inculpado. Mas, como Calle sí ha confesado que confiaba á Herrera la llave de la Oficina en que ocurrió la novedad, hay que convenir en lo manifiesto de su descuido y en que ha incurrido por lo tanto en la pena señalada por el artículo 319 del Código de la materia."

En seguida el expresado funcionario nota, con razón, que la sentencia debe ser reformada, por cuanto que se aplica á Herrera la pena de reclusión, en vez de la de prisión, según el artículo 313 del Código Penal, y porque se omitió aplicarle las penas de que tratan los artículos 29, 62 y 64 del expresado Código.

Además, la Corte observa que calificada en tercer grado la culpabilidad de ambos reos, la multa á que debe ser condenado Calle debe ser la cantidad de diez pesos, que es el mínimo de la señalada por el 319 del Código expresado, y que la suspensión por dos meses del destino que éste desempeñaba, debe aplicársele la subsidiaria de que trata el 658 por aparecer del *Diario Oficial* número 6,739 que ya no desempeña el destino de Archivero.

Por lo expuesto, y calificando el delito en segundo grado, por concurrir en su perpetración circunstancias agravantes y atenuantes, y dando cumplimiento á los artículos 104, 105, 113, 31, 62 y 64 del Código Penal y 1,937 del Código Judicial, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, reforma la sentencia apelada y condena á Luis V. Herrera á sufrir la pena de dos años seis meses de prisión en el respectivo Establecimiento del Departamento de Cundinamarca, computándose en este tiempo los seis meses seis días que estuvo detenido desde el veinte de Mayo hasta el veintiséis de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco; y el tiempo que trascurriera desde el cuatro de Marzo de mil ochocientos ochenta y seis, en que fué nuevamente reducido á prisión por el retiro de la fianza de escarcela, hasta que empiece á contarse la pena corporal de reclusión, queda condenado á la privación de todo destino, cargo y empleo público, y á la de toda pensión ó asignación pagadera por la República; á la suspensión de los derechos políticos mientras dure la pena corporal; al pago, solidaria y mancomunadamente con el otro reo, de las costas; al resarcimiento de todos los daños; y á la indemnización de todos los perjuicios que hayan resultado.

Condénase á Manuel J. Calle, en cumplimiento del artículo 319 del Código Penal, y previa calificación de su culpabilidad en tercer grado, por no concurrir circunstancias agravantes de su falta, á la pena de suspensión por dos meses y al pago de la multa de diez pesos; y como aparece que ya no desempeña el destino de Archivero, se le aplicará la subsidiaria de veinte pesos de multa, conforme al artículo 658 del Código últimamente citado; al pago, de mancomún y solidariamente con Herrera, de las costas, daños y perjuicios que hayan resultado.

Notifíquese, cópiese, publíquese en el *Diario Oficial*, y devuélvase el proceso al Juez de primera instancia.

R. Antonio Martínez.—José M. Samper.—Manuel J. Angarita.—Salomón Forero.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Luis S. de Silvestre.—Ramón Guerra A., Secretario.

La anterior sentencia fué publicada en audiencia del mismo día veintitrés de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Guerra A., Secretario.

En veinticuatro de los mismos la notifiqué al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

En veintisiete de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué la sentencia anterior al señor Abel Paúl, defensor de J. Calle L.

Abel Paúl.—Guerra A., Secretario.

Es copia conforme.
Bogotá, Octubre doce de mil ochocientos ochenta y seis.
El Secretario, *Ramón Guerra A.*

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

Corte Suprema de la Nación—Bogotá, veinte de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos: Por denuncio introducido por Aurelio Mora M. en veintiocho de Septiembre de mil ochocientos ochenta y tres, ante el señor Administrador principal de Hacienda nacional de la ciudad de Barranquilla, se ha levantado este sumario para averiguar la responsabilidad en que pudiera haber incurrido el telegrafista Elías Moreno C., por no haber entregado oportunamente el telegrama que con fecha veintisiete de Agosto de mil ochocientos ochenta y tres dirigió desde Calamar Alberto Castillejo M. al denunciante Mora, residente éste entonces en Barranquilla.

Adelantada la actuación y después de repetidas ampliaciones ordenadas por la Corte Suprema, se ha dictado por el Juez 2.° de la Provincia de Barranquilla el auto de veinticuatro de Junio del corriente año por el cual se sobresee en el procedimiento referido.

Habiendo venido en consulta este auto de sobreseimiento y surtida ya la tramitación respectiva, oído el dictamen del señor Procurador general, la Corte pasa á resolver sobre el mérito del sumario y acerca del auto consultado, para lo cual considera lo siguiente:

Como se deja dicho, el cargo contra el telegrafista Elías Moreno C. consiste en que deliberadamente retuvo y dejó de entregar el telegrama que Castillejo envió desde Calamar á Barranquilla destinado á Mora; pero ese telegrama fué enviado precisamente en los momentos en que el orden público estaba sériamente amenazado en el Estado de Bolívar, como se comprueba por el decreto expedido por el Presidente de ese extinguido Estado, en veinte de Agosto de mil ochocientos ochenta y tres, es decir, tres días antes del susodicho telegrama; y en este se daban noticias de operaciones militares en el río Magdalena, que necesariamente tenían relación con la espectativa común y con el orden público.

Con tal motivo el telegrafista Moreno creyó y debió creer, que no solo le era potestativo, sino que era también de su deber retener aquel telegrama.

Con tanto mayor razón debió creerlo así, cuanto que todas las providencias del Presidente, ó á lo menos la mayor parte, según el decreto ya mencionado, se referían á la Provincia de Barranquilla y entre esas providencias figura como muy importante la relativa á las precauciones que debían tomarse respecto al servicio telegráfico. En tal situación y teniendo en cuenta que el artículo 69 del decreto orgánico del ramo de telégrafos hace necesariamente en las circunstancias difíciles, á los telegrafistas jueces de la entrega ó no entrega de los telegramas; es claro que no hubo culpabilidad por parte de Moreno, pues que se ve que su conducta está exenta de malicia.

Agréganse á esto las declaraciones que obran en el sumario, excusando y favoreciendo al sumariado entre las cuales figura la muy respetable del sujeto que era entonces Gobernador de la Provincia de Barranquilla.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema Nacional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, confirma el auto de sobreseimiento consultado y dispone que este sumario sea remitido al Juzgado de su origen.

Notifíquese y cópiese en el libro respectivo.

R. Antonio Martínez.—José M. Samper.—Manuel J. Angarita.—Salomón Forero.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Luis S. de Silvestre.—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintidos de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.* Secretario.

Es copia conforme. Bogotá, cinco de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete.

Ramón Guerra A. Secretario.

Corte Suprema Nacional.—Bogotá, veinte de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos: La Provincia de Lorica en el Departa-

mento de Bolívar, consulta con esta Superioridad el auto de ocho de Febrero del corriente año, por el cual sobresee en el procedimiento criminal, con relación al sumario iniciado de oficio por el Alcalde de Montería, con el objeto de averiguar la efectividad de un conato de conspiración contra el Gobierno nacional de que el indicado Alcalde tuvo conocimiento.

Practicadas las diligencias posibles, solamente dos testigos, jóvenes de diez y seis años, afirman que un tal Pedro Negrete los invitó para un movimiento revolucionario; pero además de que estos testigos hablan con absoluta vaguedad, sin referirse á plan ni combinación alguna, sin determinar otra cosa que un aislado deseo de Negrete,—las citas y ampliaciones posteriores pusieron en claro que no había tal plan de movimiento subversivo, ni asomo de conato ó tentativa al efecto.

Además, como muy bien lo expresa el señor Procurador en su precedente dictamen, después del decreto de amnistía general, expedido por el Gobierno, toda investigación referente à delitos políticos anteriores sería baldía y sin objeto.

Por tanto, la Corte Suprema Nacional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto de sobreseimiento consultado y del que se deja hecha mención.

Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente al Juzgado de donde procede.

R. Antonio Martínez.—José M. Samper.—Manuel J. Angarita.—Salomón Forero.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Luis S. de Silvestre.—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintidós de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme. Bogotá, veintidós de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

Corte Suprema nacional—Bogotá, veinticuatro de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos: El Alcalde del Distrito de Popayán, señor Liborio Navia, sabiendo que tres hombres allí desconocidos y que luégo se supo que se llamaban José María Nieva, Pedro A. Serrano y Pedro A. Arango, habían vendido y seguían vendiendo en la cabecera de este Distrito, alhajas de oro y de plata, piedras preciosas y perlas y ejecutado otros actos sospechosos; dispuso, en Noviembre de mil ochocientos ochenta y dos, la iniciación de un sumario para averiguar si se había cometido el delito de hurto ó de robo y quiénes eran los responsables, según lo ordenado á las autoridades del Cauca por la legislación de aquel Estado. En consecuencia, se recibieron varias declaraciones, se embargaron y depositaron los objetos que se hallaron en poder de los desconocidos, y se dispuso la detención de éstos; dándose luégo cuenta con las diligencias practicadas al Juez del Circuíto de Popayán, en lo criminal, ante quien ocurrieron los tres detenidos en solicitud de excarcelación y la entrega de las cosas embargadas; y habiéndoles sido negada, apelaron al Tribunal del Departamento del Centro, en el mismo Estado del Cauca, el cual confirmó el auto apelado.

Después de todo esto, el expresado Juez del Circuíto de Popayán, en lo criminal, dictó auto en el que mandó consultar con la Corte Suprema federal lo que se había hecho en las enunciadas diligencias; y la Corte, considerando que no había prueba de que el delito, si existía, se hubiera cometido en el Estado del Cauca, y que era posible que se hubiese cometido en el Ecuador, de donde no se había solicitado la extradición de los detenidos, ni de las autoridades judiciales ni del Poder Ejecutivo de la Unión; decidieron que Nieva, Serrano y Arango fueran restituidos á su libertad, no pudiéndose proceder de oficio en estos casos, según los artículos 1,887, 1,888 y 1889 del Código Judicial; y por cuanto en esta clase de negocios corresponde el conocimiento sólo á las autoridades nacionales, con exclusión de las de los Estados, mandó sacar copia de lo que estimó conducente para averiguar la responsabilidad en que pudieran haber incurrido las autoridades del Estado del Cauca que intervinieron en el aludido sumario.

Con la copia de las diligencias mandadas sacar por la Corte, se principió la averiguación de la responsabilidad de las autoridades del Cauca: mas como al mismo tiempo que se seguía el sumario contra Nieva, Arango y Serrano, éstos se habían dirigido á la misma Corte quejándose contra aquellas autoridades caucanas, á solicitud del Ministerio público y de conformidad con los artículos 1,662 y 712, inciso 2.° del Código Judicial, se decretó la acumulación de unas y otras diligencias.

Reunidas que fueron todas ellas, el Ministerio público ha sido de concepto que debe sobreseerse, por considerar que así lo demanda la independencia del Poder Judicial de los Estados, consignada en la Constitución federal; que no hay prueba de que el delito se hubiera cometido en el Ecuador; y que las autoridades caucanas ninguna ley nacional quebrantaron al investigar si Nieva, Serrano y Arango habían cometido algún delito.

La independencia del Poder Judicial de los Estados, consagrada en la Constitución federal, sólo se refería naturalmente á los negocios de la competencia de los mismos Estados, de modo que si resultara que las autoridades judiciales de éstos, hubieran usurpado la jurisdicción federal, bien fuera la de los Jueces nacionales de primera instancia, bien la de la Corte Suprema, decidiendo algún Tribunal de Estado lo que sólo á la Corte federal correspondía decidir; no hay duda de que esas autoridades judiciales de los Estados que tal hubieran hecho, hubieran sido responsables en el orden federal, ó sería llegado el caso de dar cuenta al Congreso (número 16 de la primera reforma de la ley 46 de 1876) del vacío de la legislación.

Pero como acertadamente lo observa el señor Procurador general, el hecho de practicar las diligencias sumarias para averiguar si se ha cometido algún delito, cuál sea éste, quién es el responsable, cómo y en donde ha tenido lugar, es un deber impuesto á las autoridades del Cauca por la legislación; y por lo que hace á la competencia, ésta resulta de los hechos que aparezcan en el sumario comprobados; de modo que para fijar la competencia, es preciso levantar el sumario, siendo por este motivo que el artículo 1,505 del Código Judicial dispone que, si el funcionario de instrucción no fuere competente para conocer del juicio, pasará las diligencias al Juez respectivo.

No puede haber responsabilidad sino cuando se conoce en un juicio en que el Juez es incompetente; pero no habiendo conocido el Juez del Circuíto de Popayán, en lo criminal, ni el Magistrado del Tribunal del Departamento [illegible] del Estado del Cauca, de juicio alguno, sino apenas interv[illegible] diligencias sumarias, á tiempo que si no consta que el delito se cometiera en el Circuíto de Popayán, tampoco aparece que se cometiera fuera de esa circunscripción judicial (artículo 1,507 del Código Judicial); es visto que en ninguna responsabilidad pudieron incurrir los funcionarios caucanos, pues lo único que á este respecto existe en autos es una declaración en la que el testigo Juan Jurado dice que cuando pasó por Machache en el Ecuador, oyó decir que allí se habían robado algunas alhajas de la Iglesia, lo que, como se ve, es un testimonio singular y de referencia.

Por tanto, de acuerdo con el señor Procurador general, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, sobresee en estas diligencias instruidas para averiguar la responsabilidad en que pudieran haber incurrido el Juez del Circuíto de Popayán, en lo criminal, señor Eusebio Casas, y el Magistrado del Tribunal del Departamento del Centro, en el Estado del Cauca, señor don Pablo Diago.

Notifíquese al señor Procurador general, sáquese copia para su publicación en el *Diario Oficial* y archívese.

R. Antonio Martínez.—José M. Samper.—Manuel J. Angarita.—Salomón Forero.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Luis S. de Silvestre.—Ramón Guerra A., Secretario.

En veinticinco de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis notifiqué al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme. Bogotá, Septiembre veintinueve de mil ochocientos ochenta y seis.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Septiembre veinticuatro de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos. En siete de Marzo de mil ochocientos ochenta y dos, ocurrió Nicolás M. de Paz ante el encargado del Poder Ejecutivo del extinguido Estado de Bolívar, denunciándole que, á virtud de haber sido desamortizada y rematada una casa situada en la ciudad de Cartagena, en la calle de La Tablada, barrio de Santo Toribio, en la cual uno de sus ascendientes había dejado fincado un capital con el carácter de capellanía; y que el derecho al goce de ese capital, ó mejor dicho, al rédito o pensión que debería pagar el Tesoro nacional por haber éste vendido la finca en pública subasta, le había sido declarado por sentencia judicial—; no había podido, sin embargo, obtener el reconocimiento de su derecho, porque no se habían remitido á la Dirección del Crédito nacional, las diligencias que acreditaran ese remate y esa desamortización, recibiendo con ello considerables perjuicios, porque á la sazón se le debían ya quince años de intereses.

De este denuncio resulta que el señor de Paz se queja de que ha habido omisión en el envío del mencionado expediente; pero no dice que éste haya sido sustraído ó maliciosamente extraviado de la respectiva oficina. Se deja comprender que anuncia una responsabilidad por mal desempeño en los deberes oficiales, pero sin indicar contra quién; y seguramente por ser asunto en que está interesada la Nación, y en el que, por consiguiente, debe procederse de oficio, el Secretario general del Estado envió el referido denuncio al Juez 2.° de la Provincia de Cartagena, después de haber pedido al Agente subalterno de Bienes Desamortizados un informe sobre el paradero del expediente á que alude el denunciante, informe que pasó también al Juzgado.

El Juez acogió el denuncio—aunque sin recibir declaración al denunciante, como debió hacerlo en busca de mayores datos—y pidió al Secretario general informe de las personas que habían desempeñado el cargo de Agentes de Bienes Desamortizados en el Estado, desde mil ochocientos sesenta y cinco—época de la desamortización de la casa en referencia—hasta mil ochocientos ochenta; y pidió también del Agente subalterno respectivo, informe de las diligencias de remate de la casa, tomado de los inventarios que debían existir. Del informe de este último empleado resulta que no existía en la Oficina de Bienes Desamortizados la diligencia de remate de la finca, practicado en mil ochocientos sesenta y cinco; y agrega en nota de tres de Junio de mil ochocientos ochenta y dos, que en su oficina no había constancia de que el expediente se hubiera remitido á otro empleado después de la nota con que se pasó al Poder Ejecutivo del Estado, para la aprobación del remate.

Con tal motivo, el representante del Ministerio público pidió desde treinta de Junio de mil ochocientos ochenta y dos, que se solicitara del Secretario general del Estado copia de la nota con que se hubiese devuelto el expediente al empleado que lo había enviado para la aprobación; y que en el caso de no encontrarse en el copiador constancia de la devolución, se buscara en la Secretaría el susodicho expediente. Este pedimento del Fiscal fué muy acertado y razonable, porque tendía á examinar en cuál de las dos oficinas—en la Secretaría general ó en la de Bienes Desamortizados—había sido descuidado, perdido ó sustraído el expediente, sabiéndose también así cuál era el empleado responsable. El Juez, en la misma fecha de este pedimento, decretó de conformidad con lo indicado por el Fiscal; y según todas las notas que corren desde el folio 16 hasta el 20 inclusive, se estuvieron pidiendo constantemente, desde Junio de mil ochocientos ochenta y dos hasta doce de Marzo de mil ochocientos ochenta y cuatro, de la Secretaría general, los datos que el Ministerio público solicitaba. En todos esos veintiún meses, el Secretario general, con manifiesto desacato al Juzgado, con sobra de indiferencia por la administración de la justicia, y con notable violación de sus deberes, no se dió por entendido ni expresó excusa alguna tocante al dato de su oficina pedido, echando sobre esta oficina y con esta conducta, la presunción de que allí había muerto el expediente solicitado por el denunciante Paz.

El Juez por su parte, con sobra de debilidad, olvidando los artículos 158, 176 y 1,498 del Código Judicial de la Nación, y sin tratar tampoco de promover algo acerca de la responsabilidad del Secretario omiso, se limitó por auto de dos de Marzo de mil ochocientos ochenta y cuatro, á decir que no habiéndose podido obtener de la Secretaría el dato requerido, se prescindiera de él, pasando el sumario al Fiscal. Este, á su vez, dió por agotados los medios de investigación, y pidió el sobreseimiento, el cual se decretó por auto de doce de Marzo de mil ochocientos ochenta y cuatro, que es el que ha venido en consulta y del cual se ocupa actualmente la Corte.

Ese auto se funda en que la responsabilidad es indefinida, pues no puede saberse lo que la constituye ni quién pueda ser el responsable; en que el expediente del primer remate quedó sin efecto por remates posteriores, y que en estos últimos ha podido fundarse el reconocimiento del Tesoro público para la expedición del certificado de la renta: en que el movimiento de los archivos de los Bienes Desamortizados y las variaciones introducidas por las leyes en este Ramo, hacen imposible la responsabilidad; y, últimamente, en que el transcurso de los años desde que debió sentarse la diligencia cuya pérdida se averigua, hace muy difícil encontrar este asiento. El señor Procurador general de la Nación encuentra fundados estos motivos para el sobreseimiento, agregando la circunstancia, muy exacta ciertamente, de la indeterminación de que adolece el memorial del denuncio; y por todo ello coadyuva la resolución del Juez de primera instancia.

La Corte Suprema encuentra también exactos esos fundamentos del Juez, así como los del dictamen del señor Procurador; y dándolos por reproducidos, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto consultado.

Mas, como por lo que se deja expuesto en el cuerpo de esta resolución puede existir alguna responsabilidad contra el Secretario general del extinguido Estado de Bolívar, que lo fuera desde treinta de Junio de mil ochocientos ochenta y dos hasta doce de Marzo de mil ochocientos ochenta y cuatro, por omisión en el cumplimiento de sus deberes, sáquese copia de lo conducente y pásese al señor Procurador general, para que promueva lo que crea del caso.

Y como el Juez 2.° de la Provincia de Cartagena, señor Miguel Díaz Granados, aparece culpable de morosidad en el curso de esta actuación—si no precisamente por violación del artículo 169, sí por no haber cumplido con lo prescrito en el 176 del Código Judicial de la Nación,— sáquese también copia de lo conducente y pásese igualmente al Ministerio público para lo de su cargo.

Notifíquese, sáquese copia y devuélvanse los autos al Juez de su procedencia.

R. Antonio Martínez.—José M. Samper.—Manuel J. Angarita.—Salomón Forero.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Luis S. de Silvestre.—Ramón Guerra A., Secretario.

En veinticinco de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis notifiqué al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme. Bogotá, veintiocho de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

ANUNCIOS.

LA GACETA JUDICIAL.—Se publica este periódico ordinariamente una vez por semana (los sábados), y se admiten suscripciones en el Banco Nacional así:

Por un semestre (26 números).....$ 3 00
Por un año (52 id..... 5 00

No se venden números sueltos.

Es de cargo del Ministerio de Gobierno hacer repartir el periódico á los suscriptores en la capital, y en los Departamentos por medio de los correos; sin perjuicio de la distribución á las oficinas públicas que deben recibirlo.

No se admiten anuncios que no sean de carácter oficial, ni inserciones que no sean autorizadas por la Corte Suprema.

IMPRENTA DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 2.º

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 19 de Febrero de 1887.

CONTENIDO.

PÁG.

ACUERDOS.

Acuerdo número 3, sobre juicios de los extinguidos Territorios..... 9
Id. número 4, adicional al precedente..... 10
Lista de Expedientes remitidos..... ”

SENTENCIAS DEFINIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Sobre pensión solicitada por Librada Ruiz..... 11

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Auto relativo á un mandamiento ejecutivo..... 12

NEGOCIOS CRIMINALES.

Auto relativo al sumario seguido á Wenceslao Medina..... 13
Id. sobre un sumario relativo á falsificación de moneda..... 14

NO OFICIAL.

Visita..... 16

GACETA JUDICIAL.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

ACUERDO N.º 3.

(SOBRE JUICIOS DE LOS EXTINGUIDOS TERRITORIOS).

En la ciudad de Bogotá, á seis de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis, se constituyó la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario.

El señor Magistrado doctor Samper presentó el siguiente Proyecto de Acuerdo, que fué aprobado por el voto unánime de los señores Magistrados.

“ *La Corte Suprema de Justicia*

“CONSIDERANDO:

“ Primero. Que el artículo transitorio *O* de la Constitución dispone que ésta rija para los Altos Poderes nacionales (y por lo tanto, para la Corte Suprema) desde el día de su sanción, que fué el cinco de Agosto próximo pasado (*Diario Oficial* número 6,759)

“Segundo. Que para toda la Nación rige la misma Constitución desde el día 7 de los corrientes, esto es, treinta días después de la fecha de su publicación, que se verificó el 7 del citado mes;

“ Tercero. Que el artículo 4.º (aparte cuarto) ha incorporado los antiguos Territorios nacionales en las secciones (actuales Departamentos) á que primitivamente pertenecieron; disposición que se refiere á los Territorios que existían á tiempo de darse la Constitución, es á saber: los de Casanare, la Goagira y Nevada y Motilones; de modo que desde el 7 de este mes el primero es parte integrante del Departamento de Boyacá, y los otros dos pertenecen al Departamento del Magdalena.

“ Cuarto. Que por decretos con fuerza de ley, dictados por el Gobierno antes de darse la Constitución (número 849 del 5 de Diciembre y número 858 del 12 del mismo mes de 1885) el Territorio nacional de San Martín fué reincorporado en el Distrito Federal (hoy día Departamento de Cundinamarca), y el de San Andrés y Providencia fué incorporado en el Departamento de Panamá;

“ Quinto. Que, conforme al artículo 153, ‘para facilitar á los pueblos la pronta administración de Justicia, se dividirá el Territorio nacional en Distritos judiciales, y en cada Distrito habrá un Tribunal Superior, cuya composición y atribuciones determinará la ley;’

“ Sexto. Que entre las atribuciones que el artículo 151 de la Constitución confiere á la Corte Suprema, no se halla ninguna que la autorice para conocer en juicios criminales, ni en juicios entre particulares, de la naturaleza de aquellos que procedían de los Territorios; salvo los que interesan directamente á la Nación; y

“ Séptimo. Que en fuerza de las disposiciones citadas en los precedentes considerandos, han cesado de existir los ‘Territorios nacionales,’ y por lo tanto ha cesado también la jurisdicción y competencia de la Corte Suprema en los asuntos civiles entre los particulares y los criminales que en dichos Territorios se originaban;

“ ACUERDA:

“ Primero. La Corte se declara incompetente para seguir conociendo en los expresados negocios ó juicios. En consecuencia, el Secretario formará una lista de los expedientes á que este Acuerdo se refiere, enumerándolos por grupos, según los Departamentos, y especificándolos en cada grupo, según que sean civiles ó criminales, y designándolos con expresión de los nombres de las partes ó los procesados, del asunto á que se refieren, de los Juzgados de donde proceden, y demás circunstancias que puedan determinarlos con precisión; y respectivamente los remitirá á los Tribunales de Distrito, así:

“ Al de Boyacá, los procedentes del Territorio de Casanare;

“ Al de Cundinamarca, los del Territorio de San-Martín;

“ Al del Magdalena, los de los Territorio de la Goagira y Nevada y Motilones; y

“ Al de Panamá, los del Territorio de San-Andrés y Providencia.

“ Segundo. De la lista á que se refiere lo precedentemente acordado, se dejará constancia en los respectivos libros de la Secretaría de la Corte, y se pasarán:

“ Copia completa al Ministerio de Gobierno, y copia de lo conducente, á cada uno de los Tribunales Superiores mencionados:

“ Tercero. Comuníquese este Acuerdo al Gobierno, para su conocimiento, y para su publicación en el *Diario Oficial*, junto con las listas que se formen de los expedientes que han de remitirse.”

La Corte Suprema dió por terminado el presente Acuerdo, que firman todos los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Manuel J. Angarita—Salomón Forero—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre*—El Secretario, *Ramón Guerra A.*

Es copia conforme.

Bogotá, Octubre catorce de mil ochocientos ochenta y seis.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

ACUERDO N.° 4.

(ADICIONAL AL PRECEDENTE).

En la ciudad de Bogotá, á nueve de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis, se constituyó la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario.

El señor Magistrado doctor Largacha hizo la siguiente proposición, que fué aprobada por el voto unánime de los señores Magistrados:

"En aclaración del Acuerdo del seis del presente mes, la Corte Suprema resuelve:

"Inciso 1.° La incompetencia de este Supremo Tribunal, tocante á los asuntos despachados en los Territorios nacionales, suprimidos, debe entenderse solamente: 1.° respecto de los juicios seguidos en los mismos Territorios entre particulares sobre asuntos civiles; 2.° á los procesos criminales por delitos cuyo conocimiento no corresponde á la Corte.

"Inciso 2.° En todos los demás asuntos remitidos de los Territorios, subsiste la declaratoria de incompetencia hecha en el expresado acuerdo de fecha seis. En consecuencia, el Secretario excluirá de la remisión á los Tribunales de Distrito, las causas á que se refiere el inciso 1.° de la presente aclaración."

En seguida el señor Magistrado doctor Samper hizo la siguiente proposición, que fué aprobada por unanimidad;

"La Corte acuerda: inmediatamente se procederá á repartir entre todos los Magistrados los negocios pendientes, con las debidas distinciones; prescindiéndose por ahora, de todos los negocios suspendidos por falta de estampillas, y de los relativos á suministros, empréstitos y expropiaciones, mientras la ley dispone lo conveniente sobre el particular."

Con lo cual se dió por terminado el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Manuel J. Angarita—Salomón Forero—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme. Bogotá, Octubre catorce de mil ochocientos ochenta y seis.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

LISTA de los expedientes que cursaron en 1.ª instancia en los Juzgados de los Territorios, y de otros procesos referentes á empleados de las mismas entidades, todos los cuales se remiten á los Tribunales de Distrito judicial, en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Suprema Nacional en acuerdos de 6 y 9 de Septiembre próximo pasado, así:

Al de Boyacá, los procedentes del Territorio de Casanare;

Al de Cundinamarca, los del Territorio de San-Martín;

Al del Magdalena, los de los Territorios de la Goagira y Nevada y Motilones;

Al de Santander, los del Territorio de Bolívar; y

Al de Panamá, los del Territorio de San Andrés y Providencia.

TERRITORIO DE CASANARE.

Civiles.

1. Juicio de Luis Felipe Andueza con Ildefonso Rodríguez, como cesionario de Custodio Briceño, por una suma de pesos.

2. Juicio entre Melchor Isaza y el Curador de la herencia del Presbítero Lino Silva, por suma de pesos.

3. Juicio seguido por Francisco Vásquez Landaeta de Carrillo, contra la sucesión intestada de Calixta Peña, sobre nulidad de una donación.

4. Juicio entre Ramón Carrero y Manuel Olivero Aranda, por intereses.

5. Juicio seguido por el Agente fiscal del Territorio contra José Manuel Gabaldón por el dominio y propiedad de los terrenos de "Tocaría."

6. Apelación de un auto sobre devolución de un poder en el juicio contra José Manuel Gabaldón, por el dominio y propiedad de los terrenos de "Tocaría."

7. Apelación de un auto relativo á unas declaraciones en el juicio por intereses, entre Gabriel Hoyos y José Manuel Gabaldón.

8. Apelación de un auto en el juicio de inventarios de la sucesión de Teodoro Heredia.

9. Consulta de una sentencia por la cual se declara á Jerónimo Silva heredero del Presbítero Lino Silva.

10. Copia de unos autos dictados en el juicio entre José Manuel Gabaldón y Policarpo Ortegá, sobre unos terrenos.

11. Apelación de una sentencia en una tercería propuesta por Martín Mora en el juicio ejecutivo entre Marcos Sánchez y Juan Ramón Angulo, por suma de pesos.

12. Apelación interpuesta por Ramón Acosta de un auto en asunto civil.

Criminales.

13. Causa seguida á Luis T. Celis, por heridas y maltratamientos de obra causados á Esteban Barón.

14. Causa seguida á Jerónimo Ortiz, por el delito de perjurio.

15. Causa contra Antonio Tumay, por el delito de heridas á Querubín Maldonado.

16. Causa seguida á Ildefonso Mirabál, por el delito de heridas causadas á Leonardo Rodríguez.

17. Sumario instruído contra Santos Plazas, por el delito de hurto.

18. Causa contra Dionisio Córdoba, por homicidio perpetrado en la persona de José Loreto.

19. Causa contra Marcos Duín, por heridas causadas á Juan de Dios Ortiz.

20. Causa seguida á Andrés Merlo por los delitos de tentativa de homicidio y heridas causadas á Marcos Sánchez.

21. El Fiscal de Casanare da cuenta de varios hechos criminosos cometidos en el Territorio. Diligencias sobre este asunto.

22. Queja de Melchor Isaza contra el Juez del Territorio Carlos Demetrio Coy, por haber desechado un denuncio contra el Prefecto Domingo Medina Martínez, por abandono del destino.

23. Causa de responsabilidad contra Policarpo Ortega, por demora en tomar posesión del destino de Fiscal del Territorio.

24. Notas relativas al nombramiento y posesión de Melchor Isaza, como Juez del Territorio, por las cuales se da cuenta de que dicho señor se halla sindicado por delitos que merecen pena corporal.

25. Denuncio del Juez suplente, Alejandro Plata, contra el Prefecto por haber declarado éste que Plata había perdido el puesto.

26. Diligencias sumarias para averiguar la responsabilidad del Juez, Carlos Demetrio Coy, por haber consentido la libertad del preso Bernardino Olmos.

27. Antecedentes para averiguar la responsabilidad del mismo Juez por haber admitido fiador de carcel á Bernardino Olmos.

28. Solicitud del Procurador nacional para averiguar la responsabilidad del Juez por falta de cumplimiento de un despacho librado por la Corte Suprema.

29. Copia de lo conducente para averiguar la responsabilidad del Juez, Carlos Demetrio Coy, por haber admitido fianza carcelera al reo Javier González.

30. Diligencias para averiguar la responsabilidad del Prefecto por ciertos hechos denunciados por el Agente fiscal del Territorio.

TERRITORIO DE SAN-MARTÍN.

Criminales

1. Causa contra Cayetano Guevara, por homicidio perpetrado en la persona de Inocencio Buitrago.

2. Causa contra Ezequiel Heredia por heridas á Virginia Morales y otras.

3. Causa contra Miguel G. Dugarte y otros, por el delito de heridas á Eduardo Guerrero.

4. Causa contra Polo y Heliodoro Romero y Oliverio Hortúa, sindicados del delito de heridas.

5. Nota del Agente fiscal sobre la separación, en uso de licencia, desde el 21 de Noviembre de 1884, del Juez, Juan Convers G.

6. Antecedentes para averiguar la responsabilidad de Juan Convers G. y Pio M. Pardo, Juez y Secretario, respectivamente, del Territorio, por no haber ordenado la expedición de la copia de un auto.

7. Denuncio de Leonardo Cubillos, sobre el hecho de haber abandonado el Juez su empleo, sin licencia.

8. Denuncio de Feliciana Ruiz, contra Leonardo Cubillos y Antonio M. Sabogal, por escalamiento y robo.

9. Denuncio de Guillermo Chávez, contra el Juez del Territorio, por infracción del artículo 142 del Código Judicial nacional.

Civiles.

10. Copia de un juicio sobre denuncio de bienes mostrencos, iniciado por Clodomiro González ante el Juez del Territorio.

11. Copia de la conducente en el juicio de reivindicación de bienes, seguido entre Feliciana Ruiz y Antonio y Manuel Sabogal.

12. Juicio seguido por Ramón Romero Rojas y Egidio Romero R. contra Clodoveo Lasprilla, sobre propiedad de una mula.

TERRITORIO DE LA GOAGIRA.

Negocios varios.

1. Diligencias relativas al nombramiento de Juez del Territorio, hecho en el señor José Antonio Bonivento.

TERRITORIO DE NEVADA Y MOTILONES.

Criminales.

1. Causa seguida á Daniel Godoy, por el delito de heridas causadas á Celinia Tarifa.

2. Denuncio de Jorge Isaacs, contra el Juez y el Agente fiscal del Territorio, por el cual los acusa de que viven en completa beodez.

3. Consulta del Prefecto respecto á la rebaja que le hizo de una tercera parte del tiempo de la pena de reclusión á que fué condenado Santiago Pandeleche.

TERRITORIO DE BOLÍVAR.

Criminales.

1. Causa contra Israel y Juan Bautista Téllez, por el delito de maltratamiento de obra á Castor Palomino.

2. Diligencias para averiguar la responsabilidad en que incurriera el Juez del Territorio por demora en el seguimiento de la causa contra Manuel Jerez.

3. Diligencias para averiguar las responsabilidad del Juez, Antonio M. Ramírez, por demoras en la causa contra Anacleto López.

4. Acusación contra el Juez, Medardo Baños, por infracción de los artículos 225, 226 y otros del Código Penal de la Unión.

Civiles.

5. Juicio ejecutivo seguido por el Tesorero municipal del Corregimiento de Bolívar contra Cerbeleón Ballén, por deuda al Tesoro nacional.

TERRITORIO DE SAN-ANDRÉS Y PROVIDENCIA.

Criminales.

1. Causa seguida contra Adrián Tayler, por el delito de amenazas á los empleados públicos del Territorio.

2. Causa contra Eutacio E. Abrahams y Fabián Enao, por el delito de robo.

3. Causa contra Helbert Mershant, por el delito de homicidio perpetrado en la persona de George Mershant.

4. Causa seguida contra Jorquel Bowie, por el delito de homicidio perpetrado en la porsona de Levi Myiers.

5. Causa contra Alexander A. Henry, por el delito de heridas.

6. Expediente creado para comprobar el mal manejo del Juez del Territorio, señor Rafael Angarita.

7. Sumario contra Federico C. Vengoechea, Administrador de Hacienda y Luis Carlos Piñeres, Prefecto del Territorio, por mal manejo de fondos públicos.

8. Solicitud de Eduardo de Armas para que el Juez cumpla un auto de la Corte Suprema dictado en la causa criminal que se sigue al solicitante, por infracción del artículo 602 del Código Penal nacional.

9. Diligencias para averiguar si José de J. Lara es responsable por abandono del destino de Juez del Territorio.

10. Diligencias para averiguar la responsabilidad en que incurriera Juan Arias, por abandono del destino de Juez del Territorio.

11. Denuncio de Francisco Vega C. contra el Juez del Territorio, por varios actos cometidos contra Juan Arias.

12. Denuncio del Juez del Territorio contra el Prefecto del mismo, Luis Carlos Piñeres, por varios hechos criminosos.

SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA.

Civiles.

13. Demanda de John Bernard contra Cenón Návalo, ex-Administrador de Hacienda del Territorio, por pesos.

14. Demanda de Jouh Kanedy contra la mortuoria de Adalbert Bowie, por suma de pesos.

15. Demanda de Daniel Bernad contra Willian Pomier, por intereses.

16. Juicio de Evelina Hogg de Lever contra Eduardo Lever, por alimentos.

17. Juicio de petición de herencia intentado por Augusto Bowie contra los herederos de James D. Bowie.

18. Juicio de partición de bienes de la finada Sarah Fasty Bent.

19. Juicio de Roberto Lever y otros contra William Lever, por el valor de ochenta y ocho palmas de coco.

20. Juicio seguido por Eduardo de Armas contra Simón B. Howard, por suma de pesos.

21. Juicio de posesión del terreno denominado "Old Harbor Field" seguido entre Isabel Valderrama y Elisabeth May.

22. Juicio seguido por Araminta E. Bowie contra Aron Holgerson por herencia de la finada esposa del demandado.

Criminales.

23. Diligencias instruídas, por denuncio de Eduardo de Armas y Ramos, para averiguar la responsabilidad de los empleados del Territorio que intervinieron en el juicio mortuorio de Juan Bautista González.

—

Secretaría de la Corte Suprema Nacional. Bogotá, diez y seis de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Ramón Guerra A.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, seis de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos La señora Librada Ruiz solicita una pensión ó recompensa del Tesoro público, como viuda del señor Antonio Moreno, Capitán graduado del Ejército, y por los servicios prestados por éste señor á la Nación desde mil ochocientos sesenta y dos.

Presentó en apoyo de su demanda los documentos que ha juzgado necesarios para probar los servicios prestados por dicho señor Moreno, los nombramientos y ascensos que obtuvo en el Ejército, las comisiones que desempeñó, las condecoraciones que alcanzó, su constante buena conducta en todo el tiempo que permaneció en servicio militar y las acciones de guerra en que se halló. Presentó igualmente las pruebas que acreditan que contrajo matrimonio con el referido señor Moreno, la partida de nacimiento de su hijo Romualdo Neptalí, habido en ese matrimonio, y la defunción de Moreno, de la cual aparece que falleció en el Hospital Militar de esta ciudad, á causa de enfermedad, el día 10 de Julio de mil ochocientos ochenta y cinco.

El señor Secretario de Guerra, el señor Comandante en Jefe del Ejército, el Jefe de Estado mayor del mismo, y el Agente Fiscal del Circuíto de Bogotá, coadyuvan la solicitud de la demandante, por creer que le es aplicable el inciso 5.° del artículo 874 del Código Militar; pero el señor Procurador la impugna, por creer que la ley no favorece las pretensiones de la demandante. La Corte procede á dictar el fallo legal.

Conforme á las disposiciones de los artículos 848, 849 y 854 del Código Militar, las viudas de los militares de la República no tienen derecho á recompensa ó pensión del Tesoro público, sino en el caso de que dichos militares hayan muerto al ejecutar acción distinguida de valor, ó en acción de guerra, ó en campaña á manos de los enemigos armados de la Nación ó de su Gobierno constitucional; pero como del expediente no apa-

rece que concurran las referidas condiciones en el esposo de la demandante, pues está probado que murió en el Hospital Militar, por consecuencia de enfermedad, es forzoso concluir que los servicios prestados por dicho señor no pueden ser premiados en beneficio de la viuda ni de los hijos sobrevivientes, como lo solicita la demandante.

El Estado Mayor general del Ejército conceptúa, que si el Capitán graduado Antonio Moreno existiera, tendría derecho á gozar medio sueldo de Teniente por seis años, por haber servido más de veinte años y menos de veinticinco, conforme á la regla 5.ª del artículo 874 del Código citado. Aunque esto fuera así, en nada favorecería las pretensiones de la demandante, una vez que la recompensa señalada en dicho inciso 5.°, es enteramente personal y no es transmisible en calidad de herencia; pero debe tenerse en cuenta, además, que, como las recompensas que concede el precitado artículo 874, sólo se refieren á los militares que sean declarados en uso de letras de cuartel, de retiro, de invalidez ó con licencia indefinida, de ningún modo es aplicable esta disposición al finado Capitán Antonio Moreno.

Invoca también la demandante en su favor el decreto ejecutivo número 357 de 1885 sobre recompensas provisionales á los Jefes y Oficiales muertos en defensa de las instituciones, y el marcado con el número 412 del mismo año que hace extensivas á los individuos de tropa muertos ó heridos en defensa del Gobierno, las disposiciones del primero; pero estos decretos no tienen aplicación en el presente caso, porque las recompensas provisionales que por ellos se conceden, sólo se refieren á los deudos de los que han rendido la vida en defensa del Gobierno, y yá queda demostrado que el Capitán graduado Antonio Moreno murió por consecuencia de enfermedad, y no se probó que ésta la hubiera contraído por causa del servicio, y porque la Corte Suprema de justicia no es la autoridad competente para conceder esas recompensas provisionales.

Aunque aparece probado, pues, que el Capitán graduado Antonio Moreno sirvió en el Ejército por veinticuatro años un mes y ocho días, que observó siempre una conducta intachable, que prestó importantes servicios, se halló en varias acciones de guerra y fué un militar valeroso y honrado, no por esto su viuda tiene derecho á la recompensa que demanda, porque la ley no se la otorga. Además, la demandante no comprobó, como lo requiere el inciso 3.° del artículo 879 del citado Código Militar, su buena conducta, en los términos del inciso 6.° del mismo artículo, ni su identidad, ni el hecho de parmanecer soltera. La Corte habría podido de oficio ordenar la práctica de estas pruebas, pero se ha abstenido de hacerlo por ser inconducentes, una vez que la demandante no tiene derecho á la recompensa que solicita, como yá queda demostrado.

Por estas razones, la Corte Suprema, acogiendo el parecer del señor Procurador, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que Librada Ruiz no tiene derecho á la pensión que solicita en su carácter de viuda del Capitán graduado Antonio Moreno, y como recompensa por los servicios prestados por éste á la Nación.

Notifíquese, publíquese, cópiese esta sentencia y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Salomón Forero—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

La anterior sentencia fué publicada en la audiendia del seis de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Ramón Guerra A., Secretario.

En doce de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué la sentencia anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

No se notificó la sentencia que precede á la interesada señora Librada Ruiz, porque no quiso suministrar la estampilla correspondiente.

Bogotá, doce de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Guerra A., Secretario.

Es copia conforme.

Bogotá, catorce de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEOGOCIOS CIVILES.

AUTO.

Corte Suprema nacional—Bogotá, Septiembre treinta de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—El Administrador principal de Hacienda nacional del extinguido Estado de Antioquia, por excitación del señor Secretario de Gobierno de la República, y en ejercicio de la jurisdicción coactiva, libró mandamiento ejecutivo en diez y ocho de Marzo del corriente año, contra Ireneo Escobar, por la cantidad de mil pesos ($ 1,000) en monedas de oro, de á cinco pesos cada una, y por los intereses corridos, á razón del 12 por 100 anual, desde el primero de Diciembre del año anterior, con más los daños y perjuicios consiguientes á la falta de entrega de una encomienda de valor igual al principal mencionado, y todo á favor de José María, Juan A. y Francisco Sáenz M.

El origen y motivo de esta ejecución, es el siguiente: El trece de noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco recibió Ulpiano Isaza, como Mensajero del correo de encomiendas de Medellín á Barranquilla, bajo su responsabilidad hasta esta última ciudad, setenta y nueve encomiendas de oro y plata y de considerables valores; todas las cuales le fueron entregadas con su correspondiente planilla en la Administración de Medellín, una por una á su satisfacción, empaquetadas en su presencia: y así lo expresa el mencionado Mensajero en esa planilla que firmó con el conductor contratista y dos testigos más. Entre las encomiendas iba una marcada con el número 17, en la que, bajo póliza de seguro de Juan S. Martínez, remitían José María, Juan Antonio y Francisco Sáenz M. á José Manuel González de Barranquilla, mil pesos ($ 1,000) en oro, en monedas de cinco pesos cada una. Al llegar el correo á su destino, el treinta de Noviembre del mismo año, el Agente postal nacional encontró que faltaba esa encomienda de mil pesos en oro de que se acaba de hacer mención, habiendo recibido las setenta y ocho restantes; todo lo cual hizo constar este empleado al pie de la planilla, habiendo autorizado la diligencia el oficial de encomiendas de Barranquilla.

Como el Mensajero Isaza había sido nombrado por el Gobierno nacional, y aseguró su manejo con una fianza personal, de naturaleza solidaria, otorgada por Ireneo Escobar, según la escritura número 1,751, extendida en Medellín á tres de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco ante el Notario segundo de ese Circuíto; tan luégo como el Secretario de Gobierno tuvo noticia de la pérdida de aquella encomienda, ordenó por parte telegráfico, número 532, de diez y seis de Marzo del corriente año, al Administrador principal de Hacienda de Medellín, que ejecutara al fiador del Mensajero por el valor no entregado. El Administrador, cumpliendo esta orden, apoyado en la escritura de seguro, en el recibo de la planilla y en la diligencia del Agente postal de Barranquilla—todo lo cual consta en autos—dictó el mandamiento ejecutivo de que se ha hablado al principio. Intimada la ejecución, el ejecutado depositó la suma le mil cincuenta pesos, en moneda legal, y apeló del auto ejecutivo.

De esta apelación es de la que pasa á ocuparse la Corte, después de haber oído el dictamen del señor Procurador general, quien apoya las pretensiones del apelante; y para la resolución se considera lo siguiente:

Los fundamentos en los que la apelación se apoya, son éstos: que el Administrador de Hacienda no ha tenido jurisdicción para dictar tal mandamiento: que siendo Jefe de la Oficina y responsable de las faltas ocurridas en ésta, por la unidad de cuenta y de responsabilidad, se ha hecho Juez y parte: que conforme á la escritura de fianza, el compromiso es para responder por los daños y perjuicios que puedan sobrevenirle al Tesoro de la Nación por el mal desempeño de los deberes del Mensajero: que el Gobierno sólo responde por el valor de las encomiendas, en el caso de que sus empleados ó agentes sean culpables de la sustracción, y que esta culpabilidad sea declarada por Tribunal competente: que ningún documento produce mérito ejecutivo sino cuando de él resulta una obligación clara de pagar alguna cantidad de plazo cumplido; y, últimamente, que no se sabe aún si al Tesoro le resultará perjuicio, porque no ha precedido la averiguación criminal, ni se ha declarado la

responsabilidad en contra de los agentes del Gobierno. En suma, el apelante pretende que un Mensajero de encomiendas no puede ser compelido á la entrega de los valores que recibe para la conducción, mientras no preceda sentencia en juicio criminal y civil, que declare responsables á los agentes del Gobierno, y que además éste sea requerido ú obligado al pago de lo no entregado por sus agentes.

En todas estas alegaciones hay en parte inexactitud, y en parte confusión de hechos y de doctrina. No es cierto que los agentes principales de Hacienda carezcan de jurisdicción, y jurisdicción coactiva, para cobrar no sólo los créditos activos del Tesoro, conforme al artículo 1,523 del Código Fiscal, sino también para exigir de sus subalternos el pago de aquellos alcances que les resulten en los asuntos de manejo de que están especialmente encargados, como sucede con los mensajeros, conductores de encomiendas, y para cuyo objeto es que exigen de estos últimos los Jefes de Oficina las fianzas respectivas; todo lo cual se deduce de los artículos 1,400, 1,401 y 1,402 del Código últimamente citado.

El que haya unidad de responsabilidad, no impide el que los Jefes de oficinas usen de los medios que las leyes les permiten para premunir la suya; y si hubiera alguna anomalía ó irregularidad en que estos funcionarios fuesen á un tiempo Jueces y partes, eso sería una anomalía legal, resultante de la naturaleza de la organización fiscal.

La confusión resulta de creer que el mandamiento ejecutivo en referencia, emana, y que aun no puede emanar, sino de perjuicios inferidos al Tesoro. Esto no es exacto, ni se trata aquí de tales perjuicios: se trata del cumplimiento de la ejecución de un hecho y del cumplimiento de un mandato resultante de un contrato preestablecido. El Mensajero estaba obligado á entregar en Barranquilla todas las encomiendas que recibió en Medellín; y como faltó una, y como esto consta de documentos públicos fehacientes, era llegado el caso de exigir el cumplimiento de la obligación, la entrega de la cosa; para lo cual sí presta mérito ejecutivo la escritura de seguro conforme á los artículos 925, inciso 4.°, y 932 del Código Judicial, pudiendo optar el ejecutante entre la entrega de la cosa ó el resarcimiento del perjuicio, que para el caso ha venido á ser lo mismo. La cantidad no figura aquí como cosa primordial, sino como medio para designar la encomienda ó el perjuicio: lo esencial es la entrega de la cosa. Para esto tiene perfecto derecho el Administrador de Hacienda, conforme al artículo séptimo de la ley 13 de 1874. De otro modo sería nugatoria la acción oficial en casos como el presente; todo lo cual no se opone ni á la investigación del delito, ni al castigo del culpable, ni al resarcimiento de perjuicios, ora en favor del mismo responsable de la entrega de la cosa, ora en favor del Tesoro, si hasta él han llegado los resultados.

Hay, en casos como éste, caminos distintos, pero no opuestos ni contradictorios, para llegar al mismo resultado. Se puede exigir ejecutivamente el cumplimiento de un hecho por la vía civil: se puede y se debe perseguir un delito y á un delincuente; y se podría proceder después de esto último, civilmente también, en reparación de los perjuicios, si el primer expediente no hubiera sido eficaz. La diferencia consiste en que por el primer camino se procede más recta, más decorosamente, más de acuerdo con la fe pública y con la diligencia que incumbe al Gobierno, en guarda de la seguridad común.

Con esto último queda desvanecido todo lo alegado, tocante á haberse pedido antes de tiempo, á la falta de cantidad líquida y á lo de que mientras que el Tesoro no sea obligado á responder, no hay derecho para pretender la entrega de la encomienda. Este género de rodeos sería, al contrario, poco conforme con la justicia, vulnerando la confianza pública en las Oficinas de encomiendas.

Lo que el auto apelado tiene de irregular, es que al mismo tiempo que se libra ejecución por la entrega de la encomienda y por los intereses de demora, se libra también por los daños y perjuicios; porque estos daños están ahora expresados en la demora y compensados con los intereses del retardo.

Por lo expuesto, la Corte Suprema Nacional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, reforma el auto apelado, en estos términos: se confirma dicho auto en la parte que ordena á Ireneo Escobar el pago ó entrega de la cantidad de mil pesos en monedas de oro, de á cinco pesos cada una, ó sea por el valor de la encomienda de igual suma, que se dejó de entregar en la Agencia postal de Barranquilla por el Mensajero Isaza, con más los intereses de demora, á razón del 12 por 100 anual; y lo revoca en la parte en que comprende la ejecución otra clase de perjuicios.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente al Juzgado de su origen.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Salomón Forero—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En primero de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis lo notifiqué al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.* Secretario.

En dos de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué el auto anterior al señor doctor Antonio José de Toro, y firma.

Antonio J. de Toro.—Guerra A., Secretario.

Es copia conforme.

Bogotá, seis de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

NEGOCIOS CRIMINALES.

AUTO.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Septiembre veintiocinco de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos.—Desde el mes de Febrero de mil ochocientos ochenta y dos comenzaron á hacerse averiguaciones en la Secretaría nacional de Fomento y por el señor Procurador general de la Nación, por una parte, y por otra, en información de nudo hecho, levantada en Anapoima para su defensa, por Wenceslao Medina, Administrador subalterno de correos y telegrafista de este Distrito; informaciones relativas á la inculpación que se hacía al mismo Medina, de haber sustraído treinta pesos en billetes de Banco, de una carta que, remitida de Bogotá, por el doctor Eladio C. Gutiérrez, con dirección á Tocaima al doctor Francisco Montaña, fué entregada á éste último, en la oficina de correos de Anapoima, mojada y sin estampilla.

Continuáronse las diligencias, y en lugar de comenzarse por el principio la instrucción sumaria, esto es, tomando declaración sobre los respectivos hechos á los doctores Gutiérrez y Montaña, evacuándose las citas que ellos hicieran y pidiéndose las conducentes certificaciones en la Dirección general de correos de Bogotá, se perdió el tiempo en multitud de demoras y diligencias inoficiosas, bien que sin culpa del Juez y del Agente fiscal del Circuíto de Tequendama. Al cabo, teniendo á la vista un sumario muy imperfecto en que faltaban diligencias de capital importancia, el Juez del Circuíto profirió en La Mesa el siete de Junio de mil ochocientos ochenta y tres, auto de sobreseimiento, que consultó con la Corte Suprema.

Sustanciado el asunto, esta Superioridad revocó, no obstante el dictamen del señor Procurador general, el auto consultado, disponiendo (auto de 9 de Agosto de mil ochocientos ochenta y tres) que se ampliase el sumario, con expresa indicación de las diligencias que se debían practicar; y en efecto, el Juez de primera instancia procedió á dar cumplimiento á lo resuelto.

Cerca de tres años se han gastado después en la ampliación, puesto que el Juez de primera instancia, teniendo yá el sumario completo, dictó nuevo auto de sobreseimiento con fecha catorce de Abril del presente año, y lo consultó con esta Superioridad. Nuevamente surtidos los trámites legales, el señor Procurador general, en vista del veinticuatro de Mayo, pidió que se confirmase el auto, por cuanto, lejos de haberse creado pruebas contra Medina, ni sobre la existencia del delito, ha resultado lo contrario, y es el caso de que la Corte Suprema decida.

Para ésto se considera:

Primero. No puede haber delito de sustracción de correspondencia ó de encomiendas, ó de valores contenidos en cartas, mientras no se compruebe, ante todo, la remesa de la cosa que se dice sustraída, de manera que la falta de ésta pueda, según la naturaleza de los hechos comprobados, ser imputada á malicia y calificada como sustracción. Por lo tanto, la base de este pro-

cedimiento se encuentra en la declaración del doctor Eladio C. Gutiérrez (fojas 47 y vuelta del cuaderno 1.°) remitente de la carta que se dice fué violada por Medina para sustraer de ella treinta pesos en billetes, y en la declaración del doctor Francisco Montaña (fojas 49 y vuelta del mismo cuaderno) sobre los hechos relativos al recibo en la estafeta de Anapoima, de la misma carta, que le iba dirigida de Bogotá, por dicho doctor Gutiérrez.

En cuanto á la declaración del doctor Gutiérrez, él afirma que, el día diez de Enero de mil ochocientos ochenta y dos, remitió al doctor Francisco Montaña treinta pesos en billetes de Banco, en una carta dirigida á Tocaima, la cual no puso bajo cubierta certificada por falta de tiempo, y "que dicha carta no fué á Tocaima, á donde iba dirigida, sino á Anapoima." Lo demás de la declaración es de referencia á informes del doctor Montaña. No pudiendo la Corte estimar en este sumario ningún testimonio, sino conforme á derecho, observa, por una parte, que en el caso, el dicho es de la persona directamente interesada y no tiene fuerza probatoria; y por otra, que el declarante no ha comprobado con el dicho de un tercero siquiera, el hecho de haber depositado en la Administración de correos de Bogotá, estampillada, el diez de Enero citado, la carta con los treinta pesos en billetes. Aun es de notar en la declaración, que el doctor Gutiérrez no dice haber enviado la mencionada carta, *por el correo*, sino solamente que en la fecha citada remitió una carta al doctor Montaña con treinta pesos en billetes, dirigida á Tocaima, y que no la puso bajo cubierta certificada por falta de tiempo. No hay, por lo tanto, prueba siquiera de que la carta hubiese sido enviada por el correo, con lo que por el mismo hecho falta la base necesaria para admitir la existencia del delito de sustracción cometido por el Administrador de correos de Anapoima, cuya estafeta, por otra parte, no era la destinataria, según el declarante, sino una de tránsito, que nada tenía que hacer en el asunto, puesto que á cada distrito se envía, bajo pliego cerrado, el paquete de correspondencia que le está destinado. Asimismo consta del sumario (fojas 26 y 27 del cuaderno número 1.°) que no fué enviada en la época á que se refiere lo actuado, ninguna carta certificada con los billetes para el doctor Montaña, de que se hace mérito.

Segundo. Si del lado de Bogotá, falta en absoluto la prueba del hecho fundamental, sin el cual no ha podido haber delito de sustracción cometido en una oficina de correos, tampoco arroja el sumario prueba alguna de que Wenceslao Medina hubiese incurrido, en su oficina de Anapoima, en hecho alguno vituperable. Prescindiendo de la tacha de interesado en el asunto que pudiera hacerse al doctor Montaña, él no acusa á Medina sino indirectamente, por cuanto afirma que preguntó en la oficina si había carta para él, que Medina le contestó negativamente, y que un rato después, habiendo sabido por el joven Julio Araújo que sí tenía carta, volvió á preguntar, y le entregó una del doctor Gutiérrez, el ayudante del Telegrafista-administrador; añadiendo que al abrirla notó que estaba sin estampilla y mojada y manchada. Nada de esto constituye la prueba, ni el menor indicio de la comisión de un delito, y los incidentes aludidos aparecen perfectamente explicados y exculpados, según se ve por declaraciones irrecusables.

Tercero. En efecto, á foja 3.ª á 6.ª del cuaderno número 1.° se hallan las declaraciones de Carlos Abondano, Ernesto Solano, Primitivo Londoño y Gregorio Hernández, abonados como testigos idóneos, y cuyos testimonios aparecen ratificados á virtud de órdenes del Juez sustanciador; y de ellos resulta plenamente probado, á más de la irreprensible conducta de Medina, en lo privado y como empleado de correos y telégrafos, que en la noche del 12 de Enero de mil ochocientos ochenta y dos, á las diez, se recibió el correo despachado en Bogotá el diez; que todo el paquete de correspondencia para Anapoima iba mojado por causa de un accidente que le ocurrió al correista en el camino; que mojadas ó húmedas fueron entregadas todas las cartas aquella noche y al siguiente día, como que algunas personas las recibieron muy deterioradas; que Medina respondió al doctor Montaña, por distracción, que no había carta para éste; pero que poco después, examinada la existencia por el Ayudante del telegrafista, éste halló carta para el doctor Montaña y se la entregó; y que en nada de esto hubo malicia. Así lo confirman en parte, las declaraciones de dicho Ayudante, Roberto Ramírez (fojas 29 vuelta y 30 del cuaderno 2.°) y del citado joven Araújo, (fojas 47 vuelta y 43 del cuaderno 1.°).

Cuarto. Es de observar que el sindicado Medina, destituído de su empleo, por decreto número 61 de 1882, del Gobierno nacional, á mérito de la queja ó denuncia dada por el doctor Gutiérrez, y sin previa averiguación (fojas 7.ª y 8.ª del cuaderno número 1.°), lejos de rehuír la averiguación de los hechos, la promovió en guarda de su honor, ya pidiendo al Alcalde de Anapoima un certificado concluyente en el asunto, y levantando allí una información de nudo hecho, ya presentándose con estos documentos ante el señor Secretario de Fomento de la Nación, y haciéndole observaciones para esclarecer los hechos (foja 6 del citado cuaderno), ya, en fin, ocurriendo al señor Procurador general de la Nación (fojas 37 y 38 ibidem) y suplicándole que hiciese activar el sumario, á fin de que la honra del sumariado quedase á cubierto de toda sospecha. Actos son estos que prueban mucho á favor de la honradez de Medina.

En suma, falta por completo la prueba de la remesa de treinta pesos hecha de Bogotá por el doctor Eladio C. Gutiérrez al doctor Francisco Montaña, á Tocaima; máxime cuando consta del sumario que la carta entregada á dicho doctor Montaña iba cerrada y fué abierta por éste en la oficina de Anapoima; y falta la prueba de la sustracción que se supuso hecha en Anapoima, y de la culpabilidad de Wenceslao Medina ni de otra persona. Es, por lo tanto, llegado el caso de sobreseer en el procedimiento, por cuanto se han agotado los medios de información, conforme al artículo 1,543 del Código Judicial, y no ha quedado cita alguna por evacuar, ni diligencia alguna por practicar para el perfeccionamiento del sumario.

Por lo expuesto, y de acuerdo con el dictamen y pedimento del señor Procurador general, habiéndose surtido todas las diligencias requeridas, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, confirma en todas sus partes el auto de sobreseimiento consultado.

Y por cuanto consta del sumario que el sindicado fué destituído de su empleo, por habérsele reputado responsable, á virtud de queja ó denuncia que no ha sido justificada, trasmítase copia auténtica de este auto al señor Ministro de Gobierno, por lo que conduzca á su conocimiento.

Y por cuanto á fojas 41 á 43 del cuaderno número 1.° aparecen unos documentos que no pertenecen al sumario, sino que indudablemente corresponden á otro sobre sustracción de Billetes de Banco instruído ante el Juzgado del Circuito de Tocaima, que seguramente por error fueron legajados en este sumario en La Mesa, ordénase al Juez de 1.ª instancia (Circuito de la actual Provincia de Tequendama) el desglose de los mencionados documentos, para que los trasmita al Juez del Circuito de Tocaima, á quien debieron ser dirigidos como diligencias correspondientes á un sumario ó juicio distinto.

Notifíquese, cópiese y devuélvanse los autos.

R. Antonio Martínez.—José M. Samper.—Manuel J. Angarita.—Salomón Forero.—Froilán Laraucha.—Antonio Morales.—Luis S. de Silvestre.

Ramón Guerra A., Secretario.

En veinticinco de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme. Bogotá, catorce de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

AUTO.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veinticinco de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—El Juez del Circuito de Sopetrán, en el despacho de lo criminal, pronunció el veintisiete de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro, auto de sobreseimiento respecto al sumario instruído por el Jefe municipal de "Liborina," Estado de Antioquia, desde el veinte de Mayo de mil ochocientos ochenta y tres, para averiguar los delitos de fabricación de moneda falsa, imitando las de plata de cincuenta centavos que se emiten por el Gobierno nacional; y el de circulación de las mismas monedas falsas. El Fiscal de ese Circuito apeló de aquella providencia para ante la Corte, y el recurso le fué concedido por

resolución de treinta de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro. Surtidos los trámites de la segunda instancia, se ha pasado el expediente al estudio del Magistrado sustanciador el veintidós del presente mes, y se procede á dictar el fallo que se estima arreglado al mérito del proceso.

Teniendo conocimiento el funcionario de instrucción mencionado de que circulaban monedas falsas en el Distrito de Liborina, procedió á verificar las indagaciones, y pudo colectar ocho piezas de metal falsas, selladas á imitación de las monedas de plata de cincuenta centavos, emitidas en la Casa de Moneda de Medellín en el año de mil ochocientos ochenta y uno. A fojas 11 aparece el reconocimiento practicado por los peritos Manuel A. Uribe G. y Basilio Hoyos, según el cual dichas piezas son falsas y no se diferencian en el sello de las monedas de plata de cincuenta centavos de Medellín emitidas en 1881, sino en la falta de las palabras *Dios*, *Ley*, *Libertad* que llevan las monedas legítimas grabadas en el corte. El Ensayador de dicha Casa, que también verificó el examen de las monedas aprehendidas, certifica que son falsas, que son iguales á unas que le mandó el Inspector de "La Granja," compuestas de plomo, estaño y una pequeña cantidad de zinc, y todas de 1881. Quedó, por consiguiente, comprobado el delito de falsificación de moneda.

En cuanto á los responsables de su perpetración, el sumario no suministra los datos necesarios para someter á juicio á persona alguna. En poder de Ramón Betancourt fueron halladas tres de las ocho monedas recogidas; y éste individuo expuso que las había obtenido de manos de su hermano Pedro Betancourt, en la compra que éste le hizo de una escopeta. Llamado éste individuo á dar su declaración instructiva (fs. 2), contestó á la pregunta respectiva del funcionario de instrucción en estos términos; "Como yo no le pongo seña á la plata, no sé que yo le haya dado las monedas que se me ponen de presente á Ramón Betancourt: sé que le he dado plata hoy, pero no sé que sean las mismas."

Gregorio Escandón (fs. 42 y 58) asegura que Pedro Betancourt le dió dos pesetas falsas en Sabanalarga, para que las hiciera circular en el juego; que en compañía de este individuo fué á la tienda de José María Espinal, á comprar víveres con esas monedas; y Espinal ratifica esta aserción, agregando que Betancourt se quedó hacia afuera de la tienda recostado á la pared y como en actitud maliciosa.

Clara Jaramillo (fs. 15 vuelta y 37), refiriéndose á Salvador Pineda, declaró que Pedro Betancourt tenía un cuño en el sitio de Rodos, jurisdicción de Liborina; pero examinado el testigo Pineda (fojas 16, 36 y 44), negó la exactitud de la cita y sostuvo, aun en un careo que se practicó, que Jaramillo fué más bien el que le refirió que Betancourt era tenedor de un cuño de monedas; que además, le dijo el mismo Jaramillo que este individuo le había ofrecido en venta esa misma pieza.

Con alguno de estos antecedentes se verificó el allanamiento de la habitación del sindicado Betancourt, pero ningún elemento de falsificación de monedas se halló en ella (fojas 18 vuelta.)

Según lo expuesto no ha sido comprobada la responsabilidad de Pedro Betancourt como fabricador de moneda falsa; ni concurre en este sentido la presunción legal establecida por el artículo 1,620 del Código Judicial; y no hay mérito para proceder contra él, como falsificador de monedas, por no suministrar el sumario para ello la prueba exigida por el artículo 1,542 del mismo Código.

Resta examinar el mérito de la actuación en cuanto al delito de circulación de moneda falsa, de que han sido sindicados el mismo Betancourt y su hijo, menor de edad, Jesús Betancourt. Bajo este aspecto, la Corte estima conveniente insertar el concepto del Fiscal en primera instancia, emitido el diez y seis de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro (fojas 91 vuelta), extractando la parte conducente que sirvió de fundamento á ese funcionario para pedir la formación de causa contra esos dos sindicados por este segundo hecho, erigido en delito por el artículo 248 del Código Penal de la República, en su último inciso. Ese dictamen dice, de acuerdo con el sumario, lo siguiente:

II

Expendio ó circulación de monedas, de la clase de las enumeradas antes.

Ha sido más feliz la investigación en cuanto á este punto, según paso á demostrarlo.

Aparece de autos lo siguiente:

1.° Que el señor Corregidor de Liborina, tan luégo como tuvo conocimiento del hecho criminoso, logró adquirir declaraciones de un número plural de testigos que demuestran que en los Distritos de Liborina y Sabanalarga, en el año próximo pasado, y como de Enero á Marzo, se pusieron en circulación algunas monedas falsas imitando las de plata de cincuenta centavos emitidas en 1881 en la Casa de moneda de Medellín. Cuanto á los testigos que hablan de la circulación de tales monedas, se expresará más adelante sus nombres.

2.° Que dicha autoridad logró recoger ocho monedas de las que circulaban en dichos Distritos, las cuales remitió á su despacho de usted, para que fueran reconocidas por peritos.

3.° Que peritos nombrados por usted (fojas 11), expusieron: 'que han examinado ocho monedas por valor de á cincuenta centavos cada una de ellas, y en su concepto son falsas; que imitan las monedas del mismo valor fabricadas en la Casa de moneda de Medellín, correspondientes al año de 1881; que se diferencian en que las falsas no tienen en el lomo las palabras, Dios, Ley y Libertad que se notan en las legítimas.'

Como se notara diferencia en el reconocimiento, por cuanto los peritos no se hallaban en posibilidad de hacer un ensayo en debida forma, para ver de obtener éste se remitieron las monedas á Medellín, y allí fué practicado un nuevo y especial reconocimiento por el Ensayador de la Casa de moneda, y este empleado certifica:

'1.° Que son falsas dichas monedas;

'2.° Que las ocho monedas que le fueron entregadas para ensayar, son iguales á unas que le mandó el Inspector de La Granja, compuestas de plomo, estaño y una pequeña cantidad de zinc y todas de 1881.'

Queda, por lo dicho, comprobado el cuerpo del delito de que se trata.

III

¿Quién ó quiénes son responsables del hecho en referencia?

Desde las primeras declaraciones recibidas en la sumaria aparecieron cargos que afectaban la responsabilidad de Pedro y Jesús Betancourt.

Me propongo examinar todos los indicios que surgen de la investigación en contra de los expresados sindicados, haciendo este examen, en lo posible, separadamente, para la mejor inteligencia y claridad en el asunto.

Pedro Betancourt.

I

En poder de Ramón Betancourt figuraron tres de las ocho monedas aprehendidas por la autoridad y exhibidas á los peritos reconocedores. Es el caso de examinar cómo y de quién hubo el citado testigo dichas monedas y cuál el giro ó movimiento circulatorio que en las transacciones comerciales de Liborina hubieran tenido.

A Lisandro Lozano (fojas 2 á 3) le presentó el testigo una moneda de cincuenta centavos para que la examinara y para que si era buena le vendiera con ella efectos de su tienda. Como Lozano hallara falsa la moneda, le preguntó cómo la había conseguido, y manifestó que su hermano Pedro Betancourt le había dado tres de esas monedas en la venta que le hizo de una escopeta. Lozano no quiso devolverle la moneda, y Betancourt se la exigía con instancias, para ver de obtener el que Pedro se la cambiara.

A Venancia Monsalve (fojas 1) dió el mismo dos de las monedas que han sido reconocidas. La Monsalve las exhibió á la autoridad.

Dicho Betancourt reconoce las tres monedas de que se ha hablado y manifestó que es cierto las dió á la Monsalve y á Lozano, y que las recibió de Pedro su hermano (fojas 1 y 63) en pago de una escopeta.

El sindicado Pedro Betancourt no niega el hecho de que le dió dinero á su hermano. Dice haberle dado á Ramón tres pesos en pesetas de á cincuenta centavos, cuyo dinero recibió en Antioquia, producto de unos cueros de venado que vendió allí á un hombre *que no conoce* (fojas 2 y 46). Manifiesta no saber quién dió á Ramón las monedas que se le ponen de presente, y que no puede decir si serían de las que él le dió porque no diz que le pone seña á la plata.

Como se ve, el sindicado declara en términos vagos y con fluctuaciones que inducen á juzgar desfavorablemente de su conducta en el asunto.

II

El incidente de que paso á ocuparme, compromete muy directamente la responsabilidad de Pedro Betancourt.

Refiere Gregorio Escudero (fojas 42 y 58) que Pedro Betancourt le dió en Sabanalarga dos pesetas falsas de las de á cincuenta centavos para que las expendiera en el juego: que en compañía de Betancourt fué á la tienda de José M. G. Espinal á que le vendie-

ra panela con una de dichas monedas y que Espinal la rechazó por falsa.

José María Espinal (foja 38) y Carolina Arango (fojas 38 y 36) manifiestan que efectivamente Escudero se presentó en la tienda á comprar panela: que fué acompañado con Betancourt y que éste se quedó hacia el lado de afuera recostado á la pared y como en actitud maliciosa: que la Arango y Espinal rechazaron la moneda en referencia.

Jesús Betancourt.

La circunstancia de existir estrechas relaciones de parentesco entre los sindicados y de llevar vida común, obligan á considerar como ligados entre sí los indicios que afectan á dichos sindicados.

Examinaré los especiales que la sumaria apareja contra Jesús.

I

Juan Mirá vió varias pesetas al sindicado, todas ellas falsas y de valor cada una de cincuenta centavos (foja 4).

II

En poder de Fidel Bustamante figuró una moneda de las falsas.

Dicho individuo fué á la tienda de David Méndez (foja 8) á comprarle con la moneda de que se habla, cuyo acto presenció también Daniel Herrera (foja 8).

A Wenceslao Flórez se la enseñó preguntándole si era falsa y significándole que se la había dado Jesús Betancourt (fojas 14).

Examinado el testigo asegura haberla recibido de Jesús en pago de panela que le vendió (foja 67) á éste.

III

Segundo Consio (foja 3) presentó una de las monedas que se hallaron en su Despacho, al señor Corregidor de Liborina, y manifiesta que Jesús Betancourt fué á comprarle cuerdas y cree fué únicamente por cambiar esa moneda.

IV

Juan Lorenzo Vélez (foja 4) presentó á la autoridad dos monedas de las falsas: una de éstas estuvo en circulación entre varios individuos.

Vélez dice (fojas 4) que las dejó allí Juan María Martínez, éste (foja 4) que las hubo de Francisco Arroyo, el cual no recuerda el hecho (foja 67).

Dicho Vélez dió una moneda de éstas á Juan Caños (foja 68). Caños se la dió á José López, y éste (foja 7) á Juan Mirá (foja 4).

Como se ve, ninguno de los citados testigos acusa directamente á Bustamante; pero Martínez (foja 75) manifiesta que el tipo y calidad de dicha moneda es igual al tipo y calidad de las que reconoció en el Despacho del funcionario de instrucción; y Juan Mirá vió monedas del mismo valor, falsas, á Jesús Betancourt, y procuraba éste hacerlas circular (foja 4). Esta circunstancia reunida á los demás datos recogidos—forman un indicio, aunque no de consideración.

V

Aseguran Pastora Ibarra (fojas 3 y 74) y Anselmo Sepúlveda (fojas 2 y 87), que Jesús Betancourt dió á la primera, una moneda de cincuenta centavos, falsa. Que dicha moneda se la dió aquella á Anselmo—y éste la rechazó por falsa; que la Ibarra llamó á Jesús Betancourt para que se la cambiara y que en efecto se la cambió. Que según la Ibarra, las monedas que estaban en poder del Corregidor, son iguales, á su juicio, á la que le dió Betancourt.

Este indicio traspasa sus límites para convertirse en una prueba de tanta gravedad, que pudiera muy bien considerarse como una prueba directa contra Betancourt; pues que si bien es cierto que Sepúlveda no presenció el acto en que el sindicado diera la moneda á Ibarra, también lo es que la aceptación del cargo que á su presencia le hizo esta mujer al sindicado, implica una confesión en el asunto.

Betancourt niega todos los hechos, pero la negativa de un incidente tan comprobado como el de que se habla, tiende á demostrar, moralmente hablando, que ello emana de no poder dar explicaciones satisfactorias en el asunto.

VI

Las monedas que aprehendió la autoridad, fueron reconocidas por varios de los testigos que declararon como de la misma clase y calidad de las que figuraron como procedentes de los sindicados y puestas en circulación por éstos (W. Flórez 69—Lisandro Lozano 70—Gregorio Escudero 77—José Lopera 77—Segundo Consio 81).

VII

No estará por demás el advertir que la esposa de Pedro Betancourt, hacía esfuerzos para ver de conseguir que los testigos no declararan en contra de su esposo y de su hijo Jesús, manifestándoles que saldrían también comprometidos en el asunto, como ellos (Pedro Flórez 44 y María A. Moreno 59).

Es á mérito de las anteriores consideraciones y juzgando reunidas las exigencias del artículo 1,542 del Código Judicial de la Nación, que solicito de usted el enjuiciamiento de Pedro y Jesús Betancourt por el delito de falsificación, consistente en haber contribuído á sabiendas al expendio y circulación de monedas falsas imitando las de plata de cincuenta centavos, emitidas en la Casa de Moneda de Medellín.

El escrupuloso examen del Fiscal, que queda copiado, está completamente arreglado al mérito del sumario y lleva al ánimo el conocimiento de la eficacia legal de los indicios apreciados por ese funcionario para llamar á juicio á los dos sindicados. En efecto, es evidente que ellos circularon piezas falsas de cincuenta centavos en diferentes puntos y dándolas á distintas personas, y hay vehementes indicios de que eran sabedores de que aquellas monedas eran falsas, lo que basta para abrirles juicio criminal, conforme al artículo 1,542 ya citado.

Por tanto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, reforma el auto apelado y declara que hay mérito para proceder contra Pedro y Jesús Betancourt, por el delito de circulación, á sabiendas, de monedas falsas imitando las de plata legítimas que emite el Gobierno.

Notifíquese, cópiese, publíquese en el *Diario Oficial* y devuélvase la causa al Juez nacional de primera instancia.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Salomón Forero—Froilán Largacha—Antonio Morales. Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En treinta de los mismos lo notifiqué al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme.

Bogotá, Octubre ocho de mil ochocientos ochenta y seis.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

NO OFICIAL.

VISITA.

Su Excelencia el señor Conde Gloria, Ministro de Su Majestad el Rey de Italia, tuvo la cortesía de hacer una visita de atención á la Corte Suprema de Justicia, el día 10 de los corrientes. Recibido primero momentáneamente en el salón de estudio y conferencias, por Su Excelencia el Presidente de la Corte y todos los señores Magistrados, le condujeron al punto á la Sala de Audiencia, donde sostuvieron con el señor Ministro una conversación de más de media hora, tan cordial como interesante. Su Excelencia el señor Conde Gloria procuró informarse con mucho interés sobre la organización judicial de Colombia y las reglas más generales de nuestros procedimientos, y se mostró lleno de simpatías por la República; así como, en otros momentos, había manifestado entusiasmo por la hermosura natural del Dique de Cartagena y de toda la región inferior del río Magdalena.

La visita fué correspondida por los señores Magistrados el día 12 de los corrientes, y al recibirlos, el señor Ministro se manifestó no menos cortés y benévolo que en la vez anterior. Los señores Magistrados se retiraron muy satisfechos del ameno trato de Su Excelencia el señor Ministro de Italia.

ANUNCIOS.

LA GACETA JUDICIAL.—Se publica este periódico ordinariamente una vez por semana (los sábados), y se admiten suscripciones en el Banco Nacional así:

Por un semestre (26 números).....$ 3 00
Por un año (52 id..... 5 00

No se venden números sueltos.

Es de cargo del Ministerio de Gobierno hacer repartir el periódico á los suscriptores en la capital, y en los Departamentos por medio de los correos; sin perjuicio de la distribución á las oficinas públicas que deben recibirlo.

No se admiten anuncios que no sean de carácter oficial, ni inserciones que no sean autorizadas por la Corte Suprema.

IMPRENTA DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPÚBLICA DE COLOMBIA. Número 3.º

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 26 de Febrero de 1887.

CONTENIDO.

	Pág.
ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.	
Acuerdos números 23, 24, 25 y 26 sobre calificación de los Jueces nombrados por los Tribunales de Circuito	17
SENTENCIAS DEFINITIVAS.	
NEGOCIOS CIVILES.	
Sentencia que niega á Valentina Balbina Martínez derecho á pensión del Tesoro nacional	20
COMPETENCIAS.	
Resolución relativa á una consulta	21
AUTOS INTERLOCUTORIOS.	
NEGOCIOS CRIMINALES.	
Sobre cambio de unos troqueles	”
Sobre moneda falsa en Santa-Librada	22
En el sumario contra el señor Francisco de P. Lievano	”
En el id. id. Vicente Sanclemente	23
En el id. id. Belisario Ospina	”
En el id. id. Francisco Marulanda	24
En el id. id. Joaquín Díaz E	”
ANUNCIOS	”

GACETA JUDICIAL.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

ACUERDO NUMERO 23.

En la ciudad de Bogotá á diez y seis de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete se constituyó la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de Sus Señorías todos los Magistrados y del infrascrito Secretario, con el objeto de tomar en consideración los siguientes asuntos:

1.º

Se leyó la excusa que presenta el señor don Matías de Francisco para no aceptar el destino de Revisor del Banco Nacional, y una nota del Gerente de este Banco, en la cual suplica que se nombre cuanto antes el que deba desempeñar dicho destino, pues sabe que el señor de Francisco no ha aceptado.

El Magistrado doctor Angarita hizo la siguiente proposición:

“Acéptase la excusa que presenta el señor don Matías de Francisco, y procédase á nombrar al que deba servir el destino de Revisor.”

Puesta en discusión, fué aprobada, y hecha la elección resultó por unanimidad favorecido el señor doctor don José Camacho Roldán.

El señor Presidente dió orden de comunicarlo al nombrado, al Gerente del Banco y á Su Señoría el Ministro del Tesoro.

2.º

Se leyó un telegrama del Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, fechado en Medellín el 10 del corriente, el cual debió cruzarse con el de esta Superioridad, de fecha 8, porque la línea ha estado interrumpida. En dicho telegrama participa el nombramiento que ha hecho el Tribunal para Jueces principales y suplentes en todo el Distrito Judicial, y oído el informe verbal favorable á los nombrados hecho por el señor Magistrado doctor Cock, el señor Magistrado doctor Largacha hizo la siguiente proposición:

“La Corte Suprema de Justicia, teniendo en consideración:

“1.º Que el acuerdo de la Corte del siete de este mes, relativo á las formalidades que deben observarse en la aprobación del nombramiento de Jueces, hecho por los Tribunales Superiores del Distrito, está fundado en la necesidad que tiene este Supremo Tribunal de buscar los elementos de certidumbre respecto á las cualidades constitucionales de los individuos elegidos por dichos Tribunales;

“2.º Que al dar cuenta Su Excelencia el Presidente de la Corte del telegrama de Antioquia por el cual se comunica cuáles son los escogidos por el Tribunal Superior de ese Distrito, ha informado el señor Magistrado doctor Cock que ellos son competentes para las Judicaturas á que se les ha destinado y que han estado desempeñando;

“3.º Que dicho señor Magistrado tiene un conocimiento práctico de ese personal, como antiguo Magistrado del Tribunal de Medellín;

“4.º Que el acuerdo del siete no puede entrabar la acción de la Corte en todo caso, para el ejercicio de la función de elegir; no de carácter judicial, sino administrativo, cuando por otra parte se le presenten datos aceptables, como sucede en el presente caso, para formar su juicio;

“5.º Que estando vencida más de la mitad del mes de Febrero, los días que faltan hasta el 1.º de Marzo no serían bastantes para que llegaran á este Despacho los documentos que hayan podido tenerse en cuenta por ese Superior Tribunal para la elección; viniendo á suceder con más razón lo mismo respecto á casi todas las elecciones que se hayan hecho en el resto de los Tribunales de la República;

“6.º Que en un estado de cosas semejante, el 1.º de Marzo próximo quedarían en acefalía todas ó la mayor parte de las Judicaturas de Distrito y de Circuito; y entonces iría en reversión la facultad de hacer los nombramientos de Jueces al Poder Ejecutivo Nacional, con arreglo al inciso 6.º del artículo 120 de la Constitución; y

“7.º Por último, que ni la Constitución, ni ley alguna han puesto limitaciones á la Corte en el ejercicio de esa importante función; de modo que en cada caso particular puede la Corporación aplicar su criterio para pedir ó nó documentos que formen su convicción en cuanto á las cualidades constitucionales de los candidatos;

“Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia aprueba en todas sus partes la elección de Jueces principales y suplentes hecha por el Tribunal Superior de Antioquia de que se ha dado cuenta.”

Discutida largamente y sometida á votación, dividida en dos partes, la primera de los siete considerandos y la segunda del proyecto de resolución, fué negada la primera; y el Magistrado doctor Samper sentó la siguiente proposición, antes de votarse la segunda parte que quedaba pendiente:

“Suspéndase lo que se discute hasta que se reciban los documentos pedidos al Tribunal de Antioquia por telegrama de 8 del corriente.”

Sometida á votación fué aprobada, expresando el doctor Largacha que su voto era negativo.

3.º

El Magistrado doctor Largacha sentó la siguiente proposición:

“Procédase á considerar la documentación remitida por el Presidente del Tribunal de Cundinamarca.”

Aprobada que fué, se dió lectura á la expresada documen-

tación, é inmediatamente el señor doctor Cock propuso lo siguiente que también fué aprobado:

"Procédase á calificar individualmente á los nombrados Jueces de quienes se habla en los documentos leídos."

En consecuencia, se hizo la calificación por balotas blancas y negras, en votación secreta, (siendo escrutadores los señores doctores Angarita y Cock), que dió el siguiente resultado:

Para Juez del Circuíto de Chocontá, señor don Emilio Lee, cuatro balotas negras contra tres blancas;

Para el de Facatativá señor don Isidoro Talero, cuatro negras contra tres blancas;

Para Juez 2.° de id. id., señor don Juan de Jesús Esguerra, siete balotas blancas;

Para el de Guaduas, señor don Tiberio Rubio, siete balotas blancas;

Para el de Guatavita, señor don Edilberto Gaitán, seis blancas contra una negra;

Para el Circuíto de Oriente, señor don Germán Pardo, siete blancas;

Para el de Tequendama, señor don Evangelista Trujillo, siete blancas;

Para Juez 2.° de id., señor don Hermógenes Moya, siete blancas;

Para el de Ubaté, Sr. D. José Vicente García, siete blancas;

Para el de Villeta, señor don Francisco de P. Caicedo, seis negras y una blanca;

Para el de Zipaquirá, señor don Tomás Angulo, siete balotas blancas;

Para Juez 2.° de id., señor don Gabriel Toro G, siete balotas blancas.

En este estado los Magistrados doctores Samper y Noguera propusieron que se reconsideraran los dos primeros, por razones que pusieron de manifiesto, y habiéndose accedido por la Corte, se repitió la votación, que dió el siguiente resultado:

Por el señor Emilio Lee, cinco balotas blancas contra dos negras;

Por el señor Isidoro Talero, seis blancas y una negra.

En virtud de lo expuesto, la Corte dió por aprobados á todos los nombrados, con excepción del señor Francisco de P. Caicedo, y el señor Presidente dispuso que se comunicara así al Tribunal.

4.°

El señor Presidente leyó un telegrama del Fiscal del Tribunal del Cauca, fechado en Buga el 15 del corriente, que dice así:

"¿Se vicia posesión Magistrados Tribunal del Cauca si la toman ante Jefe de la Provincia, como está resuelto por el Poder Ejecutivo Nacional?

"¿Debe aceptarla el infrascrito Fiscal?"

La Corte resolvió no ser competente para oír y decidir consultas sobre asuntos administrativos, como es la presente.

Con lo cual se concluyó el presente acuerdo que firman sus Señorías los Magistrados ante el infrascrito Secretario.

El Presidente, JOSÉ M. SAMPER—*Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 24.

En la ciudad de Bogotá, á diez y ocho de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete, se constituyó la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de sus Señorías todos los Magistrados y del infrascrito Secretario, con el objeto de calificar los nombramientos hechos para Jueces por los Tribunales de que se hará mención.

1.°

Se leyó la nota del Presidente del Tribunal Superior de Tundama, fechado en Santa Rosa en 11 del corriente, en la cual participa los nombramientos hechos por el referido Tribunal para Jueces, y varios comprobantes adjuntos á la nota, sobre aptitudes de los nombrados; y después de una pequeña discusión, el Magistrado doctor Angarita propuso que se suspendiera hasta el día de mañana la votación, y así lo acordó la Corte.

2.°

El Magistrado doctor Largacha hizo la siguiente proposición:

"Procédase á la calificación individual de los nombrados Jueces para el Circuíto de Bogotá."

En la discusión el Magistrado doctor Noguera hizo presente que no conociendo él á los nombrados, no podía calificarlos con entera certeza de sus aptitudes. Que en su concepto debía diferirse uno ó dos días mientras él formaba juicio por informes privados, y que pedía que se hiciera constar en esta acta que su voto en la proposición que se discute sería negativo.

Otros señores Magistrados contestaron que tampoco conocían personalmente á todos los individuos á quienes van á calificar, pero que con los documentos privados que están á la vista y con los informes que verbalmente se han dado en esta sesión, creen lo suficiente para formar su juicio; y que además, habiéndose pedido al Tribunal los documentos que hubiera tenido en cuenta al hacer esos nombramientos, esa Corporación se ha limitado á mandar la lista de los nombrados, sin hacer mención de tales documentos, parece inútil insistir en pedirle datos, con pérdida del tiempo.

Sometida á votación resultó aprobada, estando el doctor Noguera negativo.

En consecuencia, se sometieron á calificación los siguientes señores por medio de balotas blancas y negras, sirviendo de escrutadores los señores Magistrados Angarita y Cock:

Para Juez 1.° Superior del Distrito Judicial, señor don Gerardo Pulecio, seis balotas blancas contra una negra;

Para Juez 2.° de id., señor don Ricardo Pardo A., seis negras contra una blanca;

Para Juez 1.° del Circuíto, señor don Marceliano Vargas, siete balotas blancas;

Para Juez 2.°, señor don Bartolomé Rodríguez, cuatro negras contra tres blancas;

Para Juez 3.°, señor don Adolfo Leon Gómez, seis blancas contra una negra;

Para Juez 4.°, señor don Isaías Castro Vélez, siete balotas blancas;

Para Juez 5.°, señor don Enrique Rojas B., seis blancas contra una negra;

Para Juez 6.°, señor don Carlos A. Londoño, cuatro blancas contra tres negras;

Para Juez 7.° señor don David Ovalle, cuatro negras contra tres blancas;

Para Juez ejecutor, señor don Manuel J. Páramo, siete balotas blancas.

En consecuencia, fueron declarados aprobados los señores Pulecio, Vargas, Leon G., Castro, Rojas, Londoño y Páramo, y desaprobados los señores Pardo, Rodríguez y Ovalle.

A moción de los señores Magistrados doctores Angarita y Cock, se suspendió la votación respecto á los suplentes nombrados, por tener que tomar parte en la discusión de una ley que va á votarse hoy en el Consejo Legislativo.

Con lo cual se dió por terminado el presente acuerdo, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

Es de advertir que entre las razones expuestas por los señores Magistrados para verificar la calificación de los Jueces nombrados, se alegó la de que, habiéndose dado orden al Tribunal de remitir los documentos que hubiera tenido en cuenta para hacer esos nombramientos, la nota sobre nombramientos no dice nada sobre tales documentos, lo cual hace temer que si no los mandó al principio tampoco los mandará ahora; y que la moción hecha por el Magistrado doctor Angarita para suspender la votación respecto á los suplentes, fué apoyada también por el Magistrado doctor Cock.

El Presidente, José M. SAMPER—*Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NÚMERO 25.

En Bogotá á veintiuno de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete, se constituyó la Corte Suprema nacional en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario.

El señor Magistrado doctor Largacha presentó la siguiente proposición:

"Reconsidérense las calificaciones hechas el 18 del corriente mes, respecto del Juez 2.° de lo Civil, doctor Bartolomé Rodríguez, y 7.° de lo Criminal, doctor David Ovalle."

Puesta en discusión, el señor Magistrado doctor Samper la adicionó así: "y 2.° del Distrito Judicial, señor Ricardo Pardo A."

Discutida largamente y sometida á votación resultó aprobada la proposición principal con la adición.

En consecuencia, se procedió á rehacer la calificación dicha, sirviendo de escrutadores los señores Magistrados doctores Angarita y Cock, y se obtuvo el siguiente resultado:

Por el señor Bartolomé Rodríguez, cuatro balotas negras contra tres blancas.

Por el señor David Ovalle, siete balotas blancas.

Por el señor Ricardo Pardo A., cuatro balotas blancas contra tres negras.

Procedióse en seguida á calificar á los Suplentes, y se obtuvo el siguiente resultado:

Por el señor Rufino Cuervo M., seis balotas blancas y una negra.

Porel señor Carlos Gómez Valdéz siete balotas blancas.

—	Justiniano Pardo,	siete	id.	id.
—	Clímaco Nates,	siete	id.	id.
—	Tiberio Ospina,	siete	id.	id.
—	Numa P. Noguera,	siete	id.	id.
—	Alberto Bernal O.,	siete	id.	id.
—	Gregorio Lobo R.,	siete	id.	id.
—	Jeremías Rodríguez,	siete	id.	id.
—	Tobías Gaóna,	siete	id.	id.

La Corte declaró aprobados á todos los referidos señores, con excepción del doctor Rodríguez.

Sometidos á calificación los Jueces principales nombrados por el Tribunal Superior de Tundama, la cual había quedado pendiente, resultó así:

Doctor Antonio Valderrama, Juez Superior del Distrito, siete balotas blancas.

Señor Ladislao Corso, Juez del Circuíto de Tundama en lo Civil, siete balotas blancas.

Señor Eudoro Leiva, Juez del mismo Circuíto en lo Criminal, siete balotas blancas.

Doctor Mariano de J. Medina, Juez del Circuíto de Sogamoso en lo Civil, siete balotas blancas.

Señor José Medina Calderón, Juez del Circuíto del Norte en lo Criminal, siete balotas blancas.

Doctor César E. Bravo, Juez del Circuíto del Cocuy en lo Civil y en lo Criminal, siete balotas blancas.

Señor Carlos Escobar Reyes, Juez del Circuíto de Chita en lo Civil y en lo Criminal, siete balotas blancas.

Doctor Carlos Demetrio Coy, Juez del Circuíto de Casanare en lo Civil y en lo Criminal, siete balotas blancas.

Señor Alejandro La Rota, Juez del Circuíto de Sogamoso en lo Criminal, seis balotas negras contra una blanca; y

Doctor Próspero Pinzón, Juez del Circuíto del Norte en lo Civil, cuatro balotas negras contra tres blancas.

La Corte dispuso que se comuniquen estos resultados á los Presidentes de los Tribunales Superiores de Cundinamarca y Tundama, y que se publique esta diligencia en la *Gaceta Judicial* de Colombia. Con lo cual se concluyó el presente Acuerdo, que firman todos los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, JOSÉ M. SAMPER—*Manuel J. Angarita.*—*Julián R. Cock Bayer*—*Froilán Largacha*—*Antonio Morales*—*Benjamín Noguera*—*Manuel A. Sanclemente*—*Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 26.

En la ciudad de Bogotá, á veintidós de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete, se constituyó la Corte Suprema Nacional en Sala de Acuerdo con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretorio, y se ocupó en los asuntos siguientes:

1.°

El señor Magistrado doctor Largacha propuso:

"Reconsidérese la calificación hecha respecto del Juez 2.° del Circuíto de Bogotá, doctor Bartolomé Rodríguez."

Discutida largamente esta proposición, y hecha relación de varios documentos que estaban en poder del proponente, se sometió á votación y resultó aprobada, haciendo constar su voto negativo los señores Angarita y Noguera.

En consecuencia recogidos los votos, siendo escrutadores los señores Angarita y Cock, resultaron cinco balotas blancas contra dos negras, y la Corte declaró aprobado el nombramiento hecho por el Tribunal de Cundinamarca del referido doctor Rodríguez.

2.°

El señor Magistrado doctor Cock propuso:

"Revócase la suspensión acordada por la Corte el diez y seis del corriente, sobre calificación de los nombramientos de Jueces hechos por el Tribunal de Antioquia."

Puesta en discusión, el doctor Cock hizo presente que en su larga carrera de Juez y de Magistrado del Tribunal de Antioquia, había tenido ocasión de conocer y apreciar los méritos de los individuos de quienes se trata, los cuales en su mayor parte han estado de años atrás desempeñando, á contentamiento general, los mismos destinos que ahora se les han conferido. Que su convencimiento en este asunto es tan íntimo, que está seguro de que el Tribunal de Antioquia no dirá ni más ni menos de lo que él ha expresado.

Sometida á votación fué aprobada, haciendo constar sus votos negativos los señores Magistrados Angarita y Noguera.

En consecuencia, se sometieron á votación secreta los individuos que constan en los telegramas de diez, y diez y nueve del corriente y se obtuvo el siguiente resultado:

Juez Superior del Distrito Judicial, Juan José Molina, siete balotas blancas.

Primer suplente, Liborio Echeverría V., siete id. id.

Segundo suplente, Nazario Moreno, siete id. id.

JUECES DE CIRCUÍTO.

Manizales.

Principal, Norberto J. Gómez, siete id. id.
Primer suplente, Juan de Jesús Calle, siete id. id.
Segundo suplente, José de Jesús Jaramillo L., siete id. id.

Salamina.

Principal, Adolfo Vélez, siete id. id.
Primer suplente, Félix A. Vélez, siete id. id.
Segundo suplente, Manuel A. Ospina, siete id. id.

Sonsón.

Principal, Marcelino Uribe, siete balotas blancas.
Primer suplente, Jesús M. Arango R., siete id. id.
Segundo suplente, doctor Luis María Ramos, siete id. id.

Abejorral.

Principal, Dionisio Arango, siete id. id.
Primer suplente, Heliodoro Ramos, siete id. id.
Segundo suplente, Teodiclio Restrepo, siete id. id.

Marinilla.

Principal, Carlos Moreno G., siete id. id.
Primer suplente, Jesús Hoyos Zoluaga, siete id. id.

Río-Negro.

Principal. Miguel Ramírez Zoluaga, siete id. id.
Primer suplente, Juan Nicolás Gómez, siete id. id.
Segundo suplente, Modesto Zoluaga, siete id. id.

Santo-Domingo.

Principal.—Juan B. Caro, siete id id.
Primer suplente, Enrique A. Monsalve, siete id. id.
Segundo suplente, Francisco de P. Rondón, siete id. id.

Santa-Rosa.

Principal.—José M.ª Correa H., siete id. id.
Primer suplente, Braulio Machado V., siete id. id.
Segundo suplente, Jesús M.ª Mejía, siete id. id.

Amalfi.

Principal.—Sinforiano Correa, siete id. id.
Primer suplente, Antonio Trujillo A., siete id. id.
Segundo suplente, Salvador Aguilar, siete id. id.

Yarumal.

Principal.—Ricardo Isaza E., siete id. id.
Primer suplente, José M.ª Gutiérrez, siete id. id.
Segundo suplente, Daniel Gil P., siete id. id.

Sopetrán.

Principal.—Basilio Hoyos, siete id. id.
Primer suplente, Benjamín Trespalacios, siete id. id.
Segundo suplente, José C. Lara, siete id. id.

Antioquia.

Principal.—Marco A. Cadavid, siete id. id.
Primer suplente, José Vicente Flórez, siete id. id.
Segundo suplente, José M.ª Isaza A., siete id. id.

Jericó.

Principal en lo civil,—José Valenzuela, siete id. id.
Primer suplente, doctor M.ª Meza, siete id. id.
Segundo suplente, Pastor Santamaría, siete id. id.
Principal en lo criminal, Martín J. González, siete id. id.
Primer suplente, Lorenzo Montoya, siete id. id.
Segundo suplente, Jesús M.ª Franco, siete id. id.

Medellín.

En lo civil Juzgado 1.°—Principal, Estanislao B. Zuleta, siete balotas blancas.
Primer suplente, Antonio José Isaza y C., siete id. id.
Segundo suplente, Pablo P. Melguizo, siete id. id.
Juzgado 2.°—Principal, Zacarías Cock B., siete id. id.
Primer suplente, Estanislao Gómez, siete id. id.
Segundo suplente, Francisco Upegui, siete id. id.
Juzgado 3.°—Principal, Antonio José Duque, siete id. id.
Primer suplente, Félix Molina, siete id. id.
Segundo suplente, Pastor Prieto, siete id. id.
En lo criminal, Juzgado 1.°—Principal, Doctor Alejandro García, siete id. id.
Primer suplente, Miguel A. Arango, siete id id.
Segundo suplente, Rafael Giraldo V., siete id. id.
Juzgado 2.°—Principal, Joaquín V. Bernal, siete id. id.
Primer suplente, Joaquín Emilio Yepez, siete id. id.
Segundo suplente, Francisco A. Salazar, siete id. id.
Juez 2.° superior, Lisandro Restrepo, siete id. id.
Primer suplente, Enrique Ramírez, siete id. id. ; y
Segundo suplente, Alvaro J. Hoyos, siete id. id.

3.°

Los señores Magistrados Largacha y Sanclemente hicieron la siguiente proposición:

"Procédase á la calificación individual de los Jueces nombrados por el Tribunal de Pasto."

Puesta en discusión, fué sostenida por sus autores, dando informes y explicaciones respecto de muchos de los nombrados, y haciendo hincapié en que un Tribunal tan honorable como el actual de Pasto daba garantías de que los nombramientos hechos por él en las pocas personas que no son conocidas de los autores de la proposición, debe de haber sido tan juiciosa como la de los otros, de quienes se ha informado personalmente.

Sometida á votación fué aprobada, haciendo constar su voto negativo el señor Magistrado doctor Angarita.

En consecuencia, se procedió á la calificación en los mismos términos que los precedentes, y se obtuvo el siguiente resultado:

Juzgado Superior del Distrito.

Juez principal, don Anselmo A. Figueroa, siete balotas blancas.
Primer suplente, don José Antonio Pazos, siete id. id. blancas.
Segundo suplente, Aristides España, siete id. id.
Tercer suplente, don Medardo Bucheti, siete id. id.

Circuito de Pasto.

Juez civil general, don Emilio Chavez, siete id. id.
Primer suplente, don Ezequiel Duarle, siete id. id.
Segundo suplente, don Hermógenes Delgado, siete id. id.
Tercer suplente, don Simón Zarama, siete id. id.

Circuito de Túquerres.

Juez principal, don Víctor Mariel, siete id. id.
Primer suplente, don Joaquín Peña, siete id. id.
Segundo id. don Braulio Patiño, siete id. id.
Tercero id. don Arcenio Figueroa, siete id. id.

Circuito de Obando.

Juez civil principal, don Manuel T. Pazos, siete balotas blancas.
Primer suplente, don Ulpiano Miranda, siete id. id.
Segundo id. don Segundo Sánchez, siete id. id.
Tercero id. don Bricenio Vela, siete id. id.

Circuito de Barbacoas.

Juez principal, don Enrique Muñoz, siete balotas blancas.
Primer suplente, don Daniel del Castillo, siete id. id.
Segundo id. don Florentino Lemos, siete balotas blancas.
Tercero id. don Rubén Hurtado, siete id. id.

JUZGADOS DEL CIRCUITO EN LO CRIMINAL.

Pasto.

Juez principal, doctor José María Rojas Polo, siete id. id.
Primer suplente, don Higinio Muñoz, siete id. id.
Segundo id. don Lino Guerrero, siete id. id.
Tercero id. don Daniel Ruiz, siete id. id.

Obando.

Juez principal, don Roberto Rosero, siete id. id.
Primer suplente, don Fernando Montenegro, siete id. id.
Segundo id. don Manuel Revelo H., siete id. id.
Tercero id. don Eduardo Castro, siete id. id.

4.°

El señor Magistrado doctor Angarita hizo la proposición siguiente, la que fué aprobada por unanimidad.

"Publíquense inmediatamente en la *Gaceta Judicial*, las Actas de los acuerdos en que se han considerado los nombramientos de Jueces hechos por los Tribunales Superiores de Cundinamarca, Tundama y Antioquia."

5.°

El señor doctor Morales propuso lo siguiente, que igualmente fué aprobado por unanimidad:

"La Corte resuelve no reconsiderar la calificación de los Jueces que haya aprobado ó improbado, después de firmado el Acuerdo en que tal calificación se haya hecho."

6.°

Su Señoría el Presidente dió cuenta de las siguientes notas que se le han dirigido:

La del señor José F. Barranco de 22 de Enero, en la cual participa á la Corte que ha sido nombrado Fiscal del Circuito de Ocaña y que se ha posesionado de ese destino.

La del señor don Silverio Arango P. de 1.° del corriente, en la cual participa que ha sido elegido Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, y el doctor Rafael Botero A. Vicepresidente.

La del señor M. R. Flórez, de 1.° del corriente, participando que ha sido nombrado Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Magdalena y Vicepresidente el doctor Lázaro A. Riascos; y

La del señor Timoteo Hurtado, de 4 del corriente, participando que ha sido nombrado Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santander y Vicepresidente el doctor Ignacio Gómez Durán.

Con lo cual se dió por terminada la presente diligencia, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, José M. Samper—*Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema nacional—Bogotá, veintisiete de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos.—Con una documentación absolutamente incompleta y deficiente, pretende Valentina Balbina Martínez, que se declare á su favor, por vía de traspaso, la pensión de que disfrutaba el hijo del soldado Julio Martínez, muerto este último, según lo afirma la peticionaria, en el año de 1877, al servicio del Gobierno y en la toma de Manizales.

Apóyase la solicitud de la Martínez, en que el hijo de su hermano Julio, y la viuda de éste murieron también, quedando vacante la pensión; y que ella es el pariente más cercano en representación de los finados. En suma, pretende derecho hereditario á la pensión; y además de lo inusitado é irregular de este propósito, de los documentos presentados no aparece tal parentesco, ni la concesión de la gracia á favor del hijo de Julio Martínez, y ni aun la muerte de éste, ocurrida en el hecho de armas al que ella se atribuye. No consta sino una sóla cosa por

confesión de la solicitante, á saber: que yá el que representaba al soldado muerto, recibió recompensa del Tesoro; es decir, que éste pagó su deuda.

Por lo expuesto se ve que la peticionaria no tiene derecho á lo que solicita, porque las pensiones no se heredan, por regla general, sino únicamente en los casos especiales en que las leyes que las conceden lo declaran así; y además, no ha presentado prueba alguna satisfactoria, no sólo con relación al parentesco, sino tampoco en lo tocante á su pobreza ni á lo relativo á su buena conducta.

Por tanto, la Corte Suprema Nacional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, que Valentina Balbina Martínez no tiene derecho á la pensión que reclama.

Notifíquese, cópiese y archívese el expediente.

R. Antonio Martínez.—José M. Samper.—Salomón Forero.—Froilán Largacha.—Manuel J. Angarita.—Antonio Morales.—Luis S. de Silvestre.—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del mismo día se publicó la anterior sentencia.

Bogotá, 27 de Septiembre de 1886.

Ramón Guerra A., Secretario.

En seis de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis notifiqué al señor Procurador general la sentencia que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

En ocho de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué la sentencia anterior á la señora Valentina Balbina Martínez y no se prestó á firmar.

Guerra A., Secretario.

En el expediente creado por Balbina Valentina Martínez optando derecho á una pensión del Tesoro Nacional, presentó un memorial por el cual pide se aclare la sentencia que la Corte profirió en veintisiete de Septiembre último, y este Supremo Tribunal dictó la resolución siguiente:

—

Corte Suprema Nacional.—Bogotá, veintidos de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos.—Con fecha veintisiete de Septiembre último dictó sentencia esta Suprema Corte, declarando que Balbina Valentina Martínez no tenía derecho á la pensión que reclamaba, en su carácter de hermana del finado soldado Julio Martínez, por haber éste ya recibido recompensa del Tesoro, por no ser transmisible la pensión, y por no encontrarse la solicitante en el caso de optar la gracia que pedía.

Ocurre ahora la expresada Martínez pidiendo que se aclare esa sentencia, en el sentido de que han quedado á salvo sus derechos para entablar una nueva gestión, no como transmisión de la gracia que fué otorgada á su hermano, sino por lo que á ella concierne directamente.

La sentencia no contiene oscuridad alguna, porque clara y expresamente resuelve la cuestión que había sido sometida á la decisión de la Corte; y en cuanto á la pretensión de que ésta anticipe conceptos sobre los derechos que pueda tener la peticionaria, ni eso es debido, porque no toca á los Jueces designar á los litigantes las acciones que puedan entablar, ni hay motivo en el presente caso para dar tal explicación que tendería nada menos que á prejuzgar un asunto judicial.

En cuanto á la devolución de los documentos que obraron en el juicio, y la cual se solicita, tampoco es el caso de otorgarla, según el artículo 651 del Código Judicial: 1.° porque no se trata de escrituras ó documentos propiamente dichos, sino de informaciones de testigos y del dictamen de las autoridades militares por donde la tramitación pasó; 2.° porque según el expresado artículo, la devolución, después de dictada la sentencia, no puede hacerse sino ante el Juzgado de primera instancia, cosa que no ocurre en el presente caso; y 3.° últimamente, porque el pedimento de devolución debe hacerse en forma de artículo, lo cual no se ha hecho.

Por lo expuesto, la Corte Suprema Nacional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara sin lugar la aclaratoria que se solicita. Notifíquese.

R. Antonio Martínez.—José M. Samper.—Manuel J. Angarita.—Julián R. Cock Bayer.—Antonio Morales.—Froilán Largacha—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintitrés de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis notifiqué al señor Procurador general el auto de veintidós de los corrientes.

FERNÁNDEZ.—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme.

Bogotá, veinticinco de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

COMPETENCIAS.

RESOLUCION

Corte Suprema Nacional—Bogotá, Septiembre diez y siete de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—El Juez de lo criminal en el Circuíto de Palmira del Departamento del Cauca, ha dirigido á esta Suprema Corte la nota número 166. del nueve de Julio último, consultando cuál es el Juez competente para juzgar á José Antonio Grafe, sindicado del delito de asesinato en el Circuíto del Gigante del Departamento del Tolima, y reo del mismo delito en el Distrito de la Candelaria, del Circuíto de Palmira.

Acerca de este particular la Corte considera lo siguiente:

No existiendo competencia establecida, y no habiendo llegado, por consiguiente, el caso de la atribución 4.ª, sección 3.ª, ni el de la 12.ª, sección 1.ª, artículo 18 del Código Judicial de la República, y no tratándose tampoco de asunto en que esté directamente interesada la Nación, ni estando atribuída á la Corte la facultad de resolver las consultas de los Jueces de Circuíto de los Departamentos, de la naturaleza de la presente; es claro, como lo observa el señor Procurador, que la Corte no puede dar resolución alguna en el asunto mencionado.

Por tanto, devuélvase al señor Juez del Circuito de Palmira la nota mencionada y los antecedentes creados en esta actuación, dejándose en la Secretaría copia de este auto y de la vista del señor Procurador.

Notifíquese á éste lo resuelto.

R. Antonio Martínez.—José M. Samper.—Manuel J. Anrita.—Salomón Forero.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Luis S. de Silvestre.—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y ocho de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis se notificó el auto anterior al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

La vista del señor Procurador dice:

Señores Magistrados.

Entre las atribuciones de ese Supremo Tribunal no se encuentra la de resolver consultas, en el caso que os presenta el Juez del Circuíto de Palmira en el Departamento del Cauca; ni corresponde al Ministerio público emitir concepto sobre ellas. Toca á los Jueces en cada caso aplicar la ley que corresponda, sujetos á la responsabilidad de sus procedimientos.

Por consiguiente, es de opinión el infrascrito que os abstengáis de decidir sobre el asunto, de acuerdo con lo resuelto por la Corte en casos análogos.

Bogotá, 15 de Septiembre de 1886.

CARMELO ARANGO M.

Es copia conforme. Bogotá, veintiuno de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, diez y siete de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—El Administrador de la Casa de Moneda de Bogotá, por nota de veintinueve de Diciembre de mil ochocientos ochen-

ta y cinco, número 672, dió parte al Procurador general de la Nación del hecho de haberse puesto en circulación varias piezas de moneda de plata á la ley de 0.500 milésimos, con el grabado de las monedas de 0.835, por un error del acuñador, Celestino Ardila, quien tomó en la Fielatura equivocadamente los cuños de este timbre, en vez del primero, por estar todos confundidos en poder de Eduardo Castro encargado de la construcción y limpieza de los cuños, y lo aplicó para el sello "como de dos mil piezas de plata," hasta que se apercibió del error, del que dió inmediatamente parte el Administrador; por cuya orden, y la de la Comisión de monedas, fueron refundidas aquellas monedas, quedando solamente como quinientos pesos en circulación, por haber sido impracticable recolectar esta última suma.

Instruído el sumario respectivo por la Corte, á petición del Ministerio público, aparece que este asunto no es de aquellos que están atribuídos á la Corte en una sola instancia; puesto que el Administrador de dicho Establecimiento no aparece responsable del error cometido. En consecuencia, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador general, la Corte Suprema de la Nación dispone que este sumario pase al respectivo Juez del Circuito de Bogotá, en el despacho de lo criminal, para que resuelva en primera instancia lo que estime justo respecto al mérito de la actuación.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

Martínez—Samper—Angarita—Forero—Largacha— Morales L. S. de Silvestre—Guerra A., Secretario.

En diez y siete de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme.

Bogotá, veinte de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Septiembre veinticuatro de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—Desde el 22 de Diciembre de 1872, inició el Alcalde de Santa Librada (en el Tolima) sumario para la averiguación del delito de introducción, ó de fabricación ó de circulación de moneda falsa en que alguien pudiera haber incurrido, por cuanto Pedro Pablo García resultó ser tenedor de cuatro piezas falsas, de á un peso, las cuales presentó y fueron reconocidas como falsas por peritos. Recibiéronse varias declaraciones, y yá aparecían indicios contra un tal Nepomuceno, garitero de billar, cuyo apellido ignoraban los testigos, cuando el asunto quedó abandonado por el Alcalde de aquel tiempo y sus sucesores.

En Octubre de 1884 se volvió á dar curso á este asunto, y el Juez 2.° del Circuito del Gigante dió vista al Agente Fiscal señor Leonidas Calderón, quien pidió se sobreseyese por haberse prescrito la pena en que pudieran haber incurrido los culpados, si los había; pero se echa de ver que dicho Agente fiscal no se fijó en la naturaleza del sumario, pues por citar los artículos conducentes del Código Penal de la Nación 68 y 71, citó los artículos 61 y 64 del Código Penal del Tolima que no tenían aplicación en el asunto. A su vez el Juez 2.° mencionado señor Juan N. Tovar A. pronunció auto de cesación en el procedimiento, por estar prescrita la pena, y en apoyo de su decisión citó el consabido artículo 64 del Código Penal del Tolima, y se fundó también en el artículo 1,329 del Código Judicial de dicho extinguido Estado, en vez de referirse al artículo 1,419 del Código Judicial nacional, que es el aplicable.

Consultado el auto con el Tribunal Superior del Tolima, el Procurador, señor Eustacio Buendía, hizo notar la demora de doce años causada en el sumario, y la responsabilidad de los funcionarios mismos, y pidió la confirmación por razón de prescripción, fundándose también, con el mismo indisculpable abandono del Agente fiscal del Gigante, en los artículos 61 y 64 del Código Penal del Tolima y los 1,329 y 1,474 del Judicial de idem, absolutamente inconducentes en la materia.

Considerado en seguida el sumario por el Tribunal Superior del Tolima, éste advirtió, y con razón, que tratándose de un posible delito sobre monedas, esto es, de negocio en que tenía interés directo la Hacienda nacional, no era de la competencia de aquella Corporación, sino que el auto de cesación del procedimiento debía venir con el sumario en consulta á la Corte Suprema, y así lo dispuso por auto dictado el 30 de Noviembre de 1885.

Sustanciado el asunto ante esta Superioridad, el señor Procurador general emitió concepto el 11 de Febrero del presente año, pidiendo que se revocase el auto de cesación en el procedimiento, por no ser el caso de prescripción de pena, dada la falta de comprobación del delito y del delincuente, y que se volviese el sumario al Juez de primera instancia para que dictase auto de sobreseimiento.

Nuevamente sustanciado este negocio, á virtud de la completa revocación de la Corte Suprema, ésta, para fallar, considera:

Primero. De las muy deficientes diligencias que se practicaron en 1872 no resultó la plena prueba de haberse cometido alguno de los delitos de falsificación, de introducción ó de circulación de monedas, sino únicamente que en poder de un individuo llamado Nepomuceno se habían hallado cuatro monedas falsas que pasaron á manos de otros en una rifa; y apenas hubo indicios contra dicho Nepomuceno N., por cuanto de sus manos habían salido aquellas monedas, sin que se le tomase declaración indagatoria, ni se verificasen las citas hechas por dos testigos.

Al cabo de doce años y meses de suspensión del sumario, se hizo algo para continuarlo, y nada se pudo averiguar, siendo notoria la desidia con que habían procedido el primer funcionario de instrucción (Sebastián Reaños, Alcalde que no sabía firmar) y sus sucesores.

Segundo. Es también evidente que, en caso de haberse comprobado el delito con precisión y obtenido la suficiente prueba del delincuente, la pena merecida había quedado prescrita por el trascurso de diez años, conforme á lo dispuesto en los citados artículos 68 y 71 del Código Penal, á que se refiere el artículo 1,419, también citado del Código Judicial.

Tercero. Si la Corte tiene autoridad para confirmar, revocar ó reformar el auto consultado, y la consecuencia de esto habría de ser el sobreseimiento, ya por no haber delito bien determinado ni delincuente conocido, ya por estar prescrita la pena, es inoficioso revocar dicho auto para el sólo efecto de que el Juez de primera instancia pronuncie uno nuevo de sobreseimiento.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, oído el dictamen del señor Procurador, y separándose de él en parte, resuelve sobreseer en el asunto, por no existir las pruebas necesarias sobre la naturaleza del delito y menos respecto del que pudiera haber sido delincuente, máxime cuando el caso es también de cesación de todo procedimiento, por prescripción de la pena, si alguna hubiera podido ser aplicable.

Y por cuanto esta misma prescripción es extensiva á los funcionarios públicos que hayan podido ser culpados de morosidad, no hay lugar á ningún procedimiento ulterior.

Notifíquese, cópiese y devuélvase el sumario.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Salomón Forero—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En veinticinco de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme. Bogotá, treinta de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Septiembre veinticuatro de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—A virtud de denuncia hecha el diez y ocho de Febrero de mil ochocientos ochenta y dos, por Manuel Forero Sánchez, ante el Juez 4.° del Circuito de Bogotá, contra Francisco de Paula Liévano, Inspector del Hospital militar de la misma ciudad, por delitos de estafa y faltas al cumplimiento de sus deberes en el ejercicio de sus funciones de Inspector,—denuncia que en dos ocasiones fué ratificada ante el Poder Ejecutivo nacional,—practicáronse todas las diligencias del caso, y el Juez 5.° del mismo Circuito, que hubo de conocer después en el asunto, dictó, al cabo, con fecha quince de Septiembre de mil

ochocientos ochenta y tres, auto por el cual declaró con lugar al seguimiento de causa contra Liévano, por delito de estafa (admitiendo uno de los cargos), y por delito de responsabilidad, conforme á dos cargos de esta clase.

Apelado dicho auto, y sustanciado el recurso ante esta Superioridad, la Corte lo reformó, por auto del veinticuatro de Julio de mil ochocientos ochenta y cinco, y el respectivo Juez de primera instancia, en obedecimiento á lo resuelto, suprimió el cargo por estafa, y declaró nuevamente con lugar á seguimiento de causa por los trámites extraordinarios, y únicamente por el delito de responsabilidad definido en el artículo 403 del Código Penal de la Nación. Surtiéronse todos los trámites del juicio, formándose muy voluminoso expediente con numerosísimos documentos probatorios, y habiendo llegado el caso de dar fin al proceso con la sentencia definitiva, el Juez de la causa pronunció, con fecha once de Marzo del presente año, en vez de la sentencia sobre el fondo mismo de la causa, auto por el cual dispuso que esta cesara á virtud de prescripción de la pena que hubiera podido merecer el acusado. Este auto ha sido consultado, y habiéndose surtido las formalidades legales, oído el dictamen del señor Procurador general, en todo conforme con la decisión del Juez de primera instancia, la Corte debe fallar en el asunto.

Para esto se considera:

Primero. Consta de autos que todos los actos de Francisco de P. Liévano incriminados en este proceso como casos de responsabilidad, fueron ejecutados antes del diez y ocho de Febrero de mil ochocientos ochenta y dos, fecha en que se inició el sumario, á virtud de la denuncia de Forero Sánchez; y por lo tanto, hasta la fecha del auto consultado habían trascurrido cuatro años y poco menos de un mes.

Segundo. El auto en cuestión ha sido debidamente consultado conforme al artículo 1,806 del Código Judicial.

Tercero. El juicio se ha seguido por infracción del artículo 403 del Código Penal de la Nación, que asigna al delito una multa de veinte á doscientos pesos, esto es, una pena no corporal; y el artículo 71 del mismo Código dispone que las penas distintas de las corporales se prescriben por el transcurso de cuatro años. Concurren también terminantemente á mandar que cese el procedimiento, por prescripción, los artículos 1,793 y 1,794 del Código Judicial, y la cuadragésima reforma del mismo, contenida en la ley 46 de 1876.

Por estas consideraciones, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador general, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, confirma el auto consultado.

Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Salomón Forero—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En veinticinco de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme. Bogotá, treinta de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veinticinco de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis.

El Juez del Circuíto de Buenaventura en el Departamento del Cauca, ha dictado, con fecha treinta de Abril del año en curso, auto de proceder contra Vicente Sanclemente, por el delito de circulación de monedas falsas. Fúndase el auto, principalmente, en que está probado el hecho de la circulación de monedas falsas, y en que está igualmente probado que las monedas falsas las puso en circulación Vicente Sanclemente.

Contra el auto de proceder interpuso apelación el sindicado, y para resolver se considera:

1.° La base de todo procedimiento criminal es la plena prueba del *cuerpo del delito*. Constituye el cuerpo de un delito todo hecho criminoso y punible según las leyes; y la circulación de moneda falsa no es un hecho criminoso y punible, sino cuando se hace con conocimiento, es decir, á sabiendas de que la moneda es falsa, como muy bien dice en su vista el señor Procurador. De manera que mientras no haya plena prueba del *á sabiendas*, no está comprobado el cuerpo del delito de circulación de monedas falsas, y por consiguiente, no hay lugar para proceder criminalmente contra persona alguna.

2.° En el sumario hay constancia de algunos indicios, pero estos no se refieren directamente á una misma persona; y sobretodo, no están plenamente probados como lo previene el artículo 1,623 del Código Judicial.

A mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, se revoca el mencionado auto de proceder, fecha treinta de Abril del presente año, y se sobresee en la actuación.

Notifíquese, cópiese y devuélvase.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Salomón Forero—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintisiete de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general de la Nación el anterior auto.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme. Bogotá, treinta de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Septiembre veintisiete de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—Consulta con esta Suprema Corte, el Juez del Circuíto de Purificación, Departamento del Tolima, el auto que profirió el tres de Mayo último, en la causa que por responsabilidad se seguía en aquel Juzgado contra Belisario Ospina, en su calidad de empleado público nacional, por comisión del delito de malversación de caudales públicos.

Los hechos que sirven de fundamento al auto que se consulta son los siguientes: 1.° El seis de Octubre de mil ochocientos setenta y dos, recibió Belisario Ospina, entonces Recaudador de Hacienda del Distrito de Dolores, la suma de cuatro pesos treinta y cinco centavos ($ 4-35) que en esa Recaudación había consignado Miguel Parga, como deudor al Tesoro nacional por un alcance contra él, deducido por la oficina respectiva: 2.° Habiéndose dado orden al Recaudador Ospina para que remitiera la cantidad consignada, á la Administración principal de Hacienda de Ibagué, el Recaudador no cumplió con este deber, apesar de habérsela reclamado repetidas veces: 3.° De lo sucedido se dió cuenta al Poder Judicial, y éste, por medio del Juez del Circuíto de Purificación, inició el sumario correspondiente, y en once de Marzo de mil ochocientos setenta y nueve dictó auto de proceder contra el expresado Belisario Ospina, como Recaudador de Hacienda nacional, por infracción del segundo inciso del artículo 344 del Código Penal de la Nación: 4.° Este auto no pudo notificarse al procesado, por haberse ausentado, y apesar de los edictos emplazatorios y requisitorias libradas por el Juez, el sindicado no pudo ser hallado, y el curso de la causa se suspendió hasta la fecha del auto consultado, por el cual se manda que cese el procedimiento que se inició.

Considerando que el artículo 68 del Código Penal Nacional estatuye, que por el decurso del tiempo, y en los términos que se expresarán, los que hayan cometido algún delito ó culpa quedan exentos y libres de la pena en que hayan incurrido, y que respecto al resarcimiento de daños é indemnización de perjuicios la acción queda sujeta á lo que disponga la ley civil;

Considerando que el artículo 71 del mismo Código Penal señala para la prescripción de la pena en los delitos y culpas á que se imponga pena corporal, que no sean de los exceptuados en los dos artículos anteriores, el término de diez años, contados desde el día en que se cometió el hecho punible;

Considerando que, como se ha visto, el delito por el cual se procedía se cometió hace más de diez años, de modo que la pena está prescrita legalmente;

Considerando que el artículo 1,793 del Código Judicial Nacional, que es el aplicable, como especial para los juicios de responsabilidad, dispone que "no se seguirá juicio de responsabilidad cuando esté prescrita la pena:"

Considerando, finalmente, que la prescripción en materia criminal sólo se interrumpe, según los artículos 72 y 76 del

dicho Código Penal, por la comisión de un nuevo delito, ó por la fuga de un reo rematado, cosas que no aparece hayan sucedido aquí; y que la reforma Cuadragésima tercera de la ley 46 de 1876 declara que si el procedimiento cesa por prescripción, no habrá lugar á la acción civil, lo que es aplicable en los procedimientos especiales, conforme lo previene el artículo 1,933 del citado Código Judicial.

Por lo tanto, de acuerdo, en parte, con el dictamen del señor Procurador general, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, falla: cese el procedimiento contra Belisario Ospina por el delito de malversación de caudales públicos, que se le seguía como Recaudador de Hacienda nacional en el Distrito de Dolores, por estar prescrita la pena.

Notifíquese y cópiese esta providencia, devolviéndose luégo el proceso al Juzgado respectivo.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Salomón Forero—Froilán Largacha—Antonio Morales. Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintiocho de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme. Bogotá, cinco de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

Corte Suprema de Justicia — Bogotá, Septiembre veintiocho de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—A las diez de la noche del quince de Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco, penetró en la plaza de la ciudad de Santander, del extinguido Estado del Cauca, encabezando una partida armada, perteneciente á las fuerzas revolucionarias que obraban en ese Estado, Francisco Marulanda, quien iba en persecución de un piquete de las fuerzas del Gobierno que existía en dicha plaza.

La primera operación de Marulanda al ocupar la ciudad fué dirigirse á la oficina telegráfica, acompañado de Elías Quijano Wallis y de algunas otras personas, tanto para informarse de la situación política, como para destruir el aparato, por ser un elemento con que el Gobierno podía hacer mucho daño á la revolución; todo lo cual expresa ingenuamente el mismo Marulanda en su declaración indagatoria. Con tal propósito se apoderó de la máquina telegráfica, tomó los libros y destruyó unos frascos de ácido sulfúrico, restituyendo después la máquina y los copiadores al Jefe Municipal, ofreciendo separarse del movimiento revolucionario.

No obstante esto, el Alcalde de Santander promovió sumario, en Junio de mil ochocientos ochenta y cinco, contra el expresado Marulanda, por los hechos referidos; y seguida la actuación terminó ésta con el auto de veintidós de Octubre último, en el cual el Juez nacional de primera instancia en el Circuíto de Santander, sobreseyó en el procedimiento, por cuanto Marulanda había sido indultado por el Gobernador del Estado del Cauca, en virtud de autorizaciones del Poder Ejecutivo nacional. Y habiendo venido este auto en consulta, la Corte considera, para resolver acerca de él, lo siguiente:

No queda duda alguna de que el hecho de que se trata fué un delito de naturaleza política, ni la hay tampoco acerca de la amnistía otorgada especial y expresamente á favor de Marulanda, porque esto último y las autorizaciones en virtud de las cuales procedió para ello el Gobernador del Cauca, aparecen en estas diligencias. Aun cuando así no hubiera sucedido, es decir, aun cuando Marulanda no hubiera sido indultado antes, hoy lo está por el Decreto general de Su Excelencia el Presidente de la República, de 7 de Agosto último.

No hay, pues, motivo alguno para continuar esta actuación, porque dejó de existir el hecho punible; y por tanto la Corte Suprema nacional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador general, confirma el auto de sobreseimiento consultado.

Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente al Juzgado de su procedencia.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Salomón Forero—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintinueve de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué la anterior resolución al señor Procurador general de la Nación.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme. Bogotá, seis de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintiocho de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—Consulta el Juez sexto del Circuíto de Bogotá, en su calidad de Juez nacional de primera instancia, el auto de veintidós de Agosto de mil ochocientos ochenta y cinco, por el cual declara prescrita la acción criminal en estas diligencias sumarias, instruídas para averiguar la responsabilidad en que haya podido incurrir Joaquín Díaz E. como Administrador de la Salina de Gachetá, por mala administración de las rentas públicas; y cumplida que ha sido en la Corte la tramitación legal, el señor Procurador general conceptúa que debe revocarse la providencia consultada, por no estar prescrita la acción, y que existe la prueba suficiente para que este Supremo Tribunal llame á juicio al sindicado.

Resulta efectivamente, por las numerosas declaraciones contenidas en el sumario, que los hechos que son materia de la investigación tuvieron lugar á fines de 1880, y aun posteriormente á ese año; que tales hechos consistieron en disponer, para uso propio y en compañía con varios individuos, de los efectos nacionales confiados á su administración; y constituyendo estos hechos un delito que tiene señalada pena corporal, según los artículos 344, 345 y 360 del Código Penal, es claro que la pena no está prescrita, porque no han transcurrido los diez años que el artículo 71 del Código Penal requiere para la prescripción en los delitos que tienen señalada pena corporal.

Pero como lo que se consulta en el auto del Juez de primera instancia, es solamente si está prescrita la pena, éste es el único punto, sujeto por ahora, á la decisión de la Corte; y por esto, de acuerdo en parte con el dictamen del Ministerio público, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, revoca el auto consultado: declara que no está prescrita la acción criminal, y por lo mismo el Juez nacional de primera instancia debe examinar si en los autos hay ó no prueba legal para llamar á juicio de responsabilidad al sindicado Joaquín Díaz E.

Notifíquese, cópiese y devuélvase el proceso al Juzgado respectivo que hoy es el del Circuíto de Guatavita.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Salomón Forero—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En treinta de los mismos notifiqué al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra* A., Secretario.

Es copia conforme. Bogotá, seis de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

ANUNCIOS.

LA GACETA JUDICIAL.—Se publica este periódico ordinariamente una vez por semana (los sábados), y se admiten suscripciones en el Banco Nacional así:

Por un semestre (26 números)..... $ 3 00
Por un año (52 id..... 5 00

No se venden números sueltos.

Es de cargo del Ministerio de Gobierno hacer repartir el periódico á los suscriptores en la capital, y en los Departamentos por medio de los correos; sin perjuicio de la distribución á las oficinas públicas que deben recibirlo.

No se admiten anuncios que no sean de carácter oficial, ni inserciones que no sean autorizadas por la Corte Suprema.

IMPRENTA DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 4.º

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 4 de Marzo de 1887.

CONTENIDO.

	Pág.
Personal de la Corte	25
ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.	
Acuerdos número 10, sobre cobre competencia entre dos Jueces	"
Id. id. 11, sobre monopolio del Aguardiente	26
SENTENCIAS DEFINITIVAS.	
NEGOCIOS CRIMINALES.	
Contra Miguel Izquierdo, por hurto	"
AUTOS INTERLOCUTORIOS.	
NEGOCIOS CRIMINALES.	
Ejecución contra Nicolás Rodríguez	27
Juicio de expropiación contra Miguel Agudelo	"
Juicio ejecutivo contra M. Cortissoz	28
NEGOCIOS DE RESPONSABILIDAD.	
Id. de responsabilidad contra Elías Quijano W.	"
NEGOCIOS CRIMINALES.	
Id. sobre falsificación de estampillas	29
Id. sobre hurto de id.	"
Sumario por daños en el telégrafo	30
Juicio ejecutivo contra Remigio Silva	"
Id. sobre sustracción de una encomienda	31
Id. sobre tentativa de dos delitos	32
Id. sobre circulación de moneda falsa	"
Id. sobre pérdida de un despacho	"

GACETA JUDICIAL.

PERSONAL DE LA CORTE.

El 8 de Octubre de 1886 el señor doctor don Julián R. Cock Bayer tomó posesión del puesto de Magistrado principal de esta Suprema Corte, y en consecuencia dejó de desempeñar sus funciones el señor doctor don Salomón Forero. El 25 de los mismos se posesionó el señor Magistrado principal doctor don Manuel A. Sanclemente, y dejó su puesto el señor doctor don Luis S. de Silvestre.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

ACUERDO NUMERO 10.

En la ciudad de Bogotá, á once de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, se constituyó la Corte Suprema Nacional en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, con el objeto de tomar en consideración la competencia negativa promovida por el Juez de lo criminal del Circuíto de Manizales, al de igual clase del Circuíto del Quindío, sobre conocimiento del sumario instruído para averiguar los delitos de fabricación y circulación de moneda falsa, de que resultan sindicados Juan Bautista, Samuel, Manuel A., Lino y Camilo Jaramillo y Luis Vicente y Rafael Mejía. El señor Magistrado doctor Cock, á quien tocó sustanciar este asunto, presentó el siguiente proyecto de resolución:

"Vistos: Casi dos años han trascurrido desde que el Alcalde del Distrito de Manizales comenzó la instrucción de un sumario para averiguar el delito de fabricación y circulación de moneda falsa en dicho Distrito,—y cuando parece que ha llegado el tiempo de calificar las diligencias practicadas, el Juez del Circuíto de Manizales, creyendo que el de igual denominación del Circuíto de Quindío, en el Departamento del Cauca, es el competente para conocer del asunto, provoca competencia negativa, la que, aceptada por este funcionario y sustanciado el punto, se ha elevado el expediente á la Corte, á quien, según el inciso 4.º, sección 3.ª, artículo 18 del Código Judicial, corresponde dirimir la competencia.

"Oído el señor Procurador, se considera:

"Sobre la fabricación de la moneda falsa existen algunos datos de que comenzó á ejecutarse en el punto de "La Cabrera," jurisdicción del Circuíto de Manizales, y luego continuó en "Santa-Helena" y "La Esmeralda," puntos del Distrito de San-Francisco, pertenecientes al Circuíto del Quindío; y aun existen indicios de que el aparato de acuñar fué comprado en esta ciudad de Bogotá, por dos mil quinientos pesos, y llevado por cuenta de Luis Vicente Mejía por Honda, Soledad y Manizales, y depositado en una casa situada al lado izquierdo del río "Chinchiná."

"Son más numerosas las declaraciones que hablan de la fabricación de moneda falsa en territorio del Juez del Circuíto de Quindío; pero siempre es cierto que existen una ó dos que afirman que el hecho comenzó á verificarse en jurisdicción de Manizales, y la circunstancia de que uno de los sindicados, Samuel Jaramillo, es propietario en el paraje de "La Cabaña", hace más verosímil esa afirmación.

"No se alcanzó á aprehender los instrumentos que sirvieron para la fabricación, apesar de que, según muchas declaraciones, era público y notorio que en la hacienda de "La Esmeralda," Distrito de San Francisco, se ejecutaba el hecho criminoso en proporciones escandalosas, y se sabía quiénes eran los autores. La indiferencia de las autoridades fué la causa de que se hubiera dejado de tomar la parte esencial del cuerpo del delito.

"En cuanto á la circulación de la moneda falsificada, todos los datos recogidos en la investigación, se refieren á que el delito se ejecutó en el Distrito de Manizales, por alguno de los individuos señalados como falsificadores, y en consecuencia, el Juez de Manizales es el competente para decidir del mérito del sumario relativamente á este punto.

"Respecto de la falsificación, los indicios que la instrucción suministra hasta ahora, permiten creer que el delito ha sido crónico; que se ha cometido en territorio de varios Circuítos judiciales, y entonces, de conformidad con la doctrina del artículo 1,508 del Código citado, el Juez del Circuíto de Manizales es el competente para conocer del asunto, porque fué el primero que aprehendió el conocimiento de él.

"En consecuencia, la Corte, aceptando las opiniones del señor Procurador y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que el Juez del Circuíto de Manizales debe continuar en el conocimiento de este negocio criminal.

"Notifíquese al señor Procurador, comuníquese inmediatamente á los Jueces de Circuíto de Manizales y Quindío en lo criminal, y remítase el expediente al primero de aquellos funcionarios."

Discutido el anterior proyecto fué aprobado por el voto unánime de los señores Magistrados, quienes dieron por concluído el presente acuerdo, que firman con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. Antonio Martínez—El Vicepresidente, José M. Samper—*Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NÚMERO 11.

En la ciudad de Bogotá, á veintinueve de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, se constituyó la Corte Suprema Nacional en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, con el objeto de tomar en consideración una solicitud de varios vecinos del Distrito de Ibagué, para que la Corte suspendiera la ejecución de los decretos números 329 y 388, dictados por el Gobernador del Departamento del Tolima, con fechas 12 de Abril y 12 de Julio últimos, respectivamente, por los cuales se establece y reglamenta el monopolio de aguardiente de caña y sus compuestos. El señor Magistrado doctor Martínez, á quien tocó sustanciar este asunto, presentó el siguiente proyecto de resolución, que fué aprobado por el voto unánime de los señores Magistrados:

"Vistos: Varios vecinos de la ciudad de Ibagué, por medio de un memorial fechado en 1.° de Septiembre último, ocurren á la Corte pidiendo la suspensión de los decretos números 329 y 388, dictados por Su Señoría el Gobernador del Departamento del Tolima, en 12 de Abril y 12 de Julio del corriente año, por los cuales, según se deduce de la petición,—pues que ésta ha venido destituída de todo documento y de todo comprobante,—se establece y reglamenta el monopolio del aguardiente de caña y sus compuestos, y se prohibe toda transacción sobre compra, cambio ó traspaso del anís, como materia prima para la confección del aguardiente.

"Dada vista al señor Procurador del pedimento referido, se ha limitado á indicar que, por medio de un despacho, se pida al Secretario de Gobierno del Departamento del Tolima copia auténtica de los mencionados decretos; pero la Corte considera que no está en el caso, ni al presente tiene objeto, para fundar alguna resolución ó procedimiento, pedir esa copia, según lo que pasa á expresarse.

"La Corte no tiene actualmente, por la Constitución ni por las leyes, facultad para suspender los decretos expedidos por las autoridades administrativas de los Departamentos; apenas podría decidir, de conformidad con las leyes, sobre la validez ó nulidad de las ordenanzas departamentales, que hubieran sido suspendidas por el Gobierno ó denunciadas ante los Tribunales, como lesivas de los derechos civiles; y yá se comprende que ni en el asunto de que se trata ha precedido ordenanza departamental que haya sido suspendida por el Gobierno, ó que haya sido denunciada ante los Tribunales, puesto que las ordenanzas no se expiden sino por las Asambleas (artículos 183 y 185 de la Constitución); ni se han dictado todavía las leyes que reglamenten el modo de hacer esas denuncias y de verificar esa suspensión.

"El aspecto que ofrece, á primera vista, la queja de los vecinos de Ibagué, parece ser el de una cuestión contencioso-administrativa, de las atribuídas al Consejo de Estado por la Constitución; pero tampoco se han expedido las leyes que reglamenten este recurso, ni á la Corte le corresponde ingerirse en él.

"No se trata de cuestión contenciosa de que la Corte hubiera de conocer, ni se promueve juicio de responsabilidad,—si ésta pudiera existir por hechos verificados y por providencias dictadas en el interregno legal y antes de la Constitución; ni se está en el caso de saber si pudiera ó nó procederse de oficio, según la naturaleza del hecho, del tiempo en que tuvo lugar y de las circunstancias que lo acompañaran.

"Así, por atentatorio que parezca, ó que pueda ser, á lo menos en parte, el procedimiento del Gobernador del Departamento del Tolima, cuando funcionaba como Jefe Civil y Militar, el hecho es que, en la forma en que la querella ha venido, nada tiene que hacer la Corte. Y si acaso el señor Procurador encuentra algún motivo para instaurar queja, denuncia ó demanda, él puede pedir los antecedentes que necesite, una vez que esos antecedentes no existen en la Secretaría de este Tribunal.

"Por lo expuesto, la Corte Suprema Nacional se abstiene de dictar providencia directa alguna en este asunto; pero como sol solicitantes piden que en definitiva se pase su pedimento al Consejo Legislativo,—envíese á este Honorable Cuerpo copia del memorial mencionado al principio y de esta resolución.

"Notifíquese y publíquese en el *Diario Oficial*."

Con lo cual se dió por concluído el presente acuerdo, que firman todos los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. Antonio Martínez—El Vicepresidente, José M. Samper—*Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Octubre cuatro de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—Previa la instrucción del respectivo sumario, el Juez nacional del Circuito de Zipaquirá dictó auto, á cinco de Mayo del presente año, declarando con lugar á seguimiento de causa, por el delito de hurto, contra Miguel Izquierdo, reo de sustracción de una arroba de sal, de la fábrica de Zipaquirá. Seguido el juicio por sus trámites legales, el Juez pronunció sentencia el treinta y uno del mismo mes de Mayo, calificando el delito en segundo grado, y condenando al reo á sufrir la pena (con la agravación de la sexta parte) de cincuenta y dos días y doce horas de reclusión ó presidio, con más las detalladas en los artículos 29 y 62 del Código Penal, y debiendo deducirse de la reclusión el tiempo durante el cual ha estado preso el reo. Consultada esta sentencia ante esta Superioridad, se considera:

Primero. Están plenamente comprobados el hecho de la sustracción de la sal, que fué entregada en la Salina por la compradora, el valor del objeto robado (tres pesos), su pertenencia anterior al Gobierno nacional, y el carácter de peón ú obrero de la Salina, que tenía Miguel Izquierdo cuando cometió el hurto.

Segundo. El reo confesó en varias ocasiones su delito libremente y con ingenuidad, cuando, sin su confesión, hubiera sido muy difícil obtener la prueba del delito y del delincuente; y comprobó su buena conducta anterior y posterior al hecho, su condición de jornalero pobre, y que con su trabajo sostenía á su padre y dos hermanas, pero no su indigencia.

Tercero. El artículo 584 del Código Penal señala como motivo para rebajar la pena en la mitad, la circunstancia de ser el reo indigente y no poder obtener con su trabajo los medios de alimentarse ó alimentar á su familia, y "siempre que no haya hurtado por un valor mayor de cuatro pesos;" de manera que las dos condiciones son inseparables: la indigencia é incapacidad de trabajar del delincuente, y la cuantía del valor de lo hurtado, no excedente de cuatro pesos. Y el reo, lejos de comprobar su indigencia y su incapacidad para trabajar, era jornalero en la Salina de Zipaquirá, y allí se ganaba, aunque pobremente, los medios de subsistencia. No es, pues el caso de rebajar la mitad de la pena, según el citado artículo 584.

Cuarto. En la sentencia consultada se ha hecho un cálculo erróneo del tiempo de reclusión ó presidio que corresponde al segundo grado, puesto que tres meses, esto es, noventa días, no son la mitad de la pena de uno á seis meses (treinta á ciento ochenta días) que el artículo 578 del citado Código asigna al delito de hurto, cuando el importe de lo hurtado no pasa de cinco pesos. La verdadera cuenta es la siguiente:

Mínimo posible de la pena, treinta días (un mes).

Máximo, ciento ochento días, ó seis meses.

Mitad entre la suma de treinta, y ciento ochenta días, que son los extremos de la pena, quedan ciento cinco días, según lo dispone el artículo 105 del mismo Código.

Sobre estos ciento cinco días corresponde á Miguel Izquierdo una sexta parte, ó sean diez y siete días y doce horas, agravación impuesta por el artículo 364 del citado Código, puesto que la cosa hurtada pertenecía al Gobierno nacional. Total ciento veintidós días y doce horas.

Por lo expuesto, y de acuerdo en lo sustancial con el dictamen del señor Procurador general, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, condena á Miguel Izquierdo, como responsable del delito de hurto en segundo grado, á sufrir las penas siguientes:

1.ª Reclusión ó presidio por el término de ciento veintidós días y doce horas.

2.ª Privación de todo cargo ó empleo nacional, y de toda pensión pagadera del Tesoro público, y lo demás preceptuado en el artículo 29 del Código Penal.

No se hace condenación en costas por ser pobre el reo.

Y por cuanto de autos resulta que el reo fué reducido á prisión el seis de Abril del presente año, y es patente que la pena está cumplida desde el cinco de Agosto, puesto que el tiempo de la prisión debe ser deducido del de la pena, póngase al reo en libertad. Queda así reformada la sentencia de primera instancia.

Notifíquese, cópiese y devuélvanse los autos.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Salomón Forero—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia de este día se publicó la anterior sentencia. Bogotá, cuatro de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Ramón Guerra A., Secretario.

En seis de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la sentencia anterior.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme. Bogotá, ocho de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Ramón Guerra A., Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá Septiembre veintiocho de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—Por auto de veinte de Abril de mil ochocientos ochenta y tres, y en virtud de su jurisdicción coactiva, el Administrador principal de Hacienda nacional de Bucaramanga trabó ejecución contra Nicolás Rodríguez por la suma de doscientos veinticinco pesos ($ 225), que éste resultaba á deber por derechos de internación de sales. A su tiempo el ejecutado opuso excepciones, y el Juez ejecutor pasó el asunto al Juez civil superior respectivo, para que fallase sobre dichas excepciones, conforme al artículo 1,008 del Código Judicial. Sustanciado el asunto, el Juzgado civil pronunció auto, á diez y ocho de Septiembre del mismo año, por el cual declaró no probadas las excepciones de falsedad y error de cuenta propuestas y admitidas á prueba, y el ejecutado apeló de la decisión para ante esta Superioridad. Han trascurrido tres años sin que el apelante apoye su recurso, y al cabo el señor Procurador general, en pedimento del dos de Agosto último, ha solicitado que se declare desierto el recurso, por cuanto el apelante no ha suministrado las estampillas necesarias para la actuación y demás diligencias. El Magistrado sustanciador ha llenado las formalidades prevenidas en el artículo 423 del Código Judicial, por auto del veinticuatro de los corrientes, el cual está cumplido, y el Secretario de la Corte informa que después de fijado el edicto de notificación, el apelante no ha consignado, dentro de las veinticuatro horas siguientes, las estampillas necesarias.

Por tanto, la Corte Suprema, en conformidad á lo pedido por el señor Procurador general y á lo dispuesto en los artículos 423 y 424 del citado Código Judicial, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara desierto el recurso de apelación de que se ha hecho mérito, entablado por Nicolás Rodríguez, y ejecutoriado, por lo mismo, el auto apelado. Condénase al apelante al pago de las costas causadas en la segunda instancia.

Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez.—José M. Samper.—Manuel J. Angarita.—Salomón Forero.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Luis S. de Silvestre.—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintinueve de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis notifiqué al señor Procurador general la resolución que antecede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme. Bogotá, seis de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Septiembre veintinueve de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—Ante la Jefatura Municipal de Salamina, en el extinguido Estado de Antioquia, fué rematado un solar de propiedad del Presbítero Marco Antonio Medina, para el pago de una contribución de guerra, asignada al propietario en el año de mil ochocientos setenta y siete.

De acuerdo con la ley 38 de 1882 "que manda devolver ciertas propiedades," y con el Decreto ejecutivo de veintiséis de Octubre de mil ochocientos ochenta y dos, en ejecución de dicha ley, se procedió á exigir del rematador de la finca la entrega de ésta. El rematador, que lo fué Zoilo Macías, manifestó que él había hecho el remate por recomendación de Miguel Agudelo; y notificado éste, aseguró que no había adquirido la finca por remate sino por compra hecha á Zoilo Macías, según la escritura pública que le había sido otorgada y que al efecto presentó; agregando que no se prestaba á entregar la finca en referencia.

Esta negativa de Agudelo dió por resultado el que el Secretario de Hacienda del extinguido Estado de Antioquia pasara los documentos creados al Agente fiscal del Circuito de Salamina, para que procediera á iniciar el juicio respectivo de expropiación, de acuerdo con el artículo 8.° de la ley primeramente citada; y al efecto, dicho funcionario presentó su demanda de expropiación, con fecha nueve de Octubre de mil ochocientos ochenta y tres.

Esta demanda fué desechada por el Juzgado del Circuito de Salamina, en auto del mismo día nueve de Octubre, fundándose en la siguiente consideración: que el artículo 2.° de la ley 38 de 1882 faculta al Poder Ejecutivo para entrar en arreglos con los poseedores de las fincas rematadas con motivo de las exacciones de guerra en el año de mil ochocientos setenta y siete: que el artículo 8.° de la misma ley dispone que si no fuere posible al Poder Ejecutivo concluír equitativamente los arreglos referidos, hará promover los correspondientes juicios de expropiación; y que, por consiguiente, la promoción del juicio de expropiación no podía llevarse á cabo sino previa comprobación del hecho de no haberse podido llevar á equitativa conclusión los arreglos que ha debido iniciar el Poder Ejecutivo. Apelada dicha resolución por el Agente fiscal, ha sido sometido el punto al estudio de la Corte.

El artículo 8.° de la ley 38 de 1882, dispone que si no fuere posible al Poder Ejecutivo concluír equitativamente los arreglos con los poseedores de las fincas, hará promover los respectivos juicios de expropiación.

El artículo 8.° del Decreto número 607 dictado por el Poder Ejecutivo, en desarrollo de la ley expresada, dispone que las contestaciones de los rematadores de fincas, ó de los terceros poseedores que se denieguen á la devolución de las fincas, se pasarán por los Gobernadores ó Presidentes de los Estados á los respectivos Agentes del Ministerio público, para que entablen los juicios de expropiación.

En el caso que se examina, el poseedor de la finca rematada, señor Miguel Agudelo, se denegó categóricamente á la devolución de dicha finca, según aparece á fojas 5 y 11 del expediente.

Esta negativa hacía imposible el arreglo con el rematador; de consiguiente era el caso, según las disposiciones citadas, de iniciar el juicio correspondiente de expropiación, como en efecto se hizo por el Agente fiscal del Circuito de Salamina, y el Juez ha debido admitir la demanda propuesta.

Además, como lo observa el señor Procurador, no se puede rechazar de hecho una demanda por suponerse que no hay derecho para entablarla; pues toca al demandado probar la injusticia de la demanda y oponer las excepciones que crea le favorezcan. Solamente cuando la demanda no esté formulada con olo

determina el Código procedimental, y en algunos juicios especiales, puede el Juez desechar la demanda que se entable.

Por tanto, la Corte Suprema Nacional, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el auto apelado, y dispone que el Juez de primera instancia admita y dé curso á la demanda de expropiación propuesta por el Agente fiscal del Circuíto de Salamina.

Notifíquese, cópiese y devuélvanse los autos al Juzgado de su procedencia.

R. Antonio Martínez.—José M. Samper.—Manuel J. Angarita.—Salomón Forero.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Luis S. de Silvestre.—Ramón Guerra A., Secretario.

En treinta de los mismos lo notifiqué al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, seis de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—En el juicio ejecutivo que el señor Administrador de Hacienda nacional en Bucaramanga, como Juez ejecutor sigue, por jurisdicción coactiva, contra los señores M. Cortíssoz y Compañía, por una suma de pesos liquidada y reconocida á cargo de dichos señores, por el derecho de consumo de veinte centavos por cada doce y medio kilogramos de sal introducida al Estado de Santander, durante el tiempo que se cobró el impuesto decretado por la ley 46 de 1882, y sobre seiscientas cuarenta y cuatro cargas, los ejecutados propusieron las excepciones perentorias de "falsedad y error de cuenta." Surtido el juicio respectivo, el Juez superior del Circuíto de Bucaramanga, á quien tocó la decisión de éste negocio, declaró probadas dichas excepciones y mandó cesar la ejecución y desembargar los bienes depositados para el pago de la deuda.

Por apelación interpuesta contra esta sentencia por el referido señor Administrador de Hacienda, vino el asunto al conocimiento de esta Corte Suprema, quien la reformó por la de diez y siete de Septiembre de mil ochocientos ochenta y cuatro, declarando probada la excepción de "error de cuenta," en cuanto exceda al monto de la liquidación á cargo de M. Cortissoz y Compañía de la base de cien kilogramos por carga de sal, y no probada la excepción de "falsedad." Pidió el apoderado de los ejecutados se aclarase esta sentencia, confirmando la de primera instancia en todo lo que no se refiera á la excepción de falsedad. La Corte, con fecha veintinueve del citado Septiembre hizo la aclaración pedida en estos términos: "El cargo contra M. Cortissoz y Compañía queda vigente por virtud de la sentencia, por la suma, á que ascienden los derechos del Fisco, sobre la base de seiscientas cuarenta y cuatro cargas del peso de cien kilogramos cada una, y á razón de veinte centavos por cada doce y medio kilogramos. En lo que exceda la liquidación del valor que arrojen estas bases, *es únicamente* en lo que *queda terminada la traba de ejecución.*"

Terminado de este modo el juicio sobre las excepciones propuestas por los ejecutados, volvió el negocio al Juez ejecutor, quien, en cumplimiento de lo resuelto en la sentencia de segunda instancia, dictó el auto de nueve de Enero último en que ordenó lo siguiente: en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 820 del Código Judicial, llévese adelante la ejecución, por lo que ascienden los derechos causados á deber por la internación de seiscientas cuarenta y cuatro cargas de sal marina del peso de cien kilogramos cada una, y á razón de veinte centavos por cada doce y medio kilogramos, ó sea por la suma de mil treinta pesos cuarenta centavos, más los intereses correspondiente á la rata del doce por ciento anual (artículo 1,385 del Código Fiscal), á contar desde el primero de Abril de mil ochocientos ochenta y tres, y los costos y costas como está estipulado en el auto ejecutivo....." Contra este auto no se interpuso ningún recurso, y, en consecuencia quedó ejecutoriado. Posteriormente el mismo Juez ejecutor profirió el de diez y nueve del mismo mes que dijo lo siguiente: "En atención á lo dispuesto en el artículo 972 del Código Judicial, señálanse las doce del día diez de Febrero próximo venidero para verificar el remate de sesenta cargas de brandy Boiteau, embargadas en el presente juicio, procediéndose de acuerdo con lo ordenado en dicho artículo 972. Dense los avisos al público por medio de carteles y notifíquese." El apoderado de la parte ejecutada pidió revocación de este auto y subsidiariamente interpuso contra él el recurso de apelación para ante el Superior. El Juez negó la revocación pedida, pero concedió la apelación interpuesta, y á virtud de esto ha venido el negocio al conocimiento de esta Superioridad. Para decidir el recurso la Corte considera:

1.° Que habiendo decidido esta Superioridad en su sentencia aclaratoria de diez y siete de Septiembre de mil ochocientos ochenta y cuatro, arriba mencionada, que el cargo contra M. Cortissoz y Compañía deducido en el presente juicio ejecutivo queda vigente por virtud de dicha sentencia, por la suma á que ascienden los derechos del Fisco, sobre la base de seiscientas cuarenta y cuatro cargas de sal del peso de cien kilogramos cada una, y que en lo que exceda la liquidación y la ejecución del valor que arrojen estas bases, es *únicamente en lo que queda* terminada la traba de ejecución, claramente quedó fallado allí el punto á que se contraen los razonamientos aducidos por la parte apelante en apoyo de su apelación, y por lo tanto no es dable hacer cesar la ejecución por el total de la deuda.

2.° Que en consecuencia de este fallo, el Juez ejecutor dictó el auto de nueve de Enero último, que fué consentido por los ejecutados y está ejecutoriado, en el cual ordenó llevar adelante la ejecución sobre las bases fijadas por la Corte, y sólo por la cantidad líquida que resulta conforme al cómputo hecho sobre esas bases, ó sea por la suma redonda de mil treinta pesos cuarenta centavos ($ 1,030-40 cs.) y sus intereses;

3.° Que este auto, acerca del cual no se hizo ningún reclamo, tiene que cumplirse no sólo por estar ejecutoriado, sino porque está arreglado á la ley, pues la Corte no mandó en la sentencia citada cesar la ejecución por el total de la deuda, sino únicamente en lo que excediese la liquidación sobre las bases por ella fijadas; y

4.° Que el auto de diez y nueve de Enero último, que es el apelado, es consecuencia y desarrollo del anterior, pues no hace sino darle cumplimiento, en cuanto á que él mandó llevar adelante la ejecución, señalando día para el remate de los bienes embargados para el pago de la deuda.

Por estos fundamentos, la Corte aceptando el parecer del señor Procurador y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto apelado.

Notifíquese el presente, cópiese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Salomón Forero—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En nueve de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la resolución que precede.

ARANGO M—*Guerra A.*, Secretario.

En nueve de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al auto anterior al señor doctor Francisco Caicedo Muñoz.

CAICEDO MUÑOZ—*Guerra* A., Secretario.

Es copia conforme. Bogotá, quince de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

El Secretario, *Ramón Guerra* A.

NEGOCIOS DE RESPONSABILIDAD.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Septiembre treinta de mil ochocientos ochenta y seis.

Con fecha cinco de Febrero del año en curso, pronunció el Juez del Circuíto de Buga, Departamento del Cauca, auto de sobreseimiento en las diligencias practicadas para averiguar la responsabilidad en que hubiera podido incurrir Elías Quijano W. como Visitador de Instrucción pública, por haber usurpado jurisdicción ó autoridad.

El acto ejecutado por el expresado Visitador, y que se ha estimado que constituye usurpación de jurisdicción ó autoridad fué el siguiente:

Habiendo suspendido el Gobierno del Estado del Cauca á Ernesto Riascos del ejercicio de las funciones de Director de la Escuela elemental del Distrito del Cerrito, según afirma el

mismo Quijano, este dirigió al Inspector local la siguiente comunicación:

Señor Inspector local.—Presente.

Este Despacho tiene conocimiento de que el señor Ernesto Riascos ha sido suspendido de sus funciones de Director de la Escuela elemental de este lugar, sin haberse dado debido cumplimiento á lo dispuesto en el artículo 131, capítulo 13 del Código de I. P.

En esta virtud y para hacer efectiva la suspensión de dicho Director, debe usted proceder inmediatamente á instruír el sumario comprobatorio de la mala conducta del señor Riascos, sin el cual requisito será nugatorio el nombramiento de quien debe reemplazarle.

Soy de usted atento y seguro servidor.

Elías Quijano W.

Tan luégo como el Poder Ejecutivo del mencionado Estado tuvo conocimiento de la comunicación preinserta, excitó al Alcalde de aquel Distrito para que instruyera sumario por usurpación de facultades contra Elías Quijano W., y es con relación al sumario que se instruyó á virtud de tal requerimiento, que el Juez del Circuíto de Buga ha pronunciado el mencionado auto de sobreseimiento.

El señor Procurador en su vista dice:

Mas, como tal indicación (la hecha por el Visitador en la comunicación que dirigió al Inspector local) sobre no tener el carácter imperativo de una orden ó mandato, no produjo, según aparece del sumario, efecto alguno, cree el infrascrito que no existe hecho consumado y manifiesto del cual se origine responsabilidad legal contra el sindicado; y por tanto, estima que la Corte debe confirmar el auto consultado.

A lo expuesto se agrega que el hecho de manifestar el expresado Visitador, al Inspector local, que debía proceder á instruír el sumario que acreditara la mala conducta de Riascos, para que no fuera nugatorio el nombramiento de quien debía reemplazarlo, no constituye, en concepto de la Corte, usurpación de jurisdicción ó autoridad, que es el delito de que se ha creído responsable á Elías Quijano W.

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, confirma el mencionado auto de sobreseimiento de fecha cinco de Febrero próximo pasado, dictado por el Juez del Circuíto de Buga, en el sumario instruído contra Elías Quijano W. como Visitador de Instrucción pública.

Notifíquese, cópiese y devuélvase.

R. Antonio Martínez.—José M. Samper.—Manuel J. Angarita.—Salomón Forero.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Luis S. de Silvestre.—Ramón Guerra A., Secretario.

En primero de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general de la Nación.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme.

Guerra A., Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, primero de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—El diez y siete de Octubre de mil ochocientos ochenta y tres, el Expendedor de estampillas de la ciudad de Barranquilla manifestó en nota oficial, al Gobernador de la Provincia, que había disminuído mucho la venta de estampillas en su oficina, y que, comparando las que él vendía con otras empleadas por particulares y de distinta procedencia, hallaba que diferían las unas de las otras en cuanto á la posición del monograma estampado en el centro con un sello adicional al grabado litográfico, de lo cual deducía la posibilidad de alguna falsificación.

Con motivo de aquella denuncia oficial, que fué ratificada bajo juramento, se formó el sumario respectivo; y tan minuciosamente se procedió, que á más de tomarse numerosas declaraciones en Barranquilla, y de hacerse allí una confrontación pericial entre estampillas de diversas procedencias, se libraron exhortos para practicar otras diligencias en Puerto Nacional, el Socorro y Santa-Marta, con ocasión de varias citas hechas en el curso de la averiguación; citas que fueron todas rigurosa y minuciosamente evacuadas.

De todas las diligencias que se practicaron resultó la plena comprobación de tres hechos á saber: 1.° Que en el mercado de Barranquilla colocaban estampillas varios individuos sin ser expendedores legales de este objeto fiscal, por cuanto en oficinas de Hacienda de los Estados (ahora Departamentos), de Bolívar, Santander y el Magdalena, se hacían pagos de sueldos á los empleados nacionales, con estampillas, á falta de dinero, y estos empleados tenían que buscar colocación en el comercio al artículo que recibían en pago; á lo que se agregaba la afluencia á Barranquilla de estampillas de timbre nacional por medio de la correspondencia para el pago de suscripciones á periódicos, y otras sumas muy pequeñas. 2.° Que las estampillas llevaban dos marcas distintas: el escudo de armas y otros dibujos, obra de litografía enteramente igual en todas, y un monograma (que significaba Estados Unidos de Colombia) estampado á la mano con un sello y tinta negra; y que, como era muy difícil duplicar siempre el golpe del sello de igual modo, quedaban inevitables diferencias en la posición de dicho monograma, sin que por esto hubiese defecto alguno de legitimidad en las estampillas. 3.° Que no existía, en consecuencia, prueba alguna, de que se hubiese cometido el delito de falsificación, ni de que mereciese el cargo de falsificador ningún individuo.

Conforme á lo superabundantemente probado en el sumario, el Juez 2.° de la provincia de Barranquilla, de acuerdo con la opinión del Agente del Ministerio público, dictó el veintidós de Julio del presente año auto de sobreseimiento, el cual ha sido consultado con esta Superioridad.

Para resolver, la Corte considera: que no existe prueba alguna de la comisión del delito de falsificación de estampillas; que todo lo comprobado es, por una parte, la pequeña diferencia apenas perceptible en la posición del monograma estampado con sello, en algunas estampillas, irregularidad insignificante que por su naturaleza es casi inevitable; y que si está comprobado que individuos particulares vendieron estampillas en cantidades más ó menos considerables, esta irregularidad procedía de pagos indebidamente hechos por algunas oficinas de Hacienda, de sueldos devengados por varios empleados públicos.

Por lo expuesto, y de acuerdo con la opinión del señor Procurador general, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto de sobreseimiento consultado.

Notifíquese, cópiese y devuélvase.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Salomón Forero—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En dos de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general de la Nación la decisión que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme.

Ramón Guerra A., Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Octubre dos de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—Daniel Roncancio, joven de edad de trece á catorce años, y ex-telegrafista de la Aldea de Santo-Domingo, en el extinguido Estado del Tolima, fué detenido en la cárcel pública del Distrito de Manizales, el día quince de Abril de mil ochocientos ochenta y cinco, de orden del Prefecto del Departamento del Sur, en el antiguo Estado de Antioquia, por el hecho de haber ofrecido en venta en aquella plaza, en el almacén de los señores Cortés y Salazar, estampillas de telégrafos nacionales, y haberse sospechado que las había sustraído de alguna oficina pública.

Hechas las averiguaciones del caso para esclarecer la verdad en el asunto, el Juez del conocimiento, que lo es el del Circuíto de Manizales, estimó que el citado Roncancio no ha cometido ningún delito, y dictó el auto de siete de Junio último, por el cual sobresee en este negocio y declara sin lugar á seguimiento

de causa. Este auto ha venido á esta Superioridad en consulta, y para resolverlo se considera:

De las diligencias practicadas en este sumario, y especialmente de los informes emitidos por el señor Administrador general de Hacienda nacional de Ibagué (fojas 18 y 25), resulta, que como la venta de estamplillas de telégrafos nacionales es libre, Roncancio tuvo facultad para tomar las que aparecieron en su poder, una vez que hizo figurar su valor como cargo en sus cuentas, hecho que está probado en el sumario; y que por consiguiente, no cometió delito por haberlas tomado y haberlas ofrecido en venta. Debe tenerse en cuenta, además, que aunque Roncancio tomó efectivamente algunas estampillas en pago de sueldos devengados, no se cubrió con ellos del total de lo que se le debe; porque, según los informes arriba citados del Administrador de Hacienda de Ibagué, existe á su favor un saldo de más de cincuenta pesos.—Como no se comprobó cargo ninguno contra el expresado Roncancio, legal es la providencia que ha declarado sin lugar á formación de causa criminal contra él. Y por ello, la Corte aceptando el parecer del señor Procurador, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto consultado.

Notifíquese el presente, cópiese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez.—José M. Samper.—Manuel J. Angarita.—Salomón Forero.—Froilán Laryucha.—Antonio Morales.—Luis S. de Silvestre.—Ramón Guerra A., Secretario.

En cuatro de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general de la Nación la decisión que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme.

Guerra A. Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Octubre cinco mil de ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—El día trece de Febrero de mil ochocientos ochenta y tres, sufrió una interrupción la línea telegráfica en los puntos denominados Balacá y San-Juan, en jurisdicción de los Distritos Coyaima y Natagaima, pertenecientes al Juzgado del Circuito de Purificación, en el antiguo Estado del Tolima, hoy Departamento del mismo nombre. Tal interrupción provino de haber sido roto el alambre en los dos puntos indicados y de habérselo hurtado en doscientas ó más varas, arrancándolo de las partes respectivas.

Instruído el presente sumario en averiguación de los hechos referidos y de sus responsables, el Juez del expresado Circuito de Purificación, después de practicar todas las diligencias conducentes al efecto, dictó, con fecha tres de Agosto último, auto de sobreseimiento, el cual ha enviado en consulta á esta Superioridad. Dada al asunto la tramitación que previene la ley, se procede á resolver la consulta mediante las siguientes consideraciones:

Probados están los hechos que dieron origen á esta instrucción sumaria y que arriba se han mencionado, pero no ha logrado obtenerse ni el más ligero indicio acerca de sus responsables. Y como no hay más diligencias que practicar ni citas que evacuar, es forzoso dar cumplimiento á lo que dispone el artículo 1,543 del Código Judicial. Como el auto en referencia se ha dictado en observancia de esta disposición, es claro que está arreglado á la ley.

Y por ello, la Corte aceptando el parecer del señor Procurador y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto consultado.

Notifíquese el presente, y cópiese en el libro respectivo y devuélvase el expediente al Juzgado de su origen.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Salomón Forero—Froilán Laryucha—Antonio Morales.—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En seis de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general el auto que antecede.

ARANGO M.—*Guerra A.* Secretario.

Es copia conforme.

Ramón Guerra A., Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Octubre cinco de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—El Juez superior del Circuito de Guanentá llamó á juicio criminal á Remigio Silva, por auto de catorce de Julio del presente año, como responsable del delito de circulación de moneda falsa. Notificado el defensor del procesado de esta providencia, interpuso apelación para ante la Corte, cuyo recurso le fué concedido en el efecto devolutivo. Surtidos los trámites de la segunda instancia, se ha puesto el expediente al despacho para la resolución respectiva el primero del mes en curso.

La averiguación de los hechos empezó en San Gil el ocho de Mayo del presente año, por virtud de denuncia dada al Juez superior por Joaquín Zárate, sobre que estaban circulando en el lugar monedas falsas, fabricadas allí, según se lo había referido Alejandro Rodríguez. Llamado este individuo á declarar, expuso que el martes Santo (veinte de Abril de mil ochocientos ochenta y seis), como á las tres de la tarde, hallándose en la casa de Pedro Medina, en el barrio de "El Vergel," observó que en la casa de habitación de Cornelio Pereira estaban dando lustre á unas piezas de níkel de dos y medio centavos, entre este individuo y Remigio Silva; que apercibido Pereira de que habían sido observados, llamó la atención á Silva; que ambos se asustaron mucho y procuraron disimular su acción, diciendo al declarante que lo que estaban haciendo era limpiando unos zarcillos de oro; pero yá el declarante se había apercibido perfectamente de que lo que estaban lustrando era una moneda de níkel. Que con disimulo volvió poco después á atisbarlo, y notó claramente que Silva estaba en la misma obra de lustrar sus monedas. Que por la noche se dirigió al billar de Juan Bautista González, y allí Antonio Gómez le mostró una peseta falsa que le había dado en pago Remigio Silva. Agregó Rodríguez que había visto en la casa de Cornelio Pereira una pieza blanca que talvez sería de yeso, y un montón de polvo blanco; que pusieron al sol esa pieza, y luégo la tomó Pereira para llevarla á la forja de la platería que tenía en la casa. Verificado el allanamiento de la casa de Pereira, no se halló elemento alguno ni rastro de fabricación de monedas.

Javier Galvis, José Antonio Gómez Galvis, Luis Martínez, León y Rafael Vezga (fojas 3, 7 y 8) aseguran haber visto que Remigio Silva intentó poner en circulación monedas falsas en el Estanco de aguardiente, en el billar de Pablo Antonio Gómez y en la tienda de Silveria León A. fojas 6 aparece la declaración indagatoria recibida á Silva, y en ella confiesa este sindicado que, en efecto, él había dado monedas falsas en pago de licor en el Estanco de aguardiente, que á Javier Galvis le había dado en pago cuatro monedas de níkel falsas, y cuando Galvis las examinaba, sacó del bolsillo un puñado de monedas del mismo metal, legítimas, y envió con ellas las falsas que le rechazaba Galvis, excusándose con que á él se las habían dado otros. En la mencionada diligencia, Remigio Silva hizo esta confesión perentoria: "Rafael Vezga me había dicho que dos níkeles eran falsos, y entonces yo dije: pues voy á salir de ellos; y nos fuimos para el Estanco á comprar los tragos y á pagar con ellos, y hasta intenté dejarle los níkeles en pago de los tragos y salirme, porque Javier no los quería recibir, y yo sí los había recibido, y yo fuí con intención de hacerlos pasar en el Estanco, advertido de que eran falsos."

Con estos antecedentes el Juez profirió el auto que examina la Corte, á virtud del cual declaró que había mérito para seguir causa criminal contra Remigio Silva, como reo del delito de circulación de moneda falsa, y sobreseyó respecto del mismo Silva y Cornelio Pereira por el cargo que se les hizo como fabricantes de esas monedas.

Aunque no ha sido posible aprehender las monedas falsas para su reconocimiento; el sumario suministra las pruebas testimoniales bastantes para la plena justificación del cuerpo del delito de circulación de ellas á sabiendas; porque según el artículo 1,499 del Código Judicial, cuando los hechos punibles no dejan señal ni rastro, se comprueba su perpetración con los testigos que lo vieron cometer, ó supieron de otro modo fidedigno que se cometió, y con los hechos y documentos que tiendan al mismo fin. Hállase, pues, fundado en derecho el auto apelado, en cuanto dice relación á la responsabilidad de Silva como circulador, á sabiendas, de monedas falsas.

Mas, en lo relativo al sobreseimiento por el delito de fabri-

cación de monedas, de que fueron sindicados Pereira y Silva, y al de circulación que también fué imputado al primero, la actuación no ha llegado al estado de resolver en segunda instancia lo conveniente, por cuanto el artículo1, 547 del Código Judicial dispone que la consulta del auto de sobreseimiento, en casos como el presente, se difiera hasta que se verifique la de la sentencia definitiva respecto á los demás reos sometidos á juicio en el mismo proceso.

Por estos fundamentos, la Corte Suprema nacional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto apelado, en la parte en que llama á juicio criminal á Remigio Silva como responsable del delito de circulación á sabiendas de monedas falsas, hechas á imitación de las legítimas que emite el Gobierno; quedando pendiente la resolución del caso respecto al sobreseimiento decretado, hasta que se tome conocimiento de la sentencia definitiva que se pronuncie respecto al procesado Silva.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente al Juez de primera instancia.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Salomón Forero—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En seis de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis notifiqué al señor Procurador general la resolución que antecede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme.

Bogotá, Octubre catorce de mil ochocientos ochenta y seis.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Octubre doce de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos: El señor Prefecto del Departamento de Medellín del antiguo Estado de Antioquia, inició sumario, en el mes de Enero del presente año, en su calidadad de funcionario de instrucción, con el objeto de averiguar quien fuese el responsable del delito de sustracción de una encomienda de mil pesos ($ 1,000) en monedas de oro de á cinco pesos, que fué remitida bajo planilla de la Administración Nacional de Hacienda de Medellín, marcada con el número 17, con destino á Barranquilla, por el correo de trece de Noviembre del año anterior, y á cargo del Mensajero señor Ulpiano Isaza. Adelantado el sumario y hallándose préviamente probadas la preexistencia, remesa y falta de la encomienda, y existiendo fuertes indicios de ser el responsable Cruz Lalinde, á juicio del funcionario de instrucción, éste dictó auto de prisión contra el sindicado, y como Lalinde apelase de este auto, el señor Prefecto concedió la apelación para ante el Juez del Circuíto respectivo, considerando que éste era el llamado, como futuro Juez de la causa, á fallar sobre el incidente del auto de prisión; y al propio tiempo, creyendo perfeccionado el sumario, resolvió pasarlo al mismo Juez para lo de su cargo.

Después de varios incidentes por los cuales pasó el sumario, el Tribunal de Antioquia resolvió, por auto del cinco de Abril, declararse incompetente, en fuerza de lo estatuído en los artículos 365 del Código Penal y 62 inciso 5.° del Judicial, ambos nacionales, por cuanto el sumario pertenecía á la jurisdicción puramente nacional, y en consecuencia mandó devolverlo al funcionario de instrucción para lo de su cargo.

Nuevamente sufrió trámites y demoras el sumario, y al cabo el señor Prefecto, por resolución del veintiseis de Abril, vino á enderezar el procedimiento; envió el sumario en copia de lo conducente, á la Corte Suprema. Llamada esta Superioridad a decidir, previamente considera lo relativo á la cuestión de competencia.

Es indiscutible la jurisdicción nacional en el asunto, puesto que se trata de averiguar un delito cometido con detrimento de una institución y renta del Gobierno Nacional, con violación de las reglas legales sobre correos, y en asunto de intereses confiados á la Nación (artículos 1,364 y365 del Código Penal.) Por lo tanto el conocimiento pertenece en primera instancia á los Jueces nacionales de esta clase, y en apelación ó consulta á la Corte Suprema, conforme á los artículos 18, sección 2.ª, atribución 5.ª y 51 y 1.506 del Código Judicial. Pero en el caso ocurrido hubo dudas y resoluciones negativas, por cuanto el funcionario de instrucción, Prefecto de Medellín, que concedió la apelación, tenía, en el orden gerárquico ejecutivo, categoría análoga á la del Juez del Circuíto en el orden gerárquico Judicial; de modo que este no era el superior inmediato de aquel, como lo habría sido de un Juez de Distrito instructor, y por lo tanto, no podía conocer en apelación.

Esto es evidente. Si un Juez municipal ó de Distrito funciona como funcionario de instrucción, sus resoluciones son apelables para ante el inmediato Superior que es el Juez del Circuíto, y si es éste quien dicta el auto y concede apelación, el conocimiento en el recurso corresponde á la Corte Suprema, por cuanto no hay tribunal ninguno intermediario. Pero en el caso en que quien funciona en la instrucción es un Prefecto, es evidente que él sustituye al Juez del Circuíto y no al municipal ó de Distrito, como funcionario de instrucción, y por lo mismo sus autos no son apelables ante su igual, sino ante el Superior, y este Superior es la Corte Suprema en los asuntos de jurisdicción nacional. Por tanto, la Corte Suprema es competente para conocer de ésta apelación, y así lo declara previamente para entrar á considerar, en lo posible, el fondo del asunto.

La razón ó la sin razón con que haya decretado el funcionario de instrución la prisión de Cruz Lalinde, depende de dos circunstancias, á saber: primera, la existencia de una plena prueba del delito, y de alguna prueba sobre el delincuente, bastante para detener á determinada persona, y el estado de la actuación. Si la actuación ha llegado á tal punto que se ha declarado por el Juez competente con lugar á seguimiento de causa contra determinada persona, ésta tiene que ser precisamente reducida á prisión, porque yá es reo, si el delito es de aquellos que no admiten excarcelación (artículo 1,476 del Código Judicial.) Pero este no es el caso, puesto que todavía el Juez no ha dictado auto sobre si hay ó nó lugar á seguimiento de causa. Se trata de un caso distinto: el asunto está todavía en la condición de sumario, y habiendo hallado el funcionario de instrucción la plena prueba del delito (prueba que es oficial é irrefragable), y fuertes indicios contra Cruz Lalinde como autor, le ha mandado reducir á prisión, que en este caso es meramente preventiva ó precautelativa.

La Corte halla justo el procedimiento, pero sólo en parte, esto es, que había razón para *detener* al sindicado, pero no para *aprisionarle*. Para lo primero, bastaban los fuertes indicios que arroja el sumario, sobre su culpabilidad; para lo segundo era necesario que se hubiese declarado con lugar á seguimiento de causa ó que siquiera existiese una prueba directa contra el presunto reo. La Corte no puede adelantarse á calificar con todo rigor de criterio las pruebas existentes, no habiéndose dictado auto de proceder ó de sobreseimiento; pero examinandolas declaraciones hechas por los diversos Agentes del Ministerio público que han intervenido en el asunto, reconoce la razón con que el funcionario de instrucción dió importancia á muy fuertes indicios, y mandó reducir á detención á Lalinde (fojas 10).

Por lo expuesto la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador general de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, reforma el auto apelado, disponiendo que Cruz Lalinde sea y permanezca detenido, pero no en prisión, durante la instrucción del sumario, salvo lo que el Juez competente resuelva en cuanto sea de su incumbencia.

Notifíquese, cópiese y devuélvase la actuación.

R. Antonio Martínez.—José M. Samper.—Manuel J. Angarita.—Julián R. Cock B.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Luis S. de Silvestre.

Ramón Guerra A., Secretario.

En trece de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la decisión precedente.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme. Bogotá, diez y nueve de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, doce de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Con fecha doce de Julio próximo pasado, el Juez del Circuíto de Honda profirió auto de sobreseimiento en el sumario instruído contra Inocencio Sánchez, por el delito de tentativa de envenenamiento, y por amenazas ó amagos dirigidos al Presidente de la República.

La tentativa de envenenamiento y las amenazas ó amagos se hacen consistir simplemente en haber dicho el sindicado Sánchez, empleado en el vapor Cartagena, que si el señor doctor Rafael Núñez bajaba en ese buque, era capaz de envenenarlo. De las diligencias practicadas no aparece ningún indicio siquiera de que Sánchez hubiese ejecutado acto alguno que preparase la ejecución del delito ó diese principio á ella, en lo cual consiste, según el artículo 14 del Código Penal, la tentativa de cometer un delito.

En cuanto á las amenazas ó amagos que se hacen consistir en las palabras mencionadas, es indispensable, para que exista el delito, la presencia de la persona á quien se infieren, cosa que no sucedió en el caso de que se trata.

Tal es la doctrina que desarrolla el Juez en el auto de sobreseimiento, y que el señor Procurador acepta y reproduce en su vista.

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, confirma el auto de sobreseimiento que con fecha doce de Julio del año en curso profirió el señor Juez del Circuíto de Honda en el sumario instruído contra Francisco Sánchez por los delitos de tentativa de envenenamiento y amenazas ó amagos.

Notifíquese, cópiese y devuélvase.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock B.—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En trece de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la decisión precedente.

ARANGO M.—*Guerra A.* Secretario.

Es copia conforme.

Bogotá, Octubre doce de mil ochocientos ochenta y seis.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, trece de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—Por auto de seis de Agosto del corriente año, el Juez superior del Circuíto de Cúcuta, en el despacho de lo criminal, declaró con lugar á formación de causa contra Ignacio Gómez por la comisión del delito de circulación de moneda falsa; y después de haber sido confesionado el reo y de habérsele nombrado defensor, éste apeló del auto referido, viniendo por tal motivo el sumario á conocimiento de esta Superioridad. Y habiéndose oído el dictamen del señor Procurador, la Corte pasa á resolver sobre el mérito de la actuación.

En un caso como el presente, el cuerpo del delito lo constituyen dos circunstancias: la una, que las monedas que se pongan en circulación sean falsas; y la otra, que esa circulación se haya verificado con conocimiento de la falsedad. El delincuente resulta de la comprobación de que esas dos antedichas circunstancias concurran en un individuo determinado.

Todo esto á saber: la prueba del delito y del delincuente aparecen en este sumario. Resulta que las monedas con que Ignacio Gómez pretendió hacer un pago á Emperatriz Rodríguez son evidentemente falsas, á juicio de los peritos y hasta de los otros testigos del sumario, pues que siendo presentadas con apariencia de monedas de oro, no eran sino una mezcla de zinc y de estaño doradas, y resulta que Ignacio Gómez, según su misma confesión, sabía que esas monedas con que quizo pagar á la Rodríguez, primero con la una, de marca norte-americana, y luégo con la otra, de marca mejicana, eran falsas, y que ese conocimiento lo tenía de antemano. Se ve también claro el designio de pretender que le fueran admitidas como legítimas, pues aun cuando el procesado se excusa en su indagatoria diciendo que procedía de chanza, semejante exculpación queda contradicha con la circunstancia de que llegó á reñir con la persona á quien consultó la Rodríguez sobre la legitimidad de las monedas, para recibirlas en pago, y de la que obtuvo informe de su falsedad; siendo esta riña el motivo para que se descubriera el delito. El procesado parece renunciar en su confesión á todas las demás exculpaciones, improbables todas ellas ciertamente, y acepta el cargo de una manera rotunda, quedando establecido ese cargo en toda su plenitud, y que el responsable Ignacio Gómez cargaba conjuntamente una partida de dados y las monedas falsas.

Por lo expuesto, la Corte Suprema Nacional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, confirma el auto apelado.

Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En quince de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la decisión precedente.

ARANGO M—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme. Bogotá, diez y nueve de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, trece de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos: En Octubre de mil ochocientos ochenta y tres promovió Faustino Paz, ante el Juez nacional de primera instancia de Barbacoas, la iniciación de un sumario para averigar quién era responsable de la pérdida de un despacho librado por esta Superioridad, sobre ratificación de unas certificaciones expedidas en Tumaco respecto de ciertas expropiaciones, materia de un juicio entablado por un hijo del mencionado Paz, y que se hallaba bajo la jurisdicción de esta Corte. Practicadas, sin fruto alguno, varias diligencias, así en Barbacoas como en Tumaco, el Juez instructor remitió el sumario á esta Superioridad, y el señor Magistrado sustanciador, previa audiencia del Ministerio público, resolvió por auto del diez y siete de Enero de mil ochocientos ochenta y cinco, devolverlo al mismo Juez nacional para que lo adelantase.

Practicáronse nuevas diligencias, y al cabo pareció el Despacho ó exhorto, materia de la investigación, detenido en el archivo de la Colecturía de rentas del Estado, en Tumaco, oficina que había sido servida por varias personas sucesivamente, y fué entregado al Juez del Distrito, para su remisión á la Corte; pero nada se pudo averiguar sobre quién fuese el responsable del extravío temporal de los documentos, ó de la demora en las diligencias. Por lo tanto, ni hay delito alguno comprobado, ni menos comprobación de la persona responsable del hecho que motivó el sumario; y es el caso de disponer lo prevenido en el artículo 1,543 del Código Judicial, como lo resolvió el Juez del Circuíto de Barbacoas, por auto de quince de Septiembre de mil ochocientos ochenta y cinco.

Por lo expuesto, y de acuerdo con el dictamen del señor Procurador general, la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto de sobreseimiento consultado.

Notifíquese, cópiese y devuélvase la actuación.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En catorce de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme. Bogotá, veinte de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

IMPRENTA DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPÚBLICA DE COLOMBIA. Número 8.º

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 8 de Marzo de 1887.

CONTENIDO.

PÁG.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Proferida en la causa contra Nicasio Hurtado, por homicidio 33
Id. en la causa contra varios, por falsificación de moneda..... 34

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

De sobreseimiento en el sumario contra Joaquín Herrera, por maltratamiento de obra..... 35
De sobreseimiento en el sumario, por delito político..... "
De id. en el id. contra Eusebio Pereira, por daño de un telégrafo..... 36
De revocación en el id. por herida á un Guarda..... "
De sobreseimiento en el sumario relativo al naufragio del vapor "Simón-Bolívar"..... 37
De sobreseimiento en sumario por delito político..... 38

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL.

Dictamen relativo al sumario sobre el naufragio del vapor "Simón Bolívar" 39

GACETA JUDICIAL.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Octubre seis de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—En la noche del veinticuatro de Octubre del año próximo pasado, andaba haciendo rondas por las calles de la ciudad de Bucaramanga una patrulla, perteneciente á la segunda Compañía del Batallón "Angulo," estacionado allí, que iba comandada por el Capitán Clímaco Ulloa. En el sitio llamado "Santa-Rosa," los de la patrulla alcanzaron á ver á un hombre que iba solo por la calle, y el soldado Nicasio Hurtado se adelantó á reconocerlo, siguiéndole de cerca el Capitán, y haciendo alto, á distancia, el grueso de la patrulla. Pocos momentos después se oyó la detonación de un tiro de rifle; acudieron primero Ulloa y luégo los demás de la patrulla, y resultó que Hurtado había disparado el tiro de su rifle contra el hombre visto de lejos en las sombras de la noche, el cual quedó muerto y resultó ser Agustín Díaz, vecino de la ciudad, que habitaba una casa sita en el lugar del suceso. Hurtado fué reconvenido por el Capitán Ulloa por lo que había hecho, y detenido preso en su cuartel, á disposición del Comandante del Batallón, quien, al recibir el parte de lo sucedido, nombró funcionario de instrucción al Teniente Elías Castellanos, á falta del segundo Ayudante del cuerpo, conforme á los artículos 472 y 1,402 del Código Militar.

Practicáronse las diligencias del sumario por el Oficial instructor, al propio tiempo que el Alcalde del Distrito hacía por su parte indagaciones; y aunque se entabló una especie de competencia entre las autoridades civiles y la militar sobre quién debía conocer, al cabo cedieron las primeras, y avocó el conocimiento pleno la segunda, por cuanto el delito había sido cometido por un militar, en tiempo de guerra, caso á que se refiere el artículo 69 del Código Judicial. Después de declararse con lugar á seguimiento de causa, por el delito grave de homicidio, que define el artículo 461 del Código Penal, siguióse el juicio ordinario por todos sus trámites, y el ocho de Julio del presente año pronunció el Consejo de guerra de Oficiales sentencia condenatoria, declarando á Hurtado culpado del delito de homicidio, con circunstancias atenuantes y sin ninguna agravante, á sufrir las penas de lanzamiento del Ejército y dos años de reclusión. Consultóse esta sentencia, y surtidos los trámites de la segunda instancia, la Corte entra á considerar lo que ha de servir de base á su fallo.

Resultando: que el reo se confesó responsable de la muerte de Agustín Diaz, desde que rindió su declaración instructiva, (fojas 5), y alegó como excusa un supuesto forcejeo con la víctima, que porfió por no quererse retirar á su casa y por quitar el rifle á Hurtado, teniendo éste que "montar, rastrillar y dar el tiro;" lo que lejos de estar probado, resulta desmentido por varias declaraciones, como adelante se verá; que en el acto de su confesión (fojas 36 vuelta) volvió á reconocer la verdad del hecho, esto es, que había disparado un tiro de su rifle á Agustín Diaz y dádole muerte, porque éste había tratado de desarmarle, exculpación que tampoco fué apoyada con prueba alguna en el plenario.

Resultando: que todos los testimonios rendidos por cinco soldados de la patrulla confirmaron el hecho del homicidio, fundados en las circunstancias ocurridas, la confesión de Hurtado, y el dicho y las reconvenciones del Capitán Ulloa, sin que de tales testimonios resulte, en manera alguna, la exculpación del homicidio; siendo de notar en este proceso la persistencia que hubo en no llamar á dicho Capitán á rendir su importantísima declaración, ya fuese indagatoria, ya de mero testigo; y que en el acto de la celebración del juicio el reo no hizo observación ni protesta alguna para defenderse ó exculparse.

Resultando: de las declaraciones de los médicos peritos (fojas 19) que la herida recibida por Agustín Diaz le causó la muerte instantáneamente, debiendo éste quedar muerto en el mismo sitio donde cayó y fué examinado; y de las declaraciones de Saturnina Amaya (viuda de Diaz), Eusebio Sánchez, María Diaz, Petra Naranjo y Magdalena Piña (fojas 16 á 20 vuelta) que el cadáver de Diaz fué encontrado sobre el quicio de la puerta que mediaba entre la sala y la alcoba de la casa del mismo Diaz, tendido de espaldas y con la cabeza en la alcoba y los pies en la sala; que allí fué donde recibió el tiro y cayó muerto, y que hasta allí lo persiguió Hurtado, disparándole el tiro desde la puerta de la sala, que daba sobre la calle; y que todo esto comprueba que Hurtado persiguió á Diaz, sin motivo alguno, hasta el interior de la casa de éste, y allí le disparó el tiro, lo que, si no demuestra la perversidad del asesino, sí patentiza la intención de darle muerte, ó al menos de herirlo, siquiera fuese por exceso de celo contra un hombre desarmado, inofensivo y que huía delante de una ronda militar para guarecerse en su domicilio.

LA CORTE CONSIDERA:

Primero: El delito cometido está probado, sin lugar á la menor duda, y confesado por el reo; es incuestionablemente el delito de homicidio simple, definido por el artículo 461 del Código Penal, y es delito común, aunque, conforme á lo dispuesto en el artículo 69 del Código Judicial, hayan conocido de la causa las autoridades militares, por ser el reo militar y haber delinquido en tiempo de guerra. Por lo tanto, la pena que le corres-

ponde, es la señalada en el artículo 463 del Código arriba citado.

Segundo: Están comprobadas las circunstancias agravantes siguientes: el alarma y escándalo causados naturalmente en una ciudad, por un atentado que es prueba de escaso respeto por los derechos de los ciudadanos, de parte de una guarnición militar; la gran necesidad que tiene la sociedad colombiana de escarmientos, por la mucha frecuencia de delitos, y sobre todo, de abusos de individuos del Ejército contra ciudadanos inofensivos; y el desamparo en que se halló la víctima, tán indefensa é inofensiva, que era un pobre trabajador y huyó para guarecerse en su casa, del soldado que lo amenazaba. Asimismo están comprobadas las siguientes circunstancias atenuantes: el haber confesado el reo su delito en diversas ocasiones, cuando no hubo sino un testigo (la esposa de Diaz) que presenciara el hecho ejecutado en la oscuridad y la soledad, y pudo haber quedado sin plena prueba la culpabilidad de Hurtado, si él no la hubiese reconocido, á tal punto, que habiendo podido fugarse fácilmente, se mantuvo sometido al juicio. Estas circunstancias agravantes y atenuantes se compensan, y por lo tanto, es el caso de calificar el delito en segundo grado y promediar la pena entre el máximo y el mínimo.

A mérito de lo expuesto, y sin apoyo en el concepto del señor Procurador general, por cuanto no lo ha emitido en su vista ni en la audiencia, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, condena al soldado Nicasio Hurtado, como reo en segundo grado del delito de homicidio común, definido en el artículo 461 del Código Penal, y castigado por el 463, á sufrir las penas siguientes:

Primera: Lanzamiento del Ejército nacional.

Segunda: Cinco años de reclusión, en la Casa penitenciaria de Pamplona (término medio entre cuatro y seis años fijados por el citado artículo 463); tiempo del cual se deducirá todo el que hubiese transcurrido desde el veinticuatro de Octubre de mil ochocientos ochenta y cinco, fecha de la prisión del reo, hasta el día en que se ejecute la sentencia.

Tercera: Inhabilitación para ejercer empleo ó cargo público, y pérdida de cualquiera pensión de qne disfrute; y

Cuarta: Pago de costas precesales y resarcimiento de daños y perjuicios.

Queda en estos términos reformada la sentencia de primera instancia.

Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Salomón Forero—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

El infrascrito Secretario certifica que la sentencia anterior fué publicada en la audiencia de este día.

Bogotá, 6 de Octubre de 1886.

Ramón Guerra A., Secretario.

En seis de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis notifiqué al señor Procurador general de la Nación la sentencia anterior.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

En doce de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis notifiqué la sentencia anterior al defensor, señor Luis Ponce Toledo.

L. Ponce Toledo—Guerra A., Secretario.

Es copia conforme.

Bogotá, Octubre quince de mil ochocientos ochenta y seis.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y seis de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—Venancio Rivera dió denuncia contra Fidela Pardo por el delito de circulación de moneda falsa. Conducida la sindicada y una hija suya, de nueve años de edad, á la Inspección 3.° de la Policía del Distrito de Bogotá, y registradas que fueron, se les encontraron dos monedas falsas de á cincuenta centavos cada una.

El mismo Rivera dió denuncia, al propio tiempo, de que en la casa de Isaura é Ismenia Venegas había útiles ó aparatos para la fabricación de moneda; y al efecto, practicada una inspección en la casa referida, se encontró que en una de las piezas de habitación y en un hoyo preparado en el suelo, había un cajón que contenía un molde de yeso, apropiado para fabricar monedas de á cincuenta centavos, y algunos pedazos de metal y otros objetos adecuados. También se encontraron varias monedas falsas de á cincuenta centavos.

Practicado el reconocimiento pericial de las monedas, las cuales, en realidad, resultaron falsas, y adelantada la instrucción, con las diligencias que se creyeron necesarias, el Juez 6.° del Circuíto de Bogotá, á cuyo despacho había sido pasado el proceso, llamó á juicio criminal á Isaura é Ismenia Vanegas y Fidela Pardo, á las dos primeras por el delito de falsificación de moneda, y á la última por circulación de moneda falsa, y sobreseyó respecto de Venancio Rivera.

Celebrado el juicio, previas las formalidades que exige la ley, el Juez, con fecha dos de Abril del presente año, dictó sentencia definitiva, en la cual condenó á Isaura é Ismenia Vanegas, haciendo la calificación del delito en tercer grado, á sufrir la pena de tres años de reclusión penitenciaria, y á Fidela Pardo á sufrir la de dos años también de reclusión.

Esta sentencia fué apelada por las partes, y en consecuencia ha sido sometida á la decisión de la Corte, lo mismo que el auto de sobreseimiento dictado respecto de Venancio Rivera. En esta segunda instancia se abrió el juicio á prueba, y se practicaron las que pidió el defensor de Isaura é Ismenia Vanegas.

Desde luégo se observa que este proceso no ha debido versar sobre el delito de falsificación y sobre el de circulación; pues siendo hechos distintos, han debido averiguarse separadamente; pero ya que los autos han venido al despacho de la Corte, esta Corporación pasa á ocuparse del fundamento de la sentencia apelada y del auto consultado.

Respecto de Fidela Pardo, sindicada por el hecho de la circulación de monedas falsas, no hay otra prueba que la comprometa legalmente, que la circunstancia de habérsele encontrado monedas falsas de á cincuenta centavos; pero como tales monedas no le fueron encontradas en el acto de ponerlas en circulación, es decir, cuando ella hacía alguna compra, pagaba alguna deuda, etc., es claro que el cuerpo del delito no existe, como quiera que la mera tenencia de monedas falsas, no es en manera alguna un hecho criminoso. Además, aun en el caso de que la Pardo hubiese hecho circular monedas, no está demostrado que ella lo hubiese verificado á *sabiendas*, es decir, con conocimiento de la falsedad de las monedas, circunstancia elemental del delito de circulación, conforme al inciso 2.° del artículo 248 del Código Penal.

Contra Isaura é Ismenia Vanegas, procesadas por la falsificación de monedas colombianas, existe la presunción legal de que trata el artículo 1,620 del Código Judicial que dice:

> Es presunción legal, y por lo mismo prueba plena para imponer la pena de falsificación de moneda, el ser el sindicado poseedor ó mero tenedor de casa ó edificio rústico ó urbano en que se encuentren máquinas ó instrumentos adecuados para la fabricación de la moneda, siempre que por otra parte conste que en poder de la misma persona han existido recientemente monedas falsas. Contra esta prueba sólo se admite la que plenamente justifique que otro ha sido el falsificador de las monedas encontradas.

La responsabilidad de las expresadas Vanegas sería indudable, según la disposición copiada, supuesto que en la casa que ellas habitaban fueron encontrados el molde, los útiles y las monedas de que se hizo mención al principio; pero en la segunda instancia se han obtenido algunas declaraciones de testigos que infirman, por completo, la presunción legal que contra ellas existía.

Las sindicadas, en sus declaraciónes indagatorias, interrogadas sobre la procedencia de las monedas, del molde y demás útiles, manifestaron que la pieza donde tales objetos fueron hallados, había sido habitada por un señor Avelino Velandia, y que era probable que de este individuo procedieran aquellos objetos.

Ante esta Superioridad declararon los testigos Gregorio Paredes S. y Angel María Pérez, los cuales hicieron las siguientes aseveraciones. El primero dice que en el año de mil ochocientos ochenta y cinco fué compañero de negocios con el señor Avelino Velandia; que en el mes de Junio del mismo año (es decir, en el mes en que se supone ejecutado el hecho criminoso), se hospedaron el declarante y Velandia en la casa de Isaura é Isme-

nia Vanegas; que ambos fueron alojados en una alcoba de la casa; que presenció que Velandia, sin decirle con qué objeto, abrió un hoyo cerca de la cama en que dormía, y allí depositó un cajón que sacó de uno de sus baúles y que contenía pedazos de plomo y de zinc, un molde como para hacer pesetas de á cinco reales hecho en yeso, con el sello y con la forma de las monedas colombianas del año de mil ochocientos ochenta y cinco, y con la inscripción de ley de 0,835, un tarro de lata que contenía arena, una basija de barro que contenía metal fundido y algunas monedas falsas de á cincuenta centavos, una de ellas partida; que le consta, por haber acompañado á Velandia; que al jueves siguiente de su llegada, es decir, seis días después, se fueron en asocio de Angel María Pérez, para los llanos de San Martín; y por último que las expresadas Vanegas no tuvieron conocimiento ninguno del hecho de haber ocultado Velandia los objetos de que se ha hecho referencia.

Angel María Pérez dice que era sirviente de Avelino Velandia, y refiere los hechos como testigo presencial, exactamente como el testigo Paredes, aunque con menos detalles.

Dolores Cortés declaró ante el Inspector de Policía del caserío de Chapinero y expresó lo siguiente: que estuvo en la casa de Isaura é Ismenia Vanegas poco más ó menos un año en calidad de sirvienta; que le consta, por haberlo presenciado, que en el mes de Junio de mil ochocientos ochenta y cinco fué Avelino Velandia con un compañero y un sirviente y tomó en arrendamiento una pieza en dicha casa; que un día por la mañana la llamó Velandia para que le llevara á su pieza un poco de agua; que al efecto ella le llevó el agua, y al entrar á la pieza vió al pié de la cama donde dormía Velandia, un hoyo en el suelo, y junto un baúl que estaba abierto, dentro del cual había un cajón que contenía pedazos de zinc ó plomo; y que también vió, como hácia la mitad de la pieza, unas pesetas de á cinco botadas.

Los testigos José María Jiménez y Gregorio Cruz afirman que las sindicadas han observado siempre buena conducta, y que viven consagradas á un trabajo honrado.

Los tres testimonios que se han analizado quitan toda responsabilidad legal á las mencionadas Vanegas, é inculpan directamente á Avelino Velandia; de modo que se halla cumplido el caso de excepción á que alude la última parte del artículo 1,620 del Código Judicial.

Venancio Rivera fué sindicado como encubridor, tanto del delito de circulación como del de fabricación de moneda, por suponerse que, al dar el denuncio por tales delitos, tenía conocimiento de ciertos antecedentes que lo hacían por lo menos sospechoso; pero respecto de la circulación, como se ha demostrado que ese delito no existe, es claro que la responsabilidad de Rivera no tiene base ninguna; y respecto del hecho de la fabricación, él cumplió con dar aviso á la autoridad dentro de seis días, conforme al artículo 258 del Código Penal, circunstancia que lo hace irresponsable. Así, pues, el sobreseimiento ha sido fundado.

Por lo expuesto, la Corte Suprema nacional, de acuerdo con el señor Procurador, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la sentencia apelada, y absuelve á Isaura é Ismenia Vanegas y Fidela Pardo de los cargos que respectivamente les fueron deducidos en el auto de proceder; y confirma el auto de sobreseimiento consultado. Y como de autos aparece que Avelino Velandia ha podido ser el autor del delito de falsificación de monedas, y Gregorio Paredes S. y Angel María Pérez, han podido ser encubridores del expresado delito, el Juez de primera instancia sacará copia de lo conducente, á fin de averiguar la responsabilidad de dichos individuos.

Notifíquese, cópiese, publíquese en el *Diario Oficial* y devuélvase el proceso.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

La anterior sentencia fué publicada en la audiencia del diez y seis de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y ocho de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la sentencia que precede.

Fernández—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme.

Bogotá, Octubre veinte de mil ochocientos ochenta y seis.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, seis de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—El Juez del Circuíto de Buga consulta con la Corte el auto de sobreseimiento, dictado en veintiuno de Octubre de mil ochocientos ochenta y cinco, en el sumario levantado para averiguar el delito de maltratamiento de obra cometido por Joaquín Herrera, en la persona del Administrador subalterno de Hacienda nacional, Fernando Sánchez.

De la actuación resulta: que en la noche del siete de Diciembre de mil ochocientos ochenta y cuatro, ocurría una disputa personal en la plaza de Buga entre Lázaro Escobar y Félix María Velásquez; que, entre otros, intervino entre los contendores, para ponerlos en paz, el citado Sánchez, en cuyo estado se presentó Herrera, armado de un machete, é hirió á Juan José Mora, que también había ocurrido al sitio de la disputa, y dió de planazos con su arma á otros, entre los cuales se cuenta al empleado Sánchez. El Juez de la causa dispuso que se compulsara copia del sumario, en lo relativo al delito perpetrado contra el mismo Sánchez, para que se considerara el asunto separadamente por el Juzgado, en su carácter de nacional.

Contraída la actuación al delito de maltratamiento de obra á un empleado nacional, se pronunció el auto de sobreseimiento ya citado, el cual ha sido sometido al conocimiento de este Supremo Tribunal. Practicadas las diligencias de la segunda instancia, ha pasado el expediente al estudio de la Corte, en seis del presente mes, para la resolución conveniente; y

Considerando: que según el testimonio de Sánchez, la ofensa que él sufrió, quedó limitada á una impresión leve de una peinilla en la espalda, sin que le quedara daño alguno, en lo cual están de acuerdo los varios testigos que fueron examinados.

El artículo 223 del Código Penal, sujeta á castigo el maltratamiento de obra contra un empleado nacional que no ejerza jurisdicción ni autoridad, siempre que se halle en actual ejercicio, ó por razón del ejercicio de sus funciones. Constando por lo actuado, que Sánchez intervino en la disputa en su condición de particular; no es el caso prescrito por la ley, para el enjuiciamiento de causa de oficio contra el responsable del maltratamiento.

En consecuencia, la Corte Suprema de la Nación, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador general, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto de sobreseimiento consultado.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Salomón Forero—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En nueve de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general de la Nación el auto que precede.

Arango M.—*Guerra* A., Secretario.

Es copia conforme.

Bogotá, Octubre diez y seis de mil ochocientos ochenta y seis.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Octubre catorce de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos: Con fecha veintisiete de Junio del año próximo pasado, el Jefe Municipal del Distrito de Neira, antiguo Estado de Antioquia, inició y condujo con actividad la práctica de nu-

merosas diligencias relativas á ciertos movimientos que, si en otras circunstancias podían tener otro carácter, eran evidentemente de índole revolucionaria, puesto que tendían á crear nuevos trastornos del orden público en Antioquia, para favorecer otros de la misma naturaleza que subsistían en la República. Una vez perfeccionado el sumario, aunque con el nombre de indagación sobre el delito de atentado en cuadrilla de malhechores, el funcionario de instrucción lo remitió al Juez del Circuíto de Manizales, quien, de acuerdo con el Agente Fiscal, resolvió, por auto de once de Marzo del presente año, sobreseer en el asunto, conforme al decreto número 116 del once de Febrero, expedido por el Jefe Civil y Militar del Estado, sobre amnistía por delitos políticos. Consultado este auto con el Tribunal Superior de Antioquia, éste, por auto del cinco de Abril, se declaró incompetente, por cuanto era de toda evidencia que no se trataba de delitos comunes, sino de delitos políticos sujetos á la jurisdicción nacional. En consecuencia el Juez del Circuíto de Manizales, oyendo al Ministerio público, y haciendo agregar al sumario copia auténtica del Decreto citado, dictó el cinco de Mayo auto de sobreseimiento, por estar amnistiados los delitos que eran materia de la actuación, y consultó el auto con esta Superioridad.

Todas las pruebas del sumario demuestran, sin lugar á duda alguna, que los delitos sobre cuya averiguación versaron las diligencias practicadas eran de rebelión; de manera que estaban comprendidos en la amnistía decretada por el Jefe Civil y Militar de Antioquia, como en asunto nacional. Además, con posterioridad al auto consultado, el Excelentísimo señor Presidente de la República dictó, el veinte de Julio, decreto de amnistía general, en el cual quedaron comprendidos los individuos á quienes se refiere el sumario. Debe, por lo tanto, sobreseerse en el asunto, conforme á lo dispuesto por los artículos 67 del Código Penal y 1,419 del Judicial de la Nación.

Por lo expuesto, y de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador general, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto de sobreseimiento consultado.

Notifíquese, cópiese y devuélvase el sumario.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En quince de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la precedente decisión.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, quince de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos: El Juez Superior del Circuíto del Socorro, en lo criminal, en su carácter de Juez Nacional, adelantaba sumario contra Eusebio Pereira, por estar éste sindicado del delito de destrucción de la línea telegráfica, en algún punto, se infiere del Territorio del Estado de Santander (cosa que no consta en autos)—cuando el indicado Juez tuvo conocimiento de que el sumariado había fallecido. Con este motivo se levantó justificante sobre el hecho del fallecimiento, el cual quedó perfectamente acreditado, con la certificación del Notario y con la declaración de dos testigos.

Esto establecido, el Juez, por auto de veintisiete de Mayo del corriente año, declaró que debía cesar todo procedimiento en el sumario iniciado contra Pereira. Ese auto ha venido en consulta; y encontrando la Corte, después de la sustanciación respectiva, perfectamente fundado el motivo por el que la cesación se decreta; de acuerdo con el dictamen del señor Procurador general, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, *confirma el auto consultado.*

Notifíquese, cópiese y devuélvase al Juzgado de su origen.

R. Antonio Martínez.—José M. Samper.—Manuel J. Angarita.—Julián R. Cock Bayer.—Antonio Morales.—Froilán Largacha—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y ocho de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general de la Nación el auto que precede.

FERNANDEZ.—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, quince de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—En la tarde del dos de Mayo del presente año, el Guarda de la Aduana de Ipiales, Evangelista Ortega Chacón, tomó en el puente de "Rumichaca" once docenas de pañuelos que introducía de contrabando Rafael Rodríguez. A presencia de Manuel Muñoz, José Rosero, Santos Tovar y Avelino Rodríguez, el introductor instó mucho al Guarda para que le devolviera el artículo aprehendido, aun ofreciéndole dinero para conseguir la tolerancia del empleado. Por la noche, cuando yá se habían retirado los tres testigos mencionados, continuaron las instancias de Rodríguez, y entonces el Guarda recibió una herida, en la pierna derecha, causada por el disparo del rifle con que estaba armado el mismo empleado. Esa herida, á juicio de los peritos que practicaron el reconocimiento, mantendría enfermo al ofendido por lo menos veinte días. Como al tiempo de la detonación del rifle yá no había presentes en el sitio del acontecimiento más personas que el Guarda Ortega Chacón y el introductor del contrabando, Rafael Rodríguez, el sumario no presenta otro medio de indagación, sobre el modo como se verificó la herida del primero, que los testimonios de estos dos individuos. El ofendido, Ortega Chacón, asegura que Rodríguez trató de forzar la entrada á la casa en que se hallaba el Guarda; que éste resistió á la violencia con la culata del rifle, la cual fué tomada por el agresor y que entonces pudo preparar y disparar el tiro que le causó la herida. Rodríguez asegura que, reiterando sus súplicas al Guarda para que le devolviera los pañuelos, cuando yá estaban solos, este empleado le rechazó con el rifle que tenía en mano, á cuyo tiempo y sin haber tocado el arma Rodríguez, se fué el tiro y resultó herido Ortega Chacón.

De estos antecedentes, que son los únicos que aparecen del sumario, se deduce que no hay una demostración legal sobre el verdadero autor de la herida. Con tal motivo, el Juez del Circuíto de Obando, á petición del Ministerio público, declaró sin mérito la causa para proceder contra Rodríguez por el mencionado delito, y dispuso que se consultara su fallo con la Corte.

Mas, estando dispuesto por el artículo 1,420 del Código Judicial, que no se siga sino un sólo proceso contra un sólo responsable, aunque los delitos sean varios, á no ser que pertenezcan al conocimiento de distintas jurisdicciones; y siendo de la competencia del Juez de primera instancia la causa por heridas contra un empleado nacional, lo mismo que la de contrabando, en el caso previsto por el inciso 2.°, artículo 325 del Código Fiscal, según lo dispuesto en el artículo 338 del mismo Código; es indudable, que el Juez nacional del Circuíto de Obando, ha debido fallar en un sólo auto, en cuanto al mérito del sumario, no solamente en referencia al delito de heridas, sino también respecto al de contrabando, conforme al artículo 1,857 del Código Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el auto consultado, y dispone que vuelva el sumario al Juez de primera instancia, para que resuelva lo que estime justo respecto á los delitos de que hay constancia en el expediente, ampliándolo previamente sobre estos puntos:

1.° Que se practique un nuevo reconocimiento del herido, y que expongan razonadamente los peritos si, por la naturaleza de la lesión sufrida por Ortega Chacón, pueden considerar aceptables las explicaciones dadas por Rafael Rodríguez, acerca del modo como fué causada la herida, ó más bien la de Ortega Chacón.

2.° Que se practique un careo entre el ofendido y Rodríguez, sobre los puntos en que están discordantes sus testimonios.

3.° Que se evacuen las citas que resulten; y

4.° Que se practique, por peritos, el justiprecio de los objetos aprehendidos como de contrabando.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase la actuación.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock B—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y ocho de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme.

Bogotá, Octubre veintidós de mil ochocientos ochenta y seis

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

Corte Suprema Nacional—Bogotá, Octubre quince de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos: Se han instruído las presentes diligencias para averiguar la responsabilidad de la tripulación del bongo llamado *Superior*, por atribuírsele la sustracción fraudulenta de una parte de las mercancías salvadas en el naufragio del buque de vapor *Simón-Bolívar*, el día tres de Julio de mil ochocientos setenta y nueve, en el río Magdalena.

Del proceso aparece que, en la fecha indicada y en el punto de "Vuelta Acuña," cerca de Nare, naufragó el buque de vapor *Simón Bolívar*, sin que se conozcan las causas que ocasionaron el accidente; que el buque remolcaba el bongo *Superior*," tripulado por Pedro Julio, patrón de la embarcación, y Juan B. Villalobos, Escolástico Rangel, Carlos Sosa, Domingo Vargas y Lucas Jiménez que desempeñaban las funciones de bogas; que el Capitán del buque se sirvió del bongo y de la tripulación de éste para transportar á tierra el cargamento del expresado buque, y que al efecto, el bongo trabajó por tres ó cuatro días y una ó dos noches hasta colocar el cargamento en un sitio de la orilla, que se había señalado para depósito; que la tripulación del bongo tomó varios bultos y emprendió su regreso, habiendo sido capturada pocos días después y puesta á disposición del Juez de la Provincia de Barranquilla, junto con unas mercancías que fueron avaluadas y depositadas, y con la suma de setecientos cuarenta y un pesos setenta y cinco centavos ($ 741-75 cs.) que también fué depositada.

El señor Federico Navarro, Capitán del vapor *Simón-Bolívar*, en la declaración que se registra al folio 53 del expediente, refiere el suceso, y manifiesta entre otras cosas lo siguiente: que á la hora del naufragio el declarante dictó las medidas necesarias para salvar el cargamento, la tripulación y los pasajeros del buque; que la tripulación del bongo *Superior* se resistió al principio á prestar sus servicios, pero que él se hizo obedecer tomando un revólver que le había sido prestado por uno de los empleados; que entonces la tripulación mencionada comenzó á salvar el cargamento, tarea en la cual duraron en los días tres, cuatro y cinco de Julio; que el día seis le exigió al declarante el patrón del bongo la remuneración de su trabajo y cartas de despacho, pero que el declarante se denegó á ello, manifestando que la tripulación no había cumplido estrictamente sus órdenes, pues no había puesto las cargas en el punto donde se les ordenó lo hicieran, sino en otro distinto; que de consiguiente, el declarante no despachó el bongo *Superior*, ni menos presenció que llevara á bordo los bultos de mercancías de que indebidamente dispuso la tripulación, sin consentimiento del declarante y burlando la vigilancia de los empleados del buque.

José A. Sigarroa, empleado del buque manifiesta (fojas 50): que los tripulantes del bongo *Superior* no quisieron ayudar al declarante, después de haber sido nombrado vigilante del salvamento, á salvar el cargamento del buque, por más que para ello se les ofreció dinero, y que á esfuerzos del Capitán llevaron á tierra unos viajes, pero no al depósito designado, sino á otro distinto; que el declarante vió á los tripulantes del bongo armados de machetes nuevos de Collins; que la primera noche del naufragio sorprendió varias veces á un tal Cañón abriendo bultos; y que, por último, todos los de la tripulación indicados estaban ebrios.

Julián Valle, práctico del río Magdalena y testigo presencial, se expresa del modo siguiente en su declaración de fojas 53 vuelta: que después de perdido el vapor *Simón Bolívar*, sin que se hubieran salvado todavía los intereses que se podían salvar, trató el Capitán Navarro de obligar al patrón del bongo *Superior*, para que fuera á llevar al señor Francisco Javier Cisneros, unas señoras y otros caballeros á "Remolino-Grande," á lo cual se opuso el patrón, manifestando, que si no les pagaban lo que ellos pedían no estaban obligados á llevar pasajeros para arriba; que habiéndose contentado el Capitán y el patrón, éste con sus bogas comenzó á trasbordar los baúles y equipajes del señor Cisneros, señoras y demás caballeros; que concluído que fué el salvamento de los equipajes, el patrón le llamó la atención al Capitán diciéndole que de qué manera iba á trabajar con su tripulación, á lo que le dijo el Capitán que á él le pagaría cuatro pesos diarios y tres á los de la tripulación, á lo que contestó el patrón que así no le convenía, y que si trabajaba era por la tercera parte, en lo cual no convino el Capitán, manifestando que entonces aunque se perdiera todo; que el Capitán recomendó al declarante, á fin de que llamara al patrón para detrás de las calderas y que habiéndolo hecho así se reunieron los tres y que el Capitán manifestó al patrón que podía trabajar por la tercera parte, pero no lo revelara á los bogas; que entonces el patrón comprometió á los bogas diciéndoles que los iban á gratificar bien; que después que hicieron dos viajes á los depósitos que se habían designado para colocar los objetos salvados, los tripulantes del bongo exigieron el pago de la tercera parte que se les había prometido, y como el Capitán les dijo que hasta en Barranquilla se arreglaría esto, el patrón y los bogas manifestaron que no trabajarían más, y que se conformarían con sacar unos bultos del agua, en lo cual convino el Capitán, advirtiéndoles que los sacaran de debajo de la bodega, y que al efecto de allí sacaron cinco bultos y que tomaron dos más al día siguiente de entre el agua; que al día siguiente fué el declarante al depósito y allí encontró á la tripulación del bongo; que el declarante mandó llamar al Capitán, quien se hallaba en otro depósito, con el objeto de que se cerciorara de la salida del bongo; que habiendo llegado el Capitán, le exigió el patrón una carta como constancia para el dueño del bongo, y que el Capitán comenzó á escribirla, pero que después manifestó al patrón que no tenía necesidad de tal constancia, pues ya había escrito por el vapor *Isabel*; que el patrón le dijo que confiaba en su palabra de honor, y el Capitán le dijo que bien podía irse.

Esta declaración, concuerda en el fondo, con la de Santiago Castro, fojas 71, y con las de Antonio Caro, Octavio García, Antonio Altamar, Vicente Gil y Demetrio Soto, fojas 27, 28 vuelta, 30, 31 y 100 respectivamente. Todos estos testimonios corroboran también las aseveraciones de los sindicados en su parte fundamental.

El Juez de la Provincia de Barranquilla dictó auto de sobreseimiento, el cual se ha remitido en consulta á esta Superioridad.

De lo expuesto se infiere que en el proceso aparecen demostradas las siguientes circunstancias: primera, que la tripulación del bongo *Superior* ayudó eficazmente al salvamento de la carga del buque *Simón-Bolívar*, el día tres de Julio de mil ochocientos setenta y nueve, transportando como doscientos bultos, según lo afirma el Capitán en su declaración de fojas 141 vuelta; segunda, que según el dicho del mismo Capitán, á la tripulación no se le pagó salario ninguno; tercera, que el Capitán convino en que dicha tripulación sacara, para ello, unos bultos del agua; cuarta, que los bultos no fueron tomados del depósito; y quinta, que la tripulación regresó con consentimiento del mismo Capitán. Todas estas circunstancias hacen desaparecer los caracteres de delincuencia con que al principio se consideró el hecho averiguado. Es verdad que, en contra de los sindicados, se hallan los testimonios del Capitán del buque y de José Sigarroa; pero además de que la declaración de este último es de referencia, en varios puntos principales, y de que el Capitán ha incurrido en contradicciones, hay en favor de los sindicados siete testimonios de personas que se hallaban presentes en el acto del naufragio y respecto de los cuales no aparecen motivos de parcialidad.

El señor Procurador cita los artículos 710 y 711 del Código Civil Nacional, para fundar un argumento de analogía en favor de los sindicados. El 710 dice:

"Las especies náufragas que se salvaren serán restituídas por la autoridad á los interesados, mediante el pago de las expensas y la gratificación de salvamento....."

El 711 dice:

"La autoridad competente fijará, según las circunstancias, la gratificación de salvamento, que nunca pasará de la mitad del valor de las especies....."

Aunque las disposiciones citadas no son directamente aplicables al caso que se examina, sí sirven para demostrar que los siete bultos que tomó la tripulación del bongo como precio de sus servicios, no fué en manera alguna una gratificación exagerada, supuesto que la ley asigna hasta la mitad del valor de las especies salvadas, como gratificación de salvamento.

Por lo expuesto, la Corte Suprema Nacional, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador general, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto de sobreseimiento consultado.

Notifíquese, cópiese y devuélvase el proceso.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R.Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En quince de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la precedente resolución.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veinte de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—El Juez del Circuíto de Buga, por auto de dos de Diciembre de mil ochocientos ochenta y cinco, llamó á juicio por el delito de cuadrilla de malhechores á varios individuos, entre ellos á Aristides Rengifo, único que pudo ser habido—quien apeló de la providencia judicial para ante esta Corte.

Resulta que está comprobado en el sumario que el quince de Enero de mil ochocientos ochenta y cinco, es decir, después de haberse declarado perturbado el orden general, una guerrilla comandada por Aristides Rengijo se situó en la hacienda de "La Unión," á orillas del río Zabaleta, en jurisdicción del Distrito de Guacarí, Estado del Cauca, y atacó á una partida de gente armada que iba en comisión en servicio del Gobierno, muriendo en el combate Pedro Saavedra Manzano, Florentino Gil y Manuel Antonio Miranda, de los defensores de la legitimidad; y este hecho, comprobado, como se ha dicho, constituye evidentemente el delito de rebelión—definido en el artículo 180 del Código Penal, que dice: "Es rebelión el levantamiento ó la insurrección, sin llegar á ser traición, con cuyo acto una porción más ó menos numerosa de individuos, niega la debida obediencia al Gobierno constitucional de la República, ó procura sustraerse á ella, ó hacerle la guerra con las armas....." No fué de este concepto el Juez del Circuíto de Buga, quien apellidó el delito "cuadrilla de malhechores," y dictó su auto de proceder por dicho delito, en su calidad de Juez seccional, auto que fué remitido por apelación del procesado al Tribunal Superior del Norte del Cauca, y aquella Superioridad, en vez de revocarlo, se declaró incompetante, por cuanto el delito era el de rebelión y nó el de cuadrilla de malhechores; y habiendo vuelto el expediente al Juzgado de su procedencia, éste dictó auto en obedecimiento al del Superior y concedió la apelación que el sindicado había interpuesto, para ante la Suprema Corte. En ella se ha surtido la tramitación legal, y dado traslado al señor Procurador general, quien es de concepto que debe revocarse el auto apelado, por ser el delito cometido el de rebelión, y que este procedimiento debe declararse terminado en virtud de las amnistías concedidas; y siendo la Corte competente en el asunto por la naturaleza de él, es el caso de fallar, apesar de los errores cometidos, porque considera que según la reforma 16, ley 53 de 1882, "el objeto de los procedimientos judiciales y de las consiguientes reglas que las leyes establecen para ellos, es el de que la sentencia sea conforme con la verdad de los hechos y con*forme á la ley sustantiva en el derecho; y en consecuencia*, toda interpretación y aplicación de las disposiciones legales relativas al procedimiento, debe dirigirse á ese fin;" pues si otra regla de criterio adoptara en el presente caso, se vería obligada á declararse incompetente en un asunto que, evidentemente, es de su incumbencia, sólo porque el inferior no acertó á darle la dirección debida; lo que envolvería una denegación de justicia que la Corte no puede dejar de administrar en lo que es de su resorte.

Con tales antecedentes, la Corte entra á considerar:

1.° Que el señor Presidente del Estado del Cauca, autorizado por el Gobierno nacional, amnistió á los que cometieran el delito de rebelión, según consta de su decreto de 27 de Marzo de 1886.

2.° Que el Excelentísimo señor Presidente de la República, por decreto de 20 de Julio último, dictó amnistía general, exceptuando únicamente el delito de traición, en cuyo caso no está el procesado.

3.° Que según la reforma 43.ª, ley 46 de 1876, está establecido que por la prescripción de la pena, por amnistía ó indulto cesará todo procedimiento judicial contra el procesado, aunque no el curso de la acción civil que se haya intentado, ó el derecho de intentarla, por los daños y perjuicios causados por el delito ó culpa.

4.° Que, en consecuencia, la autoridad judicial no puede hoy, legalmente, hacer otra cosa que disponer inmediatamente la cesación del proceso, cualquiera que sea el estado de él, porque si otra cosa se hiciera, no cesaría el procedimiento como lo manda la ley: siendo esta la razón determinante para que la Corte prescinda ahora en esta causa, de la manera irregular como viene pronunciado el auto de proceder; y

5.° Finalmente. Que además de las consideraciones expuestas hay una poderosísima de equidad que consiste en que los conmilitones y aun los Jefes del procesado se hallan en plena libertad, á tiempo que éste se halla privado de ella.

Por tales consideraciones, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador general, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, revoca el auto apelado; declara que el delito cometido es el de rebelión; y manda que cese este procedimiento en virtud de las amnistías expedidas, quedando sólo el derecho de intentar, á los que la tengan ó se crean con derecho á ella, acción civil por los daños y perjuicios resultantes del delito.

Notifíquese, cópiese y devuélvase el proceso al Juzgado de su procedencia.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

SALVAMENTO DE VOTO.

Los suscritos Magistrados, Martínez y Angarita, tienen la pena de separarse de la opinión de sus Honorables colegas, consignada en la decisión precedente.

Los hechos que á ésta sirven de base, son los siguientes:

El Juez del Circuíto de Buga, en el extinguido Estado del Cauca, dictó auto de proceder contra Aristides Rengifo por el delito de cuadrilla de malhechores. Interpuesto por el procesado el recurso de apelación contra dicho auto, se le concedió para ante el Tribunal del Norte del Estado del Cauca. Este Tribunal, estimando, como estimó, que el delito cometido no era de cuadrilla de malhechores, sino de rebelión, se declaró incompetente para conocer, y dispuso que el Juez de primera instancia concediera para ante la Corte Suprema la apelación interpuesta por Rengifo, por ser esta Superioridad el Tribunal competente para conocer del delito de rebelión.

Como en la decisión que precede se revoca el auto de proceder del Juez del Circuíto de Buga, por el cual se llama á juicio á Rengifo por el delito de cuadrilla de malhechores, y se declara que el delito cometido es rebelión, los suscritos no aceptan dicha decisión, porque estiman que la Corte carece de jurisdicción para revocar el memorado auto de proceder, y porque consideran injurídica la misma resolución de la Corte, en cuanto declara que el delito cometido es rebelión y ordena sobreseer en el procedimiento.

Las razones en que los suscritos fundan su salvamento de voto, son las siguientes:

1.ª Que la jurisdicción de la Corte para conocer de una causa determinada, se funda en la ley que asigna á la Corte el conocimiento de la causa; asignación que se verifica en consideración á la naturaleza de ésta:

2.ª Que cuando la ley atribuye á un Tribunal el conocimiento de ciertos delitos, y á otro Tribunal el de otros distintos, cada Tribunal sólo tiene jurisdicción para conocer de los que le han sido atribuídos; de manera que la jurisdicción de cada

Tribunal para conocer de los delitos que la ley le asigna, *es privativa;*

3.ª Que cuando la ley atribuye el conocimiento de varios delitos á distintos Tribunales, se presenta una dificultad práctica, consistente en saber á qué Tribunal corresponde el conocimiento de cada delito que ocurra, porque como la ley únicamente dice—y no puede decir otra cosa—cuáles delitos corresponden á un Tribunal y cuáles á otro, preciso es saber en cada caso de qué delito se trata: si de uno que corresponde al Tribunal A, ó de uno que corresponde al Tribunal B;

4.ª Que la dificultad indicada se hace sensible, si para estimarla se prescinde por un momento del Juez de primera instancia, llamado por la ley á calificar el delito en el auto de proceder.

Supóngase, para fijar mejor las ideas, que cada uno de los Tribunales á quienes la ley asigna privativamente el conocimiento de varios delitos, debiera conocer en una sola instancia, y que todo funcionario de instrucción, concluído un sumario, estuviera en el deber de remitirlo al *respectivo* Tribunal. Desde luégo es evidente que para que dichos funcionarios pudieran remitir los sumarios al Tribunal *competente*, sería preciso dejarles la facultad de calificar el delito en todo sumario, porque de no ¿cómo podrían saber á qué Tribunal debían remitir cada sumario? La ley, en presencia de la necesidad de hacer la indicada calificación, y no estimando conveniente atribuír á un simple funcionario de instrucción, la facultad de calificar los delitos, ha creado Jueces con jurisdicción en limitados Territorios, y les ha ordenado, que previo un atento estudio de cada sumario, sobresean ó dicten auto de proceder, según haya lugar á ello: y que en dicho auto califiquen el delito, esto es, lo mencionen con la denominación que le da la misma ley.

5.ª Que calificado el delito, en cada caso, por un funcionario competente, cual es el Juez, queda desde luégo determinado el Tribunal que debe conocer; y de consiguiente debe observarse este modo de proceder como regla invariable, si se quiere la uniformidad de los procedimientos judiciales, y con ella, el orden y las garantías para todos.

6.ª Que en consecuencia, es absolutamente inadmisible, en la opinión de los suscritos, que calificado por el Juez un delito, no conozca de él en la apelación, el Tribunal que debe conocer á virtud de la misma calificación, sino un Tribunal distinto, á quien no está atribuído el conocimiento del delito mencionado en el auto de proceder; de manera que la calificación del Juez produzca efectos diametralmente opuestos á los que debe producir;

7.ª Que, aunque el Juez se equivoque en la calificación del delito, al Tribunal de apelación ó consulta que debe conocer con motivo de la expresada calificación, corresponde corregir el yerro en que haya incurrido el Juez. Así, por ejemplo, si el Juez llama á juicio por un delito cuyo conocimiento corresponde al Tribunal A; debiendo haber llamado á juicio por otro delito, de la competencia del Tribunal B, es el Tribunal A, á quien se ha remitido el proceso, quien debe declarar que no se ha cometido el delito porque se ha llamado á juicio, y en consecuencia revocar el auto sometido á jurisdicción; pero á este último Tribunal no le es potestativo resolver cosa alguna, respecto del delito cuyo conocimiento no le está atribuído por la ley, aunque sea este el delito que del sumario aparezca haberse cometido;

8.ª Que al declarar esta Superioridad, como declara, que no se ha cometido el delito de cuadrilla de malhechores, y revocar, como revoca, el auto de proceder del Juez del Circuíto de Buga, en que se declara haberse cometido este delito, la Corte falla sobre un asunto, cuyo conocimiento es *privativo* de otro Tribunal;

9.ª Que la jurisdicción de que se considera investida la Corte para declarar que el delito cometido es rebelión, tiene origen en una resolución ilegal del Tribunal del Norte del extinguido Estado del Cauca; y en concepto de los suscritos es injurídico ejercer una jurisdicción que no es resultado del cumplimiento fiel de las leyes de procedimiento;

10.ª Que la reforma décima quinta de la 53 de 1882, reformatoria del Código Judicial, que se invoca en apoyo de la sentencia *interlocutoria á que* se refiere el presente voto, tiene por objeto que las leyes relativas á los procedimientos se interpreten, al dictar sentencia, en sentido favorable á la justicia; lo cual presupone que hay jurisdicción en el Tribunal que dicta la sentencia; jurisdicción de que carece la Corte en el presente caso;

11.ª Que, finalmente, ocurre además la circunstancia de que el auto de proceder fué dictado por el Juez del Circuíto de Buga, como Juez del extinguido Estado del Cauca, y con arreglo á la legislación de ese Estado, y nó como Juez nacional; y á la Corte no le es dable conocer de las apelaciones de los autos que dicten aquellos Jueces, sino de los que pronuncien los Jueces nacionales.

En las consideraciones que preceden fundan los suscritos el presente salvamento de voto.

Bogotá, veinte de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

R. Antonio Martínez—Manuel J. Angarita—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En veinte de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general el auto dictado por la Corte en este juicio el veinte del mismo Octubre; junto con el salvamento de voto que á dicho auto se refiere.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme. Bogotá, Octubre veintidós de mil ochocientos ochenta seis.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

VISTOS DEL PROCURADOR GENERAL.

Señores Magistrados.

El día 3 de Julio de 1879, subiendo el río Magdalena, naufragó el buque de vapor *Simón-Bolívar*, en el punto denominado *Colombia*, situado arriba del conocido con el nombre de *Vuelta-Acuña*, entre los Estados de Santander y Antioquia, y á poca distancia del Distrito de Nare, en este último Estado.

Navegaba dicho vapor, llevando á remolque un *bongo* llamado *Superior*, dirigido por el patrón Pedro Julio y tripulado por Lucas Jiménez, Carlos Sosa, Domingo Vargas, Escolástico Rangel y Juan Villalobos.

El Capitán del buque, señor Federico Navarro, aprovechó los servicios que pudieron prestarle, en los momentos del peligro, el patrón Julio, su embarcación y los tripulantes; y aunque éstos parece que pusieron obstáculos para dar el auxilio que se necesitaba, por desacuerdo con el Capitán del vapor, respecto del precio de su trabajo, al fin accedieron á lo que se les pedía, y por varios días estuvieron conduciendo bultos de mercancías y equipajes del buque náufrago á las riberas del río, hasta el 6 de Julio en que emprendieron viaje de regreso á Barranquilla, llevando á su bordo, como pasajeros, á Octavio García, Antonio Caro, Antonio Altamar, Abelardo Navarro, Santiago Hernández y Vicente Gil, todos antiguos empleados del vapor *Simón-Bolívar*.

Algunos días después, el bongo *Superior* fué aprehendido en su viaje de bajada, por el señor Francisco J. Palacio, en su calidad de comisionado del Comandante general de la tercera División del Ejército, porque, se le denunció (foja 105 vuelta) que los tripulantes del bongo referido "se habían alzado con parte del cargamento del vapor *Simón-Bolívar*." Dice el General Palacio en su declaración (foja citada), "que poco tiempo después de la aprehensión, en el mismo día arribó á Puerto Nacional con el objeto de entregar el bongo, los objetos que contenía y los tripulantes á la autoridad civil; y encontrando que no había allí con quién entenderse y por tener necesidad de seguir su viaje, creyó conveniente poner dicha embarcación y sus tripulantes á disposición del Comandante del vapor de guerra *Stephenson Clarck*, que debía bajar al día siguiente, con el objeto de que dicho Comandante, que lo era el señor Ramón Collante, los pusiera á su vez á disposición de alguna autoridad civil que pudiera conocer del asunto."

Con fecha 23 de Julio del año citado, el señor Collante puso á disposición del Juez 2.º de la Provincia de Barranquilla á los doce individuos que componían la tripulación y pasajeros del bongo *Superior*, las mercancías en él encontradas y $ 741-75 en dinero, denunciándole el hecho de que dichos presos se habían alzado con parte de la carga salvada del naufragio del vapor *Simón-Bolívar*.

Dicho Juez, después de oír el dictamen del encargado del

Ministerio público, sobre su competencia para conocer del asunto, dictó el auto cabeza de proceso que corre á fojas 11 y vuelta de los autos, ordenando instruír el sumario correspondiente. Adelantado éste hasta donde ha sido posible, él confirma los hechos referidos, y además resultan los siguientes:

Consta por la declaración de varios testigos y por la confesión de los sindicados, que éstos se apropiaron por lo menos siete bultos de mercancías del cargamento del buque náufrago, tomados, nó en los depósitos de las mercancías salvadas, sino en las bodegas del mismo vapor, debajo de las aguas del río, después que, según el dicho de los responsables, se había perdido toda esperanza de continuar salvando más efectos.

Julián Valle, el testigo bien informado en el asunto, por ser el práctico del vapor *Simón-Bolívar*, y por haber presenciado todos los hechos materia de este sumario, se expresa así en su declaración (fojas 68 á 71).

...Después de perdido el vapor *Simón-Bolívar* en Vuelta-Colombia, sin que se hubieran salvado todavía los intereses que se podían salvar, trató el Capitán Navarro de obligar al patrón del bongo *Superior*, que iba á remolque del citado vapor, para que fuera á llevar al señor Francisco Javier Cisneros á Remolino-Grande, quien iba acompañado de unas señoras y otros individuos, entre ellos el señor Manuel Vargas, á lo que el patrón se opuso, manifestando que si no les pagaban lo que ellos pedían, no iban á ninguna parte, pues creían que no estaban obligados á llevar pasajeros para arriba; que entonces se calmaron el Capitán y el patrón quedando ambos contentos; que después comenzaron á trasbordar los bogas del mencionado bongo *Superior* en asocio de varios de la tripulación del *Bolívar*, los baúles y equipajes del señor Cisneros, señoras y demás caballeros; que concluído que fué el salvamento de los equipajes, le llamó la atención el patrón al Capitán, diciéndole que de qué manera era que él iba á trabajar con la tripulación, á lo que le dijo el Capitán, que él le daría cuatro pesos diarios á él (al patrón) y tres á la tripulación; á lo que contestó el patrón que así no le convenía á él, que si trabajaba era á la tercera parte; y contestó (el Capitán) que entonces nó, que no trabajara y que se perdiera todo, diciendo entonces el patrón que él se venía si no daban providencia de nada.

Entonces el Capitán le manifestó al exponente que llamara al patrón detrás de las calderas y que habiéndolo hecho así el declarante, concurrieron al lugar indicado, el Capitán, el patrón y el exponente; que estando allí reunidos le manifestó el Capitán al patrón que podía trabajar por la tercera parte, pero que no les manifestara á los bogas qué era lo que él (el patrón) iba á ganar y ellos también. Que entonces el patrón sedujo á los bogas manifestándoles que los iban á gratificar bien; que después que hicieron dos viajes á los depósitos que se habían designado, para poner la carga salvada, dijeron los bogas que ellos querían saber lo que iban ganando, á lo que contestó el patrón que les iba á decir la verdad; que era la tercera parte, y entonces el señor Sigarroa que iba de pasajero, que fué nombrado por el Capitán *Salvador de la Carga*, respondió que la orden que tenía era de pagar cuatro pesos diarios á cada uno de ellos, desde el patrón hasta el último boga, y respondieron todos en general que si era así no seguían más en el trabajo, lo que en realidad hicieron. Que entonces el patrón y los bogas exigieron del Capitán el pago de la tercera parte que les había ofrecido, y el Capitán les contestó que eso no se vería hasta en Barranquilla, y entonces ellos (patron y bogas) le contestaron que ellos lo querían allí mismo, puesto que era cuestión de bultos, y que se contentarían con sacar unos bultos del agua; á lo que convino el Capitán, manifestándoles que los sacaran de debajo de las bodegas, lo que hicieron efectivamente..... Que tomaron los citados tripulantes cinco bultos de mercancías de debajo de las bodegas, y al siguiente día por la mañana se fué el bongo citado al depósito de tierra, en cuyo trayecto tomaron dos bultos, lo que no le consta al declarante; que habiendo el exponente tomado una canoa se fué al depósito, en que se encontraba el bongo, y habiendo llegado allí mandó el declarante á llamar al Capitán que se encontraba en otro depósito.....con el objeto de que se cerciorara de la salida del predicho bote; que á pocos momentos llegó el Capitán á quien exigió el patrón del bote un papel como constancia para presentárselo al dueño del bote. Entonces el Capitán se puso á escribir sobre unas cajas el papel, y en medio que estaba escribiendo llamó al patrón y le manifestó que no necesitaba de tal constancia, puesto que ya había escrito por el vapor *Isabel*. Entonces el patron le dijo que confiaba en su palabra de honor, á lo que le contestó el Capitán que bien podía venirse. Entonces el patrón se botó aguas abajo. Antes de salir el bongo *Superior* de aquel punto, el patrón le preguntó al Capitán, si permitia que en el bongo bajaran algunos de la tripulación del *Bolívar*, y el Capitán contestó que sí se podía venir, pero que estuvieran convencidos que hasta ese día nada más les pagaba. Es cuanto le consta al exponente con relación á la tripulación mencionada, y añade que le consta que el Capitán Federico Navarro vendió al señor Ramón M. Salazar los efectos siguientes, que fueron sacados del vapor *Simón-Bolívar*, y entregados por el exponente:

50 Cajas de brandy;
16 Cargas de harina;
6 Cántaros de vino seco;
1 Caja de tazas.

Cita el declarante algunas otras personas á quienes el Capitán vendió efectos del buque náufrago y agrega:

A un señor Aureliano que reside en Carare y cuyo apellido ignora el exponente, le mandó entregar el citado Capitán Navarro doce bultos de mercancías, orden que dió al declarante y que el exponente no quiso ejecutar, manifestándole al Capitán que se los entregara él mismo, pues que el exponente no quería que se fuera á decir que era él quien se los había cogido. El Capitán entonces se lo ordenó al señor Santiago Castro, quien en efecto se los entregó al citado Aureliano.

Las declaraciones de Santiago Castro (foja 72), Antonio Caro (28), Octavio García (29), Antonio Altamar (30 á 31), Vicente Gil (31 á 32), confirman en los puntos conducentes el dicho de Valle, que, por otra parte, concuerda también en los puntos principales con las declaraciones indagatorias de los procesados.

Navarro y Sigarroa contradicen el dicho de los testigos citados; pero su testimonio no alcanza á destruír la fuerza probatoria de aquellas declaraciones, habida consideración al mayor número de los otros testigos y á su notoria imparcialidad en el asunto.

No hay duda, que hubiera sido conveniente la práctica de un cáreo entre Navarro y Julio y demás testigos que discrepan con aquél en sus testimonios, acerca de los hechos principales alegados por los sindicados, en descargo de su responsabilidad, como la fijación previa de la gratificación de salvamento, el consentimiento del Capitán en dejar los bultos salvados en poder de los salvadores, etc. Pero, para evitar mayores dilaciones, el infrascrito cree que pueda resolverse el asunto de acuerdo con lo que disponen los artículos 710 y 711 del Código Civil nacional.

Es evidente que los siete bultos en cuestión fueron salvados por los sindicados, y salvaron también la mayor parte de las demás mercancías que componían la carga del *Simón-Bolívar*, sin que por su trabajo hubieran recibido remuneración alguna. Los salvadores alegan, que esa remuneración fué convenida de antemano con el Capitán del buque, habiéndose determinado que sería igual á la tercera parte de las especies salvadas, y tienden á confirmar ese convenio los dichos de Julián Valle y Santiago Castro.

Los siete bultos que se apropiaron los salvadores componen una cantidad muy inferior á la tercera parte de los efectos que se salvaron, y que fueron depositados en varios puntos de la ribera del río, á disposición del Capitán, durante los días 3, 4, 5 y 6 de Julio.

El artículo 710 del Código Civil impone á las autoridades el deber de hacer restituír á los dueños las especies náufragas que se salvaren, mediante el pago de las expensas y la gratificación de salvamento, y el artículo 711 confiere á esa misma autoridad la facultad de fijar, según las circunstancias, esa gratificación con tal que ella nunca exceda de la mitad del valor de las especies.

Por consiguiente, es de opinión el infrascrito, que tuvo facultad legal el Juez de la Provincia de Barrauquilla para declarar que los siete bultos referidos eran la gratificación pagada á los salvadores del cargamento, la cual, por otra parte, no excede al límite fijado por el artículo 711 del Código Civil; y como tal declaración, puede considerarse el auto de sobreseimiento con que terminan estas diligencias, y el cual consulta dicho Juez con esa Superioridad.

En cuanto á la competencia del Juez de la Provincia de Barranquilla para conocer del asunto, se reproduce aquí la vista de este Ministerio, que corre á fojas 133 de los autos, fecha 20 de Agosto de 1881.

De acuerdo con lo expuesto, el infrascrito es de concepto que debe confirmarse el auto consultado.

Bogotá, 18 de Agosto de 1886.

CARMELO ARANGO M.

IMPRENTA DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 6.°

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 12 de Marzo de 1887.

CONTENIDO.

Pág.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Pronunciada en 1884, en favor de Manuel V. Enríquez y Quiteria Burbano, sobre empréstitos, etc. ... 41
Id. á favor del soldado Salvador Méndez, sobre pensión... 42
Id. á favor de Petronila del Río, por id. ... "

NEGOCIOS CRIMINALES.

Id. en causa sobre circulación de moneda falsa. ... 43
Id. en id. sobre traición ó violación del Territorio nacional ... 44
Id. en id. sobre falsificación de moneda. ... 45

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Sobre cesasión de un proceso contra Manuel Antonio Hurtado. ... 46
Id. impedimento be un Juez de Circuito en causa criminal. ... "

NEGOCIOS DE RESPONSABILIDAD.

Auto de sobreseimiento á favor de José Zoilo Pulido. ... 48

GACETA JUDICIAL.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEOGOCIOS CIVILES.

Secretaría de la Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Marzo 3 de 1887.

Habiendo ocurrido el señor doctor Federico Patiño solicitando que se mande publicar en la *Gaceta Judicial* la sentencia dada por la Corte en 4 de Febrero de 1884, en la demanda entablada por Manuel V. Enríquez y Quiteria Burbano, por expropiaciones de los años de 1860 y 1861, por no habérsele dado publicidad en el *Diario Oficial*, como estaba prevenido; averiguada la autenticidad de la sentencia, y el hecho de no haberse publicado, del cual no es responsable el Secretario actual, se dictó resolución mandando sacar copia auténtica de ella y publicarla en la *Gaceta Judicial*.

En tal virtud, se le da cabida.

Ramón Guerra A., Secretario.

Corte Suprema Federal—Bogotá, cuatro de Febrero de mil ochocientos ochenta y cuatro.

Vistes:—Manuel V. Enríquez y Quiteria Burbano, su madre, introdujeron demanda por medio de apoderado contra la Nación ante el Juez del Circuito de Pasto, en ocho de Junio de mil ochocientos sesenta y cinco, por cantidad de mil seiscientos cincuenta y un pesos ($ 1,651), procedente de los suministros y empréstitos que hicieron á los beligerantes en la guerra de 1860 y 1861, según el siguiente pormenor del libelo de fojas 8.

"Cien pesos que en moneda corriente dió en empréstito al Gobierno de la Confederación en 28 de Enero de 1861, los que fueron consignados en la Comisaría de guerra de la 2.ª División del Sur y sirvieron para los gastos de la guerra, documento de foja 1.ª, cien pesos. ... $ 100

"Diez pesos, que por empréstito y en moneda corriente dió al mismo Gobierno en 14 de Marzo de 1861 para los gastos de la guerra, y fueron consignados en dicha Comisaría, documento de fojas 2. ... 10

"Sesenta y cuatro pesos, dados en empréstito al mismo Gobierno en 17 de Abril de 1861, consignados en la misma Comisaría por el señor Enríquez y para los gastos de la guerra, documento de fojas 3. ... 64

"Ocho pesos que el señor Enríquez emprestó á ese Gobierno en dinero, para atender á los gastos de la guerra, en 3 de Julio de 1861, y consignados en la Tesorería pagadora; documento de fojas 4. ... 8

"Veinticinco pesos, valor de una vaca y un novillo, que suministró la señora Burbano en 17 de Septiembre de 1863 al presente Gobierno, para raciones de su Ejército, documento de fojas 5. ... 25

"Ciento ochenta pesos, valor de veinte escopetas que el señor Enríquez dió en venta para servicio de los que sostenían la soberanía de los Estados en la ciudad de Barbacoas, en 27 de Julio de 1860, al Gobierno. ... 180

"Cincuenta pesos, que importaban 150 varas de liencillo, en 18 de Enero de 1861, y que fueron dadas en empréstito al Gobierno de la Confederación, para vestuario de la tropa que sostenía á dicho Gobierno, siendo Jefe de Estado Mayor el señor Joaquín E. Paz, y por el señor Enriquez. ... 50

"Cien pesos que el mismo señor Enríquez, dió por empréstito forzoso, conforme á un decreto Ejecutivo del precitado Gobierno, en 13 de Octubre de 1862, para los gastos de la guerra, los que fueron dados al señor Evaristo Delgado y por orden del Tesorero general. ... 100

"Mil ciento catorce pesos, valor de un pagaré que el señor Pedro F. del Castillo, otorgó al Gobierno de la Confederación en 8 de Octubre de 1861, por derechos de importación en el puerto de Tumaco; ese pagaré se lo dieron en pago al señor Alejandro Gaviria por mayor suma que le debía dicho Gobierno, y él lo dió á mi instituyente Enríquez, y el señor Castillo pagó la suma relacionada al General Eliseo Payán, cuando en 1862 ocupó ese puerto en defensa de los Estados; de modo que el Tesoro Nacional ha sido pagado de la suma que él representa, dos veces, como se evidenciará en tiempo oportuno; pues esa suma debe pagársele á mi representado en dinero, y nó en bonos flotantes. Además, en un juicio ventilado con el señor del Castillo, resolvió el Tribunal debía cobrarse al Tesoro, tanto más cuanto que su valor fué empleado en los gastos de la guerra por uno y otro beligerante. ... 1,114

Suma. ... $ 1,651

El Juez de primera instancia, por sentencia de trece de Julio de 1868, que ha venido al conocimiento de la Corte por apelación concedida al apoderado de los demandantes, condenó al Tesoro Nacional al pago de mil quinientos cincuenta y un pesos ($ 1,551) distribuídos así: veinticinco pesos á favor de Manuel V. Enriquez; y declaró sin lugar, en calidad de por ahora, el pago de los cien pesos, valor de la letra girada en Pasto por Juan Nepomuceno Vejarano, en el carácter de Tesorero general del Gobierno de la Confederación Granadina, á favor de Eva-

risto Delgado y á cargo de Enríquez. Dejó, además, á salvo el derecho del demandante para que respecto á esta suma hiciera las gestiones que le convinieran para la efectividad del cobro.

Después de subsanada la nulidad que halló la Corte en los autos, en veintinueve de Septiembre de mil ochocientos sesenta y ocho, se practicaron varias diligencias á virtud de auto para mejor proveer, dictado por el mismo Tribunal en veintinueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta y dos. Hallándose el asunto en estado de ser sentenciado definitivamente, la Corte procede á estimar el valor jurídico de las pruebas producidas en primera y segunda instancia.

Las siete primeras partidas, por la suma de cuatrocientos treinta y siete pesos están comprobadas con los respectivos recibos debidamente autenticados.

La partida octava no es aceptable, porque el artículo 2.° de la ley 27 de 1865, dispuso lo siguiente: "No se reconocerán los empréstitos voluntarios hechos después del diez y ocho de Julio de mil ochocientos sesenta y uno á las fuerzas del extinguido Gobierno de la Confederación Granadina, entendiéndose por voluntarios todos aquellos empréstitos ó suministros que se verificaron sin apremio ó fuerza." Los cien pesos ($ 100) consignados por giro del titulado Tesorero general, del Gobierno de la Confederación, establecido en Pasto, á cargo de Enríquez y á favor de Evaristo Delgado, corresponden á una fecha posterior á la fijada por dicho artículo, y no consta que hubieran sido exigidos con apremio ó fuerza.

La partida novena por mil ciento catorce pesos, procedente del doble cobro que hizo la autoridad, de los derechos de aduana liquidados en Tumaco á cargo de Pedro F. del Castillo, suma que demanda Manuel V. Enriquez como endosatario del pagaré otorgado por Castillo á favor de la Nación, en ocho de Octubre de mil ochocientos sesenta y uno, descansa en los siguientes comprobantes: 1.° El pagaré otorgado por Castillo á favor de la Aduana, endosado á favor de Alejandro Gaviria por el Administrador de la Aduana, Manuel Urrutia, quien ha reconocido su firma, expresando que hizo el endoso por orden de la Intendencia del Cauca para cubrir un crédito del mismo Gaviria. Aparece el endoso hecho por Gaviria á favor del demandante Manuel V. Enriquez debidamente reconocido. También aparece el testimonio de Cleto M. del Castillo, ñador en el mencionado pagaré, que asegura haberse cubierto el valor de ese documento al Administrador de la Aduana cuando se constituyó el Gobierno provisorio. Resulta, pues, legalmente comprobado el endoso á favor de Enríquez, pero nó la circunstancia de haberse hecho el cobro por la Administración de la Aduana en tiempo del Gobierno Provisorio; porque el testimonio singular de Cleto M. del Castillo no es bastante para la justificación del hecho, y la parte no ha presentado ningún documento, tomado de las cuentas de la Aduana, que sirva para justificar el doble cobro de esos derechos de importación. Además, este crédito no ha podido ser demandado como expropiación, porque el doble cobro de parte de la Aduana, no constituyó una expropiación en los términos de la ley 27 de 1865.

Por estos fundamentos, la Corte Suprema Federal, administrando justicia en nombre de los Estados Unidos de Colombia y por autoridad de la ley, reforma la sentencia de primera instancia, y declara de cargo del Tesoro Nacional, el reconocimiento y pago á Manuel V. Enríquez, en bonos flotantes de tres por ciento, de la cantidad de cuatrocientos doce pesos ($ 412), y á favor de Quiteria Burbano de la cantidad de veinticinco pesos ($ 25) en la misma clase de documentos de crédito. Se absuelve al Tesoro por el mayor valor demandado.

Notifíquese, cópiese, remítase en copia á la Secretaría del Tesoro, publíquese en el *Diario Oficial* y devuélvanse los autos.

Manuel Z. de la Espriella—Francisco Muñoz—Froilán Largacha—Antonio María Restrepo C.—Hermógenes Wilson—El Secretario, *Joaquín Esguerra O.*

La anterior sentencia fué publicada en la audiencia del cuatro de Febrero de mil ochocientos ochenta y cuatro.

Esguerra O., Secretario.

En once de id. notifiqué la sentencia anterior, al señor Procurador general.

CALDERÓN—*Esguerra O.*, Secretario.

En id. la notifiqué al señor doctor Federico Patiño.

FEDERICO PATIÑO—*Esguerra O.*, Secretario.

Es copia conforme. Bogotá, cuatro de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete.

Ramón Guerra A., Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintiuno de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—El soldado Salvador Méndez ocurrió ante el Poder Ejecutivo, solicitando pensión del Tesoro nacional, como soldado inválido, é indicando las personas que podían declarar sobre las causas de la invalidez.

Por la Secretaría de Guerra y Marina fué pasada la solicitud á la Comandancia general del Ejército de la Nación, para que allí se preparara el expediente y se crearan las pruebas que se creyeran necesarias, para la comprobación y justificación del derecho reclamado.

En el Estado Mayor del Ejército se practicaron las diligencias conducentes al efecto, y resulta de las declaraciones de los Sargentos Mayores Leonardo Peña, Juan María Guevara y Daniel Guzmán, recibidas con citación del Ministerio público, y de la lista para pasar revista de Comisario en el Cuartel general de la 1.ª División del Ejército, que Salvador Méndez, soldado de esa División y del Batallón 16 de infantería, fué herido el día seis de Febrero, en el combate librado en Mariquita, por fuerzas de esa División al mando del General Juan N. Mateus, que obraba sobre los rebeldes de los Estados del Tolima y Antioquia, que Méndez en esa acción de armas, se condujo con valor y abnegación, y que está destituído de recursos.

Tres médicos han hecho el reconocimiento, y de sus exposiciones, ampliadas ante la Corte, resulta que Méndez recibió una herida de bala hacia la parte inferior é interna del muslo derecho, y que por no habérsele extraido el proyectil y que por el desorden que este causó en las partes cercanas á la articulación de la pierna, el paciente ha perdido el uso completo de este miembro por toda la vida.

El Estado Mayor general del Ejército y Ministerio de Guerra informan favorablemente al peticionario, y ordenan que pase el expediente á la Corte para los efectos del artículo 878 del Código Militar.

Oído el señor Procurador, quien opina por que se conceda la pensión, la Corte, teniendo en consideración que se han llenado los requisitos exigidos por el artículo citado, en su primera parte, y por los numerales 11, 12 y 13, artículo 879 del mismo Código, juzga que el peticionario está en el caso que determina el artículo 856 con relación al 850 de este Código y que debe concedérsele la pensión señalada á los inválidos en el penúltimo inciso, artículo 858 de allí.

En consecuencia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se concede al soldado Salvador Méndez la pensión de cinco pesos ($ 5) mensuales, de por vida, que se le pagarán del Tesoro nacional y desde la fecha de esta sentencia.

Notifíquese, publíquese, remítase copia al Cuerpo Legislativo y archívese el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper.—Manuel J. Angarita.—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha.—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del veintiuno de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis se publicó la anterior sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En veintidós de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis notifiqué la sentencia anterior al señor Procurador general.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

En veintidós de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis notifiqué la sentencia anterior al interesado Salvador Méndez, y no sabiendo firmar lo hace un testigo.

Testigo, *Ignacio Ruiz O.*—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme. Bogotá, Octubre veintiseis de mil ochocientos ochenta y seis.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintitrés de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos.—El señor Francisco Groot, como apoderado de la señora Petronila del Río, solicitó del Poder Ejecutivo nacional,

por conducto del Estado Mayor general del Ejército, el reconocimiento y pago de la pensión á que cree que tiene derecho su poderdante, como hija legítima del Coronel Antonio del Río, militar de la Independencia.

A su solicitud acompaña los siguientes documentos:

1.° El poder que la expresada señora le confirió, por escritura pública, ante el Notario principal de la Provincia de Cartagena, á veintidós de Marzo de mil ochocientos ochenta y cuatro.

2.° Certificación del mismo Notario, en que hace constar que inscribió en el libro respectivo, la partida de matrimonio de Antonio del Río y Clara Montes, partida que fué tomada del archivo de la iglesia parroquial de Cartagena, y de la cual aparece que fueron casados el tres de Noviembre de mil ochocientos veinticuatro.

3.° Certificación del mismo empleado en que hace constar la inscripción de la partida de nacimiento de la señora Petronila del Río, tomada del Archivo eclesiástico, y de la cual aparece que dicha señora fué bautizada en Cartagena el diez y nueve de Octubre de mil ochocientos veintisiete y que es hija legítima de los señores Antonio del Río y Clara Montes;

4.° Igual certificación del Notario en que hace constar la inscripción de la partida de defunción de la señora María Ascención de la Espriella; y por dicha partida aparece que esta señora era viuda del Coronel Antonio del Río y que falleció en Cartagena el ocho de Junio de mil ochocientos ochenta y uno;

5.° Las declaraciones rendidas ante el Juez 1.° de la Provincia de Cartagena, con asistencia del Representante respectivo del Ministerio público, por Juan N. Pombo, Carlos A. Merlano y Juan Antonio Araújo, quienes aseguran que la señora Petronila del Río es hija legítima del Coronel Antonio del Río y de la señora Clara Montes; que la expresada señora del Río ha sido y es de buena conducta; que carece de medios de subsistencia; y que durante la vida del Coronel del Río, ella vivió á su lado, recibiendo de su padre los recursos que necesitaba; y

6.° La hoja de servicios del Coronel del Río, formada en el año de mil ochocientos cuarenta y nueve.

Tanto el Estado Mayor del Ejército, como la Secretaría de Guerra y Marina de la República, conceptuaron que la solicitante tenía derecho á una pensión del Tesoro público, por hallarse comprendida en el caso 1.° del artículo 858 del Código Militar; y, por último, fueron remitidos los documentos á esta Superioridad, á fin de que se dictara la resolución definitiva, acerca de la petición elevada.

La Corte, por auto para mejor proveer y de acuerdo con las indicaciones hechas por el señor Procurador, ordenó la complementación de los documentos, con la certificación del señor Secretario del Tesoro, sobre si la solicitante había ó nó recibido pensión del Tesoro público; y con la comprobación de que la misma solicitante es hija única del Coronel del Río y que permanece soltera.

La circunstancia de no haber recibido pensión, se comprobó con la certificación del señor Secretario del Tesoro; y las otras dos circunstancias con la declaración de los señores Juan N. Pombo y Carlos A. Merlano, y con una certificación jurada del señor doctor Rafael Núñez, expedida en Cartagena á veintiseis de Julio del presente año.

De la hoja de servicios del Coronel Antonio del Río, aparece que este militar, con el abono del tiempo doble de campaña, sirvió veinte años, diez meses diez y siete días, á contar desde el treinta y uno de Diciembre de mil ochocientes catorce, hasta el treinta y uno de Mayo de mil ochodientos cuarenta y nueve; que hizo tres campañas, y se halló en varias acciones de guerra, contándose entre las primeras el sitio dirigido por el Ejército español contra la ciudad de Cartagena en el año de mil ochocientos quince; y, en fin, que ascendió desde soldado hasta Sargento Mayor, empleo que desempeñaba en la fecha en que fué formada su hoja de servicios.

Según el examen que se ha hecho de los servicios del Coronel del Río, este individuo debe ser considerado como militar de la Independencia, pues sirvió dentro del término fijado por el artículo 852 del Código Militar.

Ahora bien, el número 1.° del artículo 858, establece que á las viudas, padres y huérfanos de los antiguos militares de la Independencia, muertos en acción de guerra ó en el goce ó con derecho de pensión, se les darán hasta cuarenta pesos mensuales, sin poder exceder de ochenta para todos; y como está demostrado que la solicitante es hija legítima del Coronel del Río, y como este militar tenía derecho á pensión por haber prestado sus servicios en el período de 1810 á 1827, es claro que la disposición últimamente citada, le es aplicable á la misma solicitante.

Además, como ya se ha expresado, están demostradas las circunstancias á que, relativamente, alude el artículo 879 del Código Militar.

Por lo expuesto, la Corte Suprema nacional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: que la señora Petronila del Río tiene derecho á una pensión mensual de treinta pesos ($ 30), pagaderos del Tesoro nacional, como hija legítima del Sargento Mayor de la Independencia Antonio del Río. De esta pensión comenzará á gozar la agraciada desde la fecha de la presente sentencia y durará mientras permanezca soltera.

Notifíquese, cópiese, publíquese en el *Diario Oficial*, pásese una copia al Cuerpo Legislativo y archívese el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del veintitrés de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis se publicó la anterior sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En veintisiete de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la sentencia que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

En veintidós de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis notifiqué al apoderado, y firma.

Groot—Guerra A., Secretario.

Es copia conforme. Bogotá, Noviembre veinticuatro de mil ochocientos ochenta y seis. El Secretario, *Ramón Guerra A.*

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Octubre catorce de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—El Juez 2.° en lo criminal, del Circuíto de Medellín, en el extinguido Estado de Antioquia, consulta con esta Superioridad la sentencia absolutoria pronunciada en el juicio que se siguió contra Mateo Arango y José María Zapata, por atribuírseles el delito de circulación de monedas falsas colombianas.

Dió lugar á la instrucción sumaria la circunstancia ocurrida en la fracción de "La Granja," el veintiocho de Abril de mil ochocientos ochenta y cuatro, en el billar del señor Ricardo Restrepo M. Estando jugando á los naipes Mateo Arango, José María Zapata y otros individuos, se comenzó á notar que circulaban en el juego monedas falsas colombianas, de á cincuenta centavos, y se sospechó por varios de los que allí estaban, que los circuladores fueran los expresados Arango y Zapata.

Esta circunstancia vino á coincidir con la de que, en la misma noche, y antes del juego de cartas en el billar de Restrepo, los mismos sindicados habían ido á la tienda de Juan Antonio Ochoa, con el objeto de tomar licor, y habiendo pagado Arango con una moneda de á cincuenta centavos, Ochoa se la rechazó, por ser falsa; entonces Arango sacó otras monedas de la misma clase, las cuales le fueron también rechazadas, hasta que su compañero Zapata dió una moneda buena. Según refiere Tomás María Agudelo, quien se hallaba también jugando en el billar de Restrepo, aquél ganó á Mateo Arango un peso de ley en apuestas, y habiéndoselo cobrado, este le propuso al declarante que le admitiera una peseta buena y otra mala, en lo cual convino Agudelo.

Tres ó cuatro monedas de las obtenidas por la autoridad, fueron reconocidas por peritos y analizadas por el empleado respectivo de la Casa de Moneda de Medellín, y fueron declaradas falsas, aunque no aparece en el proceso acreditada la procedencia efectiva de las monedas.

Ahora bien, aunque las circunstancias referidas se relacionan entre sí, y se refieren al hecho principal, objeto de la inquisición, tales indicios no tienen todas las condiciones que la ley requiere para esta clase de pruebas. Al efecto, el primer indicio, ó sea el hecho de haber aparecido varias monedas falsas durante el juego de cartas, está, es verdad, aseverado por un número plural de testigos; pero ninguno de ellos manifiesta haber presenciado que los sindicados hubieran hecho circular

aquellas monedas, ni se sabe precisamente de qué manos salieron, de suerte que el dicho de tales testigos sirve apenas para fundar una sospecha ó una conjetura.

El segundo, ó sea el hecho de haber dado los procesados monedas falsas en pago del licor que compraron á Juan Antonio Ochoa, no está plenamente probado como lo exige el artículo 1,623 del Código Judicial, pues sólo está atestiguado por el mismo señor Ochoa.

El hecho de haberle propuesto Mateo Arango á Tomás María Agudelo que le recibiera una peseta mala y otra buena, está plenamente probado por la confesión del sindicado y por el dicho de Agudelo. Este indicio, aunque en realidad es grave, admite una infirmación, consistente en la posibilidad de que otro individuo hubiera sido el circulador de las monedas falsas, en el juego de cartas, y que, por consiguiente, la moneda que Arango dió á Agudelo pudiera haber venido á poder de aquél sin su culpa; pero aunque el indicio conservara toda su fuerza, conforme al artículo 1,617 del Código citado, un sólo indicio no hace jamás plena prueba, á no ser que sea necesario ó presunción legal, lo cual no sucede en el presente caso.

Aunque fueron llamados á juicio tanto Mateo Arango como José María Zapata, éste fué declarado reo prófugo, y por tanto la sentencia se ha concretado al primero.

Por lo expuesto, y no habiendo otras pruebas que practicar, la Corte Suprema nacional, de acuerdo con el concepto del señor Procurador, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la sentencia consultada, y en consecuencia absuelve á Mateo Arango del cargo por el cual fué llamado á juicio.

Notifíquese, cópiese, publíquese en el *Diario Oficial*, y devuélvase el proceso.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

La sentencia anterior se publicó en la audiencia del día de hoy—catorce de Octubre de 1886.

Ramón Guerra A., Secretario.

En quince de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la sentencia que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

En diez y ocho de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis se notificó la sentencia anterior al defensor del los procesados Mateo Arango y José María Zapata.

Federico Patiño—Guerra A., Secretario.

Es copia conforme. Bogotá, Octubre diez y nueve de mil ochocientos ochenta y seis. El Secretario, *Ramón Guerra* A.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Octubre diez y seis de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—Con motivo de la violación del Territorio nacional, verificado en el Puerto de la Buenaventura en el mes de Agosto del año anterior por la tripulación armada del Crucero italiano "Flavio Gioja," que navegaba en las aguas del mar Pacífico, el Jefe municipal de aquel Territorio, armado de un celo verdaderamente patriótico y laudable, considerando, y con razón, que el Territorio es la más inviolable de las propiedades de un país, creyó que no sólo era un grave escándalo el que varios Colombianos residentes en la ciudad ultrajada se regocijaran con notable alborozo por la afrenta de la Patria, sino que debía ser un gravísimo delito el que alguno de esos se pusieran en relación con los invasores, sirviéndoles de prácticos y de espías, para facilitarles el desembarque; y con tal motivo abrió investigación sumaria por la vía criminal, por auto de diez y nueve de Agosto del año precedente, acerca de los hechos ya mencionados.

Adelantado el sumario con diligente solicitud, resultaron sindicados de aquellos hechos que investigaba el Jefe municipal, y con mayor ó menor participación, Carlos Vásquez (Bulla), Juan Antonio Micolta, José de la Cruz Murillo (Calimeño) y Manuel Orejuela. Pasóse luégo la actuación al Juez nacional *respectivo*, que lo era el de la ciudad de Buenaventura; y allí el Agente del Ministerio público, con razón ó sin ella, pidió que se declarara con lugar á formación de causa criminal por el delito de traición contra todos los sindicados. El Juez, seguramente porque no encontró bastantes las pruebas sino respecto á Carlos Vásquez, se limitó, por auto de doce de Septiembre de mil ochocientos ochenta y cinco, á declarar con lugar la formación de causa solamente contra éste último, por el delito de traición definido en el artículo 161 del Código Penal, después de establecer el hecho que las fuerzas del Crucero italiano, "Flavio Gioja" rodearon la isla con el fin de evitar que el súbdito italiano Ernesto Cerruti, fuera conducido á la ciudad de Cali, en donde se le seguía un juicio por el delito de rebelión contra las autoridades legítimas de la Nación, y de donde lo había reclamado el Juez competente. Pero el Juez de Buenaventura no providenció cosa alguna, como era de su deber, respecto de los otros sindicados, Micolta, Murillo y Orejuela, ora sometiéndolos á juicio, si para ello había motivo, ora sobreseyendo en el procedimiento respecto de esos individuos, si no había prueba suficiente en su contra. Y debió hacerlo así, porque estaban sindicados, porque se les había tomado declaración indagatoria, porque el Ministerio público había promovido contra ellos, y porque tanto los sumariados como la vindicta pública tenían perfecto derecho á que se decidiera acerca de la culpabilidad ó inculpabilidad, en observancia, además, de lo determinado en el Capítulo 1.°, Título 7.°, Libro 3.° del Código Judicial de la Nación.

Siguióse la causa únicamente contra Vásquez, y después de recibidas las pruebas aducidas por el defensor y celebrado el juicio del caso, terminó la primera instancia con la sentencia de veinticuatro de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco, en la cual se absuelve al procesado. Como esta sentencia no fuera apelada, ha venido en consulta á esta Superioridad, en donde, después de la tramitación respectiva y oído el dictamen del señor Procurador general—quien solicita la confirmación del fallo—de acuerdo con el pedimento del defensor del reo; la Corte pasa á resolver la consulta de la expresada sentencia, mediante las consideraciones que en seguida se expresan.

Efectivamente nuestras leyes, al definir el delito de traición, no consideraron, ni podían considerar, que este delito pudiera tener lugar por parte de un colombiano en otra forma que en la de auxiliar á los que yá figuraran como enemigos declarados de la Patria; porque no era natural suponer que los que eran reputados como amigos, en plena paz, sin rompimiento alguno de hostilidades y estando de por medio los principios universales del Derecho internacional ejecutaran violencias que sólo son propias de los enemigos. Así, por manifiesta que sea la participación del reo al cual se refiere esta causa, en los hechos ejecutados por el Crucero "Flavio Gioja," en la ciudad y Puerto de Buenaventura, es evidente que en ello no hubo delito de traición por maliciosa que fuera la acción y por más que ella contrariara los dictados del patriotismo y del decoro nacional; porque falta la existencia de la ley violada, que es la que constituye la delincuencia.

Este motivo por si sólo es bastante para la absolución en esta causa habida consideración á los términos en que está redactado el artículo 161 del Código Penal, de donde se tomó el cargo deducido contra el reo; habiéndose probado, como sucedió, que Colombia no se hallaba en guerra con ninguna otra Nación; que el Crucero italiano entró y fondeó en el puerto en virtud de las relaciones de amistad existentes entre los Gobiernos de Italia y Colombia; y que fué inesperado é imprevisto el acto de violación del Territorio colombiano ejecutado por el Comandante y marineros del "Flavio Gioja," sin prevención alguna de parte de su Gobierno. Se probó, además, aunque esto ya aparezca como supererogatorio, que el procesado Vásquez era dependiente de la casa de Cerruti, empleado por largos años al servicio de este; que se le ocupaba frecuentemente como boga ó remero; que es enteramente ignorante; y que no procedió sino en obedecimiento á las órdenes de su señor.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema nacional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el parecer del señor Procurador general, confirma la sentencia consultada.

Y por cuanto el Juez nacional del Circuito de Buenaventura, Francisco T. Bernate ha podido incurrir en responsabilidad por omisión en el cumplimiento de sus deberes, sáquese copia de lo conducente á este respecto y sométase al repartimiento.

Y como por otra parte, según lo insinúa el Juez de primera instancia en su auto de proceder, el hecho de la invasión ejecutado en Buenaventura, tuvo por objeto impedir el cumplimiento de una providencia de autoridad legítima, por medio de una reunión tumultuaria de una porción de gentes armadas, que es lo que constituye el delito de motín, ó por lo menos el definido

en el artículo 232 del Código Penal; y como auncuando los autores principales del hecho no se hallen sujetos á la jurisdicción nacional, sí lo están los que hayan podido ser cómplices, auxiliadores ó encubridores, ayudando á que la autoridad quedara burlada y sus providencias sin efecto; se ordena al Juez de primera instancia que saque también copia de lo conducente y adelante la actuación, á efecto de averiguar la culpabilidad que, al concepto últimamente mencionado haya podido tener lugar, ya sea tocante á los individuos primitivamente sindicados, ya sea tocante á algunos otros.

Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente al Juzgado de su origen.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock B.—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y ocho de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general, el auto que precede con el salvamento de voto que á él se refiere.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

NOTA.—En el auto anterior el señor Magistrado Luis S. de Silvestre salvó su voto de la manera siguiente:

Siento mucho tener que manifestar á mis honorables colegas que no estoy de acuerdo con ellos en la decisión que antecede; referente á la sentencia del Juez de primera instancia de Buenaventura en que absuelve á Carlos Vásquez por el delito de traición definido en el artículo 161 del Código Penal.

La Corte confirma el fallo absolutorio por dicho delito. La redacción mista de la decisión anterior hace patente que los hechos que constituyen el delito de traición están perfectamente probados.

El artículo del Código Penal aplicable dice:

"Artículo 161. El colombiano que por hechos ó con ejes facilitare ó procurare facilitar á los enemigos la entrada de sus tropas en el Territorio de los Estados Unidos de Colombia; ó promoviere en igual forma los progresos de las armas enemigas contra las colombianas de mar ó tierra; ó entregare, ó procurare por hechos ó por consejos que se entregue á los enemigos alguna ciudad, puerto, plaza de armas, castillo, fortaleza ó punto fortificado, arsenal, almacén, parque, escuadra, buque ó fábrica de municiones pertenecientes á la Nación, es *traidor* y sufrirá la pena de diez años de presidio."

La cuestión está reducida á saber si los italianos del "Flavio Gioja" obraron como enemigos.

Enemigo, en el sentido usual de la palabra, es lo mismo que *contrario*; y es necesario tomar la palabra en su acepción corriente porque la ley no la define.

¿Podemos decir que los italianos vinieron como amigos á *violar el Territorio nacional?*

¿Si no vinieron como amigos, qué serían?

Para que haya enemigo no se necesita que haya guerra, no se necesita sino que haya quien ejerza actos de hostilidad.

Hostilidad viene de *hostis*, enemigo público.

Los italianos que violaron el territorio y ejecutaron actos de hostilidad fueron enemigos de la República y si el procesado les prestó ayuda, no sé por qué no sea *traidor*, ni penado como tal.

Así, pues, no puede decirse que falta la existencia de la ley violada. El artículo 161 del Código Penal responde á esto.

Quiero conceder que para que haya *enemigos* se necesite que haya *guerra*.

Ninguno de los publicistas que he podido consultar en el poco tiempo que la ley me da para salvar mi voto, define la guerra de una manera aceptable—pero en la obra de Bello comentada por don Carlos Martínez Silva, encuentro estas palabras: "Dos naciones se hallan en estado de guerra cuando á consecuencia del estado de la fuerza se interrumpen sus relaciones de amistad." (Parte 2ª, Capítulo 1.° al empezar.)

Eso fué lo que nos pasó con Italia, pues á consecuencia del empleo de la fuerza, se interrumpieron nuestras relaciones de amistad.

Bello dice: "Pero el entrar en territorio ajeno á mano armada es una operación hostil, un insulto, que constituye un estado de guerra." (Parte 2ª, Capítulo 1.°, § 4.°)

Y no se diga que para que haya guerra se necesita declaración, porque entonces la llamada de "siete años," no fué guerra porque Federico de Prusia la hizo sin declararla. La última guerra entre Francia y China está en el mismo caso. La guerra es un hecho que no necesita declaratoria de Cancillería.

Además de las razones que dejo apuntadas, me atrevo á exponer otra de orden distinto, razón de conveniencia si se quiere, y que para Jueces como nosotros no podría valer nada; pero que apoyada de otras de Justicia, como lo son para mí las que he presentado, sí me parece digna de tenerse en cuenta.

El fallo de la Corte tiene mayor trascendencia de lo que hoy nos figurámos.

¿No será interpretado como un permiso á todos los colombianos, de ayudar á los que quieran ejercer actos de hostilidad y violencia contra la República, siempre que los que pretendan cometerlos lo hagan sin que la Nación á que pertenezcan haya declarado la guerra? ¿No es decirles, contad con que por más traidores que seais, la Corte no os considera como tales?

Tales son en resumen, las poderosa razones que me obligan á disentir de mis honorables colegas, que á no hallarlas poderosísimas para mi conciencia, no me obligarían á separarme de su respetable opinión.

He firmado la decisión porque á ello me obliga la ley pero salvo mi voto.

Bogotá, Octubre diez y seis de mil ochocientos ochenta y seis.

Luis S. de Silvestre—Martínez—Samper—Angarita—Cock Bayer—Largacha—Morales—Ramón Guerra A., Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintitrés de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos—El Juez del Circuito de Túquerres, por auto de diez de Diciembre de mil ochocientos ochenta y cinco, abrió causa criminal contra José Caicedo y Manuel Goyes por el delito de falsificación de moneda; contra el primero como autor y contra el segundo, como encubridor del delito.

Caicedo fugó de la cárcel y hubo de seguirse el juicio contra Goyes solamente, en favor del cual se dictó sentencia absolutoria con fecha veinticuatro de Marzo último, la cual se consulta con la Corte.

En Marzo de mil ochocientos ochenta y cinco fué tomada á Goyes, por el Alcalde Eulogio Obando, en el pueblo de Samaniego, jurisdicción del Circuito de Túquerres y en casa de Francisco Alviar, una bolsa que contenía siete pesos, diez y siete y medio centavos en monedas de á dos y medio centavos de las denominadas *cuartillos*, las que examinadas por peritos, en dos reconocimientos sucesivos, resultaron ser de plata y cobre y no fabricadas en las Casas de moneda oficiales.

Interrogado Goyes varias veces por el funcionario instructor sobre la procedencia de las monedas, ha dicho que le fueron recomendadas por José Caicedo, platero, en Túquerres, para que las entregara á Juan Cespas, de Samaniego, y que estando éste ausente en Pasto, había dejado el saco sin saber cuántas ni qué clase de monedas contenía, en casa de Alviar.

Dijo también Goyes que Agustín Benavides, Bautista y Encarnación Flórez y Manuel Calvache, sabían que Caicedo no negaba la entrega que había hecho á Goyes del saco con las monedas. Interrogados estos testigos declararon á fojas 3, 14, 15 y 16 de los autos, y se ratificaron posteriormente, á petición del defensor, que era cierto lo que en su justificación decía el sindicado, y que siendo reconvenido éste por Caicedo á causa del dinero, Goyes se había comprometido á pagarlo ó á firmarle un documento.

Caicedo niega lo que Goyes afirma, aun en careo verificado entre los dos.

No suministra el proceso más datos sobre la culpabilidad de Goyes, que los expuestos, y estos evidentemente son tan débiles, que ni aun mérito para abrir causa comportan, y mucho menos para condenar al procesado como encubridor del delito de falsificación de moneda.

Si resultara que él sabía, cuando recibió las monedas en Túquerres para llevarlas á Samaniego, que ellas eran falsas, sería responsable del delito de circulación de moneda, por el cual no se le llamó á juicio, y por consiguiente no se le podría condenar, por prohibirlo el artículo 1,630 del Código Judicial.

La conducta de Goyes al llevar las monedas á casa de Alviar, por no haber hallado al individuo á quien iban dirigidas, indica, fuera de lo dicho, que aquél obraba sin malicia, porque de lo contrario hubiera ocultado ó tratado de ocultar las especies falsificadas.

El oficio de platero que Caicedo ejerce, sus negativas, no obstante las declaraciones citadas, que lo contradicen, y la nula cultura de Goyes probada en los autos, aumentan las probabilidades en favor de la inocencia de éste.

Por lo tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en

nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con la opinión del señor Procurador, confirma la sentencia consultada.

Notifíquese, cópiese, publíquese en el *Diario Oficial* y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez.—José M. Samper.—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre.—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del veintitrés de Octubre se publicó esta sentencia.

Ramón Guerra A.

En veinticinco de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la decisión precedente.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme. Bogotá, Octubre veintisiete de mil ochocientos ochenta y seis.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Octubre catorce de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—El ex-Teniente-coronel Manuel Antonio Hurtado, fué sometido á juicio por sus comprometimientos en la última rebelión contra el Gobierno nacional y contra las autoridades del extinguido Estado del Cauca. Había tomado conocimiento la autoridad civil en esta causa, cuando, por resolución del Presidente del mencionado Estado, fechada en Popayán, el veintiuno de Enero del corriente año (foja primera), se dispuso que el General Jefe de Estado Mayor del Ejército del Cauca convocara un Consejo de guerra verbal, para que juzgara al expresado Hurtado, como cabecilla rebelde y como responsable de otros delitos y faltas.

El Consejo de guerra no se hizo esperar; y pasados á éste los documentos que obraban contra el reo, que no son otra cosa que unas cartas relativas á las operaciones de la guerra, la mayor parte dirigidas á su propio hermano Ezequiel; después de recibida la confesión y de nombrarle defensor al procesado, terminó el Consejo sus sesiones, que fueron varias, el veinticuatro de Enero último, declarando que Manuel Antonio Hurtado incurrió en la pena que se aplica á los traidores, condenándolo á sufrir la de destierro por seis años ocho meses; la de privación de todo destino, cargo y empleo público, y de toda pensión pagada por la República; la suspensión de los derechos políticos; el pago de las costas procesales; y la indemnización de los daños y perjuicios causados con motivo del delito.

De este fallo se alzaron para ante esta Suprema Corte, tanto el reo como su defensor, interponiendo los recursos de apelación y de nulidad, y nombrando como defensores ante este Supremo Tribunal á los doctores Emiliano Restrepo E. y Emigdio Paláu. Concedido el recurso y notificada la concesión, han venido los autos para la última instancia; y surtida la tramitación del caso, posesionados los defensores y citados para la audiencia pública, ni estos defensores, ni el señor Procurador, han dicho cosa alguna en el asunto. Esto sentado, la Corte pasa á resolver sobre el mérito de la actuación.

Como se deja establecido, el delito por el cual se llamó á juicio á Hurtado, no fué otro que el de rebelión, ni fué otra la naturaleza de este delito, atendidos los antecedentes que obran en autos. Tampoco fué condenado bajo otro carácter, pues aun cuando el Consejo lo asimiló á los traidores para el efecto de la pena, no lo condenó como traidor.

Con esto basta para que la Corte se abstenga de toda otra consideración, prescindiendo, como debe prescindirse, de los motivos alegados respecto del recurso de nulidad. Basta establecer que actualmente no hay ya razón ni motivo para continuar un proceso referente á un delito extinguido por indulto y por remisión de la pena, como aparece del decreto de Su Excelencia el Presidente de la República, de 20 de Julio del corriente año.

Por estos fundamentos, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara terminada esta causa, cesante todo procedimiento en ella y sin eficacia la sentencia dictada por el Consejo.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock B—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y ocho de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme.

Bogotá, Octubre 27 de mil ochocientos ochenta y seis.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Octubre veintinueve de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—Por auto de trece de Septiembre del año en curso, se manifestó impedido el Juez 5.° del Circuito de Bogotá, para continuar interviniendo en la instrucción del sumario contra José G. Rivas y José Eusebio Caro, por falsificación de billetes del Banco Nacional, por cuanto su finado primo hermano y cuñado, Cayo Arjona B., aparece sindicado del mismo delito.

El Agente Fiscal, en cuyo conocimiento se pusieron las causales de impedimento, que son las expresadas en los números 1.° y 2.° del artículo 665 del Código Judicial, no convino en que dicho Juez siguiera conociendo del asunto, y, en consecuencia, se pasó el sumario al Juez 6.° del Circuito para que aprehendiera su conocimiento. Recibido por él, declaró no ser legal la *causal de recusación* manifestada por el Juez 5.°, y mandó devolver á éste el proceso; pero el Agente fiscal, á quien se notificó el auto, apeló de él para ante este Supremo Tribunal; y habiéndosele otorgado el recurso en el efecto devolutivo, se está en el caso de resolverlo. Para esto, la Corte considera:

1.° Que sustanciado el impedimento en los términos prevenidos en los artículos 678 y 679 del Código citado, es decir, haciéndolo saber á la parte á quien interesaba conocerlo, que en el caso era el encargado del Ministerio público, y no habiendo convenido éste en que el Juez 5.° continúe conociendo del negocio, quedó *por el mismo hecho separado* de él, en fuerza de lo dispuesto en el artículo últimamente citado, y la instrucción del sumario pasó á ser de la competencia del funcionario llamado á subrogar á dicho Juez.

2.° Que á corroborar lo que acaba de decirse, viene el artículo 684 de dicho Código, pues según él, manifestado el impedimento por el Juez en quien concurriese, y consentida la separación de éste por la parte á quien ella interese, el Juez á quien toque el conocimiento del incidente declarará separado al Juez impedido, y aprehenderá el conocimiento del asunto principal; y

3.° Que, en consecuencia, el Juez 6.° no ha tenido por qué examinar la legalidad del impedimento, que impropiamente ha llamado causal de recusación.

Por lo tanto, la Corte Suprema Nacional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el auto apelado, y dispone que el Juez 5.° del Circuito de Bogotá aprehenda el conocimiento del negocio.

Notifíquese esta resolución, déjese copia de ella y devuélvase el expediente al Juzgado de su procedencia para los fines consiguientes.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

SALVAMENTO DE VOTO.

En el auto anterior, el señor Magistrado doctor Angarita ha salvado su voto en los términos siguientes:

El infrascrito Magistrado Manuel J. Angarita, no acepta la decisión que precede, y se funda en las razones que contiene la presente exposición:

El Juez 5.° del Circuito de Bogotá se ha manifestado impedido para conocer, ó intervenir como funcionario de instrucción, en un sumario que actualmente se forma con motivo del delito

de falsificación de Billetes del Banco Nacional. Dicho Juez hace consistir el impedimento en ser pariente, dentro del cuarto grado civil de consanguinidad y segundo de afinidad, de Cayo Arjona B., yá difunto, quien resulta sindicado del mencionado delito. Como el Agente del Ministerio público no convino en que aquel Juez continuara interviniendo como tal funcionario, el mismo Juez dispuso que se pasara el sumario al Juez 6.° del Circuíto. Este último Juez, por auto de quince de Septiembre, declaró que no existía la causal de recusación manifestada por el Juez 5.°, y dispuso que se devolviera el sumario al despacho de éste; pero el Agente del Ministerio público interpuso apelación contra esta providencia, y es con relación á ella que ha recaído la decisión á que se refiere el presente salvamento.

Tal es la cuestión de hecho.

Ahora bien, el artículo 684 del Código Judicial dice:

"Manifestado el impedimento por el Juez ó Magistrado en quien concurriere, y consentida la separación de éste por la parte á quien ella interese, sin oposición de la otra, el Juez ó los Magistrados á quienes toque el *conocimiento* del incidente *declararán* separado al Magistrado ó Juez impedido."

La cuestión de derecho es ésta:

El Juez á quien toque el conocimiento de un incidente de la naturaleza indicada, ¿debe hacer la declaración prescrita en el artículo 684, fundado *únicamente* en haberse manifestado impedido otro Juez y no consentir la parte interesada en que éste conozca? ó ¿debe, además, el Juez que *conoce* del incidente, *apreciar el hecho* en que se hace consistir el impedimento, es decir, examinar *si el hecho constituye realmente impedimento legal*?

La Corte estima que el Juez que conoce del incidente *no puede entrar en la apreciación del hecho;* que no puede examinar si éste constituye ó nó impedimento legal; y el suscrito cree lo contrario.

En otros términos, la opinión del suscrito es ésta:

Como la ley establece expresamente causales de impedimento, y funda en *determinado hecho* cada una de esas causales, no basta que un Juez se manifieste impedido por cualquiera de las causales establecidas, sino que es necesario, además, averiguar si el hecho en que el Juez hace consistir la causal es exactamente *el mismo* que constituye, *conforme á la ley*, la causal de que habla el Juez.

Así, por ejemplo, la ley establece esta causal de impedimento: "ser alguna de las partes, su cónyugue, ó alguno de sus hijos *dependiente* del Juez."

Para que esta causal pueda presentarse como impedimento es preciso, en concepto del suscrito, que el hecho en que el Juez lo hace consistir sea *realmente* el hecho de que habla la ley: de manera que si el Juez impedido hace consistir la *dependencia* mencionada en dicha causal, en hechos que verdaderamente no la constituyen, no existe el impedimento, y el Juez que conoce del incidente así debe declararlo, pues esto es, sin duda alguna, lo que se entiende por *conocer* del incidente: *fallarlo con conocimiento.*

Si el Juez que conoce del incidente no debiera examinar, en el caso supuesto, los hechos en que la *dependencia* se hace consistir, y fallara sin entrar en dicho examen, entonces decidiría sin conocimiento, con prescindencia de la verdad de los hechos: fallaría inconscientemente, y establecido este proceder como regla general, en muchos casos podría suceder que se declarase separado del conocimiento de un asunto á un Juez en quien no concurriera una *verdadera* causal de impedimento, es decir, una causal *legal*, lo cual sería una violación de la ley. Así, pues, la interpretación que la Corte da al artículo 684 del Código Judicial, no es aceptable, en opinión del suscrito, porque puede dar lugar á que la ley se viole, y las leyes no deben interpretarse de manera que á semejante resultado se llegue. Luego el Juez que conoce del incidente debe, para declarar separado al otro Juez, examinar si el hecho manifestado constituye, legalmente, la causal que dice existir el Juez que se ha menifestado impedido.

A lo dicho se agrega lo que dispone el artículo 682 del Código Judicial, que en concepto del suscrito es terminante, á saber:

"Del incidente sobre *impedimento* ó recusación, conocerán.....en los Juzgados de primera instancia el Juez á quien hubiere de tocar el conocimiento del asunto, *si se llegare á declarar la existencia de la causal alegada*....."

Como se ve, la ley misma reconoce que el Juez debe *declarar si existe ó nó la causal alegada.*

Respecto del impedimento manifestado por el Juez 5.°, debe observarse, que habiendo muerto Cayo Arjona, pariente de la persona del Juez, ha cesado, por ministerio de la ley, todo procedimiento criminal contra aquél (Reforma 43, ley 46 de 1876); luego Arjona *no es parte* en el asunto, si parte hubiera sido ó podido ser en un sumario. Tanto es esto verdadero, que en el juicio criminal no puede hacerse declaración alguna contra Arjona, ni aun relativa á la acción civil por los daños y perjuicios causados, pues no sería posible hacerla habiendo cesado todo procedimiento contra aquél; y no siendo Arjona *parte*, no existe *causal legal* de impedimento, porque *falta el hecho* que debiera servirle de fundamento, pues la ley hace consistir la causal manifestada, en el parentesco entre el Juez y alguna de las *partes*. El Juez 5.° no está, pues, *legalmente* impedido para dirigir la formación del sumario mencionado, ni para conocer en el juicio criminal á que haya lugar; pero al revocarse, como se revoca, el auto del Juez 6.°, se declara implícitamente que el Juez 5.° sí está impedido. A esta conclusión inaceptable para el suscrito, se llega, porque la Corte estima que no debe entrar en la apreciación de los hechos; conclusión que demuestra de una manera perentoria que la interpretación que la Corte da al artículo 684, conduce á la violación de la ley, en el sentido de reconocer, como base de las causales de impedimento, *hechos distintos de los que la ley establece.*

A lo expuesto se agrega una consideración de otro orden.

La ley de procedimientos civiles impone á los Jueces en quienes concurra un impedimento legal, el deber de manifestarlo; y al mismo tiempo reconoce á la parte á quien interese directamente la separación de un Juez, el derecho de recusarlo, cuando en éste concurra una causal de impedimento. Pero la ley de enjuiciamiento en negocios criminales no impone á los Jueces aquel deber, en ningún caso, ni confiere á las partes el derecho de recusar á los Jueces, sino cuando yá existe causa criminal.

Ahora bien, como en los funcionarios públicos únicamente son lícitos los actos que la ley les permite ú ordena ejecutar, es claro que los Jueces que intervienen en los asuntos criminales, yá se trate de sumario, yá de causa, no pueden manifesrar los impedimentos que en su persona concurran, por cuanto la ley ni se lo ordena ni se lo permite. Sin embargo, se dice que esta omisión del legislador constituye un vacío en el procedimiento criminal, que debe llenarse según lo dispuesto para casos semejantes, porque esto dispone el artículo 1,934 del Código Judicial, y que el caso semejante se halla en el procedimiento para los negocios civiles.

El suscrito no cree que la memorada omisión constituya un vacío en el procedimiento criminal, porque para que exista vacío es preciso no sólo que haya carencia de disposición legal aplicable, sino que concurra, además, la circunstancia de que con motivo de faltar la disposición que se juzga necesaria, no se pueda dar solución á una cuestión dada. En otros términos, hay vacío en el procedimiento cuando por no existir disposiciones apropiadas á un caso, sucedería que un derecho que la ley confiere quedase sin reconocerse si no se aplicaran las leyes dictadas para casos semejantes. Pero cuando lo que acontece es simplemente que el legislador no ha hecho extensiva una ley dada por ciertas circunstancias ó negocios, á otros análogos, entonces no hay vacío, porque nada hay qué llenar; porque no hay solución de continuidad en el camino trazado por la ley para llegar al fin que ella misma ha designado.

Véase un caso particular.

Si el legislador, después de reconocer, como reconoce, que el acusador, el Fiscal y el procesado pueden recusar al Juez que conoce de la causa, no hubiera determinado el procedimiento que debía seguirse en la recusación, habría dejado un verdadero vacío, porque reconocido el derecho de recusar no daba los medios para hacerlo efectivo; pero no podría decirse que había vacío en el procedimiento, si no hubiese reconocido el derecho de recusar á los Jueces que conocen en asuntos criminales. Esto es precisamente lo que sucede con la manifestación de los impedimentos: el legislador no hizo extensivo á los Jueces que conocen en asuntos criminales, el deber que sobre ese punto ha

impuesto á los Jueces del orden civil; y semejante omisión no constituye un vacío, pues ningún derecho legal deja de hacerse efectivo porque á los Jueces del orden criminal no les sea dable manifestar dicho impedimento.

Bien puede demostrarse que el legislador no ha tenido razón para proceder en este asunto de la manera que lo ha hecho; bien puede hacerse patente la conveniencia y aun la necesidad de que los Jueces manifiesten los impedimentos que en ellos haya, respecto de los negocios criminales de que conocen; pero por muy grandes que sean la conveniencia y necesidad de aplicar al enjuiciamiento en negocios criminales lo dispuesto sobre el particular en el procedimiento civil, no sería legal la aplicación de las disposiciones de aquel procedimiento á éste, alegando como razón la existencia de un vacío. Tales conveniencia y necesidad pueden hacerse valer únicamente para la expedición de una ley sobre la materia. Luego el Juez 5.° no ha debido hacer manifestación del memorado impedimento, pues la ley no se lo ordena ni se lo permite; luego la Corte no ha debido, en opinión del suscrito, asignarle efectos á un hecho cuya existencia no reconoce la ley de enjuiciamiento criminal, y que por esto mismo, no puede producir efectos legales.

El señor Procurador juzga que el deber de manifestar los impedimentos coexiste con el derecho que las partes tienen de recusar, y que como la ley de enjuiciamiento criminal concede á las partes este derecho, los Jueces tienen el deber de manifestar los impedimentos que en sus personas haya. Pero como la ley relativa á los procedimientos criminales no otorga el derecho de recusar, sino cuando yá existe *causa*—artículo 1,654 del Código Judicial,—es claro, admitida la doctrina sobre que razona el señor Procurador, que la obligación de manifestar los impedimentos no se tiene sino cuando yá hay causa criminal. Para allanar esta dificultad, conceptúa el señor Procurador que la palabra *causa* empleada en el artículo 1,654, debe tomarse como sinónimo de *cuerpo de autos*, que es una de las acepciones que ella tiene—según Escriche; pero aparte de que esta palabra tiene un sentido *uniforme* en el Código, como equivalente de juicio ó pleito, por disponerlo así el artículo 190 del Código Judicial, debe tenerse en cuenta que si dicha palabra se toma en aquel sentido, la expresión legal: "..... recusar al Juez y á los Magistrados que *conozcan de la causa*....." equivaldría á esta..... que conozcan de *un cuerpo de autos*, lenguaje que carece de propiedad. Conocer *de la causa*, es conocer del *juicio, del pleito:* no de un cuerpo de autos.

Luego, aun cuando el deber de manifestar los impedimentos, de parte de los Jueces, coexistiera con el derecho de recusar á éstos, es indudable que en los asuntos criminales no podría hacerse manifestación de impedimento alguno sino cuando yá existiera causa, nunca cuando el asunto se encontrase en estado de sumario.

Las razones expuestas han determinado al suscrito Magistrado, Manuel J. Angarita, á separarse de la muy respetable opinión de sus honorables colegas, no sin el temor de haber incurrido en equivocación, atendida su propia insuficiencia.

Bogotá, veintinueve de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Manuel J. Angarita—Martínez—Samper—Cock Bayer—Largacha—Morales—Sanclemente—Ramon Guerra A., Secretario.

En dos de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general, lo mismo que el salvamento de voto que á él se refiere.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme.

Begotá, Noviembre tres de mil ochocientos ochenta y seis.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, diez y seis de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos: Consulta el Juez 2.° del Circuito de Zipaquirá el auto que profirió con fecha diez de Abril último, por el cual sobresee en el procedimiento contra el Comandante del Resguardo de la Salina de Zipaquirá, por haber usurpado funciones que, conforme á la ley, no le correspondían. Estudiado el asunto resulta lo siguiente:

El diez y ocho de Julio de mil ochocientos ochenta y cinco, se presentó Fulgencio Pachón ante dicho Comandante, que lo era á la sazón José Zoilo Pulido, á poner denuncia contra varias mujeres por robo de sal. El Comandante recibió juramento al denunciante, y continuó en la instrucción del sumario como funcionario público que tuviera facultades al efecto, hasta que por orden del Administrador principal de las Salinas remitió las diligencias practicadas al Juez del Circuito.

Estos hechos se comprueban con la actuación misma, practicada por el Comandante Pulido, y con la confesión de éste; y como no hay disposición legal alguna que confiera al Comandante del Resguardo la facultad de instruír sumarios, es claro que ha usurpado una autoridad que la ley no le ha dado; pero, en la misma confesión dice el sindicado, que recibió las declaraciones por orden del Administrador principal, y este empleado confirma esta aserción, y añade que en su presencia se asentaron las declaraciones que firmaba el Comandante, y en cuyo nombre se recibían.

El Administrador es, conforme al artículo 1,843 del Código Judicial, funcionario competente para levantar informaciones dirigidas á comprobar los delitos que se relacionan con la renta que administra, y esta misma facultad se la confiere el Código Fiscal en su artículo 472, ordinales 5.° y 17. La ley no lo autoriza, es verdad, para delegar esta facultad; pero la delegación que hizo de élla y la orden que dió al Comandante de practicar la investigación, justifican la conducta de este empleado en la ejecución de un hecho que no aparece haber causado daño ni perjuicio á nadie, tanto más, cuanto que, como lo afirma el Administrador, él estaba presente en la recepción de las declaraciones, y que el Comandante estaba, conforme á la ley, obligado á obedecer las órdenes de aquél, como lo estatuyen los artículos 482 y 483 del Código citado.

Falta evidentemente, en este caso, la circunstancia de ser maliciosa la arrogación de autoridad que se le imputa al Comandante Pulido, y, en consecuencia, no le es aplicable el artículo 231 del Código Penal, único que lo sería á la acción ejecutada por el sindicado.

Como aparece del oficio dirigido por el Administrador al Juez (fojas 20), que él delegó, no pudiendo legalmente hacerlo, funciones que la ley le confiere, debe exigírsele la debida responsabilidad.

Por lo tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con la opinión del señor Procurador, confirma el auto consultado.

Compúlsese copia de las piezas conducentes para averiguar la falta que el Administrador principal de las Salinas de Cundinamarca, General Ricardo Acebedo, haya cometido, según lo expuesto, y póngase al repartimiento de la Corte.

Notifíquese, cópiese y devuélvanse los autos.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y ocho de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la decisión que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

IMPRENTA DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPÚBLICA DE COLOMBIA. Número 7.º

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 19 de Marzo de 1887.

REPÚBLICA DE COLOMBIA BIBLIOTECA

CONTENIDO.

PÁG.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

Acuerdo número 28, sobre calificación de varios nombramientos de Jueces, y otros asuntos 49
Id. número 29, sobre calificación de otros nombramientos 50

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Sobre una ejecución trabada contra Felipe Arocha 51

NEGOCIOS CRIMINALES.

Sobre causa seguida á Rudesindo Téllez, por hurto ..... »
Id. id. á Pedro María Rodríguez y Santiago Osorio, por falsificación de moneda 52

NEGOCIOS DE RESPONSABILIDAD.

Sobre causa seguida á Clímaco Serrano, por negligencia ..... »

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Sobre cesación de un sumario por delito político (Jericó) 53
Sobre id. de otro id. id. (id.) ..... »
Sobre id. por prescripción, en sumario por maltratamiento 54
Sobre incompetencia de la Corte en una causa por delito común de un militar ..... »
Sobre cesación de un sumario por delitos políticos (Santa-Marta) ... »
De sobreseimiento en sumario por daños hechos en un telégraf 55

RESOLUCIONES VARIAS.

Sobre un memorial del General Severo Rueda ..... »

VISTAS DEL PROCURADOR.

Vista relativa á la causa seguida contra Rodríguez y Ososio, por falsificación de moneda falsa 56

GACETA JUDICIAL.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

ACUERDO NUMERO 28.

En la ciudad de Bogotá, á siete de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, se constituyó la Corte Suprema Nacional en Sala de Acuerdo, con asistencia de los señores Magistrados doctores Rito Antonio Martínez, José M. Samper, Julián R. Cock Bayer, Manuel J. Angarita (en reemplazo del señor doctor Largacha, á quien se le concedió licencia por enfermedad, desde el 1.º del corriente), Antonio Morales, Benjamín Noguera y Manuel A. Sanclemente, y se ocupó en la calificación de los Jueces nombrados por los Tribunales de que se hará mención, en la forma siguiente:

1.º

Se leyeron las comunicaciones de Su Señoría el Presidente del Tribunal Superior del Distrito de Bolívar, de fechas 12 y 16 del pasado, y el acta del 9 de los mismos, y el señor Magistrado doctor Samper hizo la siguiente proposición:

"Visto el informe del Tribunal Superior del Departamento de Bolívar de 16 de Febrero último, y oídos los informes verbales de los señores Magistrados doctores Noguera y Cock, relativos á la idoneidad de las personas nombradas por dicho Tribunal, para Jueces del Departamento; procédase á la calificación de éstas, individualmente."

Puesta en discusión fué aprobada por unanimidad, y en consecuencia se procedió á la calificación por balotas blancas y negras y se obtuvo el siguiente resultado:

Para Juez superior del Distrito, señor doctor Manuel M. Jiménez, 7 balotas blancas.

Juez 1.º de Barranquilla, señor doctor Manuel Dávila Flórez, id. id.

Juez 2.º id. señor doctor Camilo Arango, id. id.

Juez del Carmen, señor doctor Pablo J. Bustillo, id. id.

Juez 1.º de Cartagena, señor doctor Manuel M. Casas, id. id.

Juez 2.º id., señor doctor Gabriel R. de Bustos, id. id.

Juez del Corozal, señor doctor Domingo E. Espinosa, id. id.

Juez de Lorica, señor doctor Pedro Araújo Blanco, id. id.

Juez de Mompox, señor doctor José M. Amarís Pedroso, id. id.

Juez 1.º de Cincelejo, señor doctor Francisco Sebá González, id. id.

Juez 2.º id., señor doctor Narciso Bastilla, id. id.

La Corte declaró aprobados los nombrados, y dispuso que se comunicara inmediatamente al Tribunal de Cartagena.

2.º

Leído el telegrama del Presidente del Tribunal del Departamento Judicial del Cauca, fechado en Buga el 4 del corriente, en el cual participa los nombramientos de Jueces, garantizando éste la idoneidad de los nombrados, y oído el informe verbal del señor Magistrado doctor Sanclemente, se procedió á la calificación del mismo modo que los anteriores, y se obtuvo el siguiente resultado:

Para Juez principal del Distrito, señor don Abraham Soto, 7 balotas blancas.

Para primer suplente, señor don Anselmo Soto Arana, id. id.

Para 2.º id., al señor doctor Luis F. Campo, id. id.

Para Juez de Atrato, señor don Ricardo Arrunátegui, id. id.

Para primer suplente, señor don Juan José Maza, id. id.

Para segundo id., señor don Demetrio Toral, id. id.

Para Juez de San-Juan, señor don Florián de Diego, id. id.

Para primer suplente, señor don J. E. Perea, id. id.

Para segundo id., señor don Julio López, id. id.

Para Juez de Toro, señor doctor Jesús María Zorrilla, id. id.

Para primer suplente, señor doctor Rómulo Cuestas, id. id.

Para segundo id., señor doctor Marco Tulio Paláu, id. id.

La Corte los declaró aprobados y ordenó que se comunicara inmediatamente al expresado Tribunal.

3.º

Se leyeron los telegramas del Presidente del Tribunal de Antioquia, fechados en Medellín el 24 del pasado y 5 del presente, en los cuales comunica que se han excusado los señores Liborio Echevarría y Estanislao Gómez B. de aceptar los nombramientos, y que en consecuencia, ha nombrado en reemplazo del primero, al señor Isidro M. Morales, primer suplente del Juez superior del Distrito, y al señor Gonzalo Upegui, primer suplente del Juez 2.º de Medellín; y que ha nombrado para Juez principal del Circuito de Amalfi, al señor Isidoro Isaza por no haber aceptado el señor Sinforiano Correa; y oídos los informes verbales de los señores Magistrados que conocen á los nombrados, se procedió á la calificación y obtuvieron éstos siete balotas blancas cada uno.

4.º

Se leyeron los telegramas del Presidente del Tribunal de

Tundama, de 26 del pasado y 4 del corriente, en los cuales participa los nombramientos de Jueces suplentes y de algunos principales de que se hará mención en seguida; y oídos los informes necesarios, se procedió á la calificación del modo siguiente:

Jueces suplentes.

Del Juzgado superior del Distrito, señor don Primitivo Nieto, 7 balotas blancas.

Para el Circuíto de Santa-Rosa, en lo civil, Luis F. Vásquez, id. id.

Para id. criminal, señor don Domingo Serna, id. id.

Para el Circuíto de Sugamuxí, en lo civil, señor don Rafael Archila, id. id.

Id. id., criminal, señor don Nepomuceno Daza, id. id.

Para el Circuíto del Norte, en lo civil, señor don José de Jesús Mantilla, id. id.

Id. id. criminal, señor don Tomás Ojeda, id. id.

Para el Juzgado 1.° de Gutiérrez (Chita), señor don Fortunato Saldedo, id. id.

Para el id. 2.° (Cocui), señor don Rafael M. Velandia, id. id.

Para Casanare, señor don Marco A. Torres, id. id.

Jueces principales.

Del crimen, de Sugamuxi, señor don Leopoldo Combariza, id. id.

Juez superior del Distrito, por excusa admitida al doctor Antonio Valderrama, señor don Ladislao Corso, id. id.

Juez civil de Santa-Rosa, por excusa admitida al señor Ladislao Corso, señor don Luis María Pinilla, id. id.

Juez civil del Circuíto del Norte, señor don Carlos Escobar Reyes, por habérsele admitido la excusa para el Juzgado 1.° de Gutiérrez (Chita), id. id.

Para Juez 1.° de Gutiérrez, señor don Aristocles Gaóna, id. id.

La Corte los declaró aprobados y dispuso que se comunicara.

5.°

Tomáronse en consideración los nombramientos hechos por el Tribunal Superior del Departamento Judicial de Tunja, é inmediatamente los señores Magistrados doctores Angarita y Morales hicieron la siguiente proposición:

"Permítase á los Magistrados señores Angarita y Morales, abstenerse de votar por tener parentesco estrecho, al primero al considerar el nombramiento para Juez del Circuíto de Occidente en lo civil; y al segundo, al considerar el suplente del Juez superior del Distrito Judicial de Tunja."

Puesta en discusión, se hizo presente que el motivo que alegan los señores Magistrados sería justo y legal, si se tratara de algún asunto contencioso de jurisdicción, pero no de uno administrativo como el presente Que, por otra parte, al dejar de votar los señores Magistrados, dejaría de haber acuerdo pleno. En consecuencia, la Corte negó la proposición referida, mandando dejar constancia de la excusa que por delicadeza habían propuesto los expresados Magistrados.

Sometida á votación la calificación expresada, se obtuvo el siguiente resultado:

Ramo civil.

Para Juez del Circuíto del Centro, señor don Ignacio Vargas, 7 balotas blancas.

Suplente de id. id., señor don Fernando M. Pedrosa, id. id.

Juez 2.° del Circuíto del Centro, señor don Delascar García Medina, id. id.

Suplente, señor don Ismael Flórez, id. id.

Juez del Circuíto de Oriente, señor don Matías Herrera, id. id.

Suplente, señor don Carlos Alvarado, id. id.

Juez del Circuíto de Occidente, señor don Asisclo Castro, id. id.

Suplente, señor don Gregorio Quiñones, id. id.

Juez del Circuíto de Ricaurte, señor don Próspero R. Márquez, id. id.

Suplente, señor don Manuel Rodríguez M., id. id.

Ramo criminal.

Juez superior del Distrito, señor don Carlos González M., id. id.

Suplente, señor don Próspero Morales E., id. id.

Juez del Circuíto del Centro, señor don Eliseo Torres Solano, id. id.

Suplente, señor don Cosme Daza Higuera, id. id.

Juez del Circuíto de Oriente, señor don José Tomás Monroy, id. id.

Suplente, señor don Gonzalo Arroyo, id. id.

Juez del Circuíto de Occidente, señor don Andrés Temístocles Cediel, id. id.

Suplente, señor don Pedro Mora Vargas id. id.

Juez del Circuíto de Ricaurte, señor don Celedonio Umaña, id. id.

Suplente, señor don Benigno Rodríguez, id. id.

La Corte los declaró aprobados y mandó que se comunicara al Tribunal.

6.°

Se leyó la solicitud del señor Francisco Groot, pidiendo que se reforme la segunda parte del acuerdo de 29 de Noviembre último, en el sentido de que se entregen originales á los interesados que lo soliciten, ó que se remitan de oficio originales al Honorable Cuerpo Legislativo, los expedientes por reclamación de pensiones á cargo del Tesoro nacional, que estaban pendientes en la Corte al expedirse la ley 50 de 1886, sin necesidad de sacar copia de lo actuado en ésta.

Discutido el punto, el señor Magistrado doctor Martínez hizo la siguiente proposición, que fué aprobada por unanimidad

La reforma 9.ª de la ley 53 de 1882, dispone que se devuelvan á los interesados, sin necesidad de dejar copia, los documentos y pruebas de los expedientes sobre demandas de pensión, promovidas de acuerdo con la ley de 1879, y que quedaron pendientes por la derogatoria de ésta, con el fin de que esos interesados puedan hacer valer sus derechos donde corresponda.

Devolver es restituir lo que se había entregado; y por consiguiente, debe entenderse que lo dispuesto en la ley de que se acaba de hacer referencia, es que se entreguen á los interesados los documentos y pruebas que presentaron con su demanda de pensión; pero no que se les entreguen, originales é íntegros, la actuación y los documentos creados en la Corte, porque esa no sería yá devolución de lo presentado, sino entrega de lo nuevamente creado, lo cual sería del todo irregular, no dejando antecedentes, ni rastro de los expedientes que habían pasado por la Corte en materia de pensiones.

Lo dispuesto en el punto segundo del acuerdo de 29 de Noviembre último, se dictó de conformidad con la ley que el peticionario invoca, y en atención á las razones que se acaban de exponer; y por lo tanto no se ve motivo para modificar ese acuerdo.

Menos podría la Corte enviar oficiosamente al Cuerpo Legislativo los expedientes originales sobre pensiones, como se indica en este memorial, porque ni la ley lo prescribe, ni la Corte tiene que hacer otra cosa que devolver los documentos á los interesados que los pidan, entendiéndose únicamente con éstos, quienes bien pudieran no querer ocurrir al Cuerpo Legislativo.

Por lo expuesto, no se accede á lo pedido en esta solicitud.

Con lo cual se dió por terminado el presente acuerdo que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 29.

En Bogotá, á ocho de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, se constituyó la Corte Suprema de Justicia en Sala de acuerdo, con asistencia de los señores Magistrados R. A. Martínez, Presidente, José M. Samper, Vicepresidente, Aristides Calderón (Magistrado principal que tomó su asiento hoy, cesando de funcionar el doctor Angarita que, como se dijo ayer, ocupaba la plaza que desempeñaba el doctor Largacha), doctor Julián R. Cock Bayer, Antonio Morales, Benjamín Noguera, y Manuel A. Sanclemente, y se ocupó en la calificación de los Jueces nombrados por el Tribunal Superior del Distrito de Popayán.

Al efecto se dió lectura á la interesante exposición que hace dicho Tribunal respecto á la idoneidad de los nombrados, y á los comprobantes que á ella se acompañan, y se oyó el informe verbal que el Magistrado doctor Sanclemente dió, corroborado por algunos otros señores Magistrados; y sometidos á votación con balotas blancas y negras, se obtuvo el siguiente resultado:

Juez superior del Distrito, doctor José María Valencia R., 7 balotas blancas.

Juez del Circuíto de Popayán, en los negocios civiles, doctor Mariano Ramos, id. id

Juez del Circuíto de Popayán, en los negocios criminales, doctor Miguel Medina y D., id. id.

Juez del Circuíto de Caldas, el señor Antonio Quintero, id. id.

Juez del Circuíto de Buenaventura, el doctor Fidel Saavedra, id. id.

Juez del Circuíto de Santander, señor Aureliano Tobar, id. id.

Juez del Circuíto de Cali, en negocios civiles, doctor Antonio Mercado, id. id.

Juez del Circuíto de Cali, en negocios criminales, doctor Belisario Palacios, id. id.

En consecuencia, la Corte declaró aprobados los nombramientos considerados, y dispuso que se comunicará al Tribunal Superior de Popayán.

Y no habiendo más de que tratar, se dió por terminado el presente acuerdo, que firman todos los señores Magistrados—por ante el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Julián R. Cock Bayer—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEOGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Octubre diez y seis de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—Felipe Arocha, como Presidente de la Compañía del camino de San-Buenaventura, se constituyó deudor de los Estados Unidos de Colombia de la cantidad de quinientos treinta y dos pesos setenta y cinco centavos ($ 532-75 cs.), como consta del pagaré firmado por el expresado Arocha, en la ciudad de Cúcuta, el treinta de Enero de mil ochocientos ochenta. La mencionada deuda, que proviene de los derechos de importación causados por las mercaderías declaradas de consumo, correspondientes á los manifiestos números 7 y. 13, se comprometió el deudor á pagarla en la Tesorería general de la República el día veinte de Mayo del mismo año de mil ochocientos ochenta; y no habiendo verificado el pago de ella, el Administrador de la Aduana de Cúcuta libró mandamiento de ejecución por la cantidad de que se ha hablado, contra el indicado Felipe Arocha, como Presidente de la Compañía mencionada al principio de este auto. Adelantado el juicio, el ejecutado opuso oportunamente tres excepciones, á saber: Pago, promesa de no pedir y remisión de la deuda. Estas excepciones fueron admitidas por el Juez Superior del Circuíto de Cúcuta, y se fundan en lo que dispone el artículo 1.° de la ley 15 de 29 de Abril de 1880, que está concebido así:

"Decláranse libres de derechos de importación los materiales, herramientas, utensilios y demás artículos que se hayan introducido, y los que en lo sucesivo se introduzcan por la compañía del camino á San-Buenaventura, en el Estado de Santander, con destino á la construcción y servicio del Ferrocarril que debe unir la ciudad de San-José de Cúcuta con el Puerto de Villamizar sobre el río Zulia; en consecuencia, la tarifa aduanera en nada podrá afectar las introducciones hechas ó que se hagan por la mencionada Compañía, siempre que dichos efectos vengan destinados al servicio de la obra yá citada, que sean aplicables á dicho servicio, y aun cuando pudieran aplicarse á cualesquiera otros objetos distintos de aquél con que hayan sido introducidos."

Dentro del término concedido para probar las excepciones propuestas, se solicitó y obtuvo copia de los respectivos manifiestos y se recibieron varias declaraciones de testigos. Con estas pruebas se ha acreditado debidamente que la cantidad porque se ha ejecutado al Presidente de la Compañía del camino de San Buenaventura, proviene del valor de los derechos de importación causados por materiales y artículos que se introdujeron por la memorada Compañía, y se destinaron para el Ferrocarril que está construyendo la misma, entre la ciudad de Cúcuta y el Puerto de Villamizar, con excepción de tres cajas marcadas J. N. G. V. que contenían libros impresos.

Citadas las partes, el Juez pronunció sentencia con fecha veinticinco de Julio de mil ochocientos ochenta y tres, en que declara probada la excepción de remisión de la deuda, y no probadas las de pago y promesa de no pedir.

Contra esta sentencia interpuso recurso de apelación el representante de la Nación, y la Corte para resolver, considera:

Fundándose, como se fundan, las excepciones de pago y promesa de no pedir en lo que dispone el artículo 1.° de la ley 15 de veintinueve de Abril de mil ochocientos ochenta, ley que es de fecha posterior á la del pagaré que sirvió de recaudo ejecutivo, la cual es de treinta de Enero del mismo año, es indudable que ninguna de estas dos excepciones está probada; cosa que no se verifica con la de remisión de la deuda, porque la mencionada disposición legal se refiere de una manera clara y terminante á los derechos de importación yá causados, á efecto de que no se cobraran, lo cual constituye remisión de la deuda existente.

A mérito de lo expuesto, y con reproducción de los conceptos del señor Procurador, emitidos en este mismo sentido, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la sentencia apelada.

Notifíquese, cópiese y devuélvase.

R. Antonio Martínez—José M. Samper.—Manuel J. Angarita.—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha.—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del mismo día se publicó la anterior sentencia. Bogotá, 16 de Octubre de 1886.

Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y ocho de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la sentencia que antecede.

FERNÁNDEZ.—*Guerra A*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Octubre quince de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—El Juez del Circuíto de Zipaquirá en el despacho de los negocios criminales, pronunció con fecha primero de Junio último, sentencia condenatoria contra Rudesindo Téllez, porque, siendo obrero en la Fábrica de Sal del Gobierno, hurtó una cantidad de sal de caldero; y consulta esa sentencia con la Corte, de conformidad con lo que establece el artículo 1,638 del Código Judicial Nacional.

Dada á la consulta la correspondiente tramitación, resulta lo siguiente:

Se probó con declaraciones de testigos hábiles que Téllez extrajo del depósito de sal de la Fábrica del Gobierno, en el Distrito de Zipaquirá, una cantidad de sal de caldero, la que examinada, pesada y avaluada con intervención de peritos, resultó ser de la procedencia y calidad mencionadas y valer un peso sesenta centavos.

El procesado, en su indagatoria y confesión, manifestó que había tomado esa sal sin consentimiento de nadie; pero que, no teniendo trabajo continuo en la fábrica, y careciendo de los medios de subsistencia para él y para una hija con quien vive, se había visto en la necesidad de apropiarse el objeto hurtado.

El Juez, por haberse justificado los atenuantes determinados en los incisos 1.°, 2.°, 4.° y 5.°, artículo 101 del Código Penal y los agravantes de que trata el numeral 2.°, artículo 100, y 3.° del artículo 583 del Codigo mencionado, calificó el delito en segundo grado, por lo que, rebajando la sexta parte de la diferencia, entre el máximo y el mínimo de la pena, queda la de cincuenta y dos días y doce horas de reclusión, que es la que

conforme á los artículos 364, 578 y 105 del mismo Código le corresponde al delito, y la misma que el Juez ha aplicado en su sentencia; y como el reo ha permanecido en prisión desde el seis de Abril último, y por consiguiente ha excedido el tiempo de detención al que debía sufrir por la pena á que fué condenado, debe ser puesto inmediatamente en libertad.

Las penas accesorias que determinan los artículos 29 y 62 del citado Código se aplicaron bien en la sentencia.

En consecuencia, la Corte Suprema, de acuerdo con la opinión del señor Procurador general y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la sentencia consultada.

Notifíquese, cópiese y devuélvase el proceso.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del mismo día se publicó la anterior sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y ocho de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador la sentencia anterior.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Octubre veintiuno de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—El Juez 5.° del Circuito de Bogotá llamó á juicio á Pedro María Rodríguez y Santiago Osorio, en veintisiete de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco, por el delito de falsificación de monedas nacionales, y por sentencia de veintiseis de Abril del presente año condenó al primero, previa la calificación de la culpabilidad en tercer grado, como autor principal, á la pena de reclusión penitenciaria en el Panóptico de esta capital por diez y ocho meses, y al segundo, como encubridor, por cuatro meses quince días, abonándoseles el tiempo de la detención durante el juicio, con cargo de quedar sujetos ambos á las penas anexas á la corporal. Los elementos que sirvieron para la perpetración del delito fueron aplicados á la República. Este fallo ha sido sometido al conocimiento de la Corte en consulta.

De la causa aparece, que el dos de Octubre de mil ochocientos ochenta y cinco se presentó Rafael Berbeo N. ante el Inspector de la sección 4.ª de la Policía del Distrito de Bogotá, para denunciarle que en ese mismo día habían hallado él, su esposa Hersilia Rincón y el padrastro de ésta, José María Munévar, á inmediaciones del puente de San-Cristóbal, de este Distrito, y en el bosque, la mitad de un molde para fabricar monedas de níkel de dos y medio centavos, y otro completo para la construcción de piezas más grandes, de monedas de cobre. El mismo denunciante agregó que el veintiocho de Septiembre del año últimamente citado, viniendo para la ciudad en compañía de su cuñada, Emilia Munévar se encontraron con los citados Rodríguez N. y Osorio que subían por el sitio de San-Cristóbal, como á las siete y media de la mañana, llevando unos fuelles, los mismos que había aprehendido la autoridad el dos de Octubre citado, junto con unas diez piezas de monedas de níkel falsificado, un molde aparente para la fabricación y un frasco con reactivos para el lustre de las monedas.

Hecho el reconocimiento pericial respectivo, resultó que en efecto las monedas aprehendidas eran falsas y compuestas de níkel y estaño, algunas de ellas con baño de cobre para imitar las de este metal que ha emitido el Gobierno.

Recibiéronse declaraciones instructivas á los dos sindicados; y Rodríguez confesó lisa y llanamente que él y su compañero Osorio habían construído los moldes destinados para la fabricación de las monedas tomadas y para hacer estas á imitación de las nacionales. Osorio confesó que él había acompañado á Rodríguez cuando se condujeron los útiles de fabricación expresados, á San-Cristóbal, por cuanto éste le había asegurado que el objeto que tenía en mira era sacar oro en un punto de ese terreno, y que el constructor de las monedas falsas había sido Rodríguez, quien le había dicho "que era para labrar oro."

El proceso ha sido puesto al despacho de la Corte el diez y seis de este mes para la decisión definitiva. Teniendo en consideración:

1.° Que el cuerpo del delito de falsificación de monedas está plenamente comprobado, aunque no aparezca del proceso que las piezas falsificadas hubieran sido dadas á la circulación;

2.° Que la confesión de Rodríguez le convence de su responsabilidad como autor principal;

3.° Que si bien no aparece igual justificación contra Osorio, quien solamente se reconoce como cómplice en el sentido del inciso 1.°, artículo 80 del Código Penal, en el hecho de haber cooperado espontáneamente y á sabiendas á la ejecución del delito en el acto de cometerlo; y

4.° Que la intervención de Osorio en esa falsificación no se halla comprendida en ninguno de los casos que califican á los encubridores, según el artículo 82 del Código citado. Ahora bien, como los cómplices del delito de falsificación de monedas están sujetos á igual pena que los autores principales; la Corte Suprema, de acuerdo con el concepto del señor Procurador general, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, califica la culpabilidad en tercer grado, y en cumplimiento de los artículos 249, 29, 31, 62 y 64 del mencionado Código, condena á Pedro María Rodríguez y Santiago Osorio por el delito de falsificación de monedas, imitando las de cobre ó níkel emitidas por la República, á la pena de reclusión por diez y ocho meses que sufrirán en el Panóptico de esta capital. El tiempo de duración de esta pena será contado desde el dos de Octubre de mil ochocientos ochenta y cinco en que fueron privados los reos de su libertad. Quedan también sujetos á la privación de todo destino, cargo y empleo público y de toda pensión pagadera del Tesoro Nacional; á la suspensión de los derechos políticos mientras dure la pena corporal; al pago de costas mancomunadamente; al resarcimiento de todos los daños é indemnización de todos los perjuicios que hayan resultado; y y además, quedarán sujetos á la vigilancia de las autoridades por cuatro años. Los elementos de falsificación y monedas á que se refiere esta causa serán aplicados al Tesoro Nacional; quedando reformada en estos términos la sentencia consultada.

Notifíquese, cópiese, publíquese en el *Diario Oficial* y devuélvase el proceso.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del día veintiuno de los mismos se publicó la sentencia anterior.

Ramón Guerra A., Secretario.

En veinticinco de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis notifiqué al señor Procurador general la sentencia anterior.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, treinta de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—Con motivo de la investigación sumaria que practicaba el Juez Superior del Circuito de Bucaramanga, para descubrir los responsables de falsificación de unos billetes que imitaban los del Banco Nacional, el Secretario del mismo Juzgado, Clímaco Serrano, recibió dos billetes falsos para su custodia en el archivo de aquél, de donde fueron extraídos por Anacleto Serrano, hijo natural del mismo Clímaco Serrano, según dice Reyes Corzo.

Por auto de doce de Mayo del año próximo pasado, el mismo Juez ordenó la práctica de las diligencias conducentes á la averiguación de la responsabilidad en que hubiera incurrido el Secretario del Juzgado por la negligencia que diera lugar á la extracción de dichos billetes.

Practicadas las diligencias sumarias del caso, se comprobó la existencia del cuerpo del delito de sustracción de los billetes, y Clímaco Serrano confesó que había habido negligencia de su parte, razón por la cual se le llamó á juicio por los trámites extraordinarios, y por el delito que define el artículo 319 del Código Penal. Seguido el juicio en primera instancia, el Juez pronunció, con fecha trece de Agosto del año próximo pasado, sentencia condenatoria contra Serrano, y en ella le impone las penas de suspensión de su empleo de Secretario del Juzgado,

por el término de dos meses, y una multa de diez pesos, previa calificación del delito en tercer grado.

Interpuesta apelación contra esta sentencia, y sustanciado el recurso debidamente, esta Superioridad para resolver, considera:

Que está probado el cuerpo del delito de sustracción de los dos billetes falsos, que se custodiaban en el archivo del Juzgado Superior del Circuíto de Bucaramanga.

Que á cargo de Clímaco Serrano, como Secretario del Juzgado, estaba la custodia del archivo del mismo.

Que por negligencia del mencionado Secretario se verificó la sustracción de dichos billetes.

Que el responsable confesó franca y sinceramente su culpabilidad, por la cual el Juez calificó debidamente el delito en tercer grado; y finalmente, que el artículo 319 del Código Penal establece, para los delitos de la naturaleza del presente, las penas de suspensión de empleo por dos meses á un año y multa de diez á cincuenta pesos; de manera que al delito calificado en tercer grado corresponden las penas de dos meses de suspensión del empleo y diez pesos de multa, aplicadas por el Juez en la sentencia.

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la sentencia apelada.

Notifíquese, cópiese, publíquese en el *Diario Oficial* y devuélvase la actuación.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del treinta de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, se publicó la anterior sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En tres de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la sentencia que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Octubre diez y seis de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—El Prefecto del Departamento de Sud-oeste, en el extinguido Estado de Antioquia, inició, en dos de Junio de mil ochocientos ochenta y cinco, una información sumaria para averiguar quiénes fueron los responsables del delito de rebelión que se intentó cometer en el Distrito de "Los Andes" á fines de Mayo del año citado, por varios individuos, entre los cuales se hacen constar los nombres de Jesús Luque, Cancio Calle, Francisco (de apodo el "negro)," Jesús Macario y Bruno Saldarriaga, Manuel Sierra, Pablo Porras, Daniel, Ascención y Pedro Riagoa, Jesús, Manuel, Benjamín y Dionisio Velásquez. Miguel Mejías Miguel Restrepo, Ramón Obando, Lino Taborda, Félix Cano,, José María Castañeda, Pedro é Ismaél Jiménez, Manuel. Antonio y Juan Bautista Montoya, Francisco y Vicente Villada, Rafael Vanegas, Wenceslao Castañeda y Camilo González.

De las declaraciones recibidas aparece que esos sindicados se reunieron con el objeto de secundar el movimiento revolucionario encabezado en la Costa del Atlántico y río Magdalena por Gaitán y otros Jefes contra el Gobierno de la Unión; que se limitaron á tomar algunas armas de particulares; pero que persuadidos luégo de la ineficacia de las operaciones emprendidas, desistieron de su intento y se disolvieron sin haber ejecutado ningún auto de beligerantes.

El Juez de Circuíto de Jericó, en el Despacho de lo criminal, con fecha treinta y uno de Marzo del corriente año, dictó auto de sobreseimiento en ese sumario, cuya providencia fué sometida al conocimiento del Tribunal del Estado, en consulta; y dispuso se compulsase copia de lo conducente para averiguar los delitos de hurto y robo de algunos efectos de propiedad particular. El Tribunal declaró en doce de Abril que no era competente para resolver sobre el mérito del auto consultado, por ser el delito de rebelión de la competencia de la Corte Suprema de la Nación. En tal virtud, el Juez de primera instancia dispuso, por resolución de diez y seis del mismo mes, que se remitiera el sumario á la Corte. En catorce del mes en curso se ha puesto el expediente al Despacho de este Supremo Tribunal para la resolución conveniente.

Los hechos perpetrados por los que intentaron ese movimiento revolucionario, que motivaron la providencia de continuar en la indagación, aun después del sobreseimiento por el delito de rebelión, son haberse tomado unos calzones de propiedad de Eustaquio Camacho y unas pocas armas de fuego. Esos hechos deben ser estimados como incidentes de la tantativa de rebelión, y no como delitos comunes, sujetos á un juicio especial, á virtud del Decreto dictado por el Jefe civil y militar del Estado de Antioquia, autorizado por el Gobierno nacional, en once de Febrero del presente año, número ciento diez y seis, según el cual se mandó poner término á los procedimientos iniciados para averiguar los delitos contra el orden público, sin perjuicio de continuarlos en lo relativo á los delitos comunes de que fueran responsables los revolucionarios.

Habiéndose además expedido por el Poder Ejecutivo nacional el Decreto de veinte de Julio del presente año, sobre amnistía, hoy no puede darse curso á las causas pendientes por el delito de rebelión contra el Gobierno general.

En consecuencia, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, en cumplimiento de la reforma cuadragésima tercera de la ley 46 de 1876, y de acuerdo con el concepto del señor Procurador general, declara que debe cesar todo procedimiento criminal contra los sindicados del delito á que se refiere el presente sumario.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase la actuación

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y ocho de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, diez y ocho de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—El Juez del Circuíto de Jericó dictó con fecha cinco de Marzo último, auto de sobreseimiento en la investigación relativa al delito de rebelión contra el orden público, ejecutado por Bárbaro Sánchez en el Territorio de dicho Circuíto, como uno de los Tenientes del cabecilla Cándido Tolosa, en la revuelta que estalló á fines de Junio de mil ochocientos ochenta y cinco, en Río-negro del antiguo Estado de Antioquia; y consultó dicho Juez esa providencia con el Tribunal Superior del mencionado Estado, el cual se declaró incompetente, y por esto, el Juez ha elevado á la Corte en consulta dicho auto.

Los actos ejecutados por Sánchez y sus compañeros y que han sido objeto de este sumario, fueron, evidentemente, dirigidos á derrocar el Gobierno establecido en el Estado por el Gobierno nacional, en virtud de la ocupación del Territorio antioqueño, por haber caído el Gobierno seccional, á causa de la rebelión en que se alzó en Enero del citado año.

El Jefe civil y militar del antiguo Estado de Antioquia, con autorización del Presidente de la Nación, dictó el Decreto número 116 de once de Febrero próximo pasado, en que se ordena que se ponga término á todos los procedimientos iniciados para averiguar delitos contra la paz y el orden público en el Estado, exceptuando los de motín y asonada.

Los hechos ejecutados por los revoltosos de Jericó asumen enteramente el carácter de rebelón, porque aunque éstos tomaron un novillo de propiedad de unos señores Ochoas, esto lo hicieron para la manutención de la tropa de los pronunciados y no constituye delito separado, aunque el interesado sí tenga derecho á indemnización, bien contra los revolucionarios, bien contra el Tesoro nacional,

El Poder Ejecutivo ha dictado posteriormente, con fecha veinte de Julio último, un Decreto en que se indulta á todos los infractores de la ley, por rebelión consumada en la última guerra; Decreto que el Presidente estaba autorizado para dictar, en virtud de las facultades de que el estado de guerra lo investía y la conveniencia pública demandaba.

En esta virtud, y de acuerdo con la opinión del señor Procurador, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto de sobreseimiento consultado.

Hágase saber, cópiese y devuélvase el expediente,

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y nueve de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Octubre diez y ocho de mil ochocientos ohenta y seis.

Vistos:—La Corte Suprema federal, por auto de doce de Diciembre de mil ochocientos ochenta y tres, dispuso que la causa contra los Guardas de la Salina de Zipaquirá, Cruz García y Cenón Flórez, por haberse excedido en el ejercicio de sus funciones, maltratando á José María Pedraza, el día tres de Agosto de mil ochocientos ochenta y uno, se pusiera al estado de sumario, á fin de que esos empleados fueran juzgados, con la debida separación, por el delito común de maltratamientos de obra, de la competencia del Poder Judicial del Estado de Cundinamarca y por el delito definido en el artículo 441 del Código Penal, cuyo conocimiento corresponde al de la Nación.

Al ocuparse el Juez 2.° del Circuíto de Zipaquirá en el estudio de la causa de responsabilidad contra aquellos Guardas, halló que, por prescripción, había cesado el derecho de imponer pena á los responsables, y así lo declaró por el auto de sobreseimiento del quince de Enero del presente año, que ha venido al conocimiento de la Corte en consulta. Sustanciado el incidente, se ha pasado la actuación al estudio de este Supremo Tribunal para la resolución del caso, en catorce del mes en curso.

Y teniendo en consideración, que desde el tres de Agosto de mil ochocientos ochenta y uno hasta hoy han trascurrido cinco años, dos meses, catorce días después de verificado el hecho, y que hay necesidad de dar cumplimiento al artículo 71 del Código Penal y á la reforma cuadragésima sexta de la ley 46 de 1876, puesto que la pena señalada al delito que se averigua es la privación de empleo, según el artículo 441 del Código Penal.

En consecuencia, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el parecer del señor Procurador general, confirma el auto consultado.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase la actuación al Juzgado de primera instancia.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y nueve de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general de la Nación el auto que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, diez y nueve de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—El Juez de la Provincia de Cartagena dictó sentencia con fecha veinte de Marzo de mil ochocientos ochenta y cinco, en la que condenó á Lino Hernández, Cabo 1.° del me lio Batallón de infantería que hacía la guarnición en aquella plaza, á sufrir la pena de seis años de reclusión, por el delito de homicidio, y ordenó se publicara la sentencia. El reo también apeló de ella y por esta razón se encuentra este expediente en la Corte.

Sustanciado el recurso, conforme á la ley, antes de entrar en el fondo del asunto, es necesario examinar si este Tribunal es competente para fallar en esta clase de juicios.

Los hechos sobre los cuales se funda la sentencia apelada, pasaron de esta manera: Hernández que, el veinticuatro de Diciembre de mil ochocientos ochenta y cuatro, estaba en el servicio militar en Cartagena, á las seis de la tarde de ese día, estando franco fuera de su cuartel, en la calle de la "Chorrera de Lobo," tuvo una disputa provocada por el soldado del citado Batallón, Buenaventura Puente,—igualmente franco,—á causa de los celos, y en ella hirió con un tiro de revólver á Puente, cerca de la clavícula izquierda, herida de la cual murió el paciente el doce de Enero del presente año.

Este, como claramente se ve, es un delito común, cometido por un militar, pues los delitos de carácter militar, según lo define el artículo 1,635 del Código de la materia, "son los que se cometen con infracción de las leyes militares en asuntos del servicio ó dentro del cuartel. Todos los demás delitos ó culpas cometidos fuera de estos casos, dice el mismo artículo, serán juzgados como delitos comunes, por los Juzgados y Tribunales civiles."

Son los delitos militares, de los que conocen los Tribunales que menciona el artículo 1,381 del mismo Código, entre los cuales está la Corte Suprema, para decidir en segunda instancia de los juicios sometidos al conocimiento de los Consejos de guerra en primera instancia.

Según esto, es á los Tribunales civiles ordinarios á quienes corresponde juzgar causas como la del Cabo Hernández, y, conforme á la organización del Poder Judicial de la Nación, la Corte no conoce en esta clase de juicios en ninguna instancia: ellos se inician y se concluyen en los Estados (hoy Departamentos), de acuerdo con su legislación judicial (artículos 23 y 24 del Código Penal de la Nación.)

El único caso en que un delito común cometido por un militar debe ser sometido á la jurisdicción de este género, y por consiguiente á la Corte Suprema, en última instancia, es cuando el delito es cometido en campaña. (Artículo 1,366 del Código Militar). Mas, cuando Hernández hirió á Puente, no estaba aquel en servicio de campaña: había paz en el Estado de Bolívar, pues el veinticuatro de Diciembre de mil ochocientos ochenta y cuatro, fecha de la comisión del delito, apenas habían transcurrido cinco días desde que se expidió en Bogotá el Decreto por el cual se declaró perturbado el orden público en las Provincias de aquel Estado, situadas á orillas del río Magdalena. (*Diario Oficial* número 6,262). Ni consta en el expediente, ni había transcurrido el tiempo suficiente para que ese Decreto hubiera sido promulgado en la Provincia de Cartagena, en donde se cometió el delito.

Esta doctrina sobre competencia, en esta clase de hechos criminosos, ha sido yá luminosamente expuesta por la Corte, en la sentencia de treinta de Junio último, en el caso de los militares del Batallón 13 de infantería, de la Guardia Colombiana, por los delitos de homicidio y heridas, doctrina que el señor Procurador acoge y la Corte reproduce para abreviar.

En consecuencia, la Corte, declara que no le corresponde conocer de esta causa, y dispone que vuelva el expediente al Juez de la Provincia de Cartagena, para que, observando la tramitación correspondiente de la legislación judicial vigente del Estado de Bolívar, dé al asunto el curso legal.

Notifíquese, cópiese y devuélvanse los autos.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En veinte de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general de la Nación, el auto anterior.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, diez y nueve de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—En los días veinte y veintiuno de Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco, el Presidente del Estado del Magdalena, señor Martín Salcedo Ramón, con motivo de verse

amenazado por los rebeldes que se habían apoderado de Barranquilla y del curso de casi todo el bajo Magdalena, salió de la ciudad de Santa-Marta con la fuerza militar que allí tenía y muchos de los empleados civiles al servicio del Gobierno, y se dirigió á Riohacha.

La ciudad capital quedó abandonada y sujeta á los desórdenes consiguientes á la falta de autoridad, para prevenir lo cual el Presidente Salcedo, antes de su partida dirigió una circular á las personas más respetables de la ciudad, á fin de que tomaran providencias eficaces para evitar delitos contra las personas y las propiedades, mientras se organizaba un Gobierno regular por los revolucionarios.

Cuando á causa de la falta de Gobierno en la ciudad, una multitud de gente del populacho penetraba en la casa de Gobierno, en el cuartel nacional y en la casa municipal que habían quedado abiertas, y rompía y botaba papeles por el suelo y quebraba y robaba muebles, se reunieron varias personas notables y nombraron Jefe Civil y Militar de la plaza al doctor Vicente Noguera Maza, quien después de varias instancias tomó posesión del cargo, hizo cerrar y asegurar las puertas de los edificios públicos abiertos, organizó fuerza armada y dió protección y seguridad á la población.

Pocos días después ocurrió Mauricio Simmonds á la oficina de la Agencia postal nacional, con el objeto de averiguar si se despacharían correos, y encontró la puerta cerrada. Paseándose por la acera notó que la ventana de la pieza estaba dislocada, al parecer con violencia. Dió cuenta al Jefe Noguera Maza y éste dió orden á sus Agentes para que averiguaran si se había cometido algún robo, y se diera seguridad á los intereses y papeles que en la oficina se encontraban.

Nombró Agente postal á Demetrio del Gordo, quien solicitó las llaves del edificio en la casa, del empleado nacional que antes desempeñaba ese destino, Manuel Avendaño Salcedo, y no habiéndolas obtenido de la esposa de éste, pues él había partido con el Presidente del Estado, procedió á hacer abrir por la fuerza, por un herrero, la puerta, en presencia de dos testigos. Hizo inventario de los muebles y papeles de la oficina, conservó los muebles cerrados en el estado en que estaban, hizo construír nueva llave, aseguró la ventana falseada y siguió cuidando de todo esto como se lo había ordenado Noguera Maza. También solicitó del Gordo, por orden de su Jefe, al Tenedor de libros de la Oficina, Pedro M. Tache, y al Portero Ernesto Tinoco, para que continuaran en sus destinos; el primero se denegó y el segundo accedió á la solicitud.

En tres de Agosto del mismo año, cuando el Presidente legítimo del extinguido Estado del Magdalena había ocupado de nuevo la capital, nombró á Tache Agente postal, y éste recibió la oficina, papeles y muebles por inventario, de manos del Agente del Gordo, no habiendo encontrado más novedad, según se dice en la diligencia de inventario, que la falta de un vaso de vidrio y un escaparate abierto por la fuerza.

A excitación del Gobierno del Magdalena, el Juez del Circuíto de Santa-Marta instruyó sumario para averiguar el delito de fractura de la puerta de la Oficina de la Agencia postal nacional, y ha concluído con el auto de fecha tres de Julio último, por el que sobresee en la investigación y consulta esta providencia con la Corte.

Oído el señor Procurador general, y estudiado el expediente, resulta que todo lo expuesto está plenamente justificado, con muchas declaraciones de testigos, algunos de éstos respetables personas de Santa-Marta, con las exposiciones de algunos de los empleados legítimos de la Agencia postal y con documentos auténticos.

Por consiguiente, es claro que en los hechos ejecutados por Noguera Maza y del Gordo, relativos á la apertura de la Oficina de la Agencia, no hay otra cosa que el deseo de evitar mayores daños y perjuicios á la Nación y á los particulares. Falta evidentemente allí la intención de causar mal, que es lo que, según la ley, constituye el delito, y si éste existe no puede tener otro carácter que el de político, pues el Jefe Civil y Militar proclamado en Santa-Marta y sus Agentes, obraban como autoridades de hecho y con un fin político y sin sujeción al Gobierno legítimo. Consecuencia natural era que el Jefe de una plaza en rebelión ocupara las *oficinas y se apoderara* de los papeles del Gobierno contra quien obraba.

Hoy por el decreto de amnistía é indulto expedido por el Gobierno de la Nación el veinte de Julio último, no pueden ser perseguidos los responsables de delitos políticos en la última guerra.

Por lo tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con la opinión del señor Procurador, confirma el auto consultado.

Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintitrés de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la decisión precedente.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Octubre veintiuno de mil ochocientos ochenta y seis.

VISTOS:—El Juez superior en lo criminal, del Circuíto del Socorro, pronunció con fecha treinta y uno de Agosto último, auto de sobreseimiento en las diligencias sumarias instruídas en averiguación de la responsabilidad de la destrucción de una parte de la línea telegráfica, comprendida en el territorio de la jurisdicción de dicho Juez; auto que se ha remitido á esta Superioridad en consulta.

En el sumario está plenamente comprobado el hecho de la destrucción de la mencionada línea en una extensión de cuatrocientos metros aproximadamente; pero, como no existe contra el sindicado Onofre Santos, ni contra individuo alguno la prueba que exije el artículo 1541 del Código Judicial, para dictar auto de formación de causa, es indudable que el auto consultado es legal, y por ello la Corte administrando justicia en nombre de República y por autoridad de la ley, lo confirma.

Notifíquese, cópiese y devúlvase el expediente.

R. Antonio Martínez.—José M. Samper.—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre.—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintitres de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

RESOLUCIONES VARIAS.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, diez y seis de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—El General Severo Rueda, por conducto de la Secretaría de Guerra y Marina, ha dirigido al Poder Ejecutivo de la República una solicitud en la cual recaba el cambio de las letras de licencia indefinida, de que ha gozado, por letras de cuartel, á que cree tener derecho conforme á su último empleo.

A su solicitud ha acompañado varios documentos como comprobantes de su pretensión.

El Estado Mayor general del Ejército emitió concepto en el sentido de reconocer la justicia de la petición del General Rueda, y la Secretaría se conformó en el fondo con el concepto del Estado Mayor; pero resolvió pasar á esta Superioridad los documentos presentados para la decisión del asunto, por considerar que no hay disposición legal ninguna que autorice al Poder Ejecutivo para resolver la petición del expresado Rueda.

La Corte considera necesario examinar previamente su competencia, y para ello observa:

El General Severo Rueda no solicita pensión ni recompensa alguna; su solicitud se dirige á recabar el cambio de letras de pensión por otras de cuartel, y en el Capítulo 1.°, Título 1.°, Libro 3.° del Código Militar no se registra ninguna disposición que faculte á la Corte para acordar ese cambio de letras.

Ahora bien, conforme al artículo 105 del Código Militar, "á los Generales y Coroneles que no se hallen en servicio activo, les expide la Secretaría de Guerra *letras de cuartel*. A los demás Jefes y Oficiales, se les dará licencia indefinida."

Según esta disposición, es el Ministerio de Guerra y Marina

de la República quien está autorizado para expedir las letras á que se refiere el General Severo Rueda.

Por lo expuesto, la Corte Suprema nacional se abstiene de resolver la petición referida, y dispone que pase, junto con los documentos presentados, al Ministerio de Guerra para lo de sucargo.

Notifíquese y cópiese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y nueve de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL.

Señores Magistrados.

El Juez 5.° del Circuíto de Bogotá os consulta la sentencia que profirió en la causa criminal seguida contra Pedro María Rodríguez y Santiago Osorio, por el delito de falsificación de moneda.

Por la expresada sentencia se declara responsables á dichos individuos del expresado delito de falsificación de moneda, definido en el artículo 249 del Código Penal, como autor principal el primero y como encubridor el segundo, y, previa calificación de la culpabilidad de ambos en tercer grado, se les condena á sufrir la pena de reclusión penitenciaria, limitada para el autor principal á diez y ocho meses y para el encubridor á cuatro meses quince días, y se adiciona con las demás agravaciones consiguientes á la pena corporal y con la sujeción á la vigilancia de las autoridades por tres años para aquél y por nueve meses para éste.

Los hechos que originaron el enjuiciamiento de los procesados, aparecen relacionados de la siguiente manera:

El día dos de Octubre de 1885, Rafael Berbeo denunció ante la Sección 4.ª de la Policía del Distrito de Bogotá el hecho de que en el mismo día, yendo acompañado de otras dos personas, se había encontrado entre el monte, en la vía del río San Cristóbal, un molde preparado para fabricar monedas de cobre, y medio molde para monedas de níkel de dos y medio centavos, y que el día 28 del mes anterior, él y su cuñada Emilia Munévar vieron á los dos individuos que estaban presentes en la Inspección (Pedro María Rodríguez y Santiago Osorio) que subían por dicha vía como á las siete y media de la mañana, llevando consigo unos fuelles.

Los testigos que el funcionario instructor hizo comparecer, á virtud de las citas hechas por el denunciante, corroboran el dicho de éste, en términos que no dejan duda acerca del hecho de que á los citados Rodríguez y Osorio se les vió subir, en más de una ocasión, por la vía de San Cristóbal, llevando los fuelles de que se deja hecha referencia.

Aparte de los moldes hallados por el citado Berbeo, se indican en el proceso algunas monedas y otros objetos que aparecen como tomados á los procesados, y respecto de los cuales los peritos reconocedores, señores Liborio Zerda y Julio Garavito, expusieron: "Del reconocimiento que hemos practicado resulta: que de las monedas que nos fueron presentadas, unas son del tipo de dos y medio centavos, imitación de las de níkel, hechas de una liga de estaño y zinc, vaciadas en molde de yeso; y otras, también de dos y medio centavos, imitación de las monedas de cobre mandadas emitir por el Gobierno general, hechas de la misma liga dicha y cobrizada una para darle la apariencia de las legítimas. Igualmente hemos reconocido los moldes de yeso para hacer dichas monedas, una taza con polvos de yeso calcinado para hacer dichos moldes, y un frasco con disolución de plata en cianuro de potasio para platear las monedas falsas y darles la apariencia de las legítimas."

Resulta, por lo tanto, que con las pruebas que acaban de mencionarse queda debidamente establecida la existencia del cuerpo del delito.

Igual cosa sucede con la culpabilidad de los procesados, pues contra ellos obran, no sólo las declaraciones antes citadas, referentes al hecho de habérseles visto subir en dirección al lugar donde se hallaron los moldes, llevando, como queda dicho, un utensilio que despertó las sospechas de todos los que lo vieron, sino también su indagatoria, en la cual uno y otro se declararon culpables, manifestando Rodríguez, después de reconocer como suyos todos los objetos que se le presentaron, y á que alude la diligencia de reconocimiento preinserta, que su propósito era el de fabricar monedas que imitaran las legítimas de níkel, no con el fin, agregó, de perjudicar á nadie, sino por vía de ensayo y entretenimiento; y manifestando Osorio, después de reconocer también los mismos objetos como pertenecientes á Rodríguez, que efectivamente él acompañó á éste á San Cristóbal, en la creencia de que de lo que se trataba era de lavar un poco de oro ó de platear algunas monedas, pues así se lo había dicho su compañero, concluyendo por manifestar que dicho Rodríguez había fabricado á las ocho de la mañana del mismo día en que declara dos monedas de níkel falso.

Fundado el defensor de los reos en que lo confesado por éstos en su indagatoria no lo ratificaron después de abierta la causa, pues se negaron á rendir su confesión, sostiene que dicha indagatoria no constituye la plena prueba de que trata el artículo 1,574 del citado Código Judicial.

A esto observa el infrascrito que, aun cuando los procesados sí ratificaron, en lo principal, los hechos confesados en su indagatoria, pues así aparece á fojas 10 vuelta del proceso, como esa ratificación fué anulada por no haberse hecho con las formalidades legales, no hay para qué hacer mérito de ella, sin que con esto y con el hecho de haberse negado dichos procesados, después de repuesto el proceso, á rendir su confesión, se haya infirmado en nada la expresada indagatoria.

En efecto, el artículo 1,574 del Código Judicial dice lo siguiente: "La confesión libre y espontánea hecha por el procesado en presencia del Juez ó *del funcionario de instrucción* y por ante el Secretario, hace plena prueba contra él, y es por sí sola bastante para condenar, siempre que por otra parte esté suficientemente comprobado el cuerpo del delito."

Basta leer esta disposición para convencerse de que la objeción hecha por el citado defensor carece de fundamento, pues como se ve, la ley no hace distinción alguna entre la confesión rendida ante el Juez de la causa y la rendida ante el funcionario instructor, la cual tiene fuerza probatoria para declarar confesos á los reos; siempre que en el plenario no haya sido infirmada por otras pruebas que pongan de manifiesto la inocencia de éstos, comprometida por la dicha confesión ante el funcionario instructor, ó sea por la indagatoria, que es lo que sucede en el caso que nos ocupa, en el cual las pruebas sumarias no han sido desvanecidas por otras, ni el hecho de haberse negado los procesados á rendir su confesión de cargos en el plenario implica que contradigan los yá confesados en el sumario.

Es verdad que en el proceso no figura la diligencia de aprehensión de los objetos que aparecen como tomados á los delincuentes, omisión que si bien es cierto impide que se pueda hacer mérito de la presunción legal establecida en el artículo 1,620 del Código Judicial, no alcanza á favorecer á dichos delincuentes en los términos alegados por su defensor, pues ellos reconocieron tales objetos, los testigos vieron alguno de éstos en su poder, y, finalmente, ninguna prueba se ha dado de que su procedencia no sea la que resulta del sumario, es decir, de que tales objetos pertenecían al individuo condenado como autor principal del delito.

Sentado lo que precede, el infrascrito estima legal la condenación de Rodríguez en los términos en que ha sido hecha en el fallo consultado; pero no hace igual estimación respecto de la calificación y consiguiente castigo de Osorio como encubridor del delito, por razón á que todas las circunstancias que obran contra este indivuo, lo hacen cómplice del autor principal, como que cooperó espontáneamente y á sabiendas á la ejecución del delito en el acto de cometerlo (artículo 80 del Código Penal).

Así, pues, cree el infrascrito que el expresado fallo debe reformarse, condenando á dicho Osorio á sufrir la misma pena señalada á Rodríguez, por disponerlo así el artículo 249 *ibidem*, lo cual impide aplicar la disposición general del artículo 83 y supone la calificación del delito en tercer grado, calificación que el infrascrito acepta para ambos reos, dadas las circunstancias atenuantes de menor edad y ausencia de daños causados á tercero, pues del proceso no aparece que las pocas monedas fabricadas por ellos se hubieran puesto en circulación.

Bogotá, 4 de Agosto de 1886.

CARMELO ARANGO M.

Año I REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 8.º

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 22 de Marzo de 1887.

CONTENIDO.

PÁG.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

Acuerdo número 28, sobre calificación de nombramientos de Jueces, y otros asuntos 57

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Sobre seguimiento de causa á Manuel Escobar, por falsificación de moneda 59
De sobreseimiento en sumario por demoras ..... "
De id. en sumario por delito de rebelión ..... "
De id. en sumario por delito de falsificación de moneda. 60
De id. en sumario contra Cenón Figueredo, por delitos políticos ..... "
De id. en id. por falsificación de ciertos libramientos. "
De seguimiento de causa contra Antonio Blanco Mutis, por delito de estafa 61
Sobre devolución de un sumario, por no ser el caso de que la Corte anticipe su conocimiento 62
De sobreseimiento en el sumario contra Luis Francisco Peña, por delito político ..... "
De id. por prescripción, respecto de un Juez de Circuito.. 63

NEGOCIOS DE RESPONSABILIDAD.

Sobre seguimiento de causa á Martín Ortíz, Juez del Circuito de Barbacoas ..... "
De sobreseimiento en sumario seguido contra Leonidas Mercado O... "

RESOLUCIONES VARIAS.

De id. en un asunto consultado por el Ministerio del Tesoro. 64

GACETA JUDICIAL.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

ACUERDO NUMERO 32.

En Bogotá, á 16 de Marzo de 1887, se constituyó la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, y habiéndose leído las comunicaciones de que se hará mención adelante, el señor Magistrado doctor Samper hizo la siguiente proposición:

"Procédase á calificar los nombramientos de Jueces, hechos por los Tribunales Superiores de Distrito, que están pendientes, y respecto de los cuales tienen suficientes informes los Magistrados de la Corte; exceptuándose expresamente los nombramientos hechos por el Tribunal Superior de Panamá, por cuanto no han llegado los informes pedidos y oficialmente anunciados."

Puesta en discusión y votada, fué aprobada, haciendo constar sus votos negativos los doctores Calderón y Morales.

Los Magistrados doctores Calderón y Morales manifestaron: "Hemos dado nuestro voto negativo á la proposición por la cual ha resuelto la Corte entrar á calificar los nombramientos de Jueces, hechos por los Tribunales de Santander y el Tolima, por las razones siguientes:

"1.ª Yá el Consejo Legislativo ha expedido una ley que le quita á la Corte la facultad de calificar los nombamientos de Jueces, y de consiguiente está claramente manifestada la voluntad del Cuerpo Legislativo á ese respecto;

"2.ª Poco importa que la ley no esté promulgada, y que en consecuencia no tenga todavía fuerza obligatoria para la Corte, pues, en nuestro concepto, al derogarse el artículo 115 de la ley 61 de 1886, es porque el Consejo Legislativo ha considerado que no conviene dejar á la Corte la facultad indicada; y ésta Corporación daría una muestra de respeto á la voluntad del Consejo, absteniéndose de entrar á calificar los nombramientos hechos por los Tribunales de Santander y el Tolima;

"3.ª En nuestro concepto no urge la calificación que se proyecta, pues no hay peligro de trastorno en la Administración de Justicia, una vez que el Gobierno ha previsto el caso resolviendo que, si el día 1.º del que cursa no hubieren sido posesionados los Jueces nombrados, seguirán los que ejercen hasta tal fecha."

Incontinenti, haciendo constar el Magistrado doctor Noguera, la razón de su voto, dijo: "He votado afirmativamente la proposición de Su Señoría el Magistrado doctor Samper, porque hasta ahora no tengo conocimiento de que se haya aducido razón alguna plausible, para privar á la Corte de una facultad que no hace cuatro meses le fué conferida, por el voto unánime, me parece, de los Honorables Delegatarios y con aplauso general; habiendo además la circunstancia de que nadie ha puesto, ni creo podrá poner en duda, la absoluta imparcialidad con que la Corte ha procedido en estos asuntos, procurando sólo la mayor pureza y rectitud en la Administración de la Justicia.

"Que aunque es cierto, como lo expresa Su Señoría el Magistrado doctor Morales, que la voluntad del Cuerpo Legislativo está aun perfectamente conocida, en el sentido de privar á la Corte de la facultad de aprobar los nombramientos, también lo es que esa voluntad no se ha revestido del carácter de ley, única que puede obligar á la Corte y guiarla en sus determinaciones.

"En mi concepto, hay suma conveniencia, deducida de consideraciones de igualdad y de justicia, en que la Corte continúe hasta el último momento ejerciendo la atribución de que se trata para evitar de este modo, hasta donde sea posible, que unos nombramientos aparezcan revestidos de mayor solemnidad que otros, y que se dé, por decirlo así, á unos Jueces, un título á la consideración y á la confianza pública, que no se concedería á todos igualmente.

"Que, en cuanto á los Jueces nombrados por el Departamento de Panamá, la razón perentoria para exceptuarlos, por ahora, de este procedimiento, está claramente consignada en la proposición que acaba de aprobarse, la cual patentiza, además, el propósito de la Corte de atender únicamente al bien público en las calificaciones que le están atribuídas."

Acto seguido, Su Señoría el Magistrado doctor Samper, pidió se hiciese constar que se adhería á la exposición anterior en todas sus partes.

En seguida se procedió á la calificación por medio de balotas blancas y negras, y se obtuvo el siguiente resultado:

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Juez Superior.

Principal, Fidel Peláez, 5 balotas blancas contra 2 negras.
Suplente, Jesús Cuervo, 7 balotas blancas.

Jueces de Circuito.

Ibagué.

Juez único, Heliodoro Abadía, 7 id. id.
Suplente, Mirtiliano Sicard, 7 id. id

Honda.

Juez 1.°, Mariano Melendro, 7 id. id.
Suplente, Leonidas Amézquita, 7 id. id.
Juez 2.°, Arcadio Charry, 7 id. id.
Suplente, Andrés Santrich, 7 id. id.

Ambalema.

Juez 1.°, José María Lombana Domínguez, 7 id. id.
Suplente, Ignacio Galindo, 7 id. id.
Juez 2.°, Agustín Restrepo, 7 id. id.
Suplente, Cenón Cerna, 7 id. id.

Guamo.

Juez 1.°, Pio Triana, 7 id. id.
Suplente, Federico Cleves, 7 id. id.
Juez 2,°, Nicolás Camargo, 7 id. id.
Suplente, Manuel Caicedo J., 7 id. id.

Purificación.

Juez 1.°, Manuel A. Escallón, 7 id. id.
Suplente, Rufino Vargas, 7 id. id.
Juez 2.°, General Cenón Reyes, 7 id. id.
Suplente, Rudesindo Bonilla, 7 id. id.

Neiva.

Juez 1.°, Gabriel Vargas C., 7 balotas blancas.
Suplente, Manuel I. García, 7 id. id.
Juez 2.°, Manuel A. Ferreira, 7 id. id.
Suplente, Calixto Leiva L., 7 id. id.
Juez 3.°, Ramón Sanchez S., 3 id. id., contra 4 negras.
Suplente, Lucas Tovar A., 7 id. id.

Agrado.

Juez único, Juan A. Castillo, 7 id. id.
Suplente, José Antonio Barreiro C., 7 id. id.

Garzón.

Juez único, Manuel A. Silva, 7 id. id.
Suplente, Manuel M. Borrero, 7 id. id.

En consecuencia, la Corte declaró aprobados todos los nombrados, menos el del señor Ramón Sánchez S.

En seguida, se sometieron á votación los nombrados por el Tribunal Superior del Distrito de Santander, y se obtuvo el siguiente resultado:

Juez Superior, Otoniel Navas, 7 balotas blancas.

Jueces de Circuito.

Cúcuta.

Juez 1.° en lo civil, Carlos Matamoros, 7 id. id
2.° en lo id. Elías Jaime, 7 id. id.
Juez en lo criminal, Leocadio Gamboa, 7 id. id.

Charalá.

Juez principal, J. Clímaco Arias, 7 id. id.

García-Rovira.

Juez en lo civil, Leopoldo Quiroz. 5 id. blancas, 2 negras.
Id. en lo criminal, Timoleón Meneses, 6 balotas blancas, 1 negra.

Guanentá.

Juez en lo civil, Antonio María Rueda G., 7 id. id.
Juez en lo criminal, Manuel Esguerra V., 7 id. id.

Ocaña.

Juez en lo civil, Daniel Carbonell, 7 id. id.
Id. en lo criminal, Carlos Felipe Torres, 7 id. id.

Pamplona.

Juez en lo civil, Joaquín Peralta, 7 id. id.
Id. en lo criminal, Santos Carvajal, 7 id. id.

Socorro.

Juez en lo civil, José María Fonseca, 7 id. id.
Id. en lo criminal, Ramón Martínez V., 7 id. id.

Soto.

Juez en lo civil, Juan Francisco Mantilla, 7 id. id.
Id. en lo criminal, Gabriel S. Ruiz, 3 id. id., 4 negras.

Vélez.

Juez en lo civil, S. Cayetano Pradilla, 7 id. id.
Id. en lo criminal, Antonio María Ramírez A., 7 id. id.

En consecuencia, la Corte declaró aprobados todos los nombramientos hechos, menos el del señor Gabriel S. Ruiz.

En seguida se consideró el nombramiento hecho por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tundama, en el señor Rafael M. Salazar, para Juez suplente en lo civil del Circuito de Sugamuxi, y la Corte lo aprobó por unanimidad.

II

Se dió lectura á la copia del Acuerdo número 3.° del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca, en el cual resolvió que los Jueces nombrados anteriormente debían continuar en el ejercicio de sus funciones hasta que tomen posesión los nuevamente nombrados, y ordena consultarlo con esta Superioridad.

El señor Magistrado doctor Noguera hizo la siguiente proposición:

"Estése á lo resuelto por la Corte en el Acuerdo número 22 de 7 de Febrero próximo pasado, sobre un telegrama del Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia sobre este mismo asunto."

III

El señor Magistrado doctor Cock sentó la siguiente proposición:

"Por cuanto cursa en el Consejo Legislativo un proyecto sobre Constitución civil del Ejército, el cual contiene disposiciones graves que se rozan con las atribuciones del Poder Judicial, la Corte estima de importancia la concurrencia de los señores Magistrados á los debates, para que sostengan los fueros de dicho Poder, en armonía con la Constitución y con los principios de la Ciencia jurídica, y los excita á obrar en consecuencia."

La Corte aprobó por unanimidad esta proposición.

IV

Se leyó la comunicación del Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, de 5 del corriente, número 61, en la cual avisa que el señor Pedro Mora Vargas, nombrado Juez 2.° suplente del Circuito de Occidente, ha resultado sumariado por abuso de autoridad, y opina que la Corte Suprema debe resolver si apesar de esa causa, subsiste ó nó el nombramiento hecho en dicho señor Mora.

El señor Magistrado doctor Calderón, hizo la siguiente proproposición;

"La Corte Suprema de Justicia no se cree facultada para declarar insubsistente ó retirar la aprobación dada al nombramiento hecho por el Tribunal del Distrito Judicial de Tunja, en el señor Pedro Mora Vargas.

"Conforme al artículo 160 de la Constitución, los Jueces no pueden ser suspendidos en el ejercicio de sus destinos, sino en los casos y con las formalidades que determinen las leyes, ni depuestos sino en virtud de sentencia judicial. Además, la Corte adoptó la resolución de no reconsiderar ningún Acuerdo sobre aprobación ó improbación de Jueces, después de aprobado y firmado por los Magistrados.

"Corresponde naturalmente al Tribunal que hace un nombramiento tomar antes los informes necesarios sobre la idoneidad de las personas que elija para Jueces, de manera que se eviten los males resultantes de una elección inconsulta, tan perniciosos á la Administración de Justicia."

"Dígase así en respuesta al señor Presidente del Tribunal del Distrito de Tunja."

Discutida que fué, resultó aprobada por unanimidad, y se dió por terminado el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón.—Julián R. Cock Bayer—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintidós de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—En el sumario instruído contra Manuel Escobar, sindicado del delito de falsificación de moneda, el Juez 1.°, en lo criminal, del Circuíto de Medellín, pronunció auto de sobreseimiento, que ha remitido á esta Superioridad en consulta.

Fúndase el auto en no haber, respecto del sindicado, el testigo idóneo ni los graves indicios requeridos por el artículo 1,542 del Código Judicial para declarar con lugar á seguimiento de causa.

En el sumario constan los hechos siguientes:

1.° Haberse hallado el día seis de Julio de mil ochocientos ochenta y cinco, ocultos en los cimientos de unas paredes medianeras del lado de la casa de habitación de Escobar, varios instrumentos y materias propias para la falsificación de moneda, á saber, troqueles, cordoneras, punzones, cuños, láminas de metal recortadas como para amonedar, algunas monedas falsas y otros objetos de naturaleza análoga.

2.°. Haberse encontrado posteriormente, el catorce de dicho mes, en los mismos cimientos, otros muchos instrumentos propios para la falsificación de moneda, y algunas monedas falsas, con la circunstancia de que unos y otros daban señales de haber sido puestos allí recientemente.

3.° Ser el sindicado persona reconocidamente hábil en la construcción de instrumentos de acuñación de monedas, hecho que reconocen varios testigos y peritos, y lo confirma la circunstancia de haber tenido Escobar, durante mucho tiempo, el empleo de grabador de la Casa de Moneda de Medellín, y el haber construído, como él mismo lo confiesa, algunos instrumentos para dicha casa.

4.° Recaer sobre el mismo sindicado, desde há mucho tiempo, si nó la fama pública de falsificador de monedas, sí la opinión de muchas personas en este sentido.

5.° Haber un testigo de referencias, que dice que el sindicado tuvo en un tiempo compañía con otra persona para fabricar monedas falsas.

6.° Finalmente, el carácter retraído del sindicado, el tener su casa constantemente cerrada, y el no tener amigos ni visitar su casa persona alguna que tuviera la condición de tal.

Ahora bien, el artículo 1,620 del Código Judicial dice:

"Es presunción legal, y por lo mismo prueba plena para imponer la pena de falsificador de moneda el ser el sindicado poseedor ó mero tenedor de casa ó edificio rústico ó urbano en que se encuentren máquinas ó instrumentos adecuados para la fabricación de la moneda, siempre que por otra parte conste que en poder de la misma persona han existido recientemente monedas falsas. Contra esta prueba sólo se admite lo que plenamente justifique que otro ha sido el falsificador de las monedas encontradas."

De manera que en el delito de falsificación de moneda, es un indicio grave contra el poseedor de edificios, ó casa rústica ó urbana, el simple hecho de encontrarse en ellos máquinas ó instrumentos adecuados para la fabricación de moneda, y este mismo hecho es presunción legal y prueba plena cuando en poder de la misma persona han existido recientemente monedas falsas.

Como los otros indicios, yá mencionados, son diferentes y están relacionados con el hecho principal, tienen, en cónjunto, y en concepto de la Corte, el carácter de gravedad necesario para servir de fundamento al auto de proceder, que en conformidad á lo dispuesto en el artículo 1,542 del Código Judicial, debe dictarse, una vez que el cuerpo del delito de falsificación de moneda se halla plenamente comprobado.

A mérito de lo expuesto y de acuerdo con el dictamen del señor Procurador general, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el auto de sobreseimiento de fecha veintidós de Mayo del año en curso, proferido en este sumario; declara con lugar á formación de causa contra Manuel Escobar por el delito de falsificación de moneda, y ordena que se reduzca á prisión al procesado.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintitrés de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la precedente decisión.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintidós de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—Desde veintiuno de Septiembre de mil ochocientos ochenta y uno, ordenó esta Suprema Corte que se compulsara copia del auto de veintiuno de Febrero; de la diligencia de veinticinco del mismo mes; de la vista fiscal; del escrito del defensor y del informe de la Secretaria de tres de Marzo del mismo año de mil ochocientos ochenta y uno; todo para averiguar la responsabilidad en que pudiera haberse incurrido por la demora en la prosecución de la causa seguida, en el Territorio de Bolívar, contra Clementísimo Pinzón, por el delito de violación de domicilio; demora que pudo ocurrir, según se infiere de la actuación, ya en la Secretaría de la Corte, ya en el Juzgado de primera instancia.

Como se ve de las fechas que quedan citadas, el hecho que pudiera motivar la responsabilidad, cualquiera que haya sido, y quienquiera que pudiera ser el responsable, tuvo lugar hace más de cinco años; y aun cuando la actuación sumaria no está completa, ningún objeto tendría dar paso en ella, una vez que, conforme al artículo 71 del Código Penal, la pena está prescrita respecto del funcionario que pudiera ser culpable.

Por lo tanto, la Corte Suprema nacional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que la presente actuación debe cesar por ministerio de la ley y á virtud de prescripción.

Notifíquese, cópiese, publíquese y archívense las diligencias creadas.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintitrés de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Octubre veintidós de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—Las presentes diligencias se han instruído para averiguar el delito de rebelión ejecutado contra el Gobierno del extinguido Estado de Antioquia, en el Distrito de Girardota, á fines del mes de Junio del año próximo pasado.

Del proceso aparece que una partida de gente armada, encabezada por Majín y Cancio Soto, Francisco Cadavid y otros, y con el propósito de coadyuvar la acción de otras fuerzas rebeldes que obraban en distintos puntos de la República, recorrieron algunos lugares del Circuíto de Medellín, y ejecutaron hechos que daban á conocer su carácter de rebeldes.

Agotada la investigación, el Juez 1.°, en lo criminal, del Circuíto de Medellín, declaró terminado el procedimiento, en cumplimiento del Decreto expedido por el Jefe civil y militar del Estado de Antioquia, con fecha once de Febrero del presente año, sobre indulto; y consultó su resolución con el Tribunal Superior del mismo Estado.

El Tribunal se declaró incompetente para conocer de la consulta, por considerar que era el delito de rebelión el que había dado origen á la instrucción sumaria de que se trataba, y que teniendo carácter nacional dicho delito, era la Corte Suprema el Tribunal que debía conocer en segunda instancia. El Juez, de conformidad con dicho fallo, ha remitido el proceso á esta Superioridad, en consulta del auto de sobreseimiento en referencia.

No queda duda que los hechos ejecutados por los vecinos de Girardota, en el mes de Junio del año próximo pasado, constituyen el delito de rebelión, que está sometido únicamente á la

jurisdicción nacional, pues entre esos hechos no se encuentra ninguno que pueda tener el carácter de delito común, de la competencia seccional; y en tal caso, los hechos referidos están comprendidos en el Decreto del Jefe civil y militar del extinguido Estado de Antioquia, de fecha once de Febrero, y en el Decreto del Poder Ejecutivo nacional de fecha veinte de Julio del presente año. Así, pues, el auto por el cual se dispone la cesación de todo procedimiento, es fundado.

Por lo tanto, la Corte Suprema nacional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el señor Procurador general, confirma el auto de sobreseimiento consultado.

Notifíquese, copiese y devuélvase el proceso.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Laryacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintitrés de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Octubre veintidós de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—Consulta el Juez del Circuíto de Medellín, en el Despacho de lo criminal, el auto de sobreseimiento pronunciado el veintiuno de Agosto último, en las diligencias sumarias seguidas para averiguar si se había cometido el delito de falsificación de moneda ú otro que tuviera relación con la pérdida de un troquel.

De la instrucción sumaria aparece que Luis Atehortúa, halló en la orilla de la quebrada Santa-Elena, que pasa por Medellín, en el sitio llamado "Quebrada arriba," un objeto que le fué desconocido; y que Luis F. Bermúdez, con quien habló sobre esto, le manifestó que era un troquel y que debía entregarlo á la autoridad, lo cual hizo el mismo Bermúdez por recomendación de Atehortúa.

Reconocido el troquel, se ha juzgado que pertenece á la Casa de Moneda de Medellín, aunque en su oficina no hay constancia de la pérdida del troquel, que sirve para falsificar moneda de plata de veinte centavos, suponiéndose que pudo ser arrojado á la quebrada por alguno de los obreros de la Casa, en los momentos de confusión que precedieron al cambio de Gobierno en la capital del entonces Estado de Antioquia.

Las declaraciones recibidas para inquirir la conducta de los que viven en las cercanías del sitio en donde el troquel fué hallado, hacen constar que los que por allí habitan son personas honradas, incapaces de falsificar moneda; y el señor Procurador general, considerando agotados los medios razonables de investigación, cree que debe aprobarse el sobreseimiento.

Por lo tanto, siendo llegado el caso de que trata el artículo 1,543 del Código Judicial nacional, de acuerdo con la opinión del señor Procurador general, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, confirma el auto de sobreseimiento consultado.

Notifíquese, cópiese y devuélvase el proceso.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En veinticinco de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la precedente decisión

FERNÁNDEZ—*Guerra* A., Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Octubre veintidós de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—Cenón Figueredo, Jefe de una de las partidas armadas que, en la última rebelión, hicieron la guerra al Gobierno nacional, asaltó en el sitio de "Arrayán," cerca de la ciudad de La Mesa, al correo nacional, de la línea del Pacífico, violando parte de la correspondencia y apoderándose de la encomienda que llevaba el respectivo conductor, de mil doscientos cincuenta pesos ($ 1,250) en moneda de níkel, enviada por la Administración general de correos á la de Ibagué, para gastos del servicio telegráfico y de orden de la Secretaría del Tesoro.

Como estos hechos constituyen los delitos señalados en los artículos 311 y 364 del Código Penal, por orden del Gobierno de la República se mandaron levantar las presentes diligencias, que tienen como base el aviso dado por el Administrador de La Mesa, y el examen que después del asalto se practicó por este empleado, en las cosas que quedaron de las que conducía el correo del Pacífico; y continuándose la actuación, el Juez 1.° del Distrito federal, en lo criminal, por auto que consulta, de doce del último Agosto, ha declarado comprendidos los hechos que son materia de este procedimiento, en la amnistía expedida por el Excelentísimo Presidente de la República, el veinte de Julio del corriente año; opinión que favorece el señor Procurador general.

Los delitos políticos, según el artículo 22 de dicho Código Penal, se cometen contra el orden general de la Nación, con exclusión del provecho particular del que los comete; y como al violar una parte de la correspondencia conducida por el correo, sólo se propuso Figueredo tomar datos acerca de la situación política del país, destinando el valor de la encomienda sustraída al sostenimiento de la tropa de que era Jefe, y esto tuvo lugar el veinticuatro de Diciembre de mil ochocientos ochenta y cuatro, tales hechos están comprendidos en la enunciada amnistía, que sólo exceptúa el delito de traición, y que se extiende al tiempo transcurrido de primero de Diciembre de mil ochocientos ochenta y cuatro á veinte de Julio de este año.

La reforma cuadragésima tercera de la ley 46 de 1876, establece que por la amnistía cesa todo procedimiento criminal contra el reo, pero no el curso de la acción civil intentada ó el derecho de intentarla, por los daños y perjuicios causados por el delito; y por esto, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador general, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, confirma el auto consultado, en cuanto manda cesar el procedimiento criminal; pero declara, además, que queda á salvo el derecho de intentar la acción civil por los daños y perjuicios causados por el delito.

Notifíquese, cópiese y devuélvase el proceso.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En veinticinco de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la precedente decisión.

FERNÁNDEZ—*Guerra* A., Secretario.

Corte Suprema de justicia.—Bogotá veintidós de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—El Juez 2.° del Circuíto de Zipaquirá en los negocios criminales, profirió con fecha diez y siete de Agosto último, nuevo auto de sobreseimiento en este sumario, destinado á descubrir el delito de falsificación y circulación de libramientos de los que expide la Administración principal de Salinas de Zipaquirá, en favor de los compradores de sal.

La ampliación decretada por la Corte en dos de Noviembre próximo pasado, y practicada debidamente por el funcionario de instrucción, no ha ttraído más luz sobre el asunto.

Se han justificado plenamente estos hechos:

1.° Que el veinticinco de Mayo de mil ochocientos ochenta y cinco presentó Javier Toquica, vecino de Cajicá, al Almacenista de sales de Zipaquirá, Manuel Abello Herrera, tres guías y libramientos escritos en papel verde, expedidos en favor del tenedor, marcados con los números 744, 745 y 746, por veinte arrobas de sal vijua, cada uno, fechados el siete de Mayo de aquel año, y con el sello que representa la firma de A. de J. Rey, Contador de la Administración.

2.° El almacenista, observando que los libramientos presentados por Toquica, tenían números de otros que yá habían sido cubiertos á otras personas, según el libro de registro que en su oficina llevaba, y creyendo que en la Administración se había sufrido error en cuanto á los números, como otras veces había sucedido, devolvió los libramientos á quién se los presentaba para que ocurriese á hacer rectificar la equivocación en aquella oficina.

3.° Toquica se dirigió á hacer lo que se le indicaba y en el trayecto se encontró con el muchacho Antonio Ramírez, con quien envió los libramientos á la Administración, para que se los cam-

biaran. Ramírez presentó los papeles á un oficial, y éste, viendo que eran falsos, dió cuenta al Jefe de la Oficina, quien ordenó fuera llamado Toquica, el cual, á causa de la demora del muchacho en regresar, se encaminaba á la Administración, cuando encontró á Martiniano Quintero con quien el Administrador lo mandaba á llamar.

4.° Toquica se presentó á aquel empleado, el que le ordenó pusiera su firma al reverso de las libranzas, lo que aquél verificó, hecho lo cual el Administrador le indicó á Toquica que si no encontraba á la persona á quien decía haber comprado esas guias, perdería su dinero. Las libranzas quedaron en la oficina y fueron agregadas más tarde á la instrucción.

5.° Hecho un reconocimiento pericial de las libranzas y examinado el libro de registro de la Administración, en donde se hacen asentar las partidas de sal vendida, con anotación del número del libramiento, resulta que el sello estampado en las presentadas por Toquica es el mismo que usa el Contador Antonio de J. Rey, para marcar los libramisntos y guías que expide, y con la misma especie de tinta que este usa; que las fechas, cantidad y nombre en favor del cual se giraron esas libranzas no son las mismas que constan en el libro en que se asentaron las cuentas de sal, bajo los números que las libranzas contienen; que no se ha encontrado semejanza entre las letras de los diferentes empleados de la oficina de la Administración y aquella con que se escribió el nombre del tenedor, fecha y número de las libranzas, ni entre la firma autógrafa de Toquica y la letra con que se escribió su nombre en el fondo de los documentos.

Lo expuesto demuestra que los libramientos fueron sustraídos de la oficina nacional en donde se expiden, cuando se les había puesto yá el sello, y que se les suplantaron los números, nombre del interesado, cantidad y fecha.

Pudo sin dificultad hacerse la sustracción, pues muchos de los empleados de la Administración, entre ellos el Contador declararon que antes de la fecha de la presentación de las libranzas falsas, se acostumbraba poner el sello de este empleado á los esqueletos de libranzas, antes de verificarse las ventas y de inscribirse en el libro de registro, con el objeto de adelantar trabajo; y que cuando ocurrían muchos compradores á un mismo tiempo, los empleados de la oficina tomaban cada uno una cantidad de estos documentos para despacharlos en sus respectivas mesas, y que, de ellos pudieron ser tomados, por alguno de los compradores que al local entraban, los que son objeto de esta investigación.

El único sindicado, que hasta ahora aparece en el asunto, si no de la falsificación,-porque ni la semejanza de escritura ni ningún otro indicio lo denuncia como tal,- sí del delito de circulación de documentos falsos, es Javier Toquica, individuo en cuyo poder se encontraron las libranzas de las cuales interesaba hacer uso; pero esta circunstansia no indica necesariamente que el tenedor supiera que los documentos eran falsos.

Toquica dice en sus declaraciones, que compró esos papeles á un individuo que no conoce, cuya filiación hace, cuyo aspecto y vestido describe, á quien no ha podido ver otra vez; y que los compró á un desconocido con preferencia á la Administración, porque la sal la vendía el Gobierno en esa época á dos pesos la arroba, y él la compró á un peso setenta centavos.

El modo de conducirse Toquica, cuando los documentos le fueron rechazados en el almacén de sal, demuestra con bastante claridad que él no sabía que los libramientos fueran falsos, pues en vez de ocultarlos, los presenta al Administrador para que los cambie, y firma al dorzo cuando se lo exigen.

Es verosímil, también que él hubiera comprado á un extraño la sal, prefiriéndolo al Gobierno, pues éste, según certificado del Almacenista, vendía el artículo en ese tiempo á tres pesos la arroba, mitad en dinero y mitad en billetes del Banco Nacional; y sobre todo esto aparece de varios testimonios de personas respetables de Cajicá, que Toquica es hombre laborioso y honrado y que nunca se le ha hecho inculpación de delitos contra la propiedad.

No se ha podido, pués, reunir en este sumario la prueba necesaria, para proceder contra el sindicado ni contra ninguna otra persona, ni es posible llegar á este resultado, pues el tiempo transcurrido hace difícil, si no imposible, la tarea, y la investigación ha agotado sus recursos.

En consecuencia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con la opinión del señor Procurador general, se confirma el auto consultado.

Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez.—José M. Samper.—Manuel J. Angarita.—Julián R. Cock Bayer.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Luis S. de Silvestre.—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintitrés de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede,

FERNÁNDEZ.—*Guerra A., Secretario.*

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintidós de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—El General Luis Capella Toledo dirigió desde esta capital, en veinticuatro de Enero de mil ochocientos ochenta y dos, una denuncia (fojas 1.ª) al Juez del Circuíto de Manizales, relativo á la falsificación que Antonio Blanco Mutis había hecho de la firma del mismo denunciante, simulando una orden que literalmente dice así:

"Señor Comandante García.

"Hemos llegado hasta aquí perfectamente.

"Llamo al Teniente Blanco al servicio y pasapórtelo hasta Medellín de ida, regreso á Bogotá y vuelta de aquí á esa ciudad, con los auxilios de su clase. Para él van unas cartas de Bogotá, directamente.

"Su afectísimo,

"LUIS CAPELLA TOLEDO.

"Soledad 12, 1882."

El Comandante Moisés García, que estaba encargado del mando de la plaza de Manizales, por nombramiento que el General Capella Toledo le había hecho, al retirarse de allí, como Comandante general de la Brigada "Cauca y Antioquia," dió cumplimiento á la supuesta orden, que está escrita con lápiz, y expidió al Teniente Blanco un pasaporte en el cual se asignan los motivos de la supuesta orden, y aparece la liquidación por auxilios de marcha de la cantidad de ciento veintidós pesos ($ 122), la misma que recibió el pasaportado en la Administración subalterna de Hacienda nacional de aquella ciudad.

El Comandante García, en su declaración del nueve de Febrero (fojas 5), asegura que el catorce de Enero del año citado, Blanco Mutis le entregó personalmente la orden del General Capella Toledo, y que también le mostró ese portador unas cartas, suscritas, una por el General Eliseo Payán y otra por el General Juan N. González O.; que también le enseñó un pliego de instrucciones, suscrito, al parecer, por el General Payán. Mas, en treinta de Octubre, el citado García rectificó su primitivo testimonio, exponiendo: "que la boleta ú orden del General Capella para llamar al Teniente Blanco al servicio, no la recibió personalmente de él, sino que la señora de García se la había entregado, diciéndole que Blanco se la había dejado"; que en el mismo día le había preguntado este individuo, que si había recibido la orden que le había dejado en casa, ofreciéndole mostrar las instrucciones y cartas que había traído, lo que verificó después como lo tenía expuesto en su primera declaración. El Capitán Cupertino Salgado, Ayudante del Comandante García (fojas 31), dice que Blanco le manifestó que tenía pliegos importantes del Gobierno nacional para el de Antioquia, motivo por el cual aconsejó al Jefe García, que expidiera el pasaporte.

Clotilde Rozo, sirvienta, del Comandante García (fojas 65 vuelta) dice que Blanco le entregó un papel ó boleta para dicho Comandante; pero que no sabe si sería ese papel el mismo que obra en el sumario como la supuesta orden del General Capella.

El Gobernador del Estado de Antioquia, Luciano Restrepo, afirmó en veintinueve de Enero de mil ochocientos ochenta y cuatro (fojas 58 vuelta), que Antonio Blanco Mutis no llevó ninguna comisión que debiera desempeñar ante el Gobierno del Estado.

El sindicado, en su declaración instructiva, corriente á fojas 17, confesó que se le había expedido el pasaporte yá mencionado, y que había recibido los auxilios de marcha, pero negó que él hubiera escrito ó presentado la orden atribuída al General Capella, al Comandante de la plaza de Manizales. En su 4.

respuesta, se expresa así: "Que no conoce al individuo que un día, como á las ocho de la mañana, fué á la casa del deponente y preguntó si allí vivía el Comandante García, y habiéndole contestado que nó, el dicho muchacho se fué con el que declara y le entregó aquél á una niñita una carta que le dijo que tenía de Soledad para el Comandante; que ella la recibió y el que declara no supo el contenido, y que después, más tarde, fué llamado al servicio militar."

Estos antecedentes, que son los que tienen una relación cardinal con los delitos de falsedad y de estafa, á que se contrae la indagación, sirvieron de base al Juez de primera instancia para dictar el auto de veintidós de Mayo del presente año, que reitera el sobreseimiento que antes había resuelto el mismo Juzgado, y que había revocado la Corte para que se ampliara el sumario. Sustanciado legalmente el expediente en esta segunda instancia, á virtud de la consulta hecha por dicho Juez, se procede á resolver lo que se considera arreglado al mérito de la actuación, puesta al estudio de la Corte el diez y seis del presente mes.

Es indudable que la orden en la cual se fundó la expedición del pasaporte para el Teniente Blanco Mutis, es apócrifa, según el testimonio del General Capella Toledo y el dictamen de los peritos que hicieron el reconocimiento y confrontación respectiva de aquel manuscrito. El cuerpo del delito de falsedad está legalmente justificado; pero no puede sostenerse lo mismo respecto á la responsabilidad del sindicado, ni como autor principal, ni como cómplice del delito de falsedad; porque el Comandante Moisés García se contradijo en sus dos declaraciones de una manera notable, y conforme al artículo 544 del Código Judicial su dicho no hace fe; además, la sirvienta, Clotilde Rozo ignora si la papeleta que obra en el expediente es la misma que le consignó Blanco para entregársela al Comandante García. No se puede, en consecuencia, abrir juicio contra el sindicado, por este delito.

Pero hay que examinar, además, si, como sostiene el Juez de primera instancia, la íntima relación que hay entre el delito de falsedad en el presente caso y el de estafa, proveniente de haberse tomado del Tesoro público, la cantidad de ciento veintidós pesos como auxilios de marcha para el desempeño de la comisión que se simuló en una orden apócrifa, trae consigo la necesidad de reconocer la inculpabilidad del Teniente Blanco Mutis á este último respecto.

No le es imputable, es verdad, por lo que resulta del sumario, el delito de falsedad. Pero á manos de ese individuo fué el pasaporte y la liquidación de auxilios de marcha que el Comandante García y la Administración de Hacienda fundaron en ese documento falso, insertando su contenido. Era muy natural que el sindicado hubiera hecho presente, por lo menos á esos funcionarios, que él no había recibido ninguna comisión del General Capella Toledo para conducir pliegos á Medellín y á la capital de la República, en asuntos del servicio. El Teniente Blanco acepta el pasaporte y el dinero; emprende marcha para Medellín; ningunos pliegos consigna al Gobernador del Estado, con quien para nada se entiende; se queda en Medellín y no sigue á la Capital de la Unión, porque no tenía objeto para ello; pero sí se aprovecha de los dineros públicos. Si el Teniente Blanco no preparó el fraude suplantando la firma del General Capella T. para obtener auxilos del Tesoro; no menos engañador fué al recibir un pasaporte y auxilios del Tesoro, sin antecedente justificable, aprovechándose, cuando menos, de los errores de dos empleados; errores que á ninguno le tenían que ser más patentes que al Teniente Blanco. Su conducta dolosa al recibir los auxilios de una marcha que no tenía por qué emprender, lo pone bajo la sanción del artículo 615 del Código Penal, que define así el delito de estafa:

"Comete estafa el que adquiere dineros, efectos ó escrituras, por medio de un artificio, engaño, superchería ú otro embuste que mueva á las personas de quienes se obtiene á entregarlos."

Los dos funcionarios sorprendidos, aunque se ignora por *quién*, brindan, si se quiere, los dineros públicos á un individuo que no tiene por qué recibirlos, y éste, lejos de rectificar el error, con una manifestación leal y honrada, se da por un Agente oficial en comisión, que no tiene, y se pone en marcha de Manizales para afirmar en su error á aquellos empleados y hacerse á la cantidad que se le entrega. No puede, en verdad, ser más patente la superchería y el consiguiente engaño de parte del sindicado.

Por lo tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, reforma el auto de sobreseimiento consultado, y declara que hay mérito para proceder criminalmente contra Antonio Blanco Mutis por el delito de estafa de dineros públicos: que no hay igual mérito para abrir causa al sindicado por el delito de falsedad, respecto al cual se confirma el sobreseimiento decretado por el Juez de primera instancia.

Notifíquese, cópiese, publíquese en el *Diario Oficial* y devuélvase la causa.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En veinticinco de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Octubre veintitrés de mil ochocientos ochenta y seis.

Con fecha veintiuno de Abril del año en curso, el Juez de la Provincia de Sincelejo dictó auto de proceder contra el Capitán John Hardey, del bergantín *Ambroce Leigh* por violación del artículo 325 del Código Fiscal; y sobreseyó respecto de Indalecio Calderón y Antonio Martínez, sindicados del mismo delito. Como en dicho auto se ordenó la consulta de él, la actuación se ha remitido á esta Suporioridad con el fin de que aquella se verifique.

De conformidad con el artículo 1,547 del Código Judicial, cuando se declara con lugar á formación de causa contra alguno ó algunos de los sindicados, y al mismo tiempo se sobresee respecto de alguno ó algunos de los otros, no se consulta el auto de sobreseimiento, sino, cuando esto mismo se verifica con la sentencia definitiva, que se haya dictado á virtud del juicio, á que dió origen el auto de proceder.

En consecuencia, la consulta ordenada por el Juez, en el memorado auto, es extemporánea, y por ello la Corte se abstiene de conocer por ahora, del auto consultado, en la parte respectiva; y ordena que se devuelva el expediente al Juez de primera instancia, para que éste, en oportunidad, dé cumplimiento á lo dispuesto en el mencionado artículo 1,547.

R. Antonio Martínez— José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En veinticinco de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra* A., Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Octubre veinticinco de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—La presente actuación ha tenido por objeto averiguar la responsabilidad en que haya podido incurrir Luis Francisco Peña, por haber intentado hacer volar una parte de las murallas de Cartagena, durante el sitio puesto á esa ciudad, en el año pasado, por las fuerzas revolucionarias comandadas por Ricardo Gaitán Obeso.

Del expediente aparece lo que en seguida se expresa. En la noche del veintinueve de Abril del año pasado, cuando las fuerzas revolucionarias se hallaban al frente de la ciudad de Cartagena, el soldado José Jiménez, quien hacía de centinela en el baluarte de "Santa Catalina," notó que un individuo estaba al pié de la muralla sobre la cual se encontraba colocado Jiménez; éste le dió por tres veces el grito de ordenanza, y cuando yá iba á disparar su arma, el individuo que estaba al pie de la muralla manifestó que venía del campamento enemigo con el propósito de pasarse al Ejército sitiado. Con ese motivo, acudieron algunos oficiales y soldados de la guarnición, y, por medio de una cuerda hicieron subir al individuo mencionado; y cuando éste estuvo sobre la muralla aseguró, en presencia de una multitud de personas, que el verdadero objeto de su venida había sido el de colocar, en las grietas de la muralla, unos cartuchos de dinamita, comisión que le había sido encomendada por Ricardo Gaitán. Al efecto, uno de los soldados bajó al punto donde se había visto á Peña, y encontró entre la muralla

dos cartuchos de dinamita, cada uno del peso de una libra poco más ó menos.

Sobre los hechos referidos declaran varias personas, como testigos presenciales, y el sindicado ha dado confesión categórica ante el Juez de primera instancia.

El Juez declaró terminado el procedimiento, porque ha conceptuado que el delito que se averigua había quedado comprendido en el decreto sobre amnistía, expedido por el Poder Ejecutivo nacional, con fecha veinte de Julio del presente año, y ha consultado dicha providencia con esta Superioridad.

No cabe duda que el hecho que intentó ejecutar Luis Francisco Peña, el veintinueve de Abril de mil ochocientos ochenta y cinco, era consecuencial de la rebelión ejecutada por el ejército revolucionario contra el Gobierno constitucional de la República; pues la causa determinante de la conducta del sindicado, era franquear una parte de las murallas de la ciudad á las tropas de las cuales él formaba parte. Si esto es así, el hecho debe considerarse como meramente político, y por lo tanto está comprendido en la amnistía concedida por el Poder Ejecutivo nacional, de fecha veinte de Julio del presente año.

Así, pues, la Corte Suprema nacional, de acuerdo con el concepto del señor Procurador general, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto de sobreseimiento consultado.

Notifíquese, cópiese, publíquese en el *Diario Oficial* y devuélvase el proceso.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintiséis de Octubrs de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra* A., Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Octubre veintisiete de mil ochocientos ochenta y seis.

Por lo que resulta del informe precedente, atendiendo á la naturaleza del cargo que pudiera deducirse, á la pena que pudiera imponerse y al tiempo trascurrido; la Corte encuentra que no tiene para qué adelantar la actuación respecto de la demora imputable al Juez del Circuíto de Obando, en la devolución del proceso de que habla el Administrador de la Aduana de Carlosama. Tampoco corresponde á la Corte dar providencias de carácter administrativo para compeler á los Jueces al cumplimiento de sus deberes, sino juzgarlos cuando para ello hubiere motivo.

Por lo tanto, la Corte Suprema nacional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara terminada la actuación, por prescripción de la pena que pudiera caber al Juez de Obando, por la demora en la devolución del proceso de que se trata, y en la época á que estas diligencias se refieren; y ordena que esta actuación se archive.

Pero como falta por averiguar lo que resultara de la pérdida del proceso seguido por el contrabando imputado á José María Arteaga, pídase informe al señor Administrador de la Aduana de Carlosama, sobre la reposición, suerte ó paradero de ese proceso.

Notifíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintinueve de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra* A., Secretario.

NEGOCIOS DE RESPONSABILIDAD.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintidós de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—José María Guerrero dió denuncio contra el Administrador Tesorero de la Aduana de Tumaco, por varios hechos que el denunciante consideró sujetos á responsabilidad criminal.

El Juez del Circuíto de Barbacoas, después de haber practicado las diligencias correspondientes, dictó auto de sobreseimiento respecto del empleado denunciado.

La Corte, por resolución de cuatro de Mayo de mil ochocientos ochenta y tres, al ocuparse de las diligencias practicadas en averiguación de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir el Administrador de la Aduana de Tumaco, ordenó se sacara copia de lo conducente, á fin de examinar la conducta legal del Juez del Circuíto de Barbacoas; y después de haberse obtenido copia de las piezas necesarias, entre ellas las de las diligencias de nombramiento y posesión del expresado Juez, y de haber oído el parecer del señor Procurador general de la Nación, se pasa á resolver en el presente asunto.

Conforme á la atribución 9.ª del artículo 18 del Código Judicial de la Nación, á la Corte Suprema corresponde conocer en una sola instancia de las causas de responsabilidad contra los Jefes Superiores de las oficinas principales de Hacienda, y entre estos están mencionados los Administradores de Aduanas, en el parágrafo correspondiente á dicha atribución. Así, pues, al dictar el Juez del Circuíto de Barbacoas auto de sobreseimiento en el sumario instruído contra el Administrador de la Aduana de Tumaco, ha ejercido atribuciones que no le han sido conferidas por la ley, y en consecuencia, se ha hecho responsable al tenor del artículo 454 del Código Penal de la Nación, que dice:

"Art. 454. El funcionario ó empleado público que á sabiendas se exceda de las atribuciones de su empleo, cargo ú oficio, ó ejerza otras que no le correspondan, será suspenso de todo cargo ó empleo por dos meses á tres años, pagará una multa de cinco á sesenta pesos y será apercibido; pero si el exceso cometido tuviere señalada otra pena, será esta la que se aplica."

Por lo tanto, la Corte Suprema Nacional, de acuerdo con el concepto del representante del Ministerio público nacional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, llama á juicio de responsabilidad por los trámites extraordinarios, á Martín Ortiz, Juez del Circuíto de Barbacoas, por infracción del artículo 454 del Código Penal de la Nación; y dispone que el procesado informe dentro del término de veinte días, contados desde la notificación de este auto, para lo cual se librará el despacho correspondiente con remisión de lo actuado. Si el encausado ejerciere aún el empleo de Juez de Circuíto de Barbacoas, el despacho se pasará á otro de los Jueces del mismo Circuíto, y si no hubiere más que un Juez, al respectivo suplente. En caso de que el sindicado no ejerciere yá el expresado empleo, el despacho será diligenciado por el Juez principal de aquel Circuíto.

Notifíquese y cópiese.

Rito Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En veinticinco de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la decisión que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintiocho de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—Desde el mes de Febrero de mil ochocientos ochenta y dos, elevó José María Guerrero, denuncia ó queja contra Leonidas Mercado O., por abusos que decía haber cometido éste en su calidad de Administrador Tesorero accidental de la Aduana de Tumaco. Aparece de uno de los cuadernos que se tienen á la vista, que el Juez del Circuíto de Barbacoas dictó en el mismo año, sin expresar el mes, auto de sobreseimiento que consultó con esta Superioridad, la cual por auto de cuatro de Mayo de mil ochocientos ochenta y tres, mandó sobreseer directamente y que se archivase el sumario, por cuanto el asuto era de la competencia exclusiva de la Corte, en una sola instancia; y por cuanto el Juez de Barbacoas había conocido y fallado en lo que no le competía, mandó compulsar copia de lo conducente para averiguar la responsabilidad en que dicho Juez hubiera incurrido,

Posteriormente figuran en el expediente, compuesto de cuatro cuadernos, los siguientes autos de la Corte:

1.° Uno de fecha quince de Abril de mil ochocientos ochenta

y cuatro, por el cual se mandaron practicar ciertas diligencias, á virtud de pedimento del señor Procurador general, fundado en documentos transmitidos por la Secretaría de Hacienda nacional y por la de Gobierno del Estado del Cauca, de las cuales resultaban recíprocas recriminaciones del Administrador de la Aduana de Tumaco, Nicomedes Conto, y del Contador de la misma, Leonidas Mercado. Dicho auto dió por resultado la creación de algunos documentos probatorios sobre el carácter oficial de aquellos empleados.

2.° Otro de fecha veintitrés de Agosto del mismo año de mil ochocientos ochenta y cuatro, por el cual se dispuso que el señor Procurador general emitiese concepto, por lo tocante á la responsabilidad de Mercado, nó como Contador, sino como Administrador interino ó accidental de la Aduana de Tumaco.

3.° Otro de fecha tres de Noviembre del mismo año, por el cual se resolvió se practicasen nuevas diligencias, para ampliar el sumario relativo á Mercado; librándose al efecto despacho al Juez de Barbacoas, el cual volvió diligenciado.

Posteriormente, el diez y ocho de Agosto de mil ochocientos ochenta y cinco, el señor Procurador emitió concepto nuevamente, pidiendo se declarase sin lugar á formación de causa contra Mercado, por haberse desvanecido los cargos que se le hacían, pero que se sacase copia de lo conducente, con el fin de que se avariguase la responsabilidad en que hubieran podido incurrir el Capitán de la balandra *Bella Manabita* y Elías D. Morcillo, á quienes se alude en varias de las declaraciones que por la ampliación ordenada se practicaron.

Repartido este negocio nuevamente, el día diez y seis del presente mes, llega el caso de que la Corte éntre á considerarlo en el fondo y fallar.

Los cargos que se hicieron al Administrador accidental ó interno de la Aduana de Tumaco, Leonidas Mercado, fueron los siguientes, según las denuncias del doctor Nicomedes Conto.

Primero. Haber permitido el desembarco de un piano y otros muebles averiados, del servicio particular de la barca *San-Remo*, sin que se pagasen los derechos de importación respectivos;

Segundo. Haber procedido con negligencia respecto del despacho de un armamento que fué embarcado á bordo de la balandra *Angela*, con destino á Buena-Ventura, y que en seguida fué trasbordado fraudulentamente á la balandra *Bella-Manabita*, la cual desapareció, sin que se supiese qué rumbo había tomado con el cargamento de armas; rumbo que, según se supuso, fué dirigido hacia un puerto de la República del Ecuador, que se hallaba á la sazón (Mayo de 1883) en estado de guerra civil.

De los primitivos documentos que compusieron el sumario, no resultaban pruebas, sino denuncias y simples referencias, sobre la comisión de los dos delitos de responsabilidad imputados á Mercado; pero practicadas las nuevas diligencias, que esta Superioridad exigió por vía de ampliación, resulta de la declaración del Alcalde, Félix Arizala, de Elías D. Morcillo, de Uldarico H. Rodríguez, ex-Capitán del Puerto, y del Guarda Manuel Huertas (fojas 3.ª á 10.ª del cuaderno número 3.°) que los hechos ocurrieron del modo siguiente:

1.° Por lo tocante á los muebles desembarcados, que el interesado hizo la respectiva declaración á la Aduana, pidiendo, respecto del piano, que se permitiese el desembarco por avería, y respecto de dos estanques portátiles de hierro para conservar agua, y un canapé usado, con el objeto de componerlos en tierra, por estar muy dañados. En cuanto al piano, se llenaron todas las formalidades del caso, y previo examen de peritos, se eximió del pago de derechos dicho mueble, por calificación de entera avería; y en cuanto á los otros muebles, se dió en toda regla permiso para el desembarco, con el solo fin de componerlos, y permanecieron en tierra, en poder de Elías D. Morcillo, y así quedaron, al tiempo de la partida de la barca *San-Remo*, cuando ya Mercado no era Administrador interino de la Aduana de Tumaco, sino que había vuelto á funcionar el Administrador principal, doctor Nicomedes Conto. De todo esto resulta la completa inculpabilidad de Mercado, y que si pudo haber involuntaria negligencia, fué de parte de Conto.

2.° Por lo que respecta al asunto de las balandras *Angela* y *Bella-Manabita*, está plenamente comprobado que los hechos fueron los siguientes: llegó á Tumaco el cargamento de armas, y fué despachado en toda regla para Buena-Ventura, á bordo de la *Angela*; pero ésta, á poco de salir del puerto, hizo señal de pedir auxilio, por avería, y ocurriendo el Guarda Manuel Huertas en un bote de la Aduana, fué á bordo, se persuadió de que la balandra estaba á punto de zozobrar, y dispuso que la mitad del cargamento fuese transportada á la balandra *Bella-Manabita*, que en aquellos momentos se apareció, con destino y rumbo á Tumaco, y sus papeles en regla. Pero luégo el Capitán de la *Angela* manifestó que este buque no podía andar ni con la mitad de la carga, por lo que toda fué trasladada á bordo de la *Bella-Manabita*, donde se instaló el Guarda. El Capitán de este buque arbitró un pretexto para no entrar en el puerto de Tumaco, y al cabo, arrojó al Guarda al mar, en una mezquina embarcación, dejándole en grave peligro, y soltó velas y partió, con rumbo desconocido, llevándose el cargamento de armas para el Ecuador, según se creyó en Tumaco. Al llegar á tierra el Guarda Huertas, inmediatamente, dió parte de lo ocurrido, y el Administrador Mercado, de acuerdo con el Alcalde, tomó las providencias necesarias, mandando gente en botes á perseguir y detener la balandra fugitiva, que no pudo ser alcanzada ni vista siquiera. Aparece, pues, con toda evidencia, que no hubo culpabilidad alguna de parte de Mercado.

Por estas consideraciones, la Corte Suprema, de acuerdo en todo con la opinión del señor Procurador general, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara no haber lugar á procedimiento alguno contra el ex-Administrador interino de la Aduana de Tumaco, Leonidas Mercado O.

Y por cuanto de las declaraciones del cuaderno 3.° resulta que ha podido cometerse un grave delito por parte del Capitán de la balandra *Bella-Manabita*, y otro de fraude á la renta de Aduanas, por parte de Elías D. Morcillo, sáquese cópia de la vista última del señor Procurador, de las cuatro declaraciones que se hallan á fojas 3 á 10 del cuaderno número 3, y de esta sentencia, y remítase todo al Juez del Circuíto de Barbacoas para que, con vista de estos documentos, levante los correspondientes sumarios, con el fin de averiguar si se han cometido por dicho Capitán, ó por Morcillo ú otra persona, los delitos que en esta parte se mencionan.

Notifíquese y publíquese en el *Diario Oficial*, y archívese todo el expediente.

R. Antonio Martínez.—José M. Samper.—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintinueve de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la precedente decisión.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

RESOLUCIONES VARIAS.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Octubre veintitrés de mil ochocientos ochenta y seis.

El señor Ministro del Tesoro, por carta oficial del nueve de este mes, número 1,066, sección 3.ª dirigida á la Secretaría de la Corte, expresa el deseo del Gobierno de oír el dictamen de esta Corporación, sobre la vigencia ó insubsistencia de las pensiones que el Estado de Panamá concedió á varios individuos, de su propio Tesoro, cuyo pago ha suspendido el Gobernador de ese Departamento, por ser hoy las rentas del extinguido Estado de propiedad nacional.

Como lo manifiesta el señor Procurador general en su dictamen del veintiuno de este mes, este Trfbunal no puede emitir conceptos generales de una manera abstracta; ella solamente puede dictar autos ó sentencias en expedientes sobre juicios contradictorios entre partes conforme á las leyes.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia se abstiene de emitir el dictamen pedido por Su Señoría el Ministro del Tesoro, á cuyo despacho se devolverá el expediente con la vista del Ministerio público.

Hágase saber.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En veinticinco de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra* A., Secretario.

Año I REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 9.°

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 26 de Marzo de 1887.

CONTENIDO.

PÁG.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

Acuerdo número 33 relativo á resoluciones anteriores sobre calificación de dos Jueces de Circuíto 65

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Sobre concesión de una recompensa militar á Rita Cabrera ..... "

Sobre conclusión del juicio sobre pensión militar promovido por Antonia Erazo 66

NEGOCIOS CRIMINALES.

De absolución de Edelmira Pinillos, en causa por circulación de moneda falsa ..... "

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Sobre incompetencia de la Corte para conocer de un sumario seguido en Barranquilla, por exacciones 67

Sobre cesación de procedimiento, por prescripción, contra Pascual Díaz Granados ..... "

De sobreseimiento, por causa de amnistía, en un sumario por delito político ..... "

De cesación de procedimiento, por muerte del sindicado, Reinaldo Aguilar, en sumario por demora 68

De sobreseimiento en un sumario sobre circulación de moneda falsa. "

De id. en sumario seguido por violación de la neutralidad nacional ..... "

De revocación de un autó de proceder, en sumario por heridas 69

Sobre anulación de un proceso militar por delito de rebelión, contra la disciplina, heridas, etc ..... "

De sobreseimiento en un sumario por autos de reclutamiento 70

De cesación de procedimiento, por muerte del procesado Melquíades Echeverría 71

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL.

Vista emitida en sumario por ciertos delitos que fueron calificados de políticos ..... "

Vista emitida relativa á una consulta del Ministerio del Tesoro ..... "

Id. id. id. á la acción de Rosa Cruz de Molano sobre concesión de pensión 72

ANUNCIOS ..... "

GACETA JUDICIAL.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

ACUERDO NÚMERO

En Bogotá, á diez y nueve de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, con el fin de imponerse de unos documentos recibidos hoy en la Secretaría y de los cuales se hará mención adelante:

I

El señor Magistrado doctor Samper hizo la siguiente proposición:

"Revócase la aprobación dada á la proposición hecha por el señor Magistrado doctor Morales en el acuerdo de veintidós de Febrero próximo pasado, y reconsidérese."

Puesta en discusión fué aprobada. En consecuencia, se trajo á la vista la proposición aludida, la cual dice así:

"La Corte resuelve no reconsiderar la calificación de los Jueces que haya aprobado ó improbado, después de firmado el Acuerdo en que *tal calificación se haya hecho.*"

Y sometida nuevamente á votación, fué negada por unanimidad.

II

Leyéronse los memoriales elevados por varios vecinos de Santa-Rosa de Viterbo y de Soatá y los documentos á ellos adjuntos, en los cuales solicitan que la Corte se digne reconsiderar la improbación dada á los nombramientos hechos por el Tribunal Superior de Tundama en los señores Próspero Pinzón y Alejandro La Rota para Jueces de Circuíto; y el señor Magistrado doctor Samper hizo la siguiente proposición:

"Vistos los memoriales que se han elevado á esta Superioridad, fechados en Santa-Rosa de Viterbo el nueve de los corrientes, y en Soatá el diez, y apoyados en documentos, relativos á las calificaciones que se hicieron en Sala de Acuerdo el veintidós de Febrero último, respecto de los nombramientos que el Tribunal Superior de Tundama hizo para Juez del Circuíto del Norte en la persona del doctor Próspero Pinzón, y para Juez del Crímen del Distrito de Sugamuxi en la persona del doctor Alejandro La Rota, la Corte declara: que no pudiendo subsanarso al presente las improbaciones hechas, por cuanto el Tribunal hizo nuevos nombramientos que han sido aprobados, se limita á reconocer que dichas improbaciones no afectan ni deben afectar en manera alguna la buena fama y reputación de los mencionados señores Pinzón y La Rota. Comuníquese á los peticionarios."

Esta proposición fué aprobada por unanimidad. Con lo cual se dió por terminado el presente acuerdo que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Julián R. Cock Bayer—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, treinta de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—Francisco Groot, con poder de Rita Cabrera, solicita para ésta una pensión, como madre de Nicanor Cabrera, Sargento 2.°, quien murió en servicio del Gobierno, y por causa de la herida que recibió en el hecho de armas que tuvo lugar en el Iguacito, el día dos de Octubre de mil ochocientos setenta y seis.

Están comprobados los hechos siguientes:

La identidad y calidad de ascendiente, de la peticionaria.

Haber militado el hijo en defensa del Gobierno, en el citado combate del Iguacito, y haber muerto por causa de la herida que en él recibió.

El estado de pobreza, ancianidad y desamparo de la peticionaria.

El grado de Sargento 2.° del mismo hijo, grado que se comprueba con la hoja de servicios; y

No haber recibido antes del Tesoro Nacional pensión ó recompensa por la misma causa.

El Jefe del Estado Mayor del Ejército, es de concepto que Rita Cabrera tiene pleno derecho á que se le conceda la pensión que solicita, por hallarse comprendida en las disposiciones de los artículos 849 y 855 del Código Militar.

Esta Superioridad para resolver, considera: que es exacto que Rita Cabrera se halla en el caso del artículo 855 del Código Militar; y que teniendo Nicanor Cabrera, cuando murió, el grado de Sargento 2.°, le corresponden á la madre trescientos

cincuenta pesos, mitad de la cantidad de setecientos pesos, que el artículo 854 asigna al Sargento 2.°

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, concede á Rita Cabrera, madre del Sargento 2.° Nicanor Cabrera, la recompensa de trescientos cincuenta pesos ($ 350) pagadera del Tesoro Nacional.

Pásese copia de esta resolución al Consejo Nacional Legislativo.

Notifíquese, cópiese, publíquese en el *Diario Oficial* y archívese el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del treinta de Octubre se publicó la sentencia anterior.

Ramón Guerra A., Secretario.

En dos de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador la precedente resolución.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Octubre veintiocho de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—En nombre de Antonia Erazo, menor de edad, su curador *ad litem* doctor Alejandro Santander, entabló demanda en juicio ordinario, contra la Nación, ante el Juez nacional del Circuíto de Pasto, con el fin de obtener una pensión del Tesoro nacional para aquélla, en su calidad de hija legítima del Capitán Ramón Erazo, muerto en la batalla de Cuaspud. Seguido el juicio, pronunció sentencia favorable el Juez de primera instancia, y el proceso vino en consulta á esta Superioridad. Sustanciado que fué, la Corte profirió, á veinticinco de Octubre de mil ochocientos ochenta, auto por el cual se mandó legitimar previamente la personería de la demandante. Subsanóse el defecto, volvió á conocer la Corte, y, para mejor proveer, dictó el auto de ocho de Abril de mil ochocientos ochenta y uno, por el cual se ordenó practicar ciertas diligencias para comprobar la identidad de Antonia Erazo. Se produjo esta prueba, y cuando llegaba el caso de fallar, se repartió el asunto, el diez y seis de los corrientes, después de haber sufrido demora de cinco años, y, oído el señor Procurador general, éste funcionario pide que la Corte se abstenga de pronunciar sentencia, por cuanto la ley ha modificado enteramente el procedimiento relativo á concesión judicial de pensiones militares.

Con efecto, si conforme á la ley 50 de 1879 (30 de Junio), la competencia para conceder pensiones, previo juicio, correspondía á los Jueces de Circuíto ó nacionales, en primera instancia, y á la Corte Suprema, en segunda, la reforma NOVENA del Código Judicial, contenida en la ley 53 de 1882 (4 de Septiembre), dispuso que cesase todo procedimiento sobre pensiones, así en los Juzgados como en la Corte, que se hubiese iniciado conforme á las disposiciones anteriores, y que en lo sucesivo se siguiese un procedimiento distinto del establecido en 1879,—procedimiento que es especial y que debe seguirse conforme á las prescripciones del Código Militar.

Por estas consideraciones, la Corte Suprema, de acuerdo con el parecer del señor Procurador general, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: que cese todo procedimiento en este juicio, por cuanto la Corte no es competente para fallar, sino en expedientes formados de otra manera y preparados por la vía militar y administrativa; y que, conforme á la citada reforma de 1882, se devuelvan originales á la demandante los documentos que componen el proceso.

Notifíquese, cópiese, archívese lo perteneciente únicamente á la Corte, y publíquese en el *Diario Oficial*.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En treinta de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la precedente resolución.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, treinta de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

En la presente causa seguida contra Edelmira Pinillos, por el delito de circulación de moneda falsa, constan los hechos siguientes:

Esteban Amaya manifestó ante un funcionario de policía, que una niña de unos *doce años de edad*, hija de Nicolás Pinillos, ocurría periódicamente, mes por mes, á una tienda de aquél á comprar algunos efectos de poco valor, con monedas falsas que representaban pesos de á ocho reales. Que las tres primeras veces que la citada niña ocurrió á la tienda con el objeto indicado, las dependientes del denunciante recibieron las piezas falsas, y todas tres veces devolvieron á dicha niña siete reales en buena moneda. Que la última vez que la mencionada niña ocurrió á la tienda con el mismo objeto que en las veces anteriores, pagó con un peso falso los efectos que había comprado, y que entonces la aprehendió Primitiva Jiménez, consorte del deponente, y la condujo á la policía. El mismo denunciante presentó al funcionario de policía dos piezas de á ocho reales, de las cuatro que la niña había llevado, diciendo ser las mismas con que ésta había efectuado el pago de los objetos comprados.

Eufrasio Amaya ocurrió á la Inspección de policía y manifestó, que la niña también había ocurrido algunas veces, á una tienda de aquél, á comprar varias cosas con monedas falsas, que representaban piezas de á ocho reales, de las cuales presentó tres, que el denunciante dijo eran las mismas que la niña había llevado.

Dos peritos examinaron las monedas presentadas por los expresados Amayas, y expusieron que eran absolutamente falsas y que el metal de que se componían no les daba valor ninguno.

Las testigos Tránsito Soto y Dolores García declaran: que una vez fué á la tienda de Esteban Amaya la mencionada niña, á comprar un paquete de cigarrillos, que pagó con una pieza de á ocho reales, que recibió la primera de las dos testigos, y *después* notó que dicha pieza era falsa.

Habiéndose puesto de manifiesto á la testigo Tránsito una pieza de á ocho reales, dijo que era muy parecida á la que le dió la niña, de que habla en su declaración.

Dolores García, á quien se pusieron de presente dos piezas de á ocho reales cada una, falsas, dijo que el peso que llevó tal niña, no era ninguno de los dos que tenía de presente.

Saturnina Espitia dice: que la misma niña ocurrió á la tienda de Eufrasio Amaya á comprar un paquete de cigarrillos, y que pagó el precio de éstos con un peso de á ocho reales, falso, que la declarante tuvo ocasión de ver.

Marciana Riberos y Encarnación Rojas declaran en el mismo sentido, y Marciana, á quien se pusieron de presente tres piezas de á ocho reales, falsas, dijo que el peso que había dado la niña, era "el mismo de uno de los que tenía de presente," sin determinarlo. Esta testigo dice tener catorce años de edad.

A Encarnación Rojas se le mostraron cinco piezas de á ocho reales, y dijo que dos de los pesos que tenía de presente eran los mismos que había recibido de la niña cuando había comprado los cigarrillos, pero no determinó dichos dos pesos falsos.

Marciana Riberos y Encarnación Rojas están conformes en que la niña huyó dos ocasiones de las veces que fué á la tienda de Eufrasio Amaya, cuando se la reconvenía porque iba á comprar con monedas falsas; Saturnino Espitia delara esto mismo, con relacion á una sola de tales ocasiones.

Seguida la causa por todos sus trámites, el Juez de primera instancia pronunció, con fecha diez de Junio de mil ochocientos ochenta y dos, sentencia en que condena á la procesada, Edelmira Pinillos, por infracción del inciso 2.° del artículo 266 del Código Penal.

Interpuesta apelación contra esta sentencia, la Corte, para resolver, considera:

Respecto de las monedas de que se sirvió Edelmira Pinillos, en las compras que hizo en la tienda de Esteban Amaya, no existe prueba de la identidad entre dichas monedas y las examinadas por los peritos.

En cuanto á la identidad de las tres monedas presentadas por Eufrasio Amaya, existen declaraciones de dos testigos: la de Marciana Riberos, testigo menor de diez y ocho años, por lo cual no tiene valor su testimonio; y la de Encarnación Rojas, quien dijo que dos de las piezas que se le pusieron de presente eran las mismas que ella había recibido de la sindicada; pero como no las determinó, la Corte no encuentra perfectamente establecida la identidad; y, además, la declaración de un sólo testigo no constituye plena prueba, por lo cual no puede estimarse probado que las monedas que circuló Edelmira Pinillos fueran falsas; y no estando probada esta circunstancia, es claro que no lo está el delito de circulación de monedas falsas de que aparece sindicada Edelmira Pinillos.

A la consideracion precedente se agrega la circunstancia de ser menor la sindicada; porque, aunque los peritos Alejandro Gutiérrez y Julio R. Jiménez, le fijan á ésta trece años de edad, ha debido ser la autoridad misma quien la fijara de conformidad con el artículo 400 del Código Civil.

A mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se revoca la sentencia apelada; y en consecuencia, se absuelve á Edelmira Pinillos del cargo por que fué llamada á juicio,

Notifíquese, cópiese, publíquese en el *Diario Oficial* y devuélvase el expediente al Juzgado de su orígen.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Manuel A. *Sanclemente.—Ramón Guerra A.*, Secretario.

El la audiencia del treinta de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, se publicó la anterior sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En dos de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis notifiqué al señor Procurador general la sentencia que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Se notificó por edicto.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintitrés de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—Por excitación del señor Gobernador de la Provincia de Barranquilla, se ha formado el presente proceso, el cual ha tenido por objeto averiguar quiénes son los responsables de los hurtos y robos de ganado vacuno cometidos en la ciudad de Barranquilla, durante la ocupación de dicha ciudad por las fuerzas revolucionarias en el año próximo pasado.

Se han producido muchas pruebas, de las cuales aparece comprobado que cuando la ciudad de Barranquilla fué ocupada por las fuerzas comandadas por el señor Ricardo Gaitán Obeso, algunos individuos partidarios de la revolución, titulándose empleados públicos, ordenaron varias expropiaciones de ganado vacuno, ganado que se hacía degollar para el sostenimiento de las tropas, y del cual se aprovechaban también ciertos individuos particulares.

Perfeccionado el proceso, el Juez 2.° de la Provincia de Barranquilla ha dictado auto de sobreseimiento respecto de los sindicados, algunos de los cuales estuvieron presos, y ha consultado esa resolución con la Corte.

Sin entrar en el fondo del auto consultado, ésta Superioridad observa que los hechos que se investigan en esta actuación son atentados contra la propiedad particular, hechos que no están sometidos á la jurisdicción nacional y que deben investigarse y castigarse conforme á la legislación de cada sección de la República, según el artículo H transitorio de la Constitución vigente.

El señor Agente fiscal de la Provincia de Barranquilla cita el artículo 5.° de la ley 60 de 1882, para fundar su opinión acerca de la delincuencia que él halla en los sindicados; pero dicha ley, aunque fuera aplicable al presente caso, no confiere jurisdicción á los tribunales nacionales para conocer de las acciones civiles y criminales de que allí se trata.

Así, pues, la Corte Suprema nacional, de acuerdo con el señor Procurador, se abstiene de conocer de la consulta que le ha sido elevada y ordena se devuelva el proceso al Juez de su procedencia para que le dé el curso que estime legal.

Notifíquese.

R. Antonio Martínez.—José M. Samper.—Manuel J. Angarita.—Julián R. Cock Bayer.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Luis S. de Silvestre.—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintisiete de octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la procedente resolución.

FERNANDEZ.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Octubre veintitrés de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—Se ha tratado de averiguar en estas diligencias si el Administrador Tesorero de la Aduana de Santa-Marta, Pascual Díaz Granados, ha comprometido su responsabilidad, porque dejó de hacer el reconocimiento de ciento cincuenta y un barriles de brea rubia, introducidos en ese Aduana por la Goleta *Julia* el veintidós de Enero de mil ochocientos ochenta y uno.

Por auto de primero de Mayo de mil ochocientos ochenta y dos, dictado por la Corte, se dispuso que se pidieran las siguientes cópias respectivamente: al Poder Ejecutivo nacional, del decreto de nombramiento de Granados para Administrador; al Presidente del Estado del Magdalena, de la diligencia de posesión del mismo Administrador, y á la Administración de la Aduana, de la factura y manifiesto que se le presentaron por el introductor de los barriles importados, y de otros documentos, estos últimos datos por conducto del Juez del Circuíto de Sarta-Marta.

Según nota del Secretario de la Corte, de fecha diez del mismo Mayo, se cumplió la prevención de la Corte, y el once de Octubre del mismo año se reclamó del Juez comisionado el cumplimiento de la orden. Ninguna contestación aparece en los autos.

Hoy, después de transcurridos más de cinco años de cometidas las faltas que motivaron la instrucción, es inútil adelantarla, pues en caso de que el Administrador hubiera realmente incidido en ellas, constituirían infracción del artículo 111 del Código Fiscal, que no tiene señalada pena corporal, según lo dispuesto en el artículo 415 del Código Penal, y por consiguiente, conforme al artículo 71 del mismo Código, y el 1,794 del Código Judicial, la pena está prescrita.

Así se declara, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese la actuación.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Luis S. de Silvestre—Ramón Guerra A., Secretario.

En veinticinco de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra* A., Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintiocho de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—El Juez del Circuíto de Santo-Domingo, en el extinguido Estado de Antioquia, consulta con esta Superioridad el auto de fecha trece de Agosto del presente año, por el cual declara terminado el procedimiento en el sumario instruído contra Martín Moreno de los Ríos, por el delito de rebelión.

El día cuatro de Enero de mil ochocientos ochenta y cinco, ejercía el sindicado las funciones de Jefe Municipal del Distrito de Santo-Domingo, y habiendo tenido conocimiento particular de que el día dos del mismo mes se había publicado en Medellín el decreto del Poder Ejecutivo del Estado, por el cual se declaraba turbado el orden público seccional, el Jefe Municipal aludido procedió á exigir fianza de no mezclarse en política á varios individuos de los que él consideraba manifiestamente

hostiles al Gobierno de que era agente. Como algunos de dichos individuos resistieron la exigencia del Jefe Municipal, éste empleado resolvió compelerlos con prisión, y al efecto Roso López, Juan B. Callejas, Isaac Salazar y Juan de Dios Mejía fueron conducidos á la cárcel y detenidos allí hasta que prestaran las fianzas exigidas.

Estos hechos constituyen el objeto de la investigación y están plenamente comprobados por declaciones de testigos y por la confesión del procesado.

Es indudable que Moreno de los Ríos, al adoptar el procedimiento mencionado, tuvo por objeto impedir cualquier acto de hostilidad contra el Gobierno de Antioquia, por parte de aquellas personas á quienes el sindicado juzgaba decididamente desafectas. Ahora bien, el Gobierno del Estado de Antioquia, por su decreto sobre orden público se rebeló contra el Gobierno nacional, y de consiguiente los agentes de aquél Gobierno participaban necesariamente del mismo carácter de rebeldes. Así, pues, los hechos ejecutados por el Jefe Municipal del Distrito de Santo-Domingo deben considerarse como meramente políticos, y por lo tanto, están comprendidos en la amnistía otorgada por el Decreto del Poder Ejecutivo nacional, de fecha veinte de Julio del presente año.

Se ha hecho mérito, en contra del sindicado, de la circunstancia de no haber tenido éste ningún conocimiento oficial, el día cuatro de Enero en que ejecutó los hechos apuntados, del Decreto del Poder Ejecutivo del Estado, pues hasta el día siguiente, es decir, el cinco de Enero, se recibió aviso oficial en Santo-Domingo, de la declaratoria de turbación del orden público. Esa circunstancia no hace variar en manera alguna la naturaleza del hecho que se investiga; en primer lugar, porque el Jefe Municipal fundó su procedimiento en la declaración que recibió á Estanislao Campuzano, individuo que había llegado de Medellín, quien aseguró con juramento que el orden público se había declarado turbado por decreto del dos del mismo mes, y, en segundo lugar, porque en el proceso no hay ningún dato que revele que Moreno de los Ríos procedió por un móvil distinto de ayudar á su partido, y, en consecuencia, al Gobierno del Estado de Antioquia, del cual como se ha dicho, era agente.

En atención á lo expuesto, la Corte Suprema nacional, de acuerdo con el señor Procurador, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto consultado.

Notifíquese, copiese y devuélvase el proceso.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En treinta de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la precedente resolución.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintinueve de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Desde el año de mil ochocientos ochenta libró mandamiento ejecutivo el Juzgado de Ejecuciones nacionales, contra el señor Tiburcio González, por la suma de ciento setenta y un pesos veinte centavos ($ 171-20 cs.), de que era deudor al Tesoro Nacional, y la notificación del auto y la práctica de las diligencias ejecutivas fueron cometidas, con término de veinte días, al Juez 1° del Circuíto de Facatativá, señor Reinaldo Aguilar. Como el Juez principal advirtiese notable demora en el cumplimiento de la comisión, mandó averiguar la responsabilidad en que por esto incurriera el Juez Aguilar, y las diligencias que con tal fin se practicaron se remitieron desde el primero de Abril de mil ochocientos ochenta y uno á este Supremo Tribunal para los fines legales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1,840 del Código Judicial, se le pidió informe al Juez comisionado, quien no lo evacuó, y puesto ahora al despacho el asunto para darle el curso legal, resulta que dicho Juez murió el quince de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco. Probado esto con la diligencia de defunción, que obra en copia en el expediente; y teniendo la Corte en consideración que por la muerte del reo cesa todo procedimiento criminal contra éste, pero no el derecho de intentar la acción civil por los daños y perjuicios causados por la culpa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, sobresee en lo relativo á la responsabilidad, y dispone que las diligencias dirigidas á comprobar ésta se archiven, sin perjuicio de la acción civil que la ley deja expedita si hubiere en qué fundarla.

Hágase saber.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario,

En treinta de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la precedente resolución.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintinueve de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

El Agente fiscal del Circuíto de Yarumal, en el Departamento de Antioquia, le presentó al Juez del Distrito una moneda, al parecer falsa, que le fué entregada por Silvano Builes, y pidió que se procediera á investigar la procedencia de ella, á efecto de imponer la pena legal al que resultara responsable de su acuñación ó circulación. Reconocida dicha moneda por dos peritos, expresaron éstos que tenía el sello de la República del Perú, y que en realidad era falsa; pero por más diligencias que se han practicado, no ha podido descubrirse en dónde fué acuñada, ni por quién, ni qué persona la pusiera en circulación á sabiendas de su falsedad. Por esto, y por no haber otras pruebas que practicar, el Juez del Circuíto mencionado ha sobreseído en el procedimiento y consultado el auto con esta Suprema Corte; la cual, encontrando exactos los fundamentos de tal resolución, y obrando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1,543 del Código Judicial, y con lo pedido por el señor Procurador general de la Nación, confirma el auto consultado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

Notifíquese el presente, publíquese en el *Diario Oficial*, y dejándose copia de él, devuélvase el sumario al Juzgado de donde procede la consulta.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En dos de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la precedente resolución.

FERNÁNDEZ— *Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá treinta de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—En el mes de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cuatro varios ecuatorianos, entre los cuales figuraron Rafael Barriga, Jacinto Nevares, Francisco Hipólito Meneayo, Rafael Portillo, Nicanor Arellano, Modesto y Roberto Andrade, Francisco Moncayo, Avelino Velasco y otros, hacían enganchamientos de colombianos y compraban armas en el Municipio de Obando, del antiguo Estado del Cauca, para ayudar á la revolución que en dicho mes había estallado en la vecina República del Ecuador.

El Jefe municipal intimó á varios de los asilados ecuatorianos que se internaran un miriámetro por lo menos de la frontera, allanó algunas casas, tomó armas, aprehendió á algunos de los enganchadores, dió orden á sus subalternos de los Distritos fronterizos para que vigilaran la línea, por su parte, hizo publicar por bando la ley nacional n.° 22, de 11 de Abril de 1871, "sobre policía de las fronteras," é instruyó un sumario para perseguir á los responsables, el cual pasó al Juez del Circuíto de Ipiales, en lo criminal, quien después de practicar varias

diligencias y acumular otra investigación que seguía contra varios de los Ecuatorianos emigrados por el delito de rebelión contra el Gobierno de Colombia en la última revolución, dictó auto, con fecha veintinueve de Abril próximo pasado, por el que sobresee respecto de todos los delitos y de todos los sindicados, y consulta con la Corte la providencia.

Oído el señor Procurador, y estudiado el proceso, resulta lo siguiente:

La guerra en el Ecuador, á causa de la cual abusaron los Ecuatorianos emigrados, de la hospitalidad, y violaron la neutralidad del territorio Colombiano, haciendo enganchamientos y acopiando armas, terminó en el mismo año de mil ochocientos ochenta y cuatro con el sometimiento de los revolucionarios. Por consiguiente, los que fueron responsables de esos delitos, no podrían ser hoy condenados, porque según el artículo 13 de la ley citada, sólo durante el tiempo de la guerra de la Nación de su procedencia, podrían ser confinados á un lugar distante quince miriámetros de la frontera. Con relación á los Colombianos enganchados y á los que vendieron armas, deberían ser juzgados y castigados como cómplices del delito contra el orden público, conforme al artículo 21 de la mencionada ley; pero el Código Penal, ni en la definición de los delitos contra el orden público nacional, ni en la imposición de las penas correspondientes, ha comprendido á los que cometan el delito de auxiliar á los bandos beligerantes en una Nación vecina, y, según los artículos 4.°, 5.° y 6.° de aquel Código, ningún delito ó culpa puede ser castigado con penas que no hayan sido señaladas por una ley publicada antes de su perpetración, y los actos á los cuales no se haya señalado una pena previa por la ley nacional, no pueden tenerse por delitos de la competencia del orden judicial de la Nación, debiendo en tal caso, cuando se comete una acción de esta naturaleza, sobreseer en el asunto, dando cuenta el Juez á esta Suprema Corte para los efectos que expresa el último de los artículos citados. Esta misma doctrina fué sentada por la Corte en su sentencia de doce de Junio último, publicada en el número 6,740 del *Diario Oficial*.

En cuanto al delito de rebelión atribuído á algunos de los sindicados, en caso de que se hubiera perpetrado, él fué indultado por el Poder Ejecutivo del extinguido Estado del Cauca, en decreto de veintitres de marzo último, corroborado por el Gobierno nacional, conforme al Decreto de veinte de Julio próximo pasado.

En consecuencia, de acuerdo con la opinión del señor Procurador, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se confirma el auto consultado.

Notifíquese, cópiese, publíquese, dése cuenta al Consejo Legislativo y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez.—José M. Samper.—Manuel J. Angarita.—Julián R. Cock Bayer.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A., Secretario.

En dos de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la precedente resolución.

FERNÁNDEZ.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Octubre treinta de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—En las presentes diligencias sumarias practicadas en averiguación del responsable de las heridas causadas á Julián González, delito de que aparece responsable Daniel Prieto, consta que Belisario Díaz era Alférez de una compañía militar perteneciente al Ejército de la Nación, la cual ejercía las funciones de resguardo de las salinas de Cumaral y Upín; que el Alférez Díaz estaba en Villavicencio la noche del veintiocho de Marzo último, en casa de Ignacio Castro, donde había una diversión, acompañado de un Sargento y dos Cabos, uno de los cuales era Julián González, y tres soldados del mismo resguardo; que estando allí el mencionado Alférez, se le presentó una mujer y le manifestó que su marido, Daniel Prieto, la había maltratado, y entonces el Alférez y compañeros se dirigieron á la casa de Prieto y en ella encontraron á éste; que el Alférez ordenó á Prieto que lo siguiera, quien se resistió á obedecer, por lo cual el cabo Julián González le hizo violencia, y entonces éste recibió una herida de Prieto.

Tales son los hechos, y como de ellos no resulta que González fuera herido cuando se hallaba en tal ejercicio de sus funciones, ó por razón del mismo ejercicio, es claro que Prieto no es responsable al tenor de los artículos 222 y 223 del Código Penal de la Nación, y que son las respectivas autoridades del Departamento de Cundinamarca, las competentes para conocer del expresado delito; razón por la cual no es legal el auto de proceder contra Daniel Prieto, por el delito de heridas en un empleado nacional, dictado con fecha nueve de Julio próximo pasado, por el Juez del Circuito de Oriente, como nacional, y venido á esta Superioridad á virtud de recurso de apelación.

A mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se revoca el auto apelado.

Notifíquese, cópiese y devuélvase.

R. Antonio Martínez.—José M. Samper.—Manuel J. Angarita.—Julián R. Cock Bayer.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A., Secretario.

En dos de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

FERNÁNDEZ.—*Guerra* A., Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Octubre treinta de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—El día cuatro de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco, estando aún perturbado el orden público, y en situación de guerra la Nación, tuvo lugar un movimiento sedicioso y tumultuario de parte de un gran número de los individuos de tropa del Batallón 4.° de infantería de línea, de las fuerzas de la República, en la plaza y cuartel de la Merced en la ciudad de Cartagena; sedición ó rebelión encaminada á desconocer ó impedir la posesión y mando del Coronel Eloy Caicedo y de algunos otros Jefes, destinados por el Gobierno Nacional para mandar el expresado Batallón.

Este movimiento, que fué suficientemente deliberado, auxiliado por individuos extraños á la tropa, y en mucha parte tolerado ó disimulado en su preparación por algunos Jefes que no querían ser reemplazados, ó que, por lo menos, no gustaban del nuevo mando dado al Batallón, según se deduce de varias piezas de este proceso, causó un grave escándalo en todos los pueblos de la Costa Atlántica y en los del interior, contribuyendo á la relajación, siempre peligrosa, de la disciplina militar, y especialmente en las circustancias públicas en que tuvo lugar el hecho referido; habiendo ocasionado un verdadero combate, del que resultaron varios heridos, y entre ellos el nuevo Jefe de la fuerza.

Ese hecho constituye el delito de rebelión militar, no política, definido en el artículo 1,639 del Código de la Milicia; y como tal fué calificado y declarado en el origen y prosecución de esta causa. Como delito militar, su juzgamiento y castigo correspondía á las respectivas autoridades militares, conforme al artículo 1,365 del Código de la materia.

Con tal motivo, se dió principio á la actuación, el siete de Noviembre del año anterior, por el Fiscal que nombró el Comandante general de la columna de guarnición de la plaza de Cartagena, sometiéndose el negocio á un Consejo de Guerra verbal. Anulado luégo el proceso, por resolución de la Comandancia general de la plaza, de veinticinco del mes citado, pasó la actuación al Auditor de guerra, como funcionario de instrucción, con cargo de someter el juicio á un Consejo de Guerra ordinario. Después de varias irregularidades, de las que no hay necesidad de hablar al presente, porque ellas no constituyen nulidad sustancial é insanable en el procedimiento, se dictó por el funcionario de instrucción, Comandante de la 2.ª Compañía del Batallón 1.° de linea, en cuatro de Enero del corriente año, el auto que corre á la foja 63 del cuaderno principal, en el cual se declara con lugar á formación de causa criminal contra Espíritu Díaz, Luciano Villa, Segundo Cepeda, Pedro J. Bonilla, Nepomuceno Blanco, Hilario Cébeles, Juan González, José Lozano, Juan Torres, Tomás Díaz, Isidoro Téllez, Octavio Anzoátegui Ricardo Solano, Luis Forero, Juan Acosta, José Maza y José,

Bochero, individuos de tropa, pertenecientes al Batallón mencionado, por infracción de los incisos 1.° y 2.° del artículo 1,639 del Código Militar.

Este auto no fué notificado á los reos, pues lo que únicamente se les notificó fué el auto de la Comandancia general, de cuatro del mismo mes de Enero, (foja 65 vuelta), en el que señaló nuevo día para la instalación del Consejo, de acuerdo con los artículos 1,473 y 1,776 del Código mencionado.

Sigióse luégo el proceso, actuándose de ahí en adelante con bastante irregularidad; y terminó por la sentencia del Consejo de Guerra ordinario, de diez y siete de Enero último, en la cual se condenó á Espíritu Díaz y á Estéban Rodríguez á la pena capital; á Isidoro Téllez á cuatro años de presidio, á Ricardo Solano y á Luis Forero á diez años de servicio en los cuerpos de guarnición en la Costa; y á Villa, Cepeda, Bonilla, Blanco, González, Lozano, Torres y Tomás Díaz á diez años de presidio. Se absolvió á Juan Acosta; pero se omitió fallar y decir cosa alguna respecto de José Maza y José Bochero, sometidos también á juicio por el auto de proceder, y el cual auto no aparece revocado ni modificado en el expediente, respecto de estos dos últimos individuos; resultando de aquí que la sentencia no ha sido conforme con el cargo respecto de todos los enjuiciados. Notificada esta sentencia, ella fué apelada por todos los reos, menos por Acosta, quien fué absuelto, y por Rodríguez, quien, según se descubre de la exposición del Auditor de guerra, fojas 41, se fugó de la prisión después de sentenciado. Se apeló también del fallo por parte del Teniente-Coronel que hizo de Fiscal, tocante á la pena capital impuesta á dos de los reos. El recurso fué concedido para ante esta Superioridad por el Comandante general; y con tal motivo, después de la actuación del caso en esta 2.ª instancia, pasa la Corte á resolver acerca del proceso en referencia.

Como yá se deja dicho, el auto en que se declaró con lugar á formación de causa fué dictado por el Comandante de la 2.ª Compañía del Batallón, sin que el Auditor de guerra hubiera dado su dictamen sobre el mérito de la actuación, ni sobre la competencia del Consejo; y no se pasó el expediente al Comandante del Cuerpo, quien era el único que tenía facultad para dictar auto de proceder, conforme á los artículos 1,466 hasta 1,469 del Código Militar. Por consiguiente, el auto de enjuiciamiento dictado por un Comandante de Compañía, es nulo, por carecer de jurisdicción para ello; y aun cuando á la foja 59 aparece el decreto del Comandante general elevando á plenario la causa, ese no es auto de proceder, porque ni especifica los culpables, ni determina el cargo, ni señala la disposición violada.

Demás de esto, como también queda expresado, el auto de proceder no fué notificado á los procesados de una manera clara y perentoria, con excepción únicamente de Espíritu Díaz, ni á todos los defensores (foja 69 en adelante); y según el artículo 1,536 del Codigo Militar, es nulidad insanable el no notificar, tanto al reo como al defensor, el auto de enjuiciamiento.

También lo es, (inciso 5.° del artículo últimamente citado), el hacer una erronea aplicación de la pena; y según los artículos 1,558, 1,631, 1,634 y 1,640, no pudo imponerse la pena capital. El Código que tal dispone regía al tiempo en que se cometió el delito de que se trata, y rige aún; y la circunstancia de que ese delito se cometiera en tiempo de guerra, no es suficiente motivo para que tales disposiciones dejaran de tener su cumplimiento, una vez que el juicio se siguió conforme á ellas, y cuando no precedió Decreto ú orden del Gobierno nacional para que se aplicara la ley marcial, y nó las comunes de la República.

Existiendo, pues, las nulidades apuntadas, la Corte no tiene para qué entrar en el fondo del negocio; y se limita á establecer para las operaciones subsiguientes, que el delito en referencia no es de naturaleza política, ni está por consiguiente indultado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara nulo este proceso desde la foja 59, en adelante, cuaderno 2.° y ordena su reposición, para que continúe el sumario y la prosecución de la causa al tenor de las disposiciones legales respectivas; para lo cual se ordena devolver todo el expediente al Comandante General de la guarnición de la plaza de Cartagena.

Y por cuanto de la declaración rendida por Esteban Rodríguez (fojas 35 y 36 del cuaderno citado), aparecen sindicados otros individuos de tropa y algunos oficiales como cómplices ó conniventes del delito en referencia; y como de la exposición fiscal (fojas 115 y siguientes), se viene también en conocimiento de que la complicidad puede extenderse al Oficial de guardia de prevención, al Comandante del Batallón y á otros oficiales, se prescribe al expresado señor Comandante general que extienda la investigación á las personas á quienes estos antecedentes se refieran, providenciando lo que sea de ocasión.

Notifíquese, déjese copia, publíquese en el *Diario Oficial* y devuélvase el expediente como queda prevenido.

R. Antonio Martínez—José M. Samper.—Manuel J. Angarita.—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha.—Antonio Morales—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del día treinta de Octubre se publicó la anterior sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En dos de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la sentencia que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Octubre treinta de mi ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—Con fecha veintinueve de Mayo de mil ochocientos ochenta y tres, expidió el Presidente de la República un decreto, número 553, por el cual declaró prohibido el reclutamiento, como incompatible con la libertad individual que garantizaba la Constitución entonces vigente. Con tal motivo, el Procurador general de la Nación quiso que se investigara si en los cuerpos de la Guardia Colombiana acuartelados en Bogotá se hallaban individuos de tropa que, habiendo cumplido el término legal de su servicio de las armas, estuviesen contra su voluntad en él; en cuyo caso creía el señor Procurador que había lugar á promover el sumario y juicio correspondientes contra los responsables del hecho. La Corte, atendiendo al primer pedimento, dispuso que el señor Procurador certificase su denuncia, y que expresase circunstanciadamente los hechos á que ella se refería y los nombres de los individuos indebidamente mantenidos en el servicio militar, según el parecer del Ministerio público. Resolvió, además, que se pidiese informe á la Secretaría de Guerra y Marina sobre el modo con que estaba organizado el Ejército; que se pidiese también informe al General en Jefe del Ejército sobre varios puntos, y que después de obtenidos aquellos, la Corte proveería.

Emitió su informe el señor Secretario de Guerra, mas nó el suyo el señor General en Jefe, y nunca se adelantó la averiguación. Repartido el asunto el nueve de los corrientes, y oído el señor Procurador general, este funcionario hace presente que no debe adelantarse el procedimiento, por cuanto el Ejército está al presente reorganizado y modificado por completo, y por cuanto no existe comprobado ningún indicio sobre la comisión del delito á que se refirió la denuncia.

Prescindiendo esta Superioridad de toda consideración relativa á la índole política que tuvo el asunto, en las circunstancias en que fué promovido, halla que ni tiene objeto en la actualidad el adelantamiento de esta descarnada actuación, dado que hasta es notorio el fallecimiento de los ciudadanos que en mil ochocientos ochenta y tres ejercían los empleos de Presidente de la República y General en Jefe del Ejército, ni puede hacerse cosa alguna de provecho cuando yá no existe el personal de la Guardia Colombiana de aquél tiempo, todo modificado; ni hay prueba, ni indicio alguno sobre delito cometido contra la libertad individual ó violatorio de la ley 20 de 1882 (15 de Junio) que prohibió el reclutamiento, ni menos de los que pudieran ser responsables.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve sobreseer en este asunto,

Notifíquese, publíquese en el *Diario Oficial* y archívese el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En dos de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la precedente decisión.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Noviembre seis de mil ochocientos ochenta y seis,

Vistos:—En el mes de Febrero de mil ochocientos setenta y seis, se inició en Suaita, en el extinguido Estado de Santander, sumario para la averiguación del delito de circulación de moneda falsa, apareciendo como sindicado Melquíades Echeverría. Siguióse el juicio con graves irregularidades, y habiéndo venido en consulta el fallo del Juez, esta Superioridad lo anuló, mandando reponer la causa hasta el estado de señalar día para la celebración del juicio. Habíase dispuesto lo del caso por el Juez Superior del Socorro, que yá conocía del asunto, por haberse suprimido el Juzgado de Suaita, cuando se informó oficialmente al nuevo Juez, que el reo había fallecido. Mandáronse practicar las diligencias del caso, y se comprobó plenamente (fojas 88 á 92) con la partida de defunción en regia, y con el dicho de dos testigos idóneos que conocían á Echeverría desde muchos atras, y vieron el cadáver de éste y declararon ser el mismo individuo encausado; y en consecuencia, el Juez de la causa dictó, con fecha once de Septiembre último, auto de cesación del procedimiento, conforme á lo preceptuado por el artículo 67 del Código Penal de la Nación y el 1,419 del Código Judicial de la misma.

Por lo expuesto, oído el dictamen conforme del señor Procurador general, y siendo irrefragable la prueba en que se funda el auto aludido, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto consultado.

Notifíquese, cópiese, publíquese en el *Diario Oficial* y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez.—José M. Samper.—Julián R. Cock Bayer.—Froiláa Laryacha.—Antonio Morales.—Benjamín Noguera.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A., Secretario.

En nueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

FERNÁNDEZ.—*Guerra A.*, Secretario.

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL.

Señores Magistrados.

El Juez de la Provincia de Mompox, en el Departamento de Bolívar, os remite en consulta el auto que dictó en dos de Septiembre último, y en el cual se declara cortado todo procedimiento criminal contra Pablo Martínez y otros, por delitos políticos.

Según el auto cabeza de proceso con que empiezan las diligencias sumarias, Reyes Morales, traficante al por menor, denunció ante el Alcalde del Distrito de Morales en dicha Provincia, que del sitio denominado *Arroyo-Hondo*, en jurisdicción del Distrito mencionado "se trajeron de su propiedad cinco baúles con mercancías, ropa de uso, medicinas etc., etc.; una caja de gas (petróleo), dos bultos de harina; una caja más llena de medicinas; una de fósforos de luz, y otras cosas más que no recuerda" el denunciante, "y que los individuos que se las trajeron fueron los señores Pablo Martínez, Santiago Mejías, Marcelino Pacheco, Arcadio Badillo, Elías Moncada y otros."

Seguida la averiguación para esclarecer los hechos denunciados y averiguar sus responsables, se deduce de las declaraciones de Leocadio Vanegas (foja 5 y vuelta), Emeterio Carpio (foja 12 y vuelta), y de la indagatoria de Marcelino Pacheco (fojas 36 á 38), que los efectos y mercancías en referencia fueron tomados del sitio de *Arroyo-Hondo*, en los primeros días del mes de Octubre de 1885 por una comisión compuesta de Pablo Martínez, Marcelino Pacheco, Pedro A. Badillo, Jesús María de la Rosa, Antenor Badillo, Santiago Mejías, Elías Moncada y otros, quienes, armados militarmente, hicieron conducir dichos efectos al Distrito de Morales, donde fueron entregados á Tiberio Badillo, Alcalde de los rebeldes, y á Francisco Delgado, Capitán de las fuerzas de los mismos.

Las declaraciones citadas están confirmadas por las de Cornelia Badillo (fojas 27 vuelta y 28) y Estébana Caña, (foja 29 vuelta), quienes afirman haber comprado á Francisco Delgado parte de la harina de trigo que le fué tomada á Morales, asegurando la primera que la harina en referencia se la entregó á ella Tiberio Badillo.

Se observa que en el sumario faltan muchas citas que evacuar y declaracianes que tomar, como las indagatorias de Pablo Martínez, Francisco Delgado, Tiberio Badillo y demás sindicados, por haber creído el funcionario de instrucción que los hechos que se averiguan constituyen un delito político, que en su concepto queda comprendido en la amplia amnistía concedida por el decreto número 418 (bis), de 20 de Julio último, expedido por el Poder Ejecutivo nacional.

Sería indudable, si se hubiera probado en la actuación que los efectos tomados á Reyes Morales constituyeron una expropiación de guerra, hecha por los rebeldes é indispensable para el mantenimiento y movilización de sus fuerzas, que tal expropiación tendría el carácter de delito político de la competencia de los Tribunales y Juzgados nacionales; pero tal prueba no aparece en los autos, y es necesario ampliar el sumario en el sentido de averiguar qué inversión dieron Delgado y Badillo á los efectos supuestos expropiados; de qué autoridad civil ó militar dependían al tiempo de hacer la expropiación, y si la habían llevado á efecto de orden superior ó bajo su exclusiva responsabilidad. Deben establecerse igualmente, interrogando al efecto á los testigos que sean necesarios, y Delgado y Badillo, las circunstancias políticas de Reyes Morales, para venir en conocimiento de si la expropiación en referencia fué una contribución de guerra, ó cualquiera otra exacción que se le hubiera exigido como consecuencia de su hostilidad á los rebeldes.

Si dado este giro á la averiguación, resultara que los individuos denunciados aplicaron los efectos tomados á Morales á usos particulares, como lo hace creer la naturaleza de algunos de dichos efectos, como el petroleo, la ropa usada de mujer y otros de la misma clase, entonces, de acuerdo con el artículo *H* transitorio de la Constitución, los hechos materia del sumario serían de la exclusiva competencia de los Jueces y Tribunales del Departamento de Bolívar, con aplicación de las leyes del extinguido Estado del mismo nombre, y el delito por que se procede no tendría el carácter de político.

Y como tal ampliación, en concepto del infrascrito, es indispensable para determinar la competencia de la Corte en el asunto de que se trata, este Ministerio os pide que la decretéis, previa revocatoria del auto consultado.

Bogotá, 20 de Octubre de 1886.

FRANCISCO A. FERNÁNDEZ.

Señores Magistrados.

El Secretario general del Departamento nacional de Panamá ha consultado al Ministerio de Hacienda de la República sobre si deben continuar ó nó en vigencia, bajo el régimen de la nueva Constitución, las pensiones que gravan el Tesoro de dicho Departamento, á virtud de leyes anteriores del extinguido Estado de Panamá, y de las cuales acompañó el referido empleado la relación correspondiente.

La enunciada consulta pasó al Ministerio del Tesoro, y allí se acordó que, para resolverla, convenía oír previamente vuestro dictamen acerca de ella.

A este efecto, han venido á mi estudio los documentos originales relacionados con el asunto y, en vista de ellos, paso á observar lo siguiente:

Entre las disposiciones transitorias consignadas en el título XXI adicional á la Constitución actual de la República, figura el artículo *H* que previene que, " mientras el Poder Legislativo no disponga otra cosa, continuará rigiendo en cada Departamento la legislación del respectivo Estado." Es natural que esta disposición comprenda también al Departamento de Panamá, sin perjuicio de que dicho Departamento deje de estar sometido á la acción directa del Gobierno y de ser administrado con arreglo á leyes especiales, según lo preceptúa el artículo 201 de la citada Constitución.

Sentado lo que precede, fácilmente se deduce que toda medida que implique suspensión ó alteración de los efectos de las leyes que precedieron á la transformación política del Estado de Panamá en Departamento nacional, debe ser materia de un acto legislativo nacional que derogue ó reforme las expresadas leyes.

La anterior conclusión es perfectamente conforme con la doctrina consignada en el artículo 76 de la Constitución nacional y en el 25 del Codigo Civil, que previenen que la interpretación que se hace *con autoridad* para fijar el sentido de una ley oscura, corresponde solamente al legislador; y como el Poder Judicial apenas le es permitido, en tratándose de aplicar las leyes, la interpretación de éstas en cada caso particular sujeto á su decisión, es claro que, en el que nos ocupa, la intervención del Poder Judicial es del todo extraña, si se atiende á la prohibición consignada en el artículo 161 del Código Judicial.

Opino pues, que la Corte debe abstenerse de resolver ó de emitir concepto en el asunto que se le ha pasado por el señor Ministro del Tesoro. Podría, á lo más, pasarle el expediente al Consejo Legislativo para que, por medio de ley, resuelva lo que crea conveniente.

Bogotá, 21 de Octubre de 1886.

FRANCISCO A. FERNÁNDEZ.

Señores Magistrados.

En la presente solicitud de pensión elevada por la señora Rosa Cruz de Molano, en su calidad de madre legítima del Cabo Enrique Molano, el Ministerio de Guerra de la República, de acuerdo con el concepto del Jefe de Estado Mayor general del Ejército, ha informado que dicha señora tiene derecho á la gracia que solicita, por haber muerto su citado hijo, combatiendo en defensa del Gobierno legítimo, en la última guerra civil.

Sin negar en absoluto el derecho á que se contrae el expresado informe, el infrascrito se permite observar que el expediente que contiene las pruebas aducidas por la solicitante, no presta, en su estado actual, mérito legal suficiente para reconocer el enunciado derecho.

En efecto, solamente el testigo Miguel Cortés afirma, por haberlo visto, que el Cabo 1.° Enrique Molano falleció en el combate librado en Barranquilla el 11 de Febrero de 1885, pues lo certificado sobre el mismo hecho por el General Luis Capella Toledo es de referencia.

Aparte de esto, no se ha comprobado la pobreza de la solicitante, ni la circunstancia de no haber recibido recompensa alguna con anterioridad al día en que elevó la petición de que aquí se trata, por razón de los servicios prestados por su hijo.

Y por último, las declaraciones que figuran en el expediente no se recibieron con la asistencia del respectivo Agente del Ministerio público, lo cual las hace inadmisibles, de conformidad con el inciso 2.° del artículo 880 del Código Militar.

En vista de las deficiencias é irregularidades que se dejan apuntadas, y, habida consideración á que existe un principio de prueba que, al ser debidamente complementado, justificaría el derecho de la solicitante para que se le asigne pensión del Tesoro público, de conformidad con el artículo 849 del Código Militar, el infrascrito cree que lo más conveniente sería facilitar el perfeccionamiento del expediente, por medio de auto para mejor proveer en que se ordene la práctica de las pruebas que faltan para que los hechos queden bien esclarecidos, y así lo solicita.

Pero si opináis que no deban complementarse las pruebas no habría fundamento legal para atender la solicitud de la señora Molano.

Bogotá, 21 de Octubre de 1886.

FRANCISCO A. FERNÁNDEZ.

ANUNCIOS.

LA GACETA JUDICIAL.—Se publica este periódico ordinariamente una vez por semana (los sábados), y se admiten suscripciones en el Banco Nacional así:

Por un semestre (26 números).....$ 3 00

Por un año (52 id..... 5 00

No se venden números sueltos.

Es de cargo del Ministerio de Gobierno hacer repartir el periódico á los suscriptores en la capital, y en los Departamentos por medio de los correos; sin perjuicio de la distribución á las oficinas públicas que deben recibirlo.

No se admiten anuncios que no sean de carácter oficial, ni inserciones que no sean autorizadas por la Corte Suprema.

CONSTITUCIÓN DE COLOMBIA.

ESTÁ DE VENTA en la Tesorería general, en edición de cuaderno, á 20 centavos el ejemplar.

IMPRENTA DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPÚBLICA DE COLOMBIA. Número 10

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 2 de Abril de 1887.

CONTENIDO.

PÁG.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

Acuerdo número 12 sobre suspensión de leyes de los antiguos Estados. 73

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Sobre expropiación de una fuente en Salamina..... "

NEGOCIOS CRIMINALES.

Sobre falsificación y circulación de Billetes del Banco Nacional..... 74
Id. responsabilidad por la fuga de unos presos..... 76
Id. falsedad y estafa..... 77

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Sobre circulación de moneda falsa..... 79
Id. hurto de efectos..... "
Id. heridas y maltratamientos..... 80

NEGOCIO CIVIL.

Id. solicitud de pensión hecha por Isidora Santos..... "

GACETA JUDICIAL.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

ACUERDO NÚMERO 12.

En Bogotá, á dos de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, reunidos en Sala de Acuerdo los señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el señor Presidente manifestó que era necesario, en su concepto, adoptar una resolución relativa al repartimiento de peticiones pendientes sobre suspensión de autos legislativos de los extinguidos Estados; asuntos que eran numerosos, según el informe verbal del señor Secretario.

Reconocida que fué, por todos los señores Magistrados la necesidad de adoptar una providencia, el señor Magistrado doctor Samper hizo que se leyese el artículo transitorio *I* del Título adicional de la Constitución, que dice así:

"Las leyes de los extinguidos Estados que fueron denunciadas ante la Corte Suprema federal, y suspendidas por ella, y aquellas sobre las cuales no recayó resolución unánime de la misma Corte, serán pasadas al Consejo de Delegatarios para que él decida sobre su validez ó nulidad definitivas."

En consecuencia, el mismo señor Magistrado fijó la siguiente proposición que fué aprobada por unanimidad de votos:

"El señor Secretario examinará los expedientes que estaban detenidos en la Corte, relativos á suspensión de leyes expedidas por los extinguidos Estados, y denunciadas ante ella, y formará dos listas: una, de las leyes sobre las cuales haya recaído resolución suspensiva, por unanimidad de votos, ó no suspensiva por falta de unanimidad; y otra de las que no hubieren sido materia de resolución de la Corte.

"Las primeras, se pasarán al Honorable Consejo Nacional de Delegatarios para los efectos del artículo *I* transitorio, del Título adicional de la Constitución; y las otras quedarán archivadas.

"Ambas listas serán enviadas al Ministerio de Gobierno, junto con el presente acuerdo, para su publicación en el *Diario Oficial*."

No habiendo otro asunto de qué tratar en Sala de Acuerdo, el señor Presidente levantó la sesión.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Benjamín Noguera—Antonio Morales—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme.

Guerra A., Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, diez y siete de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—El Jefe Municipal de Salamina, por resolución de ocho de Febrero de mil ochocientos ochenta y tres, dispuso en cumplimiento de un Decreto Ejecutivo, que se intimara al Procurador municipal la devolución á su dueño de una fuente de agua denominada "El Chamiso" la misma que remató el Distrito mencionado por medio de su Procurador en doce de Enero de mil ochocientos setenta y ocho, á consecuencia del embargo que se hizo por la Jefatura Municipal á Luis Escobar de la misma fuente para hacer efectiva la cantidad de doscientos ochenta pesos con que fué gravado por el Prefecto del Departamento para gastos de guerra, y de la consiguiente adjudicación que se hizo al Distrito como rematador por la suma de ciento treinta y tres pesos treinta centavos. Esa intimación oficial fué mandada hacer para dar cumplimiento al artículo 2.° de la ley nacional, número 38 de 1882, que dispuso se entrara en arreglos con los actuales poseedores de las fincas raíces que fueron enagenadas por las autoridades para hacer efectivos los empréstitos y toda clase de exaccionnes causadas por la guerra de 1876 á 1877, con el objeto de devolver dichas fincas á sus dueños; y como el Procurador Municipal se denegó á la devolución, mientras el Distrito no hubiera sido indemnizado del valor del remate de aquella fuente, se dió cuenta á la Secretaría de Hacienda y Fomento del Estado, y esa oficina dispuso que el expediente pasara al Fiscal del Circuíto para los efectos legales. Con tal motivo, este funcionario, de acuerdo con el artículo 8.° de la ley citada, se presentó ante el Juez del Circuíto entablando contra la Municipalidad demanda de expropiación de la fuente de agua que se quería recuperar; y el personero de ella contestó conformándose con la demanda, sin más condición que la de verificarse el pago préviamente de la cosa expropiada. En consecuencia, el Juzgado, en cumplimiento del artículo 1,270 del Código Judicial, resolvió que se nombraran peritos para el avalúo de la fuente.

Cuando ya estaba hecho el nombramiento de peritos, presentó el Procurador el memorial de fojas 7, por el cual pidió que se declarara nulo lo actuado, y en todo caso que se agregara al juicio la prueba instrumental de que Escobar era realmente dueño de la fuente en cuestión al tiempo de efectuarse el remate por exacción de guerra; que se practicara una inspección ocular para determinar el nacimiento del agua y el dueño del predio en que tuviera origen, pues el solicitante había adquirido la

noticia de qne esa fuente estaba en terrenos de Laureano Saldarreaga.

Por otro memorial reiteró su protesta de nulidad; pero subsidiariamente pidió que el avalúo se efectuase conforme al inciso 2.° del parágrafo perteneciente al artículo 8.° de la ley mencionada, por el cual la estimación pericial debe recaer sobre el valor del remate, ó el de la compra, aumentado con el de las mejoros útiles y necesarias.

El Juez accedió solamente á la petición sobre el modo de verificar el avalúo y la negó en cuanto á los comprobantes de la propiedad de Escobar solicitados y á la nulidad de lo actuado. De ese auto apeló el Procurador y el recurso le fué concedido para ante la Corte en el efecto devolutivo. El juicio de expropiación continuó, y los peritos nombrados, presentaron su dictamen el dos de Abril de mil ochocientos ochenta y tres, (fojas 9 vuelta), y para ello ocurrieron á la Secretaría de la Municipalidad, en donde vieron el expediente que contiene la providencia del Jefe Municipal, por la cual se dispuso que se procediera militarmente al cobro de la contribución impuesta á Escobar; que en efecto se le embargó el agua que este individuo tenía en la posesión de "El Chamiso," la que se mandó pregonar y rematar por las dos terceras partes de su avalúo; y por último, que el remate fué efectuado por el Procurador Municipal. Concluyeron los peritos por avaluar la fuente en ochenta pesos, y las mejoras hechas por la Municipalidad en la construcción de acueducto y pila para proveer á la población de agua, en la cantidad de tres mil novecientos ochenta y un pesos noventa y cinco centavos. En seguida se dictó la sentencia de cinco de Abril de mil ochocientos ochenta y tres, por la cual se decretó la expropiación solicitada, y se fijó como cantidad de indemnización, que debería pagarse préviamente, la de cuatro mil ciento quince pesos quince centavos, monto de la cantidad de ciento treinta y tres pesos veinte centavos en que verificó la Municipalidad el remate de la fuente, y el valor dado á las mejoras. Se dispuso que se diera posesión al Agente del Ministerio público del objeto expropiado, luégo que se verificara el respectivo pago á la Municipalidad; y que se diera cuenta al Poder Ejecutivo nacional por el conducto regular. No habiéndose interpuesto recurso alguno de apelación, se mandó consultar este fallo con la Corte. Sustanciado el expediente en segunda instancia, se procede á resolver lo conveniente, después de oído el concepto del señor Procurador general y de ponerse al despacho del Magistrado sustanciador el trece del presente mes, no solamente la actuación original, sino también la copia sacada oportunamente para surtirse la apelación del auto de treinta y uno de Marzo del mismo año; y considerando:

1.° No existe la nulidad alegada en primera instancia, proveniente de la falta de un comprobante de la propiedad que tuviera Luis Escobar en la fuente de agua á que se contrae la cuestión. Es bastante en el presente juicio que este individuo hubiera sido considerado como dueño de ella cuando se verificó el embargo por el Jefe Municipal de Salamina.

Además, en su condición de poseedor, Escobar, tiene que ser considerado como dueño, por no haberse justificado que otro lo fuera (artículo 762 del Código Civil);

2.° Como al contestar el Procurador Municipal la demanda, convino en la expropiación, no hubo necesidad de recibir la causa á prueba, conforme al artículo 270 del Código Judicial; ni había entonces por qué pedir el testimonio de la escritura de propiedad de Escobar en la fuente de "El Chamiso," ni fundamento para decretarse la inspección ocular solicitada del terreno en que se halla situada la fuente de agua. La Corte no encuentra que se haya incurrido en ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 338 del Código que se acaba de citar;

3.° Entrando ahora en lo principal del juicio, debe tenerse presente que el inciso 2.° del parágrafo único, artículo 8.° de la ley 38 de 1882, dispone que el valor de la indemnización de la finca expropiada sea *únicamente* el del remate, aumentado con *el de las mejoras útiles y necesarias*. El valor del remate hecho por la Municipalidad es de ciento treinta y tres pesos treinta centavos, y el del acueducto y pila construídos para conducir las aguas al poblado, de tres mil novecientos ochenta y un pesos noventa y cinco centavos. Pero esa construcción, como opina el señor Procurador general, no es una mejora, ni útil ni necesaria para la fuente que se trata de recuperar; porque para tener, por lo menos, la condición de mejora útil, era indispensable, según el artículo 966 del Código Civil, que ella hubiera aumentado el valor venal de la fuente. Habrá sin duda traído provecho á la población de Salamina; pero al antiguo dueño Luis Escobar, no se le mejoran por eso las condiciones de la vertiente que poseía. De esto se deduce, que conforme al texto expreso de la ley 38 en su artículo 7.°, solamente hay que indemnizar á la Municipalidad la cantidad en que se verificó el remate.

Por lo expuesto, la Corte Suprema nacional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, reforma el auto apelado de treinta y uno de Marzo de mil ochocientos ochenta y tres, dejándolo vigente en cuanto declara que no hay nulidad en lo actuado, y que no debía practicarse la inspección ocular que se solicitó, ni pedirse la prueba instrumental que indicó el Procurador Municipal; é insubsistente, en cuanto se estimó como mejoras que debían avaluarse, las verificadas por la Municipalidad de Salamina.

Se reforma la sentencia consultada de cinco de Abril del mismo año, en estos términos:

1.° Decrétase la expropiación de la fuente de agua denominada "El Chamiso," que fué embargada, por contribución de guerra á Luis Escobar, y rematada por dicha Municipalidad;

2.° Se dará posesión de esa fuente al Representante del Gobierno nacional, luégo que este haya cubierto al Tesoro Municipal de Salamina la cantidad de ciento treinta y tres pesos treinta centavos en que se fija la indemnización, y en las mismas especies en las cuales se hizo el entero al Administrador de Hacienda nacional por virtud del remate de la fuente.

Notifíquese, cópiese, remítase testimonio de esta sentencia al Gobierno para los efectos legales, publíquese en el *Diario Oficial* y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper.—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del día diez y siete de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, se publicó la sentencia anterior.

Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y ocho de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué la sentencia que precede al señor Procurador de la Nación.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Noviembre diez de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—Noticiado el Alcalde de la ciudad de Piedecuesta, en el mes de Marzo del corriente año, de que en esa ciudad circulaban billetes falsificados del Banco Nacional, ordenó la investigación del hecho, por auto de veinticinco del mes citado. Llamado Manuel Rey Serrano á declarar sobre el punto materia de la indagación, expresó que en uno de los cuatro meses precedentes había visto en la mesa de la Botica que administra Marcos Arenas, cuatro billetes que imitaban á los de veinte centavos, de los que emite el Banco Nacional, y que tienen el retrato del doctor Núñez: que tres de estos billetes estaban negros, como quemados con nitrato de plata y el otro más claro. Púsole de presente el Alcalde al testigo cuatro fragmentos de un billete que motivó la investigación, y el declarante añadió, que habiéndole llevado ese billete su hijo Rafael, con permiso del Alcalde, lo cogió y se lo manifestó á Marcos Arenas, quien dijo que era uno de los que tenía sobre su mesa y que se le había perdido, rompiéndolo luégo en cuatro partes, las que recogió el testigo Rey Serrano y, por conducto de su hijo Rafael se los devolvió al Alcalde.

Prescrita por el funcionario de instrucción una inspección en la botica de Marcos Arenas, los peritos expusieron que, habiendo examinado cuidadosamente los aparatos existentes en dicho establecimiento, en donde había una máquina fotográfica, no hallaron rastro ni vestigio de falsificación de billetes; pero antes de concluírse esta inspección el mencionado Arenas sacó un billete, manifestando que ese era uno de seis que había foto-

grafiado con el designio de amplificar el retrato del doctor Núñez: que tanto el *negativo* como cuatro de estos billetes se los habían hurtado de su mesa; y que de los otros dos, uno le había dado al fotógrafo Quintiliano Gabassa, y el otro lo presentaba al Alcalde. Este último, junto con los fragmentos del que había roto antes Arenas, según la declaración de Rey, es el que ha venido adherido al proceso y lo que constituye el cuerpo del delito.

El testigo Estanislao Calderón, refiere que el veinticinco de Marzo, al ir á hacerle un pago Gil Navas, llevaba éste siete ú ocho billetes de á dos reales, entre los cuales iba el que el Secretario del Alcalde le puso de presente, que entonces no estaba roto; y que habiendo notado el declarante que era falso, le exigió á Navas que se lo dejara para presentárselo á la autoridad. Examinado en seguida Gil Navas, expuso que un hombre, que no sabe como se llama, fué á pagarle por cuenta de Eliseo Barón veintidós reales, los que le entregó en dos pesetas de á cinco, y el resto en billetes del Banco Nacional: que estos billetes los puso con separación el declarante; y que al día siguiente los tomó para ir á hacerle el pago á Estanislao Calderón, quien notó que uno de esos billetes era falso, reteniéndolo para entregárselo al Alcalde.

Eliseo Barón, citado por Navas, refiere que él mandó, con Antonio Peña, seis billetes de á dos reales para hacerle el pago á Navas, pero que no se fijó en si habría ó nó diferencia entre los billetes que mandó, y que éstos le habían sido enviados por Francisco Mantilla. Interrogado luégo, este último, expuso que él había recibido cincuenta y nueve pesos en billetes del Banco Nacional, de á veinte centavos, del Colector de Hacienda Nacional, que ninguno de estos era falso: que con parte de ellos le había mandado hacer un pago á Barón: que no había visto ni conocido antes los billetes que se le ponen de presente; y, no dice cosa alguna respecto de haberle dado billetes á Gil Navas. Recibióse declaración indagatoria al sindicado, y éste confesó que había hecho un *negativo ó bliché* fotográfico, del cual había sacado seis cópias, sobre papel albuminado, con el objeto de manifestar á varias personas su habilidad en el arte, y con el de amplificar el retrato del doctor Núñez, por medio de un aparato solar: que esto lo había hecho sin malicia, como que no había puesto en circulación tales papeles, y que expontáneamente había presentado al Alcalde el billete único que le quedaba, pues los demás le habían sido hurtados. Confesó haber roto el billete que le había presentado Serrano, reconoció dicho billete, agregando, como medio de justificación, que estaba copiado por un solo lado.

Con todos estos antecedentes, y con la inspección pericial, según la cual fueron declarados falsos los dos billetes que figuran en el proceso, habiéndolos comparado los peritos con uno legítimo que se pidió al Administrador Principal de Hacienda; se dictó el auto de proceder de cinco de Junio del presente año, por el cual se declaró con lugar á seguimiento de causa criminal contra Marcos Arenas, como responsable del delito de falsificación de billetes del Banco Nacional de los Estados Unidos de Colombia, de los de á veinte centavos; y se sobreseyó con relación al delito de circulación de billetes del mismo Banco, tanto respecto del procesado Arenas, como de Gil Navas, Eliseo Barón, Antonio Peña y Luis Francisco Mantilla, y del cargo de encubridor respecto de Quintiliano Gabassa.

Consintióse este auto por el reo y siguió la causa su tramitación ordinaria, terminando la primera instancia por la sentencia de veintinueve de Julio último, en la cual se condena al referido Arenas, como autor principal del delito que define el artículo 269 del Código Penal de la Nación, calificándolo en tercer grado, y se le impone la pena de tres años de presidio en la cárcel pública del Circuito de Bucaramanga, quedando privado de todo destino, cargo y empleo público nacional, de toda pensión pagadera por la República, y sujeto á la suspensión de los derechos políticos mientras dure la pena, al pago de las costas y á la indemnización de perjuicios.

Notificada esta sentencia al procesado y á su defensor, apelaron ambos para ante esta Superioridad, y con tal motivo ha venido el expediente materia de la actuación. Surtido el procedimiento ordenado por la ley en esta segunda instancia, nombrado defensor al reo, y oído el dictamen del señor Procurador general, ninguno de los cuales pidió que se abriera la causa á prueba, es tiempo de entrar á resolver acerca del recurso intentado.

Admitidos desde luégo todos los antecedentes de que se ha hecho mensión en la parte expositiva que precede, y reconocidas las probanzas aducidas acerca del hecho criminoso y de la persona culpable; la Córte considera que ha habido inexactitud por parte del Júez de la primera instancia, tanto en la calificación del hecho que motiva el cargo, como respecto de la disposición infringida y de la pena cosiguiente.

Marcos Arenas, fué llamado á juicio como autor principal del delito de falsificación de billetes del Banco Nacional; pero las piezas constitutivas del cuerpo del delito no ponen de manifiesto un billete falsificado, sino un proyecto de falsificación comenzado y preparado pero no consumado, pues que lo que se ha estimado como billete falsificado no es sino una copia tomada por un solo lado, reproduciendo el anverso de un billete de veinte centavos, pero dejando en descubierto, ó enteramente en blanco, el reverso, y, como para que fuera verdadero billete, ó una completa imitación ó falsificación de los billetes, sería necesario que la obra estubiera completa, es decir, cubierto el papel por ambos lados con todos los signos que constituyen un billete nacional, es claro que en el presente caso no ha habido falsificación verdadera ó completa, ni, por consiguiente, autor principal de tal falsificación. Lo que hay de manifiesto es el designio de verificar la falsificación, la cual no tuvo efecto por circunstancias independientes de la voluntad del autor, y que dejó de consumarse, no por arrepentimiento ó voluntario desistimiento, porque eso no está probado en modo alguno, sino por motivos desconocidos que impidieron la completa realización del plan.

Es verdad que no son admisibles en modo alguno las exculpaciones del procesado, porque si se hubiera propuesto únicamente sacar cópia de un retrato, se habría limitado á este solo objeto, y no le habría dado á la copia forma de billete, designación del establecimiento, cifra indicativa del valor, ni las firmas del Gerente y de los Directores; todo lo cual aparece en la copia fotográfica, revelando patentemente que el designio fué hacer un billete de veinte centavos, y que lo probable es que por falta de las tintas colorantes, no se consumó la obra por el reverso. Pero de todos modos, y precisamente por esto último, no ha habido sino tentativa de delito.

Ahora, en cuanto á la calificación del hecho, con relación á la ley penal, es claro que se trata de un documento de crédito á cargo de una oficina de Hacienda, de los que circulan bajo la garantía del Gobierno; y, por consiguiente, la disposición infringida no es la contenida en el artículo 269, sino la que define el 267 del Código Penal. Por lo mismo y puesto en relación este último artículo con lo dispuesto en el 15 del mismo Código, establecidas todas las circunstancias agravantes de completa malicia, que el proceso arroja, la pena tiene que ser compatible con estas disposiciones. Aun cuando el reo Arenas, fué llamado á juicio como autor principal, esto no obsta para la modificación de la sentencia de primera instancia en el sentido que se deja expuesto; por que el cargo comprende todas las anexidades que á él pertenecen de una manera genérica, esto es, el autor como el cómplice y auxiliador; el culpable en primer grado como en segundo; el hecho esencial y la tentativa que á él conduce. Así, lo dispuesto en el artículo 1,630 del Código Judicial, se explica perfectamente por el 9 del Código Penal, según el cual, no constituye sino un solo delito, ó mas bien, no constituye otro distinto, la circunstancia de omitir ó ejecutar alguna parte del hecho primordial de la delincuencia.

Aun cuando contra el procesado militan como circunstancias agravantes, el hecho de haberse fugado de la prisión, la suficiencia intelectual que él mismo se atribuye y la necesidad de escarmiento por la frecuencia del delito de falsificación; estas circunstancias están más que contrapesadas con la franca confesión que hizo del delito, con la presentación del documento constitutivo del cuerpo de este delito y con las declaraciones del doctor Guillermo Forero y del doctor Aurelio Mútis, de las cuales resulta la extravagancia de carácter del procesado y la lijereza en sus procedimientos.

Por estos fundamentos, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, reforma la sentencia apelada en estos términos:

1.° Declarando, como declara, que Marcos Arenas, es reo de tentativa del delito de falsificación de billetes nacionales, ó sea,

de los documentos de crédito á cargo de la Oficina de Hacienda llamada Banco Nacional, que circulan bajo la garantía del Gobierno, y al tenor de lo dispuesto en el artículo 267 del Código Penal; y

2.° Que, en consecuencia, y atendiendo á las circunstancias atenuantes que quedan mencionadas, y no estando comprobado, ni remotamente, que la consumación del delito dejara de tener efecto por voluntario desistimiento del culpable; calificando este delito en tercer grado, se condena á Marcos Arenas á sufrir la pena de diez y seis meses de presidio, al tenor de los artículos 15 y 267 del Código Penal, la que cumplirá en la cárcel pública del Circuíto de Bucaramanga, quedando además, sujeto á la privación de todo destino, cargo ó empleo público nacional, á la de toda pensión pagada por la República, á la suspensión de los derechos políticos mientras dure la pena, y al pago de las costas procesales é indemnización de perjuicios. En la pena corporal se le computará todo el tiempo que ha durado detenido ó preso, menos el que precedió al día de su fuga, es decir, desde el diez y nueve de Mayo último, para atrás.

Se confirma el auto de sobreseimiento, dictado por el Juez del Circuíto de Bucaramanga, respecto de Marcos Arenas, Gil Navas, Eliseo Barón, Antonio Peña y Luis Francisco Mantilla por el delito de circulación de billetes falsificados; y respecto de Quintiliano Gabassa, como encubridor del mismo delito, por no aparecer en el expediente prueba alguna que acredite que alguno de estos individuos pusiera en circulación tales billetes, con conocimiento de su falsedad.

Notifíquese, cópiese, publíquese en el *Diario Oficial* y devuélvase el proceso al Juzgado de su origen.

R. Antonio Martínez.—José M. Samper.—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales.—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del día diez se publicó la anterior sentencia

Ramón Guerra A., Secretario.

En once de Noviambre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la anterior sentencia.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

En trece de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué la sentencia anterior al señor doctor Emiliano Restrepo E.

RESTREPO—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, seis de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Por auto de tres de Julio de mil ochocientos ochenta y cinco, llamó á juicio criminal el Juez del Circuíto de Túquerres, previa la correspondiente información sumaria, al Alcaide de la Cárcel, Adolfo Martínez, por haber facilitado la fuga de Belisario Ibáñez, Celín Arellano y Nicanor Vaca, detenidos por violación de la ley Nacional sobre policía de las fronteras, y sobreseyó respecto de los tres prófugos y de Gabino Alvarez, anterior Alcaide de la Cárcel, disponiendo que el auto se consultara en lo relativo al sobreseimiento.

Seguida la causa por los trámites legales, dictó el Juez sentencia condenando á Martínez, previa la calificación del delito en tercer grado, á sufrir la pena de un año de prisión en la Cárcel de Túquerres, al pago de las costas procesales, á la privación de todo destino, cargo y empleo público Nacional y de toda pensión pagadera por la República, á la suspensión, mientras dure la pena, de los derechos políticos, y al resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el delito.

Notificada esta sentencia, fué consentida por el reo y su defensor, y apelada por el Personero público en lo relativo únicamente á la calificación del grado del delito.

Examinada la causa por la Corte para lo de su cargo, ha encontrado comprobados en ella los siguientes hechos:

1.° Ibáñez, Arellano y Vaca, estaban realmente detenidos de orden del Jefe Municipal, en la Cárcel de Túquerres, bajo la custodia del Alcaide, como auxiliadores de los revolucionarios de la República del Ecuador;

2.° En la noche del veintinueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cuatro, Martínez estuvo tomando licor con los detenidos mencionados, y á instancias de éstos, salió con ellos de la Cárcel á tomar café en una Fonda, de cuya circunstancia se aprovecharon para evadirse, sin que dicho Martínez pudiera evitarlo, no obstante que los persiguió, según lo ha declarado Severo Alvarez;

3.° El mismo Alcaide Martínez, comunicó al Juez del Circuíto la fuga de Ibáñez, Arellano y Vaca, y pretendió salvar su responsabilidad haciendo valer, que estando él dormido, le sacaron la llave de donde la tenía y abrieron las puertas del calabozo y de la Cárcel; y

4.° Llamado á rendir confesión, se denegó á darla.

Resulta además, del proceso, que en uno de los días anteriores á la fuga de los tres detenidos, y siendo Alcaide Gabino Alvarez, fué encontrado Ibáñez fuera de la Cárcel y mandado restituír á ella por el Alcalde del Distrito, cuya orden se cumplió.

De tales resultados se desprenden las siguientes consideraciones:

1.ª Que es indudable que Ibáñez, Arellano y Vaca, estaban legalmente detenidos en la Cárcel de Túquerres, en la noche del veintinueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cuatro, bajo la custodia y responsabilidad del Alcaide, Adolfo Martínez, quien no ha negado el hecho;

2.ª Que hay plena prueba testimonial que da á conocer claramente, que Martínez consintió en que los tres detenidos salieran de la Cárcel, y les facilitó así su evasión, la cual no se habría verificado si aquel, en cumplimiento de su deber, los hubiera mantenido en la Cárcel;

3.ª Que ni Martínez ni su defensor, han dado prueba alguna que desmienta lo declarado por los testigos, y menos que acredite que los tres detenidos se apoderaron furtivamente de las llaves del establecimiento;

4.ª Que en contra de Martínez obra, además, la presunción que nace de haberse denegado á rendir confesión, porque si era inocente, se le presentaba ocasión de dar sus descargos;

5.ª Que tan convencido estaba Martínez de su culpabilidad, que al notificársele el auto en que se concedió el recurso de apelación interpuesta por el Procurador del Circuíto, de la sentencia de primera instancia, dijo: "que no apelaba porque consideraba la sentencia más que justa, equitativa y humanitaria;

6.ª Que, en consecuencia, está convicto y confeso de haber incurrido en la pena que señala al artículo 240 del Código Penal de la Nación;

7.ª Que no existen contra el reo circunstancias agravantes, y sí las atenuantes de haberse reconocido culpable, de descubrirse de lo actuado que es un hombre sencillo, que por condescendencia más bien que por malicia, consintió en que los tres detenidos mencionados salieran de la Cárcel, y que estos eran sindicados de un delito político, cosa que debe tenerse en cuenta para calificar el grado del delito, según lo dispuesto en el artículo 246 del Código Penal.

Por lo que hace al Alcaide Gabino Alvarez, razón ha habido para sobreseer en el procedimiento, porque no aparece probado que con su permiso saliera Ibáñez de la Cárcel una noche, y porque la fuga de éste no se verificó; y por lo que mira al sobreseimiento en favor de Ibáñez, Arellano y Vaca, la Corte lo considera legal, porque como dice el señor Procurador general, "verificaron su evasión sin ninguna de las circuntancia expresadas en el artículo 238 del citado Código, y, por consiguiente, no es el caso de aplicarles pena alguna, fuera de las precauciones que establece el parágrafo final de dicho artículos y de conformidad con los artículos 4.°, 5.° y 6.° del mismo Código Penal."

Por lo tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la sentencia apelada, dictada en dos de Abril del año en curso contra el Alcaide Adolfo Martínez, y también el auto de sobreseimiento relativo á Gabino Alvarez, Belisario Ibáñez, Celín Arellano y Nicanor Vaca.

Notifíquese este fallo, cópiese, publíquese y devuélvase la

causa al Juez de la primera instancia para los fines consiguientes.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del seis de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, se publicó la anterior sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En doce de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la sentencia que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, once de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—A petición del Agente Fiscal del Circuíto de Bogotá, el Juez 4.° dictó el auto cabeza de proceso, de veintiséis de Octubre de mil ochocientos ochenta y dos (fojas 17 vuelta), por el cual comisionó al Inspector 1.° de la policía del Estado, para que levantara el correspondiente sumario en averiguación de los delitos de falsedad y estafa, cometidos con motivo del otorgamiento de tres poderes, uno ante Francisco Ramírez Castro, Notario 3.° del Circuíto mencionado, bajo el número 437, en cinco de Abril de mil ochocientos ochenta y uno, por el cual aparece que Jesús María y Nicanor Suárez, autorizaron á Pastor Herrera para adelantar las diligencias que tenían pendientes ante la Corte Suprema Federal, sobre reconocimiento de créditos por expropiaciones hechas durante la guerra de 1876 á 1877, y para percibir los valores que se reconocieran á cargo del Tesoro Nacional; otro, número 612, otorgado en treinta de Julio de mil ochocientos ochenta y uno, ante el Notario del Circuíto de Zipaquirá, Francisco Chávez, con igual objeto que el anterior, por Eugenio Escalante, vecino de Mutiscua, Estado de Santander, á Calixto Hernández V.; y otro, número 193, otorgado por Domingo y Elías Suárez, en diez y siete de Julio del mismo año ante el Notario de San-Gil, al citado Hernández, con idéntico objeto. Esos poderes según los testimonios de Dámaso Bautista, Anselmo Gómez, José y Primitivo de Latorre, Jesús Gómez M., Benita Suárez, Juan Francisco, Fernando y Pablo Jiménez, Guillermo Gamboa, Antonio Jelbes, Eugenio Escalante, Nicanor, Domingo y Elías Suárez, fueron otorgados por personas extrañas, suponiéndose los verdaderos interesados en los créditos, por cuanto estos no habían salido de Mutiscua y Pamplona, lugares de su vecindad, en las fechas del otorgamiento de tales poderes; con cuyo motivo los verdaderos acreedores, al tener conocimiento del cobro que se había hecho en el Tesoro, por falsos apoderados, dieron instrucciones á su legítimo representante, doctor José Concepción Romero, para hacer las correspondientes reclamaciones, como lo verificó éste apoderado ante la Secretaría del Tesoro, sin haber podido obtener el nuevo reconocimiento y pago de dichos créditos.

La estafa se estima consumada con esos falsos poderes, por cuanto á virtud de sentencia de la Corte Suprema Federal, de veintiocho de Julio de mil ochocientos ochenta, la Secretaría del Tesoro y Crédito Nacional, reconoció á favor de Jesús María y Nicanor Suárez, en vales de 1.ª clase, el treinta de Abril de mil ochocientos ochenta y uno, la cantidad de mil novecientos ochenta y siete pesos, entregó á Pastor Herrera la correspondiente orden de pago, según la firma autógrafa reconocida, puesta en el talón respectivo que reposa en esa Secretaría, y ese valor fué cubierto por la Tesorería general á Miguel de Paz, que había comprado la orden de pago al citado Herrera.

Una cosa semejante se verificó respecto del crédito de cinco mil ciento noventa pesos en vales de segunda clase, reconocido por sentencia de veintisiete de Abril de mil ochocientos ochenta y uno á favor de Eugenio Escalante, y mandado pagar por la Secretaría del Tesoro en primero de Septiembre del mismo año; recibiendo la orden de pago el falso apoderado, Calixto Hernández V. Este individuo recibió, además, la orden de pago que dicha Secretaría había expedido á favor de Domingo y Elías Suárez, por reconocimiento efectuado el quince de Noviembre de mil ochocientos ochenta y uno, en fuerza de la sentencia de la Corte, del veintisiete de Abril del mismo año, por la suma de mil trescientos cuarenta y cinco pesos en vales de primera clase, así: á favor de Domingo Suárez, setecientos noventa y cinco, y de Elías Suárez, quinientos cincuenta. Los interesados esperaban reunir una suma de consideración en bonos flotantes para negociarla de una sola vez.

Por no haber sido posible descubrir quiénes fueron las personas que tomaron nombres supuestos para figurar como poderdantes, ni el paradero del falso apoderado, Calixto Hernández V., se contrajo la causa al sindicado Pastor Herrera, contra el cual se había declarado, lo mismo que contra Hernández, con lugar el procedimiento por auto del Juzgado 5.° del Circuíto, de diez de Octubre de mil ochocientos ochenta y cinco (fojas 153), por los delitos de falsedad y estafa. Se declaró, además, no haber mérito para proceder contra el Notario Ramírez Castro, por falsedad; y terminada la actuación contra el mismo por la infracción del artículo 2,589 del Código Civil, que previene al Notario ocurrir á testigos de abono siempre que no conozca á las personas que le pidan la prestación de su oficio, por haber transcurrido el tiempo previsto por el artículo 71 del Código Penal para la prescripción de la pena no corporal. Por último, se mandaron sacar copias de lo conducente y remitirlas á los Jueces de los Circuítos de Zipaquirá y San-Gil para lo de su cargo. El juicio continuó y se produjeron las pruebas que se estimaron necesarias, terminando en primera instancia con la sentencia definitiva de catorce de Mayo del presente año, de la cual apeló el procesado Herrera, quien fué condenado en segundo grado, con la rebaja de la sexta parte de la diferencia entre el máximum y el mínimum, como cómplice del delito de falsedad á la pena de dos años de presidio, en el respectivo Establecimiento de Cundinamarca, y como autor principal del delito de estafa, al pago de cuatrocientos noventa y seis pesos setenta y cinco centavos de multa, y á presidio por un año veinte días; quedando sujeto á la vigilancia de las autoridades por dos años seis meses; á la privación de cualquiera pensión pagadera por el Tesoro de la República; á la suspensión de los derechos políticos mientras durara la pena corporal; al pago de costas y resarcimientos de daños y perjuicios. También se dispuso que la pena corporal se contara desde el día en que fué reducido á prisión el encausado en calidad de detenido.

Sustanciado el incidente en segunda instancia, se ha surtido la audiencia pública el día cuatro de los corrientes después de citadas las partes para sentencia, para dictar la cual, se considera en relación con Herrera y Ramírez Castro:

1.° Aparece comprobada la falsedad cometida en el otorgamiento del poder conferido ante el Notario 3.° del Circuíto de Bogotá, que queda mencionado, y que los autores principales de ese delito, fueron dos individuos desconocidos que tomaron los falsos nombres de Jesús María y Nicanor Suárez. Un considerable número de testigos, como queda expuesto, aseguran, aunque sin citación previa del Ministerio público, que los verdaderos dueños del Crédito cobrado por Herrera y que llevan aquellos nombres, son vecinos de un lugar como Mutiscua, distante muchos miriámetros de Bogotá; que en la fecha de la simulación estaban en su Distrito ocupados en asuntos de agricultura. Hay, pues, motivo según esto, para creer que hubo suplantación de nombres, y que la falsedad del instrumento está comprobada de conformidad con el artículo 547 del Código Judicial, que exige para probar la falsedad de una escritura, cuatro testigos idóneos que depongan que la parte estaba en otro lugar diferente el día en que se otorgó el instrumento;

2.° Los autores principales del delito de falsedad cometido ante el Notario 3.° de Bogotá, fueron los que se presentaron en esa oficina con los supuestos nombres de Jesús María y Nicanor Suárez; mas esos individuos no han podido ser descubiertos, apesar de las muchas diligencias practicadas para obtener su verdadera filiación y paradero;

3.° Por los testimonios conformes del Notario Ramírez Castro, de los testigos instrumentales, Gabriel E. Cifuentes y Esteban Barrera, y de Heliodoro Santacoloma (fojas 61 á 65 y 204), se sostiene que el día del otorgamiento del poder se presentaron los supuestos Suárez, acompañados de Pastor Herrera, y que el Notario, que no conocía á los poderdantes, en lugar de cerciorarse de su identidad por medio de testigos de abono, se conformó con la inducción de que serían realmente los Suárez, por cuanto concurrieron con Herrera que le era conocido, y en cuya buena reputación descansó. Ni el Notario, ni los testigos

instrumentales, han podido sostener que Herrera hubiera asegurado que sus compañeros tuvieran efectivamente los nombres que ellos se atribuían; pero Heliodoro Santacoloma ha persistido invariablemente (fojas 202 vuelta), en la aseveración de que Herrera aseguró tal identidad al Notario. De modo que el único hecho que queda autorizado con un número plural de testigos, es el de haberse presentado los poderdantes con el que debía ser su mandatario al tiempo de otorgarse el instrumento. Bien pudo ser Pastor Herrera víctima del engaño de sus dos compañeros que le aseguraron tener los nombres de los verdaderos dueños del Crédito que se iba á cobrar del Tesoro. Pero ocurre la siguiente circunstancia en esta causa que hizo inaceptable ese supuesto en la sentencia dictada por el Juez de primera instancia. A fojas 83 vuelta aparece la primera declaración instructiva recibida á Herrera, el cual interrogado, si sabía quien hubiera sido el individuo al cual otorgaron Jesús María y Nicanor Suárez un poder ante el Notario 3.° del Circuíto de Bogotá, el cinco de Abril de mil ochocientos ochenta y uno para que, en representación de sus personas, siguiese y terminase ante los Tribunales de la Unión Colombiana, el juicio que tenían por suministros, empréstitos y expropiaciones que sufrieron en la guerra civil de 1876 y 1877, contestó que no sabía. Igual negativa hubo de parte del sindicado, cuando se le preguntó si él había recibido en la oficina del Crédito Nacional, en vales de primera clase, la cantidad de mil novecientos ochenta y siete pesos á virtud del poder mencionado; y cuando se le averiguó si él conocía á Calixto Hernández. Mas, en el careo entre Ramírez Castro y Herrera, verificado en veintiséis de Julio de mil ochocientos ochenta y cinco (fojas 132 y 133), dió el segundo respuestas evasivas, exigiendo que se le presentaran los documentos originales para contestar con certidumbre. Con tal motivo, el cinco de Mayo del mismo año (fojas 203 vuelta), se verificó un careo ordenado por el Juzgado, entre Ramírez Castro, Cifuentes, Santacoloma y el procesado Herrera, y entonces este expuso que la orden de pago por mil novecientos ochenta y siete pesos que se le había entregado en la Dirección del Crédito Nacional, según el recibo que había dejado en el talón de la misma orden, recibo que reconoció como autógrafo, la había vendido á José Miguel de Paz, "y su valor se lo había entregado á Jesús María Suárez, que fué la misma persona que al exponente le entregó el poder de que hizo uso para reclamar y percibir tal orden." Vino á quedar, pues, establecido de un modo claro que Herrera recibió de los Suárez un poder, para el cobro de los mil novecientos ochenta y siete pesos; que él recibió la correspondiente orden de pago y que verificó la venta de ella, entregando luego su producto al poderdante Jesús María Suárez.

Con todo, de aquí no se desprende una inducción necesaria de que Pastor Herrera, hubiera sabido que los individuos que se titularon Jesús María y Nicanor Suárez, le fueran conocidos como unos impostores, y que al verificar la entrega de valores al primero, dejara de tener la persuación de que los titulados dueños, eran los verdaderos acreedores. La inducción del Juez de primera instancia, es tanto más falible y expuesta al error, cuanto que verificada la falsificación en Abril de mil ochocientos ochenta y uno, no vino á ser interrogado Herrerra, hasta Diciembre de mil ochocientos ochenta y cuatro, cuando por el transcurso de tres años ocho meses, era natural que los recuerdos de los incidentes del hecho hubieran sido olvidados. El mismo Notario Ramírez Castro en su primera declaración expuso que, si mal no recordaba, había sido Herrera el que le había dicho, que los dos otorgantes eran Jesús María y Nicanor Suárez, sin que en sus declaraciones posteriores hubiera podido precisar sus recuerdos.

No hay, por lo tanto, á juicio de la Corte, una persuación necesaria y libre de error, de haber sido cómplice Pastor Herrera en la falsedad de los dos otorgantes del poder.

4.° Síguese de aquí, que el hecho de haber recibido Herrera valores del Tesoro, á virtud de un poder cuyas solemnidades *externas están arregladas á derecho, no le constituye estafador*, por no haber una prueba directa de que él supiera que los titulados Jesús María y Nicanor Suárez, eran unos impostores. A lo expuesto se debe agregar, que según los testimonios del doctor Lázaro M. Pérez y José Bonnet, Herrera gozaba de la reputación de hombre honrado en quien se hacía confianza en este lugar; y

5.° La Corte, por auto para mejor proveer, del seis del mes en curso, dispuso con el fin de aclarar la verdad, que fueran interrogados á presencia de todos los Magistrados, el procesado Pastor Herrera, el Director del Crédito Nacional, José María Caro y el doctor Jesús María Arteaga. De la primera diligencia resulta, que el encausado sostiene que él no concurrió á la Notaría 3.ª del Circuíto de Bogotá, el cinco de Abril de mil ochocientos ochenta y uno, cuando Jesús María y Nicanor Suárez le confirieron el poder respectivo, para el cobro del Crédito que se les había reconocido á cargo del Tesoro Nacional; porque en ese mismo día él se hallaba en el Distrito de Madrid, en casa del General Antonio B. Cuervo, de donde no regresó á Bogotá hasta por la noche; que el no tuvo porqué averiguar por la identidad de sus constituyentes, por cuanto le presentaron después del día de su otorgamiento, sin recordar su fecha, un poder legalmente conferido, bastante para ejercer su oficio de apoderado; y que llenado su encargo, hizo la entrega de valores á su dueño, previa la deducción del honorario del diez por ciento que le correspondía, como mandatario.

El Director del Crédito Nacional expone: que en su concepto, Herrera no tuvo complicidad en la preparación de los antecedentes de aquel cobro; que él se limitó á ejercer un poder legalmente conferido; que Herrera no tuvo ninguna intervención en la formación de los poderes otorgados en San-Gil y Zipaquirá, siendo esos instrumentos, así como el que se otorgó en esta Capital, los que sirvieron para cobrar al Tesoro los diferentes créditos de que se habla en el proceso; y que llegó á comprender el mismo Director que dos de los cuatro individuos que llevan efectivamente el apellido de Suárez, vinieron realmente desde Santander, y otorgaron el poder que aparece protocolizado en la Notaría 3.ª de esta Capital; y que el motivo de este procedimiento, fué el de que, tánto los cuatro interesados de apellido Suárez, como los Escalantes, habían negociado á bajo precio en Santander, los bonos que pudieran resultarles de las acciones judiciales que habían intentado, y que cuando vieron publicadas en el *Diario Oficial* las sentencias de reconocimiento de sus créditos, advirtieron que habían hecho una mala negociación, y que entonces dos de los Suárez y uno de los Escalantes se propusieron sustraer de la acción del comprador los bonos flotantes, dando nuevos poderes para percibirlos del Tesoro, sin conocimiento de sus compradores primitivos. Que estima esto tanto más seguro, cuanto que el declarante supo con toda certidumbre que por sentencia judicial fueron obligados los Suárez y Escalantes en Santander, al pago á esos acreedores. Agrega, que sabido como era en esta ciudad que Herrera sufría una enagenación mental en esa época, nada más fácil que hacer de él un instrumento, para esas operaciones simuladas é incidiosas, sin que él se apercibiera de las irregularidades de que se le hacía instrumento. Que por otra parte, tanto el Notario de San-Gil como el de Zipaquirá, dan fe, así como el de Bogotá, del conocimiento de las personas de los poderdantes, de modo que no es extraño que los verdaderos interesados, aunque no todos, hayan sido, como lo ha comprendido el declarante, los mismos autores de los poderes.

El doctor Arteaga expone, que él tuvo á Herrera como su escribiente en la Agencia de su cargo, y que siempre lo dejó satisfecho la consagración y honradez de ese individuo, quien dejó el puesto con que había sido favorecido en su pobreza, por exagerado pundonor, á consecuencia de una indicación que le hizo, respecto al modo de ejecutar ciertos trabajos de la Agencia; y que después ese joven, entregado á su propia suerte, vino en medio de las contrariedades de la pobreza, seguramente, á perder el juicio y á ser objeto aun de la hilaridad pública, cuando algunas personas para divertirse, lo presentaron como candidato para la Presidencia del Tolima, haciéndole creer con publicaciones impresas y periódicas que circulaban en esta capital, que esa candidatura gozaba de la opinión de la mayoría del Estado.

Estos antecedentes han venido á producir en la Corte la convicción de que Herrera no ha procedido con malicia, al ejercer el poder de los Suárez, y al recibir valores de crédito para ellos de las oficinas nacionales.

Por lo tanto, la Corte Suprema Nacional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la sentencia apelada y absuelve á Pastor Herrera, de los

cargos de falsedad y estafa porque fué llamado á juicio, y ordena que se le ponga en libertad.

Confírmase el auto de sobreseimiento, respecto al Notario 3.° Francisco Ramírez Castro, por el delito de falsedad, y á virtud de prescripción legal por el trascurso de más de cuatro años en lo relativo á la infracción del artículo 547 del Código Judicial.

Notifíquese, cópiese, publíquese en el *Diario Oficial* y devuélvase el proceso.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del día once de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, se publicó la sentencia anterior.

Ramón Guerra A., Secretario.

En trece de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la sentencia que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra* A., Secretario.

En quince de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué la sentencia anterior al señor Pastor Herrera.

Pastor Herrera—*Guerra A.*, Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, cuatro de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—En cinco de Julio de mil ochocientos ochenta y uno, se inició este sumario por el Alcalde del Distrito de Pacho, á causa de haberle presentado el Síndico Municipal cuatro monedas, no se dice de qué talla, que estaba haciendo circular una mujer y que había aprehendido Luis Moreno porque eran falsas.

Moreno con referencia á otras personas, declara que el tres de ese mes había llegado Paz Gutiérrez á la tienda de Liboria Vásquez á comprar varios objetos y pagó con un peso falso; que Patricio Franco había quitado á la misma Gutiérrez dos pesos de la misma naturaleza, y que á Agustín Forero y á Pedro Cristancho les había dado monedas falsas.

Franco dice que hacía algún tiempo había llegado la Gutiérrez á Pacho con un hombre y había estado cambiando plata falsa, y que el exponente como agente de policía le había quitado dos pesos y le había hecho devolver la legítima plata que había recibido en cambio de la mala.

María Inés Rodríguez, declara que la Gutiérrez, había ido el tres de Julio citado, por la noche á la tienda de Liboria Vásquez, á comprar varios artículos, los que pagó con una pieza de ocho décimos y se le devolvieron setenta y cinco centavos. Que la declarante con otra mujer llamada María, estuvo esa misma noche axaminando la moneda que la Gutiérrez había dado, y, viendo que era falsa, mandó llamar á aquella para que la cambiara, á lo cual se negó diciendo que ella no había dado esa moneda.

Agustín Forero, expone que sabe que Paz Gutiérrez, hace más de dos años que tiene por profesión cambiar monedas falsas; pero no se le exigió razón de su dicho ni explicación de ninguna especie.

Pedro Cristancho, juró que hacía como dos meses llegaron á su tienda á las seis y media de la tarde, dos mujeres á comprar algunos objetos, por valor de siete y medio centavos, pagaron con una pieza de ocho décimos, y recibieron las vueltas; que notando el testigo que era mala la moneda que había recibido, mandó un muchacho á alcanzar las mujeres y no las encontró. Estando la Gutiérrez en el despacho rindiendo declaración indagatoria, el declarante la reconoció como una de las mujeres que le habían dado la pieza falsa.

Interrogada la sindicada en indagatoria, expuso que no había tenido ni conoce monedas falsas; que no sabe de donde proceden las monedas falsificadas; que el domingo tres del mes citado por la noche, estuvo en la tienda de Liboria á comprar chicha y la había pagado José María (alias brujo), con una moneda de cinco centavos legítima; y que sí había estado en la tienda de Cristancho, pero con el objeto de llevarle á la mujer de éste una cantidad de sal.

La Gutiérrez fué detenida, pero fugó, y según dice el Alcalde, auxiliada por el marido que lo es Andrés Lara.

El seis de Julio remitió el funcionario instructor las diligencias al Juez del Circuito de Zipaquirá, en lo criminal, quien no obstante haberlo solicitado el Agente del Ministerio público, no hizo reconocer por peritos las monedas objeto de la investigación, ni identificarlas con las que decían los testigos haber recibido de la Gutiérrez: solamente se ocupó en librar requisitorias á los Alcaldes de Facatativá y La-Mesa, y al Juez del Distrito de Zipaquirá para que fuera aprehendida la sindicada, lo cual hasta hoy no ha podido verificarse.

El Juez por auto de fecha diez de Noviembre del año próximo pasado, declaró terminado el procedimiento, por cuanto la pena está prescrita, y envió el asunto á esta Suprema Corte en consulta.

Para resolver se considera:

Demorado el proceso, por culpable decidia del Juez, por más de cuatro años, hoy es difícil practicar con provecho las diligencias que dejaron de practicarse oportunamente, tales como ampliaciones de declaraciones, evacuación de citas y reconocimiento é identificación de las especies falsificadas, suponiendo que estas existan, lo cual no se sabe.

Además, hasta ahora, del inperfecto sumario no resulta que la sindicada tuviera conocimiento de que las monedas que se dice por testigos aislados que puso ella en circulación fueran falsas, circunstancia indispensable según la ley, para que haya delito; y, en consecuencia, no aparece comprobado el cuerpo de él.

No puede decirse como lo hace el Juez del Circuito, que la pena que pudiera imponerse al delito está prescrita, pues el de circulación de moneda falsa, en el caso más favorable, tiene señalada pena corporal según el artículo 257 del Código Penal, y conforme al 71 del mismo Código, esta pena se prescribe en diez años.

Es inaceptable, lo que el Juez expone acerca de la comisión del delito que define y castiga el artículo 266 del Código citado, porque esta disposición legal supone que al que circula sin malicia la moneda falsa se le ha dado aviso de esta circunstancia, y sin embargo ha continuado ejecutando el hecho, cosas que no han ocurrido en este caso.

En consecuencia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se sobresee en este sumario contra Paz Gutiérrez, por el delito de circulación de moneda falsa.

Notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente; pero antes se tomará copia de los autos de fojas 5 vuelta, 6 vuelta, 11 vuelta, informe de fojas 12 y auto de la misma y se pondrá al repartimiento de la Corte para el efecto de exigirle al Juez del Circuito de Zipaquirá, Antonio González Ortega, la responsabilidad por la demora de cuatro años que aparece en el sumario.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, diez de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Por los fundamentos consignados en la antecedente vista del señor Procurador general, fecha veinte de Octubre último, y para que se perfeccione el sumario en los términos que allí se indican; la Corte Suprema nacional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el auto de dos de Septiembre del presente año, que pronunció el señor Juez de la Provincia de Monpox, en el Departamento de Bolívar, por el cual declaró cortado el procedimiento criminal iniciado contra Pablo Martínez, Santiago Mejía, Marcelino Pacheco, Arcadio Badillo, Elías Moncada y otros, para averiguar

el delito que hubieran cometido al apoderarse de varios efectos de la propiedad de Reyes Morales, existentes en el retiro de Arroyo Hondo, jurisdicción del Distrito de Morales, en la referida Provincia; y ordena que se practiquen todas las diligencias indicadas por el señor Procurador general, en el dictamen de que se ha hablado, el cual se considera como inserto en este auto. Practicadas esas diligencias, el Juez resolverá de nuevo sobre el mérito de la actuación.

Notifíquese, déjese copia y devuélvase.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En doce de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, trece de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—El veintidós de Octubre de mil ochocientos ochenta y uno, se presentó ante el Jefe Municipal de Palmira, el Comisario mayor del Distrito, Simón Gaviria, poniendo denuncio contra el Subteniente de la tercera Compañía del Batallón 9.° de Zapadores de la Guardia colombiana, Pastor González, porque en la tarde del día anterior lo había herido y maltratadode obra.

Hechos los correspondientes reconocimientos, y recibidas las declaraciones á José María Mancilla, Celio Santacruz, Tomás Patiño, Gonzalo Plaza, Severo Parra y Rodolfo Amaya, éstos dos últimos, Sarjento y Cabo, respectivamente de la misma Compañía, resultó que, con motivo de haber solicitado el Subteniente González del Comisario Gaviria un banco para dormir en el cuartel de la casa Municipal, en donde ese mismo día se había alojado un piquete de la guardia, al cual pertenecía González, y no habiendo podido ó querido Gaviria conseguir lo que se le pedía, aquél se molestó y dió de pescozones y foetazos á éste, primero fuera y luégo dentro del cuartel, en donde lo detuvo preso con centinela de vista un rato, lo hizo bañar, y luégo, cuando el Jefe Municipal se presentó en el cuartel, lo mandó poner en libertad.

Los peritos declararon en tres reconocimientos sucesivos, que la incapacidad producida al paciente por los golpes, era de nueve días.

Con fecha siete de Febrero de mil ochocientos ochenta y dos, dictó el Juez del Circuíto mencionado, auto de proceder contra el sindicado por los delitos de heridas y maltratamientos de obra, mandó reducir al reo á prisión y ordenó que el proceso se pasara al Juez del Circuíto de Buga, para que éste funcionario continuara en el conocimiento de la causa, por haberlo así dispuesto el Poder Ejecutivo del Estado.

En el curso del juicio, el defensor pidió la ratificación de los testigos del sumario, cosa que no pudo conseguirse, salvo respecto de la declaración del denunciante porque los demás declarantes estaban ausentes.

Por fin, el cuatro de Noviembre de mil ochocientos ochenta y dos, pronunció el Juez sentencia, condenando al reo á sufrir la pena de seis meses de presidio y las demás accesorias que la ley en estos casos determina, y por cuanto el procesado había estado preso desde el quince de Febrero anterior, se le mandó poner en libertad, de conformidad con la doctrina de los artículos 31 del Código Penal y 1,937 del Código Judicial de la Nación, y se consultó la sentencia con la Corte, porque ninguna de las partes apeló.

Repartido el negocio el seis de Enero de mil ochocientos ochenta y tres, y oídos el señor Procurador y defensor del reo, la Corte tuvo á bien dictar, con fecha veintiséis de Junio del mismo año, un auto, ordenando la ratificación de los testigos del sumario, y, al efecto, se libró despacho al Juez del Circuíto de Buga con fecha nueve de Agosto siguiente, del cual no se ha recibido contestación.

Repartido nuevamente el expediente el treinta de Octubre último, y sustanciado conforme á la ley, se pasa á resolver la consulta sin aguardar la ratificación que seguramente no podrá ya obtenerse después de tan largo tiempo.

Sea lo primero examinar si la Corte es competente para sentenciar esta causa.

El delito que se dice cometido por el Subteniente González, tuvo su principio fuera del cuartel y se concluyó dentro de él, por lo cual, si esta última circunstancia pudiera darle en ciertos casos, el carácter de delito militar, no se la dá, por cuanto el hecho de heridas y maltratamientos inferidos á un particular ó empleado por un individuo de la fuerza pública, no está definido y castigado por las leyes militares, y entonces es un delito común, del cual deben conocer los Juzgados y Tribunales civiles, conforme á la legislación común, máxime cuando ni el agresor ni el cuerpo á que pertenecía estaban en campaña.

Si esto es así, este juicio es de la competencia de los Jueces y Tribunales del Estado, hoy Departamento del Cauca, y allí debe decidirse y terminar conforme á sus leyes. La Corte no tiene por qué ocuparse de él, pues no tiene atribución por la ley para conocer, ni en apelación ni, en consulta, de las causas que por delitos comunes se sigan ante los Jueces de los Estados.

Esta doctrina se contiene en los artículos 1,365, 1,366, 1,553 á 1,555 del Código Militar, y 23 y 24 del Código Penal de la Nación; y conforme á ella, se han decidido por la Corte, en más de una ocasión, cuestiones semejantes á la presente.

En consecuencia, la Corte se abstiene de resolver la consulta elevada por el Juez del Circuíto de Buga, y dispone que el expediente sea devuelto, para que se le dé el curso legal.

Notifíquese y puplíquese en el *Diario Oficial*.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Manuel A. Sanclemente—Benjamín Noguera—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y seis de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, cuatro de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—Para mejor proveer practíquense las diligencias siguientes:

1.ª Ratifíquense ante el Jefe de Estado Mayor general; el General Juan C. Arjona, Comandante general y Jefe de Estado Mayor de la 2.ª División del Ejército del Atlántico, en su certificación de doce de Marzo de mil ochocientos ochenta y seis; el Comandante Víctor M. G. Herreros, segundo Jefe del Batallón 12 de la Calera en la de diez de Marzo del mismo año (fojas 3); y al verificar su ratificación bajo de juramento, expondrán, dando razón de sus dichos, si el soldado José Santana del mencionado batallón murió en acción de guerra, ó por consecuencia de heridas recibidas en combate, ó si falleció por enfermedad natural;

2.ª Igualmente se ratificarán los testigos Rafael Tarquino, y Eleuterio Farieta en sus declaraciones dadas ante el Juez del Distrito de Engativá.

A efecto de que se dé cumplimiento á este auto, remítase original el expediente formado ante el Jefe de Estado Mayor general, el cual queda autorizado para dirigir los exhortos necesarios, á las autoridades civiles respectivas, de los lugares en que residan los individuos que deben declarar, si no fueren hallados en esta capital. En caso de falta de alguno de los declarantes, se ocurrirá al testimonio de otro testigo ú otra prueba supletoria sobre las circunstancias de la muerte de Santana.

Fíjase el doble término de la distancia y diez días más, en caso de hallarse fuera los declarantes para el cumplimiento de esta providencia.

Notifíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En nueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general el auto anterior.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

El nueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué el auto anterior á Isidora Santos. Por Isidora Santos, Mateo Vega.

Guerra A., Secretario.

IMPRENTA DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPÚBLICA DE COLOMBIA. Número 11

GACETA JUDICIAL

(Órgano oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 13 de Abril de 1887.

CONTENIDO.

PÁG.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

En la causa contra el Teniente Manuel S. Viola por sedición..... 81
Contra el Teniente Guillermo Herrera, por la fuga de un preso..... 82

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

ASUNTOS CIVILES.

En las diligencias practicadas á solicitud del señor Indalecio Liévano por daños en una casa de su propiedad..... 83
En la ejecución contra Pedro A. de Avila..... 85

NEGOCIOS CRIMINALES.

En el sumario contra Gabriel de Villar y otros por delitos políticos. 85
En el id. contra Luis A. Robles por violación de correspondencia.... „
En la causa contra Ezequiel Hurtado por rebelión..... 86
En el sumario contra el Secretario de Gobierno de Panamá por demora..... 87
En el sumario contra Manuel Antonio Delgado por sustracción de una encomienda..... „
En el id. contra M. Olivier O'Pike, por ruptura de un sello..... „
En el id. contra varios, por delito de rebelión..... 88
En el id. contra dos Jefes militares, por denuncia de Simón Araújo. „
Anuncios..... „

GACETA JUDICIAL.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, diez y nueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis.

El Auditor de guerra de la fuerza pública nacional que existía en Cartagena en Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco, dirigió una nota oficial al señor Comandante general de la misma fuerza, participándole que asumía el carácter de funcionorio de instrucción, para averiguar la parte que tuviera el Teniente Mannel S. Viola en el acto de rebelión ejecutado el cuatro de dicho mes por el Batallón 4.° de infantería, por haberle denunciado Pablo Cuesta que ocho días antes del acontecimiento, le manifestó dicho Teniente que el Coronel Caicedo no sería reconocido, y que antes de verificarse esto tendría lugar un escándalo. El señor Comandante general autorizó al Auditor de guerra para practicar las diligencias sumarias que el hecho requería, teniendo seguramente en cuenta para ello lo dispuesto en el artículo 1,420 del Código Militar, que tal cosa permite, y en consecuencia, procedió el Auditor á recibir declaración indagatoria al sindicado, á evacuar las citas hechas por éste, á agregar al sumario un extracto de las declaraciones que obraban en el proceso por el delito de rebelión mencionado, que se instruía contra los individuos de tropa del Batallón 4.° de infantería, en los cuales se complicaba á Viola, y á decretar el arresto de éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1,444 del Código citado; y juzgando terminadas las diligencias, las remitió al señor Comandante general de la Columna, quien mandó cumplir la orden de arresto, y que las diligencias volvieran al Auditor de guerra para que abriera concepto. Emitido éste, expidió el Comandante general de la Columna un decreto elevando á plenario el sumario instruído contra el Teniente Viola, por el delito definido en los artículos 1,639 y 1,641 del Código Militar, nombrando funcionario sustanciador de la causa, fiscal, acusador y presidente y vocales del Consejo de Guerra, sin expresar de qué clase debiera ser éste, y designando el día y lugar en que el Consejo debiera reunirse; decreto que no fué notificado al acusador ni al acusado ni á los defensores. El funcionario sustanciador, que lo fué el Capitán José María Acosta, aceptó y juró el cargo, nombró Secretario y llamó al Fiscal nombrado á ejercer sus funciones; pero como este se excusase por ser pariente del sindicado, dió aviso al Comandante general de la Columna para que procediera á nuevo nombramiento, y dispuso luégo que volviera el sumario al estudio del Auditor de guerra por el órgano correspondiente, por cuanto no creía arreglada la tramitación á las disposiciones legales. Oído el Auditor, fué de concepto que lo actuado por el sustanciador era nulo por no haber cumplido con lo dispuesto en los artículos 1,469 y 1,471 del Código Militar, y el Comandante general así lo declaró, señaló nuevo día para la reunión del Consejo y nombró Fiscal-acusador, en reemplazo del que se había excusado. En virtud de tal resolución, el funcionario sustanciador pidió y obtuvo permiso para principiar el plenario y convocar el Consejo, y dictó auto de enjuiciamiento contra el Teniente Viola, por considerarlo cómplice y auxiliador de la rebelión que tuvo lugar el cuatro de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco, y comprendido en las disposiciones de los artículos 1,644 y 1,645 del Código Militar y 80 y 81 del Código Penal de la Unión, y por el delito de deserción definido en la última parte del inciso 5.° del artículo 571 del Código primeramente citado, y en el artículo 1,605 del mismo. Ese auto se notificó al Teniente Viola, quien nombró de defensor al doctor Simón J. Vélez, pero la notificación no la firmó el Secretario, ni el juramento del defensor aparece recibido y firmado por el funcionario sustanciador. El auto, por otra parte, no le fué notificado al defensor.

Adelantado el juicio, se llamó al Teniente Viola á rendir confesión y se denegó á darla, y en ese acto nombró de segundo defensor, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1,413 del Código Militar, al Capitán Celso Molina, quien manifestó que no podía aceptar; y sin que aparezca que se admitiera la excusa ni que el procesado hiciera otro nombramiento, se encuentra en la foja 34 una notificación hecha al Capitán Miguel E. Uribe, en que se le da como defensor nombrado por el Teniente Viola y se hace constar que aceptó y juró el cargo que posteriormente desempeñó.

Por último, resulta que reunido el Consejo de guerra el día señalado, el Presidente le propuso las cuestiones que debiera resolver, conforme á los artículos 1,498 y 1,502 del Código Militar, y á la primera, que fué ésta: "¿Se ha cometido el delito de rebelión definido en los artículos 1,639 del Código Militar por el cual se ha procedido en esta causa?" Contestó el Consejo: "no se ha cometido el delito á que se refiere esta cuestión."

Innecesario era, según esto, entrar en el examen de las demás cuestiones, y sin embargo, después de la segunda, concebida en estos términos: "¿Es responsable Manuel S. Viola como cómplice y auxiliador?" Se encuentran estas palabras: no hay circunstancia agravante, suscritas, como la primera respuesta por el Presidente y vocales del Consejo.

Las otras dos cuestiones no se consideraron, y el Consejo de Guerra dictó sentencia absolviendo al Teniente Manuel S. Viola de todo cargo.

Concluída así la causa, le fué pasada al señor Comandante general de la Columna residente en Cartagena, para los efectos legales, y el Secretario de éste la ha remitido á la Corte Suprema en consulta, sin que tal cosa se dispusiera por dicho Comandante.

La relación precedente sugiere las siguientes consideraciones:

1.ª Correspondiendo al Consejo de guerra de Oficiales generales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1,384 del Código Militar, el conocimieuto de las causas por delitos ó culpas militares que cometan los oficiales superiores *é inferiores* del Ejército, y disponiendo el artículo 1,392 del mismo Código que el Consejo de Guerra de Oficiales generales se componga de cinco Generales ó Jefes superiores, y que lo presida el General ó Comandante en Jefe de las tropas, es claro que el Teniente Viola no ha podido ser sometido á un Consejo de Guerra ordinario, compuesto de un Jefe y cuatro Oficiales inferiores, porque, según el artículo 1,538 del Código Militar, los Consejos de Guerra ordinarios conocen de las causas militares que se sigan contra los *individuos de tropa*, por delitos ó culpas que no sean de la jurisdicción de los Sargentos Mayores ó encargados del detall.

2.ª Así lo comprendió el Auditor de Guerra en el hecho de pasarle el sumario al señor General en Jefe de la Columna á que el Oficial sindicado pertenecía, y no al Comandante del Cuerpo, á quien en el Consejo de Guerra ordinario corresponde declarar con lugar á formación de causa y convocar el Consejo, previo permiso del General respectivo;

3.ª Siendo esto así, hay en esta causa nulidad por incompetencia de jurisdicción, por haberse violado las reglas de competencia establecidas en los artículos 1,361, 1,362 y 1,535 del Código Militar;

4.ª La hay, además, conforme al inciso 20 del artículo 1,536 del mismo Código, por no haberse notificado á las partes el Decreto ó auto en que el Comandante general nombró los vocales del Consejo y señaló día para la decisión de la causa, y también por haberse dictado auto de enjuiciamiento por el Capitán á quien se nombró funcionario sustanciador en el plenario, y no haberse notificado ese auto al defensor, ni firmádose por el Secretario la notificación que se hizo al reo;

5.ª Llamado á juicio el Teniente Viola como cómplice y auxiliador del delito de rebelión, y además por el de deserción, y no habiendo recaído sentencia sino por el primer cargo, se ha omitido fallar sobre el segundo, lo cual sería bastante para disponer que el negocio se reconsiderara.

A las consideraciones precedentes debe agregarse la de que, conforme al artículo 1,420 del Código Judicial de la Nación, por un sólo delito ó culpa debe seguirse un sólo proceso, aun que sean varios los responsables; y supuesto que de autos consta (fojas 9 y 10), que por el delito de rebelión perpetrado el cuatro de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco, en cuyo día el Teniente Viola ejercía las funciones de Oficial de la guardia de prevención, hay pendiente otra causa contra varios individuos del Batallón 4.º de infantería, dicho Teniente no puede ser juzgado separadamente, yá por ser esto ilegal, ya porque sería muy irregular que se siguiera una causa contra los autores principales y otra distinta contra el cómplice y auxiliador, prescindiendo de la íntima conexión de los cargos.

Por lo tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara nula esta causa, por incompetencia de jurisdicción é informalidades sustanciales que la vician, y reponiéndola al estado de sumario, dispone que sea devuelta al señor Comandante general de la Columna de guarnición en Cartagena, para que ordene su acumulación al proceso que se sigue contra los responsables del delito de rebelión, cometido por individuos del Batallón 4.º de infantería, el cuatro de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco, á fin de que se forme un sólo proceso por quien corresponda, y se dicte una sóla sentencia que corresponda á todos los que deban ser juzgados.

Notifíquese, déjese copia y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera-Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del diez y nueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, se publicó la sentencia que precede.

Ramón Guerra A., Secretario.

En veintidós de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis. notifiqué al señor Procurador general la sentencia precedente,

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinte de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Con motivo de una nota que el señor Director del Panóptico dirigió al Juez 1.º del extinguido Distrito Federal, en diez de Agosto del presente año, dándole cuenta de la fuga del detenido Pirro Cortés, pedido por el mismo Juzgado para la práctica de una diligencia; nota que el referido Juez trascribió al siguiente día al Secretario de Gobierno del expresado Distrito Federal y que éste, á su vez, comunicó el día trece á Su Señoría el Comandante general del Ejército del Atlántico, según así aparece de foja 1.ª; se inició la presente actuación, á efecto de averiguar la responsabilidad que por aquella fuga pudiera haber afectado al Teniente Guillermo Herrera, de la 2.ª Compañía del Batallón 1.º de Bogotá, por cuanto en la misma nota del Director del Panóptico se asevera que el soldado Víctor Rojas, de la 3.ª Compañía del Batallón mencionado, le informó que el oficial de que se trata, hallándose de guardia en San-Francisco, concedió permiso al prófugo para salir á la calle, á comer, asociado del informante, y que la fuga tuvo lugar de una de las tiendas en donde habían entrado.

Pasada que fué dicha nota al ciudadano General Comandante general de la 2.ª División, éste dispuso por decreto de catorce del citado mes, sacar copia de lo conducente para averiguar, por separado, la participación del soldado Víctor Rojas en el hecho de que se trata; nombrar para funcionario de instrucción al primer Ayudante general del Estado Mayor, General Francisco de P. Santander, quien aceptó y prestó la correspondiente promesa, y nombrar igualmente de Fiscal al Sargento Mayor Arturo Sánchez.

Constituído, pues, el funcionario de instrucción, conforme á las prevenciones del Código Militar, previo el nombramiento de Secretario hecho en el Capitán Carlos T. Rincón, debidamente juramentado, ordenóse agregara al expediente, como se agregó en efecto (foja 7.ª), la certificación de que trata el artículo 1,431 del Código citado; que se tomase declaración al soldado Víctor Rojas y al Sargento que se encontraba de guardia en San-Francisco el día del acontecimiento, y por último, que se recibiese al sindicado su declaración de inquirir.

Practicado todo lo anteriormente expuesto, evacuadas que fueron oportunamente las citas que en su declaración hizo el sindicado, del Coronel Roberto Urdaneta y del Sargento David Delgado, y dado traslado al Fiscal, quien lo despachó pidiendo el sobreseimiento, se creyó con esto perfeccionado el sumario, que fué sometido á conocimiento del mismo Jefe que mandó iniciarlo, el cual, una vez nombrado y juramentado su Secretario, que lo fué el Capitán Horacio Torres, y oído el razonado concepto del Auditor de guerra, quien propuso acusación contra el sindicado como responsable del quebrantamiento del artículo 1,621 del Código Militar, referente al 243 del Penal de la República, se dictó el auto de proceder de diez de Septiembre último, deduciendo al acusado los mismos cargos en la acusación propuestos.

Recibida su confesión al acusado, se siguió desde entonces en el plenario de la causa la tramitación determinada en el Código de la materia, hasta la reunión del Consejo de guerra de Oficiales Generales, que tuvo lugar el veintinueve de Septiembre último, celebrándose tanto la audiencia pública, como la secreta, con todas las formalidades para estos casos prescritas, y pronunciándose en seguida la sentencia, por la cual se condenó al acusado á sufrir la pena de cuatro meses de arresto en uno de los cuarteles destinados á los cuerpos que hacen la guarnición de esta ciudad, y suspensión de empleo, con derecho á la tercera parte del sueldo, como lo dispone el artículo 1,218 del decreto número 660 de 1881, orgánico de la prestación de varios servicios militares.

El defensor del acusado interpuso al acto de la notificación de la sentencia, el recurso de apelación, de que desistió en

memorial del día treinta; y habiéndose pasado el proceso al ciudadano General en Jefe para que resolviera lo conveniente sobre dicho desistimiento, este Jefe dió curso al negocio prescindiendo de toda resolución, como si se tratara solamente de la consulta prevenida por el artículo 1,385 y última parte del 1,508 del Código Militar. Así lo ha considerado la Corte, y sustanciada la consulta en los términos dispuestos por la ley, y estando yá el negocio en estado de dictar el correspondiente fallo, se tiene para ello en consideración:

1.° Que examinado atentamente el expediente, no aparece que se haya incurrido en ninguna de las nulidades de que tratan los artículos 1,534 y 1,536 del Código, pues aunque el defensor del acusado tacha de irregular en esta segunda instancia la formación del Consejo de guerra, por cuanto entraron en él como vocales cuatro Sargentos Mayores, los cuales, conforme al artículo 38 del Código, no están clasificados entre los Oficiales Generales, debe tenerse en consideración que el artículo 1,392, que es el que especialmente y con toda claridad establece ó determina la composición de los Consejos de Oficiales Generales, dice terminantemente que estos se compondrán de cinco Generales ó Jefes superiores; y como los Sargentos Mayores tienen el carácter de *Jefes* y también el de *Oficiales Superiores*, al tenor de lo establecido en los incisos 1.° y 3.° del artículo 38 citado, la objeción carece absolutamente de fundamento. El Consejo que ha fallado en primera instancia, no puede ser un Consejo ordinario, como lo afirma también el señor defensor, porque el artículo 1,390 dice, que estos se compondrán *de un Jefe y cuatro oficiales inferiores*;

2.° Que el hecho claro, preciso, perfectamente determinado que ha motivado el juzgamiento del acusado, consiste en que éste, sin facultad alguna para ello, dió permiso á dos de los presos que estaban bajo su custodia en el edificio de San-Francisco para que salieran á comer á una de las tiendas del puente, bajo la vigilancia de un soldado, lo cual ocasionó la fuga del detenido Pirro Cortés "hombre de funestos precedentes, malhechor consuetudinario y responsable de gravísimos asesinatos," como lo dice el Director del Panóptico en la nota al principio citada; y como la concesión del indebido permiso y la fuga á que dió origen constan por las declaraciones del sumario, por la de inquirir del procesado y aun por su propia confesión, existe indudablemente, en autos, la prueba plena que la ley requiere para dictar sin vacilación un fallo condenatorio.

3.° Que las declaraciones del plenario y demás que se han recibido en favor del procesado, no infirman el mérito de las del sumario, porque la buena conducta anterior de aquél, la exactitud y regularidad con que hubiera dado cumplimiento á sus deberes y desempeñado las comisiones á su cargo, la orden dada al soldado para que no permitiera que el prófugo pasara más allá de la tienda en donde debía comer, la recomendación para que ejerciera sobre él la más activa vigilancia etc., etc.; probarán otra cosa, pero nó, que no se dió el imprudente permiso que motivó la fuga de Cortés, ó que se dió legalmente, ó que se concedió á impulso de circunstancias graves y extraordinarias ó de una fuerza mayor etc., únicas circunstancias que podrían demostrar la inculpabilidad del acusado; de manera que, no alterando esas pruebas la naturaleza del hecho que constituye el cargo, éste ha quedado necesariamente en todo su vigor.

4.° Que es verdaderamente sensible que un oficial valeroso, acostumbrado á subordinar sus procedimientos á las prescripciones del honor y del deber, se haya separado en esta vez de tal línea de conducta, aunque no por ningún motivo vergonzoso ó indigno, como es justo reconocerlo; pero sobre lo cual no puede haber lenidad alguna, porque, aparte de que, ante toda consideración debe estar la conservación de la moral pública, que jamás se obtiene por el camino de la impunidad, han llamado mucho la atención de la Corte las siguientes palabras con que termina la nota en que el Secretario de Gobierno transcribió al ciudadano General Comandante general del Ejército del Atlántico el parte del Director del Panóptico, relativo á la fuga de Cortés, á saber: "Lo que trascribo á Su Señoría para suplicarle se digne dictar las providencias que estime convenientes, para que los individuos de la fuerza pública se abstengan de cometer abusos como el de que se trata, *porque no es la primera vez que se verifica este hecho*,"

5.° Que aunque en la sentencia que se examina se ha condenado también al procesado á sufrir la pena de suspensión del empleo de Teniente, con derecho á gozar de la tercera parte del sueldo correspondiente á tal empleo, semejante condenación ha sido en el particular arbitraria, porque el delito materia del procedimiento no tiene señalada pena de suspensión, sino la de arresto; y no tratándose, como no se trata, de la primera, que se á la que se refiere el artículo 1,218 del decreto número 660 de 1881 ya citado, ni el Consejo ha tenido ni la Corte tiene para qué entrar á considerar si el acusado conserva ó nó derecho á su sueldo ó á parte alguna de él, siendo al Poder Ejecutivo á quien corresponde, si nó hubiera disposición legal expresa, determinar en el caso lo que se considere justo; y

6.° Que efectivamente existen á favor del procesado todas las circunstancias atenuantes que menciona la sentencia de primera instancia.

Con tales fundamentos, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, previa calificación del delito en tercer grado, condena al Teniente Guillermo Herrera, perteneciente á la 2.ª Compañía del Batallón 1.° de Artillería en la 2.ª División del Ejército del Atlántico, á sufrir la pena de cuatro meses de arresto, en el cuartel del Cuerpo que designe el ciudadano General en Jefe, quien cuidará de que la pena se sufra real y positivamente para que produzca sus efectos; siendo también de cargo del acusado las costas é indemnización de los daños y perjuicios á que haya dado lugar el delito; en cuyos términos, que están de acuerdo con las disposiciones de los artículos 243, 62 y 64 del Código Penal de la República, y á los cuales se refieren respectivamente los artículos 1,621, 1,556 y 1,557 del Código Militar, se reforma la sentencia consultada; siendo entendido que de los cuatro meses de arresto se deducirá el tiempo que duró la detención del reo.

El ciudadano General en Jefe llamará la atención del Jefe sustanciador, del Auditor de guerra y demás á quienes corresponda, á lo que terminantemente dispone la reforma 12.ª de la ley 53 de 1882, de cuyo cumplimiento se ha prescindido en el examen de los testigos que figuran en la presente causa.

Se tendrán también presentes para lo sucesivo, las disposiciones de los artículos 1,410, 1,445, 1,473 y 1,588 del Código Militar, pues ni el Fiscal en esta causa prestó la correspondiente promesa, ni el acusado quedó desde un principio en libertad, como debió estarlo, ni el examen de los testigos por parte del defensor se solicitó sino el veintiocho de Septiembre, cuando el Consejo de guerra había sido convocado para el veintinueve del mismo mes, ni por último se resolvió el desistimiento de la apelación, por creerse, como lo expresó el Presidente del Consejo en su auto de treinta del citado mes, que no había en el mencionado Código disposición alguna referente al desistimiento.

Notifíquese en la forma legal, déjese copia, publíquese en el *Diario Oficial* de la Nación y devuélvase para su cumplimiento.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del día de hoy se publicó la anterior sentencia.

Bogotá, veinte de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Ramón Guerra A., Secretario.

En veintidós de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la sentencia que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, nueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—Ante uno de los Jueces del Circuito de Bogotá, en asuntos nacionales, presentó el señor Indalecio Liévano un me-

morial en el cual manifiesta que, con motivo de la última guerra civil, fué ocupada por fuerzas del Gobierno una casa de su propiedad situada en la Plaza de Bolívar de esta ciudad; y pide que se haga un avalúo pericial, tanto del valor de los arrendamientos de la finca, durante el tiempo de la ocupación, como del de los daños que en ella fueron causados. A su solicitud acompañó algunos certificados, de empleados militares, referentes á los hechos relacionados.

El Juez, por resolución de veintinueve de Marzo del presente año, ordenó la práctica de la diligencia solicitada, y después de nombrados y posesionados los peritos, señores Ramón Olivos y Senén González, éstos de común acuerdo, apreciaron el valor de los daños y perjuicios ocasionados en la finca del peticionario, en la suma de seis mil ochocientos cincuenta pesos, inclusive el lucro cesante.

Puesto en conocimiento de las partes el concepto pericial, el señor Agente Fiscal del Circuíto lo objetó de desacertado, por falta de conocimiento en los peritos, y solicitó se practicaran algunas pruebas, entre otras, una inspección ocular para demostrar su concepto.

El Juez ordenó la práctica de dicha inspección, por medio de nuevos peritos que debían asociarse al personal del Juzgado; y al efecto, la diligencia se verificó por los señores Gabriel Garzón, Pedro Ignacio Cadena y Benjamín Osorio, habiendo avaluado los dos primeros en la suma de tres mil pesos las reparaciones hechas en la finca indicada, con motivo de los daños ocasionados por las fuerzas del Gobierno.

Puesto en noticia de las partes este nuevo dictamen pericial, el señor Agente Fiscal reprodujo las objeciones que había hecho al primero, y advirtió que no se habían practicado todas las pruebas solicitadas por dicho funcionario. El Juzgado, por auto de cinco de Mayo del presente año, improbó la exposición rendida últimamente por los peritos, fundándose en que no le eran conocidas al Juzgado las habilidades que en la ciencia de la Arquitectura y en el arte de la albañilería, tuvieran los señores Benjamín Osorio, Gabriel Garzón y Pedro Ignacio Cadena. De este auto pidió revocatoria el apoderado del peticionario, y en subsidio interpuso el recurso de apelación; y como el Juzgado no tuvo á bien acceder á la revocatoria, le fué concedido el recurso de apelación; y con tal motivo han venido estas diligencias al despacho de la Corte.

Esta Corporación conceptúa con el señor Procurador de la Nación, que ella es competente para decidir el recurso interpuesto; pues aun cuando se trata de diligencias practicadas fuera de juicio, la competencia de la Corte es indudable, si se atiende á que la prueba que se ha tratado de producir debe hacerse valer contra el Gobierno de la Nación en juicio posterior, según así lo afirma el interesado en el memorial que presentó primitivamente al Juzgado.

Respecto de la legalidad del auto apelado, la Corte observa lo siguiente:

El Juez que practicó la diligencia, obró en un asunto de jurisdicción voluntaria, en el que no hay contradicción de parte. No ha podido entrar en la apreciación de la claridad ú obscuridad del dictamen de los peritos para reputarlo desacertado, como resultado de un error esencial, dolo ó ignorancia, y disponer, de acuerdo con el artículo 592 del Código Judicial, que se practicara una nueva diligencia pericial; porque desde el momento que este juicio se emite por el Juez, entra á estimar la prueba como en juicio contradictorio, lo que es ajeno de sus funciones cuando ejerce la jurisdicción voluntaria. Las prevenciones del artículo citado son para los juicios contradictorios.

En consecuencia, el Juez 4.° del Circuíto no ha tenido facultad para aprobar ni improbar el dictamen de los peritos que examinó, y todo lo que en las diligencias de primera instancia tiende á fijar el valor de la prueba que prepara Liévano es de ningún valor ni efecto.

Esta prueba pericial, practicada fuera de juicio y con carácter de sumaria, no puede ser sujetada á las prevenciones y requisitos á que lo está, cuando se pide en la controversia para que ella ha de servir, como también es natural que esa prueba no tenga valor jurídico en la controversia, por cuanto ella no ha sido solicitada y practicada ante el Juez de ella, como por regla general lo dispone el artículo 478 del Código citado.

Por lo tanto, se revoca el auto apelado y se dispone que en el estado que tiene el expediente sea devuelto al peticionario.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Benjamín Noguera—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En el auto anterior el señor Magistrado doctor Samper salvó su voto en los siguientes términos:

"El Magistrado que suscribe tiene la pena de disentir del precedente auto acordado por la mayoría de la Corte, y salva su voto, en consecuencia, por considerar que no es competente la Corte Suprema para conocer de esta apelación. Para ello aduce el infrascrito las siguientes razones:

"El doctor Indalecio Liévano, diciendo en un memorial que necesitaba obtener una prueba pericial para entablar una reclamación contra el Gobierno Nacional, pidió ante el Juez 4.° del Circuíto de Bogotá que, con el carácter de Juez nacional, interviniese para levantar una información sobre el estado de una casa y sobre los daños que en ella se le habían causado por un batallón acuartelado en ella; de suerte que nada promovió directamente en juicio contra el Gobierno, sino que solamente se propuso levantar una información pericial de nudo hecho, que bien podría no tener consecuencia alguna, ó podía servir para poner demanda contra la Nación ó contra el General Rafael Reyes, ó podía ser nula y de ningún efecto. Sobre tal información pericial versó el auto del Juez, de que se ha apelado para ante esta Superioridad.

"Es cierto que el artículo 62 del Código Judicial de la Nación señala, inciso 15, entre las atribuciones de los Jueces nacionales de primera instancia, la de 'practicar toda diligencia también judicial en que no haya oposición de parte en asuntos que sean de la competencia del Gobierno general.'

"Es cierto que, conforme á la atribución 5.ª del artículo 18 del mismo Código (sección segunda), la Corte conoce en última instancia de los autos interlocutorios en asuntos civiles ó criminales, que en primera instancia sean de competencia de los Jueces nacionales, por apelación ó consulta conforme á este Código; etc.

"Y aun cuando sea muy dudoso que el auto en cuestión sea de aquellos interlocutorios á que se refiere la apelación, hay que considerar las disposiciones especiales que puedan explicar las generales citadas, ó limitarlas en su aplicación. Y estas disposiciones especiales son:

"El artículo 85 que dice: 'La competencia de un Juez para conocer de una causa, depende de la naturaleza de la causa y del lugar en que se ha de ventilar;' y

"El artículo 86 añade: 'La naturaleza de la causa *para efecto de fijar la competencia* de los Jueces y Tribunales nacionales, la determina el interés de la Nación en la *controversia*. Si ese interés no existe, la causa no es *de la competencia* del Poder Judicial Federal.'

"Ahora bien: la simple información pericial de nudo hecho, levantada por el doctor Liévano no constituye controversia, porque allí no hay oposición de parte, ni establece el *interés de la Nación* en el asunto, dado que no hay demanda, sino una diligencia extrajudicial de avalúo, de la cual el interesado podía no hacer uso, ó podía hacerlo contra la Nación, ó contra el General Reyes, ó contra cualquiera otra persona; con la circunstancia de que una diligencia pericial levantada de nudo hecho, no tiene por sí sola ningún valor legal en juicio. Mientras no haya acción entablada por la Nación ó contra la Nación, el interés de ésta no existe en ninguna diligencia judicial, puesto que ningún perjuicio sufre ella con actos extrajudiciales que pueden ser anulados, desvirtuados ó refutados en juicio, por mucho que los promotores de tales actos ó diligencias digan que se proponen crear documentos para demandar á la Nación.

"Y no se alegue que el Agente Fiscal fué llamado á intervenir en la diligencia pericial, á pedimento del doctor Liévano; pues aun cuando esto creara *controversia*, que no ha existido, no por eso sería patente el interés de la Nación, ni dejaría de ser aplicable el artículo 87 del Código Judicial, que dice:

'La intervención de algún representante de la Nación en la controversia, no basta para establecer la competencia de los Jueces y Tribunales de la Unión, si por otra parte no aparece el interés de la Nación.'

"Tampoco puede alegarse que el asunto es nacional, por

cuanto el interesado, al pedir su información pericial de nudo hecho, se dirigió al Juez del Circuíto, llamándole Juez nacional. No *han* existido *Jueces nacionales*, por ministerio propio, sino Jueces de Circuíto de los Estados, á quienes el Código Judicial de la Nación dió atribuciones en lo *nacional*. Por lo tanto, no basta que un Juez de Circuíto quiera funcionar en un asunto con el carácter de nacional, para que el asunto sea de esta clase, sino que es indispensable que medie un *interés nacional* claramente determinado por la ley y por la naturaleza de la controversia. De otra suerte resultaría el absurdo de que la jurisdicción y competencia de la Corte Suprema, fuese caprichosamente determinada por los errores de procedimiento de los Jueces inferiores, y nó por la naturaleza de la causa.

" De todo esto se deduce que, si el Juez se excedió en el asunto de que se trata (lo que no tiene por qué examinar la Corte), su auto es de aquellos que corresponden á la jurisdicción ordinaria de los Estados (ahora Departamentos), y nó á la jurisdicción especial relativa á los asuntos de interés nacional. Por lo mismo, el Juez no debió conceder la apelación para ante la Corte Suprema, sino para ante el Tribunal de Cundinamarca, que es el Superior competente en asunto común. En consecuencia, la Corte debe abstenerse de todo fallo que implique aprobación, reforma ó revocación del auto consultado. "

Bogotá, nueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis.

José M. Samper—Martínez—Cock Bayer—Largacha—Morales—Noguera—Sanclemente.

Ramón Guerra A., Secretario.

En doce de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis notifiqué al señor Procurador general el auto de nueve de los corrientes, lo mismo que el anterior salvamento de voto que á él se refiere.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veinte de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—Siguió el Agente subalterno de Bienes Desamortizados del Circuíto de Cartagena, ejecución contra Pedro A. de Avila, por un principal de ciento sesenta pesos y réditos vencidos que se reconocían en dos solares, sitos en la calle de San-Juan de esa ciudad, llegando hasta el remate de los inmuebles y aprobación de la diligencia, la que se extendió con fecha doce de Febrero de mil ochocientos ochenta y uno.

Acompañando el expediente que contiene el juicio ejecutivo que dice haber recibido del Administrador de Hacienda nacional, se presentó el Fiscal de la Provincia de Cartagena, ante el Juez nacional de primera instancia, por escrito de veinticuatro de Abril del año citado, solicitando la nulidad de ese juicio, por cuanto no se había notificado el mandamiento de pago al ejecutado de Avila.

El Juez rechazó la demanda, en auto de veintiseis del mismo mes, por cuanto no se había dado cumplimiento á uno de los requisitos exigidos por la vigésima primera reforma de la Ley 46 de 1876, que consiste en que los hechos en que se apoya la demanda se pongan especificados y claros, á continuación de los cuatro puntos de que trata la citada reforma.

El Agente del Ministerio público se alzó de ese auto. Concedido el recurso en ambos efectos, aunque sólo debió concederse en el devolutivo, según el artículo 877 del Código Judicial, vino el negocio á la Corte, se repartió el veintitrés de Octubre último, y debidamente sustanciado ha sido puesto al despacho para resolver, el diez y siete de los corrientes.

El libelo presentado por el Fiscal apelante, adolece del sustancial defecto anotado por el Juez *á quo*. Es contrario á la ley el hecho de seguir á continuación del juicio ejecutivo el de nulidad, que debe ser un juicio ordinario. Aquél concluyó y debe estar archivado en la respectiva oficina de Hacienda, y si se quiere aducir como pruebas algunas de las piezas en él contenidas, debe pedirse copia de ellas en la forma legal. Véanse los artículos 716 y 436 del Código mencionado.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con la opinión del señor Procurador de la Nación, confirma el auto apelado.

Notifíquese, déjese copia, publíquese en el *Diario Oficial* de la Nación y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales-Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintidós de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Noviembre trece de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—En la Provincia de Mompox del Departamento de Bolívar, se han iniciado estas diligencias para averiguar la responsabilidad en que pudieran haber incurrido Gabriel del Villar, José de Jesús Baena A. y Eufracio Alvarado A., por haber funcionado como Juez principal de la provincia el primero, como fiscal el segundo, y como suplente del Juez el tercero, durante la última revolución, en servicio de la causa revolucionaria, y habiendo obtenido los nombramientos para los empleos que ejercieron, de las autoridades revolucionarias del extinguido Estado de Bolívar.

Después de varias vacilaciones en cuanto á la competencia, habiéndose acumulado diligencias referentes á diversas personas y funcionarios, y de haber expresado el Ministerio público que el delito era común y de la pertenencia del Jurado; el Tribunal del Departamento de Bolívar, por auto de veintitrés de Agosto del corriente año, se declaró incompetente para conocer del negocio, calificándolo de rebelión y declarando ser, por lo mismo, de la competencia del Juez nacional.

Esto, de acuerdo con el Fiscal de la Provincia de Mompox, dictó auto de cesación del procedimiento, en veintinueve del corriente año, por estar comprendidos los sindicados en la amnistía expedida por Su Excelencia el Presidente de la República; y envió en consulta la indicada providencia.

El señor Procurador general, no obstante de que reconoce que el cargo versa sobre la usurpación de funciones públicas, cree que debe confirmarse el auto consultado por la circunstancia de haberse ejecutado con motivo de la revolución y para los fines de ella.

La Corte encuentra fundado este parecer, porque realmente, en los que por virtud de un movimiento sedicioso figuran como autoridades, esta misma usurpación constituye la complicidad ó participación en el hecho complejo que forma el alzamiento, (inciso 3.° artículo 183 del Código Penal).

Por lo tanto, y siendo un delito de naturaleza política el cargo sobre que versan estas diligencias, y estando él indultado, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto consultado.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el proceso.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y siete de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, trece de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Por cuanto en el *Diario de Cundinamarca* se publicó en veintiséis de Julio de mil ochocientos setenta y nueve, una carta anónima en que se aseguraba que en la Administración nacional de correos de Santa-Marta, se había violado la correspondencia,

el Jefe de esa oficina señor Alejandro P. Echeverría, se dirigió en treinta de Agosto del mismo año al señor Juez del Circuito en su calidad de nacional, pidiendole que investigara el delito denunciado. De acuerdo con el Procurador del Distrito, procedió dicho Juez á la instrucción del sumario, y practicadas todas las diligencias conducentes al esclarecimiento del hecho, las ha remitido á esta Superioridad, á quien corresponde conocer del negocio, en virtud de lo dispuesto en el inciso 3.° del artículo 18 del Código Judicial de la Nación.

De lo actuado resulta:

1.° Que siendo Presidente constitucional del Magdalena el doctor Luis A. Robles, su Secretario general, señor Manuel E. Lanao, dirigió una nota con fecha once de Junio de mil ochocientos setenta y nueve, número 27, al señor Administrador principal de Hacienda nacional, Camilo R. Barreneche, haciéndole saber que en su despacho se instruía un sumario con el fin de averiguar la complicidad que pudieran tener los señores Luis S. Cotes y Juan M. Dávila en el alzamiento contra el Gobierno constitucional del Estado, y previniéndole por disposición del Presidente, que en caso de que por el correo nacional hubiera llegado correspondencia para dichos señores la retuviera hasta nueva orden.

2.° Que en la misma fecha contestó el Administrador mencionado, que había en su oficina una carta para el señor Cotes, y tres para el señor Dávila, pero que no había encontrado disposición alguna que le permitiera retener la correspondencia que gira por los correos nacionales, en el caso de que fuera exigida por los interesados;

3.° Que el Secretario general, en nota de doce de Junio, insistió, de orden del Gobierno del Estado, en que se cumpliera lo mandado el día anterior, y el trece del mismo mes pasó el Presidente señor Robles, asociado de su Secretario general, y del Procurador del Estado, á la oficina de correos, y abrió y leyó las cuatro cartas de que se ha hecho mérito, manifestando previamente que la Constitución nacional y la del Estado, habían previsto el caso en que la correspondencia y los escritos privados pudieran ser interceptados y registrados con las formalidades legales por la autoridad competente, y con el fin de averiguar la comisión de algún delito; y que tratándose de investigar los de rebelión é invasión al Estado soberano del Magdalena, de que aparecían responsables entre otros los señores Dávila y Cotes, él, asumiendo la responsabilidad, procedía al acto.

4.° Que aunque de áste se mandó extender por duplicado una diligencia, parece que no se escribió, porque pedida para agregarla al sumario no fué encontrada.

5.° Que llamado el ex-Presidente señor Robles á rendir declaración indagatoria, dió como ciertos los hechos apuntados, y dijo que los había ejecutado en cumplimiento de un deber, como funcionario de instrucción en el Estado, y en ejercicio de un derecho como beligerante, pues á los señores Luis S. Cotes y Juan M. Dávila se les seguía juicio por el delito de rebelión, por estar funcionando el primero como Secretario de Gobierno provisorio, y el segundo, como Jefe de una de las partidas armadas que invadieron el Estado; y que no consideró como embargo el que la correspondencia de que se trata hubiera sido dirigida por el correo nacional, porque las leyes no hacen excepción sobre esto, y porque hasta cierto punto el mismo Gobierno nacional tenía carácter de beligerante, de lo cual pudo persuadirse, entre otras razones, por la lectura de una de las mismas cartas abiertas.

Como se ve, es indudable que el ex-Presidente señor Robles abrió las cuatro cartas aludidas. ¿Pudo hacerlo? Este es el punto que debe examinarse.

Consta de documentos oficiales, y es un hecho de pública notoriedad, que en el año de mil ochocientos setenta y nueve el Estado del Magdalena sí fué invadido por fuerzas revolucionarias que partieron de Barranquilla, y que, unidas á otras que estaban en la Ciénaga, le hicieron la guerra al Gobierno constitucional del Estado, presidido por el señor Robles, y lo derrocaron.

Consta igualmente de un documento público fehaciente, firmado por el Secretario general del Estado, que una vez verificada la invasión, se procedió á instruír por el señor Presidente, un sumario para probar la complicidad de los señores Cotes y Dávila en el delito de rebelión.

Y consta igualmente que esto motivó la retención y apertura de las cartes dirigidas por el correo nacional á dichos señores.

Turbado el orden público, al Presidente del Estado le tocaba hacer cuanto le fuera posible para restablecerlo, y en su calidad de funcionario de instrucción podía averiguar ese delito y reunir las pruebas contra sus perpetradores.

En cuanto á las cartas materia de la investigación, justifica la conducta del Presidente del Magdalena la consideración de que, según la Constitución nacional vigente en aquél tiempo, (artículo 15, inciso 13), los escritos privados podían ser interceptados ó registrados por la autoridad competente, para los efectos y con las formalidades determinadas por la ley, y la de que el artículo 1,441 del Código Judicial reconoce que la correspondencia epistolar puede ser examinada en caso necesario.

El derecho de la guerra autorizaba, por otra parte, al Presidente del Estado, para obrar como obró, y con razón, porque de otra manera los revolucionarios serían de mejor condición que el Gobierno legítimo del Estado, supuesto que ellos obran, en casos análogos, sin sujeción á ninguna regla.

Agrégase á esto, que la manera como el Presidente del Estado procedió, demuestra que él sólo tuvo en mira buscar pruebas judiciales respecto del hecho que se propuso investigar, de lo cual se deduce que estuvo muy lejos de pretender violar la ley y cometer un delito.

No existiendo éste, y no pudiendo, por lo tanto, la Corte llamar á juicio de responsabilidad al ex-Presidente del extinguido Estado del Magdalena, doctor Luis A. Robles, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, sobresee en el procedimiento y dispone que se archive el sumario.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Manuel A. Sanclemente—Benjamín Noguera—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y seis de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Noviembre quince de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—A virtud de orden escrita del General Jefe de Estado Mayor del Ejército del Cauca, de fecha catorce de Enero del presente año, se inició juicio en Consejo de Guerra verbal, en Popayán, contra el ex-General Ezequiel Hurtado, por la participación que hubiese tenido en la rebelión del año anterior. Verificado el juicio, el Consejo de Guerra de Oficiales generales pronunció fallo condenatorio, el diez y nueve de mismo mes, y apelado éste por el acusado ha venido el proceso al conocimiento de esta Superioridad. Repartido el expediente el nueve de Octubre último, el once se mandó poner en noticia de las partes la variación del personal de la Corte, y dar vista al señor Procurador general, quien emitió su concepto el diez y nueve del mismo mes, pidiendo se agregase á los autos el comprobante oficial relativo á la amnistía con que estaban cubiertos los actos que habían sido materia del proceso. Por auto del día veintiuno se resolvió lo conducente, y una vez recibido del Ministerio de Gobierno el respectivo informe, el señor Procurador ha vuelto á emitir dictamen el once de los corrientes, pidiendo que se mande cesar todo procedimiento, por estar comprendido el delito en el decreto número 418 (bis), del 20 de Julio del presente año, sobre amnistía por delitos políticos.

La Corte, para resolver, considera;

Primero, que el citado decreto del Gobierno declaró amnistiados todos los delitos políticos, á cuya clase corresponde evidentemente el que fué materia de esta causa;

Segundo, que consta de autos (foja 11) que por resolución del Gobierno, del veintitrés de Agosto último, se declaró al ex-General Ezequiel Hurtado comprendido en el citado decreto de amnistía.

Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, y conforme á lo dispuesto en la reforma cuadragésima tercera del Código Judicial, contenida en la ley 46 de 1876, administrando justicia en nombre de la

República y por autoridad de la ley, resuelve que cese todo procedimiento en esta causa.

Notifíquese, cópiese, publíquese en el *Diario Oficial* y devuélvase el expediente recibido en apelación.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A. Secretario.

En diez y seis de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, diez y siete de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Estas diligencias se han practicado con el fin de averiguar la demora causada por el Secretario de Gobierno del Estado de Panamá, en el despacho de un informe que se le pidió, según auto dictado por la Corte en doce de Agosto de mil ochocientos ochenta, relativo á la averiguación que se hacía del responsable del delito de remisión de elementos de guerra para los puertos del Pacífico.

Como lo ha observado el señor Procurador general más de una vez, es el Juez nacional de primera instancia del Departamento de Panamá el competente para conocer y decidir de las causas de responsabilidad contra los funcionarios del Estado, con excepción de los Gobernadores, y otros entre los cuales no se enumeran los Secretarios del Despacho del Gobierno de aquellas entidades. Véanse los artículos 62, atribución 25 y 18, atribución 3.ª del Código Judicial de la República.

En consecuencia, se dispone: remítase este expediente al Juez nacional de primera instancia en los negocios criminales, del Circuíto ó Provincia de Panamá, para que continúe en la forma legal esta investigación.

Notifíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y nueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra* A., Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, diez y ocho de Noviembre de mil ochocienos ochenta y seis.

El señor Administrador principal de Hacienda nacional en Tunja dirigió, con fecha veintidós de Noviembre de mil ochocientos setenta y nueve, al Administrador subalterno de Támara, en el antiguo Territorio de Casanare, una encomienda de cuarenta y cinco pesos setenta centavos, para el completo de los sueldos devengados en varios meses de mil ochocientos setenta y ocho por este último empleado. Como la encomienda fué dirigida por conducto del Administrador principal de Hacienda de Nunchía, este empleado retuvo aquella suma, con el fin de pagarse de la cantidad de veinticuatro pesos que se habían dado al Administrador de Támara para gastos de material de su oficina, suma que no fué legalizada por la Secretaría de Guerra y Marina.

Para averiguar los hechos expresados, á solicitud del señor Procurador de la Nación, se instruyeron las presentes diligencias, las cuales llegaron hasta el punto de dictarse por esta Superioridad el auto respectivo, en el cual se llamó á juicio de responsabilidad, por los trámites extraordinarios, á Manuel Antonio Delgado, Administrador principal de Hacienda nacional en Nunchía, como infractor del artículo 345 del Código Penal; pero al darse cumplimiento á dicho auto, se tuvo noticia que el procesado había muerto, hecho que se ha comprobado satisfactoriamente. Al efecto, por orden de la Corte ha venido al proceso una certificación del Notario primero del Circuíto de San-José de Cúcuta, en la cual consta que Manuel Antonio Delgado murió el quince de Octubre de mil ochocientos ochenta y dos.

Así, pues, la Corte Suprema Nacional, de acuerdo con la reforma 43.ª de la ley 46 de 1876, reformatoria del Código Judicial, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, dispone que cese todo procedimiento en la presente causa.

Notifíquese, cópiese y archívese el proceso.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A. Secretario.

En diez y nueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, diez y seis de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis.

En las diligencias iniciadas para averiguar quién fuera el responsable de la ruptura de un sello que el Agente Fiscal nacional había puesto en la puerta de un almacén de M. Olivier O. Pike, ó de los herederos del señor Teodosio Moreno, el señor Juez 2.° del Circuíto de Medellín, en el despacho de lo criminal, dictó con fecha veinticuatro de Octubre de mil ochocientos ochenta y cinco, el auto siguiente:

"Para evitar graves males á la administración de justicia, aunque el Juzgado 2.° cree tener derecho para exigir que el negocio se sujetara á repartimiento, se aprehende el conocimiento de este asunto. Practíquense todas las diligencias precisas para la perfección del sumario. Notifíquese al señor Fiscal."

Interpuesto por este funcionario el recurso de apelación, que se concedió en el efecto devolutivo, contra la providencia preinserta, se remitió á esta Superioridad copia de lo conducente para la determinación del recurso; y habiendo sido sustanciado en esta segunda instancia con arreglo á la ley, se tiene en consideración para decidir:

1.° Que cuando el señor Procurador del Estado remitió al Juez 1.° del expresado Circuíto, no sólo el memorial ó nota en que Olivier O. Pike dió aviso al Prefecto del Departamento del Centro, de que, por haber desaparecido el indicado sello, iba á abrir y á penetrar, como efectivamente penetró en el almacén, sino también la resolución y nota del Agente Fiscal en que denunciaba el abuso cometido por aquel súbdito inglés, el enunciado Juez 1.° extendió la siguiente diligencia autorizada con su firma y la de su Secretario:

"Repartido al señor Juez 2.°;" de manera que quedó perfectamente llenado desde entonces el requisito del repartimiento que se echa como de menos en la providencia apelada;

2.° Que este procedimiento del Juez 1.° está claramente fundado en la terminante disposición de la última parte del artículo 56 del Código Judicial, y debió por lo mismo ser acatado sin vacilación alguna por el Juez 2.°;

3.° Que aunque según parece, este último Juez es de concepto que el repartimiento en asuntos criminales, no puede tener lugar sino después de perfeccionado el sumario, en atención á lo prevenido en el artículo 1,426 del citado Código, semejante inteligencia es enteramente opuesta al objeto del repartimiento mismo, con el cual se ha procurado conseguir la mayor igualdad posible en la división material del trabajo atribuído á funcionarios de idéntica autoridad ó jurisdicción; pues es claro que si el Juez que hace el reparto, por el hecho de tener anticipadamente conocimiento del asunto, debiera practicar el correspondiente sumario, el otro Juez no practicaría ninguno y el principio de la igualdad quedaría completamente destruído;

4.° Que en todo lo demás (siendo de incontrovertible fuerza y exactitud las observaciones del señor Procurador general contenidas en su dictamen de cuatro de Diciembre del año próximo pasado), la Corte Suprema Nacional las reproduce en todas sus partes, y en tal virtud, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, aprueba el auto apelado, en cuanto el Juez 2.° del Circuíto de Medellín resuelve aprehender el conocimiento del asunto de que se trata.

Notifíquese, déjese copia para los efectos legales y devuélvase.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y ocho de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la decisón que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veinte de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—En la noche del veinticinco de Junio de mil ochocientos ochenta y cinco, una partida de revolucionarios que obedecían las órdenes de Daniel de la Pava, asaltó la casa de Pascasio Salazar, ubicada en el sitio de Boquía, jurisdicción del Distrito de Salento, en el Municipio del Quindío, sacó de ella á Salazar y lo condujo preso á la cabecera del Distrito; pocas horas después regresó la misma partida, capitaneada por Juan Antonio Ospina, y tomó de aquella casa tres cargas que contenían siete mil pesos ($ 7,000) en monedas legítimas de níkel; y seis mulas que conducía el arriero Francisco Escobar desde la ciudad de Cali, por encargo de Jaime Otero, á esta capital, á consignación de Francisco Groot. El Juez del Circuíto del Quindío, en el despacho de lo criminal, por auto de veintisiete de Agosto del presente año, declaró que el delito no había sido cometido en cuadrilla de malhechores, como había sido estimado en el sumario, sino como una continuación del delito de rebelión contra el Gobierno nacional; estimó comprendidos á sus autores en el Decreto de amnistía expedido en veinte de Julio del presente año, y sobreseyó en el procedimiento. El Tribunal del Departamento del Norte del Estado del Cauca, al cual fué sometido dicho auto en consulta, lo confirmó en cuanto se había declarado no haberse cometido el delito común yá mencionado; y al volver la actuación al Juez de primera instancia, éste dispuso que el sumario fuera remitido á la Corte Suprema, en consulta del sobreseimiento por el delito de rebelión.

Sustanciado legalmente el expediente en esta segunda instancia, se procede á resolver lo conveniente, y

Considerando: que de las diligencias practicadas aparece plenamente comprobado, que el movimiento encabezado en Salento por Daniel de la Pava tenía por objeto prestar cooperación á las operaciones revolucionarias emprendidas desde el Atlántico hacia el interior de la República por Ricardo Gaitán; que tomadas las seis cajas de moneda de níkel, procedieron los revolucionarios á distribuír raciones á la tropa y aun á regar varias de esas monedas en la plaza pública de Salento, para que las recogieran los vecinos; de modo que el atentado cometido contra la propiedad de Groot, no puede ser considerado como robo en cuadrilla de malhechores, sino como un nuevo esfuerzo de los trastornadores del orden público para hacer la guerra al Gobierno. Siendo, pues, el delito de rebelión de carácter político, sus autores quedaron comprendidos en el decreto general de amnistía, expedido por su Excelencia el Presidente de la República en veinte de Julio último.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto de sobreseimiento consultado, sin perjuicio de la acción civil de los particulares por los perjuicios causados por los revolucionarios de Salento.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase la actuación.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintitrés de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, hice saber el auto anterior al señor Procurador general.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veinticuatro de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Estas diligencias se han practicado en virtud del denuncio que el señor Procurador de la Nación dirigió á la Corte, con fecha cuatro de Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco, refiriéndose á una hoja impresa que le fué enviada por Simón Araújo, en su carácter de Secretario de la Junta preparatoria de la Cámara de Representantes, hoja en que se hizo constar por Carlos Bonis, Fabio Manotas y otros, que por dos Jefes militares se les había impedido la entrada al Capitolio, el primero del citado mes, á donde se dirigían con el objeto de instalar la Junta mencionada.

Como según las declaraciones de algunos de los Representantes concurrentes, el Secretario de Guerra pudo haber dado la orden de prohibir la entrada á los miembros del Congreso al local de las sesiones, probablemente á causa de haberse expedido, como lo expresa el citado documento, el Decreto Ejecutivo de veintisiete de Enero de ese año, por el cual se aplazaba para el primero de Marzo siguiente la reunión del Cuerpo Legislativo de la Nación; y como si esa orden fué efectivamente dada, lo fué en ejercicio de funciones públicas; y si ello pudiera contituír la comisión de un delito, este sería de responsabilidad, del cual debe conocer el Senado de la República, según lo eispuesto en el artículo 2.° del Código Judicial, se dispone de donformidad con el artículo 1,744 del mismo Código: pase este expediente al Honorable Consejo Nacional Legislativo que actualmente asume las facultades del Congreso, para los efectos á que haya lugar, por ser incompetente la Corte para conocer de este asunto.

Notifíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veinticinco de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la precedente resolución.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

ANUNCIOS.

LA GACETA JUDICIAL.—Se publica este periódico ordinariamente una vez por semana (los sábados), y se admiten suscripciones en el Banco Nacional así:

Por un semestre (26 números).....$ 3 00

Por un año (52 id..... 5 00

No se venden números sueltos.

Es de cargo del Ministerio de Gobierno hacer repartir el periódico á los suscriptores en la capital, y en los Departamentos por medio de los correos; sin perjuicio de la distribución á las oficinas públicas que deben recibirlo.

No se admiten anuncios que no sean de carácter oficial, ni inserciones que no sean autorizadas por la Corte Suprema.

CONSTITUCIÓN DE COLOMBIA.

ESTÁ DE VENTA en la Tesorería general, en edición de cuaderno, á 20 centavos el ejemplar.

IMPRENTA DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 12

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 19 de Abril de 1887.

CONTENIDO.

PÁG.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

Acuerdo número 13, sobre resolución de una competencia..... 89
Id. número 15, sobre cesación de competencia en varios asuntos 90

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

Sobre la causa seguida á Cayetano Pernet por heridas..... „
Id. la causa seguida á Rudecindo Téllez, por hurto..... 91
Sobre la causa seguida á Ruperto Delgado, por maltratamiento de obra..... 93

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

ASUNTOS CIVILES.

Auto relativo al juicio sobre pensión promovido por Silvia T. de Rojas..... „
En el id. sobre glosas á cargo del Sr. E. Grau en una solicitud de pensión..... 94

ASUNTOS CRIMINALES.

Auto relativo al sumario seguido contra Marcos Pereira é hijos, por fabricación y circulación de moneda falsa..... „
De sobreseimiento en el sumario seguido contra Jesús María Lugo y Toribio T. Peinado, por delitos políticos..... 95
De sobreseimiento en el sumario formado contra Luis Santodomingo; por delito político..... 96

DOCUMENTOS VARIOS JUDICIALES.

Copia de un auto dictado por el Tribunal Superior (Sala del crimen) de Cundinamarca..... „

GACETA JUDICIAL.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

ACUERDO NÚMERO 13.

En Bogotá, á veinte de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, se constituyó la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, con el objeto de tomar en consideración la competencia afirmativa ocurrida entre el Juez Departamental de Sugamuxi y el Jefe de Estado Mayor de la 1.ª División del Ejército del Atlántico, sobre conocimiento del sumario contra Joaquín Montaña por el delito de heridas. El señor Magistrado doctor Mórales, á quien tocó sustanciar este asunto, presentó el siguiente proyecto de resolución:

"Vistos:—Han sido elevadas al despacho de esta Suprema Corte las diligencias instruídas para averiguar el delito de heridas ejecutado por Joaquín Montaña, Sargento del Batallón estacionado en la ciudad de Sogamoso, perteneciente al Ejército del Atlántico, con el fin de que sea decidida la competencia afirmativa, provocada por el Estado Mayor del mismo Ejército al Juez Departamental de Sugamuxi, en el extinguido Estado de Boyacá.

"Con fecha siete de Abril del presente año, se presentó Felipe Candia ante el Juzgado indicado, dando denuncio de que, en la noche anterior, yendo el denunciante con su esposa para su casa de habitación, los había alcanzado Joaquín Montaña en el punto llamado 'El Salitre,' jurisdicción de Sogamoso, y les había dado varios golpes con el arma de fuego que llevaba, causándoles algunas heridas graves.

"El Juez ordenó la práctica del sumario correspondiente; y al efecto fueron reconocidos los heridos, quienes duraron incapacitados para trabajar, treinta y ocho días el hombre y cuarenta y dos la mujer, y fueron recibidas las declaraciones conducentes al esclarecimiento del hecho criminoso.

"El Juez ordenó también que el sindicado fuera reducido á prisión, y solicitó del Comandante del Batallón á que el sindicado pertenecía, que éste fuera puesto á disposición del Juzgado, acompañándole, en copia, las pruebas en que se fundaba el auto de prisión; pero el Jefe de Estado Mayor de la 4.ª División se denegó á corresponder á aquella excitación, alegando que era la autoridad militar la competente para conocer de los delitos cometidos por individuos pertenecientes al Ejército de la República, y pidió, antes bien, que le fueran enviadas todas las diligencias que, hasta entonces, se hubieran practicado. El Juez consideró que se le había provocado competencia afirmativa, la cual aceptó, y como el Estado Mayor hubiese insistido en su pretensión, ha sido sometido el punto á la decisión de esta Superioridad,

"El Estado Mayor del Ejército apoyó su concepto en los artículos 1,365, 1,366 y 1,370 del Código Militar, y el Juzgado se fundó en el artículo 1,553 del mismo Código, por considerar que esta última disposición es posterior á las otras.

"Los artículos invocados están concebidos en los siguientes términos:

'Artículo 1,365. Son delitos militares los que se cometen con infracción de las leyes militares, en asuntos del servicio ó dentro del cuartel. Todos los demás delitos ó culpas cometidos fuera de estos casos, serán juzgados como delitos comunes por los Juzgados y Tribunales civiles.'

'Artículo 1,366. Los delitos comunes cometidos por individuos militares en tiempo de guerra, y desde que comienza el servicio de campaña en el lugar ó los lugares donde dichos militares se encuentren, son también de la competencia de la jurisdicción militar, con aplicación de las disposiciones generales comunes; á menos que el Jefe de operaciones ponga los reos á disposición de los Jueces ordinarios, con el sumario y pruebas conducentes que las autoridades militares hayan practicado.'

'Artículo 1,370. El individuo de tropa, desde que sienta plaza en un cuerpo, según el artículo 220 de este Código, y los Jefes y Oficiales y demás empleados del Ejército, desde que reciben sus despachos ó nombramientos, quedan sujetos á la jurisdicción militar y á las penas que se establecen en este mismo Código.'

'Artículo 1,553. Los delitos militares de que se trata en el presente título, son los definidos en el artículo 1,365 de este Código. Los delitos comunes cometidos por individuos militares, tanto en tiempo de paz, como en tiempo de guerra, se castigarán por las autoridades civiles, con aplicación del Código Penal de la Unión ó del Estado en sus respectivos casos.'

"Según el texto de estas disposiciones se comprende que, aunque el artículo 1,553 es posterior á los otros, no se refiere especialmente sino al 1,365, sin afectar, por consiguiente, el 1,366 que queda en todo su vigor, como lo observa la autoridad que provocó la competencia.

"O en otros términos: el artículo 1.365, después de definir los delitos militares, establece que todos los demás delitos deben ser juzgados, como comunes, por los Juzgados y Tribunales ordinarios. En seguida se registra el artículo 1,366 que dispone que los delitos comunes cometidos por militares, en tiempo de guerra, y desde que comienza el servicio de campaña, son tam-

bién de la competencia de la jurisdicción militar. Luégo viene el artículo 1,553 é indica que los delitos militares, de que se trata en el título á que dicho artículo pertenece, son los definidos en el 1,365; y concluye expresando que los delitos comunes, cometidos por individuos militares, tanto en tiempo de paz, como en tiempo de guerra, deben ser castigados por las autoridades civiles.

"Como puede notarse, el artículo 1,366 es una excepción de la regla establecida en el 1,365, y consiguientemente una excepción también de la regla establecida en el 1,553, porque este artículo no es sino una reproducción amplificada del 1,365.

"En apoyo de esta deducción concurre la razón ú objeto de la ley. Al efecto, toda ley penal tiene en mira el pronto castigo de los culpables; y en tiempo de guerra, en que se supone que los Tribunales civiles no funcionan, la autoridad militar tiene que juzgar los delitos cometidos por individuos del Ejército, para alcanzar el pronto y eficaz castigo de los delincuentes y sostener la moralidad militar; y á ese fin las leyes militares han establecido procedimientos sumarios y adecuados á las circunstrncias. Pero si con el artículo 1,553 se quisiese borrar el 1,366, quedaría abolido, de hecho, el fuero militar en tiempo de guerra, lo cual, sobre ser absurdo, produciría una completa dislocación en la Legislación militar del país.

"La Corte no mira por ese aspecto la cuestión sometida á juicio, y hace para fallar, las siguientes observaciones:

"1.ª El Juez Departamental de Sugamuxi, en el extinguido Estado de Boyacá, practicó las diligencias sumarias, como funcionario de instrucción, para lo cual estaba legalmente facultado; pues aunque se tratara de un delito cometido por un individuo del Ejército, el artículo 1,547 del Código Militar autoriza á los empleados civiles para instruír sumarios por asuntos criminales, de la jurisdicción militar;

"2.ª El mismo Juez ordenó el arresto provisional del sindicado, para lo cual estaba también facultado, como funcionario de instrucción, según el artículo 1,468 del Código Judicial; de suerte que, hasta ese punto, la cuestión no era propiamente de competencia, pues el Juez no había entrado á conocer del asunto;

"3.ª Aunque el delito se perpetró, según se asegura, en el mes de Abril del presente año, la competencia se provocó por el Estado Mayor el 15 de Septiembre del mismo, es decir, cuando yá el orden público estaba restablecido por decreto ejecutivo del 20 de Julio último; y

"4.ª Que no habiendo fuero militar en tiempo de paz, conforme al artículo 1,360 del mismo Código Militar, el sindicado ha quedado bajo la jurisdicción civil.

"Por lo tanto, la Corte Suprema Nacional, de acuerdo con el señor Procurador, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: que el Juez Departamental de Sugamuxi, en el extinguido Estado de Boyacá, es la autoridad que debe seguir conociendo del sumario instruído contra Joaquín Montaña por el delito de heridas.

"Notifíquese al señor Procurador, cópiese en el libro respectivo, dése aviso al señor Jefe de Estado Mayor de la 4.ª División del Ejército del Atlántico, devuélvanse los autos, con copia de esta decisión, al Juez remitente, y publíquese en el *Diario Oficial*."

Discutido el anterior proyecto de resolución, fué aprobado por el voto unánime de los señores Magistrados, quienes dieron por concluído el presente Acuerdo, que firman con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha.—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NÚMERO 14.

En la ciudad de Bogotá, á veintinueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, reunidos en Sala de Acuerdo todos los señores Magistrados, el señor Magistrado doctor Samper hizo presente que las leyes 44 de 3 de Noviembre y 50 de 11 del mismo mes, del presente año, contenían varias disposiciones relacionadas con negocios en los cuales ha tenido jurisdicción y competencia la Corte Suprema, y que han cesado, por virtud de las mismas leyes; y que, en consecuencia, se hace necesario que la Corte dicte las resoluciones generales del caso. Por lo tanto, el mismo señor Magistrado propuso el siguiente proyecto de acuerdo.

"Vista la ley 44 de 3 del presente mes "sobre suministros, empréstitos y expropiaciones que tuvieron lugar durante la guerra de 1876 á 1877;"

"Vista la ley 50 de 11 de este mismo mes, "que fija reglas sobre concesión de pensiones y jubilaciones," cuyo artículo 16 dice: "Desde la publicación de la presente ley sólo el Congreso podrá conceder pensiones y jubilaciones;"

"RESUELVE:

"Primero. En lo sucesivo no se hará repartimiento de ninguno de los negocios sobre empréstitos y expropiaciones, relativos á la guerra de 1876 á 1877, que se hallen pendientes en la Corte; y, conforme á la segunda parte del artículo 13 de la citada ley 44, pásense á la comisión administrativa de que allí se trata, todos los expedientes que conciernen á dichos negocios;"

"Segundo. Abstenerse de conocer en los negocios relativos á pensiones, y mandar que se archiven los respectivos expedientes; á reserva de que el señor Presidente mande entregar, bajo recibo, á las partes, si lo pidieren, los documentos que vinieron á la Corte aparejados, y en copia los creados en la Corte misma que puedan necesitar.

"Comuníquese este acuerdo á Su Señoría el Ministro de Gobierno, y publíquese en el *Diario Oficial* para conocimiento de los interesados."

Considerado que fué este proyeto, la Corte lo aprobó por unanimidad de votos.

Con lo cual se concluyó el presente acuerdo, que firman todos los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera.—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veinticuatro de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—Por consecuencia de un disgusto comenzado en la plaza de toros de la ciudad de Cartagena, el veintinueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco, Cayetano Pernet hirió con un tiro de revólver al Sargento Jesús Cardona, del Batallón 2.° de linea que hacía la guarnición en aquella ciudad.

Este hecho criminoso está suficientemente comprobado con las declaraciones de varios testigos, con la exposición pericial de dos profesores en cirugía, que reconocieron al herido y determinaron que la herida procedía de un proyectil lanzado por arma de fuego, y con la confesión misma del reo, pues aun cuando éste, falto de sinceridad, sólo dice que disparó dos tiros de revólver á Cardona, sin saber si lo había herido, todas las demás circunstancias comprobadas vienen á darle á aquella confesión un carácter directo y positivo; fuera de que el testigo Cosme Villegas asegura haber sabido de boca del mismo Pernet, que éste era quien había herido á Cardona. Está también comprobado que la incapacidad del herido para trabajar no excedió del término de veinte días.

Como el delito no tenía carácter alguno militar, tomó conocimiento del sumario el Juez 2.° de la Provincia de Cartagena; y sometido el asunto al Jurado de acusación, éste, no obstante las pruebas claras acerca del delito y del culpable, decidió, en diez y nueve de Enero del corriente año, que no había motivo para proceder. En consecuencia, el Juez dictó auto de sobreseimiento, ordenando que se pasara el expediente al Tribunal Superior de Justicia para que se censurara el veredicto del Jurado. El Tribunal, mediante no haber ocurrido nulidad alguna, sometió el negocio al conocimiento de un Jurado de revisión, el cual, por veredicto de diez y ocho de Marzo último, confirmó

lo resuelto por el Jurado de acusación; terminando así todo procedimiento contra Pernet.

Inmediatamente tuvo conocimiento de esta absolución el Excelentísimo señor Presidente de la República; y por conducto de Su Señoría el Ministro de la Guerra, en nota de treinta de Marzo, número 148, dijo al Jefe Civil y Militar del entonces Estado de Bolívar, que estando el país en interregno legal, y siendo el herido individuo del Ejército, era nula la intervención del jurado y de las autoridades civiles; y ordenó que Pernet fuera juzgado por un Consejo de Oficiales Generales y de acuerdo con las leyes militares; expresándose en la nota del señor Ministro de la Guerra, que Pernet era responsable de un asesinato cometido anteriormente en la misma ciudad de Cartagena.

El Jefe Civil y Militar pasó esta orden al Comandante general de la Columna de guarnición, y éste la trasmitió al General Jefe de Estado Mayor, nombrándolo funcionario de instrucción para las diligencias en comprobación del delito y del culpable, poniendo á su disposición el sindicado, y nombrando á un Sargento Mayor para que llevara la voz fiscal.

Posteriormente, por auto de la Comandancia general, de cinco de Junio próximo pasado, previo el dictamen del Auditor de guerra, se declaró con lugar á formación de causa criminal contra el expresado Pernet, por el delito de heridas en la persona del Sargento Jesús Cardona. Siguióse luégo el proceso con toda regularidad, convocándose el Consejo de Oficiales Generales, nombrándose los vocales, á virtud de permiso concedido por el Jefe Civil y Militar, como autoridad superior en este ramo, abriéndose la causa á prueba, nombrándose defensores al reo, haciéndose todas las notificaciones respectivas y sometiéndose al Consejo las cuestiones que prescribe el Código Militar.

El Consejo, por sentencia de seis de Septiembre de este año, declaró, por unanimidad de votos, que existían las circunstancias agravantes designadas en los incisos 1.° y 2.° del artículo 100 del Código Penal, y apenas por mayoría, que había circunstancias atenuantes, consistentes en la falta de instrucción del procesado y en la exaltación del momento; resultando de todo, que el delito fué calificado en segundo grado, y el reo condenado á quince meses de reclusión en el Panóptico de la capital de la República, y á las penas anexas á la corporal.

Notificada esta sentencia á Pernet, él apeló para ante esta Superioridad, y el recurso le fué concedido por el Comandante general de la Columna y por auto de diez y nueve de Septiembre: concesión que fué también debidamente notificada.

En esta segunda instancia se ha nombrado defensor al procesado; y citado éste así como el señor Procurador para la audiencia pública, esta se surtió el día veinte de los corrientes, sin que el Ministerio público emitiera concepto, presentándose solamente por el defensor un alegato escrito.

Encontrándose el negocio en estado de fallar, la Corte considera lo siguiente:

No existe nulidad ó informalidad alguna respecto al procedimiento, esto es, en lo referente á la secuela ó á la actuación; pero sí la hay absoluta é insaneable, tocante á la jurisdicción. Así la Corte no se ocupará sino de este punto, porque todo lo referente á las pruebas acerca del delito y de su autor, no tiene para qué mencionarse, como queda dicho, sino por la conexión que esto tiene con la entidad llamada á juzgar.

La autoridad militar no ha tenido jurisdicción para conocer de la causa contra Pernet, porque el delito es de naturaleza común. Se trata de una herida inferida por un particular á un Sargento, verificándose esto fuera del cuartel, y sin que en el asunto interviniera función alguna militar, ni operación conexionada con el servicio; siendo de advertir que aun cuando este delito hubiera sido en alguna manera militar, el conocimiento no habría correspondido privativamente á un Consejo de Oficiales Generales, sino á un Consejo de guerra ordinario, conforme á los artículos 1,383, 1,384 y 1,388 del Código Militar.

Cuando el delito ejecutado por Pernet tuvo lugar, regía, y rige aún, en el Departamento de Bolívar una legislación procedimental y penal, aplicable en ese Territorio respecto de los delitos comunes, que no sean de la competencia del Gobierno nacional; y esa legislación regía entonces y rige todavía, no por consecuencia del régimen anterior, sino por virtud misma de la integridad nacional, y por actos explícitos del Poder Ejecutivo, del Jefe Civil y Militar, mientras duró el Estado, y posteriormente por mandato expreso de la Constitución.

Siendo común el delito de que se trata, como yá queda establecido, y debiendo él juzgarse conforme á la legislación del Departamento de Bolívar, según la cual el Jurado es llamado á decidir sobre el mérito de una actuación, para saber si ella da ó nó lugar á formación de causa, es claro que los fallos de ese Jurado, de diez y nueve de Enero y de diez y ocho de Marzo son legítimos y deben tener completa eficacia. Ellos pudieron ser injustos, han podido favorecer la impunidad; pero emanaron de autoridad judicial competente, y no pueden desconocerse, alterarse ni anularse, sino por los medios que esas mismas leyes establecen. Si en ello hay un mal, él no depende sino de la misma organización pública; y en todo caso, los fallos de la justicia y de los Tribunales legítimos, tienen que ser atendidos, porque de otra manera serían nugatorios todos los derechos civiles de los individuos, y sería imposible la existencia social.

A los Jueces y autoridades del Departamento de Bolívar corresponde ahora, yá que se han creado nuevas pruebas sobre el delito de Pernet, y yá que el auto de sobreseimiento no causa ejecutoria, examinar si es el caso de proceder nuevamente contra él por el delito en referencia; así como deben investigar la existencsa del delito de asesinato de que habla la nota yá citada de Su Señoría el Ministro de la Guerra, si hay motivo para ello; pero la Corte no tiene que hacer nada sobre el particular, por no ser estos asuntos de su competencia.

Por lo expuesto, la Corte Suprema Nacional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara nulo en absoluto y sin efecto alguno legal este proceso, tanto por carecer de jurisdicción la autoridad militar que ha conocido en él, como porque precedía un fallo judicial, sobre el cual no se ha podido pasar.

Notifíquese, cópiese, publíquese en el *Diario Oficial* y devuélvase el expediente al Comandante general de la guarnición de Cartagena.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del veinticuatro de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, se publicó la antecedente sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En veinticinco de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la sentencia que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Noviembre veintiseis de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—El trece de Agosto del presente año, J. Zoilo Pulido, en su calidad de segundo Jefe del Cuerpo de Celadores de la Salina de Zipaquirá, dió parte al Administrador de ésta, de haber hallado (previa denuncia que se le diera) con la ronda que lo acompañaba, en la casa de Rudesindo Téllez, tres pedazos de sal compactada, de la que se elabora en la Fábrica del Gobierno, con el peso total de dos arrobas, poco más ó menos; sal que fué entregada al Administrador y depositada en la Fábrica de la Salina.

Al iniciar el sumario dicho Administrador, no procedió como debía; pues en vez de comenzar por tomar declaración á Pulido para que ratificase y explanase su denuncia escrita, y á los demás individuos de la ronda, con el fin de que, ante todo, se comprobase el cuerpo del delito con la demostración del hecho de haberse hallado en la casa de Téllez la sal hurtada, procedió á tomar declaración instructiva al sindicado, quien confesó el delito de llano en plano, reconociendo haber sustraído de la Fábrica nacional donde estaba trabajando como obrero, los tres pedazos de sal, y llevádolos á su casa, alegando que lo había hecho por imperiosa necesidad doméstica, y porque los celadores no lo habían registrado al salir de la Fábrica.

Por lo demás, examinados por peritos los pedazos de sal, se estableció que eran de la Fábrica del Gobierno, de la mejor calidad, que pesaban veintidós y medio kilogramos y que valían tres pesos veinticinco centavos.

Pero es de observar que, habiéndose interrogado á los celadores Justo Pastor González y Lucio Duque (celadores que estuvieron de servicio el doce de Agosto, día en que ocurrió el hurto), estos rindieron sus declaraciones sin juramento, aun en lo que se refería únicamente á la conducta de Téllez; por manera que, en esta parte, tales delaraciones son informales y carecen de fuerza probatoria.

Pasado el sumario al Juez 2.° del Circuíto de Zipaquirá, siguióse el proceso por los trámites legales, sin que se pidiesen pruebas por una ni otra parte, y celebrado el juicio, el Juez pronunció sentencia, el veintiocho de Agosto, condenando al reo, sin previa calificación del grado del delito, á sufrir las penas siguientes: tres meses y quince días de reclusión en el Panóptico de Cundinamarca, con deducción del tiempo que el reo había sufrido de prisión, privación de todo destino ó cargo público, indemnización de perjuicios, y sujeción á la vigilancia de las autoridades por un año; pero sin cargo de costas, y sin que se molestase al reo por los daños y perjuicios, "por ser notoria su insolvencia."

Y á la sentencia añadió el Juez, los siguientes apartes:

"Luégo de ejecutoriada esta sentencia, remítase en copia al señor Secretario de Gobierno del Departamento de Cundinamarca, con el reo, por conducto del señor Prefecto de esta Provincia, para que se sirva disponer su ejecución y certificar oportunamente sobre su cumplimiento.

"Notifíquese, cópiese, consúltese con la Suprema Corte Nacional y publíquese."

Es de observar que, ó la resolución del penúltimo aparte no tenía objeto alguno, puesto que la sentencia no podía quedar ejecutoriada, dada la necesidad legal de consultarla con esta Superioridad, en caso de no ser apelada; ó si algún objeto tenía, no podía ser otro que el de hacer ejecutar la sentencia, antes de su confirmación por la Corte, lo que envolvía flagrante violación de la ley.

Hácese notar asimismo, que el Juez de primera instancia (2.° del Circuíto de Zipaquirá), incurrió al dictar su sentencia en otras irregularidades, á saber:

1.ª No calificó el grado del delito, de manera que no tuvo fundamento cierto para graduar la pena;

2.ª Entre sus considerandos admitió como "manifiestas," la pobreza del procesado y la pobreza y muerte de su cuñado, circunstancias que el Juez aduce cemo atenuantes; y esto, cuando en este diminuto y descarnado proceso no existe ni la más ligera prueba de tales circunstancias, pero ni aun diligencia alguna para producirla; por manera que el Juez da por probado lo que á él le parece "manifiesto," acaso por observación personal, pero sin la menor constancia de autos;

3.ª Asimismo aduce el Juez como circunstancia agravante, el hecho supuesto de que yá el reo había sido condenado por el mismo delito, de lo cual no existe en los autos prueba alguna, sino simplemente una alusión hecha, de paso, por el Agente del Ministerio público, en el acto de la celebración del juicio; alusión que no podía ser aducida por el Juez, al fundar su fallo, por cuanto no se fundaba en prueba alguna.

Cumple la Corte con un penoso deber, al poner de manifiesto, que en este asunto han faltado á su deber, casi todos los que en él han intervenido; es á saber:

El Administrador de la Salina, como funcionario de instrucción, porque no tomó sus declaraciones á los aprehensores de la sal, ni al funcionario que dió la denuncia oficial, y porque no hizo ratificar con juramento las declaraciones de los Celadores en cuanto se referían al sindicado del hurto;

El defensor, porque dejó abandonado al reo, sin pedir prueba alguna en su favor, siquiera para demostrar la existencia de circunstancias atenuantes;

El Fiscal, porque ni pidió que en el plenario declarasen sobre el delito los aprehensores de la sal, ni hizo diligencia para comprobar que el reo era reincidente y había sido condenado por el mismo delito, sino que se limitó á decirlo en el acto de *la celebración del juicio*; y

El Juez, por último, por las erradas apreciaciones de su sentencia, de que se ha hecho mérito, y con las cuales no concuerda la cantidad de pena impuesta, según las citas de artículos del Código Penal.

En suma, todo lo conducente del proceso, en materia de pruebas del delito y de la persona del delincuente, se reduce á las dos declaraciones indagatorias del sumario y la confesión del plenario, en las que Rudesindo Téllez, con entera ingenuidad y espontaneidad, reconoce que sustrajo de la Fábrica del Gobierno los pedazos de sal, aprovechándose del descuido de los Celadores; que se los llevó á su casa, en tres salidas sucesivas, por ser muy grandes los pedazos; que se los tomaron los guardas en su habitación, y que pudo hacer la sustracción porque trabajaba en la Fábrica como obrero. Sin estas paladinas confesiones, no existiría prueba alguna del delito ni de la criminalidad de Téllez, no obstante la diligencia de avalúo en que los peritos afirman que los pedazos de sal que han examinado, son de la producída en la Fábrica, y que su valor, según su peso y calidad, era de tres pesos veinticinco centavos.

Considerada la única prueba que resulta de autos, en cuanto al delito mismo y á su autor, la Corte toma en cuenta lo siguiente:

1.° Dicha prueba es plena contra el reo, conforme al artículo 1,574 del Código Judicial, y establece también la verdad del delito, por cuanto ha concurrido la diligencia pericial, faltando, sin embargo, la prueba que debía preceder á toda otra: la de la aprehensión de la sal en la casa de Téllez, hecho que éste reconoce, y que asevera en nota oficial el Jefe de la ronda que aprehendió en casa del reo la sal hurtada;

2.° Es evidente la circunstancia atenuante, de la confesión ingenua y espontánea del reo, sin la cual no existiría prueba alguna, como no la hay en autos, de la comisión del delito, ni de la delincuencia de Téllez;

3.° Es también evidente la circunstancia agravante, confesada por el reo, pues no hay otra prueba legal, por incuria del funcionario de instrucción y del Fiscal, de haber cometido Téllez su delito con abuso de confianza, puesto que trabajaba como obrero en la Fábrica del Gobierno, y se aprovechó del descuido de los Celadores;

4.° No existe prueba de ninguna otra circunstancia atenuante ni agravante; pero sí consta que el objeto hurtado pertenecía al Gobierno, por lo cual es aplicable el artículo 364 del Código Penal, que manda agravar con una sexta parte la pena que se aplique;

5.° Compensándose una circunstancia agravante con una atenuante, es el caso de calificar el delito en segundo grado, y por lo tanto, aplicar la mitad de la pena, entre el mínimo, que son treinta días de reclusión ó presidio, y el máximo, que son ciento ochenta días (artículos 105 y 578 del citado Código Penal), por cuanto el valor de lo hurtado no excede de cinco pesos. Y como la diferencia entre ciento ochenta días de máximo y treinta de mínimo, es ciento cincuenta, cuya mitad es setenta y cinco, y á esta suma debe añadirse la sexta parte, resulta que la pena correspondiente es la de ochenta y siete días y doce horas.

Por lo expuesto, oído el dictamen del señor Procurador, que pide reforma de la sentencia de primera instancia en favor del reo, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, condena á Rudesindo Téllez á sufrir las penas siguientes, como reo de hurto, calificado en segundo grado:

Ochenta y siete días y doce horas de reclusión;

Pérdida de todo empleo ó cargo público y de toda pensión del Tesoro;

Indemnización de daños y perjuicios; y

Pago de las costas procesales.

Queda así reformada la sentencia consultada. Y por cuanto el reo ha estado en prisión durante el seguimiento del sumario y del juicio, desde el día trece de Agosto del presente año, y conforme á los artículos 31 del Código Penal y 1,937 del Judicial, debe serle computado en la pena el tiempo de la prisión, por lo que es claro que la pena está cumplida desde el día ocho del presente mes, se ordena que el reo sea puesto en libertad.

Notifíquese, cópiese, publíquese en el *Diario Oficial* y devuélvanse los autos.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del veintiséis de Noviembre de mil ocho-

cientos ochenta y seis, se publicó la anterior sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En veintisiete de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la sentencia que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintisiete de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—A virtud de queja dada por Mariano Valdez, se inició en Tumaco, el dos de Febrero de mil ochocientos ochenta y dos, sumario contra Ramón Delgado y su sobrino Ruperto Delgado, por el delito de maltratamientos de obra cometido contra la persona del primero; y una vez practicada toda la información, el Juez del Circuito de Barbacóas declaró, por auto de treinta y uno de Mayo del mismo año, con lugar á seguimiento de causa contra dichos sindicados, por el delito de estropeo causado á Valdez, quien al tiempo de ser estropeado era guarda de la Aduana de Tumaco, en ejercicio, esto es, funcionario público de la clase común, en ejercicio de sus funciones; calidad que se comprobó en el sumario á fojas 11, 12 y 13.

Al seguirse el juicio, no pudo ser habido el principal acusado, Ramón Delgado, y solamente se siguió el proceso contra Ruperto Delgado, adolescente que, en su confesión, declaró tener once años de edad, y libremente dijo que, habiéndo trabado en riña el Guarda Valdez con Ramón Delgado, y viendo el procesado que el primero le daba de "trompadas" al segundo (expresión que equivale á dar de bofetones), había ocurrido á defender á su tío, dándole por detrás unos golpes á Valdez con una lata ó cinta de guadua; con lo que el agresor salió huyendo. Es también de notar que á fojas 2 se comprobó con el dicho de un facultativo, que Valdez no había sufrido sino muy ligeras contusiones, sin el menor impedimento para trabajar ni motivo de enfermedad; y que en los autos no existe prueba posterior en contrario, lo que conduce á establecer que el maltratamiento de obra fué de la clase más leve posible.

Durante el plenario, el defensor del reo pidió las siguientes pruebas: 1.° la partida de nacimiento de Ruperto Delgado, para acreditar su menor edad; 2.° declaraciones de testigos relativas á la edad y posición doméstica del reo; y 3.° varias declaraciones para comprobar que Valdez era hombre pendenciero, y que éste había sido el agresor en la riña trabada con Ramón Delgado. Libróse exhorto para obtener del Cura párroco del barrio de la Catedral de Pasto, la partida de nacimiento del reo, y en los autos no aparece que se hubiese diligenciado el exhorto. Los testigos Plácido Vega y Apolinar Mutis G. (fojas 23 y 24), declararon: el primero, que Ruperto Delgado no puede tener más de doce años de edad; y el segundo, que no puede tener más de doce á catorce años; ambos dan razón de su dicho por el conocimiento antiguo de la familia Delgado, y afirman que el adolescente quedó huérfano años antes y uno de sus tíos lo recogió y lo tenía trabajando en Tumaco.

En cuanto á los hechos materia del proceso, quedó plenamente comprobado con las declaraciones de Joaquín Orosco y Pablo Prado (fojas 28 y 29), que hubo riña entre Valdez y Ramón Delgado; que Valdez la comenzó de palabra y fué el primero que dió golpes ("trompadas" ó bofetones) á Delgado; que, visto esto, Ruperto se lanzó en auxilio de su tío y dió unos cintarazos á Valdéz con una lata de guadua; y que Valdez era muy *quimeristo* y por esa razón continuamente tenía camorras con muchas personas.

Llegado el momento de fallar, el Juez pronunció sentencia el dos de Septiembre del año citado, y absolvió á Delgado, en atención á ser éste menor de doce años, según lo dispuesto en el artículo 89 del Código Penal. Esta sentencia fué consultada con esta Superioridad, por cuanto el ofendido era funcionario público en ejercicio, y puesto al despacho el proceso, la Corte, para mejor proveer, dictó auto el siete de Enero de mil ochocientos ochenta y tres, por el cual mandó pedir al Juez del Circuito de Barbacóas copia de la partida de nacimiento del reo; resolución que no surtió efecto, puesto que dicho documento nunca vino á la Corte.

Repartido nuevamente el negocio el veinticinco de Septiembre del presente año, con todo el personal de la Corte renovado, y después de sufrir el proceso una demora en esta Superioridad de muy cerca de cuatro años, se dictó nuevo auto el día treinta, para mejor proveer, con el fin de obtener directamente de la ciudad de Pasto la partida de nacimiento de Ruperto Delgado, ya fuese tomándola de los libros parroquiales ó del Notario respectivo. Pero el exhorto ha vuelto diligenciado, y de él resulta que no existe la prueba en ninguna de las Notarías, y que en la parroquia de la Catedral faltan dos libros relativos á los años de mil ochocientos setenta y cuatro á mil ochocientos setenta, y en los de mil ochocientos setenta y uno y mil ochocientos setenta y dos no hay partida de nacimiento de Ruperto Delgado. Por lo tanto hay que prescindir de esta prueba, y entrar á decidir según las que suministra el proceso.

Para ello la Corte considera:

Primero, es cierto que se comprobó que Mariano Valdéz era Guarda de la Aduana de Tumaco en ejercicio de sus funciones, cuando fué maltratado por Ramón y Ruperto Delgado; y por lo mismo, en caso de comprobarse el hecho como un atentado expontáneo, le sería aplicable el artículo 223 del Código Penal, que fija la pena de dos meses á un año de prisión, pena que es corporal. Pero como es evidente que el caso fué de riña, que el agresor fué Valdéz, funcionario público, golpeando primero á Ramón Delgado, y que Ruperto ocurrió á la riña en defensa de su tío, sin espontaneidad de su parte para atacar á Valdéz y que éste no duró impedido para trabajar ni por un momento, ni sufrió daño alguno, es patente que el delito cometido fué el definido en el artículo 499 del Código citado, que impone pena no corporal, esto es, arresto por quince días á dos meses.

Así estimadas las condiciones del delito, y prescindiendo de circustancias atenuantes, es claro que está comprendido en la disposición del artículo 1,419 del Código Judicial, que manda cesar todo procedimiento en el caso de prescripción de la pena. Y este es el caso, puesto que la pena no corporal se prescribe por cuatro años (artículo 71 del Código Penal), término más que cumplido, en razón de que el delito materia del proceso se cometió en Febrero de mil ochocientos ochenta y dos.

Pero hay otro aspecto de los autos.

De estos resulta que un testigo asegura que Ruperto Delgado no era mayor de doce años cuando cometió el delito, y otro afirma que no podía tener más de doce á catorce años, edad que el procesado reduce á once en su confesión. No habiéndose obtenido la prueba precisa, hay duda sobre este punto, y, en caso de duda debe estarse á lo más favorable al reo. Es, por lo tanto, necesario admitir que no tenía la edad que podía hacerlo responsable, conforme al artículo 89 del citado Código Penal.

Por estas consideraciones, reforzadas con la evidencia del hecho de que después del plenario no había motivo para proceder de oficio, puesto que el delito no aparejaba pena corporal; la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la sentencia consultada.

Notifíquese, cópiese, publíquese en el *Diario Oficial* y devuélvanse los autos.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del veintisiete de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, se publicó la sentencia precedente.

Ramón Guerra A., Secretario.

En veintinueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la sentencia que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Noviembre veintiséis de mil ochocientos ochenta y seis.

Era la Corte de concepto que debía dictar auto para mejor proveer, á fin de perfeccionar la prueba presentada por la peti-

cionaria, señora Silvia T. de Rojas, para que se le conceda á ella y á sus hijos menores una pensión del Tesoro nacional; pero habiendo sido publicada en el *Diario Oficial* de fecha de ayer, número 6,871, la ley 50 de este año, "que fija reglas generales sobre concesión de pensiones y jubilaciones," y disponiendo esta ley, en su artículo 16, que desde la publicación de ella, sólo el Congreso podrá conceder pensiones y jubilaciones; la Corte no tiene yá jurisdicción para conocer de estos asuntos, ni para decidirlos.

En consecuencia, se resuelve: suspéndase la prosecución de este juicio.

Los interesados harán el uso que les convenga de los documentos que han presentado y que corren en este expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintisiete de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintiséis de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—Por auto de nueve de Julio de mil ochocientos ochenta y tres, la Sección 6.ª de la Oficina General de Cuentas, glosó la de la Administración del Ferrocarril y Telégrafo de Bolívar, correspondiente al mes de Diciembre de mil ochocientos ochenta y dos, de la que aparece responsable el señor Eusebio Grau; refiriéndose esas glosas al hecho de aparecer repetidos los nombres de varios trabajadores en las dos estaciones de la vía; al de figurar como empleados individuos que no debían tener ese carácter; y al de haberse cobrado algunos derechos de menos. Ascendieron los cargos á ciento cuarenta y dos pesos ($ 142).

Por conducto del Gobernador de Barranquilla, fué notificado á los apoderados del responsable, el auto de glosas, las cuales fueron contestadas por dichos apoderados en once de Agosto de mil ochocientos ochenta y tres. La Oficina General de Cuentas no consideró satisfactorias en un todo esas contestaciones; y por auto de catorce de Noviembre de mil ochocientos ochenta y tres, feneció provisionalmente la referida cuenta, reduciendo el alcance líquido á la suma de ciento veintinueve pesos ochenta y cinco centavos ($ 129-85 centavos) á favor del Tesoro y en contra del responsable. Apelaron los apoderados de éste del auto en que se dedujo el alcance, según se estableció por la Oficina General de Cuentas, aun cuando en el expediente no consta que se interpusiera tal apelación; y la Sala de segunda instancia, por auto de tres de Mayo de mil ochocientos ochenta y cuatro, confirmó el auto apelado, por no encontrar en él motivo para hacerle reforma ú observación.

Este último fallo fué notificado al responsable Grau, quien apeló de él ante esta Suprema Corte. Concedióse el recurso en diez y seis de Mayo de mil ochocientos ochenta y cuatro; y sustanciada la apelación en este Supremo Tribunal, el señor Procurador general, apoya el auto últimamente apelado, con la sola diferencia de indicar que se debe deducir del alcance la suma de cuatro pesos ochenta centavos ($ 4-80 centavos), porque según el comprobante número 107, el Elías Palma que figura como trabajador en la estación "Montoya" del Ferrocarril, no es el mismo E. Palma que figura en la estación "Salgar." Observa también que en el auto de la Oficina General de Cuentas que se revisa, hay una manifiesta equivocación, haciendo ascender el alcance á ciento noventa y ocho pesos ochenta y cinco centavos ($ 198-85 centavos).

La Corte, después de examinar las resoluciones de la Oficina General de Cuentas, las contestaciones dadas por el responsable y los documentos á que unos y otros se refieren, encuentra *perfectamente fundadas las primeras, é igualmente* equitativas las observaciones del señor Procurador, últimamente mencionadas.

Por lo tanto, la Corte Suprema nacional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, reforma el auto apelado, reduciendo el alcance líquido contra el responsable Eusebio Grau, á la suma de ciento veinticinco pesos cinco centavos ($ 125-05 centavos).

Notifíquese, cópiese publíquese, en el *Diario Oficial* y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintisiete de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la resolución que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

En veintinueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Eusebio Grau el auto anterior.

EUSEBIO GRAU—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Noviembre veintiseis de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—Se ha publicado en el número 6,871 del *Diario Oficial* de ayer, la ley 50 del presente año (11 de Noviembre), "que fija reglas generales sobre concesión de pensiones y jubilaciones," la cual en su artículo 16 dice lo siguiente:

"Desde la publicación de la presente ley sólo el Congreso podrá conceder pensiones y jubilaciones,"

Además, el artículo 25 dice:

"Queda derogada la ley 14 de 1,882 sobre pensiones y las demás que sean contrarias á la presente."

En virtud de estas disposiciones ha cesado la jurisdicción de la Corte Suprema para conceder pensiones, y, por lo mismo, para conocer de estos asuntos.

En consecuencia, se resuelve:

Primero. Que cese todo procedimiento en este negocio, quedando cortada la actuación.

Segundo. Que si el demandante pidiere la devolución de sus documentos, se le entreguen bajo recibo los que componen el expediente recibido en la Corte.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En dos de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la precedente resolución.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veinticuatro de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—El Jefe departamental del Socorro, en el extinguido Estado de Santander, dió aviso al Alcalde del Distrito capital, de que sabía que Marcos Pereira y sus hijos fabricaban monedas falsas de níkel, y le ordenó instruyera el correspondiente sumario.

El Alcalde practicó las diligencias que creyó oportunas y pasó lo actuado al Juez Superior del Circuíto del Socorro, quien acabó de perfeccionarlo, y dictó por último el auto de fecha catorce de Octubre del presente año, por el cual sobresee en favor de los sindicados; auto que ha consultado con esta Superioridad.

En el expediente no se encuentran sino tres testimonios directos en el asunto, á saber, el de Ismael Padilla, el de Domingo Becerra, y el de Febrinio Gómez. El primero, asevera que varias noches del mes de Marzo del presente año, fueron á la tienda que el declarante tiene á su cargo dos hijos de Marcos Pereira, á comprar algunos efectos con monedas falsas que imitaban las de níkel y plata. El segundo, asegura que como en el mes de Abril, también de este año, fué un hijo de Marcos Pereira á la tienda donde el exponente vende, á comprar un real de dulces con cuatro monedas falsas de níkel. El testigo Febrinio Gómez declara en iguales términos que el testigo Padilla, pero indica que vió uno sólo de los hijos de Marcos Pereira.

Reconocidos los tres hijos de Pereira, por los testigos mencionados, Gómez afirmó que el joven que decía llamarse Jorge Pereira, era el que había ido á la tienda de Ismael Padilla á

comprar efectos con una peseta falsa. Padilla no reconoció á ninguno de los tres jóvenes que se le pusieron de presente; y Becerra reconoció al joven que decía llamarse Jesús Pereira, como el que había entrado en la tienda de su cargo á comprar dulces.

Practicado un reconocimiento pericial en la casa de Marcos Pereira, no se halló elemento ni vestigio alguno que hiciera sospechar la falsificación de monedas.

Como se ve, dos son los cargos que se han dirigido á Marcos Pereira ó á sus hijos: el de fabricación y el de circulación de monedas falsas.

Respecto del primer cargo, no aparece en el proceso un sólo dato que revele siquiera la existencia del cuerpo del delito, y por lo tanto no hay fundamento para proceder.

Acerca de la circulación, aparacen solamente las declaraciones de los tres testigos que se han mencionado. De éstos, el testigo Padilla no pudo reconocer á los jóvenes que afirma fueron á su tienda, y por consiguiente su dicho no tiene valor ninguno legal. Quedan, pues, en vigor los otros dos testimonios que se refieren á dos personas diferentes; pero como estos testimonios son singulares, no pueden constituír plena prueba conforme á la ley.

Además, aunque estuviera demostrado el hecho de la circulación por parte de los jóvenes Jorge y Jesús Pereira, no consta, en manera alguna que esa circulación la hubieran efectuado *á sabiendas* de que las monedas eran falsas, circunstancia necesaria, según el Código Penal.

Por lo expuesto, y de acuerdo con el señor Procurador, la Corte Suprema Nacional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto de sobreseimiento consultado.

Notifíquese, cópiese y devuélvase el proceso.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veinticinco de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Noviembre veintisiete de mil ochocientos ochenta y seis.

En el mes de Agosto del año último, se iniciaron diligencias para averiguar quiénes fueran culpables, de la fuga de once reos de delitos comunes, que se hallaban presos en la Cárcel pública de Lorica, en Marzo del mismo año, y que fueron puestos en libertad para servir como soldados en las filas de los rebeldes; y como pareciese que Jesús María Lugo era el sindicado, como que había funcionado con el carácter de Jefe Civil y Militar de la Provincia de Lorica, nombrado tál por Francisco de P. Manotas, Jefe político de la rebelión en el Estado de Bolívar (ahora Departamento), el respectivo Juez envió los documentos al Tribunal Superior, para que éste conociera del asunto, como si el caso fuese de un juicio de responsabilidad.

El Tribunal Superior, que acumuló dos sumarios análogos, se declaró incompetente, por cuanto Jesús María Lugo no había procedido con título legítimo que le diese carácter de funcionario público, sino con el de revolucionario, y por lo mismo, cometido un delito común, caso de haber acto criminoso. Volvió el sumario al conocimiento del Juez de la Provincia de Lorica, quien lo adelantó y perfeccionó, quedando comprobado:

Primero. Que Jesús María Lugo, en su carácter revolucionario de Jefe Civil y Militar, expidió muchos decretos, entre ellos uno por el cual destituyó al Juez de la Provincia, Abel Joaquín Corrales, y nombró y dió posesión en su lugar á Toribio T. Peinado; y ejecutó otros actos, entre los cuales el más grave de todos fué el de poner en libertad á once reos presos en la Cárcel, el treinta de Marzo, habilitarlos de soldados de la rebelión,—con la promesa de darles plena libertad cuando concluyese la guerra civil, si servían á la causa encabezada por Manotas y Ricardo Gaitán,—y enviarlos á campaña, por lo que no han podido ser habidos para que se continúen los respectivos procesos.

Segundo. Que el mencionado Toribio T. Peinado funcionó efectivamente como Juez revolucionario de la Provincia de Lorica, bien que sin tomar parte alguna en la soltura de los presos, y figurando sólo de un modo incidental en el sumario.

Reunido que fué el Jurado de acusación, éste declaró haber lugar á seguimiento de juicio criminal por el delito de fuga de presos, únicamente contra Jesús María Lugo; y el Juez procedió en consecuencia. Pero no hallándose al procesado, hubo algunas demoras y cuando compareció y se le notificó el auto de proceder, apeló. Enviado el proceso al Tribunal Superior, en auto de veinticuatro de Agosto del presente año resolvió que el Juez debía proceder en su carácter de Juez nacional, por tratarse de un delito comprendido en el de rebelión, y en consecuencia revocó el auto apelado. Conforme á esta decisión, el Juez falló en veinticuatro de Septiembre, declarando que debía cesar todo procedimiento contra Lugo y Peinado, por cuanto sus actos materia de la actuación, eran de carácter político, y estaban comprendidos en el decreto de amnistía expedido el veinte de Julio por su Excelencia el Presidente de la República.

Esta sentencia fué consultada con esta Superioridad y repartido el expediente el treinta de Octubre, y sustanciado legalmente es el caso de fallar, para lo cual se considera:

El señor Procurador en su vista de once de los corrientes, opina que el hecho ejecutado por Lugo no tiene el carácter de político, pues está comprendido entre los delitos comunes de que tratan los artículos 240 á 247 del Código Penal," y que semejante atentado no se puede considerar excusable conforme al derecho de la guerra.

En consecuencia, pide que se confirme el auto consultado, por lo tocante á Toribio T. Peinado, y se le revoque respecto de Jesús María Lugo, para que se le exija por la autoridad competente la responsabilidad á que haya lugar.

La Corte no puede menos que condenar y reprobar como uno de los actos más detestables, entre los que se ejecutan en Colombia en tiempo de revueltas, el de abrir las puertas de las cárceles y de los establecimientos de castigo, (casas de reclusión, presidios, etc. etc.) á los reos ó detenidos por delitos comunes, para convertirlos en soldados y envilecer así una causa política, con defensores de la peor especie posible. Pero cuando se pueden aducir ejemplos numerosos de actos de esta naturaleza, ejecutados en diversas épocas, y cuando tales actos, dignos de reprobación, han quedado cubiertos con amnistías, cuando no con la tolerancia de los Gobiernos constitucionales; la Corte no puede hacer una excepción contra determinado individuo culpable de tal atentado; atentado que una ley expresa debiera exceptuar de entre los calificados ordinariamente como delitos políticos.

Seguramente el acto incriminando á Lugo es de los más odiosos; pero es evidente, como consta de autos, que el no procedió por ningún interés personal ó de atentado contra el orden social, sino por servir á su causa política, armando á los presos para que custodiaran las armas, defendieran la autoridad revolucionaria y fueran á engrosar las filas de Manotas y Gaitán, y combatir contra el Gobierno nacional como en efecto combatieron. Es, por lo tanto, manifiesto el propósito político del hecho, y esto es lo que constituye el carácter de delito político; sin que por esto deje de ser obligatorio perseguir á los presos militarizados, hasta aprehenderlos y reducirlos á la cárcel de donde fueron sacados.

En cuanto á lo dispuesto en los artículos 240 á 247 del Código Penal, ni son aplicables al caso, porque no se trata de funcionarios públicos obligados directamente á la guarda de presos en las cárceles; ni se ha procedido por cohecho, soborno ó motivo semejante, sino por acto de autoridad revolucionaria, ni por el hecho de ser graves los delitos de responsabilidad á que se refieren los citados artículos, deja de ser un atentado político ó de rebelión el que ejecutó Lugo.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y disintiendo en parte de la opinión del señor Procurador, confirma en todo el auto consultado.

Notifíquese, cópiese, publíquese en el *Diario Oficial* y devuélvanse los autos.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En dos de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

DOCUMENTOS VARIOS JUDICIALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintinueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—El señor Juez de la Provincia de Mompox consulta con la Corte, el auto de sobreseimiento que pronunció en diez y seis de Octubre del presente año, en el sumario instruído contra Luis Santodomingo, por haber tomado en el Distrito de Morales, en Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco, un novillo perteneciente á Matías A. Molina, que destinó, como Alcalde al servicio de los revolucionarios, para raciones de un piquete de soldados que tenía á sus órdenes.

El hecho atribuído al sumariado, no tiene los caracteres de un delito común, porque según las declaraciones recibidas á Tomás de Aquino Torres y Regino Cuesta (fojas 5 y 7), la ocupación de esa propiedad particular fué con el objeto de proveer á la subsistencia de una pequeña fuerza organizada, para el servicio de la revolución, al inmediato mando de un Capitán Barbosa.

Gozando el sindicado del beneficio de la amnistía concedida por el Poder Ejecutivo, en el decreto del veinte de Julio último, hay necesidad de poner término al sumario, de conformidad con la reforma 43 de la ley 46 de 1876.

En consecuencia, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el concepto del señor Procurador general, confirma el auto consultado, y dispone que cese todo procedimiento contra el sindicado Luis Santodomingo, por el delito político que ha sido materia de la presente actuación, quedando á salvo las acciones particulares por daños y perjuicios.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En dos de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

COPIA del auto dictado por el Tribunal Superior de Cundinamarca, en el sumario instruído contra Juan Dencousse, y otros, por falsificación de moneda.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca—Bogotá, Febrero veinticuatro de mil ochocientos ochenta y siete.

En el sumario que se ha instruído en averiguación del delito de falsificación de moneda, el Juez 5.° de este Circuito, á quien correspondió conocer, por auto de trece de Diciembre del año próximo anterior, se declaró incompetente, y remitió á este Superior Tribunal los autos correspondientes, por creer que sea este Tribunal el que deba conocer en primera instancia, pues de la segunda estima que es la Suprema Corte de Justicia la competente, según lo que se dispone en el artículo 21, sección 2.ª, en su numeral 5.° de la ley 61 de 1886, sobre organización provisional y atribuciones del Poder Judicial y del Ministerio público.

Funda el Juez conocedor su resolución en la circunstancia especial de aparecer en el sumario como sindicado el señor Juan Dencousse, ciudadano de la República francesa, y también por determinarse en la disposición que queda trasuerita, que la Corte conoce en la última instancia de todos los juicios en que se deban aplicar las estipulaciones de los tratados públicos, y de todos aquellos en que tengan parte individuos extranjeros; y que expresándose después en el artículo 100 de la misma ley, que á los Tribunales Superiores de Distrito corresponde conocer en primera instancia de los negocios á que se refieren los incisos 3.° y 5.° del artículo 21, era indudable que en el juicio aludido el competente para conocer en este proceso, al menos en primera instancia, era el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Departamento de Cundinamarca; y á virtud de este razonamiento, el expediente fué remitido, y una vez que se hizo el repartimiento de él, el suscrito Magistrado lo pasó al estudio del señor Fiscal del Tribunal, quien manifiesta ser de exacta aplicación la doctrina legal en que se apoya el Juez remitente. El Tribunal se aparta de estos conceptos, y juzga que se ha hecho una mala inteligencia de la disposición contenida en el número 5.° de la sección 2.ª del artículo 21 de la precitada ley, pues es claro que la disposición que se indica está en consonancia con las anteriores, y en ellas no se trata sino de negocios civiles, expresándose claramente después, en los números 7.° y 9.° de qué clases de causas criminales conoce la Corte en segunda instancia. De estas causas sí es natural y consiguiente con todo el contexto de la ley, y aun con las disposiciones constitucionales, que conozca la Corte; pero suponer el Tribunal y la Corte conociendo de todos los sumarios y causas de que aparezca sindicado ó responsable un extranjero, tan sólo por el hecho de serlo, y por no haber creído el legislador necesario posponer á la palabra "juicio" la determinación de "civil," es dar á la disposición en que nos ocupamos una interpretación forzada y en nada conforme con las reglas generales de Hermenéutica.

Es claro que el objeto que se propuso el legislador al atribuír á la Corte el conocimiento en última instancia de todos los juicios en que tengan interés los extranjeros es, en verdad, el de poner freno á todas las reclamaciones injustas y exageradas de éstos, quienes á veces por abandono ó malos manejos de ellos mismos, y en otras por juzgarse mal aplicada la ley por los Jueces ó Magistrados de los Departamentos ó extinguidos Estados, conseguían siempre que su reclamación tomase la vía diplomática, para interesar así á su Ministro y reunir con su causa el honor de su Nación, dando por resultado que el Gobierno se veía en el caso de atender á su reclamo, pagando el Tesoro de la República lo que se creía era una injusticia, no siendo en realidad, y en la mayor parte de los casos, sino pura atención y deferencia á la Nación que se interesaba y á su representante, y á veces el deseo de arreglar con erogaciones pecuniarias, cuestiones desagradables que era mejor terminar de una vez; así es que al presente, juzgando en tales asuntos el primer Tribunal de la República, como es la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno sabe yá á qué atenerse y puede dar una solución pronta y segura á los negocios de esta naturaleza. He aquí el objeto de la disposición legal de que se ha venido hablando.

No sucede lo mismo en los asuntos criminales; las disposiciones legales á este respecto son de sencilla aplicación, y los fallos están sujetos en lo general á la revisión del Superior. No hay, pues, intereses encontrados en estas materias, y no se comprende cómo una disposición dislocada viniera á contradecir todo el contexto de la ley, de la Constitución y aun de los principios generales de la Legislación y Derecho internacional. Además de que así se haría de mejor condición á ciertos criminales, teniendo por único motivo su calidad de extranjeros.

Por lo expuesto, el Tribunal apartándose del parecer del señor Fiscal, estima injurídica la resolución del señor Juez 5.° de este Circuito, en cuanto se declara incompetente para conocer de este proceso, y ordena que se le devuelva el expediente para los fines legales á que haya lugar.

Notifíquese, cópiese este auto en el libro respectivo, remítase una copia del mismo á la Corte Suprema de Justicia, para que si lo tiene á bien, ordene su publicación en la *Gaceta Judicial*, y devuélvase el expediente al Juzgado remitente.

FEDERICO R. RODRÍGUEZ—*Gabriel Rosas*, Secretario en propiedad.

Es fiel copia.

El Secretario del Tribunal.

Gabriel Rosas.

Presidencia de la Corte Suprema de Justicia—Bogotá, doce de Abril de mil ochocientos ochenta y siete.

Publíquese por orden de la Corte.

MARTÍNEZ—*Guerra A.*, Secretario.

IMPRENTA DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPÚBLICA DE COLOMBIA. Número 13

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 23 de Abril de 1887.

CONTENIDO.

PÁG.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

Acuerdo número 16, sobre monopolio de aguardientes..... 97

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

En la causa seguida, por malversación de caudales públicos, al Teniente-Coronel Lisandro Leal y al Capitán Alejandro Castro N. "

En la causa seguida á Pantaleón Figueroa, por fabricación de moneda..... 99

En la causa seguida á Wenceslao Corral y Rafael Mafla, por el mismo delito..... 100

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Pronunciado en el juicio de cuentas contra Pedro José Caicedo Cuéllar..... 102

NEGOCIOS CRIMINALES.

Pronunciado en un sumario seguido en Quibdó, por contrabando.... "

Id. contra M. Villacob, por homicidio..... 103

DOCUMENTOS VARIOS JUDICIALES.

Copia de un auto dictado por el Tribunal Superior de Cundinamarca, en el sumario seguido contra Francisco W. Putnam..... 104

ANUNCIOS..... "

GACETA JUDICIAL.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

ACUERDO NUMERO 16.

En Bogotá, á trece de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis, se constituyó la Corte Suprema nacional en Sala de acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, con el objeto de tomar en consideración una solicitud del señor Luciano París y otros vecinos del Distrito de Mariquita, para que la Corte suspenda la ejecución del Decreto número 329, expedido por Su Señoría el Gobernador del Departamento del Tolima, por el cual se establece y reglamenta el monoponio del aguardiente de caña y sus compuestos.

El señor Magistrado doctor Morales, á quien tocó sustanciar este asunto, presentó el siguiente proyecto de resolución, que fué aprobado por el voto unánime de los señores Magistrados.

"Vistos:—Varios vecinos del Distrito de Mariquita se han dirigido á esta Suprema Corte, por memorial de fecha veintinueve de Julio del presente año, en solicitud de la suspensión del Decreto número 329, dictado por el señor Gobernador del Departamento del Tolima, con fecha doce de Abril, también del año en curso, sobre monopolio del aguardiente de caña y sus compuestos.

"Yá esta corporación ha dado su fallo en el asunto, motivado por una solicitud que le fué elevada, con igual propósito, por algunos vecinos del Distrito de Ibagué.

"Así, pues, se dispone: estése á lo resuelto por la Corte, en acuerdo de veintinueve de Octubre último, y pásese en copia la petición de los vecinos de Mariquita al Honorable Consejo de Delegatarios.

"Notifíquese y publíquese."

Con lo cual se dió por concluído el presente acuerdo, que firman todos los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Nogueira—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CRIMINALES

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintisiete de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis.

El primer Ayudante general del Ejército, General Dimas Atuesta, á virtud, seguramente de algún denuncio privado, dió orden, con fecha siete de Febrero del presente año, al Comandante encargado del Estado Mayor de la 2.ª Columna de la 1.ª División, Benjamín Lizaraso C., para que procediera á esclarecer el hecho de la extracción de la suma de setecientos treinta y siete pesos veinte centavos ($ 737-20 centavos), que se aseguraba había tenido lugar el treinta y uno de Enero último, de la caja de la Habilitación del Batallón 23 de Infantería, estacionado en la ciudad de Tunja, cuya caja estaba á cargo del Habilitado, Teniente Cecilio Zamudio. Practicada la averiguación en los términos dispuestos por aquél Jefe, apareció como autor principal de la extracción el Comandante de dicho Cuerpo, Tenienfe-Coronel Lisandro Leal, y como cómplice, el Ayudante Mayor del mismo Cuerpo, Capitán Alejandro Castro N.; siendo de advertir que, según resulta de las expresadas diligencias, todos los Jefes y Oficiales del citado Batallón, inclusos el Comandante Leal, el Coronel Aristides Calderón T., sucesor de aquel en el mando, el Capitán Castro N. y el Habilitado Zamudio, recibieron en calidad de préstamo, como se dijo después, una parte proporcional del sueldo correspondiente á cada uno, á sabiendas de que procedía de la cantidad indebidamente extraída.

Antes de esto, en la noche del treinta y uno de Julio del año próximo pasado, fué abierto con alguna llave, el candado que aseguraba la puerta de la pieza del Habilitado entonces, Teniente Francisco Vásquez, fracturada la caja, al parecer con una bayoneta, y robada la cantidad de ciento ochenta y cinco pesos ochenta centavos ($ 185-80 centavos). Los testigos creen que los responsables de este hecho podían ser el Comandante Leal, por no haber dictado oportunamente ó con el interés que el caso exigía, las providencias conducentes á la averiguación del delito, pareciendo mas bien que procuraba favorecer al verdadero delincuente; el Habilitado Vásquez, contra quien, al decir de los testigos, había el rumor de que estaba alcanzado en los fondos que manejaba, por lo cual opinaban que en todo esto no hubo sino una simulación de robo; y el Capitán Julio Rincón, que fué quien ocupó el puesto de Vásquez, como oficial de la guardia de prevención en las horas en que tuvo lugar el robo, á consecuencia de haber sido invitado éste, por el Teniente-Coronel Abelardo Pedreros, á una cena que tuvo lugar en el Club Boyacense de la dicha ciudad de Tunja. Aquí debe también advertirse que, á virtud del examen que se hizo, resultó que las llaves de las habitaciones de los Capitanes Castro N. y Julio Caro y del Teniente Juan N. Vanegas, le hacian perfectamente al candado de la pieza en que se encontraba la caja de la Habilitación.

Todo lo expuesto en el aparte anterior consta de las nuevas diligencias que, de orden del ciudadano General en Jefe, se empezaron á practicar en Abril del presente año, por no haberse podido obtener noticia alguna del paradero del sumario primitivo.

El Teniente Juan N. Vanegas, que funcionó como Secretario en esas primeras diligencias, según lo expresa en su declaración de fojas 6.ª vuelta y frente de la 7.ª, cuaderno 2.°, asegura que ellas fueron entregadas al Teniente Coronel Pedreros, el cual desempeñaba las funciones de Ayudante de la Comandancia general; y consta también de la nota del Comandante Calderón T., dirigida en once de Abril último al ciudadano General en Jefe, que la remisión se hizo en cuatro de Agosto de mil ochocientos ochenta y cinco, al Comandante general de la División (fojas 2.ª cuaderno id).

El Teniente-Coronel Pedreros, afirma que el sumario se devolvió al Comandante Leal, el cual corrobora este dicho en su declaración de fojas 20, cuaderno id.; pero agregando que habiéndose separado de Tunja con ocasión del servicio, dejó el expediente encima de la mesa de la Comandancia, llevando consigo la llave de la pieza; que encontrándose en Leiva, le mandó pedir la llave el Ayudante Mayor para buscar unos documentos; que la remitió con el Sargento Enrique Vargas, el cual la entregó al Capitán Castro N., quien abrió la puerta y entró en compañía del Teniente Vásquez, y por último, que cuando regresó á Tunja en Noviembre de aquel año, yá no encontró el sumario en donde lo había dejado.

El Capitán Castro N., en su declaración de foja 22, cuaderno id., manifestó que ignoraba si el sumario había quedado en el Estado Mayor ó en la Comandancia.

La Corte no puede, en el estado en que se encuentra esta causa, entrar en apreciaciones acerca del mérito que presten las anteriores declaraciones, ni de los que puedan ó deban reputarse como autores de la ocultación, extravío ó pérdida del expresado sumario; y sea que sobre todos los hechos que quedan relacionados, debiera ampliarse la averiguación hasta dejarlos perfectamente esclarecidos, ó sea que respecto de ellos y de otros abusos imputados al Comandante Leal, á que se refiere el señor Auditor de guerra en la parte de su dictamen corriente á foja 45, cuaderno id., no se pudieron adelantar las diligencias, es lo cierto que, estimando el Jefe sustanciador perfeccionados los correspondientes juicios informativos, dictó el auto de trece de Agosto del presente año, de acuerdo en todo con el concepto del señor Auditor, deduciendo al Comandante Leal el cargo de abuso de autoridad, consistente en haber tomado de la caja de la Habilitación la cantidad de que al principio se ha hecho mención, y al Capitán Alejandro Castro N., el de complicidad en el mismo delito, que se consideró ser el que castiga el artículo 1,558 del Código Militar.

En el citado auto se sobreseyó al mismo tiempo *respecto de todos los otros cargos*, sin que pueda con seguridad deducirse, si éstos cargos eran los que se referían únicamente á los acusados, según el mérito de la actuación, ó también los que podían corresponder á los demás que resultaban sindicados de otros delitos, ó de los mismos que dieron lugar al juzgamiento.

Elevado el expediente al conocimiento del ciudadano General en Jefe, "para que determinara la manera de formar el Tribunal que debía conocer en definitiva en segunda instancia," y para las ulteriores providencias, por no pertenecer los oficiales acusados á ningún Cuerpo de División y estar considerados como del cuartel general del Ejército, dicho ciudadano General dictó la providencia del mismo día trece de Agosto, por la que resolvió que, no teniendo nada que actuar en el proceso, se devolviera éste al Juez sustanciador para que lo continuara hasta su legal terminación.

La Corte cree que en este estado el negocio, el ciudadano General en Jefe debió providenciar acerca de uno de estos dos puntos: ó devolver el expediente al Juez sustanciador para que, en cumplimiento del artículo 1,515 del Código Militar dispusiera *la consulta del auto de sobreseimiento*, ó proceder de oficio á examinar dicho auto, puesto que esta es una atribución suya indispensablemente legal, en virtud de la cual le habría impartido su aprobación, ó revocádodo ó reformádolo en los términos á su juicio convenientes, evitando de ese modo que se dividiera la continencia de la causa.

A virtud de la terminante resolución que se acaba de expresar, el Jefe sustanciador sujetó sus procedimientos á la tramitación prevenida por la ley militar, hasta que convocado el Consejo de guerra de Oficiales Generales, se pronunció la sentencia de 1.° de Septiembre del año en curso, condenando al Comandante Leal, previa calificación de su culpabilidad en tercer grado, á sufrir la pena de arresto por el término de tres meses, contados desde el treinta de Agosto último en que empezó su detención, y al pago de las costas procesales; y absolviendo la Capitán Castro N. del cargo por que fué llamado á juicio.

Remitido de nuevo el expediente al ciudadano General en Jefe, para los efectos de la última parte del artículo 1,508 del respectivo Código, puesto que ningún recurso se interpuso contra la sentencia, dicho Jefe, léjos de haber entrado á considerar el sobreseimiento pendiente, dictó la resolución de seis de Septiembre, aprobando en todas sus partes la mencionada sentencia, disponiendo que la pena impuesta al reo se sufriera en el principal de la primera Columna de la Guardia Colombiana, cuyo cuartel-general está en Cipaquirá, mandando que se compulsase copia íntegra del referido fallo para publicarlo en el *Diario Oficial*, y de su parte resolutiva para hacerlo en la orden general del Ejército, y por último, lo cual implica una verdadera contradicción, que se remitiera toda la actuación á esta Superioridad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo antes citado.

Cualquiera que sea la irregularidad que se haya observado en este procedimiento, la Corte estima, después de detenida deliberación y una vez que no se ha incurrido en ninguna de las nulidades que determina el artículo 1,536 del Código Militar, que debe entrar á ocuparse en lo principal del asunto; y sustanciada como ha sido la consulta en esta segunda instancia en los términos legales, se tiene en consideración para resolver:

1.° Que el delito de abuso de autoridad por que fué llamado á juicio, como autor principal, el Comandante del Batallón 23 de Infantería, Teniente-Coronel Lisandro Leal, está superabundantemente comprobado, no sólo con las declaraciones de un número plural de testigos que concuerdan en el hecho y sus circunstancias y en el delincuente, sino por la confesión clara del mismo acusado, el cual conviene en que tomó de la caja de la Habilitación del expresado cuerpo la cantidad de que se hace mención al principio de esta sentencia.

2.° Que aunque el acusado alega en justificación de su procedimiento, que no tomó ó extrajo la expresada suma para invertirla en su propio provecho ni para algún uso particular, sino para pasarla á otra caja denominada *del Cuerpo*, á fin de atender con ella á ciertas necesidades de la fuerza pública, como reparación de cuarteles, composición de correajes, adquisición de faroles etc., etc., á que el Gobierno no puede ordinariamente atender, semejante disculpa es enteramente inadmisible, como que pugna con las disposiciones de los artículos 232 y 253 del Decreto Ejecutivo número 660 de 1881, orgánico de la prestación de varios servicios militares etc., etc.

3.° Que de autos consta que la cantidad de que se trata, lejos de haberse invertido exclusivamente en los objetos antes expresados, sirvió también para hacer préstamos á varios oficiales, entre los cuales figura el acusado por la cantidad de cien pesos.

4.° Que si á los funcionarios que tienen á su cargo ó de alguna manera intervienen en el manejo de los dineros públicos, les fuera lícito atender con ellos á otras necesides del servicio nacional, distintas de aquellas á que están expresamente destinados por las leyes ó reglamentos del Poder Ejecutivo, lo cual, al contrario constituye un hecho verdaderamente punible, al tenor de lo dispuesto en el artículo 345 del Código Penal de la República; el importante Ramo de la Hacienda pública no sería sino un completo desorden, inagotable fuente de escandalosos fraudes.

5.° Que estas mismas consideraciones son aplicables en lo substancial al Capitán Alejandro Castro N., principalmente cuando no se ha comprobado que la suma en cuestión se tomase con acuerdo y consentimiento del Consejo Administrativo, cuando la sustracción se hizo á sabiendas de que era un procedimiento ilegal, y cuando el referido Capitán también se aprovechó por vía de préstamo de las consecuencias del delito; y

6.° Que no se ha comprobado la existencia de circunstancia alguna que atenúe la gravedad del abuso cometido, mientras que, al contrario, la habilidad y conocimientos de los acusados y la frecuencia con que se cometen estos hechos son circunstancias

que agravan la criminalidad de los reos, sin que, por lo mismo, haya debido aplicarse la pena menos grave de las que permite la ley.

Por todas estas consideraciones, la Corte Suprema nacional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, reforma la sentencia consultada, condenando al Teniente-Coronel Lisandro Leal y al Capitán Alejandro Castro N. á sufrir las penas de diez y ocho meses de prisión, el primero, como autor principal, y doce meses de la misma pena el segundo, como cómplice del delito por que se les llamó á juicio; pena que sufrirán en la casa Penitenciaria de Tunja, en cuya ciudad se cometió el delito, lo cual está de acuerdo con lo que dispone el artículo 1,660 referente al 1,558 del Código Militar. Los reos sufrirán también, conforme al artículo 29 del Código Penal de la República, las penas de privación de todo destino, cargo y empleo público nacional y de toda pensión pagada por el Tesoro de la República, así como la suspensión de los derechos políticos mientras dure la pena, con costas é indemnización de daños y perjuicios.

Pero constando que los acusados han estado detenidos desde el treinta y uno de Agosto del presente año, debe deducírseles de la pena principal el tiempo que hayan permanecido en dicha detención.

Y por cuanto de autos resulta que hubo pérdida de dinero de la caja de un Habilitado, y pérdida del sumario que comprobaba este delito, ordénase al ciudadano General en Jefe que remitió los autos en consulta, ó á quien lo haya reemplazado, que haga compulsar copia de lo conducente y con ella mande averiguar todo lo relativo á dichos delitos y sus responsables.

Notifíquese, cópiese, publíquese en el *Diario Oficial* y devuélvase.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

La anterior sentencia fué publicada en audiencia del día veintisiete de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Ramón Guerra A., Secretario.

En dos de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la sentencia que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintisiete de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—El día cinco de Abril del año próximo pasado, Anacleto Molina se presentó ante el Alcalde del "Pitalito," denunciándole que en los primeros días de Febrero del mismo año había ocurrido á su establecimiento comercial Pantaleón Figueroa, proponiéndole darle en prenda por la suma de noventa centavos que deseaba obtener de él, unos troqueles de fabricar monedas de á dos y medio centavos, proposición que el denunciante no sólo no aceptó, sino que reconvino al proponente por el hecho punible que constituía la existencia de aquellos instrumentos, haciéndole al mismo tiempo la intimación de que daría cuenta á la autoridad competente.

El funcionario de instrucción practicó debida y oportunamente el examen de los testigos citados por el denunciante, tomó al sindicado la declaración de inquirir, y dispuso, por medio de dos peritos, el reconocimiento de los troqueles encontrados en poder del presunto falsificador.

Dada cuenta de las diligencias al Juez de primera instancia, que lo fué el segundo del Circuito de Garzón, y encontrando éste en ellas la prueba requerida por la ley, en cuanto á la existencia del delito y de su responsable, dictó, de acuerdo con el Agente del Ministerio público, el auto de primero de Diciembre del citado año, por el cual llamó á juicio al sindicado, como autor principal del delito que castiga el artículo 248 del Código Penal.

La causa se siguió desde entonces, observando puntualmente la tramitación establecida para los juicios criminales ordinarios, hasta haberse dictado la sentencia condenatoria de quince de Marzo último, que ha sido remitida en consulta á esta Superioridad con el expediente respectivo.

Sustanciada tal consulta conforme á la ley, se observa, en primer lugar, que no se ha omitido ninguna de las formalidades sustanciales que según el artículo 1,670 del Código Judicial de la República producen nulidad en los asuntos de la naturaleza del presente, pues aunque el defensor del acusado hizo notar en su alegato de foja 17, que el auto de cuatro de Febrero, foja 15 vuelta, en que se mandaron practicar las pruebas solicitadas en escrito de foja 15, no estaba autorizado por el Secretario, ni había sido notificado al señor Fiscal, ni constaba, en fin, que se hubiese librado el despacho cometido al Juez del vecindario de los testigos para el examen de éstos, todo lo contrario resulta claramente del expediente; pues el auto mencionado está autorizado con la firma del Secretario *Juan Antonio Castillo*, á continuación está extendida la diligencia de notificación firmada con firma entera por el Fiscal *Joaquín González P.*, y á fojas 20 á 21 existe el despacho, de fecha diez y seis de Febrero, cometido al Juez del Hobo y cumplido por éste en cuanto le fué posible. Estas omisiones, ademas, no producirían nulidad, aún en el caso de que se hubiera incurrido en ellas, y sólo darían lugar á la responsabilidad del causante.

Entrando, pues, como debe entrarse á censurar la sentencia consultada, la Corte Suprema considera al efecto:

1.° Que los peritos Moisés Delgado y Manuel María Pasos, nombrados para el reconocimiento de los troqueles, aseguran que éstos, "compuestos de dos pedazos de fierro ó acero en forma de punzones, tienen en cada uno de sus extremos un sello ó grabado en bajo relieve que representa cada uno los tipos de un cuartillo en su anverso y reverso; habiendo reconocido además otro punzón que tiene en uno de sus extremos una circunferencia cóncava; que esas piezas, según lo que ellas tienen grabado, dejan comprender perfectamente que con ellas se pueden amonedar cuartillos, aunque de tipo ordinario, por la imperfección del mismo sello; *que no se puede concebir que ellos puedan tener un uso distinto del de la amonedación*; que la granada del sello tiene la fecha del año de mil ochocientos ochenta y uno, y el otro sello tiene el nombre de "Popayán" y grabadas nueve estrellas."

2.° Que el acusado, en su declaración de inquirir confesó que los troqueles le pertenecían; que en el mes de Enero, pasando por el Palmito, *se encontró ese cuño envuelto en el mismo pañuelo que tiene ahora*; que fué verdad que en los últimos días del citado mes ó á principios de Febrero, *fué el exponente á empeñarle los troqueles ó cuño de hacer cuartillos, que se le ponen de presente, al señor Anacleto Molina, por unos cuatro reales*, y que fué cierto que dicho señor le advirtió que constituía un delito el hecho *de tener en su poder dicho cuño*;

3.° Que Manuel Muñoz, el tullido, en su declaración de foja 2.ª, manifestó que el acusado, á quien tuvo hospedado en su casa, le hizo saber á los pocos días, que era hábil en amonedar cuartillos, presentándole, al efecto, como cuatro reales en esta moneda y el troquel con que los hacía;

4.° Que Estanislao Rojas, á fojas 4.ª vuelta, y María de Jesús Quintero, á fojas 5.ª id., exponen, el primero, que invitado por Manuel Muñoz para que fuera á ver lo que Figueroa estaba haciendo, pasó á la herrería de éste *en donde vió un tiesto que contenía unos pocos cuartillos puestos en blanquimento*, alarmándose mucho por la impavidez con que el acusado hacía todo eso, etc.; y la segunda, que Pantaleón Figueroa llevó á su casa como cuatro cuartillos sellados pero sin platear, porque estaban negros, con el objeto de comprarle aguardiente y pan y los dejó en pago, sin que la declarante hubiera podido salir de ellos, hasta que al fin se le perdieron, etc. etc.;

5.° Que las pruebas anteriormente relacionadas, las cuáles no han sido contradichas, ni debilitada su fuerza en el plenario de la causa, contienen las claras y precisas condiciones que exige el artículo 1,620 del Código Judical, para considerar plenamente probado el delito que ha motivado el juzgamiento de Figueroa, puesto que se han encontrado en su poder, reconociéndolo él mismo así, instrumentos adecuados, y de una manera exclusiva, á la fabricación de la moneda nacional de plata, de á dos y medio centavos denominada "cuartillo," y puesto que con el dicho de los tres testigos mencionados en los números 3.° y 4.°, se ha acreditado la existencia de esa moneda falsa, en poder del acusado y en la misma época en que se cometió el delito, siendo de notar que la conformidad del reo con el fallo que lo condena, y la solicitud del defensor en esta segunda instancia,

para que se le aplique la menor pena posible, vienen á constituír el reconocimiento implícito de la culpabilidad de aquél; y

6.° Que á favor del reo existen las circunstancias atenuantes de su falta de ilustración, y de haber confesado con sinceridad que los troqueles le pertenecían.

Por lo tanto, la Corte Suprema de la Nación, oído el concepto del señor Procurador general, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma en todas sus partes la sentencia consultada, debiendo sufrirse la pena en el Panóptico de esta ciudad.

Pero por cuanto se infiere que el reo ha debido estar detenido desde el veintidós de Abril del año próximo pasado, si esto es así, debe deducirse de la pena de tres años de reclusión que le impone dicha sentencia, todo el tiempo de la expresada detención,

El Juez de la primera instancia procederá, sin pérdida de tiempo, á practicar las diligencias que indica el señor Procurador general, para averiguar si por parte de Manuel Muñoz se ha incurrido en alguna responsabilidad, por no haber denunciado oportunamente el delito.

El mismo Juez, al dictar en lo sucesivo algún auto de proceder, procurará ajustar su conducta á lo que terminantemente dispone, en su tercer aparte, el artículo 1,542 del Código Judicial.

Notifíquese, cópiese, publíquete en el *Diario Oficial* y devuélvase el expediente al Juzgado de su procedencia.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del veintisiete de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, se publicó la anterior sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En dos de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la sentencia que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintinueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—Con motivo de denuncia, que no figura en este proceso, dada al Gobernador del Distrito Federal y transmitida por éste al Prefecto general de Policía, según se dice en la nota oficial de diez de Febrero del año en curso (foja 1.ª), fué comisionado el Inspector 1.° del Ramo para allanar la casa de Wenceslao Corral, con el fin de descubrir si había en ella aparatos, troqueles, volantes, etc., para fabricar moneda falsa, y para que que en caso de que esto resultara, adelantara la investigación.

Allanada la casa, se encontraron en una de sus piezas y dentro de una caja, varias monedas de níkel nuevas, dos troqueles con el sello de distintas piezas de níkel, y otros muchos aparatos que, en concepto del funcionario de instrucción podían servir para fabricar monedas falsas, todo lo cual fué embargado para los fines consiguientes: y como se supiese que Rafael Mafla era quien trabajaba en la pieza allanada, se ordenó su aprehensión y se procedió á recibirle su declaración indagatoria.

En esta dijo que iba algunas veces á la oficina de platería de Wenceslao Corral y trabajaba en ella; que los troqueles de acero los hizo él, pero no las monedas; que no sabe quién haría ni de quién sean dos piezas, de las cuales la una dice "Libertad" y la otra "Dios" "Ley"; que los punzones con letras son suyos y también los troqueles, una tarraja y los demás objetos, excepto una rielera, un martillo y otras dos piezas, y á tiempo de firmar la declaración agregó que las monedas son legítimas, que los punzones están sin templar y sin uso y que las piezas marcadas "Dios," "Ley" y Libertad" son suyas y *las hizo por curiosidad.*

Nombrados José María Hinestrosa y Bernardino Castro para que, como peritos reconocieran los objetos aprehendidos, expusieron, de común acuerdo, que habiéndolos examinado escrupulosamente, han encontrado un par de troqueles de centavo y cuarto tallados, que no están templados; otro troquel para el real y para los dos y medio centavos de cobre; siete trozos de acero preparados como para troqueles de diferentes tamaños; un par de cerrillos como para acordonar monedas de cincuenta centavos; dos punzones, uno del número dos y otro del gorro, para la moneda de cobre de dos y medio centavos; una colección de punzones, entre los cuales hay algunos muy parecidos á los que usan en la Casa de moneda de esta ciudad para piezas de cincuenta centavos; un aparato de acordonar monedas menores ó *en liso;* dos monedas de níkel de á dos y medio centavos; dos de cobre de igual valor, y dos de centavo y cuarto de níkel, todas legítimas, y otros instrumentos apropiados para la joyería ó platería.

El funcionario de policía, encargado de investigar el delito, decretó el arresto de Mafla y mandó pasar las diligencias practicadas y los objetos reconocidos al Prefecto general, quien lo remitió todo al Juzgado del Circuíto. Hecho el repartimiento, el Juez 5.° á quien tocó conocer del negocio dispuso, á pedimento del Agente Fiscal, que se ampliaran las diligencias practicadas, particularmente en lo relativo á la calidad y destino de los instrumentos encontrados; y llamados los peritos mencionados á expresar sobre estos puntos su concepto, expusieron: que aunque los instrumentos ó troqueles que reconocieron y tenían á la vista no son perfectos, se aproximan mucho á ser buenos; que las piezas de níkel que se amoneden con ellos, no será fácil que circulen entre personas conocedoras de esa moneda, pero sí entre aquellas que no conozcan su perfección; que los troqueles de níkel no han sido usados; pero que los cerrillos que sirven para poner las letras y acordonar pesetas de á cinco, sí están bastante usados y muy bien hechos; que las monedas de vellón y de níkel encontradas, son buenas, excepto una de níkel de á dos y medio centavos que es falsa, y también una de cobre; que los cerrillos que dicen "Dios," "Ley" y "Libertad" y sirven para acordonar son de acero, pero que monedas que tengan esas palabras no han reconocido; y que la colección de instrumentos ó materiales está incompleta y con ella no se puede fabricar monedas.

Pasadas de nuevo las diligencias al Juez del Circuíto, éste las juzgó incompletas y dispuso su ampliación. Llamó al efecto á los peritos á practicar un nuevo reconocimiento, sometiéndolos á un interrogatorio, dirigido á obtener de ellos un concepto más claro, y con tal motivo expresaron: que el cerrillo de acero en que se leen las palabras "Dios," "Ley", tiene estampada una palmita, y el que dice "Libertad," sirve única y exclusivamente para la fabricación de monedas, sin que puedan tener ningún otro uso útil; que el aparato para acordonar monedas en liso y los dos troqueles marcados para sellar monedas de uno y cuarto centavos, semejantes en un todo á las de níkel de igual valor, mandadas emitir por el Gobierno nacional, tampoco pueden tener ningún otro uso que el de la fabricación de monedas, y que todos los demás enseres reconocidos, aunque no son exclusivamente útiles é indispensables para la fabricación de monedas, por cuanto pueden aplicarse á otros objetos, pueden formar un complemento necesario de los anteriores.

Practicada la diligencia de que se acaba de hablar, se le recibió declaración indagatoria á Wenceslao Corral, y en ella dijo: que entre los objetos encontrados en la pieza de su casa en que trabajaba Rafael Mafla, á la cual no entraba el declarante hacía cuatro meses, por causa de enfermedad grave, le pertenecía el aparato designado por los peritos con el nombre de aparato para acordonar monedas en liso, y veintidós monedas grandes de cobre, de á décimo de real, que tenía destinadas para ligar el oro de que hacía uso en su oficina de platería, añadiendo que dicho aparato lo construyó para hacer aretes para señora, y que para comprobar que no puede tener otro objeto, lo sometió á una prueba hecha por él mismo en presencia de los peritos, y pedía que éstos lo sometieran á otra de acordonación de moneda en liso, á fin de ver si da el resultado indicado por ellos.

Ambos ensayos se practicaron en la Casa de moneda, en presencia del Juez y de su Secretario, y resultó satisfactoriamente demostrado, que el aparato dicho es propio para hacer aretes de oro, en lo cual convinieron los peritos, rectificando su dictamen en el sentido de que ese instrumento, á pesar de su imperfección, no sólo sirve para acordonar moneda en liso, sino para la construcción de aretes ó zarcillos. Sometido en seguida

á la acordonación de una moneda de níkel, resultó también adaptable para esto.

El Agente Fiscal, á quien se pasó el sumario para lo de su cargo, fué de concepto que se llamara á juicio á Mafla por tentativa del delito de fabricación de moneda; pero el Juez, considerando cometido el delito de falsificación, que castiga el artículo 246 del Código Penal de la Nación, "declaró con lugar á formación de causa criminal, por los trámites ordinarios contra Rafael Mafla, por el delito grave de construcción fraudulenta de troqueles y de otros instrumentos que sóla y exclusivamente sirven para la fabricación de monedas," y sobreseyó respecto de Wenceslao Corral, disponiendo que en esta parte se consultara el auto oportunamente con esta Superioridad.

En cumplimiento de la ley se llamó á Mafla á rendir confesión y sostuvo en ella, que los troqueles de acero y las dos piezas del mismo metal que llevan las palabras "Dios," "Ley" y "Libertad," las construyó para hacer botones, mancornas, zarcillos y otros adornos, y que los punzones que tienen letras y números los hizo para construír sellos de nombres y fechas.

En el término señalado para dar pruebas, pidió el defensor de Mafla que se nombraran reconocedores de los troqueles, para que expresaran si tenían temple suficiente para funcionar, y si se ha hecho uso de ellos, y presentó un botón para que los mismos perites expusieran si era fundido ó grabado, y si llevaba el sello de la antigua República de Colombia. El Juez llamó á practicar la diligencia á los mismos que hicieron los anteriores reconocimientos, quienes fueron de concepto que los troqueles no tenían el temple suficiente para poder funcionar, ni han sido usados, y, que el botón no es fundido sino grabado, y se ve en él el mismo sello que se usaba en la antigua República de Colombia.

Interrogados dichos peritos por el defensor para que dijeran si los troqueles encontrados sólo podían servir para fabricar monedas, y nó para otros usos, contestaron que racionalmente hablando, sólo sirven para la acuñación de monedas, por tener el uno grabado el anverso de la moneda, y el otro el reverso, pero que bien pueden hacerse botones, mancornas, prendedores, etc., á voluntad del fabricante, que tengan el sello de la moneda respectiva, y en cuanto al uso de los troqueles, digeron que pueden aseverar que con ellos no se han sellado todavía monedas, tanto porque están sin templar como porque no se les nota uso alguno.

Celebrado el juicio, el Juez declaró á Rafael Mafla responsable del delito por que se le ha juzgado, y lo condenó, previa la calificación del mismo delito en tercer grado, á dos años de prisión en el Panóptico de esta capital, y á las demás penas accesorias; de cuya sentencia interpusieron Mafla y su defensor recurso de apelación para ante esta Superioridad.

Recibida la causa y abierta á prueba, á pedimento del segundo, se han practicado las que tuvo á bien solicitar, de las cuales la principal consiste en un nuevo reconocimiento de los objetos aprehendidos, hecho por los peritos Rafael Nieto París y Ramón Salgar, cuyo resultado es el siguiente:

1.° Que los troqueles y cerrillos no sirven para fabricar monedas, por carecer del temple y demás condiciones que para este objeto se requieren; pero que pueden servir como materia prima qara hacer sellos y para acordonar tornillos etc.; y

2.° Que esos instrumentos no tienen señales de haber sido usados y de que con ellos se hayan fabricado monedas.

Oídos los alegatos de las partes, de las cuales la del señor Procurador general pide que se condene á Mafla, á la pena señalada en el artículo 256 del Código Penal, calificándose el delito en segundo grado, y la del reo que se absuelva á éste; la Corte, para fallar en definitiva, considera:

1.° Que aunque el defensor ha alegado, y es cierto, que el auto en que se declaró con lugar á formación de causa, no se dictó de conformidad con lo dispuesto en la última parte del artículo 1,542 del Código Judicial, que no permite concretar el cargo como se hizo en dicho auto, sino que ordena que se formule en términos generales, esa circunstancia no induce nulidad, atendido lo dispuesto en el artículo 1,670 de dicho Código;

2.° Que siendo el hecho erigido en delito por el artículo 256 del Código Penal el de construír, vender ó introducir sin orden del Gobierno, troqueles ú otros instrumentos que *sóla y exclusivamente sirvan para la fabricación de monedas*, debe examinarse si los construídos por Mafla se encuentran en este preciso caso, porque si difieren de él, ó, en otros términos, si los instrumentos pueden tener otra aplicación, el cargo desaparece por faltar el requisito indispensable que lo constituye;

3.° Que la única prueba á que ha podido recurrirse para llegar en este punto al descubrimiento de la verdad, es la del reconocimiento por medio de peritos, y yá se ha visto por la fiel relación que se ha hecho de los conceptos emitidos por los que de oficio se nombraron en la primera instancia, que ellos no ofrecen una prueba testimonial convincente, como la que requiere el artículo 1,600 del Código Judicial en su primera parte; porque en el primer reconocimiento se limitaron los peritos á hacer la relación de los objetos encontrados, omitiendo expresar los usos á que pudieran destinarse; en el segundo afirman que esos instrumentos no son perfectos, que los troqueles no han sido usados, pero sí los cerrillos, que las monedas encontradas son buenas, excepto una de níkel y otra de cobre, de que no hablaron en su primer reconocimiento, y que *la colección de instrumentos está incompleta y con ella no se puede fabricar monedas;* en el tercero fueron yá de concepto que los cerrillos, los dos troqueles, más el aparato para acordonar monedas en liso, sirven única y exclusivamente para la fabricación de monedas y no pueden tener otro uso útil, concepto que está en abierta contradicción con lo que afirman en la parte final del segundo reconocimiento, y con el ensayo verificado en la casa de moneda por Wenceslao Corral, cuyo resultado les hizo rectificar lo que afirmaron, con relación al aparato para acordonar monedas en liso: en el cuarto, digeron que con los troqueles bien pueden hacerse botones, mancornas etc., á voluntad del fabricante, que tengan el sello de la moneda respectiva; todo lo cual manifiesta que los primeros peritos han vacilado en punto al verdadero destino de los instrumentos que han reconocido, y que sus dictámenes están muy lejos de formar plena prueba sobre el punto principal materia de la investigación;

4.° Que no sucede así con el concepto emitido por los peritos nombrados en la segunda instancia, porque estos han dicho clara y terminantemente que los troqueles y cerrillos no sirven para fabricar monedas, por carecer del temple y demás condiciones que para esto se requieren; pero que pueden servir como materia prima para hacer sellos y acordonar tornillos;

5.° Que, en consecuencia, falta la comprobación del cuerpo del delito, que consiste en construír troqueles ú otros instrumentos, que sóla y exclusivamente sirvan para la fabricación de monedas;

6.° Que aun en el supuesto de que los primeros peritos hubieran sido explícitos sobre esto, habiendo, como hay, otros dos que afirman lo contrario, habría por lo menos, verdadera duda sobre la existencia del delito y la culpabilidad del sindicado, y en tal caso, no se podría condenar á éste, por ser necesario para ello que haya prueba plena ó completa de la existencia de un hecho punible por la ley y de la criminalidad del procesado, según lo dispuesto en el artículo 1,570 del Código Judicial;

7.° En fin, que no pudiendo declararse con lugar á formación de causa criminal contra alguno, sin la prueba requerida al efecto por el artículo 1,542 del Código Judicial, razón hubo para sobreseer en el procedimiento respecto de Wenceslao Corral.

Por estas consideraciones, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, absuelve á Rafael Mafla del cargo por que se le llamó á juicio; y revoca en consecuencia la sentencia condenatoria, dictada contra él por el Juez 5.° del Circuíte de Bogotá, en catorce de Agosto último. El auto de sobreseimiento consultado, pronunciado en favor de Wenceslao Corral, lo confirma.

Notifíquese este fallo, déjese copia de él, publíquese y devuélvase el proceso al Juez de primera instancia, para los fines consiguientes.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del veintinueve de Noviembre de mil ochocientos ochocientos ochenta y seis, se publicó la anterior sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En dos de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la sentencia que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, nueve de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—El señor Procurador general de la Nación apeló del auto de la Oficina General de Cuentas, dictado en doce de Octubre del presente año, por el cual fué absuelto el Administrador principal de Hacienda nacional de Ibagué, Pedro José Caicedo Cuéllar, de los cargos liquidados contra este responsable en primera instancia, por el Contador encargado de la Sección 2.ª, consistentes en las siguientes partidas, á virtud de glosas hechas á las cuentas de aquella Administración, correspondientes á los meses de Octubre á Diciembre de mil ochocientos ochenta y tres y de Enero á Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro; á saber:

1.° Por falta de los comprobantes de haber solicitado de las respectivas Secretarías de Estado la legalización de las anticipaciones hechas por el responsable en varios Departamentos administrativos; se le dedujo el alcance de cincuenta y ocho mil ochocientos diez y siete pesos cuarenta y cinco y medio centavos ..... $ 58,817-45½

2.° Por cuatrocientos cinco pesos procedentes de la falta de presentación de los contratos celebrados para la administración de las Escuelas normales de ambos sexos establecidas en Ibagué: 405 ...

3.° Por dos mil noventa y tres pesos cuarenta y cinco centavos deducidos contra Caicedo, por no haberse acompañado como comprobante del cargo de esa suma, que fué remitida por la Tesorería general á la Administración subalterna de Hacienda nacional de Honda, con cargo á la principal de Ibagué, de la cual era dependiente, la nota de recibo acusado á la Tesorería..... 2,093 45½

4.° Por doscientos diez pesos deducidos por no haberse acompañado el comprobante de la aprobación dada por el Poder Ejecutivo al contrato celebrado en Honda entre Pedro Travecedo, Administrador subalterno de Hacienda, y Rudesindo Quintana para conducir á esta Capital una batería de artillería del parque nacional; y..... 210 ...

5.° Por treinta y cuatro pesos procedentes de multas impuestas por dicha oficina general al responsable, por demoras en la rendición de sus cuentas..... 34 ...

Suma..... $ 61,559 90½

El fallo apelado absolvió á Caicedo Cuéllar de estos cinco cargos, por la suma de sesenta y un mil quinientos cincuenta y nueve pesos noventa y medio centavos, y le declaró definitivamente responsable solamente por la cantidad de cien pesos, procedente de multas impuestas por la Sala de primera instancia, por falta de estampillas de timbre nacional en varios de los documentos comprobantes de la cuenta.

Substanciado el recurso en esta tercera instancia, el Ministerio público ha expuesto, en su vista del veintisiete de Noviembre próximo pasado, que, si interpuso apelación del auto de la Sala de segunda instancia de la Oficina General de Cuentas, fué por *la importancia de la cifra por la cual era absuelto el responsable*, y para examinar con la debida detención ante la Corte los fundamentos del fallo apelado, lo que no podía verificar al acto de la notificación de segunda instancia. Pero que habiendo hecho el debido estudio de los antecedentes, hallaba que ese auto estaba arreglado al mérito del expediente, y, pedía, en consecuencia, que fuera confirmado.

En efecto, el responsable presentó ante la Sala de segunda instancia de dicha Oficina, los comprobantes expedidos por los respectivos Ministros de Estado, de haber solicitado oportunamente, con las relaciones documentadas de las anticipaciones anotadas en las once cuentas de la Administración de Ibagué, relativas á los meses de Octubre de mil ochocientos ochenta y cuatro á Agosto de mil ochocientos ochenta y cinco, la legalización de esos gastos. Se vieron en el *Diario Oficial* los contratos cuya omisión se había notado y que dieron origen á la segunda partida de alcance por cuatrocientos cinco pesos. Se reconoció no haber justicia para el cargo tercero, puesto que se había dado entrada en el *Diario* á la remesa de la Tesorería general, y que si esta Oficina no había obtenido el recibo correspondiente de los dos mil noventa y tres pesos cuarenta y cinco centavos ($ 2,093 45 centavos), enviados á Honda, lo que no era natural hubiera sucedido; ella sería la llamada á cubrir su cuenta, exigiendo el respectivo acuse de recibo. Se admitió, con razón, que hecho el contrato de que trata el cargo cuarto, por orden del Poder Ejecutivo, era lógico inferir que el Administrador subalterno de Honda contaba con la tácita aprobación de ese contrato, celebrado para el transporte de elementos de guerra. Hallóse, por último, que hubo motivo de excusa para el retardo en la rendición de algunas cuentas mensuales; motivos por los cuales se alzaron al Administrador principal las multas con que había sido gravado por cantidad de treinta y cuatro pesos ($ 34).

Por lo demás, reconocida por el mismo responsable la omisión que tuvo en adherir algunas estampillas á varios documentos de su cuenta, no se le pudo exonerar del cargo de cien pesos ($ 100) que por tal omisión se le dedujo.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, administando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto apelado, en todas sus partes.

Notifíquese, cópiese, publíquese en el *Diario Oficial* y devuélvase la actuación al Presidente de la Oficina General de Cuentas.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En once de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, dos de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis.

En la noche del cinco de Septiembre de mil ochocientos ochenta y cinco, fueron sorprendidos por los Guardas de la Aduana de Riosucio, en el Municipio del Atrato, Departamento del Cauca, varios individuos, entre los cuales figuraban como Jefes, Manuel Recuero y José Ceballos, conduciendo en una embarcación varios bultos de mercancías de contrabando. No fueron aprehendidos éstos, ni se sabe la causa. A este respecto, sólo dice Ildefonso Ballesteros, uno de los Guardas (fojas 16—17) que Recuero y Ceballos los detuvieron (á los Guardas) para que pasara la *champa* que traía los baúles que contenían parte de los efectos del contrabando.

Dos de los individuos que conducían los géneros, que lo fueron Manuel José Vejarano y Agustín Medrano, declararon que Juan C. Olier, Alcalde á la sazón del Distrito de Riosucio, era el dueño de esas mercancías; uno de ellos declara que las descargaron en casa de Olier, y el otro dice que primero las pusieron en casa de José Ceballos, que era paje de la casa de Olier, y que después las trasladaron á la de este.

Por los dichos de algunos de estos conductores se sabe que el contrabando consistía en tres baúles cerrados, cuyo contenido ignoraban, ocho cajas de *breva* ó tabaco, una lata de aguarrás ó de Kerosino y una lata de pintura. Vejarano dijo (á fojas 21), que los baúles contenían mercancías, como camisas de lana, etc.;

pero (á fojas 39 vuelta) juró que no sabía cuál era el contenido de esos baúles.

No habiendo podido practicarse el avalúo, el Juez del Circuito del Atrato dictó un auto, con fecha veintisiete de Septiembre próximo pasado, por el cual suspende el procedimiento.

Apeló el Agente del Ministerio público de esa providencia, y por esta razón ha venido este negocio al conocimiento de la Corte.

Oído el señor Procurador es tiempo de resolver el recurso.

No es aceptable la resolución del Juez que suspende la investigación, porque no es posible yá hacer el avalúo de los objetos del fraude. Si no hubiera diligencias que practicar, declaración qué recibir, ni cita qué evacuar, debería haber sobreseído en el procedimiento, declarando sin lugar á seguimiento de causa, como lo dispone el artículo 1,543 del Código Judicial, aplicable á estos juicios por fraude á las rentas, por ministerio del artículo 1,844 del mismo Código; pero además de que faltan diligencias por practicar, de las cuales indica algunas el señor Procurador general, la ley provee el medio de castigar á los contrabandistas, aun cuando los objetos que constituyen el delito no hayan sido aprehendidos.

El artículo 328 del Código Fiscal dice:

"Cuando los objetos que se embarcan, descargan ó conducen fraudulentamente, no fueren aprehendidos, pero se probare que se cometió el fraude, el defraudador será obligado á pagar al Tesoro Nacional una cantidad igual al valor de dichos efectos, si este pudiere ser conocido, ó si nó, una multa de ciento á dos mil pesos, en razón del monto probable del valor de los efectos, deducido del número de bultos y demás datos que se obtengan relativamente al fraude."

Hay dos testigos que declaran, que vieron algunos de los artículos del contrabando y las cajas en que iban encerrados otros, y afirman que esos objetos pertenecían á Juan C. Olier.

Existe, pues, la prueba del cuerpo del delito y de que Olier es el autor. Debería, por consiguiente, ser llamado éste á juicio; pero como hay indicios, aunque leves, de que existen cómplices y tal vez otros autores, es preciso ampliar respecto de esas personas la investigación, pues nó se puede abrir causa á uno de los responsables y ordenar la ampliación del sumario con relación á los demás, como lo indica el señor Procurador. El artículo 1,420 del Código citado, prescribe que por un sólo delito ó culpa no se siga sino un sólo proceso. Se dividiría la continencia de la causa, si se siguiera otro procedimiento.

En consecuencia, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo en parte con la opinión del señor Procurador, resuelve:

Revócase el auto apelado.

El funcionario de instrucción practicará á la mayor brevedad posible, lo que indica el señor Procurador en su exposición de fecha veintidós de Noviembre último, bajo los números 1.°, 2.°, 3.° y 4.° y además, los siguientes:

1.° Ildefonso Ballesteros, con relación á su declaración de fojas 16, pregunta 7.ª, dice que Manuel Recuero era el Jefe del contrabando, pues él y Ceballos los detuvieron para que pasara la *champa* que traía el contrabando. Los demás Guardas José J. Hidalgo y Waldino Marrugo deben declarar sobre ese punto, y del mismo modo los conductores Manuel Padilla, Manuel José Vejarano y Agustín Medrano;

2.° Los Guardas citados dirán, por qué si sorprendieron es contrabando, no aprehendieron los objetos que lo constituían;

3.° Manuel Padilla manifestará en dónde descargaron los bultos de mercancías, de que habla en su declaración de fojas 25, y qué personas los recibieron;

4.° Agustín Medrano declarará, cómo supo que José Ceballos fué mandado por José Olier á decirles á los conductores del contrabando, que en la boca de "La Larga" estaba la comisión, como lo dice á fojas 32;

5.° Vejarano y Padilla dirán si es cierto, como lo afirma Medrano á fojas 32, que los bultos del contrabando fueron depositados primero en la casa de José Ceballos y después fueron trasladados á la casa de Juan C. Olier;

6.° Si fuere posible se practicará el avalúo de las mercancías.

El funcionario á quien se le encomienda esta ampliación, procederá con actividad, inteligencia y esmero, á fin de que quede de una vez esclarecido el hecho y descubiertos los culpables.

Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Manuel A. Sanclemente—Benjamín Noguera—Ramón Guerra A., Secretario.

En siete de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, diez de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—De este sumario, instruído con el fin de investigar el delito de homicidio perpetrado en la persona de Felipe Díaz, el diez y ocho de Enero de mil ochocientos ochenta y cinco, en el Distrito de Pinillos del extinguido Estado de Bolívar, resulta lo siguiente:

1.° Que en esa fecha salió de Barranquilla, en el vapor *Cartagena*, una fuerza rebelde conduciendo para el Banco unos elementos de guerra;

2.° Que al acercarse el vapor al pueblo de Pinillos, dispuso el que hacía de Jefe de la fuerza que una partida al mando de Medardo Villacob, saltara á tierra sin armas y sin uniforme militar, con el objeto de reclutar unos hombres para resguardar mejor el parque; y

3.° Que á tiempo en que se trataba de llevar á efecto el reclutamiento, huyó Felipe Díaz, y Villacob le disparó un tiro de revólver, causándole una grave herida, de la cual murió dos días después.

Según varios testigos vecinos del pueblo de Pinillos, la herida fué causada á tiempo en que Díaz huía y por detrás; según otros de los que componían la partida, Díaz, armado de un machete, atacó primero á Manuel García S., y habiendo ocurrido Villacob á defenderlo fué atacado también, y se vió en la necesidad de defenderse disparando su revólver sobre Díaz.

Sea de esto lo que fuere, de lo cual se hace mérito, con el fin únicamente de dar á conocer el negocio, el hecho es que el Juez de la Provincia de Monpox, considerando *político* el delito de que se trata, y comprendido al sindicado en la amnistía concedida por el Poder Ejecutivo nacional el veinte de Julio último, ha cortado todo procedimiento criminal contra Villacob y consultado su providencia con este Supremo Tribunal.

Cuando hizo la consulta y vino el expediente, regía el Capítulo 2.° del Título 3.° del Código Judicial de la Nación, que atribuía á la Corte el conocimiento, en última instancia, de las apelaciones ó consultas de los autos interlocutorios que en primera instancia dictaran los Jueces nacionales en negocios de su competencia; pero expedida la ley 61 de veinticinco del mes próximo pasado, sobre organización del Poder Judicial, ley que se ha publicado en el *Diario Oficial* del cinco del mes en curso, ha ocurrido novedad en punto á la jurisdicción de la Corte en negocios como el que ha motivado la consulta, porque entre las atribuciones que el artículo 21 de la nueva ley confiere á la Corte Suprema, no está comprendida la de resolver consultas de la naturaleza de la de que se trata, y porque dicha ley dispone expresamente en el artículo 99 que "las atribuciones conferidas á la Corte Suprema en el Código Judicial, y no asignadas á la misma en la Constitución ni en esta ley, serán ejercidas por los Tribunales Superiores de Distrito." Siendo esto así, no toca á la Corte Suprema, desde la publicación de la ley aludida, sino al Tribunal Superior del Departamento de Bolívar, el conocimiento y decisión de la consulta en referencia, y por lo tanto, resuelve la Corte que se le remita este sumario para lo de su cargo, dándose aviso de ello al Juez Superior de la Provincia de Monpox.

Notifíque esta resolación, déjese copia de ella y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera.—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En trece de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué el auto anterior al señor Procurador.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

DOCUMENTOS VARIOS JUDICIALES.

COPIA del auto dictado en el sumario seguido contra Francisco W. Putnam por el delito de abuso de confianza.

Tribunal Superior del Distrito Judicial del Departamento de Cundinamarca.—Bogotá, Marzo veintitrés de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos.—En el sumario que se instruyó á consecuecnia del denuncio dado por el señor Enrique Chaves, como Gerente del "Banco Popular," establecido en este Distrito, contra el señor Francisco W. Putnam, como Cajero que fué del mismo Banco, para averiguar la responsabilidad legal en que hubiese incurrido por los malos manejos de los caudales confiados á su cuidado, el señor Juez 6.° de este Circuíto, á quien correspondió el conocimiento del negocio, dictó, con fecha veintisiete de Septiembre del año próximo anterior, auto de enjuiciamiento contra el sindicado Putnam, como infractor del artículo 179 del Código Penal vigente, sobreseyendo al mismo tiempo á favor del mismo sindicado respecto del caso de falsedad que se investigába en el proceso de que se viene hablando.

Notificado este auto y consentido por las partes, el juicio siguió los trámites del procedimiento ordinario, decidiendo el jurado, conforme al cuestionario que se le presentó, que se había cometido el delito por que se llamó á juicio y que Putnam era responsable como autor principal y en segundo grado. El Juez, á virtud de este veredicto, y de acuerdo con las disposiciones legales, hizo la aplicación de la pena; y, una vez ejecutoriada la sentencia y terminada la causa, se ha remitido el expediente á esta superioridad para conocer en consulta del sobreseimiento dictado en el auto de veintisiete de Septiembre de que yá se hizo mención.

Fúndase el sobreseimiento en las razones que se expresan en el auto de que se ha venido hablando, el cual en la parte respectiva dice lo que aquí se transcribe. " Respecto al cargo segundo, esto es, la alteración de algunas cifras correspondientes á cinco partidas sentadas en el libro Mayor del Banco Popular, el Juzgado estima que no está comprobado: primero, porque los peritos señores Heliodoro Santacoloma y Salustiano Martín Torres — folios 148 á 149 del sumario original—apenas dicen *que creen* que sí ha habido falsificación, sin dar razón absolutamente de su dicho, lo cual, según la doctrina del artículo 252 del Código de procedimiento criminal, no puede constituír sino un indicio de muy poca gravedad, si se atiende á que los mismos peritos declaran que las cantidades donde hallaron las enmendaturas, concuerdan con las sumas de las partidas correspondientes descritas en el " Diario," y siendo exactas las operaciones sentadas en el " Diario " seria perfectamente inútil la alteración en el " Mayor," puesto que son iguales las cantidades respectivas en ambos libros.

" Además los señores Vespasiano Jaramillo, Diego Madero, Francisco Montoya M. y Enrique Chaves, todos los cuales tenían intereses vinculados en el Banco en mención, declaran bajo la fe de una escritura pública – folios 178 á 187, cuaderno del sumario original – " que las raspaduras que se observaron en el libro mayor del Banco, y consiguientemente las cantidades numéricas que dejaron esas raspaduras, coinciden con las respectivas partidas del libro Diario del Banco, en las cuales no se nota raspadura ni alteración alguna, y expresan así, y tal como aparecen en el libro Diario, la verdad" – folio 185 cuaderno citado — y esta declaración es perfectamente hábil al tenor de lo dispuesto en el artículo 214 del Código de procedimiento criminal, y ha venido á los autos en una escritura pública debidamente registrada, que, conforme al artículo 558 del Código de procedimiento civil, en relación con el 205 del de procedimiento *criminal, hace plena prueba acerca de su contenido*, habiendo además la circunstancia de que la declaratoria hecha en la mencionoda escritura, que se deja transcrita, ha sido ratificada bajo de juramento por el denunciante, señor Enrique Chaves B., Gerente del Banco Popular — folio 165 del cuaderno mencionado. Estas razones, á juicio del Juzgado, demuestran satisfactoriamente que no está probado en los autos el cargo de falsedad de que trata el artículo 216 del Código Penal vigente, aplicable en el presente caso." Estos raciocinios son de estricta aplicación al caso presente, y por sí solos suficientes para fundar el sobreseimiento; pero hay, además muchas otras razones que demuestran la inculpabilidad del sindicado, bastando para este objeto enunciar la siguiente: Como en el delito de falsedad á que se refiere el artículo 214 del Código Penal vigente, es condición esencial para la existencia de este mismo delito la comprobación plena y perfecta de haberse ejecutado el hecho que la constituye, á sabiéndas de que es falso, es decir, con conocimiento perfecto de la falsedad que se vá á cometer; y, como en esta actuación no aparece demostrada, en el modo que quiere la ley, la circunstancia enunciada, es consiguiente concluír que el delito de que se trata carece de existencia legal. Pudiera suponerse que esta circunstancia es deducible del hecho mismo, como sucede respecto de la voluntad y malicia que supone la ley en toda violación que de ella se haga; pero tal suposición es inadmisible, por ser contraria á la ley; para la voluntad y malicia se encuentra la disposición expresa del artículo 2.° del mismo Código Penal, mientras que para determinar el á sabiendas que en determinados delitos requiere la ley, es necesaria plena prueba, pues tal circunstancia hace parte esencial del mismo hecho criminoso, y debe, por consiguiente, quedar tan perfectamente bien probada como éste. Si no fuera así diaria y continuamente los empleados de todas las oficinas, en casos como el presente, estarian cometiendo falsedades, pues las equivocaciones son constantes é inherentes á la naturaleza humana, y no sería justo ni lógico que se castigaran hechos enteramente inocentes. Las raspaduras y enmiendas en lo escrito, son consecuencias necesarias de tales equivocaciones.

Lo antedicho viene á demostrar que en las cuentas que se examinan del " Banco Popular," y con relación al cambio ó enmienda que se hizo de una cantidad por otra, pudo haber habido equivocación por parte del señor Francico W. Putnam; pero en manera alguna se ha demostrado legalmente que se cometiera por éste el delito de falsedad al hacer la enmienda de una cantidad numérica en uno de los libros que estaban á su cargo.

Por lo expuesto, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, el Tribunal confirma el sobreseimiento consultado.

Notifíquese y cópiese este auto en el libro respectivo, dése cumplimiento á lo que se dispone en el artículo 345 del Código Penal, y hecho lo antedicho, devuélvase el expediente.

FEDERICO R. RODRÍGUEZ.—*Gabriel Rosas*, Secretario en propiedad.

Es copia.—El Secretario del Tribunal,

Gabriel Rosas.

—

Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Abril catorce de mil ochocientos ochenta y siete.

Publíquese el auto anterior en la *Gaceta Judicial.*

MARTÍNEZ.—*Guerra A.*, Secretario.

ANUNCIOS.

CONSTITUCIÓN DE COLOMBIA.

ESTÁ DE VENTA en la Tesorería general, en edición de cuaderno, á 20 centavos el ejemplar.

IMPRENTA DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPÚBLICA DE COLOMBIA. Número 14

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 29 de Abril de 1887.

CONTENIDO.

Pág.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Pronunciada en el concurso de acreedores seguido contra Florentino Rubiano 105
Pronunciada en el juicio ordinario, por suma de pesos; seguido por Ramón B. Jimeno contra el Gobierno nacional 108

NEGOCIOS CRIMINALES.

De nulidad, pronunciada en la causa seguida contra Juan Pantoja y otros, por asesinato. 110
Pronunciada en la causa contra Mariano Acosta y cómplices, por hurto de alambre telegráfico 111

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Pronunciado en pleito seguido entre Anastasio Patiño y la Compañía General Transatlántica 112

GACETA JUDICIAL.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, diez de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—El veintiséis de Mayo de mil ochocientos ochenta y tres, por escritura número 820, otorgada ante el Notario tercero del Circuíto de Bogotá, Francisco Ramírez Castro, José María Tobar Ibáñez y Florentino Rubiano hicieron constar, con todas las formalidades legales, que habían celebrado ó celebraban simultáneamente dos contratos, á saber: uno de mutuo con garantía de hipoteca especial y expresa, y otro de anticresis, relativo á la misma finca que se daba en hipoteca. Conforme al primer contrato, fundamento del otro, Tobar daba en préstamo á Rubiano, por el término de dos años, contados desde el veintiséis de Mayo del mismo año, la suma de dos mil cuatrocientos pesos ($ 2,400) al interés del uno por ciento mensual, por los dos años, y de uno y medio por ciento mensual, en caso de prórroga ó demora en el pago; y para seguridad del pago del principal y sus intereses y costas de cobranza, Rubiano hipotecaba una casa de su propiedad, aun no acabada de edificar, cuya situación en esta ciudad (barrio de las Nieves) y linderos fueron claramente especificados. El otro contrato fué el siguiente, según lo expresa la escritura en su segunda cláusula: "Tobar Ibáñez "toma en arrendamiento la expresada casa; y Rubiano queda "obligado á entregársela concluída el día primero de Agosto "del presente año, por el mismo término señalado de los dos "años, prorrogables por otros dos á voluntad de ambos contra- "tantes, y abonando á Rubiano por precio de arrendamiento la "cantidad de treinta y dos pesos de ley mensuales, de los cuales "entregará á Rubiano ocho pesos de ley, mes por mes vencido "y contado desde el primero de Agosto próximo, reservándose "los veinticuatro pesos restantes, que representan los intereses "de los dos mil cuatrocientos pesos que le tiene dados á interés "como se dijo en el punto primero de esta escritura."

En la cláusula tercera se especifican las obras que Rubiano debe ejecutar para concluír la casa hipotecada y entregarla en buen estado de servicio; y se estipula que: "si vencidos los "dos primeros años, los contratantes no convinieren en la pró- "rroga, y Rubiano no devolviere á Tobar Ibáñez los dos mil "cuatrocientos pesos que ha recibido, desde esa fecha continua- "rá pagando el interés á razón del uno y medio por ciento men- "sual, sin perjuicio de las acciones judiciales que pueda intentar "Tobar Ibáñez, y de responder Rubiano de los costos y costas, "daños y perjuicios por el no cumplimiento, siendo enten- "dido que la casa continúa hipotecada hasta el vencimiento de "los cuatro años, *si hubiere prórroga*, ó hasta que Rubiano "*verifique el pago* de los dos mil cuatrocientos pesos que ha "recibido."

La cláusula cuarte determina las obligaciones de Tobar como futuro arrendatario de la casa, y dice: "pero si vencido "el término de este contrato, Rubiano *no le devolviere los dos* "*mil cuatrocientos pesos*, queda con derecho para retener y "continuar viviendo en la misma finca por el mismo precio "estipulado y compensando éste valor con el de los intereses á "que queda obligado Rubiano, á razón del uno y medio por "ciento mensual." Por último, la cláusula quinta impone á Rubiano, en caso de vender la casa, el deber de mantener á Tobar en el arrendamiento, hasta que le haya pagado la suma pactada, y da á Tobar el derecho de preferencia en la compra, saliendo al tanto.

Para completa inteligencia de la escritura, debe copiarse lo que ella dice en su preámbulo, á saber: que las dos partes "han celebrado *un contrato anticrético* en los términos siguientes" (sigue la cláusura primera); y en la cláusula primera se añade á lo antes transcrito: "y asegura el cumplimiento de "estas obligaciones" (devolución del capital á los dos años y pago de intereses) "y de las más que adelante se expresarán, con la hipoteca especial y expresa de una casa de su propiedad...etc." (aquí los linderos y lo demás del caso); expresiones que, con las anteriormente transcritas, han de ser tomadas en cuenta entre las consideraciones del presente fallo.

No cumplió Rubiano con lo estipulado, ni en cuanto á la entrega de la casa para hacer efectiva la anticresis, ni más tarde, á los dos años, en cuanto á la devolución de la cantidad recibida á préstamo, ni tampoco llegó á pagar los intereses de la suma recibida. Tobar entabló demanda ejecutiva, por perjuicios, que juró en la suma de ochocientos pesos ($ 800) contra Rubiano, por el no cumplimiento del contrato de anticresis; y después de numerosos incidentes no pocos de ellos censurables en el punto de vista de la rectitud pericial y forense, y de largas dilaciones, se fijó definitiva y legalmente la suma de los perjuicios, proveniente de la acción personal del acreedor, ejercida desde el mes de Octubre de mil ochocientos ochenta y tres, en cuatrocientos cuarenta y cinco pesos sesenta centavos ($ 445-60 centavos). Por esta suma quedó trabada la ejecución, y como Rubiano no presentase más bienes que la casa hipotecada, ésta fué embargada, y su avalúo, establecido por peritos y aprobado por el Juez, se fijó en la suma de cuatro mil quinientos pesos ($ 4,500).

Alcanzó á demorarse esta ejecución lo bastante, cerca de dos años, para que Tobar Ibáñez, una vez cumplido el plazo de dos años relativo al préstamo hipotecario, añadiese á su primera acción, la personal, á que se refieren los cuadernos I y II de los

autos, otra real, ejecutando la finca hipotecada por principal é intereses (cuaderno III), previo un juicio especial para obtener nueva copia de la escritura de mil ochocientos ochenta y tres. Librada esta nueva ejecución, y á su tiempo acumulada á la anterior, la casa hipotecada fué por segunda vez embargada y avaluada, y quedó respondiendo del principal, intereses y perjuicios, á más de las costas.

Posteriormente, en tiempo oportuno, ocurrieron dos tercerías coadyuvantes, que fueron admitidas, sustanciadas y probadas debidamente; á saber: una propuesta por el apoderado del Banco Nacional, por la suma de ciento trece pesos, setenta y cinco centavos ($ 113-75 centavos), por saldo de cuenta corriente de Rubiano, á causa de varios giros en descubierto; y otra propuesta por Matilde Rubiano, hija legítima del ejecutado, por la suma mínima de dos mil pesos de ley ($ 2,000) ó sean dos mil quinientos pesos de ocho décimos, y los intereses y perjuicios del caso, sin contar mayor suma que de una herencia pudiera originarse; crédito procedente de peculio adventicio extraordinario, á virtud de haberse hecho cargo Rubiano de bienes heredados por su hija de su madrina Manuela Ortiz de D., según testamento nuncupativo, otorgado en Bogotá, en Febrero de mil ochocientos ochenta y nueve, y hecho efectivo desde treinta de Abril de mil ochocientos ochenta y tres, á virtud de sentencia judicial sobre la sucesión.

Es de observar respecto de estas dos tercerías: 1.° Que si bien el Banco Nacional comprobó plenamente su acreencia, con el reconocimiento de las firmas de Rubiano puestas en el recibo del depósito en cuenta corriente y en todos sus cheques, y con el cotejo de la cuenta producida, enteramente igual á la que arrojaban los libros del Establecimiento, Rubiano comenzó por negar en cierto modo la deuda, alegando que si algo debía sería al Cajero, por exceso de giros, y nó al Banco, con quien no se había entendido para girar en descubierto, disculpa que era inadmisible; 2.° Que el crédito de Matilde Rubiano fué plenamente comprobado con escrituras públicas, por lo tocante al principal de dos mil pesos ($ 2,000), pero que no se produjo prueba alguna respecto de los intereses que Rubiano debiera pagar á su hija por usufructo del peculio adventicio, que había administrado (pues tenía como padre, la administración, pero el testamento dejaba el usufructo á la hija expresamente); ni respecto de los perjuicios sufridos por dicha heredera, por no haber cumplido su padre con sus obligaciones; 3.° Que de autos resulta, á más del silencio guardado por Rubiano respecto del crédito de su hija, que su conducta para con ella fué irregular, cancelando una hipoteca con que estaban asegurados los intereses de la heredera, y no produciendo cuenta alguna de manejo ni documento que compruebe que amparara y respetara los derechos de su hija; 4.° Que la partida de nacimiento con que Matilde Rubiano comprobó la mayor edad en que yá había entrado, para poder formular tercería coadyuvante contra los bienes de su padre, sin licencia de éste ni del Juez, fué extendida en papel blanco; pero no fué tachada por el Juez ni por ninguna de las partes, y el crédito quedó aceptado como verdadero, en el juicio.

Una vez citadas las partes para sentencia, el Juez 3.° del Circuito de Bogotá pronunció la de graduación de créditos, con fecha veintinueve de Abril del presente año, y en ella reconoció y señaló el orden de prelación de los créditos siguientes, que han de cubrirse con la casa hipotecada y embargada, único valor denunciado como perteneciente al ejecutado:

En primer lugar, como privilegiado de primera clase, las costas de todo el concurso.

En segundo lugar, como hipotecario sobre la finca embargada, el crédito de José María Tobar Ibáñez, de dos mil cuatrocientos pesos, por razón del contrato de mutuo y sus intereses (por liquidar).....$ 2,400 ...

En tercer lugar, el crédito del Banco Nacional de ciento trece pesos setenta y cinco centavos, y sus intereses comerciales al seis por ciento anual, desde el *veinticinco de Julio de mil ochocientos ochenta* y tres, como privilegiado de cuarta clase..... 113-75

En cuarto lugar, el crédito de Matilde Rubiano, por dos mil pesos, y sus intereses al cinco por ciento anual, desde el quince de Julio de mil ochocientos ochenta y uno, como privilegiado de cuarta clase..... 2,000 ...

En quinto lugar, el crédito de José María Tobar Ibáñez, por razón de perjuicios, por cuatrocientos cuarenta y cinco pesos, sesenta centavos..... 445-60

Total de créditos, sin contar costas ni intereses que se liquiden, cuatro mil novecientos cincuenta y nueve pesos, treinta y cinco centavos.....$ 4,959-35

De la sentencia de calificación y prelación de créditos apelaron todos los interesados en el concurso, esto es, el deudor, y todos los acreedores. Concedióse primero la apelación para ante el Tribunal Superior de Cundinamarca; pero observado el auto, el Juez lo reformó, concediendo la apelación para ante esta Superioridad, por cuanto la Nación, representada por el Banco Nacional, tenía interés en el pleito (auto de dos de Julio del presente año). Repartido el negocio el trece de Septiembre, se ha sustanciado legalmente, y solamente han alegado el señor Procurador en defensa del Banco Nacional, y el apoderado de Tobar Ibáñez, absteniéndose de intervenir en la segunda instancia las demás partes. Citadas todas para sentencia el veinte de Noviembre próximo pasado, no se ha surtido la notificación de la citación hasta el día cuatro del mes en curso, por falta de estampillas; y llega al fin el caso de fallar, para lo cual la Corte considera:

En primer lugar debe resolverse un punto de jurisdicción que ha suscitado el señor Procurador en su alegato. Sostiene este funcionario que la Corte debe reducirse á calificar el crédito del Banco Nacional y señalarle su lugar en la prelación, y que en seguida debe enviar los autos al Tribunal Superior de Cundinamarca, conforme al artículo *H* transitorio de la Constitución, para que este Tribunal complete la sentencia fallando respecto de los demás créditos. Esta doctrina del señor Procurador es de todo punto inadmisible, porque tiende á introducir desorden ó anarquía en la administración de justicia, dividiendo la continencia de la causa.

El citado artículo *H* dice lo siguiente:

"Mientras el Poder Legislativo no disponga otra cosa, continuará rigiendo en cada Departamento la legislación del respectivo Estado.

"El Consejo Nacional Constituyente, una vez que asuma el carácter de Cuerpo Legislativo, se ocupará preferentemente en expedir una ley sobre adopción de Códigos y unificación de la Legislación nacional."

De que en cada Departamento continue rigiendo la Legislación que tuvo el respectivo Estado, mientras el Legislador no disponga otra cosa, no se deduce en manera alguna que se anula la atribución 3.ª de la Corte Suprema (artículo 151) de conocer de los negocios contenciosos en que tenga parte la Nación, conocimiento que necesariamente ha de referirse á todo el negocio, en cada caso, sin dejarlo trunco; no se deduce que se haya derogado, sino al contrario, confirmado, la vigencia del Código Judicial de la Nación, cuyo artículo 18, sección 2.ª, atribución 1.ª, da jurisdicción y competencia á la Corte Suprema para conocer en última instancia (ella sóla) de todos los negocios contenciosos que se *refieran* á bienes, rentas ó cualesquiera otros *derechos* de la Hacienda de la Nación y que se hayan decidido en primera instancia por los Juzgados y Tribunales de los Estados (ahora Departamentos), que es el caso ocurrido, pues que los derechos del Banco Nocional son de la Hacienda de la Nación, y en negocio de esta clase ha conocido y fallado un Juez de Cundinamarca y del "Distrito Federal," en primera instancia, con el carácter de nacional; ni se deduce que sea lícito dividir la continencia de la causa, y, por lo tanto, el pronunciamiento de una sentencia, entre la Corte Suprema y un Tribunal Superior, contra la doctrina jurídica universal y las expresas disposiciones de los artículos 73 y 713 del Código citado.

Además, según los artículos 85 y 86 (ibidem) de lo que depende la competencia (privativa de la Corte Suprema en última instancia) es de la naturaleza de la causa; y esta naturaleza la determina únicamente el interés de la Nación en la controversia; interés que en este juicio de concurso es manifiesto. Mientras el pleito se redujo á intereses disputados entre Tobar Ibáñez y Rubiano, nada tuvieron que hacer en él los Jueces nacionales, como tales, sino los de Cundinamarca; pero una vez que se entabló tercería coadyuvante por el Banco Nacional, esto es, que la Hacienda de la Nación tuvo interés en el concurso, toda la jurisdicción y competencia pasaron á ser privativas de los Jueces nacionales, á saber: de los Jueces de Circuíto, como

de la Nación, en primera instancia, y de la Corte Suprema, en la segunda y última.

Desechándose, por lo tanto, la doctrina y el pedimento del señor Procurador, la Corte entra á examinar todo el asunto, y fallará sobre todo él, conforme á la Legislación nacional, que es la que rige en los negocios que son de la competencia del Poder Judicial nacional. Para ello la Corte comienza por sentar como inconcusas tres verdades que resultan de los autos, á saber:

Primera, no se ha incurrido en ninguna nulidad ni acto que legalmente pueda viciar el juicio, ni ninguna de las partes ha formulado reclamación sobre esto, que pueda ó deba ser previamente considerada por la Corte.

Segunda, todos los créditos están plenamente comprobados y justificados, de manera que no cabe duda alguna sobre su existencia.

Tercera, no hay otro punto de discordancia entre las partes, que la calificación de orden y prelación que debe darse á los créditos, según su naturaleza.

Así establecidos los hechos, la Corte considera:

Primero. El apoderado de Tobar ha tachado la sentencia de primera instancia y el alegato del señor Procurador, alegando: que los derechos del Banco Nacional no le constituyen privilegio, porque el decreto número 787 del Poder Ejecutivo, de 17 de Noviembre de 1885, no pudo tener fuerza de ley al darle cierto privilegio á dicho Banco, porque era inconstitucional; que las disposiciones de ese decreto, posteriores á los actos de que emanó el crédito del Banco Nacional contra Rubiano, y los hechos judiciales que han constituído el pleito, no pueden tener efecto retroactivo, conforme al artículo 24 de la Constitución del 8 de Mayo de 1863, ni conforme al artículo 31 de la Constitución actual; y que, por lo tanto, el crédito del Banco Nacional no ha debido ser calificado en tercer lugar en el orden de prelación.

Si fuera necesario, la Corte no tendría dificultad alguna para examinar estos puntos de derecho constitucional y establecer la doctrina jurídica que debiese prevalecer; y aun bastaría considerar que el mismo Código Civil de la Nación, invocado en el Decreto gubernativo citado, establece el principio, en su artículo 13, de que la ley no tiene efecto retroactivo. Pero esta discusión es de todo punto inecesaria, así como lo es la determinación que el señor Procurador quiere hacer de la verdadera cita que se hizo en el mencionado decreto, con referencia al Código Civil nacional, cita errónea por incorrección tipográfica ó mala colocación de dos números (el 4 y el 9,) puesto que se citó el artículo 2945 del Código (que sólo contiene 2684 artículos,) queriéndose citar seguramente el 2495, que es el pertinente, por cuanto enumera los créditos privilegiados de la clase primera, á los cuales evidentemente se refiere el artículo 2.° de dicho Decreto.

No hay para qué dilucidar estos puntos, cuando hay disposiciones terminantes, legales y decisivas, anteriores á la celebración de los contratos que motivaron los juicios ejecutivos promovidos por Tobar contra Rubiano. En efecto, la ley 35 de 1865 (6 de Mayo), que autorizó al Poder Ejecutivo para hacer concesiones al Banco establecido entonces en Bogotá, dijo en su artículo 5.°: "Los Bancos y sus sucursales tendrán para hacer efectivas sus acciones, *los mismos privilegios que el Fisco Nacional*, pero sin prelación sobre éste en los juicios y controversias que hayan de decidirse conforme á la legislación de la República"

En mil ochocientos setenta y tres el Código Civil de la Nación dijo en su artículo 2493 que las causas de preferencia de los créditos, eran solamente el privilegio y la hipoteca; determinó los créditos privilegiados de primera clase (artículo 2495), de segunda y cuarta (artículos 2497 y 2502,) los hipotecarios (artículo 2499,) y en la primera clase comprendió los *del Fisco* en general (número 6.°) y en la cuarta los del Fisco *contra los Recaudadores, Administradores* y *Rematadores de rentas y bienes fiscales* (número 1.°); y de este modo incluyó implícitamente los créditos de los Bancos, puesto que estaba vigente la ley 35 de 1865. Por último, la ley 39 de 1880 (16 de Junio,) que concedió varias autorizaciones al Poder Ejecutivo para fundar en la capital de la República un Banco Nacional, con todo su contexto y su espíritu y muy especialmente con sus artículos 1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 9.°, 11, 12, 15, 17, 18, 19 (§), 24 y 26. Esta ley reformó la 35 de 1865, y la derogó en cuanto fuese contraria, pero asimiló enteramente á los intereses del Fisco los del Banco Nacional, y por lo tanto, le confirmó los privilegios que había de tener en la prelación de créditos; sin que para esta prelación fuese necesario el artículo 2.° del citado decreto del Gobierno, número 787, del 17 de Noviembre de 1885. En consecuencia, es incuestionable que en este concurso el crédito del Banco Nacional, que es como del Fisco y debe ser considerado como incluído en el número 6.° del artículo 2495 del Código Civil, solamente es inferior en la prelación al crédito proveniente de las costas judiciales, causadas en el interés general de los acreedores (número 1.°)

Segundo. El apoderado del ejecutante pretende que con el crédito hipotecario de éste, por dos mil cuatrocientos pesos y sus réditos, se asimile el crédito de cuatrocientos cuarenta y cinco pesos y sesenta centavos, reconocido por razón de los *perjuicios* que Rubiano causó á Tobar Ibáñez, por no haber dado cumplimiento al contrato de anticreses, estipulado en la misma escritura en que se hizo constar el de mutuo hipotecario; ó en otros términos: que la hipoteca especial y expresa comprende y asegura tanto al contrato de anticrésis como al de mutuo. Esta pretensión es inadmisible por las siguientes razones:

1.ª Tobar mismo reconoció que su acción anticrética no era hipotecaria, puesto que la entabló como acción *personal* contra Rubiano, y nó contra la casa cuyo arrendamiento había sido pactado ó prometido, y ejerció su acción desde mucho tiempo antes de estar cumplido el término del contrato hipotecario de mutuo.

2.ª Las obligaciones personales no son hipotecarias, mientras expresamente no se haya dado hipoteca para asegurarlas, y los *hechos* que se deben se reputan *muebles* (artículos 666 y 668 del Código Civil); de modo que el texto de la escritura otorgada por Tobar y Rubiano ha de ser decisivo. En esta escritura se dice sucesivamente: "Las partes han celebrado el contrato anticrético siguiente"..... y Rubiano (después de hablar en la cláusula 1.ª del préstamo de dinero y sus intereses) "asegura el cumplimiento de estas obligaciones y las demás que adelante se expresarán, con la hipoteca especial y expresa de una casa de su propiedad, etc; en seguida se habla del futuro arrendamiento de la casa y de las obras que Rubiano debe ejecutar en ella para entregarla en estado de buen servicio; luégo se estipula lo relativo á prórrogas posibles de los dos contratos, y se dice: "siendo entendido que la casa continúa hipotecada hasta el vecimiento de los cuatro años" (los del préstamo, si ambas partes convinieren en la prórroga) "*si hubiere prórroga*, ó hasta que Rubiano *verifique el pago de los dos mil cuatrocientos pesos que ha recibido.*" Vése aquí patentemente que la hipoteca fué constituída, no para garantía del prometido arrendamiento de la casa, sino para seguridad de la suma de dinero prestada, y que, por lo tanto, los perjuicios (cosa desconocida, no segura ni líquida cuando se celebró el contrato) que Rubiano pudiese causar á Tobar por no entregarle la casa para habitarla, no eran materia de la hipoteca;

3.ª Si la hipoteca es divisible (artículo 2433 del Código citado,) y por lo tanto, la finca hipotecada responde tanto por el principal como por los intereses, no por eso se puede extender la hipoteca á lo que no es materia de ella, ni la acción real perjudica á la personal, ni la acción real comunica sus privilegios á la personal (artículo 2449 ibidem.) El acreedor hipocario tiene (artículo 2448) para hacerse pagar sobre las cosas hipotecadas, el *mismo derecho* que el acreedor prendario sobre la prenda; y el acreedor prendario no tiene el derecho de retener la prenda por otros títulos (artículo 2426), sino cuando los créditos adquiridos tienen los requisitos siguientes:

1.° Que sean ciertos y líquidos;

2.° Que se hayan contraído *después* que la obligación para la cual se ha constituído la prenda;

3.° Que se hayan hecho exigibles antes del pago de la obligación anterior.

De estos tres requisitos, sólo el tercero concurre en el crédito de Tobar por *perjuicios*, faltándole el primero, porque estos perjuicios no eran ni podían ser ciertos ni líquidos, pero ni aun probables, cuando se estipuló la anticresis, y este contrato no fué posterior al de mutuo hipotecario, sino celebrado simultáneamente con este mismo;

4.ª El contrato de anticresis no se consumó, por falta de *la entrega* de la casa prometida en arrendamiento, para que con parte de sus frutos se pagase Tobar de los intereses de su di-

nero, entrega sin la cual no se perfecciona el contrato (artículos 2,458 y 2,460). Además, "la anticresis no da al arrendador, *por sí sólo*, ningún derecho real sobre la cosa entregada" (artículo 2,461) y menos por entregar; y el acreedor "*no tendrá preferencia* (en el inmueble sobre los otros acreedores) sino la que le diere el contrato accesorio de hipoteca, si lo hubiere. Toda estipulación en contrario es nula." (Artículo 2,464). Y yá se ha visto que la hipoteca no fué dada para garantía del arrendamiento de la casa, sino para seguridad de la suma prestada y sus intereses. Como consecuencia de estas consideraciones, debe sentarse que el crédito de Tobar Ibáñez por perjuicios sufridos, no está comprendido entre los hipotecarios, ni entre ninguno de los que el Código Civil nacional califica de privilegiados.

Tercero. Entre los créditos comprobados no hay ningún otro hipotecario, fuera del de Tobar por dos mil cuatrocientos pesos; ni entre aqvéllos hay alguno que pertenezca á la segunda clase privilegiada. El crédito del Banco Nacional no debe ser calificado en la cuarta clase (artículo 2,5h2), porque no se trata de un crédito del Fisco contra Recaudadores, Administradores ó rematadores de rentas ó bienes fiscales, sino de un crédito común del Fisco, proveniente de un contrato de consignación y giro en cuenta corriente, y así pertenece á la primera clase (número 6.° del artículo 2,495); y este crédito, á virtud de lo expresamente dispuesto por el artículo 2,500, se extiende á la finca hipotecada, por cuanto no habiéndose embargado más bienes que esa finca, no puede ser cubierto en su totalidad con otros bienes del deudor. No habiéndose estipulado intereses con el Banco, el que gana su acreeecia desde que existió, es de seis por ciento anual, conforme al artículo 2,232 del Código tantas veces citado.

Cuarto. Por último, el crédito de Matilde Rubiano, incuestionablemente fundado en la administración tomada por Rubiano de un peculio adventicio extraordinario, sin derecho al usufructo, á virtud de su patria potestad y de sentencia que privó de la curaduría á Isaías Abadía (curador testamentario indebidamente nombrado), fojas 8 á 10 del cuaderno V, pertenece, sin disputa alguna, á la cuarta clase privilegiada, según el número 4.° del artículo 2,502 del citado Código, que dice: "Los (créditos) de los hijos de familia, por los bienes de su propiedad que administra el padre, sobre los bienes de éste." Y tal es el caso, constituído como fué el peculio adventicio extraordinario por donación testamentaria (artículo 291 del Código citado).

En cuanto á este crédito, es de advertir que no se ha comprobado á cuánto montó el usufructo, y aunque evidentemente debió de ser como el interés corriente del dinero, puesto que en dinero recibió Rubiano el peculio adventicio de su hija, no habiéndose estipulado intereses, debe fijarse el interés legal que es el de seis por ciento. Se hace notar aquí que ha sido y es legítima la personería de Matilde Rubiano, por cuanto consta de una sentencia ejecutoriada (foja 8 vuelta del cuaderno V), que ella formuló su tercería á la edad de veinticuatro años y meses, el catorce de Septiembre de mil ochocientos ochenta y cinco, habiendo nacido el diez y seis de Enero de mil ochocientos sesenta y uno.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y discrepando en parte, como se ha expresado, de la opinión del señor Procurador, reforma la sentencia apelada y fija la prelación de créditos del modo siguiente:

En primer lugar, se pagarán las costas judiciales, que serán reguladas por el Juez de primera instancia, conforme á derecho.

En segundo lugar, el crédito del Banco Nacional, de ciento treco pesos setenta y cinco centavos ($ 113-75 cs.), y sus intereses, computados al seis por ciento anual, desde el día veintiséis de Julio de mil ochocientos ochenta y tres.

En tercer lugar, el crédito hipotecario de José María Tobar Ibáñez, de dos mil cuatrocientos pesos ($ 2,400) y sus intereses, computados, según la escritura, así: del veintiséis de Mayo de mil ochocientos ochenta y tres al veintiséis de Mayo, exclusive, de mil ochocientos ochenta y cinco, al uno por ciento mensual; y de la segunda fecha en adelante, al uno y medio por ciento mensual.

En cuarto lugar, el crédito de Matilde Rubiano, por peculio adventicio extraordinario, privilegiado, por la suma de dos mil pesos ($ 2,000), y sus intereses, computados al seis por ciento anual, desde el día quince de Julio de mil ochocientos ochenta y uno, fecha en que Rubiano quedó responsable del peculio de su hija (escritura de fojas 11 y 12 del cuaderno V), por haber cancelado la hipoteca que en favor de ella estaba constituída, confesando haber recibido las cantidades que pertenecían al dicho peculio.

Y, en quinto lugar, el crédito reconocido á favor de José María Tobar Ibáñez. de cuatrocientos cuarenta y cinco pesos sesenta centavos ($ 445-60 cs.), calificado y reconocido legalmente, por perjuicios causados por Florentino Rubiano, por no haber dado cumplimiento al contrato de anticresis.

Todos estos créditos se pagarán por su orden, con el producto de la finca embargada, salvo que legalmente se denuncien y embarguen otros bienes al ejecutado, en cuyo caso el Juez de primera instancia procederá conforme á derecho.

Notifíquese, cópiese, publíquese en el *Diario Oficial* y devuélvanse los autos.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Benjamín Noguera.—Antonio Morales—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del diez de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis, fué publicada la sentencia que precede.

Ramón Guerra A., Secretario.

En trece de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué la sentencia anterior al señor Procurador.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme.—Bogotá, Enero 12 de 1887.

Ramón Guerra A., Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Diciembre diez de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—En veintitrés de Octubre de mil ochocientos ochenta y dós, se presentó Ramón B. Jimeno ante el Juez 1.° nacional de la Provincia de Barranquilla, entablando demanda ordinaria contra la Nación, y pidiendo que se condenara á ésta á pagar la suma de doscientos mil novecientos treinta y tres pesos, procedentes, según el demandante, del valor de mil acciones de á cien pesos cada una, que le pertenecen en el Ferrocarril de Bolívar; de veintiséis mil pesos que en dinero efectivo le quedó á deber la Compañía constructora de ese Ferrocarril; de dos mil novecientos sesenta y seis pesos, por intereses de los documentos de deuda pública depositados como garantía de esa obra; de cuarenta y dos mil sesenta y ocho pesos, por dividendos de las mil acciones referidas, y por veintiséis mil novecientos diez pesos, por intereses de demora del capital invertido en los documentos depositados como garantía.

Fundándose esta demanda en los siguientes hechos:

1.° En que habiendo obtenido Jimeno, asociado del General Ramón Santodomingo Vila, del Gobierno de Bolívar privilegio para la construcción de un Ferrocarril que pusiera en comunicación la bahía de Sabanilla con la ribera occidental del río Magdalena, en la ciudad de Barranquilla, el Gobierno de la Unión garantizó á los empresarios un siete por ciento sobre el capital de la empresa, siempre que éste capital no excediera de seiscientos mil pesos; concesión que fué aprobada por el Congreso, con la condición precisa de que la Compañía empresaria debía adquirir el privilegio concedido por el Gobierno de Bolivar á Jimeno y á Santodomingo:

2.° Que el mencionado privilegio y los derechos anexos á él fueron cedidos á la Compañía del Ferrocarril de Bolívar, residente primero en Londres y después en Bremen, por Jimeno y por Santodomingo, según escritura de cinco de Diciembre de mil ochocientos sesenta y ocho; comprometiéndose esa Compañía á cumplir las obligaciones estampadas en esa escritura, entre las cuales figuran el reconocimiento de las acciones, el pago de seis mil libras esterlinas y los intereses respectivos; y

3.° Que el Gobierno de la Nación compró á la Compañía de Bremen el Ferrocarril de Bolívar, por contrato celebrado el

cinco de Diciembre de mil ochocientos setenta y cinco; viniendo por este hecho á ser el Gobierno el legítimo sucesor y representante de aquella Compañía, habiéndose comprometido á pagar todas las obligaciones de ésta, procedentes del privilegio concedido por el Gobierno del extinguido Estado de Bolívar.

A esta demanda se acompañaron todos los documentos comprobantes de los contratos referidos, menos el relativo á la compra del Ferrocarril hecha por el Gobierno nacional, cuyo documento vino á figurar después en los autos por solicitud del Ministerio público; y se comprobó también que el General Santodomingo Vila había cedido todos sus derechos á Ramón B. Jimeno.

Dado traslado de esta demanda al representante de la Nación en Barranquilla, éste la consideró como inepta, por dirigirse contra el Gobierno, y no contra la Compañía deudora de Jimeno, aunque sin formalizar articulación expresa sobre este punto y dejando de contestar la demanda en el fondo. Por tal motivo, el Juez ordenó que se diera la contestación en debida forma, contestación que no vino á darse sino mucho después, habiéndole precedido, por parte del representante del Fisco, un pedimento denunciando á la Compañía de Bremen la demanda intentada contra el Gobierno.

Admitióse la denuncia y se ordenó la notificación á la expresada Compañía, por medio del Cónsul colombiano residente en Bremen, disponiendo que se suspendiera mientras tanto el juicio. Más luego, á solicitud de Jimeno, fundada en el artículo 872 del Código Judicial, por no poder comparecer la Compañía dentro de treinta días, se ordenó la continuación del juicio. Quedó así ejecutoriada la providencia sobre denuncia del pleito, fuera ó nó irregular esta providencia, y sobre lo cual no hay necesidad de determinar nada al presente.

Abrióse la causa á prueba, produciéndose por el demandante las que creyó de ocasión, consistentes especialmente en la reproducción de los documentos con los cuales la querella se entabló; y continuada la primera instancia, sin informalidad alguna sustancial, terminó esta por la sentencia de siete de Junio de mil ochocientos ochenta y tres, por la cual se condenó al Gobierno nacional, como sucesor de la Compañía del Ferrocarril de Bolívar y representante de ésta, á pagar á Ramón B. Jimeno las siguientes cantidades: cien mil pesos, por valor de las mil acciones que corresponden al demandante en el Ferrocarril de Bolívar: veintiséis mil pesos, saldo de las seis mil libras esterlinas que la Compañía de Bremen quedó á deber á Jimeno, y dos mil novecientos sesenta y seis pesos, que también debía la propia Compañía al indicado Jimeno, por intereses de los documentos de deuda pública del extinguido Estado de Bolívar, depositados primitivamente como garantía del contrato de construcción. Se absolvió al Gobierno de todos los demás cargos contenidos en la demanda, dejándole su derecho á salvo para repetir contra la Compañía radicada en Bremen, como lo creyera conveniente, en la parte relativa á la condena que se le hizo.

Notificada esta sentencia, tanto el demandante como el representante del Ministerio público apelaron de ella para ante esta Suprema Corte, en la parte en que respectivamente les era desfavorable; y la apelación fué concedida, y la concesión del recurso debidamente notificada.

Venidos los autos ante esta Superioridad, ninguna de las partes pidió que se abriera de nuevo á prueba el juicio; y la tramitación se ha surtido, oyéndose las alegaciones del señor Procurador general y del demandante. Pero en esta segunda instancia, apareció ya funcionando la Compañía radicada en Bremen, por medio de apoderado, quien pidió expresamente que se le tuviera como parte en el juicio; y así se acordó por la Corte, oyéndose también con la debida amplitud á los personeros sucesivos que ha tenido esa Compañía. La Corte, para mejor proveer, pidió algunos documentos pertinentes al asunto, especialmente la escritura de compra del Ferrocarril de Bolívar hecha por él Gobierno; y esos documentos figuran en el expediente.

Citadas las partes para sentencia en diversas ocasiones, se les oyó por última vez en Estrados en los días seis y siete del corriente mes. En este último día, se hizo constar en autos, á solicitud del señor Procurador general, que la parte de Ramón B. Jimeno había expresado delante de la Corte, que una vez que la Compañía se había hecho parte en el juicio, debía condenarse á ésta absolviendo á la Nación.

Ha llegado, pues, el negocio al trance de ser decidido definitivamente; y después del relato que precede, la Corte, para fallar, entra en las siguientes consideraciones:

Los puntos referentes á la concesión del privilegio para la construcción del Ferrocarril de Bolívar en favor del General Ramón Santodomingo Vila y de Ramón B. Jimeno; la cesión de derechos y acciones hecha por el General Santodomingo á Ramón B. Jimeno en esa empresa del Ferrocarril; la venta hecha en Londres por estos dos socios á la Compañía constructora, residente primero en esta última ciudad y radicada luégo en Bremen: y la compra hecha por el Gobierno de la República á ésta última Compañía del Ferrocarril que ha construído y de todas sus anexidades, acciones y dependencias; son todos hechos suficientemente comprobados en los autos, y sobre los cuales no existe contradicción ni duda;—despejado, pues, el asunto de todas las divagaciones que lo han acrecentado, y reduciéndolo á una síntesis precisa, la cuestión viene á ser de puro derecho.

Consiste la cuestión en saber si por el hecho de haber comprado el Gobierno el Ferrocarril, se sustituyó á la Compañía vendedora en todas las obligaciones que ésta había contraído particularmente para con Santodomingo Vila y Jimeno, cuando ella á su vez compró el derecho al privilegio para la construcción; y si el Gobierno se obligó á otros compromisos diferentes de aquellos que fueron inherentes á la concesión y goce de ese privilegio. Más claro: la cuestión consiste en saber qué adquirió el Gobierno, á que se obligó por esta adquisición, á favor de quién se obligó, y en qué forma quedó comprometido.

Sin grande esfuerzo de indagación, sin necesidad de sutilezas de ingenio, fácilmente se puede llegar á las conclusiones que la justicia demanda para resolver los puntos que quedan establecidos, porque los documentos que figuran en el expediente dán la luz suficiente sobre la naturaleza de los contratos que motivan el litigio, y no se necesita sino examinarlos con imparcialidad y atención.

En todo contrato las obligaciones nacen del concurso de las voluntades, siendo preciso que aparezca la intención y la forma de la obligación; y en los contratos onerosos y conmutativos, es preciso determinar las prestaciones mutuas estipuladas, atendiendo de preferencia á las cosas que son de su esencia y de su naturaleza, sin agregarles, como accidentales, las circunstancias que no procedan de cláusulas expresas. En el presente caso, y así lo han comprendido las partes, la controversia se decide por la inteligencia que se dé á los términos en que está concebido el artículo quinto del contrato de compra del Ferrocarril, hecho por el Gobierno, y que consta en la escritura número veintiocho, otorgada en la ciudad de Barranquilla á veintisiete de Febrero de mil ochocientos setenta y seis. Esta cláusula dice así: "La Compañía hace la venta de los bienes yá expresados, declarando que todos son de su exclusiva propiedad, y que están libres de todo gravamen, censo é hipoteca. Bien entendido que el Gobierno sucede á la Compañía en todos los derechos y obligaciones procedentes del privilegio concedido por el Gobierno del Estado de Bolívar; obligaciones que el Gobierno cumplirá en cuanto á él le sean legalmente exigibles."

Como se ve, la Compañía de Bremen hizo al Gobierno la venta del Ferrocarril y del Telégrafo, que tenía y administraba en el Estado de Bolívar, entre Sabanilla y Barranquilla, con todas sus anexidades, casas, estaciones, almacenes y demás edificios, muebles, elementos de construcción en depósito, terrenos advacentes y todos los demás bienes, raíces y muebles, pertenecientes á la Compañía, comprometiéndose ésta á entregarlos por inventario, según el artículo segundo del contrato, como los entregó. Esa compra la hizo el Gobierno por la cantidad de seiscientos mil pesos, expresando que los pagos y sus intereses se harían en esta ciudad de Bogotá, al apoderado que la Compañía designara al efecto; y estableció las compensaciones entre el Gobierno y la Compañía, por razón de intereses, en los casos de demora ó de anticipación en los pagos. Se determinó luégo en el contrato que todas esas cosas, materia de la venta, eran de la propiedad exclusiva de la Compañía, sin que pesara sobre ellas hipoteca ó gravamen de ninguna clase, y por último, que el Gobierno sucedía á la Compañía en todas las obligaciones y derechos *procedentes del privilegio concedido por el Gobierno del Estado de Bolívar*, las cuales obligaciones cum-

pliría el Gobierno Nacional, en cuanto á él le fueran legalmente exigibles.

¿Cuáles eran esas obligaciones procedentes del privilegio? Claramente las determina el contrato de siete de Febrero de mil ochocientos sétenta y ocho, en sus diversas cláusulas. En la primera se comprometieron los privilegiados á construír el Ferrocarril entre Sabanilla y Barranquilla, sujetándose á las condiciones determinadas en las leyes de cuatro de Mayo de mil ochocientos sesenta y cinco, y diez de Octubre de mil ochocientos sesenta y ocho, del extinguido Estado de Bolívar, que determinan tiempo, cauciones, etc.; y también á las otras condiciones estipuladas en este último contrato; cuyos derechos y obligaciones se hacen extensivos á los herederos y *legítimos representantes* de Santodomingo y Jimeno. Las cláusulas segunda, tercora, cuarta, quinta y sexta, se refieren á las garantías de construcción, y que por ser hechos yá pasados, no tienen importancia al presente. Por la cláusula séptima, se autoriza el cambio de la tarifa en la conducción de encomiendas y en lo relativo á almacenaje: la octava establece la puntualidad y periodicidad en el servicio para personas y efectos, sin distinción entre nacionales y extranjeros: la nona habla de la exención de impuestos para los efectos que transiten por el Ferrocarril: trata la décima de la exención de cargos militares y de empleos onerosos, para todos Agentes del Ferrocarril: la undécima y duodécima hablan de la concesión de terrenos adyacentes y de terrenos baldíos, en favor de la empresa y de los empresarios, siendo de cargo de éstos los planos y mensuras: las cláusulas, décima tercia, décima cuarta, décima quinta, décima sexta y décima séptima, se refieren á exensión de impuestos del Estado y municipales, á la protección que el Gobierno de Bolívar se comprometía á dar á la empresa, al modo de decidir las cuestiones que se suscitaran con relación á las estipulaciones, y á la abolición de fueros y privilegios de parte de los empresarios: la décima octava determina todos los gravámenes á que se sometió la Compañía respecto de pasajes y pasajeros, y á pagar al Tesoro de Bolívar quinientos pesos mensuales; y por todas las restantes se comprometieron los privilegiados á no traspasar á Gobierno alguno extranjero el privilegio, á estipular el modo de obtener prórroga, á consentir en otros privilegios de caminos inmediatos, con tal que no comuniquen la bahía de Sabanilla con la ribera occidental del Magdalena, y, últimamente, á someter el contrato á la aprobación del Poder Ejecutivó del Estado.

Este resumen determina, se repite, todos los derechos y obligaciones inherentes á la concesión del privilegio: esos derechos y esas obligaciones allí determinados, son los que afectan á todos los representantes y sucesores de los concesionarios; y esos derechos y esas obligaciones fueron las que tomó sobre sí el Gobierno Nacional, cuando hizo la compra á la Compañía constructora.

En ninguna parte del contrato de compra que hizo el Gobierno, absolutamente en ninguna, aparece que él se obligara á las cargas particulares, á los contratos accesorios, á las cuentas individuales, ni á pormenores algunos de otra naturaleza que medien ó puedan mediar, entre la Compañía constructora y Ramón B. Jimeno, ni respecto á ninguna otra persona ó entidad. Ni punto más ni punto menos de aquello que queda determinado como inherente á la concesión del privilegio, fué lo que el Gobierno tomó a su favor y en su contra; y esto explica la procedencia de que trata la parte final del artículo quinto copiado atrás.

Siendo esto así, como lo es en efecto, y no existien lo contrato, ni cuasi-contrato, ni acto alguno que se refiera á obligaciones tomadas por el Gobierno, de las pertenecientes á la Compañía mencionada, en las relaciones de ésta con el demandante, no se sabe dónde pueda existir la causa civil de obligar á la Nación á este respecto, ni aparece documento alguno que establezca la fuente de esa obligación. Jimeno podrá tener derechos contra la Compañía en referencia, cosa que no tiene para qué entrar á examinar la Corte; pero no se comprende por qué esos derechos, si es que existen, hayan de hacerse efectivos sobre una entidad que no es contratante ni obligada. Tanto es esto así, que el mismo demandante ha reconocido en audiencia pública la justicia con que el Gobierno debe ser absuelto.

Establecido esto acerca del punto cardinal de la querella, sólo resta examinar esta otra cuestión. ¿Por el hecho de haberse denunciado, bien ó mal, con razón ó sin ella, el pleito á la Compañía, y por haber ésta comparecido y héchose parte en el juicio figurando como demandada, debe ella ser en esta ocasión absuelta ó condenada respecto de la demanda promovida por Jimeno?

Es claro que en la presente sentencia debe resolverse acerca de la parte que accesoriamente pertenece en este juicio á la Compañía, es decir, sobre el motivo del saneamiento, porque por eso y para eso fué ella citada. Pero respecto de la deuda ó cuantía demandada por Jimeno en esta litis, no es justo ni legal condenar á esa Compañía; porque ni ella fué directamente demandada sobre el particular en cuestión, ni ha podido por consiguiente, defenderse, ni el debate ha versado, ni las pruebas se han referido á la efectividad ó nó efectividad actual de la deuda de esa Compañía á favor de Jimeno, ni se sabe si existen ó no excepciones acerca de esa deuda, ni se conocen las cuentas particulares que medien en el asunto. Tampoco puede esa Compañía ser absuelta, acerca de la deuda en referencia, tanto por lo que acaba de decirse, como porque de ese modo se comprometerían de una manera festinada é indebida, los derechos que existan ó puedan existir á favor de Jimeno, prejuzgando la cuestión y resolviendo sin antecedentes. Por todo lo expuesto, la Corte Suprema Nacional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca en todas sus partes la sentencia apelada, pronunciada por el Juez 1.° de la Provincia de Barranquilla, en esta causa, y absuelve á la Nación ó sea al Gobierno de la República, de la demanda intentada contra él por Ramón B. Jimeno. Se declara también en consecuencia, que la Compañía del Ferrocarril de Bolívar, radicada en Bremen y representada por su Directorio, de quien ha sido personero en este juicio Jorge W. Price, está excenta de saneamiento y de responsabilidad con relación á la demanda, materia de esta controversia.

Quedan á salvo los derechos que Jimeno pueda tener contra la Compañía del Ferrocarril de Bolívar, radicada en Bremen. Levántese el secuestro de los bonos de la Compañía.

Notifíquese, cópiese, publíquese en el *Diario Oficial* y devuélvase el expediente al Juzgado de donde vino.

R. Antonio Matínez—Jose M. Sanper —Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamin Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del diez de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis, se publicó la sentencia anterior.

Ramón Guerra A., Secretario.

En treco de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué la anterior sentencia al señor Procurador.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

En catorce de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué la sentencia anterior al señor Jorge Price.

JORGE PRICE—*Ramón Guerra A.* Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, primero de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—Este proceso se ha instruído para averiguar los responsables de la muerte violenta dada á Adolfo Gómez en el Distrito de Ciénaga de Oro, en la noche del veintiuno de Marzo del presente año.

Por insinuación del Poder Ejecutido nacional fué seguido el juicio militarmente; y al efecto, el funcionario instructor, considerando completa la actuación, declaró con lugar á formación de causa criminal contra Juan Pantoja, Pedro C. T. Martínez, Manuel Francisco Pantoja y José María Montes, por el delito de homicidio proditorio ó asesinato, que define el artículo 470 del Código Penal de la Nación.

Celebrado el juicio, previa la tramitación indicada en el Código Militar, el Consejo de guerra de Oficiales Generales, por sentencia de fecha cuatro de Septiembre del presente año, condenó á Juan Pantoja y á Pedro C. T. Martínez á sufrir en el Panóptico de la capital de la República, la pena de treinta años de reclusión el primero, y veinte el segundo, además de las penas subsidiarias de que trata el Código Penal, y absolvió á los otros dos sindicados.

Notificada dicha sentencia, apelaron de ella é interpusieron el recurso de nulidad, tanto los acusados como el representante del Ministerio público, y con ese motivo ha sido sometido el proceso al estudio de la Corte.

Esta Corporación considera que debe fallar el punto sometido á su juicio, porque conforme al artículo 1,537 del Código Militar, "se ocurre á la Corte Suprema por recurso de nulidad, contra las sentencias de los Consejos de Guerra, tanto por incompetencia de jurisdicción, como por informalidades substanciales en el procedimiento." En consecuencia, se hacen, para fallar, las siguientes observaciones:

1.ª La Corte ha notado que el auto que corre á fojas 65 vuelta del cuaderno número 2.°, por el cual se señala día para la celebración del juicio, no fué notificado á los acusados; y

2.° A los mismos acusados se les impuso la pena de treinta años de reclusión á uno de ellos, y veinte á otro, contra lo dispuesto en el artículo 472 del Código Penal que fija el máximo de la pena de reclusión para el homicidio proditorio.

Estas dos circunstancias vician de nulidad el procedimiento, al tenor del artículo 1,536 del Código Militar, en sus incisos 2.° y 5.°, y es preciso hacer esa declaratoria preferentemente.

Por lo tanto, la Corte Suprema nacional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara nulo en absoluto este proceso, por las causales mencionadas; y como en la actualidad existe el régimen constitucional y se trata de un delito común, envíese el proceso al Juez de la Provincia de Lorica en el Departamento de Bolívar, por ser el competente.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente-Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del día primero de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis, se publicó esta sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En primero de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis notifiqué la sentencia anterior al señor doctor Jesús M. Arteaga'

ARTEAGA—*Guerra A.*, Secretario.

En dos de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis notifiqué al señor Procurador general la sentencia que precede'

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, seis de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—Por auto de veintinueve de Junio último, el Juez superior del Circuíto de Soto, en el Departamento de Santander, funcionando como Juez nacional, llamó á juicio criminal á Mariano Acosta, como autor principal del delito de hurto de un bien perteneciente á la Nación, y á Victoriano Moreno y Rafael Galindo como cómplices; delito que dimana de haber cortado Acosta, el ocho de Abril último, y apropiádose con la cooperación de Moreno y Galindo, una porción de alambre del telégrafo en el trayecto de Bucaramanga á la Florida.

Seguida la causa por los trámites legales, pronunció sentencia dicho Juez condenando á Acosta, previa la calificación del delito en segundo grado, á sufrir la pena de ciento veintidós días y doce horas de reclusión, en la cárcel pública del Circuíto, á Moreno y Galindo á la de ochenta y un días y diez y seis horas de igual pena, en el mismo establecimiento, y á todos tres á la suspensión, mientras dure la pena, de los derechos políticos, al pago de las costas, mancomunadamente, y á la indemnización de los perjuicios provenientes del delito, debiendo computárseles en la pena principal el tiempo que hayan estado detenidos ó presos.

Notificada esa sentencia, no fué apelada por ninguna de las partes, y remitida en consulta á esta Superioridad, se ha oído al señor Procurador general y al defensor de los reos, de los cuales el primero ha pedido, fundando su concepto, que se reforme la sentencia consultada, calificando el delito en tercer grado, é imponiéndole al autor principal el mínimo de pena fijado en el artículo 578 del Código Penal, con el aumento de la sexta parte, prevenido por el artículo 364 del mismo Código, y á los cómplices las dos terceras partes de la pena; y el segundo, es decir, el defensor, está de acuerdo en que la sentencia debe reformarse en los términos indicados por el Ministerio público.

Para resolver lo que sea de justicia, ha examinado la Corte los autos, y de ellos resulta lo siguiente:

1.° Que informado el Comisario de policía, Sebastián Corso, por el Guarda de la línea telegráfica, de que unos hombres habían cortado el alambre, salió á su encuentro y dió con los tres procesados, uno de los cuales llevaba un rollo de alambre en forma de cachiporra, y por esta razón los puso en arresto y participó el hecho al Alcalde, quien procedió á investigarlo, practicando algunas diligencias que se pasaron luégo al Juez del Circuíto;

2.° Que Patrocinio Sarmiento, Guarda del telégrafo, está de acuerdo con lo declarado por Corso, agregando que en un trayecto como de media cuadra, encontró la línea rota por tres partes, y faltaban, por lo menos, como veintiocho brazas de alambre;

3.° Que el aprehendido á los tres hombres dichos, fué avaluado por peritos en sesenta centavos;

4.° Que los sindicados, á saber, Mariano Acosta, Victoriano Moreno y Rafael Galindo, dijeron en sus declaraciones indagatoria (fojas 21 á 23), que el primero, iba á cortar el ocho de Abril último el alambre de la línea telegráfica, que estaba caído por un extremo, y para verificarlo sacó un cuchillo, y como Moreno le hiciera notar que no había necesidad del arma, pues el alambre tenía una parte medio gastada, y tirándolo recio se podía arrancar, hicieron fuerza y lo consiguieron, y entonces Galindo lo cogió y lo enrrolló con ayuda de los otros dos, á cuyo tiempo dijo Acosta que le serviría para un bordón;

5.° Que en la confesión que prestaron, convinieron de nuevo en los hechos declarados y en la exactitud de los cargos que se les hicieron, y reconocieron además el alambre que se les presentó, como el mismo que Acosta tomó para sí, del telégrafo, con la cooperación de los otros dos; y

CONSIDERANDO:

1.° Que está plenamente comprobado el cuerpo del delito con las declaraciones de Corso y Sarmiento, con el hallazgo del alambre sustraído, y con el reconocimiento de su identidad;

2.° Que hay también plena prueba de la criminalidad de Acosta, Moreno y Galindo, yá por haberse encontrado el alambre en poder del primero, yá por haberse confesado éste, autor principal del delito, y yá porque los dos últimos han convenido en que ejecutaron hechos que los constituyen cómplices en la comisión del hurto, prueba bastante para condenar, según el artículo 1,574 del Código Judicial;

3.° Que no resultando de autos que en la comisión del delito concurrieran circunstancias agravantes, y estando probadas en favor de Acosta las atenuantes, de falta de ilustración, de ser el delito de que se trata el primero que comete, de haber observado anteriormente buena conducta, y de haber confesado con sinceridad el delito sin estar convencido por otras partes, no ha habido razón para calificarlo en segundo grado;

4.° Que aunque á favor de Moreno existen las mismas circunstancias atenuantes, y de Galindo la última que se ha mencionado, innecesario es tenerlas en cuenta, supuesto que la ley los sujeta á pena determinada, ó lo que es lo mismo, á las dos terceras partes de la en que ha incurrido el autor principal.

Por lo dicho, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 578, 364, 29, 31, 62 y 63 del Código Penal, y 1,937 del Judicial, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, califica el delito en tercer grado y condena á Mariano Acosta, á sufrir la pena de treinta y cinco días de reclusión en la cárcel del Circuíto de Soto, á Victoriano Moreno y Rafel Galindo, á la de veintitrés días ocho horas de igual pena, en el mismo establecimiento, y á todas las demás accesorias de que hace mérito la sentencia de primera instancia, bien entendido que en la pena principal se les computará el tiempo que hayan estado detenidos y presos.

Queda así reformada la sentencia consultada, dictada el diez de Septiembre del año en curso, por el Juez del Circuíto de Soto.

Hágase saber la presente, déjese copia de ella, publíquese, y devuélvase el proceso al Juzgado de su origen para los fines consiguientes.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del seis de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis, se publicó la anterior sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En siete de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué al señor Procurador general la sentencia que precede,

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, diez de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—La presente actuación contiene la demanda que en diez y siete de Julio del año próximo pasado, propuso Anastasio Patiño ante el Juez de lo civil del Departamento de Panamá, contra la Compañía General Transatlántica, por suma de pesos, procedente de la falta de cumplimiento de un contrato de fletamento, para la conducción, al Puerto de la Guaira, en uno de los vapores de la expresada Compañía, de cuatro cajas de materiales de imprenta pertenecientes al demandante.

Después de varios incidentes relativos al carácter legal del representante de la entidad demandada, que quedó al fin legítimamente constituído por virtud del poder debidamente registrado y autenticado, que el Consejo administrativo de la misma Compañía otorgó en París el veinticuatro de Febrero del año en curso á favor del doctor José Ignacio Castellanos, opuso éste, en tiempo oportuno, la excepción de inepta demanda, fundada en la causal que determina el inciso 2.° del artículo 401 del Código Judicial.

Abierta á prueba la actuación y admitidas y practicadas las que produjeron las partes, se dictó el auto de veinticuatro de Mayo último, por el cual se declaró no probada la mencionada excepción, con costas de cargo del excepcionante y con obligación de contestar directamente la demanda dentro del término de veinticuatro horas.

Interpuso la parte perjudicada por ese fallo el recurso de apelación, que le fué concedido en ambos efectos para ante esta Superioridad, en la cual, habiéndose dado al recurso la tramitación dispuesta por la ley, se tiene en consideración para decidirlo;

1.° Que conforme al artículo 164 del Código de Comercio nacional, de 1874, los fletamentos de naves extranjeras celebrados enlos puertos de la Unión Colombiana, están sujetos á las disposiciones de dicho Código, aunque el Capitán sea también extranjero, de modo que, ninguna duda puede quedar de que este asunto está sometido á la jurisdicción de la Corte; cuya duda, caso de haber existido, desaparecería completamente al presente, en vista de la terminante disposición del inciso 5.°, sección 2.ª, artículo 21, capítulo 2.° de la ley 61 del presente año, provisional sobre organización y atribuciones del Poder Judicial, etc., etc.

2.° Que el demandado explica su excepción aseverando que la demanda ha sido instaurada contra diversa persona de la obligada á responder en juicio, puesto que del conocimiento de embarque de foja 3.ª, suscrito por el Agente de la Compañía del Ferrocarril de Panamá, y aun del mismo libelo de demanda consta, que dicho Agente recibió los expresados bultos, y que, por consiguiente, es contra esta Compañía que el actor Patiño debió dirigir su acción, y nó contra la Transatlántica, diversa de aquella, (foja 4.ª).

3.° Que en el estado competente de la articulación comprobó el demandante con las declaraciones de Ernesto Icaza, Juan Bautista Poylo y Máximo Haurtemutte, que ambas Compañías tienen celebrado un contrato, convenio ó arrego, por el cual los Agentes de la del Ferrocarril de Panamá reciben carga para ser tomada por los vapores de la Transatlántica, en el Puerto de Colón y *transportada á Europa* y Puertos intermedios; contrato, convenio ó arreglo cuya existencia no ha sido negada por el excepcionante; de manera que el conocimiento de embarque de foja 3.ª firmado por Ernesto Icaza, no le fué simplemente en su carácter de Agente de la primera de las referidas Compañías, sino también como Agente de la segunda, contra la cual se ha dirigido la demanda.

4.° Que después de la práctica de esas pruebas, el demandado explicó su excepción en otros términos, fundándola, no yá en que la Compañía del Ferrocarril debía ser la única obligada, por cuanto el conocimiento de embarque, como se ha dicho, había sido firmado por su Agente en Panamá, sino en que, resultando del mismo conocimiento que los obligados son "Panamá, Rail Road Company and General Transatlantic Company," esto es: La Compañía del Ferrocarril de Panamá y la Compañía General Trasatlántica," establecida la demanda contra la última solamente, la acción se dirigió contra una persona diversa de la obligada, que lo es, en este caso, la asociación compuesta de los dos compañeros. (Foja 30).

5.° Que no habiéndose presentado el contrato celebrado ó la escritura de asociación de las dos Compañías para el transporte de las mercaderías, es imposible conocer la naturaleza y extensión de las obligaciones comunes que se hayan impuesto; si han quedado ó nó solidariamente responsables del no cumplimiento de esas mismas obligaciones, etc. etc.; de modo que no existe el comprobante de la firma ó razón social que colectivamente ha debido ser demandada, como á última hora lo ha pretendido el excepcionante.

6.° Que como consecuencia de la anterior consideración y en vista de las declaraciones antes expresadas, debe deducirse que cada una de las dos Compañías, se reservó el ejercicio exclusivo de sus operaciones propias; esto es, la del Ferrocarril, el transporte de las mercaderías de Panamá á Colón, poniéndolas en este puerto á disposición de la Transatlántica; y la de esta Compañía, la de conducir en sus vapores las mercaderías así entregadas á cualquiera de los puertos en que ellos tocan.

7.° Que lo expuesto se corrobora con la versión aceptada por la Corte, que el apoderado del excepcionante ha hecho en esta segunda instancia, de una de las cláusulas del conocimiento de foja 3.ª, á saber: "Se estipula expresamente que la entrega en Colón, á la Compañía General Transatlántica, de los objetos mencionados en este conocimiento, conforme á los términos de él mismo, liberta á la Compañía del Ferrocarril de Panamá de toda reclamación ó responsabilidad de cualquier género relacionada con los mismos objetos."

8.° Que la falta de entrega oportuna de los bultos á la Compañía Transatlántica ó á su Agente en Colón, y la falta también de las facturas y demás documentos aduaneros exigidos por las leyes del país á donde aquellos deben ser introducidos, podrá dar lugar, tal vez, á algunas otras acciones, definiciones ó alegaciones por parte de la expresada Compañía; pero esas omisiones no pueden servir para demostrar en el caso actual, que otra persona ó Compañía distinta de la demandada, era la que tenía á su cargo la conducción, en sus vapores, de las mercaderías transportadas de Panamá á Colón, en los trenes de la Compañía del Ferrocarril, y que, por consiguiente, fué contra esa otra persona ó Compañía, que el demandante debió proponer su acción.

9.° Que en el estado actual del asunto, la Corte no puede entrar á ocuparse del mérito probatorio de la carta de foja primera, traducida en esta segunda instancia por el intérprete oficial, ni menos puede proceder á la estimación de algunas de las otras pruebas aducidas por las partes, porque eso podría conducirla á prejuzgar de puntos conexionados con lo principal del pleito, lo cual está prohibido.

En fuerza de estas consideraciones, la Corte Suprema, de conformidad con el concepto del señor Procurador general, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto de veinticuatro de Mayo último, de que se hace mérito en el tercer aparte de la presente, siendo las costas de esta segunda instancia de cargo del apelante.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente al juzgado de su origen.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En trece de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué el auto anterior al señor Procurador.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

En trece de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis, natifiqué el auto anterior al señor doctor Gil Colunje.

COLUNJE—*Guera A.*, Secretario.

Año I REPÚBLICA DE COLOMBIA. Número 15

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 6 de Mayo de 1887.

CONTENIDO.

PÁG.

ACUERDOS DE LA CORTE.

Acuerdo número 17, sobre una competencia entre la autoridad civil y la militar 113

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Pronunciada en el juicio ejecutivo á la hacienda de "Sancote," vendida como finca desamortizada 114

NEGOCIOS CRIMINALES

Sobre nulidad del juicio militar seguido contra Felix Peña, Paulino Sánchez y otros 117

DOCUMENTOS VARIOS JUDICIALES.

Copia de una sentencia pronunciada por el Tribunal Superior de Cundinamarca, en causa por motín y robo 119

GACETA JUDICIAL.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

ACUERDO NÚMERO 17.

En la ciudad de Bogotá, á siete de Enero de mil ochcientos ochenta y siete, se constituyó la Corte Suprema Nacional en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, con el objeto de dirimir la competencia negativa, promovida por el Juez 2.° del Estado de Boyacá, al Comandante general de la 2.ª Columna del Ejército nacional, sobre el conocimiento de las diligencias instruídas en averiguación de los responsables de la muerte de Nicomedes Rodríguez. El señor Magistrado doctor Largacha, á quien tocó sustanciar este asunto, presentó el siguiente proyecto de resolución:

Vistos:—En cuatro de Marzo de mil ochocientos ochenta y cinco, el Alcalde del Distrito de Chiquinquirá, Departamento de Boyacá, inició el correspondiente sumario para averiguar el delito de homicidio, perpetrado en la persona de Nicomedes Rodríguez, verificado en la noche del tres, en la ciudad del mismo nombre. Como la muerte de Rodríguez había sido causada por una patrulla que rondaba la ciudad cerca de las diez de la noche, el Alcalde pasó las diligencias practicadas al funcionario de instrucción militar, que también había iniciado la indagación.

De la información levantada resulta: que en la noche mencionada, una patrulla tomada del Batallón Boyacá, número 2.°, perteneciente á las milicias del Estado, recorría las calles para la seguridad pública, en virtud de la situación de guerra del país, bajo las órdenes del Capitán Guarda-parque, Eladio Quiñones; en el camellón del Sur de la población se dió la voz de ordenanza á dos individuos que transitaban por allí. El Jefe de la patrulla dispuso el reconocimiento de esos dos individuos, de los cuales, el uno era Nicomedes Rodríguez y el otro Guillermo Gooding V., por cuanto á la primera intimación no dieron respuesta alguna; entonces uno de los soldados de la comitiva, advirtió al Jefe, que Rodríguez tenía en la mano un revólver, de cuya arma se le trató de despojar, é intimándoles el Comandante á los dos detenidos que siguieran al cuartel. Habiéndose denegado ellos á cumplir con la orden, se trató de obligarles á obedecerla, y Rodríguez dió un golpe al Capitán Quiñones en el pecho con el arma que manejaba, tratando, además, de escaparse, para entrarse en el Hotel de Pedro Mendieta, que se hallaba inmediato, y en el cual estaban alojados Rodríguez y Gooding; á este tiempo dispararon sobre ellos tres tiros los soldados de la comitiva, que habían calzado sus rifles por orden del Jefe. Poco después, reforzada la patrulla con auxilio que mandó pedir el Comandante al cuartel del Batallón, penetró en el Hotel, y allí fué hallado el cadáver de Rodríguez atravesado por tres balazos.

Cuando el funcionario de instrucción consideró perfeccionado el sumario, lo pasó al Comandante del Batallón 2.° de Boyacá, quien lo puso á disposición del Sargento Mayor del Cuerpo, por impedimento de aquel primer Jefe. Sin haber constancia en el expediente, del motivo por qué se desprendiera el Mayor del Cuerpo del conocimiento del asunto, aparece á fojas 21 un auto del Juzgado 2.° de Boyacá, de fecha siete de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco, dando vista de lo actuado al Fiscal, y luégo otro de fecha doce, declarándose incompetente dicho Juez para aprehender el conocimiento de la causa, por tener el delito carácter militar; y promoviendo competencia negativa al Comandante general de la 2.ª Columna de la Guardia Colombiana, situada en la ciudad de Tunja. Este empleado militar se denegó á dar curso al expediente; por providencia del veintiséis, fundada en que el Batallón á que pertenecían los sindicados, no había sido incorporado por el Poder Ejecutivo de la Unión en el Ejército nacional. El Juez 2.° del Estado, en la competencia negativa, remitió el expediente al Tribunal Superior del Estado para que dirimiera tal competencia; mas el Tribunal, estimando el hecho que se averiguaba como un delito de la competencia de los Juzgados nacionales, pronunció auto declarándolo así, en veintinueve de Febrero de mil ochocientos ochenta y seis, y devolvió el sumario al Juzgado de primera instancia, el cual lo remitió á la Corte Suprema Federal, para los fines legales.

Oído el dictamen del señor Procurador general de la Nación, se pidió informe al Ministerio de Guerra, sobre si el mencionado Batallón hacía parte de la Guardia Colombiana, en la fecha de la muerte de Rodríguez; y por nota número 300, Mesa de mando, de fecha once de Diciembre último, lo ha evacuado el señor Ministro en estos términos: "Hecha la investigación del caso, resulta de ella que el Batallón 2.° de Boyacá no pertenecía á la Guardia Colombiana durante la última guerra civil."

De lo expuesto se deduce que no hay fundamento alguno legal para que el juicio se surta ante el Consejo de Guerra ú otros funcionarios militares del Ejército nacional, y que eliminada como está la jurisdicción militar del extinguido Estado de Boyacá, según el artículo 166 de la Constitución, que no establece para la defensa del Gobierno otra fuerza pública que el Ejército permanente, hoy han caducado las instituciones militares de los antiguos Estados, los cuales en su condición de Departamentos no tienen más poderes que los reconocidos en el título 8.° de la misma Constitución.

En consecuencia, la Corte Suprema Nacional, en Sala de Acuerdo, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que el Juez 2.° del Estado ó el

que lo represente, conforme á la ley de organización judicial, número 61 de mil ochocientos ochenta y seis, es el competente para conocer en el sumario á que se refiere el presente Acuerdo, el cual será notificado, copiado en el expediente y publicado en el *Diario Oficial*, debiéndose devolver la actuación al Juzgado Superior del Distrito Judicial de Tunja. Dése aviso al Jefe militar que ha sostenido la competencia."

Discutido el anteriorior proyecto, fué aprobado por el voto unánime de los señores Magistrados, quienes dieron por concluído el presente Acuerdo, que firman con el infrascrito Secretario.

El Presidente, JOSÉ M. SÁMPER—*Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, diez de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—El Tribunal Superior del Estado de Boyacá, por sentencia de treinta de Abril de mil ochocientos setenta y cinco (foja 7, cuaderno 2.°), declaró que la hacienda de "Sáncote," ubicada en el Distrito de Santa-Ana, jurisdicción del Circuíto de Moniquirá, pertenecía de por mitad á Fidel Padilla y Tadeo Camacho, á virtud de la escritura de venta otorgada á favor de éstos, en diez de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y ocho, por Iguacia, Prisca y Nicolasa Cadena, y que el demandado, Carlos Puerta, debía entregar la misma finca á esos dos propietarios reconocidos, dentro de diez días después de notificada la sentencia; con cargo de reconocerse sobre la hacienda los gravámenes de ciertos principales asegurados en ella. Basados en aquel fallo ejecutoriado, Padilla y Camacho entablaron acciones ejecutivas contra el poseedor, Puerta, para la entrega de sus respectivas porciones de terreno. El Juzgado del Circuíto de Moniquirá dictó el auto de quince de Enero de mil ochocientos setenta y seis (fojas 4, vuelta), y á petición, de los herederos de Camacho, el de tres de Agosto de mil ochocientos setenta y siete (fojas 41, vuelta, cuaderno 3.°), en los cuales ordenó por la vía ejecutiva que tal entrega se verificara.

Cuando se practicaba la traba de la ejecución, el Agente Fiscal del Circuíto (fojas 3, cuaderno número 4.°), formalizó tercería excluyente, á nombre de la Nación, sobre la totalidad de la hacienda, fundándose en que esa finca había sido ocupada por el Gobierno como perteneciente al ramo de Bienes Desamortizados y vendida en pública subasta, según la copia de la inscripción hecha por el Agente subalterno de Bienes Desamortizados, del extinguido Convento de Monjas de Santa-Clara de Tunja, en diez y siete de Marzo de mil ochocientos setenta, y la escritura otorgada ante el Notario 1.° del Circuíto de Bogotá, el siete de Enero de mil ochocientos setenta y ocho, por el Tesorero general de la Unión, á favor de Hermógenes Valdiri, como sustituto en el remate de aquella finca (fojas 12 y 29). Las tercerías fueron admitidas respecto á las dos ejecuciones promovidas, por los autos de diez y siete de Agosto de mil ochocientos setenta y siete (fojas 4, vuelta, del cuaderno 4.°) y veintiséis de Enero de mil ochocientos setenta y ocho (foja 6.ª, cuaderno 5.°)

En este Estado se presentó Hermógenes Valdiri por medio de apoderado, haciendo una oposición idéntica, como comprador de la hacienda; y el Juzgado, por auto de diez y seis de Mayo de mil ochocientos setenta y ocho (fojas 10, cuaderno 6.°), la *admitió y dispuso que tuviera el curso legal.* Las partes produjeron las pruebas que estimaron conducentes; y por sentencia del Juez 2.° del Circuíto de Occidente, Estado de Boyacá, de veintidós de Diciembre de mil ochocientos ochenta y tres (cuaderno 13.°), se declarron no probadas las excepciones de "cosa juzgada," "nulidad del remate de la misma finca" y "prescripción," opuestas por Padilla y Camacho á las acciones de tercería excluyente, porque la finca pertenecía en dominio y propiedad á Hermógenes Valdiri, á quien debía ser entregada, como rematador. Se dejaron á salvo los derechos de Padilla, Camacho y Puerta, contra sus respectivos causantes. De este fallo apelaron los dos ejecutantes, Padilla y herederos de Tadeo Camacho; el recurso les fué concedido, el cual ha sido legalmente sustanciado ante la Corte, citándose á las partes para sentencia, después de evacuadas las pruebas producidas y de oírse los alegatos presentados. Para resolver definitivamente la cuestión, la Corte estima como de cardinal importancia en los autos los siguientes hechos:

1.° A fojas 1.ª del cuaderno número 1.°, aparece en copia la escritura de diez y ocho de Marzo de mil ochocientos seis, otorgada en Vélez ante el Escribano público, don José Ignacio Quintero, por la cual don Manuel Gabino de Angulo y Olarte vendió á don José Antonio Cadena la hacienda denominada de "Sáncote," por cantidad de cuatro mil pesos, con cargo de reconocer y asegurar, además, el principal de mil seiscientos pesos á favor del Convento de Santa-Clara de Tunja; el de ochocientos pesos más á favor del mismo Convento; el de mil pesos á beneficio del monasterio del Carmen de la Villa de Leiva; y el de mil trescientos cuarenta y siete pesos cuatro reales, á favor del Ramo de Temporalidades. A fojas 14 se halla la escritura otorgada en Tunja el ocho de Octubre de mil ochocientos siete, por la cual el citado Cadena aseguró el principal de dos mil cuatrocientos pesos á favor del Monasterio de Santa-Clara, al cinco por ciento, sobre la hacienda mencionada; escritura que aparece registrada en la misma fecha.

2.° Ignacia, Prisca y Nicolasa Cadena, nietas de José Antonio Cadena, en su condición de herederas, aunque no eran tenedoras de la hacienda de "Sáncote," la vendieron bajo linderos entonces fijados, á Fidel Padilla y Tadeo Camacho, en cantidad de ocho mil pesos, por escritura número quinientos, de diez de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y ocho, otorgada ante el Notario del Circuíto de Vélez, debidamente registrada.

3.° Con estos títulos, Padilla y Camacho demandaron la propiedad de la hacienda, y obtuvieron sentencia de primera instancia en veintiuno de Junio de mil ochocientos cincuenta y nueve, la que fué confirmada por el Tribunal Superior del Estado de Boyacá (fojas 7, cuaderno 2.°), en treinta de Abril de mil ochocientos setenta y cinco, en los términos que yá quedan expresados; siendo consecuencias inmediatas de este fallo definitivo la acción ejecutiva introducida por Padillla y los herederos de Camacho, de que también se ha hecho mención, y la tercería excluyente formalizada por el Ministerio público á nombre de la Nación, lo mismo que la de Hermógenes Valdiri, comprador de la hacienda, puesta en pública subasta como un bien desamortizado.

4.° Las tercerías fueron fundadas en la escritura de la Tesorería general de que se ha hecho mérito, y en la inscripción de la hacienda en el Registro de Bienes Desamortizados, verificada por el Agente subalterno respectivo, en diez y siete de Marzo de mil ochocientos setenta, con apoyo en la copia corriente á fojas 12, cuaderno 4.°, de una diligencia asentada en el libro de Registro de instrumentos públicos, llevado por el Secretario municipal de la Villa de Moniquirá, el siete de Marzo de mil ochocientos treinta y cuatro, por la cual se hace constar que José Azuero, á nombre de las monjas de Santa-Clara de Tunja, siguió un expediente ejecutivo contra José Antonio Cadena, por cantidad de pesos y réditos vencidos, sin expresarse su monto; que á la foja 25 vuelta, de ese expediente, "se halla que las tierras de 'Sáncote,' en jurisdicción de Santa-Ana, se remataron en favor del Monasterio de monjas de Santa-Clara de Tunja, por cantidad de mil seiscientos setenta y cinco pesos, dos terceras partes de su avalúo; y que á la foja 32 y siguientes, se halla que el señor José Azuero, como apoderado de dicho Monasterio, tomó posesión de las referidas tierras en diez y seis de Diciembre del año de treinta y tres." Allí mismo se asegura por el Registrador que el expediente fué seguido ante la Justicia municipal de esa Villa y autorizado por el Escribano de ella, Rafael Plata.

5.° El cuaderno 12, fojas 36, contiene el testimonio de la escritura, sin fecha, de venta hecha en Moniquirá, por el Alcalde municipal de ese cantón, Pedro Franco, al Monasterio de Santa-Clara, representado por José Azuero, de dichos terrenos.

Como en ese instrumento se inserta la boleta de fecha veinte de Febrero de mil ochocientos treinta y cuatro, que acredita el pago del derecho de alcabala, y le precede una escritura en el mismo protocolo, á cargo del Escribano Rafael Plata, de dos de Marzo del citado año, siguiéndole otra de cuatro de igual mes; se infiere que la adjudicación de la hacienda al Monasterio, hecha por autoridad judicial, á virtud de la ejecución contra José Antonio Cadena, fué verificada en Marzo de mil ochocientos treinta y cuatro, aunque sin poderse fijar el día preciso del otorgamiento de la escritura;

6.° Sin que de autos resulte la verdadera causa, pero probablemente por prescindencia del Monasterio de Santa-Clara, del ejercicio de actos de dominio sobre la finca, Jesús Olarte Ricaurte, con el carácter de Patrono y Capellán de una fundación hecha por don Antonio de Herrera Sotomayor, que gravaba sobre la hacienda de "Sáncote," otorgó en Vélez una escritura el diez de Mayo de mil ochocientos cincuenta y ocho, bajo el número 193, en la cual se hace mención de haber vendido Olarte Ricaurte aquella hacienda á Carlos Puerta (fojas 93 vuelta, cuaderno 1.°), quien, como se ha dicho, fué vencido en el juicio de propiedad que sostuvo con Padilla y Camacho, según sentencia definitiva del Tribunal Superior del Estado de Boyacá;

7.° A fojas 17 vuelta, cuaderno 1.°, y 4.ª cuaderno número 14, aparece en doble ejemplar, el testimonio de la escritura número 256, otorgada en Tunja por Salvador Emigdio Larrota, como apoderado general del Convento de Santa-Clara, en veintiuno de Diciembre de mil ochocientos cincuenta y ocho, por la cual vendió, con la intervención de la Abadesa del mismo Convento, debidamente autorizada por el Definitorio y por el Superior eclesiástico, á Fidel Padilla y Tadeo Camacho el principal de dos mil cuatrocientas piezas de á ocho décimos y sus réditos, con todas las acciones reales que había tenido y tener pudiera el Monasterio contra las tierras de "Sáncote," por cantidad de dos mil pesos. Por la cláusula sexta de dicha escritura declaran los vendedores: "que su Monasterio no ha tenido, ni tiene, sobre las tierras de 'Sáncote' otros derechos que los de acreedor hipotecario, los cuales son los que hacen el objeto de esta venta; pues que el dominio y propiedad de dichas tierras pertenecen á los herederos del finado José Antonio Cadena, ó á quien legalmente lo represente." Luégo aparece también (fojas 23, cuaderno 1.°) la escritura número 197, de veintitrés de Diciembre del citado año de cincuenta y ocho, otorgada ante el Notario de Leiva, por la cual la Priora del Convento del Carmen de esa Villa, con la autorización del caso, vendió á Padilla y Camacho en cantidad de seiscientos pesos el principal de mil pesos que gravaba sobre la expresada hacienda en favor de esa comunidad.

Según estos antecedentes, la escritura otorgada al Convento de Santa-Clara por el Alcalde municipal del cantón de Moniquirá, carece de un requisito exigido para su validez, cual es la fecha de su otorgamiento, conforme á las leyes 54 y 111, tratado 18, Partida 3.ª, y á la ley 13, título 25, libro 4.° de la Recopilación Castellana (equivalente á la ley 1.ª, Tratado 23, libro 1.° de la Novísima Recopilación). Y como la diligencia de remate de la hacienda de "Sáncote" hecho ante ese Alcalde no fué insertada en el protocolo, ni ha sido hallado el expediente ejecutivo original, al cual simplemente se refiere el Registrador; no hay un documento suficiente para apreciar la legalidad de los procedimientos ejecutivos y los del remate en pública almoneda, por virtud de los cuales se efectuara en debida forma la transmisión de la propiedad que tenía José Antonio Cadena á favor del censualista ejecutante, que lo era el Convento, representado por un individuo cuyos poderes son igualmente desconocidos. Pero valgan ó nó esos títulos para acreditar que la adjudicación se hizo á la comunidad de Santa-Clara; es un hecho bien comprobado que el Convento se desprendió del derecho que pudiera haberle conferido aquella escritura, ó la adjudicación en el remate de la hacienda; puesto que en el instrumento público otorgado con todas las formalidades de derecho, en el año de mil ochocientos cincuenta y ocho, por los legítimos representantes de aquella comunidad, se declara en la cláusula sexta que éste no tenía más derechos sobre "Sáncote," que los *de acreedor hipotecario*, por el principal de dos mil cuatrocientos pesos, y "que esa finca pertenecía á los herederos de José Antonio Cadena."

Queda, por consiguiente, reducida la dificultad á investigar si la Nación pudo ocupar legalmente aquella finca, á virtud del decreto de nueve de Septiembre de mil ochocientos sesenta y uno, sobre desamortización de Bienes de manos muertas, y proceder á su venta. De la solución en este punto, dependerá la de las excepciones de nulidad opuestas á los terceristas por Padilla y los herederos de Camacho.

A este respecto, debe observarse que la copia de la inscripción en el Registro de Bienes Desamortizados relativa á la hacienda de "Sáncote" (fojas 30 vuelta, cuaderno 12) contiene una nota número treinta y cinco, de veintidós de Diciembre de mil ochocientos sesenta y tres, en la cual no se expresa la oficina que la dirigía, y que está terminada con las iniciales *L. R.*, por la cual se encarga al Agente de Bienes Desamortizados de de Moniquirá, que embargue, deposite y arriende el terreno de "Sáncote," en cumplimiento de resolución superior, agregándose que se adjuntara "copia de la diligencia del remate hecho en el año de treinta y cuatro á favor de Santa-Clara, para que por ella y sus linderos se hiciera el embargo, depósito y arriendo." Esa nota, que probablemente es del Agente de Bienes Desamortizados del Convento mencionado, parece que sirvió de fundamento para la ocupación de aquella finca desde el año de mil ochocientos sesenta y tres, por cuenta de la República; pero su inscripción en el Registro de Bienes Desamortizados no vino á verificarse hasta el diez y siete de Marzo de mil ochocientos setenta. El artículo tercero de la ley cuarenta y uno de mil ochocientos sesenta y cuatro dispone lo siguiente: "Ninguna finca raíz será ocupada en lo sucesivo, á nombre de la Nación y como propiedad de manos muertas, si ha sido poseída por el que aparezca ser propietario de ella, y demuestre la propiedad con títulos de dominio públicos y fehacientes, que comiencen tres años antes por lo menos, desde el nueve de Septiembre de mil ochocientos sesenta y uno." Al folio cuarenta y uno vuelto del cuaderno primero A., aparece la escritura número trescientos sesenta y cinco, otorgada en Vélez el veinticinco de Agosto de mil ochocientos cincuenta y siete por Jesús Olarte Ricaurte, por la cual vende á Carlos Puerta la hacienda de "Sáncote," en la cantidad de cuatro mil pesos de ley. Esa escritura, debidamente registrada, era un título legal translaticio de dominio, que no había sido anulado el día de la inscripción de aquella finca en el registro de Bienes Desamortizados, verificada, como queda expresado, el diez y siete de Marzo de mil ochocientos setenta, es decir, cuatro años, catorce días después del otorgamiento del instrumento público que transfirió el dominio de esa finca raíz al citado Puerta. No se puede, por consiguiente, dudar de que la ocupación de la hacienda por la República, fué verificada contra una prohibición legal, lo que apareja la nulidad de aquel acto oficial, conforme al artículo sexto del Código Civil. Si la ocupación de la finca por parte del Gobierno fué hecha contra ley expresa, indebidos fueron el remate y venta que se hizo de ella á nombre de la República, al tercerista Valdiri, en mil ochocientos setenta y ocho, pues si bien es cierto que conforme al artículo mil ochocientos setenta y uno del Código Civil, vale la venta de cosa ajena, esto es sin perjuicio de los derechos del verdadero dueño, mientras no se extingan por el transcurso del tiempo.

En el presente caso no se han extinguido esos derechos, pues ni Valdiri ni el Gobierno, su causante, han poseído por el tiempo que la ley prescribe para ganar por él el dominio, ni el opositor alega la prescripción como título constitutivo de ese derecho.

En el debate originado por la tercería introducida por Valdiri, el cual no tiene otro objeto que el que se declare como de su propiedad la finca embargada, con exclusión del ejecutante y del ejecutado, no podría favorecer al opositor otra circunstancia que la demostración de que el Gobierno ó el Monasterio de Santa Clara en Tunja, de quien aquél deriva su derecho, era dueño del inmueble, con derecho preferente á los ejecutantes Padilla y Camacho; pero ya se ha visto que el derecho de éstos tiene su origen en la venta que primitivamente hizo Angulo á Cadena en mil ochocientos seis, y que los herederos de éste trasmitieron por escritura de diez de Noviembre de mil ochocientos cincuenta y ocho.

Si se hubiera probado la existencia de la venta forzada que se dice hecha por Cadena al Convento en el año de mil ochocientos treinta y cuatro, entonces el derecho preferente del

Gobierno estaría fuera de duda, y por consiguiente el de su comprador Valdiri, pues ya se ha dicho que por el decreto de nueve de Septiembre de mil ochocientos sesenta y uno, aquella entidad se declaró dueña de todos los bienes de las asociaciones religiosas; declaratoria que se repitió por la ley cuarenta y una, de veintinueve de Mayo de mil ochocientos sesenta y cuatro.

Pero la existencia de esa venta, como yá se ha demostrado, no está autenticada conforme á las leyes existentes en la época en que se dice verificado el hecho, porque, si es verdad que conforme á esas leyes, la venta de inmueble podía hacerse por medio de escritura ó sin ella, cuando el contrato se consumaba con carta, ésta debía confeccionarse con los requisitos que esas mismas leyes exigían; de otro modo, ningún valor tenían y, por lo mismo, ni daban existencia al contrato, ni servían para justificarlo.

La escritura sin fecha por la cual se dice que el Alcalde municipal de Moniquirá, como representante de José Antonio Cadena, vendió el inmueble, tiene hasta la desventaja de haber sido registrada el veintiséis de Junio de mil ochocientos sesenta y cinco, más de cuarenta años después de su otorgamiento, cuando ya hacía muchos años que la escritura de venta hecha á Padilla y á Camacho había sido inscrita en el libro de registro, y aun después de haber sido pronunciada la sentencia que decidió el litigio sobre propiedad del inmueble, entre Padilla y Carlos Puerta. De manera que el registro hecho en mil ochocientos sesenta y cinco, que, conforme al artículo 756 del Código Civil, es la manera de efectuar la tradición del dominio de los bienes raíces, vino á ser posterior al derecho adquirido por los ejecutantes, y aplicando á este caso la doctrina del artículo 1,873 del mismo Código deben ser preferidos éstos, pues tanto ellos como el tercerista derivan su derecho de José Antonio Cadena, que ambas partes reconocen como primitivo dueño del inmueble.

Resta examinar si por virtud de lo dispuesto en algunas leyes fiscales que se citan por el interesado, el derecho de los ejecutantes puede quedar postergado al del opositor de este juicio.

El artículo 1,064 del Código Fiscal dice: "Por regla general, el Gobierno garantiza de una manera absoluta á los respectivos compradores de bienes desamortizados la libre propiedad de dichos bienes, asumiendo la responsabilidad de todas las acciones y reclamaciones de que puedan ser objeto por cualesquiera causas anteriores á la enajenación, y en las escrituras de venta se expresará que el Gobierno vende las fincas respectivas, libres de toda responsabilidad anterior á la enajenación."

Y el artículo 3.° de la ley 51 de 1867 dispuso lo siguiente: "Con la sanción de la presente ley quedan ratificados de nuevo, y de la manera más solemne, todos los remates de que trata el decreto ejecutivo de 11 de Agosto de 1866, sobre revisión de remates; y la Nación garantiza á los adjudicatarios, y á sus sucesores legales, la libre propiedad de los bienes adjudicados, en los términos de las leyes bajo cuyo imperio se practicaron dichos remates."

Como se ve, estas disposiciones legales sólo tuvieron y tienen por objeto comprometer la responsabilidad del Gobierno para con los rematadores de bienes de manos muertas, y no declarar que todos los bienes que el mismo Gobierno vendiera, se tuvieran como comprendidos en la desamortización y destituídos sus legítimos dueños de todo derecho, aunque demostraran la anterioridad de él, conforme á las leyes. Esto hubiera sido decretar por vía de garantía á los rematadores una expropiación de todos los bienes que se inscribieran en el registro de Bienes Desamortizados y se vendieran á los particulares por los Agentes del Gobierno. Ni las leyes sobre desamortización contienen principio semejante, ni una expropiación de esta naturaleza puede decretarse por el legislador. La Constitución de 1863 no admitía la expropiación, sino por causa de necesidad pública, judicialmente declarada y previa indemnización. La misma garantía para la propiedad consigna la Constitución de 1886.

Es verdad que la ley de 1864 citada, en su artículo 10 dispuso que las reclamaciones sobre propiedad de bienes inscritos en el registro, deberían hacerse dentro de un año después de publicada la inscripción, y que pasado ese término sólo se oirían reclamaciones de los menores y ausentes; pero contra este artículo, aparte de que no se sabe si la inscripción de los terrenos disputados fué publicada, pues no se ha presentado la correspondiente prueba, milita la poderosa razón de que la inscripción no debió hacerse, fué hecha contra disposición expresa de la ley, pues que la finca había sido poseída por Carlos Puerta por título legal desde antes de tres años del nueve de Septiembre de mil ochocientos sesenta y uno; y lo que debió hacerse en este caso por el Gobierno, en obedecimiento del mandato del artículo 4.° de la misma ley, fué demandar la propiedad del inmueble, sin perturbar ni interrumpir la posesión en que estaba el que aparecía como dueño mientras no fuera vencido en juicio de propiedad.

Es verdad que Puerta no aparece en este litigio como dueño, ni él disputa la propiedad en este juicio de tercería, ni puede disputarla; pero para el caso es indiferente que Puerta sea ó nó el dueño, basta saber que los terrenos eran poseídos con título translaticio de dominio desde antes de la época fijada por el artículo 3.° de la citada ley; que los ejecutantes han vencido á Puerta en el juicio de propiedad, y que ni el tercerista ni su vendedor, el Gobierno, han justificado derecho perfecto á los terrenos disputados.

Valdiri tiene conforme á la disposición del Código Fiscal citado, y al Código Civil, derecho para que el Gobierno le restituya el precio que él dió por la finca, puesto que la vendió como libre de toda responsabilidad anterior á la enajenación; pero la Corte en esta sentencia no debe determinar nada acerca de este derecho pues él no ha sido objeto de la demanda.

En consecuencia, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, decide:

1.° Se declara probada la excepción de nulidad de la inscripción de los terrenos de "Sáncote" en el Registro de Bienes Desamortizados, y por consiguiente la nulidad del remate hecho por Hermógenes Valdiri de los mismos terrenos;

2.° Se declara que ni el Gobierno nacional, ni Hermógenes Valdiri han justificado derecho preferente á los terrenos de "Sáncote," embargados en la ejecución que siguen Fidel Padilla y herederos de Tadeo Camacho contra Carlos Puerta;

3.° Se declaran no probadas las excepciones de "cosa juzgada" y "prescripción";

4.° La ejecución seguirá su curso legal;

5.° No se hace especial condenación en las costas de esta instancia;

6.° Se deja su derecho á salvo á Valdiri contra el Gobierno de la Nación para que lo haga valer en la forma legal;

7.° Queda así reformada la sentencia apelada;

Notifíquese, cópiese y publíquese esta sentencia en el *Diario Oficial* de la Nación, y devuélvase el expediente al Juez de primera instancia.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del diez de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis se publicó la sentencia anterior.

Ramón Guerra A. Secretario.

En la sentencia anterior los señores Magistrados doctores Froilán Largacha, Antonio Morales y Benjamín Noguera salvaron su voto en los términos siguientes:

Los Magistrados Largacha, Morales y Noguera tienen la pena de apartarse del concepto de la mayoría de la Corte; y fundan el salvamento de sus votos en las siguientes causales:

De la exposición de hechos comprobados que precede, se deduce que no habiendo constancia de que el interesado Carlos Puerta, ú otro individuo hubiera dado ante el Gobierno la demostración exigida por el artículo 3.° de la ley 41 de mil ochocientos sesenta y cuatro, acerca de la propiedad en las tierras de "Sáncote," con títulos *públicos y fehacientes* que comenzaran tres años antes, por lo menos, desde el nueve de Septiembre de mil ochocientos sesenta y uno; no puede objetarse como nula la inscripción que de esa finca hizo la Agencia respectiva en el registro de Bienes Desamortizados.

Entrando ahora en el examen del remate *referido*, verificado á consecuencia de la inscripción, es preciso determinar: 1.° Si

la sentencia del Tribunal Superior de Boyacá, por la cual se reconoció el dominio y propiedad de Padilla y Camacho en las tierras de "Sáncote," dando así término al juicio ordinario promovido por estos dos individuos contra Carlos Puerta, poseedor de ellas por compra, ha decidido de los derechos de la República sobre esa hacienda; y 2.° Si verificado el remate por el Agente general de Bienes Desamortizados, aprobado por el Poder Ejecutivo, y otorgada la escritura de venta á Valdiri, puede este comprador ser privado en el día de los derechos de propiedad adquiridos bajo la fe del Gobierno.

Sobre el primer punto hay que considerar que la demanda de Padilla y Camacho fué dirigida de un modo expreso contra Puerta y Olarte, y además, contra todos los que se creyeran con derecho á la finca, solicitando respecto de éstos que fueran citados por edicto, de acuerdo con el artículo 6.° de la ley 2.ª, parte 2.ª, tratado 2.° de la Recopilación Granadina, según el cual era necesario para la continuación del juicio ordinario, cuando los demandados eran inciertos ó cuando se ignoraba su paradero, citarlos por ese medio, sin necesidad de notificación personal. Mas como el Convento de Santa Clara de Tunja, no solamente era una entidad jurídica conocida y de radicación notoria, no pudo perjudicarle aquella sentencia, y desde luégo, tampoco al Gobierno cuando vino á sustituírse en los derechos de aquella comunidad.

En cuanto al segundo punto, la legislación nacional es terminante: el artículo 1.064 del Código Fiscal vigente desde primero de Enero de mil ochocientos setenta y cuatro dice así: "Por regla general, el Gobierno garantiza de una manera absoluta á los rematadores de bienes desamortizados la libre propiedad de dichos bienes, asumiendo la responsabilidad de todas las acciones y reclamos de que puedan ser objeto por cualesquira causas anteriores á la enajenación; y en las escrituras de venta se expresará que el Gobierno vende las fincas respectivas libres de toda responsabilidad anterior á la enajenación." El artículo 3.° de la ley 51 de mil ochocientos sesenta y siete había dispuesto lo siguiente: "Con la sanción de la presente ley quedan ratificados de nuevo y de la manera más solemne, todos los remates de que trata el decreto ejecutivo de once de Agosto de mil ochocientos sesenta y seis sobre revisión de remates; y la Nación garantiza á los adjudicatarios y á sus sucesores legales la libre propiedad de los bienes adquiridos en los términos de las leyes bajo cuyo imperio se practicaron dichos remates." Es, por consiguiente, incontrovertible que el remate de las tierras de "Sáncote" en mil ochocientos setenta y ocho y el título translaticio de dominio firmado por el Tesorero general en siete de Enero del mismo año, quedó bajo la garantía del Gobierno, quedando también asegurada bajo la responsabilidad del Tesoro nacional la libre propiedad del comprador, cualesquiera que sean las causas que se aleguen contra el remate.

La parte de Padilla y Camacho observa que en la enajenación hecha por el Gobierno á favor de Valdiri medió una causa ilícita, según el artículo 1,521 del Código civil: puesto que la hacienda de "Sáncote" estaba embargada por virtud del auto ejecutivo dictado en tres de Agosto de mil ochocientos setenta y siete (fojas 41 vuelta, cuaderno 3.°), que dispuso la entrega á Fidel Padilla de la mitad del terreno que le correspondía, conforme á la sentencia del Tribunal Superior de Boyacá; y que al tenor del artículo 1,741 del citado Código, ese contrato está afectado de nulidad absoluta. Pero ese embargo no era en actuación judicial en que fuera parte la Nación para que pudiera abarcarle la prohibición legal. Además, el Gobierno garantizó la libre propiedad de los rematadores, cualesquiera que fuesen las causas que se adujeran contra tales remates.

Lo expuesto da origen á las siguientes deducciones:

1.ª La inscripción de las tierras de "Sáncote" en el Registro de Bienes Desamortizados es un hecho consumado que ninguna importancia tiene, una vez que siguió el remate oficial de la misma hacienda, y que no hay constancia de que los Agentes del Gobierno tuvieran conocimiento de los títulos de propiedad particular que demostraran la ilegalidad de la ocupación de la finca y su inscripción en el libro de registro como un bien desamortizado;

2.ª No ha mediado causa ilícita en la venta que el Gobierno hizo á Hermógenes Valdiri de esa finca, y, en consecuencia, no hay nulidad, por tal motivo, en el remate efectuado por la Agencia General de Bienes Desamortizados y en los actos de trasmisión de esa propiedad al comprador, por medio de un instrumento público;

3.° La sentencia del Tribunal Superior de Boyacá, que reconoció la propiedad de Fidel Padilla y Tadeo Camacho en dicha finca, como un título que, si bien no ha podido tener fuerza para la Nación, por no haber sido parte en el respectivo juicio ordinario de propiedad, tiene todo el valor de una sentencia ejecutoriada para fijar los derechos de propiedad de Padilla y Camacho respecto á los individuos con quienes litigaron; y para que la sentencia les reconozca en posesión de los derechos consiguientes á la propiedad de que han sido privados por la República, en fuerza de las leyes sobre desamortización de Bienes de manos muertas;

4.° Hermógenes Valdiri, como comprador de una finca rematada en la condición de un bien desamortizado, está bajo el amparo de la ley que le ha garantizado la libre propiedad, *cualesquiera que sean las causas que se aleguen en contra del dominio adquirido, anterior al remate efectuado;*

5.° La responsabilidad del Tesoro nacional es consiguiente á la garantía dada á los rematadores por la ley, respecto á los individuos cuyos derechos hayan podido ser conculcados por un remate indebido; y

6.° No habiendo sido objeto directo del presente juicio la fijación de la responsabilidad de la Nación por la venta de las tierras de "Sáncote" en pública subasta, la determinación del cargo contra el Tesoro debe ser objeto de un juicio separado.

Teniendo, por último, en consideración que la misma parte interesada ha abandonado de un modo expreso la excepción de prescripción que opuso á la tercería de dominio hecha por el Ministerio público y por Valdiri, lo que hace innecesario apreciar este medio de defensa invocado al iniciarse el juicio.

Por estos fundamentos, los Magistrados que salvan su voto opinan que la sentencia de primera instancia debe ser reformada en estos términos:

1.° No han sido probadas las excepciones de juicio pendiente, nulidad y prescripción opuestas por Fidel Padilla y herederos de Tadeo Camacho;

2.° Se reconoce el Dominio de Hermógenes Valdiri sobre las tierras de "Sáncote," ubicadas en el Distrito de Santa-Ana del Departamento de Boyacá, conforme á los términos del remate efectuado ante la Agencia General de Bienes Desamortizados; y

3.° La Nación es responsable á Fidel Padilla y herederos de Tadeo Camacho de los perjuicios que comprueben haber sufrido por la venta de unos terrenos de su propiedad, perjuicios cuyo monto deberá fijarse en juicio separado.

Bogotá, diez de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera Martínez—Samper—Cock Bayer—Sanclemente.

Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del mismo día se publicó este salvamento de votos junto con la sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En trece de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis notifiqué la sentencia y salvamento de votos al señor Procurador.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, trece de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—El treinta de Mayo último, domingo, entre cinco y media y seis y media de la mañana, iban por el camino público del Departamento de Cundinamarca, un poco más allá del punto llamado "Los Manzanos," jurisdicción de Facatativá, el Sargento 1.°, Félix Peña, el Cabo 1.°, Paulino Sánchez y los soldados Benigno Quintana, Ismael Yepes y José Castillo, todos del Batallón 1.° de Ayacucho del Ejército Nacional, conduciendo, en dirección á Villeta, al preso Nicolás Chaves.

En aquel punto, el Sargento Peña, que iba un poco ébrico

ordenó á los soldados que se fueran con el preso por un camino de desecho, mientras que aquél y el Cabo se iban por el camino principal, montados en un carro. Si á esto se hubiera limitado el poco cumplido Sargento, su falta no hubiera tenido graves consecuencias; pero no se contentó con abandonar, aunque temporalmente, la comisión que se le había confiado, sino que disparó su rifle. El Cabo, autorizado con la palabra ó con el ejemplo del Jefe de la escolta, hizo lo mismo, y una de las balas disparadas por ellos, fué á despedazar el muslo izquierdo de Ignacio Escobar que en ese momento pasaba como á cuatro cuadras de distancia, por el potrero de Buenaventura Londoño, cerca á la casa de Francisco García.

Según el testigo Hermenegildo Alonso (fojas 26), menor de diez y ocho años, que acompañaba á Escobar, los agresores, luégo que cayó Escobar, huyeron y más adelante hicieron otro tiro; y conforme á la declaración de García, cuando á causa de los primeros tiros se levantó de su cama y salió á la puerta de su casa, para averiguar el motivo de aquéllos, vió que uno de los dos militares hizo un tiro para el lado donde el testigo estaba.

El herido Escobar fué levantado del sitio donde cayó, y reconocido por dos facultativos, por tres veces, en Facatativá, y hallaron que la herida era causada por un proyectil de rifle remington, que había penetrado por la parte anterior media del muslo izquierdo, y había salido por la posterior, dejando con la herida fracturado en trozos el hueso femural, y por consiguiente inutilizado completamente ese miembro.

En el último reconocimiento que se verificó el veintidós de Junio, el estado del paciente era muy grave, según los peritos, y había riesgo de que muriera. No consta en el sumario la suerte que ocurriera al infortunado Escobar.

El Comandante del Batallón, declarándose previamente competente para conocer del asunto, dictó con fecha diez y siete de Julio, auto de enjuiciamiento contra el Sargento y Cabo mencionados, y sobreseyó con respecto á los tres soldados. Consultó el sobreseimiento con el General en Jefe del Ejército, quien lo aprobó y concedió permiso para convocar un Consejo de Guerra ordinario.

Fueron elegidos á la suerte para componer éste, cuatro Capitanes del Batallón, entre ellos Vicente Torres de la 2.ª Compañía, la misma á la cual pertenecía el procesado Cabo, Paulino Sánchez.

Celebrado el juicio, el Consejo declaró por unanimidad que se había cometido el delito "por que se procedió" en esta causa; que los reos no eran responsables en cuanto á las heridas, y sí lo eran, por abandono de la comisión, con circunstancias atenuantes.

Dictóse sentencia con fecha veintiséis de Agosto, condenando á los enjuiciados á sufrir la pena de seis meses de arresto, por el delito últimamente mencionado, y se les absolvió por el otro cargo.

Elevada en consulta esa sentencia á la Corte, después de sufrir algún retardo la actuación, á causa de excusas y nuevos nombramientos de defensores, al fin se señaló para oír á las partes el día siete de los corrientes.

Surtido este trámite, ha llegado el tiempo de resolver:

La competencia del Consejo de Guerra y de la Corte, para conocer de este asunto, no es disputable, pues aunque uno de los delitos por los cuales se juzga á los procesados, el de heridas, es delito común, como fué cometido por individuos militares, en tiempo en que la República permanecía aún en estado de guerra, está sujeto á la jurisdicción militar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1,366 del Código de la materia; y por consiguiente, la Corte puede avocar su conocimiento por apelación ó en consulta. (Artículos 1,381 y 1,509 del mismo Código).

En cuanto al fondo del proceso, varias irregularidades se notan en él, que lo vician radicalmente:

1.ª Uno de los miembros del Consejo de Guerra, reunido en esta causa, era Capitán de la Compañía á que pertenecía el procesado, Paulino Sánchez.

El artículo 1,390 del Código citado, dice que los oficiales inferiores que han de formar el Consejo de Guerra ordinario, no deben pertenecer á la Compañía del reo, y el artículo 1,535, dice que la incompetencia de jurisdicción se causa, además de los casos expresados en el artículo 1,362, cuando hay vicio ó irregularidad en la formación del Consejo de Guerra. La incompetencia de jurisdicción es causa de nulidad, según el artículo 1,534.

2.ª El artículo 1,556, que define y castiga los delitos de violación y forzamiento de una consigna, impone para el caso menos grave, la pena de dos meses á dos años de prisión. Este artículo es uno de los que en el auto de proceder, se dicen infringidos, y no obstante haber sido calificado el delito en tercer grado, fueron condenados los reos á seis meses de arresto, en vez de haberlo sido á dos de prisión.

Conforme al ordinal 5.º del artículo 1,536 es nulo el proceso cuando se hace una errónea aplicación de la pena.

3.ª El auto de enjuiciamiento debe comprender el delito en general, sin determinar el artículo de la ley penal que se ha violado, para que las cuestiones que se sometan al Consejo y la sentencia que recaiga en el asunto, no obstante las circunstancias que aparezcan comprobadas en el plenario, se conformen con aquel auto. Véanse los artículos 1,542 del Código Judicial y 1,429 del Código Militar.

El auto de proceder, no solamente no se ciñó al mandato legal, declarando en general abierta la causa por el delito de heridas, sino que citó el artículo 105 del Código Penal, que no define ni castiga ningún delito; solamente señala el tanto de pena de los delitos, según el grado.

Por consiguiente, es claro que con relación al delito de heridas no se abrió causa, y el Consejo no pudo fallar cosa alguna respecto de él. La primera pregunta dirigida al Consejo, se refiere "al delito por el cual se procede"; y no apareciendo claro en el auto de formación de causa, que se hubiera esta abierto, más que por violación de consigna, el Consejo no pudo lógicamente resolver sobre la comisión del delito de heridas, ni acerca de sus responsables, ni tampoco, que los reos no eran responsables por el delito de heridas, cuando la interrogación nada comprendía á este respecto.

Este error sustancial, en providencia tan importante como la de enjuiciamiento, aunque no está previsto en la ley como causa de nulidad de la actuación, virtualmente la produce, puesto que si no resulta que haya causa respecto de un cargo, mal ha podido recaer veredicto y sentencia acerca de él.

Yá que debe reponerse el proceso, debe completarse por el funcionario instructor el sumario, haciendo constar, con declaraciones de peritos, la muerte y la época de ella, si hubiere tenido lugar respecto del herido, ó la lesión de por vida que sufra. En el auto de proceder se formulará el cargo contra los procesados, mencionando el delito en términos generales, con la denominación que le da la ley, como homicidio, heridas, sin calificar si fué premeditado, involuntario ó de otra especie, ó señalar algún artículo especial del Código Penal que trate del delito materia del proceso.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve:

Anúlase esta causa, desde el auto de enjuiciamiento inclusive.

Se reformará el proceso desde ese punto en adelante, observándose las indicaciones hechas en esta sentencia, y las que prescribe la ley en estos casos.

Notifíquese, cópiese, publíquese en el *Diario Oficial* de la Nación, y devuélvase el expediente al ciudadano General en Jefe del Ejército del Atlántico, para que haga dar cumplimiento á lo dispuesto en esta sentencia.

Mas, por cuanto ha cesado la jurisdicción militar en cuanto al delito de heridas, que es común, por estar la República en paz, el Jefe expresado ordenará que se saque copia de esta providencia, y de las demás piezas conducentes al esclarecimiento del delito de heridas y de sus responsables, y la pase al Juez del crimen en el Circuito de Facatativá, para que adelante el sumario en la indicada forma.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del trece de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis, publiqué la sentencia que antecede.

Ramón Guerra A., Secretario.

En tres de Enero de mil ochocientos ochenta y siete, se notificó la sentencia anterior al señor Procurador general.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

DOCUMENTOS VARIOS JUDICIALES.

COPIA de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Cundinamarca, en la causa contra Florentino Rodríguez, Eustaquio Rodríguez, Rubén Murillo y otros por los delitos de robo y motín.

Tribunal Superior del Distrito Judicial del Departamento de Cundinamarca.—Bogotá, Abril dos de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—*Resultando.* En el sumario que se instruyó, por el Alcalde del Distrito de Guasca, en averiguación de los hechos que tuvieron lugar en la noche del veintiséis de Septiembre de mil ochocientos ochenta y cinco, se comprobó que en la noche expresada y por consecuencia de la decomización que se había hecho de unas cuantas arrobas de sal, las cuales habían sido puestas por los Agentes del resguardo de la Salina de Zipaquirá á disposición del Alcalde de aquel Distrito, muchas personas reunidas en tumulto y desconociendo la autoridad legal, se apoderaron por la fuerza de la sal que se hallaba depositada en una tienda de Adriano Celis.

Resultando: Los hechos constitutivos del delito, así como sus responsables, quedaron demostrados con el testimonio de un gran número de testigos presenciales, por lo cual el señor Juez 2.° del Distrito federal, á quien se remitió el proceso, por ser el competente, dictó, con fecha de diez y nueve de Mayo del año próximo anterior, auto de proceder contra Miguel, Florentino, Gregorio, Adolfo, Nazario y Eustaquio Rodríguez, Atanasio León, Rubén Murillo, León Gutiérrez y Antonino Prieto, como cabecillas del motín ó asonada, y contra Cándido Muñoz, Francisco y Juan León y Juan Rodríguez como cómplices en la comisión del delito que define el artículo 197, y que castiga el 199 del Código Penal; y á todos los dichos por ser responsables también en la comisión del delito de robo que define el artículo 364 y castiga el 570 del dicho Código. Este auto fué notificado á Rubén Murillo, Gregorio, Florentino y Eustaquio Rodríguez, y á León Gutiérrez, informándose respecto de los demás que estaban ausentes, por lo cual, después de emplazados para que se presentaran á estar á derecho en el juicio, y requisitoriados legalmente, se suspendió respecto de ellos la prosecución del juicio, continuándose el procedimiento ordinario con relación á los reos presentes yá dichos.

Resultando: En el término de prueba los defensores solicitaron el testimonio de un gran número de testigos, y al efecto declararon como tales, Hermenegildo Rodríguez, Agustín Cárdenas, Félix Cifuentes, Ricardo Rozo, Mariano Rodríguez, José Murrillo, Francisco, Isidoro y Antonino Rodríguez, Abdón Garzón, Carlos Torres, Anastasio Ospina, José Indalecio Prieto, Antonio y Salvador Rodríguez, Ambrosio Murillo, Francisco Rodríguez, Bernardino Casas, Francisco de P. Torres, Silvestre León, Domingo Sánchez, Melitón y Atanasio Rodríguez, Juan Acosta Sánchez, Lino Murillo, Estéban Tobar, Ramona Tobar, David Pedraza, Antonio Tobar, Adriano Celis, Bartolomé Avellaneda, Eustaquio Murillo, Damián León, Justo Rodríguez y Constantino M. Tejeiro. Estos testimonios versan en su mayor parte sobre los hechos siguientes: 1.° Buena conducta, moralidad, trabajo y respeto por la propiedad y derecho ajeno con referencia al procesado Gregorio Rodríguez (testimonio de los diez primeros declarantes). 2.° Ninguna preparación ni conocimiento anterior de parte de éste mismo procesado para la ejecución del delito, pues, al menos con dos de los testigos (Félix Cifuentes y Antonino Rodríguez) estuvo momentos antes del acontecimiento cantando en una tienda, y cuando aun todavía no había concluído el motín, volvió á encontrarse con dichos declarantes, conjeturando éstos que dicho Rodríguez no tuvo participación en el robo de la sal, por la circunstancia que indican. 3.° Muchos testigos afirman que León Gutiérrez es honrado, trabajador, buen padre de familia, buen esposo, buen hijo, buen ciudadano, respetuoso á la autoridad y al derecho ageno etc.; y con referencia á este mismo procesado, tres testigos (Abdón Garzón, Bernardino Casas é Indalecio Prieto), afirman hechos tendientes á demostrar su ninguna participación en los hechos criminosos; y sobre este punto, cinco testigos, además de exponer hechos que dan á conocer su buena conducta, afirman también su incapacidad para cometer los delitos que se le atribuyen. 4.° Tres testigos declaran también con referencia á la buena conducta de Florentino y Eustaquio Rodríguez; y 5.° ante el mismo señor Juez de la causa declaró el señor Juan Acosta, haciendo presente que por el conocimiento que del hecho había adquirido, sabía que la sal que fué tomada por los amotinados pertenecía á los mismos por haberla comprado en Gachetá. Este mismo testigo hace constar hechos referentes todos á la muy buena conducta de Gregorio Rodríguez.

Resultando: Concluído el término de prueba y verificada la audiencia final, sin que conste que se hubiese señalado término á las partes para alegar, según lo prevenido en los artículos 1,712, 1,713 y 1,714 del Código Judicial nacional, el Juez haciendo uso de la facultad que concede el artículo 1,629 del mismo, ordenó la práctica de nuevas diligencias, que tuvieron por objeto demostrar; 1.° El carácter de Alcalde del Distrito de Guasca que ejercía Eustaquio Murillo, en las fechas en que tuvo lugar el delito, y en aquellas en que aparece como funcionario de instrucción; y 2.° Que la sal expropiada pertenecía en gran parte á los procesados. Concluídas estas diligencias, el Juez conocedor dió su fallo definitivo condenando á Florentino, Eustaquio y Gregorio Rodríguez á la pena de tres años y seis meses de reclusión penitenciaria en el Panóptico de esta ciudad, como autores principales del delito de robo, calificando su responsabilidad en segundo grado; y como igual calificación se les hace respecto del delito de motín, el Juez los condena además por la comisión de este delito y en su calidad de autores principales, á sufrir la pena de cuatro meses y quince días de prisión en el mismo Establecimiento. A Rubén Murillo se le declara autor principal del delito de robo, y se califica su responsabilidad en tercer grado, por lo cual la pena que le asigna el mismo fallo, es la de dos años y cuatro meses de reclusión penitenciaria por la comisión de este delito, y además, como cómplice en el delito de motín, calificándolo en tercer grado, se le condena á sufrir en el mismo Establecimiento la pena de prisión por dos meses. A León Gutiérrez, como autor del delito de robo, calificado en tercer grado, se le condena á dos años cuatro meses de reclusión penitenciaria; y como auxiliador del delito de motín y en el mismo grado se le impone la pena de un mes y quince días de prisión en el mismo Establecimiento; y últimamente, de conformidad con los artículos 29, 62, y 64 del Código Penal citado, los reos yá expresados fueron condenados á la privación de todo destino, cargo ó empleo público que tengan en la Nación, y á la de toda pensión de que gocen pagadera por ella; á la suspensión de los derechos políticos mientras dure la pena corporal; al pago de las costas mancomunadamente, y á la indemnización de los daños y perjuicios resultantes del delito á la cosa pública, también mancomunadamente, debiendo computarse á la pena el tiempo que los procesados hayan estado presos, bien como detenidos ó bien como sindicados.

Resultando: Notificada esta sentencia á todas las partes, se interpuso contra ella el recurso de apelación para ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo recurso les fué concedido, remitiéndose, en consecuencia, el expediente á esa Superioridad, en donde abierto nuevamente el juicio á prueba, se recibieron en él los testimonios de Antonio y Esteban Tobar, Ricardo Rozo é Indalecio Prieto, quienes deponen sobre las relaciones de parentesco de los testigos Antonio, Ortelio, y Clímaco Murillo, haciendo presente que los dos primeros y el último son sobrinos del citado Eustaquio Murillo y que Clímaco Murillo es hijo de éste; que Carlos Torres, Ortelio Murillo y Justo Rodríguez, son mayores de diez y ocho años, y, finalmente, el testigo Indalecio Prieto, asevera la buena conducta de Eustaquio Rodríguez, como igualmente el haber estado con éste en la tienda de León Gutiérrez la noche en que tuvo lugar el motín, sin que al exponente le conste que hubiera estado con los promotores de él, etc.

Resultando: Remitido el proceso á este Superior Tribunal, conforme á lo dispuesto en los artículos 21 y 99 de la ley 61 de 1886 (25 de Noviembre) provisional sobre organización y atribuciones del Poder Judicial, se citó nuevamente á las partes para sentencia y se oyó á éstas en audiencia pública, siendo yá llegado el caso de resolver.

Considerando: Los hechos que aparecen comprobados en el sumario son los siguientes: 1.° El decomiso de la sal que verificaron los Guardas ó Agentes del Gobierno; 2.° La entrega que de ella se hizo al Alcalde de Guasca para que la retuviera en depósito y la hiciera remitir; 3.° El tumulto ó asonada de un gran número de personas para apoderarse de la sal depositada; 4.° El haber tomado por la fuerza la sal depositada y perteneciente á la Nación. Como se ve, estos hechos constituyen los delitos que definen los artículos 198 y 364 del Código Penal nacional, debiendo ser castigados conforme á lo establecido en los artículos 199 y 570 del mismo Código.

Considerando: Como la sentencia no puede recaer, según el artículo 1,630 del Código Judicial nacional, sino sobre los cargos por que se ha declarado con lugar, es necesario examinar previamente si en el auto en que se hizo el llamamiento á juicio se cumplió en todo con lo prevenido en el artículo 1,542 del dicho Código. Se notadesde luégo que en dicho auto se contravino expresamente á lo dispuesto en el parágrafo último del artículo que acaba de citarse, pues se determinó de un modo explícito el artículo infringido, no debiendo haberse hecho sino como dice el artículo de que se acaba de hablar, por el cargo en general, sin especificación de artículo alguno. Además, de autos no aparece que se hubiese cometido el delito de motín ó tumulto, conforme á lo que sobre esto se determina en el artículo 197 del Código Penal nacional. Para que tal delito se verifique, es condición indispensable, que los amotinados ó tumultuosos, en número de más de veinte personas, se mancomunen para exigir á la fuerza ó con gritos, insultos ó amenazas que las autoridades ó funcionarios públicos, en su calidad de tales, otorguen, y hagan ó dejen de hacer alguna cosa justa ó injusta; y como en el caso en que se ocupa el Tribunal, no aparece en manera alguna que los tumultuosos hubiesen obligado ni al Alcalde ni á ninguna otra autoridad ó funcionario público á que hiciese ó dejase de hacer en su calidad de tal, cosa alguna justa ó injusta, es preciso convenir que sin esta circunstancia escencial, no puede haber el delito de motín que define el artículo 197 del Código Penal, que fué por el que se llamó á juicio; así, pues, no habiéndose cometido el delito porque se declaró con lugar, es por demás que el Tribunal, entre á determinar el verdadero hecho punible, bastando advertir que motín ó asonada no son el mismo delito, pues el primero lo califica y distingue el artículo 197 y al segundo lo determina y especifica el 198 del Código precitado. Por consiguiente, aun cuando el delito está suficientemente demostrado, como lo está en este proceso, no siendo tal delito el que determina el artículo 197 del Código yá dicho, que fué por el que se llamó á juicio, el Juez no ha debido imponer pena, según lo que queda establecido en el artículo 1,630 yá citado. Es verdad que el señor Juez de la causa toma como hecho propio de los tumultuosos para declarar que se cometió el delito de motín, la inacción misma en que permaneció el Alcalde de Guasca al tiempo de los acontecimientos; pero el Tribunal no puede aceptar como legal tal deducción; ni puede tomar como hecho propio de los sindicados los que corresponden únicamente á otras personas.

Permanecer uno en la misma actitud que tenía, no es dejar de hacer, ni puede decirse que á una autoridad se le obliga á no hacer sino cuando se le impide algún acto que sea propio de su misma autoridad ó jurisdicción; un ejemplo pondrá de manifiesto los casos á que se contrae el artículo 197 del Codigo Penal. Se comete por determinada persona un hecho que puede ser ó nó delito, y ésta es llevada presa por orden de la autoridad: el pueblo cree injusta su prisión y ocurre en tumulto á exigir de esa autoridad con amenazas, gritos ó insultos que dé orden de libertad á favor de la persona que fué llevada presa; y la autoridad, amenazada ó constreñida, se vé obligada á dar tal orden: he aquí cómo se le obliga á hacer una cosa justa ó injusta, según sea legal ó ilegal la orden de prisión que dió.

Ahora si se supone el caso contrario, es decir, á un empleado se le obliga para que no ordene la prisión de determinada persona ó para que nó dicte un decreto que esté ó nó obligado á hacer efectivo etc., etc., he aquí el caso en que se le obliga á una autoridad ó empleado público á que deje de hacer una cosa que es solo propia de tal autoridad, y que con las demás circunstancias que determina el citado artículo constituye realmente el delito de motín.

Considerando: No hay duda alguna de que todos los sindicados que fueron llamados á juicio, en el auto de proceder, tomaron mayor ó menor participación en la extracción que se hizo de sal que se hallaba depositada y que debía llevarse á Zipaquirá, y venderse después por cuenta del Gobierno Nacional. El objeto efectivo y aparente del movimiento ilegal de aquellas personas, fué el de apoderarse ó recuperar la sal que les había sido expropiada por los Guardas, de la Salina de Zipaquirá; todos, cuál más, cuál menos, contribuyeron á este propósito, que quizá en su ignorancia legal, tomaron como un acto de estricta justicia, pues para adquirir lo que les fué expropiado, habían empleado los mismos esfuerzos que para adquirir los demás elementos de su legítima propiedad, así es, que para llevar á efecto su intento, hicieron uso de la fuerza, respecto de las cosas; y es por esto que el delito de robo ha quedado claramente establecido en este proceso con todas las pruebas del sumario, contra las cuales, muy poca ó ninguna fuerza hacen las del plenario; pues aun cuando hay hechos que parecen contradictorios, no lo son en realidad, pues ellos quedan bien explicados, al determinarse la hora en que unos y otros de estos hechos tuvieron lugar. Es indudable, eso sí, que las pruebas recibidas en el juicio, han venido á demostrar un gran número de circunstancias favorables á los procesados, que disminuyen su culpabilidad, y que hacen que el delito sea calificado en tercer grado.

Considerando: Yá se ha dicho que los procesados tomaron todos parte activa é inmediata en la extracción de la sal, ó sea en el delito de robo de objetos pertenecientes á la Nación, cuyo delito sí es el que definen y castigan, respectivamente, los artículos 364 y 570 del Código Penal nacional; y como estos artículos son los mismos que el Juez de la causa determinó como infringidos en el auto de proceder; y como el señor Juez ha hecho apoyo de su fallo en estos yá citados artículos, es indudable, que en cuanto á esto, el Tribunal debe confirmar la sentencia, con la sóla modificación de establecer el mínimum de pena que determinan tales artículos, por calificar á los procesados en tercer grado, determinando igualmente, que, por aparecer de autos que la fuerza y violencia se hizo á las cosas, y nó á las personas, la pena que corresponde es la que se determina en la última parte del artículo 570 yá citado. En cuanto á las penas accesorias no hay ninguna modificación, pues ellas son de estricta aplicación legal.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Departamento de Cundinamarca, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, condena á Florentino, Eustaquio y Gregorio Rodríguez, Rubén Murillo y León Gutiérrez, á sufrir la pena de dos años cuatro meses de reclusión penitenciaria en el Panóptico de esta ciudad, como autores principales del delito de robo, de que trata el artículo 364 del Código Penal nacional, con referencia al artículo 570 del mismo Código en su parte final, y calificando la responsabilidad de los sentenciados en tercer grado. Se les impone, además, de acuerdo con lo que determinan los artículos 29, 62 y 64 del mismo Código, las penas accesorias siguientes: 1.ª La privación de todo destino, cargo ó empleo público nacional, y de toda pensión pagadera del Tesoro de la República; 2.ª La suspensión, mientras dure la pena corporal, de los derechos políticos; y, 3.ª Al pago de las costas é indemnización de perjuicios mancomunada y solidariariamente.

Cúmplase en lo demás, con lo que previenen los artículos 30 y 31 del yá citado Código Penal, respecto de la duración de la pena y publicación de esta sentencia. Queda en estos términos reformada la sentencia que ha sido materia de esta alzada.

Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.

Federico R. Rodríguez—Flavio González Malo—Ricardo Bonilla—Gabriel Rosas, Secretario en propiedad.

Es fiel copia.

El Secretario del Tribunal,

Gabriel Rosas.

Por orden de la Corte Suprema de Justicia se publica la sentencia que precede.

Ramón Guerra A., Secretario.

IMPRENTA DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 16

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 11 de Mayo de 1887.

REPUBLICA DE COLOMBIA BIBLIOTECA NACIONAL

CONTENIDO.

Pág.

ACUERDOS DE LA CORTE.

Acuerdo número 18, sobre nombramiento de Conjueces de la Corte.. 121
Id. número 19, relativo a una denuncia del doctor Isidoro Burgos..... "
Id. número 20, sobre decisión de una competencia promovida en Ocaña..... "

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CRIMINALES

Pronunciada en la causa militar seguida contra el Capitán Pedro Antonio Cobo..... 121

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Asuntos que han dejado de ser de la competencia de la Corte..... 125 á 128

RESOLUCIONES DIVERSAS.

Dictada sobre un pedimento del Coronel José María Gutiérrez..... 127

GACETA JUDICIAL.

PERSONAL DE LA CORTE.

El 1.° de Noviembre de 1886 se posesionó el señor doctor Benjamín Noguera del puesto de Magistrado principal, en el que como Suplente ocupaba el doctor Manuel J. Angarita.

Por licencia concedida al señor Magistrado doctor R. Antonio Martínez, por sesenta días, contados desde el 3 de Enero de 1887, entró en su reemplazo el mencionado doctor Angarita. La Presidencia de la Corte quedó á Cargo de S. S. el Vicepresidente doctor José M. Samper.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

ACUERDO NUMERO 18.

En la ciudad de Bogotá, á trece de Enero de mil ochocientos ochenta y siete, se constituyó la Corte Suprema nacional en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, con el objeto de dar cumplimiento á lo dispuesto en el artículo 68 provisional de la ley de 1886, sobre organización y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio público, y algunos procedimientos especiales. En consecuencia, la Corte, acordó la siguiente lista de Conjueces para el año en curso.

SEÑORES:

1 Araújo José.
2 Arteaga Jesús María.
3 Ballesteros Pantaleón.
4 Camacho R. Salvador.
5 Colunje Gil.
6 Escobar José Ignacio.
7 Gamboa Gonzalo.
8 De León Juan Félix.
9 Madiedo Manuel María.
10 Martín Carlos.
11 Martínez E. Joaquín.
12 Palau Emigdio.
13 Pardo Juan Antonio.
14 Patiño Federico.
15 Pombo Manuel.
16 Quijano W. José María.
17 Salcedo Próspero.
18 Silva Estanislao.
19 Tavera Gonzalo N.
20 Villafrádez Lucas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la mencionada ley, la Corte dispuso que se remita copia de esta lista al Poder Ejecutivo para su conocimiento, y al señor Ministro de Gobierno para su publicación en el periódico oficial.

Con lo cual se concluyó el presente acuerdo, que firman todos los señores Magistrados, con el infrascrito Secretario.

El Presidente, JOSÉ M. SAMPER—*Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 19.

En la ciudad de Bogotá, á veinte de Enero de mil ochocientos ochenta y siete, se constituyó la Corte Suprema nacional en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, con el objeto de tomar en consideración un memorial suscrito por Isidoro Burgos, en el cual manifiesta que el señor Enrique López Zapata, Magistrado del Tribunal de Panamá, no ha ejercido por tres años la abogacía, y no tiene las condiciones que exige la Constitución para el desempeño de dicho empleo. El señor Magistrado doctor Noguera, á quien tocó en repartimiento el referido memorial, presentó el siguiente proyecto de resolución, que fué aprobado por el voto unánime de los señores Magistrados.

"Entre las funciones atribuídas á la Corte Suprema por la Constitución y las leyes, no está la de censurar los nombramientos que se hagan para los empleos de Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito, ni menos la de dictar resoluciones generales sobre las causas que puedan motivar la nulidad de los juicios; y en tal virtud, la Corte resuelve que no tiene por qué ocuparse en el asunto á que se refiere el memorial que desde Panamá ha dirigido el doctor Isidoro Burgos, con fecha 17 de Diciembre del año próximo pasado."

Con lo cual se concluyó el presente acuerdo, que firman todos los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, JOSÉ M. SAMPER—*Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguerra—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 20.

En la ciudad de Bogotá, á veinte de Enero de mil ochocientos ochenta y siete, se constituyó la Corte Suprema nacional en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, con el objeto de tomar en consideración la competencia afirmativa promovida por el Juez del Circuíto de Ocaña al Comandante del medio Batallón "Quintero Calderón," sobre el conocimiento del sumario instruído contra Heliodoro Gamana, por el delito de heridas graves. El señor Magistrado doctor Noguera, á quien tocó substanciar este asunto, presentó el siguiente proyecto de resolución:

"En averiguación del delito de heridas perpetrado en las personas de Alberto Ibáñez y Francisco Mendoza, cuyo hecho tuvo lugar el día veintinueve de Junio del año próximo pasado, en el llano de los "Alcaldes," á inmediaciones del Distrito de Ocaña, y del cual aparece responsable el soldado de aquella guarnición, Heliodoro Gamana, se dispuso la práctica del juicio informativo, tanto por la respectiva autoridad militar, como por el Juez Superior de aquél Circuíto.

"Estimando dicho Juez que el delito de que se trata es de naturaleza común, y que es, por lo tanto, á la autoridad civil á quien corresponde su conocimiento, promovió competencia afirmativa al Comandante del medio Batallón "Quintero Calderón," á cuyo cuerpo pertenece el sindicado; y aceptada como

lo fué por este Jefe, y substanciado tal incidente en los términos de los artículos 699 á 702 del Código Judicial, han venido las diligencias á esta Superioridad para la correspondiente decisión.

" Dada vista al señor Procurador general, debería procederse á decidir la expresada controversia; pero la Corte considera que en el presente caso no ha habido verdadera competencia, puesto que ella no se ha suscitado entre los funcionarios á quienes podía corresponder el conocimiento del asunto. En efecto, la discusión tuvo lugar, como antes se ha dicho, entre el Juez Superior del Circuito de Ocaña y el medio Batallón referido, cuando, conforme al artículo 1,381 del Código Militar, la jurisdicción para aprehender el conocimiento de las causas militares, no corresponde á los Comandantes de los Cuerpos, sino á los Sargentos Mayores ó á los encargados del detall, á los Consejos de guerra ordinarios y de Oficiales Generales, á los Comandantes generales ó Generales en Jefe, y á la Corte Suprema nacional; y cuando más explícitamente lo determina el artículo 471 del mismo Código, para casos como el presente, el Ayudante Mayor es el funcionario de instrucción y fiscal nato de los individuos de tropa de su cuerpo, correspondiéndole, por lo tanto, la práctica de todas las diligencias necesarias para la averiguación de los delitos, la secuela de los juicios, etc. etc.

" Por tales consideraciones, la Corte Suprema resuelve que no está debidamente preparada la competencia, por no haberse suscitado la cuestión entre los funcionarios á quienes correspondía hacerlo, y dispone, en consecuencia, que se devuelvan las diligencias á los empleados remitentes, para que el Juez que disputó la jurisdicción, si insiste en sus opiniones, se dirija al funcionario que sea competente conforme á la ley."

Discutido el anterior proyecto, fué aprobado por el voto unánime de los señores Magistrados, quienes dieron por concluído el presente acuerdo, que firman con el infrascrito Secretario.

El Presidente, JOSÉ M. SAMPER.—*Manuel J. Angarita.—Julián R. Cock Bayer.—Froilán Largacha.—Antonio Morales —Benjamín Noguera.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A.*, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

—

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, trece de Enero de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Esta gravísima causa se ha seguido en Panamá, para averiguar el responsable de la muerte de varios Jamaicanos, súbditos ingleses, que trabajaban en la sección de Culebra, en la obra del Canal interoceánico.

Con motivo de reclamación hecha al Gobierno de la República, por el señor Ministro de Su Majestad Británica, acerca del referido hecho, el Excelentísimo señor Presidente de la Nación, por conducto de la Secretaría de Guerra, ordenó, en oficio de diez y siete de Abril del año próximo pasado, al General, Comandante general de la segunda Columna de la Guardia Colombiana, estacionada en Panamá, que dictara las conducentes providencias para abrir juicio al Capitán Pedro Antonio Cobo, Comandante de la fuerza nacional que intervino en esos acontecimientos.

El Jefe de la Columna comisionó, en nota de fecha nueve de Junio último, al Teniente-Coronel Carlos María Sarria, segundo Ayudante general de ese Cuerpo, para que instruyera el sumario.

Se hizo comparecer ante el funcionario instructor al Capitán Cobo, que se encontraba á la sazón en el Distrito de Candelaria, donde tiene su domicilio, en el Departamento del Cauca, y se adelantó la investigación hasta que el Comandante supradicho, General Julio Rengifo M., pronunció auto de enjuiciamiento, con fecha once de Octubre, contra el Capitán Cobo, " por extralimitación de sus deberes, y de acuerdo con los artículos 1,554 y 1,555 del Código Militar, no especificándose de un modo terminante la culpa por su misma naturaleza indeterminable, y debiendo ser calificado por el mismo Consejo de Oficiales generales que debe juzgarlo, caso de que lo encuentre justiciable."

Convocó en el mismo auto Consejo de Guerra de Oficiales generales para el veintiséis del mismo mes, y nombró para que lo compusieran á los Generales Cecilio Rodríguez y Cayetano Ortega, Coronel Vicente N. Paz y Teniente-Coronel Francisco Olarte L., presidido por el Jefe que dictó la providencia.

Se reunió el Consejo en la fecha designada, y falló negando que se hubiera cometido el delito por el cual se sometió á juicio al responsable, por lo que, el mismo día veintiséis de Octubre dictó sentencia absolutoria, la que el Presidente del Consejo ordenó se consultara con esta Suprema Corte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1,509 del Código citado, pues contra el fallo no se interpuso recurso de apelación.

Surtido ante esta Superioridad el trámite de la audiencia pública el dos de Diciembre último, sin que ninguna de las partes hubiera comparecido, es yá tiempo de resolver la consulta. Contra las sentencias de los Consejos de Guerra, tanto ordinarios como de Oficiales generales, pueden interponerse los recursos de apelación y de nulidad, y si esto no tuviere lugar deben consultarse esos fallos con la Corte Suprema.

Esta Corporación conoce de estos juicios como Tribunal de derecho, á diferencia del Consejo, que decide de los hechos como Jurado, por las pruebas que suministra la causa, según los dictados de su conciencia. Esta es la doctrina de los artículos 1,508 y 1,509, aplicable á este caso por ministerio de los artículos 1,512, 1,537 y 1,539 del mismo Código.

Si la Corte falla como Juez de derecho, según el mérito jurídico del proceso, puede reformar la sentencia apelada, confirmarla ó revocarla, y por consiguiente el veredicto del Consejo, según que lo encuentre ó nó arreglado á las pruebas legales que los autos suministren.

No hay nulidad en el procedimiento, por incompetencia de jurisdicción, ni porque se hayan pretermitido formalidades sustanciales en el juicio.

El delito por que se juzga al Capitán Cobo, fué cometido en tiempo de guerra, en campaña, y en desempeño de una comisión militar; por consiguiente, el Consejo de Guerra de Oficiales generales y la Corte deben juzgar la causa, de conformidad con los artículos 1,384 y 1,385 y demás mencionados, del Código Militar.

Véamos si en el fondo del asunto es justa y legal la absolución.

Desgraciadamente en el acontecimiento que motiva esta causa no pudieron conseguirse testigos hábiles que hubieran presenciado los hechos. Solamente Laureano Paz, uno de los soldados que acompañaban á Cobo, y el Sargento Santiago Montes, Jefe de la escolta que inició y fué causa eficiente del lamentable suceso, materia de la investigación, han declarado; pero carecen estos testigos de imparcialidad, porque fueron actores en la escena, y por consiguiente ofendidos é interesados en que sean otros los culpables, y no ellos ó sus Jefes á cuyas órdenes obraban. Además, el Sargento Montes declaró en información de *nudo hecho*, á petición del sindicado, en Cali, y su declaración no fué ratificada en el sumario.

Muchos empleados y trabajadores del Canal declararon ante el Cónsul inglés en Panamá, y algunos como testigos oculares, especialmente William Rose que era Jefe de los *Watchmen* (serenos) la noche del acontecimiento; pero estos testimonios, además de haberse recibido fuera de la instrucción, por una persona que no tiene autoridad por las leyes de Colombia para recibirlos, ellos son Jamaicanos, trabajadores, compañeros de los que murieron, y alguno, como el Jefe de serenos, actor en el trágico suceso. Otros individuos pertenecientes á la Empresa del Canal declararon, pero lo hacen de referencia, lo mismo que otras personas respetables del Ejército colombiano y de la Magistratura, como los Generales Rafael Reyes, Jaime Córdoba, José C. de Obaldía, Coronel Gonzalo Córdoba, el Gobernador del Departamento y Distrito de Panamá, Juan José Díaz, Pedro Ortiz, Alcalde de Emperador y otros, que, por constancia personal, sólo declararon sobre los antecedentes de los hechos y de lo que vieron en el lugar después de ocurridos. Con relación al acontecimiento mismo, se refieren á lo que oyeron decir á los vecinos; y, seguramente, á los mismos soldados y Oficial que los mandaba.

Eduardo Lanuza, español, que parece hubiera declarado

como testigo ocular, dice al fin de su exposición: "Que es todo lo que sabe sobre el particular," y esta manera de hablar en declaraciones, indica que no han presenciado los hechos. De lo contrario, el testigo dice regularmente que le consta ó que vió. El funcionario no cumplió con la ley preguntándole cómo sabía lo que declaraba: (artículo 1,597 del Código Judicial).

Suponiendo que Lanuza fuera testigo presencial, su declaración, por ser única, no formaría plena prueba (artículo 1,588 de allí).

Los antecedentes y los resultados del suceso, tales como los refieren las personas citadas, son los siguientes:

Tres días después de haber desembarcado la expedición caucana en Panamá, al mando de los Generales Rafael Reyes y Miguel Montoya, el tres de Mayo de mil ochocientos ochenta y cinco, las autoridades políticas de los Distritos de Emperador y Gorgona, situadas en la vía del Ferrocarril, pidieron al Jefe Civil y Militar del Estado fuerza para contener desórdenes, seguramente causados por trabajadores del Canal, aventureros y derrotados de Panamá y Colón, que en esos lugares y en esa época de revuelta y de excitación se reunían, provocaban y no obedecían á la autoridad.

El Jefe Civil envió á las órdenes del General Obaldía, que se dirigía á Colón á activar la marcha de tropas á Cartagena, á combatir á los rebeldes, veinticinco hombres de la tercera Compañía del Batallón 4.° de Cali, al mando inmediato de su Capitán Pedro A. Cobo, que salieron en el tren expreso á las cuatro de la tarde de ese día. El General Obaldía desembarcó en Emperador diez y seis de esos hombres y los dejó allí á las órdenes del Capitán Cobo, para que apoyara al Alcalde; y el resto de gente lo llevó á Gorgona.

A poco de estar Cobo allí con el piquete, recibió el Alcalde de Emperador una comunicación del Regidor de la Aldea de "Culebra," que también está sobre la línea del Ferrocarril y de los trabajos del Canal, en que solicitaba auxilio de fuerza armada para hacer guardar el orden en una función de acróbatas que en esa noche se daba en el caserío. El Alcalde pidió al Capitán Cobo el auxilio, y éste tuvo la fatal condescendencia de enviar á "Culebra" al Sargento Santiago Montes con cinco soldados armados de rifle, guiados por un Comisario de policía de Emperador, de apellido González.

Oigamos de boca de Laureano Paz, fojas 47 y 48, uno de los soldados que iban á órdenes del Sargento Montes, lo que sucedió de allí en adelante:

"Que después de estar acuartelados, seis hombres, entre los cuales iba el declarante á órdenes del Sargento Santiago Montes, fueron conducidos por un Comisario al caserío de "Culebra," con el objeto, según dijeron, de hacer guardar el orden en una función que debía tener lugar esa noche; que al efecto, la función tuvo lugar, sin que en el curso de ella hubiera ocurrido el más leve desorden; pero que una vez terminada, y cuando yá la fuerza se retiraba al cuartel que le había sido destinado, un individuo desconocido se unió al piquete y dijo que lo acompañaran á su casa, á sacar una ropa, porque deseaba incorporarse á la fuerza como soldado; que se dirigieron á la casa y al llegar á ella, un *Watchman* comenzó á tocar un pito, é inmediatamente ocurrió otro que también era empleado de la Compañía, y se puso á hablar en idioma inglés con el Comisario que conducía el piquete, y que por la entonación de la voz se comprendía que estaban disgustados. Que el *Watchman* pitó de nuevo y ocurrieron en el acto muchos Jamaicanos y atacaron al piquete, lo que dió por resultado que á pesar de lo mucho que la fuerza esquivó un lance desagradable, los Jamaicanos desarmaron cuatro soldados, y al declarante lo tomaron preso y condujeron á la casa donde estaban acampados los trabajadores de esa sección; que el exponente, pocos momentos después, logró fugarse y esconderse detrás de unos barriles de cimento; que media hora después oyó que el resto de la fuerza venía, y que al efecto, al aproximarse ésta le gritaron: alto! quién vive? que fué contestado por el resto del piquete con la voz de "el Gobierno legítimo"; que los Jamaicanos al oír esta última frase hicieron una descarga con armas de fuego sobre la fuerza, de la que resultó herido el Comisario, quien murió al día siguiente; que esto dió origen á que se ocasionara una especie de combate entre los Jamaicanos y la fuerza que venía, todo lo cual dió por resultado unos cuantos muertos y heridos de una y otra parte; que á las seis de la mañana el piquete recibió orden de retirada á Emperador, orden que fué inmediatamente obedecida; que *con* la tarde regresaron á "Culebra" acompañados de dos piquetes más,—uno que habían mandado de Colón y otro de Panamá, con el fin de obligar á los Jamaicanos á devolver las armas que habían quitado, las que entregaron inmediatamente, por lo cual el piquete regresó el mismo día á Emperador y se embarcó en el tren que debía conducirlo á esta ciudad."

Alejandro Gómez, de Costa-Rica, testigo de referencia, pero cuya declaración es muy significativa, dice á fojas 101 y 102: "Que todo ese trágico acontecimiento emanó de los innumerables abusos que cometían los *Watchmen* jamaicanos, que había aquí en aquella época; que un día presenció que varios de éstos daban de palos á un individuo de este caserío llamado Temístocles Sierra, que tenía una labranza en los alrededores de este lugar, y que yá murió; que viendo aquel proceder bárbaro les suplicó á los *Watchmen* que no maltrataran así á un hombre; que á su súplica le contestaron con los más groseros insultos, que entonces se dirigió al Jefe de ellos y también lo insultó, que entonces se dirigió al Jefe de Campamento, quien le contestó que Sierra iría al cepo, y que no lo sacaría hasta que no le pagara veinte pesos que valía el excarcelaje; que después vió á Sierra por la calle muy maltratado de los golpes que recibió, y que le dijo que se vengaría en primera ocasión; que el día tres por la tarde vió á Sierra, en apariencias de estar embriagado, y que le dijo que esa noche habría una función de *caballitos* y que yá había llegado la hora de su venganza; pero que todo lo creyó baladronada, por efecto del mal estado en que estaba por la bebida; que después lo vió con una escopeta de dos cañones, y le oyó decir que no dejaría un *Watchmen* vivo ni tampoco al Jefe de ellos, que contaba con un Cubano y varios Caucanos. Que los sucesos que pasa ahora á relatar son los que le relató Sierra al día siguiente: Que había habido efectivamente una función la noche del tres de Mayo, que la función concluyó sin la menor dificultad y que hubo todo el orden que se pudiera desear. Que después de terminada la función, tres soldados que pid ó el Regidor señor Daniel Mendoza, al señor Alcalde del Distrito, Pedro Ortiz, y que habían sido pedidos para garantizar el orden, quisieron ir al campamento; que allí fueron detenidos por los *Watchmen*, que había situado el Jefe de Campamento en la máquina de triturar piedra, y debajo de la barraca número cuatro; que los *Watchmen* gritaron á los soldados—alto ¿quién vive? que los soldados no entendieron y avanzaron; que los *Watchmen* hicieron fuego sobre los soldados, y como era mayor número los desarmaron; que éstos huyeron y fueron á dar parte á Emperador, de donde regresaron con un Jefe, Sierra y otros paisanos; que al llegar ellos al campamento fueron detenidos con el mismo ¿alto quién vive? y además les hicieron fuego, el que contestó la tropa inmediatamente; que los soldados se replegaron y continuaron haciendo fuego, el que sostuvieron muy poco tiempo los *Watchmen*, y huyeron; que los soldados y Sierra, creyendo que los *Watchmen* se habían refugiado en la barraca número cuatro, la ocuparon. Hasta aquí el relato de Sierra."

"El declarante asegura que esa noche no salió á la calle por estar indispuesto; que como á las dos ó tres de la mañana del día cuatro, estando despierto y alarmado por el ruído de tiros que había estado oyendo, sintió voces de hombres que le tocaban á la puerta al señor Jackson, 2.° Jefe del Campamento, amigo y vecino suyo; que entonces abrió la puerta y conoció que el que tocaba era Sierra, acompañado de cuatro hombres más, vestidos de paisanos; que se dirigió á todos suplicándoles que no molestaran al señor Jackson, y que se retiraron; que por la mañana estaba todo tranquilo; que la tropa del Gobierno se condujo con orden y disciplina admirables, y hasta ayudaron á la penosa tarea de recoger muertos y heridos; que vió como á las ocho de la mañana varios avisos del señor Jefe de sección, ofreciendo garantías y dando por concluído todo."

El Capitán Cobo, en su indagatoria de fojas 12 á 14, dice que "con un guía que le dió el señor Corregidor y dos peones más que voluntariamente quisieron acompañarle, llamados Temístocles Sierra y Luis Seijas, se adelantó, seguido de su fuerza, hacia el lugar en donde le dijeron era el campamento de los individuos á quienes buscaba."

Sobre la intervención de Temístocles Sierra en el funesto acontecimiento, habla también Eduardo Lanuza, yá citado, en su declaración de fojas 109: "Hallándose el declarante en

la casa de comercio del señor Angel Ovalle, en la cual habita, llegó al establecimiento un hombre llamado Sierra, acompañado de otros dos individuos, los cuales manifestaron que se retiraban á sus domicilios respectivos, como así lo efectuaron: pasado algún tiempo (media hora próximamente), regresaron Sierra y los otros dos al comercio del señor Ovalle, diciendo que los guardianes del campamento de la Compañía del Canal los habían maltratado, por el sólo hecho de pasar por entre las barracas que están fuera del recinto del campamento, hecho injusto en atención á que no había otro camino por dónde pasar; que por esta razón iban á solicitar el auxilio de los dos soldados que había aquel día en "Culebra," para que les permitieran el paso; así lo hicieron y fueron acompañados por los soldados; mas, al pasar los guardianes, apalearon no sólo á Sierra y sus compañeros, sino también á los soldados, á los cuales arrebataron sus rifles; de estos individuos de tropa logró escaparse uno, el que puso en conocimiento del Capitán Cobo, que estaba en Emperador con el resto de la fuerza, lo sucedido en el caserío de "Culebra."

Al día siguiente, cuatro de Mayo, ocurrieron á la aldea varios Jefes militares y el Gobernador ó Prefecto de Panamá, y encontraron de veinte á veinticinco Jamaicanos muertos, casi todos heridos con arma cortante, y doce ó quince heridos. De la fuerza al mando del Capitán Cobo resultaron, herido el Comisario González, que murió poco después, y heridos también el Sargento Montes gravemente y Temístocles Sierra. Véanse las declaraciones del Coronel Gonzalo Córdoba, fojas 21, del Gobernador Juan José Díaz, fojas 67, de Pedro Ortiz, 85 y 86 y de E. Tkiange, holandés, fojas 94.

El Alcalde Ortiz dice que se levantó una instrucción, sumaria sobre el acontecimiento; pero ni en el despacho del Juez del crimen de Panamá ni en poder del General Reyes, se encontraron tales diligencias. Este Jefe manifestó que había hecho publicar las declaraciones en el periódico *La Estrella de Panamá*, correspondiente al siete de Mayo de mil ochocientos ochenta y cinco. No se agregaron ni se autenticaron estos documentos.

Falta, por lo mismo, en esta investigación emprendida un año después de consumados los hechos, la parte esencialísima del reconocimiento de los cadáveres, su posición, sus heridas, las armas que llevaron consigo, y el reconocimiento y declaraciones instructivas de los heridos. Sin estas diligencias es imposible conocer la verdad entera.

Si hubiera de dársele crédito á William Rose, Jefe de los serenos (Watchmen) del campamento de "Culebra," y á Samuel Anderson, que declararon pasados tres ó cuatro días, ante el Cónsul inglés, y al informe escrito en francés y sin firma que corren de fojas 30 en adelante del legajo de documentos, remitidos por el Cónsul al funcionario de instrucción, resultaría que el Capitán Cobo y sus soldados atacaron con armas de fuego y con machetes á los serenos; que éstos se entraron por una de las puertas de la barraca número 4.° y se escaparon por la otra, y que entonces los soldados se situaron en ambas puertas y por la una barrían con el fuego de sus rifles á lo largo de las cámaras en donde dormían de ciento cincuenta á doscientos Jamaicanos, trabajadores en la sección de "Culebra," y en la otra mataban á machetazos á los que intentaban escaparse: que se encontraron muertos encima de las tarimas donde dormían, debajo de ellas y en las vigas del edificio, y los baúles rotos y saqueados.

Estas declaraciones no tienen mérito, como se ha dicho, tanto por la forma en que fueron recibidas, como por la inhabilidad de los testigos.

Lo que se puede colegir de las declaraciones de Laureano Paz, del Capitán Cobo y de otros que en sus referencias concuerdan con ellas, es lo siguiente:

Cuando el Sargento Montes regresaba con sus cinco soldados de "Culebra" para Emperador, después de haber asistido sin novedad á la función, á la cual se le mandó á sostener el orden, se dejó llevar, inducido por alguien, al campamento 4.° de los trabajadores del Canal. Quién sabe si el desconocido de que habla Paz, que los conducía para que lo acompañaran á tomar una ropa de su uso para incorporarse en la tropa, era Temístocles Sierra, ó alguno que como él quería vengarse de los Jamaicanos, ó de los serenos que lo habían maltratado, y abusando de la ignorancia del Sargento y de sus soldados los introducía al campo que custodiaban los guardianes de la Compañía anglo-holandesa que trabajaban en esa sección del Canal. Lo cierto fué que estos desarmaron á cuatro de los soldados, según lo dice el mismo Rose—Jefe de ellos—,y uno de éstos ó todos fueron á Emperador á informar al Capitán Cobo de lo ocurrido, exagerando, sin duda, los hechos en su favor, ofendidos como estaban por el desarme. El Capitán marchó con el resto de sus hombres, y dice que se le recibió á balazos en el campamento de trabajadores y que tuvo que defenderse y tomar el edificio en donde se refugiaron, y de donde se le hacía fuego.

Como no se hizo reconocimiento de los heridos de parte de la fuerza de Cobo, no se sabe con qué clase de armas lo fueron; pero lo que sí consta es, que no hubo más que tres: el Comisario González, el práctico Sierra y el Sargento Montes, y que sólo el primero murió.

Un cúmulo de circunstancias desgraciadas produjeron este lamentable suceso. El Sargento Montes faltó á su deber cuando después de haber cumplido su comisión se dejó llevar en altas horas de la noche, tal vez engañado, á un lugar en donde no le correspondía entrar.

Los serenos del campamento de trabajadores, si es cierto que el Sargento no pretendía hacer daño á aquellos y á los que allí pernoctaban, y que ese militar les anunció que eran soldados del Ejército colombiano, cometieron un abuso desarmando á esos soldados.

Estos y el Sargento, y quizá Sierra, informaron al Capitán de un modo inexacto ó exagerado sobre lo ocurrido, y aquél, sin atender á la naturaleza de las noticias, á lo avanzado de la hora y á lo desconocido que para él era el terreno que pisaba, los hombres y el modo como estaban constituídos los trabajos en la Empresa del Canal, entró con su gente armada en el campamento. Si, como él dice, fué recibido con una descarga de fusilería, no obstante haber contestado que eran soldados del Gobierno, hizo bien en defenderse; pero, como se ha dicho, no hay testigo de vista ó imparcial que refiera cómo pasaron las cosas en el momento de presentarse el Capitán Cobo, á las dos de la mañana, con su piquete en el campamento de "Culebra." El Jefe de los serenos y otros individuos de su banda, dicen que la gente caucana entró haciendo tiros y blandiendo machetes, y éstos, que fueron agredidos primero por los del campamento.

Sea que el Capitán Cobo se defendiera ó atacara, los resultados de la lucha lo acusan. Ya que no tuvo la paciencia y la prudencia necesarias para no proceder por informes de sus soldados ó de personas á quienes no conocía, y de esperar el día para cerciorarse de lo acontecido, y obrar con más acierto; ya que se presentó sin necesidad urgente en un campo desconocido para él, en la oscuridad, en donde ni aun el idioma, según uno de los testigos, lo conocía; ya que, como él lo afirma, lo agredían, para defenderse le habría bastado haber hecho fuego y no haber atacado un edificio en donde no sabía él quién habitaba; y habría sido aquello suficiente, puesto que sólo tres de sus hombres, dos de ellos no militares, aparecieron heridos, lo que prueba que los serenos y los que los acompañaban no estarían bien armados ni serían en mucho número, porque si hubieran recibido los Caucanos una descarga, y aun dos, como lo asevera el Capitán, antes de contestar éstos con fuego, indudablemente habrían sufrido mayor número de bajas.

Más de veinte muertos y doce ó quince heridos, aun suponiendo que hubieran aparecido en campo raso, y no sobre las camas en donde dormían, y debajo de ellas y sobre las vigas del edificio, como lo dicen el informe sin firma y los testigos inhábiles que se han citado, revelan un abuso de la fuerza, ó un exceso en la defensa, si fué que se usó de este derecho, y en todo caso, un abuso de autoridad del Jefe del piquete que ejecutó la matanza: falta que bien se acomoda en la de extralimitación de deberes, por lo cual ha sido llamado á juicio el Capitán Cobo. Este fué enviado por la autoridad civil á la población de Emperador á dar seguridad con su fuerza á las personas y á las propiedades, apoyando con este fin á esa misma autoridad. Si causó graves males en el desempeño de su comisión ó en un incidente extraño á ella, sin que se haya demostrado causa justificativa para el empleo de la fuerza en el modo y en la extensión en que se empleó, justo es que responda ante la ley por el abuso.

La justicia y la ley de consuno reclaman esta reparación, y la honra y la dignidad de la República están especialmente

interesadas en ello, pues por los tratados públicos celebrados con Inglaterra está aquélla comprometida á concederles á sus súbditos protección á sus vidas y en sus propiedades; y según el artículo 13, ley 28, de 18 de Mayo de 1878, por la cual se aprueba el contrato Salgar-Wyse sobre excavación del Canal de Panamá, el Gobierno se obligó á dar seguridad á todos los empleados y obreros, cualquiera que sea su nacionalidad, contratados para la obra ó que vengan á ocuparse en los trabajos del Canal, en el goce de sus derechos y garantías, conforme á la Constitución y leyes nacionales, durante el tiempo que permanezcan en el territorio colombiano.

Al castigar dentro de la esfera de nuestras leyes á los que aparezcan culpables de los males causados á súbditos extranjeros, por hechos ejecutados sin anuencia del Gobierno, y contrariando sus deseos de dar garantías á las personas,— al mismo tiempo que se satisface la vindicta pública, se cumple con los compromisos contraídos con una Nación amiga y con las estipulaciones de un contrato de grande importancia para el país y para el comercio del mundo.

La transgresión cometida por el Capitán Cobo es, sin duda, un abuso de autoridad ejercido con violencia contra las personas, y en consecuencia, puede serle aplicada la disposición contenida en el artículo 1,652 del Código Militar, sin salir de los lindes del auto de enjuiciamiento, pues el Jefe que comete sin necesidad justificativa una violencia contra las personas, se excede en el ejercicio de la autoridad que se le ha confiado y se extralimita, por consiguiente, en el cumplimiento de sus deberes.

Aunque el ataque á mano armada no se dirigió contra funcionarios ó ciudadanos de los Estados de la Unión, los extranjeros ofendidos gozaban de los mismos derechos que los nacionales según nuestra Constitución y los tratados públicos.

Como se ha justificado que el Capitán Cobo era un hombre probo, de buena conducta anterior, de edad provecta y moderado, y las circunstancias de guerra y de alarma en que él obró eran azarosas, debe serle aplicado el mínimum de la pena.

El Sargento Santiago Montes debe tener también su parte de responsabilidad en los acontecimientos, pues él inició maliciosa ó inadvertidamente las escenas de este desgraciado suceso.

En consecuencia de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, la Corte declara por unanimidad de votos á propuesta del Presidente:

1.° No se ha incurrido en ninguna de las nulidades de que tratan los artículos 1,534 y 1,535 del Código Militar;

2.° Se revoca la sentencia consultada, y se condena al Capitán Pedro Antonio Cobo, del Batallón número 4.° de Cali, á la pena de destitución del cargo, á sufrir la de seis años de destierro del territorio de la República, á la privación de todo destino, cargo ó empleo público nacional y la de toda pensión pagada por la República; á la suspensión de los derechos políticos mientras dura la pena corporal; al pago de las costas y á la indemnización de los daños y perjuicios que resulten de la comisión del delito; todo de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1,652 del Código Militar y 29, 62 y 64 del Código Penal.

El Jefe militar de la Columna estacionada en Panamá hará sacar copia de las piezas necesarias para instruír sumario por quien corresponda contra el Sargento Santiago Montes.

Notifíquese, publíquese en el *Diario Oficial* de la Nación, déjese copia y devuélvase el expediente al Presidente del Consejo de Guerra para que ejecute esta sentencia.

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del trece de Enero de mil ochocientos ochenta y siete, se publicó la sentencia que precede.

Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y siete de Enero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué la sentencia anterior al señor Procurador general.

ARANGO—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme:

Bogotá, diez y nueve de Enero de mil ochocientos ochenta y siete.

Ramón Guerra A., Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Enero cinco de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos.—Según el artículo 1,836 del Código Judicial de la República, correspondía á la Corte Suprema, previo el procedimiento detallado en los artículos 1,840 y 1,841 del mismo Código, imponer la pena legal á los Jueces de 1.ª instancia que hubiesen demorado indebidamente el curso de los negocios á su cargo.

Entre los atribuídos á la misma Corte conforme á las secciones 1.ª y 2.ª, Capítulo 2.° Título 3.° de la Ley 61 del año próximo pasado, "Provisional sobre organización y atribuciones del Poder Judicial, etc., etc," no está la de conocer de aquellos juicios especiales que eran de su competencia como queda expresado.

Y como por el inciso 2.° del artículo 99 de la ley que acaba de citarse, las atribuciones conferidas á la Corte Suprema por aquel Código que no se le atribuyan por la Constitución ó la misma ley, corresponden actualmente á los Tribunales Superiores de distrito, es claro que esta Suprema Corte no es ahora competente para conocer del juicio especial de que se trata, promovido contra Miguel Díaz Granados en su caracter de Juez.

En tal virtud, oído el concepto del señor Procurador general se resuelve:

Pasen estos autos al Tribunal Superior del Distrito judicial en el Departamento de Bolívar, como á quien compete su conocimiento, para que les dé el curso que fuere conforme á derecho.

Déjese la correspondiente cópia en el libro respectivo y publíquese.

José M. Samper.—Manuel J. Angarita.—Julián R. Cock Bayer.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Benjamín Noguera.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A. Secretario.

En diez de Enero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, once de Enero de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos.—El presente sumario fué instruído para averiguar la responsabilidad de Francisco Delgado, Jesús María de la Rosa y Luis Rodríguez Amarís, por haber tomado en el Distrito de Morales unas mercancías y otros efectos pertenecientes á Eugenio Ardila. El Juez de la Provincia de Mompox, por auto de diez y ocho de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, declaró comprendidos á los sindicados en el decreto de amnistía expedido por el Poder Ejecutivo en veinte de Julio de mil ochocientos ochenta y seis, por cuanto los hechos averiguados que se imputaban á los sumariados, no eran delitos comunes, sino incidentes del delito de rebelión contra el Gobierno nacional; y sobreseyó en el procedimiento y consultó su providencia con la Corte.

El artículo 21 de la ley 61 de mil ochocientos ochenta y seis, no atribuye á la Corte el conocimiento de las causas criminales por delitos comunes cometidos por particulares, fuera del caso previsto en el inciso 9.° de la sección 3.ª. El inciso 2.°, artículo 99 de la misma ley, dispone que las atribuciones conferidas á la Corte Suprema en el Código Judicial y no asignadas al

mismo Tribunal en la Constitución ni en la ley citada, sean ejercidas por los Tribunales Superiores de Distrito.

En consecuencia, la Corte Suprema de la Nación administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que no es de su competencia el conocimiento de la presente actuación, y dispone que sea remitida al Tribunal Superior del Distrito de Bolívar para lo de su cargo.

Notifíquese, cópiese y publíquese en el *Diario Oficial*, dándose aviso por la Secretaría al Juez de primera instancia.

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En trece de Enero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador.

FERNÁNDEZ.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Enero once de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El doce de Octubre de mil ochocientos ochenta y cinco, Jorge F. Thomas N. formuló denuncia escrita ante el Jefe Civil y Militar de la Provincia de Mompox en el Estado (ahora Departamento) de Bolívar, contra Miguel Caamaño Soto, por varios delitos que tenían unos la apariencia de comunes y otros la de políticos, por cuanto habían sido ejecutados juntamente con actos de rebelión ó con motivo de ésta. Excitado el Juez de la Provincia, aprehendió el conocimiento y dictó todas las providencias del caso para levantar un voluminoso sumario, en averiguación de los delitos denunciados; y aprehendido el sindicado, se le tomaron varias declaraciones de inquirir y se le redujo á prisión como detenido por graves hechos.

Al cabo el Juez, por auto del trece de Agosto del último año, resolvió remitir el sumario al Tribunal Superior de Bolívar, considerándolo como asunto de la competencia de éste, por tratarse de delitos políticos. Dicho Tribunal, por auto del once de Septiembre, se declaró incompetente y devolvió el sumario al Juez de la Provincia de Mompox para que resolviera; y este Juez dictó auto el diez y ocho de Octubre, declarando en absoluto que todos los delitos materia del sumario eran de carácter político; que estaban, por lo tanto, comprendidos en el decreto número 418 bis del 20 de Julio, sobre amnistía, expedido por el Excelentísimo señor Presidente de la República; y que debía, en consecuencia, cortarse todo procedimiento, como en efecto se cortó, consultándose el auto con esta Superioridad.

Repartido el asunto en la Corte el día trece de Noviembre último, se ha surtido la tramitación del caso, y el señor Procurador en su vista pide que se confirme el auto consultado, en cuanto se refiere á delitos evidentemente políticos, que eran los sujetos en el presente caso á la jurisdicción de la Corte, en segunda instancia; pero que, apareciendo que á la sombra de tales delitos de rebelión se han cometido otros comunes y de muy mal carácter imputados á Caamaño Soto, debe sobre éstos hacerse la reserva del caso y adoptarse una providencia que evite la impunidad.

La Corte para resolver considera:

Es evidente que muchos de los actos y atropellos por los cuales se hacen cargos á Miguel Caamaño Soto, son actos incriminados á un particular, ya sean delitos políticos ó comunes; y si, conforme á las disposiciones del Código Judicial de la Nación que han regido, estuvo bien elevada la consulta ante esta Superioridad, por cuanto la Corte tenía competencia de jurisdicción para conocer de lo que se refiriese á delitos de rebelión contra el Gobierno de la República, en el momento actual esa competencia ha cesado. En efecto, la ley 61 de 25 de Noviembre último, "provisional sobre organización y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio público, y algunos procedimientos especiales," que ha sido publicada en el número 6,882 del *Diario Oficial*, deroga, en su artículo 149, los artículos 1.° á 69 inclusive del Código Judicial, entre los cuales se hallan los que daban competencia á la Corte para conocer en segunda instancia de los delitos políticos; éstos no están enumerados entre los que son del conocimiento de la Corte Suprema., según la sección 2.ª del artículo 21, capítulo 2.°, y en el tercer aparte del artículo 99 de la citada ley, se dispone lo siguiente:

"2.ª Las atribuciones conferidas á la Corte Suprema en el Código Judicial y no asignadas á la Corte Suprema de Justicia en la Constitución ni en esta ley, serán ejercidas por los Tribunales Superiores de Distrito."

Por último, el artículo 151 de la Constitución, que da atribuciones á la Corte Suprema, no contiene ninguna relativa al sumario y al auto consultado; pues si la tercera dice: "Conocer de los negocios contenciosos en que tenga parte la Nación ó que constituyan litigio entre dos ó más Departamentos," es patente que en este asunto ni hay negocio contencioso propiamente dicho, ni se ve qué parte pueda tener la Nación por la naturaleza de los delitos que se han investigado.

En consecuencia, es evidente que, si antes era competente la Corte para conocer del asunto consultado, ha dejado de serlo.

Por lo expuesto, la Corte Suprema se declara incompetente para conocer de la consulta, y resuelve que el expediente sea remitido al Tribunal Superior del Departamento de Bolívar para que él resuelva lo que tenga á bien.

Notifíquese, cópiese, remítase copia al Juez de la Provincia de Mompox para su conocimiento, y publíquese en el *Diario Oficial*.

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En doce de Enero de mil ochocientos ochenta y seis notifiqué la sentencia anterior al señor Procurador.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, once de Enero de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Administrador de la Aduana de Barranquilla dirigió, con fecha diez y siete de Septiembre de mil ochocientos ochenta y cinco, una nota al Juez 2.° de la Provincia del mismo nombre, en la cual le denunció que, según informes recibidos, Miguel Díaz Granados había hecho compras indebidas de unas cargas de café, procedentes de cargamentos de particulares, expropiados por los rebeldes. Levantado por dicho Juez el respectivo sumario, llegó á convencerse de la inculpabilidad de Díaz Granados, y en consecuencia, por auto del diez y nueve de Noviembre del último año, que consultó con esta Superioridad, resolvió cortar todo procedimiento, no hallando para proceder ningún motivo. Sustanciado el asunto en la Corte, desde el siete de Diciembre, el señor Procurador general emitió su concepto; devuelto el día tres de los corrientes, pidiendo que se confirme el auto de sobreseimiento, después de lo cual se ha surtido la correspondiente citación.

Para resolver, la Corte sólo tiene que examinar si en el asunto está de algún modo interesada la Hacienda nacional, ó si se trata de un caso de responsabilidad de que deba conocer la Corte Suprema, según la Constitución ó la ley 61 de 1886 (25 de Noviembre); pues de esto depende la competencia para ejercer autoridad en segunda instancia. Es evidente que ni se ha ejecutado por Díaz Granados un acto que pueda afectar al interés fiscal de la Nación, ni él tiene carácter de funcionario público, de aquellos cuyas causas criminales están sujetas á la jurisdicción de la Corte. Es, por lo tanto, llegada la ocasión de aplicar la modificación 2.ª, del artículo 99, de la citada ley 61, "provisional sobre organización y atribuciones del Poder Judicial etc.," según la cual no es yá de la competencia de la Corte Suprema de Justicia, sino de la del respectivo Tribunal Superior del Distrito.

En consecuencia, la Corte Suprema resuelve abstenerse de conocer en este negocio, por ser incompetente, y que se remita el expediente al Tribunal Superior del Distrito de Bolívar, para que éste conozca legalmente de la consulta.

Notifíquese, déjese copia de esta resolución, que se publicará en el periódico oficial respectivo, y comuníquese al Juez que elevó la consulta.

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En trece de Enero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, doce de Enero de mil ochocientos ochenta y siete.

En el sumario para averiguar la responsabilidad en que pudo incurrir el Juez del Circuíto de Padilla, señor Alejandro López Cano, por haber conocido en la demanda intentada por Antonio Amaya Daza contra el Gobierno nacional, por despojo de los terrenos denominados "Cerrejón," se dictó el auto siguiente:

Entre las atribuciones conferidas á la Corte Suprema por la ley 61 de veinticinco de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, sobre organización judicial, no se halla la de conocer de las causas de responsabilidad contra los Jueces de Circuíto, y segun el número 2°, artículo 99 de la misma ley, las atribuciones conferidas á la Corte Suprema en el Código Judicial y no asignadas á la misma en la Constitución ni en esa ley, serán ejercidas por los Tribunales Superiores de Distrito. Además, en el número 2.° artículo 100 de la misma ley, se atribuye expresamente á dichos Tribunales el conocimiento de las causas de responsabilidad contra los Jueces de Circuíto.

En consecuencia se resuelve: pase este expediente al Tribunal Superior del Distrito del Magdalena, para los efectos legales.

José M. Samper—Manuel J. Angarita.—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En trece de Enero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador.

FERNÁNDEZ.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, treee de Enero de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Instruído este sumario en Manizales, con el fin de averiguar los delitos de falsificación y circulación de moneda de cincuenta centavos, semejante á la expedida por el Gobierno en esta ciudad el año de 1882, el Juez de aquel Circuíto en su calidad de nacional dictó, en quince de Noviembre último, auto de sobreseimiento, que ha consultado con esta Suprema Corte, por no haberse interpuesto recurso de apelación.

Sustanciado el negocio con audiencia del señor Procurador general de la Nación para resolver lo que fuere legal, la Corte considera:

1.° Que aunque en la fecha en que se decretó la consulta, correspondía á esta Superioridad conocer en última instancia de los autos interlocutorios que en la primera instancia son de competencia de los Jueces nacionales, en virtud de lo dispuesto en el inciso 5.° seccion 2.ª del artículo 18, Código Judicial, esa disposición, así como todas las demás del título 2.° del mismo Código, ha sido derogada por el artículo 149 de la ley 61 de 25 de Noviembre de 1886;

2.° Que entre las atribuciones conferidas á la Corte Suprema por el artículo 21 de esta última ley, no se encuentra la de conocer en segunda y última instancia, de consultas relativas á negocios de la naturaleza del que se trata;

3.° Que léjos de esto, el artículo 99 de la ley citada, dispone en su última parte que las atribuciones conferidas á la Corte Suprema en el Código Judicial, y no asignadas á la misma en la Constitución ni en la ley en referencia, sean ejercidas por los Tribunales Superiores de Distrito.

Siendo esto así, la Corte Suprema declara que la consulta aludida ha dejado de ser de su competencia, y que, en virtud de lo ordenado en la disposición legal últimamente citada, el expediente se remita al Tribunal Superior del Distrito de Medellín para lo de su cargo, dejándose la debida constancia.

Hágase saber esta resolución al señor Procurador General y comuníquese al señor Juez nacional del Circuíto de Manizales.

José M. Samper.—Manuel J. Angarita.—Julián R. Cock Bayer.—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera,—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y siete de Enero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto que precede al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.* Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Enero diez y siete de mil ochocientos ochenta y siete.

En las diligencias instruídas para averiguar el responsable de la violación de una correspondencia en la Administración principal de Hacienda de Santa-Marta, en el año de 1879, se ha dictado el auto siguiente:

Constando del antecedente informe que sobre este mismo asunto cursaron otras diligencias ante esta misma Superioridad, las cuales terminaron con el auto de sobreseimiento que se pronunció en trece de Noviembre del año próximo pasado, como así consta además, del expediente referido que se ha tenido á la vista, y no teniendo por tal motivo objeto alguno la continuación del presente sumario, una vez que no se está en el caso previsto en la última parte del artículo 1,549 del Código Judicial; en tal virtud, la Corte Suprema de la Nación resuelve suspender el curso de este negocio y que se agregue á las diligencias antes mencionadas.

José M. Samper.—Manuel J. Angarita.—Julián R. Cock Bayer.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Benjamín Noguera.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A. Secretario.

En diez y nueve de Enero de mil ochocientos ochenta y siete notifiqué al señor Procurador el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Enero diez y ocho de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos.—El Juez 2.° de la Provincia de Barranquilla pronunció auto de sobreseimiento, que consulta con la Corte, en ocho de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, en el sumario iniciado por el mismo Juez, con el objeto de averiguar el delito de haberse apoderado algunos individuos, en seis de Enero de mil ochocientos ochenta y cinco, de la balija del Correo nacional que había llegado á la ciudad de Barranquilla; y para dar término al procedimiento, tuvo en consideración que el hecho es de carácter político, como un incidente de la rebelión contra el Gobierno.

Conforme á los artículos 21 y 99, inciso 2.° de la ley 61 de 1886, hoy no corresponde á este Supremo Tribunal el despacho en segunda instancia de dicho asunto, sino al Tribunal del respectivo Distrito Judcial.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia declara que no es de su competencia el conocimiento de este sumario, y ordena que sea remitido al Tribunal del Distrito de Bolívar para lo de su cargo.

Notifíquese, cópiese, publíquese en el *Diario Oficial* y dése aviso al Juez de primera instancia.

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A, Secretario.

En diez y nueve de Enero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto que precede al señor Procurador general.

Arango M.—Guerra A., Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y ocho de Enero de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos.—El Juez de la Provincia de Corozal ha remitido en consulta á esta Superioridad, el auto de sobreseimiento que con

fecha veinte de Noviembre último dictó en el sumario instruído para averiguar la responsabilidad en que hubiera incurrido Manuel Madrid Alvis, por haber desempeñado en la guerra civil del año próximo pasado el destino de Administrador de Hacienda de dicha Provincia, que le fué conferido por los revolucionarios; y funda el auto en que al sindicado le favorece la amnistía concedida por el Gobierno el veinte de Julio de mil ochocientos ochenta y seis. (Decreto número 418.)

Y considerando la Corte:

1.° Que aunque en la fecha en que se dictó la consulta correspondía á esta Superioridad conocer en última instancia de los autos interlocutorios que en la primera son de competencia de los Jueces nacionales, en virtud de lo dispuesto en el inciso 5.°, sección 2.ª del artículo 18 del Código Judicial, esa disposición, así como todas las demás del Título 2.° del mismo Código, ha sido derogada por el artículo 149 de la ley 61 de veinticinco de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis;

2.° Que entre las atribuciones conferidas á la Corte Suprema por el artículo 21 de esta última ley no se encuentra la de conocer en segunda y última instancta de consultas relativas á negocios de la naturaleza del que se trata; y

3.° Que lejos de esto, el artículo 99 de la ley 61 citada dispone en su última parte que las atribuciones conferidas á la Corte Suprema en el Código Judicial, y no asignadas á la misma en la Constitución ni en la ley en referencia, sean ejercidas por los Tribunales Superiores de Distrito;

Siendo esto así, la Corte Suprema, de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador general en la última parte de su vista precedente, declara que la consulta aludida ha dejado de ser de su competencia, y que en virtud de lo ordenado en la disposición legal últimamente citada, el expediente se remita al Tribunal Superior del Distrito de Bolívar para lo de su cargo, dejándose la debida constancia.

Hágase saber esta resolución al señor Procurador general y comuníquese al señor Juez nacional del Distrito de Corozal.

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha.—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A. Secretario.

En diez y nueve de Enero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto anterior.

Arango M.—Guerra, A. Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Enero diez y nueve de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Se han practicado las presentes diligencias á virtud de denuncios que uno contra otro dieron, ante el Administrador principal de las Salinas de Zipaquirá, el Administrador subalterno y el Contador de las de Nemocón, á saber: contra el primero, por haber hecho por sí mismo y ordenado al Contador la venta, al crédito, de algunas cantidades de sal, contraviniendo así á la terminante disposición del inciso 12, del artículo 472 del Código Fiscal, y suspendido ó privado al Contador del ejercicio de sus funciones; y contra éste, por la frecuente separación de su empleo y haber expedido una guía á favor de Manuel Bernal, por sesenta y cuatro arrobas de sal de caldero (guía que figura original á fojas 1.ª de esta actuación), sin que el nombre del comprador figurara en el Registro de ventas, cuando el Administrador empezó á practicar éstas.

Dada cuenta con lo actuado al Juez 2.° del Circuíto de Zipaquirá, y adelantada por éste la averiguación hasta donde lo creyó conveniente, dictó el auto de sobreseimiento de fecha veintisiete de Octubre último, que ha sido consultado con esta Superioridad, y dada á la consulta el curso determinado por la ley, se tiene en consideración para resolverla:

1.° Que este negocio no es referente por su naturaleza, á rentas, bienes ni derechos de la Hacienda nacional, y que, no habiendo sobre esto contienda alguna entre partes, por no tratarse en este expediente de la acción civil, sino que solamente se ha procurado llenar el objeto del procedimiento criminal, claramente determinado en el artículo 1,413 del Código Judicial de la Nación, no se está en el caso previsto en el inciso 1.° de la Sección 2.ª, Capítulo 2.°, Título 3.° de la ley 61 del año próximo pasado; y

2.° Que ni la Constitución ni la ley, han atribuído nuevamente á la Corte Suprema el conocimiento, en segunda instancia, de las causas de responsabilidad de que conocen en primera los Jueces Nacionales, en consonancia con lo dispuesto en el inciso 26, del artículo 62 del Código Judicial y que, por consiguiente, es al respestivo Tribunal del Distrito Judicial á quien compete, conforme al inciso 2.°, artículo 99, de la ley 61 de mil ochocientos ochenta y seis, el conocimiento de este.

Por lo tanto, la Corte Suprema de la Nación, oído el concepto del señor Procurador general, así lo resuelve, disponiendo, en consecuencia, que pase la actuación al Tribunal Superior del Distrito de Cundinamarca, en la Sala de lo criminal para que le dé el curso que fuere legal.

Notifíquese, dése aviso de esta determinación al Juez remitente, déjese la correspondiente copia y publíquese en el *Diario Oficial* de la Nación.

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veinte del mismo mes y año, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme.

Bogotá, Enero veinticinco de mil ochocientos ochenta y siete.

Ramón Guerra A. Secretario.

RESOLUCIONES DIVERSAS.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, treee de Enero de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Juez segundo del Circuíto de Zipaquirá consulta con la Corte la sentencia de trece de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, por la cual condenó á Rafael Vargas como auxiliador en la perpetración del delito de hurto de sal perteneciente á la República que fué extraída de los almacenes de la Salina de Nemocón y vendida al procesado por un guarda de la misma Salina, quien fué inducido por el Administrador respectivo á verificar clandestinamente esa operación con Vargas para convencerlo de su culpabilidad por cuanto había sospechas de que negociaba fraudulentamente en ese artículo.

Expedida la ley 61 de mil ochocientos ochenta y seis, dicha consulta no puede surtirse ante la Corte, porque el inciso 2.° del artículo 99 declara que las atribuciones conferidas á la Corte Suprema en el Código Judicial y no asignadas á la Corte Suprema de Justicia en la Constitución y en dicha ley, serán ejercidas por los Tribunales Superiores de Distrito; y como el artículo 21 que fija las atribuciones de este Supremo Tribunal, y la Constitución vigente, no atribuyen á la misma corporación el conocimiento en segunda instancia de negocios criminales como el presente; la Corte Suprema de Jnsticia se abstiene del conocimiento de esta causa y ordena que pase á la Sala encargada del despacho de lo criminal en el Distrito judicial de Cundinamarca para lo de su cargo.

Notifíquese, cópiese y publíquese en el *Diario Oficial*, Comuníquese al Juez de primera instancia.

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Antonio Morales—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y siete de Enero de mil ochocientos ochenta y siete notifiqué el auto que precede al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

IMPRENTA DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPÚBLICA DE COLOMBIA. Número 17

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 14 de Mayo de 1887.

CONTENIDO.

PÁG

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

De incompetencia de la Corte para conocer de un sumario..... 129
De sobreseimiento en un sumario por delito de reclutamiento..... "
De incompetencia para conocer en un sumario por delito político.... 130
De id. para conocer en la causa contra Rafael Ostán Lafont..... "
De proceder, por responsabilidad, contra el General Ricardo Acevedo..... 131

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL

Emitida en la causa contra Rafael Vargas, por hurto de sal..... 133
Id. en el sumario sobre delito de reclutamiento..... "
Id. en la competencia sobre un sumario seguido en Ocaña, por heridas etc. ..... "

DOCUMENTOS JUDICIALES DIVERSOS.

Copia de la sentencia del Tribunal Superior de Cundinamarca, en causa seguida en Chocontá, por falsificación de billetes del Banco Nacional..... 134
Id. del mismo Tribunal, en la causa seguida contra Rafael Ostán de Lafont, por fraude en el Banco Nacional..... 135

GACETA JUDICIAL.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, diez y ocho de Enero de mil ochocientos ochenta y siete.

El presente juicio venido en apelación y consulta, de la sentencia proferida por el Juez del Circuito de Chocontá, contra Cerbeleón y Adelaida Medellín, por el delito de falsificación de billetes del Banco Nacional, ha dejado de ser de la competencia de la Corte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 99, de la ley 61 de 1886, sobre organización del Poder Judicial; y correspondiendo, como corresponde, el conocimiento de dicho juicio al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, se dispone la remisión del proceso á la Sala de lo criminal del expresado Tribunal, para los efectos legales.

Póngase esta resolución en conocimiento del Juez del Circuito de Chocontá.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y nueve de Enero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Enero diez y ocho de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El señor Secretario de Gobierno de la Unión, dirigió al señor Presidente de este Supremo Tribunal, con fecha diez y ocho de Junio de mil ochocientos ochenta y tres, una nota señalada con el número dos mil cuatrocientos diez y ocho, de la Sección 1.ª, que dice así:

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.° del acto adicional y reformatorio de la Constitución del Estado soberano de Cundinamarca, aprobado por la Asamblea Legislativa en su segunda reunión ordinaria, el diez y nueve de Enero de mil ochocientos setenta y cuatro, 'La fuerza militar para el servicio del Estado, ó para el contingente que debe darse al Gobierno de la Unión, se formará por sorteo, conforme lo determine la ley cuando no pueda formarse por enganche voluntario. Los que fueren designados por la suerte, podrán hacerse reemplazar por otra persona apta para el servicio, ó eximirse de prestarlo pagando la prima de enganche que haya fijado la ley, excepto en caso de guerra exterior, en que no se admitirá reemplazo ni excepción de ninguna clase.' Por este artículo quedó derogado el inciso primero, del artículo cuarto de la Constitución política del Estado soberano de Cundinamarca, sancionada el diez de Noviembre de mil ochocientos setenta. Por el artículo 4.° de la ley 14, de 4 de Diciembre de 1882, se dispuso que el Poder Ejecutivo del Estado dictara el Decreto orgánico de la fuerza pública, procurando asimilarlo en la organización de Batallones al Código Militar de la Unión. Pero como ni en la Constitución del Estado, ni en el Código Militar de la Unión, se sanciona el reclutamiento forzoso, he recibido orden del ciudadano Presidente, para remitiros, en copia autorizada, la comunicación oficial en que el Gobierno de Cundinamarca manifiesta no poder acceder á los deseos del Senado de Plenipotenciarios, porque el inciso 4.°, del artículo 4.° de la Constitución del Estado autoriza el reclutamiento para la formación de la fuerza pública."

Y la comunicación oficial á que se alude, número diez mil cuatrocientos setenta, de aquella misma fecha, y suscrita por el Secretario de Gobierno de dicho Estado, está concebida en estos términos:

"Señor Secretario de Gobierno de la Unión.

"Tengo el honor de dar respuesta á la nota Circular de ese Despacho, de once del mes en curso, número dos mil trescientos tres, de la Sección primera, manifestando á usted que el Gobierno de Cundinamarca siente profundamente no poder acceder á los deseos del Senado de Plenipotenciarios, en cuanto á la abolición del reclutamiento, porque el inciso primero del artículo cuarto de la Constitución del Estado establece este sistema de conscripción para formar la fuerza pública; pero en el propósito de unificar esta parte de la Legislación con los principios que se invocan, se dará cuenta á la próxima Asamblea para que promueva la reforma ó derogatoria del artículo constitucional citado."

Figuran también agregados al expediente, sin que se sepa por disposición de quién, una hoja impresa conteniendo: 1.° una nota del Secretario de Gobierno de la Unión, fecha treinta y uno de Mayo de mil ochocientos ochenta y tres, número dos mil trescientos sesenta y nueve, acompañando al Secretario del Senado de Plenipotenciarios el Decreto Ejecutivo número quinientos cincuenta y tres del propio año, por el cual se declara incompatible con la libertad individual, la seguridad personal y la igualdad de los derechos sociales, el reclutamiento forzoso, etc., etc.; 2.° el Decreto mismo; y 3.° la circular número dos mil trescientos setenta y dos, de primero de Junio del citado año, dirigida á los Gobiernos de los Estados, en que se transcriben, recomendando su cumplimiento, las resoluciones del Senado y de la Cámara de Representantes, de veintitrés y veintiséis de Mayo de dicho año, respectivamente, en las cuales se estima el reclutamiento como un hecho violatorio de las ga-

rantías individuales, incompatible con las instituciones republicanas y prohibido por las que se había dado el país, etc., etc.

Con tales antecedentes se dió principio al juicio informativo, á efecto de averiguar la responsabilidad en que hubiera podido incurrir el Gobernador del extinguido Estado de Cundinamarca, General Daniel Aldana, por violación de los artículos octavo y noveno de la ley 60 de mil ochocientos ochenta y dos, sobre garantías para personas y propiedades en tiempo de guerra, resultando de los datos oficiales obtenidos, de las declaraciones de los señores Florentino Vezga, Francisco E. Alvarez, Januario Salgar, Emilio Hamón, Ramón Gómez, General Ricardo Acebedo, Jesús Rozo Ospina, Jacinto Albarracín, Rafael Nieto París, Roberto Canales, Luis Rodríguez y Teodosio León; y las de los soldados Primo Niampira, Carlos Pardo, Leonardo Reaño, Máximo Acosta, Ferrer Rodríguez, Aquilino Castillo, Justo Rojas y Ciriaco Aponte, que el Gobierno nacional, según así consta de la nota de la Secretaría de Guerra, fecha veintiocho de Abril de mil ochocientos ochenta y tres, dirigida al Secretario de Gobierno del extinguido Estado de Cundinamarca, dispuso elevar el pie de fuerza al número de cuatro mil hombres, pidiendo á éste último Gobierno un contingente de ciento cincuenta individuos, con prevención de que debían obtenerse por contratos de enganchamiento, cuyos gastos se harían con fondos nacionales; que el contingente recibido por los Jefes de la fuerza nacional ascendió á trescientos ó más hombres, con los cuales se formó el Batallón 17 de infantería, de la Guardia Colombiana, ; que para allegar esta fuerza se ocurrió al medio del reclutamiento, empleado, tanto en esta capital, como en los pueblos de algunos Departamentos del extinguido Estado, yá por Agentes del Gobierno de éste, como por empleados de la fuerza nacional; y por último, que los reclutas eran conducidos á veces, directamente, y otros del edificio de San-Francisco, residencia del Gobierno local, al cuartel del Batallón 17 de infantería, anteriormente mencionado.

Pendiente aún la expresada actuación, se iniciaron nuevas diligencias, á virtud de denuncia escrita, presentada ante esta Superioridad con fecha veintinueve de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro, por José F. Acebedo, Enrique Lleras, Vespasiano Jaramillo, Liborio D. Cantillo, Juan de Dios Uribe, Primitivo Delgadillo y Fernando U. Conde, en el cual se asevera que "por agentes armados del Gobierno del Estado y de la Unión, agentes que recorren permanentemente las calles y plazas de la ciudad, se ha estado cometiendo en los últimos días el escandaloso é inaudito atentado del reclutamiento forzoso, que constituye un crimen, etc., etc."

Las diligencias que se mandaron practicar comprueban el hecho denunciado, así como, que por Decretos del Ejecutivo nacional, de 25 y 26 de Agosto del mismo año de mil ochocientos ochenta y cuatro, se pidieron al de Cundinamarca dos contingentes, uno de ciento cincuenta hombres para organizar en esta capital el Batallón 12 de Zapadores, y otro de trescientos más, para elevar á ese número la fuerza efectiva de los Batallones 1.° de Artillería y 15 de Zapadores; pero sin que aparezca acto alguno directo, de uno ú otro Gobierno, autorizando expresamente los procedimientos de que se trata; y antes bien, en muchas de las comunicaciones dirigidas por el Ejecutivo seccional á sus Agentes, en los Distritos y Departamentos, pidiendo el contingente ó disponiendo la organización de fuerzas, se recomienda, sobre el particular, el puntual cumplimiento de las leyes vigentes del Estado.

Estas últimas diligencias, así como la información sumaria que, á pedimento de Inocencio Salgado Gómez, se practicó ante el Juez 2.° del Circuito de Facatativá, con fecha veintidós de Mayo del año últimamente citado, con el cual se acreditó, por el dicho de doce testigos, acordes en sus declaraciones, que en los pueblos de aquel Departamento se había estado reclutando desde el día trece del citado mes, por autoridades civiles y militares del Estado, sin designación de personas ó empleos, se mandaron acumular á las primitivas, de que antes se ha hecho mención, y dada vista al señor Procurador general de lo actuado, dijo éste, entre otras cosas, en su respuesta de trece de Diciembre último en que pidió la suspensión del procedimiento, lo que sigue:

"Recibido el testimonio de alguno de los individuos que fueron reclutados, se puede venir en conocimiento que realmente el reclutamiento se hacía, tanto por el Gobierno nacional, como por el del extinguido Estado de Cundinamarca. Tal hecho está suficientemente comprobado en concepto de este Ministerio.

"Ahora bien (continua diciendo el señor Procurador), ese Supremo Tribunal ha conocido instructivamente de esas diligencias, en atención á que en ellas figuran como sindicados dos altos funcionarios: el Presidente de la República en mil ochocientos ochenta y tres, y el Gobernador del Estado de Cundinamarca en la misma época. Respecto del primero, no hay duda que no tendría efecto la averiguación, pues es notoria la defunción del señor doctor Francisco Javier Zaldúa, *á quien se atribuye, en parte, el hecho de haber ordenado el reclutamiento*, y es aplicable el artículo 1,419 del Código Judicial nacional. En cuanto al Gobernador de Cundinamarca, el infrascrito reproduce aquí la parte conducente de la vista del Procurador general de la Nación, que corre publicada en el número 5,004 del *Diario Oficial*, correspondiente al diez y siete de Agosto de mil ochocientos ochenta y tres.

Estando, pues, el asunto en estado de dictarse el correspondiente fallo, se tiene para ello en consideración:

1.° Que no solamente no existe en estos autos prueba alguna, ni el más ligero indicio de la supuesta culpabilidad del que fué Presidente de los Estados Unidos de Colombia, doctor Francisco J. Zaldúa, sino que, al contrario, con tanta evidencia está exento de la sospecha ó imputación que sobre su conducta oficial arroja (por error sin duda) el concepto transcrito del señor Procurador general, que habiendo fallecido aquel notable ciudadano, el veintiuno de Diciembre de mil ochocientos ochenta y dos, ninguna responsabilidad puede afectarle por los hechos denunciados, cuya perpetración tuvo lugar en los años de 1883 y 1884. Durante su corta administración, además, y esto sí es bien notorio, ni decretó el aumento de la fuerza pública, ni pidió contingente alguno á los extinguidos Estados; y la Corte, por tal motivo, cree cumplir un deber de estricta justicia, reconociendo y declarando de la manera más solemne, que está destituído de todo fundamento el enunciado concepto, respecto del distinguido ciudadano, de quien dijo el Congreso de 1883, que *como hombre de Estado y Magistrado, se distinguió por la honradez de sus propósitos, la entereza de su carácter y su respeto por la estricta legalidad*; y

2.° Que, aunque es incontestable que el reclutamiento se ejecutó de una manera pública, no existiendo, como antes se ha dicho, la prueba legal de que el hecho se hubiera ejecutado por órdenes expresas y terminantes del Gobernador del extinguido Estado de Cundinamarca, ó de los encargados del Gobierno nacional, la Corte no encuentra fundamento alguno bastante para declarar que tales funcionarios sean los responsables de los hechos denunciados; y en esta virtud, de conformidad en lo sustancial con el señor Procurador general, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara suspendido el procedimiento en el asunto de que se trata.

Notifíquese, déjese la correspondiente copia para el *Diario Oficial*, y archívese la actuación.

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y nueve de Enero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto que precede al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, diez y nueve de Enero de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Este sumario se ha instruído por el Juez de la Provincia de Mompox, con el fin de averiguar si Pascual Estrada, Francisco Lidueñas, Baldomero Durán y otros, cometieron algún delito por el hecho de haber comprado cueros de res á una partida de revolucionarios, en la última guerra civil nacional.

El Juez dictó con fecha veintisiete de Octubre último, un auto, declarando que el delito era de naturaleza política; que por el Decreto del Poder Ejecutivo nacional, del veinte de Julio del año próximo pasado, estaba amnistiado; que sobreseía en el

procedimiento y dispuso que se consultara esa providencia con la Corte.

Oído el señor Procurador, y examinado el expediente, resulta, que sea ó nó delito el hecho ejecutado por los sindicados, la Corte no puede resolver en el asunto, pues según la ley 61 de mil ochocientos ochenta y seis, Provisional sobre organización y atribuciones del Poder Judicial, no es competente para conocer en esta clase de negocios.

En efecto, esa ley no atribuye á la Corte Suprema de Justicia el conocimiento de negocios criminales, sino en ciertos casos de responsabilidad, de determinados funcionarios públicos; y aquellos en que se impone la pena de muerte; y en el número 2.°, artículo 98 se dispone que "Las atribuciones conferidas á la Corte Suprema en el Código Judiciol, y no asignadas á la Corte Suprema de Justicia en la Constitución ni en esta ley, serán ejercidas por los Tribunales Superiores de Distrito."

En consecuencia, se resuelve: Remítase este expediente al Tribunal Superior del Distrito de Bolívar, para los efectos á que haya lugar según la ley, y comuníquese ésta resolución al Juez de la Provincia de Mompox.

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y nueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Enero diez y nueve de mil ochocientos ochenta y siete.

El presente juicio, seguido contra Rafael Ostán de Lafont por el delito de mala administración de la Hacienda nacional, se remitió á esta Superioridad en apelación de la sentencia pronunciada por el Juez 6.° del Circuito de Bogotá. La Corte aprehendió el conocimiento del expresado juicio por estar en sus atribuciones; pero hoy carece yá de jurisdicción para conocer en dicho juicio, á virtud de lo dispuesto en los artículos 21 y 99 de la ley 61 de 1886, orgánica del Poder Judicial.

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema se declara incompetente para continuar cónociendo en esta causa, y ordena que se remita el proceso á la Sala de lo criminal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca.

Hágase saber esta resolución al mencionado señor Juez 6.° del Circuíto de Bogotá.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A. Secretario.

En veinte de los mismos notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A. Secretario.*

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Enero diez y nueve de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos—Está plenamente comprobado en estas diligencias que el Administrador principal de las salinas de Zipaquirá, General Ricardo Acebedo, autorizó al Comandante de aquel Resguardo, José Justo Pulido, para que practicara, como efectivamente practicó, el sumario correspondiente al denuncio dado por Fulgencio Pachón, contra el peón de Guachá, Pedro Pinilla, y otros, por fraude á las expresadas rentas.

Dicha autorización, expresamente reconocida ó confesada por el Administrador en la nota que dirigió al Juez 2.° de Zipaquirá con fecha diez y siete de Marzo del año próximo pasado, número 759 fué estimado por esta misma Corte como un hecho punible en el auto que dictó el diez y seis de Octubre del citado año, á cuyo efecto y para averiguar la reponsabilidad en que hubiera incurrido el funcionario á que se alude, mandó compulsar las copias que han dado origen á la presente actuación.

Comprobado igualmente, como lo ha sido después, el carácterpúblico del acusado con el Decreto de su nombramiento para el empleo de Administrador de dichas salinas y con copia de la diligencia de posesión, se dió vista de todo lo actuado al señor Procurador general, quien, en su escrito de 14 del que cursa propone se llame á juicio al sindicado como infractor del artículo 231 del Código penal, y puesto ya el negocio en estado de resolver lo conveniente, se considera para ello:

1.° Que la delegación de funciones por parte de los empleados públicos, sea á otros funcianarios ó á los particulares, es un hecho verdaderamente punible, cuando, como en este caso, se ejecuta sin que la ley lo permita, pues de ese modo no habriíá nada que fuese claro, preciso, determinado, en cuanto á los encargados del ejercicio de esas mismas funciones y los derechos de los asociados, podrían en consecuencia, quedar inseguros y sériamente comprometidos; y

2.° Que propiamente hablando, el acusado no se arrogó una autoridad que no tenía, al disponer, en los términos en que lo hizo, la investigación del fraude denunciado, puesto que, el inciso 17 del artículo 472 del Código Fiscal, reviste claramente al Administrador para estos casos, del carácter de funcionario de instrucción; de modo que, al investir de ese mismo carácter á un subalterno suyo, se excedió claramente y á sabiendas de las atribuciones de su empleo de cuya manera omitió también el cumplimiento del deber que le impone la disposición que acaba de citarse.

Por tanto, la Corte Suprema de la Nación, de conformidad en lo sustancial, en el concepto del señor Procurador general, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que estas diligencias prestan mérito, para llamar, como se llama, á juicio de responsabilidad por los trámites extraordinarios, al Administrador de las salinas de Zipaquirá, general Ricrrdo Acebedo, por violación de los artículos 454 y 415 del Código penal.

En consecuencia el acusado informará dentro del término de la ley, para lo cual se librará despacho con remisión de lo actuado al Juez 2.° del Circuíto de Zipaquirá quien ajustará extrictamente su procedimiento á lo prevenido en el artículo 1820 del Código Judicial.

Notifíquese y déjese cópia en el libro respectivo.

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A. Secretario.

En veinte de los mismos notifiqué el auto que precede al suñor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.* Secretario.

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL.

Señores Magistrados.

Este proceso ha venido á vuestro conocimiento en consulta de la sentencia proferida en él, con fecha 13 de Octubre del año en curso, contra Rafael Vargas, del auto de sobreseimiento dictado en 6 de Agosto á favor de Vicente Garnica, Salvador Jiménez é Ildefonso Sarmiento, y del auto de 27 del mismo mes, en la parte en que por este auto se sobresee respecto de Fulgencio Jiménez y Faustino Palacio.

El delito á que el citado proceso se contrae es el de hurto de unas arrobas de sal de la Salina nacional de Nemocón.

El Juez de la causa, que lo fué el 2.° del Circuíto de Zipaquirá, declaré al procesado Vargas, por la enunciada sentencia de 13 de Octubre, responsable en tercer grado como auxiliador del delito de hurto de bienes nacionales, y como á tal, lo condenó á sufrir la pena de siete meses de reclusión, con las agravaciones consiguientes á la pena corporal.

Aun cuando las circunstancias que concurrieron en la comisión del mencionado delito aparecen fiel y extensamente relacionadas en el fallo de primera instancia, el infrascrito estima del caso haceros un extracto de ellas.

Varios individuos del cuerpo de guardia militar que custodiaba, en la noche del diez y siete de Abril último, la Salina de Nemocón, ocurrieron, por llamamiento que les hizo el Guarda de la misma Salina, Ildefonso Sarmiento, á la casa de habitación de Rafael Vargas, y habiendo sorprendido á éste en el momento en que estaba ocultando algunos trozos de sal, procedieron á

registrar dicha casa y descubrieron sal oculta en diferentes puntos, la cual fué aprehendida y depositada en el citado cuerpo de guardia.

En el curso de la investigación sumaria iniciada para averiguar la procedencia de la sal, vino á descubrirse que el Guarda Ildefonso Sarmiento, algunos de los trabajadores de la Salina, el Oficial que comandaba la guardia militar y parte de la misma guardia, concurrieron, más ó menos directamente, á facilitar á Vargas la extracción fraudulenta de la sal, mediando para ello la circunstancia de que tales empleados procedieron así á virtud de indicaciones reservadas que habían sido hechas á algunos de ellos, y principalmente al Guarda Sarmiento, por el Administrador subalterno de la Salina de Nemocón, señor Pablo Santamaría.

Es el caso de que, días antes del 17 de Abril, dicho Sarmiento había dado aviso al Administrador, señor Santamaría, de que Rafael Vargas le había propuesto que sacaran fraudulentamente sal de la Salina, y que él se comprometía á indicarle los puntos por donde se podía hacer la operación.

Sabedor de esto el Administrador, y de que Sarmiento había manifestado que él había rechazado la propuesta de Vargas, aquel empleado le indicó á Sarmiento que si Vargas le hacía nuevas propuestas para sacar sal fraudulentamente, no las rechazara del todo, y que antes bien accediese en cierto modo á ellas, dándole aviso de lo que ocurriera en el particular con dicho Vargas.

Afirma Sarmiento que, poco después de lo que se deja indicado, Vargas volvió á hacerle la misma propuesta, y que, de acuerdo con lo que le tenía advertido el Administrador, fingió convenir en ella, y logró de esta manera que el proponente le señalara el punto por donde debía sacarse la sal, concertándose entre los dos que ésta le sería alcanzada á Vargas por sobre la pared que separaba la casa de dicho Vargas de la fábrica de la Salina, para lo cual había necesidad de hablar á dos hermanos de apellido Jiménez, quienes trabajaban en la fábrica y podían, por lo mismo, conducir la sal al pie de la pared y ayudarla á pasar á la casa colindante de Vargas.

Este plan, simulado como queda dicho, por parte de Sarmiento, se llevó á efecto el día 17 de Abril, estando advertido préviamente de él por el mismo Administrador, el Oficial de la guardia, quien tomó sus medidas para que los centinelas avanzados hacia el lado por donde debía pasarse la sal á la casa de Vargas, no se opusiesen á ello ni diesen señal laguna de alarma.

Dispuestas así las cosas, y cuando Vargas estaba en la tarea de recibir y conducir al interior de su casa la sal que otros le alcanzaban por encima de la pared divisoria, Sarmiento se dirigió al cuerpo de guardia y, con voces de fingida alarma dió noticia de que se estaban robando la sal, y pidió auxilio para impedirlo.

Vargas fué sorprendido en su casa ocultando la sal que acababa de ser sacada de los depósitos de la fábrica, y cuyo peso alcanzó á 17 arrobas, peso que fué el mismo que se obtuvo en el reconocimiento pericial que de dicha sal se practicó posteriormente por orden del funcionario de instrucción.

El valor de la sal, conforme al precio oficial corriente cuando fué aprehendida, asciende á $ 40-80 centavos.

Ahora bien: basta la confesión hecha por Rafael Vargas en el curso del juicio, para concluír, con fundamento, que él sí tuvo intención de tomar parte en la comisión del delito á que se contrae el proceso. Dice éste (fojas 4 y 12 vuelta) que estando acostado en su casa de habitación, como á las 11 de la noche del 17 de Abril último, el Guarda Sarmiento lo llamó por dos veces para que saliera á recibir un poco de sal que estaban sacando de la fábrica por encima de la pared divisoria; que habiendo salido, encontró efectivamente algunos trozos de sal dentro del solar de su casa, los cuales había comenzado á guardar en el interior cuando fué sorprendido por la guardia que lo redujo á prisión. Aparte de esto, la diligencia de fojas 47 y 48 relativa al careo verificado entre Vargas y Sarmiento, termina así: "Vargas explicó que, efectivamente, había entrado en convenio con Sarmiento en sacar la sal para Vargas y que luégo arreglarían; explicando Sarmiento que él había obrado así por orden del señor Administrador de la Salina de Nemocón, Pablo Santamaría."

Aún cuando Vargas no confiesa que él hubiera ayudado personalmente á sacar la sal de la fábrica para ponerla en su casa, dues limita su intervención al simple hecho de haberla tomado del corral para ocultarla, el Guarda Ildefonso Sarmiento (fojas 41 vuelta y 47) asegura que, en la citada noche del 17 de Abril, vió á Vargas subido en una escalera mirando al interior de la fábrica por sobre la pared por donde se había convenido en sacar la sal; el Sargento Francisco García (fojas 46, 50 y 51) afirma que vió á Vargas subir por una escalera y penetrar á la fábrica, y que él mismo ayudó á atar á la extremidad de una cuerda varios trozos de sal que Vargas levantó, por sobre la pared, para pasarlos al lado de su casa; el peón de la fábrica Fulgencio Jiménez (fojas 47 y 50), corroborando el dicho del Sargento García, expone que él ayudó á poner la sal al pie de la pared y que vió que Vargas la sacó por medio de un lazo y ayudado del expresado Sargento; finalmente Jiménez y García manifiestan que procedieron como se deja indicado, por haber recibido para ello orden reservada de sus superiores, y yá es sabido que Sarmiento obró por igual motivo.

El Juez de primera instancia no concedió fuerza probatoria á las declaraciones que acaban de mencionarse, fundado en que el defensor del procesado tachó á los testigos por falta de imparcialidad.

A esto observa el infrascrito que la tacha alegada no se comprobó en los términos prevenidos en el artículo 581 del Código Judicial y que, bien considerado el punto, hay que convenir en que en los referidos testigos no concurre ninguna de las causales en que se puede fundar la tacha de falta de imparcialidad conforme al artículo 533 del mismo Código.

No existiendo, pues, motivo legal suficiente para desestimar los testimonios de los citados Sarmiento, García y Jiménez, se les debe tener en cuenta para deducir de ellos y de la confesión del procesado la responsabilidad que á éste corresponde en el delito materia de la causa.

Esto sentado, conviene fijar, ante todo y con la claridad posible, las circunstancias que concurrieron en la comisión del delito.

Varias fueron las personas que tomaron parte en la sustracción de la sal para ponerla en la casa de Vargas; pero, como yá se ha dicho, solamente éste obraba con malicia, pues todos los demás estaban convenidos en facilitarle más bien que impedirle á Vargas la consecución de su propósito de defraudar la renta de Salinas, voluntad que había manifestado yá en otras ocasiones.

Censurables ó nó los medios empleados para poner de manifiesto el designio culpable de Várgas, es lo cierto que ellos dieron por resultado que éste concurriera á la comisión del delito, ignorante de lo que realmente pasaba y creyéndose ayudado por verdaderos cómplices; pero, en suma, con ánimo de delinquir.

Teniendo en cuenta las circunstancias de que se ha hecho mérito, y además: que tres testigos afirman que vieron á Vargas sacando personalmente la sal de la fábrica y que éste no niega el convenio celebrado entre él y Sarmiento, ni el hecho de haberse ocupado en ocultar la sal sustraída, cree el infrascrito que se debe tener á dicho Vargas, no como auxiliador, sino como autor del delito, puesto que, espontáneamente y con ánimo deliberado de apropiarse la sal, puso todos los medios que estuvieron á su alcance para sustraerla, inclusive el de cooperar personalmente al acto mismo de la perpetración del fraude, pudiéndose asegurar que, cuando Várgas acudió (como él lo confiesa) al llamamiento de Sarmiento, su fingido cómplice, fué á sabiendas de que se trataba de llevar á cabo el convenio ilícito relativo á la comisión del mencionado fraude.

De la prueba testimonial de que ha hecho mérito el infrascrito para designar á Vargas como autor principal del delito, se desprende que éste se cometió mediando violencia á las cosas, pues, según esa prueba, Vargas subió á la pared, y aun se dice que penetró en el recinto de la fábrica, sirviéndose de una escalera; de donde se infiere que hubo excalamiento y que, por tanto, no corresponde al expresado delito la calificación de *hurto* sino la de *robo* á que se refiere el artículo 567 del Código Penal.

Por lo demás, la calificación dada á Vargas en el fallo de primera instancia, como auxiliador del delito de hurto, es de todo punto inaceptable, si se considera que ella no puede tener cabida si no existe el autor del mismo delito, condición que faltaría en el caso que nos ocupa, toda vez que el único que procedió con malicia y ánimo de delinquir fué Vargas, pues todos los demás que concurrieron con él á sacar sal de la fábrica, lo

hicieron sin el designio ó intención de apropiársela, y, por tanto, no se les puede tener, legalmente, como autores, ni aun siquiera como cómplices ó auxiliadores del delito por que se juzga á Vargas. Calificar á este como lo ha sido en el expresado fallo, es incurrir en el contrasentido de considerarlo como auxiliador de un delito respecto del cual no hay autor principal.

De la relación de hechos y de la estimación de las pruebas que se han analizado se deduce:

1.° Que la falta cometida por Vargas no puede calificarse sino como tentativa de robo, una vez que el delito no alcanzó á tener efecto, por circunstancias independientes de la voluntad del acusado. (Artículo 15 del Código Penal,)

Pero como el auto de proceder calificó el delito de hurto y este auto está ejecutoriado, la sentencia no puede establecer variación, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 1,630 del Código Judicial.

2.° En el cuerpo del proceso está comprobado que Vargas se sirvió de escalera para entrar á la fábrica á pasar la sal por sobre una pared, para su casa, y le es aplicable la definición dada al robo en el artículo 567 en relación con el 569 del Código Penal. Siendo esto así, Vargas no es responsable sino por robo ó por tentativa de robo.

3.° Si los hechos por los cuales se declaró con lugar á formación de causa criminal, no están comprobados, debe absolvérsele al acusado, sin que esto obste para que se promueva la averiguación del hecho criminoso que se haya cometido y que se le exija la debida responsabilidad al que aparezca culpable; y

4.° Que para que la sentencia esté arreglada á la ley, conviene revocar el fallo consultado, en la parte en que condena á Vargas por hurto, y ordenar que se promueva nueva investigación para saber si el acusado es responsable por los delitos de *tentativa de robo* ó de *robo*, teniendo en cuenta los datos y pruebas que corren en el expediente.

En lo relativo á los autos de sobreseimiento que os han sido consultados, opina este Ministerio que deben confirmarse.

Bogotá, 19 de Noviembre de 1886.

FRANCISCO A. FERNANDEZ.

Señores Magistrados.

El hecho materia de estas diligencias, instruídas para averiguar qué funcionarios públicos habían ordenado un reclutamiento á fines del año de 1883, en el extinguido Estado de Cundinamarca, está claramente descrito por las declaraciones de los testigos señores doctores Francisco Eustaquio Alvarez y Ramón Gómez (fojas 21 vuelta y 26 respectivamente, cuaderno principal).

Dice el primero en su declaración, rendida el 29 de Octubre de 1883, ante ese Supremo Tribunal lo que en seguida se copia:

".....Lo que el exponente puede declarar relativamente á la cita que se le hace, es lo que de pública notoriedad se sabe en esta ciudad, y es que ha habido un fuerte reclutamiento que, se ha dicho generalmente, ha sido hecho tanto por el Gobierno de Cundinamarca, como por el Gobierno general, por medio de sus Agentes; que, el que declara ha visto, que recuerde con precisión, dos partidas de hombres conducidas por soldados que, por el aspecto de los que así eran llevados, por las circunstancias que se observaban y por lo que se oía á las gentes, quedó el que declara en la persuación de que eran individuos reclutados forzosamente; que la una partida la vió en la Calle Real, que la llevaban en la dirección de Norte á Sur, y la otra, en la tercera Calle de Florián, que llevaban en la dirección de Sur á Norte; que le parece que á éstos los llevaban amarrados, aunque no puso la atención necesaria para asegurar esta circunstancia.....; que cree haber alcanzado á ver otras partidas de reclutas, pero que no ha puesto la debida atención para determinar los hechos; que no vió persona alguna entre los reclutados, conocida, para poder citar su nombre, pues le parecieron eran todos gentes infelices del pueblo."

El señor doctor Ramón Gómez, en su declaración rendida el 31 de Octubre de 1883, confirma la transcripción anterior y agrega:

"Que también ha oído referir que en una noche, hará unos quince ó veinte días, salieron patrullas, tánto de la fuerza del Estado como de la Nación á reclutar por las calles de Bogotá, y que los que eran conducidos por las patrullas de la Guardia Colombiana eran depositados ó encerrados en los Cuarteles nacionales; y que hace mención de este hecho porque encuentra muy censurable la conducta del Poder Ejecutivo nacional en este particular, después del Mensaje que él pasó al Congreso contra la práctica abusiva del reclutamiento para formar la fuerza pública."

Recibido el testimonio de algunos de los individuos que fueron reclutados, se puede afirmar que realmente el reclutamiento se hacía, tanto por el Gobierno nacional, como por el del extinguido Estado de Cundinamarca. Tal hecho está suficientemente comprobado en concepto de este Ministerio.

Ahora bien, ese Supremo Tribunal ha conocido instructivamente de estas diligencias, en atención á que en ellas figuran como sindicados dos altos funcionarios públicos: el Presidente de la República en 1883, y el Gobernador del Estado de Cundinamarca en la misma época. Respecto del primero, no hay duda de que no tenía objeto continuar la averiguación, pues es notoria la defunción del señor doctor Francisco Javier Zaldúa, á quien se atribuye, en parte, el haber ordenado el reclutamiento, y es aplicable el artículo 67 del Código Penal nacional. En cuanto al Gobernador de Cundinamarca, el infrascrito reproduce aquí la parte conducente de la vista del Procurador general de la Nación, que corre publicada en el número 5,084 del *Diario Oficial*, correspondiente al 17 de Agosto de 1883, en un asunto análogo al que nos ocupa, y en el cual la Corte Suprema Federal, con fecha 19 de Julio del año últimamente citado, dictó auto de sobreseimiento en favor del Gobernador del Estado de Boyacá, contra quien se había dado un denuncio por reclutamientos que tuvieron lugar en dicho Estado.

Reproduciendo las razones aducidas en la vista y en la sentencia citadas, os pido que ordenéis que se suspenda el procedimiento.

Bogotá, 13 de Diciembre de 1886.

FRANCISCO A. FERNÁNDEZ.

Señores Magistrados.

Después de la vista de este Ministerio de fecha 25 de Octubre último, sobre la competencia afirmativa suscitada entre el Juez Superior del Circuito de Ocaña y el Comandante del medio Batallón *Quintero Calderón*, en el Departamento de Santander, ha venido á la Corte para mejor esclarecimiento del asunto el proceso instruído contra el Teniente Eladio Bermúdez, por el delito de desobediencia, definido en el artículo 1,627 del Código Militar nacional. Este expediente tiene íntima relación con el levantado por el Juez mencionado, para averiguar si se había cometido el delito común de heridas, perpetrado en las personas de Francisco Mendoza y Alberto Ibáñez, y si el soldado Heliodoro Gamarra era el responsable. De los nuevos autos remitidos á la Corte, resulta de la declaración del mismo Gamarra y de un número prural de testigos, que efectivamente éste fué el autor de las heridas causadas á Mendoza é Ibáñez, y se refieren los hechos del modo siguiente:

El día 29 de Junio de 1886, se suscitó una disputa entre los dos Tenientes Eladio Bermúdez y Everardo de J. Lázaro, con motivo de una orden superior comunicada por éste á aquél, disputa que terminó yéndose á las manos los dos contendores, cayendo ambos al suelo.

El soldado Gamarra, armado de remington, era escolta de Lázaro para obligar á Bermúdez á cumplir la orden que tenía comisión de trasmitir.

Al trabarse la lucha entre Bermúdez y Lázaro, un grupo de paisanos se acercó á ellos, con el fin probablemente de separarlos, pero Gamarra les intimó que no debían tomar parte alguna en aquella desavenencia ocurrida exclusivamente entre militares.

Julio Alvarez (fojas 11 vuelta y 12 frente) vió dos individuos, uno llamado Francisco y otro que no conoció, que "se botaron al grupo que formaban los dos militares, y Gamarra les ordenó que se separaran de allí, pues era asunto de militares, y entonces se abocaron á éste y trataron de cogerlo ó desarmarlo, por cuyo motivo Gamarra sacó una cápsula, cargó el rifle y les hizo fuego, quedando heridos con un solo tiro el citado Francisco y su compañero." Las declaraciones de Francisco Clavijo (fojas 12 á 13), Aníbal Noguera P. (foja 29), y Manuel de F. Gutiérrez (fojas 27 á 28), confirman la anterior.

No hay duda, pues, de que el hecho imputable á Gamarra fué ejecutado en asuntos del servicio militar, y el delito que se averi-

gua, caso de haberlo, corresponde al fuero militar (artículo 1,365 del Código de la materia).

Pero se observa que el Jefe militar que provocó la competencia no ha instruído sumario especial para averiguar la responsabilidad de Gamarra, y las declaraciones citadas apenas figuran como incidentes del juicio militar seguido al Teniente Bermúdez por el delito de desobediencia. Ni en el auto de enjuiciamiento ni en la sentencia condenatoria que termina el juicio, se menciona el nombre de Gamarra, y sólo se hace referencia de él en una exposición fiscal en que se pide se le declare exento de toda responsabilidad.

Por consiguiente, este Ministerio es de concepto que al declarar la Corte que el Juez competente en el asunto de que se habla, es el Comandante del medio Batallón *Quintero Calderón*, ordene al mismo tiempo que se saque copia de lo conducente de la causa seguida al Teniente Bermúdez, para hacer parte del sumario que se instruya por separado contra Gamarra, debiendo ratificarse los testigos en el nuevo sumario.

Bogotá 13 de Enero de 1887.

FRANCISCO A. FERNÁNDEZ.

DOCUMENTOS VARIOS JUDICIALES.

Tribunal Superior del Distrito Judicial del Departamento de Cundinamarca—Bogotá, Marzo veintiséis de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Examinado este expediente nos da los siguientes resultados:

1.° Es auto cabeza de este proceso el que se dictó el seis de Abril del año próximo anterior por el Prefecto del Departamento de Chocontá, en el cual, después de manifestar el modo como llegó á su noticia la existencia del delito de circulación de documentos falsos de crédito nacional, ó sea de billetes del Banco Nacional, ordena la práctica de varias diligencias conducentes al descubrimiento del delito y de sus responsables.

2.° En investigación de tal hecho el funcionario de instrucción recibió los testimonios de Ezequiel León y Moisés Herrera, Jefe de la fuerza armada que existía en Agua-Larga al tiempo de verificarse la averiguación del delito, y quien practicó la ronda en la casa de la familia Medellín, de cuya ronda y sus resultados se tratará especialmente. También declararon Francisco de P. Castro, Mateo Hoyos y Pío Herrera, deponiendo indagatoriamente los individuos Cerbeleón, Adelaida y Ernestina Medellín, quienes confesaron los hechos y la responsabilidad que en el hecho criminoso correspondía á cada cual.

3.° Los peritos nombrados expusieron su concepto en los términos que expresa la siguiente diligencia: "Presentes los señores Aristides León y Julio Piñeros, peritos nombrados para reconocer los billetes, fragmentos de éstos, las cartulinas y demás útiles que fueron aprehendidos como cuerpo del delito, dijeron; "bajo el juramento que hemos prestado, y teniendo de presente todos los útiles que, como base del delito, y hechó la correspondiente comparación de los cuatro billetes concluídos y cinco sin acabar, con un billete legítimo de los del Banco Nacional; resulta que entre éstos y aquéllos hay una diferencia enorme, tanto en los signos, caracteres y papel que los forman, siendo aquéllos hechos con pluma y á pulso, y éste en litografía, y por consiguiente, son falsos los primeros. Las tres cartulinas, una de zinc y las otras de cartón, con el número veinte en el centro, son ó debieron ser las que sirvieron al falsificador de billetes para poner dicho número en éstos. Esto es lo que podemos declarar según nuestro leal saber y entender; en cuanto á la caja de colores y la pluma, bien pudiera servir para la preparación de los billetes.

"Esta es la verdad en fuerza del juramento que prestamos." En constancia firman con el Secretario por ante mí de quedoy fé.

Jesús Cándido Torres—Aristides León—Julio Piñeros B.—Luciano Tobar, Secretario.

4.° Habiendo pasando el sumario al Juez del Circuíto de Chocontá, por ser el competente, éste lo pasó en vista al señor Fiscal, quien prolija y exactamente relata los hechos del sumario, solicitando, en consecuencia, el llamamiento á juicio de Cerbeleón y Adelaida Medellín, por infracción de les artículos 267 y 268 del Código Penal, y que se sobreeseyera en favor de Herminia del mismo apellido.

5.° El Juez dictó el auto de proceder, en veintinueve de Abril de mil ochocientos ochenta y seis, llamando á juicio criminal á Cerbeleón Medellín, como autor principal de los delitos de falsificación y circulación de billetes del Banco Nacional, y contra Adelaida Medellín como encubridora de los mismos delitos; y sobreseyó á favor de Ernestina Medellín.

Notificado este auto al Agente Fiscal, á los procesados y á sus defensores, y no habiéndose interpuesto recurso alguno, la causa siguió su curso legal, debiendo sí hacerse mención de las pruebas aducidas por los defensores de los procesados, en el término común.—Estas pruebas son todas testimoniales y tienen por objeto demostrar: 1.° Que José del Carmen Martín y Salustiano Moreno saben leer y escribir y que distinguen lo bueno de lo malo, y lo verdadero de lo falso etc.; 2.° Probar que desde el entrosuelo de la Casa Consistorial, y estando en un corredor interior, no se puede distinguir lo que pasa ó sucede en el interior de la casa del señor Pedro Medellín, afirmando que el solar está cercado etc.; 3.° Probar que Cerbeleón Medellín es un hombre honrado, de ocupaciones y trabajo, de costumbres puras, etc.; 4.° Varios otros testigos afirman creencias semejantes para determinar la incapacidad de la señora Medellín en la perpetración del delito. Se pidió también la ratificación del testigo Ezequiel León, y no se recibió su testimonio, porque el Juez devolvió el despacho informando que no había podido ser hallado; y 5.° Citadas las partes para sentencia, y presentados en el día de la audiencia los extensos alegatos de los defensores y el del señor Fiscal, el Juez dictó la sentencia absolutoria de fecha veintidós de Julio del año próximo pasado; y, habiéndose interpuesto contra ella por el señor Fiscal el recurso de apelación, se remitió el expediente á la Suprema Corte de Justicia, en donde se surtió la tramitación de la segunda instancia; y estando para fallar este juicio, dicha Suprema Corte dictó auto, remitiendo este proceso á este Tribunal Superior del Distrito Judicial, por corresponderle, á virtud de lo dispuesto en los artículos 21 y 99 de la ley 61 de 1886, sobre organización del Poder Judicial; y una vez recibido el expediente, citadas las partes para sentencia y oídas éstas en los estrados del Tribunal, se pasa á resolver.

Considerando: Base de todo procedimiento es la existencia del hecho punible; y por cuerpo del delito se entiende el mismo hecho criminoso y punible por las leyes (artículo 1,427 del Código Judicial nacional). A conocimiento del Prefecto de la Provincia de Chocontá llegó el hecho indicante accesorio de existir billetes falsos que imitaban los del Banco Nacional de veinte centavos (0,20 cvs.); y para hacer la investigación correspondiente inició esta actuación, la cual dió por resultado el auto del Juez del Circuíto llamando á juicio á los que resultaron responsables del hecho punible.

Es indudable que para llamar á juicio ó dictar auto de proceder, debe estar plenamente comprobada la existencia del delito (artículo 1,542 del Código Penal). El sumario, como dice el artículo 1,421 del Código yá citado, no es otra cosa que la reunión de todas las diligencias propias para comprobar el cuerpo del delito y descubrir los delincuentes ó culpables. Estas diligencias, según las circunstancias, pueden estar más ó menos bien practicadas, cuando en su ejecución se han observado, ó nó, las disposiciones legales sobre la materia, y según que el funcionario de instrucción tenga ó nó un buen criterio jurídico é investigador para llenar el objeto del procedimiento criminal, que es, como claramente lo explica el artículo 1,413 del Código citado, investigar los delitos, descubrir y castigar á los delincuentes, y dar seguridad á la sociedad por este lado de la administración pública. Sentados estos antecedentes, es forzoso concluír que aun cuando en el sumario no se hayan observado estrictamente, por el funcionario de instrucción, todas las prescripciones legales establecidas para cada diligencia en particular, no por eso debe desecharse ninguna de ellas como inútil ó sin valor, á no ser que sea contraria expresamente á la Constitución ó la ley.

La falta de cumplimiento á determinadas prescripciones legales hace responsable al funcionario que falta á su deber, pero no vicia de nulidad el acto, á no ser que así se disponga expresamente en la misma ley; así pues, el Juez está, en todo caso, en la necesidad de apreciar las pruebas del sumario, y las del plenario deben venir á corroborar ó desvanecer aquéllas.

Considerando: Fúndase la sentencia absolutoria que ha sido apelada, en la consideración que hace el Juez de la causa de no encontrarse en los autos la comprobación plena de la cul

pabilidad de los sindicados, pues dice que: "aunque en los juicios criminales las pruebas pueden apoyarse en la libre y espontánea confesión del procesado (artículo 1,565 del Código Penal), en el presente caso la que dieron los sindicados Cerbeleón y Adelaida Medellín, por haberse recibido en el sumario como indagatoria, no puede estimarse como prueba, pues sólo la confesión del plenario es la que reconoce el artículo 1,439 como plena prueba." Este concepto es enteramente errado, por ser contrario á la letra y al espíritu de la ley. El artículo 1,574 del Código tántas veces citado, al tratar de las pruebas, y especialmente de la confesión, dice expresamente: "La confesión libre y espontánea hecha por el procesado en presencia del Juez ó del funciomario de instrucción y por ante el Secretario, hace plena prueba contra él, y es por sí sola bastante para comprobar, siempre que por otra parte esté suficientemente comprobado el cuerpo del delito." Este artículo está consignado en el capítulo IV del título VII del libro III del precitado Código, y es posterior al artículo 1,558, que se halla en el capítulo inmediatamente anterior de los mismos Título, Libro y Código, y según esto, y lo que á este respecto se manda observar en el artículo 30 del Código Civil, la disposición posterior debe prevalecer sobre la anterior; pero esto es cuando se note oposición ó contradicción en las disposiciones; pues en el presente caso y con relación á los artículos citados, ninguna contradicción ó antagonismo se encuentra, y, antes por el contrario, ellas convergen á un mismo fin, que es la recta administración de justicia.

Por otra parte, la confesión es el hecho propio del individuo, y este hecho puede tener lugar, ó ante el Juez de la causa, ó ante el funcionario de instrucción, ó ante personas distintas: en cada uno de estos casos la distingue expresamente la ley y le señala el grado probatorio que hemos visto. Queda, pues, demostrado que la confesión, que se hace, bien sea en el sumario ó en el juicio plenario, tiene la fuerza de plena prueba y puede fundar un fallo condenatorio, siempre que se llene la condición que requiere el artículo 1,574 que se deja copiado. Fácilmente se comprende que sería un absurdo el de la ley, si estableciera que sólo la confesión que se recibe al procesado después de dictado el auto en que se llama á juicio debiera valer, y nó la que se recibe en el juicio indagatorio.

Es claro que en esta confesión yá el procesado está al corriente de todo el sumario, así es que puede ó nó contestar; medita y estudia su respuesta, la combina, la consulta con su defensor y abogado, etc. En esta otra, por el contrario, debe responder sin antecedente ni preparación alguna, y para esto debe tener en cuenta únicamente los hechos y sus recuerdos, sabiendo, además, que sus afirmaciones ván, en la mayor parte de los casos, á ser comprobadas. Merece, pues, más confianza la confesión que se hace en el sumario que la que se recibe en el plenario, quedando así demostrado que el fundamento de la sentencia es inaceptable, como se ha dicho, por contrario á la letra y al espíritu de la ley.

Considerando: La estimación que han hecho los defensores de las pruebas del sumario, con relación al cuerpo del delito, y el estimar esta comprobación en extremo necesaria, por ser la base de todo procedimiento, hace preciso un análisis más detenido á este respecto. Para un buen procedimiento y según la naturaleza del delito que deba investigarse, trae el Título 5.° del libro 3.° del Código de la materia, varias reglas de investigación, las cuales deben ser observadas, según el hecho que se trata de probar. El cuerpo del delito, dice el artículo 1428, se comprueba con el prólijo examen que se haga por facultativos ó peritos de las huellas, rastros ó señales que haya dejado el hecho, y con las deposiciones de los testigos que hayan visto ó sepan de otro modo la perpetración del mismo hecho, ó con indicios necesarios ó vehementes que produzcan el pleno convencimiento de dicha perpetración." En el caso en que se ocupa el Tribunal hay rastros, huellas y señales del hecho criminoso; sobre tales circunstancias hay prueba testimonial, y prueba de confesión, prueba pericial y prueba de indicios, y todas ellas concurren á demostrar la existencia del delito. Veámoslo: en primer lugar, la existencia de los billetes falsos que fueron tomados, hace presumir necesariamente el hecho de falsificar; en segundo lugar, el haberse encontrado los restos y señales del hecho punible, tales como las cartulinas, los colores, los billetes yá empezados, los papeles preparados etc. etc. todo esto demustra también la existencia del delito; en tercer lugar, los peritos, con más ó menos conocimiento y contra cuyo testimonio ó dictamen nada se ha comprobado, conjeturan y dictaminan la existencia del hecho punible, es decir, demuestran que ha habido falsificación; en cuarto lugar, los sindicados confiesan el hecho franca y categóricamente, dando aún explicaciones más ó menos exactas, sobre los distintos objetos que en su casa y aún en su persona fueron encontrados, debido quizá esto á la actividad que empleó el Jefe de la fuerza en la práctica de la ronda que le fué encomendada por el funcionario de instrucción; en quinto lugar, hay declaraciones de testigos que relatan hechos referentes todos á la comprobación del delito, y, finalmente, los indicios necesarios y vehementes forman también una plena prueba tanto del cuerpo del delito como de sus responsables; y como estas son las únicas dos circunstancias que se necesitan para dar un fallo condenatorio (artículo 1570 de id.), forzoso es concluír que en el presente proceso tales circunstancias existen.

Considerando: Lo antedicho demuestra, á no dejar duda alguna, que se cometió el delito de falsicación de documentos de crédito nacional de que tratan los artículos 267 y 268 del Código Penal nacional, y que Cerbeleón Medellín es responsable como autor principal de tal hecho, según su propia confesión. Las pruebas que se adujeron en el plenario, referentes á su ignorancia en materia de dibujo, no pueden estimarse según el artículo 1,595 del Código Penal, pues en ellas se afirma un hecho negativo que en manera alguna puede destruír la culpabilidad de los sindicados. Los otros testimonios pueden estimarse únicamente para la graduación del delito y aplicación de la pena, pero en ningún caso pueden servir para destruír ni laculpabilidad de los sindicados, ni mucho menos la comprobación del delito.

Considerando: Según los antecedentes que hasta aquí quedan sentados era natural que el fallo del Tribunal fuera en el sentido de revocar la sentencia de primera instancia y hacer aplicación de la pena; pero en el presente caso es necesario atender á la disposición contenida en el artículo 1,630 del Código Penal de la Nación, que dice: "La sentencia no podrá recaer, sino sobre los cargos porque se ha declarado con lugar á seguimiento de causa." Y en el presente auto no se hizo el llamamiento á juicio como se previene en el artículo 1,542, es decir, por el cargo en general y sin hacer mención del artículo penal infringido, sino que, por el contrario, el Juez procediendo contra esta expresa disposición, declaró infringidos los artículos 269 y 270 del Código Penal nacional; y como ya hemos visto que con el hecho de que tratan estas diligencias no fueron los artículos porque se llamó á juicio los infringidos sino los dos inmediatamente anteriores, pues los documentos de crédito falsificados, están á cargo de la Nación y circulan legalmente en Colombia bajo la garantía del Gobierno; por consiguiente el Tribunal no puede condenar á los procesados por un artículo distinto del verdaderamente infringido; y en este caso, aunque responsable el Juez, el Tribunal se ve en la necesidad legal de absolver á los procesados por ordenarlo asi el artículo que queda copiado.

Por lo expuesto, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, el Tribunal confirma la sentencia absolutoria, materia de esta apelación, pero ordena sacar copia de lo conducente, para que se exija la responsabilidad al Juez por la infracción de la ley.

Notifíquese y cópiese esta sentencia, como lo previene la ley, y hecho lo que queda ordenado, devuélvase el expediente al Juzgado de su origen.

Federico R. Rodríguez—Ricardo Bonilla—Flavio González Malo.—Gabriel Rosas, Secretario en propiedad.

Tribunal Superior del Distrito Judicialdel Departamento de Cundinamarca.—Bogotá, Marzo treinta y uno de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos.—Resultando. 1.° Rafael Ostán de Lafont, enjuicido criminalmente por mala administración de la Hacienda Nacional, fué condenado por el Juez 6.° del Circuíto de Bogotá, en la sentencia que profirió en veinticinco de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis, á sufrir la pena de cuatro años seis meess de reclusión penitenciaria, al pago de una multa equivalente á la quinta parte de la suma malversada, y á las penas accesorias de que trata el artículo 29 del Código Penal.

2.° Interpuesto el recurso de apelación por el encausado, los datos subieron á la Corte Suprema de Justicia, por deber sustanciarse allí el recurso de conformidad, con lo preceptuado en la

legislación vigente á tiempo de la alzada.

3.° A solicitud de ambas partes, la causa se abrió á prueba, y durante el plenario se practicaron las que fueron pedidas tanto en el interés del procesado, como de los derechos del Tesoro.

4.° La Corte Suprema, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 21 y 99 de la ley 61 de 1886, que organiza el Poder Judicial, se declaró, por resolución de diez y nueve de Enero último, incompetente para continuar conociendo del asunto, y ordenó la remisión del proceso á este Tribunal Superior, donde la apelación debía surtirse; y

5.° Venidos los autos, se ha dado á la causa la tramitación que la ley establece, y oídas las partes en los Estrados del Tribunal, es llegado el caso de dictar sentencia definitva, de acuerdo con lo alegado y probado, y con aplicación jurídica de las disposiciones legales que tienen relación con el hecho punible que es objeto del juicio.

Considerando: 1.° La ley 39 de 1880 "por la cual se conceden varias autorizaciones al Poder Ejecutivo, para fundar en la Capital de la Unión un Banco Nacional," determina desde el artículo 1.° el objeto de su establecimiento, que es el de que "promoviendo el desarrollo del Crédito público, sirva, al propio tiempo, de agente ó auxiliar para la ejecución de operaciones fiscales;" y los decretos dictados con posterioridad en ejecución de la misma ley, corroboran el pensamiento del Legislador, de hacer del Banco Nacional una institución puramente fiscal, y en este carácter no puede sustraérsele de las leyes que rigen la administración y manejo de los caudales públicos;

2.° Es doctrina legal que establece el artículo 1,237 del Código Fiscal, que todos los empleados ó individuos particulares que por cualquier motivo recauden, inviertan ó administren bajo su responsabilidad fondos de la Nación, reciben el nombre genérico de *Responsables del Erario*;

3.° Rafael Ostán de Lafont desempeñaba el destino de Cajero del Banco Nacional, cuando de los fondos de su manejo desapareció una suma de treinta y seis mil ciento cincuenta y nueve pesos, cuarenta y cinco centavos, hechas algunas deducciones ó descargos;

4.° Este desfalco subsiste, y no se ha probado que la pérdida ó extravío de la cantidad hallada de menos se deba á caso fortuito ó provenga de alguna otra causa que exima á Lafont de responsabilidad. Se ha apelado al efugio de atribuír esa pérdida á error de cuenta; pero ello es que el examen diligente que se hizo con el fin de evidenciar ese error, no ha dado tal resultado. De consiguiente, la responsabilidad deducida contra el encausado por la sentencia materia del recurso, es manifiesta. Ahora bien: esta es la responsabilidad criminal exigible por el Poder Judicial, por delitos cometidos por infracción del Código Penal, á la cual hace alución el artículo 2,000 del precitado Código Fiscal y á que se contrae el 1,733 del Código Judicial; responsabilidad que es distinta de la que se hace efectiva á los responsables del Erario como enteramente pecuniaria ó civil.

5.° En la responsabilidad penal á que se hallan sometidos los empleados públicos ó individuos particulares que administren, recauden ó de cualquier modo manejen fondos pertenecientes á la Hacienda nacional, se incurre por el hecho mismo de no dar cuenta ellos de su manejo, sin que puedan sustraerse de la acción criminal, toda vez que hay hechos cuya comisión los hace justiciables, pues las obligaciones contraídas con semejante carácter, colocan al obligado bajo el resorte de las disposiciones penales, que sirven de guarda á los intereses fiscales, por la responsabilidad que aparejan los delitos ó culpas que la misma ley establece y castiga;

6.° La existencia del cuerpo del delito, que es el fundamento de todo juicio criminal, por el cual se entiende que un hecho es criminoso y punible según las leyes (artículo 1,427 del Código Judicial), se halla plenamente probada en la causa, por el testimonio contexte de los señores Rafael Arias y Benigno Guarnizo, empleados del mismo Banco, por la exposición del Gerente, y por la confesión libre y espontánea del encausado, rendida en distintas ocasiones en presencia del Juez y ante el Secretario, yá como funcionario de instrucción, ya como Juez de la causa, confesión á que el artículo 1,574 del Código Judicial da la fuerza de plena prueba, y que no ha sido destruída ni desvirtuada en manera alguna, porque aunque el confesante agregó circunstancias que pudieran modificarla, esas circunstancias no le excusan ni fueron probadas, y de consiguiente dicha confesión conserva toda su fuerza probatoria, en virtud de lo estatuído en el artículo 1,578 del mismo Código Judicial;

7.° Con el fin de dar puntual cumplimiento al artículo 1,535 del Código Judicial, y de proporcionar al procesado todos lo medios legales para que pudiera ejercitar libremente el derecho de defensa, pusiéronse á su disposición las cuentas del Banco, y del examen que de ellas hizo no le fué posible descubrir ningun error que lo exonere del cargo. Además, Comisiones plurales hicieron en la Tesorería general examen pericial de las cuentas relacionadas con las operaciones ejecutadas con el Banco, el cual no dió resultado alguno en favor del encausado, y antes bien, los últimos peritos nombrados por las partes en la Corte Suprema de Justicia, aseveran que el error notado por los peritos de la primera instancia, en Abril de mil ochocientos ochenta y seis, refiriéndose á las cuentas de la Tesorería y del Banco Nacional, no tiene fundamento; pues así se desprende del examen detenido que han verificado, y si así no pudo deducirse entonces, dicen, fué seguramente porque aquellos peritos tuvieron que suspender su examen por los motivos anotados en su informe oficial;

8.° Si el procesado Rafael Ostán de Lafont, en su carácter de Cajero del Banco Nacional, recibió la suma que se ha mencionado y no dá de ésta cuenta satisfactoria, y antes bien, agotados todos los medios de investigación, resulta que el desfalco del Banco es efectivo, ¿quién, si nó él, debe ser el responsable directo é inmediato? Esta responsabilidad es tanto más clara, cuanto que el procesado mismo reconoce la falta de los fondos y no puede atribuírla sino á error en las cuentas, error que no ha sido descubierto á pesar, se ha dicho, del examen pericial que se hizo, tanto de las que se llevan en el Banco, como en la Tesorería general, y el encausado no puede exonerarse de la responsabilidad de aquella pérdida porque él dice en su confesión (foja 17 vuelta del cuaderno principal). "Nadie me ha robado el dinero; yo tampoco me lo he cogido, ni le he dado ninguna inversión extraña á la de su objeto; y creo que la falta indudablemente proviene de un error cometido en las operaciones del mismo Banco y la Tesorería general, que son los que giran par cantidades fuertes. Este error puede hallarse, estudiando las operaciones hechas en el curso del año, pues puede habérseme dejado de entregar el documento ó comprobante respectivo."

Si tan claramente se hallan establecidos los hechos en el proceso, y si las circunstancias de esta confesión cualificada no se hallan probadas, síguese que no hay medio alguno que exima al encausado de la responsabilidad criminal que la ley, los decretos ejecutivos y los estatutos del mismo Banco echan sobre el por el fraude y la malversación de la suma que él recibió y de que no ha dado cuenta ni razón que justifique ó excuse su falta;

9.° La Hacienda pública no ha sido cubierta en lo mínimo de la cantidad malversada, y la disposición penal que sirve de fundamento á la sentencia de primera instancia, artículo 344 del Código Penal, en su segunda parte, dice: "si la Hacienda pública no se cubriere por lo menos de las dos terceras partes de la cantidad malversada, además de pagar la multa, serán inhabilitados por ocho años para obtener empleo ó cargo público, y condenados á presidio por tres á seis años;

10. El señor Juez *a quo* halla equilibradas las circunstancias atenuantes y las agravantes que resultan de autos, y por ello calificó la culpabilidad del enjuiciado en segundo grado y le aplicó, en consecuencia, una pena igual á la mitad entre el máximo y el mínimo, á la que corresponde precisamente la de cuatro años, seis meses de presidio.

11. La sentencia apelada recayó sobre los cargos por que se declaró con lugar á seguimiento de causa, según el artículo 1,630 del Código Judicial; y se han observado en el procedimiento las disposiciones adjetivas concordantes con el hecho que ha sido objeto del juicio.

Por último, las razones y fundamentos del fallo son, á juicio del Tribunal, estrictamente jurídicas, y encuentra, asimismo justa la calificación de la culpabilidad del enjuiciado, y pertinente la aplicación de la disposición legal infringida.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma en todas sus partes la sentencia apelada.

Notifíquese esta sentencia, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

Federico R. Rodríguez—Ricardo Bonilla—Flavio González Malo—Gabriel Rosas, Secretario en propiedad.

Año I REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 18

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 18 de Mayo de 1887.

CONTENIDO.

Pág.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CIVILES,

Sobre incompetencia de la Corte para mandar cambiar unas letras de cuartel..... 137
Sobre la revocatoria de un auto, pedida por el doctor Jesús María Arteaga..... "
Sobre una ejecución trabada en Medellín contra Fernando Restrepo é Hijos..... 138

NEGOCIOS CRIMINALES.

Sobre incompetencia de la Corte para conocer de un sumario..... 139
Sobre id. de la misma para id. id...,...,... "
Sobre id. de la id. para id. id...,...,... "
Sobre id. de la id. para id. id...,...,... "
Sobre id, de la id. para id. id...,...,.. 140
Sobre id. de la id, para id. id...,...,... "
Sobre id, de la id, para id, id...,...,... "
Sobre id, de la id, para id, id...,...,... "
Sobre id, de la id, para id, id...,...,... "
Sobre id, de la id, para id, id.....,... 141
Sobre id. de la id, para id, id...,...,... "
Sobre id, de la id, para id, id...,...,... "
Sobre id. de la id. para id, id...,...,... "
Sobre id. de la id, para id, id...,...,... "
Sobre id, de la id, para id, id...,...,... "
Sobre id. de la id, para id, id.. ,...,. . 142
Sobre id, de la id, para id, id...,...,... "
Sobre id, de la id, para id, id...,...,... "
Sobre id, de la id, para id. id...,...,... "
Sobre id. de la id, para id. id...,...,... "
Sobre id, de la id, para id, id...,...,... "
Sobre id, de la id, para id, id...,...,... "

VISTAS DEL PROCURADOR

Emitida en un sumario sobre alteración de billetes del Banco Nacional..... 147
Emitida en un sumario por responsabilidad..... 144

GACETA JUDICIAL.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, cuatro de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Vistos:—Por conducto de la casa comisionista, de esta ciudad, de "Camacho Roldán & Tamayo," ha ocurrido el Coronel José María Gutiérrez de Piñeres ante el Ministerio de Guerra y Marina, con el fin de que le sean cambiadas las letras de pensión que le fueron expedidas con fecha treinta de Abril de mil ochocientos ochenta, por otras nuevas que le den derecho á percibir el sueldo de General efectivo de Brigada, conforme al ascenso que le fué conferido por el Poder Ejecutivo en primero de Febrero del presente año.

Después de haber emitido concepto el Estado Mayor del Ejército, el señor Ministro de Guerra y Marina ha pasado los documentos á esta Suprema Corte, por considerar que á ella corresponde resolver la petición de que se ha hablado.

Entre las atribuciones que el Código Militar señala á la Corte Suprema, no se registra ninguna que la autorice para hacer el cambio de letras que solicita el Coronel Gutiérrez de Piñeres; y esta Corporación había dejado yá establecido el mismo principio, al ocuparse de la solicitud elevada al Poder Ejecutivo por el General Severo Rueda, con igual propósito.

Por lo tanto, la Corte Suprema Nacional se abstiene de resolver la petición en referencia, y dispone que los documentos sean devueltos al Ministerio de Guerra y Marina, para los fines á que haya lugar.

Notifíquese y cópiese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En nueve de Diciembre de mil ochocientos ochentá y seis, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

FERNÁNDEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veinticinco de Enero de mil ochocientos ochenta y siete.

Con fecha catorce de Enero de mil ochocientos ochenta y cuatro, dictó la Corte un auto declarando que no podía Jesús María Arteaga, como apoderado de Rita y Mercedes Mesa y Alejandro Arango, en este juicio, que se ha seguido por José María González contra la Nación, ratificar la actuación que se había declarado nula por auto de la misma Corte, de fecha siete de Octubre de mil ochocientos sesenta y ocho, por cuanto los poderdantes de Arteaga no habían comprobado que estaban en posesión de los bienes de la herencia de Mesa González, quien murió desde el año de mil ochocientos sesenta y siete.

Arteaga pidió oportunamente revocatoria del auto citado, de fecha catorce de Enero, y acompañó prueba sumaria de testigos sobre la posesión en que están sus poderdantes de los bienes de la expresada herencia.

Examinado el punto, cree la Corte que no debe acceder á la petición, por estos motivos:

1.° El apoderado Arteaga ha presentado pruebas de que Mesa González murió y dejó muchos otros parientes fuera de los que representa;

2.° Ha justificado que tres de esos herederos están en posesión de los bienes de la herencia;

3.° Según el artículo 1,297 del Código Civil de la Nación, disposición que también rige en el Departamento de Antioquia, "cuando haya dos ó más herederos, y aceptare uno de ellos, tendrá la administración de todos los bienes hereditarios proindiviso, previo inventario solemne, y aceptando sucesivamente sus coherederos, y suscribiendo el inventario, tomarán parte en la administración. Mientras no hayan aceptado todos, las facultades del heredero ó herederos que administren, serán las mismas de los curadores de la herencia yacente."

4.° El artículo 578 del mismo Código dispone: "Toca á los curadores de bienes el ejercicio de las acciones y defensas judiciales de sus respectivos representantes."

De suerte que, mientras no aparezca que todos los herederos de Mesa González hayan aceptado la herencia, los que han dado poder para gestionar en este juicio, por más que se pruebe que están en posesión de los bienes hereditarios, no pueden representar la herencia en este juicio, sin hacer inventario solemne, porque hasta entonces no pueden administrar los bienes de ella y ejercer las acciones y defensas judiciales que á esa heren cia competan.

El artículo 250 del Código Judicial dice que, mientras no haya constancia judicial de que los herederos están en posesión de la herencia, el representante de esta en juicio, lo será el albacea, y en defecto de éste, el curador ó defensor que deberá nombrar el Juez.

La constancia judicial de posesión que aquí se exige, no puede ser otra que la formación del inventario solemne cuando hay más de un heredero y acepta uno de ellos, como se dispone en el Código sustantivo, y si no lo fuera, debe prevalecer la disposición de este Código sobre la del Judicial, como lo prescribe el artículo 10 de aquel Código.

Por lo tanto, la Corte declara que no hay lugar á la revocatoria que se solicita.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintisiete de Enero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto que precede al señor Procurador general.

ARANGO M—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Febrero cinco de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—A virtud de órdenes de Su Señoría el Secretario del Tesoro, y del Tesorero general de la República, la primera de ellas telegráfica, el Administrador principal de Hacienda nacional de Medellín procedió, en diez y nueve de Octubre del año próximo pasado, á liquidar el importe total de varias acreencias causadas á favor del Tesoro nacional y á cargo de Fernando Restrepo é Hijos, del comercio de Medellín, por derechos de importación, y por cuanto dicho funcionario tenía noticia de que los rebeldes habían hecho efectivo en Barranquilla, en mil ochocientos ochenta y cinco, el importe de los derechos causados, haciendo á los apoderados ó comisionistas una rebaja del quince por ciento; y por cuanto la suma total de tales derechos ascendía á diez mil ochocientos cuarenta y nueve pesos sesenta centavos ($ 10,849-60), el citado Administrador de Hacienda dedujo en su liquidación, á cargo de los mencionados Restrepo é Hijos un saldo de mil setecientos veintisiete pesos cuarenta y cinco centavos ($ 1,727-45) igual al quince por ciento de la expresada suma total, como deuda pendiente á favor de la Nación.

Tomando dicha liquidación como base de procedimiento, y reputándola como documento que por sí sólo prestaba mérito ejecutivo, en uso de su jurisdicción coactiva libró, en la misma fecha citada, mandamiento ejecutivo contra dichos Fernando Restrepo é Hijos, por la mencionada suma de mil seiscientos veintisiete pesos cuarenta y cinco centavos, más treinta y dos pesos cincuenta centavos por intereses vencidos, á la rata del doce por ciento anual, sea un total de mil seiscientos cincuenta y nueve pesos noventa y cinco centavos ($ 1,659-95), sin perjuicio de los intereses que se causasen á deber durante el seguimiento del juicio.

Apelaron los interesados del auto ejecutivo, y, previos la consignación y el depósito de la suma cobrada, se concedió la apelación en el efecto devolutivo, para ante esta Superioridad; apelación que los ejecutados apoyaron con el alegato respectivo presentado ante el Juez y funcionario ejecutante. Sustanciado el recurso con vista emitida por el señor Procurador general, es el caso de que la Corte resuelva sobre la apelación; pero habiendo ocurrido dudas momentáneas sobre la competencia de la Corte para conocer del asunto, debe ante todo considerarse este punto.

Entre las atribuciones que el artículo 18, sección 2.ª del Código Judicial confería á la Corte Suprema para conocer en última instancia, se hallaban las siguientes:

"1.ª De todos los negocios contenciosos que se refieran á bienes, rentas ó cualesquiera otros derechos de la Hacienda de la Unión, y los cuales se hayan decidido en primera instancia por los Juzgados ó Tribunales de los Estados ó de los Territorios.

"5.ª De los autos interlocutorios en asuntos civiles y criminales que en primera instancia sean de competencia de los Jueces nacionales, por apelación ó consulta conforme á este Código, y de las apelaciones que se interpongan contra los mandamientos ejecutivos librados por los empleados nacionales de Hacienda en ejercicio de la jurisdicción coactiva de que estén investidos."

Estas disposiciones, así como todas las contenidas en los artículos 1.° á 69 inclusive del citado Código, han sido expresamente derogadas por el artículo 149 de la ley 61 (25 de Noviembre) de 1886 "Provisional sobre organización y atribuciones del Poder Judicial" etc.; y de esta derogación emanó la duda sobre la competencia que en la actualidad tuviese la Corte Suprema para conocer de la apelación que es materia del presente fallo.

Pero entre las atribuciones que el artículo 151 de la Constitución confiere á la Corte Suprema se halla la siguiente, que es muy explícita:

"3.ª Conocer de los negocios contenciosos en que tenga parte la Nación ó que constituyan litigio entre dos ó más Departamentos."

El artículo 21, sección 2.ª de la citada ley 61 de 1886, da á la Corte facultad de conocer en última instancia: "1.° De *todos los negocios contenciosos* que se refieran á bienes, rentas ó cualesquiera otros derechos de la Hacienda de la República y, los cuales se ayan decidido en primera instancia por los Juzgados de Circuito"; Juzgados á los cuales están asimilados, por los Códigos Judicial y Fiscal, los empleados de Hacienda que ejercen jurisdicción coactiva.

Y por último, el artículo 99 de la misma ley 61 estatuye en su primera modificación lo siguiente:

"Ninguna de las atribuciones asignadas á la Corte Suprema en la Constitución ó en esta ley, será ejercida por los Tribunales de Distrito, aun cuando conforme á la Legislación de alguno de los extinguidos Estados correspondiera ejercerla al Tribunal Superior del Estado."

Resta solamente averiguar si el asunto de que se trata es negocio contencioso, y, por lo mismo, si está sujeto á la jurisdicción de la Corte en última instancia.

Hay contienda ó negocio contencioso dondequiera que hay *juicio, causa ó pleito* establecido, expresiones que son sinónimas, conforme al artículo 190 del citado Código Judicial; y en el presente caso se trata de un juicio especial, ejecutivo, el cual comienza desde que se notifica al deudor el mandamiento de ejecución, según lo determina expresamente la reforma *trigésima* de las contenidas en la ley 46 (5 de Junio) de 1876.

No hay lugar, por lo tanto, á duda alguna sobre la competencia de la Corte para conocer de la apelación que se ha formalizado, y, en consecuencia, préviamente declara esta Superioridad que es competente para el conocimiento y decisión del negocio.

Pásase ahora á examinar si el documento en que se ha fundado la ejecución contra Fernando Restrepo é Hijos presta mérito ejecutivo, y si, por lo tanto, es ó nó justa la apelación que se ha promovido.

Es patente que la liquidación hecha por el Administrador de Hacienda de Medellín, en la cual se ha fundado el auto ejecutivo, no está en el caso de ninguno de los documentos que, conforme al artículo 925 del yá citado Código Judicial, prestan mérito ejecutivo; y no sólo no está en manera alguna reconocida la deuda por los ejecutados, sino que éstos la niegan en absoluto, y en el expediente no existe documento alguno comprobante de ella, emanado, yá de la respectiva Administración de Aduana, yá de la Tesorería general, ó de los ejecutados, ó de sus comisionistas ó apoderados residentes en Barranquilla.

Pero en lugar de un documento de esta clase, el artículo 1,007 del mismo Código, enumera otros que, en juicios de esta naturaleza, seguidos á virtud de ejecución trabada por un empleado de los que ejercen jurisdicción coativa, prestan mérito ejecutivo. De las tres clases de documentos que allí se enumran, sólo pudiera pensarse que tuviese aplicación la siguiente:

"2.° Las copias de los reconocimientos hechos por los Recaudadores á cargo de los deudores del Fisco por rentas ó contribuciones."

Para que el documento que ha servido de base á la ejecución tenga la fuerza probatoria necesaria, es preciso que sea copia del "reconocimiento (del crédito respectivo) hecho por el Recaudador," que naturalmente ha de serlo el del mismo crédito, según la ley; y en el presente caso, ni la copia que ha servido como

recaudo ejecutivo, es de un reconocimiento de crédito, sentado en los libros respectivos de recaudación de la renta de aduanas, ni el Administrador de Hacienda de Medellín, que hizo la liquidación, es Recaudador del ramo, de manera qué un asiento oficial hecho por él pueda prestar mérito ejecutivo. Conforme á las disposiciones fiscales vigentes, en materia de derechos de importación, á quien incumbe hacer los reconocimientos ó asientos respectivos de lo que se causa á deber á la renta de Aduanas es al Administrador de la Aduana por donde se hace la importación: él liquida los derechos causados y hace los asientos respectivos, en los libros de su oficina; asientos ó reconocimientos de créditos activos, cuyas copias prestan mérito ejecutivo conforme al citado artículo 1,007. Una vez hechos los reconocimientos, cabe la función del mismo Administrador como Recaudador. Si la suma á que montan los derechos causados es de menor cuantía en Aduanas, el Administrador la cobra íntegramente, al contado; si hay lugar á la concesión de plazo, por ser la suma de mayor cuantía, un tanto por ciento es pagado á la Aduana al contado, y por el resto se otorga pagaré á favor de la Nación ó se gira letra á cargo del introductor. Tanto los pagarés como las letras (cuando se trata de introductores del interior) son cobrados en Bogotá por el Tesorero general.

De aquí resulta que el Administrador de Hacienda no es Recaudador según sus funciones propias, de sumas pertenecientes á la renta de Aduanas. Los Recaudadores legales son los Administradores de las respectivas Aduanas que son los que asientan los "reconocimientos" de créditos, y por disposiciones legales ó del Gobierno, la Tesorería general verifica las cobranzas en Bogotá, á virtud de los pagarés otorgados que se le envian ó de las letras que á la orden del Tesoro giran los Administradores de Aduana respectivos. Sí, pues, no aparece liquidación ni "reconocimiento" hecho por el legítimo Recaudador, como base de la ejecución, es claro que el documento extendido con el nombre de "liquidación," por el Administrador de Hacienda de Medellín, no es de aquellos que legalmente prestan mérito ejecutivo.

El artículo 1,253 del Código Fiscal dice lo siguiente:

"Los Recaudadores de Hacienda tienen jurisdicción coactiva para el cobro de los créditos activos del Tesoro nacional que ellos mismos hayan reconocido ó que reconocidos por otros hayan sido encargados por éstos para exigirlos del respectivo deudor, según los reglamentos expedidos ó que expida el Poder Ejecutivo.

Ahora bien: que la liquidación hecha por el Administrador de Hacienda de Medellín no es un crédito activo reconocido por él mismo, es obvio, puesto que él no es Recaudador de la renta de Aduanas, ni pudo haber hecho los reconocimientos que seguramente se hicieron en Barranquilla cuando se liquidaron los derechos causados por las respectivas importaciones. Pero entonces ¿procedió dicho Administrador de Hacienda, á virtud de encargo ó comisión legal del respectivo Recaudador? Tampoco existen en autos los comprobantes de esto; ni hay copia del reconocimiento del crédito hecho por el Administrador de la Aduana de Barranquilla ni se ha agregado el auto ó nota oficial en que conste la comisión ó encargo dado por el respectivo Recaudador.

Verdad es que el funcionario ejecutante ha acompañado á la nota oficial remisoria de tres expedientes sobre idénticas ejecuciones contra los cuales se ha interpuesto apelación (y uno de ellos es el que sirve de materia al presente fallo) una copia de un telegrama y una nota de la Tesorería general y de la Secretaría del Tesoro, por medio de los cuales se le dió la orden de trabar las ejecuciones por los saldos que debieran varios comerciantes residentes en Medellín, motivados por la rebaja del quince por ciento que los revolucionarios hicieran á los comisionistas respectivos. Pero ni el Tesorero general acompañó á su orden el documento en que pudieran fundarse las ejecuciones, comprobante de los créditos, ni el Secretario del Tesoro es Recaudador de Hacienda que pueda dar comisión legal para cobrar créditos activos por él reconocidos, ni es admisible que una comisión legal para trabar una ejecución que obra en juicio pueda ser dada por medio de un simple telegrama, documento oficial, sin duda, pero que no tiene la autenticidad y requisitos de un exhorto ó despacho judicial.

De todo lo expuesto resulta demostrado que la liquidación en que se ha fundado el auto de ejecución librado por el Administrador de Hacienda de Medellín no se apoya en ningún legítimo comprobante del crédito, y no presta mérito ejecutivo.

A virtud de lo expuesto y de la opinión del señor Procurador general, del todo conforme, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el auto ó mandamiento ejecutivo apelado. Nada se dispone sobre costas, por cuanto se trata de una ejecución fiscal.

Notifíquese, déjese copia, publíquese en el periódico oficial y devuélvase el expediente.

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En ocho de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.* Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, trece de Enero de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Contra Enrique Baños se instruyó sumario por atribuírsele la tentativa de hurto de un poco de sal de la Salina de Sesquilé.

El Juez 2.° del Circuito de Zipaquirá ha sobreseído en el asunto y consulta dicho auto con esta Superioridad.

La Corte no se considera competente para ocuparse de la referida consulta, y por tanto se abstiene de emitir fallo alguno y dispone que el expediente se pase al Tribunal Superior del Departamento de Cundinamarca, dando aviso al Juez de la primera instancia.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Antonio Morales—Ramón Guerra A., Secretario.

En diezisiete de Enero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintiuno de Enero de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Juez 6.° del Circuito de Bogotá, consulta con esta Superioridad el auto de sobreseimiento proferido en el sumario instruído contra Eugenio Urdaneta, por el delito de falsificación de moneda nacional.

Expedida la ley 61 de 1886, sobre organización y atribuciones del Poder judicial, la Corte ha dejado de ser competente para conocer en 2.ª instancia, de esta clase de asuntos; y por lo tanto, esta Corporación se abstiene de conocer de la referida consulta, y dispone que el proceso sea remitido al Tribunal Superior del Departamento de Cundinamarca, por ser el competente, y que se dé aviso al Juez 6.° del Circuito de Bogotá.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

José M. Samper.—Manuel J. Angarita.—Julián R. Cock Bayer.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Benjamín Noguera.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintidós de Enero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto que precede al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintidós de Enero de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Juez del Circuito de Manizales ha remitido á esta Superioridad, en apelación, la sentencia que profirió en seis de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis, por la cual condena á César Corrales á la pena de reclusión, por el delito de

falsificación de moneda de níkel; pero careciendo la Corte de jurisdicción para conocer de este asunto, en virtud de lo dispuesto en los artículos 21 y 99 de la ley 61 de 1886, orgánica del Poder Judicial, se ordena la remisión del proceso al Tribunal del Distrito Judicial de Antioquia, para los efectos legales.

Dése conocimiento de esta resolución al mencionado Juez de Circuíto.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintitres de Enero de mil ochocientos ochenta y siete notifiqué el auto que precede al señor Procurador general.

ARANGO—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Enero veintidós de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Ante el Jefe Municipal de Manizales, en el extinguido Estado de Antioquia, se inició el presente sumario, para averiguar el delito de circulación de moneda falsa, del cual resultó sindicado Enrique Manrique.

Practicadas todas las diligencias que se creyeron necesarias, el Juez del Circuíto de Manizales dictó auto de sobreseimiento, el cual ha consultado con esta Suprema Corte.

Conforme á los artículos 21 y 99 de la ley 61 de 1886, sobre organización del Poder Judicial, son los respectivos Tribunales de Distrito los competentes para conocer de asuntos como el presente.

En consecuencia, esta Corporación se abstiene de considerar la consulta que se ha elevado, y resuelve que el proceso sea enviado al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, para lo de su cargo, dándose aviso al Juez del Circuíto de Manizales.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

José M. Samper—Manuel J. Angarita.—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintitres de Enero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Enero veinticuatro de mil ochocientos ochenta y siete.

En las presentes diligencias sumarias, practicadas en averiguación de la responsabilidad en que haya incurrido el Juez del Circuíto de Manizales, Ignacio Londoño P., por demoras, esta Superioridad ha dejado de ser competente para conocer, á virtud de lo dispuesto en los artículos 21 y 99 de la ley 61 de 1886, orgánica del Poder Judicial, y en consecuencia se ordena remitir el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia para los efectos legales.

Dése conocimiento de esta resolución al Juez del expresado Circuíto.

Notifíquese, cópiese y pulbíquese.

José M. Samper.—Manuel J. Angarita.—Julián R. Cock Bayer.—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintisiete de Enero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador

ARANGO M.—*Guerra A.* Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinticuatro de Enero de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—De conformidad con los artículos 21 y 99 de la ley 61 de mil ochocientos ochenta y seis, orgánica del Poder Judicial, la Corte Suprema es incompetente para conocer del auto de 4 de Diciembre del año próximo pasado, remitido á esta Superioridad en consulta, por el cual, el Juez 1.°, del Circuíto de Medellín, declaró terminado el procedimiento en el sumario instruído para averiguar la responsabilidad en que hayan podido incurrir el Alcalde de la ciudad de Medellín y el Prefecto del Departamento del Centro, por la expropiación de unas caballerías.

En consecuencia, se ordena remitir el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, para los efectos legales.

Hágase saber esta resolución al señor Juez 1.°, en lo criminal, del Circuíto de Medellín.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintisiete de Enero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto que precede al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veinticuatro de Enero de mil ochocientos ochenta y siete.

Esta Superioridad carece de jurisdicción para conocer en la consulta del auto de sobreseimiento que dictó el Juez 6.° del Circuíto de Bogotá, en el sumario instruído para averiguar si Teodoro Zamudio borró unos sellos puestos en varios billetes del Banco Nacional. La Corte carece de Jurisdición, como queda dicho, á virtud de lo dispuesto en los artículos 21 y 99 de la ley 61 de 1886, orgánica del Poder Judicial.

En consecuencia, se ordena la remisión de este expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala de lo criminal.

Hágase saber este auto al expresado señor Juez 6.° del Circuíto de Bogotá.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A, Secretario.

En veintisete de Enero de mil ochocientos ochenta y siete notifiqué el auto anterior al señor Procurador general,

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veinticuatro de Enero de mil ochocientos ochenta y siete.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 99 de la ley 61, orgánica del Poder Judicial, esta Superioridad carece de jurisdicción para conocer de la denuncia dada por José Trinidad Moreno contra el Juez 5.° del Circuíto de Bogotá, Doctor Federico R. Rodríguez, por no haber cumplido una requisitoria librada por el Juez del Territorio nacional de Casanare para la captura de dos individuos.

En consecuencia, remítase el proceso á la Sala de lo criminal del Tribunal del Distrito Judicial de Cundinamarca, para los efectos legales.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha.—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A. Secretario

En veintisiete de Enero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto que precede al señor Procurador.

ARANGO M. *Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintiséis de Enero de mil ochocientos ochenta y siete.

Las presentes diligencias han tenido por base un denuncio

elevado á la Corte por varios vecinos del Distrito de La Palma, contra el Juez de dicho Distrito, por haber recibido varias declaraciones sin tener realmente el carácter de Juez.

Esta Corporación ordenó la investigación respectiva, por ser funcionario de instrucción, según el artículo 1,422 del Código Judicial; pero como el conocimiento de este asunto corresponde al Juzgado del Circuíto de Guaduas, en el Departamento de Cundinamarca, remítase el proceso á dicho empleado, para lo de su cargo.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

José M. Samper.—Manuel J. Angarita.—Julián R. Cock Bayer. — Froilán Largacha. — Antonio Morales.—Benjamín Noguera.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A. Secretario.

En veintisiete de Enero de mil ochocientos ochenta y siete notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintiséis de Enero de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Conforme á lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 61 de 1886, corresponde hoy á los Jueces de Circuíto el conocimiento en primera instancia de las causas criminales por delitos comunes que, de acuerdo con el inciso 5.° del artículo 62 del Código Judicial de la República, correspondían á los Jueces Nacionales de primera instancia.

Según la disposición del inciso 3.°, sección 2.ª artículo 18 del mismo Código, estaba atribuído á la Suprema Corte Federal el conocimiento, en última instancia, de las causas anteriormente expresadas; y como tal atribución no ha sido conferida por la referida Ley 61 á la Corte Suprema de la República, es claro que no á ésta, sino al respectivo Tribunal de Distrito, es á quien debe competir, en consonancia con lo que terminantemente previene el inciso 2.° del artículo 99 de la misma ley, la decisión sobre la consulta del auto de sobreseimiento y sentencia definitiva que el Juez 2.° del Circuíto de Honda dictó, respectivamente con fechas 16 de Septiembre y 10 de Noviembre del año próximo pasado, en la presente causa seguida contra Dolores Diago, Dolores Torres ó Herrán. Abigaíl Gutiérrez, Pablo Rodríguez, Daniel Caicedo y Tomás Hernández, por los delitos de cuadrilla de malhechores y robo de una cantidad de sal de la expropiada por el Gobierno.

Por lo tanto, la Corte Suprema de la Nación, aunque sin haber emitido concepto alguno ni alegado en el asunto los señores Procurador General y defensor de los acusados, resuelve lo siguiente:

Remítase este proceso al Tribunal Superior del Distrito judicial en el Departamento de Tolima, por ser el asunto de su competencia.

Notifíquese, dése aviso de esta determinación al Juez de la primera instancia, déjese la correspondiente copia, y publíquese con la debida oportunidad.

José M. Samper.—Manuel J. Angarita.—Julián R. Cock Bayer.—Froilán Largacha.—Antonio Morales—Benjamín Noguera.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintisiete de Enero de mil ochocientos ochenta y siete notifiqué el auto que precede al señor Procurador General.

ARANGO M.—*Guerra A.* Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintiséis de Enero de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Consulta el Juez 2.° de la Provincia de Sincelejo el auto que dictó, con fecha catorce de Septiembre del año próximo pasado, por el cual ordena la cesación del procedimiento en el sumario instruído para averiguar el contrabando de unos sacos de sal, descubierto en la canoa "América" en el punto de Tolú.

Entre las atribuciones conferidas á la Corte por la Ley 61 de 1886, orgánica del Poder Judicial, no se encuentra la de conocer en 2.ª instancia de los juicios de contrabando; por lo cual esta Corporación se abstiene de considerar la consulta elevada, y resuelve que el proceso se envíe al Tribunal Superior del Departamento de Bolívar, y que se dé aviso al Juez 2.° de la Provincia de Sincelejo.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintisiete de Enero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto que precede al señor Procurador General.—

ARANCO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Enero veinticuatro de mil ochocientos ochenta y siete.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 99 de la ley 61 de 1886, orgánica del Poder Judicial, esta Superioridad ha dejado de ser competente para averiguar la responsabilidad del Juez del Circuíto de Zipaquirá, Antonio González Ortega, por la demora de cuatro años que se advierte en el sumario instruído contra Paz Gutiérrez, por falsificación de moneda.

En consecuencia, se ordena la remisión de este expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala de lo criminal.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

José M. Samper—Manuel J. Angarita-Julián R.Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintisiete de Enero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Enero veinticuatro de mil ochocientos ochenta y siete.

En las presentes diligencias sumarias practicadas en averiguación de la responsabilidad en que haya incurrido el Juez del Circuíto de Manizales, Ignacio Londoño P., por demoras, esta Superioridad ha dejado de ser competente para conocer, á virtud de lo dispuesto en los artículos 21 y 99 de la ley 61 de 1886, orgánica del Poder Judicial, y en consecuencia, se ordena remitir el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, para los efectos legales.

Dése conocimiento de esta resolución al Juez del expresado Circuíto.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A. Secretario.

En veintisiete de Enero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A. Secretario.*

Corte Suprema de la Nación—Bogotá, Enero veinticinco de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos. No estando atribuído á la Corte Suprema por la Constitución ni la ley el conocimiento, en segunda instancia, de las causas que por el delito común de falsificación de documentos de crédito público, se sigan contra los particulares, dicha función corresponde, consecuencialmente, á los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, al tenor de lo dispuesto en el inciso 2.° del artículo 99 de la ley 61 de 1886; y en tal virtud, de conformidad con el concepto del señor Procurador general, la Corte Suprema resuelve que esta actuación, promovida por José C. Caro y José G. Rivas, para que se les ponga en libertad bajo la correspondiente fianza, debe remitirse al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en la Sala de lo criminal,

como á quien compete el conocimiento del juicio iniciado contra ellos, por el delito de falsificación de billetes del Banco nacional.

Notifíquese, dese la correspondiente copia y publíquese previo aviso al Juez de primera instancia.

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón GuerraA., Secretario.

En veintisiete de los mismos notifiqué el auto que precede al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.* Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, cuatro de Febrero de mil mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Juez 2.° de la Provincia de Sabanalarga inició, en veintisiete de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco, el presente sumario, para averiguar la responsabilidad en que pudieran haber incurrido José Vicente Llinás, Manuel Julián Gómez, Celso Solano M., Julián Llinás, Avelino Manotas A., Manuel Acuña F., Manuel J. Llinás, Alejo Solano, Nicolás Manotas V. y Diógenes Salazar, por haber ejercido funciones oficiales de empleados públicos, sin legítimos nombramientos, durante la última guerra civil.

El Juez 2.° de la Provincia de Barranquilla, á cuya jurisdicción fué adscrito el territorio de Sabanalarga, pronunció en doce de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, auto de sobreseimiento, por considerar como de carácter político el delito que se averiguaba. Dispuso también que se consultara esa providencia con el Tribunal Superior del Estado de Bolívar, el cual declaró, por auto de treinta de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, que era incompetente para resolver la consulta, y ordenó que se devolviera el sumario al Juez de primera instancia, quien dispuso que se surtiera la consulta con la Corte.

Con arreglo á los artículos 21 y 99 de la ley 61 de 1886, sobre organización provisional del Poder Judicial, hoy no es competente este Supremo Tribunal para conocer de las causas criminales contra particulares, en casos como el que se examina, sino el Tribunal del respectivo Distrito Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema de la Nación declara que no es de su competencia el conocimiento de este asunto, y ordena que se remita el sumario al Tribunal Superior del Distrito de Bolívar, para lo de su cargo, dándose aviso al Juez 2.° del Circuíto de Barranquilla.

Notifíquese, cópiese y publíquese en el *Diario Oficial.*

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En siete de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, cinco de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete.

Iniciado este expediente para averiguar la responsabilidad en que pueda haber incurrido el Administrador subalterno de Hacienda Nacional del Departamento de la Concepción, jurisdicción del Distrito de Santander, Argilio Amaya, por no haberse cargado de una partida de ingreso, é informalidades en una ejecución; hay que dar cumplimiento al artículo 111 de la ley 61 de 1886, en referencia con el inciso 26, artículo 62 del Código Judicial, que atribuye al respectivo Juez de Circuíto el conocimiento de las causas de responsabilidad, contra empleados del carácter del sindicado

Por lo tanto, la Corte Suprema de Justícia, de acuerdo con el pedimento del señor Procurador general, dispone que este sumario sea remitido al Juez de Circuíto, á cuya jurisdicción corresponde el Distrito de La Concepción, para que resuelva lo que estime arreglado á la ley.

Notifíquese, cópiese y publíquese en el *Diario Oficial.*

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En siete de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto que precede al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justícia—Bogotá, Febrero siete de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Consulta el Juez 2.° del Circuíto de Zipaquirá la sentencia condenatoria dictada en la causa contra Jacinto Algarra, por maltratamientos á un Guarda de la Salina de Zipaquirá.

La Corte no puede ocuparse de la consulta en referencia, por haber dejado de ser competente para conocer de esta clase de asuntos, y, por lo tanto, ordena se pase este proceso al Tribunal Superior del Departamento de Cundinamarca, dándose aviso al Juez de primera instancia.

Notifíque, cópiese y publíquese.

José M. Samper—Manuel J Angarita—Julián R. Coch Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En siete de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, siete de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Juez 2.° del Circuíto de Honda consulta con la Corte la sentencia absolutoria, que profirió en la causa seguida á Roberto Olave, por el delito de circulación de moneda falsa.

Expedida la ley 61 de 1886, sobre organización Judicial, esta Corporación ha dejado de ser competente para conocer en segunda instancia; se abstiene de resolver la consulta elevada, y dispone que el proceso sea remitido al Tribunal Superior del Departamento del Tolima, dándose aviso al Juez del Circuíto de Honda.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En siete de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Febrero siete de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—A excitación del señor Procurador general de la Nación, se han instruído estas diligencias, á fin de averiguar si el Juez del Circuíto de Riohacha ha sido responsable, por haberse declarado incompetente, sin atender á las fórmulas legales, para conocer de un asunto en que estaba interesada la Hacienda nacional.

Conforme al artículo 21, de la ley 61 de 1886, la Corte ha dejado de ser competente para conocer, en una sóla instancia, de las causas de responsabilidad contra los Jueces de Circuíto.

En consecuencia, se dispone enviar este proceso al Tribunal Superior del Departamento del Magdalena, por ser de su competencia.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En siete de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto que precede al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Febrero siete de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Juez del Circuíto de Titiribí, en el Departa-

mento de Antioquia, ha consultado el auto que profirió en veinte de Diciembre del último año, de sobreseimiento en el sumario instruído contra Pascual Mery y otros, por delitos políticos. Conforme á los artículos 21 y 99 de la ley 61 (25 de Noviembre) de 1886, "provisional sobre organización y atribuciones del Poder Judicial, etc.," ha dejado de ser competente la Corte Suprema para conocer de este negocio, el cual es al presente, de la competencia del respectivo Tribunal Superior.

En consecuencia, la Corte se abstiene de adelantar su conocimiento en esta consulta, y resuelve que se remita este expediente al Tribunal Superior del Distrito de Antioquia, dándose aviso de esta resolución al Juez remitente, por cuanto el asunto corresponde á dicho Tribunal.

Notifíquese, cópiese y publíquese en la *Gaceta Judicial*.

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sánclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En siete de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL.

Señores Magistraeos.

En el sumario instruído para averiguar quién ó quiénes sean responsables por tentativa de estafa al Banco Nacional, en virtud del cobro repetido de intereses devengados por billetes del mismo Establecimiento, por haberles borrado el sello que sirve para denotar que tales intereses yá han sido cubiertos, el Juez 6.° del Circuíto de Bogotá sobreseyó, y os consulta el auto dictado con ese objeto el 18 de Noviembre del año en curso.

Los hechos sobre que ha versado la investigación son, en el fondo, los siguientes:

El día 7 de Mayo último, el señor Nicanor Barragán presentó al Banco Nacional, en billetes de á $ 10, serie C., la suma de $ 780, á fin de que se le abonaran los intereses reconocidos por el Banco á los billetes de su emisión, acompañando, al efecto, la cuenta correspondiente, que ascendía á la suma de $ 120-60 cs. (foja 25). Recibidos y examinados dichos billetes por el Secretario del Banco, este empleado notó que todos ellos tenían borrado el sello con que el Banco marcaba en esa época los billetts cuyos intereses habían sido cubiertos.

Interrogado Barragán para que manifestase de quién había recibido los billetes que acababa de presentar, contestó, en presencia del mismo Secretario y de otros empleados del Banco, que del señor Teodoro Zamudio, á quien podía llamarse en el momento, pues lo había dejado aguardando en el corredor inmediato. Llamado Zamudio é interrogado en los mismos términos en que lo fué Barragán, contestó, con visible turbación, que los billetes le pertenecían y que á él le habían sido remitidos de Sogamoso, respuesta que el Secretario del Banco objetó con la observación de que, habiéndose comenzado á sellar los billetes el día 1.° de Mayo, no había habido tiempo suficiente para que los que el interrogado reconocía como suyos, y que indudablemente habían sido sellados, hubieran sido remitidos á Sogamoso y devueltos de allí en menos de siete días. A esta objeción no dió respuesta satisfactoria el interrogado (fojas 7 á 11).

Advirtiéndose, además, por los empleados del Banco que tres días antes de la presentación de la cuenta suscrita por Barragán, había sido presentada otra al Banco por Gustavo Gómez, quien cobró intereses por el principal de $ 750, siendo de notar las circunstancias de que cuando dicho Gómez practicó tal operación fué al Banco acompañado de Teodoro Zamudio, y de que las cuentas estaban redactadas en términos semejantes, casi por igual suma y con referencia á billetes del mismo tipo (fojas 24, 25, 26 y 27); todo lo cual dió margen á conjeturar que los billetes presentados por Barragán, como recomendado de Teodoro Zamudio, fueran los mismos por los cuales se le habían liquidado y pagado intereses á Gómez, y que con el sello borrado volvían á ser presentados para nueva liquidación.

Hasta aquí los hechos ocurridos en la oficina del Banco Nacional con, motivo de la presentación de los billetes alterados; pasemos ahora á relacionar los demás datos y pruebas que suministra el sumario.

Reconocidos por peritos y con las formalidades legales los setenta y ocho billetes de á $ 10 presentados al Banco Nacional por Nicanor Barragán, quedó establecido que á tales billetes se les había borrado el sello de anotación del pago de los intereses correspondientes, hecho que se corroboró, además, con la comparación de uno de dichos billetes con dos del mismo tipo, sellado uno y el otro sin sellar, pedidos al expresado Banco por el funcionario de instrucción (fojas 13, 18 y 20).

El sindicado Teodoro Zamudio, en su indagatoria de fojas 14, expuso que él había recibido los billetes de Arsenio Zamudio, quien le tenía fondos procedentes de Sogamoso. Interrogado este último, también indagatoriamente el día 11 de Mayo, manifestó que Teodoro Zamudio y él recibían constantemente fondos de Sogamoso en billetes de distintas clases, para venderlos y cubrir créditos aquí en la capital; que se ocupaba en compra y venta de billetes, y que fué cierto que en uno de los días de la semana inmediatamente anterior, teniendo en su poder fondos suficientes de Teodoro Zamudio, éste le pidió y el declarante le entregó como $ 780 en billetes nuevos del Banco Nacional, de á $ 10 y de la serie C, *los cuales no tenían sello ninguno*, y los había comprado á una persona desconocida, agregando que creía que los billetes que se le pusieron de presente (los mismos á que se contrae la investigación) son los que él entregó á Teodoro Zamudio, puesto que tenían las mismas señales, ascendían á igual cantidad y correspondían á la misma serie (fojas 16 vuelta).

Ignacio León, á quien Arsenio Zamudio citó como testigo que se halló presente á la compra que él (Zamudio) hizo de los billetes que cree haber entregado á su compañero ó socio Teodoro, expuso entre otras cosas, que, á fines del mes de Abril ó principios del de Mayo del presente año, vió comprar á Arsenio Zamudio, en el atrio de la Catedral, á un artesano cuyo nombre ignora, una cantidad de billetes que él calcula en $ 800 á $ 900; pero que no supo de qué Banco serían, pues lo único en que pudo fijarse fué en que eran de á $ 10, nuevos, y en que el vendedor los ofreció sin descuento; y, finalmente, que el exponente no conoce la marca con que el Banco Nacional anotaba en sus billetes el pago de intereses (foja 23).

La declaración de Gustavo Gómez, que fué quien presentó la cuenta anterior á la de Barragán, ante el Alcalde del Distrito de Ibagué, dice así: "que conoce á los señores Teodoro y Arsenio Zamudio, pero que durante la permanencia del exponente en la ciudad de Bogotá, no tuvo negocios de billetes del Banco Nacional con tales señores; que consiguió los *sesenta y cinco* billetes de á diez pesos que presentó el día cuatro de Mayo en el Banco Nacional, sin recordar el número de éstos, para cobrar los intereses, por varios pagos que al exponente se le han hecho en las Administraciones de Hacienda de Ibagué, en pago de nóminas por sueldos devengados por empleados del ramo telegráfico, en pago de arrendamientos de un local que posee el exponente en Salento y que se halla al servicio del Gobierno nacional y, en fin, en varias otras transacciones particulares, sin recordar cuántos ni de qué clase; que la cuenta la redactó un joven, á quien el declarante no conoce, en el punto de los Portales, el cual se ofreció á hacerlo ganando dos reales por su trabajo; que los billetes, después de sellados, dispuso de ellos en varias compras que el declarante hizo en el mismo Bogotá y en el camino al regresar; que fué con Teodoro Zamudio al Banco á cobrar los intereses, porque generalmente se encuentra dificultad para entrar y él era más conocido para que le facilitara al declarante la entrada; que, en cuanto á que los billetes que diera Zamudio á Barragán, fueran los mismos que días antes había presentado el exponente al Banco, nada sabe ni puede decir, pues el declarante se vino para este lugar sin tener conocimiento alguno de tal hecho."

Como se ve, el sumario suministra la prueba plena que se requiere para tener por establecida legalmente la existencia del cuerpo del delito, pues tal es el mérito que prestan el reconocimiento y cotejo pericial de los billetes cuyos intereses se pretendieron repetir, mérito que está reforzado con las declaraciones de los empleados del Banco Nacional que notaron la alteración qu ese había hecho en ellos. Quedó, por lo tanto, demostrado el

hecho de que los billetes yá habían sido sellados y de que se les borró la marca con el designio, sin duda, de exigir del Banco nuevos intereses.

Por lo que hace á la culpabilidad de los que figuran como sindicados y responsables del delito que se investiga, se observa:

1.° Nicanor Barragán quedó exento de todo cargo en el particular, porque Teodoro Zamudio manifestó que aquel había procedido por recomendación suya, sin tener parte en los billetes presentados, y, además, porque del sumario no resulta prueba alguna de que al redactar la cuenta y presentarla bajo su firma hubiera procedido con malicia.

2.° Respecto de Teodoro Zamudio, aun cuando obran en su contra algunos indicios, éstos fueron desvanecidos en gran parte con la declaración de Arsenio Zamudio, quien aseguró que él había entregado al primero una cantidad de billetes, *sin sello*, igual á la que aquél presentó en el Banco, no vacilando en manifestar su creencia de que tales billetes eran los mismos que le puso á la vista el funcionario de instrucción. Aparte de este testimonio, favorece también al sindicado, la declaración de Gustavo Gómez, quien explica la razón por la cual lo acompañó Zamudio al Banco Nacional á presentar la cuenta del cuatro de Mayo último.

3.° Finalmente, contra Arsenio Zamudio no arroja el sumario sino la sospecha que surge de haber reconocido ó confesado que fué él quien le dió los billetes á Teodoro Zamudio; pero no está probado que hubiera identidad entre los billetes que le dió á Teodoro Zamudio y los que aparecieron con el sello borrado. Debe agregarse á esta circunstancia la de que la declaración de Ignacio León, aun cuando vaga, sí constituye un indicio de que Arsenio Zamudio compró una suma como de ochocientos á novecientos pesos en billetes de á $ 10, precisamente en los días en que entregó la de $ 780 al otro Zamudio.

De los hechos relacionados no se deduce que haya motivo legal suficiente para proceder criminalmente contra los sindicados; pues no obran contra ellos sino leves indicios que no producen la persuación que debe adquirir la autoridad, de que son delincuentes, para que se abra causa contra ellos.

El sólo hecho de la presentación de los billetes, sin que obre en contra de los que se han creído culpables, siquiera la declaración de un testigo hábil ó graves indicios que indiquen quién ó quiénes sean autores, cómplices ó auxiliadores en la comisión del delito que se investiga, consistente en la alteración de los mismos, no basta para declarar con lugar á seguimiento de causa, no obstante estar comprobado el cuerpo del delito.

Por las razones expuestas, y reproduciendo las que le sirven de apoyo al auto consultado, este Ministerio lo estima legal y opina que lo confirméis, sin más variación que la de hacer extensivo expresamente el sobreseimiento á Nicanor Barragán, á quien se reputó en el sumario como sindicado, según se deduce de la declaración que se le recibió, en forma de indagatoria y que corre al folio 29.

Bogotá, 15 de Diciembre de 1886.

FRANCISCO A. FERNÁNDEZ.

Señores Magistrados.

Con memorial de 31 de Diciembre del año próximo pasado el Fiscal del Tribunal de Occidente del Departamento del Cauca os remite un folleto impreso que contiene varios documentos relacionados con el sumario instruído en averiguación de los responsables del asesinato del señor Zenón Peña, perpetrado en la hacienda de "Meléndez" en la noche del 9 de Septiembre de 1882.

Solicita de vosotros el citado Agente del Ministerio público que, previa revisión de los expresados documentos, resolvais si ellos prestan mérito suficiente para abrir causa criminal á los sindicados del asesinato del señor Peña como lo declaró el Juez del Circuíto de Cali por su auto de proceder de 3 de Agosto de 1886.

Motiva esta solicitud la circunstancia de que dicho auto fué revocsdo por el Tribunal de Occidente del Departamento del Cauca.

Este Ministerio no encuentra la razón por la cual se dirige á vosotros el memorial aludido, puesto que no estáis facultados para dictar resoluciones de la naturaleza de la que por él se solicita.

Desde luégo, no puede decirse que se trate del recurso de casación, pues este recurso únicamente tiene cabida, en lo criminal, para las sentencias que se pronuncien por la comisión de los delitos designados en el artículo 29 de la Constitución, los cuales deben consultarse al efecto con ese Supremo Tribunal; y en el caso que nos ocupa, aun cuando se trata de la investigación de uno de aquellos delitos (el de asesinato), no se os ha consultado sentencia alguna en la forma legal (artículo 37 de la ley 61 de 1886).

Tampoco puede decirse que se trate del recurso de revisión, pues, en los asuntos criminales, solamente hay lugar á este recurso contra las *sentencias ejecutoriadas* que se hallen en alguno de los casos previstos en los incisos 1.°, 2.° y 3.° del artículo 54 de la citada ley 61 de 1886; y, como yá se lleva dicho, la solicitud que nos ocupa se refiere simplemente á la revocatoria de un auto de proceder que, según se colige de lo manifestado al folio VIII del folleto que figura en el expediente, no se revocó sino con el fin de ampliar el sumario y de que "continuara la investigación del crimen, teniendo presente las citas á que se refiere el Fiscal en su vista y en otros documentos."

Por lo tanto y habida consideración á que por ningún otre motivo legal, estáis facultados para proceder en los términos que se indican en el memorial del peticionario, este Ministerio os pide que os abstengáis de resolver el punto sometido á vuestra consideración.

Bogotá, 1.° de Febrero de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

Se trata de averiguar la responsabilidad del ex-Administrador subalterno de la Concepción, en el extinguido Estado de Santander, señor Argilio Amaya, por haber dejado de agregar á su cuenta de Julio y Agosto de 1877, el documento sobre nulidad de un remate, por virtud del cual se libró mandamiento ejecutivo contra Torcuato Niño y Horacio Wilches, y por no haber sentado en la misma cuenta las partidas correspondientes al ingreso de algunas sumas procedentes de empréstitos forzosos.

Venidos á mi estudio los antecedentes informativos, que con el objeto expresado se han estado perfeccionando en vuestro Despacho, soy de concepto que dispongáis que sean remitidos al Tribunal del Distrito de Santander, por no corresponderos conocer, en una sóla instancia, del asunto á que ellos se refieren, de conformidad con las disposiciones de la ley 61 de 1886, provisional sobre organización y atribuciones del Poder Judicial, etc.; que no os asignan esa facultad sino tratándose de los Jefes Superiores de Oficinas de Hacienda, que la misma ley enumera, y entre los cuales no figuran los Administradores subalternos, que es el carácter público con el cual se trata de exigir responsabilidad al señor Argilio Amaya.

Bogotá, 4 de Febrero de 1887.

CARMELO ARANGO M.

ERRATA.

En el número 16, página 127, columna 2ª., línea 5.ª, se omitió por error de imprenta, entre los nombres de los señores Magistrados, el del señor doctor Manuel A. Sanclemente. — Téngase por incluído.

ANUNCIOS.

CONSTITUCIÓN DE COLOMBIA.

ESTÁ DE VENTA en la Tesorería general, en edición de cuaderno, á 20 centavos el ejemplar.

IMPRENTA DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 19

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 24 de Mayo de 1887.

CONTENIDO.

PÁG.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Pronunciada en el juicio de nulidad promovido por Lisandro Alvarez..... 145
Pronunciada en el juicio ejecutivo trabado en Medellín contra Santa-María & Lalinde..... 147
Pronunciada en la demanda puesta contra el Tesoro Nacional por Aníbal Pagnamenta, sobre devolución de unos derechos de importación..... "
Pronunciada en la ejecución trabada en Medellín contra Córdoba & Arango..... 149

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CIVILES,

Pronunciado en el juicio promovido por el Banco Nacional contra José María Defrancisco..... 150

NEGOCIOS CRIMINALES.

Sobre incompetencia de la Corte en un sumario remitido por el Juez de Ocaña..... 151
Sobre incompetencia de misma, en otro sumario remitido por el Juez Superior de Cúcuta..... "
Sobre incompetencia de la misma, en una consulta del Fiscal del Tribunal de Occidente (Cauca)..... "
Sobre incompetencia de la Corte para conocer de una sentencia pronunciada por el Juez del Circuíto de Panamá..... "
Sobre incompetencia de la misma en un sumario remitido por el Juez de Túquerres..... "
Sobre la revocación pedida de una sentencia de la Corte..... "
Sobre una denuncia elevada contra el Tribunal Superior de Bolívar. "
Sobre incompetencia de la Corte para conocer de una causa por robo..... 152
Sobre incompetencia de la misma en un sumario sobre falsedad..... "
Sobre id. de la misma en otro id. remitido por el Juez de Barbacoas..... "
Sobre incompetencia de la misma en otro sumario remitido por el Juez de Buga..... "

ANUNCIOS.

Importante..... "

GACETA JUDICIAL.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero once de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Ante el Juez Nacional del Circuíto de Cali, promovió Lisandro Alvarez, por la vía ordinaria, la acción de nulidad del juicio ejecutivo seguido contra él y los demás herederos de Manuel María Alvarez por el Agente de bienes desamortizados, para hacer efectivo el censo de quinientos sesenta pesos ($ 560) y sus intereses, fundados á favor de la iglesia del Salado. La demanda fué dirigida contra el Gobierno Nacional, y el Juez llamó á contestarla y á intervenir en el juicio al Ministerio público, al Agente de bienes desamortizados, al Administrador de Hacienda y á Alejandro Zamorano, rematador de la *finca perseguida como hipoteca* de dicho censo. Seguido el juicio ordinario por los trámites legales, recayó en él sentencia, cuya parte resolutiva dice así:

"El Juzgado declara:

"1.° Nula y de ningún valor ni efecto la escritura de reconocimiento del censo, otorgada en treinta de Diciembre de mil ochocientos treinta, por la señora Isabel Alvarez á favor de la iglesia de San José del Salado;

"2.° Nulo el juicio ejecutivo que en mérito de tal escritura trabó el ex-Agente de bienes desamortizados contra los bienes de Manuel María Alvarez;

"3.° Nulo el remate que de la casa que en dicha escritura se expresa hizo el Doctor Alejandro Zamorano el diez y seis de Octubre de mil ochocientos ochenta y dos: dejando á éste su derecho á salvo para reclame del Gobierno Nacional el valor por que se remató dicha casa, más el interés del medio por ciento (½%) á cargo del ex-Agente de bienes desamortizados, señor Manuel Antonio Vernaza; y

"4.° Como consecuencia de todo lo anterior, no probadas las excepciones de *ilegitimidad de personería* y *cosa juzgada*, propuestas por el doctor Alejandro Zamorano y el Ministerio público."

De esta sentencia interpuso el doctor Zamorano para ante esta Suprema Corte, recurso de apelación, que le fué concedido, y sustanciado en la forma legal, y pedida para mejor proveer copia íntegra de las diligencias ejecutivas que motivaron la demanda de nulidad, inclusa la del remate de la casa que se embargó para cumplir la orden de pago, procede la Corte á hacer mérito de los hechos que el expediente ofrece y que debe tener en cuenta para dictar su fallo.

Según la escritura otorgada en treinta de Diciembre de mil ochocientos treinta (fojas 2.ª, cuaderno principal) Pablo Collázos reconocía un censo de setecientos pesos de ocho décimos ($ 700) á favor de la iglesia Viceparroquial del Salado; censo que por muerte del censualista le fué traspasado, no se dice por quién á Isabel Alvarez, y que ésta se obligó á reconocer, dando como hipoteca una casa ubicada en la ciudad de Cali, cuyos linderos señaló.

Consta de la notificación que á podimento de Lisandro Alvarez y de orden del Juez, puso al pié de dicha escritura el Registrador de instrumentos públicos y anotador de hipotecas del Circuíto de Cali, que ese documento no fué registrado ni anotada la hipoteca.

Resulta que en veinticuatro de Mayo de mil ochocientos setenta y cinco ocurrió Manuel María Alvarez á la Agencia de bienes desamortizados é hizo inscribir el censo que, á razón del cinco por ciento anual (5 %), reconocía su finada madre, Isabel Alvarez, á favor de la iglesia de San José del Salado, el cual censo, dijo, estaba afincado en una casa de cuyos linderos hizo mérito, situada en la ciudad de Cali.

Fundándose en esa diligencia de inscripción, dirigió el Agente de Bienes desamortizados, en catorce de Febrero de mil ochocientos ochenta y dos, una nota ó despacho al Juez Nacional, haciéndole saber que, reconociendo el finado Manuel María Alvarez el censo mencionado, y debiendo los réditos de veinte años, decretaba ejecución contra sus herederos, por la suma de mil ciento veinte pesos ($ 1,120), y le pedía á dicho Juez que lo auxiliara en la notificación que del auto ejecutivo debiera hacerse á Lisandro, Manuel, Cupertino, Vicenta y Cristina Alvarez.

El Juez, accediendo á lo pedido, hizo á estos la notificación, menos á la última, porque estaba ausente, siendo de notar que en lugar de Cupertino Alvarez, citado por el Agente de Bienes

Desamortizados, fué notificado Constantino Alvarez; y como todos dijeron bajo de juramento que no tenían dinero para hacer el pago, embargó el Juez la casa é hizo que los ejecutados nombraran depositario y avaluadores de ella

Devueltas las diligencias al Agente de bienes desamortizados, éste, sin citar á los ejecutados para sentencia de pregón y remate de la casa embargada, sin señalar los días en que debieran darse los pregones y el día y la hora en que debiera verificarse el remate, y sin anunciar esto, la finca, su avalúo y la hora hasta la cual se admitirían posturas, por medio de carteles y por la imprenta, procedió á dar los pregones en los días que á bien tuvo, expresando en ellos que el remate se verificaría el diez y seis de Octubre de mil ochocientos ochenta y dos.

De este hay tres diligencias de la misma fecha: en la primera se dijo que habiendo hecho Zamorano postura á la casa por su avalúo y por el importe de las costas, se verificó el remate; en la segunda que no está firmada por el rematador, aparece que la postura se hizo por quinientos pesos ($ 500), sin mencionarse las costas; y en la tercera se expresa que el remate se verificó per el avalúo de la casa, más las costas del juicio, añadiendo Zamorano que verificaría el pago, dando de contado cincuenta pesos ($ 50) por derecho de título, doscientos cincuenta pesos ($ 250) de la fecha en un mes, y doscientos pesos ($ 200) de la fecha en seis meses, en cuyos términos fué aprobada la propuesta.

Terminado con esto el juicio ejecutivo, cuyas diligencias están mezcladas con las de otro distinto juicio, intentó Lisandro Alvarez, por la vía ordinaria, la nulidad de aquél y la del remate, fundándose en una información de testigos dirigida á probar que es hijo legítimo de Manuel María Alvarez, quien murió intestado, y que éste fué hijo natural y heredero de Isabel Alvarez, dueña de la casa contra la cual libró ejecución el Agente de Bienes desamortizados, y fundándose, además, en la falta de registro y anotación de la hipoteca con que se pretendió asegurar el censo.

Conferido traslado de esta demanda á las personas yá citadas, el rematador de la casa y el Ministerio público propusieron las excepciones de falta de personería en el demandante y cosa juzgada, y el Administrador de Hacienda en quien se refundieron las funciones del Agente de Bienes desamortizados, fué de concepto que el juicio ejecutivo era nulo en efecto.

Oído Alvarez sobre la excepción de ilegitimidad, hizo valer que, según el artículo 400 del Código Judicial, la personería no necesita acreditarse cuando se demanda en causa propia, razón por la cual consideró el Juez esa excepción como perentoria, y reservándose la facultad de resolverla con la de cosa juzgada en la sentencia definitiva, ordenó que las partes contestaran directamente la demanda. Así lo hicieron, y como Zamorano y el Ministerio público negaron el derecho que Alvarez tuviera para pedir la nulidad del juicio ejecutivo, el Juez recibió la causa á prueba y la adelantó hasta ponerle término; siendo de notar que en su último alegato fué yá de concepto el Encargado del Ministerio público que el juicio ejecutivo adolecía de nulidad.

Conocidos los hechos, principiará la Corte por examinar las excepciones mencionadas para ver si están ó nó probadas, y tomar en consideración en el último caso el negocio principal.

Con relación á la excepción de ilegitimidad de la personería, ha dicho el señor Procurador general de la Nación que el demandante no ha probado su calidad de hijo y heredero de Manuel María Alvarez, como pretendió hacerlo por medio de la información de testigos de fojas 11 y 12, porque ésta fué practicada fuera de juicio por un Juez de Distrito y los testigos no se ratificaron en sus declaraciones en los términos y con la amplitud que se prescriben en el artículo 571 del Código Judicial; y aunque esto es cierto, ne lo os menos que la ejecución se libró contra Lisandro Alvarez y sus hermanos, considerándolos *herederos* de Manuel María Alvarez y á éste *reconocedor* del censo, como lo demuestra el documento de foja 5.ª del último legajo, agregado después de haber emitido su concepto dicho señor *Procurador*. Si, pues, como hijos de Manuel María Alvarez fueron representados sus herederos y se les llamó por eso á intervenir en el juicio ejecutivo, y en el embargo y remate de la casa de que estaba en posesión un miembro de la familia, no puede desconocerse la personería de Lisandro Alvarez para el efecto de decir de nulidad de un juicio ejecutivo en que fué parte y que dió origen á la demanda que ha intentado, porque al ejecutado le permite el artículo 998 del Código Judicial promover juicio ordinario con el fin de reparar el perjuicio que haya recibido, si prueba alguna excepción legal de que no tuvo ni pudo tener conocimiento en el término que para excepcionar se le concedió en el juicio ejecutivo; término que no le fué otorgado á Alvarez, privándosele así del derecho de proponer excepciones. De lo cual se deduce que la *obligación* á que se le sujetó de intervenir en el juicio ejecutivo como hijo y heredero de Manuel María Alvarez, lleva consigo *el derecho* correlativo de pedir la nulidad de lo que se hizo con violación de la ley. A lo que se agrega que á Lisandro Alvarez y á sus hermanos no se les ha negado en este juicio su calidad de hijos legítimos de Manuel María Alvarez, y sí implícitamente se ha reconocido que lo son y que éste falleció; no puede desconocérseles su calidad de herederos y poseedores de la herencia, porque la posesión de ésta se adquiere desde el momento en que es deferida, aunque el heredero lo ignore, según lo dispuesto en el artículo 783 del Código Civil nacional; y porque según el 1,013 la herencia se defiere al heredero en el momento de fallecer la persona de cuya sucesión se trata. Ella se acepta, por otra parte, tácitamente, conforme al artículo 1,298 del Código últimamente citado, por el hecho de ejecutarse un acto que suponga tal intención, y según el artículo 1,299 se entiende que alguien toma el título de heredero cuando lo hace, como Alvarez, en un acto de tramitación judicial. No debe confundirse, pues, ese título y la posesión *legal* de la herencia con la posesión *efectiva* decretada por el Juez y debidamente registrada, porque ésta la requiere el artículo 757 del Código Civil para sólo el efecto de disponer de un inmueble, de lo cual no se trata.

Respecto de la excepción de cosa juzgada, basta observar que, fuera del presente juicio no se ha seguido otro ordinario sobre el mismo asunto, y que el ejecutivo que le precedió, si tal puede llamarse, no hace tránsito á cosa juzgada ni en él recayó sentencia. A lo que se agrega que á los dos que propusieron las excepciones de que se trata, les tocaba probarlas, en virtud de lo dispuesto en los artículos 400, 475 y 476 del Código Judicial, y no lo han hecho.

Puede, pues, la Corte entrar de lleno en el negocio principal, y para fundar su fallo, considera:

1.° Que llamado como fué Lisandro Alvarez á responder en juicio ejecutivo con sus hermanos, del censo y de sus réditos, ha podido promover por la vía ordinaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 998 del Código Judicial y en la reforma 34 de la ley 46 de 1876, la nulidad de dicho juicio en que se pretermitieron las principales fórmulas;

2.° Que la ejecución se fundó en la diligencia de inscripción del censo, que no es un documento que preste mérito ejecutivo, por no estar comprendido entre los enumerados en los artículos 925 y 1,007 del Código Judicial, y en la reforma 31 de la ley citada de 1876;

3.° Que menos pudo tener esa diligencia la fuerza que se le dió, estando, como estaba, fundada en una escritura que carece de los requisitos de registro y anotación de la hipoteca que se pretendió constituír, sin los cuales carece de valor en juicio y fuera de él, según la ley 22 de 1826 que estaba en observancia cuando la escritura se otorgó, y cuyas disposiciones se han venido repitiendo en las posteriores sobre la materia;

4.° Que, en consecuencia, la casa que se quiso hipotecar no quedó en efecto hipotecada, ni pudo ser perseguida, como si lo estuviera, para hacer efectivo el censo y sus réditos, por adolecer la escritura de nulidad absoluta, que puede y debe declararse no sólo á petición de parte, sino también de oficio, en virtud de lo dispuesto en los artículos 1,741 y 1,742 del Código Civil;

5.° Que, prescindiendo de varias de las informalidades en que se incurrió en lo que se llama juicio ejecutivo, merece especial mención la falta de citación á los ejecutados, para sentencia de pregón y remate de la casa embargada, y la de fijación de los avisos no renunciados por los supuestos deudores, para el remate de la misma casa, por ser esas omisiones causas de nulidad en el juicio ejecutivo, conforme á lo dispuesto en el artículo 841 del Código Judicial, la primera; porque priva al ejecutado del derecho que la ley le otorga de proponer excepciones y de defenderse; y la segunda, porque los avisos por medio de carteles y por la imprenta tienen por objeto dar publicidad al acto y provocar licitación, para lo cual no bastan los pregones dados en días que no consta que se fijaran de antemano;

6.° Que habiéndose extendido en un mismo día tres diligencias de remate, distintas entre sí, é iniciádose otra que quedó inconclusa, el procedimiento fué en todo irregular, nulo el juicio ejecutivo, por diversas causas, y nulo el remate, de conformidad con lo establecido en la reforma 31 de la ley 46 de 1876, por haberse incurrido en la nulidad 3.ª de las mencionadas en el artículo 840 del Código Judicial; y

7.° Que fuera de esto no consta que el remate fuera sometido á la aprobación del Poder Ejecutivo, como lo ordena el artículo 1,040 del Código Fiscal, ni que en caso de que fuera aprobado se llenaran las prevenciones del artículo 1,041 del mismo Código.

Por lo tanto, la Corte Suprema, de acuerdo en lo principal con el concepto emitido por el señor Procurador general, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma en todas sus partes la sentencia, apelada y condena en las costas del recurso al apelante, doctor Alejandro Zamorano, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 2.° del artículo 789 del Código Judicial.

Notifíquese esta sentencia, déjese copia de ella, publíquese en la *Gaceta Judicial*, y devuélvase la causa al Juez de la primera instancia para los fines consiguientes.

José M. Samper—Manuel J Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del once de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete, se publicó la sentencia que precede.

Ramón Guerra A., Secretario.

En doce de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué la sentencia que precede al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

En doce de Febrero del mismo año, notifiqué la sentencia que precede al señor doctor Federico Patiño.

Federico Patiño—Guerra A., Secretario.

En dieziocho de Febrero del mismo año, notifiqué la sentencia que precede al señor doctor don Eladio C. Gutiérrez.

Gutiérrez—Guerra A., Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Febrero diez y seis de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—De los documentos que encabezan este expediente, se colige que algunos comerciantes de Medellín hubieron de pagar á los revolucionarios de la Costa Atlántica, con una rebaja de quince por ciento (15 por 100), derechos de importación que causaron á deber, y que en virtud de un contrato celebrado con el Gobierno Nacional, fueron eximidos del pago de lo que se les cobró por vías de hecho.

Consta que el señor Tesoreró general de la República le dirigió al señor Administrador principal de Hacienda Nacional de Medellín, sesenta y tres libranzas por la suma de diez mil ciento quince pesos, noventa centavos ($ 10,115-90 cs.), á cargo de dichos comerciantes, por el quince por ciento (15 por 100) que no pagaron á los revolucionarios, y que dicho Administrador consultó si procedía á ejecutar á los remisos, quienes alegaban que tuvieron que pagar más del quince por ciento por rescatar sus mercancías.

El señor Tesorero general le contestó, que no teniendo razón dichos comerciantes para protestar el pago de las letras, procedentes del quince por ciento ordenado por el Gobierno Nacional, lo hiciera efectivo por la vía ejecutiva, si necesario fuese; orden que le fué también dada por el señor Ministro del Tesoro.

Por consecuencia de esto, procedió el Administrador de Hacienda mencionado á liquidar á cargo de Santamaría & Lalinde el referido quince por ciento, según la libranza número 7,673 de fecha diez de Marzo de 1886, girada contra ellos, y á favor de la Tesorería general por Vengoechea y Compañía, de Barranquilla; liquidación que, por principal é intereses, á razón del doce por ciento anual, montó á dos mil seiscientos cincuenta pesos, cuarenta y dos y medio centavos ($ 2,659-42½ cs.). Apoyado en ella el señor Administrador de Hacienda, libró ejecución por su importe contra Marco A. Santamaría & Lalinde, y notificada al representante de la casa, consignó éste los dos mil seiscientos cincuenta pesos, cuarenta y dos y medio centavos ($ 2,650-42½ cs.) que fueron depositados, y apeló del auto ejecutivo.

El recurso le fué concedido en el efecto devolutivo, para ante esta Suprema Corte, y sustanciado en la forma legal, reprodujeron los apelantes lo alegado por Fernando Restrepo é Hijos, en un juicio análogo que la Corte acaba de fallar, y el señor Procurador general, remitiéndose á lo que expuso en el mismo juicio, es de concepto que debe revocarse el auto apelado, por no estar fundado en ninguno de los documentos que conforme á la ley prestan mérito ejecutivo.

Examinados uno á uno esos documentos, mencionados en los artículos 925 y 1,007 del Código Judicial, resulta, en efecto, que una liquidación, como la formada por el Administrador de Hacienda Nacional de Medellín, destituída de todo comprobante de que aparezca una obligación expresa, clara y de plazo cumplido, de pagar la cantidad á que este juicio se contrae, como lo exige el artículo 927 de dicho Código, no se encuentra comprendida entre los documentos que traen aparejada ejecución, conforme á los artículos citados. La libranza á que la liquidación se refiere, no aparece de autos ni ha sido reconocida, como debe serlo todo documento privado, conforme al inciso 6.° del aludido artículo 925, y el contrato de que hace mérito dicho señor Administrador tampoco figura en el expediente.

Por otra parte, según el artículo 1,253 del Código Fiscal "los Recaudadores de Hacienda tienen jurisdicción coactiva para el cobro de los créditos activos del Tesoro Nacional que ellos mismos hayan reconocido, ó que, reconocidos por otros, hayan sido encargados por éstos para exigirlos del respectivo deudor," y no consta que el Administrador de Hacienda haya reconocido el crédito de que se trata, ni que hecho el reconocimiento por otro autorizado por la ley, que en el caso sería el Administrador de la Aduana, lo haya encargado de cobrar lo reconocido, por la vía ejecutiva.

Si alguna disposición legal pudiera aplicarse al caso especial de que se trata, sería la del inciso 2.°, del artículo 1,007 del Código Judicial que dice así: "Las copias de los reconocimientos hechos por los Recaudadores, á cargo de los deudores al fisco por rentas ó contribuciones," pero sin violentar su sentido no podría sostenerse, que la simple liquidación que ha servido de fundamento al decreto de ejecución, sea capia de un reconocimiento hecho por un Recaudador de los derechos de Aduana, llamado por la ley á practicarlo.

Por lo tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador general de la Nación, revoca el auto ejecutivo apelado, sin costas, por tratarse de una ejecución fiscal.

Hágase saber, déjese copia, publíquese en la *Gaceta Judicial*, y devuélvase el expediente.

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha— Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y siete (17) de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintiséis de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—En tres de Marzo de mil ochocientos ochenta y dos, ocurrió Aníbal Pagnamenta al Juzgado del Circuíto de Buena-Ventura, proponiendo demanda contra el Tesoro Nacional, para que se le declare exonerado de pagar la suma de ochocientos setenta pesos ($ 870) liquidados á su cargo por derechos de importación, y se le devuelva el ocho por ciento (8 por 100), que pagó de contado, por cuanto todas las mercaderías importadas por él, para su consumo en el puerto de Buena-Ventura, se quemaron el doce de Abril de mil ochocientos ochenta y uno, fecha del incendio que redujo á cenizas la parte principal y comercial de la población; y fundó su demanda en los artículos 2.° y 3.° de la ley nacional número 55, de diez y siete de Junio de mil ochocientos ochenta y uno, expedida con el fin de mi-

norar los perjuicios que á los importadores ocasionó tal incendio.

Pagnamenta acompañó á su demanda copia de dos pagarés que otorgó en veintiocho de Diciembre de mil ochocientos ochenta, y en primero de Febrero de mil ochocientos ochenta y uno, obligándose en el primero á consignar en la Caja de la Aduana, el veintiocho de Abril de mil ochocientos ochenta y uno, la cantidad de trescientos noventa y cinco pesos ($ 395) que causó á deber, conforme á la liquidación del manifiesto número 68, y constituyéndose en el segundo, deudor de la cantidad de quinientos once pesos ($ 511), pagadera el treinta y uno de Mayo del mismo año, por derechos también de importación, resultantes de la liquidación del manifiesto número 104.

De la demanda se confirió traslado al Procurador del Circuíto, encargado del Ministerio público, y éste la contestó negando el derecho que tuviera Pagnamenta para pretender exoneración del pago de los derechos mencionados y devolución del ocho por ciento (8 por 100), que consignó de contado, por cuanto el plazo del primer pagaré estaba al vencerse cuando el siniestro ocurrió, y el del segundo comenzó á correr dos meses y doce días antes de él; y funda su negativa, respecto de la devolución de lo pagado, en que el artículo 3.° de la ley citada la otorgó para el caso de que las mercaderías destruídas se encontraran en los almacenes de la Aduana el día en que tuvo lugar el incendio, circunstancia que no concurrió en las de Pagnamenta.

Recibida la causa á prueba, el apoderado del demandante pidió el cotejo de las copias de los pagarés con sus originales, y, practicado, se encontraron iguales, y para comprobar la pérdida de las mercancías, ocurrió al dicho de cuatro testigos que declararon de conformidad que Pagnamenta tenía en la casa de Francisca Flórez un almacén con mercancías y una tienda en que las daba al consumo, y que todo esto fué destruído por el incendio del doce de Abril de mil ochocientos ochenta y uno; afirmando los testigos que dichas mercancías fueron las mismas que Pagnamenta nacionalizó en la Aduana del Puerto, y por las cuales quedó á deber, previo el pago en dinero del ocho por ciento (8 por 100), la suma de ochocientos setenta pesos (870) á que se refieren los dos pagarés que obran en autos.

Concluído el término probatorio, alegaron las partes, y el Juez dictó sentencia absolviendo al Tesoro Nacional del cargo formulado en la demanda; sentencia de la cual interpuso el apoderado de Pagnamenta recurso de apelación, que, en ambos efectos, le fué concedido para ante esta Superioridad.

Recibidos los autos y sustanciado legalmente el recurso, la Corte dispuso, para mejor proveer, que los testigos de que se ha hecho mérito, declararan de una manera más explícita sobre la identidad de las mercancías, tiempo en que las vieran y clase de ellas, y que la Oficina general de Cuentas remitiera copia de los manifiestos números 68 y 104, é informara si de las cuentas resulta haberse ordenado la devolución de derechos á Pagnamenta, por todos ó parte de los efectos á que dichos manifiestos se refieren.

Dos de los cuatro testigos, pues los otros dos no fueron habidos, declararon que les constaba que las mercancías que perdió Pagnamenta por consecuencia del incendio del doce de Abril de mil ochocientos ochenta y uno, fueron las mismas que había nacionalizado conforme á los manifiestos que presentó á la Aduana el veintiocho de Diciembre de mil ochocientos ochenta y primero de Febrero de mil ochocientos ochenta y uno, bajo los números 68 y 104, y que esas mercancías existían por haberlas visto antes del incendio y consistían en mercancías secas y abarrotes.

El Presidente de la Corte de Cuentas, cumpliendo con lo mandado, informó que por auto de la Sala de segunda instancia de la misma oficina, referente á la cuenta de la Aduana de Buenaventura de mil ochocientos ochenta y uno á mil ochocientos ochenta y dos, se ordenó la devolución de ochenta y cuatro pesos ($ 84) á Aníbal Pagnamenta, por mercancías destruídas por el incendio; pero que no puede asegurar, por no tener la cuenta á la vista, si fué por causa de los manifiestos 68 y 104. Posteriormente remitió dicha Oficina los que se le han agregado á estos autos (fojas 46 y 50), de los cuales el segundo tiene el número 68, y la cantidad liquidada en él corresponde á la demandada con relación á ese manifiesto, pero en lugar del 104 se ha remitido otro marcado con el número 154 por mercancías que M. Laumes le envió á Pagnamenta en consignación, cuyo saldo es el de ciento diez y seis pesos ($ 116), inferior en mucho al de quinientos once pesos ($ 511) á cuyo pago se obligó Pagnamenta en el documento que firmó el primero de Febrero de mil ochocientos ochenta y uno; lo que induce á creer que se confundió ese manifiesto con el 104. Pero sea de esto lo que fuere, el hecho es que Pagnamenta nacionalizó en veintiocho de Diciembre de mil ochocientos ochenta y primero de Febrero de mil ochocientos ochenta y uno mercancías importadas por él; que por derechos de Aduana pagó de contado el ocho por 100 (8 por 100), y que quedó á deber, según la liquidación del manifiesto número 68, trescientos noventa y cinco pesos ($ 395), pagaderos el veintiocho de Abril de mil ochocientos ochenta y uno, y según la liquidación del manifiesto número 104, quinientos once pesos ($ 511), con plazo de cuatro meses, que se vencía el treinta y uno de Mayo del mismo año, como consta de los documentos que ha presentado en copia y que, cotejados con los existentes en la Aduana, han resultado conformes.

¿Tiene derecho Pagnamenta á que se le exonere del pago de esas obligaciones? ¿Deberá devolvérsele el ocho por ciento (8 por 100) de los derechos liquidados que pagó de contado?

Estos son los puntos á que la demanda se contrae y que la Corte debe examinar para dictar su fallo.

El artículo 2.° de la ley 55 antes citada exoneró del pago de derechos de importación todas aquellas mercancías que fueron destruídas por consecuencia del incendio mencionado y que estaban depositadas aún en los almacenes de la Aduana, y también las que se sacaron de éstos para su consumo en el puerto ó internación, siempre que tales mercancías se hubieren destruído en todo ó en parte.

La letra y el espíritu de esta disposición están manifestando que el Legislador no creyó justo que se cobraran derechos de importación por mercancías destruídas por un caso fortuíto, y que se propuso atenuar los perjuicios sufridos por los comerciantes que tuvieron la desgracia de perder efectos recientemente importados y tomados acaso á crédito. Su intención manifiesta fué no agravar el daño que el siniestro causó, dejando sujetos á los que lo recibieron á un impuesto para cuyo pago no contaban tal vez con otros recursos. Que la disposición citada comprenda á Pagnamenta, es claro, porque éste ha probado plenamente que las mercancías que nacionalizó y por las cuales se comprometió á pagar derechos de importación á plazos que aun no estaban vencidos, fueron destruídas por el incendio. Probable es que de ellas hubiera vendido algunas, pero no hay prueba de esto, y por otra parte, el artículo en referencia favorece no sólo á los que perdieron todas sus mercancías, sino á los que perdieron parte de ellas, y esto último no admite duda alguna respecto de las de Pagnamenta.

Decir que no está en el caso de la ley por cuanto el plazo de uno de los pagarés estaba al vencerse cuando ocurrió el incendio y el otro bastante adelantado, carece de fundamento, porque el hecho es que las mercancías de que proceden esos créditos fueron destruídas por el incendio, y que por esto fué que la ley exoneró del pago de derechos de importación á los perjudicados. Los plazos de Pagnamenta no estaban, por otra parte, vencidos el día del incendio, como ya se ha dicho, y el señor Procurador general es, con razón, de concepto que la disposición legal favoreció á los introductores dentro del plazo de cuatro meses que tenían para verificar el pago de los derechos de importación, y pide, por lo tanto, la reforma de la sentencia en esta parte.

Por lo que hace á la devolución del ocho por ciento (8 por 100) que Pagnamenta pagó de contado, su demanda no tiene fundamento legal, porque el artículo 3.° de la ley 55 de mil ochocientos ochenta y uno, mandó devolver los derechos pagados por las mercaderías que se encontraban en los almacenes de la Aduana el día del incendio, y las de Pagnamenta habían salido yá de ellos, razón por la cual su apoderado en esta instancia conviene en que la Nación debe ser absuelta del ocho por ciento (8 por 100) que se pagó de contado.

Sobre el derecho que Pagnamenta haya tenido para ocurrir al Poder Judicial en un negocio que por su naturaleza debiera ser administrativo, conviene observar que, aunque por resolución del Poder Ejecutivo, de trece de Julio de mil ochocientos ochenta y uno, autorizada por el señor Secretario de Hacienda y publicada en los números 5,115 y 5,116 del *Diario Oficial*, se dispuso que el hecho de haber sido destruídas las mercancías por el incendio, se comprobara dentro del año económico entonces en curso, con certificación de una Junta compuesta del

Administrador, el Contador, el Jefe del Resguardo y el Guarda-almacén de la Aduana de Buenaventura, la primera autoridad política y la primera judicial del lugar y el encargado del Ministerio público,—se agregó lo siguiente:

"Si el interesado no ocurriere á la Junta dentro del término indicado, ó ésta no estimase que debe expedírsele la mencionada certificación, por no constarle suficientemente, en su concepto, los hechos, podrá aquél ocurrir al Poder Judicial, para que se decida el punto en juicio contradictorio entre él y el Ministerio público....."

No consta que Pagnamenta obrara de conformidad con lo primero, sino que optó por lo último, que se dejó á su arbitrio, y en este caso, no puede desconocerse el derecho con que propuso su demanda, sobre el cual no ha ocurrido disputa; pero como en ella sólo pidió que se le exonerara del pago de ochocientos setenta pesos ($ 870), sin advertir que las dos partidas de trescientos noventa y cinco pesos ($ 395) la una, y de quinientos once pesos la otra ($ 511), suman novecientos seis pesos ($ 906), la diferencia de treinta y seis pesos ($ 36) debe perderla, como su apoderado lo ha reconocido, teniendo en consideración que la sentencia debe ser conforme á la demanda.

Por lo tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el pedido del señor Procurador general de la Nación, exonera á Aníbal Pagnamenta de la obligación de pagar ochocientos setenta pesos ($ 870) de los novecientos seis pesos ($ 906) que causó á deber á la Aduana de la Buenaventura por derechos de importación, liquidados en vista de los manifiestos números 68 y 104, siendo de su cargo los treinta y seis pesos ($ 36). Satisfecha que sea esta partida, se le develverán cancelados los pagarés que firmó en veintiocho de Diciembre de mil ochocientos ochenta y primero de Febrero de mil ochocientos ochenta y uno.

Queda reformada en estos términos la sentencia apelada, sin costas.

Notifíquese, déjese copia, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvanse los autos al Juez de la primera instancia para los fines consiguientes.

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del veintiséis de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete, se publicó la sentencia que antecede.

Ramón Guerra A., Secretario.

En veintiocho de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué la sentencia anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

En dos de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué la sentencia anterior al señor doctor Federico Patiño.

FEDERICO PATIÑO.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, diez y siete de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Administrador principal de Correos nocionales de Medellín libró, con fecha primero de Noviembre último, mandamiento de pago por la vía ejecutiva, por la suma de doscientos setenta y nueve pesos, setenta centavos ($ 279-70) en favor del Tesoro de la República y en contra de la sociedad mercantil de Córdoba y Arango de aquella ciudad, procedente aquella cantidad, del quince por ciento de derechos de importación, causados por los ejecutados en la Aduana de Barranquilla, y que éstos dejaron de pagar á los revolucionarios en la última guerra.

Notificados los ejecutados del auto de ejecución, apelaron de él para ante el inmediato Superior, y habiéndoseles concedido el recurso para ante esta Superioridad, después de la correspondiente sustanciación, pasa la Corte á resolver.

En cuanto á competencia, yá se ha establecido en idéntico caso, que á la Corte Suprema nacional le corresponde en última instancia conocer de asuntos de esta naturaleza, por lo cual es inútil discutir de nuevo el punto.

Veamos el fundamento del auto ejecutivo. En el expediente no aparecen otros documentos que una comunicación del Administrador ejecutante al Tesoro general de la República, en que emite concepto sobre el derecho que tiene la Nación de cobrar á los importadores el quince por ciento que dejaron de pagar al Jefe de la revolución en la Costa Atlántica, y consulta si ejecuta á los deudores; la contestación dada por el Contador interventor de la Tesorería, con fecha treinta de Junio de mil ochocientos ochenta y seis, en que ordena sean ejecutados los deudores por dicho quince por ciento, y un telegrama de Su Señoría el Ministro del Tesoro al mismo Administrador, fecha diez y siete del citado mes, en que le ordena, como respuesta á la consulta que este funcionario le ha hecho, que cobre ejecutivamente, si fuere necesario, las mencionadas cantidades.

En la liquidación verificada por el Administrador para proceder ejecutivamente, hace mención de la letra de cambio, fecha treinta y uno de Enero de mil ochocientos ochenta y seis, girada á cargo de Córdoba y Arango por Vengoechea y C.ª de Barranquilla, y á favor del Tesoro general de la República, quien la pasó al Administrador para su cobro.

Valor..... $ 272 ...
procedente del quince por ciento de que se ha hablado.
Intereses..... 6-85

Estos son los documentos que forman en este juicio el recaudo ejecutivo. Ninguno de ellos es, conforme á la ley, suficiente para fundar en ellos una ejecución.

En efecto: el artículo 1,007 del Código Judicial enumera los documentos y actos que prestan mérito ejecutivo y con los cuales pueden proceder los empleados con jurisdicción coativa, y entre ellos no se encuentran los que ha colocado el empleado ejecutante como base de la ejecución.

La libranza que menciona, girada por Vengoechea á cargo de los ejecutados, traería aparejada ejecución contra éstos, si estuviera aceptada, según el número 5.°, artículo 925 del Código Judicial; pero ni aun se ha agregado á los autos esa pieza.

No puede decirse que la liquidación hecha por el Administrador de Correos, en vista de la libranza citada tenga el carácter de reconocimiento hecho por el Recaudador, de que trata el número 22, artículo 1,007 del Código citado, pues el documento de que allí se habla debe ser copia del asiento ó reconocimiento que el empleado fiscal tome de sus libros contra los deudores al Tesoro por rentas ó contribuciones, y esa liquidación ni es copia de un reconocimiento semejante, ni éste se ha hecho por el empleado competente, que lo es el Administrador de la Aduana de Barranquilla, en donde los derechos fueron causados.

Esta doctrina se acuerda perfectamente con la disposición del artículo 1,235 del Código Fiscal de la Nación, que dice: "Los Recaudadores de Hacienda tienen jurisdicción coactiva para el cobro de los créditos activos del Tesoro nacional que ellos mismos hayan reconocido, ó que, reconocidos por otros, hayan sido encargados por éstos, para exigirlos del respectivo deudor, según los reglamentos expedidos ó que expida el Poder Ejecutivo."

De suerte que, según estos principios, contra un deudor por derechos de importación, puede librar ejecución por derechos el respectivo Administrador de la Aduana que haya hecho el reconocimiento en sus libros, con copia de ese mismo reconocimiento, ó puede comisionar á otro Recaudador para que cobre, enviándole la correspondiente copia del asiento que ha de servir de recaudo ejecutivo; pero en ningún caso puede constituír éste, conforme á las leyes vigentes, una orden del Tesorero general, ni del Ministro del Tesoro, ni una libranza no aceptada por el deudor.

En consecuencia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con la opinión del señor Procurador general de la Nación, la Corte revoca el auto apelado.

No se hace especial condenación en costas.

Notifíquese, cópiese publíquese y devuélvase el expediente.

José M. Samper.—Manuel J. Angarita.—Julián R. Cock Bayer.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Benjamín Noguera.—Manuel A Sanclemente.—Ramón Guerra A., Secretario.

En dieziocho de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto que precede al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, siete de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—En el presente juicio ejecutivo seguido á instancia del Banco Nacional, contra José María Defrancisco, por cantidad de pesos, la parte de éste presentó escrito en veintinueve de Septiembre último, articulando de nulidad en lo actuado, por los siguientes fundamentos:

1.° Que siendo el juicio de carácter nacional, son las leyes nacionales las que han debido observarse en la secuela y determinación de él, y no las del extinguido Estado de Cundinamarca, en las cuales se apoyan casi todas las providencias dictadas en el expresado juicio; y

2.° Que la mayor parte de las notificaciones se han hecho en consonancia con estas últimas leyes, contraviniendose así lo que prescribe el artículo 994 del Código Judicial de la República.

Creyendo el Juez de la primera instancia que había hechos que justificar, abrió la artículación á pruebas, con términos de nueve días, por auto de quince de Octubre del año próximo pasado, el cual fué reclamado en tiempo por el ejecutado; y habiendo opuesto en subsidio el recurso de apelación, que se concedió en ambos efectos, han venido con tal motivo los autos á esta Superioridad, en donde el recurso se ha sustanciado con arreglo á la ley, y se encuentra, por lo tanto, en estado de dictarse el correspondiente fallo.

El señor Procurador general, en su respuesta de catorce del pasado mes, se expresa así:

"Al examinar las causales de nulidad alegadas por el ejecutado, se advierte que todas ellas se refieren á irregularidades ú omisiones en la sustanciación del juicio, que no requieren para ser verificadas, sino la simple inspección de los autos, lo cual puede practicarse por el Juez, sin necesidad de abrir á prueba el incidente; pues hay que distinguir entre los hechos que se desprenden de la actuación y aquellos cuya validez jurídica está subordinada á las formalidades solemnes de que deben estar revestidos los documentos que les sirven de comprobantes, formalidades que no proceden de la simple sustanciación, sino de otras causas. En el último de los casos indicados es cuando debe llamarse á prueba la articulación, por ser innecesario hacerlo en el primero."

"Por lo tanto, este Ministerio estima las consideraciones hechas por el apelante, y opina que debe revocarse el auto que motivó el recurso, ordenándole al Juez que decida como cuestión de derecho el incidente promovido."

Y estimando la Corte que dichas consideraciones son estrictamente legales; administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el auto apelado de quince de Octubre citado, y dispone que la articulación se decida de conformidad con lo prescrito en la primera parte del artículo 669 del Código Judicial.

Notifíquese, déjese la correspondiente copia, publíquese y devuélvase el proceso al Juzgado de su procedencia, dentro del término de la ley.

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A, Secretario.

En siete de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto que precede al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veinticinco de Enero de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos: El Juez Superior del Circuíto de Ocaña, consulta con la Corte el auto de veinte de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, por el cual declaró que debía cesar, por prescripción de la pena, todo procedimiento criminal contra él Telegrafista Carlos Delgado G., en el sumario instruído para averiguar el delito de mala administración de la Hacienda nacional, de que había sido sindicado.

Conforme á los artículos 21 y 99, inciso 2.° de la ley 61 de 1886, hoy la Corte carece de jurisdicción para resolver esta consulta, la que debe hacerse con el Tribunal respectivo, á cuya jurisdicción se halla adscrito el Juzgado de primera instancia.

En tal virtud, la Corte Suprema de Justicia se declara incompetente para conocer de este expediente, el cual deberá ser remitido al Tribunal del Distrito de Santander, para lo de su cargo.

Notifíquese, cópiese y publíquese en el *Diario Oficial*, y dese aviso al Juez Superior del Circuíto de Ocaña.

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintiséis de Enero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia — Bogotá, Enero veintiséis de mil ochocientos ochenta y siete.

El Juez Superior de lo criminal del Circuíto de Cúcuta, remite á esta Superioridad, en apelación, la sentencia que profirió en diez y siete de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis, por la cual condena á Ignacio Gómez á la pena de diez y seis meses de reclusión, por el delito de circulación de moneda falsa.

La Corte, como lo dice el señor Procurador, no es competente para conocer de apelaciones en causas criminales como la presente. Son los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, los que, según los artículos 21 y 99, inciso 2.° y 112 de la ley 61 de 1886, deben aprehender el conocimiento de estos asuntos.

Pase este expediente al Tribunal Superior del Distrito de Santander, para los efectos legales.

Notifíquese, cópiese, publíquese y dese aviso al Juez Superior de Cúcuta.

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintinueve de Enero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.* Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Febrero siete de mil ochocientos ochenta y siete,

El señor Fiscal del Tribunal de Occidente en el Departamento del Cauca, dirigió á esta Superioridad, con fecha treinta y uno de Diciembre último, una nota oficial á que acompañó un folleto impreso, que contiene varias piezas tomadas del sumario instruído para averiguar el delito de asesinato, perpetrado en el año de mil ochocientos ochenta y dos, en la persona de Cenón Peña, y descubrir sus autores, y la ha dirigido con el fin de que la Corte haga revisar los documentos, de cuya autenticidad da fe el Secretario del Juzgado del Circuíto de Cali en lo criminal, y resuelva si prestan mérito para proceder contra los sindicados, por cuanto el Tribunal del Departamento de Occidente revocó el auto en que se declaró con lugar á formación de causa contra determinados individuos.

El señor Procurador general, á quien se ha oído sobre este asunto, es de concepto que la Corte debe abstenerse de dictar en él la resolución que se solicita, y con razón, porque tratándose de un negocio criminal atribuído en primera instancia al Juez del Circuíto, y en segunda al Tribunal respectivo, él no está en las atribuciones de la Corte, y menos habiendo revocado el Tribunal el auto de proceder, con el fin de que se amplíen las diligencias sumarias, según se colige de lo expuesto en dicho fallo.

Por lo tanto, no le es permitido á la Corte mezclarse en el negocio y así lo resuelve.

Hágase saber este auto al señor Procurador general y trans-

críbase al señor Fiscal del Tribunal de Occidente, en respuesta á su nota citada al principio.

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En ocho de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.* Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Febrero nueve de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Por las razones que el señor Procurador general expone en su vista del día de ayer, la Corte Suprema ha dejado de ser competente para conocer, por apelación ó consulta, de negocios como este, en que se trata de confirmar ó nó la sentencia proferida en treinta de Marzo de 1886, por el Juez del Crimen del Circuíto de Panamá, por la cual absolvió á Miguel Borbúa de los cargos que se le hicieron por faltas relativas á su servicio, como Inspector del Resguardo Nacional del Puerto de Panamá. Según los artículos 21 y 99 de la ley 61 (25 de Noviembre) de 1886, "provisional sobre organización y atribuciones del Poder Judicial," etc., y el tenor del artículo 151 de la Constitución, no es esta causa de aquellas que en la actualidad están sometidas en primera ni en última instancia á la Corte Suprema. Por lo tanto, ella se declara incompetente y dispone que este proceso sea remitido al Tribunal Superior del Distrito de Panamá, que es á quien compete el conocimiento, dándose aviso al Juez de la causa.

Notifíquese, cópiese y publíquese en la *Gaceta Judicial.*

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En once de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, nueve de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete.

Este sumario se ha seguido por el Juez del Circuíto de Túquerres, para averiguar la responsabilidad en que hubiera podido incurrir Antonio Angulo, en su calidad de Administrador subalterno de Hacienda Nacional de esa ciudad, por el cambio de una encomienda dirigida al Administrador principal de Popayán; y con fecha 16 de Diciembre último, el Juez mencionado dictó auto de sobreseimiento, el cual consulta con la Corte.

Según lo dispuesto en los artículos 21 y 99, inciso 2.° y 112 de la ley 61 de 1886, es á los Tribunales Superiores de Distrito Judicial á quienes compete decidir consultas en negocios de esta naturaleza, y así lo ha resuelto la Corte en muchos otros casos.

Por lo tanto, de acuerdo con la opinión del señor Procurador general de la Nación, se resuelve: es incompetente la Corte para juzgar este negocio.

Notifíquese y remítase el expediente al Tribunal Superior del Distrito de Pasto en el Departamento del Cauca, déjese copia y publíquese.

Hágase saber al Juez del Circuíto de Túquerres.

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En nueve de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete.

La sentencia definitiva, según el artículo 1,649 del Código Judicial, no es reformable ni revocable por el mismo Juez ó Tribunal que la hubiese pronunciado, á nó ser en los casos de error puramente aritmético, de lo cual aquí no se trata.

Conforme al inciso 4.° de la sección 2.ª, artículo 21 de la ley 61 de 1,886, la Corte Suprema conoce en *última instancia*, no sólo de los recursos de apelación y nulidad, sino también de las consultas de que debe conocer según el Código Militar.

Pronunciada y publicada la sentencia de última instancia, se devolverá al Juez inferior para su notificación y cumplimiento, como así lo dispone el artículo 1,792 del Código primeramente citado.

En consecuencia, habiéndose dictado sentencia en la causa seguida al Coronel Lisandro Leal y Capitán Alejandro Castro, con fecha 27 de Noviembre último, notificada como lo fué en 2 de Diciembre siguiente, y devuelta para su cumplimiento al General en Jefe en 3 de Enero del presente año, de que avisó recibo en 15 de id., no queda contra semejante determinación, sino el recurso de queja, y en tal virtud la Corte Suprema de la Nación declara que no tiene de qué ocuparse en la ilegal articulación promovida por los reos y sostenida indebidamente por el Auditor de Guerra.

Para averiguar la responsabilidad en que haya incurrido dicho Jefe por el quebrantamiento de los artículos 1,650 del Código Judicial y 1,541 del Militar, la Secretaría compulsará copia de la sentencia aludida con sus respectivas notificaciones, así como de la nota remisoria del expediente y recibo mencionados, á cuyas copias agregará la presente articulación y el escrito que en 25 de Enero último dirigió á esta Superioridad el referido Leal, apelando de la misma sentencia, y lo pondrá todo al despacho de S, S. el Presidente de la Corte para el correspondiente repartimiento.

Comuníquese al General en Jefe del Ejército Nacional y archívese el expediente.

José M. Samper.—Manuel J. Angarita,—Julian R. Cock Bayer.—Froilán Largacha.— Antonio Morales.— Benjamín Noguera.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A., Secretario.

En doce de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, quince de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Juan G. Calderón, elevó á este Despacho, desde Mompox, con fecha 20 de Octubre de 1886, una queja, por denegación de justicia, contra el Tribunal Superior de Justicia del Departamento de Bolívar, y en su memorial expresó que desde el 31 de Agosto había ocurrido ante dicho Tribunal exponiendo los agravios que le había causado el Juez de la Provincia mencionada, en un negocio judicial de carácter civil que ventilaba ante él.

Oído el dictamen del señor Procurador general de la Nación, la Corte dispuso, por resolución del veintisiete de Noviembre del año próximo pasado, que se hiciera saber al querellante que estaba en el deber de acompañar la prueba sumaria de su relato, en cumplimiento del artículo 1,738 del Código Judicial. Para dar cumplimiento á esta providencia, se libró el correspondiente despacho cometido al citado Juez, quien hizo la correspondiente notificación á Calderón, en veintiuno de Diciembre, y devolvió el expediente así diligenciado á la Secretaría de la Corte.

El señor Procurador general no ha tenido á bien introducir de oficio queja alguna contra el Tribunal Superior del Distrito de Bolívar, ni el interesado ha llenado el deber legal á que se le mandó llamar la atención.

En consecuencia, la Corte Suprema carece de la base prevista por la ley para dar curso á la querella de Calderón, y dispone que este expediente quede archivado hasta tanto que el Ministerio público ó el querellante formalicen conforme á las disposiciones del Capítulo 1.° Título 10, Libro 3.°, la correspondiente documentación para averiguar la responsabilidad en que pueda haber incurrido el Tribunal de Bolívar.

Notifíquese, cópiese y publíquese en el *Diario Oficial* y trasmítase lo resuelto al peticionario, por la Secretaría, por medio de una nota dirigida al Juez del Circuíto de Monpox.

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y seis de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto que precede al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, diez y seis de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Juez 2.° Superior del Distrito judicial de Cundinamarca, consulta con la Corte la sentencia que ha dictado en catorce de Enero del presente año, por la cual ha condenado á Ricardo Díaz, por el delito de robo de efectos nacionales, á la pena de catorce meses de reclusión penitenciaria.

Los delitos cometidos por particulares, en casos como el presente, no pueden ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia en segunda instancia, conforme á los artículos 21 y 99 de la ley 61 de 1886, sino por el respectivo Tribunal Superior de Distrito. En tal virtud, la Corte se declara incompetente para resolver sobre la consulta de la mencionada sentencia, y ordena que se pase el proceso al Tribunal Superior del Distrito de Cundinamarca, para lo de su resorte.

Notifíquese, cópiese, publíquese y dése aviso al Juez de 1.ª instancia.

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diezisiete de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme,

Bogotá, Febrero veintitrés de mil ochocientos ochenta y siete.

Ramón Guerra A., Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Febrero diez y siete de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—A virtud del conocimiento que tuvo esta Superioridad, en años anteriores, de un juicio civil sobre expropiaciones, en el cual figuraba como actor Norberto Díaz, quien entabló su acción en la ciudad de Popayán, ocurrió la sospecha de que el nombre del demandante era suplantado y había falsedad en el procedimiento. De oficio resolvió la Corte mandar investigar los hechos, entre otros motivos con el de saber si los hermanos Eusebio Casas y Gonzalo G. Casas, ambos Jueces del Circuíto de Popayán, el primero en lo criminal, y el segundo en lo civil, habían incurrido en el delito de falsedad, con relación á un exhorto librado por la Corte respecto del asunto de Norberto Díaz; y para mejor proveer, se dictó auto en primero de Octubre último, por el cual se ordenó que se pidiesen varias certificaciones y se practicasen numerosas diligencias judiciales.

Una vez cumplido dicho auto y recibidos los documentos consiguientes, se dió vista al señor Procurador general, y éste alto funcionario es de concepto, como lo expresa en su exposición del día catorce de los corrientes, que la Corte debe declararse incompetente para seguir conociendo del negocio, á virtud de las modificaciones recientemente introducidas en la legislación.

La Corte, para resolver, considera:

Sea que se trate de un delito común, ó de un delito mixto, ó de mera responsabilidad, en que puedan estar complicados uno ó dos Jueces del Circuíto de Popayán, ú otros funcionarios; es evidente que la Corte Suprema no tiene yá competencia alguna para conocer de este negocio, conforme á las terminantes disposiciones de los artículos 21 y 99 de la ley 61 (25 de Noviembre) de 1886, "provisional sobre organización y atribuciones del Poder Judicial," etc. Al contrario, el conocimiento corresponde al Tribunal Superior respectivo, si se trata de un juicio mixto ó de responsabilidad de Jueces de Circuíto; ó si de otros delitos ó de otros *subalternos* responsables *se trata*, es el mismo Tribunal quien puede dictar las resoluciones del caso.

En consecuencia, la Corte, de acuerdo con el pedimento del señor Procurador general, se declara incompetente para conocer de este negocio. y resuelve que se remitan al Tribunal Superior del Distrito de Popayán (Departamento del Cauca) todos los documentos que componen esta actuación.

Notifíquese, cópiese esta resolución y publíquese en la *Gaceta Judicial.*

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y nueve de los mismos notifiqué al señor Procurador el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Febrero dieziocho de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Juez del Circuíto de Barbacoas consultó con esta Superioridad, vigente como lo estaba entonces, el Código Judicial de la República, el auto que profirió en veintinueve de Octubre del año próximo pasado, sobreseyendo en el procedimiento iniciado desde mil ochocientos ochenta y cuatro, para averiguar si Jacinto Fierro era responsable del delito de introducción de moneda falsa en aquella localidad.

Sustanciada la cansulta en los términos correspondientes, se tiene en consideración para resolver, que, conforme á la ley 61 del año próximo pasado, es á los Tribunales Superiores de Distrito á quienes corresponde el conocimiento, en última instancia, de los delitos de la naturaleza del presente, y en tal virtud, de conformidad con el concepto del señor Procurador general, la Corte Suprema nacional, declara que no es competente para censurar el fallo consultado, sino el Tribunal Superior del Distrito de Pasto, en el Departamento del Cauca, á quien se remitirá el expediente original, con aviso de esta determinación al Juez de la primera instancia.

Notifíquese, déjese la correspondiente copia y publíquese.

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diezinueve de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete notifiqué el auto que precede al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Febrero dieziocho de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Juez de la Provincia de Buga, en el Departamento del Cauca, consulta con esta Superioridad el auto de sobreseimiento dictado en la instrucción sumaria seguida contra Guillermo Márquez, Julio Escobar, Víctor Sedo y socios, por el delito de rebelión.

Conforme al artículo 21 de la ley 61 de 1886, sobre organización del Poder Judicial, la Corte no es competente para conocer en segunda instancia de esta clase de asuntos.

Por tanto, esta Corporación se abstiene de resolver la consulta elevada, y dispone que se envíe el proceso al Tribunal Superior del Distrito judicial del Cauca, para lo de su cargo, y que se de aviso al Juez de la Provincia de Buga.

Notifíquese, cópiese y publíquese en la *Gaceta Judicial.*

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diezinueve de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto que precede al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

ANUNCIOS.

IMPORTANTE.

En beneficio del buen servicio público, se suplica á los caballeros que tengan en su poder Códigos, Compilaciones, tomos de leyes nacionales y de los extinguidos Estados, ú otros libros de propiedad de la Corte Suprema, se sirvan devolverlos, pues ocurre con frecuencia la necesidad de consultar tales obras.

IMPRENTA DE PIZANO, POR J. DELIO UEIBE.

Año I REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 20

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 31 de Mayo de 1887.

CONTENIDO.

Pág.

PERSONAL DE LA CORTE.

Nota sobre el personal del mes de Marzo de 1887 153

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Pronunciada en el juicio de cuentas de Eusebio Grau ..... »
Id. sobre caducidad de la pensión de Valentina Uscátegui de Cáceres 154

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Sobre el sumario instruído en Buena-Ventura respecto de una falsificación telegráfica ..... »
Sobre incompetencia de la Corte para conocer de una causa seguida en Cúcuta, por delito de circulación de moneda falsa 156
Sobre incompetencia de la misma en un sumario por responsabilidad ..... »
Sobre incompetencia de la misma respecto de una causa seguida en Panamá por falsificación de moneda ..... »
Sobre cesasión del sumario instruído contra el finado doctor Nicomedes Conto ..... »
Sobre incompetencia de la Corte para conocer del sumario instruído en Barranquilla contra José Manuel González 157
Sobre incompetencia de la misma para conocer de una consulta del Juez del Circuíto del Atrato ..... »
Sobre incompetencia de la misma en un sumario instruído en Ocaña, por falsedad de un contrato ..... »
Sobre el sumario instruído por el Tribunal del Tolima en un asunto de responsabilidad ..... »
Sobre otra consulta del Juez del Circuíto del Atrató 158
Sobre incompetencia de la Corte para conocer de un sumario iniciado en Cúcuta ..... »

VISTAS DEL PROCURADOR

Emitida respecto de una denuncia hecha contra el Tribunal Superior de Bolívar ..... »

DOCUMENTOS JUDICIALES.

Sentencia pronunciada por el Tribunal Superior de Cundinamarca .. 159
Id. id. sobre incompetencia de la Corte 160
Id. id. sobre reclutamiento en Santander ..... »

ANUNCIOS.

Importante ..... »
Constitución de Colombia ..... »

GACETA JUDICIAL.

PERSONAL DE LA CORTE.

El 1.° de Marzo de 1887 se le concedió licencia al señor Magistrado doctor Froilán Largacha, por enfermedad.

El 7 de los mismos, volvió á ocupar su puesto el señor doctor R. Antonio Martínez.

El 8 entró el señor Magistrado principal, doctor Aristides Calderón al puesto que, como suplente, había ocupado el doctor Largacha.

El 26 ocupó el puesto del señor doctor Calderón, (que se ausentó con licencia), el señor doctor Francisco A. Fernández, como segundo suplente.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, siete de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—La Oficina general de Cuentas trajo á su estudio la cuenta de la Administración del Ferrocarril y Telégrafo de Bolívar, correspondiente al mes de Noviembre de 1882, de que es responsable Eusebio Grau, y en Junio 12 de 1883, por medio de la Sección 6.ª profirió el auto cuyas glosas suman ochenta y nueve pesos cinco centavos ($ 89 05 centavos). Contestadas estas glosas, la Oficina volvió á ocuparse de la cuenta, y en Noviembre 12 de 1883 dictó el auto que en su parte última dice:

"No se estiman satisfactorias las contestaciones dadas á los puntos 3.° y 14.° y que están en igual caso al punto 10.° en lo referente á Pedro Bermejo, porque en el auto número 59 dictado por esta Sección, con fecha trece de Marzo del año en curso, en uno de sus puntos referentes á duplicación de nombres, dijo:..... 'Pero para lo sucesivo la Oficina no admitirá como legales y ciertos los pagos que se hagan á individuos cuyos nombres y apellidos figuren repetidos en las listas, si no se expresa además un segundo nombre ó apellido. Y siendo, como es cierto, que no se ha llenado esta formalidad, esta Oficina no estima satisfactorias las contestaciones dadas á estos puntos; y, por tanto, declara alcance líquido contra el señor Administrador y á favor del Tesoro, la suma á que ascienden los citados puntos 3.°, parte del 10.° y el 14.° que es la de $ 19-20, ordenando se haga esta consignación en la Administración del Ferrocarril y se remita copia de la partida de entero."

De este auto apeló el responsable para ante la Sala de segunda instancia, recurso que le fué cancedido en Febrero 15 de 1884.

La Sala dijo, que el auto apelado estaba arreglado á las disposiciones legales vigentes y al mérito de los documentos, por lo cual lo aprobó en todas sus partes en Mayo 3 de 1884, resolución de la cual apeló Grau para ante la Corte Suprema Nacional.

En esta Superioridad el recurso ha tenido su tramitación legal, y, hallándose hoy en estado de recibir sentencia, pásase á proferirla que se estima legal, previas las siguientes consideraciones:

Las glosas por las cuales se ha deducido el alcance que ha motivado esta apelación, versan todas sobre repetición de nombres de trabajadores en distintas ó en unas mismas listas, sin que haya en tales nombres distinción alguna por un segundo nombre ó apellido.

Manuel Ortega es uno de los nombres repetidos; pero como la glosa se funda en la posibilidad de que la repetición encubra un fraude al Tesoro público, y no en la certeza ó seguridad del fraude, la Corte estima que para resolver en justicia, no debe prescindirse de las siguientes circunstancias: 1.ª El nombre de Manuel Ortega figura repetido, pero no en una misma estación, sino en distintas, á saber: en la estación Montoya y en la estación Salgar; 2.ª En la primera aparece dicho nombre como *trabajador*, ganando $ 0-80 centavos diarios; y en la segunda como *mozo*, con el mismo sueldo; 3.ª En la úna trabajó siete días y en la otra cuatro; y 4.ª La lista de la estación Montoya la autoriza G. N Gómez, y la de la estación Salgar Manuel M. Bula.

Pedro Bermejo. Este nombre se encuentra repetido con tal identidad, que hay razón para considerar que es el nombre de un mismo individuo puesto por duplicado. En efecto, aparece dos veces el nombre de Bermejo en una misma semana, en unos mismos días, en una misma estación, con igual cargo, el de trabajador, con el mismo sueldo, etc., etc.

Nicolás Molina. Este figura dos veces en la estación Montoya, en una misma semana; pero en un caso es *distribuidor de marcas* en la Aduana, y gana $ 1-20, y en el otro es *pintor* y gana $ 0-80 centavos.

Juan Blanco. No figura en una misma estación, sino en distintas, en la una con seis días de trabajo y en la otra con cinco. Autoriza una de las listas Gómez y la otra Bula.

Manuel Cantillo. Está en un caso semejante á Blanco.

Las observaciones anteriores demuestran que la glosa de Pedro Bermejo, que vale $ 2-40, es perfectamente fundada, sin que los descargos dados por el responsable hayan podido desvirtuarla; y que las otras, además de reposar sobre una simple posibilidad, tienen distintos y razonables motivos que las contestan, y que explican satisfactoriamente la existencia de un mismo nombre en distintas listas sin que ello implique fraude alguno.

Verdad es que la Oficina general de Cuentas, en el auto número 59 de 13 de Marzo de 1883, con motivo de duplicaciones de nombres semejantes á las que se han examinado, dijo:... "Pero para lo sucesivo la Oficina no admitirá como legales y ciertos los pagos que se hagan á individuos cuyos nombres y apellidos figuren repetidos en las listas, si no se expresa además, un segundo nombre y apellido." No obstante, como la prevención es perfectamente clara, en ser *para lo sucesivo*, y las cuentas que se examinan, de Noviembre de 1882, son en mucho anteriores á tal prevención, es claro que, aun considerando lo dicho por la Oficina en su auto número 59, como precepto bastante para dar legalidad á las glosas fundadas en ello, todavía tal prevención sería inaplicable al caso.

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: 1.° Revócase el auto venido en apelación, en cuanto á los cargos referentes á Ortega, Molina, Blanco y Cantillo, los cuales se declaran infundados; 2.° Confírmase en cuanto al cargo deducido por la duplicación del nombre de Pedro Bermejo; 3.° Declárase, en consecuencia, alcance líquido contra el Administrador y á favor del Tesoro, la suma á que asciende el citado cargo, que es la de $ 2-40, que debe consignarse en la Tesorería general, y remítase á la Oficina copia de la partida de entero; 4.° Queda así reformado el auto materia de la apelación.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En ocho de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general la precedente decisión.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, ocho de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:— Por una ley especial, expedida en 11 de Junio de 1878, número 35, se concedió una pensión de veinte pesos ($ 20) mensuales á cada una de las hermanas legítimas del Coronel Diego Uscátegui, mientras permanecieran solteras.

Una de las agraciadas, Valentina Uscátegui, contrajo matrimonio conforme á los ritos de la Iglesia Católica, con Rudesindo L. Cáceres; y con noticia de ese acto y previa audiencia del señor Procurador general de la Nación, declaró el señor Ministro del Tesoro, con fecha trece de Septiembre del año próximo pasado, caducada la pensión de la expresada Uscátegui, y lo comunicó á esta Suprema Corte, á quien corresponde decidir definitivamente los puntos relativos á caducidad de pensiones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 884 del Código Militar de la Nación.

En nombre y sin poder de Valentina Uscátegui de Cáceres, hizo valer su hermana Ana Uscátegui, ante el señor Ministro del Tesoro, que el matrimonio contraído ante el Juez respectivo con las formalidades legales, y no el celebrado ante un Ministro de la Iglesia, es el que produce efectos civiles y políticos, conforme á lo dispuesto en el artículo 115 del Código Civil, y que faltando el primero, la pensión debe subsistir; á lo cual, ha contestado, en sustancia, el señor Procurador general lo siguiente:

1.° Que el propósito manifiesto del Legislador, fué el de suplir el apoyo que Diego Uscátegui, muerto en defensa del Gobierno, prestaba á sus hermanas, limitando la gracia al tiempo en que permanecieran solteras; y que supuesto que Valentina Uscátegui, casada eclesiásticamente, cuenta yá con la protección de su esposo, ha cesado el motivo que la ley tuvo en mira para otorgarle dicha pensión;

2.° Que no hace al caso que el apoyo actual emane de obligaciones civiles y morales, ó simplemente de estas últimas, porque siempre es cierto que, en virtud del vínculo sagrado que ha contraído, cuenta con un sostén no menos efectivo y permanente que el que pudiera provenir del matrimonio civil;

3.° Que la inteligencia dada á la ley 35 de 1878, es la misma que se da á todas las generales sobre pensiones, que estriba en que virtualmente llevan la condición de no contar el agraciado con el auxilio de ningún deudo que tenga el deber de asegurar su subsistencia;

4.° Que tratándose solamente de una gracia ó auxilio pecuniario, la ley no produce sus efectos, sino en tanto que estén vigentes y en toda su plenitud las causas que la hayan determinado; y

5.° Que habiéndose abstenido Valentina Uscátegui de Cáceres de celebrar su matrimonio ante el Juez respectivo y de hacerlo constar en el registro del Notario, como lo previenen los artículos 126 y 137 del Código Civil, la omisión culpable de esas formalidades, con que ha pretendido eludir la condición que la ley le impuso para gozar de la pensión, no debe favorecerle en manera alguna, si, por otra parte, consta que es casada con Rudesindo L. Cáceres, conforme á las prescripciones de la Iglesia, y reconocida como tal.

Siendo exactas estas observaciones, la Corte Suprema, fundada en ellas, declara definitivamente, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, que ha caducado la pensión de veinte pesos ($ 20) que la ley 35 de 1878 concedió á Valentina Uscátegui de Cáceres, mientras permaneciera soltera.

Comuníquese esta decisión á Su Señoría el Ministro del Tesoro, hágase saber al señor Procurador general, publíquese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Julián R. CockBayer—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En ocho de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general la precedente decisión.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, siete de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete.

El dos de Septiembre, á las 9 a. m., de 1886, Su Señoría el Gobernador del Departamento Nacional de Panamá recibía el siguiente calograma anónimo: "Buena-Ventura 1. 9. 98. Gobernador—Panamá—Publicóse carta-pacto. Situación angustiosa. Preso Payán.—Auxilíe." Como el Gobernador, General Alejandro Posada, dudase de la veracidad de tan alarmante despacho, pidió por el cable informe inmediatamente al Administrador de la Aduana de Buena-Ventura en estos términos: "Si telegrama alarmante suyo, fírmelo y explique situación. Urge.—Posada."

Este empleado remitió el telegrama del General Posada al Jefe de la Provincia, y éste al Juez del Circuito de Buena-Ventura, para que procediera á averiguar el autor de las noticias falsas alarmantes que habían originado la comunicación del señor Gobernador de Panamá.

Adelantada la investigación, y obrando el Juez como autoridad nacional, porque creyó que el hecho criminoso materia del sumario se refería al orden público, resulta de la declaración de Samuel Guzmán, que éste, con José Tobías Benítez, el primero del citado Septiembre, día en que fué publicada la Constitución en Buena-Ventura, fueron como á las dos p. m. á la Oficina del

Cable submarino, en donde encontraron á David H. Gray, telegrafista, con el cual conferenció Benítez en inglés y convino en poner el calograma de que al principio se ha hablado, dirigido al Gobernador de Panamá. Que Benítez escribió el borrador de ese calograma, Guzmán lo extendió en limpio, y aquél puso el nombre de *Héctor Maes* al pie de la hoja impresa que en la Oficina del Cable debe firmar la persona que expida un despacho telegráfico, aunque sea anónimo, en prueba de que acepta las condiciones establecidas por la empresa para la expedición de calogramas. Que Benítez no pagó inmediatamente el valor del despacho, y lo envió al telegrafista poco después con Carlos Vásquez (Declaraciones de fojas 3, 40, 41, 46, 62 y 63).

El Telegrafista Gray, en su primera declaración, foja ocho, recibida por medio del intérprete Flethher Plisé, pues dice que no sabe el español, expone que la persona que le entregó el calograma para el Gobernador fué un hombre que dijo llamarse "*Héctor Maes*," quien no habiendo tenido dinero allí para pagar el despacho, lo remitió después con un joven á quien no conoce, ni tampoco conoce á *Héctor Maes*, ni sabe que viva en Buena-Ventura.

En su segunda declaración dice el mismo Gray (foja 46) que no conoce á Samuel Guzmán con quien se confrontó; que es la primera vez que lo ve.—Afirmando Guzmán que había presenciado que Benítez había entregado el calograma á Gray, y reconvenido éste, contestó que "ciertamente el señor José Tobías Benítez entregó el calograma en cuestión, y él lo trasmitió á Panamá á las siete de la noche."

Interrogado Gray para que diga si de Panamá pidieron explicación del calograma, el Gobernador ó el Director del Cable, contestó que le estaba prohibido dar respuesta sobre el particular, por la Oficina general de la empresa, y concluyó manifestando que según el reglamento de la Oficina pueden los telegrafistas recibir calogramas anónimos.

En su tercera declaración (foja 62) dice Gray: "que no recibió de *José Tobías Benítez* el parte para transmitirlo, sino de *Héctor Maes*, como yá lo ha dicho otra vez, y que si se dijo en su segunda exposición otra cosa, fué porque el intérprete Juan C. Meléndez, por ante quien se rindió esa declaración, no sabe inglés. Que no dió cuenta á la autoridad al transmitir ese parte, porque ese no es su deber: que respecto del contenido del parte, no sabe si versaría sobre noticias falsas, porque, como no sabe español, no supo lo que decía, y que no sabe qué motivo tendría la persona que introdujo el calograma en la Oficina; que como ha dicho antes, es *Héctor Maes, acompañado del señor Tobías Benítez*.

A fojas 27, corre un esqueleto de los que la Compañía del Cable usa para escribir telegramas. En él se copia bajo la firma del Director de la Oficina J. Davey (quien lo remitió al Juez) el parte transmitido al Gobernador de Panamá, y al pie de las condiciones impuestas por la Compañía á los que expiden telegramas, aparece como aceptante firmado *Héctor Maes*.

No se halló ni aun entre las listas de trabajadores en el Ferrocarril de Buena-Ventura, persona alguna de ese nombre.

El Juez dictó con fecha dieziocho de Noviembre último, un auto, declarando que el hecho sobre el cual versa la investigación, no tiene señalada pena alguna en el Código Penal de la Nación, que por consiguiente, no es de la competencia del orden general y ordena se remitan las diligencias originales á la Corte para los efectos del artículo 6.° de dicho Código.

Oído el señor Procurador y estudiado el punto con vista de las correspondientes disposiciones de la ley penal, para resolver se considera:

El Código Penal nacional no ha señalado, ciertamente, pena alguna á los que transmitan por el telégrafo ó de cualquiera otra manera noticias falsas, aunque sean contra el orden público, y aunque se dirijan á las autoridades de la República y con ellas se produzca alarma ó puedan causarse perjuicios graves, como se causaron con el calograma dirigido al Gobernador de Panamá; pues este funcionario, en previsión de que el parte anónimo pudiera ser puesto por algún amigo del Gobierno, que por temor de los revolucionarios que se hubieran apoderado de la ciudad de Buena-Ventura, no quisiera dar su nombre, despachó para ese puerto, el día dos de Septiembre á las ocho y media de la noche, un batallón en la cañonera Boyacá, comandada por el General José C. Obaldía, con orden de prestar auxilio al Gobierno en el Cauca, y al mismo tiempo avisó por medio de otro buque á Cartagena, al doctor Rafael Núñez, Presidente electo de la República, quien en virtud de la noticia mandó pertrechos á Panamá y armó buque en el Magdalena.

El artículo 203 del Código Penal, citado por el Fiscal del Circuito dice: "Iguales penas sufrirá respectivamente (prisión y arresto) el que publicare ó propagare noticias falsas á sabiendas, y con el objeto de excitar á un motín ó asonada." Se castiga aquí, como se ve, al que excite á un motín ó asonada, publicando ó propagando noticias falsas; pero con el falso calograma no se procuraban delitos como los que definen los artículos 197 y 198 de ese Código, que consisten en reunión y movimiento de gentes contra las autoridades ó contra los particulares.

El designio del transmisor del parte falso fué evidentemente molestar á los empleados del Gobierno, inquietarlos y ponerlos en movimiento, por el efímero placer de hacer un mal sin resultados provechosos para el autor, y sólo por satisfacer antipatías políticas, valiéndose para la ejecución, del abandono en que las autoridades del lugar estarían ese día en que se publicaba la nueva Constitución.

Más, si no se ha incurrido en alguna pena préviamente señalada por la ley penal, con la transmisión del parte falso, es posible que se haya infringido la disposición que en los Códigos de la Nación y del Departamento del Cauca, vigente á la sazón, de conformidad con lo dispuesto en el artículo H de la Constitución, castiga á los falsificadores de documentos privados.

En efecto, para el recibo y transmisión del telegrama embustero, si bien es cierto que no se supuso nombre, ni se falsificó firma en el telegrama mismo, resulta de las declaraciones de Samuel Guzmán, del Telegrafista Gray y del contenido de la hoja del folio 27, que se supuso la persona y el nombre de *Héctor Maes* para que suscribiera las condiciones que la empresa del Cable impone al expositor de telegramas, firma sin la cual, la Oficina no los admite.

El falsificador de esa firma y el que supuso la persona de *Maes*, según los datos hasta ahora recogidos, es *José Tobías Benítez*, á quien ni siquiera se le ha tomado declaración indagatoria: Samuel Guzmán puede ser su cómplice, si no es también autor principal, y el Telegrafista Gray puede estar complicado, según las contradiciones en que incurre, pues dice en su primera declaración que no ha visto ni una sola vez á Samuel Guzmán y que *Héctor Maes* fué quien le entregó el calograma para que lo transmitiera. Después dice que recibió el calograma de Benítez, y en la exposición afirma que fué *Maes* quien le entregó el parte, quien fué acompañado de Benítez y que no ha visto otra vez ni conoce á *Maes*. Parece que en esta última declaración quisiera Gray designar á Guzmán como el supuesto *Maes*, pero que aquél (Guzmán) fué el único que concurrió á la Oficina con Benítez; pero en sus primeras declaraciones dice que no ha visto ni una sola vez á Guzmán y que no conoce á Maes ni lo ha visto.

Sea que Gray sea culpable de la falsificación, ó que haya sido engañado, la transmisión del parte falso y perjudicial á los intereses del Gobierno y aun de particulares, puede acarrear á la Compañía del Cable de Centro y Sur-América responsabilidad civil, por haber dado paso á telegramas de gran trascendencia, en cuanto al orden público, en tiempo de guerra, dirigidos por particulares á empleados públicos, sin consultar con la autoridad política del lugar.

El día 1.° de Septiembre de 1886, aún se hallaba el país en estado de guerra, declarado en Diciembre de 1884, pues hasta el siete del primer mes citado, se declaró por el Gobierno, en decreto de esa fecha, restablecido el orden público en la Nación; Decreto que se publicó el 15 de ese mes en Buena-Ventura (fojas 32 y 33); y conforme al artículo 6.° del contrato celebrado en Lima en 25 de Agosto de 1879, entre el Gobierno de la Nación, representado por su Ministro en el Perú, doctor Pablo Arosemena, y Eulegio Delgado, representante de Fralick Murply & C.ª, sobre establecimiento del Cable submarino que actúa en Buena-Ventura, en los casos de guerra exterior ó de conmoción interior, los Agentes de la empresa deben funcionar bajo la vigilancia de las autoridades locales.

Pero esta responsabilidad civil tiene sus trámites, su tiempo y su lugar para exigirla, y debe hacerse efectiva por el respectivo representante del Ministerio público.

Si la Corte tuviera competencia para ocuparse del asunto en la parte criminal, quizá sería el caso de disponer algo relativamente al delito de falsificación que, como se ha dicho, se alcanza

á ver en el fondo de esta investigación; pero á esta Corporación no le compete el conocimiento de negocios criminales de esta naturaleza. La ley 61 de 25 de Noviembre último, sobre organización judicial, en sus artículos 21 y 99, inciso 2.° y 112 claramente determina, que es á los Tribunales Superiores de Distrito Judicial á quienes corresponde conocer, en consulta ó en grado de apelación, de los negocios criminales de que conocen los Jueces de Circuíto en primera instancia.

Si la Corte ha entrado en detalles acerca de la naturaleza del hecho ejecutado en Buena-Ventura, y á que se refieren estos autos, ha sido por la importancia que él tiene en relación con los intereses de la Nación, y para hacer indicaciones que pueden ponerlo en su verdadera luz, en lo que se roza con las leyes penales.

Como no se dictó por el Juez auto de sobreseimiento, y sólo se remitió el expediente á la Corte para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.° del Código Penal, se dé cuenta al Congreso, no podrían remitirse los autos al Tribunal Superior del Cauca, sino al mismo Juez, para que procediendo de acuerdo con el Código de enjuiciamiento del Departamento del Cauca, le dé al asunto el curso legal, teniendo en cuenta las indicaciones hechas en esta providencia.

Así se resuelve:

Dese cuenta al Consejo Legislativo de lo ocurrido, para los efectos del artículo 6.° del Código Penal.

Notifíquese, déjese copia, y publíquese.

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En ocho de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

En 12 de Febrero de 1887, se dejó copia del auto anterior en el Protocolo (fojas 30 á 37) *Guerra A.* Secretario.

Con fecha 16 de Febrero de 1887, N.° 23 se remitió copia del auto anterior al H. Consejo Legislativo. *Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Febrero siete de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Juez Superior en lo Criminal, del Circuíto de Cúcuta, ha consultado con esta Superioridad la sentencia absolutoria que con fecha seis de Diciembre del año próximo pasado, pronunció en la causa seguida contra Juan Pérez, por el delito de circulación de moneda falsa; y como ha observado el señor Procurador general de la Nación, no está yá en las facultades de la Corte Suprema conocer en última instancia de causas criminales de la naturaleza de la que se trata, atendido lo dispuesto en la Sección 2.ª, Capítulo 2.°, de la ley 61 de 1886, sino que el conocimiento de ellos por apelación ó consulta ha venido á ser de la competencia de los respectivos Tribunales de Distrito, por el hecho de decir la modificación 2.ª del artículo 22 de la misma ley que "las atribuciones conferidas á la Corte Suprema en el Código Judicial, y no asignadas á la Corte Suprema de Justicia, en la Constitución ni en esta ley, serán ejercidas por dichos Tribunales."

Siendo esto exacto, la Corte se declara incompetente para conocer de la consulta mencionada, y dispone que se remita el proceso, para lo de su cargo, al Tribunal Superior del Distrito de Santander, dándose aviso al Juez de la primera instancia.

Hágase saber, déjese copia y publíquese en la *Gaceta Judicial.*

José M. Samper.—Manuel J. Angarita.—Julián R. Cock Bayer.—Froilán Largacha.—Antonio Morales.—Benjamín Noguera.—Manuel A Sanclemente.—Ramón Guerra A., Secretario.

En ocho de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, siete de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete.

Entre los negocios de que debe conocer la Corte Suprema en una sola instancia, según la ley 61 de 25 de Noviembre de 1,886, no se encuentran las causas de responsabilidad que puedan seguirse contra los Jueces Nacionales de Circuítos y los Fiscales de los Juzgados, por falta ú omisión en el cumplimiento de sus deberes.

El conocimiento de ellas corresponde en primera instancia á los Tribunales Superiores de Distrito, en virtud de lo dispuesto en el inciso 2.°, artículo 99 de la ley citada, y en última instancia á la Corte Suprema conforme al inciso 7.°, sección 2.ª, artículo 21 de la misma ley; y como estas diligencias sumarias tienen por objeto averiguar la responsabilidadad en que puedan haber incurrido los Jueces del Estado y el Fiscal de Cundinamarca, por las demoras que se advierten en un sumario en cuya instrucción intervinieron; la Corte Suprema, de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador general de la Nación, dispone que se pase este negocio al Tribunal Superior de Cundinamarca, en la Sala de lo criminal, para lo de su cargo.

Hágase saber esta resolución á dicho Procurador, déjese copia de ella y publíquese en la *Gaceta Oficial.*

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En ocho de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador General.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Este auto fué dictado en el sumario que se instruye por denuncio dado por el señor Dr. Manuel M.ª Zaldúa contra varios funcionarios públicos.

El Secretario, *Ramon Guerra A.*

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Febrero veintiuno de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—La presente causa, seguida contra Antonio Cantoral, Juan Sánchez y Luis Alberty, por el delito de falsificación de moneda, contiene auto de sobreseimiento respecto del primero, y sentencia definitiva, condenatoria, con relación al segundo, y absolutoria respecto del tercero; uno y otra proferidos por el Juez 1.° del Crimen del Circuíto de Panamá. Sin entrar en el examen sustancial, y con razón, el señor Procurador general pide que la Corte Suprema se declare incompetente, por cuanto, conforme á lo dispuesto en la ley 61 (25 de Noviembre) de 1886, "provisional sobre organización y atribuciones del Poder Judicial," etc. (artículos 21 y 99), ha pasado á ser de la competencia de los Tribunales Superiores de Distrito el conocimiento, en segunda instancia, de esta clase de negocios. Así lo reconoce esta Superioridad, y en consecuencia, resuelve:

Nó es competente yá la Corte para conocer de esta causa. Remítase el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá, á quien compete el conocimiento, y dése aviso al Juez de primera instancia.

Notifíquese, cópiese y publíquese en la *Gaceta Judicial.*

José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintidós de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme.

Bogotá, veinticuatro de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete.

Guerra A., Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Marzo siete de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Seguida esta actuación contra el doctor Nicomedes Conto, en su calidad de Administrador de la Aduana de Tuma-

co, cuando llegaba el caso de proferir un auto substancial se tuvo noticia del fallecimiento del sindicado, y se resolvió, por auto del veintitrés de Octubre último, que se pidiesen al Juez del Circuito de Cali los respectivos comprobantes. Este auto ha quedado cumplido, y está legal y plenamente comprobado que dicho doctor Conto falleció en la ciudad de Cali, el diez y siete de Mayo del año próximo pasado, y que este sujeto era el mismo que funcionaba poco antes con el carácter de Administrador de la Aduana de Tumaco. Ha llegado, por lo mismo, el caso de suspender y cortar todo procedimiento, por muerte del sindicado ó procesado, como lo dispone la reforma cuadragésima de la ley 46 de 1876, relativa al artículo 1,419 del Código Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema resuelve: cese todo procedimiento en este asunto, y archívese el expediente, quedando á salvo la acción civil que se haya intentado ó pueda intentar por los trámites legales.

Notifíquese, cópiese y publíquese en la *Jaceta Judicial.*

R. Antonio Martínez.—José M. Samper.—Manuel J. Angarita.—Julián R. Cock Bayer.—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A., Secretario.

En ocho de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, siete de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Juez 2.° de la Provincia de Barranquilla ha remitido el presente sumario en consulta del auto de doce de Enero próximo pasado, por el cual se declara suspendido todo procedimiento criminal, contra José Manuel González, por el hecho de haberse apoderado, en compañía de dos soldados, de una yegua perteneciente á Manuel de Jesús Mendoza.

No siendo competente esta Superioridad para conocer del expresado negocio, á virtud de lo dispuesto en los artículos 21 y 99 de la ley 61 de 1886, se ordena la remisión de este expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar.

Dése cuenta de esta resolución al expresado Juez.

Notifíquese, cópiese y publíquese,

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En ocho de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general la precedente decisión.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia.

Bogotá, Marzo diez de mil ochocientos ochenta y siete.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, siete de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Por no haberse instalado el Tribunal del Distrito del Cauca, ha consultado con esta Superioridad el señor Juez del Circuito del Atrato el auto de sobreseimiento que ha dictado en el sumario instruído contra Samuel Movilla, por varios hechos; pero no siendo la razón expresada motivo legal para que la Corte conozca en última instancia de juicios que, como el presente, no le están atribuídos por el artículo 21 de la ley 61 de 25 de Noviembre de 1886, y que, por el contrario, son de la competencia de los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales, según la modificación 2.ª del artículo 99 de la misma ley, como lo ha manifestado el señor Procurador general de la Nación, se resuelve: remítase el sumario de que se ha hecho mérito al Tribunal del Distrito Judicial del Cauca, á quien corresponde, instalado que sea, si yá no lo está, conocer de la consulta decretada por el Juez del Atrato, á quien se comunicará esta resolución.

Notifíquese, déjese copia y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En ocho de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué la precedente resolución al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, siete de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—En este asunto el señor Procurador general de la Nación ha expuesto lo que sigue:

"Señores Magistrados:

"El Juez Superior del Circuito de Ocaña en el Departamento de Santander, os remite este sumario en consulta del auto de fecha diez de Enero último, por el cual se declara que no hay lugar á formación de causa contra Francisco J. Fernández, Inspector que fué de la línea A de la 9.ª Sección de los Telégrafos Nacionales, y que ha sido denunciado en aquel carácter, como responsable de la falsedad de un contrato sobre postes.

"Conoció del asunto en primera instancia el Juez del Circuito de Ocaña, en virtud de la atribución 9.ª, del artículo 62 del Código Judicial Nacional, cuyo artículo 18, Sección 2.ª, numeral 3.°, señala á ese Supremo Tribunal la atribución de conocer del asunto en última instancia, por apelación ó consulta; pero como esta atribución no fué reproducida en el artículo 21 de la ley 61 de 1886, que organiza provisionalmente los Tribunales y Juzgados nacionales, la decisión de la consulta de que se trata corresponde hoy al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santander, según lo prescrito en el artículo 99 de la ley citada.

"Este Ministerio, en consecuencia, es de concepto que os declaréis sin jurisdicción para conocer del asunto, y remitáis los autos al Tribunal competente, dando aviso de ello al Juez de primera instancia.

"Bogotá, 22 de Febrero de 1887.

"CARMELO ARANGO M."

Siendo estrictamente legales los fundamentos consignados en la vista copiada, la Corte Suprema de la Nación los reproduce en todas sus partes, y en tal virtud declara que carece de jurisdicción para conocer de este asunto, siendo al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santander, á quien compete, conforme al inciso 2.°, del artículo 99, de la ley 61 de 1886, conocer del auto consultado.

Notifíquese, déjese la correspondiente copia, dése aviso de esta determinación al Juez de la primera instancia, y remítase el expediente al expresado Tribunal.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En ocho de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Marzo siete de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Iniciado en el Departamento del Tolima este juicio de responsabilidad contra Joaquín Sicard, Prefecto del "Departamento del Centro" (actualmente Provincia), y Agustín Restrepo, Juez 2.° del Circuito del Guamo, el Tribunal Superior, en Sala de primera instancia, profirió auto de sobreseimiento, con fecha veintinueve de Noviembre del último año; auto que consultó con la Sala de segunda instancia. Como al considerarse nuevamente el asunto, yá estaba en vigor la ley 61 (25 de Noviembre) de 1886, "provisional sobre organización y atribuciones del Poder Judicial," correspondía á la Corte Suprema e

conocimiento en segunda instancia, según la expresa disposición del inciso 7.°, sección 2.ª, del artículo 21 de dicha ley; y así lo resolvió el Tribunal Superior, declarándose incompetente, por auto del veintiséis de Enero del presente año.

Dada vista en esta Superioridad al señor Procurador general, este funcionario ha demostrado, con perfecta claridad, la competencia de la Corte para conocer en segunda instancia; pero como faltan en los autos ciertos documentos necesarios para formar concepto, pide que se revoque el auto consultado y se mande ampliar el sumario, con el fin de que se le perfeccione con dichos documentos.

En efecto, no están comprobados los nombramientos ni la posesión de los sindicados en sus respectivos empleos; y sin esta comprobación no es posible calificar los hechos incriminados á Sicard y Restrepo.

Por lo expuesto, y de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: Primero. Revócase el auto de sobreseimiento consultado; Segundo. Ordénase al Tribunal Superior del Tolima, que, continuando el sumario hasta nueva decisión, haga comprobar el carácter oficial de los sindicados, con los documentos que acrediten que fueron nombrados para servir sus respectivos empleos y tomaron posesión de ellos.

Notifíquese, cópiese, devuélvase el expediente y publíquese este auto en la *Gaceta Judicial.*

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Julián R. Cock Bayer—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En ocho de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general la precedente decisión.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Marzo doce de mil ochocientos ochenta y siete.

Fundado el señor Juez del Circuito del Atrato en que no se había instalado el Tribunal Superior del Distrito del Cauca, ha dirigido en consulta á esta Superioridad el fallo en que ha declarado, en juicio criminal, que no eran de contrabando dos damajuanas de vino que en la canoa "Mora" llevó, entre otros efectos, de Cartagena á Quibdó, Lucas Gómez.

Sabe oficialmente la Corte que dicho Tribunal se instaló yá; pero aunque así no fuera, no sería ese un motivo para que conociera de un negocio que no le está atribuído por la Constitución ni por la ley 61 de 1886, y que el artículo 99 de esta misma declara de la competencia de los Tribunales Superiores de los Distritos judiciales. El señor Procurador general de la Nación, á quien se ha oído, es de igual parecer, y, de acuerdo con lo que ha pedido, la Corte se declara incompetente, y resuelve que, dejándose copia de esta resolución, se remita el expediente al Tribunal del Distrito del Cauca, para lo de su cargo, dándose aviso al señor Juez que ha hecho la consulta.

Notifíquese y publíquese en la *Gaceta Judicial.*

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Julián R. Cock Bayer—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En catorce de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general la precedente decisión.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Marzo doce de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Juez Superior del Departamento de Santander, por auto dictado en veintiocho de Octubre del año anterior, declaró cesante el procedimiento criminal que en ese Juzgado se seguía contra Luis Francisco Cobos, por el delito de homicidio, considerándolo comprendido en el indulto expedido en tres de Agosto del citado año, por el Jefe civil y Militar del extinguido Estado de Santander, por cuanto á que la muerte dada por Cobos á Daniel Mantilla, fué un acto de beligerancia en guerra civil y en desempeño de una comisión militar, no habiéndose podido evitar esa muerte para los efectos de aquella comisión.

El Juez supradicho consultó el auto de cesación del procedimiento con el Tribunal Superior del Departamento de Santander; y éste, por auto de veintiuno de Enero del corriente año, se declaró incompetente, absteniéndose de conocer en el asunto, fundado en que en la Legislación civil y penal de ese Departamento no hay disposición alguna que confiera al Tribunal la atribución de conocer en segunda instancia de causas ó negocios por delitos que no están definidos en esa Legislación, y que hayan sido amnistiados ó indultados por un poder distinto de la Asamblea, no reconociéndose en el Código Penal de Santander delitos políticos de carácter nacional.

Como consecuencia de esta última determinación, el expediente volvió al Juzgado del Departamento; y éste, por auto de nueve de Febrero próximo pasado, dispuso consultar el auto en referencia con esta Suprema Corte, á donde han venido los antecedentes respectivos.

Sustanciado el negocio en la forma legal y con audiencia del señor Procurador general, la Corte pasa á determinar lo que es de ocasión.

Aparte de que el auto del Tribunal de Santander echa en olvido la nueva organización del país, resintiéndose de un régimen que yá no existe, y no teniendo en cuenta la integridad nacional,—el inciso 2.° del artículo 99 de la ley 61 de 25 de Noviembre de 1886, sobre organización y atribuciones del Poder Judicial, decide claramente la cuestión de competencia.

En ese inciso se dice que las atribuciones conferidas antes á la Corte Suprema y no asignadas ahora á ella en la Constitución ni en esta ley, serán ejercidas por los Tribunales Superiores de Distrito; y como á la Corte correspondía antes conocer en segunda instancia de los negocios fallados por los Jueces nacionales de primera, y esa atribución no la tiene actualmente; es claro, según el inciso citado, que corresponde á los Tribunales conocer de los recursos de apelación ó consulta de los negocios de la naturaleza del presente. Así, la Corte no tiene jurisdicción, y sí la tiene el Tribunal de Santander para conocer acerca del auto consultado.

Por lo tanto, la Corte Suprema Nacional, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, se declara incompetente para conocer acerca de la consulta referida, y ordena que el expediente se envíe al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santander, por ser á ese Tribunal á quien corresponde la determinación del caso; dando cuenta del envío al Juez departamental remitente.

Notifíquese, cópiese y publíquese en la *Gaceta Judicial.*

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Julián R. Cock Bayer—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario,

En catorce de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general la precedente decisión.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL.

Señores Magistrados:

De conformidad con lo pedido por este Ministerio, Su Señoría el Magistrado sustanciador dispuso, por auto de 27 de Noviembre de 1886, que se recabara del querellante, señor Juan G. Calderón, la prueba, siquiera sumaria, del denuncio que tiene dado ante vosotros contra los Magistrados del Tribunal Superior del Departamento de Bolívar.

El Juez de la Provincia de Mompox, á quien se comisionó al efecto, se limitó á notificar á Calderón el auto en referencia, y devolvió el expediente, desprovisto de la prueba exigida por la Corte, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 1738 del Código Judicial.

A falta de esa prueba, no es posible apreciar si la queja del querellante tiene por lo menos algún viso de fundamento, y, por lo tanto, cree el infrascrito que debe pedirse de nuevo; á no ser que estiméis más conveniente exigir del Tribunal del Departamento de Bolívar informe sobre la causa de la demora, si la ha habido, en el despacho del negocio á que se refiere la queja de que se deja hecha mención.

Bogotá, 8 de Febrero de 1887.

CARMELO ARANGO.

Señores Magistrados.

El 25 de Noviembre de 1886, el Tribunal Superior del Distrito judicial del Tolima, aplicando las leyes del extinguido Estado del mismo nombre, de acuerdo con el artículo *H* transitorio de la Constitución, declaró sin lugar á formación de causa de responsabilidad contra Joaquín Sicard y Agustín Restrepo, Prefecto el primero del antiguo Departamento del Centro en dicho Estado, y Juez el segudo, del Circuíto del Guamo.

Antes de ocuparnos del asunto, en lo principal, conviene establecer claramente la competencia de la Corte para entrar en su conocimiento; y á ese fin se dirigen las observaciones siguientes:

El Tribunal Superior del Distrito judicial del Tolima había aprehendido el conocimiento del asunto siguiendo la tramitación establecida en el artículo 8.° de la ley 20 de 1880, expedida por la Asamblea legislativa del Estado del mismo nombre, que dice así:

"Artículo 8.° Son atribuciones del Tribunal:

"1.ª Conocer en primera y segunda instancia de las causas que por delitos comunes se sigan contra los Magistrados del mismo Tribunal, y de las de responsabilidad y por delitos comunes contra los Secretarios de Estado, el Procurador, el Tesorero del Estado, los Ministros del Tribunal de Cuentas, el Secretario del Tribunal Superior, los *Jueces de Circuíto*, los *Prefectos de los Departamentos* y los Agentes Fiscales....."

No hay duda de que, aun cuando al iniciarse el procedimiento, éste se dirigía contra dos empleados que no tenían el carácter de nacionales, no obstante dichos empleados han quedado sometidos á todas las disposiciones que la nueva ley provisional orgánica del Poder Judicial contiene, relativas á los Jueces de Circuíto y á los Jefes Superiores de las Provincias (antiguos Prefectos).

El artículo *H* transitorio de la Constitución, al adoptar provisionalmente la legislación de los extinguidos Estados, dió á aquella, en cierto modo el carácter de legislación nacional, y admitió, por consiguiente, la tramitación establecida en el artículo 8.°, yá citado, de la ley 20 de 1880 del Tolima, el cual señala el procedimiento que debe observarse en las causas de responsabilidad ó por delitos comunes contra los Jueces de Circuíto y los Jefes Superiores de las Provincias.

De tales causas debía conocer, según las leyes del Tolima, el mencionado Tribunal Superior, *en primera y segunda instancia*, y yá estaba el asunto para ser decidido en esta última; cuando fué promulgada la ley 61 de 1886, cuyo artículo 21, sección 2.ª, atribución 7.ª, determina que es á ese Supremo Tribunal á quien corresponde conocer en segunda instancia, por apelación ó consulta, de las causas de responsabilidad ó por delitos comunes que se sigan contra los Jueces de Circuíto ó los Jefes Superiores de las Provincias.

Ahora bien, decidido el asunto en primera instancia, conforme á la legislación vigente al tiempo de la decisión, corresponde á esa Suprema Corte resolver en la segunda, de conformidad con la atribución arriba citada.

Determinada así la competencia, debe perfeccionarse el sumario, toda vez que en él se advierten algunas irregularidades.

Los autos han venido á la Corte por remisión que de ellos hizo el Secretario del Tribunal Superior del Distrito judicial del Tolima, en cumplimiento del auto en que dicho Superior Tribunal se declaró incompetente para seguir conociendo del asunto en última instancia, por consulta del sobreseimiento dictado en la primera.

El hecho por el cual se exige responsabilidad á los sindicados, está plenamente comprobado por los informes rendidos por los mismos (fojas 4 á 6 vuelta) y en los cuales Restrepo y Sicard están conformes en que ambos procedieron de acuerdo, el uno como Prefecto, y el otro como Juez del Circuíto, para disponer que Marcelo Morales *alias*, Juan Loaiza ó Luis Ramírez, fuese sacado de la cárcel pública donde permanecía preso, por juicio criminal que contra él se seguía, para que fuese á Cartagena como soldado al servicio del Gobierno nacional, en el mes de Abril de 1886.

Y antes de entrar á examinar si es ó nó delito el hecho que se averigua y qué pena le impone la ley, es necesario que se agreguen á los autos copias autenticadas de los decretos de nombramientos de Restrepo y Sicard, en virtud de los cuales entraron á ejercer sus respectivas atribuciones de Juez del Circuíto del Guamo, y Prefecto del Departamento del Centro del Tolima. Igualmente deben agregarse las copias de las actas de posesión de dichos individuos en calidad de tales empleados.

En consecuencia, es de concepto el infrascrito que revoquéis el auto consultado y mandéis ampliar el sumario en el sentido indicado, reservándose el derecho de alegar definitivamente en el asunto, cuando, si lo estimáis conveniente, se haya hecho la ampliación apuntada.

Bogotá, 25 de Febrero de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

En el sumario instruído para descubrir los responsables del reclutamiento verificado en el extinguido Estado de Santander en los meses de Julio y Agosto de 1884, esa Superioridad dispuso, por auto de 29 de Octubre de 1886, que se pidiera á la Secretaría de Gobierno del Departamento de Santander la nota circular en que, según lo aseverado en la declaración del señor Librado Pinzón, se ordenó el reclutamiento por el Presidente del Estado.

La provisión remitida con tal objeto al Juzgado del Circuíto en lo criminal de la Provincia del Socorro, dió por resultado la agregación al sumario de copia auténtica, expedida por la Secretaría de Gobierno del Departamento de Santander, de las circulares números 127 y 130 de 28 de Octubre y 16 de Agosto de 1884, respectivamente, únicos documentos que se hallaron en esa oficina relacionados con el punto que se investiga.

En la primera de esas circulares, el Poder Ejecutivo del Estado autorizó al Jefe Departamental de Cúcuta para aumentar el pie de fuerza, siempre que esa medida fuera reclamada por las circunstancias, esto es, cuando se temiera fundadamente que podía ocurrir una tentativa de trastorno del orden público ó de oposición á las autoridades legalmente constituídas.

La segunda se dirigió á los Jefes departamentales á quienes se excitaba á que llamaran la atención de los Alcaldes á lo ordenado en el Título 11, Libro 3.° del Código Militar del Estado, á fin de "organizar debidamente la milicia activa en cada uno de los Distritos del Estado."

Como se ve, el Poder Ejecutivo del extinguido Estado de Santander no dispuso el aumento de fuerza activa sino para el caso extremo de tentativa de trastorno del orden público en el Estado, medida con la cual no extralimitó las facultades de que estaba investido (artículo 670 y 671 del Código Militar del Estado); á lo cual debe agregarse que en ninguna de las referidas notas circulares se ordenó que la organización de la milicia activa se verificara por medio del reclutamiento; y antes bien, se previno á las autoridades que procedieran de conformidad con las prescripciones del referido Código Militar.

Las precedentes consideraciones unidas á la circunstancia de que los individuos que han declarado sobre los hechos que son materia de la averiguación, no han inculpado á determinada autoridad ó funcionario, son suficientes, en concepto de este Ministerio, para declarar, como os pide que lo declaréis, sin lugar á seguimiento de causa contra el ciudadano que ejerció las funciones de Presidente del extinguido Estado de Santander en los meses de Julio y Agosto de 1884.

Bogotá, 22 de Febrero de 1887.

CARMELO ARANGO M.

DOCUMENTOS JUDICIALES.

COPIA de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Cundinamarca, en la causa contra Jacinto Algarra.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca—Bogotá, Marzo once de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos y resultando:

1.° Consulta el señor Juez 2.° del Circuíto de Zipaquirá la sentencia que profirió, en veintiuno de Mayo de mil ochocientos ochenta y seis, en la causa seguida contra Jacinto Algarra, y en virtud de la cual condena al encausado á sufrir la pena de dos meses de prisión, por infracción del artículo 223 del Código Penal de la Nación. Fué concedida la consulta legal para ante la Corte Suprema de Justicia, y allí se le dió la substanciación debida, hasta que la ley 61, provisional sobre organización y atribuciones del Poder Judicial, del Ministerio público y algunos procedimientos especiales, separó el artículo 112 del conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, los recursos que conforme al Código Judicial concedían los Jueces de Circuíto para ante esa Superioridad, y los atribuyó á los Tribunales de Distrito;

2.° Venidos los autos y dada la tramitación que la ley establece, ha llegado el caso de resolver en el fondo la consulta aducida, lo que se hace, previas las siguientes consideraciones.

3.° Alejandro Peña ocurrió el veinte de Octubre de mil ochocientos ochenta y cuatro al Juzgado del Circuíto de Zipaquirá, y formuló denuncia contra Jacinto Algarra, por los maltratamientos de obra que recibió del denunciado, en la tarde del día seis del propio mes, en el sitio de "Guaza," á tiempo que el paciente ejercía el destino de Guarda de á pie, de la Salina de Zipaquirá, y por las amenazas y demás agravios hechos;

4.° Adelantadas las diligencias sumarias, éstas no han sido bastantes á establecer los hechos referidos en la denuncia, pues de acuerdo con él declara solamente el testigo Ismael Ramírez (foja 6.ª). Las otras exposiciones no testifican el hecho de los maltratamientos de obra que Peña sufriera, y claramente se deduce que la intervención de distintos individuos, fué causa á evitar que los ultrajes de palabra que Algarra hizo al denunciante llegaran hasta las vías de hecho;

5.° De suerte que el único hecho establecido de un modo preciso, fué el de las amenazas que Algarra hizo á Peña, y los amagos de ofensa que aquél le causara, y nó los maltratamientos de obra, que á excepción hecha del testigo Ismaél Ramírez, no presenciaron ni vieron los demás declarantes; y

6.° Ha venido á los autos la diligencia de posesión que Alejandro Peña tomó del destino de Guarda de á pie, de las respectivas Salinas (foja 8), con la cual se acredita el ejercicio del empleo.

Considerando:

1.° El acto punible que la instrucción sumaria dejó establecido, es, según el concepto emitido por el Procurador general de la Nación, el de la infracción del artículo 226 del Código Penal, y no la del artículo 223 aducida por el señor Juez consultante, como fundamento de su fallo;

2.° Corrobora el señor Agente Fiscal este dictamen, que á su vez acepta el Tribunal, porque si, como se ha dicho, las amenazas ó amagos se hallan acreditados, y nó el que el agredido hubiera recibido heridas, golpes ó maltratos, la disposición pertinente es la del artículo 226 del Código Penal, que impone la pena de quince días á dos meses de arresto, y que como tal debería sufrir en el lugar señalado por el artículo 54 del mismo Código Penal;

3.° Ocurren, además, respecto del encausado circunstancias que disminuyen su malicia y gravedad, y es principio legal que establece el artículo 104 del mismo Código Penal, que para la calificación del grado, los Jueces atenderán á la mayor ó menor gravedad, y al mayor ó menor número de las circunstancias que agraven ó disminuyan el delito, conforme á las disposiciones respectivas de la ley; y

4.° A la foja 27 del proceso se halla constancia del tiempo que el enjuiciado había durado preso hasta el veinte de Mayo de mil ochocientos ochenta y seis; y no hay asiento posterior que acredite que el reo haya sido puesto en libertad, lo que hace presumir que haya sufrido una pena mucho mayor de la que le hubiera tocado por la condenación; y en todo caso debe computársele como parte de la pena corporal que se le aplique, el tiempo que haya estado preso, detenido ó arrestado desde la iniciación del procedimiento, por disponerlo así el artículo 1,937 del Código Judicial de la Nación.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, condena á Jacinto Algarra á sufrir la pena de quince días de arresto en la cárcel municipal de Zipaquirá, de acuerdo con los artículos 226 y 54 del Código Penal, computando en esta pena el tiempo que el reo ha estado preso, ó detenido, en cumplimiento del artículo 1,996 del Código Judicial.

Queda así reformada la sentencia de primera instancia, que ha venido en consulta.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase.

Federico R. Rodríguez—Flavio González Malo—Ricardo Bonilla—Gabriel Rosas, Secretario en propiedad.

Es copia.

El Secretario del Tribunal,

Gabriel Rosas.

República de Colombia—Departamento nacional del Magdalena—Secretaría general—Sección de Gobierno—Número 325—Santa Marta, 6 de Mayo de 1,887.

Señor Secretario de la Suprema Corte de Justicia.—Bogotá.

En la fecha se remite á usted por solicitud que ha hecho á este Despacho Su Señoría el Ministro de Gobierno, en nota circular número 1,031, un ejemplar de cada uno de los Códigos y leyes que se expresan:

Uno del Código Penal.
Id. id. id. Régimen Político y Municipal.
Id. de la ley 23 orgánica de Hacienda.
Id. de las leyes de los años de 1,857—67.
Id. id. id. id. id. id. id. id. 1,882—id.
Id. id. id. id. id. id. id. id. 1,877—79.

Para su conocimiento manifiesto á usted que en dicha circular se exige también el envío de los Códigos Civil, Judicial y Militar, que no se remiten por la circunstancia de ser los dos primeros los mismos de Cundinamarca y el Nacional el último, además de haber carencia absoluta en el archivo de esta Secretaría. Respecto á las disposiciones vigentes que también se han solicitado, advierto á usted que se hallan publicadas en el *Registro del Magdalena* que se remite puntualmente á ese Despacho.

Dios guarde á usted.

LUIS S. COTES.

Esta nota se publica por orden de la Corte Suprema.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

ANUNCIOS.

IMPORTANTE.

En beneficio del buen servicio público, se suplica á los caballeros que tengan en su poder Códigos, Compilaciones, tomos de leyes nacionales y de los extinguidos Estados, ú otros libros de propiedad de la Corte Suprema, se sirvan devolverlos, pues ocurre con frecuencia la necesidad de consultar tales obras.

CONSTITUCIÓN DE COLOMBIA.

ESTÁ DE VENTA en la Tesorería general, en edición de cuaderno, á 20 centavos el ejemplar.

IMPRENTA DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 21

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 3 de Junio de 1887.

CONTENIDO.

PÁG.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.
NEGOCIOS CRIMINALES.

Pronunciana en la causa seguida contra el Capitán Esteban Sarmiento y el Teniente Fermín Sarmiento, por homicidio 161

AUTOS INTERLOCUTORIOS.
NEGOCIOS CIVILES.

Pronunciado respecto de un pedimento relativo al fallo pronunciado por la Corte en demanda intentada contra la Compañía del Ferrocarril de Panamá 163
Pronunciado sobre un recurso de apelación, desierto, de M. Cortissoz y Compañía 164
Pronunciado sobre una demanda de Tomás Castellanos, declarada desierta ..... "
Pronunciada sobre una queja dada contra el Tribunal Superior de Panamá ..... "

NEGOCIOS CRIMINALES.

Pronunciado respecto de un auto de sobreseimiento por prescripción. 165
Id. sobre incompetencia de la Corte para conocer de una consulta en sumario por delito de contrabando ..... "
Sobre confirmación de un auto de sobreseimiento consultado por el Tribunal Superior de Cundinamarca 166
Sobre incompetencia de la Corte para conocer de un sumario sobre circulación de moneda falsa ..... "
De sobreseimiento en el sumario instruído contra el General Solón Vilches, por reclutamiento forzoso ..... "
Sobre demora en la resolución del Comandante general del Ejército respecto de un recurso de apelación 167
Sobre un pedimento relativo á la reforma de una sentencia de la Corte ..... "
Sobre incompetencia de la Corte para conocer en una causa por delito político 168

VISTAS DEL PROCURADOR

Emitida respecto de un juicio criminal pendiente, por apelación .. "

ANUNCIOS.

Importante ..... "
Constitución de Colombia ..... "

GACETA JUDICIAL.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Marzo treinta de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El día doce de Abril de mil ochocientos ochenta y cinco fué muerto violentamente Ricardo Sánchez, en el camino que conduce de Medellín á Río-Negro, en el extinguido Estado de Antioquia.

El Jefe Municipal de Río-Negro inició la instrucción sumaria correspondiente, y después de haber practicado las diligencias que creyó conducentes á la investigación del hecho y de sus autores, envió el proceso al Juez del Estado, quien lo complementó hasta donde fué posible, de acuerdo con las indicaciones que le fueron hechas por el respectivo Agente del Ministerio público.

Fueron sindicados del delito en referencia Esteban y Fermín Sarmiento, Capitán el primero y Teniente el segundo de uno de los Cuerpos que pertenecían al Ejército de Reserva, y que prestaban sus servicios en el extinguido Estado de Antioquia.

Como los sindicados eran militares y formaban parte de un Cuerpo que se hallaba á la sazón en campaña, estaban sujetos á la jurisdicción militar; pero el señor Jefe Superior del Estado, en atención á lo dispuesto en los artículos 1,366 y 1,367 del Código Militar, resolvió delegar al Juez del mismo Estado la facultad de conocer del asunto, delegación que este funcionario aceptó. Posteriormente el señor Jefe Superior, por medio de otra resolución, retiró la facultad que había delegado; y el Juez dictó un auto en obedecimiento de esta resolución, auto contra el cual el Agente Fiscal respectivo interpuso recurso de apelación para ante la Corte Suprema.

Sustanciado el recurso, esta Superioridad consideró que, en el fondo, la cuestión era de competencia entre los Jueces ordinarios y la autoridad militar, y decidió el incidente declarando que era á ésta á quien correspondía el conocimiento del asunto.

En tal virtud, el juicio se ha seguido militarmente, y después de haberse observado la tramitación señalada por la ley de la materia, los sindicados han sido juzgados por el Consejo de guerra de Oficiales Generales, y condenados, por sentencia de diez y ocho de Febrero del presente año á sufrir, Fermín Sarmiento la pena de ocho años, como autor principal, y Esteban Sarmiento la de cinco años cuatro meses de reclusión penitenciaria, como cómplice, además de las subsidiarias que establecen las leyes militares y penales.

De dicha sentencia han apelado los reos y por lo tanto han venido los autos á esta Superioridad.

No se encuentra vicio alguno en el procedimiento que sea capaz de anular el juicio, y por lo mismo resta examinar el mérito puramente legal de la sentencia materia del recurso.

El cuerpo del delito está suficientemente comprobado con el reconocimiento de los peritos reconocedores, quienes aseguraron que al cadáver de Sánchez le encontraron una herida ocasionada con un proyectil que parecía de remington, herida que le ocasionó la muerte. El concepto de los peritos, relativo al proyectil, esta corroborado por la declaración de Camilo A. Jaramillo, quien dice vió la herida así como el proyectil y reconoció que era de remington. Varios testigos declararon también que vieron el cadáver de Sánchez.

Respecto de los sindicados hay varios indicios que los señalan como responsables del hecho criminoso.

Consta por las declaraciones de Juan Nepomuceno Gómez y Ascención Celis, que el día doce de Abril de mil ochocientos ochenta y cinco, llegó Ricardo Sánchez á la casa de los testigos, en el sitio de "Chachafruto," entre Medellín y Río-Negro, como á las siete de la noche; que poco después llegaron Esteban y Fermín Sarmiento, y después de haber entrado en conversación con Sánchez, y de altercar, por motivos de política, lo desarmaron, exigiéndole al efecto el revólver que tenía, y que les fué entregado; que últimamente le ordenaron que siguiera con ellos, lo que también verificó Sánchez. Están, pues, plenamente probadas dos circunstancias, á saber: la de haber salido Sánchez de la casa de "Chachafruto" en calidad de preso, bajo la custodia de los sindicados; y la de haber sido desarmado por éstos.

Según el testimonio de varios de los soldados de un destacamento que se hallaba en el sitio de "Mal-paso" cerca de la ciudad de Río-Negro, como á las nueve de la noche del mismo día, llegaron á dicho punto los dos Sarmientos y Ricardo Sánchez; que éste se quejaba de que Fermín lo había estropeado; que en una ocasión en que Sánchez se desmontó para alzar su sombrero, que se le había caído, el mismo Fermín le dirigió palabras de desafío; que después de tomar licor partieron los sindicados, asociados de Sánchez, en dirección á Río-Negro; que los sindicados estaban armados; que yendo como á tres cuadras

de distancia, los soldados del destacamento oyeron tres tiros de revólver y como diez de rémington; que en seguida oyeron lamentos; y que al día siguiente encontraron el cadáver de Sánchez en el sitio donde se habían oído los tiros. Los sindicados en su primera declaración afirman: Esteban Sarmiento, que llegaron con Sánchez hasta el último puente, viniendo de Medellín; que en aquél puente Fermín se adelantó á pedir auxilio, y que como lo atacó Sánchez con el revólver, aquél hizo unos tiros de rémington para asustarlo, y Fermín, afirma que en el sitio indicado se adelantó á pedir auxilio, y que desde la población de Río-Negro oyó los tiros.

Todas estas circunstancias son otros tantos indicios que están plenamente probados; y como son diferentes, están enlazados entre sí, sin depender uno de otro, y concurren todos á demostrar el hecho principal, forman plena prueba contra los sindicados, según el artículo 1621 del Código Judicial.

Falta ahora establecer, conforme al mérito legal de las pruebas, cuál es la responsabilidad especialmente asignable á cada uno de los procesados.

Por las declaraciones de Juan Nepomuceno Gómez y Ascención Celis se comprueba que Fermín Sarmiento ayudó á desarmar á Ricardo Sánchez, en la casa de los declarantes, en el punto de "Chachafruto." La Celis afirma también que Fermín insultaba á Sánchez, y que calzó dos veces el rémington en ademán amenazante; pero estas dos circunstancias no pueden considerarse plenamente probadas, por estar sustentadas por un testimonio singular.

Tomás M. Villa, Clímaco Correa y Manuel A. Villegas, aseveran que al llegar al destacamento oyeron que Fermín injuriaba á Sánchez.

Los testigos Clímaco Correa y Manuel Antonio Villegas aseguran que cuando los Sarmientos llegaron al destacamento, asociados de Sánchez, éste se desmontó para alzar su sombrero, y que entonces Fermín le dirigió palabras de desafío; este indicio está, pues, comprobado.

El testigo Correa expresa también que Fermín abrió el rémington, vió que estaba calzado y dijo: "así es que te quiero;" pero respecto de tal circunstancia no habla ningún otro testigo, y por lo tanto no puede hacerse mérito de ella.

José Dubil Henao declara que se hallaba en Río-Negro el doce á las diez de la noche, á donde había regresado de una comisión; que halló á Fermín Sarmiento buscando su cuartel; y habiéndosele caído el rifle á Fermín, el declarante lo alzó y vió que tenía la cápsula vacía y que echaba humo; y que Fermín le manifestó que había hecho el tiro á la salida para Medellín. Esta circunstancia, importantísima por cierto, no puede tampoco tenerse en cuenta por no estar satisfactoriamente demostrada.

Por último, como yá se ha indicado, Fermín confiesa que llegó asociado de su hermano Esteban y de Ricardo Sánchez hasta más acá del puente último que se halla viniendo de Medellín, es decir, en el lugar donde se oyeron los tiros.

De suerte que los indicios que en el proceso aparecen plenamente comprobados respecto de Fermín Sarmiento, quedan reducidos á los siguientes:

1.° El haber ayudado á desarmar á Sánchez en la casa de Ascención Celis;

2.° El haber injuriado á Sánchez en el punto de "Mal-paso" en presencia de varios de los soldados del destacamento que allí había;

3.° El haber desafiado al mismo Sánchez cuando se desmontó á alzar su sombrero, que se le había caído; y

4.° El haber llegado asociado de su hermano y de Sánchez hasta el sitio donde se ejecutó el hecho criminoso. Aunque como se deja expuesto, hay en el expediente algunas otras circunstancias graves, relativas á la responsabilidad de Fermín, ellas no aparecen plenamente establecidas.

Contra el sindicado Esteban Sarmiento resulta lo que en seguida se expresa:

1.° *Por las declaraciones* de Juan Nepomuceno Gómez y Ascención Celis, se acredita que él ayudó á desarmar á Sánchez en la casa de los declarantes.

2.° Por la confesión del mismo sindicado, aparece que él hizo algunos tiros de rémington en el sitio donde se halló el cadáver de Sánchez; y

3.° Por confesión también del sindicado se demuestra que en su poder se encontró el revólver, el garniel y el sombrero de Ricardo Sánchez.

De estos tres indicios, los dos últimos son notablemente graves. Al efecto, Sánchez murió á consecuencia de una sola herida causada con proyectil de rémington; el procesado confiesa que hizo algunos disparos con dicha arma, en el lugar del suceso, á causa, según dice, de haber sido atacado por Sánchez; lo que es inverosímil, pues consta que Sánchez había sido despojado de su revólver en el punto de "Chachafruto;" no aparece comprobado que otro individuo hubiera hecho disparos de rémington en aquel lugar y en aquella ocasión, luego es natural concluír que el autor principal del delito ha sido Esteban Sarmiento y Fermín Sarmiento su cómplice.

Además, es muy singnificativa la circunstancia de hallarse en poder del sindicado algunos objetos que pertenecían á Sánchez, tales como el sombrero y el garniel, después del supuesto ataque armado que éste hizo á aquél, y de los disparos de rémington que el sindicado hizo en su defensa, según dice.

Hay una aparente oscuridad, respecto de la clase de armas que cada uno de los sindicados llevaba consigo en la noche del suceso. Al efecto, Ascención Celis expresa que cuando los Sarmientos le intimaron á Sánchez que les entregara el revólver, éste se demoró en hacerlo, y entonces Fermín calzó el rémington y amenazó matar á Sánchez, y Juan Nepomuceno Gómez, con referencia á la intimación del desarme hecho á Sánchez, afirma que los Sarmientos golpeaban fuertemente el suelo con los rémington. Clímaco Correa declara que, cuando los procesados y Sánchez llegaron al destacamento, vió que el Capitán Sarmiento tenía un rémington y el Teniente un revólver, mientras que el testigo Manuel A. Villegas afirma lo contrario. Por último, Camilo A. Jaramillo dice que vió que en el viaje á Menellín, esto es, en la época del acontecimiento, los Sarmientos llevaban cada uno un rémington. Pero la oscuridad desaparece observando la armonía que existe en la aseveración de los testigos Gómez y Jaramillo; pues el primero expresa que los Sarmientos golpeaban el suelo con los rémington, lo que está demostrando que cada uno tenía una arma de esa clase; y el segundo dice que en el viaje de los Sarmientos á Medellín, ambos llevaban rémington. Así, pues, debe creerse que los sindicados estaban armados de rémington, sin que á esa creencia pueda oponerse la circunstancia de que llevaran también el revólver que tomaron á Sánchez.

Aparecen también ejecutados por Esteban Sarmiento algunos hechos que pudieran considerarse como circunstancias infirmativas en su favor. Consta, en efecto, que en la casa de Ascención Celis, Esteban calmaba á su hermano, y le contradecía algunas de sus aseveraciones; pero ese hecho está desvirtuado por el de haber vuelto con su hermano á la casa de la Celis, después de haberse despedido de Sánchez, á ayudar á desarmar á éste y á conducirlo preso.

Consta también que Estéban observó la misma conducta, en el lugar donde se hallaba el destacamento; pero todo eso queda desvirtuado por su conducta posterior con Sánchez.

Es del caso averiguar ahora, si las penas aplicadas por el Consejo de Guerra de Oficiales generales, están de acuerdo con el mérito de la actuación y con los preceptos legales.

El Consejo consideró que el delito cometido era el de homicidio, calificado proditorio, en el caso del artículo 470 del Código Penal de la Nación; declaró autor principal á Fermín Sarmiento, y calificada su culpabilidad en primer grado, lo condenó á sufrir la pena de ocho años de reclusión penitenciaria; declaró cómplice del delito á Esteban Sarmiento, y lo condenó á la misma pena de reclusión por el término de cinco años cuatro meses. Además, el Consejo les impuso las penas subsidiarias respectivas, é hizo el cómputo que creyó justo respecto del tiempo de prisión que han sufrido.

La calificación del delito, hecha en la sentencia, está estrictamente fundada en el número 3.° del artículo 470 del Código Penal, por estar demostrado que Sánchez fué privado de su arma antes de la ejecución del hecho.

En cuanto á la culpabilidad de los delincuentes, yá se ha visto que la Corte considera á Esteban Sarmiento como autor principal, y á Fermín como cómplice.

Esteban Sarmiento debe sufrir la pena de ocho años de reclusión, conforme al artículo 472 del Código Penal, por no podérsele imponer la de presidio, según el artículo 1,568 del

Código Militar; y Fermín Sarmiento debe sufrir la de cuatro años cuatro meses, dos terceras partes de ocho, según el artículo 83 del Código Penal.

No pueden tenerse en cuenta, respecto del primero, las circuntancias agravantes ó atenuantes que puedan corresponderse, por ser perentoria la pena establecida por el citado artículo 472.

En el sumario aparece que los sindicados fueron reducidos á prisión el veintisiete de Abril de mil ochocientos ochenta y cinco, y que duraron presos hasta el doce de Septiembre del mismo año, fecha en la cual fueron remitidos por el señor Secretario de Gobierno de la Jefatura Superior de Antioquia, sin que se sepa qué autoridad los puso después en libertad y con qué motivo; de suerte que es preciso computarles también este tiempo.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: 1.° Condénase á Esteban Sarmiento á sufrir la pena de ocho años de reclusión penitenciaria; 2.° Condénase á Fermín Sarmiento á la pena de cuatro años cuatro meses de reclusión penitenciaria, pena en la cual se computará, respecto de ambos condenados, el tiempo transcurrido desde el veintisiete de Abril hasta el doce de Septiembre de mil ochocientos ochenta y cinco; y respecto del primero, desde el veintitrés de Enero del corriente año, hasta la fecha de la presente sentencia; y acerca del segundo, desde el doce del mismo mes hasta la fecha. Esta pena la sufrirán en el Establecimiento de castigo del Departamento de Cundinamarca.

Condénaseles también á las siguientes penas subsidiarias: destitución del empleo y lanzamiento del Ejército; pérdida de toda pensión pagada por la República; suspensión de los derechos políticos mientras dure la pena; pago de las costas procesales; resarcimiento de todos los daños é indemnización de todos los perjuicios.

Como del proceso aparece que fueron sustraídos algunos de los objetos que pertenecían á Ricardo Sánchez, y que llevaba consigo la noche del suceso, sáquese copia de las piezas conducentes, y pásese á la autoridad respectiva para la averiguación del hecho.

Queda en estos términos reformada la sentencia apelada.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente al señor Comandante general del Ejército.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Nogueira—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del día treinta de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, se publicó esta sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En primero de Abril de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general la sentencia que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

En dos de Abril notifiqué la sentencia que precede al doctor Octavio Salazar.

O. Salazar—Guerra A., Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Marzo veintidós de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—No estima la Corte legales los argumentos que aduce el apoderado judicial de la Compañía General Transatlántica, al reclamar, como reclama, del auto de esta Superioridad de fecha diez de Diciembre del año próximo pasado, para que se reforme en el sentido de revocar el del Juzgado de lo civil en Panamá, de fecha veintiséis de Mayo del año anterior, que declaró no probada la excepción de inepta demanda propuesta por dicha Compañía en el juicio que le promovió Anastasio Patiño sobre intereses; y para resolverlo así basta tener en consideración:

1.° Que el Superintendente general del Ferrocarril de Panamá dijo al demandante, en carta escrita en Colón el once de Junio de mil ochocientos ochenta y cinco, cuya traducción corre á foja 12 y siguientes, lo siguiente:

"Con referencia á los bultos reclamados por usted, tenemos el gusto de manifestar que fueron recibidos aquí y puestos á disposición de la Compañía general Transatlántica, la cual rehusó aceptarlos si no se acompañaban á ellos los documentos de la Aduana. Tales papeles habían sido pasados al Agente de aquella Compañía en Panamá, por el nuéstro en esa plaza, y aunque lo ocurrido se puso de manifiesto al Agente en este Puerto, rehusó aceptar, apesar de eso, las mercancías. Como estas quedaron, por lo mismo, en nuestro poder, se perdieron en el incendio, hecho que la Compañía del Ferrocarril se hallaba en imposibilidad de evitar."

2.° Que pedida certificación á los señores Administrador é Interventor de la Aduana de la Guaira (foja 5.ª) sobre la existencia, en aquella oficina, de la factura consular de las cajas perdidas y sobordo del vapor francés *Ferdinand de Lesseps*, que fondeó en aquella rada el cuatro de Febrero del citado año de mil ochocientos ochenta y cinco, cuyos documentos contenían la expresión de las marcas, numeración y peso de los bultos, y sobre si dichos bultos habían sido importados por aquel Puerto expusieron: "ser cierto que reposaban en la mencionada oficina los documentos de embarque, en Panamá, en veinte de Enero último y por el vapor francés *Ferdinand de Lesseps*, de las cuatro cajas á que se contrae el señor Anastasio Patiño, y que también es cierto que dichos bultos no han sido traídos á este Puerto por ninguno de los de la linea francesa."

3.° Que esos documentos fueron reproducidos como prueba por el apoderado de la Compañía Transatlántica, y admitidos como tales por auto del Juez de la primera instancia, fecha diez de Mayo de mil ochocientos ochenta y seis, corriente á foja 29; de manera que la misma Compañía demandada ha comprobado los siguientes hechos:

1.° Que los bultos pertenecientes al demandante fueron puestos á disposición de aquella Compañía por la del Ferrocarril de Panamá;

2.° Que rehusó recibirlos á pretexto de que no acompañaron á ellos los documentos de la Aduana;

3.° Que tales documentos fueron entregados á su Agente en Panamá, pues aunque á éste se le repreguntó (foja 24 vuelta), si era cierto que Patiño le había presentado la factura de Aduana debidamente certificada por el Cónsul de Venezuela, tal repregunta debe estimarse como una evasiva, puesto que fué una cosa muy distinta, como acaba de verse en la carta transcrita, lo que aseveró el Agente general de la Compañía del Ferrocarril;

4.° Que advertida la Compañía demandada de tal entrega á su respectivo Agente, insistió en su negativa;

5.° Que los documentos fueron efectivamente presentados ó entregados, puesto que, de otra manera, no habrían llegado, como en realidad llegaron, á la Aduana del Puerto de su destino, precisamente en el mismo lugar que expresa el conocimiento de embarque; y por último, que ese mismo conocimiento, mandado traducir en esta segunda instancia, en que tanto ha pretendido fundar el reclamante los derechos de su representada, suministra la prueba concluyente de que la acción no ha debido intentarse simultáneamente contra las dos Compañías, puesto que una de sus cláusulas dice literalmente esto:

"Asimismo se estipula que cada una de las dos partes mencionadas, sólo será responsable por pérdidas ó averías sobrevenidas en su propia ruta; que ellas no responderán de mancomún por ninguna pérdida ó daño de los géneros ó mercancías, y que ninguna de ellas será responsable por pérdida ó daños ocurridos en la ruta de la otra, en ningún evento."

Por tales consideraciones la Corte Suprema no encuentra fundamento alguno legal, y así lo resuelve, para revocar la providencia reclamada de que queda hecha mención al principio de la presente.

La Secretaría cuidará en lo sucesivo que se dé cumplimiento, en los respectivos casos, á lo prevenido en el artículo 427 del Código Judicial, y en caso de omisión, dará cuenta oportunamente para los efectos del artículo 176 del mismo Código.

Notifíquese, déjese copia y publíquese con el auto á que se refiere.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Julián R. Cock Bayer—Antonio Morales.—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintitrés de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

En veintitrés de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor doctor Gil Colunje el auto que precede.

COLUNJE.—*Guerra A.*, Secretario.

Se notificó por edicto.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintitrés de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—En pedimento de fecha nueve de los corrientes manifestó el señor Procurador general que se encontraba demorada en esta Superioridad la ejecución trabada por el Administrador principal de Hacienda de Bucaramanga, contra M. Cortissoz y Compañía, por la suma de mil doscientos ochenta y ocho pesos; y que la demora provenía de nó haber consignado el papel sellado necesario dichos ejecutados que interpusieron apelación de la sentencia pronunciada por el funcionario ejecutor, sobre pregón y remate de los objetos embargados y depositados. En consecuencia, el señor Procurador pidió que, de nó consignarse por la parte apelante el papel sellado para la actuación, se declarase desierto el recurso de apelación, conforme á lo dispuesto en el artículo 423 del Código Judicial.

Por auto de mera sustanciación del catorce de este mes, se previno á la parte apelante, que hiciese la consignación necesaria de papel sellado, con apercibimiento de que, de no hacerlo, le pararía en su perjuicio, conforme al citado artículo del Código Judicial. Notificado este auto, por edicto, según consta, sin que el interesado le diese cumplimiento, nuevamente, el señor Procurador ha pedido que se declare por esta Superioridad la desistencia legal de la apelación; y pedido informe al Secretario, éste ha hecho constar que la parte de M. Cortíssoz y Compañía no ha suministrado el papel reclamado. Ha llegado, pues, el caso previsto en el citado artículo 423.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de acuerdo con el pedimento del señor Procurador general, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: que los mencionados M. Cortíssoz y Compañía han desistido implícitamente de la apelación que interpusieron en el juicio ejecutivo á que se refieren estos autos, y está desierto el recurso. Son de cargo de la parte apelante las costas del recurso.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente al Administrador de Hacienda de Bucaramanga.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Julián R. Cock Bayer—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintiocho de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que antecede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Marzo veintitrés de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Con fecha veinticinco de Febrero de mil ochocientos ochenta y dos, Tomás Castellanos formuló demanda contra la Nación, presentada el día primero de Marzo siguiente, para que se declarase nula la adjudicación hecha por el Gobierno á favor de Julio D. Mallarino, de un contrato sobre construcción de un edificio de hierro destinado á la Aduana de Buena-Ventura, y para que se hiciese dicha adjudicación á favor del demandante conforme á las propuestas que había hecho.

En pedimento formulado el nueve del presente mes, hizo presente el señor Procurador general que estaba demorado en esta Superioridad el pleito promovido ante ella por Castellanos, porque éste no suministraba el papel sellado necesario para la actuación. En consecuencia, solicitó, conforme al derecho que le otorga el artículo 423 del Código Judicial que se declarase desierta la acción, por desistencia implícita del actor.

Por auto de sustanciación dictado el día catorce del presente mes, se dispuso requirir á la parte demandante para que consignase el papel sellado necesario para continuar la secuela del juicio; apercibiéndosele con el daño que le sobrevendría, en caso de no cumplir con lo reclamado. Dicho auto fué legalmente notificado y ha surtido sus efectos como formalidad previa, exigida por el citado artículo 423.

Posteriormente el señor Procurador ha insistido en pedir que se declare la desistencia; y, exigido informe al Secretario, éste ha hecho constar que el demandante no ha cumplido con el deber de consignar el papel reclamado. Ha llegado, por lo mismo, el caso previsto en el dos veces citado artículo 423 del Código Judicial.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo con el pedimento del señor Procurador general, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: que el mencionado Tomás Castellanos ha desistido implícitamente de la demanda entablada contra el Gobierno nacional de que se ha hecho mérito, y que tal acción ha quedado desierta. Son de cargo del actor las costas que se hayan causado.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y archívese el expediente.

R Antanio Martínez—José M Samper—Aristides Calderón—Julián R. Cock Bayer—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintiocho de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Marzo veinticuatro de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Felipe Ramírez ocurrió á esta Superioridad manifestando que en un juicio civil que él sigue contra la Compañía extranjera del Ferrocarril de Panamá, sobre indemnización de daños y perjuicios, se dictó en primera instancia fallo á su favor, y que el negocio había venido á parar al Tribunal de Panamá por virtud de apelación. Pero que debiendo corresponder á esta Corte el conocimiento de esa apelación, conforme á la sección 2.ª, artículo 21 de la ley 61 de 1886, su apoderado había instado al referido Tribunal para que diera curso al expediente; y que, á pesar de sus reclamos, no había obtenido resolución alguna y el juicio permanecía paralizado. En suma, el expresado Ramírez denuncia una denegación de justicia y solicita remedio.

Como al ser cierto el hecho materia del denuncio, él pudiera aparejar alguna responsabilidad, se dió vista al señor Procurador general; y éste, en su razonada exposición de veintidós de los corrientes, manifiesta que no se debe proseguir la investigación, hasta que el querellante presente la prueba sumaria sobre el hecho que motiva su reclamación, la cual prueba no aparece, porque la queja vino destituída de todo comprobante; y solicita que esta circunstancia se ponga en noticia de Ramírez para que subsane la omisión.

El parecer del señor Procurador es estrictamente jurídico, pues está conforme con los artículos 1,735, 1,736 y 1,738 del Código Judicial; pero la Corte no ve la necesidad de solicitar oficiosamente de la parte querellante que presente la prueba que ha omitido, tanto porque esa parte debía conocer las disposiciones antedichas, como porque bien puede ser el caso de proceder de oficio; sin que esto perjudique posteriormente los derechos del denunciante.

Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia determina abstenerse, por ahora, de dictar resolución alguna, tocante á la responsabilidad que pueda caber al Tribunal de Panamá, por el hecho mencionado, y que se archiven los antecedentes.

Notifíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Julián R. Cock Bayer—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veinticuatro de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, quince de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos :—Se ha instruído este sumario para averiguar la responsabilidad en que hubieran podido incurrir Dámaso S. Noguera y César E. Bravo, como Jueces que fueron del Circuíto de Guaduas, por demoras en la actuación de un proceso seguido contra Francisco Aguilar H.. en su carácter de Administrador de Hacienda del antiguo Departamento de Guaduas, y el Tribunal Superior de Cundinamarca, en Sala de primera instancia, dispuso, por auto de trece de Noviembre último, que cesara el procedimiento contra los sindicados, por haber prescrito la acción criminal que contra ellos se ejercitaba.

Se consultó esa providencia con la Sala de segunda instancia, y ésta, por auto de catorce de Febrero último, se declaró incompetente para conocer de la consulta, á causa de que la ley 61 de 1886 (25 de Noviembre), sobre organización y atribuciones del Poder Judicial, vigente á la sazón, dispone en el inciso 7.°, sección 2.ª del artículo 21, que á la Corte Suprema corresponde conocer en última instancia de las causas de responsabilidad contra los Jueces de Circuíto, y, en consecuencia, ordenó se elevara el expediente á esta Superioridad para que resolviera la consulta.

Dada al negocio la tramitación correspondiente, ha llegado la oportunidad de decidir:

Es claro que, conforme á la citada disposición legal, es competente la Corte para ocuparse de este asunto, y también lo es, que el auto de trece de Noviembre dictado por el Tribunal es consultable, conforme á lo dispuesto en el artículo 177 del Código Judicial de Cundinamarca; pues aun cuando no es propiamente un sobreseimiento por falta de prueba, el dictado por el Tribunal, es siempre la cesación del procedimiento, á consecuencia de haber transcurrido el término prescrito por la ley para extinguir la acción criminal.

Por lo que toca al fondo mismo de la consulta, es incuestionable que la acción está prescrita, pues las demoras imputadas á los dos ex-Jueces sindicados, ocurrieron en los años de 1882 y 1883, hace más de dos años, y según el artículo 49 del Código Penal de Cundinamarca, basta este tiempo para prescribir la acción criminal, por delitos que no tengan señalada por la ley pena corporal, como no la tiene el de demora cometida en los negocios por los funcionarios públicos, sino solamente el de suspensión temporal del empleo (artículo 206 del mismo Código).

Los Códigos de Cundinamarca son los aplicables á esta cuestión, porque durante su vigencia se cometieron los actos punibles, y esa vigencia aún subsiste, según el artículo H de la Constitución.

Por lo tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con la opinión del señor Procurador de la Nación, confirma el auto consultado.

Notifíquese, cópiese, publíque en la *Gaceta Judicial*, y devuélvase el expediente al Tribunal.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Julián R. Cock Bayer—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y seis de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto anterior.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Marzo quince de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos :—Practicadas en Quibdó las diligencias judiciales del caso para averiguar quién fuese responsable del supuesto contrabando de cincuenta cajitas de jabón de pino, transportadas de Cartagena al río Atrato, se llevó el sumario hasta declararse sin lugar á formación de causa. El mismo Juez que pronunció el auto de sobreseimiento lo remitió en consulta á la Corte Suprema, "por no haberse instalado el Tribunal del Distrito del Cauca," lo que hace reconocer que el Juez de primera instancia comprendía que la Corte no tenía atribución para conocer del negocio por derecho propio. Substanciada esta consulta, el señor Procurador es de concepto, en la vista que precede, que la Corte es incompetente para conocer del asunto, por las mismas razones en que se han fundado numerosísimas resoluciones de esta Superioridad, deducidas de lo dispuesto en los artículos 21 y 99 de la ley 61 (25 de Noviembre) de 1886, provisional sobre organización y atribuciones del Poder Judicial." etc. En el presente caso, que es nuevo, se trata de un sumario por contrabando ó fraude á la renta de Aduanas, y como pudiera parecer que en este caso sí es competente la Corte, por tratarse de un interés directo de la Hacienda nacional, conviene dilucidar el punto y establecer claramente la doctrina jurídica.

El Código Judicial de la Nación determinó claramente en su artículo 62 las atribuciones de los Jueces de primera instancia, entre las cuales figuraban las relativas al conocimiento de las causas de contrabando y muchas otras criminales; y el mismo Código, al especificar las atribuciones de la Corte Suprema, dijo, en la sección 2.ª del artículo 18: conocer en última intancia:

1.° De todos los negocios contenciosos, que se refieran á bienes, rentas ó cualesquiera otros derechos de la Hacienda de la Unión y los cuales se hayan decidido en primera instancia por los Juzgados ó Tribunales de los Estados ó los Territorios.

"5.° De los autos interlocutorios en asuntos civiles ó criminales que en primera instancia sean de competencia de los Jueces nacionales, por apelación ó consulta conforme á este Código.

La Ley 61 de 1886 citada, derogó, por medio de su artículo final, todos los artículos 1.° á 69 inclusive del Código Judicial, sustituyéndolos con todas las disposiciones actuales sobre organización y atribuciones del Poder Judicial. Así, á los Jueces de Circuíto (artículo 111) á más de las atribuciones que tenían en los Estados, ahora Departamentos, dió las que correspondían á los Jueces nacionales de primera instancia, conforme al citado Código Judicial. Pero en cuanto á la jurisdicción en segunda instancia, la modificación adoptada es muy substancial.

Entre las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia, tiene en primer lugar la siguiente:

"Conocer de todos los negocios contenciosos que se refieran á bienes, rentas ó cualesquiera otros derechos de la Hacienda de la República, y los cuales se hayan decidido en primera instancia por los Juzgados de Circuíto."

Esta atribución, es exactamente la misma que el Código Judicial confería á la Corte. ¿Pero, qué atribución le corresponde respecto de los demás negocios de que conocen en primera instancia los Jueces de Circuíto? Las disposiciones del artículo 99 de la citada ley 61 son terminantes. Por regla general hoy corresponden á los Tribunales Superiores de Distrito las atribuciones que fueron propias de los Tribunales Superiores de los extinguidos Estados; y en cuanto á la Corte Suprema, la modificación 2.ª de dicho artículo 99 dice:

"Las atribuciones conferidas á la Corte Suprema *en el Código Judicial*, y no asignadas á la Corte Suprema de Justicia en la Constitución *ni en esta ley*, serán egercidas por los Tribunales Superiores de Distrito.

Toda la cuestión se reduce, pues, á saber si en la Constitución ó en la citada ley 61, hay alguna disposición que faculte á la Corte para conocer en segunda instancia de causas ó sumarios por contrabando. No puede sostenerse en manera alguna que las palabras "negocios contenciosos que se refieran á bienes, reutas ó cualesquiera otros derechos de la Hacienda de la República," contenidas en la atribución 1.ª, sección 2.ª del artículo 21 citado, abarquen los negocios criminales que puedan afectar á la Hacienda. Se comprende muy bien que lo *contencioso* de que se trata es, pleito ó contienda, sobre dominio, posesión ó derechos de cosas pertenecientes al Fisco, mas nó el juicio criminal que se sigue contra los que dañan al Fisco ó atentan á sus derechos é incurren en penas, caso muy distinto del negocio contencioso en que se ventilan derechos y obligaciones.

Tampoco es aplicable ninguna de las atribuciones que el artículo 151 de la Constitución confiere á la Corte Suprema, cuando se trata de un sumario ó causa por contrabando. Esto se halla sujeto á las mismas reglas que los demás delitos comunes, y por lo tanto, compete al respectivo Tribunal Superior de Distrito.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador general, se declara incompetente para

conocer del auto consultado, y dispone que se remita el expediente al Tribunal Superior del Cauca (Buga), á quien compete.

Notifíquese, sáquese copia, publíquese en la *Gaceta Judicial* y hágase saber al Juez remitente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Julián R. Cock Bayer—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En dieziseis de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto anterior.

ARANGO M.—*Guerra A.* Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, diezisiete de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Se iniciaron las presentes diligencias por disposición del Tribunal Superior del Distrito judicial de Cundinamarca, con fecha veintiséis de Octubre del año próximo pasado, á efecto de averiguar si el Juez del Circuito de Zipaquirá, Jesús Castillo F., se había hecho responsable del quebrantamiento de los artículos 334 y 350 del Código de Procedimiento criminal de Cundinamarca, por cuanto en la causa seguida á Julián Hernández por el delito de maltratamientos de obra, admitió al acusado, después de haberse dictado el auto señalando día para la celebración del juicio, la excepción perentoria de prescripción de la acción criminal, y la declaró probada, mandando, en consecuencia, cesar el procedimiento.

El mismo Tribunal que aprehendió el conocimiento del asunto, de acuerdo con la atribución que le confiere el inciso 2.° del artículo 100, de la ley 61 de 1886, dictó el auto de doce de Febrero último, sobreseyendo en el procedimiento y disponiendo se sometiese, por vía de consulta, á la censura de esta Superioridad,

Dado al asunto, en esta segunda instancia, el curso prevenido por la ley, la Corte cree conveniente observar que el Tribunal fundó su determinación en las siguientes consideraciones:

1.ª Que el artículo 6.° del Código de Procedimiento criminal, ordena que cese todo procedimiento por la prescripción de la pena, y que el artículo 48 del Código Penal declara que por la prescripción termina el derecho de imponer pena;

2.ª Que está comprobado que la pena á que habría sido condenado Julián Hernández está prescrita, por haber transcurrido dos años, dos meses, once días, contados desde el seis de Julio de mil ochocientos ochenta y cuatro, en que se cometió el delito, hasta el diezisiete de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis, en que se propuso la excepción;

3.ª Que no hay constancia de que se haya interrumpido la prescripción durante el tiempo que queda señalado, tiempo más que suficiente para prescribir, atendido el término de la pena aplicable, que sería el de seis meses de reclusión penitenciaria, según el precepto del artículo 106 del Código Penal;

4.ª Que si el Juez podía declarar de oficio la prescripción, podía también declararla á petición de parte, en cualquier tiempo, pues que no está expresamente determinado por la ley el tiempo dentro del cual pueda proponerse la excepción de prescripción, como se deduce de las disposiciones del capítulo 2.°, título 5.°, libro 3.° del Código Judicial.

Y como todas estas consideraciones están fielmente deducidas del mérito de la actuación y de las disposiciones legales en que se apoyan, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto de que viene hecha mención, de acuerdo en todo con el concepto del señor Procurador general.

Notifíquese, déjese copia, publíquese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Julián R. Cock Bayer—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diezinueve de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Marzo diezíocho de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Juez del Circuíto de Amalfi, en el extinguido Estado de Antioquia, dictó auto de sobreseimiento en la instrucción sumaria iniciada para averiguar el delito de circulación de moneda falsa de que fué sindicado Toribio Tobón.

Consultado dicho auto con el Tribunal Superior de Antioquia, esta Corporación, con fecha once de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis, se declaró incompetente para conocer del asunto, por creer que el hecho de que se trataba correspondía á la jurisdicción nacional; y dispuso devolver el proceso al Juez de primera instancia, á fin de que elevara la consulta á la Corte Suprema de Justicia, lo que se ha verificado.

Expedida la ley 61 de 25 de Noviembre de 1886, esta Superioridad ha dejado de ser competente para conocer de esta clase de asuntos; pero como la referida ley fué promulgada en esta capital el 5 de Diciembre del mismo año, es evidente que el once de Diciembre, cuando el Tribunal dictó su resolución, no estaba promulgada tal ley en el Departamento de Antioquia, y por lo tanto las autoridades judiciales de dicha sección no podían hacer aplicación de ella.

Así, pues, la Corte, de acuerdo con el señor Procurador se abstiene de resolver la consulta de que se ha hecho mención; y dispone que el proceso sea enviado al Tribunal Superior del Distrito judicial de Antioquia, por ser de su competencia, y que se dé aviso al Juez del Circuíto de Amalfi.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Julián R. Cock Bayer—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

Hoy diezinueve de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintiuno de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Varios ciudadanos de las poblaciones de Bucaramanga, Pamplona, La-Concepción y el Socorro, del extinguido Estado de Santander, se dirigieron por telégrafo, en el mes de Julio de mil ochocientos ochenta y cuatro, al Primer Magistrado de la República, pidiéndole protección á los derechos individuales de los miembros de aquella Sección, contra el reclutamiento, de que, decían eran víctimas por parte del Gobierno que entonces presidía el General Solón Wilches. Practicadas las diligencias conducentes, en averiguación de los hechos denunciados, el señor Procurador general de la Nación fué de concepto, con fecha 26 de Octubre de 1886, que se sobreseyera en la actuación, porque no resultaba cargo alguno contra persona determinada; pues todos los testigos declaran que no saben por orden ó disposición de qué autoridad se hacía el reclutamiento, y sólo por inferencia creen que tal medida debió ser decretada por el entonces Presidente, General Wilches; pero la Corte, aunque asintió á esta opinión del señor Procurador, en su auto de fecha 29 de Octubre del mismo año, estimó conveniente, á fin de aclarar más los hechos en investigación, ampliar nuevamente el sumario con la copia de la nota circular de Julio ó Agosto de 1884, que contuviera la orden de reclutamiento dada por el Presidente del Estado. Expedido el despacho correspondiente, fué provisto por el señor Juez del Circuíto en lo criminal, de la Provincia del Socorro, remitiendo las copias de las notas siguientes, que á la letra dicen:

"*Circular número 127—Estado soberano de Santander—Poder Ejecutivo—Secretaría de Gobierno—Socorro, Junio 28 de 1884.*

"Señor Jefe departamental de Cúcuta—San-José.

"El Poder Ejecutivo autoriza ampliamente á usted para aumentar el pie de fuerza existente en ese Departamento, siempre que esa medida sea reclamada por las circunstancias, esto es, cuando se tema fundadamente que pueda ocurrir una tentativa de trastorno del orden público, ó de oponerse á las autoridades legalmente constituídas.

"Inmediatamente procederá usted á recoger las armas de precisión que existan en el Departamento, y á concentrarlas en esa capital, para custodiarlas debidamente, mientras se dispone por este Despacho lo conveniente; usted se pondrá en comunicación con los señores Jefes Departamentales de García Rovira, Ocaña, Pamplona y Soto, áfin de estar al corriente de los acontecimientos que se efectúen en cualquiera de aquellas secciones, y poder prestar, en su caso, el auxilio que sea indispensable para sostener el actual régimen legal, dondequiera que sea amenazado.

"Para dar cumplimiento á las instrucciones que por esta nota se le comunican, debe usted, en todo caso, evitar cualquier procedimiento que produzca alarma y pueda alterar el curso natural de las cosas.

"De usted atento servidor,

"LUIS MARÍA OTERO."

"*Estados Unidos de Colombia—Estado soberano de Santander—Poder Ejecutivo—Secretaría de Aobierno—Circular número 130—Socorro, 16 de Agosto de 1884.*

"Señor Jefe Departamental de.....

"Con el propósito de organizar debidamente la milicia activa en cada uno de los Distritos del Estado, el Poder Ejecutivo espera que usted llame la atención de los señores Alcaldes del Departamento de su mando, á lo ordenado en el Título II, Libro 3.° del Código Militar, previniéndoles el exacto cumplimiento de estas disposiciones en el menor término posible.

"Sírvase dar cuenta del resultado de la presente Circular.

"Su atento servidor,

"LUIS MARÍA OTERO."

De la lectura de estas piezas se deduce claramente que el Presidente sindicado no ordenó el aumento de la fuerza por medio del reclutamiento, sino la organización de la milicia activa, de acuerdo con el respectivo Código Militar, previniendo expresamente á las autoridades la observancia de las prescripciones del citado Código. La consideración expuesta, así como la de que los individuos que han declarado en esta actuación no han determinado con precisión la autoridad ó funcionario que ordenara el reclutamiento, como lo declaró yá la Corte en su auto de fecha 26 de Octubre yá citado, no existiendo la prueba legal de que el hecho del reclutamiento verificado en el extinguido Estado de Santander, en los meses de Julio y Agosto de 1884, se hubiera ejecutado por orden del Presidente Solón Vilches, la Corte no encuentra fundamento sólido para declarar que tal funcionario sea el responsable del hecho denunciado, y en tal virtud, de acuerdo con el dictamen reiterado del señor Procurador, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, sobresee en la presente actuación y declara suspendido todo procedimiento en el asunto de que se trata.

Notifíquese, déjese la copia correspondiente, publíquese en la *Gaceta Judicial* y archívese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Julián R. Cock Bayer—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintidós de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

En el juicio que se sigue al Teniente Jacinto Rodríguez por el delito de insubordinación, la Corte ha dictado el auto siguiente:

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintitrés de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete.

En consideración á que el acusado y el defensor interpusieron el recurso de apelación, en el acto de serles notificada la sentencia condenatoria que pronunció el Consejo de Guerra de Oficiales generales, con fecha ocho de Febrero del presente año; á que el Jefe de la sección y mando debió conceder ó negar dicho recurso, como claramente lo previene el artículo 1,509 del Código Militar; y á que, pendiente dicho recurso no ha debido remitirse el expediente en consulta, como se ha hecho, pues conforme al inciso 3.° del artículo 82 del Código Judicial de la Unión, la jurisdicción de la expresada autoridad militar no está suspendida, ni ha podido, por consiguiente, ser devuelta á esta Superioridad, mientras no se concediese dicho recurso; la Corte Suprema se abstiene, por estos motivos, de entrar á ocuparse de lo principal del asunto, y dispone que vuelva el expediente á la autoridad remitente, para que proceda con arreglo á derecho respecto del punto de cuya omisión se trata.

Se llama la atención de la expresada autoridad militar á la demora á que dió lugar, disponiendo remitir los autos en consulta á esta Superioridad á los diez y siete días de haberse interpuesto el recurso de apelación; demoras que contribuyen á hacer ineficaces las penas á que se hacen acreedores los acusados.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Julián R. Coke Bayer—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veinticuatro de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintiuno de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Por escrito de ocho del presente mes, el Capitán Alejandro Castro N. ocurrió á Su Señoría el Presidente de esta Corte, pidiendo se declarase estar yá cumplido el tiempo de la pena de doce meses de prisión que debía sufrir en la Penitenciaría de Tunja conforme á la sentencia de esta misma Superioridad, de fecha veintisiete de Noviembre del año próximo pasado, fundada dicha petición en que él estuvo detenido por consecuencia del respectivo juicio, nó desde el treinta y uno de Agosto del citado año, como lo expresa la referida sentencia, sino desde el veintiséis de Febrero del mismo año.

Dada vista al señor Procurador general, este funcionario, en respuesta, después de manifestar que, en su concepto, las certificaciones acompañadas al pedimento no prestan el mérito legal bastante para comprobar el hecho de la detención desde la fecha últimamente referida, continúa así:

....."Pero es el caso de que tales apreciaciones carecen de objeto, toda vez que, en vista de los autos, y refiriéndose indudablemente á la detención sufrida por el peticionario desde que se inició el procedimiento contra él (artículo 1,937 del Código Judicial), la Corte, sin tener por qué computar arrestos ó detenciones impuestas con anterioridad á la iniciación del procedimiento y de los cuales pudo muy bien no haber la debida constancia en el proceso, fijó como fecha en que comenzó la detención, el 31 de Agosto de 1886, con relación á la cual no ha terminado aun el tiempo de la condena; maxime si se considera que van transcurridos más de tres meses, desde que se dictó la sentencia de la Corte, sin que el Capitán Castro N. haya sido conducido á Tunja, que es el lugar en que, según dicho fallo, debe sufrir su prisión. Considerado todo esto, repito, las alegaciones del peticionario, aun en el supuesto de que se apoyaran en pruebas de incuestionable mérito legal, serían del todo ineficaces para suspender ó modificar los efectos de la sentencia definitiva de la Corte, por cuanto dicha sentencia no es revocable ni reformable y debe cumplirse en todas sus partes (artículo 1,649 del Código Judicial).

"Por lo demás el precepto legal en este punto únicamente admite excepción (artículo ibidem) para el caso en que se haya incurrido en el fallo definitivo en un error *puramente* y *manifiestamente* aritmético; pero claramente se ve que no es ese el error de que se trata en el asunto que nos ocupa; pues aun concediendo que la Corte no hubiera fijado con exactitud la fecha desde la cual debe comenzarse á contar el tiempo de la condena del Capitán Castro N., tal inexactitud pudo provenir de insuficiencia en los datos respectivos suministrados por el proceso, ó bien de falta de acierto en la apreciación de éstos; lo cual no

constituye el error simple y manifiestamente aritmético á que se refiere la excepción establecida por la ley."

Y teniendo en consideración esta Corte Suprema, que según el artículo 1,891 del Código Judicial de la República, cuando se dude ó haya reclamación sobre si un reo condenado judicialmente ha cumplido su condena, conocerá del negocio el Juez que haya conocido en primera instancia de la causa en que se impuso la pena, y que el procedimiento que debe observarse en estos casos es el determinado en los artículos 1,892 á 1,894 inclusive del mismo Código; declara, oído el concepto del señor Procurador general, que no es competente en la actualidad para conocer de la supradicha reclamación del Capitán Alejandro Castro N.

Notifíquese, déjese la correspondiente copia, publíquese esta resolución y compúlsese previamente copia de lo actuado para agregarla á las diligencias iniciadas con el objeto de averiguar la responsabilidad en que haya incurrido la autoridad militar á quien correspondía ejecutar la referida sentencia de veintisiete de Noviembre del año próximo pasado.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Julián R. Cock Bayer—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintidos de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general la precedente resolución.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Marzo veintiocho de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Seguíase causa criminal en el Juzgado Superior de la Provincia de Guanentá, contra varios individuos que, capitaneados por Abelino y Constantino Gómez y Francisco Ardila, formaron el año de mil ochocientos ochenta y cinco una guerrilla revolucionaria en el Distrito de Onzaga, contra el Gobierno nacional, ejecutando los hechos consiguientes á esta clase de beligerancias en guerra civil; y como el Gobierno expidiera su decreto de 20 de Julio de 1886, sobre amnistía, el Juez que conocía de la causa supradicha, y en virtud de ser político el delito materia del proceso, declaró á los reos comprendidos en la referida amnistía, mandando cesar el procedimiento criminal.

Consultado tal auto con el Tribunal del Distrito de Santander, éste por resolución de veintisiete de Enero del corriente año, se declaró incompetente para conocer del asunto, no considerándose todavía Tribunal en el orden nacional, aun después de expeda la ley 61 de 1886, sobre organización y atribuciones del Poder Judicial. Con tal motivo ha venido el expediente á esta Superioridad.

La Corte, por resolucicnes repetidas y en observancia del artículo 99 de la ley últimamente citada, ha declarado que cesaron en ella las facultades para conocer en asuntos de la naturaleza del presente, que son de la competencia, en segunda instancia, de los Tribunales Superiores de Distrito. Las razones en que la Corte se ha fundado son yá conocidas del público y de varios de los Tribunales, entre ellos el de Santander, y es inútil, por consiguiente, repetirlas.

Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con el señor Procurador general, se declara incompetente para conocer en estos asuntos, y ordena que el expediente se pase al Tribunal Superior del Distrito judicial de Santander para que conozca del auto consultado, dándose aviso de esta determinación al Juez remitente.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Julián R. Cock Bayer—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veinticuatro de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL.

Señores Magistrados.

Por sentencia de 27 de Noviembre de 1886, reformatoria de la dictada por el Consejo de Guerra de Oficiales generales, en 1.° de Septiembre del mismo año, esa Superioridad condenó al Teniente Coronel Lisandro Leal y al Capitán Alejandro Castro N. "á sufrir la pena de dieziocho meses de prisión, el primero, como autor principal, y doce meses de la misma pena al segundo, como cómplice del delito porque se les llamó á juicio," y dispuso que los condenados sufrieran la prisión en la casa penitenciaria de Tunja.

Dicha sentencia fué remitida con el expediente respectivo y para su cumplimiento al Comandante en Jefe del Ejército, en doce de Enero del presente año, y fué recibida por aquel Jefe en 15 de los mismos.

No obstante esto, el fallo de la Corte no se ha puesto en ejecución inmediatamente, por lo menos en lo que se refiere al Teniente Coronel Lisandro Leal, según se colige de los memoriales de fojas 3 y 4, los cuales aparecen suscritos por este Jefe, en Bogotá, con fecha 22 de Enero último.

Esta circunstancia y la de haberse dado curso por la Comandancia en Jefe á una artículación irregular y baldía, promovida por uno de los reos rematados, motivaron la resolución de la Corte, de 10 de Febrero próximo pasado, por la cual se dispuso que, con copia de lo conducente, se iniciaran las diligencias sumarias del caso, para averiguar, si por consecuencia de lo expuesto, el Comandante en Jefe del Ejército es responsable por infracción de los artículos 1650 del Código Judicial y 1541 del Militar.

En vista de los antecedentes consignados en el sumario y habida consideración á que el conocimiento del asunto os corresponde en una sola instancia, estimo conducente que se amplíe la investigación con la práctica de las siguientes diligencias:

1.ª Que se agregue copia autorizada del nombramiento hecho en el señor General Fernando Ponce, para Comandante en Jefe del Ejército, y copia de la correspondiente diligencia de posesión del mismo empleado;

2.ª Que se pida informe á la Sección de mando y Dirección del Ministerio de Guerra, sobre si los reos rematados Lisandro Leal y Alejandro Castro se encuentran cumpliendo su condena en el lugar designado por la Corte, ó sea, en la penitenciaría de la ciudad de Tunja;

3.ª Que, en caso de hallarse los condenados en la referida prisión, informe la misma sección desde qué fecha fueron remitidos á ella; y

4.ª Que, en caso contrario, informe sobre el motivo que haya impedido el cumplimiento del fallo de esa Superioridad.

Bogotá, 4 de Marzo de 1887.

CARMELO ARANGO.

ANUNCIOS.

IMPORTANTE.

En beneficio del buen servicio público, se suplica á los caballeros que tengan en su poder Códigos, Compilaciones, tomos de leyes nacionales y de los extinguidos Estados, ú otros libros de propiedad de la Corte Suprema, se sirvan devolverlos, pues ocurre con frecuencia la necesidad de consultar tales obras.

CONSTITUCIÓN DE COLOMBIA.

ESTÁ DE VENTA en la Tesorería general, en edición de cuaderno, á 20 centavos el ejemplar.

IMPRENTA DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPÚBLICA DE COLOMBIA Número 22

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 10 de Junio de 1887.

CONTENIDO.

	Pág.
AUTOS INTERLOCUTORIOS.	
NEGOCIOS CIVILES.	
Sobre incompetencia de la Corte para conocer de un juicio entre varios extranjeros	169
Sobre un incidente promóvido por el señor Procurador general	"
Sobre un juicio de expropiación promovido en Medellín	170
Sobre incompetencia de la Corte para conocer de una demanda contra la Compañía del Ferrocarril de Panamá	"
Sobre incompetencia de la misma, en otro pleito entre extranjeros.	"
Sobre deserción de un recurso de apelación	"
NEGOCIOS CRIMINALES.	
Sobre confirmación de otro del Tribunal Superior de Cundinamarca, de sobreseimiento en negocio de responsabilidad	171
Sobre incompetencia de la Corte para conocer en última instancia en un negocio remitido de Panamá	"
Sobre cesasión de un sumario relativo al ex-Ministro de Gobierno señor Calderón	"
Sobre incompetencia de la Corte para conocer de un sumario por delito político	172
Sobre confirmación de un auto de sobreseimiento dictado por el Tribunal Superior de Antioquia	"
Sobre incompetencia de la Corte para conocer de un sumario por delitos políticos	173
Sobre confirmación de un auto de sobreseimiento dictado en negocio de responsabilidad	"
Sobre incompetencia de la Corte para conocer de una apelación interpuesta en Colón, en causa por delito de circulación de moneda falsa	174
Sobre remisión de un sumario al Tribunal Superior de Pasto	"
Sobre confirmación de un auto de sobreseimiento pronunciado por el Tribunal Superirr de Antioquia	"
VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL.	
Emitida respecto de un pedimento del Capitán Alejandro Castro N.	175
Sobre un sumario de responsabilidad	"
Lista de las leyes remitidas de los Departamentos para el archivo de la Corte Suprema	176

GACETA JUDICIAL.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Marzo treinta de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Enrique Strumthal, súbdito alemán, se presentó ante el Juzgado primero de la Provincia de Barranquilla, demandando á David Santamaría, por la suma de cuatrocientos ochenta y tres pesos setenta centavos ($ 483-70 cs.), procedente del valor de varios efectos que éste tomó en el almacén de aquél.

El Juez, con fecha veintinueve de Enero de mil ochocientos ochenta y seis, pronunció sentencia definitiva, en la cual condena al demandado al pago de la suma de cuatrocientos pesos. De esta sentencia interpuso recurso de apelación el apoderado del demandado, para ante el Tribunal del extinguido Estado de Bolívar, y esta Corporación se declaró incompetente para conocer del asunto en segunda instancia, y dispuso que los autos fueran remitidos á esta Superioridad.

Expedida la ley 46 del presente año, quedó derogado por el artículo 9.°, el inciso 5.° de la sección 2.ª, del artículo 21 de la ley 61 de 1886, y en consecuencia, la Corte Suprema ha dejado de ser competente para conocer en esa clase de asuntos.

Así, pues, la Corte se abstiene de resolver el recurso interpuesto, y dispone que el expediente sea devuelto al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar, por ser de su competencia.

Notifíquese, cópiese y publíquese en la *Gaceta Judicial*.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En treinta de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto precedente.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Marzo treinta y uno de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Desde diez y nueve de Diciembre de mil ochocientos sesenta y cinco, ocurrió Miguel Cuéllar al Juez 1.° del Circuíto de Neiva proponiendo demanda por medio de apoderado, contra el Tesorero de la Nación, por la suma de ochocientos pesos cuarenta centavos ($ 800-40 cs.), procedente de empréstitos, suministros y expropiaciones que le fueron exigidos durante la guerra de 1860 á 1862, y seguido el juicio por la vía ordinaria, dictó el Juez sentencia absolviendo del cargo al Tesoro Nacional, y la consultó con esta Superioridad, por no haberse interpuesto recurso de apelación. Retardado el negocio por causas que por ahora es innecesario expresar, ha pedido el señor Procurador general que, por no haber contribuído la parte demandante (representada hoy por sus herederos), con el papel necesario para la actuación, se le señale el término de veinticuatro horas para que lo suministre, conminándola con que si así no lo hace, se le declarará desistido de la instancia y quedará ejecutoriada la sentencia, en virtud de lo dispuesto en los artículos 423 y 424 del Código Judicial.

Substanciado este incidente, la Corte ha pedido los autos para resolver, y con este fin considera:

Primero. Que, como se ha dicho, el juicio ha venido á esta Superioridad por vía de consulta, sin embargo de que la sentencia fué dictada en favor del Tesoro nacional;

Segundo. Que según el artículo 228 del mismo Código, es actor el que promueve una instancia sea cual fuere, y cuando la segunda se surta por consulta, el Tesoro será considerado como actor en ella.

Tercero. Que en este caso el papel para la actuación debe suministrarlo el Secretario, tomándolo del destinado para el consumo de su oficina, como expresamente lo dispone el artículo 426 del Código citado; y

Cuarto. Que, en consecuencia, el demandante ó las personas que lo representan no han tenido obligación de dar el papel que es de cargo del actor en esta segunda instancia.

Por lo tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, declara que no se está en el caso de lo dispuesto en el artículo 423 del Código Judicial, en que ha apoyado su solicitud el señor Procurador general, y que vuelva á éste el expediente para que promueva lo que corresponda sobre lo principal.

Hágase saber, cópiese y publíquese en la *Gaceta Judicial*.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A. Secretario.

En treinta y uno de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Marzo treinta y uno de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos—El Procurador municipal del Distrito de Medellín, inició ante el Tribunal Superior del extinguido Estado de Antioquia, juicio de expropiación de una zona de terreno perteneciente al señor Hermenegildo Botero, de acuerdo con una ley expedida por la Legislatura del referido Estado, sobre mejoras materiales, en la cual se consideró de utilidad pública la prolongación y completo arreglo de algunas de las calles de la ciudad de Medellín.

El Tribunal, según la Legislación vigente en aquella Sección aprehendió el conocimiento del asunto, y, por resolución de fecha cinco de Agosto de mil ochocientos ochenta y seis, declaró que era llegado el caso de decretar la expropiación solicitada.

Adelantado el juicio y cuando se trataba de posesionar á los peritos que debían practicar el avalúo de la faja de terreno, el Tribunal observó que, conforme á la ley 61 de 1885, había dejado de ser competente para intervenir en estos asuntos, y dispuso que pasase lo actuado al Juez 1.° del Circuito de Medellín en el Ramo civil; contra esa providencia interpuso recurso de apelación el señor Fiscal de dicho Tribunal, y con ese motivo han venido los autos al Despacho de la Corte.

Conforme al Inciso 2.°, Sección 2.ª, Artículo 21 de la ley 61 de 1886, los juicios de expropiación ó enajenación forzosa, deben ventilarse en primera instancia ante los Juzgados de Circuito y en segunda ante la Corte Suprema; de suerte que es estrictamente legal la resolución dictada por el Tribunal del Distrito judicial de Antioquia, mandando pasar el proceso al Juez respectivo, con la mira, sin duda, de que ante este funcionario se surta la primera instancia.

Así, pues, la Corte Suprema, de acuerdo con el señor Procurador, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, confirma el auto apelado.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En treinta y uno de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, treinta y uno de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Isidoro Burgos, como apoderado de Felipe Ramírez, entabló ante el Juez civil del Departamento de Panamá, en el extinguido Estado del mismo nombre, demanda ordinaria contra la Compañía del Ferrocarril de Panamá, por daños y perjuicios ocasionados en la persona é intereses de su poderdante, por culpa, según se afirma, de uno de los empleados de la Empresa.

Seguido el juicio por todos sus trámites, se pronunció sentencia en ambas instancias, y antes de notificarse la que fué dictada por el Tribunal Superior de dicha Sección, esa Corporación consideró que era á la Corte Suprema de Justicia á quien correspondía conocer en segunda instancia, y en tal virtud ha enviado los autos á esta Superioridad.

El artículo 9.° de la ley 46 del presente año, derogó el inciso 5.°, Sección 2.ª, del artículo 21 de la ley 61 de 1886; y en consecuencia, son los Tribunales Superiores de Distrito los que deben revisar las sentencias de primera instancia dictadas *por los Jueces de Circuito*, en que se trata de derechos ú obligaciones de extranjeros.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con el señor Procurador, se abstiene de fallar en este asunto, y dispone que el proceso sea devuelto al Tribunal remitente.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En primero de Abril de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

En dos de Abril de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor doctor Juan Félix de León.

DE LEÓN.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, catorce de Abril de mil ochocientos ochenta y siete.

Según el artículo 9.° de la ley 46 del presente año (16 de Marzo), de los juicios en que deban aplicarse las estipulaciones de los tratados públicos, y de todos aquellos en que tengan parte individuos extranjeros, conocerán en primera instancia los Jueces de Circuito y los Municipales, según la cuantía, y en segunda los Tribunales de Distrito y los Jueces de Circuito, respectivamente; y en consecuencia derogó el inciso 5.° de la sección 2.ª, artículo 21 de la ley 61 de 1886.

Y como el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá se apoya en esta última disposición, para declararse incompetente para conocer en la apelación interpuesta en el juicio establecido ante el Juez de Comercio de aquella ciudad, por O. Tremblay y F. Rucabado contra Target y Bolesta, que se dicen extranjeros, y remitir el expediente á la Corte, es claro que no tiene yá jurisdicción esta Superioridad para ocuparse de estos asuntos en grado de apelación, y se resuelve:

Devuélvase este expediente al Tribunal Superior de Panamá, que es al que corresponde conocer en el Estado actual de este juicio.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En quince de Abril de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Abril catorce de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—A virtud de procedimiento ejecutivo seguido por el Administrador de la Aduana de Cartagena, fueron condenados F. & A. Franco, en 23 de Agosto de 1884, á pagar al Tesoro Nacional la cantidad de sesenta y dos pesos diez centavos, las costas del juicio y los intereses respectivos, desde el día diez y siete del indicado mes de Agosto hasta la solución de la deuda.

Alzáronse de tal providencia, para ante esta Superioridad los indicados Francos, habiendo depositado los sesenta y dos pesos diez centavos, capital é intereses liquidados hasta el diez y siete de Agosto yá referido; y venido el expediente, paralizóse su curso con motivo de no haber suministrado los apelantes el papel necesario para la actuación.

Como consecuencia de esto último, el señor Procurador general articuló sobre declaratoria de desistencia del recurso; y sustanciado el incidente, y requerida la parte respectiva para la consignación del papel, con la conminación legal del caso, y notificada la providencia, dicha parte no cumplió con lo exigido, según consta del informe de la Secretaría; habiendo ello dado lugar á que el señor Procurador repita su pedimento, de acuerdo con los artículos 423 y 424 del Código Judicial.

Por lo tanto, la Corte Suprema Nacional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara legalmente desistidos de la instancia en este juicio á F. & A. Franco, y desierto el recurso intentado por ellos, quedando en consecuencia, ejecutoriada la sentencia apelada. Las costas del recurso son de cargo de los apelantes.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En quince de Abril de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Marzo veintinueve de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, remitió en consulta á esta Suprema Corte el auto que pronunció con fecha veintiocho de Febrero del presente año, sobreseyendo en el procedimiento iniciado para averiguar, á virtud de denuncia jurada de Luis María Acuña, si Benjamín Castro, en su carácter de Juez 2.° del Circuíto de Cáqueza, se había hecho responsable de la perpetración del delito de detención arbitraria contra la persona del mismo denunciante; y dada á la consulta en esta segunda instancia la tramitación establecida por la ley, se tiene en consideración para resolver, lo conveniente:

1.° Consta de autos que efectivamente el denunciado, en su condición de Juez del mencionado Circuíto, de cuyo empleo consta también que estaba en posesión, expidió la boleta que en copia se registra á foja 1.ª, mandando detener al denunciante en la cárcel pública, como realmente estuvo detenido, desde el trece de Septiembre de mil ochocientos ochenta y cuatro, hasta el día siguiente á las once de la mañana, como aparece comprobado en los mismos autos;

2.° No existe la prueba legal de que el sindicado hubiera procedido sin motivo alguno para ello, en la detención de que se trata, y antes bien, resulta que lo hizo en cumplimiento de su deber, porque teniendo pendiente el denunciante un juicio criminal, su fiador de cárcel segura lo había presentado á la autoridad del Juez, apartándose de la fianza; y

3.° Pero suponiendo que el Juez hubiera procedido arbitrariamente, como la pena señalada al delito no podía ser otra que la de arresto por dos meses á un año, y multa de veinticinco á cincuenta pesos, al tenor de lo que disponen los artículos 243 y 244 del Código Penal de Cundinamarca, sancionado en el año de mil ochocientos ochenta y tres, y como desde la fecha de la detención hasta la del auto consultado, las cuales se han mencionado antes, ha transcurrido un término de mucho más de dos años, es evidente que la acción criminal está prescrita, según lo dispuesto en la parte final del artículo 49 del citado Código, que dice así: "Para los delitos que se castigan con cinco años ó menos de reclusión penitenciaria, pero que se exceda en su mínimun de un año, se prescribe (la acción criminal) por seis años, y por dos años en los demás casos."

Por lo tanto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo en todo con el concepto del señor Procurador general, confirma el auto consultado, como estrictamente arreglado á derecho y al mérito de la actuación.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintinueve de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Marzo veintinueve de mil ochocientos ochenta y siete.

En el número 6,992 del *Diario Oficial*, de fecha diez y seis de Marzo corriente, ha sido publicada la ley 46 de este año, cuyo artículo 9.° deroga el inciso 5.°, sección 2.ª, artículo 21 de la ley 61 de 1886, provisional sobre organización y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio público, que atribuía á la Corte Suprema el conocimiento, en última instancia, de todos los juicios en que tengan parte individuos extranjeros.

En consecuencia, ha cesado la jurisdicción de la Corte para conocer en última instancia en juicios como el presente, establecido en Panamá por Jacques Frothel contra Poppes & Pilides, que ha sido elevado á esta Superioridad, con motivo de ser extranjeros los litigantes; y se dispone:

Devuélvase el expediente al Tribunal Superior del Distrito de Panamá, para los efectos de la ley indicada, por ser dicho Tribunal el competente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintinueve de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general la precedente resolución.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintinueve de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Conociendo la Corte en unas diligencias sumarias contra Julio A. Corredor, á virtud de aviso dado por la Oficina general de Cuentas, y por el hecho atribuído á este último de haber cobrado indebidamente un viático de regreso, como Consul en Amsterdam; se pidieron al Ministerio de Gobierno los antecedentes que en su despacho hubiera, conexionados con el asunto.

Como no obstante las repetidas órdenes de la Corte, no se transmitieran tales antecedentes, habiendo transcurrido diez y siete meses de hacerse tal solicitud, la Corte, por su auto de veintiocho de Febrero último, después de pedir por cuarta vez los antecedentes, ordenó que se sacara copia de lo conducente, para averiguar la responsabilidad en que pudiera haber incurrido el señor Ministro, por tal retardo.

Sacada la copia y repartido el asunto, se pidió el dictamen del señor Procurador general, quien, en su muy acertada exposición de veintiuno de los corrientes, demuestra que conforme á las disposiciones contenidas en los artículos 96, 97, 102 y 151 de la Constitución, y en el inciso 1.°, sección 1.ª, artículo 21 de la ley sobre organización y atribuciones del Poder Judicial, la facultad de conocer de las causas que se sigan contra los Ministros del Despacho, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, corresponde primariamente al Senado, y á virtud de acusación de la Cámara de Representantes; y que la Corte no puede conocer en esta clase de causas, sino secundariamente, y sólo en el caso de que el reo merezca otra pena distinta de la destitución de empleo, ó la de privación ó pérdida de los derechos políticos, y por el tanto de culpa que le corresponda con relación al cargo; y con tales antecedentes el señor Procurador solicita que no se continúe la investigación sumaria, iniciada para averiguar la responsabilidad que pudiera caber por el hecho al principio mencionado.

La Corte, después de examinadas atentamente las disposiciones que se acaban de citar, encuentra perfectamente arreglado á ellas, el concepto del Ministerio público; no siendo llegado el caso de la intervención de la Corte para juzgar, ni teniendo objeto la prosecución de estas diligencias por lo yá dicho.

Por lo tanto, la Corte se abstiene de adelantar en la investigación referida, y ordena que se archiven las diligencias creadas, poniéndose esta resolución en noticia del señor Procurador para lo de su cargo.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Antonio Morales—Francisco A. Fernández—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En treinta de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Abril catorce de mil ocho cientos ochenta y siete.

Con fecha cuatro de Mayo del año próximo pasado, se presentó Jesús Durán, ante el señor Juez Superior del Circuíto de Ocaña, denunciando el hecho de que el veintitrés de Agosto de mil ochocientos ochenta y cinco, Rafael Mantilla, acompañado de una partida de hombres armados, invadió su casa de campo situada en el punto denominado "Las Vueltas," la allanó y tomó de ella doce enjalmas, una escopeta, ocho reses y un caballo, y le entregó todo al titulado Alcalde de los revolucionarios, quien dispuso de tales objetos, enajenando una parte y llevando otra á su casa de habitación.

El Juez de la causa instruyó el sumario correspondiente y le puso término, ordenando, por auto de dos de Diciembre del año próximo pasado, la suspensión de todo procedimiento contra los que pudieran resultar responsables, por considerar que el delito que se estaba investigando era político, y que estaba comprendido en el Decreto sobre indulto, expedido por el Jefe Civil y Militar del Departamento, con fecha 3 de Agosto de 1886.

Vino el expediente á la Corte, en virtud de consulta decretada por el mismo Juez.

De acuerdo con lo dispuesto en el aparte último del artículo 99 de la ley 61 de 1886, sobre organización y atribuciones del Poder Judicial y del Ministerio público, le corresponde al Tribunal Superior del Departamento de Santander conocer de la consulta hecha por el señor Juez del Circuíto de Ocaña, por no ser competente la Corte Supeema para ocuparse de esta clase de negocios. Así lo ha resuelto en casos análogos.

De conformidad con el concepto del señor Procurador general de la Nación, y teniendo en cuenta la disposición legal citada, se declara incompetente la Corte para conocer de la consulta hecha por el señor Juez Superior del Circuíto de Ocaña, de que se ha hecho mérito, y ordena que se devuelva el expediente al Tribunal Superior del Departamento de Santander, que es al que corresponde conocer de ella.

Notifíquese, cópiese y publíquese en la *Gaceta Judicial.*

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En quince de Abril de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general la precedente resolución.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Abril once de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—La Sala de primera instancia del Tribunal Superior del Distrito judicial de Antioquia, consulta con esta Superioridad el auto de sobreseimiento que dictó, con fecha veinticinco de Enero último, en la instrucción sumaria levantada contra el Prefecto de la Provincia del Norte de ese Departamento, Abel González, con motivo de la denuncia que contra éste empleado dirigió Braulio Machado al señor Gobernador.

La Sala de segunda instancia de dicho Tribunal se declaró incompetente, por falta de jurisdicción para decidir la consulta, á consecuencia de lo que dispone el numeral 7.°, sección 2.ª, artículo 21 de la ley 61 de 1886, provisional sobre organización y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio público, y por esto fué elevado el expediente á la Corte.

Oído el señor Procurador general de la Nación y surtida la correspondiente tramitación, es tiempo de resolver.

Sea lo primero examinar la importante cuestión de la competencia de la Corte para conocer de este asunto.

Según la disposición legal citada, la Corte conoce en última instancia *de las causas de responsabilidad*, entre otros empleados, contra los Jefes de Provincia.

Esta división de los Departamentos en Provincias para el servicio administrativo tiene su origen en lo dispuesto en el artículo 182 de la Constitución, que comenzó á regir en toda la República el siete de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis, fecha posterior á la en que se supone que se cometió el delito por el Prefecto González, que fué la de diez y ocho de Agosto del citado año.

Pudiera, en consecuencia, decirse que el sindicado no era en esa época Jefe de Provincia de la entidad política creada por la Constitución, sino Prefecto de un Departamento del antiguo Estado soberano de Antioquia, y que, por consiguiente, y no obstante lo establecido después por la ley 61, que atribuye á la Corte la decisión en última instancia de las causas de responsabilidad contra los Jefes de Provincia, la Corte no pudiera juzgar ésta por no tratarse en ella de un empleado que llevara esta denominación cuando cometió la falta.

Pero debe tenerse presente que en la división secundaria administrativa del antiguo Estado de Antioquia, Departamento equivale á Provincia, según la nueva Constitución, y los Prefectos no son otra cosa que Jefes de Provincia; y nó porque el Prefecto del antiguo Departamento del Norte en el extinguido Estado de Antioquia estuviera sujeto en todas instancias, en las causas que por razón del ejercicio de sus funciones se le siguieran, á la jurisdicción del antiguo Tribunal Superior de aquel Estado, y por la ley 61 se dé á la Corte la facultad de juzgar esas causas en última instancia, se puede sostener que se le juzga conforme á leyes que no estuvieron vigentes, cuando se cometió el delito ó culpa, violando de esta manera el artículo 26 de la misma Constitución, que dice: "Nadie podrá ser juzgado sino conforme á leyes prexistentes al acto que se le imputa, ante el Tribunal competente y observando la plenitud de las formas propias de cada juicio."

Esta disposición se refiere á leyes substantivas, y nó á las leyes sobre organización y procedimiento judicial, las cuales se aplican á los juicios en el estado en que se hallen cuando la ley fuere expedida. Por esto el artículo constitucional distingue entre leyes preexistentes al acto que se impute y la autoridad que ha de juzgar, por lo que se relaciona con el acto mismo imputable, exige que la ley aplicable sea preexistente; y por lo que mira á la jurisdicción y al procedimiento, previene solamente que sea competente el Tribunal que juzgue, y que se observen las formas propias de cada juicio. La facultad de juzgar y el modo de hacerlo, pueden ser materia de leyes posteriores al acto, sin que se viole por ello la Constitución. Sólo cuando se trata de derechos adquiridos con justo título, con arreglo á las leyes civiles por personas naturales ó jurídicas, no pueden ser desconocidos esos derechos ni vulnerados por leyes posteriores (artículo 31 ibid); pero aquí no se trata de derechos adquiridos con justo título, ni mucho menos conforme á las leyes civiles.

Es, pues, competente la Corte Suprema para conocer en última instancia de las causas de responsabilidad que se sigan contra los Jefes de Provincia ó los que hicieran sus veces en los antiguos Estados; pero contra el Prefecto González no se sigue causa: solamente se ha levantado un sumario, en el cual se dictó por el Tribunal de Antioquia auto de sobreseimiento, y conforme al artículo 1,541 del Código Judicial de la Nación, aplicable á los juicios de responsabilidad, por ministerio del artículo 1,792 del mismo Código desde que el auto en que se declare con lugar á seguimiento de causa sea notificado, es cuando puede decirse que hay causa criminal abierta, y por consiguiente podría argüirse que no habiendo aún causa no podría la Corte aprehender el conocimiento de este negocio.

En última instancia, dice la ley 61, debe conocer la Corte de las causas de responsabilidad contra los Jefes de Provincia, y según el artículo 193 del supracitado Código, instancia es el ejercicio de la acción en cada uno de los grados del juicio, definición que no se compadece con la letra de la ley 61, pues solamente en una causa abierta puede haber acción de partes, antes nó, puesto que el Ministerio público sólo interviene para que se esclarezcan los hechos y se descubra el culpable; pero no pide aplicación de pena contra éste.

No obstante esto, como el espíritu de la Constitución es establecer la unidad de Gobierno y de administración de justicia en la República, de suerte que el Tribunal Supremo de ella tenga intervención en el juzgamiento de empleados de cierta categoría, que se verifica en primer lugar ante los Tribunales de Distrito; no adoptando ese principio de unidad en los negocios de responsabilidad que no han sido elevados á la categoría de causas, resultaría la irregularidad profunda de que hasta cierto punto se adoptaría el principio y se desecharía en otro. Los sumarios

seguidos contra determinados funcionarios que no llegaron á ser causas, aunque conforme á la ley deba consultarse el auto que por prescripción ó por falta de prueba dispone abandonar la instrucción, tendría su término en el Tribunal de Distrito, aunque quizá la Corte pudiera estimar enjuiciable al sindicado y abrirle causa. Podría suceder que todos los negocios de responsabilidad contra esos funcionarios se concluyeran sin que la Corte conociera de uno solo, y esto no ha sido el objeto y el espíritu de la ley. Desde este punto de vista es también competente la Corte para conocer de la consulta elevada por el Tribunal de Antioquia, del auto de sobreseimiento pronunciado en este sumario, consulta que debe hacerse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1,641 del Código Judicial de aquel Departamento, vigente hasta hoy por virtud de lo dispuesto en el artículo transitorio *H* de la Constitución.

Examinado el asunto en el fondo, resulta lo siguiente:

1.° Braulio Machado, de Santa-Rosa de Osos, en el Departamento de Antioquia, tenía, desde hace bastantes años, acciones en la mina de San-Francisco, situada en aquel Distrito, y también las tenía Anacleto Marín, de quien era Machado amigo íntimo y su apoderado ó agente de negocios;

2.° Compró Marín otras acciones en la misma, á algunos herederos de José Antonio Viana, y, creyendo, ó pretendiendo haberles comprado á todos los herederos sus acciones, quizo que se le adjudicara el producto íntegro de ellas, á lo cual se opuso Machado, quien por causas extrañas á este asunto, yá no conservaba relaciones de amistad con Marín. Sin embargo, el producto de esas acciones se le entregaba á éste; pero se llevaba cuenta separada en los libros, respecto de las acciones que Machado aseguraba que Marín no había adquirido legalmente;

3.° En guarda de sus derechos quizo Marín comprar las acciones en las cuales se le contradecía el dominio, y cuando se había convenido con los dueños en la cosa y en el precio, y sólo faltaba para perfeccionar el contrato el otorgamiento de escritura pública, los vendedores se volvieron atrás y vendieron por mayor precio á otras personas, entre ellas á Braulio Machado hijo del denunciante;

4.° Esto irritó á Marín y dió orden por medio de una carta al Director ó encargado de la mina, que lo era Felipe Marín, hermano de aquél, para que le entregara el producto no sólo de lo que le pertenecía legalmente á Marín, sino una parte de lo que le correspondía á Machado por sus acciones, según lo dice éste en sus escritos;

5.° Machado ocurrió en quince de Agosto de mil ochocientos ochenta y seis, al Prefeto de la Provincia del Norte, Abel González, por medio de un escrito en que refiere los hechos, pide que se aplique al culpable el artículo 144 del Código de Policía, y que se le haga entregar el oro á que tiene derecho;

6.° El Prefecto dispuso, por auto de fecha diez y ocho del mismo mes, que pasara el negocio al Alcalde, á quien, según el artículo 2.° de la ley 137 de 1.° de Mayo de 1882, corresponde conocer en primera instancia en asuntos de policía;

7.° Tres meses después Machado, cuando vió que no conseguía su objeto, porque el Alcalde parece que dió al negocio el carácter de denuncia criminal, ocurrió al Gobernador del Departamento, quejándose contra ambos empleados por denegación de justicia;

8.° Su Señoría el Gobernador pasó á la autoridad competente la denuncia, para que instruyera los sumarios, lo que se ha hecho, y en éste, que corresponde al Prefecto, se ha sobreseído como se dijo arriba.

La querella puesta por Machado ante el Prefecto, no tuvo, ni por la naturaleza de las cosas podía tener otro carácter que el de un asunto de policía, pues que en el mismo escrito se invocaba una ley sobre la materia, y no se trataba según el relato del querellante, de un robo, hurto, estafa, abuso de confianza ni otro delito contra la propiedad, sino de una orden á un patrón ó Director de minas, dada por un simple socio, para que hiciera distribución de los productos en determinada forma, orden que cumplida ó nó, no puede tener el alcance de una infracción de la ley penal, pues ésta no prohibe á los particulares proferir esta clase de mandatos.

En esta virtud, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto consultado.

Notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal Superior del Distrito de Antioquia.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En once de Abril de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que antecede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Abril catorce de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Juez Superior del Circuíto de Vélez dictó auto de cesación del procedimiento, en el proceso instaurado contra Heliodoro Forero y Samuel Cárdenas, por delitos políticos.

Consultado dicho auto con el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Departamento de Santander, esta Corporación consideró que era á la Corte Suprema de Justicia á quien correspondía conocer en segunda instancia de los hechos materia de la actuación; y en consecuencia, después de haberse declarado incompetente, ordenó la devolución del proceso al Juzgado de primera instancia, quien lo ha enviado en consulta á esta Superioridad.

Antes de la vigencia de la ley 61 de 1886, la Corte Suprema era la autoridad competente para conocer en segunda instancia de los delitos políticos, conforme al Código Judicial; pero después de la promulgación de la ley en referencia, tal competencia ha cesado, como lo indica claramente el contexto de los artículos 21 y 99 de dicha ley.

Al efecto, el artículo 21 detalla todas las facultades de la Corte, y entre ellas no se encuentra la de conocer, en ninguna forma, de los procesos por delitos políticos; y el inciso 3.° del artículo 99 dispone que "las atribuciones conferidas á la Corte Suprema en el Código Judicial y no asignadas á la Corte Suprema de Justicia en la Constitución ni en esta ley, serán ejercidas por los Tribunales de Distrito."

Así, pues, la Corte Suprema se declara incompetente para resolver la consulta que le ha sido elevada, y dispone que el proceso sea remitido al Tribunal Superior del Distrito Judicial del Departamento de Santander, por ser de su competencia. Dese aviso al Juez de primera instancia.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En quince de Abril de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Abril catorce de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Con fecha 29 de Noviembre de 1886, el Juez Superior del Circuíto de Ocaña, en el extinguido Estado de Santander, dictó un auto por el cual suspende la práctica del sumario levantado para averiguar la responsabilidad en que hubiera incurrido Ignacio A. Hoyos, en su carácter de Jefe de aquel Departamento, y lo declara inhibido de toda responsabilidad, por haber ocupado una casa de propiedad de Antero Lemus, situada en la ciudad citada, en Agosto de 1885, sin observar las formalidades que prescribe la ley 60 de 1882, "sobre garantías para personas y propiedades en tiempo de guerra."

Motiva el Juez su providencia en que no está justificada la culpabilidad del sindicado, y en que por decreto expedido por el Jefe Civil y Militar de aquel Estado, con fecha 3 de Agosto de 1886, en ejecución desde 20 de Julio del mismo año, dado por el Excelentísimo Presidente de la República, se amnistía é indulta á todos los reos de delitos políticos cometidos en la última guerra civil.

Remitido el expediente en consulta del auto de sobreseimien-

to al Tribunal Superior de Santander, esta Corporación se declaró incompetente por auto de fecha treinta y uno de Enero último, por cuanto el delito que se supone cometido es por violación de una ley nacional, y ese Tribunal, según las leyes vigentes, en virtud de lo dispuesto en el artículo *H* de la Constitución, no tiene atribución de juzgar á los empleados infractores de esas leyes, y remitió el proceso al Juez de primera instancia, quien consulta con la Corte su resolución.

Habiéndose observado la tramitación prescrita para estos casos, es tiempo de ponerle término á este asunto.

Vigente hoy la ley 61 de 25 de Noviembre de 1886, provisional "sobre organización y atribuciones del Poder Judicial y el Ministerio público," que estatuye en el numeral 7.°, Sección 2.ª, artículo 21, que corresponde á la Corte conocer en última instancia de las causas de responsabilidad contra los Jefes Superiores de las Provincias, y teniendo en cuenta que el Jefe del Departamento de Ocaña, en el antiguo Estado de Santander ocupa el mismo lugar en la gerarquía administrativa que el Jefe Superior de Provincia, es incontestable, como con justicia lo observa el señor Procurador general, y lo ha resuelto en casos semejantes repetidas veces la Corte, que ella es competente para resolver esta consulta.

En el fondo del asunto se observa que el sumario se instruyó por denuncia dada por Antero Lemus contra el Jefe Departamental Ignacio Hoyos, porque en el mes de Agosto de 1885 le había tomado, para acuertelar tropas al servicio del Gobierno nacional, una casa de su propiedad, situada en el barrio de San-Agustín, en la ciudad de Ocaña, sin observar las formalidades de la ley nacional 60 de 1882.

No hay un solo testigo de los citados por el denunciante que afirme que Hoyos hubiera ejecutado el hecho que se le atribuye, y hay algunos que declaran que él se encontraba en el mes citado en el Distrito de la Cruz con las fuerzas del Gobierno, por haber ocupado el de Ocaña las tropas revolucionarias, y uno de ellos dice que la casa fué ocupada por estas fuerzas el 9 de ese mes, y sucesivamente por gente de los Generales Cuervo y Quintero Calderón, Jefes al servicio de la Nación.

En consecuencia, el sindicado no tiene en su contra ningún testimonio que lo haga aparecer responsable de un hecho violatorio de la ley, y no puede por lo mismo adelantarse esta instrucción, aunque no se hubiera decretado indulto para delitos políticos que se hubieran cometido en la última guerra civil, que comenzó el 18 de Diciembre de 1884, y terminó el 7 de Agosto de 1886, cosa que es inútil discutir ahora por no haber prueba sobre el hecho principal.

Por lo tanto, la Corte, de acuerdo con el concepto del señor Procurador y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, confirma el auto consultado.

Notifíquese, cópiese, públiquese y devuélvase el expediente al Juez del Circuíto de Ocaña.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En quince de Abril de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Abril catorce de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Por recurso de apelación ha venido á esta Superioridad la sentencia proferida por el Juez de la Provincia de Colón, en la cual condena á Avelino Barraza, por el delito de *circulación de moneda falsa*.

Conforme á la ley 61 de 1886, la Corte Suprema ha dejado de ser competente para conocer de esta clase de asuntos; y por lo tanto, esta Corporación se abstiene de resolver el recurso intentado, y dispone que el proceso sea enviado al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá, por ser de su competencia. Asimismo se dará aviso al Juez remitente.

Notifíqusse, cópiese y publíquese en la *Gaceta Judicial*.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En quince de Abril de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Abril diez y seis de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—La Corte Suprema por auto de veintidós de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, y de acuerdo con las facultades que le confería el Código Judicial, llamó á juicio de responsabilidad por los trámites extraordinarios, á Martín Ortiz por infracción del artículo 454 del Código Penal nacional, como Juez del Circuíto de Barbacoas, en el extinguido Estado del Cauca.

Habiéndose obtenido el informe que debía dar el procesado, han vuelto los autos al estudio de esta Superioridad.

Conforme al inciso 2.° del artículo 100 de la ley 61 de 1886, corresponde á los Tribunales Superiores de Distrito conocer en primera instancia de las causas de responsabilidad contra los Jueces de Circuíto.

Por lo tanto, la Corte dispone que se remita el proceso al Tribunal Superior del Distrito judicial de Pasto, á fin de que ante esa Corporación se surta la primera instancia.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y seis de Abril de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, dieziocho de Abril de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Resulta de estas diligencias que á tiempo en que el Inspector de policía del Circuíto de Antioquia instruía un sumario para comprobar el delito de maltratamientos de obra que se decía cometido por Antonio Ruiz, en la persona de su esposa, María de los Angeles Echavarría, pidió el Fiscal, Joaquín María Arbeláez, que se recibiera declaración á Francisco Luis Ortiz; y como éste se denegase á rendirla, dando por razón que habiéndole encargado Ruiz de su defensa no le era permitido revelar los secretos que le había confiado, el Fiscal insistió en que se le obligara á declarar lo que supiera, y el funcionario de instrucción, después de consultar el punto con Julio Ferrer, Juez de Circuíto entonces, conminó á Ortiz con una multa de diez pesos para que dictara la declaración pedida, la que en efecto dió, refiriéndose primero á lo que sabía por conducto de Anastasia Calle y luégo á lo que Ortiz le había revelado en secreto.

El sumario fué, por recurso de apelación, al Tribunal Superior de Antioquia, y éste, después de resolver sobre lo principal, dispuso que se sacara copia de lo conducente para averiguar en juicios separados la responsabilidad en que pudieran haber incurrido el Fiscal del Circuíto de Antioquia y el Inspector de policía, en su calidad de funcionarios de instrucción por haber obligado á Ortiz á descubrir un secreto.

El Tribunal dicho, á quien tocaba conocer en primera instancia del juicio de responsabilidad contra el Fiscal del Circuíto, hizo practicar todas las diligencias conducentes al esclarecimiento de la verdad, y en particular, las que pudieran dar á conocer si hubo dañada intención de parte del sindicado para pedir con instancia que se obligara á Ortiz á rendir su declaración; y perfeccionado el sumario, declaró sin lugar á formación de causa, y ha consultado su determinación con esta Superioridad.

El señor Procurador general, á quien se ha oído en el nego-

cio, es de concepto que el auto consultado debe confirmarse, y para resolver el punto considera la Corte:

1.° Que, como lo ha hecho valer el sindicado en su declaración indagatoria, Ortiz no figuraba ni podía figurar en el sumario como defensor de Antonio Ruiz, y bien pudiera tomar esto como presexto para denegarse á declarar;

2.° Que los funcionarios del Poder judicial no están obligados á someterse á las opiniones del Ministerio público ni á hacer lo que éste pida por error ó apartándose de la ley, y jamás se les ha considerado responsables por los conceptos que emitan;

3.° Que está plenamente probado que el Inspector de policía no recibió la declaración de Ortiz en virtud de lo pedido por el Fiscal Arbeláez, sino en virtud del consejo que le dió la persona á quien consultó, y siendo esto así, dicho Fiscal no puede ser responsable de un acto ejecutado con prescindencia de sus opiniones; y

4.° Que, por otra parte, de lo actuado no aparece que el Fiscal del Circuíto de Antioquia tuviera otra mira al pedir con insistencia la declaración de Ortiz, que la de obtener el descubrimiento de un delito, grave por su naturaleza, y por razón de la persona en quien fué perpetrado, en cuyo caso la acción no está revestida de la voluntad y malicia que constituye el delito.

Por lo tanto, y de conformidad con lo pedido por el señor Procurador general, la Corte, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, confirma el auto de sobreseimiento consultado.

Hágase saber el presente, déjese copia de él, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el sumario al Tribunal del Distrito de Antioquia.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Julián R. Cock Bayer—Antonio Morales.—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diezinueve de Abril de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general la decisión que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL

Señores Magistrados.

Por sentencia de 27 de Noviembre de 1886, la Corte Suprema de Justicia condenó al Capitán Alejandro Castro N. á sufrir doce meses de prisión en la Penitenciaría de la ciudad de Tunja, como cómplice en un delito por el cual fué juzgado, en asocio del Teniente-Coronel Lisandro Leal.

En la parte resolutiva de la enunciada sentencia, se dedujo el tiempo de detención de los procesados, en los siguientes términos:

"Pero constando que los acusados han estado detenidos desde el 31 de Agosto de 1886, debe deducírseles de la pena principal el tiempo que hayan permanecido en dicha detención."

Refiriéndose á la mencionada sentencia condenatoria, el Capitán Castro, por memorial dirigido á Su Señoría el Presidente de la Corte con fecha 7 de los corrientes, manifiesta que, datando su detención, nó del 31 de Agosto de 1886, como lo estableció la Corte, sino del 26 de Febrero del mismo año, yá ha transcurrido para él el tiempo de la condena, y, por tanto, pide que se le ampare en su libertad; para lo cual acompaña á su memorial los siguientes documentos:

1.° Una certificación privada del Coronel Eloy Caicedo, en la cual manifiesta este Jefe que cuando se hizo cargo del mando del Batallón 5.° de Cali, el 26 de Febrero de 1886, yá el Capitán Castro N. se hallaba bajo la inmediata vigilancia de dicho Cuerpo, y que allí observó buena conducta.

2.° Una declaración rendida ante el Juez 1.° del Distrito de Bogotá por el Teniente-Coronel Joaquín Suárez G., en que este Jefe asegura que, en el mes de Febrero de 1886, comunicó orden de prisión en uno de los cuarteles de esta plaza, por mandato del Comandante en Jefe del Ejército, al Capitán Castro N. (En esta declaración se advierte una enmendatura de dudosa autenticidad en la designación del mes).

3.° Dos certificaciones privadas, suscritas respectivamente por los Jefes del Batallón 1.° de Granaderos, de las cuales aparece que el Capitán Castro observó buena conducta mientras estuvo preso en el cuartel de dicho Cuerpo.

Si se fuera á estudiar el mérito de los anteriores documentos, habría que convenir en que ellos no son suficientes para comprobar el hecho de que el peticionario estuvo detenido desde el mes de Febrero de 1886, por consecuencia del delito de que se le declaró cómplice, pues tales documentos no han sido producidos con las formalidades legales para que se les pueda considerar como auténticos; y aun en el caso de que no adolecieran de ese defecto, ellos no suministran la prueba completa del referido hecho, por cuanto los testigos no expresan si la detención á que aluden fué impuesta al Capitán Castro N. por razón del delito á que se contrajo el fallo condenatorio de la Corte, ó por otro motivo; á lo cual debe agregarse que los mismos testigos no manifiestan si Castro N. permaneció preso, sin interrupción, desde el mes de Febrero de 1886, ó si estuvo en libertad después de esa fecha, y por cuánto tiempo.

Pero es el caso que tales apreciaciones carecen de objeto, toda vez que, en vista de los autos y refiriéndose indudablemente á la detención sufrida por el peticionario, desde que se inició el procedimiento contra él (artículo 1,937 del Código Judicial), la Corte, sin tener por qué computar arrestos ó detenciones impuestas con anterioridad á la iniciación del procedimiento, y de los cuales pudo muy bien no haber la debida constancia en el proceso, fijó, como fecha en que comenzó la detención, el 31 de Agosto de 1886, con relación á la cual no ha terminado aún el tiempo de la condena; máxime si se considera que van transcurridos más de tres meses desde que se dictó la sentencia de la Corte, sin que el Capitán Castro N. haya sido conducido á Tunja, que es el lugar en que, según dicho fallo, debe sufrir su prisión. Considerando todo esto, repito, las alegaciones del peticionario, aun en el supuesto de que se apoyaran en pruebas de incuestionable mérito legal, serían del todo ineficaces para suspender ó modificar los efectos de la sentencia definitiva de la Corte, por cuanto dicha sentencia no es revocable ni reformable y debe cumplirse en todas sus partes (artículo 1,649 del Código Judicial).

Por lo demás, el precepto legal en este punto, únicamente admite excepción (artículo ibidem) para el caso en que se haya incurrido en el fallo definitivo en un error *pura y manifiestamente aritmético:* pero claramente se ve que no es ese el error de que se trata en el asunto que nos ocupa; pues, aun concediendo que la Corte no hubiera fijado con exactitud la fecha desde la cual debe comenzarse á contar el tiempo de la condena del Capitán Castro N., tal inexactitud pudo provenir de insuficiencia en los datos respectivos suministrados por el proceso; ó bien de falta de acierto en la apreciación de éstos; lo cual no constituye el error simple y manifiestamente aritmético á que se refiere la excepción establecida por la ley.

Implicando, pues, la peticion del Capitán Castro N., la reforma del fallo proferido por la Corte en la última instancia del juicio criminal, seguido contra dicho Oficial y contra el Teniente-Coronel Leal, puesto que si se resolviera de conformidad con ella, habría que referir el tiempo de la condena del peticionario, nó á la fecha señalada en el expresado fallo, sino á otra anterior en seis meses, soy de opinión que la Corte debe abstenerse de disponer tal reforma, por carecer de facultad legal para ello. Pero en cambio, estimo justo que, en caso de que se compruebe la enfermedad á que el peticionario atribuye su permanencia en esta capital, después de haber sido condenado á sufrir la prisión en Tunja, se le compute como tiempo cumplido de su condena el en que ha permanecido incapacitado para ponerse en marcha para aquel lugar.

Para concluír, creo conveniente manifestar que no he hecho observación alguna referente á la cita que el peticionario hace del artículo 8.° de la ley 56 de 1886, por considerar que dicho artículo no tiene aplicación al punto dilucidado.

Bogotá, 18 de Marzo de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

En el sumario instruído para averiguar la responsabilidad que pueda caber al Juez 5.° del Circuíto de Bogotá, señor Fe-

derico R. Rodríguez, y á su Secretario, señor Rafael Forero, por no haber dado cumplimiento á un despacho ó exhorto librado por el Juez del extinguido Territorio de Casanare para la captura de Enrique Alejandro Isaza y José Cayetano Estrada, dispusistéis, por vía de ampliación, la práctica de las diligencias indicadas en vuestro auto de 30 de Octubre de 1886, las cuales han dado por resultado la comprobación de que el Juez requerido devolvió al exhortante, con fecha 5 de Junio de 1884, el despacho de que se deja hecha referencia, según consta del recibo inserto en el informe que se lee al folio 52 vuelto del sumario, y la de que los edictos dictados por el expresado Juez del Territorio de Casanare para la captura de los mismos Isaza y Estrada se publicaron en los veintiun números del *Diario Oficial* que se expresan al final de la nota del Ministro de Gobierno, que se registra al folio 55 del sumario.

En este estado y por ministerio de la ley 61 de 1886, dejasteis de ser competentes para conocer en una sola instancia de la responsabilidad de los Jueces de Circuíto, y, en esa virtud, dispusisteis que el sumario pasara al Tribunal Superior de Distrito del Departamento de Cundinamarca quien lo terminó por auto de sobreseimiento de 30 de Marzo último, el cual ha venido en consulta á esa Superioridad.

El infrascrito pasa á agregar algunas consideraciones á las yá consignadas en la exposición que este Ministerio os dirigió sobre el mismo asunto el 28 de Octubre de 1886. Estas consideraciones son:

Que no obstante las diligencias practicadas con posterioridad á dicha exposición, ha quedado en pie la dificultad de que el exhorto dirigido por el Juez de Casanare, al Juez 5.° del Circuíto do Bogotá y la resolución consiguiente de éste, no han podido ni pueden obtenerse, por razón á que los expedientes de que tales documentos hacían parte, fueron destruídos en la última guerra, según lo informa el Secretario del primero de dichos Jueces á fojas 37 y 40 del sumario; por manera que no es posible saber si efectivamente el exhorto ó requisitoria en cuestión vino al Juzgado requerido, como lo alega el sindicado señor Rodríguez, desprovisto de los requisitos indispensables para darle cumplimiento.

La exigencia de los requisitos expresados no carece de fundamento si se considera que de algunos de ellos no se puede prescindir, de conformidod con las disposiciones del Código Judicial (artículos 1,862 á 1,875), que reglan el modo de proceder respecto de reos ó procesados ausentes.

En esas disposiciones se habla de requisitorias y edictos, y es sabido que la exigencia de ciertas formalidades respecto de las primeras, para que el funcionario requerido no tenga reparo en cumplirlas, constituye una práctica judicial generalmente admitida y de antigua data en nuestras leyes de procedimiento (véase *Requisitoria*, Diccionario de Escriche).

Agréguese á esto que en la época á que se refieren los cargos del sumario, era frecuente, por estar en vigor el régimen federal, que los extinguidos Estados, usando de su casi ilimitada soberanía, tratasen entre sí y con los Territorios nacionales, como asunto de extradición propiamente dicha toda cuestión referente á captura, en territorio extraño, de los reos prófugos ausentes.

Para comprobar la existencia de esa práctica en la época aludida, basta saber que los expresados Estados no solamente legislaron sobre el particular (Código Judicial de Antioquia. id. de Bolívar, id. de Boyacá, id. de Panamá, id de Cundinamarca), sino que algunos de ellos llegaron hasta celebrar convenios de extradición de reos, como lo fué el celebrado entre el Cauca y Bolívar, que se firmó en Cartagena el 12 de Julio de 1870.

Diráse, sin embargo, que la falta en el sumario de la requisitoria y resolución que han debido servir de comprobantes de la existencia del hecho criminoso, puede suplirse con los edictos emplazatorios publicados en los números del *Diario Oficial* que se indican en la nota del Ministerio de Gobierno (fojas 56); pero á esto observa el infrascrito que, examinados los ejemplares correspondientes á tales números, aun cuando ellos, excepción hecha del número 6,082, no se han agregado al sumario, se advierte que los edictos publicados desde dicho número 6,082 hasta el 6,141, se refieren únicamente á José Cayetano Estrada, pues, no obstante que en ellos se mencionan los nombres de Enrique Alejandro Isaza y José María Estrada, es del primero de los tres de quienes se dá la filiación y contra quien se dice haberse dictado auto de prisión; y yá se sabe que en lo ocurrido en Bogotá con este individuo no tuvo intervención el sindicado señor Rodríguez.

Por lo demás, el primero de los edictos en que se emplaza á Enrique Alejandro Isaza, aparece publicado en el número 6,142 del *Diario Oficial*, correspondiente al 19 de Julio de 1884, fecha que es posterior á la en que el Juez 5.° del Circuíto de Bogotá fué requerido para aprehender al mismo Isaza, como se deduce del hecho de que la requisitoria recibida por el expresado Juez fué devuelta por él el 5 de Junio precedente, (foja 52).

A virtud de estas consideraciones y de las consignadas en la yá citada exposición de este Ministerio (foja 42), el infrascrito concluye por pediros la confirmación del auto de sobreseimiento consultado, sin más modificación que la de adicionarlo en el sentido de disponer en él, que se pase copia de lo conducente á la autoridad judicial á quien corresponda conocer del cargo que se pretende deducir contra Rafael Forero C. en su calidad de Secretario del ex-Juez señor Rodríguez, pues la responsabilidad de ese empleado está sujeta á otra jurisdicción.

Bogotá, 21 de Abril de 1887.

CARMELO ARANGO M.

LEYES para el Archivo de la Corte Suprema, que se han recibido de los Departamentos.

Por conducto del señor Ministro de Gobierno de la República, procedente del señor Gobernador del Departamento del Cauca, la siguiente colección:

El Código Civil de 1869;
Código de Leyes y Decretos expedidos por la Legislatura del Estado en 1867;
Código Administrativo de 1879;
Código de Leyes y Decretos expedidos en 1873;
La ley 120 de 1883, sobre enjuiciamiento civil;
La ley 35 sobre id., de 1884;
El Código Penal del extinguido Estado;
Código de Instrucción pública de 1879;
Código Fiscal de 1879 y el Código de Minas de 1879.

(Se acusó recibo en 1.° de Junio de 1887).

RECIBIDOS directamente del señor Secretario de Hacienda y Fomento de Antioquia, estos Códigos y Leyes.

Código Civil del Estado de Antioquia;
Leyes de 1864 y 1865;
Leyes de 1865;
Leyes de 1866;
Código Penal;
Ley de 1879 que lo reforma;
Leyes de 1871;
Reglamento de Contabilidad de 1872;
Leyes de 1878;
Código de elecciones, de 1879;
Código Judicial de 1879;
Leyes de 1879, 1880 y 1881;
Leyes de 1881 y 1882;
Leyes de 1883;
Ley de 1884 que reforma el Código Judicial;
Reglamento de Contabilidad municipal de 1885;
Reglamento de Contabilidad de caminos de 1884;
Leyes de 1884;
Decreto 521 que reforma el Código Judicial;
Decreto 198 que reforma el Penal; y
Código de Policía de 1886.

(Se acusó recibó en 1.° de Junio de 1887).

RECIBIDOS directamente del señor Secretario de Gobierno y Guerra de Antioquia, los siguientes Códigos de allí:

Civil;
Judicial;
De Policía; y las
Leyes y Decretos expedidos por las Asambleas de 1877, 1878, 1880, 1881, 1882, 1883 y 1884; la ley 85 de 6 de Diciembre de 1879, los Decretos 521 de 31 de Diciembre de 1885, y el 198 de 30 de Marzo de 1886.

(Se acusó recibo en 1.° de Junio de 1887).

IMPRENTA DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 28

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 18 de Junio de 1887.

CONTENIDO.

PÁG.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Sobre nulidad de un juicio militar seguido al Teniente Jacinto Rodríguez... 177
Sobre confirmación de un auto de sobreseimiento del Tribunal Superior de Cundinamarca... 178
Sobre la indebida consulta de un auto de sobreseimiento del Tribunal Superior de Antioquia... „

NEGOCIOS CIVILES.

Sobre incompetencia de la Corte para conocer de un juicio sobre expropiación... 179
Sobre desistimiento legal de un recurso de apelación, por abandono. 180
Sobre incompetencia de la Corte para conocer de un juicio ejecutivo promovido por extranjeros... „
Sobre incompetencia de la misma para conocer de otro pleito análogo... „
Sobre incompetencia de la misma para conocer de un negocio sobre expropiación... „
Sobre desistimiento legal de Leopoldo Franco en una apelación... 181
Sobre incompetencia de la Corte para conocer de otro pleito con un extranjero... „
Sobre desistimiento legal de otra apelación, por abandono... „
Sobre nulidad de un juicio de nulidad promovido por Fortunato Cabal... „
Sobre desistimiento legal de una apelación interpuesta por Arturo Dousdebés... 182
Sobre incompetencia de la Corte para conocer de un pleito sobre arraigo... 183

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL.

Relativa á un pleito sobre bienes desamortizados... „
Id. á un fallo de la Oficina General de Cuentas sobre alcances á cargo de Leopoldo Franco...
Relativa al sumario seguido para averiguar la responsabilidad del ex-Presidente de Panamá Gerardo Ortega... 184

ANUNCIOS.

Gaceta Judicial... „
Importante... „
Constitución de Colombia... „

GACETA JUDICIAL.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, diez y nueve de Abril de mil ochocientos ochenta y siete.

Practicado el correspondiente sumario, á virtud de parte escrito, que el segundo Comandante del que fué Batallón 3.° de Bogotá, estacionado en Ipiales, dirigió al Coronel primer Jefe del mismo cuerpo con fecha diez y seis de Junio del año próximo pasado, para averiguar si el Teniente de la 4.ª Compañía del expresado Batallón, Jacinto Rodríguez, había cometido los delitos de insubordinación, irrespeto y ataque á mano armada á sus superiores; se remitió original al señor Comandante en Jefe del Ejército del Atlántico, el cual, no siendo competente para conocer del asunto, pasó la actuación al Comandante general de la 2.ª División, que era á la que pertenecía el sindicado.

Era efectivamente á dicho Comandante general á quien de derecho correspondia ejercer las funciones de Juez sustanciador en el plenario de la causa, según lo previene terminantemente el artículo 1,513 del Código Militar, y fué con tal carácter, con el que dictó el auto de treinta de Octubre último (fojas 27 á 29), declarando con lugar á proceder contra el sindicado, como responsable de los delitos que definen y castigan los artículos 1,632, 1,633 y 1,635 del citado Código; pero observando luégo, en la muy razonada providencia de treinta y uno de dicho mes, que, habiendo cesado en sus funciones de Comandante general de la 2.ª División, por cuanto ésta había sido refundida en otras, y el Batallón 3.° de Bogotá hacía parte, con el nombre de Junín, número 13, de la 5.ª División, como estaba prevenido en el Decreto número 697 de 1886, de 14 del mismo mes de Octubre, sobre organización del Ejército, carecía yá de jurisdicción para seguir actuando como Juez sustanciador, debiendo serlo, en su concepto, el Comandante general de la 5.ª División yá mencionada; dispuso consultar la expresada providencia con el General en Jefe ó Jefe de la Sección de mando del Ejército, entendiendo que se estaba en el caso del artículo 1,389 de dicho Código.

Desentendiéndose de la consulta el Jefe á quien fué dirigida, y prescindiendo del dictamen del auditor de Guerra, dispuso, por decreto de 10 de Enero del presente año, pasar el expediente al General graduado Alfredo T. Ortega, para que continuara la actuación como Juez sustanciador, hasta someter el asunto á la decisión del Consejo de guerra de Oficiales Generales; nombrando al mismo tiempo al Coronel Julio E. Cordobés para que ejerciera en la causa las funciones de Fiscal.

El mencionado General graduado, después de haber nombrado y posesionado al Secretario con quien debía actuar, procedió á tomar confesión al acusado, á juramentar al defensor y á solicitar del Jefe de la Sección de mando y Dirección, el correspondiente permiso para convocar el Consejo de guerra de Oficiales Generales, así como para el nombramiento de Vocales que debían componerlo (foja 41 vuelta), permiso que se concedió en nota de 1.° de Febrero de este año, número 319, con prevención de que luégo que se hiciese el sorteo de los Jueces y se señalase día para la reunión del Consejo, se diese cuenta al mismo Jefe (foja 42).

A consecuencia de lo expuesto, el Juez sustanciador dictó auto en la misma fecha, señalando el ocho del referido mes, á las doce del día, para que tuviese lugar la reunión del Consejo de guerra de Oficiales Generales, nombrando Vocales á los Generales Patricio González y Manuel E. Corrales C. y á los Coroneles Carlos Posada, Eloy Caicedo I. y Roberto Urdaneta, y disponiendo que dos días antes de la reunión decretada se diese cumplimiento á lo dispuesto en el artículo 1,486 del Código Militar. Reemplazado el Coronel Posada, á causa de su fallecimiento, con el General Francisco de P. Liévano, lo que se dispuso así por decreto de tres del citado mes, y no habiendo producido las partes prueba alguna, se instaló el Consejo el día determinado, y previa observancia de la formalidades que prescribe el artículo 1,512 del Código de la materia y en consideración á que se habían resuelto afirmativamente y por unanimidad la 1.ª, 2.ª y 4.ª cuestiones de las que le fueron propuestas y negativamente la 3.ª, con la circunstancia de que al hacer la declaratoria del delito, la limitó al caso del artículo 1,632 del mencionado Código, se dictó sentencia el mismo día ocho, condenando al acusado, después de haber calificado su culpabilidad en tercer grado, á las penas de reclusión, por el término de dos años, destitución del empleo, pérdida de toda pensión pagada por la República, suspensión de los derechos políticos mientras dure la pena principal y pago de las costas procesales á que hubiere lugar.

Tanto el acusado como su defensor interpusieron al acto de ser notificados, el recurso de apelación para ante esta Superioridad, y dada cuenta al Jefe de la Sección de mando y Dirección, éste en vez de conceder ó negar el recurso, como clara-

mente lo dispone el artículo 1,509 del Código, resolvió por providencia de quince de Febrero, primero, y después por la de dos del presente, publicar en la orden general la expresada sentencia y remitir la causa en consulta á esta Corte Suprema.

Devuelto el proceso al Jefe remitente para que subsanara la omisión que acaba de indicarse; concedido como fué el recurso por decreto de treinta de Marzo próximo pasado, el cual fué debidamente notificado á las partes; remitidos nuevamente los autos á esta Superioridad, en la que se ha observado la tramitación prevenida por la ley, sin que el encargado del Ministerio público ni los demás interesados hayan ocurrido á hacer uso de sus derechos; y estando, por consiguiente, el negocio en estado de pronunciar el fallo que corresponda, se tiene para ello en consideración:

1.° Que habiéndose incorporado el Batallón á que pertenecía el acusado, á la 5.ª División del Ejército, como ha quedado anteriormente demostrado, era el Comandante general de esa División quien debía ejercer las funciones de Juez sustanciador, como clara y terminantemente lo previene, según queda dicho, el artículo 1,513 yá citado.

2.° Que aun en el supuesto de que el Jefe de la Sección de mando y Dirección ejerza hoy las funciones que estaban atribuídas al General en Jefe del Ejército, y que haya quedado, por lo tanto, autorizado para cometer la sustanciación del proceso, después de declarar con lugar á formación de causa, á un Jefe de no menor graduación que la del reo ó del Fiscal, esa autorización, sin embargo, no implicaría la de cometer también al sustanciador el nombramiento de vocales para la formación del Consejo de guerra de Oficiales Generales, por que esa es una de aquellas funciones cuya delegación está expresamente prohibida por el artículo 1,517 del Código Militar;

3.° Que según el artículo 1,535 de id., la incompetencia de jurisdicción se causa también cuando hay vicio ó irregularidad en la formación del Consejo de guerra que dictó la sentencia, y ese vicio es tanto más insanable en el presente caso, cuanto como queda demostrado, el nombramiento de vocales se hizo por quien no tenía autoridad para hacerlo, y fué presidido el Consejo por un General no designado en los términos del artículo 1,518; y

4.° Que además de estas consideraciones, necesario es tener en cuenta que el auto de proceder se dictó por el Comandante general de la 2.ª División, General Juan C. Arjona, cuando yá esta División no existía, y cuando el cuerpo á que pertenecía el acusado hacía parte de la 5.ª División, de la cual es Comandante General el General Rafael Ortiz, quien funciona con tal carácter desde el catorce de Octubre del año último, según lo ha informado Su Señoría el Ministro de Guerra, en nota del 18 del presente, número 444, de la Sección 1.ª; siendo por consiguiente, incontestable que tal auto se pronunció, como lo reconoció el mismo Comandante, por quien no tenía carácter legal para ello.

En fuerza de todo lo expuesto, y habiéndose observado lo que dispone el artículo 1,545 del Código Militar, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara nulo todo lo actuado, desde el auto de proceder, inclusive y dispone, en consecuencia, la reposición del proceso al estado de que se dicte nuevamente el referido auto por el Comandante general de la 5.ª División, como á quien compete hacerlo, si á su juicio el sumario prestare mérito para ello, debiendo en este caso observarse en el procedimiento subsiguiente la tramitación prescrita para esta clase de asuntos en la Sección 2.ª, Capítulo 3.°, Título 2.°, Libro 5.° del tantas veces citado Código Militar.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase, después de certificar el señor Secretario de esta Corte sobre el motivo de la demora en esta segunda instancia.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del diez y nueve de Abril, se publicó la sentencia que precede.

Ramón Guerra A., Secretario.

En veinte de Abril de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general la sentencia precedente.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

NOTA.—El infrascrito Secretario de la Corte Suprema, certifica: que el fallo en esta causa se demoró por enfermedad del señor Magistrado doctor Noguera, que lo retuvo en cama por algunos días.

Bogotá, 20 de Abril de 1887.

Guerra A., Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Abril veintiuno de mil ochocientos ochenta y siete.

En la actuación que se seguía ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, para averiguar quiénes fueran responsables de las demoras en una causa seguida contra Carlos Angel, se ordenó por el Tribunal, á petición del representante del Ministerio público, en auto de diez y siete de Marzo de 1886, que se sacara copia de lo conducente, para averiguar la responsabilidad en que hubiera podido incurrirse, por la demora en diligenciar un despacho que se remitió el cuatro de Mayo de mil ochocientos ochenta y tres, que hasta la fecha del auto no había sido devuelto.

Con tal objeto, se ordenó que se expidieran copias de las diligencias de posesión de las personas que hubieran desempeñado el Juzgado de Facatativá, en el tiempo en que debió llegar allí el despacho que mandó el Tribunal y que no fué devuelto.

Por auto de treinta de Noviembre del año próximo pasado sobreseyó el Tribunal en la actuación, y ordenó que se consultara su resolución.

Es á la Corte Suprema á la que corresponde conocer hoy de tal consulta, según el numeral 7.° del artículo 21 de la ley 61 de 1886.

Sustanciado el recurso es llegado el caso de resolver, y para ello se considera:

En la primera instancia se practicaron todas las diligencias conducentes al esclarecimiento del hecho que se investiga y á determinar quién ó quiénes pudieran ser responsables.

Consideróse como hecho cardinal el saber en qué fecha llegó al Juzgado de Facatativá el despacho que se le remitió el 7 de Mayo de 1883, y cuya demora en auxiliarlo ha motivado la presente instrucción sumaria.

Para este efecto se pidió copia del libro de radicaciones en el Juzgado, y se obtuvieron informes de los Administradores de Correos del Departamento de Cundinamarca y de la Nación, sobre la fecha en que hubiera entrado en aquellas oficinas el despacho aludido para remitirlo á su destino; pero no pudo obtenerse dato alguno de donde pudiera deducirse que el Juez comisionado hubiera recibido el despacho. No se ha comprobado, pues, la existencia del cuerpo del delito, ni inferirse puede, siquiera, quién ó quiénes sean responsables por no haber llenado el cometido.

No falta diligencia alguna que practicar, declaración que recibir, ni cita que evacuar; y como no está comprobado que se haya cometido delito alguno, es llegado el caso de sobreseer, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,489 del Código Judicial.

Está pues, arreglado á la ley el auto consultado, y por ello la Corte, de acuerdo con el concepto del señor Procurador general de la Nación, y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, lo confirma.

Notifíquese, cópiese y devuélvase.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintinueve de Abril de mil ochocientos y ochenta siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintiuno de Abril de mil ochocientos ochenta y siete.

En el sumario instruído, en virtud de denuncia dada por el señor José María Arcila U., ante el Tribunal Superior del Departamento de Antioquia, para averiguar si el señor Pedro Botero R. ha incurrido en responsabilidad por haber demorado el

despacho de algunas causas civiles y una criminal, se siguió la instrucción hasta el estado de decidir si se debía sobreseer ó adelantar la causa.

El Tribunal sobreseyó, por creer que no había motivo para proceder contra el Juez sindicado, y ordenó, por auto de catorce de Febrero último, que se consultara esa resolución con esta Suprema Corte.

Como la sustanciación que se ha adoptado y la pena que hubiera de aplicarse, llegado el caso, son las determinadas en los Códigos Judicial y Penal del Departamento de Antioquia, según el artículo H transitorio de la Constitución, debe examinarse si el auto mencionado es ó nó consultable, de acuerdo con la Legislación de aquel Departamento.

Según el artículo 495 del Código Penal de Antioquia, las faltas que cometan los Jueces, consistentes en demoras, se castigan con multas de ocho á cincuenta pesos.

El artículo 1,625 del Código Judicial de Antioquia dice: "El auto de sobreseimiento se consultará siempre que á uno siquiera de los responsables del delito hubiera de imponérsele, caso de ser condenado, pena corporal ó declaración de ser indigno de la confianza pública, ó privación de los derechos políticos ó civiles, suspensión de los mismos, inhabilitación para ejercer empleo, profesión ó cargo público, ó de privación ó suspensión de empleo, profesión ó cargo público. *En los demás casos no habrá lugar á la expresada consulta;* pero si hay varios sindicados por un mismo delito, basta que á uno de ellos se le pueda aplicar alguna de las penas indicadas, para que la consulta deba comprenderlos á todos ellos." Como entre los casos en que hay lugar á la consulta de un auto de sobreseimiento no está comprendido el que ocurre, cuando la pena que ha de imponerse al sindicado sea únicamente pecuniaria, el Tribunal no debió consultar el fallo, ni la Corte puede ocuparse de revisarlo.

En cumplimiento de las disposiciones citadas, la Corte declara que el auto pronunciado por el Tribunal Superior del Departamento de Antioquia, con fecha catorce de Febrero del año en curso, en la instrucción sumaria seguida contra el Juez, señor Pedro Botero R., por demora en algunos negocios que cursaban en su despacho, no es consultable.

Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente al Tribunal que lo remitió, para que dé al asunto el curso correspondiente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintiuno de Abril de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Abril diez y nueve de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Jefe Civil y Militar del antiguo Estado de Antioquia, dictó con fecha veinticuatro de Marzo de mil ochocientos ochenta y seis, el Decreto número ciento ochenta y cuatro, por el cual se ordena la apertura de un camino público que ponga en comunicación la capital del Estado con las cabeceras de los Distritos de Valparaiso y Nueva Caramanta, y vaya á terminar en el río Arquía, límite de aquel Estado con el extinguido del Cauca, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1,355 del Código Judicial de aquella sección, manifestó los motivos determinantes para expropiar una faja de terreno perteneciente á Fermín Santamaría y Braulio y Antonio Chavarriagas, necesario para la construcción del camino, por haberse negado estos propietarios á ceder voluntariamente ese terreno, aunque los últimos sólo se oponen mientras no se les asegure que se pondrá puente en el río Cauca en el punto en que el camino atraviesa este río; y el primero, porque tiene compromiso con Gabriel Echeverri para no permitir la apertura de caminos por sus tierras, que le hagan competencia al que tiene establecido el citado Echeverri.

Apoyado en aquella exposición y en declaraciones de testigos, se presentó el Procurador del Estado con fecha treinta y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y seis, ante el Tribunal Superior del mismo, estableciendo el correspondiente juicio de expropiación contra Santamaría y los Chavarriagas, juicio cuyo conocimiento, según el artículo 1,365 del mencionado Código, correspondía al Tribunal del Estado.

Decretóse la expropiación por sentencia de catorce de Septiembre, y siguióse el juicio, aunque con demoras provenientes de dificultades, para conseguir la concurrencia de los peritos avaluadores, y el catorce de Febrero próximo pasado dictó el Tribunal un auto declarándose incompetente para seguir conociendo del asunto, por cuanto la ley 61 de veintiuno de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, sobre organización judicial, dispone en su artículo 21, número segundo, sección segunda, que la Corte Suprema conozca en última instancia "de los juicios de expropiación ó enajenación forzosa de que trata el artículo treinta y dos de la Constitución, seguidos ante los Jueces de Circuito por los Agentes del Ministerio público, y á virtud de orden del Gobierno," disposición que está en consonancia con la del artículo ciento once de la misma ley que dice: "Las atribuciones, jurisdicción y competencia de los Juzgados de Circuito serán, provisionalmente y en consonancia con lo dispuesto en los capítulos 1.° y 4.° de este título, las mismas que han tenido conforme á la legislación vigente del respectivo extinguido Estado, y además, las que en los libros 2.° y 3.° del Código Judicial de la Nación se fijan á los Jueces nacionales de primera instancia y á los Prefectos de los extinguidos territorios nacionales."

"Estas mismas atribuciones, jurisdicción y competencia tendrán los Jueces de Circuito que se establezcan en los extinguidos Territorios."

"Preferirán las disposiciones de esta ley y las del Código Judicial de la Nación, en caso de incompatibilidad entre ella y la legislación del respectivo extinguido Estado de que se habla en el inciso 1.° de este artículo."

El Fiscal del Tribunal apeló de esa providencia, y le fué concedido el recurso para ante la Corte Suprema, razón por la cual se encuentran estos autos al despacho, después de surtida la correspondiente tramitación.

Sea lo primero examinar el punto de competencia de la Corte para decidir este recurso.

Como lo dice con justicia el señor Procurador general, no hay en la ley sesenta y una citada, que rige de preferencia á cualquiera otra ley en materia de organización judicial, disposición alguna que atribuya á la Corte el conocimiento de apelaciones en juicios de expropiación de que conocen los Tribunales de Distrito. El número 2.° del artículo veintiuno mencionado, trata de los juicios de expropiación de que conocen los Jueces de Circuito *ordenado por el Gobierno*, que, como se sabe, lo constituye el Presidente de la República y los Ministros, ó el Presidente y el Ministro del ramo respectivo; y la expropiación sobre la cual versa este juicio, fué ordenada por el Jefe Civil y Militar de Antioquia, antes de comenzar la vigencia de la Constitución de Agosto de mil ochocientos ochenta y seis, que es á la que se refiere la ley de organización judicial de Noviembre del mismo año.

Según el Código Judicial de la Nación, tampoco podría la Corte ocuparse de este recurso, aunque no se lo prohibiera el artículo noventa y nueve de la citada ley; porque los juicios de expropiación de que trata el artículo sesenta y dos de ese Código, son de aquellos en que el Gobierno de la Unión decretaba la enagenación forzosa conforme á la Constitución que entonces regía.

El tenor literal de la disposición orgánica del Poder Judicial á que se ha aludido, es claro y no puede desatenderse á pretexto de consultar su espíritu.

Si el Tribunal de Antioquia hubiera pasado este negocio al Juez del respectivo Circuito y se hubiera originado por eso una competencia, habría sido ésta dirimida por la Corte, pues tiene esta atribución, según el número tercero, sección tercera del supradicho artículo veintiuno; pero en la forma en que viene, no puede legalmente ocuparse esta Superioridad del asunto.

Por lo tanto, se resuelve:

No es competente la Corte para conocer de este recurso.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y

devuélvase el expediente al Tribunal Superior del Distrito judicial de Antioquia para que le dé el curso legal.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veinte de Abril de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Abril veinte de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—En juicio ejecutivo seguido por el Administrador de Hacienda de Nóvita contra Primitivo Hurtado, por multas en que éste incurriera como contratista del transporte de los correos entre Cartago y Quibdó, el ejecutado propuso excepciones, sobre las cuales pronunció su fallo el Juez del Circuíto de Nóvita, en veintinueve de Abril de mil ochocientos setenta y seis, declarando, sin motivar en manera alguna su sentencia, ni darle la forma legal, no probadas dichas excepciones. De esta sentencia apeló el ejecutado, y habiendo venido el expediente, por tal motivo, á esta Superioridad, ha sufrido larguísima demora, por culpa del apelante, quien no ha suministrado las estampillas ni el papel sellado necesarios para la actuación.

En pedimento del veintiuno de Mayo último, el señor Procurador general solicitó, conforme al artículo 423 del Código Judicial, que se declare desierto el recurso, por falta de las estampillas y papel aludido. Se ha seguido la tramitación que dicho artículo establece, y como, notificada por edicto la parte interesada, no ha cumplido con lo prevenido por la Corte, ha llegado el caso de fallar en vista del informe del Secretario y del segundo pedimento del señor Procurador general.

En consecuencia, la Corte Suprema nacional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: téngase á Primitivo Hurtado por desistido de la apelación que interpuso para ante esta Superioridad, del auto pronunciado por el Juez del Circuíto de Nóvita, en la fecha arriba citada, por el cual se declararon no probadas las excepciones del ejecutado, por la suma de ciento veinte pesos sesenta centavos ($ 120-60); con lo cual queda desierto el recurso.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente al Juzgado respectivo.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. CockBayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintiuno de Abril de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Abril veintiuno de mil ochocientos ochenta y siete.

El Tribunal Superior del Distrito de Medellín, Departamento de Antioquia, tuvo razón al declararse incompetente para conocer de la demanda ejecutiva, que la casa comercial de D. Castro y C.ª, establecida en Nueva-York, propuso por la suma de treinta y cinco mil pesos ($ 35,000) en oro americano y sus intereses, contra Modesto Molina, vecino de dicha ciudad, por cuanto, conforme al inciso 5.° de la sección 2.ª, artículo 21 de la ley 61 de 1886, era á esta Corte Suprema á quien claramente correspondía el conocimiento en última instancia de todos los juicios en que tuvieran parte individuos extranjeros; pero como tal inciso ha sido derogado de una manera expresa por el artículo 9.° de la ley 46 del presente año, publicada en el *Diario Oficial* número 6,992, es claro que la Corte ha quedado privada de la jurisdicción que en estos asuntos le correspondía, la cual ha sido atribuída á los Tribunales de Distrito, por disposición terminante del artículo que se acaba de citar.

Por lo tanto, de acuerdo con el razonado concepto del señor Procurador general, esta Corte Suprema se declara incompetente para conocer del juicio mencionado, debiendo, en consecuencia, devolverse los autos al Tribunal remitente, como á quien corresponde su conocimiento.

Notifíquese, déjese la correspondiente copia y publíquese oportunamente, haciendo constar el Secretario el motivo de la demora.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintiuno de Abril de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

NOTA.—El infrascrito Secretario certifica; que el fallo en este juicio se demoró por la enfermedad del señor Magistrado ponente, que lo retuvo en cama por seis días.

Bogotá, veintiuno de Abril de mil ochocientos ochenta y siete.

Ramón Guerra A., Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Abril veintiuno de mil ochocientos ochenta y siete.

En el juicio de concurso de acreedores formado á los bienes del señor C. Hoyer, pronunció auto el Tribunal Superior de Bolívar, declarándose incompetente para conocer del recurso de apelación interpuesto por el señor David López Penha, respecto del auto dictado por el señor Juez 1.° de la Provincia de Barranquilla, con fecha once de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis, y ordenando que se enviaran los autos á la Corte. Fundó el Tribunal su resolución en que tienen parte en el juicio extranjeros y se estaba en los casos del artículo 100, inciso 1.°, é inciso 5.° del artículo 21 de la ley 61 de 1886.

Como según el artículo 9.° de la ley 46 de 1887, publicada en el *Diario Oficial* número 6,992, se derogó el inciso 5.° del artículo 21 arriba citado, dejó de figurar entre las atribuciones de la Corte la de conocer en segunda instancia de los negocios en que tengan parte individuos extranjeros, y hoy tienen jurisdicción los Tribunales de los Distritos judiciales para ocuparse de esta clase de recursos.

En consecuencia, la Corte se declara incompetente para conocer de este asunto, y ordena que se le devuelva el expediente al Tribunal remitente, para que dé al recurso la tramitación correspondiente.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintiuno de Abril de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Abril veintiuno de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Antonio González ocurrió por medio de apoderado al Juez del Circuíto de Manizales, demandando á la Nación por la suma de quinientos setenta y seis pesos, valor de veinticuatro reses gordas, que le fueron expropiadas el año de mil ochocientos setenta y siete para el sostenimiento de las fuerzas nacionales, y seguido el juicio por la vía ordinaria, dictó sentencia dicho Juez, con fecha cuatro de Enero de mil ochocientos ochenta y cuatro, absolviendo del cargo á la Nación. El apoderado de González apeló de ese fallo para ante esta Superioridad, y otorgado el recurso y remitido el expediente ha estado en suspenso en el despacho de la Corte, por no haber suministrado el apelante el papel necesario para darle curso.

Con este motivo el señor Procurador general de la Nación, apoyado en lo dispuesto en el artículo 423 del Código Judicial, ha pedido que se declare al apelante desistido del recurso, y ejecutoriada, en consecuencia, la sentencia de primera instancia; pero habida consideración á que por el artículo 13 de la ley 44 de 1886, los expedientes existentes en la Corte Suprema, por expropiaciones verificadas durante la guerra de mil ochocientos setenta y seis y mil ochocientos setenta y siete, deben pasarse á la Comisión creada por la misma ley para que conozca de las reclamaciones sobre que versan, á la Corte no le es

dado ingerirse por ningún motivo en un negocio que ha dejado de ser de su competencia, y así lo declara. Remítase en consecuencia, á la Comisión mencionada el expediente para lo de su cargo, como por punto general se dispuso por acuerdo de veintinueve de Noviembre del año próximo pasado.

Hágase saber.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintidós de Abril de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintiuno de Abril de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Desde el veintiséis de Junio de mil ochocientos ochenta y seis, fué repartido en la Corte el expediente que contiene la apelación interpuesta por Leopoldo Franco, responsable del Erario en su calidad de Administrador principal de Hacienda nacional en Tunja, contra el auto dictado el treinta de Octubre de mil ochocientos ochenta y cinco por la Sala de apelación de la Oficina General de Cuentas.

El señor Procurador general de la Nación hizo su exposición en esta instancia desde el nueve de Noviembre próximo pasado, y con fecha veinticuatro de Marzo ocurrió este funcionario solicitando, apoyado en lo dispuesto en el artículo 423 del Código Judicial de la Nación, que se declare al apelante desistido del recurso, por cuanto no ha suministrado el papel competente para continuar la actuación.

La Corte, en auto de veintiséis del mismo mes, señaló el término de veinticuatro horas al recurrente para que suministrara el papel necesario, y notificado ese auto legalmente, y constando por informe del Secretario que la parte no ha cumplido con el deber impuesto, y habiendo reiterado el señor Procurador su pedimento, ha llegado el caso previsto en el artículo 423 del Código citado.

Por lo tanto, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, se declara que Leopoldo Franco ha desistido del recurso que interpuso contra el auto citado, y en consecuencia, queda ejecutoriada esa providencia, y se condena al apelante en las costas del recurso.

Notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente á la Oficina de su procedencia.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintidós de Abril de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintidós de Abril de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos;—Librada ejecución por el Tesorero municipal del Distrito de Cartagena contra el extranjero Edmundo W. P. Smith, por la cantidad de trescientos setenta y siete pesos, sesenta y ocho centavos ($ 377-68 cs.), procedente de derechos causados á favor de las rentas municipales por la introducción de unas maderas, hizo Pedro Vélez tercería excluyente, y sustanciada ésta por la vía ordinaria, dictó sentencia el Juez de la Provincia de Cartagena declarándola probada, mandando desembargar los bienes sobre que se trabó la ejecución y disponiendo el embargo de otros pertenecientes al ejecutado. Este apeló de esa sentencia para ante el Tribunal Superior del Estado (hoy Departamento), y otorgado el recurso en ambos efectos, el Tribunal se ha declarado incompetente para fallar en segunda instancia y ordenado que los autos vengan á esta Suprema Corte, por ser la llamada á conocer en grado de apelación del negocio de que se trata, en virtud de lo dispuesto en la parte final del inciso 5.°, sección 2.ª del artículo 21 de la ley 61 de 1886.

Como lo ha observado el señor Procurador general, en la fecha en que el Tribunal Superior del Distrito de Cartagena hizo tal declaratoria, correspondía, en efecto, á la Corte Suprema, el conocimiento del asunto en segunda instancia, conforme á la disposición que acaba de citarse; pero reformada como ha sido la ley 61 de 1886, por la 46 del año en curso, y disponiendo el artículo 9.° de ésta, que los Tribunales de Distrito conozcan en segunda instancia de los juicios civiles en que tengan parte individuos extranjeros, la atribución conferida antes á la Corte ha venido á ser propia de dichos Tribunales.

Por lo tanto, la Corte se declara incompetente para conocer del recurso interpuesto por Edmundo W. P. Smith, y ordena que se devuelva el expediente al Tribunal Superior del Distrito de Cartagena, á quien, por la ley últimamente citada, corresponde fallar en él en segunda instancia.

Hágase saber esta resolución, déjese copia de ella y publíquese en la *Gaceta Judicial*.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintitrés de Abril de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintidós de Abril de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Administrador principal de Hacienda Nacional en Cali, libró mandamiento ejecutivo contra Plutarco González, por la suma de noventa y cuatro pesos, sesenta y nueve centavos ($ 94-69 cs.), como Administrador subalterno de Quibdó, y según alcance líquido que le fué deducido.

Adelantado el juicio, el ejecutado propuso la excepción de pago, y el Juez, por sentencia de veinticinco de Febrero de mil ochocientos ochenta y dos, declaró no probada dicha excepción; sentencia de la cual apeló el mismo ejecutado, y con ese motivo han venido los autos á esta Superioridad.

Como el interesado no ha suministrado papel para la actuación, el señor Procurador general de la Nación ha solicitado que, previa la tramitación señalada en el artículo 423 del Código Judicial, se declare que el actor ha desistido del recurso.

Hecho el apercibimiento que dicha disposición previene, el señor Secretario ha informado que el interesado no ha concurrido con el papel necesario, y como el señor Procurador ha insistido en su pedimento, es el caso de resolver:

Por lo tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que Plutarco González ha desistido del recurso que intentó, quedando ejecutoriada la sentencia apelada. Las costas son de cargo del actor.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintitrés de Abril de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Abril veintidós de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos.—En primero de Septiembre de mil ochocientos setenta y ocho, Fortunato Cabal, del vecindario de Buga, ocurrió al Juez de aquel Circuito, solicitando la nulidad de los remates de dos casas de su propiedad, números 39 y 41 sitas en la calle de Sucre de la expresada ciudad, y cuyos remates, que tuvieron lugar respectivamente el treinta de Junio y el 5 de Febrero de mil ochocientos setenta y siete, se verificaron para el pago de la

cantidad de cinco mil pesos ($ 5 000) impuesta al reclamante y de otros cinco mil pesos asignados á su cuñado Francisco Sinisterra Miller, en un decreto que sobre empréstitos se dice haber dictado el Jefe del mencionado municipio para gastos de guerra.

Cabal acompañó á su solicitud: 1.° copia legalizada de los correspondientes juicios ejecutivos seguidos por un comisionado especial, que se asegura haber sido nombrado por el Gobierno del estinguido Estado del Cauca para hacer efectivos los empréstitos (fojas 2 á 12); 2.° testimonio debidamente registrado de la escritura pública de venta de una casa en la misma ciudad, otorgada á favor del reclamante por Margarita y Carmen Quintana, el día veintiocho de Mayo de mil ochocientos setenta y dos (fs. 13 y 14); y 3.° una información de nudo hecho, practicada con citación del agente del Minsterio público, con que se acredita que las referidas casas no sólo fueron reedificadas por el postulante, sino que ambas están comprendidas dentro de los linderos que determina la citada escritura de venta; y además las certificaciones de los señores Notario y Registrador de instrumentos publicos, en las que aseveran que no hay constancia, en sus respectivas oficinas, de que Cabal hubiera transmitido á persona alguna el dominio ó posesión de la misma casa, tienda y solar comprados á Margarita y Carmen Quintana (fojas 15 á 17.)

El Juez de la primera instancia dispuso, por auto de veintitrés de dicho mes, dar al asunto la tramitación prevenida por la ley 67 de 1877, sobre suministros empréstitos y expropiaciones; pero la Corte Suprema Federal, á cuya censura se sometió tal auto, por virtud del recurso de apelación que el interesado interpuso, lo revocó por sentencia de dieziocho de Noviembre del citado año, con el fundamento de que no habiendo Cabal demandado á la Nación por el valor de suministros ó empréstitos que se le hubieran exigido, sino solicitado la nulidad de los remates de unas fincas de su propiedad, no había por qué dar traslado al Agente del Ministerio público ni llenar los demás requisitos exigidos por la mencionada ley.

Fué en acatamiento de esta determinación que el Juez inferior, sin más progreso ni actuación, dictó la sentencia de ocho de Diciembre del propio año, declarando nulos los remates y adjudicaciones de las precitadas fincas, y nulas asimismo, las diligencias de registro é inscripción extendidas el ocho de Febrero y nueve de Junio de mil ochocientos setenta y siete por el Registrador de instrumentos públicos, cuya cancelación se ordenó en consecuencia.

Apelado ese fallo por el Procurador del Departamento, se remitieron los autos, desde el veintisiete del mismo Diciembre, para la determinación del recurso en esta Corte Suprema, en la cual, después de haberse mandado entregar el expediente á las partes para que alegaran por escrito, y de haberse resuelto sobre la causal de impedimento manifestado por uno de los señores Magistrados la que tuvo lugar en 7 de Septiembre de 1880, ninguna otra providencia se dictó en este negocio, que ha permanecido demorado hasta el veintiséis de Marzo del presente año, en que el señor Procurador general promovió su continuación.

Adelantada, pues, la substanciación en esta segunda instancia, sin que el señor Procurador general ni el interesado hayan hecho oír su voz en los estrados de la Corte, para lo cual fueron debidamente citados, debe procederse yá á decidir el recurso pendiente, previas las siguientes consideraciones:

1.° Que habiendo Fortunato Cabal solicitado la nulidad de los remates referidos, debió darse á tal solicitud el curso prevenido para los juicios comunes ordinarios, sin que obstara para ello la sentencia de la Corte de que viene hecha mención, puesto que ella se limitó á declarar que no debía darse al asunto la tramitación establecida por la ley 67 de 1877, sobre suministros, empréstitos y expropiaciones, puesto que en realidad no era nada de esto lo que solicitaba el demandante;

2.° Que á consecuencia de haberse dado una mala interpretación á la mencionada sentencia, no se confirió traslado ni se dió audiencia á persona alguna, ni se llenaron las demás formalidades que deben observarse en la secuela y determinación de juicios, de manera que, propiamente, no se ha seguido sino una actuación informe á que no puede darse el nombre de juicio;

3.° Que estando interesado en el asunto el Gobierno nacional, por cuanto se trata de la nulidad del remate de unas fincas que se mandaron embargar para hacer efectivos ciertos empréstitos, decretados para las atenciones de la guerra civil de 1876 á 1877, el negocio debió ventilarse con citación y audiencia del Ministerio público, en representación de los intereses de la Nación; y

4.° Que conforme al aparte segundo de la reforma quinta de la ley 46 de 1876, "cuando no se hagan al encargado de dicho Ministerio las notificaciones, como se dispone en el número 4.° del artículo 1,406, se anulará lo actuado, si la notificación se refiere á un auto de los que, con arreglo á los artículos 838 á 841, producen causal de nulidad al dejar de notificarlo;" y es evidente que al representante de la Nación no se le notificó la demanda ni se le citó para sentencia, cuyas nulidades son insanables.

Por lo tanto, la Corte Suprema Nacional, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, declara nulo todo lo actuado, reponiéndose al estado de dar á la demanda el curso legal.

Notifíquese, cópiese y publíquese, debiendo la Secretaría hacer constar el motivo de la demora en publicar el presente fallo.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Antonio Morales—Francisco A. Fernández—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del veintidós de Abril se publicó esta sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En veintitrés de Abril de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general la sentencia que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

El infrascrito Secretario certifica: que la demora en este fallo dependió de la enfermedad del señor Magistrado ponente, que lo retuvo en cama por varios días.

Ramón Guerra A., Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintitrés de Abril de mil ochocientos ochenta y siete.

Por auto de primero de Julio de mil ochocientos setenta y seis, libró ejecución el Administrador principal de Hacienda nacional en el Distrito de Neiva, del extinguido Estado del Tolima, contra el señor Arturo Dousdebés, por la cantidad de cuarenta y seis pesos, cuatro y medio centavos ($ 46,04½ cs.), valor del saldo que liquidó el Administrador contra el responsable en la cuenta en que fundó la ejecución, así:

Por lo que quedó á deber en el año de 1875, como Agente Telegráfico de Purificación.....	$ 30-32½
Por alcances declarados (de otro orden).....	15-72
	$ 45-04½

Apeló Dousdebés del mandamiento ejecutivo y, otorgado el recurso, vino el expediente á la Corte, desde el diez y siete de Diciembre de mil ochocientos ochenta y cuatro.

Por no haber suministrado el actor el papel necesario para la actuación, se demoró la secuela de la causa hasta que el señor Procurador general de la Nación pidió, por memorial elevado el nueve de Marzo último, que, previa la tramitación establecida en el artículo 423 del Código Judicial, se declarara desierto el recurso.

Se sustanció el incidente, y por auto de 21 de Mayo último se le pidió informe al Secretario sobre si la parte apelante había suministrado el papel. Este empleado manifestó en los informes que rindió con fecha 21 de Marzo y 21 de los corrientes, que la parte actora en la segunda instancia no ha dado el papel correspondiente para activar.

Por auto de veintidós de Marzo se le señaló al apelante el término de veinticuatro horas para que diera el papel, conminando á la parte con la pena de declararla desistida de la apelación si no cumplía con este deber oportunamente.

No se dió el papel, y el señor Procurador insistió, en memorial que presentó con fecha diez y ocho del mes en curso, en que se decretara el desistimiento.

La solicitud del representante del Ministerio público está apoyada en terminantes disposiciones de la ley, y, por ello, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, da por desistido al señor Arturo Dousdebés del recurso de apelación que interpuso del mandamiento ejecutivo librado contra él por el Administrador principal de Hacienda Nacional del antiguo Estado del Tolima, con fecha primero de Julio de mil ochocientos ochenta y seis, por cuarenta y seis pesos, cuatro y medio centavos ($ 46-04½ cs.); quedando, en consecuencia, ejecutoriado el referido auto.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintitrés de Abril de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Abril veinticinco de mil ochocientos ochenta y siete.

Derogado como ha sido el número 5.°, artículo 21, sección 2.ª de la ley 61 de 1886, sobre organización judicial, por el artículo 9.° de la ley 46 del presente año, es incompetente yá la Corte para conocer en última instancia de los juicios en que tengan parte individuos extranjeros ; y así se resuelve :

Devuélvase este expediente que contiene las diligencias de arraigo, promovidas por José H. Cano contra Aristides Arango, que han sido remitidos á la Corte por el Tribunal del Distrito Judicial de Panamá, pues éste y nó la Corte, es, conforme á la ley citada, el competente para decidir estos asuntos en última instancia.

Notifíquese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintitrés de Abril de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL

Señores Magistrados.

El Agente fiscal de la Provincia de Cartagena, por escrito de 24 de Abril de 1882, promovió, ante el Juez 1.° de la misma Provincia, demanda de nulidad del juicio ejecutivo seguido contra Pedro A. y Mercedes de Avila para hacer efectivo el cobro de $ 504 de principal é intereses reconocidos á favor del Ramo de Bienes Desamortizados en dos solares situados en la referida Provincia.

El Juez devolvió al actor el escrito de demanda, por considerar que tal escrito no estaba redactado con los requisitos señalados al efecto por la vigésima primera de las reformas hechas al Código Judicial por la ley 46 de 1876, según se ve del auto dictado por dicho funcionario en 26 de Abril de 1882.

El demandante pidió la revocatoria del citado auto, por creer que su demanda está arreglada á la ley, y como tal petición le fuese negada, interpuso el recurso de apelación para ante ese Supremo Tribunal.

Examinado el libelo que ha motivado el incidente, el infrascrito pasa á manifestaros su opinión.

La nulidad cuya declaratoria se pide entraña la del remate con que se dió término al juicio ejecutivo seguido contra Pedro A. y Mercedes de Avila y, por lo tanto, no puede hacerse valer *sino en juicio ordinario separado*, por prevenirlo así la trigésima cuarta reforma de las hechas al Código Judicial por la citada ley 46 de 1876.

Establecido esto, es claro que la demanda intentada sobre la enunciada nulidad debe llenar las condiciones de toda demanda en juicio ordinario, ó sean las que se indican en la vigésima primera reforma contenida en la misma ley 46 de 1876. Entre ellas, figura la de que los hechos en que se apoye la demanda se pongan á continuación de los demás que en dicha reforma se designan como esenciales, *especificados con claridad y numerados*, á fin de que cada hecho quede relacionado separadamente.

Pero es el caso, que en el libelo que nos ocupa no se llenó la condición últimamente apuntada que, como es sabido, tiene por objeto facilitar al demandado la designación precisa, en la contestación de la demanda, de los hechos que admite como ciertos y de los que no acepta, á fin de que el Juez sepa cuáles son materia de prueba y cuáles nó.

Aparte de esta informalidad, que hace inadmisible el libelo presentado por el demandante, se nota la irregularidad de que éste ha acompañado para fundar su acción el expediente original relativo al juicio ejecutivo de cuya nulidad se trata, contra lo preceptuado en el artículo 716 del Código Judicial que prohibe admitir á las partes para fundar su intención "autos que deben estar archivados, ó que estén pendientes en otros Juzgados, pues ó deben pedir su acumulación en los casos en que ella es permitida, ó testimonio de los documentos que quieran hacer valer como pruebas."

El infrascrito es de concepto que debéis confirmar la providencia apelada, á fin de que se reforme por el actor el libelo de demanda, redactándolo de acuerdo con las prescripciones legales de que se deja hecha referencia, y os pide que dispongáis que el expediente original relativo al juicio ejecutivo vuelva al archivo de su procedencia, á fin de que el demandante haga expedir copia de todo el expediente ó de la parte que sea necesaria para hacer valer los derechos que reclama.

Como el Secretario del Juzgado, á cuyo cargo está el archivo, puede haber incurrido en responsabilidad, por haber entregado un cuerpo de autos á una de las partes, sin que se estuviera en ninguno de los casos en que conforme á la ley debiera ó pudiera hacerlo, convendría, á fin de que se evite la repetición de abusos como el de que aquí se trata, que se promoviera la investigación del caso, y de esto podéis ocuparos, al resolver el punto que está á vuestro estudio.

Bogotá, 4 de Noviembre de 1886.

FRANCISCO A. FERNÁNDEZ.

Señores Magistrados.

El señor Leopoldo Franco, responsable del Erario, en su calidad de Administrador principal de Hacienda nacional en Tunja, usando del derecho reconocido en el artículo 2,041 del Código Fiscal, apeló para ante esa Superioridad del auto dictado en 30 de Octubre de 1885 por la Sala de apelación de la Oficina General, de Cuentas y por el cual se reformó el de fenecimiento proferido por la Sección 2.ª de la misma Oficina con relación á la cuenta á cargo del citado responsable, correspondiente al mes de Octubre de 1883.

Según el mencionado auto de fenecimiento de 1.ª instancia, el alcance líquido contra el responsable asciende á $ 509-95 centavos, comprendiéndose en esta suma la de $ 71 de multa impuesta por demora en la rendición de la cuenta.

Hecha deducción de los $ 71 de multa, el expresado alcance quedó reducido, por el auto de la Sala de apelación á que se contrae el recurso interpuesto, á $ 102, suma que, de conformidad con el pliego de glosas, corresponde á las marcadas con los números 24 y 26, así :

24. Pagado á los segundos Telegrafistas, Ayudantes y Cartero de la Oficina telegráfica de Tunja, en Septiembre de 1883. (Comprobante número 31).....$ 86

.....

26. Pagado á un segundo Guarda que recorrió el trayecto de Sogamoso á Santa-Rosa, en el citado mes. (Comprobante número 33)..... 16

Suma.....$ 102

El responsable fué absuelto, por el citado auto de 2.ª instancia, de los demás reparos hechos á su cuenta, y, en cuanto á la multa, la Sala de apelación, no estimándola fundada y no creyéndose con facultad para hacer otra cosa, se limitó á excitar al Contador interino de la Sección 2.ª para que la revocara.

Adviértese desde luégo que el examen que, en esta tercera instancia, se haga del auto de la Sala de apelación á que se contrae el recurso de alzada, debe limitarse al último alcance deducido contra el responsable, pues bien se comprende que dicho recurso se interpuso solamente con referencia á la parte en que el citado auto es desfavorable al apelante.

Esto sentado, el infrascrito pasa á exponeros su opinión en el asunto, en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 2,944 del Código Fiscal.

El reparo marcado con el número 24 se funda en que el Administrador señor Franco pagó los sueldos correspondientes al mes de Septiembre de 1883, de los segundos Telegrafista, Ayudante y Cartero de la Oficina telegráfica de Tunja (Comprobante número 31 del artículo 31 del "Diario" de la cuenta), no obstante que tal pago no podía hacerse legalmente, en atención á las circunstancias que pasan á expresarse:

1.ª Que por no haberse expedido aún la ley de Presupuestos, regía como tal, en el citado mes de Septiembre, por mandato de la ley 31 de 29 de Agosto de 1883, el proyecto de ley de "Presupuesto de Rentas y Gastos para el servicio económico de 1883 á 1884," presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso del primero de dichos años;

2.ª Que la partida de $ 1,176 señalada por el citado proyecto para gastos del personal de la Oficina telegráfica de Tunja, comprende solamente los sueldos de un Telegrafista, de un Ayudante y de un Cartero; y

3.ª Que por el artículo 3.º del decreto número 834 de 15 de Septiembre del mismo año de 1883, dictado en ejecución de la citada ley 31, se dispuso que las Oficinas pagadoras hicieran por anticipación los gastos del supradicho mes de Septiembre, conforme á las imputaciones del enunciado proyecto de ley de "Presupuestos de Rentas y Gastos," y teniendo *por límite la doceava parte* de las cantidades fijadas en él, en atención á que sólo se hacía uso de dichas partidas por el mes de Septiembre.

Por lo visto, el Administrador señor Franco debió limitar los pagos del personal de la Oficina telegráfica de Tunja, correspondientes al mes de Septiembre, á la duodécima parte de la suma de $ 1,176, ó sea á la suma de $ 98; y como de los respectivos comprobantes aparece que lo pagado por él, á dicho personal, en el citado mes, asciende á $ 184, es claro que se excedió en la cantidad de $ 86, que es la que se le ha deducido como alcance líquido á su cargo, con referencia á este capítulo de la cuenta.

El responsable alega en su descargo, con relación á esta glosa, que los empleos de 2.º Telegrafista, 2.º Ayudante etc., fueron creados por decreto del Poder Ejecutivo, y que en la Administración no se tuvo conocimiento del Presupuesto 1883 á 1884, sino hasta á fines de Noviembre de aquel año.

Cree el infrascrito que tales contestaciones no alcanzan á destruír el cargo á que ellas se refieren, y funda su creencia en que los empleados "encargados de dar inversión material á los fondos del Tesoro" no deben hacer erogación alguna de dichos fondos, para la cual no se haya aplicado expresamente una suma por el Congreso, sin que baste á eximirlos de la responsabilidad consiguiente el que las referidas erogaciones se destinen al sostenimiento de empleos creados por el Poder Ejecutivo, con prescindencia del referido requisito, pues dichos empleados solamente se libran de la enunciada responsabilidad, cuando ocurren las circunstancias previstas en el artículo 1,283 del Código Fiscal, las cuales no concurren en el caso que nos ocupa. El hecho de no haberse conocido por el responsable la ley de Presupuesto de 1883 á 1884, sino hasta á fines de Noviembre, nada significa, por no tratarse de gastos sujetos á la enunciada ley, sino al proyecto de Presupuesto formado por el Poder Ejecutivo, que se declaró vigente para el mes de Septiembre por la ley 31 de 1883, *la cual se publicó en el Diario Oficial* correspondiente al día 10 del mismo mes, es decir, en tiempo oportuno para ser conocida por dicho responsable á fines del mes de Septiembre, cuando se hicieron los pagos á que se contrae el cargo.

Bajo el número 26 dice el auto de glosas. "Hay dos nóminas para un mismo empleado en el mes de Septiembre, y en el artículo 33 del *Diario* consta que se le pagó el sueldo de $ 16 al Guarda de Sogamoso á Santa-Rosa, Cerbeleón Prieto, y luégo se abona otra vez el señor Administrador la misma suma de $ 16 para pagar otro guarda llámado Clodomiro Bohórquez, en el mismo trayecto y en el mismo tiempo."

La explicación dada á este cargo por el responsable no satisface; pues, aun cuando es verdad que los Inspectores de telégrafos están facultados para nombrar guardas de los mismos y aun para aumentar el número de éstos en una Sección dada, cuando las necesidades del servicio lo requieran, también lo es que tal facultad está subordinada en su ejercicio á la aprobación del Poder Ejecutivo, y el responsable no ha presentado el testimonio del nombramiento que se dice hecho por el Inspector, en el mes de Sepiembre, de un segundo Guarda para el trayecto de Sogamoso á Santa-Rosa, y se ignora, además, si tal nombramiento obtuvo la aprobación del Poder Ejecutivo, comprobantes sin los cuales el gasto que nos ocupa no es legalizable.

A virtud de las anteriores consideraciones que en el fondo son las mismas en que se fundó la Sala de apelación para declarar vigentes las dos glosas de que se ha hablado, el infrascrito estima legal el auto apelado, y de consiguiente os pide que lo confirméis; siempre que no estiméis que hay lugar y que es más conveniente hacer uso de la facultad que os confiere la vigésima nona reforma de las hechas al Código Judicial por la ley 46 de 1876, para dictar auto para mejor proveer, pues siendo muy probable que el señor Franco hiciera, como él lo manifiesta, el pago del segundo Telegrafista, del segundo Ayudante etc. que á se contrae el reparo número 24, sin que se hubieran recibido aún en la ciudad de Tunja los *Diarios Oficiales* números 5.628 y 5,536 en que fueron publicados la ley 31 de 1882 y el decreto ejecutivo de 15 de Septiembre del mismo año, lo cual lo exoneraría de toda la responsabilidad; convendría aclarar este punto pidiendo informe al Gobernador del Departamento de Boyacá sobre la fecha en que los referidos Diarios se recibieron en la capital de dicho Departamento.

Bogotá, 9 de Noviembre de 1886.

FRANCISCO A. FERNÁNDEZ.

ANUNCIOS.

LA GACETA JUDICIAL.—Se publica este periódico ordinariamente una vez por semana (los sábados), y se admiten suscripciones en el Banco Nacional así:

Por un semestre (26 números)..... $ 3 00
Por un año (52 id 5 00

No se venden números sueltos.

Es de cargo del Ministerio de Gobierno hacer repartir el periódico á los suscriptores en la capital, y en los Departamentos por medio de los correos; sin perjuicio de la distribución á las oficinas públicas que deben recibirlo.

No se admiten anuncios que no sean de carácter oficial, ni inserciones que no sean autorizadas por la Corte Suprema.

IMPORTANTE.

En beneficio del buen servicio público, se suplica á los caballeros que tengan en su poder Códigos, Compilaciones, tomos de leyes nacionales y de los extinguidos Estados, ú otros libros de propiedad de la Corte Suprema, se sirvan devolverlos, pues ocurre con frecuencia la necesidad de consultar tales obras.

CONSTITUCIÓN DE COLOMBIA.

ESTÁ DE VENTA en la Tesorería general, en edición de cuaderno, á 20 centavos el ejemplar.

IMPRENTA DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 24

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 25 de Junio de 1887.

CONTENIDO.

Pág.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

Acuerdo número..... relativo á una queja dirigida contra un decreto de Su Señoría el Gobernador de Bolívar..... 185

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Sobre condenación del Tesoro nacional al pago de un crédito de José María Aya, por expropiaciones..... „

Auto aclaratorio de la anterior sentencia..... 187

Sobre un juicio ejecutivo relativo á Bienes desamortizados..... 188

Salvamento de dos votos relativos á la anterior sentencia..... „

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

De sobreseimiento en la actuación seguida contra el ex-Jefe Civil y Militar Ezequiel García Mayorga..... „

Sobre confirmación de un auto de sobreseimiento, por prescripción. 189

Sobre id. de otro id., por igual motivo..... „

NEGOCIOS CIVILES.

Sobre desistencia tácita en un juicio promovido por Juan de Brigard contra la Nación..... „

Sobre incompetencia de la Corte para conocer de un juicio en que está interesado un extranjero..... 190

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL.

Relativa á un sumario contra el Jefe departamental de Ocaña Ignacio S. Hoyos..... 191

Relativa á la información sumaria formada respecto del ex-Presidente de Panamá Gerardo Ortega..... „

GACETA JUDICIAL.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

En Bogotá á tres de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, se constituyó la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de los señores Magistrados y del infrascrito Secretario.

Habiéndose dado cuenta de la solicitud de varios vecinos de "San Antero," correspondiente á la Provincia de Lorica, en el Departamento de Bolívar, á la cual acompañan copia del memorial que elevaron al Gobernador del mismo Departamento, con fecha 21 de Febrero del presente año para que revocase el Decreto número 312, de 4 de Diciembre último, sobre división territorial, y piden á la Corte que acuerde la nulidad del expresado decreto, una vez que no han obtenido resolución alguna de aquel funcionario; el señor Magistrado doctor Noguera propuso el siguiente proyecto, que fué aprobado por unanimidad:

"Aparte de que no se ha acompañado el decreto acusado por los vecinos de "San Antero," sin lo cual y en el supuesto de que la Corte pudiera ocuparse de él, sería imposible formar juicio exacto sobre su constitucionalidad ó inconstitucionalidad, necesario es tener en consideración que, conforme al inciso 5.° del artículo 181 de la Constitución de la República, cuyo cumplimiento invocan los solicitantes, la Corte Suprema no tiene atribución sino para decidir, de conformidad con las leyes, sobre la validez ó nulidad de las ordenanzas departrmentales, y esto, cuando hayan sido suspendidas por el Gobierno, ó denunciadas ante los Tribunales por los interesados, como lesivas de derechos civiles; y como es evidente que en ninguna de esas condiciones se encuentra dicho decreto, no se está en el caso de que la Corte pueda ejercer la mencionada atribución.

"Verdad es que aquel acto se dictó después, con mucho, de expedida la Constitución nacional, á ser exacto lo que exponen los solicitantes; verdad es también que según el artículo 186 de ésta, no es á los Gobernadores, sino á las Asambleas departamentales, á quienes compete crear y suprimir municipios, no arbitrariamente sino con arreglo á la base de población que determine la ley; y verdad es, por último, que no parecen despreciables las razones que aducen los peticionarios para que se conserve á aquella sección del territorio bolivarense, la categoría que siempre ha tenido, aun en épocas de mayor atraso, de Distrito municipal; pero no hay disposición alguna que permita á la Corte suspender ó invalidar los actos de los Gobernadores de Departamento, aunque sean inconvenientes ó salgan evidentemente de su esfera de acción constitucional, siendo entonces muy distintos los recursos que pueden emplear los ciudadanos para que se obligue á los funcionarios públicos á subordinar su conducta á las prescripciones de la ley; y en casos como el presente, el artículo 135 de la misma Constitución facilita el medio de obtener la anulación, reforma ó suspensión de los actos de semejante naturaleza.

"Basada, por consiguiente, la Corte Suprema en las consideraciones de que se ha hecho mérito, declara que no tiene atribución constitucional ni legal para anular el Decreto del Gobernador del Depdrtamento de Bolívar, que eliminó el Distrito municipal de "San Antero." Comuníquese y publíquese."

Con lo cual se concluyó el presente acuerdo que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ MARÍA SAMPER—*Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.* Secretario.

En cinco de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el acuerdo precedente.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintiséis de Abril de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—A la demanda que en trece de Abril de mil ochocientos sesenta y seis propuso ante el Juez del Circuito de Santander Vicente Sarmiento, como apoderado de José María Aya, para que se condenase á la Nación á pagarle la suma de tres mil novecientos cincuenta y tres pesos sesenta centavos ($ 3,953-60 centavos), valor de los suministros, empréstitos y expropiaciones que se le exigieron para las fuerzas federales en la guerra civil que principió en el año de 1860, se dió el curso prevenido por la ley 27 de 1865, sobre la materia, con audiencia del respectivo Agente del Ministerio público.

Surtida la tramitación legal sin que en toda ella se note informalidad alguna de las que vician el procedimiento, se pronunció sentencia en nueve de Junio del mismo año, condenando á la Nación á pagar al actor la cantidad demandada, cuyo fallo se remitió en consulta á esta Corte Suprema, en la cual ha estado pendiente el negocio desde el diez y seis de Julio del

referido año de mil ochocientos sesenta y seis, en que se dispuso su repartimiento.

Más tarde, esto es, en catorce de Octubre de mil ochocientos sesenta y siete, la Corte, para mejor proveer, dictó auto disponiendo el examen del los Alcaldes de Caloto, Domingo Cobos y Manuel Bonilla U., del Gobernador Ignacio Arboleda y de los Jefes General José Hilario López, Coroneles Manuel A. Scarpetta y Marcos de la Rosa y Comandantes Collazos, Manuel Orozco y Melitón Mancilla, por ser estos autoridades y empleados, según se asevera en el libelo de demanda, los que decretaron las exacciones en que se funda la presente actuación.

No habiéndose devuelto el despacho cometido al Juez de Santander para el examen de los expresados testigos, la Corte, á pedimento del apoderado del demandante, en esta segunda instancia, dispuso sobrecartarlo, por providencia de quince de Abril de mil ochocientos ochenta, sin que de entonces para acá, no obstante haberse recibido diligenciado dicho despacho, hubiesen las partes promovido cosa alguna para la continuación y terminación del juicio; hasta que, por último, repartido de nuevo el negocio, en once del presente mes, se citó nuevamente para sentencia, por auto de diez y seis de los mismos, quedando sin lugar la audiencia pública por no haber ocurrido á tan importante y solemne acto ninguno de los interesados.

Llenada, pues, la sustanciación en esta segunda instancia, hasta su completa terminación, debe yá procederse á censurar la sentencia consultada, lo que se verifica, previas las siguientes consideraciones:

1.ª Que las tres primeras partidas del libelo de demanda, importantes, la una, de diez y seis pesos ($ 16), en dinero, suministrados al Alcalde Cobos en ocho de Septiembre; la otra, de once pesos sesenta centavos ($ 11-60 centavos), valor de un caballo expropiado por el mismo Alcalde en nueve del citado mes; y la última de veintiocho pesos ($ 28), importe de cuatro reses que expropió el Gobernador Arboleda en cinco de Noviembre de mil ochocientos sesenta para raciones de la fuerza que conducía el Comandante general del 2.° Departamento militar, están perfectamente comprobadas, no sólo con la declaración conforme del citado Alcalde (foja 19 vuelta, cuaderno 2.°), sino también con la certificación del Secretario de la Jefatura Municipal de Santander (foja 6.ª cuaderno 1.°) referentes á los registros de expropiaciones pertenecientes á la antigua Provincia de Caloto, en las cuales consta que en las fechas expresadas se exigieron al demandante el dinero y las especies, por los valores que reclama, para destinarlos, como en efecto se destinaron, al servicio de los Ejércitos federales.

2.ª Que igualmente aparecen comprobadas las partidas 4.ª á 6.ª, inclusive, del mismo libelo, referentes, la 4.ª á veintitrés mulas estimadas á razón de cincuenta pesos cada una ($ 50 cada una), las que fueron expropiadas por diferentes Jefes militares en Julio de mil ochocientos sesenta y uno y en Febrero de mil ochocientos sesenta y dos, en el sitio de la Bodega y en el punto denominado "Valles Hondos"; la 5.ª, de veinte caballos mansos, valorados, uno con otro, á veinticinco pesos ($ 25), que de éste último lugar tomaron los Coroneles Scarpetta y Rosa en las fechas anteriormente citadas; la 7.ª, de ciento seis reses vacunas que de la Bodega expropiaron dicho Coronel Scarpetta y los Comandantes Rosa y Orozco en las fechas que vienen expresadas, calculándose en diez y seis pesos ($ 16) el valor de cada res. Así lo aseveran, respecto de cada una de tales partidas, los testigos Juan Fernández, Eulogio Jiménez, Bartolomé Barona y Lorenzo Jiménez, en sus declaraciones de fojas 8 á 12 vueltas, cuaderno 1.°, pues aunque se limitaron pura y simplemente á declarar que les constaban esos hechos, sin dar la más lijera razón de su dicho, esa omisión no invalidaba la prueba testimonial, según el Código Judicial de 1872, bajo cuyo imperio se rindieron aquellas declaraciones, y sólo daría lugar á exigir la responsabilidad del Juez que no hizo, sobre el particular, las correspondientes preguntas. Debe advertirse que respecto de ocho de las mulas de la citada partida 4.ª, la expropiación aparece comprobada también con las declaraciones de Manuel Bonilla U. (foja 13, cuaderno id. y 25 cuaderno 2.°) *quien tuvo conocimiento del hecho*, por que *entonces se hallaba de Alcalde* y, por lo mismo sabe que el Comandante Collazos vino con esta comisión, etc. etc.

3.ª Que también están comprobadas, con las mismas declaraciones, exactamente iguales en su redacción, las partidas 7.ª y 8.ª, correspondientes á veintidós yeguas valoradas en trescientos cincuenta y dos pesos ($ 352) á diez y seis pesos cada una ($ 16 cada una) y á cuarenta y cinco cerdos estimados á cuatro pesos cada uno, ó sean ciento ochenta pesos ($ 180); pues aunque el General José Hilario López en la declaración que rindió ante la Corte (foja 9.ª, cuaderno 2.°), asegura que los auxiliios de animales que necesitaba el Ejército de su mando los solicitó siempre por conducto de las autoridades civiles y que nunca expropió yeguas ni cerdos, no contradice terminantemente el hecho, puesto que agrega que si tal cosa se verificó, sería por abuso de los ejecutores, los cuales eran voluntarios y muchos se robaban los animales que expropiaban;

4.ª Que no existe la prueba de la expropiación de la escopeta mencionada en la partida 9.ª. Los testigos Alonso Tólaga y Lorenzo Jiménez dicen, es verdad (fojas 14 vuelta y 15, cuaderno 1.°), que yendo para Juntas con el Comandante, en Enero de 1863, al llegar á la punta de Taula, en la Aldea de la "Quebrada," una partida armada, del Comandante Melitón Mancilla, expropió á aquél una buena escopeta que podía valer veinte pesos ($ 20), la que fué entregada al mismo Mancilla, quien la destinó al servicio militar de las fuerzas Colombianas, etc., etc., pero examinado éste, dijo en su declaración de fojas 20 vuelta, cuaderno 2.° que no recordaba haber tomado ni dado orden á sus subalternos para expropiar dicha escopeta; que en Enero de 1863 *yá el declarante se había separado del servicio militar por la razón de haber terminado la guerra en el Estado, y que en aquella época vivía el que expone en Cali.*

Por lo tanto la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, condena al Tesoro Nacional á pagar al demandante, José María Aya, ó á quien sus derechos represente, las siguientes cantidades procedentes de los empréstitos y expropiaciones que por autoridades federales se le exigieron en la guerra civil de 1860 á 1863; á saber:

1.ª Cincuenta y cinco pesos, importe del empréstito de diez y seis pesos ($ 16) en dinero; de un caballo valorado en once pesos sesenta centavos ($ 11-60 centavos) y de cuatro reses que lo fueron en veintiocho pesos ($ 28).....$	55-60
2.ª Mil ciento cincuenta pesos, de veintitrés mulas, á razón de cincuenta pesos ($ 50) cada una.....	1,150-00
3.ª Quinientos pesos en que fueron estimados veinte caballos, calculados uno con otro á veinticinco pesos ($ 25).....	500-00
4.ª Trescientos cincuenta y dos pesos, de las yeguas expresadas en la partida 7.ª.....	352-00
Y 5.ª Ciento ochenta pesos importe de los cerdos, de que se ocupa la partida 8.ª.....	180-00
Suma.....	2,237-60

Cuyo total de dos mil doscientos treinta y siete pesos sesenta centavos ($ 2,237-60 centavos), se pagará en bonos del tres por 100 (3 por 100) anual, al tenor de lo dispuesto en los artículos 15 y 35, respectivamente, de las leyes 27 de 1865 y 31 de 1868. Y se absuelve al mismo Tesoro de la República del pago de la suma que á continuación se expresa, por cuanto no aparece debidamente comprobada la expropiación que le serviría de fundamento; esto es;

Veinte pesos ($ 20) que se reclaman como importe de la escopeta mencionada en el considerando 4.° de esta sentencia; en cuyos términos se reforma la de primera instancia, consultada con esta Superioridad.

Notifíquese y publíquese; archívese el expediente en la Secretaría de la Corte y remítase una copia íntegra de este fallo al Ministenio del Tesoro para la correspondiente liquidación por la cantidad general á favor del interesado.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del veintiséis de Abril de mil ochocientos ochenta y siete, se publicó esta sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En veintisiete de Abril de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general la sentencia que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, tres de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—La partida 6.ª de la demanda propuesta por José María Aya contra el Tesoro de la República, por los empréstitos y expropiaciones que se le exigieron en la guerra civil de 1860 á 1863 dice así:

"6.° De la Bodega le expropió el mismo Coronel Scarpetta, en esa época, parte de ciento seis reses vacunas que tenía el señor Aya; y Rosa y Orozco en 1862 le tomaron el resto para sus fuerzas respectivas, todas federales. Las reses valían á diez y seis pesos ($ 16) cada cabeza."

El 2.° considerando de la sentencia pronunciada en dicho negocio, con fecha veintiséis del pasado, está concebido en estos términos:

"Que igualmente aparecen comprobadas las partidas 4.ª á 6.ª inclusives del mismo libelo, referentes ..... la 6.ª (dice la 7.ª equivocadamente) de ciento seis reses vacunas que de la "La Bodega" expropiaron dicho Coronel Scarpetta y los Comandantes Rosa y Orozco, en las fechas que vienen expresadas, calculándose en diez y seis pesos ($ 16) el valor de cada res."

Si, pues, claramente quedó reconocido el derecho del demandante á ser pagado del valor de las mencionadas reses, y si cada una de ellas fué estimada en la suma de diez y seis pesos ($ 16), cuyo total asciende á la cantidad de mil seiscientos noventa y seis pesos ($ 1,696), es claro que sólo por involuntaria omisión dejaría de computarse esa suma en la totalidad de aquella en que fué condenada la Nación.

En fuerza de lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, estimando justa la antecedente reclamación del apoderado del demandante, y en uso de la facultad que le concede el artículo 784 del Código Judicial; administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley, declara: que la suma que debe pagar el Tesoro público al demandante José María Aya, en bonos flotantes del tres por ciento (3 por 100), es la de tres mil novecientos treinta y tres pesos sesenta centavos ($ 3,933-60), por cuanto debe incluírse en la que determina la misma sentencia, la de mil seiscientos noventa y seis pesos ($ 1,696) importe de las reses que le fueron expropiadas también; quedando en estos términos corregida y aclarada la expresada sentencia.

Notifíquese, déjese coópia y publíquese junto con el fallo á que se refiere.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A. Secretario.

A tres de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, en la audiencia de este día, publiqué la sentencia que precede.

Ramón Guerra A., Secretario.

En cuatro de Mayo del mismo año, notifiqué esta sentencia al señor Procurador General.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

En la misma fecha notifiqué dicha sentencia al señor doctor Jesús Arteaga.

ARTEAGA.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Abril veintisiete de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—En ocho de Febrero de mil ochocientos ochenta y uno, libró mandamiento ejecutivo el Administrador principal de Hacienda Nacional en la ciudad de Tunja, contra Pedro González, ó contra el poseedor del terreno denominado *Alcalá*, por la suma de cuatrocientos treinta y un pesos, sesenta centavos, en esta forma: por principal de un censo ó gravamen, perteneciente al ramo de Bienes Desamortizados, ciento sesenta pesos; por intereses al cinco por ciento, desde el nueve de Septiembre de mil ochocientos sesenta y uno hasta la fecha en que se libró el mandamiento ejecutivo, ciento cincuenta y cinco pesos, treinta centavos; y por intereses de demora, ciento diez y seis pesos treinta centavos.

Tomó como recaudo suficiente dicho Administrador para librar la ejecución, la copia de una partida de inscripción hecha ante el Agente subalterno de Bienes Desamortizados del Distrito de Samacá, Casiano Monroy, fechada en catorce de Enero de mil ochocientos sesenta y tres, en la cual se expresa que en una estancia llamada *Alcalá* existe una Capellanía de valor de ciento sesenta pesos, que por cláusula testamental dejó el Presbítero Ramón Amaya, con este destino: ochenta pesos, para el Cristo y ochenta para San Juan Nepomuceno de esa Iglesia de Samacá; y que esta aplicación y la constitución de esa Capellanía la había acreditado el Mayordomo de Fábrica de la parroquia, con una información de testigos, dando á esta el carácter de título de propiedad.

Como Pedro González había fallecido, la ejecución se intimó á Rafael González como poseedor del terreno de *Alcalá*; y éste apeló del mandamiento ejecutivo para ante esta Superiodad, en veinte de Junio de mil ochocientos ochenta y uno, apelación que le fué concedida en el efecto devolutivo.

Al mes cumplido fueron enviados los autos á la Secretaría de la Corte; y sin que se sepa por qué, ni es ahora ocasión de averiguarlo, el expediente permaneció sin repartir y sin actuar en él hasta el veintiséis de Marzo último, no obstante de que el recurrente contribuyó con el papel y las estampillas necesarias.

Dada ya forma á la actución y sustanciada la apelación con audiencia del señor Procurador, éste opina que debe confirmarse el mandamiento ejecutivo, porque, suponiendo que la inscripción fuera defectuosa, eso daría lugar á excepciones que la parte puede oponer oportunamente, debiéndose considerar que el funcionario ejecutor se fundó en un antecedente que daba lugar á la ejecución, según la reforma 31.ª de la ley 46 de 1876, hecha al Código Judicial.

Encontrándose el negocio en estado de ser decidido, la Corte considera para dar su fallo, lo siguiente:

1.° Aun cuando es verdad que la reforma 31.ª, adicional al Código Judicial, de la ley de 5 de Junio de 1876, da mérito ejecutivo á las cuentas que liquiden los Agentes del ramo de Bienes Desamortizados, á cargo de los deudores, también lo es, según esa misma disposición y lo establecido en el Código Fiscal, que para que esa jurisdicción pueda ejercitarse, se necesitan dos circunstancias: la una en la forma, consistente en el establecimiento y liquidación de la cuenta; y la otra en la esencia, resultante de que esa liquidación tenga por base una inscripción legítima. Este expediente carece de ambas cosas, porque no hay cuenta previa, sino una relación en el auto ejecutivo; y este se apoya en una inscripción que no ha podido descansar en una mera información de nudo hecho, cuando el fundamento del censo ó de la Capellanía es una cláusula testamental, que, por supuesto, debe existir en un archivo público; y no se hizo constar ni la pérdida de ese instrumento, ni la posesión notoria de la condición de patrono de la finca censada, ni la de Capellanía usufructuaria;

2.° La ejecución se libró en el año de mil ochocientos ochenta y uno, y, por lo mismo, ella debió acomodarse á las prescripciones del decreto reglamentario de la Administración de los Bienes Desamortizados, de 24 de Noviembre de 1864. El artículo 21 de ese decreto determina todas las condiciones con que la inscripción ha debido verificarse, y retrotrae sus efectos, modificando las disposiciones anteriores á este respecto. Ninguna de las condiciones allí detalladas contiene la inscripción de que se trata, faltando especialmente las de los incisos 5.°, 8.°, 10.°, 12.° y 22.° del indicado artículo 21; habiendo terminado en treinta y uno de Enero de mil ochocientos sesenta y cinco el tiempo en que las inscripciones han debido verificarse;

3.° Siendo esto así, es claro que la inscripción de que se trata no tiene los requisitos necesarios, para librar sobre ella un mandamiento ejecutivo, al tenor de lo que se deja expuesto;

4.° Finalmente, verdad es que el ejecutado pudiera convertir estas consideraciones en capítulo de excepciones; pero aparte de que no habría justicia para sujetar á un individuo á las consecuencias de una ejecución y á la secuela de un juicio, cuando éste no tiene una raíz legítima, la jurisdicción coactiva necesita título suficiente para ejercitarse, sin lo cual no puede haber tal jurisdicción; y yá se deja dicho que el recaudo ejecu-

tivo en que el Administrador principal de Hacienda Nacional de Tunja se apoyó, no es suficiente.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el auto apelado, ordenando que cese la ejecución intentada.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase á la oficina de su procedencia.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la resolución anterior, los senores Magistrados doctores Antonio Mor es y Benjamín Noguera salvaron su voto en estos términos:

"Los suscritos Magistrados Antonio Morales y Benjamín Noguera, salvan su voto en la anterior decisión de la mayoría de la Corte, por las razones que se permiten expresar en seguida:

"El artículo 1,091 del Código Fiscal Nacional, que es la misma disposición consignada en la reforma 31.ª de la ley 46 de 1876, establece que, en materia de Bienes Desamortizados, prestan mérito ejecutivo, entre otros documentos, las cuentas que liquiden los Agentes á cargo de los deudores al ramo, con vista de las partidas de registro de inscripción, y siempre que éstas se hayan formado á virtud de los informes dados por los anteriores usufructuarios ó por los antecedentes encontrados en los respectivos archivos.

"El Administrador principal de Hacienda Nacional en Tunja dictó el auto ejecutivo que ha venido en apelación á la Corte, fundado en una relación ó liquidación de que hizo mérito al principio del mismo auto, y teniendo á la vista, para formar dicha liquidación, la partida de inscripción ó registro asentada por el Agente respectivo del Ramo.

"El auto tuvo por base la liquidación, y aun cuando ésta no fué formada en pliego separado, no debe considerarse tal circunstancia como importante en el asunto, por no existir ninguna disposición legal que ordene á los Agentes de Bienes Desamortizados que para librar los mandamientos respectivos de ejecución formen las cuentas en pliego separado. Es verdad que el artículo 1,670 del Código Fiscal pudiera tener aplicación en el presente caso; pero es preciso advertir que este pasaje de la ley, sólo exige que la liquidación se haga separadamente de los documentos ó datos, en razón de los cuales un individuo viene á ser deudor del Tesoro, como lo deja comprender el artículo 1,668 al definir lo que es *liquidar*. Por otra parte, lo más natural es aplicar, por analogía, el procedimiento prescrito para los Jueces ordinarios; y sabido es que dichos Jueces hacen, en el auto de ejecución, la cuenta ó liquidación de la deuda.

"La liquidación fué hecha en vista de la inscripción que, de antemano, se había formado, circunstancia que está demostrada con la copia de dicha inscripción agregada por el empleado ejecutor, en pliego separado, al mismo auto ejecutivo.

"En cuanto á la manera como fué formada la inscripción, puede observarse lo siguiente:

"La última parte del artículo 1,091 del Código Fiscal y de la reforma 31.ª de la ley 46 de 1876, requiere que las inscripciones se hayan formado á virtud de los informes dados por los anteriores usufructuarios, ó por los antecedentes encontrados en los respectivos archivos.

"En la partida de inscripción de que se trata, consta que ésta fué formada con motivo de una información de testigos presentada al Agente del Ramo, por el Mayordomo de Fábrica de la Iglesia de Samacá. Ahora bien, dicha Iglesia era la usufructuaria de la Capellanía ó fundación; y como el Mayordomo de Fábrica debía ser considerado como un representante de dicha entidad, resulta que la persona usufructuaria de la fundación suministró los informes necesarios para hacer la inscripción.

"*No se diga que era preciso buscar en* primer lugar documentos fehacientes y después los demás informes, pues es de notarse que las dos disposiciones últimamente citadas anteponen los informes á los documentos, según puede verse en el texto de ellas. Tampoco es aceptable la doctrina sobre pruebas principales y supeletorias, y sobre la necesidad de demostrar la no existencia de una categoría para poder aplicar la otra; porque esa teoría es referente al estado civil de las personas y aquí no se trata de eso.

"De lo expuesto se infiere que el documento, base de la ejecución, tiene todas las condiciones exigidas por las dos disposiciones referidas.

"Por último, como se sabe, el juicio ejecutivo es de procedimiento especial. Para librar una ejecución basta saber si el documento en que debe apoyarse está enumerado entre los que prestan mérito ejecutivo. Si el ejecutado hace alegaciones que tiendan á modificar ó á destruír el derecho del ejecutante, el mismo juicio presenta campo oportuno y suficiente para discutir todas las cuestiones fundamentales de hecho y de derecho entre las partes apelantes; pero ordenar que cese la ejecución por vicios intrínsecos en los documentos del ejecutante, prescindiendo del término otorgado á éste para la justificación plena de su pretensión, es una providencia que parece no avenirse bien con el carácter del juicio ejecutivo.

"Así, pues, los suscritos, son de concepto que el auto ejecutivo, materia de la apelación, debe ser confirmado."

Bogotá, veintisiete de Abril de mil ochocientos ochenta y siete.

Antonio Morales—Benjamín Noguera—Martínez—Samper—Cock Bayer—Fernández—Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintinueve de Abril de mil ochocientos ochenta y siete notifiqué al señor Procurador general el auto y salvamento de votos que preceden.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Abril veintisiete de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Estando encargado el Prefecto del Departamento de Santa-Marta, Ezequiel García Mayorga, del despacho del Poder Ejecutivo en lo local y urgente, por ausencia del ciudadano Presidente del Estado, le dirigió una nota el Jefe Municipal, con fecha 1.° de Marzo del 1886, haciéndole saber que por cuanto resultaban graves indicios de que Manuel Mancilla era autor de un robo que se investigaba, había decretado que se le redujera á prisión, en calidad de detenido, y que por el hecho de ser el sindicado intérprete público, le pedía la suspensión de éste. García, en su carácter de Presidente del Estado, la decretó y le dió aviso al Jefe Municipal; y habiendo ido el negocio al Tribunal Superior del Estado, dispuso éste que se procediera á averiguar la responsabilidad en que pudiera haber incurrido García Mayorga, por haber suspendido al intérprete público del ejercicio de sus funciones, sin estarse en los casos de que trata el artículo 1,939 del Código Judicial, los cuales se limitan á decretar la suspensión en tiempo de paz de los Jefes de la fuerza armada llamados á juicio criminal, y la de los Generales y Comandantes en Jefe de las fuerzas nacionales y Jefes superiores de las Oficinas principales de Hacienda de la República, sometidos á juicio de responsabilidad.

Siendo el negocio de la competencia de la Corte Suprema, se le han remitido las diligencias sumarias relativas al hecho, y dadas en vista al señor Procurador general, es éste de concepto que no hay motivo para llamar á juicio al sindicado, porque en su procedimiento no se descubre la menor voluntad ó malicia de violar la ley ó de excederse de sus facultades.

En efecto, una vez decretada la suspensión de Mancilla por el Jefe Municipal, en su calidad de funcionario de instrucción y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1,474 del Código Judicial, el Encargado del Poder Ejecutivo en Santa-Marta procedió á suspender á Mancilla, no por su voluntad, sino en virtud de excitación legal de otro funcionario público. El motivo que dió lugar á ella, demandaba una pronta providencia, y las circunstancias anómalas en que es notorio se encontraba la

Costa Atlántica en aquel tiempo, no permitían ocurrir directamente al Poder Ejecutivo nacional con el fin indicado, en cuyo caso al Gobierno del Magdalena no le era dado, en la situación de guerra que atravesaba el país, dejar de tomar una providencia urgente por su naturaleza, particularmente cuando, como Jefe civil y militar, estaba investido de facultades extraordinarias. Para obrar así debió, por otra parte, tener en cuenta, como lo observa el señor Procurador general, que el señor Gobernador del Estado del Magdalena, por decreto de 31 de Agosto de 1885, declaró vacante el empleo de intérprete público, desempeñado entonces por Vicente Noguera C. y nombró en su reemplazo al mismo Mancilla, y que ese decreto de suspensión y nombramiento de un empleado público nacional fué aprobado posteriormente por el Excelentísimo Presidente de la República. Este antecedente que debió servirle á García Mayorga de norma en un caso semejante, justifica el procedimiento que adoptó, y deja ver que nó obró de malicia ó con ánimo de violar la ley.

Por lo tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que no hay motivo para llamar á juicio de reponsabilidad al ex-Jefe Civil y Militar de Santa-Marta, Ezequiel García Mayorga, por la suspensión de que se ha hecho mérito, y sobreseé, en consecuencia, en el procedimiento.

Hágase saber este auto, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y archívese el sumario.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintisiete de Abril de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Abril veintinueve de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El veintidós de Mayo de mil ochocientos setenta y nueve, se presentó por escrito, José María Alvarado, ante el Tribunal Superior del extinguido Estado de Boyacá, denunciando varios hechos atentatorios, de los cuales creía responsable, como abusos de autoridad, al entonces Jefe departamental del Norte, José Tomás Monroy. Sustanciése la actuación en debida forma, pero con increíbles demoras, y al cabo, habiendo pasado el sumario al nuevo Tribunal Superior de Tundama, en el Departamento de Boyacá, éste, previas las formalidades legales del caso, ha dictado, el veintiocho de Marzo último, auto por el cual declara prescrita la acción criminal, ó sea el derecho de perseguir al delincuente y de imponerle pena "de acuerdo con la reforma primera de la ley 14 de 1884, penal de Boyacá"; por cuanto en los casos de delitos oficiales ó de mera responsabilidad, la pena se prescribe por el transcurso de cuatro años; y está comprobado que no ha ocurrido ninguna de las circunstancias que interrumpen por la prescripción.

Habiendo el Tribunal Superior de Tundama remitido en consulta el auto de cesación de procedimiento que se ha mencionado, se ha sustanciado el negocio ante esta Superioridad y es el caso de resolver.

La Corte Suprema nacional reconoce que son enteramente legales las razones aducidas por el Tribunal Superior, y por lo tanto, de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador general, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto consultado declarando que, por causa de prescripción legal, debe cesar todo procedimiento.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente al Tribunal que lo remitió.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Bock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En dos de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Abril veintinueve de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Aparece claramente comprobado en autos (f. 66) que Carlos B. Ruiz dejó de funcionar como Juez 2.° del Circuito de Ubaté, desde el siete de Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco, en cuya fecha fué reemplazado en el expresado destino por el doctor David Ovalle,

Habiendo transcurrido más de dos años desde la expresada fecha, hasta el diez y seis de Marzo del presente, en que se dictó por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el auto declarando precrita la acción criminal á que dieron lugar las demoras causadas por el ex-Juez Ruiz, en el sumario seguido contra Narciso Vargas, Juez del Distrito de Sutatausa, por abuso de autoridad, cuya sentencia ha sido remitida en consulta á esta Superioridad;

Disponiéndose por el artículo 49 del Código Penal de Cundinamarca de 1883, que la acción criminal, ó sea el derecho de perseguir al delincuente ó de imponerle pena, se prescribe por el término de dos años para los delitos que no sean de asesinato, homicidio voluntario, robo, falsificación de documentos, ó para los que se castiguen con cinco años ó menos de reclusión penitenciaria, pero que se excede en su mínimun de un año. Siendo evidente que la pena que se hubiera podido imponer al sindicado no quedaría comprendida en ninguna de las expresadas;

Y habiéndose dado á la consulta el curso prevenido por la ley, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, y de conformidad con el concepto del señor Procurador general, confirma el auto consultado.

Notifíque, cópiese, publíquese y devuélvase.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Antonio Morales—Francisco A. Fernández—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En dos de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Abril veintinueve de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Con poder del Procurador del extinguido Estado de Boyacá, estableció Juan de Brigard, con fecha cuatro de Agosto de mil ochocientos ochenta y cinco, ante la Corte Suprema, juicio ordinario contra el Gobierno de la Nación, para que se declare nula la sentencia arbitral referente al arrendamiento de las minas de esmeraldas de Muzo y Coscuez y para que se prescriba al Poder Ejecutivo nacional que entregue inmediatamente al Estado de Boyacá las citadas minas

Seguido el juicio con intervención del señor Procurador general de la Nación con la debida regularidad, se paralizó desde el veinticinco de Mayo de mil ochocientos ochenta y seis, fecha del último auto dictado en la actuación, seguramente á consecuencia de que las minas en cuestión, pasaron nuevamente, por la reciente Constitución, á ser propiedad de la República.

El señor Procurador ha pedido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 423 del Código Judicial, que se pida papel al actor para darle curso al juicio, y la Corte por auto de veintiséis de Marzo último, señaló el término de veinticuatro horas para que este consignara el papel necesario competente para adelantar la actuación, bajo la conminación de declaratoria de haber desistido el demandante de la instancia.

Notificada legalmente esa providencia, el veintiocho del mismo mes, el Secretario informa con fecha treinta, que no se ha cumplido con la orden de consignación del papel, que debe ser común, según lo dispuesto en el número 10, artículo 3.° del Decreto ejecutivo de 5 de Agosto de 1886, sobre papel sellado y Timbre nacional.

El señor Procurador pide ahora, con fecha diezinueve del presente, que se dé cumplimiento al auto conminatorio.

La Corte, teniendo en consideración lo expuesto y la disposición

é informe citados y el artículo 424 del mismo Código; que no hay ley alguna que exima á los antiguos Estados ni á entidad política alguna, salvo al Fisco ó la Nación, de suministrar papel para la actuación en los litigios en que sean actores, y el abandono prolongado en que ha caído el juicio, resuelve, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley:

Declárase que el demandante, en el juicio mencionado, ha desistido de la instancia.

Notifíquese, publíquese y archívese el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la resolución anterior salvó su voto el señor Magistrado doctor Francisco A. Fernández en los términos siguientes:

1.° Cuando el Gobierno del extinguido Estado del Boyacá entabló juicio contra la Nación, regía el sistema federal que hacía independientes los Gobiernos seccionales de los Estados del Gobierno general y lo que se llamaba Fisco nacional no comprendía el de los Estados; pero hoy en virtud de la nueva Constitución se estableció la unidad nacional y las rentas de los Departamdntos, aunque administradas separadamente, constituyen todas el Fisco nacional. Lo que diga, pues, la ley en referencia á asuntos en que tenga interés la Nación, debe entenderse que comprende á los Departamentos de que ella está formada.

La ley adjetiva se aplica al procedimiento en los juicios, tomándolos en el estado en que se encuentren en el momento en que se empieza á regir y, en consecuencia, el incidente que ha promovido el señor Procurador general de la Nación sobre que se declare desierto el recurso de apelación interpuesto por el representante del Gobierno de Boyacá, por no haber sumisnistrado papel para la actuación, está sujeto á lo que diga la ley nacional sobre el particular.

El artículo 426 del Código Judicial nacional dice "Cuando el actor ó demandante sea el Fisco ó la Nasión, el papel que él deba suministrar para la actuación lo tomará el Secretario del del consumo del respectivo Juzgado ó Tribunal."

Si tanto por la unidad nacional como porque las minas de esmeraldas de Muzo y Coscuez le pertenecen hoy al Gobierno general, según los ordinales 2.° y 3.° del artículo 202 de la Constitución, tienen interés en el pleito en la actualidad lo que se llama *Fisco* ó *Nación* en el artículo 426 arriba transcrito, es claro que el papel para fallar este negocio debe suministrarse por el Secretario, del destinado al consumo de la Corte, y no se está en el caso de que se declare desierto el recurso por no haberse dado el papel común que se le exigió al representante del Gobierno de Boyacá.

2.° Cuando se decreta un desistimiento por no haberse suministrado papel oportunamente por la parte actora, se procede en virtud de una ficción legal en que se supone que el que deja de dar el papel es hábil ó tiene facultad legal para desistir y que ya que no quiera ejercitar este derecho expresamente, consiente en que se finja desistida de él por abandono del juicio ó recurso que haya promovido; pero si la persona que ha intentado un recurso ó acción no debe, no puede desistir expresamente porque la ley lo prohibe, como sucede en los asuntos en que son parte las entidades políticas nacionales, departamentales ó municipales, mal se podría darla por desistida en virtud de *una ficción*, si en realidad aun cuando promoviera el desistimiento, no se le podría admitir.

En el asunto de que aquí se trata se ha efectuado una confusión de derechos entre el demandante (el Gobierno de Boyacá) y la parte demandada (la Nación) en que el señor Procurador general representa á aquél y á ésta, una vez que lo que ha motivado el debate es un bien (hoy) nacional, sea que se le reconozcan derechos á Boyacá ó que se diga que no los tiene; y como por el artículo 142 del Código Judicial no le es permitido desistir de ningún pleito, sino en los casos allí previstos, entre los cuales no se encuentra el presente, es indudable que si no puede desistir de una manera expresa, menos puede accederse á declarar desierto el recurso por suponerse que se ha verificado el desistimiento.

3.° Si hubiere duda sobre si en el caso en cuestión deban reputarse las minas de Muzo y Coscuez como bien nacional, y sobre si debieran aplicarse ó nó las leyes nacionales citadas, debe dárselas á éstas inteapretación extensiva, una vez que con ello se procura evitar el que no se haga eficaz un derecho, por atender á una fórmula procedimental de dudoso sentido.

4.° Si no hay ley nacional que diga que debe suministrarse papel común por la Secretaría, para la actuación, en los casos en que debieron darlo los personeros de los Departamentos ó de los Distritos, debe reputarse esto como un vacío en el procedimiento y aplicarse, por anología, lo que se dice en el Código Judicial para cuando está interesada la Nación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 196 del Código Judicial, que dice: "A falta de otra regla general ó especial, todo vacío de procedimiento se llenará según lo dispuesto en este Código para casos semejantes."

Refuerza este razonamiento la circunstancia de que el decreto número 480 de 1886 (5 de Agosto) sobre papel sellado y Timbre nacional, publicado en el *Diario Oficial* número 6,769 (que es ley de la República), asimila los intereses de las entidades políticas con las de la Nación, cuando al hablar de los casos en que puede actuarse en papel común, dice en el ordinal 10.° del arcículo 3.° "Toda clase de actuaciones ó diligencias judiciales ó administrativas en negocios civiles, exceptuando las de oficio ó que correspouden á la Nación ó á otra entidad política."

Por las consideraciones que anteceden opina el que suscribe que no es llegado el caso de declarar que el Gobierno de Boyacá ha desistido de la acción en el juicio á que se refiere el auto que antecede.

Nofíquese y publíquese.

Bogotá, veintinueve de Ahril de mil ochocientos ochenta y siete.

Francisco A. Fernández—Martínez—Samper—Cock Bayer—Morales—Noguera—Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En tres de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede, lo mismo que el salvamento de voto que á él se refiere.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Mayo dos de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Estaba pendiente en el Tribunal Superior del Distrito judicial del Departamento de Cundinamarca, la apelación entablada por el apoderado de Julio Sánchez S., relativa á una providencia dictada por el Juez 1.° del Circuíto de Bogotá, sobre la forma en que debía hacerse la notificación de la sentencia que decidió acerca de la tercería excluyente promovida por el apelante Sánchez en la ejecución entablada por Luis Pedro Thorín contra fortunato Balbuena;—rigiendo la ley 61 de 1886, que atribuía á la Corte Suprema la facultad de conocer en segunda instancia en los juicios en que tuvieran parte individuos extranjeros.

Por tal motivo, el Tribunal, por auto de tres de Marzo último, y por la circunstancia de estar interesado en el asunto el extranjero Thorin, se abstuvo de conocer acerca del recurso intentado, y dispuso que se mandaran los autos á esta Superioridad, por ser ella entonces el Juez competente.

Mas como por ley posterior, 46, de 16 de Marzo último, se derogó el inciso 5.° de la Sección 2.ª del artículo 21 de la ley 61, citada atrás; es claro que actualmente no tiene la Corte facultad para decidir esta clase de recursos.

Por lo tanto, la Corte Suprema se declara incompetente para resolver en la apelación de que se ha hablado ántes, y ordena que se devuelva el expediente al Tribunal Superior de Cundinamarca, que es el competente.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En tres de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL

Señores Magistrados.

Por auto de 20 de Noviembre de 1886, el Juez Superior del Circuito de Ocaña dispuso que cesaran las diligencias que se instruían contra Ignacio S. Hoyos, denunciado, en su calidad de Jefe Departamental, por infracción de la ley nacional 60 de 1882, "sobre garantías para personas y propiedades en tiempo de guerra."

El Tribunal Supremo del Departamento de Santander, con quien se consultó primero el referido auto, se declaró incompetente para conocer en segunda instancia, razón por la cual la consulta ha sido sometida á vuestro conocimiento.

Fúndase la providencia consultada en que los actos á que se contrajo la denuncia contra Hoyos, deben reputarse como medidas de guerra que, á lo sumo, constituyen delitos políticos, comprendidos en la amnistía concedida por el Decreto número 418 (bis) de 20 de Julio de 1886.

Para establecer la competencia del Tribunal que debe conocer del asunto en segunda instancia, el infrascrito cree conveniente llamar la atención de la Corte á las siguientes consideraciones:

El juicio que se ha tratado de promover es un juicio de responsabilidad por infracción de una ley nacional, siendo el presunto infractor, Jefe legítimo del Departamento de Ocaña.

Según la ley 61 de 1886, corresponde á la Corte conocer en última instancia de las causas de responsabilidad, ó por delitos comunes de los Jefes Superiores de las Provincias, y como en la organización administrativa actual, tales empleados han sustituído á los antiguos Prefectos y Jefes departamentales, es razonable admitir que, en los juicios pendientes contra éstos, debe aplicarse el procedimiento señalado en la nueva ley para los juicios que se sigan contra aquéllos.

Cree, pues, el infrascrito que la Corte es competente para decidir como Tribunal de segunda instancia, la consulta que nos ocupa, por tratarse de la responsabilidad de un empleado que, por su categoría y por la naturaleza de sus funciones, puede considerarse comprendido bajo la misma jurisdicción á que están sujetos los actuales Jefes Superiores de Provincia.

Sentado esto, resta saber si los hechos que se dicen ejecutados por el sindicado, corresponden á la calificación que se les ha dado, para declararlos comprendidos en el decreto sobre amnistía de que se deja hecha referencia.

La inculpación á que se contrae la denuncia, se reduce á que el sindicado, en su calidad de Agente del Gobierno legítimo, tomó y destinó para cuartel de las fuerzas del mismo Gobierno una casa del denunciante. Esta aserción solamente está comprobada en el sumario, en lo relativo á la ocupación militar de la casa, pero no lo está en cuanto á que esa medida se hubiera llevado á efecto por orden ó con la anuencia del empleado acusado.

Pero aun concediendo que esto último también se hubiera comprobado, dicho empleado no sería responsable en manera alguna, por cuanto procedió en cumplimiento del deber en que están las autoridades políticas de proveer de alojamiento, en tiempo de guerra, á las fuerzas del Gobierno; siendo de advertir que las circunstancias apremiantes de la situación no permitieron seguramente que se procediera á tomar la casa con las formalidades de cuya omisión se queja el denunciante.

No estando, como no está, comprobada la existencia de hecho alguno indebido y punible, el infrascrito os pide que reformeis el auto consultado, declarando que las diligencias á que él se refiere no prestan mérito para proceder contra el sindicado; pues si bien es cierto que la amnistía no implica necesariamente culpabilidad por parte del amnistiado, también lo es que esa gracia ó beneficio especialmente se concede á los que fueron enemigos, siendo más propio amparar y justificar por medio de razones legales de otro orden á los servidores públicos, inculpados infundadamente por actos ejecutados en ejercicio de sus funciones.

Bogotá, 28 de Marzo de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

El hecho que motivó la formación de este voluminoso proceso está suficientemente definido en la denuncia que figura á fojas 31 del expediente, publicado en el número 37 de *El Bien Social*, con fecha 8 de Marzo de 1880, de cuyo periódico era Redactor el General Manuel Briceño.

En dicho documento se hace al Presidente del extinguido Estado de Panamá, señor Gerardo Ortega el cargo de haber traficado con la honra nacional, permitiendo el embarque de elementos de guerra para el Perú, mediante una suma de pesos pagada á dicho señor Ortega por los Agentes Peruanos, en la época en que dicha Nación estaba en guerra con la República de Chile.

Se dijo entonces que el ex-Presidente Ortega, por medio de un comisionado, hizo saber al señor Agente de Chile en Panamá, que no podría impedir el embarque de elementos de guerra para el Perú por el Ferrocarril de Panamá, sino gastando algún dinero, y que el mismo Ortega recibió del mencionado Agente con dicho objeto, la suma de diez mil pesos ($ 10,000), á pesar de los cuales (dice la denuncia) los elementos de guerra para el Perú fueron embarcados, y afirma el denunciante que los documentos relacionados con el asunto se encontraban en la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Nacional.

En la ratificación jurada de la denuncia, el señor Briceño cita en corroboración de su dicho á los señores Francisco Valdés Vergara, Encargado de Negocios de Chile, Roberto Suárez, ex-Secretario de la Legación Colombiana en Chile, y á los señores Francisco Fonseca Plazas y Filemón Buitrago, Redactores de periódicos de esta ciudad.

Desde luégo se advierte que, al ratificarse bajo juramento, el señor Briceño hizo á la denuncia las siguientes importantes modificaciones, que extinguen por completo el principal cargo hecho al sindicado:

1.ª Hubo error al afirmar que el señor Ortega recibiera suma alguna del Agente Chileno;

2.ª También se cometió un error al asegurar que los documentos relacionados con ese asunto, reposaran en la Secretaría de Relaciones Exteriores. El denunciante fué informado por el señor Francisco Valdés Vergara, que fué el Agente de Chile de que se ha hablado, de que él no había querido tratar por escrito tan enojoso asunto, y que se había limitado á tener conferencias verbales con el Excmo. señor General Trujillo y el Secretario de Relaciones Exteriores, señor don Luis Carlos Rico.

Las dos declaraciones que, por medio de certificado, ha rendido en este sumario el señor Francisco Valdés Vergara, Encargado de Negocios de Chile, se han limitado á manifestar al señor Secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno Nacional (fojas 45, 46 y 136), que él fué el Agente Chileno á quien el señor J. Florentino Ucrós, á nombre del Gobernador de Panamá, le hizo saber que su Gobierno cumpliría con sus deberes y respetaría los tratados con Chile, "sólo en el caso en que de ello resultara alguna personal ventaja." Y agrega: "acontecimientos que en Panamá se verificaron mientras yo gestionaba ante V. E., vinieron pronto á demostrar cuán fundadas eran mis desconfianzas y, al efecto, me bastará recordar á V. E. el modo como se permitió la salida del Vapor *Lanza-torpedos*, cuya condición de contrabando de guerra, que el señor Ortega no quiso reconocer, quedó á poco comprobada de una manera incontestable, así porque la embarcación cayó en poder de una nave de la escuadra Chilena, como porque su Jefe, el Oficial Peruano La Barrera, que la sacó de Panamá, fué sometido en Lima á un Consejo de Guerra para que explicara las causas de su pérdida."

Llamado á declarar el señor J. Florentino Ucrós, de acuerdo con la cita que le hace el señor Valdés Vergara, se expresó así (fojas 147 á 148 vuelta):

"..... No sólo no es cierto lo que el señor Valdés Vergara asegura acerca del ofrecimiento que dice haberle hecho yo, á nombre del Presidente Ortega, sino que por el contrario, fué ese actual Encargado de Negocios de Chile el que habló al exponente dos veces para que procurara que el señor Ortega impidiera embarques de armas para el Perú, ofreciéndole dinero si era necesario aun en mayor suma que la que él aseguraba le

habían dicho, lo ofrecieron los Agentes Peruanos. A esta exigencia del señor Valdés se negó el exponente, diciéndole que él no sabía hacer semejantes proposiciones; que en las relaciones que llegó á tener con el señor Valdés, y teniendo entonces el que expone verdaderas simpatías por la causa de Chile, le indicó que procurase ganarse algunos empleados de la Compañía del Ferrocarril; él así lo pretendió, pues una noche dijo al exponente que había fracasado una negociación con uno de ellos, porque se negaba á dar un recibo de la suma que Valdés debía entregarle; que la resolución del señor Ortega fué consultada por éste con un distinguido istmeño, con quien el señor Encargado de Negocios tenía amistad, y que por esta circunstancia, cuando el exponente le habló de la dicha resolución, le contestó 'que ya él la sabía;' que el exponente no podía hacer mérito, pues, de una cosa en que acaso había tenido más parte el señor Valdés. Que éste encargó al que expone, que hiciera lo posible porque el señor Ortega cumpliera esa resolución, y á eso se limitó, pudiendo asegurar que ningún esfuerzo tuvo que hacer en ese sentido, porque él creía que así era como debía proceder. Que esto le consta también á Valdés, pues le dijo una ocasión que había hablado con Ortega sobre el mismo asunto, y estaba persuadido de que era hombre sano y de buen corazón, pero que por eso mismo temía que los Agentes Peruanos lo indujeran á proceder mal al fin. Que el señor Ortega, á su juicio, cumplió su resolución, pues en ella decía que daría permiso para el embarque de armas para puertos neutrales, y fué para uno de Centro-América que lo concedió, mediante la fianza de que dicha resolución hablaba. Que ésta fué improbada poco después, absolutamente, por el Gobierno general. Que el señor Valdés ha perdido la memoria sobre estos acontecimientos, pues—cuando él creyó que debía exigir que las armas que estaban en los carros ó lanchas del Ferrocarril debían traerlos al parque del Estado, y que el exponente le contestó que Ortega no creía que debía proceder de ese modo—le preguntó.....si el que expone había contraído directamente algún compromiso por lo que hubiere hecho ó querido hacer en favor de la causa de Chile, y le contestó categoricamente que ninguno. "Que después.....el que expone, no volvió á hablar con el señor Valdés. Que las armas se embarcaron y que el exponente se propuso no ocuparse más de estos asuntos, lo cual cumplió religiosamente hasta que por virtud del empleo de Inspector del puerto, Jefe del Resguardo, tuvo que hacer caso de varios falsos denuncios que daba el Cónsul general de Chile al Gobierno del Estado, sobre embarque de armas, y *éste le ordenaba evitarlos*. Que debe agregar aquí que jamás oyó hablar al señor Valdés Vergara, ni por incidencia, de los veinte mil pesos ($ 20,000) de que habla el señor Briceño. Que el Encargado de Negocios decía que tenía autorización para gastar, pero nunca le oyó la suma de que pudiera disponer, y es aquí de pública notoriedad que á los que ocupó en comisión de vigilancia, escribientes, etcétera, no los remuneró satisfactoriamente, etc."

La declaración de Roberto Suárez, ex-Secretario de la Legación colombiana en Chile, se contrae á exponer los rumores que corrían en aquel país contra la conducta de Ortega, y dice que á su regreso á Colombia, á su paso por Panamá, se propuso averiguar la verdad sobre este particular; pero que se convenció, por todos los informes que le dieron, que Ortega era incapaz de semejantes infamias (fojas 37 á 39 vuelta). Consta que este concepto, favorable á Ortega, lo había comunicado el exponente á los señores Francisco Fonseca Plazas, José María Cortés y Leopoldo Arias Vargas, quienes confirman el dicho de Suárez (fojas 37 vuelta y 38, 40, 40 vuelta y 41).

Francisco Fonseca Plazas y Filemón Buitrago, son testigos de oídas en este asunto. Ambos hacen referencia á los rumores públicos, á las publicaciones de la prensa y al dicho del señor Valdés Vergara.

De los documentos que se registran á fojas 2 á 29 y vuelta del expediente, y entre los cuales se encuentran varios reclamos *dirigidos al Gobierno de Panamá, por la casa* comercial de S. de Dellatone y C.ª, resulta que dicho Gobierno,—inmediatamente que recibió el denuncio que con fecha 27 de Octubre de 1879 le comunicó al señor Cónsul de Chile, de que se acababa de armar en el puerto de Panamá un vaporcito lanza-torpedos destinado al Perú,—ordenó la detención de dicho vapor, el cual permaneció detenido hasta el día 29 de Noviembre del mismo año (f. 123), en que tuvo permiso para salir del puerto con destino á Manta y Guayaquil en la República del Ecuador. Hay constancia en los autos de que tal permiso no se concedió sino después que dos peritos reconocedores declararon que, en su concepto, el vaporcito referido no era nave de guerra, aunque era susceptible de recibir esa aplicación. Los consignatarios aseguraron, además, con una fianza de doce mil pesos ($ 12,000) que el vehículo en cuestión no iba destinado á ningún puerto del Perú, y así lo probaron más tarde, con los comprobantes que acreditan su llegada á Manta y Guayaquil, para donde salió de Panamá, con certificado de nacionalización expedido por el señor Cónsul del Haway en dicho puerto.

Por el telegrama que, en copia auténtica, corre á foja 67 del expediente, se viene en conocimiento de que el Poder Ejecutivo nacional, con fecha 14 de Noviembre de 1879, ordenó al Gobierno de Panamá que impidiera la salida del mencionado vapor, denominado *Alea*, el cual zarpó de Panamá el 29 del mismo mes; pero no ha podido comprobarse si el telegrama en cuestión llegó á su destino antes de aquella fecha, circunstancia que serviría para probar la desobediencia del Gobierno de Panamá á las órdenes del de la Unión.

Las declaraciones de los testigos Antonio Hidalgo (foja 105), Simón J. Hart (foja 106), Ricardo de la Ossa (foja 117), y algunos otros documentos que figuran en el expediente, y los sucesivos denuncios dados por los señores Cónsul y Encargado de negocios de la República de Chile, tienden á demostrar como muy probable el hecho de que, valiéndose de ardides y empeños, los Agentes Peruanos consiguieron el paso de armas por Panamá, con el pretexto de que éstas no iban dirigidas á ningún Puerto del Perú; pero han sido ineficaces todos los esfuerzos que se han hecho para descubrir quiénes sean responsables de semejantes maniobras, en que, como es natural en tales casos, se emplean siempre el sigilo y el secreto y el empeño de no incurrir en circunstancia alguna que sirva más tarde de prueba contra los responsables.

Tan posible es la responsabilidad del Presidente de Panamá, como la de los empleados del Ferrocarril; pero esta posibilidad no es una prueba que pudiera poner á ese Supremo Tribunal en capacidad de dictar auto de proceder.

Así, pues, el infrascrito es de concepto que estos autos, en el estado en que están, no prestan mérito para proceder contra el ex-Presidente del antiguo Estado de Panamá, señor Gerardo Ortega.

Pero si ese Supremo Tribunal, atendida la importancia del asunto, y á pesar del largo tiempo empleado infructuosamente en la averiguación, creyere conveniente ampliar el sumario, este Ministerio os pide la práctica de las siguientes diligencias:

1.ª Que se pidan al Gobierno del Departamento de Panamá los datos á que se refieren las notas que figuran á fojas 93, 110 y 124 del expediente, y especialmente los que sirvan á comprobar que los permisos concedidos para embarque de armas, lo fueron sólo para puertos neutrales;

2.ª Que se soliciten nuevamente del Ministerio de Relaciones Exteriores los informes que yá han debido venir á dicho Ministerio, procedentes de Chile y del Perú, y á los cuales se refiere la nota número 2,866 de la Sección 1.ª, de fecha 17 de Diciembre último, dirigida al señor Secretario de esa Suprema Corte.

3.ª Que se reciba indagatoria al señor Ortega, inquiriendo de él todos los datos que sean necesarios para esclarecer los hechos que se le atribuyen, y sobre todo, para que diga con qué documentos puede justificar que los permisos que concedió para el embarque de armas tuvieron por objeto facilitar la salida de ellos para puertos neutrales y nó para ninguno del Perú.

Hecha que sea esta ampliación, si lo creyereis conveniente, este Ministerio podrá emitir nuevamente su concepto sobre el mérito del sumario.

Bogotá, 30 de Abril de 1887.

CARMELO ARANGO M.

CONSTITUCIÓN DE COLOMBIA.

ESTÁ DE VENTA en la Tesorería general, en edición de cuaderno, á 20 centavos el ejemplar.

IMPRENTA DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 25

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 30 de Junio de 1887.

CONTENIDO.

Pág.

PERSONAL DE LA CORTE.

Nota relativa al mes de Mayo ... 193

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

Acuerdo número 37, relativo á expedientes sobre expropiaciones ... „

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Sobre confirmación de una sentencia que condena, por demoras, al Juez de Circuito Carlos B. Ruiz ... „

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Sobre incompetencia de la Corte para conocer de un pleito contra extranjeros ... 194

Sobre desistimiento de un apelante en juicio ejecutivo ... 195

NEGOCIOS CRIMINALES.

Sobre confirmación de un auto de sobreseimiento del Tribunal Superior de Antioquia, por responsabilidad ... „

Sobre id. de uno id. del id. de Cundinamarca, por id ... „

Sobre cesación de un sumario por prescripción de pena ... 196

De sobreseimiento, por falta de pruebas, en un sumario por sustracción de correspondencia ... 197

Sobre incompetencia de la Corte para conocer de un sumario instruído en el Circuito de Obando ... „

Sobre confirmación de un auto de sobreseimiento del Tribunal Superior de Cundinamarca, en asunto de responsabilidad ... „

Sobre id. de uno id. del mismo Tribunal, en asunto de id ... „

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL.

Emitidas en diversos sumarios y causas ... 198

GACETA JUDICIAL.

PERSONAL DE LA CORTE.

El 13 de Mayo de 1886 volvió á su puesto el señor doctor Froilán Largacha, llamado por el Poder Ejecutivo como primer suplente, y salió el señor doctor Francisco A. Fernández.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

ACUERDO NUMERO 37.

En la ciudad de Bogotá, á nueve de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, se constituyó la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario.

El señor Magistrado doctor Morales presentó el siguiente proyecto de resolución, que fué aprobado con el voto unánime de los señores Magistrados.

"Conforme al artículo 14 de la ley 44 de 1886, la comisión creada por el artículo 4.° de la misma ley, debía conocer de las reclamaciones pendientes hechas por las personas á quienes se les confiscaron y expropiaron sus bienes por los Decretos del *Presidente provisorio* de los Estados Unidos de Colombia, de 14 de Diciembre de 1862 y 30 de Enero de 1863, respecto á los frutos de fincas raíces que se expropiaron y devolvieron, durante el tiempo que permanecieron en poder de los Agentes del Gobierno, y á los semovientes que les fueron expropiados y entraron á poder del mismo; y que á esos dos puntos de las mencionadas reclamaciones debían contraerse los reconocimientos que hiciera la Comisión.

El artículo 1.° de la ley 61 de 20 de Abril del presente año, ha dispuesto que la Comisión expresada conozca también de las reclamaciones pendientes por suministros y expropiaciones, y por los frutos de las fincas confiscadas, en la época en que permanecieron embargadas durante la guerra de 1860 á 1863; y que, en consecuencia, deben pasar á la Comisión los expedientes existentes en cualquier Juzgado ó en la Corte Suprema.

Según esta última disposición, es á la Comisión aludida á quien corresponde conocer de todas las reclamaciones sobre suministros y expropiaciones procedentes de la guerra de 1860 á 1863, y la jurisdicción de la Corte en esos asuntos ha cesado.

En consecuencia, la Corte dispone que el señor Secretario forme un inventario de los expedientes de esta clase, y los pase á la Comisión creada por el artículo 4.° de la ley 44 de 1886; igualmente dispone que el mismo señor Secretario no ponga al repartimiento ninguno de esos expedientes que, con posteridad á esta resolución, entren al despacho de la Secretaría.

Con lo cual se concluyó el presente acuerdo, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Mayo doce de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Tribunal Superior del extinguido Estado de Cundinamarca, al revisar un auto de cesación del procedimiento, que le fué consultado por el Juez 2.° del Circuito de Zipaquirá, en la causa contra Leopoldo Orjuela, observó que el proceso había sufrido una demora considerable, y ordenó se sacara copia de las piezas referentes, á fin de averiguar quién ó quiénes eran los responsables de aquella demora.

A solicitud del Agente del Ministerio público, se hicieron agregar las diligencias respectivas de posesión de los individuos que desempeñaron el Juzgado 2.° del Circuito de Zipaquirá, en el tiempo en que ocurrió la demora; y de esas diligencias aparece que el señor Carlos B. Ruiz tomó posesión del empleo el diez de Enero de mil ochocientos ochenta y tres; el señor Enrique Lizarralde se posesionó, como Juez suplente, el día veintitrés del mismo mes y año; y el señor David Ovalle, el siete de Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco.

La demora observada empieza desde el dieziséis de Diciembre de mil ochocientos ochenta y tres, fecha en la cual el Secretario del Juzgado puso el expediente al despacho del Juez principal, según la nota que se registra á la foja 2.ª de la copia mandada expedir por el Tribunal; y desde esa fecha no volvió

á darse curso al asunto, hasta el veintiséis de Octubre de mil ochocientos ochenta y cinco, en que el Secretario lo volvió á poner al despacho del Juez, según otra nota que se halla á la misma foja citada.

Con estos antecedentes, la Sala de primera instancia del referido Tribunal llamó á juicio de responsabilidad, por los trámites extraordinarios, á los señores Ruiz, Lizarralde y Ovalle; y después de haberse obtenido el informe que ellos rindieron, el Tribunal dictó sentencia, en la cual absolvió á los dos últimos y condenó al primero á la pena de suspensión del empleo, por el término de ocho días, y subsidiariamente al pago de una multa de diez pesos.

Apelada esta sentencia por el sindicado señor Ruiz, fué concedido el recurso para ante la Sala de segunda instancia; pero habiéndose expedido la ley 61 de 1886, que atribuye á la Corte Suprema el conocimiento, en segunda instancia, de esta clase de juicios, el Magistrado del Tribunal á quien se repartió últimamente el asunto, ha dispuesto que el proceso sea elevado á esta Superioridad, para que ella resuelva la apelación interpuesta.

Como se ha dicho, la demora comprende un período desde el dieziséis de Diciembre de mil ochocientos ochenta y tres hasta el veintiséis de Octubre de mil ochocientos ochenta y cinco.

Ahora bien. Como el señor Carlos B. Ruiz entró á desempeñar las funciones de Juez el diez de Enero de mil ochocientos ochenta y tres, es palpable que este individuo es responsable de la demora, objeto de esta instrucción, desde el dieziséis de Diciembre de ese año hasta el siete de Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco, fecha en la cual fué reemplazado, en propiedad, por el señor David Ovalle, con excepción del tiempo en que el señor Enrique Lizarralde desempeñó el Juzgado como suplente. No aparece en el expediente cuál fué el tiempo preciso durante el cual sirvió el Juzgado dicho señor Lizarralde; pero éste afirma que fué desde el quince de Diciembre de mil ochocientos ochenta y cuatro hasta el treinta y uno de Enero de mil ochocientos ochenta y cinco, es decir, el de mes y medio; y como este tiempo está incluído en el período general de la demora, es preciso concluír que al expresado Juez suplente le corresponde una parte de la responsabilidad asignable al señor Ruiz.

Sin embargo, respecto de Lizarralde debe tenerse en cuenta que, habiendo desempeñado el Juzgado por tan poco tiempo, y no apareciendo nota ninguna en que conste que el expediente le fué puesto al despacho, el sindicado es realmente excusable, siendo más verosímil la suposición de que fué el Secretario quien no le dió al Juez conocimiento del proceso.

El señor David Ovalle entró á funcionar, como Juez, el siete de Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco, y como la demora duró hasta el veintiséis de Octubre del mismo año, pudiera también considerarse responsable á este individuo; pero en el folio 2.° del expediente se registra, en copia, una nota del Secretario del Juzgado, que dice: "Señor Juez.—En la práctica del inventario general y arreglo del archivo de la Secretaría de mi cargo, se encontró este expediente archivado sin fenecer, y pasa á su despacho hoy veintiséis de Octubre de mil ochocientos ochenta y cinco.—Francisco Chaves, Secretario."

En seguida hay un auto del Juez, señor Ovalle, de fecha dos de Noviembre, en que ordena que el expediente pase al repartimiento.

Esa nota y ese auto dan á conocer claramente tres hechos: 1.° Que el Juez había ordenado la formación del inventario y el arreglo del archivo de la Secretaría; 2.° Que el expediente no le fué puesto al despacho sino el veintiséis de Octubre de mil ochocientos ochenta y cinco; y 3.° Que tan luégo como le fué puesto al despacho, le dió el curso correspondiente. Así, pues, el señor Ovalle, no solamente no es responsable de la demora aludida, sino que aparece cumpliendo su deber hasta donde era posible.

Según lo expuesto, es el caso de absolver á los señores Lizarralde y Ovalle, y de condenar al señor Ruiz por infracción del artícalo 163 del Código Penal del extinguido Estado de Cundinamarca, sancionado en el año de 1877, y calificando el delito en tercer grado, por no existir circunstancias agravantes.

Por lo tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la sentencia apelada; y en consecuencia, absuelve á los señores Enrique Lizarralde y David Ovalle del cargo porque se les llamó á juicio; y condena al señor Carlos B. Ruiz á la pena de suspensión del empleo de Juez 2.° del Circuíto de Zipaquirá por el término de ocho días; pero como hay constancia de que dicho individuo no desempeña, en la actualidad, el empleo de Juez, se le impone una multa de diez pesos, de acuerdo con el artículo 27 del citado Código Penal.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente al Tribunal Superior del Distrito judicial de Cundinamarca.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Antonio Morales—Francisco A. Fernández—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del doce de Mayo, se publicó esta sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En catorce de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general la sentencia que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Se notificó por edicto.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, cinco de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete.

Entabló acción el señor José Hilario Cano ante el Juez 1.° de lo Civil de Panamá, contra la Compañía Universal del Canal interoceánico, representada, según lo expresa el demandante, por el señor don José Jacquier, para que se le restituyese la posesión de varias fincas de que fué despojado el día diez de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis, por el Prefecto de la Provincia de Panamá, comisionado por el Juzgado 1.° de lo Civil, quien decretó el lanzamiento á petición de la Compañía Universal del Canal, como sucesora de la Compañía del Ferrocarril de la misma ciudad, y para que se le paguen unas cantidades que demanda en subsidio.

El Juez de primera instancia se declaró incompetente para conocer de la demanda, por auto de diezinueve de Enero del año en curso. Apelado este auto por el demandante, se le concedió el recurso en ambos efectos, para ante la Corte Superior. El Tribunal Superior de Justicia de Panamá, apoyándose en lo dispuesto en el inciso 5.°, sección 2.ª del artículo 21 de la ley 61 de 1886, ordenó que se pasara el expediente á esta Suprema Corte, por ser ella quien debía conocer del recurso interpuesto por Cano.

Como la disposición, en virtud de la cual debía conocer la Corte en segunda instancia de los negocios en que tuvieran parte individuos extranjeros, que es la misma en que se apoya el Tribunal Superior de Panamá para remitirle el expediente, fué derogada por el artículo 9.° de la ley 46, de 16 de Marzo del corriente año, no es hoy á la Corte Suprema de Justicia á quien corresponde conocer del recurso interpuesto, sino al Tribunal de Panamá. Así resuelve la Corte, ordenando que se le devuelva el expediente al Tribunal remitente para que le dé al recurso la tramitación legal correspondiente.

Notifíquese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En seis de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, nueve de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Administrador principal de Hacienda nacional en el extinguido Estado del Tolima, libró ejecución, en veintisiete de Enero de mil ochocientos ochenta y uno, contra Enrique Z. González, por la cantidad de treinta y cuatro pesos setenta centavos ($ 34-70), que el ejecutado quedó á deber á la Hacienda pública, como Telegrafista de Aipe, en el año de mil ochocientos setenta y cinco.

El Administrador ejecutante comisionó para la notificación del mandamiento ejecutivo y para las diligencias subsiguientes, al Juez del Circuíto de Aipe; y cumplida la comisión, resultó que Enrique Z. González no pagó, ni presentó bienes suficientes para el pago, jurando no tenerlos, y apeló del mandamiento ejecutivo.

Como la apelación le fuera concedida en el efecto devolutivo, y no ocurriera en oportunidad á sacar la copia del caso, el Administrador declaró desierto el recurso y dirigió luégo la ejecución contra Fidel Bahamón, como fiador de Gonzá'ez.

Notificado de la ejecución el fiador, presentó para el pago de la deuda y las costas, un macho de propiedad de Enrique González, según así lo expuso en la diligencia que corre al folio 10 de este expediente; y apeló del auto ejecutivo.

Venido el expediente á esta Superioridad, desde el mes de Marzo de mil ochocientos ochenta y dos, ha permanecido demorado por no haber suministrado el apelante el papel necesario para la actuación.

A causa de esto el señor Procurador general promovió artículo de declaratoria de desistimiento, en veintiuno de Marzo último; y dada al asunto la tramitación respectiva, señalado término al apelante y requerido para que presentara el papel, no lo ha verificado; con cuyo motivo el señor Procurador ha repetido su pedimento, previo el informe del Secretario, que acredita la renuencia del actor para suministrar el papel.

Por lo expuesto, la Corte Suprema nacional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara desierto el recurso de apelación intentado por Fidel Bahamón en este juicio, dándosele por desistido de él; y quedando, en consecuencia, ejecutoriada la providencia apelada, y condenado el apelante en las costas de la instancia, de conformidad con los artículos 423 y 424 del Código Judicial.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Bock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Mayo cinco de de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Este proceso ha tenido por objeto averiguar la responsabilidad en que haya podido incurrir Eleuterio Ceballos B., Fiscal del Circuíto de Yarumal, en el Departamento de Antioquia, por no haber ieterpuesto recurso de apelación contra el veredicto de un Jurado.

Seguíase en el expresado Circuíto causa criminal contra Wenceslao Gil, por el delito de perjurio; y habiendo sido sometido á la decisión del Jurado, éste pronunció veredicto absolutorio el cual fué confirmado por sentencia judicial. Bernardino López, quien se consideraba ofendido ó perjudicado por el hecho del perjurio, se dirigió por escrito al Agente Fiscal, solicitando que tal empleado interpusiera recurso de apelación contra el fallo del Jurado; y como el Fiscal se denegó á proceder de acuerdo con la solicitud referida, López se quejó ante el Tribunal respectivo, quien ordenó la instrucción de este proceso.

Practicadas todas las diligencias que se han creído necesarias para el esclarecimiento del hecho en cuestión, la Sala de primera instancia del Tribunal Superior del Distrito judidial de Antioquia, ha preferido auto de sobreseimiento y lo ha consultado con esta Corte.

La competencia de esta Corporación no puede ponerse en duda, atendida la disposición contenida en el número segundo del artículo 100 de la ley 61 de 1886, orgánica del Poder Judicial.

Como se ha establecido en el auto consultado y como lo insinúa el señor Procurador, dos serían los artículos del Código Penal de Antioquia aplicables al caso que se examina: ó el número tercero del artículo 445, y entonces tendría que considerarse al sindicado cómo prevaricador, ó el 494, considerándolo omiso ó negativo en el desempeño de funciones.

La primera de las disposiciones citadas no es realmente aplicable, porque no aparece en el expediente auto alguno que dé á conocer que el procesado, al abstenerse de apelar del veredicto del Jurado, procedió por interés personal ó por afecto o desafecto á alguna de las partes, como lo requiere dicho pasaje legal.

Respecto del cargo de negligencia, basta observar que las leyes no imponen á los empleados del Ministerio público la ineludible obligación de interponer el recurso de apelación en todos los casos, y dejan á su juicio la oportunidad y razón de tales recursos. Así, pues, si el Agente fiscal no usó del derecho que tenía de apelar, fué, sin duda, porque estimó que el fallo del Jurado no era notoriamente injusto; como lo estimó también el Juez de derecho en la sentencia que ordenó la cesación de todo procedimiento, por haber sido absolutorio el veredicto del Jurado.

En atención á lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, confirma el auto de sobreseimiento consultado.

Notifíquese, publíquese en la *Gaceta Judicial*, cópiese y devuélvase el proceso al Tribunal del Distrito judicial de Antioquia.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En cinco de de Mayo mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Mayo seis de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—En el mes de Mayo de mil ochocientos ochenta y cuatro, denunció José Trinidad Moreno ante el Procurador del extinguido Estado de Cundinamarca, que el Juez nacional del Territorio de Casanare había librado requisitoria, por el conducto regular á las autoridades judiciales de Cundinamarca, para la captura del reo prófugo Enrique Alejandro Isaza: que esta requisitoria había tocado en repartimiento al Juez 5.° del Circuíto de Bogotá, quien no había dado cumplimiento al exhorto, no obstante que el mencionado reo se había presentado en el Juzgado y se había verificado su identidad; y por último, que habiendo expedido edicto aquel Juez nacional del Territorio de Casanare para la aprehensión del reo José Cayetano Estrada, y habiéndose publicado tal edicto en el número 6,082 del *Diario Oficial*, la policía de Bogotá cogió este reo y lo puso á disposición del Juez 5.° para su remisión, y que éste, en lugar de remitirlo, lo había puesto en libertad.

En el mes de Junio siguiente, el expresado José Trinidad Moreno repitió la misma denuncia y en más acerbo lenguaje, ante la Corte Suprema Federal, agregando que la requisitoria para la captura de Alejandro Isaza, había venido por conducto de la Secretaría de Gobierno Nacional, con todos los requisitos detallados en el artículo 1,862 del Código Judicial de la Unión, y reiterando que el edicto para la captura de Estrada había sido publicado en el *Diario Oficial*. Agregó que los reclamados habían cometido graves delitos en Casanare, y que apesar de los exhortos gozaban en Bogotá de libertad completa: manifestó que el Secretario del Juez 5.° se había denegado á certificar sobre los particulares referentes al servicio de la requisitoria venida de Casanare: citó los testigos que sobre esto pudieran deponer, y concluyó pidiendo á la Corte que acogiera la denuncia con la mira de corregir la mala administración de justicia.

Ratificada la denuncia ante la Corte, esta acogió con dili-

gente solicitud la investigación de los hechos denunciados, con sólo la interrupción que el trastorno del orden público vino á ocasionar; y después de recoger las declaraciones de los testigos, de multiplicar los despachos y de procurar las ampliaciones necesarias, desprendióse del conocimiento en primera instancia, á virtud de la ley orgánica judicial de 1886, enviando el expediente en el estado en que se encontraba al Tribunal Superior del Departamento de Cundinamarca.

Este, en Sala de un sólo Magistrado y por auto de treinta de Marzo del corriente año, de acuerdo con el Fiscal del indicado Tribunal, declaró que no había lugar á proceder criminalmente contra el Juez 5.° denunciado; y tanto el Tribunal como el Fiscal se fundaron en que, no habiendo parecido el exhorto librado por el Juez de Casanare, no podía saberse si ese exhorto estaba acompañado de los requisitos necesarios para que no fuera violatorio de la Constitución vigente entonces; deduciendo de aquí que no existía la prueba del hecho criminoso y faltando, por consiguiente, el cuerpo del delito.

Venido en consulta para ante esta Supererioridad el indicado auto de sobreseimiento, y sustanciado debidamente el negocio, con audiencia del señor Procurador general, quien pide se confirme el auto consultado, es tiempo de resolver sobre ese particular y para ello la Corte considera:

1.° Consta en autos que en nota dirigida, en dos de Junio de mil ochocientos ochenta y cuatro, por el Juez 5.° del Circuíto de Bogotá al señor Procurador del Estado de Cundinamarca (foja 2 cuaderno 1.°), el indicado Juez confiesa que á su Juzgado se repartió un exhorto librado por el Juez nacional del Territorio de Casanare, para la aprehensión de Enrique Alejandro Isaza, como sindicado de varios delitos cometidos contra un empleado público en ejercicio de sus funciones; y que no dió cumplimiento á tal exhorto, porque no venía apoyado de los comprobantes que requería el inciso 4.° del artículo 15 de la Constitución de 1863, pues que tan solo se acompañaba el auto de proceder, no especificándose en este auto el delito porque se llamaba á juicio á los procesados. Esta nota consta en la copia expedida por el Procurador del Estado, señor Miguel del Busto;

2.° El Secretario del Juez 5.°, en declaración rendida en 15 de Julio de 1885 (foja 8.ª cuaderno principal), confirma en un todo el contenido de la nota del Juez, de la que se acaba de hablar en el aparte precedente, expresando que dicho Juez se abstuvo de capturar al reo Isaza;

3.° Los testigos Fídolo y Julio A. González confirman el hecho de la venida del exhorto relativo á Isaza, y que este exhorto fué repartido al Juez 5.° El primero de estos testigos refiere que en conversación tenida con el Procurador del Estado emitió opinión éste sobre que, en su concepto, no venía bien preparada la solicitud de extradición, á lo que replicó el testigo que no se trataba de extradicción sino de la captura de un delincuente; y el segundo refiere que los reos reclamados, Isaza y Estrada, se presentaron con él tanto al Prefecto de la Policía como al Juez 5.° del Circuíto, y que éste último resolvió la devolución de la requisitoria, porque tal como estaba concebida, no daba lugar al auxilio solicitado. Agrega éste testigo que él vió la requisitoria publicada en el *Diario Oficial*;

4.° Consta á la foja 62 del cuaderno principal, que en 29 de Mayo de 1884, en cumplimiento de la requisitoria publicada en el *Diario Oficial* número 6,082, fué llamado al despacho de la Prefectura de Policía José Cayetano Estrada, y que no especificándose en esa requisitoria el delito porque se procedía contra éste, presentó y se le admitió por fiador de excarcelación á Aristides Gaona, quedando responsable el fiador, bajo una multa de trescientos pesos, en el caso de fuga ú ocultación del reo, comprometiéndose, además, dicho fiador á presentar á Estrada dentro de cuarenta días ante el Juez del Territorio de Casanare; y

5.° Finalmente, que, no obstante repetidos exhortos dirigidos á Casanare, la requisitoria original, devuelta al Juez de allí por el Juez 5.° de Bogotá, no ha podido ser hallada, alegándose que todos los documentos del archivo se perdieron por consecuencia de la guerra.

Establecidos así los hechos que constan del sumario, se pasa á apreciar el mérito que en derecho tengan esos hechos.

Siendo el cuerpo del delito la base del procedimiento criminal, tanto en los delitos comunes, como en los referentes á juicios de responsabilidad, y necesitándose en ambos casos la misma prueba sobre la existencia de esa base, se hace preciso saber si en estas diligencias se encuentra el cuerpo del delito.

Aun cuando, tanto el informe dado por el Juez denunciado como de las declaraciones de los testigos, aparecen los hechos atrás mencionados, nada de eso constituye la prueba del cuerpo del delito en el presente caso. Esa prueba consistiría en la requisitoria librada por el Juez del Territorio de Casanare, para saber si ella contenía las condiciones que señala el artículo 1,862 del Código Judicial, y ese documento no puede suplirse con declaraciones de testigos, por tratarse de un acto judicial del cual debe haber constancia escrita. Y aun cuando del expediente resulta que el archivo en que debía reposar el antecedente fué destruído en la última guerra, no hay yá posibilidad de suplir la prueba en referencia, puesto que los testigos examinados no dan razón de la forma y pormenores con que la requisitoria de que se trata vino al Juzgado 5.° de Bogotá; y sería inútil adelantar la indagación, cuando no se descubren otras fuentes que den mayor claridad.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto de sobreseimiento consultado.

Notifíquese, cópiese y publíquese devolviéndose el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En siete de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Es copia conforme.

Bogotá, catorce de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete.

Ramón Guerra A., Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Mayo seis de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El veintidós de Abril de mil ochocientos ochenta y uno, presentaron los señores Emigdio Palau, Gonzalo A. Tavera, R. Gómez, Juan A. Uricoechea y Manuel Ezequiel Corrales, un memorial dirigido al señor Presidente de la Unión, denunciando el hecho de que se seguían cobrando en el extinguido Estado de Santander, peajes sobre la quina, después de haber llegado á manos de las autoridades el *Diario Oficial* en que se hallaba la resolución del Senado de Plenipotenciarios que anulaba la ley 87 fiscal que creó aquel impuesto.

Por el Despacho de Gobierno se ordenó que se le pasara el memorial con un telegrama que á él se acompañó, al señor Procurador general de la Nación, y este empleado le dió cuenta á la Corte Suprema, á fin de que se promoviera la investigación respectiva.

La Corte inició el sumario, por auto de catorce de Mayo de mil ochocientos ochenta y uno, y, adelantado hasta el estado de que emitiera concepto el señor Procurador, solicitó éste, en memorial de dos de los corrientes, que se declarara prescrita la pena, fundándose en que es llegado el caso de darles aplicación á los artículos 71 y 452 del Código Penal Nacional.

La Corte para resolver, considera:

1.° La denuncia que motivó la investigación se presentó el veintidós de Abril de mil ochocientos ochenta y uno; antes de esa fecha debió, pues, ejecutarse el hecho que motivó la queja, y han transcurrido, en consecuencia, desde que se incurrió en la falta hasta hoy, más de cuatro años;

2.° Si los que aparecen sindicados llegaron á ser responsables, la pena que les correspondería sería la determinada en el artículo 452 del Código Penal Nacional. Esta pena no es corporal y prescribe en cuatro años, según lo dispuesto en el artículo 71 del Código citado;

3.° Según la 43,ª de las reformas hechas al Código Judicial Nacional, por la ley 46 de 1876, cuando se declare que hay lugar á la prescripción de una pena, debe suspenderse el procedimiento.

La Corte Suprema encuentra fundada la petición del señor Procurador, reproduce como legales las razones en que se

apoya, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que está prescrita la pena en que pudieran haber incurrido los sindicados en este proceso, y ordena que se suspenda la secuela de la causa.

Notifíquese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y archíveso el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En seis de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto anterior.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, diez de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El señor doctor Antonio Morales denunció, con fecha veinticinco de Enero de mil ochocientos ochenta y siete, ante el señor Procurador general de la Nación, el hecho de que varias cartas que de aquí había dirigido á su hermana la señora Adelaida Morales de Quijano, residente en Tunja, y otras que de allá le había escrito esta señora, por conducto de la Administración principal de Correos de esa ciudad, han sido interceptadas ó extraviadas, pues no han sido recibidas.

El denuncio pasó á la Corte, y previo el juramento del denunciante, fué remitido al Juez Superior de Tunja para que hiciera la debida investigación.

Este funcionario recibió declaraciones á los empleados de la Administración y á otras personas, entre ellas á la señora Morales y á su esposo, y de ellas no resulta que en esa ni en otra Oficina de Correos se haya verificado el acto culpable que motiva esta instrucción.

En la Administración no se deja constancia nominal de las cartas que se reciben, sino sólo del número de ellas. De manera que no puede saberse si realmente entraron en esa Oficina las cartas perdidas. Algunos testigos refieren que en un saco de correspondencia, procedente de Santa-Marta, recibido en esa Administración, se encontró una carta dirigida al doctor Bonifacio Torres, de Santa-Rosa en Boyacá, cuyo sobre era de letra del doctor Morales, é insinúan la idea de que así como esa carta fué de Bogotá á Santa-Marta, debiendo ir á Santa-Rosa, pudo extraviarse la otra correspondencia del doctor Morales y la de su señora hermana.

La conducta del Administrador señor Alejandro La-Rotta P. en el ejercicio de su empleo, está satisfactoriamente abonada.

Se tuvo noticia en la Corte de que José María Zaldúa, empleado de la Administración general de Correos, podía saber algo del asunto. Llamado á declarar dijo que nada sabía.

Y no habiendo otra diligencia que practicar ni cita que evacuar, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley y de acuerdo con el razonado concepto del señor Procurador general, sobresee en esta investigación.

Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En once de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Mayo once de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Juez del Circuíto de Obando mandó ampliar, por auto de doce de Marzo último, el sumario que se instruía para averiguar si eran de contrabando unas mercancías, estimadas en ciento veinte pesos, veinte centavos ($ 120-20 centavos) introducidas de la República del Ecuador; y por haber apelado de dicho auto el encargado de llevar la voz fiscal en el negocio, le fué concedido el recurso para ante esta Superioridad, pero en el efecto devolutivo solamente.

La Corte ha declarado yá, que asuntos de la naturaleza del presente no son de su competencia, por no estar comprendidos entre los que le atribuyen la Constitución y la ley 61 de 1886, y que es á los Tribunales Superiores de Distrito á quienes corresponde su conocimiento, en virtud de lo dispuesto en la modificación 2.ª del artículo 99 de la misma ley; y como esas mismas razones son aplicables al caso de que se trata, de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador general, declara que el recurso interpuesto no es de su competencia, y que el expediente se remita al Tribunal Superior de Pasto, para lo de su cargo, dándose de ello aviso al Juez del Circuíto de Obando.

Hágase saber esta resolución, déjese copia de ella y publíquese en la *Gaceta Judicial*.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En once de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Mayo catorce de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Por resolución del Tribunal Superior del extinguido Estado de Cundinamarca, dictada en dos de Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco, abrióse investigación sumaria para averiguar la responsabilidad en que pudiera haber incurrido el Juez 2.º del Circuíto de Ubaté, Domingo Monroy, á causa de la demora en dar cumplimiento á un despacho librado por el expresado Tribunal en siete de Junio de mil ochocientos ochenta y cuatro, y para cuyo cumplimiento había sido comisionado dicho Juez.

Como el comprobante del cuerpo del delito tenía que consistir en la existencia de ese despacho y en la llegada de él al Juzgado 2.º de Ubaté, las diligencias perquisitorias se han encaminado especialmente á esclarecer ese punto; y, como ha sucedido otras varias veces en el territorio de Cundinamarca, no se ha encontrado rastro ni huella de tal despacho.

Mientras esto sucedía, y mientras los exhortos iban y venían, se cumplieron más de dos años después de que se cometió la falta, y aun después de comenzadas las investigaciones ordenadas por el funcionario de instrucción. Y como según el Código Penal de Cundinamarca, que es el aplicable en este caso, el término de dos años es bastante para la prescripción respecto de faltas á las cuales es imponible una pena como la que podría caber en el caso de que trata este sumario, resultó que el Tribunal del Departamento de Cundinamarca, tanto porque no encontró la existencia del cuerpo del delito, como porque mientras la buscaba, quedó prescrito el derecho de imponer pena, se vió en el caso de dictar su auto de veintiocho de Marzo último, declarando la cesación del procedimiento en estas diligencias y consultando con esta Superioridad esa determinación.

Dada á la consulta la tramitación respectiva, el señor Procurador ha expuesto su dictamen en el sentido de la confirmación del auto consultado; y encontrando la Corte que los fundamentos de la cesación, según lo que queda expuesto son extrictamente legales, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto consultado de que queda hecha referencia.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En dieziséis de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, catorce de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Tribunal Superior del extinguido Distrito federal de Cundinamarca, con vista del expediente que contiene

la causa seguida contra Santos Tunja, por homicidio, ordenó, por auto de fecha veintitrés de Marzo de mil ochocientos ochenta y seis, que se tomara copia de lo conducente para averiguar la responsabilidad en que hubiera incurrido el Juez 2.° del Estado en asuntos criminales, doctor Domingo C. Suárez, por haber hecho figurar en la causa como Jurado á Francisco Olaya, sin que apareciera diligencia de sorteo en el proceso.

Adelantada la investigación ante el Tribunal del Distrito, éste pidió certificación al Juzgado 2.° Superior, sobre varios puntos substanciales, y de ella resulta que el nombre de Francisco Olaya sí figura en la lista de Jurados que el Tribunal formó para el Juzgado 2.° del Estado; que en una foja suelta y sin foliar que dentro del expediente se encontraba, consta la diligencia de sorteo practicada el veintisiete de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco para reemplazar al designado Nicolás Ribas T., que no había concurrido; sorteo en el cual resultó el número correspondiente al Jurado Olaya, el que, citado, concurrió á la celebración del juicio el veintiocho del citado mes, y profirió, con los otros cuatro jurados, el correspondiente veredicto.

El Fiscal que presenció el sorteo, doctor Fruto Vélez Malo, Maximino Concha que firmó la diligencia á ruego del reo, el Jurado Olaya y el Secretario del Juzgado, Francisco A. Medina reconocieron sus firmas, y aunque los primeros no afirman que fuera la fecha en que realmente se extendió la diligencia, la que encabeza ésta, tampoco niegan que lo fuera. El Secretario dice, que tiene evidencia de que esa fué la fecha verdadera.

En vista de esto, el Tribunal sobreseyó en el procedimiento, por auto de fecha veinticuatro de Marzo último, el cual ha elevado en consulta ante esta Suprema Corte.

Substanciado el asunto debidamente, se pasa á decidir:

En presencia de la diligencia de sorteo del veintisiete de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco, que apareció en la hoja suelta, sin número de orden en el expediente, no puede deducirse cargo alguno contra el Juez sindicado. No puede decirse que la diligencia sea apócrifa, pues que los individuos que la suscribieron han reconocido sus firmas, ni intercalado después, porque no hay datos para asegurarlo.

Lo único que aparece con claridad, en todo esto, es que el Secretario descuidó agregar la hoja en el lugar correspondiente y foliarla, y por ello el Tribunal notó la falta que dió origen á este sumario.

Por lo tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el concepto del señor Procurador, confirma el auto consultado.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y seis de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL

Señores Magistrados.

El Tribunal Superior del Distrito judicial de Antioquia dictó, con fecha 17 de Febrero último, auto de sobreseimiento en favor de Joaquín M. Arbeláez, ex-Fiscal del Circuito de Antioquia, en el Departamento del mismo nombre, en el sumario que contra dicho empleado se seguía por delito de responsabilidad. Este auto ha venido en consulta á esa Suprema Corte, á quien corresponde su conocimiento en segunda instancia, de acuerdo con la atribución 7.ª de la sección 2.ª del artículo 21 de la ley 61 de 1886.

El hecho que motiva la averiguación consiste en haber solicitado Joaquín M. Arbeláez, en su calidad de Fiscal, del señor César A. Escobar, Inspector de policía, que obligara á Francisco Luis Ortiz á que revelara lo que supiese, relativamente á otro sumario que se instruía contra Antonio Ruiz, siendo así que el testigo apremiado era defensor de este último,

No hay constancia en los autos de que Arbeláez, al hacer su solicitud, y Escobar, al resolver de conformidad, hubieran procedido á impulso de algún motivo seductor que diera á sus procedimientos el carácter de delitos.

Es verdad que el artículo 445 del Código Penal del extinguido Estado de Antioquia erige en delito la revelación que haga el defensor de un reo, del secreto que éste le haya comunicado; y según el artículo 120 del mismo Código, son autores de un delito no sólo aquellos que lo cometen espontáneamente, sino también los que hacen que otro lo cometa contra su voluntad, dándole órdenes que legalmente esté obligado á obedecer y ejecutar; pero como de las diligencias practicadas resulta claramente demostrado que ambos empleados, antes que voluntad y malicia en la violación de la ley, tuvieron en mira únicamente contribuír con eficacia al descubrimiento de otro delito, para castigar al culpable, no se puede calificar aquel acto como delito.

Siendo esto así, y no estando probada la existencia del hecho criminoso, base de todo procedimiento criminal, el infrascrito os pide que confirméis el auto consultado.

Bogotá, 28 de Marzo de 1886.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

La sala de primera instancia del Tribunal Superior del Distrito judicial de Antioquia os remite, en consulta, el auto que dictó, con fecha once de Febrero último, por el cual sobresee en el sumario instruído contra Eleuterio Ceballos B., por falta de cumplimiento de sus deberes, como Agente fiscal del Circuito de Yarumal.

El hecho atribuído á Ceballos y del cual ha querido deducirse la responsabilidad que se averigua, consiste en no haber apelado, en su calidad de Agente del Ministerio público, de la sentencia absolutoria de primera instancia dictada en la causa que, por el delito de perjurio, se siguió en el mencionado Circuito contra Wenceslao Gil.

Consta de autos que el día 28 de Mayo de 1886 recibió el referido Agente fiscal un memorial firmado por Bernardino López y en el cual se le excitaba á interponer la apelación expresada. Sobre este memorial recayó la siguiente resolución:

"*Fiscalía del Circuito—Yarumal, Mayo 28 de 1886.*

El suscrito ha procurado en el asunto de que trata el preinserto memorial, obrar de acuerdo con los dictados de su conciencia y con la ley. Si alguna falta hubiere cometido y cometiere el Agente del Ministerio público, derecho tiene cualquier ciudadano, y aún deber, de acusarlo ante quien corresponda.

Eleuterio Ceballos B."

Tal es la providencia que ha dado origen á las presentes diligencias sumarias; pero no estando erigido en delito el hecho en cuestión por el Código Penal del extinguido Estado de Antioquia, que es el aplicable al caso de que se trata, es claro que no hay derecho de imponer pena alguna al empleado denunciado.

En efecto, y reproduciendo las razones alegadas en el auto que se consulta, como no concurre en el hecho que se averigua ninguna de las circunstancias de los artículos 445 y 494 del Código Penal citado, únicos que pudieron ser aplicables, es de concepto este Ministerio que no se ha cometido delito alguno, y os pide, en consecuencia, que confirméis el auto consultado.

Bogotá, 28 de Marzo de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

El artículo 1.365 del Código Judicial del extinguido Estado de Antioquia, vigente al iniciarse el presente juicio de expropiación, atribuía al Tribunal Superior de dicho Estado el conocimiento en primera y última instancia de los juicios de expropiación en todos los asuntos en que tuviera interés el Estado.

En tal virtud, el mencionado Tribunal, previas las formalidades legales, decretó, con fecha 14 de Septiembre de 1886, que

se estaba en el caso de llevar á efecto la expropiación de una faja de terreno perteneciente á los señores Fermín Santamaría, Braulio y Antonio Chavarriagas, con el objeto de proceder á la apertura de un camino público, comprendido entre el Distrito de Santa-Bárbara y el río Arquía. En el mismo auto en que se declaró con lugar á verificar la expropiación, se dispuso el nombramiento de peritos para el avalúo de los terrenos que debían expropiarse.

El juicio continuó su curso, con algunas dilaciones, provenientes de dificultades que se presentaron para hacer el avalúo decretado, hasta el día 14 de Febrero último en que el Tribunal Superior del Distrito de Antioquia se declaró incompetente para seguir conociendo del asunto, en virtud de las reformas introducidas por la ley 61 de 1886. Por apelación del auto en que tal declaratoria se hace, interpuesta por el señor Fiscal del referido Superior Tribunal, se os han remitido los autos á vuestro conocimiento.

La Corte Suprema de Justicia entra, en consecuencia, á conocer en segunda instancia, en virtud de apelación, de una providencia dictada por un Tribunal Superior de Distrito. Desde luégo se advierte que ninguna de las atribuciones de la sección 2.ª, del artículo 21 de la ley 61 de 1886, autoriza á esa Superioridad, para revisar los fallos de los Tribunales de Distrito; pero basta saber, para fijar vuestra competencia en este asunto, que de acuerdo con el inciso 2.°, sección 2.ª del artículo 21 citado, corresponde exclusivamente á Corte conocer en segunda instancia de los juicios de expropiación ó enajenación forzosa, sin que á ello se oponga la circunstancia de que el auto apelado proceda de un Tribunal Superior de Distrito, en vez de un Juez de Circuíto. El nuevo régimen ha traído naturalmente cambios substanciales en la legislación adjetiva, y como en los conflictos de transición entre las leyes que se refieren á la substanciación y á la ritualidad de los juicios, está admitida la regla general de que las nuevas leyes prevalecen sobre las anteriores, desde el momento en que deben empezar á regir, en la necesidad de armonizar las disposiciones de la ley 61 de 1886 con las vigentes en cada uno de los extinguidos Estados al tiempo de la iniciación de cada juicio, debe resolverse como fuere más conforme con la seguridad de los derechos controvertidos y con el espíritu de justicia que ha dictado la nueva ley de procedimiento. En consecuencia, parece indiscutible vuestra competencia para conocer en segunda instancia en el presente juicio de expropiación.

Ahora bien, como las razones en que se funda el auto apelado, por el cual se declara incompetente el Tribunal Superior del Distrito de Antioquia para continuar conociendo en este juicio, son las mismas que sirven de apoyo á lo anteriormente expuesto, sobre la preferencia de la ley 61 de 1886, en los casos de conflicto con las anteriores disposiciones adjetivas; y en atención á lo que dispone expresamente la parte final del artículo 111 de la antes dicha ley 61, este Ministerio es de concepto, y así os lo pide, que confirméis el auto apelado y dispongáis se pase el expediente al Juez de Circuíto á quien corresponda su conocimiento.

Bogotá, 30 de Marzo de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

Por consulta ha sido sometida á vuestro conocimiento la sentencia dictada por el Juez del Circuíto del Gigante, del 13 de Noviembre de 1871, por la cual se absuelve á la Nación de la demanda contra ella promovida por Miguel Cuéllar, para el reconocimiento y pago del valor de los suministros, empréstitos y expropiaciones con que se dice que fué gravado el demandante durante la guerra civil de 1860 á 1862.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 884 y 753 del Código Judicial, y con la vigésima octava de las reformas hechas á dicho Código por la ley 46 de 1876, no son consultables las sentencias favorables á la Nación, y se ejecutarán por ministerio de la ley, transcurrido el término de la apelación sin haber sido interpuesta. La razón es obvia, porque debe suponerse que si la parte perjudicada con una sentencia no hace uso de los recursos que le concede la ley, para defender sus derechos en segunda instancia, es porque acepta como justo el fallo y con él se conforma. La parte primera del artículo 884 citado es un privilegio exclusivo de que goza la Nación, para evitar en lo posible que sea perjudicada por ignorancia de los encargados de representarla.

Por lo expuesto, el infrascrito os pide que declaréis ejecutoriada la sentencia consultada, devolviendo el expediente al Juzgado de su procedencia.

Bogotá, 19 de Abril de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

El señor doctor Antonio Morales denunció, en Enero del presente año, el hecho de que, habiéndole dirigido su señora hermana Adelaida Morales de Q., varias cartas de Tunja por conducto de la Administración de correos de dicha ciudad, tales cartas no han llegado á su poder, sucediendo igual cosa con otras que el denunciante remitió á la misma señora.

A virtud de esta denuncia, hubieron de adelantarse las presentes diligencias, para averiguar la responsabilidad que pudiera caber al Administrador principal de Hacienda nacional de Tunja, señor Alejandro La Rotta P., y la Corte comisionó con ese objeto al Juez Superior del Distrito Judicial de Boyacá.

Recibidas por este funcionario las declaraciones de varios de los empleados que intervinieron en el recibo y entrega de la correspondencia á cargo de la Administración general de correos de Tunja, el testimonio de algunos particulares y el de la señora Adelaida Morales de Q., no ha sido posible esclarecer los hechos materia de la denuncia; pues los referidos empleados están acordes en afirmar que la correspondencia dirigida al señor doctor Morales le era remitida sin demora, y que la que de él se recibía para la señora su hermana, se entregaba tan luégo como el esposo de dicha señora ó sus sirvientes ocurrían por ella á la oficina.

Los mismos empleados insinúan que quizá sea causa de lo sucedido con las cartas del señor doctor Morales, una equivocación semejante á la ocurrida con otra carta del mismo señor, la cual fué devuelta de Santamarta, á donde había llegado sin haber sido dirigida á esa ciudad.

La señora Morales de Q. dice en su declaración que, en el mes de Enero último, dejó de recibir correspondencia, por tres correos, de su hermano el doctor Morales, y que unos meses antes había recibido en su casa, de manos do una mujer á quien no conoció, una carta de su citado hermano, la cual había sido abierta.

Interrogados los empleados de cuyas declaraciones se deja hecha mención, sobre si en las planillas correspondientes se inscriben ó especifican los nombres de las personas á quienes van dirigidas las cartas, ó si en la oficina queda alguna otra constancia que dé á conocer tales nombres, manifestaron que en las planillas solamente se anota el número total de las cartas, sin expresión de nombres, y que, por ese motivo, la oficina no puede suministrar dato alguno en el particular.

Siendo así, pues, que en la ciudad de Tunja no se ha conseguido poner en claro la causa del estravío ó detención de las cartas á que alude el señor doctor Morales en su denuncia, y no habiendo más diligencias que practicar ni citas que evacuar, este Ministerio es de concepto que dictéis el consiguiente sobreseimiento.

Bogotá, 22 de Abril de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

Por auto de 23 de Marzo último, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dispuso que cesara por prescripción de la acción penal, todo procedimiento contra Domingo Monroy, sindicado, como Juez 2.° del Circuíto de Ubaté, por la falta en la devolución de un despacho librado por el Tribunal en Junio de 1884.

Consultado dicho auto con esa Superioridad, el infrascrito observa que los considerandos que le sirven de fundamento están arreglados á la ley y al mérito del sumario.

En efecto, aparte de no haberse comprobado suficientemente el hecho materia de la investigación, han transcurrido, desde que tal hecho se considera ejecutado, más de dos años, que es el término legal requerido para que se tenga por consumada la

prescripción de la pena de suspensión del empleo, única imponible, si se hubiera conseguido comprobar en tiempo la culpabilidad del sindicado.

Por lo tanto, en el auto materia de la consulta, se han cumplido debidamente las disposiciones de los artículos 286, 48 y 49 del Código Penal, y 6.° del de Procedimiento Criminal del extinguido Estado de Cundinamarca (sancionado en 1883), y, en esa virtud, os pido que lo confirméis.

Bogotá, 2 de Mayo de 1887.

CARMELO ARANGÓ M.

Señores Magistrados.

El señor Apolinar Ruiz Manzano acusa ante vosotros á los señores Manuel D. Camacho, José María Valencia R. y Francisco Javier Velasco, Magistrados del Tribunal Superior del extinguido Estado del Cauca, por infracción del artículo 149 de la ley 59 de 1875 de dicho Estado.

La acusación vino acompañada de copia de tres autos y de una sentencia del referido Tribunal, y de una certificación original expedida por el Oficial Mayor de la Secretaría de Gobierno del Departamento del Cauca.

Para que estos documentos presten mérito á su debido tiempo, cree el infrascrito que convendría que su autenticación se obtuviera de las respectivas oficinas, á virtud de pedimento judicial.

Igualmente estima conducente el infrascrito que se acredite el carácter de los sindicados como Magistrados del Tribuual Superior de Justicia del extinguido Estado del Cauca, con agregación al sumario de los respectivos nombramientos y diligencias de posesión; que se pida al Tribunal del Distrito del expresado Departamento copia legalizada de la sentencia proferina por la Sala de segunda instancia, referente á la absolutoria de primera instancia, de 22 de Agosto de 1885 (foja 7 vuelta); que se agregue un ejemplar autenticado del *Registro Oficial* del Estado del Cauca, número 265, de 28 de Septiembre de 1883; y, finalmonte, que el señor Ruiz Manzano se ratifique juratoriamente on su denuncia.

El infrascrito os pido que dispongáis la práctica de las diligencias que deja enunciadas, por estimar que ellas son necesarias para el perfeccionamiento del sumario que debe instruírse contra los empleados acusados.

Bogotá, 2 de Mayo de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

El Tribunal Superior del Distrito judicial de Antioquia os remite, en consulta, el auto que profirió con fecha 16 de Marzo último, y por el cual sobresee en estas diligencias, creadas para averiguar la responsabilidad en que hubiera podido incurrir el señor Juan P, Bernal, como Prefecto del antiguo Departamento de Oriente, en el extinguido Estado de Antioquia.

Figura en el sumario como denunciante el señor Jesús Soluaga, quien, con fecha 25 de Noviembre de 1885, se queja ante el Juez del Circuito de Marinilla de haber sido detenido arbitrariamente en la cárcel pública del Distrito del mismo nombre.

Hecha la averiguación del caso, resulta que Jesús Soluaga fué detenido por el Prefecto Juan P. Bernal, en su carácter de Jefe político y militar del entonces Departamento de Oriente (foja 40), por haber jurado que conocía el lugar en que estaban escondidas unas armas y pertrechos de guerra y haber resultado falsa dicha aseveración. El mencionado Prefecto, guiado por Soluaga, se trasladó, en ejercicio de sus funciones, al páramo de Santa-Isabel, sitio designado por Soluaga, y no sólo no se encontraron las armas denunciadas, sino que hubo motivos para creer que Soluaga procedió maliciosamente al dar el falso denuncio, por lo cual el Prefecto ordenó la detención para seguir sumario al responsable por el delito de perjuicio; é iniciado éste, á petición de parte, se concedió al sindicado el beneficio de excarcelación.

Nada resulta de autos que pruebe el hecho de que Bernal procediera con ánimo de violar la ley ó de vejar á Soluaga al ordenar la detención que se ha denunciado como arbitraria. Además, la situación de guerra en que se encontraba el país, cuando fué detenido Soluaga, daba á los Jefes políticos más amplias facultades que en tiempos normales, y esa circunstancia bastaría para excusar la responsabilidad de Bernal, si alguna pudiera deducírsele, por haber castigado con arresto ó detención la falta cometida por Soluaga.

De acuerdo con lo expuesto, el infrascrito es de concepto que no se ha cometido delito alguno, y os pide que confirméis el auto apelado.

Bogotá, 2 de Mayo de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

El Tribunal Superior del Distrito judicial de Antioquia os ha remitido estas diligencias, en consulta del auto de sobreseimiento dictado en veintitrés de Marzo último.

En ellas consta que el día 1.° de Septiembre de 1883 el señor Juan de Dios Ribera, que se dirigía á la ciudad de Yarumal, fué detenido antes de llegar al término de su viaje, en el Distrito de Santa-Rosa, por orden del Capitán Adriano Villegas, Comandante de una pequeña fuerza acantonada allí.

La circunstancia de haber ocurrido la detención la víspera de un día de elecciones hizo presumir, sin otro fundamento, que el señor José Villa Leal, primera autoridad política de aquel Departamento (hoy Provincia), había tenido parte en la detención ó arresto de que se hablado; pero todas las sospechas que existían sobre el particular han sido desvanecidas por la investigación sumaria, la cual demuestra que el único responsable del hecho atribuído á Villa Leal fué el referido Capitán Villegas, perteneciente á las fuerzas del extinguido Estado de Antioquia.

Se dice que el ex-Prefecto Villa Leal debió haber impedido este abuso de autoridad; pero como la detención duró menos de veinticuatro horas y, al decir de Villegas, ella tuvo por objeto averiguar si el detenido era desertor de las milicias del Estado, es claro que ninguna participación tuvo el Prefecto en el asunto, porque tal averiguación no pudo hacerse en menos tiempo.

Consta, además, que el sitio en que Ribera permaneció detenido no fué en la cárcel pública, sino en el cuartel en que estaban las fuerzas del Estado.

Por estas consideraciones, el infrancrito prescindiendo de estudiar la responsabilidad legal en que hubiera podido incurrir el Capitán Villegas, por no corresponder á esa Suprema Corte el conocimiento de los juicios de responsabilidad contra los Oficiales de tas milicias de los extinguidos Estados, se limita á pediros la confirmación de la providencia consultada por ser, en su concepto, conforme á la ley y al mérito de los autos.

Bogotá, 7 de Mayo de 886.

CARMELO ARANGO M.

ANUNCIOS.

IMPORTANTE.

En beneficio del buen servicio público, se suplica á los caballeros que tengan en su poder Códigos, Compilaciones, tomos de leyes nacionales y de los extinguidos Estados, ú otros libros de propiedad de la Corte Suprema, se sirvan devolverlos, pues ocurre con frecuencia la necesidad de consultartales obras.

CONSTITUCIÓN DE COLOMBIA.

ESTÁ DE VENTA en la Tesorería general, en edición de cuaderno, á 20 centavos el ejemplar.

IMPRENTA DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 26

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 5 de Julio de 1887.

CONTENIDO.

PÁG.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Absolutoria en el juicio de responsabilidad seguido al General Ricardo Acebedo, como Administrador de las salinas de Zipaquirá.... 201

NEGOCIOS CIVILES.

Sobre apelación en un pleito sobre deslinde y amojonamiento de tierras..... 202
Salvamento de voto respecto de esta sentencia..... 203
Auto sobre aclaración pedida, y negada, de la misma sentencia..... 205
Sobre desistencia tácita en una demanda, quedando ejecutoriada la sentencia apelada..... 206

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Relativo á una denuncia, cuyo conocimiento no corresponde á la Corte.. ,,
De procedimiento contra el doctor Manuel María Ramírez, por responsabilidad..... 207

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL.

Relativa á un juicio ejecutivo sobre Bienes desamortizados..... 208

GACETA JUDICIAL.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Marzo quince de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—La presente causa de responsabilidad se ha seguido por los trámites extraordinarios contra el General Ricardo Acebedo, como infractor de los artículo 415 y 454 del Código Penal, porque en su carácter de Administrador principal de las Salinas de Zipaquirá, y como lo dice el auto de proceder, autorizó al Comandante de aquel Resguardo, J. Zoilo Pulido, para que practicara, como efectivamente practicó, el sumario correspondiente al denuncio dado por Fulgencio Pachón contra el peón de Guasá, Pedro Pinilla, y otros, por fraude á las mismas rentas. Y se le dedujo el cargo como responsable del quebrantamiento de los artículos mencionados, porque, como lo expresó el mismo auto en el 2.° de sus considerandos, el acusado, propiamente hablando, no se arrogó una autoridad que no tenía; al disponer, en los términos en que lo hizo, la investigación del fraude denunciado, puesto que el inciso 17 del artículo 472 del Código Fiscal reviste claramente al Administrador, para estos casos, del carácter de funcionario de instrucción; de modo que, al investir de ese mismo carácter á un subalterno suyo, se excedió claramente y á sabiendas de las atribuciones de su empleo, de cuya manera omitió también el cmplimiento del deber que le imponía la disposición que acaba de citarse.

Dada á la tramitación el curso prevenido en los respectivos artículos de la sección 3.ª, capítulo 3.°, título 10 del Código Judicial de la República, y recibido en tiempo el informe del acusado, al cual acompañó las pruebas que creyó conducentes á la defensa de sus derechos, y estando ya el negocio en estado de dictar el fallo correspondiente al mérito de la actuación, se tienen para ello en cuenta las siguientes consideraciones:

1.ª Que aunque el acusado ha pretendido demostrar en el referido informe, que no existiendo en el expediente la orden escrita, comunicada al Comandante del Resguardo, para que él mismo instruyera el sumario, falta el comprobante del cuerpo del delito por el cual se le juzga, y que lo que debe, por consiguiente, deducirse es, que la prevención que hizo á dicho empleado fué la de que practicara las correspondientes diligencias ante la autoridad que fuera competente, tales razones no pueden serle admitidas en justificación de su conducta, pûesto que no sólo están destituídas de todo fundamento, sino que resultan en abierta pugna con su propia confesión. En efecto, consta de autos que el Comandante Pulido, en nota de 31 de Julio de 1885, número 95, dijo al acusado lo que sigue: "Habiendo comparecido ante esta Comandancia el señor Fulgencio Pachón á *dar denuncio* jurado etc. etc., y habiendo llamado á declarar á los testigos que él citó, tengo el honor de daros cuenta del resultado que es el siguiente: Declararon seis personas entre hombres y mujeres, etc. etc.; por lo mismo soy de opinión que si lo tenéis á bien, se remitan por vuestro conducto las diligencias originales al señor Alcalde de este Distrito etc. etc." En cuya nota aparece la resolución marginal de 2 de Agosto que dice: "Recibida en la fecha.—Dígase en respuesta, que se remitan las diligencias practicadas por el Comandante del Resguardo al Juez competente.

Acebedo."

Además, en el informe que sobre el particular y en oficio de 11 de Mayo de 1886, número 759, rindió el acusado, á pedimento del señor Fiscal del Circuíto de Zipaquirá, se expresó de esta manera: "Que por las complicadas ocupaciones de la oficina que está á mi cargo, dí oficialmente autorización al señor Zoilo Pulido para que, como Comandante del Resguardo, instruyera las primeras diligencias contra Fulgencio Pachón, etc. etc., por consiguiente, la aseveración del señor Comandante del Resguardo (la de que procedió de orden del acusado) es exacta en todas sus partes. No será por demás manifestar á usted, que aunque las diligencias á que vengo haciendo referencia, fueron levantadas por el señor Comandante del Resguardo, yo mismo presencié las exposiciones dictadas por los testigos que en el expresado expediente declararon, á pesar de mis constantes ocupaciones."

2.° Que no obstante lo expuesto en el número anterior, el acusado en su defensa se expresa de este modo: "Precisamente en el tiempo á que este informe se refiere, la situación era crítica casi por todas partes, y consiguiente á ella, el recargo extraordinario de atenciones y servicios acumulados en ciertas oficinas, tales como esta Administración, en donde estaba á mi cargo una multitud de funciones de toda especie. En efecto, declarado por el Poder Ejecutivo Nacional perturbado el orden público en Cundinamarca, en Octubre de 1884, el Excelentísimo señor Presidente de la República, doctor Rafael Núñez, me designó como centro de todas las operaciones militares que se ejecutaron en los Departamentos de Zipaquirá, Ubaté y Chocontá, sin descuidar mis deberes como Administrador principal de Salinas.

"Interesado el Gobierno en el triunfo de la legítima causa que defendía el de Cundinamarca, no omití esfuerzo ni sacrificio para corresponder á la confianza en mí depositada; establecí aquí el nucleo de todos los servicios y operaciones militares, hasta la capitulación de "La Lucerna," en donde los revolucionarios de este Departamento, sustraídos, por decirlo así, de toda

influencia política y faltos de autoridad reconocida, rindieron sus armas, etc., etc." Y, efectivamente, el acusado ha presentado en copia, visados y autenticados por el Visitador fiscal, multitud de telegramas de los diferentes Secretarios del Despacho, del General en Jefe del Ejército, de varios Comandantes militares y de algunos otros empleados, todos del citado mes de Julio y del de Agosto siguiente, conteniendo órdenes apremiantes sobre envío de recursos á diferentes cuerpos, organización y movilización de fuerzas, aviso de noticias alarmantes, pago de bagajes, contratación de carros para conducir enfermos, y de potreros para brigadas, etc., etc.; demostrando todo esto que el acusado, en medio de circunstancias extraordinarias y difíciles, las cuales no pueden apreciarse en toda su magnitud, cuando yá los hechos han pasado, ni por aquellos sobre quienes no pesa la responsabilidad de una situación excepcional, no creyó seguramente que la orden comunicada al Comandante del Resguardo implicara la gravedad que en efecto tenía, preocupado como debía estar su espíritu con el cumplimiento de aquellas órdenes, cuya falta podía tal vez comprometer la conservación ó el restablecimiento del orden público, quedando su conducta expuesta, en un caso adverso, á siniestras interpretaciones;

3.° Que no se descubre por parte del acusado voluntad y malicia en el quebrantamiento de la ley, sino más bien el propósito de preferir el cumplimiento de aquellas obligaciones que creía, y eran en realidad, de mayor eficacia y más urgentes para el bien de la República; y como, por lo demás, las diligencias sumarias que practicó el Jefe del Resguardo no produjeron resultado alguno, puesto que el Fiscal y el Juez de 1.ª instancia, prescindieron de ellas y practicaron, en cumplimiento de su deber, las que creyeron legales, aquellas diligencias deben considerarse como si no hubieran existido, con tanto mayor razón, cuanto no infirieron daño alguno á tercero ni perjuicio á la República.

Por lo tanto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, absuelve al Administrador de las Salinas de Zipaquirá, General Ricardo Acebedo, de los cargos que se le dedujeron en el auto de proceder.

Notifíquese al señor Procurador, y para que lo sea al acusado, líbrese despacho, con remisión del proceso, cometido al Juez del expresado Circuíto, dejándose copia de esta sentencia, que se publicará oportunamente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Julián R. Cock Bayer—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del quince de Marzo se publicó la sentencia que precede.

Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y seis de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete notifiqué al señor Procurador general la sentencia que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Mayo once de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Ratificada como ha sido por las partes interesadas en ello, la actuación viciada por la nulidad que se mandó poner en su conocimiento, por la resolución dictada en veintiséis de Enero del corriente año, procede la Corte á la decisión del recurso interpuesto y concedido para ante ella, del auto pronunciado por el señor Juez 3.° del Circuíto de Bogotá, en veinticuatro de Septiembre del año próximo pasado, por el cual declaró que estaba probada la excepción dilatoria de inepta demanda, y que no lo estaban las de ilegitimidad de personería y declinatoria de jurisdicción, propuestas por el señor Agente Fiscal de este Circuíto, en el juicio de deslinde de las montañas *de Guabio, en el que está interesada la Nación*, por la parte de terrenos baldíos que allí tiene, colindantes con el que se pretende demarcar. Para dictar esta decisión, la Corte, después del examen detenido que ha hecho del expediente sometido á su conocimiento, y de haber empleado la tramitación legal del recurso, hace constar ante todo, y como base de partida, que el Agente Fiscal no apeló del auto de que se trata, y que el demandante solamente lo hizo de la parte de ese auto en que se declara probada la excepción de inepta demanda, conformándose con el resto de él, según aparece de las notificaciones hechas á la vuelta de la foja 17 del cuaderno de excepciones. Por lo cual es evidente que el único punto del expresado auto, sometido al juicio y determinación de la Corte, es el apelado y no consentido por el apelante; y que es á ese punto al que ella debe contraer exclusivamente su fallo: sentado este precedente, entra en el examen del asunto, en su fondo; y para decidirlo, considera:

1.° Que conforme al artículo 401 del Código Judicial Nacional, la excepción referida solamente tiene lugar en tres casos que allí se especifican y son los siguientes: 1.° Cuando la demanda que se propone no está arreglada á lo que dispone la ley; 2.° Cuando ella se dirige contra diversa persona de la obligada á responder sobre la cosa ó hecho porque se demanda; y 3.° Cuando se da á la misma un curso distinto del que le corresponde;

2.° Que el caso en cuestión no está en ninguno de los tres supuestos anteriores. No en el primero, porque la demanda de deslinde propuesta por Julián Campuzano, está formulada conforme á las prescripciones del artículo 200 y á las especiales de los artículos 1,215 y 1,216 del Código citado; y así lo declaró el mismo Juez de primera instancia en el auto de veintisiete de Mayo del año próximo pasado, corriente á fojas 20 vuelta del cuaderno principal, cuando se le pidió que rechazara dicha demanda. Tampoco en el segundo, porque dicha demanda no se ha dirigido contra diversas personas de aquellas con quienes debe substanciarse, pues que se ha entendido con los colindantes del predio que trata de demarcarse, indicados por el demandante, que son aquellos con quienes, en efecto, debe surtirse el procedimiento del juicio de deslinde, dándoseles traslado de la solicitud que instaura la acción, conforme al precepto terminante del artículo 1,216 del Código Judicial precitado; siendo de notarse que el tiempo en que deba el Juez examinar los títulos de propiedad de los colindantes, para conocer bien los linderos de sus predios y fijarlos, no es cuando se da curso á la demanda, sino en el acto mismo del deslinde, en que dichos colindantes tienen obligación terminante de presentar tales títulos, según la prevención del artículos 1,219 del mismo Código, pudiendo, además, en los juicios ordinarios á que dé lugar esa diligencia hacer valer sus derechos; y menos se está en el tercero y último supuesto del enunciado artículo 401, porque, según lo expuesto, no se ha dado al juicio curso distinto del que le corresponde; pues como se ha visto, se ha empleado el detallado para los juicios de deslinde y amojonamiento, de cuya clase es el intentado por Julián Campuzano;

3.° Que si no se está en ninguno de los casos legales de la excepción de inepta demanda, es evidente que el auto apelado no ha podido ni debido declararla probada.

Por todo lo cual, la Corte, oído el concepto del señor Procurador general de la Nación, en uso y cumplimiento de sus atribuciones, y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, revoca el auto apelado, en la parte en que declara probada la excepción de inepta demanda, resolviendo, como resuelve, que no está acreditada esta excepción, y que el Agente del Ministerio público debe contestar directamente la demanda en representación de los derechos de la Nación.

Y, por cuanto no sólo el Juez de la primera instancia y su Secretario, señores Jesús María Quintero y Nicanor Sánchez Domínguez, sino también el Alcalde y Secretario de la Aldea de Pasca, señores Lorenzo Benavídez y Juan de la Cruz Soacha, actuaron los dos primeros en el papel sellado de foja 21, correspondiente al Distrito Federal de Cundinamarca, y los dos últimos en el papel común de foja 37, con expresa violación del artículo 11 de la ley 46 de 1880, que establece y organiza el derecho de timbre nacional, se declara incurso á cada uno de dichos funcionarios en la multa de cinco pesos (5), que ingresará al Tesoro Nacional, dándose aviso al señor Tesorero general para que proceda á hacerla efectiva.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase.

R. Antonio Martínez—Jasé M. Samper—Julián R. Cock Bayer.

Por hallarse impedido el señor Magistrado suplente doctor Francisco A. Fernández, á causa de ser apoderado de una de las partes, el Conjuez, *Emigdio Palau—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

En este auto, el señor Magistrado doctor Noguera, salvó su voto en los términos siguientes:

"Que aun cuando en el fondo están de acuerdo los otros señores Magistrados con el proyecto de resolución que él propuso, la forma en que dicha resolución se ha aprobado difiere de su opinión, por lo cual salva su voto en los términos siguientes:

"En auto de veintiséis de Enero del presente año, dijo esta Suprema Corte lo siguiente:

"Vistos:—En ocho de Mayo de mil ochocientos ochenta y seis, Julián Campuzano, en su carácter de legítimo esposo de Candelaria Santamaría, ocurrió al Juez del Circuito de Bogotá, entablando juicio de deslinde y amojonamiento de una porcion de tierra de propiedad de esta, situada en las montañas del Guabio, acompañando á su petición, en catorce fojas útiles, los documentos que creyó la justificaban, y señalando como dueños ó usufructuarios de los predios colindantes á José María y Bonifacio Fierro, Juan Nepomuceno y Pedro Benavídez y Juan Cubillos, vecinos y residentes en la Aldea de Pasca, Vicente Rodríguez, vecino y residente en el Distrito de Arbeláez; al señor Agente Fiscal del Circuito, en representación de los derechos de la República, y también á Matilde, Verona, María y Alicia Blagborne, vecinas y residentes en esta capital.

"Creyendo el Juzgado que la demanda debió haberse extendido en el papel sellado del extinguido Distrito Federal, y que no se había determinado la cuantía de la acción, así lo resolvió, por providencia de diez del mismo mes, pero á virtud de reclamación del demandante, admitió lisa y llanamente la demanda, por auto de diez y ocho de idem, en el que mandó conferir á los colindantes el correspondiente traslado.

"Surtidas las notificaciones, menos las de las señoras Blagborne, quienes se negaron á oírla, aunque después, por escrito de veintiséis del referido mes, pidió una de ellas revocatoria del auto últimamente expresado, interponiendo en subsidio el recurso de apelación que al fin se declaró desierto á petición del demandante; éste mismo, en uso del derecho que le concedió el artículo 203 del Código Judicial de la República, ocurrió al Juzgado, por escrito de veintitrés de Junio del año citado, corrigiendo su demanda en el sentido de que se omitiese citar á los miembros de la familia Blagborne, por cuanto, según se expresa en tal escrito, al examinar y estudiar la recopilación de leyes y disposiciones vigentes sobre tierras baldías, no se halló en ellas constancia, ni la hay en la Secretaría de Hacienda, de que se hubieran adjudicado á Blagborne y su familia las docientas fanegadas concedidas por el Gobierno, y que, en consecuencia, aquellas señoras no son dueñas de tierras colindantes con las que se pretende deslindar.

"Admitida la corrección, por auto de vaintitrés de Junio último, como hecha en tiempo, se mandó correr nuevo traslado á los dueños ó usufructuarios de los respectivos predios, por tres días á cada uno, emplazándose á los ausentes para que dentro del término de seis días, más el de la distancia, comparecieran á estar á derecho en el juicio. Al pie de dicho auto (foja 29), se encuentran las tres diligencias siguientes 'En (sic) de Julio de mil ochocientos ochenta y seis, notifiqué el auto anterior al señor Agente Fiscal y le corrí el traslado ordinario.

'*Sánchez Domínguez*, Secretario en propiedad.'

"Se libraron los despachos ordenados por el auto anterior.

"Bogotá, Julio ocho de mil ochocientos ochenta y seis.

"Devuelto al Juzgado sin estar emitido el concepto que debe emitir el Ministerio público para el efecto de surtir una diligencia de notificacion y traslado á que alude la nota oficial del Juzgado, número 101, fecha veintinueve de los corrientes.

'Bogotá, Julio treinta de mil ochocientos ochenta y seis.

'*Félix Piñeros.*'

"En la primera de esas diligencias se nota visiblemente raspado el lugar de la fecha; la segunda no tiene firma y la tercera está autorizada por un individuo de quien no hay constancia que hubiera asumido el carácter de Secretario, sino que, al decir del demandante, era un escribiente ó empleado de la Fiscalía. Debe observarse aquí, que la nota oficial á que alude la última de las diligencias anteriormente copiadas, se pasó al Agente Fiscal, á consecuencia de haber dispuesto el Juez, por auto de veintiocho de Julio y á pedimento del demandante (foja 38), que el expediente, que según el demandante mismo hacía más de quince días que estaba en poder de aquel empleado, se diese en traslado al colindante Juan Cubillos, á la sazón en esta capital; auto que no resulta haberse notificado al expresado Cubillos ni á ninguna de las partes, pues lo único que se ve á continuación es una diligencia que literalmente dice así: 'En seis de Agosto de mil ochocientos ochenta y seis notifiqué al señor Agente Fiscal el auto de veintitrés de Junio del corriente año, y le corrí el traslado en él ordenado, en constancia firma. *Lombana D.—Sánchez Domínguez*, Secretario en propiedad.'

"Aparte de que la palabra *seis* de esa diligencia resulta enmendada y salvada la enmendatura por el mismo Agente Fiscal, parece bien extraño que el expediente se hubiera sacado del poder de este empleado para volver á entregárselo y nó para entregarlo á Cubillos, como estaba claramente ordenado por el Juez; así como que se hubiera dejado correr el largo tiempo de cuarenta y cuatro días, del veintitrés de Junio en que se mandó conferir traslado de la nueva demanda, hasta el seis de Agosto, para hacer, como se hizo en esta fecha, al representante de la Nación, la entrega del expediente. Pero como el Juzgado, previo informe de la Secretaría, de que la enmendatura expresada antes se había hecho con su anuencia y consentimiento resolvió, por providencias de diez de Agosto (foja 4 vuelta, cuaderno 2.°), confirmada por la de siete de Septiembre (fojas 10 vuelta y 11 id. id.), que las excepciones propuestas por el Fiscal habían sido presentadas dentro del término legal, nada puede la Corte resolver sobre el particular, una vez que tales providencias fueron expresamente consentidas por el demandante, según así consta de su memorial de foja 13, cuaderno id.

"Por lo demás, consta claramente del expediente que el Juez-Alcalde de la Aldea de Pasca, á quien se libró despacho con los insertos necesarios, se limitó á notificar á Juan Nepomuceno, Juan de la Cruz y Pedro Benavídez, y Juan Cubillos nó el auto mandando conferirles el traslado de la demanda y emplazándolos para ante el Juez del conocimiento, sino simplemente el de obedecimiento dictado por el mismo comisionado, como se ve á vuelta de foja 47 y frente de la 48 (cuaderno principal), al paso que los Jueces de los Distrito de Usme y Arbeláez notificaron el primero á José María y Bonifacio Fierro el *despacho y demanda anteriormente insertos, á quienes se les leyó íntegramente la inserción y á quienes se les intimó su presentación en el término en que se les indica*, etc., etc., (fojas 43 vuelta cuaderdo id); y el segundo á Vicente Rodríguez el traslado conforme á lo ordenado por el señor Juez del Circuito (fojas 55 id. id.)

"Cuanto queda expuesto, deducido con absoluta fidelidad del contenido de la presente actuación, da por resultado:

"1.° Que el Agente Fiscal fué legítimamente notificado de la demanda y pudo, en consecuencia, una vez que así se resolvió judicialmente, proponer las excepciones dilatorias de ilegitimidad de la personería del demandante, inepta demanda y declinatoria de jurisdicción, dentro del término de tres días que le fué concedido para contestar;

"2.° Que Vicente Rodríguez, José María y Bonifacio Fierro fueron también debidamente notificados en trece y siete de Julio, respectivamente, constando á fojas 43 y 55, vueltas, que los despachos diligenciados fueron recibidos en el Juzgado de su origen el día dos de Septiembre del mismo año; de manera que, habiendo corrido el término que se les señaló para contestar y para que comparecieran á estar á derecho, sin haberlo verificado, el traslado quedó surtido para ellos en los términos del artículo 360 del Código Judicial, y sin derecho, por consiguiente, á proponer excepciones de la naturaleza expresada;

"3.° Que aunque pudiera presumirse que las notificaciones hechas por el Juez-Alcalde de la Aldea de Pasca, de que se ha hecho mención, implicaban las de las providencias y documentos insertos en el despacho que se le cometió, los artículos 194, 351 y 353 del citado Código no exigen para estos casos notificaciones implícitas, sino que, por el contrario, deben ser perso-

nales y bien expresas y determinadas, para que ninguna duda pueda quedar á la parte interesada de lo que de ella se pretende ó exige; y la omisión sobre el particular ha sido tanto más notoria en este asunto, cuanto que á Juan Cubillos, presente como lo estuvo en esta ciudad, dejó de notificársele, como anteriormente se ha observado, el auto en que se dispuso sacar el expediente del poder del Agente Fiscal para entregarlo á aquél en traslado, y cuanto que, habiendo el apoderado de los Benavídez presentado escrito en veintinueve de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis (foja 56 cuaderno principal), pidiendo se le corriese el traslado, por no haber hecho legalmente la notificación el Secretario del Juez comisionado, no se notificó á dicho apoderado la determinación que recayó á tal escrito, proveyendo de acuerdo, sino exclusivamente al actor y al Agente Fiscal.

"Y considerando que, conforme al inciso 4.° del artículo 838 del mismo Código, es causa de nulidad, común á todos los juicios, no hacerse en persona una notificación que la ley mandó se le haga de ese modo, la Corte Suprema de la Nación, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 843 y 844 del expresado Código, resuelve: Póngase en conocimiento de las partes la nulidad observada para que aquellas á quienes perjudica pidan ó nó la reposición de lo actuado, dentro del término de veinticuatro horas, contadas desde la notificación de este auto. La Secretaría pondrá constancia del motivo de haberse demorado el despacho de este asunto.

"Cumplida la providencia anterior, y habiendo las partes á quienes podía perjudicar la nulidad apuntada, ratificado expresamente lo actuado, y observada en esta segunda instancia la tramitación prevenida por la ley, debe yá procederse á censurar el auto de veinticuatro de Septiembre del año próximo pasado, en que el Juez del Circuito de Bogotá declaró probada la ecepción de inepta demanda, propuesta por el encargado del Ministerio público, del cual interpuso apelación el demandante, y cuyo recurso le fué concedido en ambos efectos para ante esta Superioridad.

"Aunque en la misma providencia se declararon no probadas las excepciones de ilegitimidad de la personería del demandante é incompetencia de jurisdicción, de ellas no tiene para qué ocuparse la Corte, puesto que en ese particular la referida providencia quedó ejecutoriada por el expreso consentimiento de una parte y el tácito de la otra.

"El auto apelado tiene por principal fundamento lo siguiente:

'Cuanto á la excepción de inepta demanda, dice, fundada en los tres casos de que trata el artículo 401 del Código ibidem, su autor lo desarrolla así: 'La segunda, en que en la demanda no se han determinado todos los colindantes, una vez que aparece de los títulos que el doctor José Blagborne y su familia tienen derecho, dentro del terreno que reclama el actor *ó á sus inmediaciones*, y no se cita á estos señores ó á sus rapresentantes legales; en que se dirige la acción contra el Gobierno, representado por el suscrito, y no contra la persona ó personas obligadas á responder al actor del dominio sobre el terreno en que cree que haya duda respecto de linderos, según los títulos que ha acompañado para fundar su acción; y en que el curso que debe dársele á la demanda es el de juicio de división de bienes comunes entre el Gobierno, si es que hay baldíos, la señora Santamaría, el señor José Blagborne y su familia, si es que estos tienen derechos sin que previamente se hayan determinado; ó de reivindicación entre la señora Santamaría y la familia Blagborne, si es que no está bien claro el derecho de cada uno sobre la parte á que se cree con derecho; pero en ningún caso puede haber lugar á juicio de deslinde, sin que previamente queden bien determinados la extensión y la propiedad de los predios que colindan. No se explica el infrascrito cómo pueda deslindarse un terreno que se posea en común entre los comuneros, sin que préviamente se divida en lotes para que el deslinde se efectúe entre los colindantes dueños de lotes determinados.

"*Para resolver el* asunto, atentamente examinado, la Corte tiene en consideración:

"1.° Que en este negocio el actor pidió terminantemente la citación de los que en su concepto tenían el carácter de dueños de los predios colindantes, como tales reconocieron tenerlo, inclusa el Agente del Ministerio público en representación de los derechos de la Nación. La citación se hizo, pues, legalmente á los que estaban en la obligación de consentir ó de oponerse al deslinde solicitado, y la omisión respecto de uno de los verdaderos ó presuntos obligados no demuestra que los demás no lo estaban también; y no es exacto, por consiguiente, que la acción se hubiera intentado contra personas distintas de las que tenían el deber de responder sobre el hecho demandado;

"2.° Que la acción no se ha dirigido contra el Gobierno de la República únicamente, sino contra todos los colindantes, entre los cuales figura, como se ha dicho, el Gobierno mismo, y puesto que tal acción no se intentó sino para obtener el deslinde y amojonamiento de un terreno cuya propiedad aparece comprobada por medio de un instrumento público otorgado con las formalidades legales, en el cual están claramente determinados los linderos de esa misma propiedad, ninguna razón ha tenido el excepcionante para sostener que el actor debió intentar su demanda contra la persona ó personas obligadas á responderle del dominio sobre el expresado terreno, pues aquí no se ventila ahora semejante derecho, y aun en el caso de que hubiera dudas ó contradicciones en cuanto á los límites de los respectivos predios, eso sería materia del juicio ordinario de que trata el artículo 1,222 del Código Judicial de la República, que dice:

'Si hubiere contradicción por parte de alguno de los interesados, ya respecto del deslinde practicado, ó ya respecto de la demanda misma de deslinde, el punto se ventilará en juicio ordinario, etc., etc.'

"3.° Que el demandante no sólo llenó, en su libelo de demanda, los requisitos exigidos por el artículo 200, sino superabundantemente los que prescribe el 1,210 del citado Código; pues ordenando éste que se acompañe á la demanda siquiera una prueba sumaria que acredite los linderos de la finca, la que el actor acompañó se encuentra revestida de las solemnidades que le dan el valor de una prueba plena del derecho en que fundó su acción; y esto sólo constituye la razón legal bastante para que se de á su pretensión el curso prevenido por la ley.

"4.° Que por sentencia de doce de Enero de 1850 (foja 9 vuelta á 12 vuelta), dictada por el Tribunal de Cundinamarca, bajo la firma del Magistrado, Ramón Villoria, en el pleito sobre posesión de los terrenos de que se trata, después de muy graves consideraciones en favor de los derechos de Santamaría, derivados de la escritura de 15 de Marzo de 1841, y de los indebidos manejos empleados para privarle de una parte de ellos y darlos en posesión á José Blagborne, se decidió que éste no estaba ni había estado nunca en la posesión civil y natural de los terrenos de Guabio, sino en la material ó nuda insistencia, que no da derechos; declarándose, además, que para seguir el juicio petitorio ó el plenario de posesión debía considerarse en la sumaria de interino á Antonio María Santamaría.

"5.° Que el mismo Tribunal, en Sala de tres Magistrados (foja 6.ª), para decidir en conciencia sobre los hechos que debían servir de base á la determinación del pleito seguido entre el Ministerio Fiscal y dicho Santamaría, sobre propiedad de 200 fanegadas de tierra, comprendidas *en los linderos que expresaba el escrito de demanda*, resolvió, en doce de Agosto de 1853: 1.° Que á Santamaría, aunque desposeído entonces de los terrenos demandados, debía estimársele como poseedor de ellos, á virtud de lo resuelto en la sentencia pronunciada por el Tribunal de Cundinamarca en 12 de Enero de 1850, en cuya tenencia estaba cuando se inició el referido pleito. 2.° Que Santamaría había sido poseedor de buena fe, á virtud de la compra que hizo de los terrenos en cuestión, según constaba de la escritura, etc. 3.° Que las tierras demandadas eran baldías; y 4.° Que no estaba probado que los terrenos demandados y comprendidos entre los linderos que especificó el Fiscal, contuvieran sólo las 200 fanegadas mandadas adjudicar á Blagborne por decreto ejecutivo de 22 de Abril de 1846, *pues la medida que de ellas se dice hecha no fué practicada debidamente*.

"6.° Que en la propia fecha, el Magistrado encargado de la aplicación del derecho, teniendo en consideración, entre otras cosas, que no se había practicado debidamente la medida de las 200 fanegadas, é ignorándose, por lo mismo, si entre los linderos demarcados por el Fiscal en su demanda se comprendían más y menos de las 200 fanegadas á que tenían derecho Blagborne ó su familia, el Tribunal no podía mandarle entregar todos esos terrenos, sin atropellar los derechos que al Estado correspondían en los *que excedieran* de aquel número, y que habiéndose decla-

rado que Santamaría era poseedor de buena fe y no detentador, como lo calificó el Ministerio fiscal, no había razón para considerarlo responsable de daños y perjuicios que se le demandaban, resolvió: 1.° Que los terrenos demandados por el Fiscal, bajo los linderos que especificó, eran baldíos, y por consiguiente de la propiedad de la República. 2.° Que el doctor Blagborne y su familia tenían derecho á que se les midieran y entregaran 200 fanegadas en el lugar que eligieran de dicho terreno, con las formalidades y bajo las condiciones impuestas por el Poder Ejecutivo, etc. etc.; y 3.° Que Antonio María Santamaría no era responsable de los daños, etc. que se le demandaban por el Fiscal, á favor de Blagborne.

"7.° Que el mencionado Tribunal, aclarando el fallo de que trata el número anterior, declaró en substancia, por auto de 16 del citado Agosto, lo mismo que se había decidido en aquél, expresando, respecto al punto 3.°, que los terrenos comprendidos entre los linderos que señaló el Fiscal y los que establece la escritura de 15 de Marzo, de que yá se ha hecho mención, es decir, los que incluídos en la venta hecha á Santamaría, no le fueron demandados por el Agente del Ministerio público, deben quedar en la posesión sumaria de interino que el Tribunal de Cundinamarca declaró á favor de aquel por sentencia de 12 de Enero de 1850, y en consecuencia, ser entregados á sus herederos.

"8.° Que los fallos expresados en los cuatro números anteriores, transcritos literalmente en lo substancial, patentizan de una manera absoluta que Blagborne y su familia apenas tienen derecho á que se les adjudiquen 200 fanegadas de tierras baldías en las designadas por el excepcionante; pues no constando que se haya hecho la adjudicación, ni estando en posesión de los terrenos cuya propiedad se disputa para ellos, no pueden ser reputados como dueños ó usufructuarios de lo que no han adquirido legítimamente, ni tienen, por consiguiente, el carácter de condueños de Santamaría, en los terrenos cuya propiedad ha comprobado su heredera que le pertenecen; deduciéndose de aquí, forzosamente, que no ha habido para qué citarlos á un juicio en que no tienen el interés personal y directo que claramente exige para estos asuntos el artículo del Código Judicial citado en el número 2.°

"9.° Que la resolución del Secretario de Hacienda, de 26 de Agosto de mil ochocientos ochenta, publicada en el *Diario Oficial*, número 4,795, de 31 del mismo mes, aparte de que no puede perjudicar á Santamaría ni á sus herederos, por haberse dictado sin audiencia de ellos en un asunto que se ventiló entre Blagborne y Margarita Saavedra, hay la circunstancia de que dicha resolución no tiene valor ninguno, por cuanto reconoció los derechos de aquél en los terrenos denominados "El-Retiro" y "Montañas de Guabio," deduciéndolos de unas diligencias de restitución de esos mismos terrenos á favor de Blagborne, practicadas en el año de 1852, pues suponiendo que no haya equivocación en esta última fecha, una vez que el pleito sobre posesión, ó sea aquel en que tanto Santamaría como Blagborne solicitaron restitución, fué decidido en el año de 1850 por la sentencia de que se hace mérito en los números 4.° y 7.°, necesario es reconocer que lo relacionado en este último número y en los dos anteriores á él, ó sean el 5.° y 6.°, constituye la prueba incontrovertible de que la aludida restitución hecha á Blagborne quedó sin efecto alguno, por virtud de determinaciones posteriores del Poder judicial, que llevan el inalterable sello de la cosa juzgada y que no pudieron ser invalidados por una resolución ejecutiva. Es de advertir que esto mismo está expresamente reconocido en la sentencia apelada, en cuanto dice: "Antes de promoverse este pleito (el petitorio) yá se había surtido otro sobre posesión, el cual terminó por la sentencia acabada de citar, que mandó restituír á la posesión á Antonio María Santamaría, respecto de las tierras que ocupaba el doctor Blagborne."

"10.° Que tampoco hay razón para considerar á la demandante como condueño del Gobierno de la Nación en los terrenos cuyo déslinde se solicita, porque no puede haber comunidad en materia de herederos, principalmente, cuando la heredad pertenece á un solo dueño y tiene límites claramente designados. En los bienes comunes "el todo pertenece á cada uno de los comuneros ó condueños y á todos juntos," sin que ninguno pueda precisar la situación y extensión de la parte que le corresponde, y sería absurdo suponer en el presente caso que la heredera de Santamaría y el Gobierno nacional tengan comunidad en un terreno circunscrito por determinadas partes, que se ha declarado judicialmente ser baldío y consiguientemente de la exclusiva propiedad de la República.

"11.° Que aun en el supuesto de que el Gobierno estime que dichos baldíos (en los cuales es que Blagborne tiene derecho á elegir las fanegadas que le corresponden) estén comprendidos dentro de las demarcaciones que fija el título de propiedad de la demandante, tal pretensión demostraría, caso de oposición de parte de ésta, nó que se está en el caso de proceder á dividir bienes comunes, que aquí no existen, sino que hay dudas, oscuridad ó confusión, en cuanto á los límites de los predios, cuya respectiva propiedad reclama cada uno para sí con exclusión del otro; y el juicio de deslinde tiene precisamente por objeto aclarar tales dudas, para evitar las usurpaciones de los unos contra los otros, sea por error ó malicia, y fijar con claridad la extensión de las propiedades limítrofes, sin lo cual sería imposible mantener en paz y tranquilidad á los colindantes.

"En fuerza de estas consideraciones, la Corte Suprema de la Nación, oído el concepto del señor Procurador general, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la sentencia apelada y declara, en consecuencia, que no está probada la excepción dilatoria opuesta por el encargado del Ministerio público, el cual debe contestar directamente la demanda, en representación de los derechos de la Nación que están á su cargo.

La Secretaría compulsará copia, dentro del término de tres días, del auto de foja 28 vuelta y diligencias subsiguientes de foja 29 y vuelta; del escrito de foja 30, diligencia de presentación, y del auto que á él recayó, con la correspondiente notificación; del escrito de Julián Campuzano de foja 7.ª, cuaderno 2.° hasta el aparte noveno del mismo escrito, que termina con estas palabras: *paso á contestarlas en el mismo orden en que han sido propuestas;* del informe de la Secretaría del Juzgado y providencias que en dicho informe se fundaron, de fechas diez de Agosto y siete de Septiembre que se ven á fojas 4 vuelta y fojas 10 vuelta y 11, cuaderno 2.°; y por último, de los apartes 4.° á 11.° inclusives de esta sentencia, así como del presente; debiendo el señor Secretario hacer constar en las copias de que se trata, lo que aparezca raspado, enmendado, en blanco, ó alterado en las respectivas diligencias, y lo pasará todo al señor Procurador general para que en su vista promueva, ante quien corresponda, lo que en su concepto fuere de justicia.

"Y por cuanto, no sólo el Juez de la primera instancia, y su Secretario, señores Jesús María Quintero y Nicanor Sánchez Domínguez, sino también el Alcalde y Secretario de la Aldea de Pasca, señores Lorenzo Benavídez y Juan de la Cruz Sancha, actuaron, los dos primeros, en el papel sellado de foja 21, correspondiente al Distrito federal de Cundinamarca, y los dos últimos, en el papel común de foja 37, con expresa violación del artículo 11 de la ley 46 de 1880 que establece y organiza el derecho de Timbre nacional, se declara incurso á cada uno de dichos funcionarios en la multa de cinco pesos, que ingresarán al Tesoro nacional, dándose aviso al señor Tesorero general para que proceda á hacer efectiva la expresada multa."

Benjamín Noguera—Martínez—Samper—Cock Bayer—Palau—Morales—Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En doce de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Julián Campuzano.

JULIÁN CAMPUZANO—*Guerra A.*, Secretario.

En doce de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede, así como el salvamento anterior de voto.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Se notificó por edicto.

En la solicitud de Juan Nepomuceno Benavídez y otros, sobre aclaratoria ó reforma del auto de once de Mayo del mil ochocientos ochenta y siete, que corre á fojas 214 á 217 de este protocolo, en la solicitud del señor Julián Campuzano sobre deslinde y amojonamiento de los terrenos de "Guabio," recayó el auto siguiente:

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintisiete de Mayo de de mil ochocientos ochenta y siete.

Conforme á la ley, todo auto ó sentencia tiene dos partes:

una motiva que contiene los fundamentos en que la resolución se apoya; y otra resolutiva, que es la que contiene la determinación. Y puesto que la ley exige que se establezcan estas dos partes, virtualmente reconoce que debe haber amplitud en aquella á que se refiere el razonamiento.

Así puede suceder, y sucede en efecto, que aun cuando haya conformidad en la parte resolutiva de una sentencia, haya discrepancia en los motivos que asisten á los Magistrados para dictarla, pudiendo llegar al mismo punto por distintos caminos.

Como los Magistrados no sólo son responsables legalmente por la parte determinativa de sus fallos, sino que lo son moralmente por las apreciaciones que los guíen para dictarlos, es natural que tengan el derecho de salvar también su voto en la parte motiva de una sentencia; y es por eso por lo que el artículo 30 de la ley 61 de 1886 reconoce la discordancia de las opiniones en las diversas partes de una sentencia, debiéndose concluír razonablemente que la parte motiva también se vota; y si se suscribe por todos los Magistrados el voto salvado, es porque así lo manda la ley, sin que ello entrañe opinión de la Corte.

Esto es lo que ha sucedido en el caso á que se refiere este pedimento, y la Corte no podía restringir el derecho del Magistrado discrepante, sin establecer una doctrina vejatoria é injusta; ni puede, por lo mismo, dictar una resolución general para casos análogos, como se indica por el peticionario, porque además de lo dicho, una resolución semejante sería de naturaleza legislativa, cosa que no puede hacer la Corte.

Por lo expuesto, y no conteniendo el auto á que se hace referencia punto alguno sobre que deba recaer aclaratoria ó reforma, ni pudiendo dar la Corte disposiciones de naturaleza general, ni siendo natural restringir á los Magistrados el derecho de expresar los motivos de sus votos; no ha lugar ni se accede á nada de lo que se salicita en este escrito.

Notifíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintiséis de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Mayo diezisiete de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—A virtud de poder que le otorgó el Procurador general del extinguido Estado de Cundinamarca, Ricardo Riaño entabló demanda contra la Nación, el veinticinco de Septiembre de mil ochocientos ochenta y cuatro, ante el Juez del Circuíto de Bogotá en asuntos nacionales, y la formuló pidiendo se declarase por sentencia judicial: 1.° Que el Gobierno de la Unión era legalmente deudor al Estado soberano de Cundinamarca de la cantidad de siete mil setecientos treinta pesos veinte centavos ($ 7,730-20) y los intereses vencidos desde las fechas de ciertas redenciones de censos, causa ó motivo de la demanda, por cuanto el demandante consideraba que tales censos pertenecían á dicho Estado; 2.° Que se condenase al mencionado Gobierno á reconocer á cargo del Tesoro de la Nación y á favor de aquel Estado la expresada cantidad; y 3.° Que se condenase también al Gobierno á pagar los intereses causados hasta la terminación del pleito, á la rata del seis por ciento, como deuda privilegiada.

Sustanciada la demanda con intervención del Agente del Ministerio público, y figurando después legalmente como actor Demetrio Riaño G., en calidad de apoderado sustituto, dicho Agente opuso las excepciones de inepta demanda é ilegitimidad *en la personería del demandante*, y el Juez, por auto del diez y nueve de Enero de mil ochocientos ochenta y cinco, declaró no probada la primera excepción, pero que sí se había probado la segunda. De este auto apeló el demandante, y la apelación fué concedida para ante esta Superioridad. Sustanciado el recurso, se pronunció por la Corte, con las firmas de los cinco señores Magistrados que la componían, un auto por el cual se declaró nulo lo actuado desde el auto del Juez de primera instancia por el cual se mandó correr traslado de la demanda al Agente fiscal.

Pero este auto de la Corte no tuvo fecha, la cual se dejó en blanco, siendo, por lo tanto, de ningún valor, y es de advertir, que habiendo disentido dos de los señores Magistrados, cada uno formuló por separado su salvamento de voto, y ambos olvidaron también determinar la fecha. Es también de advertir que el auto tampoco fué autorizado por el Secretario de la Corte. Por lo tanto, si en realidad y legalmente no hubo verdadera decisión de la Corte, el asunto quedó pendiente, y era el caso de resolverlo, lo que al presente no se puede hacer, á virtud del incidente que después ha ocurrido. En efecto, el actor dejó en cierto modo abandonado su recurso, puesto que no suministró las estampillas necesarias, y después no ha suministrado el papel común que se requiere para la actuación. Con este motivo, el señor Procurador general ha solicitado en pedimento del veinticuatro de Marzo último que, conforme al artículo 423 del Código Judicial, se declare desierto el recurso. Se ha surtido la tramitación del caso, puesto que se dictó auto el veintiocho del mismo mes, conminatorio, con referencia al apelante, para que consignase el papel dentro del término legal; se hizo la notificación debida, se volvió á dar vista al señor Procurador; éste ha insistido en que se declare la desistencia; y el Secretario ha informado que la parte interesada no ha cumplido aún con el deber que le incumbe.

En consecuencia, ha llegado el caso de aplicar el citado artículo 423 del Código Judicial; y conforme á él, la Corte Suprema, de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador general, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que Ricardo Riaño y su apoderado han desistido, por abandono, del recurso de apelación entablado en este asunto, el cual queda desierto, y ejecutoriado, en consecuencia, el auto apelado. Son de cargo del apelante las costas de la actuación en segunda instancia,

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente al Juez de primera instancia.

R. Antonio Martinez—José M. Samper—Julán R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diezisiete de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, diezisés de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Manuel A. Peña dirigió, con fecha quince de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, un memorial á la Corte Suprema, por el cual se queja contra el Juez Superior de la Provincia de Mompox de retardo en la administración de justicia. Esa solicitud vino desnuda de todo comprobante, omitiéndose así el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1,738 del Código Judicial.

El señor Procurador general de la Nación, á quien se dió vista de la solicitud, ha pedido, en doce del presente mes, que se pase al Tribunal Superior del Distrito judicial de Bolívar el memorial de Peña, por cuanto el conocimiento del asunto corresponde á ese despacho.

Dicho dictamen está de acuerdo con el inciso 2°, artículo 100 de la ley 61 de 1886. En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia dispone que se remita al Tribunal Superior mencionado este expediente, para lo de su cargo.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—

Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diezisiete de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, dieziséis de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Por medio de un memorial dirigido al señor Procurador general de la Nación, y que en hoja impresa se registra al folio primero de este proceso, dió denuncia Isidoro Burgos contra el señor Manuel María Ramírez, Administrador de la Aduana de Cúcuta, por varios hechos ejecutados por éste en ejercicio de su empleo, y que, en concepto del denunciante, estaban calificados como delitos en el Código Penal de la Nación.

Cuatro fueron los cargos que se formularon contra el señor Ramírez, á saber:

1.° Violación de los artículos 100 y 111 del Código Fiscal. Conforme á la primera de dichas disposiciones, el reconocimiento de las mercancías debe practicarse por el Administrador, el Contador y el Fiel de balanza, debiéndose firmar por todos estos empleados la diligencia que al efecto se extienda. La responsabilidad del señor Ramírez se hace consistir en que el renocimiento lo practicaba sólo éste, como Administrador, sin la intervención de los otros dos empleados. La segunda disposición ordena que el reconocimiento se haga precisamente pesando los bultos de cada cargamento; que los que correspondan á la primera clase deben abrirse uno por uno; y que los bultos de 2.ª y 3.ª clase se abrirán en la proporción de uno por cada diez, sin perjuicio de otras condiciones que allí se establecen. Se acusa al empleado aludido de no haber dado cumplimiento á estas formalidades.

2.° Violación del artículo 1,217 del mismo Código.

Este artículo dispone que ningún empleado nacional que, por cualquier causa, deje de ejercer sus funciones en uno ó más días, pueda gozar del sueldo correspondiente á esos días, á menos que haya obtenido licencia; y se atribuye al señor Ramírez el hecho de haberse separado de su empleo por algunos días y, sin embargo, haber cobrado su sueldo íntegramente.

3.° El haber permitido la introducción hasta de catorce cargas con el nombre de equipaje, y como pertenecientes á un solo individuo, jefe de una casa comercial, sin pagar nada por el excedente de ciento veinte kilogramos; y haber permitido que fueran conducidas á las casas de los interesados, sin ser examinadas y sin entrar siquiera en la Aduana.

4.° Tentativa de estafa y falsedad. Estos hechos se hacen consistir en que Luis Antonio Rangel, Guarda de la Aduana, en el mes de Mayo á Junio de mil ochocientos ochenta y tres, dejó de servir por enfermedad no comprobada, ocho ó diez días; el administrador, según se dice, hizo aparecer en las nóminas que había servido todo el mes, y sin embargo no le quería pagar sino parte del sueldo.

Acogido el denuncio por el señor Procurador, este funcionario lo pasó al Juzgado 5.° del Circuíto de Bogotá, con el fin de que el denunciante formalizara su denuncio de acuerdo con la ley; y al efecto se obtuvo, bajo de juramento, la ratificación correspondiente, en diligencia de dieziséis de Abril de mil ochocientos ochenta y cuatro.

En esta diligencia el denunciante Burgos, después de citar varios testigos en comprobación de las aseveraciones que había hecho, dedujo estos dos cargos contra el señor Ramírez, á saber: que un individuo había pagado cierta suma á un hijo del expresado Ramírez para obtener de éste el empleo de Guarda de la Aduana, y el de hacer el Administrador nombramientos para los puestos que quedaban vacantes en la misma Aduana, en miembros de su familia y en mayordomos ó peones de su hacienda.

Con estas bases, la Corte Suprema, como funcionario instructor y como Tribunal competente para conocer del asunto, ha perfeccionado el presente sumario, y ha logrado obtener todos los testimonios y documentos relacionados con los hechos que se investigan; y después de haber oído el dictamen del señor Procurador, entra á apreciar el mérito legal de la actuación.

Para probar el primer cargo el denunciante citó varios testigos, de los cuales unos afirman que al reconocimiento de las mercancías concurrieron los tres empleados de que habla la ley; y la mayor parte aseveran que á dicho reconocimiento no siempre concurrieron todos, ni la diligencia se practicaba como lo dispone la misma ley.

Los artículos 100 y 111 del Código Fiscal son terminantes: estas disposiciones exigen que el reconocimiento de las mercaderías no comience ni continúe sin la concurrencia simultánea del Administrador, el Contador y el Fiel de Balanza; y que el examen de los bultos se practique como en la última disposición se previene; pero estando demostrado que el Administrador practicaba, algunas veces, dichas diligencias, sin llenar las formalidades requeridas, es indudable que este empleado dejó de cumplir con los deberes que las dos disposiciones fiscales citadas le imponían, y en consecuencia se halla en el caso del artículo 415 del Código Penal nacional.

El segundo cargo, ó sea el hecho de haberse separado de ese empleo por algunos días el funcionario sindicado, y sin embargo haber cobrado su sueldo íntegro, está satisfactoriamente demostrado. Al efecto, no sólo está probada la circunstancia de la separación por un considerable número de testimonios, sino que el sindicado lo ha confesado perentoriamente; y por lo que respecta al cobro del sueldo, á la foja 27 del expediente se registra la nómina de los empleados de la Aduana de Cúcuta, correspondiente al mes de Enero de 1884, y allí se halla incluído el nombre del señor Ramírez, sin salvedad ni abreviación ninguna, y en el mismo documento aparece que este individuo recibió también el sueldo íntegramente.

Aunque, como se ha dicho, el cargo de la separación está demostrado, hay por otra parte circunstancias que disminuyen su gravedad, y aun vienen á infirmarlo por completo.

Varios testigos aseguran que en el mes de Diciembre de mil ochocientos ochenta y tres, fué atacada de fiebre amarilla la familia del señor Manuel María Ramírez, especialmente su esposa; que con ese motivo, y por orden del médico, resolvió, en los primeros días del mes de Enero, trasladar su familia á una población de Venezuela; y que, al efecto, después de haber enviado por el correo á la Oficina general del ramo la cuenta referente al mes anterior, se ausentó por unos días, dejando instrucciones al Contador y al Fiel de Balanza, y advirtiéndoles que lo hicieran llamar por posta si ocurría alguna novedad en la Oficina; que en los almacenes de la Aduana no había á la sazón mercancías para reconocer, y que durante la ausencia del Administrador no se presentó ningún asunto que reclamara su presencia. Estos testimonios están de acuerdo con el del señor Félix María Hernández, quien declara que él, como médico, aconsejó al señor Ramírez que sacara inmediatamente á su esposa de la población de Cúcuta, pues de otro modo la vida de ella estaba seriamente comprometida.

Por lo expuesto se demuestra que el Administrador, al separarse de su empleo sin licencia, lo hizo impulsado por un motivo muy grave. Dado el peligro en que se encontraba la vida de su esposa, y la consiguiente necesidad de trasladarla á otro lugar, él no podía esperarse á que su petición de licencia fuera resuelta; á que fuera nombrado el individuo que debía reemplazarlo; á que se hiciera el inventario de los efectos de la oficina, y á que el nombrado prestara la fianza que ordena la ley; sin contar con la probabilidad de que no habría persona que se decidiera á aceptar, por pocos días, un empleo de mucha responsabilidad y que requería multitud de formalidades para entrar á desempeñarlo.

Así, pues, si el señor Ramírez dejó de cumplir con la ley, fué forzado por su especial situación, en lo cual no cabe culpa ni delito; pues bien se comprende que él no procedió con voluntad ni malicia, que es lo que constituye la esencia del delito y la culpa.

Pero si el cargo de la separación está infirmado, no lo está el de haber percibido el sueldo sin hacer el descuento respectivo por los ocho días en que no funcionó como empleado. El artículo 1,217 del Código Fiscal, establece que "ningún empleado nacional, que por cualquier causa deje de ejercer sus funciones en uno ó más días, gozará del sueldo correspondiente á esos días.....;" y como en la nómina de los empleados de la Aduana, correspondiente al mes de Enero de mil ochocientos ochenta y cuatro y que se registra en el expediente, aparece que el señor Ramírez cobró y recibió íntegramente su sueldo en dicho mes, que fué el mismo en que él se separó del empleo, por ocho días, es forzoso concluír que no cumplió ó ejecutó una dis-

posición legal, y por tanto ha quedado también comprendido en el artículo 403 del Código Penal.

El tercer cargo, ó sea el de haber permitido el Administrador la introducción de catorce cargas como equipaje pertenecientes á una sola persona y sin cobrar el derecho que exige la ley por el exceso de kilogramos, en el límite fijado por la misma ley, sólo se refiere al caso ocurrido con el señor Ernesto Henckel.

Este individuo, según él mismo lo ha declarado, se trasladó con su familia de la ciudad de San-Cristóbal á la de Cúcuta, á donde llegó el cuatro de Junio de 1883. Trajo catorce cargas de equipaje; pero no pertenecientes á él tan solo, pues venía acompañado de su esposa, una hija, una cuñada y tres sirvientes, y el equipaje pertenecía á todos esos siete individuos. Esto mismo asevera el testigo Juan E. Rincón, quien, como Guarda, condujo las cargas hasta la casa de habitación de la familia expresada.

Pero la irresponsabilidad del expresado Administrador, en este punto, queda justificada con la certificación expedida por el Contador de la sección 3.ª de la Oficina general de Cuentas, en la que consta que las cuentas de la Administración de la Aduana de Cúcuta, á cargo del señor Ramírez, hasta el mes de Enero de 1884, fueron fenecidas sin reparo de ninguna clase.

El cuarto cargo, como se dijo yá, se contrae al hecho de que uno de los Guardas de la Aduana dejó de servir ocho ó diez días; el Administrador lo hizo incluir en la nómina como si hubiera servido todo el mes, y sin embargo no le quería pagar sino parte del sueldo.

Como se ve, el cargo de estafa se refiere al expresado Guarda, según los términos en que está concebido el denuncio, y es patente que el Administrador no cometió estafa, puesto que el Guarda recibió su sueldo íntegro, según consta en la nómina respectiva y según lo afirma también el mismo Guarda.

La aseveración de que Ramón Araque había tenido que dar una cantidad de dinero á Carlos Ramírez, hijo del Administrador, para obtener el empleo de Guarda, está contradicha con la declaración del mencionado Araque, quien afirma ser inexacto el hecho apuntado, aparte de que no hay prueba ninguna sobre este punto.

El cargo consistente en atribuír al Administrador el hecho de nombrar á los miembros de su familia, á sus mayordomos y peones para los empleos que quedaban vacantes en la Aduana, es enteramente gratuíto; pues no ha podido obtenerse el más ligero indicio respecto de tal hecho.

Por último, no es por demás hacer presente que en el proceso existen varios documentos y testimonios que abonan honrosamente la conducta del señor Ramírez como Administrador.

En atención á las consideraciones que preceden, la Corte Suprema, oído el concepto del señor Procurador general, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, declara que hay lugar á formación de causa de responsabilidad por los trámites extraordinarios, contra el señor Manuel María Ramírez, como Administrador de la Aduana de Cúcuta, por infraccón de los artículos 415 y 403 del Código Penal nacional,—consistente dicha infracción en haber dejado de cumplir con sus deberes y en no haber ejecutado una ley fiscal.

El empleado sindicado será oído por medio de informe, que dará dentro del término de veinte días, contados desde la fecha de la notificación del presente auto, y en ese mismo término aducirá las pruebas que estime convenientes.

Para el efecto de la notificación y para la recepción del informe, líbrese despacho al señor Juez del Circuíto de Cúcuta, con remisión de lo actuado. Todo de acuerdo con los artículos 1,809, 1,819 y 1823 del Código Judicial de la Nación. Se sobresee respecto del mismo señor Ramírez por los demás cargos que le fueron hechos.

Notifíquese al señor Procurador y cópiese en el libro respectivo.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintiséis de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL

Señores Magistrados.

Por auto de 8 de Febrero de 1881, el Administrador principal de Hacienda nacional de Tunja libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva contra Pedro González, por suma de pesos, procedente de un principal y réditos reconocidos á favor del Ramo de Bienes Desamortizados, sobre un terreno denominado "Alcalá," en jurisdicción del Distrito de Samacá.

Notificado Rafael González de dicho auto, como poseedor del terreno gravado, interpuso el recurso de apelación, el cual le fué concedido para ante ese Supremo Tribunal.

La Corte que precedió á la actual omitió repartir el asunto, lo cual ha sido causa de que éste haya permanecido demorado hasta la fecha, no obstante que el apelante suministró oportunamente papel y estampillas para la actuación.

Efectuado el repartimiento, se ha dado al asunto el curso correspondiente, siendo de advertir que la actuación puede seguirse en papel común, por cuanto el inciso 5.°, artículo 9.° del Decreto número 480 de 1886 "sobre papel sellado y timbre nacional" previene que no es obligatorio extender en papel sellado "las diligencias que practiquen los empleados que tengan jurisdicción coactiva, para cobrar las sumas que se deban á los fondos de su cargo," debiéndose cargar en la tasación de costas el valor de cada hoja de papel como si fuera sellado de la clase correspondiente, según la cuantía de la ejecución.

Ahora bien, el auto ejecutivo materia del recurso interpuesto, se dictó en vista de una partida de inscripción señalada en el Registro respectivo, á instancia del Mayordomo de fábrica de la iglesia de Samacá, quién denunció el principal reconocido apoyándose en una información de testigos que presentó al efecto.

Por manera que la inscripción en referencia fué precedida de informes que, como el del Mayordomo de fábrica, debieron fundarse en antecedentes probables, lo cual da á la ejecución el mérito requerido por la trigésima primera de las reformas hechas al Código Judicial por la ley 46 de 1876, reforma que contiene las mismas disposiciones del artículo 1,091 del Código Fiscal.

Si no obstante lo que se deja expuesto, la partida de inscripción que se tuvo en cuenta para liquidar la deuda, no se formó con todos los requisitos señalados con tal objeto y cuya omisión nota el apelante, cuestión sería esa que daría lugar á excepciones, de las cuales el ejecutado puede usar oportunamente ó sea dentro del termido señalado por el artículo 965 del Código Judicial.

El infrascrito concluye, pues, pidiendo la confirmación del auto ejecutivo dictado en 8 de Febrero de 1881 contra los poseedores del terreno de "Alcalá" á que alude la partida de incripción que en copia auténtica se registra al folio 1.° de los autos.

Bogotá, 14 de Abril de 1887.

CARMELO ARANGO M.

ANUNCIOS.

IMPORTANTE.

En beneficio del buen servicio público, se suplica á los caballeros que tengan en su poder Códigos, Compilaciones, tomos de leyes nacionales y de los extinguidos Estados, ú otros libros de propiedad de la Corte Suprema, se sirvan devolverlos, pues ocurre con frecuencia la necesidad de consultar tales obras.

IMPRENTA DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 27

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 9 de Julio de 1887.

CONTENIDO.

Pág.

ACUERDOS DE LA CORTE.

Acuerdo número 35 relativo á varios nombramientos de Jueces..... 209

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Pronunciada en un juicio relativo á devolución de derechos de importación..... "

Pronunciada en la apelación de una sentencia sobre excepciones en juicio ejecutivo... 211

NEGOCIOS CRIMINALES.

Pronunciada en la causa de responsabilidad seguida contra el Juez del Circuito de Obando, Segundo Sánchez..... 212

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Pronunciado sobre la consulta de un sumario, por responsabilidad, seguido contra el Prefecto de Oriente (de Antioquia) Juan P. Bernal 213

NEGOCIOS DIVERSOS.

Documentos varios: auto y pedimento relativos á un expediente archivado 214

Sentencia pronunciada por la Corte Suprema federal, en 1883..... "

GACETA JUDICIAL.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

ACUERDO NÚMERO 35.

En Bogotá, á veintinueve de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, se constituyó la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de los señores Magistrados principales doctores Martínez, Samper, Cock Bayer, Morales, Sanclemente y Noguera y del suplente señor Francisco A. Fernández, que reemplaza al señor Aristides Calderón (quien se halla en usode licencia concedida por el Poder Ejecutivo nacional), y del infrascrito Secretario.

El señor Magistrado doctor Samper sometió á la consideración de la Corte lo siguiente:

"Vistos los siguientes documentos remitidos á Su Señoría el Presidente de esta Superioridad:

1.° Nota de Su Señoría el Presidente del Tribunal Superior de Panamá, número 69, de fecha 19 de Febrero último, remisoria de las actas en que constan los nombramientos de Jueces del Departamento, hechos por dicho Tribunal en los días 11 y 12 del mismo mes;

2.° Nota del mismo señor Presidente, número 9, del 26 del citado mes, en que da cuenta de haber sido nombrado Juez de lo civil, en el ramo comercial, el señor Marcelino Quinzada;

3.° Nota del mismo señor Presidente, número 10, de la misma última fecha, en la cual se emite un breve informe respecto de los anteriores nombramientos; y

4.° Nota de Su Señoría el Presidente del Tribunal Superior del Magdalena, de fecha 2 del presente mes y marcada con el número 16, remisoria de actas y documentos justificativos que se refieren á los nombramientos de Jueces del Departamento, hechos por el mismo Tribunal;

CONSIDERANDO:

1.° Que la disposición contenida en el artículo 115 de la ley 61 (25 de Noviembre) de 1886 "provisional sobre organización y atribuciones del Poder judicial," mandaba que los nombramientos de Jueces que hicieran los Tribunales fueran sometidos á la aprobación de la Corte Suprema; y conforme á tal disposición han sido dirigidas las notas de que se ha hecho mención;

2.° Que dicha disposición ha sido derogada por el artículo 11 de la ley 46 del presente año "que adiciona y reforma la 39 de 1880, la 61 de 1886 y la 14 de 1887," conforme á la cual yá no tiene la Corte Suprema la atribución de aprobar aquellos nambramientos de Jueces;

LA CORTE RESUELVE:

Abstenerse de toda consideración relativa á los documentos mencionados, los cuales se archivarán; y que esta resolución sea comunicada á los respectivos señores Presidentes de los Tribunales mencionados."

Puesta en discusión, fué aprobada por unanimidad, con lo cual se dió por terminado el presente Acuerdo, que firman todos los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Mayo trece de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—La ley 55 de 1881 (17 de Junio) que concedió varios auxilios á los habitantes del puerto de Buena-Ventura, con motivo del incendio acaecido el doce de Abril del mismo año, dispuso en dos de sus artículos, lo siguiente:

"Artículo 2.° Quedan exoneradas del pago de derechos de importación todas aquellas mercancías que fueron destruídas por consecuencia del incendio mencionado, y que estaban depositadas aún en los almacenes de la Aduana, como también las que se sacaron de éstos para su consumo en el puerto é internación, siempre que tales mercancías se hubieren destruído en todo ó en parte.

"Artículo 3.° A los individuos que hubieren pagado los derechos de importación por mercaderías destruídas en el incendio, se les devolverán las sumas consignadas, siempre que dichas mercaderías se encontraran en los almacenes de la Aduana el día en que tuvo lugar el incendio."

Queriendo aprovecharse de una de estas disposiciones, según la inteligencia que le daba, Antonio Vallejo, comerciante domiciliado en Buena-Ventura, ocurrió á la Junta que creó el Poder Ejecutivo para que calificase los hechos y se ejecutase debidamente la citada ley, y solicitó que se le incluyese entre los favorecidos, mediante la exoneración del pago de dos cantidades que en su totalidad valían dos mil y once pesos ($ 2,011), importe de dos pagarés otorgados por el mismo Vallejo, á favor de la Aduana de Buena-Ventura, por derechos de importación causados en los meses de Noviembre y Diciembre de mil ochocientos ochenta. En apoyo de su petición, presentó Vallejo una

información de testigos, con la cual comprobó plenamente que, cuando acaeció el mencionado incendio, tenía en Buena-Ventura "una tienda repleta de mercancías extranjeras, para la venta," así como bultos cerrados de otras, en el piso alto de la casa, y que todo, con excepción de once de aquellos bultos, fué reducido á cenizas.

La Junta calificadora instituída por el Gobierno, no tuvo á bien admitir la pretensión de Vallejo, "en atención (dijo) á la fecha en que se causaron los derechos, por creerse sin facultades para resolver en este caso;" y el postulante entabló demanda por la vía ordinaria, ante el Juez del Circuíto en lo nacional, con fecha diezisiete de Diciembre del año citado, contra la Nación ó el Tesoro nacional, pidiendo se le mandase devolver la suma de dos mil doscientos cuarenta y dos pesos sesenta y cinco centavos ($ 2,242-65) que por derechos de importación é intereses había pagado á la Aduana de Buena-Ventura. Esta demanda fué contestada, con alguna demora, por el Agente del Ministerio público, quien abiertamente rechazó el cargo, negando el fundamento y la justicia de la acción. El Juez abrió la causa á prueba; y dentro del término legal el actor, que continuó sosteniendo la demanda por medio de apoderado, produjo sus pruebas, de las cuales resultan incontrovertiblemente demostrados los hechos siguientes:

Primero. El Administrador y el Contador de la Aduana reconocieron que Vallejo había pagado á esa Oficina la suma total de dos mil doscientos cuarenta y dos pesos sesenta y cinco centavos ($ 2,242-65) por derechos nacionales de las mercancías que importó á fines de Noviembre y en Diciembre de mil ochocientos ochenta; pago que consta, además, de las notas de cancelación de los respectivos pagarés presentados en parte de prueba (fojas 3, 11, 23 vuelta á 24 vuelta).

Segundo. Los testimonios de Rafael Caicedo O. (dueño de la tienda en que se le incendiaron sus mercancías á Vallejo), y Eduardo Medina, quienes, dando razón de su dicho, afirman (fojas 27 vuelta á 28 vuelta) que Vallejo tenía sus mercancías en la tienda que ocupaba, con el solo fin de expenderlas ó darlas al consumo de la población; que tenía àquella tienda repleta y bien surtida de mercancías extranjeras, hasta la hora del incendio acaecido el doce de Abril de mil ochocientos ochenta y uno, en el cual la tienda y las mercancías fueron reducidas á cenizas; y que la dicha tienda distaba como media cuadra de la casa de Ana Arana, donde comenzó el incendio.

Tercero. Los testimonios de Eleuterio Ramírez, Ambrosio Carvajal y José Materón, que habían sido dados en información de nudo hecho, y fueron reproducidos y ratificados en el juicio; de los cuales resulta: que Vallejo mantenía la tienda aludida, bien surtida para el consumo; que también tenía muchas mercancías en la pieza alta, como en la baja, y todo fué reducido á cenizas; y que los negocios de dicho Vallejo eran solamente de venta de mercancías extranjeras, sin comisiones ni negocios del interior. Pero es de advertir que el testigo Materón manifiesta que no presenció el incendio, por cuanto, cuando éste ocurrió, aquél se hallaba á bordo de un buque (fojas 30 vuelta á 32 vuelta).

Cuarto. Los testimonios de Rafael Caicedo O., Daniel Tobar, María Engracia Rengifo y Ana Joaquina Mercado, relativos á la situación doméstica en que se hallaba Vallejo, en los momentos en que ocurrió el tántas veces mencionado incendio (fojas 34 vuelta á 37). De esta prueba prescindirá la Corte por completo, por cuanto es de todo punto inconducente, dado que no demuestra cosa alguna relativa á la demanda.

Seguido el juicio con arreglo á las disposiciones legales, y sostenida la demanda por el actor, y rechazada en su alegato final por el Agente del Ministerio público, á última hora se recibió declaración á Hilario Ibarra, pedida en tiempo, sobre los puntos de que se trata en el número tercero; el Juez del Circuíto pronunció sentencia definitiva, el treinta de Junio de mil ochocientos ochenta y dos, por la cual absolvió al Tesoro Nacional de la demenda que contra éste había instaurado Vallejo, y dispuso la consulta de esa sentencia caso de no ser apelada. El demandante apeló, y seguida en esta Superioridad la tramitación legal, ha llgado el tiempo de resolver en segunda instancia, previa audiencia del Ministerio público solamente, pues el apelante no ha sostenido su recurso por escrito ni de palabra Ha llegado el caso de fallar, y para ello la Corte considera;

1.° La ley 55 de 1881, bien que hizo concesiones de puro favor por aliviar la suerte de los comerciantes que sufrieron por causa del incendio acaecido en el puerto de Buena-Ventura el doce de Abril de aquel año, fué, por su naturaleza y objeto, una ley administrativa, cuya ejecución debía estar íntimamente relacionada con la Aduana de dicho puerto, sin que su objeto ni espíritu fuera de aplicación general, sino enteramente condicional, y sólo relativo á determinada concesión y circunstancias especiales. Además, el artículo final (7.°) de dicha ley autorizó al Poder Ejecutivo para dictar, de acuerdo con el Gobierno del Cauca, *los reglamentos que estimara convenientes* respecto de la ejecución; y al efecto, se dictó la resolución ejecutiva de trece de Julio, comunicada por telegrama de la Secretaría de Hacienda de la Nación, que se registra en el *Diario Oficial* número 5,116, de 31 de Agosto del mismo año. Conforme á esta resolución, correspondía á una Junta compuesta de siete funcionarios públicos calificar las reclamaciones que se hiciesen en virtud de la ley; quedando á todo interesado, á quien se negase su petición, el derecho de ocurrir al Poder Judicial para que se decidiese el punto en juicio contradictorio entre él y el Ministerio público, á quien la Aduana daría las instrucciones convenientes. Por lo mismo, si fué admitida subsidiariamente la vía judicial, es necesario, para saber si es ó nó fundaba la acción del demandante, fijar claramente la naturaleza de las concesiones que otorgó la ley, y apreciar estrictamente las pruebas presentadas para fundar esa acción.

2.° Dos clases de concesiones hizo la citada ley á los comerciantes importadores de mercancías por la Aduana de Buena-Ventura; á saber:

1.ª *Exonerar del pago de derechos de importación* (artículo 2.° de esa ley) todas aquellas mercancías *que fueron destruídas* por consecuencia del incendio mencionado y que estaban *depositadas* aún en los almacenes de la Aduana, como también las que se sacaron de éstos para su consumo en el puerto é internación, siempre que *tales mercancías* se hubieran *destruído* en todo ó en parte.

2.ª A los individuos que *hubieren pagado* los derechos de importación por mercancías destruídas en el incendio, *se les devolverán* las sumas consignadas, siempre que dichas mercancías se encontraren *en los almacenes de la Aduana* el día en que tuvo lugar el incendio." (Art. 3.°)

Se ve, pues, que no hay sino dos casos previstos por la ley: el de *exoneración* de pago de derechos no pagados, dadas las circunstancias del artículo 2.°; y el de *devolución* de los derechos *pagados*, dadas las ciacunstancias del artículo 3.° Como el demandante ha dicho terminantemente en varios escritos (fojas 8.ª, 9.ª vuelta, 12, 21 vuelta, etc.) que no funda su acción en el artículo 3.°, sino en el 2.°, y como es notorio que las mercancías á que aquél se refiere no se encontraban en los almacenes de la Aduana el día del incendio, es obvio que dicho artículo 3.° no tiene aplicación en este litigio, y sólo debe ser considerado en cuanto suministra clara idea de la intención del Legislador y de la razón de la ley.

3.° La expresión "siempre que dichas mercancías se encontraren en los almacenes de la Aduana el día en que tuvo lugar el incendio," que es la condición puesta por el artículo 3.°, da la prueba evidente de que el objeto del Legislador fué aliviar á los comerciantes importadores de Buena-Ventura que perdieron mercancías en el incendio; evitando que, á más de esta pérdida, tuviesen que pagar derechos de importación, ó los hubiesen pagado yá, por unos efectos *acabados de importar*, de cuya venta ó internación no habían tenido tiempo de sacar ningún provecho; cosa evidente, puesto que tales efectos se hallaban aún en los almacenes de la Aduana, y por lo tanto, sus dueños no habían alcanzado á recibirlos.

Pero el caso de Vallejo es distinto: él tenía recibidas sus mercancías desde meses antes; y por lo menos había hecho sus últimas importaciones á mediados de Noviembre y mediados de Diciembre de mil ochocientos ochenta, puesto que los dos pagarés otorgados á favor de la Aduana que hubo de cubrir, eran de fechas treinta de Noviembre (por mil ochocientos diez y ocho pesos ($ 1,818), debiendo estar cubierto el treinta de Marzo de mil ochocientos ochenta y uno, esto es, doce días *antes* del incendio); y veintiuno de Diciembre (por ciento noventa y tres pesos ($ 193), debiendo ser pagado el veintiuno de Abril, esto es, *apenas nueve días* después del incendio); con lo que se patentiza que el importador había tenido un tiempo suficiente

(cosa de cuatro meses por término medio) para el expendio de sus últimas importaciones.

4.° Si el actor ha fundado su demanda en el artículo 2.° de la ley citada, hay que considerar si su pretensión está comprendida en la disposición legal. No se exonera á nadie de una obligación yá cumplida, sino de un deber ú obligación *por cumplir;* y como aquí se trata de exonerar del pago de derechos, esto es, de derechos *por pagar*, es evidente que el doce de Abril de mil ochocientos ochenta y uno estaba ó debía estar yá pagada la suma de mil ochocientos diez y ocho pesos, valor del pagaré vencido el treinta de Marzo. Por lo mismo, no había lugar, en absoluto, á exoneración de pago con relación á este crédito, ni á sus intereses.

Cuanto al otro crédito (el de ciento noventa y tres pesos) no vencido sino nueve días después del día del incendio, la exoneración no podía tener lugar sino en uno de dos casos: ó que las mercancías causantes de los derechos se hubiesen quemado "depositadas aún en los almacenes de la Aduana;" ó que *esas mismas mercaderías* "sacadas de dichos almacenes para su consumo en el puerto é internación," "se hubiesen destruído en todo ó en parte." Como la destrucción no ocurrió en los almacenes de la Aduana, como lo reconoce el actor, y sobre lo cual no existe en autos prueba alguna, es claro que solamente es aplicable la segunda suposición del artículo 2.° que se considera.

Ahora bien: las dos informaciones de testigos presentadas como pruebas por el demandante, sólo demuestran que éste perdió casi todas las mercancías que tenía en su tienda (planta baja) y en el piso alto; pero absolutamente no hay prueba alguna de este hecho: que se destruyeron en el incendio *aquellas mercancías* que, *importadas en Noviembre y Diciembre de mil ochocientos ochenta, habían causado los derechos de Aduana cuya exoneración ha solicitado Vallejo.* La ley no quiso ni pudo querer que se exonerase del pago de derechos, sino por lo que estaba pendiente, y por causa de mercancías *acabadas* de importar; mercancías que el Legislador supuso no habían podido ser expendidas, dado que se encontraban aún en los almacenes de la Aduana, ó se acababan de sacar de estos almacenes. Pero el demandante, ni siquiera ha afirmado ó insinuado en ninguno de sus pedimentos ó alegatos la identidad de mercancías; esto es, que en su tienda se hallaban y se quemaron *aquellas mismas mercancías* que habían causado los derechos de cuyo pago ha querido ser exonerado. Al ser esto justo, sin la prueba y las circunstancias indispensables, se caería en el absurdo, no yá de exonerar del pago de derechos no pagados, á los importadores de Buena-Ventura, sino que se les devolviesen los derechos pagados aun durante muchos años, por las mercancías importadas, aun cuando estas mercancías estuviesen vendidas y consumidas desde años antes del incendio.

5.° Si las observaciones que preceden son irrefutables, debe también observarse que es menos admisible aún la pretensión del actor, no yá de ser exonerado del pago de derechos pendientes cuando entabló su demanda, sino de que el Tesoro nacional le *devolviese* ó pagase una cantidad por derechos pagados, con sus intereses desde algún tiempo antes de la fecha de la demanda.

Por todas estas consideraciones es patente lo infundado de la acción. En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, oído el concepto adverso del señor Procurador general, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve:

1.° Confírmase la sentencia absolutoria de primera instancia;

2.° Condénase al apelante á pagar las costas del recurso.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente al Juez de primera instancia.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del trece de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, se publicó esta sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En catorce de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general la sentencia que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Mayo veintitrés de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Por escritura pública otorgada en once de Abril de mil ochocientos cincuenta y cinco, en el Distrito de Corrales, perteneciente al Departamento de Boyacá, se obligaron Juan N. Mesa y Rafael Cortés á reconocer, por el término de cinco años, á razón del seis por ciento anual, un principal de capellanía de doscientos noventa y cuatro pesos de á ocho décimos ($ de 0,8 294) á favor de la Iglesia de dicho Distrito, constituyéndose el primero en deudor de la cantidad de ciento noventa y cuatro pesos ($ de 0,8 194), para cuya seguridad hipotecó un terreno denominado "Piedra Negra" y una casa ubicada en el pueblo de Corrales, y el segundo (Cortés) de los cien pesos restantes, para responder de los cuales pignoró otra casa situada en el mismo pueblo.

El Agente de Bienes Desamortizados del Circuíto de Santa-Rosa fundado en dicha escritura y sin tener en cuenta que, conforme á ella, Mesa sólo se obligó á responder de ciento noventa y cuatro pesos de ocho décimos ($ de 0,8 194) y de sus intereses, libró ejecución, en nueve de Junio de mil ochocientos sesenta y cuatro, contra él, prescindiendo de Cortés, por la cantidad doscientos setenta y tres pesos setenta y dos y medio centavos ($ 273-72½), para cuyo pago mandó proceder contra las fincas que Mesa hipotecó.

Practicadas las diligencias ejecutivas por el Juez del Distrito de Corrales, comisionado al efecto, el Agente de Bienes Desamortizados mandó citar al ejecutado para sentencia de pregón y remate de los bienes embargados, y hecho esto anotó en el expediente que Mesa enteró ciento siete pesos noventa y siete y medio centavos ($ 107-97½) así: veintisiete pesos noventa y siete y medio centavos ($ 27-97½) por réditos vencidos; quince pesos cincuenta centavos ($ 15-50) de recargo al diez por ciento (10 por 100); y sesenta y cuatro pesos ($ 64) á buena cuenta del principal, y en la escritura abonó las dos últimas partidas, pero no la primera, con lo cual suspendió la ejecución.

Figura luégo en el expediente copia de la inscripción que se hizo en el libro de Bienes Desamortizados del capital que motivó la ejecución mencionada, y otra de un principal de ciento sesenta pesos ($ 160) á cargo de Rafael Cortés y á favor de la Virgen del Carmen de Corrales; principal que, según la inscripción, estaba oculto y asegurado en una casa situada en dicho Distrito, á la que se dió por linderos: al Oriente, la casa nominada "Cural," al Norte, la plaza, al Occidente, la calle pública y al Sur..... no se expresó.

La escritura de que se ha hecho mérito aparece cancelada en lo que dice relación con Cortés, menos en dieziséis pesos ($ 16) del principal, y dicho Agente libró ejecución en dieziocho de Agosto de mil ochocientos setenta y cinco contra el referido Cortés por ese resto y sus intereses, y además por trescientos cuarenta y seis pesos cuarenta y cinco centavos ($ 346-45) procedentes del capital últimamente inscrito y de sus réditos.

Requerido Cortés por tres veces para el pago, dijo en la primera que no era deudor de la suma que se le cobraba y que, por otra parte, sus bienes estaban embargados en un juicio que le promovió el Gobierno del Estado; agregando respecto de los dieziséis pesos ($ 16) de la primera partida, que los había pagado á Casimiro Leal como Agente de Hacienda del Circuíto de Santa-Rosa; en la segunda pidió que se le prorrogara el plazo hasta fines del mes de Diciembre; y en la tercera, denunció los bienes á que el mandamiento ejecutivo se refiere, los cuales fueron avaluados y depositados.

Devuelto, el expediente al Administrador de Hacienda, ordenó éste que se citara al ejecutado para sentencia de pregón y remate de los bienes embargados, y el auto se le notificó á su apoderado Casimiro Leal, quien propuso las excepciones de pago y error de cuenta, fundando la primera en que desde el principio del juicio se reconoció Cortés deudor de dieziséis pesos ($ 16) y se convino en un arreglo verbal que por razón de la guerra civil quedó paralizado, como oportunamente lo probará; y la segunda, en que el recaudo ejecutivo relativo al censo de cien

sesenta pesos ($ 160) es incompleto, por haber negado Cortés el hecho y el derecho desde que tuvo conocimiento de la inscripción, por no haberse registrado ni anotado el título, respecto del cual dijo el apoderado que él había hecho la inscripción sin tener escritura á la vista, y que no recuerda de dónde tomó el dato.

Las dos excepciones se recibieron á prueba, y sustituído el poder á Juan B. Martínez, reprodujo éste, para fundarlas, los documentos que sirvieron de base á la ejecución, y promovió luégo artículo de previo y especial pronunciamiento, alegando que la inscripción no tiene documento público en qué apoyarse, que no hay cantidad líquida y que carecen de valor las diligencias ejecutivas.

Sobre tal artículo se oyó al Agente fiscal, y abierto á prueba por nueve días y transcurrido este término sin que ninguna se presentara, se declaró el Juez del Circuíto sin facultad para resolver la nulidad alegada, por llamarlo la ley únicamente á decidir sobre las excepciones oportunamente opuestas, de cuyo fallo apeló el apoderado de Cortés, y le fué otorgado el recurso para ante esta Superioridad.

Dictó posteriormente sentencia sobre las excepciones de pago y error de cuenta, declarando no probada la primera, pero sí la segunda, y mandando cesar la ejecución por la suma de ciento sesenta pesos ($ 160) y sus réditos, de cuya sentencia apeló el Administrador principal de Hacienda, y por habérsele otorgado el recurso ha venido el juicio á esta Suprema Corte.

Sustanciada la apelación de conformidad con la ley, dictó el Magistrado substanciador auto para mejor proveer, reducido á pedirle al Administrador principal de Hacienda de Tunja copia de los documentos que tuviera á la vista el Agente de Bienes Desamortizados de Santa-Rosa para inscribir, en nueve de Abril de mil ochocientos sesenta y cuatro, á cargo de Rafael Cortés, el censo de ciento sesenta pesos ($ 160) á favor de la Virgen del Carmen de Corrales, asegurado en una casa, cuyos linderos se expresaron; y después de varios requerimientos ha informado dicho Administrador que á su juicio sólo se tuvo en cuenta para inscribir el principal de que se trata, algún informe verbal, pues al copiar las inscripciones particulares en el libro general que se formó, se puso nota de no haberse encontrado escritura relativa al capital de ciento sesenta pesos ($ 160).

Se está, pues, en el caso de resolver los dos recursos interpuestos, comenzándose por el relativo al artículo de previo y especial pronunciamiento, por exigirlo así el orden. Fúndase ese artículo, como se ha visto, en que, no teniendo la inscripción documento público en que apoyarse, las diligencias ejecutivas carecen de valor; pero, si en tal concepto estaba el ejecutado, debió apelar del auto en que se decretó la ejecución, y lo no hizo. Dictado ese auto en diez y ocho de Agosto de mil ochocientos setenta y cinco y consentido por Cortés, mal pudo el apoderado de éste promover, en veintisiete de Junio de mil ochocientos setenta y ocho, una articulación con el objeto de echar por tierra dicho auto y todo lo hecho posteriormente, porque el juicio ejecutivo, de procedimiento especial, no permite articulaciones que lo desvirtúen y le hagan perder su naturaleza. No pudiendo, en consecuencia, hacerse en él nada que se aparte de las disposiciones legales que lo arreglan, y estándole atribuído únicamente al Juez del respectivo Circuíto, por el inciso 2.° del artículo 62 del Código Judicial, vigente entonces, admitir, sustanciar y decidir las excepciones opuestas en las ejecuciones libradas por los empleados que ejercen jurisdicción coativa, el Juez de Santa-Rosa carecía, en efecto, de jurisdicción legal para resolver un incidente inadmisible en dicho juicio.

Siendo esto así, entra á examinar la Corte sí están ó nó probadas las excepciones legales de pago y error de cuenta á que el otro recurso de apelación se contrae; y como la primera se funda en que, prévio el reconocimiento de ser cierta la deuda de diez y seis pesos ($ 16), se convino en un arreglo verbal, que por razón de la guerra quedó paralizado, Cortes se ha confesado deudor de esa suma y convenido en que no la ha pagado. De haberlo hecho, habría dado la prueba, y ninguna ofrecen los autos sobre el particular.

La segunda excepción, la de error de cuenta, se apoya en que el recaudo ejecutivo es incompleto y en que Cortes negó el hecho y el derecho desde que tuvo conocimiento de la inscripción; pero fuera de que tampoco ha probado ésto, y de que, por otra parte, el expediente no ha venido á la Corte por recurso de apelación del auto ejecutivo, único caso en que ella pudiera entrar á examinar y decidir si la inscripción que ha servido de fundamento al juicio fué bien ó mal hecha, lo alegado no constituye error de cuenta, porque este supone, como lo ha observado el señor Procurador general, error en la liquidación hecha para deducir el alcance ó cargo que se trata de hacer efectivo por medio de la ejecución; liquidación que no se ha probado sea inexacta ó que contenga error alguno. A lo que se agrega que, cuando por segunda vez se le intimó á Cortés el mandamiento de ejecución, pidió que se le prorrogara el plazo hasta fines del mes de Diciembre, reconociéndose así, implícitamente, deudor de la cantidad que se le cobraba; y que, requerido por tercera vez para que presentara bienes suficientes para el pago, presentó la misma casa de que hace mérito la diligencia de inscripción y cuyos linderos resultan idénticos.

Por lo expuesto y de conformidad con lo pedido por el señor Procuranor general, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto de diez y ocho de Diciembre de mil ochocientos setenta y ocho en que el Juzgado de Santa-Rosa se abstuvo de resolver la irregular articulación promovida por el apoderado de Rafael Cortés, y declara no probadas las excepciones de pago y error de cuenta opuestas por parte del ejecutado, debiéndose, en consecuencia, adelantar la ejecución.

Queda reformada en estos términos la sentencia proferida por el Juez del Circuíto de Santa-Rosa en diez de Abril de mil ochocientos ochenta.

Hágase saber este fallo, déjese copia de él, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente al Juez de primera instancia.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer — Froilán Largacha — Antonio Morales — Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del veintitrés de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, publiqué esta sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En veinticinco de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general la sentencia que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá. Mayo veintiocinco de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Se ha remitido á esta Suprema Corte el presente juicio de responsabilidad seguido por el Tribunal Superior del extinguido Estado del Cauca y por los trámites extraordinarios, contra el ex-Juez del suprimido Circuíto de Obando, Segundo Sánchez, en consulta de la sentencia que profirió el mismo Tribunal, con fecha veinticuatro de Enero del presente año, absolviendo al procesado de uno de los cargos por que fué llamado á juicio, guardando silencio sobre alguno, y condenándolo por otro, previa calificación del tercer grado, á pagar una multa de ocho pesos ($ 8), como equivalente á la sexta parte del sueldo que debía devengar en un mes, por no ejercer vá el empleo de Juez de Circuíto, del cual debería ser suspendido, y al pago, además, de las costas procesales.

Observada en esta segunda instancia la tramitación prevenida por el artículo 1,835 del Código Judicial de la República, sin que ninguna de las partes haya hecho uso del derecho de alegar, la Corte procede á resolver la expresada consulta, teniendo en consideración:

Primero. Que el auto de proceder contra el acusado, por infracción de los artículos 313 y 315 del Código Penal del Cauca, de veintisiete de Septiembre de mil ochocientos ochenta y tres, se funda únicamente en estas consideraciones generales: "Que el acusado ha sido moroso en el despacho, faltando al cumplimiento de sus deberes, no dando curso á varias causas criminales que había pendientes, desoyendo la voz del Ministerio público, embarazando con retardos indebidos el que el Juez primer suplente del Circuíto cumpliese la orden que le había dado el Tribunal Superior, y faltando á otros deberes, por los que le acusa el señor Procurador general."

Segundo. Que la acusación propuesta por éste, dice literalmente lo que sigue:

"Como las copias expedidas por el señor Procurador del Circuíto de Obando y sus aseveraciones oficiales, tienen fe pública, y como, además, están corroboradas por la misma nota del Juez del Circuíto, señor Segundo Sánchez, número 26, de 8 de Noviembre de 1884, foja 14, resulta que dicho Juez ha cometido los delitos señalados en los artículos 313 y 315 del Código Penal, por los cuales lo acuso; y como del certificado de foja 27, resulta que tampoco dió al Jefe municipal el aviso de que trata el artículo 28 de la ley nacional número 22, de 1871, debe también ser Juzgado por esta omisión."

Tercero. Que tanto la averiguación, como la acusación y la defensa, versaron claramente sobre estos hechos:

1.° Demoras en el curso de algunos sumarios, á lo cual se refieren las copias aludidas en la antecedente vista del Procurador;

2.° Haberse opuesto al cumplimiento de una providencia del Tribunal Superior, cometida al Juez suplente del mismo Circuíto, en averiguación de aquellas demoras, siendo á esto á lo que hace referencia la nota de ocho de Noviembre que acaba de citarse; y

3.° Haber omitido en el seguimiento de las causas contra los culpables de enganchamientos de Colombianos para la guerra civil del Ecuador, dar el aviso de que trata la disposición citada en la parte final del número que antecede.

Cuarto. Que los fundamentos de la sentencia de primera instancia, en cuanto absuelve al acusado del primero de los enunciados cargos, están fielmente deducidos del mérito de la actuación y del resultado de las pruebas producidas por el acusado en el estado competente del juicio.

Quinto. Que respecto del tercer cargo, como se ha visto yá, se guarda silencio, tanto en el auto de proceder como en la sentencia misma, sin que en aquel se hubiera especificado, puesto que se trataba del quebrantamiento de una ley nacional, el artículo del Código Penal de la Nación que se hubiera infringido.

Sexto. Que la disposición del artículo 315, citado en el auto de proceder, no es aplicable á ninguno de los hechos que se imputan al acusado. A éste se le juzga por omisión ó falta de cumplimiento de los deberes de su empleo de Juez, y dicho artículo castiga la morosidad, descuido, omisión ó negligencia de los empleados que no pertenezcan al orden judicial, puesto que el artículo inmediatamente anterior, es á los empleados de dicho orden á quienes se refiere, mientras que el 315 habla *de todos los demás empleados*. En este caso viene bien la disposición del aparte del artículo 219 del Código de Procedimiento para los negocios criminales.

Séptimo. Que el acusado, además, no está sujeto á responsabilidad por el segundo de los enunciados cargos; si se opuso á que el Juez suplente inspeccionara, en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal, los copiadores de oficios del Juzgado y los sumarios que se creían demorados, no lo hizo por vías de hecho ni empleando una tenaz resistencia, sino con el fundamento expresado en una nota oficial, de que los Jueces suplentes no asumen la correspondiente jurisdicción, sino por falta absoluta ó en los casos de impedimento ó de recusación de los principales, nada de lo cual había tenido lugar; y como ni el Juez comisionado, ni el Procurador, ni el Tribunal mismo insistieron en la práctica de tales pruebas, sino que, al contrario, guardaron profundo silencio, debe deducirse que, ó aceptaron implícitamente la justicia de la observación, ó reconocieron por lo menos que en casos como éste, en que no hay disposición clara y especialmente aplicable, la objeción que el procesado hizo á tal procedimiento en defensa de sus derechos, no puede estimarse como un acto malicioso que revista los caracteres del delito.

Octavo. Que en cuanto al tercero de los hechos relacionados en la parte final del número tercero de esta sentencia, tratándose de un delito en que debe procederse de oficio, y sobre todo, de un delito que podía comprometer la honra y la tranquilidad de la Nación, se establecería un mal precedente, si la voluntaria ó involuntaria omisión del Juez de la primera instancia en el auto de proceder se estimara como motivo suficiente para dejar de investigar el delito, y de aplicarle, llegado el caso, la correspondiente pena; y

Noveno. Que la sentencia de primera instancia es consultable, por ser de aplicación especial, en estos casos, lo dispuesto en el artículo 564 del referido Código de procedimiento del Cauca.

Por lo tanto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la sentencia consultada en cuanto absuelve al procesado del cargo le morosidad en los sumarios que cursaban en su despacho, y la revoca en la parte en que lo condena al pago de ocho pesos de multa y de las costas procesales, por haberse opuesto á la práctica de las diligencias de que antes se ha hecho mérito.

Y por lo que respecta á la omisión del deber que al mismo acusado imponía el artículo 30, con referencia al 28 de la Ley nacional, número 22 de 1871, de que se hizo abstracción en el auto de proceder, se ordena al Tribunal de la primera instancia que, compulsando copia de lo conducente, proceda conforme á derecho á averiguar el expresado delito, y á dar al asunto el curso determinado por la ley.

Notifíquese, déjese copia, publíquese y remítase el expediente al Tribunal Superior de Justicia del Distrito de Pasto, como á quien corresponde conocer del asunto, y dése aviso de esta determinación al Tribunal remitente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veinticinco de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, se publicó la sentencia anterior.

Ramón Guerra A., Secretario.

En veintisiete de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general la sentencia que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Se notificó por edicto. *Guerra A.*, Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Mayo veinticuatro de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Tribunal Superior del Distrito de Antioquia ha elevado á este Despacho en consulta el auto de diez y siete de Marzo del presente año, que profirió en el expediente creado para averiguar la responsabilidad de Juan P. Bernal, como Prefecto del entonces Departamento de Oriente, por imputársele el delito de detención arbitraria perpetrado en la persona de Jesús Soluaga G., á virtud de la denuncia que este formalizó contra el mismo funcionario ante el Juez del Circuíto de Marinilla, en veinticinco de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco, al solicitar su excarcelación bajo de fianza.

El Tribunal Superior á cuyo conocimiento fué sometido el expediente por el Juez de Circuíto que inició la indagación, halló, de acuerdo con el dictamen del Ministerio público, que no había mérito para abrir juicio de responsabilidad contra el mencionado Prefecto, y sobreseyó, en consecuencia, en el procedimiento.

Los hechos que aparecen justificados en el expediente, son los siguientes: Hallábase Soluaga detenido en la cárcel de Marinilla como sindicado del delito de hurto; y como, en el mes de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco, este mismo individuo hizo presente al Prefecto que tenía conocimiento de que en el páramo de "Santa-Isabel" había un depósito de armas, el mismo que pondría á disposición de la autoridad, si se le concedía por esta denuncia la libertad en una causa de hurto que se le iniciaba, el Prefecto, para asegurarse de la veracidad de la denuncia, recibió á Soluaga una exposición jurada sobre la certidumbre que él tuviera respecto á los hechos, y después de esta diligencia emprendió marcha para el páramo, llevando consigo al denunciante con la debida custodia, y previa la aquiescencia del Jefe Civil y Militar del Estado. Después de todo, el Prefecto vino á convencerse de que no existía tal depósito de armas, y estimando la denuncia como una burla contra la autoridad, dispuso que Soluaga fuese custodiado como preso, y al paso lo dejó á disposición del Prefecto del Sur, en la cárcel de Manizales, para que de allí fuera trasladado á la cárcel de Marinilla de donde había salido, y para que se le instruyese la

correspondiente causa por perjurio, de acuerdo con la instrucción que recibió entonces del Jefe Civil y Militar. El Prefecto, en una de sus declaraciones, asegura que Soluaga, cuando consumó la burla, trató de evadirse, con cuyo motivo lo puso bajo la custodia de unos agentes de policía que hacían la comitiva de dicho funcionario.

Los cargos contra el Prefecto estaban reducidos á dos: el uno por haber tenido en detención á Soluaga por muchos días; y el otro, por no haberle expedido la correspondiente boleta dentro del término legal sobre los motivos de la detención.

De uno y otro cargo debe considerarse libre al Prefecto; del primero, porque dicha autoridad, al poner á Soluaga bajo recaudo, no hizo otra cosa que someterlo á la detención á que estaba sujeto, como sindicado del delito de hurto; y del segundo, por cuanto no era una circunstancia esencial para garantizar al preso, la de expedirle una boleta de arresto, cuando en la cárcel de Marinilla debía existir la boleta que justificaba la detención en ese establecimiento por la causa de hurto. De modo que el retardo en la expedición de aquella papeleta, para que constara que también quedaba detenido Soluaga por el delito de perjurio, que era materia de un nuevo sumario, no vino, en realidad á revestir el procedimiento del Prefecto con los caracteres de una arbitraria detención contra Soluaga.

Por estos fundamentos la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador general de la Nación, confirma el auto de sobreseimiento consultado.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veinticinco de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

NEGOCIOS DIVERSOS.

DOCUMENTOS VARIOS.

Señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Yo, Emigdio Palau, vecino de esta ciudad, con el debido respeto ocurro ante vosotros, para pediros que os sirváis disponer que el expediente, que existe en la Corte, relativo á la reclamación que se hizo por parte de Carmen Astaiza para el pago de los suministros, empréstitos y expropiaciones con que se le obligó á contribuír para los gastos de la guerra de 1876 á 1877, y en cuya reclamación figuré, en la segunda instancia, como representante suyo, se pase inmediatamente á la Comisión que está funcionando, encargada de la calificación y orden de pago de dichos suministros, para que la expresada Comisión resuelva en ese expediente lo que crea justo.

Verdad es que la Corte dictó sentencia en esta reclamación, en 6 de Julio de 1884, absolviendo á la Nación, expresando que aun cuando encontraba probada plenamente dicha reclamación; no se había hecho dentro del año prescrito por el artículo 15 de, la ley nacional 67, de 4 de Junio de 1877; pero como por una ley reciente se ha ampliado el término para reclamar esos suministros de 1876 á 1877, fijándole hasta el mes de Septiembre próximo, esta ley favorece á la señora Astaiza y la comprende en sus disposiciones, porque no sería justo ni corriente que la gracia del nuevo término protegiera á los acreedores morosos que no hicieron ningún reclamo y excluyera á los que sí lo hicieron.

Bogotá, Mayo 20 de 1887.

Señores Magistrados.

EMIGDIO PALAU.

Presentado el 20 de Mayo y puesto al repartimiento.

Guerra A., Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Mayo veintisiete de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—La ley 56 del presente año (1.° de Abril) "adicional y reformotoria á las 44, 50 y 87 de 1886," contiene los siguientes artículos pertinentes en el caso á que se refiere el precedente memorial.

"Artículo 8.° El término para iniciar toda clase de reclamaciones contra el Tesoro, por suministros, empréstitos, expropiaciones, exacciones y contribuciones de guerra, por consecuencia de la de 1876 á 1877, concluirá el último día de Septiembre del presente año.

"Artículo 9.° Los expedientes que existan en los Tribunales y Juzgados sobre los negocios de competencia de la Comisión" (la Comisión de que trata el artículo 7.°) "serán enviados á ella. Asimismo presentarán directamente á la Comisión sus reclamaciones los interesados cuyos expedientes no se hallen en aquel caso."

Valiéndose de lo dispuesto en el artículo 8.°, el doctor Emigdio Palau solicita que la Corte haga pasar á la Comisión administrativa que conoce de las reclamaciones aludidas, el expediente de la demanda que Carmen Astaiza entabló contra el Gobierno nacional, por razón de suministros y expropiaciones que tuvieron lugar durante la guerra de 1876 á 1877; demanda que, propuesta en cinco de Septiembre de mil ochocientos setenta y ocho, fué fallada por la Corte Suprema, en segunda instancia, por sentencia definitiva de fecha seis de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro, con la absolución del Tesoro nacional, mandándose, en consecuencia, archivar los autos. Estos quedaron archivados, y el asunto pertenece á la cosa juzgada y ejecutoriada.

Bien se comprende que no ha podido referirse la disposición legal á lo que yá ha sido juzgado definitivamente; pues si de este modo se entendiera la ley, se caería en el absurdo de que la Corte Suprema sacase de su archivo para un nuevo examen de la Comisión, la inmensa multitud de expedientes sobre los cuales han recaído, desde hace diez años, sentencias definitivas.

No se opone esta natural inteligencia de la ley, á que la Corte, en los casos en que sea legal, permita la expedición de copias de los documentos que se hallen en el archivo y puedan ser útiles á las partes interesadas.

Por las razones expuestas, la Corte no puede acceder á lo que se solicita en el precedente memorial.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En treinta de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

En el día diez de Junio de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor doctor Emigdio Palau el auto que precede,

PALAU—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema Federal—Bogotá. veinticuatro de Noviembre de mil ochocientos ochenta y tres. *

Vistos:—Apoyado en la ley nacional número 27 de 2 de Mayo de 1865, el señor Manuel María Guerrero presentó ante el Juez del Circuito de Pasto, territorio del Estado soberano del Cauca, una demanda que dice así:

"Señor Juez Nacional.

"Manuel M. Guerrero, ante usted en la vía y forma que mejor haya lugar en derecho, digo: Que presento la adjunta documentación para que previa la sustanciación que la ley determina, se sirva disponer que el Gobierno me reconozca el crédito de los suministros que he hecho á los Gobiernos de Colombia y de la extinguida Confederación: á éste por empréstitos forzosos y á aquél por suministros voluntarios. Las partidas que demando son las siguientes:

"Suministros hechos al Gobierno de los Estados Unidos de Colombia.

"Por setecientos $ de ley qne en 20 de Noviembre de 1863 presté al Gobierno y entregué en este lugar al Tesorero de Guerra por empréstito voluntario, á virtud del decreto dado por el Presidente de los Estados Unidos de Colombia;

* Esta sentencia quedó sin publicación en el *Diario Oficial*, en 1883. Por orden de la Corte actal se publica ahora, para que surta sus efectos.

consta del documento número 1.°.....$ 700 ...

" Por cuatro mulas que voluntariamente suministré al Ejército en la expedición sobre Cuaspud, y están avaluadas á 50 pesos de ley cada una, como consta de la información número 2.° : fueron entregadas al Intendente general, como lo comprueba la comunicación ó recibo número 2.°..... 200 ...

" Por veinticinco mulas que para equipo del Ejército en la marcha á Cuaspud sacaron de mi hacienda Consacá, y no fueron avaluadas por la premura del tiempo ; pero importan á 50 pesos de ley cada una y producen la suma de..... 1,250 ...

"Por ochenta pesos de ley que, estando emigrado en el Ecuador, suministré, por exigencia del señor doctor Emigdio Palau que como Gobernador del Estado del Cauca me los pidió para hacer un movimiento militar en Yaromalo ; y fueron entregados en Tulcán por el Presbítero Máximo Benavídez.... 80 ...

" Por cincuenta pesos que para levantar guerrillas que obraron en la Laguna, suministré y fueron entregados al señor doctor Ramón Toledo, actual Jefe Municipal ; esta suma la entregó á mi nombre el referido Benavídez..... .... 50 ...

" Dejo de poner otras sumas que he suministrado, porque desde que las gasté no tuve intención de cobrarlas y fueron gastos hechosen bien de mi patria.

" Empréstitos forzosos hechos á la extinguida Confederación Granadina :

" Por cuarenta y ocho pesos de empréstito forzoso que se le impuso á mi hacienda del Ingenio y á mi nombre los pagó el doctor Joaquín Pérez, como consta del documento número 3.°..... 48 ...

" Por cuatro bueyes de moler que las tropas de los godos ó servidores al Gobierno de la Confederación se sacaron de mi expresada hacienda Ingenio, y avaluados á 20 pesos, arroja la suma de $ 80..... 80 ...

" Por dos reses que se tomaron de mi hacienda Consacá que fueron dos novillos cebados, los que avaluados en 24 pesos cada uno, según el documento número 4.°, importan 38 pesos de ley con cuarenta centavos..... 38-40

" Por tres vacas tomadas el 28 de Enero de la misma hacienda Consacá, valiosa cada una de 20 pesos de ley, y suman la partida de 60, documento número 5.°..... 60 ...

" Por dos reses que la autoridad tomó de la misma hacienda Consacá el 21 de Abril de 1861, las que que avaluadas á 18 pesos (documento número 6.°), dan el resultado de..... 36 ...

" Por tres cabezas de ganado tomadas por la autoridad, de la misma hacienda Consacá el 27 de Julio de 1862, que fueron un toro, un novillo y una vaca ; su avaluación importa 46 pesos de ley según el documento número 7.°..... 46 ...

" Por otro novillo que expresa el documento número 8.° tasado en 16 pesos de ley..... 16 ...

" Por diez pesos de empréstito ferzoso que expresa el documento número 9.°, el que está endosado en mi favor..... 10 ...

" Por dos reses que comprueba el documento número 10, las que avaluadas á 14 pesos de ley, según el mismo documento, dan el producido de..... 28 ...

" Por un toro tomado por la tropa el 27 de Noviembre de 1862, valioso de $ 10, documento número 11..... 10 ...

" Por 11 pesos 20 centavos que importa la orden de pago número 12..... 11-20

" Por 49 pesos cuarenta y nueve centavos que importa la orden de pago número 13 49-49

" Por 14 pesos 40 centavos que importa la orden de pago número 14..... 14-40

" Por 66 pesos que importa la orden de pago número 15..... ..... 66 ...

" Se agrega á estas partidas 400 pesos de ley que importa el arrendamiento de mi casa situada en el Barrio de San-Agustín, por los tres años que estuvo de cuartel durante la revolución ; y 400 pesos también de ley que importan los deterioros de la casa durante aquella época ; una y otra suma importa... 800 ...

Suma.....$ 3,593-49

" Esta suma de 3,593 pesos de ley con 49 centavos es la que conforme á la ley pido á usted se sirva disponer que se me pague. Así lo pido y juro, etc,

" Pasto, 14 de Septiembre de 1865.

" Otro sí : digo que como el documento número 1.° gana premio, demando también los premios vencidos y que se vencieren hasta la fecha en que se haga la liquidación y reconocimiento de la cantidad total.

" *Manuel María Guerrero.*"

Contestada que fué por el respectivo representante de la Nación, producidas las pruebas que el denunciante creyó oportunas y oídas ambas partes, el Juez de primera instancia libró la sentencia de 31 de Octubre de 1866, por la cual condenó á la Nación á reconocer á favor del demandante la suma de tres mil quinientos noventa y tres pesos cuarenta y nueve centavos ($ 3,593-49).

Por apelación del señor Procurador del Departamento vino el expediente la primera vez á esta Suprema Corte, donde en estado yá de fallarlo definitivamente, se observó que el proceso era nulo, y, previa sustanciación del artículo, se decretó la reposición de lo actuado desde el auto por el cual se habían admitido unas pruebas en primera instancia,

Subsanado el defecto, decidióse nuevamente el juicio, condenando á la entidad demandada (sentencia de 9 de Septiembre de 1877) al reconocimiento de la suma de tres mil quinientos noventa y tres pesos cuarenta centavos ($ 3,593-40), pero deduciendo de ella la de setecientos pesos ($ 700), por haberse retirado, dice el Juez inferior, á solicitud de parte legítima el documento comprobante.

Volvió á apelar el señor Procurador, y en esta ocasión no encuentra la Corte motivo alguno de nulidad ni en las diligencias de la primera ni en las de la segunda instancia : por eso entra en el examen de las pruebas aducidas y en el pronunciamiento del fallo que da término al asunto.

En comprobación del cargo primero (por $ 700 prestados voluntariamente al Gobierno de los Estados Unidos de Colombia el 20 de Noviembre de 1863), se exhibió un recibo autorizado por el Tesorero de Guerra, recibo que hoy no figura en los autos por la razón que dan las siguientes piezas :

" Señor Juez nacional.

Mauuel María Guerrero, en el juicio que se sigue por suministros, ante usted digo : Que con fecha 31 de Octubre último se dió la sentencia de conformidad con mi demanda, pero después de dada la sentencia concebí esperanza, que la partida de $ 700 que presté para la guerra de Cuaspud, se me pagase sin observarse los procedimientos judiciales ; con tal motivo retiré del expediente el documento comprobante de aquella partida, y pongo este memorial para que cuando se remita el expediente á la Corte por la apelación que ha interpuesto el Procurador, no haya confusión por esta partida de cuyo cobro desisto en este juicio : por tanto, sírvase usted proveer dando por hecho el desistimiento y prevenir la remisión de los autos.

Pasto, 28 de Marzo de 1867.

Manuel María Guerrero."

Presentado personalmente por el interesado, hoy de la fecha á las nueve del día. *Arturo.*

Juzgado de 1.ª instancza nacional—Pasto, 28 de 1867.

Dáse por desistida la demanda en la parte ó cantidad á que se refiere el memorial del anverso,

Notifíquese y agréguese á sus antecedentes.

GARCÍA—*Arturo.*"

Por singular que sea el procedimiento que adoptó el demandante, y por censurable que se considere la conducta del Juez de la primera instancia al haber dado cabida á la informal desistencia que contiene el memorial de 28 de Marzo de 1867, es lo cierto que el auto de esa misma fecha está ejecutoriado y que es necesario aceptarlo como hecho cumplido,

Ya que el desistimiento de una demanda produce el efecto

de reponer las cosas al estado que tenían antes de ser interpuesta (artículo 743 del Código Judicial), tiene la Corte que obrar como si el cargo primero de lo entablado por el señor Manuel María Guerrero no hubiera sido formulado. Si la Corte lo apreciara según las pruebas acopiadas y absolviera ó condenara por él la Nación, se correría el peligro, al par que de imponer una doble obligación á ésta, puesto que no se sabe el resultado de las gestiones anunciadas por el señor Guerrero en el escrito de 28 de Marzo, de desconocer los efectos del desistimiento mencionado.

El cargo segundo de la demanda resulta comprobado:

1.° Del documento que á continuación se trascribe:

" Número 2.°—Estados Unidos de Colombia.

" Ejército de operaciones.

" El Intendente general.

" Hace constar que de la propiedad del señor doctor Manuel Guerrero se tomaron para la movilidad del Ejército de operaciones del Sur, cuatro caballerías, en esta forma: una mula corsaria, dos muletos y una mula, advirtiendo que los muletos estaban por amanzar. Para que el señor doctor Guerrero haga su reclamo, ya por las especies ó por el valor de ellas, si no las recupera, le expido el presente documento en Pasto á 13 de Enero de 1864.—*Fulgencio Olave;*" y

2.° De las declaraciones contextes de Angel Hoyos, Mariano Ibarra y Pedro María de la Rosa. El valor de las cuatro caballerías de que hablan el documento copiado y los testigos, se fijó en la suma de doscientos pesos ($ 200).

Acerca de las veinticinco mulas á que se refiere el cargo tercero de la demanda de 10 de Septiembre de 1865, como también del valor de ellas, declaran los testigos Angel Hoyos y Esteban Puerta; pero, á más de que no están enteramente de acuerdo respecto á la última circunstancia, ellos rindieron su testimonio en información sumaria y el interesado olvidó solicitar que se ratificaran durante el término de pruebas y con citación de la parte contraria. Esto hace que su dicho no pueda ser apreciado, y que se excluya del reconocimiento la suma de mil doscientos cincuenta pesos ($ 1,250).

Para establecer el suministro de que habla el cargo cuarto de la demanda ($ por 80 que exigió el señor doctor Emigdio Palau) declaran Francisco Belalcázar y Presbítero Máximo Benavídez. Manifiesta el primero " que es cierto que el señor doctor Manuel Guerrero libró cien pesos sencillos contra el declarante y á favor del Presbítero Máximo Benavídez, á quien los hizo entregar el declarante con su Administrador Fernando Lorente." Y el segundo " que es cierto que el declarante, por orden del que lo pregunta, recibió del señor Francisco Belalcázar los cien pesos de á ocho décimos de que habla la pregunta, y que por orden del mismo doctor Guerrero y en calidad de empréstito voluntario, consignó al señor Manuel José Valencia, que hacía como colector de dichos fondos, la suma de setenta y cinco ú ochenta y cinco pesos, si mal no recuerda; y que el resto de la cantidad hasta completar los cien pesos, dispuso el señor doctor Emigdio Palau, que hacía como Gobernador del Estado, se emplearon en raciones de unas partidas que estaban situadas en Yarumal, Ipiales y Cumbal."—Los dos testigos Belalcázar y Benavídez deponen sobre hechos distintos y sus dichos, por singulares, no forman plena prueba. Para completarla, debió el demandante hacer venir á los autos el testimonio de los señores Valencia y Palau, mayormente si se tiene en cuenta que por los mencionados cien pesos no se extendió documento alguno.

De los cincuenta pesos que forman el quinto cargo de la demanda del señor Manuel María Guerrero, hablan los testigos Presbítero Máximo Benavidez y General Pedro M. de la Rosa, así: " que es cierto (dice el Presbítero Benavídez), que por conducto del declarante se le entregó al señor Ramón Toledo la suma de cincuenta pesos, cuya cantidad la entregó la señora Matilde Benavídez por mandato del que le pregunta (señor Manuel María Guerrero); que el doctor Toledo le dijo al declarante que los había remitido á la Laguna, con un tal Chicho, expresándole además, que á beneficio de esa cantidad se había podido poner en armas una guerrilla que obraba en aquel punto en sostenimiento del Gobierno"—" que en la época á que se refiere la pregunta que se le hace en el auto de la Corte Suprema Federal (dice el General de la Rosa), le consta que el doctor Manuel María Guerrero contribuyó con cincuenta pesos para organizar unas guerrillas que el deponente con el Dr. Ramón Toledo y otros liberales levantaron en la Laguna." Sobre el particular certifica el señor Dr. Ramón Toledo lo que sigue: "Ramón Toledo Guerrero, Jefe Municipal de Pasto, en cumplimiento de lo ordenado por el señor Juez del Circuito, certifico:.....que en cuanto á la partida de cincuenta pesos, es cierto que los consignó el Presbítero Manuel Benavídez, pero que al hacerlo este señor jamás expresó fuera comisionado del señor Dr. Manuel María Guerrero.

..... " Se encuentra, pues, el cargo perfectamento establecido.

Joaquín G. Quiñones, en declaración de 31 de *Agosto de* 1866, reconoció la firma que estampó en el documento aducido por el demandante para comprobar el cargo sexto; pero como él se da el carácter de Agente de Hacienda de la extinguida Confederación Granadina, y ese carácter no aparece establecido en los autos, ni estos arrojan ninguna otra prueba respecto al hecho principal, no debe reconocerse la suma de cuarenta y ocho pesos.

Acerca del cargo séptimo (por $ 80 valor de cuatro bueyes expropiados por conservadores al servicio de la Confederación), no hay en el expediente ni prueba documentada, ni testimonial, ni de ninguna otra clase.

No pudo obtenerse el reconocimiento por parte del señor Tomás Insuaste, de los documentos señalados con los números 4.° y 5.°, y como acerca de los hechos que ellos relacionan no contiene el expediente más prueba que la declaración de Angel Hoyos, es preciso absolver á la Nación del reconocimiento de los noventa y ocho pesos cuarenta centavos, que componen los cargos octavo y noveno de la demanda.

Juan María Izquierdo y Villota y Cipriano de la Villota, reconocieron las firmas que como Alcalde de Consacá el primero y Proveedor de la Columna del mismo lugar, el segundo, ambos al servicio de la Confederación, estamparon en los recibos que llevan los números 6.° y 7.°; mas como no existe otra prueba, ni consta siquiera el carácter oficial de esos individuos, hay que dar por no probados los cargos décimo y undécimo (por $ 82), valor de cinco cabezas de ganado mayor.

El cargo duodécimo fué comprobado con los testimonios de Ramón Constain y Angel Hoyos (por $ 16, valor de un toro, tomado de la hacienda de Consacá el 17 de Abril de 1862); pero los restantes, expresados todos en partidas separadas, no constan sino en los testimonios singulares de Juan María Izquierdo Villota y Miguel de la Villota y Blas M. Chávez. Por consiguiente, sólo es legal el reconocimiento de aquél.

En fin, respecto del cargo de ochocientos pesos, importe del arrendamiento de una casa en tres años y de los daños causados en ella, por las fuerzas que la tuvieron de cuartel, no se produjo prueba alguna.

En tal virtud, administrando justicia en nombre de los Estados Unidos de Colombia, y por autoridad de la ley, la Corte Suprema federal condena al Tesoro de la Nación á reconocer y pagar, en bonos flotantes del tres por ciento anual, la suma de doscientos sesenta y seis pesos ($ 266), al señor Manuel María Guerrero y lo absuelve de los mayores cargos á que quedó reducida la demanda de 14 de Septiembre de 1865, después de la desistencia que lleva fecha del 28 de Marzo de 1867.

Queda en estos términos reformada la sentencia de primera instancia.

Notifíquese y remítase copia auténtica á la Dirección del Crédito Nacional, déjese otra en el libro respectivo, y archívense las diligencias y publíquese esta decisión en el *Diario Oficial.*

Manuel Z. de la Espriella.—Francisco Muñoz.—Froilán Largacha.—Antonio María Restrepo C.—Hermógenes Wilson.
El Secretario *Joaquín Esguerra O.*

La anterior sentencia fué publicada en la audiencia del veinticinco de Noviembre de mil ochocientos ochenta y tres.

Esguerra O., Secretario.

En veintinueve de id. notifiqué la sentencia anterior al señor Procurador general.

CALDERÓN.—*Esguerra O.*, Secretario.

En ocho de Enero de mil ochocientos ochenta y cuatro notifiqué la sentencia que precede al apoderado del demandante Dr. Jesús M. Arteaga.

JESÚS M. ARTEAGA.—*Esguerra O.*, Secretario.

Año I REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 28

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 16 de Julio de 1887.

REPUBLICA DE COLOMBIA BIBLIOTECA

CONTENIDO.

Pág

PERSONAL DE LA CORTE SUPREMA.

Nota sobre cambios en el mes de Junio de 1887 217

CORRECCIONES.

Relativas al número 26 de esta Gaceta ..... "

SENTENCIAS DEFINITIVAS

NEGOCIOS CRIMINALES

Pronunciada en la causa seguida al ex Prefecto Misael Garcés, por falsedad y estafa ..... "
Id. en la de responsabilidad seguida contra el ex Jefe departamental Federico Muñoz, por abuso de autoridad 220

NEGOCIOS CIVILES

Pronunciada respecto de un juicio ejecutivo seguido en Ocaña con relación á bienes tenidos por Desamortizados 221

AUTOS INTERLOCUTORIOS

Dictado para mejer proveer, en causa de responsabilidad seguida contra Heliodoro Reina ..... "
Incompetencia de la Corte para conocer en un sumario contra José V. Mogollón, como Administrador de las Salinas marítimas 222

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL.

Emitida en el sumario instruído por delito de responsabilidad contra Ezequiel García M 223
Id. en la causa seguida contra el ex-Prefecto Misael Garcés. . "
Id. en el pleito sobre deslinde y amojonamiento de unos terrenos en el Circuíto de Garzón 224

GACETA JUDICIAL.

PERSONAL DE LA CORTE.

CAMBIOS EN EL MES DE JUNIO.

El 11 de Junio de 1887 entró el segundo Suplente, doctor Francisco A. Fernández á reemplazar al primer Suplente doctor Froilán Largacha, quien se separó con licencia por enfermedad.

El 22 de los mismos se retiró con licencia por 90 días renunciables el señor Magistrado Principal doctor Julián R. Cock Bayer, y entró en su lugar el tercer Suplente doctor Manuel J. Angarita.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

CORRECCION,

En el salvamento de voto del señor Magistrado doctor Noguera respecto del auto de 11 de Mayo, publicado en el número 26, correspondiente al 5 del presente mes de Julio, se cometieron los siguientes errores:

Página 203, columna 1.ª, línea 60, dice "ordinario," léase ordenado.

Página 204, columna 1.ª, línea 18, dice "mandó," léase manda.

Página 204, columna 1.ª, línea 74, dice "tales," léase todos.
" 205, " " " 21, " "interino," ínterin.
" " " " " 69, " "herederos," heredades.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

SENTENCIAS DEFINITIVAS

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Junio ocho de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos—Misael Garcés funcionó como Prefecto, en propiedad, del Departamento del Sur-Oeste del extinguido Estado de Antioquia, y en el ejercicio de sus funciones autorizó ó certificó con su firma el "Visto Bueno" en tres nóminas preparadas por Román Restrepo, Secretario de la Prefectura. Por tales actos fué sometido á juicio como reo de falsedad y estafa, y fué condenado en primera instancia por el Tribunal de dicho Estado, en Sala de un sólo Magistrado, según el procedimiento legal. Apeló de la sentencia el defensor de Garcés, y habiéndose substanciado el juicio en segunda instancia, la Sala respectiva del Tribunal Superior del Distrito de Antioquia, cuando estaba á punto de fallar, resolvió que, á virtud de las nuevas disposiciones legales, no tenía yá competencia para conocer del asunto; y en consecuencia, envió el proceso á esta Superioridad para que conociese en dicha segunda instancia.

En ésta, se ha seguido la tramitación legal, y habiéndose oído á las partes (el señor Procurador general y los defensores nombrados por el reo) ha llegado el caso de fallar. Pero como en el auto del Tribunal Superior, que dispuso elevar el proceso á esta Superioridad, se trata la cuestión de competencia de jurisdicción, y de dicho auto pidió revocatoria el defensor en Medellín (la que no obtuvo), aduciendo numerosos argumentos contra lo resuelto; la Corte debe considerar previamente si ella es ó nó competente para conocer de la causa, no obstante haberlo decidido yá en casos enteramente análogos al que ahora se ventila.

El artículo transitorio H de la Constitución, dice: "Mientras el Poder Legislativo no disponga otra cosa, continuará rigiendo en cada Departamento la Legislación del respectivo Estado." Es claro, por lo tanto, que si después de sancionada la Constitución, nada hubiera dispuesto el legislador, en materia de jurisdicción, que modificase lo estatuído por la Legislación de Antioquia, que es "el respectivo Estado," á quien ha reemplazado el Departamento, al presente sólo tendría competencia el Tribunal Superior para fallar en una causa como ésta, de responsabilidad, por los trámites de la vía ordinaria, seguida contra un Prefecto ó Jefe de Departamento. Así lo disponía la Legislación respectiva, y esto es incuestionable.

Pero la ley 61 (25 de Noviembre) de 1886, "provisional sobre organización y atribuciones del Poder Judicial," etc, dispuso, conforme á la autorización dada al Legislador por el citado artículo H, lo siguiente:

"Art. 21. Son atribuciones de la Corte Suprema las siguientes:

"Sección 2.ª Conocer en última instancia;

"7.° De las causas de responsabilidad ó por delitos comunes contra los Secretarios de los Gobernadores, los Jefes Superiores de las Provincias, los Jueces Superiores de Distrito, los Jueces de Circuíto, los Fiscales de los Tribunales, los Fiscales de los Juzgados Superiores y los Fiscales de los Juzgados de Circuíto."

De aquí ha deducido la Corte su competencia para conocer en última instancia de las causas que se hallaban pendientes contra los Prefectos de los Departamentos en que estaban divididos los Estados, en su mayor número, no todos, pues algunos,

como el Cauca y Bolívar estaban divididos en Municipios y Provincias; lo que, para el caso es lo mismo, ó es sólo una cuestión de nombres de secciones principales.

Pero se alega que, ni los antiguos Prefectos de los Departamentos de Antioquia eran Jefes Superiores de unas *Provincias* que no existían en su nomenclatura política; ni, caso de aceptarse la asimilación, puede tener efecto retroactivo la disposición que se ha transcrito, para que la Corte conozca en última instancia de una causa que trae su origen de unos delitos cometidos en el año de mil ochocientos ochenta y tres, y que primitivamente pertenecieron á la exclusiva jurisdicción del Tribunal Superior de Antioquia.

Cuanto al primer punto, es de considerar:

1.° Que, conforme á la Constitución actual, los "Departamentos" han reemplazado á los extinguidos Estados, sin alteración alguna de límites;

2.° Que según el artículo 182 de la Constitución, los Departamentos deben quedar divididos en *Provincias*, siendo ésta, por lo tanto, su primera división.

Por consiguiente, es patente que se han querido reemplazar con *Provincias* las entidades en que antes se dividían los Estados, como el de Antioquia, denominadas *Departamentos*; y que, por lo tanto, los Jefes Superiores de las Provincias reemplazan por completo á los Prefectos que administraban las mismas demarcaciones ó secciones.

Por lo tocante al segundo punto, no solamente es principio de Derecho público la retroactividad de las leyes, cuando éstas son meramente ejecutivas, administrativas ó procesales, por cuanto no afectan derechos adquiridos, sino que la Constitución decide la controversia.

El artículo 26 dice:

"Nadie podrá ser juzgado sino conforme á leyes preexistentes al *acto que se impute*, ante Tribunal *competente*, y observando la plenitud de las formas propias *de cada juicio*.

"En materia criminal la ley permisiva ó favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia á la restrictiva ó desfavorable."

Y el artículo 31:

"Los derechos adquiridos con justo título, con arreglo á las leyes civiles, por personas naturales ó jurídicas, no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores."

Como se ve, la no-retroactividad de las leyes está claramente determinada y limitada; y ellas pueden modificar todo lo relativo á jurisdicción y procedimientos (y aun á penas, en sentido favorable), con tal que respeten las garantías consagradas en los dos artículos que se dejan copiados. Es patente que, por el hecho de haberse pasado á la jurisdicción de la Corte Suprema, en última instancia, un juicio de que antes conocía el Tribunal del Estado de Antioquia (Tribunal que ha dejado de existir, quedando reemplazado por el Tribunal Superior del Distrito ó Departamento del mismo nombre), de ningún modo se vulnera la garantía de ser juzgado por el Tribunal *competente*, á virtud del Código Penal que *castigaba* el delito cometido, y guardándose *todas las formas* propias del respectivo procedimiento. Si algo valieran los argumentos hechos contra la actual competencia de la Corte Suprema, valdrían también para probar que tampoco sería competente el *nuevo* Tribunal Superior del Distrito judicial ó Departamento de Antioquia, por cuanto éste no es el Tribunal Superior del *Estado* del mismo nombre, que existía cuando se ejecutaron los hechos que son materia de esta causa. Y así se llegaría á la falta de administración de justicia y la impunidad de los delitos, por una supuesta falta de competencia de jurisdicción.

La Corte, pues, de acuerdo con sus resoluciones anteriores, es competente para conocer de este proceso, en última instancia, por cuanto se trata de delitos de un funcionario que fué Jefe Superior de una Sección departamental que ahora se denomina Provincia ó es parte de una Provincia.

Hechas estas aclaraciones, la Corte pasa á considerar el proceso sobre el cual debe fallar; reconociendo desde luégo, para evitar toda repetición, la exactitud con que todos los hechos han sido relacionados y apreciados en la sentencia de primera instancia. Ellos consisten, en substancia, en lo siguiente:

1.° Román Restrepo, como Secretario de la Prefectura del Sur-Oeste, en el extinguido Estado de Antioquia, formó y suscribió las nóminas correspondientes á los meses de Marzo, Octubre y Noviembre de mil ochocientos ochenta y tres, y conforme á tales nóminas hizo los pagos respectivos la Administración general de Hacienda, en Medellín;

2.° Misael Garcés, en su calidad de Prefecto, Jefe de la Oficina, puso en aquellas nóminas el *Visto Bueno*, como la atestación ó certificación legal necesaria de la verdad de lo que tales documentos expresaban, y autorizó con su firma esas atestaciones ó certificaciones;

3.° De dichas nóminas resultaba que Garcés había servido, en cada uno de los tres meses mencionados, durante diverso número de días, y que, por lo tanto, había devengado los sueldos correspondientes; y está perfectamente comprobado que Garcés estuvo ausente de Jericó (capital del Departamento) en parte de los meses de Marzo y Octubre mencionados, no habiendo servido la Prefectura, sino durante veinte días en el primero, y *diez* en el segundo, y todo el mes de Noviembre;

4.° Que para subsanar Restrepo, Garcés y el Escribiente de la Prefectura el inconveniente que resultaba de la falta de servicio, sin que por eso se disminuyesen los sueldos, cuando Restrepo, como suplente, reemplazaba á Garcés en el cargo de Prefecto, y el Escribiente reemplazaba al Secretario (Restrepo), yá por ausencia de éste, ó porque subía en la escala; para subsanar esto, se repite, los empleados de la Prefectura ocurrían á un doble arbitrio: primero, suplantar en las nóminas el nombre de un Escribiente imaginario, que se daba como existente en la Oficina (nombre que una vez fué el de Francisco de P. Uribe, otra el de Francisco Uribe, y otra el de Pastor Gómez); y segundo, entregarse amigablemente unos á otros las diferencias de sueldos que les correspondían, de modo que en todo caso Garcés recibiese los ochenta pesos de su sueldo, y Restrepo los cincuenta pesos asignados á su empleo de Secretario.

Estos actos, por lo tocante á Garcés, fueron calificados de falsedad y estafa, según el auto de proceder dictado con fecha diez y siete de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco por el Tribunal Superior de Antioquia, en Sala de un solo Magistrado (por ser en primera instancia); y la causa se ha seguido por los trámites regulares, ocurriendo considerables demoras, pero que en manera alguna son imputables al Tribunal Superior, cuyos procedimientos han sido del todo correctos. No se ha incurrido, durante todo el seguimiento de la causa, en ninguna informalidad que induzca nulidad; y aun cuando se ha alegado que nunca se hicieron reconocer las nóminas mencionadas, como necesario comprobante del cuerpo del delito, esto no implica falta de comprobación de los hechos cardinales, yá porque el Secretario y los Escribientes de la Prefectura del Sur-Oeste han reconocido en sus declaraciones testimoniales las inexactitudes que se notaron en las nóminas incriminadas, yá porque éstas, como documentos públicos calificados, según la legislación de Antioquia, prestaban fe pública por sí solos, y no habían menester reconocimiento de los individuos que las suscribieron. Por otra parte, en ningún momento del proceso han negado el reo ni su defensor la autenticidad de dichas nóminas; antes bien, la han reconocido implícitamente, y sólo han pretendido explicar los hechos de suplantación de nombres y de percepción íntegra de sueldos, procurando hacerlos aparecer como inocentes.

Se hace notar que, durante la segunda instancia, se declaró impedido el señor Magistrado doctor Cock Bayer para contribuír á fallar, por cuanto, como Magistrado del Tribunal de Antioquia, conoció de la causa y pronunció la sentencia de primera instancia. Substanciado este incidente, como las partes no se allanasen á subsanar el impedimento, se hizo debidamente el sorteo de un Conjuez, y con este carácter interviene en el presente fallo el señor doctor Carlos Martín.

Se hace notar asimismo que todos los hechos fundamentales del proceso están completamente probados, como lo demuestra la sentencia de primera instancia, haciendo con precisión, claridad y fidelidad las citas de las fojas comprobantes y el resumen y caracterización de los hechos. Así la Corte, para resolver, ha de limitarse á examinar los puntos decisivos en la materia, y sobre los cuales han versado principalmente las argumentaciones de los defensores, de los representantes del Ministerio público y del Tribunal de primera instancia. La cuestión cardinal es ésta:

¿El Jefe de una oficina que visa ó autentica una nómina, poniendo y firmando el *Visto Bueno*, se hace responsable, por

el mismo hecho, de la falsedad y la estafa que puedan cometerse por medio de ese documento? O en otros términos: La nómina es un hecho complejo, que no se completa ni perfecciona sino con el *Visto Bueno*, y en tal virtud, tanto el Secretario que la prepara y firma como el Jefe de oficina que la legaliza con ese *Visto Bueno* ¿son responsables de la suplantación de nombres, de falsa aseveración de servicios y de estafa? O bien: el autor de estos delitos es solamente el Secretario que prepara y firma el documento ¿y el Jefe que pone y firma el *Visto Bueno* es solamente cómplice? ¿Debe suponerse siempre voluntad y malicia en el que suscribe el *Visto Bueno?*

La Legislación del extinguido Estado de Antioquia, á la cual debe ajustarse la calificación de los hechos incriminados, contiene los siguientes artículos del Código Penal, por los cuales se hicieron los cargos y se declaró con lugar á formación de causa:

"Artículo 336. (Se copia lo conducente),

"Los que *á sabiendas*..... etc.

"Los que alteraren el sentido de cualquier documento público ú *oficial*, arrancando, borrando, suprimiendo ó variando lo escrito, ó *añadiendo* ó intercalando alguna cosa á *sabiendas;*

"Los que en alguno de *tales documentos*" (todos los enumerados en el artículo) "mudaren el nombre ó apellido; los que falsificaren ó fingieren firmas, rúbricas ó signos" etc., ó *supusieren personas* ó *desfiguraren los hechos*" etc., "ó de cualquiera otra manera *mudaren á sabiendas la verdad* de los sobredichos documentos públicos ú *oficiales*, serán condenados á la pena de dos á cuatro años de presidio."

"Artículo 337. Si los que incurrieren en este delito fueren *funcionarios ó empleados públicos*, serán además inhabilitados perpetuamente para obtener cargo ó empleo público. Si dichos *funcionarios* lo cometieren *ejerciendo* sus funciones, ó *por ocasión de tal ejercicio*, el tiempo de la condena á presidio será de tres á seis años, con la inhabilitación referida, y con la declaración de ser indignos de la confianza pública."

"Artículo 462. Los funcionarios ó empleados públicos que en cualquier caso y con cualquier objeto cobraren salarios, derechos, servicios, emolumentos, gratificación ó adehala que la ley no les haya señalado, ó más de lo que les haya señalado, sufrirán una multa de veinticinco á doscientos pesos, y serán suspensos de sus destinos por seis meses á un año, sin perjuicio de devolver los derechos, salarios ó valores indebidamente exigidos."

Debe, además, tenerse presente el siguiente artículo:

"Artículo 162. El que reincidiere en distinto delito, será castigado por la primera reincidencia con la pena señalada por la ley al delito ó culpa, aumentada en una cuarta parte," etc.

Una vez establecidas estas bases de criterio, la Corte entra á considerar si la naturaleza de los hechos comprobados es criminosa, y caso de serlo, en qué grado.

En primer lugar: es incuestionable que una nómina para cobrar sueldos es un documento oficial complejo. Se compone de la parte expositiva de los nombres de empleados, los empleos que sirven, el número de días en que han servido durante el mes respectivo, el sueldo legal que les está asignado, el que, conforme á los días de servicio, ha devengado cada individuo, la fecha, la firma del empleado de Secretaría á quien los reglamentos han encargado la preparación, y el *Visto Bueno* y firma del respectivo Jefe de la oficina. Todas estas circunstancias son inseparables: una nómina sin *Visto Bueno* no es nómina legal; no hace fe ni produce efecto alguno. El *Visto Bueno* es su complemento necesario, y hace parte del documento oficial, porque equivale á decir: "Es verdadero y corriente todo lo que en esta exposición numérica y personal se expresa." Por lo tanto, una nómina es obra calectiva del empleado que la redacta y suscribe, y del que le da fuerza probatoria con su *Visto Bueno*. Si con este documento se comete el delito de falsedad, son responsables de él los dos empleados concurrentes á la formación de aquél, aunque no en igual grado, puesto que el uno fué quien preparó la falsedad, y el otro le ayudó á consumarla con la certificación ó *Visto Bueno* que le dió fuerza demostrativa.

En segundo lugar, debe averiguarse si Garcés, al validar y suscribir las tres nóminas de que se trata en el proceso, procedió "á sabiendas," como lo exigen las disposiciones penales; esto es, si tenía certeza de que certificaba una falsedad. Cabe apenas la suposición de que, respecto de los meses de Marzo y Octubre, no tuviese tal certeza Garcés, por cuanto en éllos estuvo ausente durante algún tiempo, bien que el número de días en que aparecen sirviendo los supuestos escribientes (Francisco P. Uribe y Francisco Uribe) no coincide con el número de días y las fechas en que ocurrieron las ausencias; y que el hecho de figurar un decreto de Garcés, no auténtico, sobre nombramiento de Uribe (que nunca fué posesionado ni podía serlo), indica que, al visar las nóminas, el Prefecto había podido cerciorarse de la verdad, y sin embargo, certificó lo que era falso.

Pero respecto del mes de Noviembre es de todo punto inadmisible la ignorancia. La Oficina de la Prefectura se componía únicamente de tres empleados, á saber: el Prefecto, el Secretario y el Escribiente; durante todo el mes desempeñó Garcés sus funciones de Prefecto; y fuese que Restrepo (el Secretario) se hubiese separado de hecho durante los diez días que la nómina expresa, fuese que lo hiciera con licencia de su Jefe, éste no podía ignorar la falta de su Secretario. Por lo mismo, no podía ignorar que el Escribiente había reemplazado en aquellos días al Secretario, y que nadie entró á funcionar en lugar del Escribiente. Por otra parte, es inadmisible que un Jefe de oficina pueda ignorar si concurren ó nó á ella los dos *únicos* empleados que componen su personal: es forzoso que los vea todos los días y sepa si existen ó nó en la Oficina, ó si á ésta concurre un extraño ó nuevo empleado, que no ha podido ser nombrado ni posesionado sino por el Jefe mismo. Por último, la ley no admite la ignorancia, en los funcionarios públicos, de los deberes y atribuciones que les incumben; y si un Jefe de oficina tiene el deber indeclinable de invigilarla, de saber quiénes trabajan en ella, de nombrar los que falten y de darles posesión; es evidente que ese Jefe procede "á sabiendas" cuando afirma y certifica que determinadas personas han servido en la Oficina y devengado sueldos. Por lo tanto, la Corte no puede menos de reconocer que, cuando Restrepo preparó las tres nóminas en que se suponían nombres de Escribientes que no habían existido en el despacho ni menos habían prestado el servicio, particularmente en el mes de Noviembre, Garcés procedió á sabiendas de la falsedad, dando fuerza y validez á dichas nóminas, con el *Visto Bueno* que les puso y firmó.

Pero, establecido esto, falta examinar este otro punto: ¿Garcés fué autor principal de la falsedad? Es patente que cuando las nóminas estuvieron redactadas, yá contenían la falsedad, y ésta era la obra elemental de quien las había redactado. Pero las falsedades no podían surtir efecto, si las nóminas carecían de un requisitó esencial para ser presentables y válidas, como bases de las respectivas órdenes de pago. Por consiguiente, quien ejecutará á sabiendas el acto complementario de aquellos documentos oficiales, era cooperador de las falsedades; era cómplice de los delitos que ellas implicaban. Garcés no fué autor principal de las falsedades, porque no fué, ni tenía por qué ser, el redactor ó preparador de las nóminas que contenían aquellas falsedades; pero sí fué complice, porque cooperó, con sus atestaciones de *Visto Bueno*, á dar eficacia ó efectividad á los documentos que constituían el cuerpo del delito de falsedad. (Artículo 121 del citado Código.)

En segundo lugar, la Corte no halla comprobado que se haya cometido el delito de estafa, al propio tiempo que el de falsedad. Está demostrado en los autos, que los empleados de la Prefectura obraban de acuerdo para mantenerse en el goce de sus respectivos sueldos, cuando alguno de ellos se ausentaba, con ó sin licencia; que entre los restantes prestaban todo el servicio de la Oficina, y que, si suponían nombres de escribientes que no se hallaban en la Prefectura, era con el fin de evitar dificultades para la comprobación oficial de unos servicios realmente prestados por los empleados subsistentes. Por otra parte, en el presente caso no es aplicable el artículo 462 del Código Penal respectivo, que trata de la estafa con circunstancias muy distintas

En tercer lugar, no está demostrado que Garcés debiera ser calificado como "reincidente por primera vez en delito de distinto género," según se declaró en el auto de seguimiento de causa y en la sentencia de primera instancia. En efecto, el sumario de esta causa fué iniciado en Noviembre de mil ochocientos ochenta y tres, y el auto de proceder fué dictado en diez y siete de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco. Pero

si al propio tiempo se había seguido otra causa contra Misael Garcés, por abuso de autoridad y falta al cumplimiento de sus deberes, la sentencia de primera instancia en esta causa no fué pronunciada sino el veinticuatro de Mayo de mil ochocientos ochenta y cuatro, y la de segunda (también condenatoria, que imponía la pena de privación del empleo de Prefecto), lo fué el diez de Junio de mil ochocientos ochenta y cinco. Por lo mismo, es claro que, cuando se cometieron los delitos materia de la presente causa (en Marzo, Octubre y Noviembre de mil ochocientos ochenta y tres), y se inició el sumario, en el mismo año, no existía sentencia definitiva que hubiese condenado á Garcés por otros delitos. No había, por lo tanto, razón para declararlo reincidente por distinto delito," no definido antes de la iniciación de la causa.

En cuarto lugar, el Código Penal de Antioquia varias veces citado, establece:

1.° Que cuando deba aplicarse alguna parte solamente de la pena no corporal consistente en la inhabilitación perpetua para obtener empleo ó cargo público, ésta equivale (artículo 148) á diez años de la misma; y por lo tanto, al cómplice de un delito que la merezca corresponden las dos terceras partes de diez años;

2.° Que la pena de declaración de ser indigno de la confianza pública (artículo 149) se ha de imponer íntegramente á los que no sean autores principales, siempre que estén señaladas al delito principal, que es el caso del artículo 337.

En quinto lugar, conforme á los autos, hay justo motivo para considerar que existen á favor de Garcés circunstancias atenuantes.

En consecuencia de lo expuesto, la Corte Suprema Nacional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, teniendo en cuenta lo alegado por el señor Procurador general y por los defensores, falla en los términos siguientes:

Condénase á Misael Garcés como cómplice del delito de falsedad, calificado en tercer grado, y por lo tanto, punible con las dos terceras partes de la pena asignada al delito, que es el definido en los artículos 336 y 337 del Código Penal de Antioquia, y debiendo, por lo tanto, al aplicar el artículo 125 del mismo, que castiga á los cómplices, calcularse las dos terceras partes con relación al mínimum de la pena que debiera aplicarse al autor principal.

En tal virtud, se condena á Garcés á sufrir las siguientes:

Primera: dos años de presidio, que son las dos terceras partes del mínimum de tres años asignado por el citado artículo 337.

Segunda: inhabilitación para obtener cargo ó empleo público por el término de seis años y ocho meses, que son las dos terceras partes de los diez años correspondientes á un autor principal; y declaración de ser indigno de la confianza pública.

La pena corporal será sufrida en el respectivo establecimiento de castigo del Departamento de Antioquia, deduciéndose de ella el tiempo de prisión ó detención que haya sufrido el reo, durante el seguimiento del sumario y la causa, hasta el día en que se comience á ejecutar esta sentencia.

Se absuelve á Garcés del cargo de estafa.

No se hace condenación en costas, por haber diversidad entre esta sentencia y la de primera instancia.

Queda modificada en estos términos la sentencia de primera instancia.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial*, y devuélvase el expediente al Tribunal Superior de Antioquia.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Carlos Martín (como Conjuez)—*Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

En la audiencia del día ocho de Junio de mil ochocientos ochenta y siete, se publicó esta sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

Notifiqué al señor Procurador general la sentencia que precede, hoy trece de Junio de mil ochocientos ochenta y siete.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

En quince de Junio de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor doctor José Ignacio Escobar, defensor del procesado, la sentencia que precede.

ESCOBAR.—*Guerra A.*, Secretario.

En diez y ocho de Junio de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué la sentencia anterior al señor doctor Januario Salgar, defensor del procesado.

SALGAR.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, quince de Junio de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—A virtud de denuncia de Rafael Arenas, Juez Superior interino del Circuíto de Zapatoca, en el extinguido Estado de Santander (fojas 1.ª y 2.ª) se hizo la investigación judicial del caso, por orden del Tribunal Supremo, para averiguar la responsabilidad en que hubiera incurrido Federico Muñoz, por el hecho de haber nombrado, en su calidad de Jefe departamental de Guanentá, á Sacramento Tristancho Juez Superior interino del mencionado Circuíto, por decreto número 86, dictado en San-Gil el veintiocho de Septiembre de mil ochocientos ochenta y cuatro. Por auto de fecha veintiuno de Noviembre del mismo año, (fojas 28 á 30) el Tribunal declaró haber lugar á formación de causa contra Muñoz, por los trámites extraordinarios, considerando que se había infringido el artículo 154 del Código Penal del Estado; y seguido el juicio, el mismo Tribunal pronunció sentencia condenatoria (fojas 44 á 46), con fecha diez de Agosto de mil ochocientos ochenta y seis. De esta sentencia apeló el procesado, y con tal motivo ha venido el proceso á esta Superioridad, que, sin disputa, es competente para conocer en segunda instancia.

Sin entrar á examinar el fondo del negocio, esto es, á determinar si realmente Muñoz cometió el delito por el cual ha sido juzgado, la Corte advierte que en la actualidad no es lícito adelantar este proceso. En efecto, el artículo 34 del Código Penal de Santander dispone lo siguiente:

"La acción criminal ó sea el derecho de perseguir al delincuente y de imponerle pena, se prescribe por el transcurso de diez años, cuando se trata de delitos graves, por el transcurso de cuatro años en los delitos contra el orden público; y por el curso de dos años en los demás casos.

"Estos términos se contarán desde el día en que se cometió el delito."

Ahora bien: el delito por el cual se ha juzgado á Muñoz, no es en manera alguna de los *graves* enumerados y calificados en el capítulo II, título II del citado Código Penal, ni tampoco de los *delitos contra el orden público* que especifica el capítulo III del mismo título. Por lo tanto, el que es materia de este proceso está comprendido, para la prescripción, en el término legal de dos años. Caso de que Muñoz hubiese delinquido por el hecho de dictar su mencionado decreto del veintiocho de Septiembre de mil ochocientos ochenta y cuatro, es evidente que la pena que hubiera merecido quedó prescrita desde el veintiocho de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Por lo tanto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, aplicando el artículo 1,652 del Código Judicial de Santander, relativo al caso de prescripción, declara: que está prescrita la pena señalada al hecho por el cual se ha seguido esta causa, y por lo mismo debe cesar todo procedimiento.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvanse los autos al Tribunal Superior remitente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y seis de Junio de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Junio diez y ocho de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Administrador subalterno de Hacienda Nacional de Ocaña, en virtud de resolución del Agente general de Bienes desamortizados, transmitida por el Administrador principal de Hacienda, libró, en uso de la jurisdicción coactiva, y en treinta y uno de Mayo de 1886, mandamiento ejecutivo contra David, José Agustín y Mariana Vila, cobrando de éstos, como herederos y sucesores de Agustín Vila, la cantidad de trescientos pesos de á ocho décimos por principal de un censo que el último había reconocido en un terreno denominado "San Lorenzo," situado en jurisdicción del Distrito de la Convención; y cobrando además los intereses de esta suma, á razón del cinco por ciento anual, desde el nueve de Septiembre de 1861, en cuya fecha el Gobierno se había apropiado estos bienes; y también los intereses de demora, á razón del doce por ciento anual en el mismo tiempo. Según ésto, y la liquidación acompañada al efecto, la ejecución alcanzaba á la suma de $ 1,014.

El Funcionario ejecutor había comenzado desde Mayo de 1875, aun sin haber librado la ejecución, por hacer embargar, valorar y depositar el terreno de "San-Lorenzo," y sobre éste vino al fin á verificarse la traba, adelantándose el juicio hasta el punto de hacerse la citación para sentencia de pregón y remate, no sin incurrir en varias informalidades y nulidades, que, entre otros efectos, enervaron las excepciones de cosa juzgada y de prescripción opuestas por Mariana Vila.

En este estado ocurrió Cayetano Carpio, en doce de Diciembre de 1877, entablando tercería excluyente, con título de dominio sobre la finca embargada, apoyándose para ello en la escritura número 754, de quince de Octubre de 1874, por la que, ante el Notario público del Circuíto de Ocaña, recibió en venta de José Agustín, Mariana y David Vila el terreno de "San-Lorenzo," materia de la ejecución.

Admitida la tercería y abierto á prueba el juicio, Carpio reprodujo, con conocimiento de la parte ejecutora, la escritura en que fundó su acción, sin que este instrumento hubiera sido redargüido en modo alguno. Probó, además, que el indicado terreno había sido adjudicado á sus vendedores, por herencia, en la sucesión de Agustín Vila y de Dolores Conde, desde veintinueve de Julio de 1874; que el terreno de "San Lorenzo" es el mismo que había sido embargado; y últimamente acreditó, con copia de la sentencia expedida por la Corte Suprema federal, de veintiocho de Enero de 1874, en la que este Supremo Tribunal confirmó la sentencia de primera instancia, declarando que varias fincas denunciadas por Rafael Niz, y entre éstas el terreno de "San-Lorenzo," que éste no pertenecía á los bienes de manos muertas, por no haber constancia de que el principal que afectaba la finca hubiera sido inscrito en el registro respectivo antes de la ley 66 de 13 de Mayo de 1873, y, porque las escrituras de imposición del censo no habían aparecido en modo alguno.

Contra estas pruebas no se predujo ninguna substancial ni digna de considerarse, por parte del representante de la Nación; y con tal motivo el juicio terminó por la sentencia de primera instancia, pronunciada por el Juez Superior del Circuíto de Ocaña, de 22 de Noviembre de 1886, en la que se declara que el terreno de "San-Lorenzo," por los linderos expresados en libelo de demanda y, en el que se entabló la tercería excluyente, pertenece en propiedad á Cayetano Carpio, y que debe ser excluído de la ejecución intentada por el Administrador Nacional de Hacienda de Bienes desamortizados de la ciudad de Ocaña, contra José Agustín, Mariana y David Vila.

Contra este fallo, el Colector de Hacienda de la Provincia, en su calidad de Agente del Ministerio público, no obstante no haber podido contradecir los documentos presentados en el juicio en favor de Carpio, entabló apelación para ante esta Superioridad; y venidos los autos y surtida la instancia sin que en ella se hubiera solicitado la apertura á prueba, el señor Procurador general ha pedido la confirmación de la sentencia de primera instancia por hallar incontrovertibles los fundamentos en que ella se apoya; y siendo yá el caso de fallar en definitiva, este Supremo Tribunal considera lo siguiente:

Son incontestables los documentos en que el tercerista funda su acción de dominio y la consiguiente exclusión de la finca de San-Lorenzo, porque desde Enero de 1874 fué declarado por sentencia ejecutoriada, que ese terreno no pertenecía á los Bienes desamortizados; porque en quince de Octubre del mismo año, y á virtud de aquella sentencia, el terreno le fué dado en venta por sus legítimos dueños, quienes lo habían adquirido por título hereditario desde veintinueve de Julio del precitado año de 1874; y últimamente, porque el representante del Ministerio público que ha apelado, no produjo prueba alguna en contra de estos títulos.

Por lo tanto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma en todas sus partes la sentencia apelada; y no se hace condenación en costas, por venir el recurso de parte del Ministerio público.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente al juzgado de su procedencia.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del mismo día se publicó la sentencia anterior.

Ramón Guerra A., Secretario.

En veinte de Junio de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general la sentencia que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Junio ocho de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Las presentes diligencias fueron iniciadas en Nunchía por el Juez del Circuíto respectivo, con el objeto de averiguar la responsabilidad en que haya podido incurrir Heliodoro Reina, por haber ejercido las funciones de Juez del Territorio de Casanare, sin estar investido de título legítimo, á causa de no haber sido nombrado por la Corte Suprema Nacional, que era la que tenía atribución para ello, sino por la autoridad militar que ocupaba aquel Territorio en el mes de Abril de mil ochocientos ochenta y cinco.

El Juez del Circuíto de Casanare se consideró incompetente para conocer en el asunto, seguramente por tratarse de la responsabilidad de un Juez de categoría igual, y pasó las diligencias sumarias al Tribunal Superior del Distrito de Tundama. Este, por auto de treinta de Marzo del corriente año, — undándose en que el nombramiento hecho en Reina por la autoridad militar era legítimo, conforme á la ley nacional, porque aquello tuvo lugar en tiempo de guerra, y por el Jefe que ocupaba el Territorio de Casanare,—declaró sin lugar á formación de causa, sobreseyendo en el procedimiento y consultando su determinación con esta Superioridad.

Substanciada la consulta y oído el dictamen del señor Procurador general, él encuentra aceptables los razonamientos del Tribunal de Tundama y solicita la confirmación del auto consultado.

Se halla, pues, el negocio en estado de ser resuelto; pero la Corte encuentra la necesidad de procurarse más claros antecedentes para ello.

Consta, en efecto, en estas diligencias que, por decreto número 16, dado en el Cuartel general de Nunchía, á 21 de Abril de 1885, el que se titulaba Jefe civil y militar del Territorio de Casanare nombró de Juez á Heliodoro Reina, estableciendo que por decreto anterior había sido suspendido Melchor Isaza del indicado destino, y que era preciso proveer la vacante. No se sabe, ni en el decreto militar se dice, quién había suspendido al Juez legítimo, ni por qué motivo; y esta circunstancia aumenta la confusión en el presente negocio.

Tampoco consta en modo alguno que el Territorio de Casanare hubiera sido ocupado militarmente,—desalojando á un

enemigo del régimen legal; ni se conocen las facultades de que estaba investido el que se titulaba Jefe civil y militar; ni si esas facultades le venían del Presidente de la República, como era lo natural, ó si las tomó por su cuenta el supradicho Jefe.

Y siendo esto necesario para poder apreciar las condiciones exculpativas que militen en favor del sumariado, ó, al contrario, los motivos que constituyan la culpabilidad; la Corte, para mejor proveer, determina:

Pídase á Su Señoría el señor Ministro de Guerra un informe sobre estos puntos: 1.° Si Salustiano Chaparro fué nombrado Jefe civil y militar del Territorio de Casanare por el Presidente de la República, en el año de mil ochocientos ochenta y cinco. 2.° De qué clase de facultades fué investido ese Jefe civil y militar, si acaso fué nombrado y destinado al Territorio mencionado; es decir, si fué autorizado para hacer las veces de todos los empleados nacionales en Casanare, durante la guerra civil que afectaba á la República; y 3.° Si en ese tiempo y en aquel Territorio, fué desconocido el régimen constitucional, habiendo sido necesario que el Jefe Chaparro ocupara militarmente el Territorio disputado por algún enemigo armado.

Pídase igualmente informe á Su Señoría el Ministro de Gobierno, sobre si en su despacho hay existencia ó constancia de que en el mes de Abril de 1885 el Jefe civil y militar del Territorio de Casanare suspendiera á Melchor Isaza en las funciones de Juez nacional de aquel Territorio.

Obtenidos estos antecedentes, se proveerá sobre lo principal.

Martínez—Samper—Cock Bayer—Largacha—Morales—Noguera—Sanclemente—Guerra A., Secretario.

En once de Junio de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bigotá, Junio deiziséis de mil ochocientos ochenta y siete.

De estas diligencias resulta:

1.° Que Ernesto Vieco ante el Juez 2.° de la Provincia de Barranquilla, denunció al Administrador general de las Salinas marítimas de los extinguidos Estados de Bolívar y el Magdalena, Jesé Vicente Mogollón, por ciertos abusos ó faltas de éste en el ejercicio de sus funciones;

2.° Que dicho Juez, por auto del seis de Agosto de mil ochocientos ochenta y seis, se declaró incompentente para conocer del asunto, por cuanto el denunciado era Jefe de una oficina principal de Hacienda nacional; y dispuso remitir el expediente á esta Superioridad;

3.° Que recibido dicho expediente en la Corte, el Magistrado substanciador dictó auto, el once de Enero del presente año, por el cual mandó practicar varias diligencias para esclarecer los hechos, las cuales han sido ejecutadas y devueltas.

En este estado, y antes de dictar ninguna nueva resolución, ocurre la necesidad de decidir previamente la cuestión de competencia, según que la Corte tenga ó nó jurisdicción legal en el asunto; pues sin esta jurisdicción, en vano se adelantaría la actuación. Y para esto la Corte considera:

El Código Judicial tenía establecido en el numeral 9.° de su artículo 18, sección primera, que la Corte era competente para conocer, en una sola instancia "de las causas de responsabilidad contra los Generales y Comandantes en Jefe de las fuerzas nacionales, y contra los Jefes superiores de las Oficinas principales de Hacienda de la Unión." Pero en el parágrafo del mismo numeral se determinaba, "para el cumplimiento de esta atribucion," quiénes debían ser reputados "Jefes superiores de Oficinas de Hacienda"; y en la enumeración precisa y especial que se hacía, solamente quedaba comprendido, entre los *diversos Administradores* de la renta de Salinas, el de las de Zipaquirá.

La ley 61 de 1886 (25 de Noviembre) sobre organización judicial determinó, en las tres secciones del artículo 21, las precisas atribuciones de la Corte Suprema, y ni en la segunda, que trata del conocimiento en segunda instancia, ni en la tercera, relativa á los asuntos de que se conoce en Sala de acuerdo, hay disposición alguna que pueda comprender al Administrador público de quien aquí se trata. Cuanto á la sección 1.ª, que comprende los negocios de que conoce la Corte en una sola instancia, ella contiene el numeral ó inciso 4.° (que es substancial reproducción del numeral 9.° arriba transcrito), el cual dice:

"De las causas que por delitos de responsabilidad, por infracción de la Constitución ó leyes, ó por mal desempeño de sus funciones, se promuevan contra..... (aquí la enumeración de funcionarios) y los Jefes superiores de las Oficinas de Hacienda de la Nación.

"Para el cumplimiento de esta atribución se reputarán Jefes superiores de Oficinas de Hacienda los Administradores principales de Hacienda nacional de los Departamentos, el Tesorero general de la República, el Administrador de las Salinas de Zipaquirá, los Administradores de Aduanas, los de Casas de Moneda, el Director general de Correos," etc. etc.

En toda la enumeración no se encuentra designado el Administrador de las Salinas marítimas de Bolívar y el Magdalena, empleado que el Gobierno creó por decreto número 647, de tres de Octubre de mil ochcientos ochenta y cinco; y es de notar que el nombramiento de Mogollón fué hecho desde el quince de Septiembre del mismo año. Así, ó el Legislador no quiso incluír á dicho empleado en la categoría de los Jefes de Oficinas de Hacienda sujetos á la jurisdicción de la Corte Suprema; ó, por olvido, dejó de comprenderlo entre los responsables ante esta Superioridad. Seguramente hay grande analogía entre dicho Administrador y los demás enumerados en la ley; su categoría es una misma, y la razón de la disposición legal sería también la misma, llegado el caso de estatuír sobre el asunto. Pero en materia de jurisdición, son tan estrictos los deberes del Juez, que no le es permitido proceder por analogías, sino á virtud de atribuciones expresa y claramente conferidas; y en el presente caso, falta la atribución en la ley 61 citada, y su artículo 99 confiere á los Tribunales Superiores las que el Código Judicial tenía conferidas á la Corte, siempre que no le estén asignadas á ésta en la misma ley ó en la Constituoión. Por lo tanto, aun en el caso de que el juzgamiento del negocio de que se trata hubiese correspondido á la Corte conforme al Código Judicial (lo que no es cierto, según se ha demostrado), en la actualidad la atribución sería privativa del Tribunal Superior de Bolívar, en una ú otra instancia.

Pudiera en el presente caso ocurrirse al medio arbitrado por el artículo 116 de la ley 57 (15 de Abril último) "sobre adopción de Códigos y unificación de la Legislación nacional," y resolverse la duda por la Corte Suprema, á propuesta de un Magistrado; pero el artículo 1.° de la misma ley ha fijado el término de noventa días para que rija la generalidad de ella, después de su publicación, y este término, que comenzó á contarse desde el veintitrés de Abril, no está cumplido. Por lo tanto, la Corte debe limitarse á emitir opinión, nó decisión, en cuanto al procedimiento que deba adoptarse en el caso de que se trata.

En efecto, la Corte considera que, no estando expresa y especialmente atribuído á esta Superioridad el conocimiento en primera ni en segunda instancia, del negocio criminal ó de responsabilidad que se examina, importa determinar si es de la competencia, en primera instancia, del Juez de Circuíto, y del respectivo Tribunal Superior, en caso de apelación ó consulta. Es evidente que, en todo caso en que un juicio de responsabilidad no esté expresamente atribuído al Senado ni á la Corte Suprema, él pertenece á la jurisdicción común y general de los Jueces de Circuíto, salvo que la ley lo atribuya especialmente á los Tribunales Superiores. Por lo tanto, debe estarse á lo dispuesto en el artículo 111 de la citada ley 61 de 1886, en cuanto á la primera instancia, y en cuanto á la segunda, á lo prevenido por el artículo 99.

Por estas consideraciones, la Corte, resuelve:

1.° Abstenerse de continuar conociendo de este sumario, por falta de competencia para ello;

2.° Disponer que se devuelva el expediente al Juez 2.° de Provincia de Barranquilla, para que proceda en el asunto conforme á sus atribuciones legales.

Notifíquese, cópiese y publíquese en la *Gaceta Judicial*.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock

Bayer—Antonio Morales—Francisco A. Fernández—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diezisiete de Junio de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto anterior.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL

Señores Magistrados.

Con fecha 1.° de Marzo de 1886, el Sr. Jefe municipal de Santa-Marta dirigió al Jefe civil y militar de dicho Departamento una nota oficial en que le comunicaba haber dictado auto de prisión contra el Sr. Manuel Mancilla, quien estaba ejerciendo las funciones de intérprete público de la Aduana de Santa-Marta. En la misma nota el empleado aludido solicita la suspensión de Mancilla. La separación del referido empleado fué decretada como resultado de dicha nota; y el Tribunal Superior del Distrito del Magdalena, al conocer de la causa que se siguió á Mancilla, ordenó se sacase copia de lo conducente para averiguar la responsabilidad en que hubiera podido incurrir el Sr. Ezequiel García M., funcionario que decretó la suspensión, en su calidad de Prefecto del Departamento de Santa-Marta, encargado del Poder Ejecutivo del extinguido Estado en lo local y urgente.

Venido el expediente á ese Supremo Tribunal, y ampliado convenientemente en los términos de la vista de este Ministerio, de fecha 22 de Octubre último, es llegado el caso de que entréis á resolver si el sumario presta ó nó mérito para dictar auto de proceder contra el sindicado.

Es indisputable que la providencia que ha dado origen á la responsabilidad que se averigua, fué dictada durante la época del interregno constitucional, en que los Jefes civiles y militares de los Departamentos obraban como Agentes inmediatos del Poder Ejecutivo nacional, con más amplias facultades que las que ejercían los Gobernadores de los extinguidos Estados.

Consta do autos que el actual Gobernador del Departamento del Magdalena, por decreto de 31 de Agosto de 1885, dictado en su calidad de Jefe civil y militar, declaró vacante el empleo de Intérprete público, ocupado entonces por el señor Vicente Noguera C., y nombró en su reemplazo al mismo Mancilla; y este decreto de suspensión y nombramiento de un empleado público nacional, fué aprobado más tarde por el Excelentísimo señor Presidente de la República.

El Decreto de García M. es análogo al citado en el párrafo anterior. El funcionario que lo dictó creyó que podía dictarlo en el ejercicio de sus funciones, y así lo hizo, sin que se descubra en este procedimiento la menor voluntad ó malicia de violar la ley ó de extralimitarse en el desempeño de su cargo.

No se ha cometido, por consiguiente, delito alguno, y así os pide el infrascrito que lo declaréis, sobreseyendo en este sumario.

Bogotá, 14 de Abril de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados:

En la causa de responsabilidad seguida por los trámites ordinarios contra el señor Misael Garcés por los delitos de falsedad y estafa, cometidos en ejercicio de las funciones de Prefecto del Departamento del Sur-Oeste del extinguido Estado de Antioquia, la Sala de primera instancia del Tribunal Superior de dicho Estado, por sentencia de 4 de Marzo de 1886, condenó al procesado en los siguientes término:

"1.° Condénase al señor Misael Garcés á sufrir la pena de tres años y nueve meses de presidio en el respectivo Establecimiento del Estado, á quedar inhabilitado perpetuamente para obtener cargo ó empleo público, y se le declara indigno de la confianza pública.

"2.° A pagar en el Tesoro del Estado la suma de quince pesos sesenta centavos como multa, y á ser suspenso por el término de tres meses veintidós días del destino de Prefecto del Departamento del Sur-Oeste; pero como ya no ejerce ese destino, se le condena, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 del Código citado (el Penal), á pagar la multa de diez pesos en el Tesoro del Estado.

"3.° A ser privado de todo destino, cargo ó empleo público que tenga el reo al tiempo de ser condenado, y de toda pensión pagada por el Estado, y á la pérdida de los derechos políticos y la suspensión, mientras dure la pena corporal, de los civiles expresados en el artículo 40 del Código mencionado.

"4.° A pagar las costas del proceso, y al resarcimiento de todos los daños y á la indemnización de todos los perjuicios que hayan resultado del delito, previa la acción civil.

Para condenar al procesado en los términos que quedan transcritos, se calificó en tercer grado la delincuencia en ambos delitos, se le consideró como auxiliador respecto del de estafa y se le agravó la pena como á reincidente.

De la expresada sentencia apeló el defensor del procesado, y habiéndosele concedido el recurso para ante la Sala de segunda instancia, ésta aprehendió el conocimiento y terminó por declararse incompetente para decidir en última instancia, á consecuencia de haber pasado la jurisdicción á la Corte Suprema de Justicia por ministerio de la ley 61 de 1886.

Resuelto como ha sido yá en casos análogos que los juicios de responsabilidad pendientes contra los antiguos Prefectos departamentales son de la competencia de la Corte en última instancia, no hago observación alguna á las que han sido hechas sobre el particular por el Tribunal que conoció del asunto en primera instancia.

La acusación contra el procesado se originó por el hecho de haber visado como Prefecto las nóminas del personal de la Prefectura, correspondientes á los meses de Marzo, Octubre y Noviembre de 1883, con la circunstancia de figurar en ellas un oficial escribiente que no existió realmente.

En el mes de Marzo dicho escribiente se hizo figurar por quince días de servicio con el nombre de *Francisco de P. Uribe;* en el mes de Octubre, por diez y nueve y con el nombre de *Francisco Uribe* y en el de Noviembre, también por diez y nueve y con el nombre de Pastor Gómez.

Lo expuesto se ha comprobado plenamente con copia legalizada de las nóminas en que se cometió la falsedad; con el testimonio de los dos únicos individuos que en el Distrito de Jericó llevan el nombre de Francisco A. Uribe T., el uno, y Pastor Gómez R, el otro, quienes manifiestan que ellos no han desempeñado en ningún tiempo empleo alguno en la Prefectura del Departamento de Sur-Oeste (fojas 24 vuelta y 26).

También obra en el proceso el comprobante del pago de las referidas nóminas, así como del carácter de empleado público del procesado (fojas 7 y 49 vuelta).

En cuanto á los nombramientos de Uribe y Gómez para escribientes, solamente se ha hallado un decreto de nombramiento hecho en *Francisco Uribe*, en el mes de Marzo, y otro en *Pastor Gómez*, de fecha 21 de Noviembre y sin autorizar por el Secretario de la Prefectura; pero no se han encontrado las correspondientes diligencias de posesión.

El procesado no ha dado explicación alguna satisfactoria del motivo por el cual figuraron los citados Uribe y Gómez en las nóminas como Escribientes de la Prefectura, siendo así que realmente no desempeñaron tales funciones; por manera que hay que convenir en que lo que ocurría en la expresada oficina en materia de sueldos era, como muy bien se indica en el auto de proceder, lo siguiente: "Cuando el Prefecto se separaba, el Secretario lo sustituía como suplente y el Escribiente sustituía al Secretario; los sustitutos cedían á los principales el sueldo que devengaban durante la suplencia, y sólo se reservaban el que correspondía al destino que ejercían en propiedad, y para llenar el puesto de Escribiente que quedaba vacante, y cobrar el sueldo, suponían un nombre en la nómina. Lo propio se hacía cuando el que faltaba era el Secretario."

Sentado esto, pasemos á examinar la naturaleza del acto criminoso originado por tales procedimientos, y cuál debe ser la responsabilidad en que por ello haya incurrido el ex-Prefecto Garcés.

Las nóminas fueron formadas por el Secretario de la Prefectura—á quien se juzga por cuerda separada—y el Prefecto suscribió en ellas el *Visto Bueno* ó sea la fórmula requerida para que tales documentos pudieran producir sus efectos. La respon-

sabilidad que corresponde á este acto no puede hacerse efectiva, sino en tanto que se pruebe el *á sabiendas* que la ley exige en estos casos como elemento indispensable del cuerpo del delito; y, á este respecto, encuentro fundadas las consideraciones hechas en el fallo apelado para contraer la condenación del procesado solamente al caso de la nómina del mes de Noviembre, por no caber duda alguna de que en tal documento sí tuvo conocimiento Garcés de la suposición del Escribiente Pastor Gómez, pues, en ese mes, el expresado Garcés no se separó ni un sólo día de la Prefectura y, por lo tanto, hay que admitir que durante él sí tuvo conocimiento cabal del personal que sirvió en la Oficina, y que debió, por lo mismo, notar cualquier falta de su Secretario en el particular, mayormente si se considera lo reducido del mencionado personal.

Debe tenerse en cuenta que, aun cuando de conformidad con el Código Judicial nacional (artículo 1,938) el *á sabiendas* es de presunción legal en los casos de responsabilidad de funcionarios públicos, tal disposición no se encuentra en el Código Judicial del extinguido Estado de Antioquia que es el aplicable al delito que nos ocupa.

En el fallo de primera instancia se consideró á Garcés, en lo que se refiere al delito de falsedad en documentos públicos, como infractor de los artículos 336 y 337 del Código Penal de Antioquia, por estimarse que dicha falsedad consistió en suposición de personas y alteración á sabiendas de la verdad en la nómina del mes de Noviembre, respecto de la cual se tuvo por comprobado, según se dijo antes, el cuerpo del delito. Esta manera de apreciar la culpabilidad del reo, que sería del todo aceptable y exacta si se tratase de la responsabilidad del Secretario que formó las nóminas, se presta, según la opinión del defensor del procesado, á algunas observaciones que, á mi juicio, no están destituídas de fundamento y que paso á exponeros brevemente.

El empleado que visa una nómina, no hace otra cosa que certificar sobre la verdad del contenido de ella; de suerte que si la certificación es realmente de quien la da, pero el documento contiene uua falsa exposición, se habrá incurrido en el caso de falsedad definido en el artículo 350 del Código Penal antes citado, que bien puede tener aplicación en el hecho que nos ocupa, si se considera que el *Visto Bueno* puesto á la nómina formada por el Secretario de la Prefectura del Sur-Oeste del extinguido Estado de Antioquia, fué suscrito realmente por el procesado Garcés, á quien no se debe coesiderar, en rigor, como autor de la falsa exposición de que adolecía la nómina, sino como responsable por haber certificado ésta, no obstante la falsedad de su contenido, y acreedor, por esa infracción, á la pena señalada en el artículo 386 del mismo Código Penal, debiéndose reformar en este sentido el fallo de primera instancia.

Por lo demás, creo que este fallo está arreglado á la ley y al mérito del proceso, en cuanto por él se declaró responsable al procesado como auxiliador en el delito de estafa; de modo que si ese Supremo Tribunal no acepta el concepto anteriormente emitido sobre el otro delito, y cree que las disposiciones infringidas con él son las señaladas en el referido fallo, éste debe confirmarse, sin más variación que la relativa á disminuír la pena con que se dispuso agravar el castigo del procesado por haberlo considerado reincidente, pues es incuestionable que, habiéndose hecho consistir la reincidencia en actos juzgados con posterioridad al que es materia de la causa, no se puede considerar como tal al procesado, por oponerse á ello el artículo 14 de la ley 85 de 1879, adicional y reformatoria del Código Penal del extinguido Estado de Antioquia, en cuya parte final se dispone que "La reincidencia en diferente delito es la comisión de un hecho criminoso ó punible *después* de haber sido condenado el responsable por sentencia ejecutoriada por otro hecho criminoso ó punible de distinta denominación."

Bogotá, 29 de Abril de 1887.

CARMELO ARANGO M,

Señores Magistrados.

El Juez 1.° del Circúito de Garzón en el Departamento del Tolima, os remite en apelación el auto que profirió en 5 de Enero último, y por el cual declaró no probada la excepción de inepta demanda promovida por Manuel S. Tobar, en el juicio propuesto por Pastor Silva, para que se procediese al deslinde y amojonamiento del predio denominado *San-Ignacio*.

El expediente ha venido á conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, por apelación y porque el excepcionante, al impugnar de inepta la demanda, declara no ser colindante de Pastor Silva, por haber entre los predios de éste y aquél un lote de tierras baldías pertenecientes á la Nación. Sin esta circunstancia, ese Supremo Tribunal no tendría siquiera por qué entrar en el examen del expediente en que se ventila un asunto privado entre particulares, decidido en primera instancia por un Juez de Circuíto.

La demanda fué iniciada por Fructuoso Cabrera, apoderado de Pastor Silva, en los siguientes términos:

"Desde tiempos remotos existe en la jurisdicción de este Circuíto una laguna ó pantano, limitada por sus orillas por varios predios de propiedad particular, los cuales cierran en contorno el circuíto de la laguna. Hoy, merced, en parte, á las materias extrañas que han ido acumulándose en su fondo y á la industria de varios de los dueños de las tierras contiguas, esa laguna ha sido desecada por completo, y las tierras del antiguo cauce han quedado aprovechadas para la agricultura. Todos los dueños colindantes con el antiguo lago, se disputan hoy su lecho abandonado, y es para evitar esas disputas por lo que debe buscarse el remedio en el deslinde y amojonamiento de cada predio. Con este objeto demando á nombre de mi constituyente á Manuel Santos Tobar, Rafael Manrique, Vicente Barreiro, etc. colindantes, para que concurran al deslinde del predio denominado *San-Ignacio*, perteneciente á mi poderdante."

Ahora bien: si el motivo de haberse demandado el deslinde, es fijar la porción de terreno desecado que debe adjudicarse á cada uno de los colindantes con el antiguo lago, es claro que, como cuestión previa, debe examinarse si, de acuerdo con la ley civil, el lecho desecado del pantano accede á los fundos contiguos, en proporción á la extensión de las tierras que tocaban sus orillas; ó si por el contrario, el sitio antes ocupado por las aguas ha pasado á tener el carácter de terreno baldío y perteneciente, por consiguiente, á la Nación.

La Legislación civil del Tolima, lo mismo que la Legislación nacional, reconoce la accesión como uno de los modos de adquirir el dominio, y entre las accesiones del suelo se cuentan los terrenos de aluvión, que consisten en el aumento que recibe la ribera de un río ó lago por el *lento é imperceptible* retiro de las aguas; por consiguiente, si las aguas de un lago se retiran súbitamente, por cualquiera circunstancia, el aumento súbito de tierra no debe considerarse como aluvión, y no accede á las heredades riberanas; y según el artículo 737 del Código Civil del Tolima, tampoco adquieren los dueños de heredades confinantes con lagunas el terreno descubierto por la diminución natural de las aguas, como no pierden el que éstas inundan en las crecidas extraordinarias.

Los trabajos de desagüe practicados por los particulares dueños de las tierras limitadas por el lago, no dan á éstos ningún derecho á la propiedad del terreno que ocupaban las aguas, y por carecer esa tierra de dueño, el artículo 675 del Código Civil nacional la considera como bien de la República, y como tal queda sometido á las leyes que rigen á dichos bienes.

Siendo esto así, la demanda intentada para el deslinde y amojonamiento, que tiene por objeto terminar las disputas suscitadas sobre la propiedad de los terrenos desecados del antigno *Pantano* ó *Laguna* en el Circuíto de Garzón, es inepta por haberse dado á ella una substanciación diversa de la que le corresponde (artículo 379 del Código Judicial del Tolima). Los juicios sobre tierras baldías están sometidos á trámites especiales determinados en las leyes sobre la materia, y usurparían jurisdicción los Tribunales y Juzgados ordinarios, al dictar una sentencia de adjudicación de ellas, en oposición á lo dispuesto en el Código Fiscal y sus leyes reformatorias.

En fuerza de lo expuesto el infrascrito os pide la revocatoria del auto apelado.

Bogotá, 4 de Mayo de 1887.

CARMELO ARANGO M.

IMPRENTA DE RIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 29

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 23 de Julio de 1887.

CONTENIDO.

PÁG

AUTOS INTERLOCUTORIOS

NEGOCIOS CIVILES

Dictado, para mejor proveer, en un pleito sobre reivindicación... 225
Sobre incompetencia de la Corte para conocer de un juicio sobre divorcio ... 226
Sobre Id. de la misma para fallar en un pleito sobre deslinde y amojonamiento de tierras ... "

NEGOCIOS CRIMINALES

Sobre revocación de un auto de sobreseimiento proferido por el Tribunal Superior de Popayán... 227
Sobre confirmación de un auto de Id. del Tribunal Superior de Cundinamarca ... "
Sobre revocación de un auto de id. del Tribunal Superior de Tundama... 228
Sobre confirmación de un auto del Tribunal de Cundinamarca, de sobreseimiento por prescripción ... "
Sobre Id. de un Id. del Tribunal Superior de Antioquia, en sumario instruído por responsabilidad ... "
Sobre Id. de otro Id. del Tribunal Superior de Cundinamarca, de sobreseimiento por prescripción ... 229
Relativo á un sumario instruído por responsabilidad, y el auto respectivo del Tribunal de Cundinamarca, de sobreseimiento por prescripción ... "

DOCUMENTOS VARIOS.

Sentencia pronunciada por la "Corte Suprema federal" en 1876, y documentos relativos á ella ... "

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL

Sobre acumulacion de los autos en dos asuntos que forman uno solo. 231
Relativa á la ejecución seguida contra Matías Ahumada ... "
Id. á un juicio ejecutivo que se ha seguido en Ocaña por el Administrador de Hacienda Nacional ... 232

GACETA JUDICIAL.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, ocho de Junio de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—De estos autos resulta:

1.° Que Bartolomé Martínez Bossio, entabló ante el Juez del Circuíto de Sincelejo, por medio de apoderado, demanda de revindicación para obtener la entrega de una canoa llamada "América" que había sido sujeta á decomiso por causa de un contrabando de sal, según se infiere;

2.° Que, seguido el juicio de reivindicación, el Juez pronunció sentencia cuyo tenor no es el caso de examinar al presente; y

3.° Que de dicha sentencia apeló el actor para ante esta Superioridad, y se han surtido los trámites de la segunda instancia.

Tanto en la vista fiscal del señor Procurador general como en el alegato del apoderado del apelante, se hacen observaciones sobre la competencia de la Corte para conocer de este asunto, por cuanto yá ella declaró que al Tribunal Superior del *Departamento de Bolívar correspondía el conocimiento*, en segunda instancia, del juicio criminal, por contrabando, seguido con relación al mismo asunto.

Además, no hay constancia alguna en autos sobre el fallo que se haya dictado en dicho juicio criminal, ni sobre las pruebas sumarias, preparatorias del juicio de reivindicación que se hayan presentado en aquél, conforme al artículo 1,852 del Código Judicial

Se hace, pues, necesario, por una parte, establecer primero la competencia de la Corte, y caso de ser ésta competente, resolver, por otra, lo que convenga para mejor proveer. Cuanto al primer punto, tan clara es la incompetencia de la Corte en lo criminal, como lo es la competencia en lo civil. Tanto el artículo 151 de la Constitución (numeral 3.°) como el 21 (inciso ó numeral 1.°) sección 2.ª de la ley 61 de 1886 (25 de Noviembre), dan expresamente á la Corte la atribución, el primero, de conocer en general, y el segundo, de "conocer en última instancia" de todos los negocios contenciosos que se refieran á bienes, rentas ó cualesquiera otros derechos de la Hacienda de la República y los cuales se hayan decidido en primera instancia por los juzgados de Circuíto."

Martínez Bossio pide que se le entregue como suya una canoa que dice le ha sido confiscada como vehículo que sirvió para cometer un delito de contrabando; y el Ministerio público se opusó. Hay pues, contienda judicial, negocio contencioso entre la Hacienda de la República y un particular, sobre si la mencionada canoa pertenecía ó nó á Martínez Bossio y ha de serle devuelta, ó si definitivamente ha de pertenecer á la República, y un Juez de Circuíto ha fallado en primera instancia sobre el asunto. Es, por lo tanto, evidente la competencia de la Corte para conocer del negocio y fallar en última instancia, y así lo declara ella previamente.

Pero como para dictar la sentencia definitiva falta el indispensable esclarecimiento de ciertos hechos que en esta clase especial de juicios son fundamentales, la Corte resuelve, para mejor proveer, lo siguiente:

Pídase informe certificado al Tribunal Superior del Distrito judicial de Bolívar, sobre los puntos siguientes:

1.° Si se dictó auto ó sentencia, por quién y en qué fecha, por el cual se dispusiese la confiscación de la canoa "Americana," por motivo de contrabando, conforme al artículo 1,850 del Código Judicial;

2.° Si yá se ha pronunciado sentencia definitiva en última instancia, y en qué sentido, sobre dicho contrabando; y

3.° Si en dicho juicio por contrabando se presentó el interesado reclamando la mencionada canoa y suministrando la prueba sumaria de los hechos de que trata el artículo 1,852 del citado Código, y á virtud de tal comprobación sumaria se le admitió á seguir el juicio de reivindicación.

Caso de que el proceso no se hallare en el Tribunal Superior, éste se servirá transmitir el presente auto al respectivo Juez de Circuíto para que remita el informe certificado, con toda la claridad y precisión necesarias.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez de Junio de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez de Junio de mil ochocientos ochenta y siete.

Ignórase el motivo por qué haya venido á la Secretaría de la Corte el juicio de divorcio seguido entre Juana Fetecua y su esposo Joaquín Nieto, juicio que estaba en curso ante el antiguo Tribunal de Cundinamarca; y, no tocando, por otra parte, á la Corte el conocimiento de dicho negocio en ningún caso, devuélvasele al referido Tribunal, como lo ha solicitado el señor Procurador general.

Martínez—Samper—Cock Bayer—Largacha—Morales—Noguera—Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En once de Junio de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, catorce de Junio de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—En cuatro de Febrero de mil ochocientos ochenta y seis, Fructuoso Cabrera, con poder de Pastor Silva, ocurrió al Juez 1.° del Circuíto de Garzón, en el Departamento del Tolima, fojas 69 á 71, cuaderno principal, demandando el deslinde y amojonamiento del predio denominado de "San-Ignacio," *en la parte que en la Laguna del Pantano linda con los predios adyacentes de propiedad de Rafael Manrique y con los riveranos del Sartanejo, Manuel Santos Tobar, Vicente Barreiro, Lino Macías, Antonio Calderón. Eliseo Silva, Pedro Méndez, Angel Silva, Gregorio Manrique, Cecilio Vargas, Salvador Monje, Miguel Silva, Manuela Tobar, Buenaventura Chaves, Domitila Calderón é Higinio Herrera.*

Por el lado del predio denominado "La Laguna," dice también el libelo de demanda, *linda el predio de "San-Ignacio" con ese globo, proindiviso á Manuel Santos Tobar, el mismo de quien se ha hablado, Mercedes y Griselda Silva, Susana y Margarita Martínez, y el mismo poderdante Pastor Silva.*

El actor acompañó á su demanda diferentes títulos é hijuelas como comprobantes del derecho que asegura tener en el terreno ó predio cuyo deslinde y amojonamiento solicita, y dado el correspondiente traslado por el término legal á cada uno de los interesados, aceptaron todos la pretensión de aquél, acompañando la mayor parte sus títulos respectivos al contestar el traslado, con excepción de Salvador Monje, foja 85, Cecilio Vargas, foja 86, Eliseo Silva C., foja 89, cuaderno principal, los cuales manifestaron no ser colindantes, con excepción también de Pedro Méndez Ibarra, foja 99, quien renunció el traslado, exponiendo que no se oponía al deslinde, ni tenía excepciones dilatorias que presentar, y por último, de Manuel Santos Tobar, el cual, por escrito de fojas 107 á 109, que parece ser del 21 de Junio del citado año, por ser esá la fecha de la nota habilitando el papel en que se extendió, se opuso á la demanda, objetándola de inepta, al tenor del caso 2.°, artículo 379, Código Judicial del Tolima, por cuanto se había dirigido contra diversas personas de las obligadas á intervenir en el juicio.

Los límites del inmueble de "San-Ignacio," que en parte pertenece al demandante, dijo, no alcanzan á tocar á los del "Sartenejo," y de consiguiente, los comuneros de éste no han tenido por qué haber sido demandados. Su pretlio, añadió, no entra hasta la parte central de "La Laguna," cuya errónea persuación es lo que ha dado origen á la demanda. El excepcionante expuso también que el terreno que antes ocupaban las aguas de la misma laguna, era baldío y de propiedad, por tanto, de la Nación, pero que él tenía derecho á la parte del lado del Norte del terreno descubierto, por cuanto había hecho los gastos necesarios para obtener su desecación. "El demandante, agregó, se propuso desecar, y al efecto desecó el resto en su mayor parte; pero esta obra, que fué un atentado contra mis legítimos derechos, fue impedida por la policía en todas sus instancias." La copia del aludido juicio de policía, el cual se registra de fojas 110 á 115, se acompañó al correspondiente memorial.

Dado al incidente el curso determinado por la ley y considerada la cuestión, con el asentimiento tácito de las partes como de puro derecho, el Juez 1.° del Circuíto de Garzón pronunció sentencia, en diez de Julio del año próximo pasado, en la cual declaró no probada la referida excepción, y obligado, por lo mismo, el excepcionante á contestar directamente la demanda; pues interpuesto por éste el recurso de apelación que le fué concedido en ambos efectos para ante el Tribunal Superior del extinguido Estado del Tolima, éste, después de haber resuelto que era inadmisible un artículo de especial y previo pronunciamiento, introducido por el mismo excepcionante, sobre nulidad de la actuación anterior á la fecha de la reclamación, entró á fallar el recurso pendiente, como lo hizo por providencia de veinticinco de Octubre del citado año, revocando la sentencia apelada, y declarando que el "excepcionante y el actor estaban obligados á demostrar, el primero que real y efectivamente existen entre el predio de "San-Ignacio" y el de "Sartenejo," terrenos baldíos ó no apropiados, con títulos legítimos, expresando su situación, su calidad, su extensión, sus condiciones climatéricas y sus productos minerales ó vegetales; si es cultivador de dichos terrenos y si le han sido legalmete adjudicados ó transmitidos á cualquier otro título; si lo que sostiene es la existencia de un lago de uso público, deben stablecerse sus dimensiones y la clase de embarcaciones porque puede ser navegado, y el segundo debe comprobar que el excepcionante es poseedor del terreno opuesto al de su propiedad que pretende deslindar."

De acuerdo con este fallo, el Juez de la primera instancia, por auto de veintidós de Noviembre del mismo año, procedió á abrir á pruebas la excepción, con término de nueve días comunes, dentro del cual ambas partes produjeron las que creyeron conducentes á la demostración de sus derechos; siendo de advertir que á Miguel Silva Cuéllar, uno de los demandados como colindante, quien aceptó el deslinde según queda dicho, y se presentó con varios títulos de propiedad, pidiendo se le tuviese como parte en este estado probatorio del asunto, se le negó tal solicitud por auto de diez y siete de Diciembre de aquel año, contra cuya determinación no se interpuso recurso alguno, y por cuyo motivo la Corte no tiene por qué ocuparse en este particular.

Concluído el término de pruebas, el negocio fué sentenciado nuevamente, con fecha cinco de Enero último, en el mismo sentido que lo había sido antes; ésto es, con la declaratoria de que no se había comprobado la excepción propuesta por Manuel S. Tobar sobre inepta demanda, é imponiendo á éste la consecuencial obligación de contestarla directamente.

De esta decisión, de la cual apeló el perjudicado para ante el Tribunal del Tolima, y que luégo, por revocatoria del auto respectivo á petición de parte, se concedió para ante la Corte Suprema de la Nación, procede este Tribunal á ocuparse, por virtud del expresado recurso que se ha considerado de su competencia, en cuanto se afirma por uno de los interesados en la litis que ésta se refiere á bienes del dominio de la República.

Substanciado debidamente tal recurso, la Corte procede á examinar previamente si el negocio está en realidad sometido á su jurisdicción, y para ello considera:

1.° Que el excepcionante no ha comprobado hecho alguno de los especificados en la citada providencia de veinticinco de Octubre del año próximo pasado, dictada por el Tribunal del Tolima; hechos que, seguramente, se mandaron demostrar para que quedara claramente determinada la competencia de los Tribunales que debieron intervenir en este negocio.

2.° Que los lagos ó lagunas de todas clases, sólo por serlo y sin que se tenga en cuenta su extensión, situación, profundidad y demás condiciones, no pertenecen *ipso jure* á la Nación, como parece entenderlo el excepcionante, pues en algunos casos las aguas que los constituyen pueden ser y han sido frecuentemente objetos de apropiación particular para abrevaderos, riegos y demás necesidades de la industria agrícola ó pecuaria, y aun de la vida doméstica, de manera que el simple hecho de la existencia de un lago ó laguna no constituye por sí solo la prueba de la propiedad de la República, como la constituiría la sola existencia de una mina de oro, plata etc., en cualquier punto de su Territorio.

3.° Que el terreno correspondiente á la concavidad ó cuenca desde donde desaparecen las aguas de una de aquellas lagunas que por su naturaleza pueden ser apropiadas, pertenece por regla general á los dueños de los predios contiguos, sea que la laguna se haya formado en tierras de propiedad particular ó en

las que no han sido apropiadas, ó sea que la desaparición de las aguas haya tenido lugar por la acción lenta de la evaporación ó por el esfuerzo de la industria del hombre. El hecho, pues, del retiro ó desaparición de las aguas de un lago que no conste haya sido de uso público, no constituye en sí mismo plena prueba ni presunción legal de que el terreno que formaba el lecho ó cauce de esas aguas tenga el carácter de baldío y sea, por consiguiente, de propiedad de la Nación.

4.° Que sin que la Corte entre á estimar el mérito de la multitud de pruebas presentadas por el demandante, tiene precisión de observar, en la imprescindible necesidad de estimar su competencia, que en muchas de esas pruebas no se cita ó señala la laguna en cuestión, como simple límite de las porciones del terreno de "San-Ignacio" vendidas en diferentes épocas al demandante mismo, sino como haciendo parte, en mayor ó menor extensión, del derrecho ó tierra vendida, de manera que en el estado actual del negocio, existe por lo menos la presunción de que la República no ha tenido ni tiene derecho en la expresada laguna.

5.° Que el juicio de policía á que alude el excepcionante, lejos de comprobar el derecho de la Nación en la tierra que ocupaban las aguas de la referida laguna, parece demostrar más bien el derecho que en ella creía tener el mismo excepcionante y dueños de los contiguos predios, puesto que aquél no sólo ejercitó en ella actos de verdadero dominio desecándola por el lado del Norte, sino que invitó al demandante y á otros á practicar la misma operación en otros puntos, *como dueños de labranzas de cacaotal contiguas á la Laguna, y por creerlos partícipes en el Lago, porque ellos repetidas veces le habían dicho que tenían parte en el.* (Respuesta á la 2.ª de las posiciones, foja 174, cuaderno de pruebas).

6.° Que en diez de Junio de mil ochocientos setenta (foja 38 cuaderno principal) el excepcionante vendió al actor *un derecho de tierra que está en común proindiviso con el de los hijos del finado Nicolás Silva Muñoz y con las del vendedor y de la señora Florentina Mejía, sitos en "La Laguna," jurisdicción, etc. El globo de tierra en que está incluído el derecho vendido está demarcado* (entre otros muchos linderos que para el caso no es necesario determinar) *por los siguientes: siguiendo éstas* (las cercas del potrero de Guanacas) *hasta la puerta de golpe del camino real; de aquí á buscar las del guangón de la casa de La Laguna. y siguiendo estas cercas hasta una zanja inmediata á dicha casa, y esta arriba hasta ponerse en frente de una lomita que domina dicha casa; del pie de dicha lomita á dar á otra que hace en la orilla de La Laguna,* DE AQUI HASTA LA MITAD DE LA LAGUNA; LAGUNA ARRIBA, POR LA MITAD, *hasta encontrar el lindero que divide los terrenos del señor Pastor Silva; de aquí, tomando los linderos de la labranza y terrenos del mismo Silva, hasta salir á la sabana, etc.*

7.° Que lo hasta aquí expuesto, con prescindencia de otras muchas consideraciones que podrían aducirse, el no hacerse mención en ninguno de los antiguos y modernos títulos de propiedad de los respectivos predios al designar sus límites, de que estos colinden con terrenos baldíos ó propios de la Nación ó de alguna otra entidad y la aquiescencia de todos los demás condueños del Sartenejo á la pretensión del actor, destruirían cualquier fundamento deducido de esta misma actuación en que la Corte quisiera apoyarse para creerse con facultad de intervenir en la presente contienda, en que no consta de ningún modo que se trate de bienes en que pueda estar interesada la República.

Por lo tanto, la Corte Suprema de la Nación, oído el concepto del señor Procurador general, declara que no es competente para conocer del recurso de apelación por el cual han venido los autos á esta Superioridad, y dispone que se devuelvan al Juez de la primera instancia para que les dé el curso que fuere conforme á derecho.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez de Junio de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

En diez y seis de los mismos, notifiqué el auto que precede al señor D. José M. Rocha B.

JOSÉ M. ROCHA B.—*Guerra A.*, Secretario.

En diez y siete de Junio del mismo año, notifiqué al señor D. Federico Patiño el auto anterior.

FEDERICO PATIÑO.—*Guerra A.*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Junio dos de mil ochocientos ochenta y siete.

No apareciendo comprobado en estas diligencias el carácter oficial con que Felipe Campo y Teófilo Valenzuela hubieran intervenido en el juicio ejecutivo que se sigió entre Vicente Durán y los herederos de Juan Ducruet, en cuyo juicio ocurrieron algunas demoras que se imputaron á los sindicados, como Jueces 1°. y 2°. respectivamente del Circuíto de Buga; y como sin esa comprobacion no puede aseverarse que los sindicados hayan delinquido como tales Jueces; la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el concepto del señor Procurador general, revoca el auto que en diez y siete de Febrero de mil ochocientos ochenta y seis pronunció el Tribunal Superior de Justicia de Popayán, sobreseyendo en el procedimiento, y se le ordena que, disponiendo la ampliación del sumario, haga agregar copia de las diligencias de posesión de los empleados de que se trata, decidiendo nuevamente con arreglo al mérito de la actuación.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Froilán Largacha—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En seis de Junio de mil ochocientas ochenta y siete notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, catorce de Junio de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Instruído este sumario en virtud de denuncio dado por Ignacio Franco, para averiguar la responsabilidad en que haya podido incurrir el Juez del Circuíto de Ubaté, doctor Antonio Romero Torres, por no haber concurrido á su despacho en los días 26 y 27 y parte del 28 del mes de Abril de 1886, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, llamado por la ley á conocer del negocio, ha dictado auto de sobreseimiento que ha consultado con esta Superioridad.

Substanciada la consulta en los términos legales, el señor Procurador general ha pedido que el auto se confirme, por estar ajustado al mérito del sumario. Según éste, el Juez Romero Torres, aprovechando los días de vacante de la Semana Santa, vino á esta ciudad con animo de regresar oportunamente á Ubaté á ejercer sus funciones, cosa que no pudo verificar por haber enfermado, de lo cual ofrecen plena prueba las diligencias practicadas. Resulta, además, que el 27 del mismo mes llegó á Ubaté, enfermo todavía, y sin embargo, fué á su oficina y dió curso á los negocios pendientes, y consta también de lo actuado, que el referido Juez es acusioso en el cumplimiento de sus deberes y que los negocios á su cargo estaban al corriente. Es claro, por lo tanto, que su separación por dos días del juzgado fué involuntaria y que de su parte no hubo intención de violar la ley; y siendo esto así, la Corte, de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador general, confirma el auto consultado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

Hágase saber, déjese copia, publíque en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el sumario al Tribunal de su procedencia.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A. Secretario.

En quince de Junio de mil ochocientos ochenta y siete, quedó el señor Procurador general notificado del anterior auto.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Junio quince de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Se iniciaron las presentes diligencias, por denuncia verbal de Darío Valaguera, dada ante el Juez Departamental de Sugamuxi, con fecha 21 de Julio de 1886, á efecto de que se averiguase la responsabllidad en que hubiera incurrido el Jefe del mismo Departamento, Juan Nepomuceno Rincón Motta, por haber mandado reducir á prisión á Rafael Díaz, sirviente del denunciante, y ordenado que se allanase con tal objeto la casa de habitación de éste, sin observación previa de formalidad alguna; cuyas diligencias han venido á esta Superioridad en consulta del auto de sobreseimiento, que el Tribunal Superior de Tundama pronunció en Sala de primera instancia el día veinte de Abril del presente año.

Dada á la consulta en esta segunda instancia la tramitación correspondiente, la Corte procede á resolverla, considerando:

1.° Que, como lo observa con mucha exactitud el señor Procurador general, no consta en autos el carácter público de que hubiera estado investido el denunciado, cuando dispuso ú ordenó la ejecución de los hechos que se le imputan, y debe agregarse al sumario una copio legalizada del nombramiento y de la diligencia de posesión del empleo de Prefecto del citado Departamento, sin lo cual no podría, llegado el caso, conocerse la verdadera naturaleza del delito;

2.° Que debe recibirse al sindicado declaración indagatoria, en los términos prevenidos por los artículos 1,447 y siguientes del Código Judicial de la República, debiendo procurarse averiguar el motivo del arresto y evacuar las citas que resulten;

3.° Que es indispensable recibir nueva declaración, con las formalidades legales, al Alcaide de las cárceles, Sixto Sanabria, á fin de que explique la contradicción que se nota entre su declaración de foja 2.ª vuelta y el contenido de la nota ó diligencia que se ve al frente de la foja 6.ª, pues en la primera, de fecha 29 de Septiembre del citado año de 1886, aseguró que en dicha fecha estaba en su poder la boleta de arresto librada contra Rafael Díaz, mientras que en la segunda aseveró que tal boleta la había dado al Prefecto, en la fecha en que se puso en libertad al mencionado Díaz, excarcelación que, como él mismo dijo, tuvo lugar *á los cuatro días*, ó sea el 21 de Julio, puesto que la prisión ó arresto se verificó el 17; copia de dicha boleta, caso de que se descubra su paradero, se agregará al expediente.

No considera la Corte indispensable la práctica de ninguna otra diligencia, y en tal virtud, de conformidad en parte con el concepto del señor Procurador general, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el auto de sobreseimiento consultado, y dispone que ampliada la averiguación en los términos que vienen expresados, se resuelva por el Tribunal de primera instancia lo que fuere conveniente, según el mérito de la actuación.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y seis de Junio de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Junio dieziséis de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Guillermo Chaves fué llamado á juicio de responsabilidad y por los trámites extraordinarios, á virtud de auto dictado por la Corte Suprema federal, de dos de Noviembre de mil ochocientos ochenta y dos, y por violación del artículo 414 del Código Penal de la Nación.

Derivóse el cargo de que el expresado Chaves, siendo Juez nacional del Territorio de San-Martín, se separó del destino que ejercía, sin previa licencia y sin motivo alguno que justificara esa separación.

Continuóse el juicio con notables demoras, ora porque el Juez procesado había variado de domicilio, interrumpiéndose así la diligencia del informe que debía rendir, ora por otras varias circunstancias inherentes á cambio del personal de los Magistrados, etc.; y es lo cierto que la actuación siguió un curso demasiado lento.

A virtud de las recientes disposiciones legislativas, el negocio pasó á conocimiento del Tribunal Superior de Cundinamarca; y éste, por auto de nueve de Marzo del corriente año, ordenó que cesara todo procedimiento contra Chaves, por estar prescrita la acción criminal en relación con el cargo que le había deducido la Corte federal. Tal resolución ha venido en consulta á esta Superioridad; y habiéndose dado al negocio la tramitación legal, el señor Procurador es de concepto que debe confirmarse el auto consultado; siendo llegada yá la oportunidad de resolver la consulta.

Pero antes es preciso hacer notar que en el expediente hay constancia de haberse iniciado otro sumario contra el sindicado Chaves, por violación del artículo 142 del Código Judicial de la Nación, también en su condición de Juez nacional del Territorio de San-Martín; y desde luégo que este nuevo delito interrumpió la prescripción del primero, conforme á lo dispuesto en el artículo 72 del Código Penal de la Nación, pero esta interrupción no abarcó un término mayor de dos meses, porque la culpa primera tuvo lugar en Enero de mil ochocientos ochenta y uno, y la segunda en Marzo del mismo año, comenzándose desde aquí á contar de nuevo la prescripción por ambos cargos.

Basta la relación que precede, para que, teniendo en cuenta las disposiciones del Código Penal, en sus artículos 395 y 414, que señalan las penas con que debiera castigarse al Juez Chaves, ninguna de la cuales es corporal,—y compararlas con el artículo 71 del mismo Código Penal,—para encontrar como cierto y demostrado que la prescripción se ha verificado en el presente caso, y que la cesación de procedimiento decretada por el Tribunal de Cundinamarca es estrictamente legal.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto consultado del cual se hizo mención al principio.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase al Tribunal de su procedencia.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

El auto anterior fué notificado al señor Procurador general, hoy diez y siete de Junio de mil ochocientos ochenta y siete.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Junio diez y seis de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en sala de un solo Magistrado, procediendo con un celo por la buena administración de justicia que honra á esa Corporación, procedió á levantar sumario para averiguar si el Suplente primero del Fiscal 1.° del Circuito de Medellín, Francisco Javier Vidal, comprometió su responsabilidad al poner en una vista que dió en el sumario que se seguía contra Rodolfo Mejía, por envenenamiento, la fecha "9 de Octubre de 1886," en vez de la de *cinco* de ese mes que fué en la que, sin duda, realmente despachó el Fiscal ese asunto.

El mismo Tribunal puso punto á la investigación sobreseyendo, por cuato aparece de las explicaciones que da Vidal en una larga exposición, que él acostumbra escribir la fecha del día en que debe devolver los negocios al juzgado, y que por ésto anticipó la de que se trata.

Ha venido en consulta ante la Corte el auto de sobreseimiento, que tiene fecha dos de Abril último, y habiéndose observado la tramitación correspondiente, pasa la Corte á resolver:

Es evidente que la fecha escrita por el Fiscal en su despacho, fué anticipada en cuatro días á la fecha en que se devolvió el sumario, según así aparece de las diligencias posteriores y de la confesión que hace el sindicado en su indagatoria de foja 7.ª; pero no resulta que hubiera en ese hecho voluntad de causar mal, ni á las personas, ni á la administración de justicia, sino solamente una práctica, si se quiere, propicia á producir confusión y errores lamentables muchas veces; práctica que no tenía otro móvil, según aparece del sumario, que el de que los asuntos que el Fiscal despachaba tuvieran la fecha del día en que á este empleado se le cumplía el término de seis días que la ley le concede para dar opinión en la sumaria.

Por lo tanto la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con la opinión del señor Procurador de la Nación, aprueba el auto consultado.

Notifíquese, copiese, publíquese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián Cock Bayer—Francisco A. Fernandez—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

Al señor Procurador general notifiqué el auto anterior el diez y siete de Junio de mil ochocientos ochenta y siete.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Junio diez y siete de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Consulta el Tribunal Superior de Cundinamarca en la sala de lo criminal, el auto que profirió, con fecha siete de Mayo último, por el que declara prescrita la pena y suspende el procedimiento en el sumario instruído para perseguir al Fiscal del Circuíto de Facatativá, Arturo S. Andrade, por morosidad en la instrucción criminal contra Teodoro Gutiérrez, por daños en bienes ajenos.

Siendo tiempo de resolver, la Corte considera:

El diez y seis de Septiembre de mil ochocientos ochenta y cuatro recibió el Fiscal Andrade el sumario contra Gutiérrez, y lo devolvió al juzgado el veintinueve del siguiente Octubre yá despachado; y como consta que Andrade tomó posesión del cargo de Agente del Ministerio público en Agosto del expresado año, es claro que incurrió en la responsabilidad que determinan los artículos 11 y 278 del Código penal de Cundinamarca; pero como la pena es la de suspensión del empleo por el término de dos meses, y subsidiariamente la de multa, y el delito hace más de dos años que se cometió, y no ha intervenido interrupción, la pena está prescrita, conforme á la disposición del artículo 49 del citado Código.

Por lo tanto, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, y de acuerdo con la opinión del señor Procurador, se confirma el auto consultado.

Notifíquese, cópiese, publíquese, y devuélvase el expediente al Tribunal de Cundinamarca.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y siete de Junio de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Junio diez y ocho de mil ochocientos ochenta y siete.

Al ocuparse esta Suprema Corte del sumario instruído contra Paz Gutiérrez, por el delito de falsificación de moneda, observó que se habían demorado las diligencias, y ordenó, por auto de cuatro de Noviembre próximo pasado, que se tomara copia de parte del expediente para averiguar la responsabilidad en que hubiera podido incurrir el juez 2.º del Circuíto de Zipaquirá, Antonio González Ortega, por razón de la demora en la instrucción del sumario.

El Tribunal de Cundinamarca promovió y adelantó las diligencias, levantando los comprobantes que juzgó conducentes á la investigación ordenada por la Corte; pero en la secuela de ellas notó que el derecho de imponerle pena á González estaba prescrito.

El Fiscal pidió que se hiciera la declaratoria respectiva, y así lo decidió el Tribunal, por auto de diez y seis de Mayo último, ordenando la consulta del auto con la Corte, y que se saque copia de lo conducente, para que se averigüe por el Juez competente si los Secretarios del Juzgado del Circuíto de Zipaquirá han incurrido en responsabilidad por las demoras notadas en el sumario contra Paz Gutiérrez.

Sustanciada la consulta, es llegado el caso de resolver, y para ello, la Corte considera:

Según el artículo 71 del Código Penal Nacional..... "En los delitos y culpas que tengan señalada otra pena (distinta de la Corporal), ésta se prescribe por el trascurso de cuatro años;..... se cuentan los términos desde el día en que se perpetró el delito ó culpa."

La pena en que incurriera el Juez de Zipaquirá. González Ortega, por haber demorado el despacho del negocio de que se ha hablado, sería la determinada en el artículo 415 del Código Penal consistente en la suspensión del destino por dos meses á un año y en una multa de diez á cien pesos. Esta pena no es corporal. Consta de autos que el señor Antonio González Ortega dejó de ser Juez 2.º del Circuíto de Zipaquirá, desde el veinticinco de Enero de mil ochocientos ochenta y dos y como desde esta fecha hasta el día en que el Tribunal decretó la prescripción, habían trascurrido más de cuatro años, tal auto está arreglado á la ley.

En consecuencia, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley confirma el auto consultado.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—El Secretario, *Ramón Guerra A.*

En veinte de Junio de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

DOCUMENTOS VARIOS.

Señor Magistrado y Presidente de la Corte Suprema Nacional.

Yo Fídolo González Lineros ante Vos, Señor, digo: en los años de 1875 á 1877 me llamó á juicio de responsabilidad la Corte Suprema como á Juez Nacional del Circuíto de Guatavita, Estado de Cundinamarca, por atribuírme una falta en el cumplimiento de mis deberes, enteramente supuestos. La Corte me absolvió, con considerandos muy satisfactorios para mí, sentencia que no se publicó en el *Diario Oficial*, porque ella no resultó al sabor de quien la pronunció, aunque lo pedí repetidas veces al entonces Secretario doctor Eliseo Santander, según el derecho que me concedió el artículo 1,801 en su parte final, del Código de procedimiento civil de la Nación. Por lo cual, vengo á suplicaros ordeneis su publicación en la *Gaceta Judicial* de dicha sentencia.

Es legal mi petición.

Señor Presidente,

Fídolo González L.

Presentado el cinco de Julio de mil ochocientos ochenta y siete, á última hora, y puesto al despacho de Su Señoría el Presidente.

Guerra A., Secretario.

Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Julio seis de mil ochocientos ochenta y siete.

Si, como se indica en este memorial, existiere la sentencia de que se habla por el peticionario, publíquese en la *Gaceta Judicial*, precedida de este escrito y del auto que lo ordena.

MARTÍNEZ —*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema federal.—Bogotá, lunes trece de Marzo de mil ochocientos setenta y seis.

Vistos:—Por acusación intentada por el señor Procurador general de la Unión contra Fídolo González Linéros, como juez que fué del Circuíto de Guatavita, en el Estado soberano de Cundinamarca, fué éste sometido á juicio de responsabilidad por los trámites ordinarios como infractor del artículo cuatrocientos cinco del Código Penal de la Nación, sancionado el veintiséis de Junio de mil ochocientos setenta y tres, que estatuye lo siguiente:

"Si el no cumplir y ejecutar la orden superior, inmediatamente que sea posible, procediese de pura malicia ó voluntariedad del funcionario ó empleado público á quien toque la ejecución, sufrirá éste la privación de su empleo ó cargo además del resarcimiento de daños, con inhabilitación por cinco años para obtener cargo, empleo ó función pública, sin perjuicio de mayor pena, si incurriese en caso que tenga otra señalada."

El señor Procurador general, en su escrito de acusación, se expresó en estos términos: "Se trata de averiguar en el presente caso, la responsabilidad en que haya podido incurrir el ex-juez del Circuíto de Guatavita, Estado de Cundinamarca, Fídolo González, por el modo como procedió en el juicio que se siguió con motivo de un contrabando de sal y su vehículo que remató el Alcalde del Distrito de Guasca. De las diligencias que para este efecto se han compulsado por el Secretario de esa Suprema Corte, aparece:

1.° Que por auto de 19 de Noviembre de 1873, dictado por esa superioridad (al conocer del juez de Guatavita la primera vez) *se ordena al juez inferior que decida acerca del mérito del sumario ó proceda á completarlo si aun estuviere deficiente.*"

"2.° El citado juez del Circuíto de Guatavita, al recibir el expediente con la resolución de la Corte, dictó el auto de 15 de Diciembre de 1873, en el cual, alegando excusas y protestas especiosas, resolvió *suspender la investigación mientras obtenía algunas leyes y Diarios Oficiales;* y al cabo de un año, el 14 de Diciembre de 1874, profirió otro auto disponiendo que: *mientras se recibían las leyes que había pedido, se remitiría el negocio á la Corte,* para que no se retardara más. En este auto volvió dicho juez á exponer pretestos que yá ese Supremo Tribunal había declarado como infundados para que se pretermitiera la desición del sumario relativo al remate del contrabando y que revelaban claramente la voluntariedad del juez inferior."

"3.° Vuelto el asunto al conocimiento de la Corte, dispuso nuevamente este Tribunal, por auto de 11 de Marzo de 1875, devolver las diligencias al juez del Circuíto de Guatavita 'para que sin más demora ni pretexto proceda á lo de su cargo, dando cumplimiento á la providencia de la Corte' (la primera que se ha citado antes); y

"4.° Cuando llegó el negocio al juzgado de Guatavita, yá estaba encargado del Despacho otro individuo, y éste dió cumplimiento á las resoluciones del superior, decidiendo sobre el mérito del sumario que tanto había sido demorado por su antecesor."

"Como se ve de la anterior relación, no hay duda de que el juez del Circuíto de Gutavita, Fídolo González Lineros, se hizo responsable en la secuela del sumario instruído para averiguar la *conducta del Alcalde de Guasca, en el remate* del contrabando tantas veces mencionado del delito de desobediencia que define y castiga el Código penal de la Unión en su artículo 405..... Este artículo es referente al 403 del mismo Código."

"En mérito de lo expuesto el infrascrito os pide que llaméis á Fídolo González Lineros, ex-juez del Circuíto de Guatavita, Estado de Cundinamarca, á juicio de responsabilidad por los tramites ordinarios, por infracción del artículo 405 del Código penal de la Unión."

La relación que precede es exacta, pues del sumario constan jusficados estos hechos: que el juez acusado no dictó, en el sumario que se instruyó *para averiguar la conducta del Alcalde del distrito de Guasca, Miguel Rodríguez Ospina, que consistió en el remate de un toro que se aprehendió cargado con sal de contrabando, por cuarenta centavos,* el auto legal correspondiente, sino que se declaró incompetente para conocer del asunto, sin embargo de que Guasca formaba parte del Circuíto judicial de Guatavita y que se hallaba interesada la hacienda nacional: que la Corte, por auto de diez y nueve de Noviembre de mil ochocientos setenta y tres, resolvió la consulta que el juez González Lineros le hizo, revocando el auto consultado y ordenando á dicho juez, "*que dictidiera acerca del mérito del sumario, por ser competente para ello ó procediera, á completarlo* si aun estuviere deficiente:" que el mismo juez, con vista de la providencia superior, no la obedeció, sino que determinó pedir al Gobierno de Cundinamarca los Códigos nacionales, y "que mientras le eran remitidos, *se suspendiese la investigación,*" y que por consecuencia de tal determinación el sumario contra el Alcalde referido quedó paralizado por un año íntegro. es decir, desde el mes de Diciembre de 1873 hasta Diciembre de 1874, en que el juez González Lineros estaba yá al cesar en el ejercicio de sus funciones judiciales, según la ley del Estado de Cundinamarca, y en que resolvió de nuevo mandar el sumario á la Corte, sin haberlo perfeccionado, ni haber dictado en él providencia alguna sobre su mérito jurídico. Por este motivo la Corte admitió la acusación y sometió á juicio de responsabilidad, por los trámites de la vía ordinaria, al mencionado ex-juez de Gutavita, por considerársele comprendido en el citado artículo 405 del Código penal.

Pero el encausado ha presentado en el plenario varias pruebas, con las cuales acredita que no hubo de su parte *voluntariedad* ni deseo de desobedecer la providencia de esta superioridad. En efecto, con ellas acredita:

1.° Que el juzgado del Circuito de Guatavita, de nueva creación, carecía de las colecciones de leyes nacionales; y que teniendo el juez encausado el deber de consultar las leyes que organizan la renta de salinas, para conocer las bases necesarias para verificar el remate de las sales aprehendidas como de contrabando y los vehículos en que éstas se conduzcan, y poder deducir, con examen de dichas leyes, si la conducta observada por el Alcalde de Guasca en el remate de los efectos aprehendidos le aparejaba ó nó responsabilidad legal, no le era posible llegar á esta conclusión por su criterio particular, sin previo estudio de las disposiciones vigentes en el ramo.

2.° Que en el desempeño de dicho juzgado, en lo relativo á los negocios de la competencia del Estado, el juez encausado "procedió con mucha actividad y rigidez, como juez que instruyó varios sumarios:" (Declaración del Magistrado del Tribunal de Cundinamarca, señor doctor Manuel M. Ramírez, rendida en forma de certificación); "que durante el tiempo que el señor González Lineros fué juez del Circuíto de Guatavita siendo Magistrado del Tribunal el señor Francisco de P. Rueda, pudo notar que aquel fué activo, diligente y estricto en el cumplimiento de sus deberes y hasta severo en demasía, si se considera que una ocasión hizo sacar copia de lo conducente para que se averiguara la responsabilidad en que él mismo hubiera podido incurrir por sus procedimientos como juez en cierto negocio." (Certificación del señor Rueda).

3.° Que según las declaraciones rendidas por otras varias personas, el juez encausado ha desempeñado varios destinos públicos y en todos ellos se ha conducido con severidad y honradez, procurando llenar cumplidamente sus deberes y á satisfacción entera del público; y

4.° Por último, que el hecho mismo de devolver al superior, como efectivamente devolvió á esta Corte, el sumario iniciado contra el Alcalde de Guasca, y por segunda vez, sin decidir cosa alguna en el fondo, revela que no hubo voluntariedad en el procedimiento, supuesto que por este medio se instruía el superior de la falta cometida: que dicho juez, al recibir devuelto por la Corte en Diciembre de 1873, el referido sumario, expresó en el primer auto "su deseo de querer obedecer y cum-

plir las disposiciones de la Corte Suprema Federal, para conservar así el orden constitucional y legal," y manifestó los motivos que tuvo para no considerarse en aptitud de resolver cosa alguna acerca del mérito que ofrecieran las diligencias sumarias: que en el auto que dictó en catorce de Diciembre de 1874, agregó algunas otras razones para tratar de persuadir que no podía, sin el conocimiento de las respectivas leyes nacionales, decretar en las mencionadas diligencias lo que fuere del caso; todo lo cual justifica que no obraba dicho juez con voluntariedad ni intención de desobedecer al superior, pues cuando más procedería por error, pero no con ánimo deliberado de faltar á sus deberes.

Estas consideraciones en que la Corte ha entrado en vista de las pruebas en que el acusado patentiza su buena conducta observada en todo el tiempo en que ejerció el juzgado del Circuíto de Guatavita, por lo que respecta á los negocios del Estado, y que destruyen la presunción de que en lo relativo al sumario seguido al Alcalde del distrito de Guasca hubiera tratado de desmentir sus buenos precedentes, así como las demás pruebas producidas en el juicio, con todas las formalidades de la ley, para que puedan ser estimadas, como en realidad lo son al dictarse este fallo, en sentir de la Corte Suprema infirman las que sirvieron para dictar el auto de proceder; y por tanto, administrando justicia en nombre de los Estados Unidos de Colombia y por autoridad de la ley, absuelve á Fídolo González Lineros, como juez que fué del Circuíto de Guatavita, del cargo porque se le llamó á juicio de responsabilidad y se ha seguido esta causa. Sin costas.

Notifíquese, y dejándose copia en el libro respectivo publíquese esta sentencia en el *Diario Oficial*: verificado esto se archivará el expediente.

Manuel W. Carvajal.—Juan A. Uricochea.—Rafael Martínez R.—Manuel Ezequiel Corrales.—José M. Rojas Garrido.

El Secretario, *Rafael E. Santander.*

En la audiencia del trece de Marzo de mil ochocientos setenta y seis fué publicada la anterior sentencia.

Santander, Secretario.

En catorce de Marzo corriente notifiqué la sentencia anterior al señor Procurador general.

GÓMEZ.—*Santander*, Secretario.

En dies y siete de Marzo corriente notifiqué la sentencia anterior al señor Fídolo González L.

González.—Santander, Secretario.

Es copia,
Bogotá, Julio 14 de 1887.

El Secretario, *Ramón Guerra A.*

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL

Señores Magistrados.

En el juicio de oposición promovido ante el Juez 1° del Circuíto de Neiva por José E. Ucrós, con motivo de la posesión que se ordenó dar á Juan Bautista Botero Arango de la mina de oro de aluvión denominada "La apariencia," situada en el predio de la Manga, jurisdicción del mismo Circuíto, el Juez, por auto del 11 de Noviembre de 1886, dispuso que se considerara como actor al opositor señor Ucrós.

Al propio tiempo y por auto de 18 de los citados mes y año, dictado en la oposición promovida por Juan Bautista Botero Arango, con motivo de la posesión que se ordenó dar á Jose E. Ucrós de la mina de oro debominada "Vega de Suárez," situada como la anterior en el predio de la Manga, el mismo Juez asignó también á la parte del señor Ucrós el carácter de actor en el juicio.

Habiendo apelado de uno y otro auto el apoderado del señor Ucrós, el Tribunal Superior del Departamento del Tolima, para ante quien se concedió el recurso, se declaró incompetente para conocer de él, razón por la cual se han sometido dichos autos al conocimiento de esa Superioridad.

Como los expresados juicios de oposición originaron actuaciones separadas, hecho el repartimiento de cada una de ellas en esa Superioridad, correspondió la relativa á la oposición de la mina de "La Apariencia" á Usía el Magistrado doctor Largacha, y la de la "Vega de Suárez" á Usía el Magistrado doctor Sanclemente.

Venidos á mi estudio los dos expedientes, hube de advertir que la oposición que en ellos se ventila se refiere á la posesión de la misma cosa, pues de autos aparece, y en ello están convénidas las partes, que la mina denunciada por Botero Arango con el nombre de "La Apariencia" es la misma ó hace parte de la denunciada por Ucrós con el nombre de "Vega de Suárez;" de donde resulta que los citados denunciantes se disputan la posesión de la misma cosa, y que, por tal motivo, lo que en uno cualquiera de los juicios se decida sobre el punto debatido, es decir, sobre á cuál de las partes corresponde asumir el carácter de actora, afecta al otro, á causa de que son idénticas las razones que se alegan en ambos para sostener que es á la parte contraria á la que corresponde figurar con el expresado carácter.

Habida consideración á lo expuesto, puede ser conveniente acumular los dos expedientes, á efecto de que recaiga en ellos una sola resolución sobre la calificación de las partes, puesto que para ello concurre la circunstancia de que lo que se decidiera en uno de los juicios produciría en el otro la excepción de cosa juzgada, y la de que, al seguirse separadamente, se dividiría la continencia de la causa, por ser unos mismos los litigantes y una misma la cosa litigiosa (artículos 712 y 713 del Código Judicial).

Sea, pues, que estiméis que se debe proceder como queda indicado, ó que determinéis otra cosa, espero vuestra resolución para emitir concepto en el fondo del asunto.

Bogotá, 18 de Abril de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

En la ejecución seguida contra el señor Matías Ahumada por deuda al Tesoro nacional, el ejecutado propuso en tiempo las excepciones de *pago, compensación, promesa ó pacto de no pedir y error de cuenta*, de las cuales solamente le fueron admitidas las que podían serlo de conformidad con el artículo 1,009 del Código Judicial, ó sean las de pago y error de cuenta.

El Juez 4.° del Circuíto de Bogotá, á quien tocó decidir el incidente, declaró por sentencia de 20 de Noviembre de 1886, probada únicamente la excepción de pago.

Dicha sentencia se os consulta, y, en esa vista el infrascrito pasa á exponeros su concepto acerca de ella.

Aun cuando en la sección segunda, capítulo 1.°, título 11, libro 2.° del Código Judicial, que señala el procedimiento en las ejecuciones por jurisdicción coactiva, no se previene la consulta de los autos adversos á la Nación que no fueren apelados, y antes bien, el artículo 1,010 de dicha sección dispone que "si las excepciones se declararen fundadas, el Juez devolverá el expediente al empleado ejecutor para que cumpla la sentencia," la consulta de tales autos es admisible por hallarse establecida en el artículo 884 del Código Judicial y en el parágrafo con que dicho artículo fué adicionado por la reforma vigésima octava de las hechas al citado Código por la ley 46 de 1876.

Sentado esto, el infrascrito pasa á ocuparse de los hechos, á virtud de los cuales el ejecutado se considera exonerado del pago de la suma á que se contrajo el mandamiento ejecutivo.

Según consta de la nota original que se lee al folio 1 de los autos, el señor Ahumada fué designado por el Gobierno, con fecha 9 de Febrero de 1884 y en su calidad de empleado subalterno de la Secretaría de Hacienda, para desempeñar, accidentalmente, las funciones de Ayudante de la Comisión encargada de hacer el reconocimiento y liquidación de los derechos de Aduana causados por las mercancías introducidas por cuenta del señor José Bonnet, en los meses de Junio á Septiembre de 1882, los cuales se hallaban detenidos en diversos puntos de los Territorios nacionales de Casanare y San-Martín.

Este reconocimiento debía practicerse de conformidad con el convenio celebrado con dicho introductor en Enero de 1884 (*Diario Oficial* número 5,979).

El señor Ahumada, después de recibir $ 70 de la Tesorería general, por vía de anticipación y para auxilios de marcha, se puso, según se le había indicado, á órdenes del Jefe de la Comi-

sión y fué con él hasta Sogamoso, de donde regresó á Bogotá, por haberlo dispuesto así el expresado Jefe.

Los $ 70 recibidos por el señor Ahumada, correspondían á la asignación mensual que le había sido señalada por la Secretaría de Hacienda, los cuales devengó sobradamente dicho señor, pues, habiendo salido de esta Capital con la Comisión en 24 de Septiembre, no regresó á ella sino en 7 de Noviembre siguiente.

Estos hechos están confirmados en lo principal con lo declarado por el señor Aníbal Galindo, Secretario de Hacienda en esa época, y por el señor Manuel Herrera Arce, Jefe que fué de la Comisión de que se deja hecha refencia, debiéndose advertir, además, que dichos señores aseguran que, en lo que le correspondía en su simple calidad de Ayudante, el señor Ahumada cumplió satisfactoriamente sus deberes (fojas 15 y 16 vuelta).

El cargo referente al hecho de no haber tomado posesión el señor Ahumada para entrar á desempeñar su puesto en la Comisión, realmente carece de fundamento, si se considera que él no fué nombrado para ocupar un nuevo empleo, sino para atender temporalmente y en ejercicio del que á la sazón desempeñaba, las funciones que el superior creyó conveniente designarle; y bien se comprende que para esto no había necesidad de la expresada formalidad, toda vez que el citado señor Ahumada sí debió tomar posesión del empleo que tenía en la Secretaría de Hacienda, en desempeño del cual fué que se le destinó á servir en la Comisión tantas veces citada.

De lo expuesto se deduce que el ejecutado procedió en todo de orden superior; que prestó cumplidamente el servicio público para que fué destinado; que devengó en su totalidad los $ 70 que se le asignaron con tal objeto; y que, de consiguiente, tiene cabida y está justificada legalmente la excepción de pago, si se considera que por *pago*, debe entenderse, en la excepción genérica, *la prestación de lo que se debe* (artículo 1,626 del Código Civil).

Por lo tanto, el infrascrito concluye pidiéndoos la confirmación del fallo materia de la consulta.

Bogotá, 13 de Mayo de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

En la ejecución seguida por el Administrador subalterno de Hacienda nacional de Ocaña contra Agustín, David y Mariana Vila, por cantidad de pesos procedente de un censo reconocido por el finado Agustín Vila, padre de los ejecutados, se presentó Cayetano Carpio, por medio de su apoderado Rafael María Rizo, haciendo tercería excluyente del predio denominado "San Lorenzo" embargado para hacer efectiva la ejecución.

Pasado el incidente, de conformidad con el artículo 1,013 del Código Judicial nacional, al Juez superior en lo civil del Circuito de Ocaña, este funcionario lo decidió por sentencia de 17 de Mayo de 1879 (fojas 25 del cuaderno principal), en el sentido de declarar probado el derecho del tercerista á la propiedad de la finca embargada, y excluída, por tanto, ésta de la ejecución.

Esa Superioridad, con quien se consultó la referida sentencia, anuló y repuso el juicio ó artículo de dominio originado por la tercería, fundándose para ello en que se había incurrido en él en una causal de nulidad (fojas 3, 7 id).

Subsanada ésta y fallado el negocio en los mismos términos en que lo había sido anteriormente, la sentencia de primera instancia ha vuelto al conocimiento de ese Supremo Tribunal, á virtud de apelación interpuesta por el Agente del Ministerio público.

El reconocimiento del derecho de propiedad del tercerista Cayetano Carpio sobre el predio de "San-Lorenzo," se funda en que este individuo ha justificado que adquirió dicho predio por compra que de él hizo, en Octubre de 1874, á José Agustín, Mariana y David Vila, quienes á su vez lo hubieron como herederos de sus finados padres Agustín Vila y Dolores Conde, y por haber justificado, además, que los expresados vendedores, cuando ejecutaron la venta, podían disponer de la finca como dueños reconocidos de ella.

Para obtener la comprobación de tales hechos, el tercerista y sus coadyuvantes los ejecutados han hecho valer en el juicio, reforzadas con otras de menor importancia, las siguientes pruebas:

Escritura pública número 754, otorgada ante el Notario del Circuito de Ocaña, en 15 de Octubre del año de 1874, y registrada en la misma fecha, por la cual consta que los citados José Agustín, Mariana y David Vila vendieron al tercerista un globo de tierra denominado "San-Lorenzo," ubicado en el Distrito de Convención, expresando que ese terreno les fué adjudicado á título de herederos en la sucesión de sus finados padres Agustín Vila y Dolores Conde (fojas 11 á 13 del cuaderno de pruebas del tercerista).

Copia expedida por el Notario del Circuito de Ocaña de las respectivas hijuelas de los mismos José Agustín, Mariana y David Vila, tomada de los originales que reposan protocolizados á cargo del expresado Notario, y en las cuales aparece que entre los bienes adjudicados á los citados herederos figura el globo de tierras de "San-Lorenzo." Esta copia está, además, debidamente registrada (fojas 17 á 21 del cuaderno ibidem).

Copia auténtica de la sentencia pronunciada por la Corte Suprema federal, en 28 de Enero de 1874, confirmatoria de la proferida en 22 de Septiembre de 1873, por el Juzgado Superior del Circuito de Ocaña, en el juicio ordinario instaurado por Rafael Niz como denunciante de bienes ocultos, sentencia que fué adversa al expresado demandante, pues por ella se confirmó, como queda dicho, la de primera instancia, en cuya parte resolutiva se había declarado que los bienes demandados por Niz como ocultos, entre los cuales figuraba el globo de tierras de "San-Lorenzo," no pertenecían al Ramo de la desamortización, por no haberse exhibido las escrituras de imposición y anotación de los censos con que se decían grabados dichos bienes; los cuales, aun en el caso de haber sido efectivamente acensuados, habían quedado libres, por no constar que se hubieran inscrito en el registro de Bienes desamortizados antes de la expedición de la ley 66 de 13 de Mayo de 1873, por la cual se declaran canceladas las hipotecas pertenecientes á manos muertas no inscritas con anterioridad á ella (fojas 28 á 30 del mismo cuaderno). Y finalmente, varias declaraciones, con las cuales se puso de manifiesto la identidad del predio á que se dirige la tercería, con el que fué materia de la referida sentencia de la Corte.

Como se ve, los autos suministran plena prueba de los hechos constitutivos de la tercería excluyente opuesta por Cayetano Carpio al terreno ejecutado, pues resulta que el oponente está provisto de título legítimo de dominio sobre el expresado terreno como comprador de él á anteriores dueños, cuya calidad de tales les había sido reconocida y confirmada por sentencia ejecutoriada que funda la excepción perentoria de *cosa juzgada*, de conformidad con lo prevenido en el artículo 757 del Código Judicial; siendo de advertir que esa excepción comprende también la libertad del terreno en lo relativo al reconocimiento con que se le creía afecto al Ramo de Bienes desamortizados.

Es verdad que la sentencia ejecutoriada á que se deja hecha referencia parece haberse proferido en vista de informes inexactos (v. fojas 25 á 28 del cuaderno de pruebas del tercerista) infirmados por otros posteriores (v. fojas 9 del cuaderno de la ejecución); pero sea de ello lo que fuere, es lo cierto que dicha sentencia debe cumplirse, cualquiera que sea la fuerza probatoria que, contra lo en ella resuelto, presten los citados documentos infirmativos; si se considera que tal es el efecto general é irrevocable reconocido por la ley á los fallos ejecutoriados.

Por lo tanto, este Ministerio estima legal el fallo de primera instancia á que se contrae el recurso interpuesto, y, en consecuencia, os pide que lo confirméis.

Bogotá, 16 de Mayo de 1887.

CARMELO ARANGO M.

CONSTITUCIÓN DE COLOMBIA.

ESTÁ DE VENTA en la Tesorería general, en edición de cuaderno, á 20 centavos el ejemplar.

IMPRENTA DE RIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 30

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 30 de Julio de 1887.

CONTENIDO.

PÁG

ACUERDOS DE LA CORTE.

Acuerdo número 41, adoptado para dirimir una competencia entre Jueces de Cundinamarca y el Tolima 233
Acuerdo número 45 sobre la no exequibilidad de un proyecto de ley aprobado por el Honorable Consejo Nacional Legislativo, y voto salvado en el asunto 235
Acuerdo número 47, adoptado para dirimir una competencia entre los Jueces de Aguachica y Ocaña 237
Id. número 48, sobre una consulta del Tribunal Superior de Antioquia, relativa al modo de proceder de los Tribunales 238

AUTOS INTERLOCUTORIOS

NEGOCIOS CRIMINALES

Sobre revocación de un auto de sobreseimiento proferido por el Tribunal Superior de Cundinamarca 239
De confirmación de otro auto del mismo Tribunal, sobre cesación del procedimiento, por prescripción ..... "
De id. de otro id. del mismo Tribunal, de sobreseimiento ..... "
Sobre confirmación de un auto de sobreseimiento proferido por el Tribunal Superior de Pasto 240

GACETA JUDICIAL.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

ACUERDO NUMERO 41.

En Bogotá, á treinta de Junio de mil ochocientos ochenta y siete, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, con el objeto de tomar en consideración la competencia negativa promovida por el Juez 1.° del Departamento de Cundinamarca, en asuntos criminales, al Juez del Departamento del Tolima, sobre conocimiento del sumario instruído en averiguación del autor ó autores de la muerte de Arnaldo Fernández, su esposa y un hijo, de la cual aparecen sindicados Julián Nieto y Manuel Caballero. El señor Magistrado doctor Noguera, á quien tocó sustanciar este asunto, presentó el siguiente proyecto de resolución:

"Vistos: En el sumario que se instruye para averiguar si fué ó nó casual la muerte de Arnaldo Fernández, su señora, Rafaela Díaz, y un niño de ocho meses, nombrado Justo Eliézer, el Juez 1.° del Departamento de Cundinamarca, en asuntos criminales, después de practicadas cuantas diligencias se creyeron conducentes al esclarecimiento del hecho, estimó, de acuerdo con el concepto del Procurador del mismo Departamento, que el nogocio era de la competencia del Juez de el del Tolima, en el despacho de lo criminal; y así lo resolvió por providencia del treinta de Octubre del año próximo pasado, promoviendo, al mismo tiempo, para caso de desacuerdo, la competencia negativa, que fué aceptada; y sostenida, como se sostuvo, la discusión, insistiendo ambos Jueces en sus respectivas opiniones, se remitió la actuación á esta Suprema Corte, como á quien compete decidir la controversia entre dichos funcionarios suscitada.

Las circunstancias que precedieron al fallecimiento de las personas citadas, fueron, según consta de autos, las siguientes:

Fernández con su esposa é hijo se hospedaron en la casa de Manuel Caballero, situada en Girardot, á orillas del río Magdalena, en la noche del veinte de Febrero de mil ochocientos ochenta y cuatro.

El último vendió al primero una balsa que necesitaba para seguir viaje con dirección á Ambalema y buscó para que sirviera de boga ó conductor de la balsa á Julián Nieto, con la recomendación de que era honrado y habil en el manejo ó dirección de esa clase de embarcaciones,

El día siguiente, veintiuno, Fernández se embarcó con su familia y equipaje, en dicha balsa, habiendo antes tenido una molestia con Caballero, por no haberle éste llevado oportunamente unos víveres que le había encargado, según dice el denunciante, ó porque, según lo afirma el segundo, al primero pareció muy pequeño el pan y excesivo, por consiguiente, su precio.

Fernández y su familia, si no se desayunaron, estuvieron, por lo ménos el mismo día veintiuno en el puerto de "Upito," en la casa llamada "San-Lorenzo", habitación de José María Bonilla, el cual hizo á Fernández la indicación de que contratara otro boga, que ayudara á Julián Nieto á conducir la balsa, mientras pasaban los peligrosos puntos del río denominados "Monos", "Gallinazo" y "Bizcochuelo", pero como Nieto se opuso, exponiendo que no había necesidad, porque él sólo era suficiente, Bonilla creyó que la balsa, la cual no vió, iría con liviana carga y nó con la que después supo llevaba.

De este punto para adelante reina la más completa oscuridad acerca de los hechos que subsiguieron, de la manera como tuvo lugar la muerte de toda aquella infortunada familia, y del lugar preciso donde aconteció.

El boga Julián Nieto dijo en su declaración de tres de Agosto del citado año, rendida ante el Alcalde de Girardot, que, después ds haber tomado chocolate en la casa del puerto de Upito, se embarcaron y siguieron, pero que *á un punto donde se forma un salto, más abajo de donde llaman "Gallinazo," de repente se formó una moya (remolino) á tiempo que sopló un fuerte ventarrón, el cual contribuyó á que se volcara la balsa y se sumergieran en el río, tanto el declarante como las demás personas que iban allí.* Como sabe nadar, agrega, pudo salir á larga distancia de donde tuvo lugar el acontecimiento y tomar solamente la balsa, pues los pasajeros no volvieron á aparecer. *Luégo vió á dos jovencitos que estaban en un puerto que hace á la orilla del lado de Cundinamarca, al pie de unos barrancos de peña formidable, y habiéndose dirigido á aquel punto, les dijo que al lado de arriba estaba una balsa amarrada, y que se la recomendaba,* cuyos jóvenes se quedaron allí sin contestar nada. Cree que el motivo de no haberse sumergido las petacas y báules que estaban en la balsa, fué el de haberlos amarrado bien cuando los embarcaron, y, que no sabe qué se harían esas cosas, pues se fué lleno de congoja y como dementizado, en vista de la desgracia ocurrida, primero para Utica y después para Cunday, sin atreverse á hacer más que la recomendación á los jóvenes antes expresados, etc. etc.

En su segunda declaración de fojas 73 expuso que el equipaje consistía en una carga de petacas y dos de baúles, una pequeña y otra de magnitud regular; que la balsa era capaz y estaba bien construída, siendo bastante un solo boga para conducir á Ambalema una de iguales dimensiones y con igual número de pasajeros y cargas; que el río estaba en buena agua, es decir, en buen estado para transitar; que un cuarto de hora antes dió á la balsa la dirección conveniente para que no cayera

en el peligro, pero que desgraciadamente no pudieron sus esfuerzos impedir el mal, etc. etc.

Dispuso el Alcalde de Nariño que por los comisarios de policía del partido de "Tumbamicos," se inquiriese de los padres ó encargados de niños ó jóvenes de aquel lugar, quienes habrían sido los aludidos por Nieto, y fué por esto por lo que Pascuala Barrios se presentó á la Alcaldía, en veintidós de Diciembre del yá citado año de mil ochocientos ochenta y cuatro, trayendo, para que fuera examinado, á su hijo Eugenio Cruz, de edad de diez años, según ella, el cual, interrogado en presencia del curador que al efecto se le nombró, dijo: "que vió, hace yá bastantico tiempo, sin recordar el mes ni la fecha, una balsa que iba río abajo, un poco abajo del salto de los "Bizcochuelos"; pero que no vió nada sobre dicha balsa, y que también vió á un cachaco que sacaba la cabeza y un brazo, vestido de saco negro y que decia que lo cogieran; pero que, como no había quien fuera á cogerlo pronto, se consumió y no lo volvió á ver. Que en el punto en que estaba viendo lo que ha referido, no había otra persona ni arrimó ninguna balsa ni boga, porque en donde estaba el exponente erá en el puerto del "Burro," y que de ahí para abajo no hay puerto cerca ninguno, que conozca, pués que son peñas lo que hay."

El mismo joven, en su cuarta declaración, de diez y ocho de Mayo del año próximo pasado (foja 81), expuso: "que no vió sino la balsa que bajaba hacia el lado occidental de las aguas del río Magdalena, y á un cachaco que también bajaba, ahogándose, por toda la mitad del río, quien se consumió en el agua y no lo volvió á ver, y la balsa que llegó hasta el *lance* de la "Chipa" (llámase *lance* el punto propio en el río para votar la red ó chinchorro) lance que se encuentra en el mismo lado occidental del río, hasta donde dice vió rodar la balsa, sin que viera persona alguna que la condujera ó guiara."

Antes de esto, es decir, el veintinueve de Diciembre de mil ochocientos ochenta y cuatro, Juan Osorio Laguna, por virtud del requerimiento de los comisarios de "Tumbamicos" de que yá se ha hablado, presentó á la Alcaldía de Nariño á su hijo Camilo Lozano, de edad, al parecer, de diez años, el cual dijo (foja 17), presente el curador que se le proveyó al efecto, que nadie le indicó la existencia de una balsa en el río etc. etc.; *que lo único que sobre el particular le consta, es lo siguiente: Que el jueves veintiuno de Febrero del año en curso, lo mandó su padre al puerto de este Distrito (día de mercado en él) á ciertas diligencias, y que bien abajo de la maleza llamada "Bizcochuelos" vió amarrada una balsa sola, sin que viera persona alguna que la cuidara, ni estuviera en sus cercanías, y que sobre ella vió unos trastos; que esto sucedió como á las tres de la tarde, y que la presencia de dicha balsa le inspiró la idea de que la estuvieran cargando para emprender viaje y nó de que hubiera naufragado.*

Nicasio Vezga (fojas 24 y 25), Leonardo Cruz (fojas 26 y 27) y Diego Ramírez (fojas 30 y 31 subían del puerto de la "Porquera," como á las cuatro de la tarde del veintiuno de Febrero de mil ochocientos ochenta y cuatro, con dirección á la casa del último, sita en el salto de "Lucha," en la banda occidental del río Magdalena, y al pasar por la oriental, vieron en el punto de "Tumbamicos," de la jurisdicción de Nariño, una balsa que parecía hubiera naufragado y amarrada después á un matorral ó debil arbusto. Dicen que dentro de la balsa había una petaca, un baúl, una caja peqüeña, una montura, zamarros, maletera y algunos otros objetos de poca significación. Luégo siguieron su rumbo, y por la noche, como á las ocho, volvieron á la balsa y se llevaron en una canoa los expresados objetos, que quedaron en poder de Ramírez, hasta que la autoridad, con conocimiento que tuvo de su paradero, los exigió de éste.

El cadáver de Rafaela Díaz, pues no se puede suponer que fuera el de otra persona, se vió flotando el veinticinco del referido mes de Febrero en un punto nombrado el manso de "El Guadual," en la banda occidental del río, y fué sepultado en la playa inmediata. No se le encontró violencia alguna inferida por la mano del hombre, sino la cara comida por los gallinazos, así como algunas otras partes de su cuerpo. Tenía la cabellera desprendida del cráneo envuelta en el cuerpo, y enredados en la misma cabellera un reloj y un zarcillo. Su color era blanco, vestía saco de merino negro, etc. etc.

Cuanto viene expuesto es lo que sustancialmente consta de la actuación, lo cual, como se deduce de su contexto, no da luz alguna acerca del lugar del crimen, si lo hubo, ó del en que aconteció el siniestro.

Como yá se ha visto, Juliáu Nieto, único actor vivo del misterioso drama, dice que, no obstante sus esfuerzos, la balsa zozobró, *al llegar á un punto donde se forma un salto más abajo de donde llaman "Gallinazo,"* y aunque pudiera inferirse de los términos de la inspección practicada por el Alcalde de Nariño, que el punto ó lugar de la catástrofe fué el remolino de la "Chipa," llama necesariamente la atención el que un boga del Magdalena, práctico de aquellos lugares y acostumbrado á viajar en esa parte del río, ignorara el nombre del remolino mencionado; y como es posible, además, que tenga interés en desfigurar los hechos, yá para ocultar su crimen, si lo cometió, ó para disimular su impericia ó descuído, suponiéndose dominado por una fuerza mayor, su exposición, aislada como aparece, no puede inspirar la confianza que se necesita para fundar en ella la correspondiente determinación.

Se ha visto también que Eugenio Cruz no dice haber presenciado la ejecución del hecho que diera por resultado el abandono de la embarcación referida, sino simplemente haber visto una balsa que *iba sola, río abajo, un poco abajo del salto de los "Bizcochuelos,"* y un sujeto que sacaba la cabeza y un brazo, pidiendo que lo cogieran, etc.; testimonio que no puede servir de base para resolver la cuestión sometida á la consideración de la Corte, en un sentido más bien que en otro, pues si la balsa y aquel desgraciado bajaban impulsados por la fuerza de la corriente, prueba incontestable sería de que algo extraordinario había acontecido en la parte superior del río, pero no cuál fuera esa parte, ó mejor dicho, el punto preciso del acontecimiento.

Menos claridad aún arroja sobre el particular la mencionada inspección del Alcalde de Nariño. Comisionado éste por el Juez que provocó la competencia, para que, trasladandose, siendo posible, al lugar *donde ocurrió el suceso*, determine, por medio de una inspección ocular, verificada *en el preciso lugar del acontecimiento*, si ese sitio corresponde al territorio de Cundinamarca ó al del Tolima, dicho Alcalde, acompañado de los testigos Sandalio Escobar y Florencio Cardoso (fojas 90 vuelta), se situó, debe notarse bien esto, en el punto de "Burro" (punto de observación del menor) en el río Magdalena, correspondiente á "Tumbamicos," jurisdicción de Nariño, desde cuyo sitio, dice la diligencia, se domina una gran extensión de la corriente de las aguas en el citado río.

Dichos Alcalde y testigos tuvieron á la vista, dicen, varios accidentes que en el álveo de dicho río se denominan con los nombres de el remolino de la "Chipa," el cual se forma *por el ímpetu de las aguas*, que, pasando del salto del "Gallinazo," se *estrellan* contra la margen occidental de dicho río, y entonces forman en esa misma banda el citado remolino, de donde lentamente toman su curso, formándose luégo al mismo Occidente, *un torrente del agua* que, en considerable descenso, tropieza con piedras profundas á lo que llaman "Banco de los Bizcochuelos."

En estos bancos, continúa diciendo la diligencia, fué en donde vió el jovencito Eugenio Cruz al cachaco que iba ahogándose, río abajo, y al mismo lado de la banda del río se encuentra el manso (remanso) del "Guadual," en donde fué encontrado el cadáver de la mujer, etc. etc.

Aquí conviene hacer notar que Eugenio Cruz, en su primera declaración de fecha veintidós de Octubre de mil ochocientos ochenta y cuatro, cuando debían estar más vivos sus recuerdos respecto del acontecimiento que se averigua, dijo, fojas 14, necesario es repetirlo: "que vió una balsa *que iba río abajo, un poco abajo* del salto de los "Bizcochuelos" y que también vió un cachaco, etc. etc.

Que en su segunda declaración (foja 59), rendida en cinco de Enero de mil ochocientos ochenta y seis, manifestó ignorar la distancia que existe entre los "Bizcochuelos" y el punto en donde *vió iba la balsa sola*; pero su curador calculó en dos cuadras la distancia que media entre uno y otro punto.

Que en su tercera declaración, fecha primero de Marzo del mismo año (foja 67), se limitó á decir "que el naufragio fué ocurrido en la banda occidental del río Magdalena, en el Estado del Tolima."

Y por último, que fué en la citada cuarta declaración, rendida en diez y ocho de Mayo del año que se acaba de citar (fojas 81), en la que pudo yá determinar con toda precisión, no obstante el mayor transcurso de tiempo, no sólo el punto en que se sumergió el infeliz náufrago, pidiendo lo salvaran ("*que también bajaba ahogándose por toda la mitad del río*"), sino aquél por donde bajaba y hasta donde llegó la balsa ("vió la balsa que bajaba hácia el lado occidental y *llegó hasta el lance de la "Chipa,"* lance que se encuentra en el mismo lado occidental").

Las contradicciones no pueden ser más notorias. Si fué cierto lo que expuso en su primera declaración, esto es, que vió la balsa un poco abajo del salto ó banco de los "Bizcochuelos," no puede ser cierto lo que expresó en la cuarta, es decir, que la balsa bajó hasta el lance de la "Chipa," pues como consta de la diligencia de inspección, las aguas que forman este remolino, toman de él lentamente su curso y vienen á formar al Occidente el torrente que, en considerable descenso, tropieza con piedras profundas, que es á lo que llaman "Banco de los Bizcochuelos."

Dos cuadras más abajo de estos bancos, según el curador del menor, está el punto en que éste vió la balsa que bajaba, y como los bancos quedan después del remolino de la "Chipa," es de todo punto inverosímil que hubiera visto la misma embarcación en dicho remolino ó á sus inmediaciones.

Esta misma última declaración del menor ha servido de punto de partida al Alcalde y testigos que le acompañaron al acto de inspección, para formular la siguiente conclusión: "al pasar el salto de 'Gallinazo,' *que es bien peligroso*, hay que remar sin descanso, con los bogas suficientes, en balsa ó canoa, dirigiendo la embarcación al lado oriental del río, so pena de que, al no conseguirse este objeto, la embarcación dará con *mucha fuerza* á la banda occidental, y de allí entra al remolino de la 'Chipa,' y luégo en los 'Bancos de los Bizcochuelos,' *de cuyos lances es imposible que salga ilesa ninguna embarcación;*" y de esto "deducen como consecuencia precisa, que el naufragio de que se trata tuvo lugar en la parte del río al lado del extinguido Estado del Tolima, *en cuyo lado se han encontrado los despojos de la embarcación, etc.*"

Y sin embargo, no solo la embarcación, sino también su carga, una gran parte de ella, salieron ilesas de aquellas impetuosas y atronadoras corrientes; y no fueron á estrellarse contra la banda occidental, como parecía inevitable, sino que aparecieron así intactas en el punto de "Tumbamicos," situado en la *ribera oriental*, y sujeto, por consiguiente, á la jurisdicción de Cundinamarca.

Esa diligencia, pues, á la cual sirvió de base la citada declaración del menor, tan falible en sí misma, ya por la edad del testigo y ya por las contradicciones anotadas, tiene tanta fuerza como la declaración misma, y no prueba, por lo tanto, que el juez del Tolima sea el competente para conocer del asunto.

Siendo, por lo expuesto, imposible determinar con toda precisión, por razón del lugar, el punto jurisdiccional á que el hecho quedó sometido, puesto que se trata de un acontecimiento verificado en una región completamente solitaria, es el caso de aplicar por analogía la disposición del artículo 1508 del Código judicial.

En esta virtud la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo en el fondo con el concepto del señor Procurador general, dirime la competencia de que viene hecha mensión, declarando que es al juez del Circuíto de Cundinamarca, en el despacho de lo criminal, á quien compete el conocimiento del negocio sobre que ha versado dicha competencia.

Comuníquese, déjese copia y publíquese."

Discutido el anterior proyecto, fué aprobado por el voto unánime de los señores Magistrados, quienes dieron por concluído el presente acuerdo, que firman juntos con el infrascrito Secretarto.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 45.

En la ciudad de Bogotá á seis de Julio de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, dióse cuenta de la nota de Su Señoría el Ministro del Tesoro, en la que somete á la decisión de la Corte el proyecto de ley que concede una pensión, y que fué objetado por el Poder Ejecutivo en doce de Febrero del corriente año, con el fin de que la Corte decida sobre su exequibilidad. Después de haberse surtido la tramitación establecida en la Sección 3.ª, artículo 21 de la ley 61 de 1886, y considerado el asunto, la Corte adoptó, por mayoría de seis votos, el siguiente proyecto de resolución, presentado por el señor Magistrado doctor Martínez, á quien tocó el negocio en repartimiento.

"En diez de Febrero del corriente año, cuando yá regía la ley 50, de 11 de Noviembre de 1886, el Honorable Consejo Nacional de Delegatarios, en su carácter de Cuerpo Legislativo, expidió una ley que concede á la señora Juana Ponce de O'Levy, viuda del Sargento Mayor Ricardo O'Levy, y á sus menores hijas, Sara, Sofía y Margarita, una pensión mensual de cincuenta pesos, pagadera del Tesoro público.

"En doce del mismo mes de Febrero el Gobierno objetó en su conjunto la expresada ley, por considerarla inconstitucional, según las razones que expuso en el Mensaje que dirigió al Honorable Consejo en trece del indicado mes.

"El día catorce, el Honorable Consejo declaró infundadas aquellas objeciones, y devolvió el proyecto á Su Excelencia el Presidente de la República, para los efectos del artículo 90 de la Constitución."

Con tal motivo y con nota de Su Señoría el Ministro del Tesoro, fechada en veintitrés de Junio próximo pasado, ha venido el proyecto á esta Corte, para que ella decida acerca de su exequibilidad.

Antes de toda otra consideración, es preciso manifestar las razones por las cuales la Corte se cree competente en el presente caso para resolver la cuestión de constitucionalidad sometida á su examen, una vez que el Delegatario que representó en la audiencia al Honorable Consejo Legislativo, fincó su argumentación en que, no habiendo ocurrido á la Corte Su Señoría el Ministro del Tesoro dentro del término que señala la ley 61 de 1886, yá ha caducado la jurisdicción de este Supremo Tribunal para decidir en el asunto.

Una ley es el resultado de los componentes que se determinan en la Carta constitucional, á saber: debida presentación del proyecto, discusión en tres debates, y sanción del Gobierno. Cuando falta cualquiera de estas circunstancias, la ley no existe ó no puede llamarse tal; y en previsión de las dificultades que por esta causa pudieran resultar, y en guarda de los derechos de la Nación, del Cuerpo Legislativo y del Gobierno, la Constitución ha establecido todas las precauciones necesarias en el Título 7.° y en sus artículos 79 hasta 92 inclusive.

Según esas disposiciones, el Presidente de la República tiene los términos de 6, de 10 ó de 15 días, según el caso, para objetar los proyectos de ley; el Cuerpo Legislativo puede insistir en sus determinaciones, rechazando las objeciones del Presidente; y en este caso el Gobierno está en el deber de sancionar los proyectos, pudiendo el Presidente del Congreso suplir la omisión, si el Gobierno no hubiere impartido al respectivo acto legislativo su sanción. Pero en todo esto hay un caso de exepción, y es aquel en que el proyecto hubiere sido objetado por inconstitucionalidad; en el cual, aun cuando el Cuerpo Legislativo insista, la ley no puede llevarse á efecto sin la decisión de la Corte Suprema sobre su exequibilidad.

De aquí resulta que en el caso predicho, el proyecto queda detenido mientras la Corte no decida acerca de él; y para que esto no fuera indefinido, la ley 61 de 1886 señaló el tiempo dentro del cual el Ministro respectivo debe acusar el proyecto ante la Corte. Hay, pues, en el asunto dos partes: una de derecho esencial ó inmanente de la Corte; y otra de forma y de tramitación, relativa á los terminos. La primera permanece, y de tal manera permanece, que sin ella, según la Constitución, la ley objetiva no puede tener efecto positivo, ni considerarse anulada; y la segunda, que es de forma, pero que sí marca los deberes de los funcionarios públicos, sólo puede tener por resultado la responsabilidad de éstos; á saber: la del Ministro, si no-

ocurre en tiempo; la del Procurador si no dictamina en oportunidad; y la de la Corte, si no falla dentro del término legal. Pero estos accidentes no destruyen la facultad primordial tocante á la autoridad que haya de decidir. Sucede en este caso lo que sucede en todos los demás juicios: las leyes señalan á los Tribunales y á los Jueces términos dentro de los cuales hayan de dictar sus sentencias: si traspasan esos términos, pueden incurrir en responsabilidad; pero no por ello pueden eximirse del deber de sentenciar. El ejercicio de las facultades inherentes á la Soberanía nacional, en todos sus ramos y manifestaciones, no prescribe, sino tratándose de derecho penal; á diferencia de lo que sucede á los individuos, los cuales sí pierden su derecho si no lo ejercitan en tiempo.

Si la Corte se declarara sin jurisdicción en un caso como el presente, la ley acusada quedaría sin efecto; pero también quedaría establecido el más pernicioso antecedente en contra del régimen constitucional, pudiéndose después anular el Poder Legislativo, con sólo retardar la presentación á la Corte de un proyecto objetado.

De los antecedentes sentados, resulta que, aun cuando el señor Ministro del Tesoro, por motivos que la Corte ignora, dejó de ocurrir oportunamente á ella con la ley objetada, eso á lo más podrá aparejar responsabilidad á dicho funcionario, pero no embaraza las atribuciones de este Supremo Tribunal para dictar la resolución respectiva. Esto establecido, se pasa á las siguientes consideraciones:

El artículo 78 de la Constitución, entre otras prohibiciones que impone al Congreso y á cada una de sus Cámaras, establece la siguiente:

..... "5.ª Decretar á favor de ninguna persona ó entidad gratificaciones, indemnizaciones, pensiones, ni otra erogación que no esté destinada á satisfacer créditos ó derechos reconocidos con arreglo á ley preexistente, salvo lo referente al inciso 18 del artículo 76" de la misma Constitución.

La disposición precedentemente copiada suponía una ley que determinara de una manera antelada, conforme también con la parte final del artículo 62 de la Constitución, los derechos reconocidos, en virtud de los cuales pudiera el Congreso decretar las gratificaciones ó las pensiones; y con tal motivo, sin duda, se dictó la ley 50 de 1886, determinando el origen, tramitación, pruebas y documentos en que debieran fundarse los proyectos de ley destinados á reconocer el derecho para una pensión ó jubilación.

La segunda parte del artículo 17 de esta ley establece que las pensiones que se concedan después de estar ella en vigencia, sólo podrán ser remuneratorias, con arreglo al artículo 78 de la Constitución, es decir, cuando estén destinadas á satisfacer créditos ó derechos en virtud de ley preexistente.

Define luégo en el artículo 18 cuáles son las pensiones remuneratorias, reduciéndolas á dos clases: las concedidas á los militares de la independencia, por servicios prestados á aquella causa desde 1810 hasta 1826, y en la marina de guerra hasta 1827; y las concedidas á título de jubilación ó retiro, en premio de servicios clasificados en ley preexistente, y siempre que la concesión sea conforme á la promesa legal; prohibiendo luégo conceder en adelante pensiones gratuítas.

La pensión á que se refiere el proyecto que se examina, en favor de la señora Juana Ponce de O'Levy y sus hijas, no está, pues, en las condiciones determinadas para que sea considerada como una pensión remuneratoria, porque no se encuentra en ninguno de los dos casos del artículo 18 de la ley 50 citada; pues que no basta para ello haber prestado ciertos servicios militares, ni haber obtenido ascenso en los grados, ni haber muerto de muerte natural, estando en servicio de guarnición, que fué lo que ocurió con el Sargento Mayor Ricardo O'Levy. Y tan es así, que el artículo 19 de la ley 50 calificó de gratuítas las pensiones anteriormente concedidas, reduciéndolas en su cuantía, para que tuviera efecto lo dispuesto en el artículo 17, que no permite conceder sino las pensiones remuneratorias. Por consiguiente, el proyecto que se examina es contrario al artículo 78 de la Constitución.

En fuerza de estas consideraciones, la Corte Suprema de la Nación, en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 90 de la Constitución, declara que no es exequible el proyecto que concede una pensión á la señora Juana Ponce de O'Levy y sus hijas, por ser él inconstitucional; disponiendo, en consecuencia, que se archive dicho proyecto.

Transmítase esta determinación á Su Señoría el Ministro del Tesoro y también al señor Procurador general: al primero, para los efectos constitucionales; y al segundo, para los del artículo 1,426 del Código Judicial."

Con lo cual se dió por terminado el presente acuerdo, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

En la decisión pronunciada por la Corte en el *incidente* relativo á una pensión decretada por el Consejo Nacional Legislativo y objetada por el Poder Ejecutivo, pensión que se decretó á favor de la señora Juana Ponce de O'Levy, el señor Magistrado doctor Manuel J. Angarita, salvó su voto en los siguientes términos:

"En ejercicio del derecho que me da la ley, salvo mi voto en la decisión que precede relativa á la declaración de inconstitucionalidad del proyecto de ley que concede pensión pagadera del Tesoro público á la señora Juana Ponce de O'Levy, y á sus menores hijas. Salvo mi voto, no porque estime constitucional el indicado proyecto de ley, sino porque juzgo que á la Corte, en el caso particular de que se trata, no le es potestativo hacer declaración alguna, pues toda decisión de este Supremo Tribunal sobre exequibilidad de un proyecto de ley, objetado de inconstitucionalidad, debe ser solicitada siempre dentro de los seis días siguientes al en que el Cuerpo Legislativo haya declarado infundada dicha objeción, y en el caso presente se ha ocurrido á la Corte cuatro meses después de la insistencia del Honorable Consejo Legislativo.

Estimo conveniente, para dar mayor claridad á mi razonamiento, reproducir aquí las disposiciones aplicables.

La Constitución dice:

"Artículo 88. El Presidente de la República sancionará, sin poder presentar nuevas objeciones, todo proyecto que, reconsiderado, fuere adoptado por dos tercios de los votos en una y otra Cámara.

"Artículo 90. Exceptúase de lo dispuesto en el artículo 88, el caso en que el proyecto fuere objetado por inconstitucionalidad. En este caso, si las Cámaras insistieren, el proyecto pasará á la Corte Suprema, para que ella, dentro de seis, días decida sobre su exequibilidad. El fallo afirmativo de la Corte, obliga al Presidente á sancionar la ley. Si fuere negativo, se archivará el proyecto."

La ley 61 de 1886, artículo 21, sección 3.ª que versa sobre las atribuciones de la Corte Suprema, dice:

"En Sala de Acuerdo ó de siete Magistrados, tiene las atribuciones siguientes:

"1.ª Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de Actos Legislativos que hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales.

"La decisión sobre exequibilidad debe ser solicitada por el respectivo Ministro del Despacho, en el perentorio término de seis días, á contar desde aquel en que el Congreso hubiere declarado infundada la objeción de inconstitucionalidad.

"A la solicitud, se acompañará copia de todo lo conducente."

Como se ve, la Constitución atribuye á la Corte Suprema la facultad de resolver sobre la exequibilidad de los actos legislativos objetados por considerárseles inconstitucionales, cuando ha habido insistencia de parte del Congreso; y la ley, que bien puede reglar las atribuciones conferidas al Poder Judicial, establece, en el asunto de que se trata, requisitos que deben llenarse previamente.

Uno de ellos es que el Gobierno solicite la decisión de la Corte, dentro del *perentorio* término de seis días, es decir, dentro de un término que *no puede pasar de seis días*. Habiéndose fijado término para ocurrir á la Corte, es claro que no puede ocurrirse á ella después de su vencimiento, y menos siendo *perentorio* el término.

Se viola, pues, la ley si la solicitud se eleva después de vencido el término fijado; y si la Corte oye la reclamación y decide sobre lo pedido, se hace, en mi concepto, cómplice de la violación, en cuanto elude la disposición legal, es decir, en

cuanto hace inútil, á virtud de la decisión que dicta, la prevención de la ley respecto del término dentró del cual debe hacerse la reclamación; de hoy más, será indiferente, para los efectos constitucionales, que la solicitud relativa á la exequibilidad se haga dentro ó fuera del término señalado; no así, si la Corte declarase que no podía ella resolver sobre la exequibilidad del proyecto, por haberse ocurrido extemporáneamente.

No creo que el simple hecho de estar atribuída una facultad á la Corte Suprema, ó á cualquier Tribunal ó funcionario, obligue á ejercerla aún con violación de la ley que regla su ejercicio, pues los requisitos legales son una garantía, son condiciones que el Legislador estima necesarias para que el uso de la facultad conferida no produzca resultados nocivos.

En la decisión á que se refiere este salvamento, se lee:

"De aquí resulta que en el caso predicho, el proyecte queda detenido mientras la Corte no decida acerca de él; y para que éste no fuera indefinido, la ley 51 de 1886 señaló el tiempo dentro del cual el Ministro respectivo debe acusar el proyecto ante la Corte. Hay, pues, en el asunto dos partes: una de derecho esencial é inmanente de la Corte, y otra de forma y de tramitación relattva á los términos. La primera permanece, y de tal manera permanece, que sin ella, según la Constitución, la ley objetada no puede tener efecto positivo ni considerarse anulada; y la segunda, que es de forma, pero que si marca los deberes de los funcionarios públicos, sólo puede tener por resultado la responsábilidad de éstos, á saber: la del Ministro, si no ocurre en tiempo; la del Procurador, si no dictamina en oportunidad; y la de la Corte, si no falla dentro del término legal. Pero estos accidentes no destruyen la facultad primordial, tocante á la autoridad que haya de decidir."

Eso de que haya en el asunto dos partes, me parece que significa, en términos comunes, lo siguiente: que en toda cuestión sobre exequibilidad de un proyecto de ley existen, por una parte, la *atribución conferida* á la Corte, es decir, el derecho que me permito llamar *substantivo*; y por otra parte, el *derecho adjetivo*. El derecho substantivo de que hablo, considerado generalmente ó en abstracto, permanece inalterable mientras rija la Constitución; pero con relación á un caso concreto no sucede esto mismo, porque el ejercicio del derecho *substantivo* está subordinado al *adjetivo*.

Tanto es así, que los Tribunales de justicia todos los días deciden y no ejercen esta ó aquella facultad, clara y expresamente conferida, por cuanto su ejercicio no ha sido solicitado con arreglo á la ley adjetiva; y con razón la deciden, y la ha decidido esta misma Corte, pues la ley adjetiva es garantía del oportuno, fiel y benéfico cumplimiento de la ley substantiva.

Aunque se dice que el derecho esencial é inmanente de la Corte permanece, y que los accidentes no destruyen la facultad primordial tocante á la autoridad que haya de decidir, yo me inclino á creer que esta misma Corte no ejercería la mencionada facultad constitucional, si hubiese sido el señor Procurador de la Nación, por ejemplo, ó cualquiera otro funcionario, y no el Ministro del respectivo Despacho, quien hubiese solicitado la declaración sobre exequibilidad del mencionado proyecto, *no obstante permanecer el derecho esencial é inmanente de la Corte*, lo cual prueba que el derecho substantivo está subordinado en su ejercicio al derecho adjetivo.

Se dice que la parte relativa al derecho esencial é inmanente de la Corte "permanece, y de tal manera permanece, que sin ella, según la Constitución, la ley objetada no puede tener efecto positivo, ni considerarse anulada....."

Se da, pues, como razón para sostener que este Tribunal debe, siempre que á él se ocurra, ejercer la atribución constitucional de que se trata, el resultado gravemente perjudicial á que daría lugar la abstención de la Corte en el ejercicio de la indicada facultad.

Esta razón sería poderosa, si á semejante resultado se llegase á virtud de la disposición legal que establece el procedimiento que debe seguirse, y de sólo ella, porque sería evidente la incompatibilidad entre la ley y la Constitución; pero á dicho resultado se llega únicamente cuando el respectivo Ministro del Despacho no cumple la ley que le ordena ocurrir á la Corte dentro del perentorio término de seis días. Repárese que efectos *más ó menos perniciosos* se producen siempre que se violan las leyes, sin que sea dable, en la generalidad de los casos, encontrar oportuno y eficaz remedio, porque para que lo hubiese sería necesario expedir siempre una segunda ley, por lo menos, en que se dispusiese lo conveniente para los casos de violación de la primera.

En la decisión que precede, la Corte estima que si ella se declarase sin jurisdicción en un caso como el presente, no sólo quedaría sin efecto la ley acusada, como se ha dicho, sino que se establecería "el más pernicioso antecedente en contra del régimen constitucional, pudiéndose después anular el Poder Legislativo con sólo retardar la presentación á la Corte de un proyecto objetado."

Adviértase que á este mismo funesto resultado se llega, no obstante la circunstancia de declararse la Corte con jurisdicción en el presente caso, porque la anulación del Poder Legislativo por parte del Gobierno, no depende de que la Corte declare que tiene *ó nó* jurisdicción para conocer cuando á ella se ocurre dentro de los mencionados seis días; dicha anulación del Poder Legislativo no proviene de que la Corte resuelva ésto ó aquéllo en materia de jurisdicción, sino de la suposición sobre que se razona. Se dice: si la Corte se declarase incompetente para conocer, por ocurrirse á ella después del término legal, el Gobierno que quisiese eludir la ley, no solicitaría la declaración de exequibilidad sino después de vencido dicho término, en la seguridad de que la Corte se abstendría de fallar. Pero habiéndose declarado competente la Corte para decidir estas cuestiones, sea cual fuere el tiempo en que á ella se ocurra, es claro que el Gobierno que quisiera eludir la acción del Poder Legislativo, no ocurriría nunca á la Corte, y quedaría sin efecto positivo el proyecto objetado; ó si ocurre á este Supremo Tribunal, será cuando yá le sea indiferente cualquier resolución que se dicte. El resultado es, pues, idéntico en ambos casos.

Es preferible, en mi opinión, que el día que el Gobierno tenga la pretensión de hacer ilusoria la acción legislativa, y ocurra á la Corte extemporáneamente, haya ocasión de que este respetable Tribunal llame la atención pública sobre la violación de la ley por parte del Gobierno.

Repárese que al establecerse, como se establece, que la Corte ejerce la memorada atribución constitucional, sea cual fuere el tiempo en que la solicitud se eleve, resultará que la violación de la ley, por el Gobierno, quedará un tanto atenuada, una vez que al fin se decida sobre la exequibilidad del proyecto, aunque sea demasiado tarde, es decir, cuando el acto legislativo carezca de importancia ó de objeto.

Tales son las consideraciones que me han determinado á salvar mi voto respecto de la decisión que precede.

Manuel J. Angarita—Martínez—Samper—Fernández—Morales—Noguera—Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

Es copia.

Ramón Guerra A., Secretario.

ACUERDO NÚMERO 47.

En Bogotá, á quince de Julio de mil ochocientos ochenta y siete, reunidos los señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con el objeto de ejercer la atribución tercera de las comprendidas en la Sección 3.ª, del artículo 21 de la ley 61 de 1886 (25 de Noviembre) orgánica del Poder Judicial, se dió lectura al siguiente proyecto de resolución, preparado por el Magistrado señor doctor Samper, como substanciador conforme al repartimiento del caso:

"Vistos:—Habiendo fallecido el Presbítero Zoilo María Arce, el veinte de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, en Aguachica, cabecera de la Provincia del Sur, en el Departamento del Magdalena, las autoridades dictaron inmediatamente las resoluciones del caso á fin de que, con arreglo al Código Judicial, se procediera de oficio á practicar las diligencias relativas á la seguridad de los intereses de la mortuoria. El Juez del Circuíto aprehendió el conocimiento, y como se comprobase que el finado Presbítero no había otorgado testamento, se procedió en debida forma, declarándose yacente la herencia, y después, mandándose entregar á los herederos legítimos que se presentaron, los bienes inventariados, con los requisitos del caso.

"Entre tanto se había iniciado también juicio de sucesión,

respecto de los bienes del finado, ante el juez superior de la Provincia de Ocaña, perteneciente al Departamento de Santander; y como ante dicho Juez se hizo el inventario de los bienes existentes en aquella ciudad, que manifestó una hermana del difunto Presbítero, y se presentaron como solicitantes de la sucesión todos los hermanos legítimos, se libró por el juzgado auto para comisionar al juez de la mencionada Provincia del Sur del Magdalena, con el fin de que practicase ciertas diligencias. Este último juez se denegó á ello, por cuanto á él le correspondía el conocimiento del juicio de sucesión, y alegó en su apoyo las circunstancias (todas comprobadas plenamente en autos), de haber fallecido en Aguachica el Presbítero Arce, de haber tenido allí bienes (entre otros la casa que habia comprado y habitaba) y de que allí estaba ejerciendo su profesión sacerdotal, en calidad de Cura párroco; todo lo cual probaba, en concepto del juez, que allí tenía su domicilio el difunto, y que, habiendo fallecido *ab-intestato*, la sucesión de sus bienes debía ser juzgada en la Provincia magdalenense del Sur.

"Alegó en contra el Juez Superior de Ocaña, que allí se encontraba la mayor parte de los bienes del finado Presbítero Arce, según resultaba de los inventarios, y que también allí había residido y hecho negocios el mismo sujeto, antes de ejercer el curato de Aguachica. Ello es que, no habiéndose acordado los dos Jueces, que pertenecen á dos Distritos judiciales distintos, se ha formalizado entre ellos competencia afirmativa, y es el caso de que la Corte la dirima. El señor Procurador general ha sido oído, y él sostiene que, por analogía, debe resolverse el punto como lo resolvió la Corte Suprema en siete de Febrero de mil ochocientos setenta y seis, con ocasión del fallecimiento en Antioquia del Reverendo Obispo de aquellla Diócesis, doctor Domingo A. Riaño, quien dejó bienes, así en aquel Circuíto como en el extinguido Estado de Cundinamarca.

"Conforme á dicha decisión correspondía el conocimiento del juicio de sucesión al Juez de Antioquia, respecto de todos los bienes muebles, cualquiera que fuese el lugar donde se hallasen, y de los inmuebles sitos ó ubicados en aquel Circuíto; en tanto que correspondía el conocimiento al respectivo juez de Cundinamarca, respecto de los inmuebles que en este Estado existiesen.

"Para decidir sobre la presente competencia la Corte considera:

"Primero. Una vez restablecida la unidad de soberanía que solamente es nacional, á virtud de la Constitución que rige desde Agosto del último año, y consiguientemente suprimida la soberanía de los Estados, todos extinguidos, es obvio que no pueden tener aplicación en el asunto los principios del Derecho de gentes que rigen entre Estados soberanos. Debe aplicarse la legislación nacional, en los asuntos nacionales, y si se trata de especiales disposiciones de los estinguidos Estados, ha de estarse á lo que ellas disponen, en lo que exclusivamente atañe á cada Departamento, según lo preceptuado por el artículo H transitorio de la Constitución, mientras no rija la ley 57 del presente año "sobre adopción de Códigos y unificación de la legislación," vigencia que no tendrá efecto sino desde el día veintidós del mes en curso.

"Segundo. Pero también es obvio que, si transitoriamente rigen ahora las leyes de los respectivos Departamentos (estinguidos Estados), es en todo aquello que se refiere exclusivamente á la vida legal interna de cada una de esas secciones, no á lo que mira á las relaciones que pueda haber entre los Departamentos, en lo externo; y es evidente, por lo tanto, que en caso de conflicto entre dos legislaciones de antiguos Estados, debe aplicarse, para resolverlo, la legislación nacional, única que puede ser simultáneamente obligatoria para dos ó más Departamentos. Esta legislación común reemplaza al Derecho de gentes que antes podía ser aplicado en defecto de leyes nacionales precisas.

"Tercero. Por último, el Código judicial de la Nación, único que puede ser aplicado en el presente caso, respecto de dos *Departamentos en discordancia*, dispone en su artículo 97 que sea juez competente en los juicios de sucesión por causa de muerte, el del domicilio que tenía el finado al tiempo de la muerte, á no ser que éste hubiese hecho testamento, etc.; y como el caso de que se trata es precisamente de muerte *ab-intestato*, es obvio que debe estarse á lo determinado por el domicilio que tenía al morir el Presbítero Arce. A todo esto se añade lo terminantemente dispuesto, con relación al domicilio por los artículos 78 y 80 del Código Civil nacional, y la conveniencia de evitar que se divida la continencia de la causa.

"Por estas consideraciones la Corte Suprema resuelve:

"Es juez competente para conocer del juicio de sucesión de que se trata, el de Aguachica, ó de la Provincia del Sur del Departamento del Magdalena. Remítase á dicho juez todo el expediente de esta competencia, y dése aviso de esta resolución á los dos Jueces que la han sostenido.

"Notifíquese, cópiese y publíquese en la *Gaceta Judicial.*"

"Considerado este proyecto, la Corte lo aprobó por unanimidad de votos.

"Con lo cual se dió por terminado el presente Acuerdo, que firman todos los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 48.

En la ciudad de Bogotá, á veintiséis de Julio de mil ochocientos ochenta y siete, reunidos los señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia del infrascrito Secretario, Su Señoría el Presidente mandó dar lectura al siguiente despacho telegráfico recibido ayer:

"Medellín, 22 de Julio de 1887.

"A Su Señoría el Presidente de Corte S.—Bogotá.

"El Tribunal del Distrito de Antioquia duda acerca del procedimiento que deba adoptar al despachar los negocios de su cargo; pero para no demorar el curso de éstos, mientras por la Corte se resuelve este punto, y teniendo presente las disposiciones de los artículos 99 de la ley 61 de 1886 y 337 de la ley 57 de 1887, ha acordado proceder *individualmente*, conforme á la organización, jurisdicción y competencia que ha tenido por la legislación del extinguido Estado, porque ésto es lo que menos inconvenientes ofrece para la buena marcha de la administración de justicia. El Tribunal consulta, pues, cómo debe proceder. ¿Continúa así, ó qué ha de hacer en lo sucesivo?

SILVERIO ARANGO P."

Como el estudio de este asunto fué repartido en comisión al señor Magistrado doctor Samper, éste propuso el siguiente proyecto de resolución:

"Vista la consulta que el Tribunal Superior de Antioquia dirige á la Corte:

"Tomando en cuenta el artículo 116 de la ley 57 del presente año "sobre adopción de Códigos y unificación de la legislación nacional," que yá se halla en ejecución; el cual artículo faculta á la Corte Suprema para resolver, á solicitud de los Tribunales Superiores ó á propuesta de cualquier Magistrado de la misma Corte, sobre las dudas que ocurran en la inteligencia de las leyes relativas á organización y procedimiento judiciales;

"Considerando: Primero. Que el artículo 99 de la ley 61 de 1886 (que yá es el 99 del Código Judicial) confiere á los Tribunales Superiores las atribuciones asignadas á la Corte Suprema en el Código citado, y no conferidas á la Corte Suprema de Justicia en la Constitución ni en la misma ley 61;

"Segundo. Que el procedimiento para el ejercicio de las atribuciones es inseparable de éstas mismas, y que, por lo tanto, las que tengan al presente los Tribunales Superiores deben ser ejercidas del mismo modo que el Código Judicial le prescribía á la Corte ejercerlas, cuando le estaban conferidas;

Tercero. Que terminantemente el artículo 270 de la citada ley 57 del presente año, en su segundo miembro, dispone que el procedimiento en lo criminal, de los Tribunales de Distritos en segunda instancia, ha de ser el detallado en los artículon 1,809 á 1,817 del Código Judicial; y estos artículos exigen fallos colectivos de la Corte entera, bien que su preparación, así como la secuela de la instancia, se encarga á un Magistrado substanciador;

"Cuarto. Que por analogía, cuando los Tribunales Superiores conocen en primera instancia, en negocios civiles, han de proceder como procedían, según el Código Judicial de la Nación,

las entidades judiciales á quienes dichos Tribunales reemplazan en el ejercicio de ciertas atribuciones en primera instancia, una vez que han caducado los Códigos de los extinguidos Estados; y que se produciría una monstruosa anomalía si los Tribunales procediesen de muy distinta manera, según que los negocios fuesen criminales ó civiles;

"Quinto. Que si se aceptase el arbitrio que indica el Tribunal de Antioquia, de hecho continuaría la República como en federación, en lo judicial, y sería inoficiosa la citada ley 57, que ha querido, conforme al artículo *H* (segunda parte) transitorio de la Constitución, unificar lo más pronto posible todos los procedimientos judiciales; con lo que, según las antiguas leyes de los Estados, cada Departamento tendría reglas procesales distintas, produciéndose así la anarquía y el caos;

"Sexto. Que si bien es cierto que el artículo 337 de la citada ley 57 se refiere de un modo general á los procedimientos, éstos no pueden menos de ser uniformes en toda la República, una vez que se ha unificado la legislación; y si hay manifiesta contradicción entre dicho artículo y todo el contexto y espíritu de la misma ley, debe estarse á lo que disponen los artículos 30 y 32 del Código Civil;

"La Corte resuelve:

"Los Tribunales de Distrito deben pronunciar todos sus fallos en cuerpo de todos sus Magistrados, en cualquier instancia, si no están divididos por la ley en dos salas, y si lo estuvieren, en sala entera, según que el respectivo negocio sea civil ó criminal. Todo sin perjuicio de que la secuela del juicio ó de la instancia sea encargada á un Magistrado substanciador, hasta la preparación de cada fallo inclusive."

Comuníquese esta resolución por telégrafo y por nota á todos los Tribunales Superiores de Distrito, para que por todos sea cumplida, y solicítese su publicación en el *Diario Oficial*, sin perjuicio de hacerlo en la *Gaceta Judicial*."

Discutido detenidamente el anterior proyecto, la Corte lo aprobó por unanimidad de votos.

Con lo cual se dió por terminado el presente acuerdo, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Junio veintiuno de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Tribunal superior del Distrito judicial del departamento de Cundinamarca, consulta con esta Suprema Corte el auto que profirió, con fecha tres de Marzo del presente año, por el cual declara prescrita la acción criminal respecto de David Salgado, Juez 2.° del Circuíto de Facatativá, por haber dado lugar á demoras en el sumario que se seguía contra Salvador Camelo y Celestina Moreno por el delito de hurto.

Consta en el proceso que desde el diez de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cuatro se señaló por el Juez el día veinte del mismo mes para la celebración del juicio; y consta también que el proceso estuvo demorado hasta el quince de Enero del presente año, fecha en la cual el Juez declaró prescrita la acción criminal respecto de los sindicados Camelo y Moreno.

Es verdad que á los autos se ha agregado la respectiva diligencia, en que aparece que el señor David Salgado se posesionó del empleo de Juez 2.° del Circuíto de Facatativá el día ocho de Enero de mil ochocientos ochenta y tres, pero como la demora duró hasta el quince de Enero del presente año, es claro que aunque la acción criminal puede estar prescrita respeto de Salgado, puede no estarlo respecto de los demás individuos que intentervinieron como Jueces posteriormente, y que son también responsables de las demoras.

En consecuencia, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el auto consultado, y dispone que el Tribunal de primera instancia obtenga los datos necesarios para saber qué individuos desempeñaron el Juzgado 2.° del Circuíto de Facatativá, desde el trece de Diciembre de mil ochocienros ochenta y cuatro hasta el quince de Enero del presente año; y que una vez obtenidos tales datos, dicte nuevamente la resolución que estime legal.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Julián R. Cock Bayer—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A. Secretario.

En veintidos de Junio de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto anterior.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Junio veinticinco de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Agente fiscal del Territorio nacional de San-Martín, yá reincorporado en el Departamento de Cundinamarca, denunció desde Villavicencio, el veinte de Marzo de mil ochocientos ochenta y dos, ante esta Superioridad, ciertos hechos que afirmó había ejecutado el Juez nacional del Territorio, Guillermo Chaves, hechos que calificó de punibles conforme á los artículos 142, 394 y 395 del Código Penal de la Nación. Hízose, por órdenes diversas de la Corte, la investigación del caso; remitióse después el sumario al Tribunal Superior de Cundinamarca, á virtud de disposición legal y de acuerdo de la Corte misma, y dicho Tribunal ha pronunciado, el siete de Mayo último, auto de cesación de todo procedimiento, por estar prescrita la pena. Consultado tal auto con esta Superioridad, se ha seguido la tramitación del caso, y para fallar, la Corte considera:

1.° Que aunque en el sumario no está perfectamante comprobada la fecha en que se ejecutó cada uno de los hechos denunciados, por lo menos consta que la denuncia fué dada el veinte de Marzo de mil ochocientos ochenta y dos, y en el siguiente mes de Abril se comenzó el sumario.

Así, tomando por lo menos esta fecha como punto de partida es patente que cuando se dictó el auto de cesasión habían transcurrido más de cinco años desde la época de la denuncia y de la investigación primera.

2.° Que, caso de haberse comprobado la culpabilidad de Chaves, las penas en que hubiera incurrido serían las determinadas en los artículos 394 y 395 del Código Penal, que no son corporales; y por lo mismo, el caso está comprendido en el artículo 71 de dicho Código, que establece la prescripción por cuatro años, cuando la pena no es corporal.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador general, confirma el auto consultado.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial*, y devuélvase el expediente al Tribunal Superior que lo remitió.

R. Antonio Martínez—José María Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A. Secretario.

Al señor Procurador general notifiqué el auto que precede hoy veintisiete de Junio de mil ochocientos ochenta y siete.

ARANGO M. *Guerra A.* Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veinticinco de Junio de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Con fecha veintinueve de Abril de mil ochocientos ochenta y seis, el Juez del Circuíto de Chocontá, Tiberio C. Rubio, dictó auto por el cual declaró "con lugar á formación de causa contra Cerbeleón Medellín, como autor principal de los delitos de falsificación y circulación de billetes del Banco Nacional; y contra Adelaida Medellín como encubridora, por que distribuyó los efectos en que consiste el delito de falsificación y el de circulación, sabiendo su procedencia,—artículo 90 del Código Penal nacional,—y su responsabilidad se comprueba con su libre y espontanea confesión." Esto dijo literalmente la parte resolutiva del auto.

Seguido el juicio, el mismo Juez pronunció sentencia, el veintidós de Julio del mismo año, y absolvió á los reos, aduciendo fundamentos cuya exactitud no es del caso examinar. Consultada la sentencia, el Tribunal Superior de Cundinamarca la confirmó, en fallo de veintiséis de Marzo del presente año, fundándose en estas consideraciones; que no eran aplicables al caso los artículos 269 y 270 del Código Penal, citados por el Juez en la parte motiva de su auto de proceder, sino los artículos 267 y 268 del mismo Código; que conforme al artículo 1,542 del Código Judicial, no es permitido, en cuanto á los delitos comunes, citar los artículos aplicables, sino definir de un modo general los cargos criminosos por los cuales se forma ó abre causa; y que el artículo 1,630 (ibid) no permite hacer recaer la sentencia, sino sobre los cargos por los cuales se ha declarado con lugar á seguimiento de causa.

Pero al pronunciar el Tribunal Superior su sentencia confirmativa de la de primera instancia, dispuso que se sacara copia de lo conducente para averiguar la responsabilidad en que hubiera incurrido el Juez del Circuíto de Chocontá, por la violación del citado artículo 1,542. Preparóse el sumario, y el mismo Tribunal, por auto del diez de Mayo último, ha declarado que no hay lugar á proceder contra el mencionado Juez; auto que se ha consultado con esta Superioridad. Sustanciada la consulta, llega el momento de resolver, y para ello la Corte considera:

1.° Es evidente que el objeto y espíritu del tercer aparte del artículo 1,542 que dos veces se ha citado es éste: impedir que al declararse con lugar á seguimiento de causa, se formulen los cargos (tratándose de delitos comunes) con precisa determinación de los artículos infringidos, lo que ofrece muy graves inconvenientes; sino que, por el contrario, han de determinarse los cargos en general, designándose simplemente los delitos cometidos. Pero es patente que el Juez Rubio no citó los artículos penales en la parte resolutiva de su auto, que es la que hace fuerza y produce efectos. Hizo las citas en la parte puramente motiva, como para justificar sus conceptos, y por lo tanto, con ello no quedó viciado el auto. En consecuencia, cuando el Tribunal conoció del negocio en consulta, pudo muy bien dictar sentencia condenatoria, si existían las pruebas suficientes, aplicando los artículos que fueran adecuados á los cargos materia del proceso, esto es, á falsificación de billetes de Banco y otros documentos, puesto que el auto de proceder no se había dictado sino en general, "por los delitos de falsificación y circulación de billetes del Banco Nacional," sin determinarse, en la parte resolutiva, los artículos infringidos.

2.° Aduce el Tribunal Superior en su auto que se examina, como razón para no someter á juicio al Juez Rubio, que el auto censurable de éste fué consentido por las partes, pudiendo haber sido apelado, y que, por lo tanto, el Juez que cometió, en concepto del Tribunal, la falta, es excusable de pena, conforme al numeral 1.° del artículo 429 del citado Código Penal. Esta consideración es perfectamente fundada, y sería bastante para sobreseer, caso que se estimase á Rubio responsable por el auto tantas veces aludido. Pero es de notar que el Tribunal Superior, cuando falló sobre el juicio criminal seguido á los Medellines, es posible que no tuviera razón para absolver á éstos, puesto que se fundó en esta consideración: que no se podía condenar, aplicando los artículos realmente aplicables á los delitos cometidos, por cuanto el Juez, en su auto de proceder, no había determinado los cargos de un modo general; cosa inexacta, como se ha puesto de manifiesto. Por otra parte, yá que el Tribunal Superior creyó necesario absolver, sólo por atender al artículo 1,630 del Código Judicial, debió, en cumplimiento de su deber, mandar que se instruyese nuevo sumario, á fin de que se castigasen los delitos cometidos, por medio de un procedimiento regular; deber con el cual no cumplió el Tribunal Superior.

Por lo expuesto, y de acuerdo en lo principal con el señor Procurador general, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto consultado.

Y por cuanto, según lo que resulta del sumario, pudiera ser responsable de faltas el Tribunal Superior de Cundinamarca, se resuelve además:

Sáquese copia de todos los autos que se hallan en este sumario para ponerlos en repartimiento, junto con los demás documentos conducentes y el presente fallo.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial*, y devuélvase el expediente, una vez cumplido lo que se ordena.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintisiete de Junio de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintisiete de Junio de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Ante el Juzgado del Circuíto de Ipiales, en el extingido Estado del Cauca, se seguía juicio criminal á Eugenio Sarmiento y Belisario Ibáñez por el delito de heridas, los cuales estaban gozando del beneficio de excarcelación. Habiéndose ausentado Sarmiento con dirección á la Capital de la República, fué interrogado su fiador, Joaquín Herrera, para que manifestara qué funcionario había autorizado á Sarmiento para que se ausentara, á lo cual respondió que el Jefe Municipal de Obando, señor Avelino Vela, había expedido un certificado á favor de Sarmiento, documento que al efecto presentó al Juzgado.

Dicho certificado contenía dos afirmaciones:

1.ª Que Eugenio Sarmiento había permanecido en Ipiales hasta el doce de Septiembre de mil ochocientos ochenta y cuatro; y

2.ª Que en la Jefatura no se había recibido queja alguna en su contra.

Como el certificado fué expedido cuando yá se había abierto causa criminal á Sarmiento, el Fiscal de la Provincia de Obando inició la respectiva instrucción sumaria, á fin de averiguar la responsabilidad que pudiera corresponderle al Jefe municipal por la expedición de aquel documento.

Perfeccionado el proceso, fué sometido al estudio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, quien, con fecha veintitrés de Abril del presente año, dictó auto de sobreseimiento, y ordenó se consultase tal providencia con esta Superioridad, lo cual se ha verificado.

En apoyo de auto de sobreseimiento militan tres consideraciones, á saber:

1.ª Que los hechos contenidos en el certificado expedido por el Jefe municipal, fueron afirmados con referencia á los datos que existían en la oficina de tal empleado, y por consiguiente no pueden reputarse falsos;

2.ª Que no hay constancia de que el Jefe municipal expresado tuviera conocimiento de que á Sarmiento se le seguía causa criminal; y

3.ª Que aunque el certificado hubiera contenido hechos falsos, ese documento no habría podido motivar legalmente la ausencia del sindicado Sarmiento.

En atención á lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo con la opinión del señor Procurador general, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de lo ley, confirma el auto consultado.

Notifíquese, cópiese pubíquese y devuélvase el proceso.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En treinta de Junio de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general al auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

CONSTITUCIÓN DE COLOMBIA.

ESTÁ DE VENTA en la Tesorería general, en edición de cuaderno, á 20 centavos el ejemplar.

IMPRENTA DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 31

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 6 de Agosto de 1887.

CONTENIDO.

	Pág
ACUERDOS DE LA CORTE.	
Acuerdo número 46 relaivo á ciertos nombramientos de empleados de la Corte	241
Acuerdo número 49, relativo á una consulta del Tribunal Superior del Cauca	"
SENTENCIAS DEFINITIVAS.	
NEGOCIOS CRIMINALES.	
Pronunciada en la causa seguida, por fuga de un reo, contra el Capitán Guillermo Escobar y el Subteniente Timoteo Lalinde	"
NEGOCIOS CIVILES.	
Pronunciada en un juicio ejecutivo seguido contra Matías Ahumada	242
Sobre anulación de una tercería promovida en un juicio ejecutivo contra el Presbítero Ramón Hoyos	243
AUTOS INTERLOCUTORIOS	
NEGOCIOS CRIMINALES	
De confirmación de un auto de sobreseimiento proferido por el Tribunal Superior de Antioquia	244
Sobre id. do otro id. proferido por el Tribunal Superior de Tundama.	"
De revocación de un auto de cesación de procedimiento, por prescripción, dictado por el Tribunal Superior de Cundinamarca	245
Sobre incompetencia de la Corte para conocer de un sumario por delito político	"
Sobre confirmación de un auto de sobreseimiento proferido por el Tribunal Superior de Pasto	"
Sobre incompetencia de la Corte para conocer de un sumario por delito político	246
Sobre confirmación, en parte, de un auto de sobreseimiento del Tribunal Superior de Cundinamarca, y ampliación del sumario, en otra parte	"
Sobre confirmación de un auto de sobreseimiento proferido por el Tribunal Superior de Santander, en sumario seguido contra Vicente Villamizar	"
Sobre incompetencia de la Corte para conocer de un sumario por delito político	247
Sobre confirmación de un auto de sobreseimiento proferido por el Tribunal Superior de Cundinamarca	"
Sobre devolución de un expediente remitido de Panamá, para que la sentencia sea proferida por el Tribunal competente	248
NEGOCIOS CIVILES	
Sobre una apelación en juicio civil, que se declara desierto	"
Sobre desistencia tácita de una apelación en juicio ejecutivo	"

GACETA JUDICIAL.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

ACUERDO NUMERO 46.

En Bogotá, á siete de Julio de mil ochocientos ochenta y siete, se constituyó la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario.

Se dió cuenta de un memorial del señor Isidoro Laverde Amaya en el cual se excusa de aceptar el destino de escribiente de la Secretaría de esta Corte Suprema, para el cual fué nombrado en Acuerdo de fecha dos del mes en curso. Se admitió dicha excusa y se procedió en seguida á hacer el nombramiento de la persona que deba reemplazarlo; practicada la votación y verificado el escrutinio, resultó elegido por unanimidad el señor Marcos Cortés.—En consecuencia, la Corte lo declaró legalmente nombrado en propiedad.

En seguida se procedió al nombramiento de Portero-escribiente en propiedad, destino que queda vacante por la promoción del señor Cortés; practicada la votación y verificado el escrutinio, resultó elegido por unanimidad el señor Antonio Pachón, y la Corte así lo declaró.

En consecuencia, la Corte dispuso comunicar esta designación á los nombrados y á Su Señoría el Ministro de Gobierno para los fines consiguientes.

Con lo cual se concluyó el presente Acuerdo que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 49.

En Bogotá, á veintiocho de Julio de mil ochocientos ochenta y siete, reunidos los señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia del infrascrito Secretario, se dió lectura á un telegrama del Tribunal del Distrito Judicial del Cauca, dirigido á Su Señoría el Presidente do la Corte Suprema, con fecha 25 del mes en curso, el cual es como sigue:

"Duda este Tribunal qué procedimiento debe seguirse en la División de Resguardos de indígenas. Si por no haberse legislado en la materia debe regir legislación del Estado, conforme al artículo H de la Constitución."

El señor Magistrado doctor Angarita hizo la siguiente proposición, en comisión, que fué adoptada por unanimidad.

"En contestación al telegrama dirigido á esta Superioridad por el señor Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca, con fecha 25 del mes en curso, dígase:

"Que la Corte Suprema no estima que haya duda en el procedimiento que debe seguirse en la División de Resguardos de indígenas, porque unificada la legislación, son las leyes de procedimientos nacionales las que deben aplicarse."

Con lo cual se concluyó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A Sanclemente—Ramón Guerra A.* Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, cuatro de Julio de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Juzgado y condenado Thomas Foyo por el delito de homicidio, y puesto en Colón, en su calidad de reo rematado, bajo la custodia de la fuerza pública que estaba allí de guarnición, se fugó el dos de Diciembre del año próximo pasado, de las seis y media á las siete de la noche. De esa novedad dió parte el señor Prefecto de Colón al señor Comandante general de la segunda columna del Ejército, residente en Panamá, y éste dispuso que se instruyera el correspondiente sumario para comprobar el hecho, y que, por cuerda separada, se averiguara la responsabilidad en que pudieran haber incurrido los Oficiales y los individuos de tropa á cuyo cargo esta dicho reo, habida consideración á que, conforme al Código Militar, estaban sujetos á la jurisdicción de diversos Consejos de guerra.

La fuerza estacionada en Colón era una Compañía del Batallón 14 de infantería, y sus Oficiales el Capitán Guillermo Escobar, el Teniente Pantaleón Ramírez y los Subtenientes Timoteo Lalinde y Vicente Echeverri, los cuales fueron llamados á juicio y sometidos á un Consejo de Guerra de Oficiales Generales. Éste, seguida la causa, condenó al Subteniente Lalinde, como autor principal, y al Capitán Escobar como cómplice, prévia la calificación del delito en segundo grado, al primero con circunstancias agravantes, á sufrir la pena de arresto en el cuartel de Policía, por el término de diez y siete meses y diez días, señalada por el artículo 243 del Código Penal de la Nación, con el aumento de la sexta parte de la diferencia entre el máximo y el mínimo, y al segundo, con circunstancias atenuantes, á diez meses y veinte días de arresto en el mismo cuartel, con la rebaja de la sexta parte de la diferencia entre el máximo y el mínimo; y absolvió del cargo al Teniente Pantaleón Ramírez y al Subteniente Vicente Echeverri.

No habiéndose interpuesto recurso de apelación de esa sentencia, el señor Comandante general de la 2.ª Columna del Ejército, de acuerdo con lo dispuesto por el Consejo de Guerra que la dictó, la ha remitido en consulta á la Suprema Corte, y ésta, después de haber hecho detenido examen del proceso y por no haber encontrado en él causal ninguna de nulidad, entra en el fondo del negocio.

De autos resulta que, habiéndose oído cerca de las siete de la noche un tiro como de revolvers, en la parte alta del cuartel en que estaba preso Foye con un centinela de vista, la Compañía se puso sobre las armas, y habiendo juzgado algunos que aquél hubiera dado muerte á éste y puéstose en fuga, pretendieron salir en su persecución, cosa que impidió por el momento el Subteniente Lalinde, Oficial de la guardia de prevención, quien subió acompañado de otros, á la parte alta del edificio á cerciorarse de lo ocurrido. Sabedor de que el preso se había fugado y de que fué el centinela quien disparó su fusil, volvió al cuerpo de guardia, y habiendo dispuesto entonces que salieran en persecución del reo, no fué habido éste; sin embargo de que se le buscó con interés hasta muy avanzada la noche.

Que el reo rematado Foye había sido puesto bajo la custodia de la fuerza pública estacionada en Colón, y que se fugó el dos de Diciembre último, son hechos comprobados plenamente en la causa y reconocidos por los enjuiciados; y siendo esto indudable, lo que debe examinarse es si los últimos dejaron evadir ó favorecieron la fuga de dicho reo, é incurrieron, por lo tanto, en la responsabilidad á que los artículos 1,621 del Código Militar y 243 del Código Penal de la Nación sujetan á los que falten así al cumplimiento de su deber.

Por lo que hace al Teniente Pantaleón Ramírez y al Alferéz Vicente Echeverri, lejos de ofrecer la causa prueba alguna que los constituya culpables, resulta que ellos no estaban de facción el día en que Foye se fugó, y que, sin embargo, habiendo sospechado, por el tiro que oyeron, que aquél se había escapado, se pusieron en armas, aun sin esperar orden, salieron tan pronto como se les permitió en busca del prófugo, é hicieron cuanto les fué dable por capturarlo. Justamente, pues, han sido absueltos en la sentencia consultada.

Respecto del Capitán Escobar y el Subteniente Lalinde la causa no ofrece prueba directa de que permitieran ó favorecieran de algún modo la fuga de Foye; pero como en la sentencia consultada se da por sentado que hay contra ellos prueba de indicios, preciso es examinar cuáles obran en contra de cada uno y qué fuerza legal tengan.

Al Capitán Escobar se le ha hecho el cargo de que, tocándole al Subteniente Lalinde el dos de Diciembre la comandancia de la guardia de prevención, que se remudaba diariamente á las diez de la mañana, consintió en que no se hiciera cargo de ella hasta por la tarde, dejándola miéntras tanto al mando del Sargento Andrés García; y se le ha imputado también que á la hora en que Foye se fugó, estaba comiendo en un hotel con Carlos Atié y Jorge Micolta, invitado por el primero, y que *éstos habían ido á visitar* al preso en dicho día.

Entendiéndose por indicio, según el artículo 1,616 del Código Judicial, un hecho que indica la existencia de otro hecho, ó que alguna persona determinada lo ha ejecutado ó ayudado á ejecutar, el permiso otorgado por el Capitán Escobar al Alférez Lalinde está muy lejos de reunir esos requisitos, y de él no puede deducirse que á la fuga de Foye contribuyera de alguna manera la circunstancia de no haberse hecho cargo Lalinde de la Comandancia de la guardia hasta las cinco ó poco más de la tarde; y menos puede colegirse tal cosa si se tiene en cuenta que dicho permiso se solicitó y obtuvo por haber ido en el mismo día el Alférez Lalinde de Panamá á Colón, custodiando el tren del ferrocarril, y necesitar por esto de algún descanso.

El otro indicio que se hace consistir en que á tiempo de la evasión de Foye estuviera comiendo el Capitán Escobar con Atié y Micolta, tampoco conspira á demostrar que eso tuviera por objeto facilitar la fuga del preso, ni que la visita que le hicieron á éste en dicho día Atié y Micolta tuviera en mira prepararla, porque de autos aparece que la autorización concedida para visitar á Foye no provenía del Capitán Escobar sino del Prefecto de Colón.

Respecto de la culpabilidad del Subteniente Lalinde, es de observar que deduciéndose ella de no haberse puesto él á la cabeza de la guardia á la hora acostumbrada, le es aplicable lo que sobre el particular se ha dicho con relación al Capitán Escobar, y que si bien no permitió que ninguno saliera del cuartel en el momento en que sonó el tiro, no debe atribuírse esto á intención deliberada de impedir que el reo fuera perseguido, sino que era muy natural saber antes de todo lo que hubiera pasado para obrar en consecuencia.

A falta de un indicio necesario ó presunción legal, requiere el artículo 1,621 del Código judicial que los indicios sean diferentes, que estén enlazados entre sí, que no dependa uno de otro y que concurran todos á demostrar el hecho principal, y no suministrando la causa respecto del Capitán Escobar y del Alférez Lalinde, indicios de esa clase, ni alguna otra prueba que demuestre la criminalidad ó culpabilidad de esos dos Oficiales, falta uno de los requisitos indispensables que para condenarlos exige el artículo 1,570 del Codigo judicial.

Por lo tanto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la sentencia consultada en cuanto absuelve del cargo al Teniente Pantaleón Ramírez y al Subteniente Vicente Echeverri, y la revoca en la parte en que condena al Capitán Guillermo Escobar y al Subteniente Timoteo Lalinde á las penas antes mencionadas y á las demás accesorias que determina el Código Penal de la Nación. Quedan, en consecuencia, absueltos del cargo por que se les llamó á juicio.

Hágase saber la presente, déjese cópia de ella, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el proceso al señor Comandante general de la 2.ª Columna del Ejército para los fines legales.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del día cuatro publiqué esta sentencia.

Ramón Guera A., Secretario.

En cinco de Julio de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general la sentencia precedente.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, treinta de Junio de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—A virtud de un contrato celebrado por el Gobierno nacional con el ciudadano francés José Bonnet, á veinte de Enero de mil ochocientos ochenta y cuatro, se creó una comisión oficial encargada de examinar ciertos cargamentos, la cual fué confiada al doctor Manuel Herrera Arce, como Jefe, y al joven Matías Ahumada, como adjunto ó subalterno, debiendo éstos trasladarse al Territorio de Casanare á practicar las operaciones de su cargo. Herrera y Ahumada, en efecto, se pusieron en camino desde Septiembre del año citado, pero se detuvieron en Sogamoso, y de allí regresaron á Bogotá en el mes de Noviembre sin haber practicado las operaciones de su cargo, por causas en que toda la responsabilidad incumbía al Jefe de la Comisión, pues Ahumada estoba enteramente á sus órdenes.

Como Ahumada recibió de la Tesorería general setenta pesos por su sueldo de un mes, en su calidad de *empleado* de la Secre-

taría de Hacienda nacional y adjunto á la mencionada Comisión, el señor Secretario de Hacienda dió orden á la Tesorería para que exigiese de dicho Ahumada la devolución de la suma recibida, por cuanto había regresado á Bogotá sin desempeñar su comisión, y aún sin haber tomado posesión del cargo. El Tesorero general extendió la correspondiente partida de cargo por reintegro, y comisionó al Ejecutor fiscal de la Nación para que lo llevase á efecto. Una copia auténtica de la orden de la Secretaría de Hacienda y otra de la del asiento de la Tesorería sobre reintegro sirvieron de recaudo ejecutivo, y en su virtud, el funcionario investido de jurisdicción coactiva libró el mandamiento ejecutivo, el diez y seis de Marzo de mil ochocientos ochenta y cinco, contra Matías Ahumada, por la expresada suma de setenta pesos ($ 70).

El ejecutado denunció para el embargo un sueldo de que disfrutaba, por no tener dinero para el pago, y oportunamente opuso las excepciones de compensación, pago y error de cuenta, de las cuales, la primera fué rechazada por el respectivo Juez de Derecho, conforme á lo expresamente dispuesto por el artículo 1,009 del Código Judicial. Seguida la tramitación del caso, el ejecutado comprobó plenamente con la notá oficial de su nombramiento y con las declaraciones irrefutables de los doctores Aníbal Galindo (que como Secretario de Hacienda había sido el superior de Ahumada y lo había nombrado adjunto á la Comisión de que se ha hecho mérito) y Manuel Herrera Arce (Jefe de la Comisión), los hechos siguientes:

1.° Que Ahumada fué nombrado por el Poder Ejecutivo para funcionar como adjunto al doctor Herrera, en comisión, en su calidad de empleado, "ó como empleado que era de la Secretaría de Hacienda nacional," y que, por lo tanto, estaba en posesión de su empleo, y no necesitaba nueva posesión para desempeñar una comisión accesoria ó accidental, y recibió legítimamente el sueldo de setenta pesos por un mes de servicio.

2.° Que Ahumada (que había merecido por su honradez, inteligencia y buena conducta el aprecio y estimación de su superior, el Secretario de Hacienda) cumplió con su obligación poniéndose en camino hacia Casanare y acompañando á su Jefe, el doctor Herrera, hata Sogamoso, donde hubo de detenerse porque así lo resolvió el Jefe de la Comisión, de quien absolutamente dependía.

3.° Que Ahumada no tenía libertad de seguir su viaje ni hacer lo contrario, sino que su conducta dependía de la voluntad de su Jefe, siendo éste únicamente responsable de sus resoluciones si obraba á su arbitrio.

En vista de estas pruebas y considerando que de ellas resultaba con evidencia la prestación posible del servicio oficial á que Ahumada estaba obligado como empleado público, el Juez de primera instancia, por senntencia del veinte de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, declaró probada la excepción de pago y mandó que cesase la ejecución. Fundóse para esto en que, conforme al artículo 1,626 del Código Civil nacional, "el pago efectivo es la prestación de lo que se debe," y lo que Ahumada debía como empleado público era la prestación de su servicio, que hizo efectiva, en la medida de lo posible y según lo exigieron sus superiores

La sentencia referida, que no fué apelada, ha sido consultada con esta Superioridad, y habiéndose substanciado debidamente el juicio es llegado el caso de fallar.

Para ello la Corte considera, que no se ha faltado en el juicio á ninguna formalidad legal y que es irrefutable la razón en que se ha fundado el Juez de primera instancia, según lo plenamente probado. Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador general, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto consultado.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—El Secretario, *Ramón Guerra A.*

Al señor procurador general notifiqué el auto que precede, hoy treinta de Junio de mil ochocientos ochenta y siete

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Julio nueve de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Por auto de fecha cinco de Agosto de mil ochocientos setenta y ocho, el Tesorero Municipal del Distrito de Sonsón (en el extinguido Estado de Antioquia), previa la liquidación del caso, libró mandamiento ejecutivo contra el Presbítero Ramón Hoyos, por la suma total de cuarenta y tres pesos, sesenta y cinco centavos ($ 43-65 cs.), que el ejecutado debía al Tesoro del Distrito por diversos motivos, entre otros, por réditos de un censo constituído sobre una finca del deudor, á favor de la instrucción pública municipal. Una vez trabada la ejecución, como el deudor no tuviese otros bienes, denunció lo que sobrase del valor de la finca hipotecada, pero advirtiendo que le había sido tomada y rematada por cuenta del Gobierno Nacional, en pago de un empréstito forzoso; y cuando estaba á punto de hacerse el remate, sin que el Tesorero ejecutante prestase atención á las observaciones que hiciera un empleado fiscal, á quien no reconoció personería, este empleado, que era el Colector de Hacienda del Estado en el mismo Distrito de Sonsón, entabló tercería excluyente, en nombre y como representante de la Nación, por cuanto la finca ejecutada había sido adjudicada, en remate público, al Gobierno Nacional.

Sin entrar en consideraciones sobre las irregularidades que hubo en el procedimiento y la falta de comprobación legal de la calidad de Colector de Hacienda que tuviese el opositor ó tercero excluyente (calidad que no se comprobó con los documentos del caso, sino con una información de nudo hecho), se hace constar que al cabo, el Juez del Circuíto de Río-Negro pronunció sentencia el quince de Abril de mil ochocientos setenta y nueve, por la cual declaró "no estar probada la tercería ú oposición excluyente que sobre el dominio de la finca á que ella se dirige, introdujo el Colector de Hacienda en el Distrito de Sonsón" etc. De este fallo apeló el mencionado Colector de Hacienda para ante esta Superioridad, y comenzada la actuación en segunda instancia, desde Julio de mil ochocientos setenta y nueve, una vez que el señor Procurador general pidió se declarase nulo lo actuado, por falta de personería del actor en la tercería y apelación, la Corte dictó auto, para mejor proveer, en veintinueve de aquel mes, por el cual dispuso se pidiese un informe al Presidente del Estado de Antioquia, sobre el carácter y funciones que tuviesen los Colectores de Hacienda, y sobre el carácter oficial que tuviese el sujeto que había figurado como Colector tercerista.

No emitió el Presidente de Antioquia el informe pedido, y el asunto quedó demorado por falta de este documento, hasta el veintidós de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, fecha en que el señor Procurador general pidió que se diese á la apelación el curso legal. Repartióse de nuevo el expediente, y el Magistrado substanciador ordenó, por auto del veintiocho del citado mes, que se exigiese de Su Señoría el Gobernador de Antioquia el cumplimiento del aludido auto de la Corte para mejor proveer. Al cabo se recibió el informe pedido, y como de él resultase claramente que los Colectores de Hacienda de los Distritos en 1878 no ejercían las funciones del Ministerio público en los asuntos del Estado y de la Nación, y que, "según el inciso 11, artículo 24 de la ley de 16 de Diciembre de 1859 orgánica de la Administración de la Hacienda del Estado," debía llevar la voz del Ministerio público en la capital del Estado el Administrador general del Tesoro, siempre que el Procurador general faltase ó estuviese impedido;" era evidente que en el Colector tercerista había faltado la personería necesaria para representar á la Nación.

Teniendo esto presente, el Magistrado substanciador, por auto del primero de los corrientes, y atendiendo á lo prevenido en el artículo 848 del Código Judicial, mandó poner en noticia de las partes la causal de nulidad advertida, á fin de que manifestasen ó nó su allanamiento. Notificado este auto por edicto, y personalmente al señor Procurador, éste ha declarado que nó ratifica lo actuado, y por lo tanto, que no se allana á subsanar la nulidad; y ha llegado el caso de que la Corte resuelva si ella existe, y debe procederse en consecuencia:

Para esto se considera:

1.° Que claramente ha informado la Gobernación de An-

tioquia y dispone la ley local respectiva, que los simples Colectores de Hacienda no son Agentes del Ministerio público;

2.° Que el artículo 109 del Código Judicial no concedía el carácter de representantes del Ministerio público, sino á la Cámara de Representantes, al Procurador general de la Nación y á los Procuradores ó Fiscales de los Estados y Territorios; y que "Procuradores ó Fiscales de los Estados para los efectos de este título, son los empleados que en aquellos llevan la voz fiscal en los asuntos civiles y criminales;"

3.° Que no hay en autos prueba alguna de que Mariano Ramírez, tercerista y apelante, fuese Personero ó Fiscal de la clase legal, sino simplemente Colector de Hacienda de un Distrito;

4.° Que, en consecuencia, cabe de lleno lo dispuesto por el artículo 848 del citado Código Judicial, sobre la nulidad que debe declararse por falta de personería, previo el procedimiento incidental que se ha seguido.

Por lo expuesto, y de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara nulo todo lo actuado, desde que se admitió la tercería excluyente formulada por Mariano Ramírez.

Se condena en las costas de toda la actuación en primera y segunda instancia, por mitad, desde que conoció de la tercería el Juez de Circuíto, á José I. Echeverri, Juez que dió motivo á la nulidad, por falta de personería del opositor ó tercerista, y á Mariano Ramírez, que hizo la tercería; división de costas que se impone conforme al miembro segundo del artículo 790 del citado Código Judicial.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del nueve de Julio de mil ochocientos ochenta y siete, se publicó la sentencia que precede.

Ramón Guerra A., Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Junio trinta de mil ochocietos ochenta y siete.

Vistos:—Ante el Tribunal Superior del extinguido Estado de Antioquia dió denuncio Juan de Dios Ribera, de que el día primero de Septiembre de mil ochocientos ocherta y tres, de regreso de la ciudad de Medellín para la de Yarumal, fué detenido en Santa-Rosa de Osos por un piquete de la fuerza del Estado que comandaba el capitán Adriano Villegas; y agregó el denunciante que le habían sido tomados unos pliegos que contenían boletas de elecciones, una alocución del Presidente de la República y algunas cartas particulares.

Como Ribera fué conducido al Despacho de la Prefectura del Departamento del Norte (hoy Provincia), empleo que entonces era desempeñado por José Villa Leal, el proceso ha tenido por objeto averigar la responsabilidad de este funcionario por los hechos denunciados.

Después de haberse agotado la investigación en el presente asunto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en Sala de primera instancia, pronunció auto de sobreseimiento, con fecha veintitrés de Marzo del presente año, auto que ha sido elevado en consulta á esta Suprema Corte.

Substanciada *debidamente la consulta*, la Corte fun la su decisión en las observaciones que en seguida su expresan:

Consta en el proceso, por la declaración de varios testigos presenciales, así como por la confesión perentoria del Capitán Adriano Villégas, que éste fué quien ordenó, bajo su exclusiva responsabilidad, la captura ó detención de Juan de Dios Ribera, con motivo, según lo afirma el mismo Villegas, de haber sospechado que Ribera era desertor de la fuerza del extinguido Estado de Antioquia.

Consta también, por la aseveración del denunciante, que los pliegos que llevaba le fueron tomados por el mencionado Capitán Villegas.

Consta igualmente que Ribera fué arrestado ó detenido en el cuartel que ocupaba la fuerza pública, y no en el local destinado por la autoridad pública para prisiones ó arrestos.

Es verdad que Ribera fué llevado al despacho del Prefecto, y que éste lo interrogó sobre asuntos políticos, pero este proceder de Villa Leal, además de que no puede constituír una prueba legal suficiente para considerarlo como partícipe en el hecho ejecutado por Villegas, está justificado, ó por lo menos explicado en lo posible, si se atiende á las ordenes superiores que él había recibido. Al efecto, por la correspondencia telegráfica, cruzada entre Villa Leal como Prefecto del Departamento del Norte y el Poder Ejecutivo seccional, consta que á aquél se le había encargado con interés empleara la mayor vigilancia en materia de orden público, pues el Gobierno de dicho extinguido Estado, temía un próximo trastorno local.

Por otra parte, según la exposición del testigo Braulio Machado y la aseveración del mismo ofendido, Villa Leal no aceptó el procedimiento del Capitán Villegas, y antes bien, se manifestó mortificado por tal acontecimiento.

La gravedad de este proceso depende de la circunstancia de haberse ejecutado los hechos que se investigan la víspera de unas elecciones populares; pero como lo insinúa el Tribunal de primera instancia, aunque á Villa Leal pudiera asignársele alguna responsabilidad moral en el asunto, no ha podido obtenerse la prueba legal necesaria para llamarlo á juicio.

Por lo cual, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador general, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma en todas sus partes el auto de sobreseimiento consultado.

Para averiguar la responsabilidad en que haya incurrido el Capitán Adriano Villegas, el Tribunal de 1.ª instancia hará sacar copia de las piezas conducentes de éste proceso y las pasará á la autoridad que fuere competente.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase.

R. Antonio Martínez, José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A. Secretario.

En treinta de Junio de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.* Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Junio treinta de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—En el auto de diez y ocho de los corrientes, que se da por reproducido aquí, expuso la Corte el origen, motivo y circunstancias que originaron este proceso contra Heliodoro Reina, las razones en que el Tribunal Superior del Distrito de Tundama se fundó para decretar sin lugar la formación de causa contra el Sindicado, y la manera como ha venido el proceso á esta Superioridad.

Después de practicadas las nuevas pruebas, que la Corte, por auto de mejor proveer creyó necesarias, se ha puesto en claro todo lo siguiente:

Que en el año de mil ochocientos ochenta y cinco, el Prefecto de Casanare, Salustiano Chaparro, fué investido con el carácter de Jefe Civil y militar de aquel territorio; que como á tál se le atribuyeron facultades amplias para obrar en el Territorio de su jurisdicción, en representación del Gobierno; que en el ejercicio de tales facultades suspendió al Juez del Territorio, Melchor Isaza, por la circunstancia de tener éste causa criminal pendiente, y además, por haber abandonado el destino; que para llenar la vacante nombró, en veintiuno de Abril de mil ochocientos ochenta y cinco, á Heliodoro Reina; y que, en consecuencia, al funcionar éste como Juez del Territorio de Casanare, no usurpó jurisdicción ni entró indebida y maliciosamente en el ejercicio de su empleo.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de

la ley, confirma el auto dictado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tundama, en treinta y uno de Marzo del corriente año, sobreseyendo en las diligencias sumarias instruídas contra Heliodoro Reina por el cargo de haber ejercido sin título legítimo las funciones de Juez del Territorio de Casanare, y cuyo auto ha venido en consulta.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal respectivo.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A. Secretario.

Notifiqué al señor Procurador general el auto que precede, hoy, dos de Julio de mil ochocientos ochenta y siete.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, primero de Julio de mil ochocientos ochenta y siete.

En la causa que se siguió contra Felisa Prieto y Félix Acero, por el delito de estafa, observó el Tribunal Superior del Distrito judicial de Cundinamarca, por auto de veinte de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete, que se había incurrido en algunas demoras, y ordenó que se sacara copia de lo conducente para averiguar la responsabilidad en que hubieran podido incurrir los empleados mororos.

Se expidieron las copias que se creyeron conducentes para promover la investigación respectiva.

Sin que se hubieran obtenido copias de los nombramientos y de las diligencias de posesión relativas á los Jueces que estuvieron desempeñando el Juzgado 2.° del Circuíto de Facatativá, en la época en que se siguió la causa contra Prieto y Acero, cuya investigación debió empezar antes del año de mil ochocientos ochenta y cuatro y terminó, por auto del Tribunal de veinte de Febrero último, se solicitó por el señor Fiscal del Tribunal Superior que se declarara prescrita la acción criminal.

El Tribunal accedió á esta petición, por auto de veinticinco de Mayo del año en curso, ordenando, además, que cesara el procedimiento y que se consultara la decisión con la Suprema Corte.

Substanciada la consulta, se pasa á resolver, haciendo previamente las siguientes consideraciones:

1.ª Durante la instrucción del sumario y la secuela de la causa contra Felisa Prieto y Félix Acero, pudo estar el Juzgado 2.° del Circuíto de Facatativá á cargo de varios Jueces, y si la pena está prescrita respecto de alguno ó algunos, puede no estarlo respecto de otros. No sería fácil obtener este resultado si no se tienen á la vista los documentos que tiendan á poner en claro qué personas desempeñaron el Juzgado, por lo cual deben agregarse á los autos, antes de determinar si hay prescripción, ó si es llegado el caso de exigir responsabilidad ó sobreseer; y

2.ª Para que el Tribunal pueda resolver con acierto después de agregar á los autos los documentos que por ahora faltan para complementar la instrucción, es el caso de revocar el auto consultado.

De acuerdo con el concepto del señor Procurador general de la Nación, la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: revócase el auto consultado y procédase por el Tribunal de primera instancia á ampliar el sumario, agregando copia de las piezas de que se ha hecho mérito.

Hecho esto, entrará el Tribunal á decidir lo que corresponda, según la ley.

Cópiese y devuélvase á la autoridad remitente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

Al señor Procurador general notifiqué el auto anterior, hoy cinco de Julio de mil ochocientos ochenta y siete.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, primero de Julio de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El presente sumario, instruído por el Juez del Circuíto de Toro (Distrito judicial del Cauca) por usupación de funciones, ejecutado, según se afirma, por Pedro Alvarez y Juan Mercado, con motivo de la rebelión ocurrida en mil ochocientos ochenta y cinco,—dió ocasión á un auto de fecha veinte de Mayo último, por el cual se mandó cesar todo procedimieeto, á virtud del decreto sobre amnistía del veinte de Julio de mil ochocientos ochenta y seis, y se dispuso consultarlo con esta Superioridad.

En fuerza de lo dispuesto en el artículo 99 de la ley 61 de 1886 (25 de Noviembre), la Corte ha dejado de ser competente para conocer de este asunto, que corresponde al respectivo Tribunal Superior. En consecuencia, la Corte se abstiene de conocer, y dispone que se remita el expediente al Tribunal Superior del Cauca (Buga) para lo de su cargo, dándose aviso al Juez del Circuíto de Toro.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial.*

R. Antonio Martínez—José María Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A. Secretario.

Al señor Procurador general notifiqué el auto que precede, hoy dos de Julio de mil ochocientos ochenta y siete.

ARANGO M. *Guerra A.* Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Julio primero de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Tribunal Superior del Distrito judicial de Pasto, en el Departamento del Cauca, consulta con esta Suprema Corte el auto de sobreseimiento pronunciado, con fecha cinco de Mayo del presente año, en los sumarios instruídos para averiguar la responsabilidad del Juez del Circuíto de Obando, Fernando Montenegro, por varios hechos ejecutados en el ejercicio de su empleo.

Los cargos formulados contra el expresado Montenegro son los siguientes:

1.° El haberse sustraído un expediente que se seguía contra el mismo sindicado, por hurto de varios semovientes.

2.° El haber demorado el despacho en el proceso iniciado contra José Idrobo y Clara Bermúdez por el delito de robo.

3.° El haber detenido arbitrariamente á Rafael Coral en la cárcel del Circuíto de Obando.

Como por estos hechos se habían seguido procesos separados fueron acumulados por excitación del respectivo Agente del Ministerio público, y en seguida fué proferido el auto que ha sido objeto de la consulta.

El primer cargo, ó sea la substracción del expediente, está desvanecido completamente con el testimonio de tres individuos que desempeñaron los empleos de Juez y Secretarios del Circuíto de Obando, respectivamente, quienes afirman que el proceso en referencia se halla en el archivo de dicho Juzgado; así como por el dicho del mismo denunciante, el cual asevera que el proceso ha aparecido en el Juzgado mencionado.

Respecto de la demora atribuída al Juez sindicado, hay que observar que en los autos que se examinan se halla original el sumario instruído contra José Idrobo y Clara Bermúdez, y por la lectura de dicho sumario se advierte que Montenegro dictó sus providencias judiciales dentro de los términos señalados por la ley; y si no continuó actuando, fué por haberse declarado incompetente para conocer en dicho asunto, como lo demuestra el auto que dictó al efecto.

El cargo de detención arbitraria también está infirmado satisfactoriamente. Contra Rafael Coral se procedía criminalmente por el delito de hurto, y habiéndose dictado por el Juez Montenegro auto de proceder contra Coral, fué mandado reducir á prisión por cuanto el delito de hurto merecía pena corporal conforme á las leyes. Así, pues, la prisión decretada fué una consecuencia legal del auto de enjuiciamiento, en lo cual no cabe arbitrariedad alguna.

En atención á lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto de sobreseimiento consultado.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el proceso.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benja-

mín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A. Secretario.

Al señor Procurador general el auto que precede le fué notificado, hoy dos de Julio de mil ochocientos ochenta y siete.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Julio dos de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Este expediente ha venido á virtud de consulta del auto dictado en Río-Sucio, el veinte de Mayo del corriente año, por el Juez del Circuíto de Toro, en el Departamento del Cauca, sobre el sumario instruído por el delito de rebelión contra Ciriaco Alzate, Tomás Zuleta y veintidós individuos más del Corregimiento de Arrayanal; y estando atribuído al presente á los respectivos Tribunales de Distrito conocer en segunda instancia en esta clase de causas, es clara la incompetencia de la Corte para fallar en este asunto.

Por lo tanto, la Corte Suprema de la Nación, de acuerdo con el señor Procurador general, se abstiene de resolver acerca del auto consultado; y dispone que se remita el expediente al Tribunal Superior del Distrito del Cauca, al cual pertenece el conocimiento, dando aviso de ello al Juez del Circuíto de Toro.

Notifíquese, cópiese y devuélvase.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

Al señor Procurador general notifiqué el auto que precede, hoy dos de Julio de mil ochocientos ochenta y siete.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Julio siete de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Resulta de las presentes diligencias que el sumario instruído para averiguar el delito de heridas perpetrado por Simón, Crisóstomo y David Hernández en las personas de José Baquero y Angel María Díaz, estuvo demorado en el despacho del Juzgado 5.° del Circuíto de Bogotá desde el diez y nueve de Agosto de mil ochocientos setenta y cuatro, en que se practicó el reconocimiento de los agraviados, el cual aparece suscrito por José E. Currea, como Juez, y Luis María Galindo, como Secretario interino, hasta el catorce de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco, en que se verificó la diligencia de repartimiento, firmada por el Juez Matiz G. y el Secretario de apellido Franco.

Resulta también que hubo otras demoras causadas en la misma actuación, desde la última de las expresadas fechas hasta el primero de Marzo del año en curso, en que de orden del Juez, así se dice, se extendió nueva diligencia de repartimiento, autorizada con la firma del Secretario, Bueno P.

El Tribunal Superior del Distrito judicial de Cundinamarca dispuso, con copia de lo conducente, averiguar los responsables de tales demoras, hasta que al fin, creyendo perfeccionado el sumario, pronunció sentencia, en diez y seis de Mayo último, declarando prescrita la acción criminal y el consiguiente derecho de imponer penas á los funcionarios morosos de que aquí se trata, fundándose para ello en la terminante disposición del artículo 49 del respectivo Código Penal.

Consultada dicha sentencia con esta Superioridad, se adoptó la tramitación correspondiente, y encontrándose yá el asunto en estado de dictar el fallo que convenga, se tiene previamente en consideración:

1.° Que el largo tiempo transcurrido del diez y nueve de Agosto de mil ochocientos setenta y cuatro, á Julio siete de mil ochocientos ochenta y cinco, demuestra por sí mismo que están prescritas las penas que pudieron imponerse á los funcionarios que, como Jueces, intervinieron durante el expresado tiempo en *el sumario aludido*; de manera que la declaratoria de prescripción respecto de esos funcionarios, no es en manera alguna objetable;

2.° Que no puede decirse lo mismo en cuanto á las otras demoras de que se ha hecho mérito, pues de catorce de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco á primero de Marzo del presente año, no han transcurrido los dos años que la ley exige para que la prescripción tenga lugar en casos de esta naturaleza; y, por lo mismo, la sentencia que se examina carece en esta parte de fundamento legal; y

3.° Que no hay constancia en autos, de los individuos que en ese último período hubieran asumido legalmente el carácter de Jueces del mencionado Circuíto.

Por lo tanto, la Corte Suprema de la Nación, de conformidad en parte con el concepto del señor Procurador general, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la sentencia consultada, en cuanto declara prescritas las penas que pudieran imponerse á los que funcionaron como Jueces del referido Circuíto, en el tiempo transcurrido de diez y nueve de Agosto de mil ochocientos setenta y cuatro á siete de Julio de mil ochocientos ochenta y cinco, y la revoca en la parte en que comprende en la misma prescripción á los que desempeñaron el propio Juzgado desde Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco, hasta el primero de Marzo del presente año.

El Tribunal de primera instancia ampliará la averiguación, disponiendo que se agregue al expediente copia de los nombramientos y diligencias de posesión de los Jueces del indicado Circuíto, en el lapso de tiempo de siete de Julio de mil ochocientos ochenta y cinco á primero de Marzo último. Hará constar asimismo si en las correspondientes relaciones de causas presentadas en las visitas de cárcel, se dió cuenta del estado del sumario cuyas demoras han motivado la presente actuación, y qué providencias se dictaron, si hubo lugar á ellas, por el Presidente de la visita. Por último, dispondrá la práctica de todas las demás diligencias que á su juicio sean necesarias para el mejor esclarecimiento de los hechos.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente al Tribunal Superior del Departamento de Cundinamarca.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En ocho de los mismos notifiqué el auto que precede al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Julio siete de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—En siete de Febrero de mil ochocientos ochenta y cuatro le denunció Santiago Contreras M. al Tribunal Superior del Estado de Santander que Vicente Villamizar, Jefe en aquel tiempo del Departamento de Pamplona, tenía á su servicio en el pueblo de Chopo gran número de reos rematados construyéndole una casa, y á otros haciéndole muebles; y en la declaración jurada que rindió el mismo denunciante agregó, que fuera del establecimiento de castigo pernoctaban más de veinte rematados, con conocimiento de dicho Jefe. Desde la fecha citada han venido prácticandose todas las diligencias que pudieran conducir al esclarecimiento de los hechos, y una vez terminadas, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santander, á quien correspondía conocer en primera instancia del negocio, ha dictado auto de sobreseimiento, que ha consultado con esta Superioridad y que el señor Procurador general de la Nación pide que se confirme.

Dicho auto se funda en que el primer cargo, es decir, el relativo á la ocupación de varios reclusos en la construcción de una casa en Chopo, no se ha probado en manera alguna; en que respecto del segundo sólo aparece que los reclusos Juan Pérez y Antonio Gaona salían á trabajar en el taller de carpintería de Ramón Martínez, no de orden del Jefe departamental y en muebles de éste, sino en obras de la Penitenciaría, á la cual había alquilado Martínez su herramienta para ese efecto, y que si bien los dos reclusos le ayudaban al último, en sus ratos de descanso, á construír unos ventorrillos mandados hacer por Villamizar, y recibieron de éste una gratificación por ese servicio no exigido por él, tal acción no es ni puede ser punible; y por lo que hace al tercer cargo apoya dicho Tribunal el sobreseimiento en que del sumario resulta que los rematados que pernoctaban fuera de la Penitenciaría sólo lo hacían cuando trabajaban á distancia considerable de ella.

Comparados por la Corte estos fundamentos con el mérito de lo actuado, los ha encontrado exactos y del todo conformes, y por lo tanto y de acuerdo con el concepto del señor Procurador general, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto de sobreseimiento consultado.

Notifíquese, déjese copia, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el sumario.

R. Antonio Martínez—Jose M Samper—Manuel J. Angarita Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En ocho del mismo mes y año notiqué el auto que precede al señor Procurador.

ARANGO M.— *Guerra. A* Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Julio ocho de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—De orden del Jefe municipal de Toro, Departamento del Cauca, se instruyeron las presentes diligencias, con fecha catorce de Julio de mil ochocientos ochenta y cinco, á efecto de averiguar la participación que en la última rebelión contra el Gobierno de la República hubieran tomado algunos vecinos del Distrito mencionado, y á tiempo que se adelantaba la averiguación, se dictó por el Poder Ejecutivo nacional el decreto número 418 de 20 de Julio de 1886, sobre amnistía, por lo cual el Juez del mismo Circuíto dictó auto, en veintiuno de Mayo del presente año, mandando cesar el procedimiento y disponiendo á la vez se remitiera en consulta á esta Superioridad.

Adoptada en esta segunda instancia la tramitación legal, se observa que el asunto no es de la competencia de la Corte, pues el hecho materia del procedimiento no es de aquellos cuyo conocimiento le esté atribuído en ninguna de las instancias que determina la ley 61 de 1886. "Provisional sobre organización y atribuciones del Poder Judicial, etc."

Por lo tanto, la Corte Suprema de la Nación, de acuerdo con el concepto del señor Procurador general, declara que no es á ella, sino al Tribunal Superior del Distrito judicial del Cauca, residente en Buga, á quien compete conocer del auto consultado, en cuya virtud dispone que se remita el expediente á dicho Tribunal, dándose aviso de esta determinación al Juez inferior.

Notifíquese, déjese la correspondiente copia y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En nueve de Julio de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, ocho de Julio de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—En la causa que se siguió á Mateo Morales en el Juzgado 2.° del Circuíto de Zipaquirá, por infracción del artículo 106 del Código Penal de Cundinamarca, pronunció sentencia el Tribunal, con fecha once de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco, y al propio tiempo que reformó el fallo que había sido apelado por el reo y por su defensor, observó que se habían ejecutado hechos que podían aparejarle responsabilidad al Juez que actuó en la primera instancia. Ordenó que se sacara copia de la parte conducente del expediente y que se le pasara al señor Procurador, á fin de que promoviera la investigación respectiva, para averiguar la resposabilidad en que hubiera podido incurrir el Juez inferior.

Con los documentos del caso se inició el sumario y se pusieron en claro estos hechos:

1.° Que en la parte resolutiva del auto de proceder, dictado contra Mateo Morales, con fecha cuatro de Agosto de mil ochocientos ochenta y cinco, se abrió causa por infracción de un artículo determinado del Código Penal, que según aparece hoy escrito, es el 106; pero que el que debió haber antes de que se raspara la parte en que está escrita la cifra 6, era el 105, siendo notorio que el cambio de la cifra 5 por la 6 fué efecto de una falsicación comprendida en el inciso 5.° del artículo 214 del Código Penal de Cundinamarca;

2.° Que el Juez de Zipaquirá omitió proponerles á los jurados la cuestión 5.ª de que trata el artículo 301 del Código de Procedimiento criminal de id.; y

3.° Que habiendo resuelto mal los jurados la tercera cuestión, no cumplió con el deber que le imponía el artículo 364 del Código Judicial en lo criminal.

De los hechos marcados con los ordinales 2.° y 3.° resultó ser responsable David Ovalle, que era quien desempeñaba el Juzgado 2.° del Circuíto de Zipaquirá en la época en que se cometieron las faltas ú omisiones de de que en ellos se trata, por lo cual el Tribunal, en auto de veintiuno de Febrero último, declaró con lugar á formación de causa contra él por los trámites extraordinarios, por infracción del artículo 266 del Código Penal, y sobreseyó respecto del delito de falsificación de que se habla en el ordinal primero, arriba citado, ordenando que se consultara la parte relativa al sobreseimiento.

Concluído el juicio contra Ovalle por la sentencia definitiva que pronunció el Tribunal con fecha nueve de Mayo último, en que se le condenó á pagar una multa de $ 20, al resarcimiento de daños y perjuicios y al pago de las costas procesales, sentencia que se declaró ejecutoriada, fué remitido el expediente á esta Suprema Corte, en consulta del sobreseimiento de que se hizo mérito en el auto de proceder yá citado.

Se ha surtido la tramitación exigida por la ley, y para resolver se considera:

Es incuestionable que en la parte final del auto de proceder dictado con fecha cuatro de Agosto de mil ochocientos ochenta y cinco por el Juez 2.° del Circuíto de Zipaquirá, contra Mateo Morales, se cambió la cifra 5 por la 6, de manera que allí donde se puso en el auto 105 se encontró después 106. Este hecho está demostrado con la comparación que se hizo del original con la copia. En ésta se encontró citado el artículo 105, que correspondía, sin duda, á lo que se puso en el auto original. Así lo afirma Francisco Chaves en la declaración que rindió el veintidós de Junio de mil ochocientos ochenta y seis. También está probado que el guarismo 6 se puso en el lugar en que se encontraba otro que se raspó previamente. (Véase el dictamen de los peritos Roque Morales y Carlos Tavera N., folio 26 vuelto).

Que el cambio de cifras se hizo de una manera maliciosa, se desprende de la circunstancia de que aplicando el artículo 105, la pena para el reo, una vez que se le condenara, sería mayor que la que le correspondería al declarar que se había infringido el 106.

Es de suponerse que no fué el Juez quien hizo tal cambio, y que su ánimo fué el de que el reo, sufriera, llegado el caso, la pena designada en el artículo 105, una vez que en la copia que se puso en el libro, se transcribió este último número del original, y así se le encontró.

Desde la fecha del auto de proceder hasta el día en que tuvo lugar el Jurado, transcurrieron dos meses cuatro días y, durante este tiempo fué manejado el expediente por el Juez, por Francisco Chaves, Eduardo Alvarez y Eugenio Orjuela B., como Secretarios, por los Escribientes del Juzgado, por el acusado Mateo Morales y por el defensor de éste, Tomás Cortés V.

Inútiles han sido los esfuerzos que, con interés digno de encomio, han hecho el Tribunal de Cundinamarca, el Fiscal del Tribunal de id. y el Juez comisionado, para descubrir quien sea el responsable del delito de cambio de citras en el expediente de que se ha hablado, y no se encuentra prueba alguna ni indicio de donde pueda deducirse que haya tenido parte en aquella gravísima falta el señor David Ovalle en su condición de Juez del Circuíto.

El auto consultado está, pues, arreglado á la ley, y por ello, de acuerdo con el concepto del señor Procurador general de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, la Corte lo confirma.

Por cuanto puede ser responsable alguno de los que intervinieron, además del Juez, en la causa contra Mateo Morales, el Tribunal ordenará que se saque copia íntegra del sumario y de la causa instruídos en averiguación del delito de falsificasión y de otras faltas cometidas por el Juez 2.° del Circuíto de Zipaquirá, inclusive la presente resolución y la pasará al señor

Fiscal del Distrito Judicial de Cundinamarca para que promueva ante la autoridad competente la investigación debida.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En nueve de Julio de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, doce de Julio de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Remitida en consulta á esta Superioridad, la sentencia absolutoria que pronunció el Juez del crimen del Circuíto de Panamá, con fecha veintiocho de Marzo del presente año, en el juicio de responsabilidad seguido por los trámites extraordinarios contra Bernardo Vallarino, en su carácter de Secretario de Gobierno del extinguido Estdado soberano de Panamá, como infractor del artículo 403 del Código Penal de la República, la Corte hace las observaciones siguientes:

1.ª Que la consulta no ha venido debidamente preparada, puesto que se omitió la susbtanciación que para estos casos previene el artículo 1,817 del Código de la República; y

2.ª Que la expresada sentencia se profirió, como se ha visto, en una fecha en que estaba yá vigente la ley 61 de 1886, la cual, en el inciso 2.° de su artículo 100, atribuye á los Tribunales Superiores de Distrito el conocimiento en primera instancia de las causas de responsabilidad seguidas contra los empleados de la categoría del de que aquí se trata.

Por lo tanto, esta Suprema Corte resuelve que se devuelva la actuación al Tribunal Superior del Distrito del Departamento de Panamá, que fué quien ordenó la consulta, por auto de ocho de Junio último, para que disponga se le dé el curso que fuere conforme á derecho.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En doce de Julio de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, treinta de Junio de mil ochocientos ochenta y siete,

Vistos:—En memorial presentado el quince de los corrientes, el General Leonardo Canal, como legítimo apoderado de Luis María Canal, en pleito sobre posesión y entrega de los terrenos denominados "Planadas" y "Mundo Nuevo," ubicados en el Circuíto de Cúcuta, solicitó que se declarase desierto el recurso de apelación promovido por Antonio María Ramírez contra un auto dictado en diez y seis de Mayo de mil ochocientos ochenta y tres por el Juez Superior de dicho Circuíto. Para pedirlo así el General Canal hizo presente que, habiendo sido concedida la apelación para ante esta Superioridad, desde el mes de Mayo del citado año, el apelante Ramírez había dejado abandonado su recurso por no haber suministrado el papel y las estampillas necesarios para la actuación en la Corte.

Por auto del día veintiuno se dispuso (después de traídos al Despacho los antecedentes) hacer la intimación del caso á Ramírez, según la ley; y, cumplido este auto, presentado nuevo pedimento por el apoderado de la contraparte, en el cual insiste en que se declare desierto el recurso, y dado por el Secretario el informe que comprueba la renuencia del apelante para cumplir con el deber de suministrar el papel sellado correspondiente, es claro que se ha seguido la tramitación establecida por el artículo 423 del Código Judicial.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve, conforme al citado artículo 423: Declárase desierto por desistencia tácita del apelante, el recurso de apelación entablado por Antonio María Ramírez de que se ha hecho mérito, quedando, por lo mismo, ejecutoriado el auto apelado. Condénase al apelante á pagar las costas del recurso. Devuélvase el expediente al juez remitente.

Notifíquese, cópiese y publíquese en la *Gaceta Judicial.*

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En treinta de Junio notifiqué al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

En cinco de Junio de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto que precede al señor General Leonardo Canal.

L. CANAL—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, primero de Julio de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—En tres de Agosto de mil ochocientos ochenta y dos el Juez de ejecuciones nacionales libró mandamiento ejecutivo contra Fernando Ponce y Segundo Lozano por la cantidad de dos mil quinientos ocho pesos sesenta centavos ($ 2,508-60), por los intereses de demora y por las costas que se causaron, proviniendo esta ejecución de derechos de importación causados en la Aduana de Barranquilla, por la sociedad comercial Fajardo, Lozano y Cómpañía, de la cual eran fiadores solidariamente obligados los individuos contra quienes la ejecución se libró.

Notificado á Lozano el mandamiento ejecutivo, interpuso apelación para ante esta Suprema Corte, y el recurso le fué concedido en el efecto devolutivo, desde el diez y ocho de Agosto de mil ochocientos ochenta y dos. Permaneció así el expediente, sin que las partes gestionaran en modo alguno, hasta el treinta del mes anterior, en cuya fecha fué repartido.

Dada vista al señor Procurador general, éste, en su exposición de diez y seis de Junio último, promovió declaratoria de desistencia del recurso, á causa de que el apelante no había suministrado el papel necesario para la actuación. Obtenido el informe de la Secretaría sobre la certeza de esta omisión, se señaló á Lozano el término legal para que suministrara el papel, conminándolo con la declaratoria de desistencia del recurso si permanecía remiso en facilitar el medio de seguir actuando. Notificada esta providencia y no habiendo cumplido el apelante con lo prescrito, el señor Procurador ha reiterado su solicitud, y el Secretario ha informado de nuevo á cerca de la renuencia de Lozano.

Se está, pues, en el caso del artículo 423 del Código Judicial, y por lo tanto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que Segundo Lozano ha desistido tácitamente de la apelación que interpuso en este juicio, quedando desierto el recurso y consiguientemente ejecutoriada la providencia apelada. Las costas del recurso son de cargo del apelante.

Notifíquese, cópiese publíquese y devuélvase al Juzgado de su procedencia.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

Al señor Procurador general notifiqué el auto que precede, hoy primero de Julio de mil ochocientos ochenta y siete.

ARANGO M.—*Guerra A.* Secretario.

ANUNCIOS.

"GACETA JUDICIAL."

El Gobierno ha resuelto bajar á la mitad el valor de las suscripciones á este periódico, desde el número 27 en adelante, precio que tendrán igualmente las colecciones de la *Gaceta.*

El Subsecretario de Gobierno, *Julio A. Corredor.*

IMPRENTA DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 13 de Agosto de 1887.

CONTENIDO.

Pág

RECURSOS DE CASACION Y DE HECHO.

NEGOCIOS CRIMINALES

Sentencia sobre nulidad de una causa seguida por asesinato..... 249
Id, que negó la casación solicitada por recurso de hecho contra una sentencia del Tribunal Superior de Popayán..... 250

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

De absolución, pronunciada en la causa militar seguida contra Juan C. Balanta por culpabilidad en la fuga de un reo..... 251

NEGOCIOS CIVILES.

Pronunciada en el juicio de reivindicación seguido por José S. Zúñiga contra la Nación en Cartagena..... 252

AUTOS INTERLOCUTORIOS

NEGOCIOS CRIMINALES

Sobre cesación en el conocimiento de un sumario, por prescirpción. 253
Sobre incompetencia de la Corte para conocer de un sumario por delitos políticos..... „
Auto idéntico al precedente..... 254
Sobre ampliación de un sumario remitido por apelación, en asunto de responsabilidad..... „
Sobre incompetencia de la Corte para conocer de un sumario por delitos políticos..... „
Sobre confirmación de un auto de sobreseimiento proferido por el Tribunal Superior de Antioquia..... „
Sobre confirmación de un auto de sobreseimiento del Tribunal Superior de Cundínamarca..... 255

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL.

Emitida en el juicio de oposición de Juan E. Ucrós y Botero Arango „
Id. con relación á un proyecto de ley objetado por el Gobierno como inconstitucional..... „
Id, relativa á una denuncia de Abraham Antorveza..... 256

GACETA JUDICIAL.

RECURSOS DE CASACIÓN Y DE HECHO.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Julio quince de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Al amanecer el veintinueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, Juan Chaves dió muerte violenta á Narciso Pineiro, en la sección del Valle, Provincia del Atrato, Departamento del Cauca, por consecuencia de una riña fuertemente sostenida durante esa misma noche, procediendo con asechanza según lo revela el proceso.

El Corregidor de la sección, tomó con diligencia y en el mismo día la averiguación del hecho, examinando á los testigos presenciales, comprobando el cuerpo del delito con el reconocimiento pericial del cadáver de Pineiro, recibiendo declaración indagatoria al reo, y remitiendo éste al Juez de la Provincia del Atrato, todo en el término de ocho días.

Recibido el proceso en Quibdó, por el Juez Provincial, y oído el parecer del Agente del Ministerio público, el indicado Juez, por auto de diez de Enero del corriente año, llamó á juicio criminal á Juan Chaves, por el delito de asesinato, no conforme al Código Penal de Cundinamarca, que es el aplicable, según el artículo J de la Constitución, sino conforme al Código Penal del Cauca. Seguido luégo el juicio con intervención del Jurado, éste declaró que se había cometido el delito de asesinato, y que Juan Chaves es responsable de ese delito como autor principal, en primer grado y con circunstancias agravantes.

Como consecuencias de este veredicto, el Juez Provincial dictó sentencia, en primero de Febrero último, aplicando siempre el Código Penal del extinguido Estado del Cauca, y condenando á Juan Chaves á la pena de diez años treinta y seis días de reclusión; á la pérdida de todo destino, cargo y empleo público y de toda pensión pagadera por el Departamento, y á la pérdida de los derechos políticos y á la suspensión de los civiles mientras durara la pena, con más el pago de las costas procesales y la indemnización de daños y perjuicios.

Notificada esta sentencia, el reo y su defensor, se conformaron con ella; pero no así el Fiscal, quien apeló para ante el Tribunal Superior del Distrito. Llevado allí el proceso y surtida la apelación, el Tribunal, por sentencia de veintiséis de Marzo del presente año, fundándose rectamente en que después de expedida la Constitución Nacional, yá no rige en ningún punto de la República otro Código, para cierta clase de delitos, que el de Cundinamarca sancionado en 1858, revocó la sentencia apelada, y condenó á Chaves á sufrir las penas siguientes, observando en la tramitación la legislación del Cauca: á la de muerte, después de ser declarado infame; al pago de costas; y á la indemnización de perjuicios causados por el delito.

El defensor del reo en segunda instancia, notificado que fué de esta sentencia, promovió el recurso de casación para ante esta Superioridad; pero el Tribunal, apoyándose en que de oficio debía surtirse la casación, por vía de consulta, negó el pedimento del defensor. Insistió éste y tornó el Tribunal á negarle lo pedido, con cuyo motivo el defensor solicitó copia de sus pedimentos para ocurrir de hecho, habiendo sido infructuosa esta diligencia, por persistente negativa del Tribunal.

La Corte hace mérito de este último incidente, para establecer la doctrina de que, cuando haya lugar al recurso de casación y medien para ello conjuntamente la consulta de oficio y el recurso de la parte, la primera no debe impedir el último, y aún este es preferente; porque la consulta de oficio es una precaución legal ó un remedio subsidiario, que no puede empequeñecer el primordial y cardinal de la parte á quien la sentencia afecta.

Así el Tribunal del Cauca ha debido de preferencia conceder el recurso del defensor, ordenando que si éste no se llevaba á efecto, se surtiera la consulta.

Esto establecido, y habiéndose en efecto consultado la sentencia antedicha con esta Corte, se ha dado á la consulta la tramitación establecida por la ley 61 de 1886; y oídos alternativamente el señor Procurador general y el defensor nombrado al reo, y surtida la audiencia pública, es llegada la ocasión de fallar según el mérito de los autos; y para ello la Corte considera:

Cuando el Juez Provincial del Atrato. dictó el auto en que llamó á juicio á Juan Chaves, regía yá en el Cauca la ley 61 de 1886, de 25 de Noviembre de ese mismo año; porque el auto fué dictado en diez de Enero último, como se ha dicho, y por consiguiente yá habían pasado más de treinta días después de la publicación de dicha ley.

Siendo esto así, yá no pudo el Juez Provincial conocer en la causa de que se trata, porque, conforme al artículo 102

de la ley mencionada, está atribuído á los Jueces Superiores de Distrito el conocimiento en los delitos de homicidio, que pueden comprender el de asesinato; y por consiguiente, era al Juez Superior del Distrito del Cauca, residente en Buga, á quien correspondía tomar conocimiento de la causa contra Chaves, una vez practicado el sumario; y el Juez de Quibdó debió abstenerse del conocimiento, haciendo que el expediente y el reo pasaran á la autoridad competente; siendo notable que esto no se hubiera hecho así, y más aún que el Tribunal no hubiera advertido la nulidad.

Versando el recurso de casación sobre las nulidades inherentes á las causales designadas en el artículo 38 de la ley tantas veces citada, figurando entre ellas las memoradas en los incisos 7.° y 9.° de ese artículo, relativas al defecto ó al exceso en el ejercicio de la jurisdicción, y á la falta en el procedimiento de las formalidades cuya omisión produce de suyo nulidad: disponiendo el artículo 51, en su inciso 2.°, que cuando la sentencia de nulidad se funde en las causales últimamente mencionadas la Corte se limite á hacer la declaratoria de nulidad; siendo inconcuso conforme á todas las leyes de procedimiento y á los principios generales de jurisprudencia que la falta de jurisdicción anula todo proceso; es claro, con evidente claridad, que en el presente caso, según lo que se ha establecido atrás, el proceso es nulo desde la primera instancia, siéndolo consiguientemente en la segunda, y que ni el Juez Provincial pudo llamar á juicio ni dictar sentencia, ni el Tribunal conocer del recurso de apelación, porque la jurisdicción estaba viciada en su origen. Y es igualmente claro que, mediante lo expuesto y las disposiciones legales referidas, la Corte no tiene para qué entrar por ahora en la apreciación de los hechos ni en la calificación del delito, ni en nada que se refiera al fondo del negocio.

Por lo tanto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara nula la sentencia consultada, y que lo es también la de primera instancia, y todo lo contenido en el proceso, desde el auto y vista fiscal que se hallan á la foja once en adelante. En consecuencia, ordena la reposición de la causa desde la foja citada, disponiendo que aquella vuelva al Juez Superior del Distrito del Cauca para que él aprehenda el conocimiento y le dé el curso legal.

La remisión se hará por conducto del Tribunal Superior que falló en segunda instancia.

Notifíquese, cópiese, publíquese y cúmplase con lo resuelto acerca de la devolución.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del quince de Julio de mil ochocientos ochenta y siete, se publicó la sentencia que precede.

Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y seis de Julio de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué la sentencia que precede al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Julio diez y nueve de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Carolina y Felisa Hernández interpusieron recurso de casación ante el Tribunal Superior del Distrito judicial de Popayán, contra una sentencia dictada por éste en última instancia, referente á la sucesión intestada de Gertrudis Sánchez; recurso que se entabló por pedimento fechado en 21 de Mayo del corriente año.

El Tribunal, fundándose rectamente en el artículo 65 de la *ley 61 de 1886*, negó el recurso interpuesto por las Hernández, por cuanto la sentencia á que éste se refería fué dictada en observancia del Código Civil del extinguido Estado del Cauca, con el carácter de legislación seccional, no habiendo llegado, por consiguiente, la oportunidad de la casación, pues que ésto, conforme al artículo y ley citados, no puede tener lugar sino respecto de fallos que se dicten en observancia de la legislación yá unificada ó nacional.

A virtud de esta negativa, interpúsose recurso de hecho, acompañándose copia del pedimento de las Hernández y del auto en que ese pedimento les fué negado; pero sin constancia alguna de las diligencias de notificación, como lo requiere el artículo 823 del Código Judicial de la Nación.

Por inmotivado que fuera este recurso, era preciso substanciarlo; y repartido el expediente, señalado día para la audiencia y oído el elegato del personero de la parte recurrente, es tiempo de entrar á decidir acerca de la gestión promovida.

El artículo 829 del Código últimamente mencionado, establece que para admitir un recurso de hecho, la Corte debe examinar si la providencia sobre que versa es apelable; si fué apelada en tiempo; si en tiempo se introdujo el recurso, y si el negocio es de carácter nacional; agregando que la falta de cualquiera de estas circunstancias debe producir la negativa del recurso.

Todo esto supone que debe mediar providencia apelable y apelada, y si esa apelación ha sido en tiempo. En casos de la naturaleza del presente, y aplicando por analogía la apelación á la casación, hay que saber si la sentencia sobre que versa el recurso es casable, y si ese recuso se introdujo en la debida oportunidad. Pero como no hay constancia en autos de la fecha de la notificación de la sentencia querellada de la parte actora en este incidente, falta una de las condiciones determinadas por la ley para que el recurso de hecho tenga efecto.

Esto en cuanto á la forma, que en cuanto á la esencia—que para el efecto sería el carácter nacional del asunto—las consideraciones expuestas por el Tribunal de Popayán en su auto de veintisiete de Mayo, son pereatorias y conluyentes.

Se ha alegado por el apoderado sustituto de las Hernández, que desde que, por el artículo H de la Coostitución, se declararon en vigor las leyes de los extinguidos Estados, por el mismo hecho quedaron ellas incorporadas en el régimen nacional, aunque con una nacionalidad divisible, y que, por consiguiente, la sentencia á que este recurso de hecho se refiere, fué dictada en observancia de una ley de naturaleza general. Esta argumentación, que apenas prueba sutileza de ingenio, no tiene fundamento sólido alguno. El artículo H de la Constitución, como artículo transitorio, y en previsión de las dificultades ó tiempo que requería el cumplimiento de lo dispuesto en su parte segunda, dió á la legislación de los Estados una vida también transitoria; pero siempre de naturaleza parcial y de observancia seccional; por lo cual habla en seguida de la unificación de la legislación nacional. Y como la unificación es antitética de la divisibilidad y seccionalidad, es evidente que hasta que comience á regir la ley de unificación no existen leyes de naturaleza general en lo civil y procesal.

Por esto el artículo 65 de la ley 61 de 1886, determina que los recursos de casación y de revisión no pueden ser admitidos, sino cuando tengan por objeto corregir el agravio inferido, ó la errónea aplicación de una ley de carácter general, esto es, de una ley que al tiempo de su aplicación rija en toda la República; lo cual no sucede en el presente caso. Más claro; la ley 61 citada, estableció una condición suspensiva para los efectos de la casación, condición que subsiste aún.

Por lo expuesto, la Corte Suprema Nacional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que es inadmisible el recurso de hecho intentado por parte de Carolina y Felisa Hernández, respecto de la providencia del Tribunal de Popayán que les negó la alzada por vía de casación; y se declasa así, tanto por la deficiencia del expediente, de que ya se ha hecho mérito, como por no referirse la sentencia querellada á asunto de carácter nacional.

Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese la actuación.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veinticinco de Julio de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador la resolución que antecede, y no admitió la notificación por no ser parte.

Guerra A., Secretario.

En la misma fecha la notifiqué al señor doctor Liborio D. Cantillo. á la una y media p. m.

CANTILLO—*Guerra A.*, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Julio nueve de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Sin que conste de autos, en manera alguna, por qué motivo, ni por orden de qué autoridad estaba preso en el cuartel de una Compañía del Batallón Colombia, estacionada en Colón, un individuo de apellido Foye; es incuestionable que éste se fugó de la prisión en que estaba en dicho cuartel, hacia el comienzo de la noche del dos de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis. Procedióse inmediatamente por las autoridades militares á hacer la averiguación del caso, y como podían ser responsables el Capitán y demás empleados ú oficiales de la Compañía y los individuos de tropa que formaban la guardia, se instruyeron simultáneamente dos sumarios: uno relativo al Capitán y los Oficiales, que siguió todos sus trámites hasta pronunciar sentencia la Corte Suprema en segunda instancia, el día cuatro de los corrientes; y otro que se refiere á los individuos de tropa, el cual, elevado también á causa, fallado por el Consejo de Guerra ordinario y enviado por apelación del reo, es materia del presente fallo. Es de advertir que esta causa se ha seguido contra el Sargento primero, Ricardo Millán (que lo era de la guardia del cuartel y los soldados Andrés María García, Rodolfo González y Juan C. Balanta (éste, acusado como centinela del preso en la hora de la fuga); y que las filiaciones de todos ellos, en debida forma, se hallan en el proceso, á fojas cinco á ocho.

También se advierte que no ha ocurrido en el seguimiento de la causa ninguna nulidad que pueda viciarla;—por lo cual, debiendo tener por objeto la Corte, en segunda instancia, apreciar la justicia con que se condenó al soldado Balanta, cuyo defensor apeló de la sentencia condenatoria, es necesario entrar en el fondo del negocio y analizar y calificar las pruebas producidas y las disposiciones legales que son aplicables al caso.

De las declaraciones rendidas por Joaquín Ortiz, Pausanias Avila, Luis Carlos Marín, Carlos Robayo, Esteban Beltrán, Leopoldo Cifuentes, Daniel Alberola, Timoteo Márquez, Buenaventura Soto, Tomás Sánchez, Nicanor Ramírez, Domingo Salazar, Abelardo Carmona, Feliciano Guerra, Januario López, Nabot Zapata, Vicente Casas, Pedro Bohórquez, Roso María Bedoya, Lorenzo Valenzuela y Leonardo Albarracín (todos llamados como testigos) las cuales corren de fojas nueve á cuarenta y una; y de las indagatorias rendidas por Juan C. Balanta, Ricardo Millán, Andrés María García y Rodolfo González (que se hallan especialmente en las fojas diez vuelta y catorce á diez y nueve) resulta que, en substancia, los hechos pasaron del modo siguiente:

Foye estaba preso en una pieza del piso alto del edificio que servía de cuartel, y Balanta, que funcionaba como centinela, lo vigilaba atentamente, siguiéndolo paso á paso cuando se paseaba en el corredor ó en el patio; en el cuerpo de guardia se hallaba una parte de ésta, y casi todos los demás de la Compañía descansaban, ó comían, ó dormían en la cuadra; el Alferez Timoteo Lalinde se había encargado del mando de la guardia á las cinco de la tarde, y el Capitán Guillermo Escobar se había ido á comer en compañía de tres personas, siendo una de éstas un empleado de la Compañía del Ferrocarril que en el mismo día, dos de Diciembre, visitó al preso, con permiso del Prefecto de Colón, según afirman algunos. Así las cosas, entre seis y media y siete menos cuarto de la noche, se oyó súbitamente un tiro dado en la parte alta, por lo que se creyó que Foye había dado muerte á su centinela; toda la Compañía se puso sobre las armas, y algunos subieron á averiguar lo que hubiera sucedido. *Resultó que el preso se había fugado*, y que encontraron al centinela sacando de la recámara de su rifle la cápsula vacía del tiro que había disparado; asegurando este soldado (Balanta) que, al notar que se escapaba Foye, le había disparado su rifle, y había gritado llamando al Cabo de guardia, sobre lo cual hay varias declaraciones confirmativas. Muchos, entonces, trataron de salir á la calle armados á perseguir ó buscar al prófugo; pero el centinela del cuerpo de guardia, por orden del Alférez Lalinde, no permitió la salida por el momento, la que sólo tuvo efecto después de unos diez minutos. Toda la Compañía se ocupó luégo en buscar á Foye, no obstante la lluvia que caía y la obscuridad, y las pesquisas hechas hasta las dos de la mañana fueron infructuosas.

Resulta, pues, que hubo fuga de un preso, bien que no consta por qué estaba en prisión, por orden de quién (pues sólo se alude vagamente al Prefecto), ni con qué instrucciones se le vigilaba; y de muchas declaraciones resulta con evidencia que ni los Oficiales ni la tropa tenían trato alguno con el preso;—que los empleados del Ferrocarril que lo visitaban, lo hacían á virtud de permiso del Prefecto, y nó de los Oficiales; que á éstos y á los individuos de tropa no se les vió dinero, ni que hicieran gastos particulares, sino que antes bien, sufrían escaseces; y que de los autos no se desprende la menor prueba de que el reo condenado y los tres sindicados, respecto de los cuales se sobreseyó, hubiesen entrado en confabulación alguna para favorecer la fuga de Foye, ó ejecutaran algún acto indicativo de complicidad.

El Consejo de Guerra ordinario, reunido en Panamá, ha condenado á Balanta, por sentencia pronunciada el veintiuno de Abril del presente año, como culpable del delito definido en el artículo mil seiscientos veintiuno del Código Militar, y á virtud de este fallo se le ha condenado, calificándolo en segundo grado, á sufrir la pena de diez y seis meses de arresto, y "á las demás accesorias señaladas en el Código Penal de la Nación. Todo ésto de acuerdo (dice la sentencia) con lo dispuesto en el artículo mil seiscientos veintiuno del Código Militar, en relación con el doscientos cuarenta y tres del Código Penal antes citado."

Pero si de autos no resulta que Balanta ejecutara á sabiendas ningún acto de los especificados en los artículos doscientos cuarenta á doscientos cuarenta y dos, ni doscientos cuarenta y cuatro á doscientos cuarenta y siete del Código Penal, ¿podrá decirse que la falta cometida fué de simple descuido ó negligencia en la vigilancia del preso, y que entonces es aplicable el artículo doscientos cuarenta y tres citado en la sentencia? El Consejo de Guerra funda la condenación: 1.° "En que el delito está plenamente comprobado por la misma confesión del enjuiciado Balanta, que dice que dejó ir al preso, porque cuando observó que se fugaba yá había tomado la escalera, lo que prueba descuido en el cumplimiento de sus deberes de centinela."

Pero este fundamento está muy lejos de ser exacto, y para reconocerlo así bastará copiar lo substancial de la declaración instructiva. Dice textualmente:

"Preguntado, si sabe ó presume por qué se le puso preso el día tres de los corrientes, y se le condujo de la ciudad de Colón á esta plaza, contestó: — Sí señor, por dejar ir un preso.—Preguntado: ¿por qué le dejó ir?—Contestó: No sabiendo que se fuera, porque en todo el tiempo que estaba allí no hacía amaine ninguno á irse;—Preguntado: ¿Qué consigna recibió usted al ponerlo de centinela? Contestó: Que estuviera muy alerta no se me fuera ir el preso, que no se durmiera en su puesto.—Preguntado: ¿Por qué dice usted que el preso no tenía intención de irse? Contestó: Que porque siempre se estaba paseando en el saloncito, en el corredor y en el patio junto á su prisión.—Preguntado: ¿A qué horas tuvo lugar la fuga del preso que usted custodiaba? Contestó: Que serían las seis de la tarde, entre oscuro y claro, después de pasar lista.—Preguntado: ¿Qué hizo el preso momentos antes de la fuga y cómo tuvo lugar? Contestó: Que antes se paseaba cada rato para un *lao* (lado) y otro y entraba cada nada al cuarto, y que él estaba *parao* junto á la ventana del cuarto esperando á ver si el preso cogía para donde estaba él, pero que entonces el se quitó de *hay* (ahí) y que *de jilo* (rápidamente) se le fué y cogió para la escalera; que entonces él le hizo fuego, é intentó seguir en su persecución; pero que se lo *atrancó* el rifle en la baranda, y siguió hasta abajo, pero que ya no encontró nada.—Preguntado: ¿Usted no gritó llamando en su auxilio la Guardia ó el Cabo de relevo, como era su obligación? Contestó: Que cuando soltó el tiro llamó al Cabo de Guardia y siguió la escalera, y que al ter-

minar ésta encontró con los de Guardia que acudían á donde estaba el preso, etc., etc."

Como se ve, no hay en toda esta declaración palabra alguna que envuelva confesión del delito de abandono ó descuido (como lo afirma el Consejo de Guerra en su sentencia), sino una exposición sencilla que, por el contrario, pone de manifiesto que el centinela cumplió con su deber. Si su declaración no constituye prueba en su favor, tampoco la constituye en contra, puesto que no contiene la confesión de una falta. Cuando el reo, al contestar la primera pregunta, dice: que presume que se le puso preso y condujo á Panamá "por dejar ir un preso," emplea una locución alusiva al cargo que le hacen, pero de ningún modo lo acepta como fundado. Por el contrario, lo refuta con la exposición de los hechos, y afirmando que vigiló al preso y que, cuando éste súbitamente partió con suma rapidez (á lo que equivale la expresión *de jilo* ó *de filo*), aquél hizo todo lo que era de su deber, y aun más. No se ve, pues, la prueba del cuerpo del delito que consiste en la negligencia del centinela en el cumplimiento de su deber, ni de la especial culpabilidad de Balanta. Ningún testigo peesencial ha declarado sobre lo que pasara entre el centinela y el preso, ni sobre lo que ocurriera en el lugar de la prisión, solitario en los momentos de la fuga; y es claro que, si el procesado no se confiesa culpado, ninguna prueba puede alegarse contra él.

Por el contrario, de los autos relativos á este misterioso asunto se desprenden numerosas circunstancias que hacen sospechar que otros, sometidos ó nó á juicio, pueden ser los responsables.

No se comprende por qué razón un reo condenado por homicidio, en vez de ser llevado á la prisión común de la ciudad de Colón, ó al correspondiente establecimiento de castigo, como reo rematado, es confinado á un cuartel establecido en una casa que no ofrece las seguridades necesarias.

No existe en los autos nota del Prefecto de Colón, á virtud de la cual se pusiera al reo en el cuartel, ni se hallan las instrucciones del caso.

No se explica por qué se permitió á un reo de grave homicidio (poco antes conductor de trenes), condenado yá, tener relaciones con empleados del mismo Ferrocarril de Panamá, recibir frecuentes visitas de éstos, y aun embriagar con una bebida (así consta) al soldado que le hizo centinela la noche anterior á la de la fuga.

No se ha hecho la menor diligencia para poner de manifiesto en los autos la topografía y estructura del cuartel y disposición de sus piezas altas y bajas, á fin de que pueda juzgarse de lo que contribuyó á facilitar la fuga, y de la culpabilidad que pudiera haber en materia de vigilancia.

No se obró con prontitud en la persecución del preso, cuando ésta pudo ser eficaz; y el aparato de pesquizas después de mucho rato de ido el preso, hasta las dos de la mañana, no se compadece con la general negligencia que hubo en todo lo demás.

De ningún modo es justo que el soldado Balanta sea la víctima expiatoria de faltas cometidas tal vez por otros.

La Corte no se detiene nuevamente á demostrar su autoridad para fallar sobre el fondo de este proceso, dado que en repetidas ocasiones y en idénticos casos, se ha declarado competente, por cuanto el Código Militar reconoce el recurso de apelación en los juicios militares, á más de la consulta obligatoria, y con distinto motivo que el de nulidad, y es obvio que algún objeto ha de tener el recurso de apelación, como en el caso presente. El defensor en la segunda instancia, comienza por negar á la Corte la jurisdicción y competencia para fallar en este proceso, entrando en el fondo de lo que se ventila; y concluye pidiendo que se absuelva al procesado, condenado en primera instancia; absolución que sería imposible si no entrase esta Superioridad á examinar si se ha cometido ó nó delito y quiénes son los responsables. La contradicción es patente.

Por lo expuesto, habiéndose surtido la debida tramitación en la segunda instancia, y oído el defensor en la audiencia de ocho del presente mes, sin que á ésta concurriese el señor Procurador, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la sentencia de primera instancia, absuelve al soldado Juan C. Balanta del cargo que se le ha hecho, y ordena que se le ponga en libertad.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente al Jefe que lo remitió.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del día nueve de Julio de mil ochocientos ochenta y siete se publicó esta sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En doce del mismo mes la notifiqué sl señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

En el mismo día la notifiqué al defensor, Coronel Antonio Narváez G.

NARVÁEZ G.—*Guerra A.*, Secretario.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, quince de Julio de mil ochocientos ochenta y siete,

Vistos:—El diez y nueve de Julio de mil ochocientos ochenta y cuatro, al llegar al puerto de Cartagena un "cayuco" (especie de bote ó canoa), sin nombre, procedente del Distrito de Barú, el Comandante del Resguardo sospechó que contenía efectos de contrabando y así resultó ser. Levantóse la información del caso, que fué pasada al Juez 2.° de la Provincia de Cartagena, y por auto de cuatro de Octubre se declaró el decomiso, y se mandó fijar, por lo tocante al vehículo, el edicto emplazatorio á que se refiere el artículo 1850 del Código Judicial de la Nación. El diez y ocho del mes siguiente se presentó ante el Juzgado, José S. Zúñiga, solicitando se levantase información sumaria para comprobar: 1.° Que el "cayuco" aprehendido como vehículo que sirviera para cometer el fraude, era de su propiedad; y 2.° Que él no había tenido culpa alguna en el fraude, por cuanto el cayuco le había sido tomado sin su conocimiento, por los defraudadores, del lugar donde estaba amarrado.

Levantada que fué la información, el interesado, conforme al artículo 1,852 del citado Código, ocurrió con esta prueba sumaria que le era favorable, pidiendo al Juez la entrega del mencionado "cayuco;" y el Juez de la causa pasó el pedimento al Juez de lo civil para que éste conociese, por cuanto se trataba de una demanda de reivindicación de propiedad, que debía ser ventilada en juicio contradictorio con el Ministerio público, por los trámites civiles ordinarios. Formalizada que fué la demanda, la contestó el Agente del Ministerio público, aceptando los hechos y admitiendo la justicia que asistía al demandante; y, no obstante esto, el Juez, atendiendo á la terminante prevención del artículo 511 del Código dos veces citado, abrió la causa á pruebas por tratarse de demanda puesta contra la Nación. En el término probatorio se ratificaron en sus dichos los testigos que habían declarado en la información sumaria, quedando así comprobados los hechos en que se fundó la demanda, y también se agregó á los autos copia del sumario relativo al contrabando. El Juez, en consecuencia, pronunció, el cuatro de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, (con censurable demora) sentencia, por la cual reconoció el derecho del actor y le mandó entregar la embarcación reclamada; y como ninguna de las partes apelase del fallo, el Juez resolvió consultarlo con esta Superioridad.

Substanciado debidamente en la Corte el asunto; oído el señor Procurador general, cuyo concepto es que la Corte no tiene competencia para conocer, por cuanto se trata (dice) de un incidente del juicio criminal sobre fraude á la renta de Aduanas; y no habiendo comparecido el actor, es el caso de fallar; y para ello se considera:

En cuanto á la cuestión de competencia, la Corte ha declarado que la tiene, en caso absolutamente igual. Si en el juicio criminal, sobre contrabando, no tiene por qué intervenir la Corte, sino el respectivo Tribunal Superior, en segunda instancia, no sucede lo mismo en el juicio relativo á la propiedad de los vehículos que han servido para ejecutar el fraude. En este caso, el juicio, que es de reivindicación, se sigue, contradictorio, con el Ministerio público, por la vía ordinaria; y por lo mismo,

habiendo contienda con la Hacienda nacional, cabe de lleno la atribución que da á la Corte Suprema el inciso 1.°, sección 2.ª del artículo 21 de la ley 61 de 1886 (25 de Noviembre) "sobre organización y atribuciones del Poder Judicial." Es, pues, competente la Corte para conocer y fallar, y así lo declara previamente.

Por lo tocante al fondo del negocio, es indudable que el actor probó los hechos en que fundaba su derecho, y que en este punto de vista fué justa la sentencia de primera instancia. Pero de autos resulta lo siguiente:

1.° Que el auto del Juzgado sobre confiscación de los efectos de contrabando, fué dictado (folios 41 vuelto y 42) el cuatro de Octubre de mil ochocientos ochenta y cuatro, y en él se dispuso la fijación del edicto emplazatorio relativo á la embarcación embargada;

2.° Que al pie de dicho auto hay una nota de la fecha de éste, puesta por el Secretario, que dice: "En el mismo día notifiqué al señor Fiscal.—Del Río.—Martínez—Cumplido bajo el número 214—Martínez": por manera que en aquella fecha se fijó el edicto en cumplimiento del auto;

3.° Que el mismo Juez que conoció de la causa por contrabando, afirma en su auto de foja 6, fecha veintiséis de Noviembre, que se había fijado el edicto emplazatorio;

4.° Que Zúñiga no ocurrió ante el Juez á hacer uso de su derecho, sino el diez y ocho de Noviembre del año citado, esto es, cuarenta y cinco días después de fijado el edicto emplazatorio de que trata el artículo 1,850 mencionado, en el cual se señala el término de quince días para entablar la acción reivindicatoria; so pena de que se declare la confiscación de los vehículos y efectos, conforme al artículo 1,851; y sin embargo, falta en los autos la copia auténtica del edicto emplazatorio, por lo cual no puede saberse á punto fijo en que fecha fué desfijado y concluyó el término legal señalado para entablar la acción reivindicatoria.

5.° Que, aun en el supuesto de que se hubiese comprobado que la acción se entabló fuera del término legal, era al demandado (el representante del Ministerio público) á quien correspondía proponer la excepción de prescripción, sin que el Juez pudiera declararla de oficio, según lo establecen los artículos 2,513 y 2,517 del Código Civil; y es evidente que si el respectivo personero de la Nación aceptó la demanda y reconoció explícitamente su justicia, sin objetar cosa alguna, ó la tuvo por legal ó renunció tácitamente á la excepción que podía proponer, y de ambos modos validó el derecho del demandante.

Por lo expuesto, la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la sentencia de primera instancia. Y por cuanto de autos resulta que la acción reivindicatoria fué entablada fuera del término legal (salvo que con el documento auténtico se compruebe lo contrario), y por lo tanto, puede suceder que sean responsables Pablo M. Ramos y Anastasio del Río, que han funcionado en la primera instancia como Agentes ó representantes del Ministerio público, y no aparece que hayan defendido los derechos é intereses de la Nación, sáquese cópia de las demandas propuestas por Zúñiga (fojas 1.ª y 10.ª), de las contestaciones dadas á fojas 11 vuelta y 12 vuelta, del auto de foja 14 y sus notificaciones, y de la sentencia que corre á fojas 44 y 45 y sus notificaciones; y remítanse estos documentos al Tribunal Superior de Bolívar para lo de su cargo, con copia de esta sentencia.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial*, y devuélvase el expediente al juez de la primera instancia.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del quince de Julio de mil ochocientos ochenta y siete, se publicó la sentencia que precede.

Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y ocho de Julio de mil echocientos ochenta y siete, notifiqué la anterior sentencia al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, nueve de Julio de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Por sentencia de la Corte Suprema federal de veintinueve de Abril de mil ochocientos setenta y seis, se revocó la pronunciada por el Juez del Circuito de Tuluá, en el Estado del Cauca, según la cual se había condenado á la Nación al pago de dos mil quinientos seis pesos ($ 2,506), por razón de suministros hechos en la guerra de 1860 á 1863, por Pedro Celestino Bedoya, y según la demanda introducida por éste ante aquel Juez.

Para revocar la Corte la sentencia se fundó en que á virtud de auto para mejor proveer, se había puesto en claro que los testigos en que la demanda se apoyaba, no habían dado las declaraciones que sirvieron de fundamento á la sentencia de primera instancia, y en que las mismas autoridades á quienes se atribuían las expropiaciones demandadas, depusieron que tales expropiaciones no habían tenido lugar.

Había, pues, una notoria y manifiesta falsedad, cometida en el Juzgado de primera instancia; y debieron ser muchos los responsables de ese procedimiento, tanto particulares como funcionarios públicos.

Con tal motivo, la Corte ordenó que se sacara copia de todo lo conducente para averiguar el delito de falsificación y sus responsables. Esa copia se mandó sacar en la sentencia mencionada al principio; y comenzó á procederse con tal negligencia, que tal copia no aparece concluída sino hasta el catorce de Junio de mil ochocientos setenta y seis, es decir, mes y medio después de la orden dada al efecto, cuando sólo consta de siete fojas. Pero aparece sin firma ni autorización alguna del Secretario; y no sólo esto, sino que se miró el negocio con tal abandono, con tan escandalosa indiferencia, que esa copia se quedó en el archivo de la Secretaría; y ha sido ahora, merced á la escrupulosidad y esmero del actual señor Secretario, cuando esas diligencias, en cierto modo anónimas, han sido desenterradas del archivo, según el informe dado por este funcionario, fechado en ocho del pasado mes.

Repartido luégo el expediente y dada vista al señor Procurador general, éste observa, con sobra de razón, que es inútil dar una plumada más en el asunto, porque el delito de falsificación se cometió en el mes de Junio de mil ochocientos setenta y seis y la providencia para averiguarlo es de Abril de mil ochocientos setenta y seis. Por consiguiente, aun cuando no se partiera desde la primera fecha, y sólo se tuviera en cuenta la segunda, es claro que en la actualidad está más que prescrita la acción para perseguir el delito primitivo. De la misma manera lo está la referente á averiguar la responsabilidad que pudiera caber al Secretario de la Corte, que funcionaba en mil ochocientos setenta y seis.

Siendo esto así, y debiéndose reconocer de oficio la prescripción en materia penal, es evidente que hay necesidad de ponerle punto á la actuación, aun cuando sea doloroso que hechos de esta naturaleza se queden sin castigo, burlando la acción de la justicia y con manifiesto desdoro de las autoridades públicas.

Por lo tanto, la Corte Suprema nacional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que debe cesarse en la investigación á que se refieren estas diligencias, por haber caducado el derecho de imponer pena.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En once de Junio del mismo año, notifiqué al señor Procurador el auto que antecede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Julio nueve de mil ochocientos ochenta y siete.

El presente sumario instruído contra Waldo Navaros y Pedro Molina, por el delito de usurpación de funciones en la rebelión

de mil ochocientos ochenta y cinco, y en relación con ella, ha sido remitido á esta Superioridad por el Juez del Circuíto de Toro (Distrito judicial del Cauca), con el objeto de someter á consulta el auto que dictó el mismo Juez, sobre cesación de todo procedimiento, por razón de la amnistía concedida. Habiendo cesado la competencia de la Corte para conocer de negocios de esta clase, á virtud de lo dispuesto por el artículo 99 de la ley 61 de 1886 (25 de Noviembre), como lo hace presente el señor Procurador, la Corte se abstiene de resolver, y dispone que el expediente sea remitido para lo de su competencia al Tribunal Superior del Distrito del Cauca (Buga), dándose aviso al Juez remitente.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En once de Julio de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra* A., Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Julio nueve de mil ochocientos ochenta y siete.

En el sumario instruído para averiguar la responsabilidad en que hubieran podido incurrir Tomás Zuleta, Ciriaco Alzate, Abelardo de la Roche, Manuel José Mendoza, Pedro Antonio Bedoya y otros, por haber usurpado destinos públicos en el caserío del Arrayanal, ordenó el Juez del Circuíto de Toro que se suspendiera el procedimiento, por tratarse de un delito enteramente político, cometido durante la guerra de 1885, y dispuso que se consultara el auto con esta Suprema Corte.

Entre las atribuciones que le asigna el artículo 21 de la ley 61 de 1886 á la Corte Suprema, no está la de conocer de autos como el que ha dado lugar á la consulta.

Según el artículo 99 (modificación 2.ª) de la misma ley, le corresponde al Tribunal del Distrito judicial del Cauca, residente en Buga, conocer del auto consultado.

Oído el concepto del señor Procurador, la Corte se declara incompetente para conocer de la consulta de que se ha hablado, y ordena que se remita el expediente al Tribunal arriba mencionado, para los efectos legales.

Notifíquese, publíquese, cópiese y désele cuenta al Juez inferior.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En once de Julio de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto precedente al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Julio nueve de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Por auto del diez y siete de Febrero del presente año, el Tribunal Superior de Antioquia declaró haber lugar á seguimiento de causa de responsabilidad, por los trámites extraordinarios, contra Ricardo Isaza E., Juez del Circuíto de Yarumal, por dos motivos, á saber: primero, por el delito de haber pronunciado sentencia contra ley expresa, negando el recurso de apelación de aquella á Bernardino López, en la causa criminal seguida contra Wenceslao Gil por perjurio; y segundo, por falta al cumplimiento de sus deberes como Juez de dicho Circuíto, por haber omitido cierta operación legal en el mencionado juicio criminal. De dicho auto apeló el sindicado, y habiendo venido el expediente á esta Superioridad y repartido *el diez y ocho de Junio, el veinte se dió vista al señor* Procurador; y éste, el seis de los corrientes, ha pedido que, para mejor proveer, se pida el proceso criminal aludido, á fin de que la Corte pueda apreciar el mérito de algunos documentos y actos esenciales en el asunto.

Es evidente la conveniencia que hay de ampliar este sumario para tener á la vista todas las pruebas necesarias.

En consecuencia, la Corte, para mejor proveer, resuelve:

Pídase al Tribunal Superior de Antioquia, conforme al artículo 1,741 del Código Judicial, el expediente del juicio criminal por perjurio seguido contra Wenceslao Gil, á que se refiere el auto de seguimiento de causa contra Ricardo Isaza, pero si no estuviere fenecido dicho expediente, el Tribunal Superior hará que se remita á la Corte copia auténtica de la sentencia y de todos los documentos á que alude el auto de proceder.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En once de Julio de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto que precede al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Julio once de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos: Procesados ante el Juzgado del Circuíto de Toro, S. Clímaco Rodas, Lorenzo Cañaveral, Antonio, Isaías é Ismael Correa, y once individuos más, por el delito de rebelión, el Juez respectivo, por auto de veintiocho de Mayo último, pronunciado en Rio-Sucio, sobreseyó en la causa y ordenó la cesación de todo procedimiento ulterior, respecto del delito indicado.

Este auto ha venido en consulta, y oído el dictamen del señor Procurador general, este funcionario manifiesta la incompetencia de la Corte, por no estarle atribuído yá el conocimiento en segunda instancia en esta clase de juicios.

Siendo esto exacto, la Corte se abstiene de fallar acerca del auto consultado, disponiendo que el proceso se remita al Tribunal Superior del Distrito del Cauca, que es á quien corresponde el conocimiento, dando aviso de esta resolución al señor Juez del Circuíto de Toro.

Notifíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En once de Julio de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Julio doce de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El artículo 1.630 del Código Judicial del extinguido Estado de Antioquia, que rige todavía en estos momentos, á virtud de lo dispuesto en el artículo H de la Constitución nacional, establece que al dictarse por el Juez respectivo el auto de enjuiciamiento en las causas criminales, la declaratoria se haga por el delito en general, es decir, por el género del delito respectivo, ó sea por el cargo genérico, aunque determinando las circunstancias de lugar, tiempo y personas.

A virtud de esta disposición, el Juez Superior del Distrito judicial ó del Departamento de Antioquia, al llamar á juicio á Luis María Mejía, quien había dado muerte violenta á Pedro Antonio Restrepo, lo hizo deduciendo contra el procesado el cargo general de homicidio; y como el Código Penal antioqueño castiga de diferente manera el homicidio que se origina en una riña—que fué el caso de Mejía—según las diversas circunstancias determinadas en los artículos 546, 547, 548, 549, 550 y 559, el Juez, de conformidad con el artículo 1.634 del Código Judicial, determinó en el mismo auto de enjuiciamiento, que el reo era excarcelable, creyendo, sin duda, que el delito se encontraba en el caso atenuado del artículo 559 últimamente citado, y que entonces le venía bien lo dispuesto en el inciso 2.º del artículo 1,515 del Código Judicial de Antioquia, esto es, que cabía la excarcelación.

Posteriormente, al ocuparse el Tribunal Superior del Distrito en la causa en referencia, dictando el fallo definitivo, á pedimento del Fiscal respectivo mandó sacar copia de lo conducente, para averiguar la responsabilidad en que hubiera podido incurrir el Juez Departamental, por haber concedido la ex

carcelación á Mejía; y tal es el motivo de los presentes diligencias sumarias.

Después de haberse acreditado el nombramiento y posesión del Juez sindicado, de haber recibido declaración indagatoria á éste, y de haber levantado una información de abono en favor del Juez Departamental, el Tribunal Superior de Medellín, de acuerdo con el parecer del Fiscal, dictó en veintiocho de Abril del corriente año, auto de sobreseimiento, fundándose en que el Juez sindicado, aunque pudo incurrir en error, no delinquió, en atención á lo disputable del punto jurídico, al ningún interés que dicho Juez pudiera tener en favor del procesado, y á los buenos antecedentes que abonan su conducta oficial.

Ese auto ha venido en consulta á esta Superioridad; y surtida la tramitación legal, la Corte encuentra, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador general, completamente aceptables los fundamentos del auto consultado; y por tanto, lo confirma, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal remitente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernandez—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

Al señor Procurador general notifiqué el auto que precede, hoy trece de Julio de mil ochocientos ochenta y siete.

ARANGO M.—*Guerra A.* Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, quince de Julio de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca consulta con esta Superioridad el auto que profirió con fecha dos de Marzo del presente año, por el cual declara que ha prescrito la acción criminal en el juicio de responsabilidad seguido á Carlos Ruiz y Enrique Lizarralde, por considerárseles culpables de las demoras que sufrió un proceso criminal.

Las demoras referidas terminaron en el mes de Febrero de 1885; y como hasta la fecha han trascurrido más de dos años, es claro que la acción criminal ha prescrito, según el artículo 49 del Código Penal de Cundinamarca.

En consecuencia, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto consultado.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el proceso.

R. Antonio Martínez, José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A. Secretario.

En diez y seis de Julio del mismo año notifiqué al señor Procurador el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL

Señores Magistrados.

Juan E. Ucrós promovió oposición ante el Juez 1.° del Circuíto de Neiva á la posesión que se ordenó dar á Juan Bautista Botero Arango, de la mina de oro denominada "La-Apariencia," al propio tiempo que Botero Arango se opuso ante el mismo Juez á la posesión mandada dar á Ucrós de la mina denominada "Vega de Suárez." En uno y otro juicio, el Juez dispuso, por autos de 11 y 18 de Noviembre de 1886, que se tuviera por actor á Ucrós, lo cual dió margen á que el apoderado de este señor se alzara de los precitados autos.

Venidos los dos expedientes á ese Supremo Tribunal, por ser el competente para conocer del recurso interpuesto, dispusisteis, á petición de este Ministerio, su acumulación, fundándoos para ello en que, haciendo la mina de la "Vega de Suárez," parte de "La-Apariencia," los dos juicios versaban sobre posesión de una misma cosa, y por lo tanto, lo que hubiera de decidirse en uno de ellos produciría en el otro la excepción de cosa juzgada.

Con estos antecedentes, y tratándose de saber á cuál de los citados opositores corresponde el carácter de actor en el juicio constituído por los dos que han sido acumulados, no hay porqué entrar á examinar ni definir el mejor derecho de uno ú otro litigante para adquirir la adjudicación legal de la mina de cuya posesión se trata, pues esta es cuestión que debe ventilarse y decidirse en el expresado juicio, para la prosecución del cual se hace indispensable distinguir, de antemano, la actitud que, en el procedimiento especial señalado á esta clase de oposiciones, le toca asumir á cada una de las partes.

Sentado esto, consultemos las disposiciones legales aplicables al asunto:

Por la ley 38 de 1887, se adoptó por la Nación el Código de minas del extinguido Estado de Antioquia; por manera que dicho Código es aplicable, en su parte procedimental, al caso que nos ocupa.

Por el artículo 390 de la citada ley se dispone que, "Por regla general, el opositor debe ser actor en el juicio á que dé lugar su oposición.

"Se exceptúan los dos casos siguientes:

"1.° Cuando el opositor tiene título expedido ó revalidado conforme á esta ley, y lo presenta al formalizar su oposición, junto con una información en que justifique sumariamente que la porción de mina á la cual se refiere su oposición está comprendida dentro de los linderos de su título;

"2.° Cuando el opositor es un descubridor anterior de la mina y justifique el hecho con copia del aviso que dió el Alcalde al verificar el descubrimiento, y con una información sumaria de testigos, en que justifique que la que él denunció es la misma que se trata de entregar á otro que se titula descubridor; ó que por lo menos ésta puede comprender una parte de aquella."

Estas disposiciones concuerdan en lo principal con las correlativas del Código de minas del Tolima, que también establece la misma regla general, entre cuyas excepciones figura la siguiente: "Cuando el opositor es descubridor anterior de la mina y lo comprueba con *copia del aviso que dió del descubrimiento.*"

Agora bien: en los autos hay constancia de que el señor Juan Bautista Botero Arango dió el aviso de que se deja hecha referencia, el 7 de Julio de 1884, y en los términos en que lo permitía la ley tolimense que acaba de citarse (véase la *Gaceta del Tolima*, correspondiente al 4 de Agosto de 1884), y también la hay de que en la mina denunciada por dicho señor como de nuevo descubrimiento, bajo el nombre de "La Apariencia," está comprendida la denominada "Vega de Suárez," denunciada posteriormente, el 16 de Febrero de 1886, por el señor Ucrós.

Lo expuesto convence de que el opositor Botero Arango tiene el carácter de *descubridor anterior*, comprendiéndole, por lo tanto, la excepción consignada en el Código de minas de Antioquia y en el del Tolima, razón por la cual no le corresponde á él, sino á su competidor, figurar como actor en el juicio.

Y como esa fué la resolución del Juez de primera instancia, este Ministerio la estima legal y, en esa virtud, os pide que la confirméis.

Bogotá, 11 de Junio de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

El Honorable Consejo Legislativo aprobó en tres debates, el 10 de Febrero del presente año, un proyecto de ley por la cual se concede pensión á la señora viuda é hijos menores del Sargento-Mayor del Ejército nacional Ricardo O'Levy, que murió hallándose en servicio del Gobierno, el día 3 de Abril de 1874.

El Excelentísimo señor Presidente de la República objetó el proyecto en su conjunto, por considerarlo inconstitucional, y como el Honorable Consejo declarase, en sesión del 14 del mismo mes de Febrero, infundadas las ojeciones, se os ha pasado el referido proyecto por el respectivo Ministro del Despacho, para

que decidáis sobre su exequibilidad, conforme á lo prevenido en el artículo 90 de la Constitución.

El Poder Ejecutivo deduce la inconstitucionalidad del proyecto de que, no pudiéndose conceder, después de expedida la ley 50 de 1886, pensiones gratuítas, sino remuneratorias, y de que, no perteneciendo á estas últimas la que se desea asignar á las peticionarias, la sanción del proyecto sería violatoria del artículo 17 de la citada ley 50 y, consiguientemente, del artículo 78, inciso 5.° de la Constitución.

Las disposiciones que acaban de citarse están concebidas en estos términos: "Artículo 17. Las pensiones hasta ahora concedidas se dividen en remuneratorias y gratuítas. Las que en lo sucesivo se concedan sólo podrán ser remuneratorias, con arreglo al artículo 78, inciso 5.° de la Constitución.

"Artículo 78. Es prohibido al Congreso, y á cada una de sus Cámaras.

.....

"5.° Decretar á favor de ninguna persona ó entidad indemnizaciones, pensiones ni otra erogación que no esté destinada á satisfacer créditos ó derechos reconocidos con arreglo á la ley preexistente, salvo lo dispuesto en el artículo 76, inciso 18."

El artículo 18 de la misma ley 50 apenas reconocía, antes de ser modificada, dos clases de pensiones remuneratorias, á saber:

"1.° Las concedidas á los militares de la Independencia por servicios prestados á aquella causa desde 1810 á 1826 inclusive, y en la Marina de guerra hasta 1827;

"2.° Las concedidas á título de jubilación ó retiro en premio de servicios clasificados en ley preexistente, siempre que en su cuantía y términos la concesión se haya ceñido á la promesa legal."

Se comprende desde luégo que la pensión á que se refiere el proyecto objetado, no está incluída entre las que la ley 50 calificaba de remuneratorias, y que, por lo tanto, el Poder Ejecutivo procedió fundadamente al objetar dicho proyecto como violatorio de la enunciada ley.

Pero es el caso de que, con posterioridad á la fecha de las objeciones presentadas por el Poder Ejecutivo, se expidió la ley 91 del presente año (27 de Mayo) "sobre recompensas, que adiciona y reforma la ley 50 de 1886," por la cual se suprimieron las pensiones, y se establecieron en su lugar recompensas por una sola vez para los que estuvieran comprendidos en alguno de estos tres casos:

"1.° Los militares de la Independencia mencionados en el inciso 1.°, artículo 18 de la ley 50 de 1886.

"2.° Las viudas y huérfanos de los militares de la Independencia.

"3.° Los padres, viudas é hijos de los militares que en guerra civil hayan muerto ó mueran en acción de guerra y en defensa del Gobierno legítimo."

Reducidos los casos que dan derecho á optar recompensa del Tesoro público, á los tres últimamente copiados, claramente se ve que á la señora viuda é hijos del Sargento Mayor O'Levy, no le corresponden ni el 2.° ni el 3.°, únicos que pudieran corresponderle, por cuanto dicho Jefe ni fué militar de la Independencia, ni murió combatiendo en acción de guerra y en defensa del Gobierno legítimo.

Iguales condiciones se imponían, para disfrutar pensión del Tesoro público, á los padres, viudas é hijos menores de los militares de la República, por las leyes sobre recompensas que regían antes de expedirse la citada ley 50 y su reformatoria, la ley 91, según puede verse de las respectivas disposiciones del Código Militar, en que estaban consignadas las leyes substantivas y procedimentales sobre la materia; bastando á nuestro propósito citar el artículo 849 de dicho Código, por el cual se reconocía el derecho de percibir pensión á las viudas, padres é hijos menores de los militares muertos *en acción de guerra ó en campaña á manos de los enemigos armados de la Nación ó de su Gobierno constitucional.*

Es visto, pues, que tanto las leyes actuales como las que les precedieron no han establecido recompensas para los deudos de los militares de la República, sino á condición de que éstos hayan perdido la vida combatiendo en sostenimiento de las instituciones y del Gobierno legítimo, caso en el cual no se halla la muerte del Sargento-Mayor Ricardo O'Levy.

Por lo que hace á la acción distinguida de valor de que también se ha hecho mérito al enumerar los servicios militares del Mayor O'Levy, soy de opinión que, aun cuando ella estuviera, que no lo está, comprobada en los términos requeridos al efecto, no infirmaría las anteriores conclusiones, por razón á que las disposiciones vigentes sobre recompensas de que se ha hecho mención, nada estatuyen sobre el particular, y porque las consignadas en el Código Militar, caso de que fueran aplicables, no señalan premio ó recompensa á los deudos del militar que hubiere ejecutado acción distinguida de valor, sino mediando la circunstancia de que aquél hubiera perdido la vida al ejecutar tal acción (artículo 854).

Por manera, pues, que no pudiéndose, de conformidad con el inciso 5,° del artículo 78 de la Constitución, decretar á favor deninguna persona ó entidad gratificaciones, pensiones, etc., que no estén destinadas *á satisfacer creditos ó derechos reconocidos con arreglo á la ley preexistente;* y siendo, por otra parte, incuestionable que el derecho de la señora Ponce de O'Levy y de sus menores hijas para optar pensión no está reconocido por las leyes preexistentes que rigen la materia, termino manifestandoos que, en mi concepto, no se puede decretar *con arreglo* á dichas leyes, ó sea como lo ordena el precepto constitucional yá citado, la pensión solicitada por dicha señora, y que, por lo tanto, debéis declarar que no es exequible el proyecto de ley sometido á vuestra consideración.

Bogotá, 30 de Junio de 1887..

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

Instruídas las presentes diligencias para averiguar los responsables de la suspensión de una causa que, al decir del denunciante, Abraham Antorveza, se seguía contra Sixto Cobos, Oficial del Ejército, dicho Antorveza, interrogado para que expresara los nombres de los empleados contra quienes dirigió su denuncio, ha manifestado no recordarlos, siendo, por lo tanto, difícil continuar la investigación, toda vez que ella no se puede dirigir contra determinada persona.

Aparte de esto, uno de los funcionarios contra quien parece dirigirse la acusación de Antorveza, es el Secretario de Guerra que ordenó la suspensión de la causa contra Cobos; y es sabido que la Corte no es competente para conocer primariamente de las causas de responsabilidad que se siguen contra los miembros del Ministerio ejecutivo, por delitos cometidos en ejercicio de sus funciones; de donde resulta que, por ese lado, no hay objeto en que la Corte continúe la investigación, ni aun en el supuesto de que los cargos del denuncio fueran fundadas.

Por lo demás, y según aparece del informe de la Sección de mando y dirección del Ejército (foja 10), el Oficial Cobos no pudo ser encausado por la falta á que se refiere Antorveza, pues tal falta apenas lo hizo acreedor á una pena correccional.

Finalmente, no es aventurado creer que la causa á que alude Antorveza y que dice haber visto en el Estado Mayor, es la misma que se siguió á Ramón Barrera en la cual figuraba el Oficial Cobos como ofendido.

Por estas consideraciones, estima el infrascrito que debéis sobreseer en el asunto, puesto que el mismo denunciante ha declarado no poder suministrar los datos indispensables que se le exigieron, para poder adelantar con eficacia la investigación; y como en el citado informe de la Sección de Mando y Dirección se afirma que el reo rematado Ramón Barrera fué puesto en libertad sin haber cumplido su condena, juzga conveniente el infrascrito que se saque copia de lo conducente para poner en claro ese hecho que, como lo veis, es de suma gravedad.

Bogotá, 16 de Junio de 1887.

CARMELO ARANGO M.

"GACETA JUDICIAL."

El Gobierno ha resuelto bajar á la mitad el valor de las suscripciones á este periódico, desde el número 27 en adelante, precio que tendrán igualmente las colecciones de la *Gaceta.*

El Subsecretario de Gobierno, *Julio A. Corredor.*

BOGOTÁ.—IMP. DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 33

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 20 de Agosto de 1887.

CONTENIDO.

PÁG

ACUERDO DE LA CORTE

Número 50: relativo á una consulta del Tribunal Superior de Popayán ... 257
Número 51: Id. á otra id. del Tribunal Superior de Santander ... "
Número 52: Id. á otra id. del Tribunal Superior de Cundinamarca ... 258
Número 55: Id. á otra id. del Tribunal Superior y dos Juzgados del Tolima ... "
Telegrama del Tribunal Superior de Tundama ... 260
Nota sobre cumplimiento de un Acuerdo anterior ... "

SENTENCIAS DEFINITIVAS

NEGOCIOS CRIMINALES

De absolución del Cabo 1.° Delfín Mármol de la Torre, juzgado por el cargo de deserción ... "

NEGOCIOS CIVILES

Relativo á una resolución del Gobierno sobre reclamaciones de Eusebio L. Caro ... 261

AUTOS INTERLOCUTORIOS

NEGOCIOS CRIMINALES

Sobre incompetencia de la Corte para conocer de un sumario de delitos públicos ... 262
Sobre confirmación de un auto de creación de procedimiento por prescripción ... "
Sobre incompetencia de la Corte para conocer por delitos polícos ... "
Idéntico al precedente ... 263
Sobre devolución de un expediente al Tribunal Superior de Antioquia ... "
De sobreseimiento en un sumario por ciertas demoras ... "

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL.

Relativa á un juicio de expropiación promovida contra Alejandro Weckbecker ... "
Id. á la Reclamación de Eusebio L. Caro ... 264
Id. á un juicio de expropiación promovido en Yarumal, (Departamento de Antioquia ... "

GACETA JUDICIAL.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

ACUERDO NÚMERO 50.

En Bogotá, á tres de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, se reunieron los señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia del infrascrito Secretario.

El señor Magistrado doctor Noguera. á quien se dió en comisión el telegrama de Su Señoría el Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, de fecha 28 de Julio último, en que consulta á la Corte: 1.° Cuáles son los derechos que corresponden á los Conjueces de los Tribunales cuando son llamados á funcionar, por impedimento ó recusación de los Magistrados, y quién debe pagarlos; y 2.° Si los Alcaldes de Distrito son funcionarios de instrucción; sometió al examen de los señores Magistrados el siguiente proyecto de resolución:

"En cuanto al punto primero de la consulta, la Corte dice, y así lo resuelve, que los Conjueces de los Tribunales no tienen, actualmente, derecho á remuneración alguna, porque conforme al artículo 207 de la Constitución, ningún gasto público puede hacerse cuando no haya sido decretado por el Congreso, por las Asambleas Departamentales ó las Municipalidades, ni transferirse ningún crédito á un objeto no previsto en el respectivo presupuesto; y como en éste, contenido en las leyes de la materia para el bienio en curso, no se ha votado partida alguna para atender al gasto de que se trata, el Poder Ejecutivo ó el respectivo ordenador Delegatario no tendría elemento en qué basar el reconocimiento, liquidación y ordenación del mismo gasto.

"Por lo que hace al segundo de los enunciados puntos, debe tenerse en cuenta que, según la reforma 41.ª de la ley 46 de 1876, los funcionarios de instrucción de los Estados, cuyo carácter tenían los Alcaldes en todos ellos, lo eran también para todos los delitos de la competencia de la Unión; y aunque más tarde la Constitución de la República ha encomendado á dichos empleados, por su artículo 200, la acción administrativa en el Distrito, y les ha dado el doble carácter de Agentes del Gobernador y mandatarios del Pueblo, las funciones inherentes á tales caracteres no pugnan con las que corresponden á los funcionarios de instrucción, y debe observarse lo dispuesto en la citada reforma de la ley 46, mientras ésta permanezca vigente; por lo cual, ninguna duda queda, en concepto de la Corte, de que dichos empleados tienen el deber de practicar de oficio las diligencias conducentes al descubrimiento de los delitos que se cometan dentro de los límites á que se extienda su jurisdicción."

Discutido el anterior proyecto, la Corte lo aprobó unánimemente, disponiendo que se comunicara al Tribunal del Distrito Judicial de Popayán, como contestación á su telegrama citado al principio de este Acuerdo.

Con lo cual se dió por terminado éste, que firman todos los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NÚMERO 51.

En Bogotá, á cuatro de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, se reunieron los señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia del infrascrito Secretario.

El señor Magistrado doctor Sanclemente, á quien se dió en comisión el telegrama de S. Señoría el Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santander, de fecha 1.° del mes en curso, en que consulta á la Corte si la resolución acordada por ésta, con fecha 26 de Julio próximo pasado, y que se le transcribió, comprende los negocios que, á la fecha en que se recibió, estaban repartidos de acuerdo con la legislación vigente, ó si solamente debe aplicarse á los que se repartan en lo sucesivo, sometió á la consideración de los señores Magistrados el siguiente proyecto de resolución:

"Contéstese al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santander, que lo resuelto por la Corte Suprema, en el Acuerdo de 26 de Julio último comprende todos los negocios no sentenciados, aun cuando estén repartidos, pues esto no impide el cumplimiento de dicha resolución."

El anterior proyecto fué aprobado por el voto unánime de los señores Magistrados, quienes dieron por concluído el presente Acuerdo, que firman con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 52.

En la ciudad de Bogotá, á cinco de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, se ocupó en considerar la consulta del Tribunal Superior del Distrito de Cundinamarca, de que se hablará después, y examinado el asunto, se adoptó por unanimidad el siguiente proyecto de resolución, presentado por el señor Magistrado doctor Martínez, á quien tocó el negocio en repartimiento:

"Consulta el Tribunal Superior del Distrito de Cundinamarca, si el término dentro del cual debe el Juez de derecho declarar terminado el procedimiento en una causa criminal, cuando el veredicto del Jurado fuere absolutorio, es el mismo de tres días que tiene para pronunciar sentencia, cuando ésta sea condenatoria, ó si ese término es el señalado para los autos interlocutorios; y si la declaración de estar concluído el procedimiento, se hace en forma de sentencia ó se estima como tal.

"Motivó el acuerdo del Tribunal que originó la consulta, según la larga exposición que se ha enviado, la duda ocurrida á algunos de los señores Magistrados del mencionado Tribunal, sobre si puede el Juez de derecho, y en su caso el Tribunal, declarar notoriamente injusto el veredicto de un jurado, cuando este es absolutorio, ó si tal facultad se refiere únicamente á los veredictos condenatorios. Esa duda fué resuelta por la mayoría de los señores Magistrados, conformándose con el luminoso dictamen del señor Magistrado doctor Corrales, quien, con razones incontestables, determinó la verdadera inteligencia de la ley, demostrando que el Legislador no había querido establecer aquella precaución en beneficio sólo de los reos, dejando en desamparo á la sociedad.

"Quedó, pues, reducida apenas la duda al punto mencionado al principio; y para resolverla, la Corte pasa á establecer los fundamentos en que apoya su concepto, los que, á la verdad, son sencillos y claros, siguiendo el orden y el propósito de la ley.

"Como toda resolución de un Juez, cuando pone fin á un proceso, no es otra cosa que una sentencia, el fallo que dicta declarando terminado todo procedimiento, á virtud de veredicto absolutorio, es, y no puede ser otra cosa, que una sentencia; y con tal carácter debe pronunciarse, porque es ella la que complementa la resolución y le pone el sello, sin el cual el veredicto, aun absolutorio, no tendría efecto.

"El artículo 324 de la ley 57 del presente año, establece que dentro de tres días, á más tardar, pronunciará sentencia el Juez, cuando, según el veredicto, debe aplicar la pena consiguiente al fallo condenatorio. Fija, pues, ese artículo el término que el Juez tiene para sentenciar; y no debe olvidarse que esa disposición se encuentra en el capítulo 3.°, que trata de la sentencia y de la apelación.

Más atras, en el artículo 313, dispone dicha ley, que en el caso de que alguna ó algunas de las resoluciones del Jurado parecieren al Juez notoriamente injustas y contrarias á la evidencia, dicho funcionario, dentro del término que tiene para sentenciar, declarará injustas aquellas resoluciones. Por consiguiente, sí, como queda dicho, hay término señalado para sentenciar, y si ese término es el de tres días en su máximo, es evidente que ese mismo término es el que tiene el Juez para declarar la injusticia notoria del veredicto, sea éste absolutorio ó condenatorio, y es el mismo que tiene para declarar terminado el procedimiento.

"Por lo expuesto, la Corte Suprema resuelve la duda sometida á su conocimiento, haciendo uso de la atribución que le confiere el artículo 116 de la ley yá mencionada, decidiendo, como decide, que el término que tienen los Jueces de derecho para declarar la injusticia notoria, cuando el veredicto es absolutorio, es el de tres días, contados desde el fallo del jurado; que ese es el término para declarar terminado el procedimiento; y que esta última resolución tiene el carácter de sentencia.

Cópiese, publíquese y transmítase al Tribunal Superior de Cundinamarca."

Con lo cual se concluyó el presente acuerdo que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER.—*Manuel J. Angarita.—Francisco A. Fernández.—Antonio Morales.—Benjamín Noguera.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 55.

En la ciudad de Bogotá, á doce de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, reunidos en Sala de Acuerdo todos los señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con asistencia del infrascrito Secretario, su Excelencia el Presidente mandó dar lectura á los siguientes documentos, recibidos el día nueve del presente mes:

"*República de Colombia—Distrito Judicial del Tolima—Presidencia del Tribunal Superior—Número* 119—*Ibagué, Agosto* 4 *de* 1887.

Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia—Bogotá.

Para los efectos del artículo 116 de la ley 57 del presente año, y por no ser potestativo de este Superior Tribunal emitir votos consultivos, me ha ordenado remitir en copia auténtica las consultas que han elevado el señor Juez Superior de este Distrito judicial y el señor Juez 2.° del Circuíto de Honda.

Dios guarde á Su Señoría.

JULIO ESTÉVEZ BRETÓN.

República de Colombia—Distrito Judicial del Tolima—Juzgado Superior—Número 175—*Ibagué,* 26 *de Julio de* 1887.

Señor Presidente del Tribunal Superior—Presente.

Ocúrrenseme algunas dudas acerca de la manera como deban interpretarse algunas de las nuevas disposiciones judiciales, y con la mira de que os sirvais someterlas á la resolución de la Corte Suprema, si las halláis fundadas, paso á exponéroslas:

I

Tratando el Código adoptado de *acumulación de autos*, dice que cuando durante el juicio un procesado comete ó se descubre que ha cometido otro delito, el conocimiento de la causa, sobre este último, toca al Juez que estaba conociendo por el delito anterior, y ocurre la duda de si esta disposición es aplicable cuando el Juez Superior conoce del primer juicio y el segundo es de aquellos en que por la naturaleza de la causa el conocimiento está atribuído á un Juez inferior.

La ley 61 dice que el Juez Superior es también competente para conocer de cualesquiera delitos que aparezcan comprobados en un juicio cuyo conocimiento le está atribuído por la misma ley; pero ocurre con frecuencia el caso de que en diferentes procesos aparecen comprobados varios cargos contra un mismo individuo, de los cuales unos son del conocimiento del Juez Superior y otros de los Jueces inferiores.

Se trata, por ejemplo, de castigar el delito de homicidio, pero resulta que el responsable ha cometido también los delitos de hurto y heridas, que aparecen comprobados en distintos procesos; pues en este caso no se sabe si el Juez Superior puede conocer, por jurisdicción acumulativa, de las causas que hayan de seguirse por todos estos delitos, ó si el reo debe estar sometido á distintas jurisdicciones.

II

La ley 57 del presente año dice que el Juez, al abrir la causa á prueba, dispondrá que por peritos se regule el perjuicio sufrido por el ofendido, á fin de fijar en la sentencia la indemnización que corresponda á él ó á sus herederos; pero hay muchos delitos en que el perjuicio no es estimable en dinero, y en este caso es inútil hacer tal regulación.

En el delito de estupro, por ejemplo, cuando la ofendida no sufre enfermedad por consecuencia de la violencia, el perjuicio recibido no puede estimarse en dinero, porque los resultados en manera alguna vienen á herir intereses pecuniarios. La misma observación cabe en el caso de falsificación de moneda, cuando ésta no ha podido ponerse en circulación.

En casos como estos es formalidad baldía el nombramiento de peritos y por lo mismo debiera dejarse al Juez la facultad de hacer tal nombramiento únicamente cuando la sentencia haya de decidir también sobre indemnizaciones, por perjuicios materiales comprobados en el proceso.

Puede suceder que estos puntos, no ofrezcan dificultad alguna á funcionarios más versados en estas materias, pero de todos modos he creído de mi deber exponeros las dudas que se me

ocurren, para que decidáis si es ó nó el caso de una consulta á la Corte.

Dios os guarde.

FIDEL PELÁEZ.

Es copia.

Ibagué, Agosto 5 de 1887.

El Secretario del Tribunal, *Félix María Dussán F.*

República de Colombia—Departamento del Tolima—Poder Judicial—Número 1586—*Juzgado 2.º del Circuito—Honda, Julio* 8 *de* 1887.

Señor Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial—Ibagué.

La Constitución actual de la República dispone, en su artículo 26, que nadie podrá ser juzgado sino conforme á las leyes preexistentes al acto que se imputa, es decir, que nadie podrá ser juzgado sino conforme á leyes vigentes antes de la ejecución del hecho: las leyes anteriores vigentes en el Tolima antes de la expedición de la ley 57 de 15 de Abril del presente año, sobre adopción de Códigos y unificación de la legislación nacional, establecieron el juicio por jurados en materia criminal en los delitos de la competencia de los Jueces de Circuíto, según el inciso 16 del artículo 5.º de la Constitución del extinguido Estado, que vino á elevar á la categoría de derecho individual ese acto, que hasta entonces no estaba consagrado sino en las leyes adjetivas ó procedimentales; y de aquí ha nacido la duda de si los juicios criminales de que conocen los juzgados como éste, iniciados antes de la expedición de dicha ley 57, deben ser juzgados con ó sin intervención del Jurado; y para que esa ilustrada Corporación se sirva resolverla, es que le dirijo esta consulta, que llevo á su conocimiento por medio del presente, de la que aguardo tener una oportuna resolución.

Su atento estimador,

Alfredo Crosthwaite.

Es copia.

Ibagué, Agosto 5 de 1887.

El Secretario del Tribunal, *Félix M. Dussan F.*

Habiendo sido comisionado el señor Magistrado doctor Samper para estudiar el asunto y proponer lo conveniente, presentó el siguiente proyecto de resolución:

"Por lo tocante al primer punto consultado, es evidente que el artículo 102 del Código Judicial (nueva edición) que es también el 102 de la ley 61 de 1886, establece como regla general que los Jueces Superiores conocen exclusivamente de las causas relativas á determinados delitos, todos de gravedad, y con intervención del Jurado. Esta es la regla general, en materia de competencia jurídica; y la ha confirmado el artículo 227 de la ley 57 del presente año (15 de Abril) estableciendo también que de los demás delitos conocen, sin intervención del Jurado, los Jueces de Circuíto, salvo que esté atribuído el conocimiento especialmente á otro Tribunal ó á los Jueces municipales.

Pero en seguida, con el patente y necesario fin de evitar que se divida la continencia de las causas, el artículo 103 del Código dispone que, cuando en un negocio de que conozca legalmente un Juez Superior, resulte de la misma actuación que el mismo ó los mismos reos son responsables de otros delitos, el Juez Superior es también competente para conocer de los últimos. Si, pues, de una actuación en que está conociendo un Juez Superior, por delitos de los mas graves, resulta la comprobación de otros delitos menores, imputables á los mismos reos sometidos á tal actuación, dicho Juez será el competente para conocer de unas y de otras, siempre con intervención del Jurado, y no se dividirá la continencia de la causa, sino que todos los delitos quedarán sujetos á una misma jurisdicción,

"Cuanto al segundo punto, la disposición del artículo 113 de la citada ley 57 deberá ser aplicada en todo caso, porque no es facultativa sino imperativa. Es patente que, en el caso de estupro, que se propone como ejemplo, aunque la persona ofendida no haya sufrido enfermedad, sí ha sufrido deshonor, lo que envuelve un enorme perjuicio, que puede ser indemnizado en la forma de un equivalente de la pérdida de la posición social, y ser, por lo tanto, suceptible de valuación.

Pero, aun en el supuesto de que en el caso de que se trata no pueda valuarse el perjuicio causado por el delito, esto será asunto de criterio para los peritos y el Juez; mas no porque en algunos ó muchos casos pueda ser difícil la apreciación pericial de los perjuicios, debe prescindirse de cumplir con el ineludible mandato del citado artículo 113.

"Con respecto al tercer punto consultado, esto es, si puede prescindirse del juicio por Jurados con relación á delitos cometidos antes de la expedición de la varias veces citada ley 57 del presente año, no obstante la garantía general de ser juzgado por Jueces de hecho, que otorgaba, en el Tolima, la Constitución del extinguido Estado; la Corte considera:

"Las reglas establecidas por el artículo 26 de la Constitución son claras, y son las siguientes:

"Nadie podrá ser juzgado sino conforme á leyes preexistentes al acto que se impute, ante Tribunal competente, y observando la plenitud de las formas propias de cada juicio.

"En materia criminal la ley permisiva ó favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia á la restrictiva ó desfavorable."

De aquí se desprende patentemente esta doctrina: las leyes no pueden tener efecto retroactivo, por regla general, en cuanto á la calificación de hechos, como delitos, y la imposición de penas, si con aquellas se ha de someter á cualquier individuo á ser juzgado y á sufrir pena por un hecho que no hubiese sido cometido con anterioridad á la ley que lo declara criminoso. Pero sí tiene efecto retroactivo la ley para favorecer al delincuente, yá cuando es *permisiva*, esto es, cuando permite un hecho que antes estaba prohibido y calificado como delito ó culpa; yá cuando es favorable, esto es, cuando indulta de una pena merecida por un hecho anterior, ó cuando disminuye la que estaba anteriormente asignada. En estos casos, prevalece lo permisivo ó favorable. Por lo demás, en todo caso debe seguirse el juicio ante el Tribunal competente (cualquiera que la ley determine), y observándose la plenitud de la formas propias de *cada juicio*, es decir, establecidas por la ley procesal para el respectivo juicio.

"No hay duda que la garantía individual que otorgaba la Constitución del extinguido Estado del Tolima no era de carácter substantivo, sino *adjetivo ó procesal*, y de ningún modo puede alegarse que sea *permisivo* ni *favorable*, con relación á las penas ó á la calificación intrínseca de los actos individuales, como criminosos, el mero hecho de que el juicio sea seguido con ó sin intervención del Jurado. No hay, por lo tanto, violación alguna de la Constitución en el hecho de que los Jueces de Circuíto del Departamento del Tolima conozcan de los delitos que son de su competencia, sin intervención del Jurado, como está resuelto por el artículo 227 de la ley 57 tantas veces citada.

"La Corte, pues, en uso de la facultad que le concede el artículo 116 de dicha ley, resuelve las consultas hechas por el Juez Superior del Distrito del Tolima, y el Juez del Circuíto de Honda, á que se refiere el presente Acuerdo, en esta forma precisa:

"1.º En todo caso en que ocurra lo previsto en el artículo 103 del Código Judicial (nueva edición), ó sea el 103 de la ley 61 de 1886, conocerá exclusivamente el Juez Superior de Distrito, siempre con la intervención del Jurado, resolviéndose de todos los delitos, de unos mismos reos, en la actuación respectiva.

"2.º Lo dispuesto en el artículo 113 de la ley 57 del presente año, es imperativo, y debe cumplirse, en todo caso:

"3.º El nuevo procedimiento adoptado por la ley 57 del presente año, que suprime el juicio por Jurados en los negocios criminales que son de la competencia de los Jueces de Circuíto, debe ser practicado sin excepción, porque así lo previene dicha ley, y en nada se opone á las garantías otorgadas por el artículo 26 de la Constitución.

"Comuníquense estas resoluciones respectivamente á los señores Jueces que han hecho las consultas, y publíquese este Acuerdo en la *Gaceta Judicial* para que sirva de regla á todos los señores Jueces Superiores y de Circuíto."

Considerado el precedente proyecto fué aprobado por unanimidad de votos.

Con lo cual se terminó el presente Acuerdo que firman los señores Magistrados y el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

TELEGRAMA.

Su Señoría el Presidente del Tribunal de Tundama ha contestado al telegrama de la Corte, en el que se le comunica lo resuelto por ella, sobre fallos en sala compuesta de todos los Magistrados, lo siguiente:

"*Distrito judicial de Tundama—Santa-Rosa, 29 de Julio de* 1887.

Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Impuesto el Tribunal que presido de la resolución comunicada por Su Señoría en telegrama de 27 de los corrientes, procederá de acuerdo con ella en los fallos que pronuncie.

Dios guarde á Su Señoría.

El Presidente, GABRIEL A. SARMIENTO—El Secretario, *Anacleto Holguín.*

Presidencia de la Corte—Bogotá, Julio 30 *de* 1887.

Publíquese y archívese.

MARTÍNEZ—*Guerra A.*, Secretario.

República de Colombia—Distrito Judicial del Tolima—Presidencia del Tribunal Superior—Número 188—*Ibagué, Agosto* 5 *de de* 1887.

Señor Presidente de la Corte Suprema—Bogotá.

Este Supremo Tribunal dará estricto cumplimiento al acuerdo de esa augusta Corporación, celebrado el 26 de Julio próximo pasado, y comunicado el 27 de los mismos en telegrama circular, número 20 por Su Señoría.

De conformidad con la ley 57 del presente año, este Superior Tribunal, desde el 22 de Julio último inclusive, ha fallado en Sala de cuatro Magistrados todos los recursos pendientes por apelación ó consulta de sentencias definitivas, y autos interlocutorios ó de substanciación en negocios civiles y criminales que se han despachado de entonces á esta parte.

Dejo así contestado el telegrama circular de Su Señoría.

Dios guarde á Su Señoría,

JULIO ESTÉVEZ BRETÓN.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veinticinco de Julio de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Yendo en marcha, de Cartago para Popayán, el Batallón 3.° de Bogotá, el día 21 de Marzo de '886, todavía en situación de guerra,—Delfín Mármol de la Torre, que estaba incorporado á dicho Batallón con el carácter de Cabo 1.° de la 2.ª Compañía, se atrasó en el pueblo del Cerrito, por motivo de enfermedad, quedándose con el arma y municiones, según lo expresa en su confesión; y en lugar de seguir la ruta del Cuerpo, que parece se dirigió á Palmira, Mármol tomó camino de Cali. Allí, después de algunos días empleados en su reposición, se presentó espontáneamente al Jefe de la Provincia, entregando el rifle y solicitando ser incorporado en el Batallón Cauca, lo que sucedió.

Conocidos estos hechos, el Capitán Juan José Rocha denunció al Coronel Jefe del Batallón Bogotá la separación de Mármol, calificándolo como desertor; siendo de advertir que esta denuncia tuvo lugar siete meses después de esa separación, cuando tanto el Batallón Cauca como el 3.° de Bogotá se encontraban en Popayán.

El Coronel del Bogotá admitió la denuncia, reclamó á Mármol y nombró al Teniente 2.° Ayudante del Cuerpo para que hiciera la indagación del delito, procediendo como funcionario de instrucción. Levantóse el sumario, comprobándose los hechos que quedan mencionados, é identificándose la persona del sumariado, con relación al puesto que ocupaba anteriormente en el Bogotá; y como consecuencia de todo esto, el Ayudante instructor, que hacía también de Fiscal, porque no se decretó oportunamente la separación de funciones, acusó al sindicado. Mientras tanto cambió de nombre el Batallón referido, tomando el de Junín número 13, según se infiere de los autos, porque no hay sobre eso diligencia expresa en ellos; y el Comandante del Junín, previo dictamen del Auditor de Guerra de la 2.ª División, habiendo pasado de Popayán á Cali y habiendo nombrado nuevo Fiscal y Secretario, declaró con lugar á formación de causa contra el Cabo Mármol de la Torre, por auto de veintidós de Abril del corriente año, y por el delito definido en el artículo 1,570 del Código Militar, con referencia á los casos 1.° y 2.° del 1,571, al caso 5.° del 1,572, y con especificación del caso 2.° del 1,575 del mencionado Código.

Notificado este auto al procesado, éste nombró defensor; y habiéndose pedido permiso al Coronel del Cuerpo, se hizo el sorteo de los Oficiales que debían formar el Consejo ordinario, tomándose confesión al reo y pidiéndose por el defensor algunas declaraciones á los testigos del sumario, quienes corroboraron sus testimonios dando razón de sus dichos.

Reunido luégo en Cali el Consejo ordinario, declaró responsable á Mármol de la Torre del delito de deserción con arma y municiones en tiempo de guerra, pero con la circunstancia de no haber abandonado la bandera; y condenó al procesado á seis meses de prisión, en el cuartel del Batallón Junín, y á la pérdida del empleo. El Comandante de la 2.ª División aprobó y ratificó en todas sus partes la sentencia del Consejo, por resolución de veinticinco de Mayo del corriente año, haciendo mérito de que el acusado había servido con notable decisión al Gobierno, observando conducta irreprensible en el Ejército y en la prisión, y haciendo notar que había carecido de un buen defensor.

Consultada dicha sentencia con esta Superioridad por no haberse intentado recurso de apelación, se ha dado á la consulta la tramitación legal; y como el defensor nombrado en esta segunda instancia ha pedido la declaratoria de la nulidad del proceso, y al mismo tiempo la nulidad de la sentencia, involucrando y confundiendo indebidamente las cosas, como si pudiera subsistir la sentencia, anulándose todo el proceso; se hace preciso ante todo, tratar de las nulidades alegadas, por la preferente consideración que el punto exige antes del fallo.

Fúndase la nulidad del proceso en las causales 1.ª y 2.ª del artículo 1,536 del Código Militar, esto es, no haberse comprobado la identidad militar, y no haberse notificado al reo el auto de enjuiciamiento.

Ninguna de esas dos causales existe; nó la primera, porque de las declaraciones exigidas por el funcionario de instrucción, que corren desde la foja 4.ª hasta la 8.ª, consta que ese mismo procesado, Mármol de la Torre, á quien se mantenía preso, era el Cabo 1.° de la 2.ª Compañía del Batallón 3.° de Bogotá; por manera que aun cuando en el proceso no aparece en debida forma la filiación, la identidad de la persona y la condición militar, si están establecidas, conforme á la parte 1.ª del artículo 1,430 del Código. Tampoco existe la segunda, porque es notoriamente inexacta la afirmación del defensor, pues que á la foja 16 vuelta del proceso, aparece la notificación hecha del auto de enjuiciamiento á Mármol de la Torre, quien firmó esa notificación con su nombre y apellido, y nombró allí mismo defensor.

No existiendo, pues, motivo alguno de nulidad en el expediente, entra la Corte á ocuparse del fondo del negocio; y para ello considera lo siguiente:

El procesado Mármol no ha podido ser calificado como desertor, ni condenado como tal:

1.° Porque para ser desertor se necesita, conforme al artículo 1,570 del Código Militar, ser individuo de la fuerza permanente, abandonar la bandera y el servicio de la Nación; y yá se ha visto que en la sentencia misma se expresa que Mármol de la Torre no abandonó la bandera; 2.° Porque para ser reputado soldado, y por consiguiente individuo del Ejército permanente y en posibilidad de abandonar la bandera, se necesita estar afi-

liado á un cuerpo, artículo 220; 3.° Porque una de las circunstancias del documento de filiación es la de que conste en él que se le han leído al recluta las obligaciones del soldado y la parte penal del Código (artículo 217); y 4.° Porque son excusables y no incurren en las penas señaladas á los desertores, los que no hayan sido impuestos en las leyes penales, es decir, los que no hayan sido afiliados.

Ahora bien: por comunicación telegráfica, fechada en Cali, el diez y seis de los corrientes, á virtud del auto para mejor proveer dictado por esta Suprema Corte, el Jefe del Batallón Junín comunica al señor Comandante general del Ejército, y éste lo hace á la Corte, que el Cabo Delfín Mármol de la Torre no juró bandera ni pasó Revista de Comisario, ni existe en los libros de la Mayoría del Cuerpo filiación alguna respecto de tal individuo; y por consiguiente, no pudo reputársele como soldado, ni fué instruído en las leyes penales, ni puede considerársele como desertor, siendo, por lo mismo, excusable en el presente juicio.

No obsta para ello la disposición contenida en el artículo 1,372 del Código, porque ese artículo lo que establece es que cualquiera que sea la irregularidad del auto de la admisión al servicio, hace justiciable, por la autoridad militar, al individuo indebidamente admitido; pero no deroga las excepciones penales respecto de los individuos llamados á juicio. Más claro: ese artículo determina la jurisdicción; pero no arrebata los derechos consiguientes á la parte substantiva del Código que militan en favor de los procesados; y menos deroga disposiciones especiales, como son las que quedan citadas respecto de los desertores.

Si esto apareja alguna mala consecuencia para la disciplina del Ejército, culpa es de algunos Jefes de éste que no cuidan de llenar oportunamente las funciones de su cargo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la sentencia consultada y absuelve al Cabo 1.° de la 2.ª Compañía del Batallón 3.° de Bogotá, Delfín Mármol de la Torre del cargo de deserción que se le dedujo y por cual fué condenado; absolución que se funda en ser persona excusable, según queda establecido

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el proceso al Comandante remitente.

Y por cuanto á la foja 3.ª del cuaderno principal del proceso aparece una filiación deficiente autorizada por Adolfo Buitrago, con el carácter de Secretario de la Comandancia del Batallón Junín y como Sargento 2.° de la 2.ª Compañía; y en la comunicación del Comandante general del Ejército de fecha diez y nueve de los corrientes, número 491, referente al parte telégrafico que se acompaña á esa comunicación, del Coronel Eduardo París, resulta que en los libros de la Mayoría del Batallón Junín no existe filiación alguna referente á Mármol de la Torre; para averiguar si se ha cometido falsedad por parte de alguno de los dos funcionarios militares mencionados, mediante la contradicción que aparece en las dos piezas referidas, sáquese copia de ellas y pásese al señor Juez del Circuíto de Cali, por tratarse de un delito común, para que averigüe la responsabilidad que pueda existir y provea lo conveniente.

Y por cuanto el Jefe del Batallón Cauca que existía con ese nombre en Abril ó Mayo de 1886, en la ciudad de Cali, puede ser responsable por la indebida admisión en su Cuerpo del Cabo Mármol, conforme al artículo 1,372 del Código Militar, sáquese copia del sumario y envíese al señor Comandante general del Ejército para que le dé el curso legal.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del veinticinco de Julio de mil ochocientos ochenta y siete fué publicada la anterior sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En veinticinco de Julio de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué la sentencia que precede al defensor del procesado, Coronel Francisco J. Vergara V.

FRANCISCO J. VERGARA V.—*Guerra A.*, Secretario.

En veinticinco de Julio de mil ochocientos ochenta y siete, noitfiqué la sentencia anterior al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Julio veintitrés de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—La Comisión encargada del negociado de suministros, empréstitos y expropiaciones exigidos por el Gobierno nacional para gastos de guerra, declaró á Eusebio L. Caro acreedor del Tesoro público por la suma de cuatro mil trescientos veinte pesos ($ 4,320), valor de ochenta novillos que le fueron expropiados en el año de 1876, en el falso supuesto de que pertenecían al doctor Carlos Holguín, y para pagar un empréstito de mil pesos ($ 1,000) asignado á éste. La resolución de la Comisión fué aprobada por Su Señoría el Ministro de Guerra, quien pasó el expediente al señor Procurador general de la Nación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 44 de 1886.

Para esclarecer mejor los hechos pidió el señor Procurador copia de algunos documentos, y obtenida, ha promovido ante esta Suprema Corte reforme la resolución de la Comisión. Esta—ha dicho—manda pagar los novillos que en efecto eran de Caro, á razón de cincuenta y cuatro pesos ($ 54) por cabeza, conforme á la prueba testimonial presentada en este juicio, sin atender á que en la ejecución librada contra el doctor Holguín fueron avaluados por peritos á treinta y seis pesos ($ 36) y á que esta prueba debe preferirse á aquélla; y sostiene, además, que del valor de los ochenta novillos debe rebajarse la suma de trescientos setenta y un pesos ($ 371) que en el remate que de ellos se hizo quedaron á favor del doctor Holguín, y que éste cobró posteriormente, como aparece de autos.

La Corte Suprema, para resolver estos puntos en virtud de la facultad que le otorga el artículo 10 de la ley 44 de 1886, pidió, para mejor proveer, copia de las diligencias de nombramiento de peritos, embargo y avalúo de los novillos, practicados en el juicio ejecutivo seguido contra el doctor Holguín, y en vista de ellas y de lo que resulta del juicio promovido por Caro para obtener indemnización de los semovientes que se le expropiaron con el fin mencionado, considera:

Que nombrados como fueron los peritos en el juicio ejecutivo seguido contra Holguín por el encargado de practicar las diligencias ejecutivas, sin que Caro interviniera en ese nombramiento ni en nada relativo á dicho juicio, lo que en él se hizo no puede perjudicarle, porque según el inciso 5.° del artículo 940 del Código judicial, el avalúo de los bienes embargados debe hacerse por peritos nombrados por las *partes* ó por el mismo juez ejecutor, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 6.°, título 2.° del mismo Código, y en ese Capítulo se ha dispuesto que *cada una de las partes* nombre un perito, y el juez otro, para el caso de discordia; que, si alguna de aquellas no nombra el que le corresponde, dentro del término que se le asigne, lo nombre el juez; que el nombrado por éste, puede ser tachado por cualquiera de las partes, y el elegido por una de éstas puede ser recusado por la otra; y como Caro no nombró perito ni pudo usar del derecho de tachar á los otros dos que concurrieron al avalúo, el testimonio pericial adolece de informalidades que lo hacen ineficaz con relación á él. A lo que se agrega que, formando las declaraciones de los peritos una prueba testimonial sobre los hechos que estén sujetos á los sentidos y sobre lo que según su arte, profesión ú oficio, expongan con seguridad, según lo dispuesto en el artículo 593 de dicho Código, no hay razón para darles mayor fuerza á las declaraciones de los tres que con el título de peritos avaluaron los novillos á treinta y seis pesos ($ 36) en un juicio ejecutivo en que Caro no fué parte, que á cinco testigos, de cuya competencia no puede dudarse, que en juicio contradictorio han justipreciado los ochenta novillos á razón de cincuenta y cuatro pesos ($ 54) cada uno, por el conocimiento que de ellos tuvieron y por las demás razones en que fundan su dicho. En juicios de la naturaleza del presente, en que uno de los puntos de controversia es el valor de la cosa expropiada, irregular sería que el juzgador se apartara de lo probado plenamente en los autos en que su fallo debe recaer, para buscar los fundamentos de éste en otro juicio seguido sin intervención del principal interesado, y en que éste no pudo proponer excepciones ni defender de algún modo sus derechos; y aunque se ha objetado que la prueba testimonial aducida en este juicio no se recibió con la intervención del res-

pectivo Agente del Ministerio público, y como lo previene el inciso 3.° del artículo 2.°, de la ley 44 de 1886, la observación carece de fuerza, por constar que para la práctica de dicha prueba fué citado el Agente fiscal, y si no quiso presenciarla la culpa será suya y nó de Caro, y porque la ley que se cita no había sido expedida cuando tal prueba se recibió.

Por lo que hace á los trescientos setenta y unpesos ($ 371) que el remate de los novillos, verificado en favor del Gobierno por la mitad del avalúo que se les dió en el juicio ejecutivo, dejó como saldo en favor del ejecutado, razón ha tenido el señor Procurador general para pedir que se deduzcan de la cantidad demandada, porque de autos consta que cobrado ese saldo por el doctor Holguín, se le mandó pagar, en un juicio en que figuró por sí y como apoderado de Caro.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara á Eusebio L. Caro acreedor de la Nación, ó sea de su Tesoro, por la cantidad de tres mil novecientos cuarenta y nueve pesos ($ 3,949), que le serán pagados en vales de segunda clase, en virtud de lo dispuesto en el artículo segundo de la ley 100 de 1877; quedando reformada en estos términos la resolución dictada en 10 de Mayo último por la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, y aprobada por Su Señoría el Ministro de Guerra en treinta del mismo mes.

Hágase saber esta sentencia, déjese copia de ella, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente á S. S. el Ministro de Guerra.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Bènjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veinticinco de Julio de 1887, notifiqué la sentencia anterior al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

En la misma fecha la notifiqué al señor Eusebio L. Caro.

CARO—GUERRA A., Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Julio quince de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Según los incisos 1.° y 2.° del artículo 23 del Código Penal de los Estados Unidos de Colombia, eran de la competencia de la Unión los delitos contra el orden constitucional y contra la paz y seguridad de la República, á los cuales designaba el aparte primero del artículo 22 del mismo Código con el nombre de *delitos políticos*.

El conocimiento de las causas por tales delitos estaba atribuído, en primera y segunda instancia, respectivamente á los Jueces nacionales y á la Corte Suprema federal, por el inciso 9.° del artículo 62 y los incisos 3.° y 5.° Sección 2.ª artículo 18 del Código Judicial de la Unión.

Pero la legislación ha sufrido en esta parte, como en otras muchas, notables alteraciones, por la ley 61 de 1886, la cual, en la Sección 2.ª de su artículo 21, al determinar los negocios cuyo conocimiento corresponde en última instancia á la Corte Suprema de la Nación, no ha mencionado aquellos á que se refiere el inciso 9.° que se acaba de citar, sino que, por el contrario, en el inciso 2.° de su artículo 99 previene expresamente que las atribuciones conferidas antes por el Código Judicial á la Suprema Corte federal y no asignadas á Corte Suprema de la República por la Constitución y la misma ley, se ejerzan por los Tribunales Superiores de Distrito.

Por lo tanto, de conformidad con el concepto del señor Procurador general, se declara que no es á la Corte Suprema, sino al Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca, con residencia en Buga, á quien compete censurar el auto que en primero de Junio del presente año pronunció el Juez del Circuíto de Toro, mandando cesar el procedimiento que se había iniciado contra Jesús Ramírez, Remigio Alzate y Aparicio Millán como responsables del delito de rebelión perpetrado en el Caserío de Nazareth, en el año de 1885; auto que, por vía de consulta fué remitido á esta Superioridad, con oficio del mencionado Juez, fecha 1.° de Junio último, número 251.

Notifíquese, déjese la correspondiente copia, publíquese y remítase el expediente al expresado Tribunal para los efectos legales, dándose aviso de esta determinación al Juez remitente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y seis de Julio de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto que precede al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, quince de Julio de mil ochocientos ochenta y siete.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca ha remitido á esta Superioridad, en consulta, el auto de 17 de Mayo último, en que declara prescrita la acción criminal respecto del Juez 2.° del Circuíto de Facatativá, en el sumario instruído para averiguar los responsables de varias demoras ocurridas en un sumario que se instruía en el mismo Circuíto contra Marcos Cañón por el delito de heridas.

Como la demora terminó el cinco de Febrero de 1885, es claro que han transcurrido los dos años que requiere el artículo 49 del Código Penal de Cundinamarca para que la prescripción tenga lugar.

En consecuencia, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto consultado.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y seis de Julio del mismo año, notifiqué al señor Procurador el auto que antecede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, quince de Julio de mil ochocientos ochenta y siete.

El Juez del Circuíto de Toro, con fecha veinticinco de Mayo del año en curso, pronunció auto de sobreseimiento en el sumario instruído contra Fidel Vinasco, José León Suárez, Pedro y Luis Vinasco, Eusebio Ladino, Anacleto Taba, Custodio Vélez, Deogracias Ladino, Ricardo y Lorenzo Guevara, Hilario Guapacha y Emiliano Pinzón, por haber tomado parte en la última rebelión; auto que se ha remitido á esta Superioridad en consulta.

El señor Procurador general, á quien se ha dado conocimiento de este asunto, es de concepto que estas diligencias se remitan al Tribunal del Distrito Judicial del Cauca, por ser éste el competente.

Como el artículo 99 de la ley 61 de 1886 asigna á los Tribunales de Distrito el conocimiento de los asuntos que la Constitución ó la misma ley no hayan atribuído á la Corte Suprema; y como el de que se trata no se encuentra en este caso; esta Superioridad se declara incompetente para conocer, y ordena que las presentes diligencias se remitan al Tribunal del Distrito Judicial del Cauca.

Dése cuenta de esta resolución al Juez del Circuíto de Toro.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y ocho de Julio de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto que precede al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, quince de Julio de mil ochocientos ochenta y siete.

El Juez del Circuíto de Toro, con fecha veinticinco de Mayo del año en curso, pronunció auto de sobreseimiento en el sumario instruído contra Alejandrino Silva, Nacianceno Marulanda, Manuel D. Lemos, Ramón Zapata, Lisímaco Rivera, Miguel Abadía, Genaro y Ricardo Ramírez, Francisco Ossa, Gabriel Montaño, Rosalino Sabogal, Agustín Grajales, Anastasio Quintero, Eleazar Lemos y otros, por haber tomado parte en la última rebelión; auto que se ha remitido á esta Superioridad en consulta.

El señor Procurador general á quien se ha dado conocimiento del asunto, es de concepto que estas diligencias se remitan al Tribunal del Distrito Judicial del Cauca, por ser éste el competente.

Como el artículo 99 de la ley 61 de 1886 asigna á los Tribunales de Distrito el conocimiento de los asuntos que la Constitución ó la misma ley no hayan atribuído á la Corte Suprema, y como el de que se trata no se encuentra en este caso; esta Superioridad se declara incompetente para conocer, y ordena que las presentes diligencias se remitan al Tribunal del Distrito Judicial del Cauca.

Dese cuenta de esta resolución al Juez del Circuíto de Toro.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y ocho de Julio de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto que precede al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, diez y ocho de Julio de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Desde la vigencia de la ley 61 de 1886, sobre organización y atribuciones del Poder Judicial, la Corte no puede juzgar en una sola instancia á los Jueces Superiores de Circuíto; pues que debe conocer en segunda instancia de las causas de responsabilidad ó por delitos comunes contra estos funcionarios, precediendo el fallo del respectivo Tribunal, conforme al artículo 99 de la indicada ley.

Así lo resolvió esta Superioridad por auto de veinticuatro de Enero del corriente año, ordenando remitir esta causa al Tribunal Superior del Distrito judicial de Antioquia, en donde se repartió el expediente, después de tener conocimiento de la resolución de la Corte,

Es, por lo tanto, extraño é inexplicable que, después de estos antecedentes, el mencionado Tribunal, por auto de diez y ocho de Junio último, haya devuelto este proceso á la Secretaría de la Corte; pues aun cuando ésta, en Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco, pronunció el auto de enjuiciamiento, yá hoy no puede fallar en una sola instancia, ni tampoco en la primera, por estar circunscrita y determinada su jurisdicción á lo dispuesto en la ley 61 citada.

Por lo tanto, remítase de nuevo esta causa contra el Juez de Manizales, Ignacio Londoño P. al Tribunal Superior del Distrito judicial de Antioquia, haciéndose notar á éste que la demora en el curso del proceso y las consecuencias que ello pueda ocasionar en la administración de justicia, en el presente caso, dependen de no haber prestado la suficiente atención á lo prescrito en la ley y á lo resuelto por la Corte.

Notifíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En 19 de Julio del mismo año notifiqué el auto que precede al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guera A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Julio diez y nueve de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Por sentencia dictada en última instancia el veintisiete de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, por esta Suprema Corte, fueron condenados el Teniente Coronel Lisandro Leal y el Capitán Alejandro Castro N., por abuso de autoridad, á sufrir, entre otras penas, el primero, como autor principal, la de diez ocho meses de prisión en la casa penitenciaria de Tunja, y el segundo, como cómplice, la de doce meses de igual pena en el mismo establecimiento; reformándose el fallo proferido en primero de Septiembre por el Consejo de Guerra de Oficiales Generales, y que fué remitido en consulta, con la causa respectiva, en doce de Enero último, á esta Superioridad. Dicha sentencia fué pasada al señor Comandante en Jefe del Ejército, General Fernando Ponce, para su cumplimiento; y como meses después tuviese conocimiento la Corte, por documentos que vinieron á su Despacho, de que el Teniente Coronel Leal y el Capitán Castro permanecían en esta ciudad, mandó averiguar el motivo que hubiera impedido el cumplimiento de la sentencia de última instancia, con el fin de exigir la responsabilidad al que resultara culpable de la omisión en caso de ser intencional.

Y resultando de las diligencias practicadas con intervención del Ministerio público que los dos condenados á prisión en Tunja no pudieron ser remitidos al lugar de su destino cuando se les notificó la sentencia de última instancia, por causa de enfermedad; resultando que la del Teniente Coronel Leal fué tan grave que murió por consecuencia de ella en el Hospital Militar de esta ciudad; y resultando, además, que tan luégo como cesó la del Capitán Castro fué éste remitido al Establecimiento de castigo, en el cuál consta que fué recibido, la Corte, de acuerdo con lo solicitado por el señor Procurador general, declara, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, que habiendo sido inevitable la demora ocurrida en el cumplimiento de la sentencia de última instancia, no hay motivo para formar juicio de responsabilidad contra algún funcionario por razón de ella, y sobrese, en consecuencia, en el procedimiento.

Hágase saber, publíquese en la *Gaceta Judicial* y archívese la actuación.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En 19 de Julio del mismo año, notifiqué el auto que precede al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL

Señores Magistrados.

El Agente fiscal del Circuíto de Guaduas promovió juicio ante el Juez del mismo Circuíto pora obtener la expropiación de "los terrenos que son necesarios, contiguos al puerto de Capastrán, en la ribera oriental del río Magdalena, en jurisdicción del Distrito de Puerto de Bogotá ó Pescaderías, para la construcción del puente de hierro que el señor Francisco J. Cisneros va á levantar sobre el río Magdalena y para la entrada ó camino al puente; así como también el área ó terreno necesario para las bodegas y dependencias de la barca y comunicación con la vía pública."

Notificada la demanda al apoderado del señor Alejandro Weckbecker, dueño de los expresados terrenos, se dió al asunto la tramitación señalada para los juicios de expropiación por motivo de útilidad pública, por las leyes del extinguido Estado de Cundinamarca, de lo cual reclamó el demandado, quien sostiene que la legislación aplicable al negocio es la nacional; y como se le negase su petición, por auto de 22 de Marzo del presente año, apeló de dicho auto y el recurso le fué concedido para ante ese Supremo Tribunal.

De autos no consta que la expropiación se pidiera á virtud de orden del Gobierno nacional, y solamente aparece que el Agente fiscal que entabló la demanda procedió oficiosamente y en nombre y representación del Departamento de Cundinamarca, siendo, por lo tanto, aplicables al caso las mismas consideraciones que la Corte tuvo en cuenta para declararse, como se declaró, incompetente, por auto de 19 de Abril último, para conocer del juicio promovido en el antiguo Estado de Antioquia para expropiar una faja de terreno perteneciente á Fermín Santamaría y Braulio y Antonio Chavarriagas (*Gaceta Judicial*, número 23),

consideraciones á virtud de las cuales quedó establecido que la Corte no debe conocer en segunda instancia sino de los juicios de expropiación *ordenados por el Gobierno*, "que, como se sabe, lo constituye el Presidente de la República y los Ministros, ó el Presidente y el Ministro del ramo respectivo."

En fuerza de lo expuesto, este Ministerio es de concepto que debéis declararos incompetentes para conocer de la providencia á que se contrae el recurso interpuesto.

Bogotá, 22 de Junio de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

Examinada la copia que dispusisteis se expidiera, al tenor de lo indicado en el auto para mejor proveer, que la Corte dictó el 7 de Julio de 1882, en el juicio contradictorio seguido por el señor Eusebio L. Caro que, por hallarse pendiente cuando se expidió la ley 44 de 1886, pasó á la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, el infrascrito observa que la sentencia y demás piezas indicadas en el expresado auto de la Corte, se refieren á una reclamación dirigida por los señores Carlos Holguín y Eusebio L. Caro á obtener el pago de un crédito diferente del que es materia de la resolución dictada por la citada Comisión, en 10 de Mayo último, y confirmada por el Ministerio de Guerra en 30 del mismo mes.

En efecto, la sentencia proferida por la Corte en 6 de Noviembre de 1879 (fojas 39) contiene, entre otras apreciaciones, las que se copian en seguida:

"Consta de autos que por decreto ejecutivo, número 471, de 30 de Agosto de 1876, se mandó exigir un empréstito forzoso de un millon de pesos para gastos de la guerra de 1876 á 1877, y que á Holguín se le repartió la cantidad de $ 1,000 y á Caro la $ 500; que para hacer efectivos esos empréstitos se les embargaron y remataron en esta capital varios semovientes, los que fueron adjudicados al Fisco, por la mitad de su valor; y que verificada la liquidación de las sumas del empréstito y costas de la ejecución, quedó un saldo á favor de Holguín de $ 371, y á favor de Caro de $ 612-50 cvs., cuyas dos partidas hacen la de $ 983-50 cvs. que ha sido demandada. Así resulta de la copia de las diligencias ejecutivas practicadas por el Recaudador del empréstito forzoso en esta ciudad, que fué presentada en el curso del presente juicio.

"El saldo reclamado quedó á cargo del Gobierno, sin que se hubiera declarado á su favor por empréstito, expropiación ó suministro, y, en consecuencia, tienen Holguín y Caro el derecho de reclamar su devolución, como un deposito que quedó á cargo del Gobierno."

Como se ve, el juicio á que se contrajo la sentencia que en parte queda transcrita, versó sobre un saldo liquidado á favor de los reclamantes, por haberse adjudicado al fisco, en semovientes, mayor suma de la que se les asignó á aquellos por empréstito forzoso.

Y como la reclamación actual del señor Caro se refiere, no á dicho saldo, sino al valor de los ganados de su propiedad que le fueron tomados para hacer efectivo el empréstito asignado al señor Holguín, claramente se ve que se trata de un crédito diferente del reconocido por la Corte; y tanto es así, que dicho señor hace derivar su derecho de la ley 100 de 1880 cuyo artículo 2.°, dice: "Los ciudadanos á quienes se les tomaron sus propiedades por cuenta de empréstitos forzosos decretados contra otros individuos, durante la guerra civil nacional de 1876 á 1877, podrán reclamar estos créditos y al hacerles el pago se les declarará comprendidos en el inciso 4.° del artículo 3.° de la ley 67 de 1877.

En cuanto á la competencia de la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones para conocer de la reclamación pendiente del señor Caro, ella está reconocida en el artículo 13 de la ley 44 de 1886 sobre la materia.

Por lo demás, el infrascrito estima suficientes las pruebas aducidas para justificar la efectividad de la expropiación de ochenta reses pertenecientes al señor Caro, así como la circunstancia de haberse imputado el valor de ellas al pago de un empréstito asignado al señor Holguín; pero en cambio objeta la cuantía de $ 4,320 fijada á la reclamación, pues cree que ésta debe limitarse á lo que resulta del avalúo pericial que precedió á la expropiación, ó sea á $ 36 por cabeza, lo que da la suma total de $ 2,880.

Las razones que se oponen á la aceptación de los precios fijados por los testigos de cuyas declaraciones se hizo mérito en el juicio contradictorio que alcanzó á fallarse en 1.ª instancia (foja 19) sobre la misma reclamación, consisten en que el avalúo pericial, verificado en el acto de la expropiación, con presencia de los semovientes avaluados y por personas que deben suponerse conocedoras de los precios corrientes del ganado en aquella época, tiene mayor fuerza probatoria que el de los precitados testigos, dado con posterioridad á la referida época de la expropiación, y en que, en esta como en la generalidad de los de su clase, medió la circunstancia de la depreciación de valores consiguiente al estado de guerra, circunstancia que la Corte cuidó de apreciar siempre al tratarse de fijar, verdad sabida y buena fe guardada, la cuantía de las reclamaciones en los juicios que se siguieron ante ella sobre expropiaciones, suministros y empréstitos de la guerra civil de 1876 á 1877.

Fijándose, pués, en $ 2,880 la suma en que justamente deben estimarse las ochenta reses expropiadas, resta advertir que de dicha suma es necesario deducir la de $ 371, importe del saldo de que fué indemnizado el señor Holguín, por cuanto esta cantidad está comprendida en el valor de las citadas reses, adjudicadas al Fisco por el empréstito repartido á este señor, y que el señor Caro reclama en su totalidad.

Habida consideración á lo expuesto, el infrascrito es de concepto que debéis reformar la resolución de la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, reduciendo el reconocimiento á la suma de $ 2,509 y con la adición de que el pago debe hacerse en los documentos indicados en el artículo 2.° de la citada ley 100 de 1880, con referencia al inciso 4.° del artículo 3.° de la ley 67 de 1877, ó sea en vales de 2.ª clase.

Bogotá, 23 de Junio de 1885.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados:

En 28 de Mayo último el señor Secretario de ese Supremo Tribunal puso á vuestro Despacho este expediente, informando que había sido encontrado entre los negocios demorados desde el año de 1883.

No hay constancia en los autos, tales como han sido encontrados, de la manera como ellos fueron remitidos á la Corte; pero, á foja 31 del segundo cuaderno, se encuentra una sentencia pronunciada por el Juez del Circuíto de Yarumal, en la cual se declaró que la Nación no tiene derecho para oponerse al remate de una casa denunciada como de propiedad del señor Presbítero Justiniano Madrid, en el juicio ejecutivo seguido contra éste por el señor Ulpiano Ruiz de R. Esta sentencia fué dictada en el juicio de tercería excluyente interpuesto por el Ministerio público, por haber sido antes adjudicada al Gobierno la casa que se trataba de rematar, á causa de no haber cubierto el ejecutado, á su debido tiempo, un empréstito con que fué gravado en la guerra civil de 1876 á 1877. Es de creerse, por consiguiente, que el expediente vino á la Corte en virtud de consulta de la expresada sentencia, de acuerdo con los artículos 884 y 1,130 del Código Judicial de la Nación.

Hay constancia de que la finca ejecutada perteneció al Presbítero Madrid y fué adjudicada al Gobierno, por no haber aquél cubierto el empréstito que le fué repartido en la guerra de 1876 á 1887.

La casa referida no había pasado á terceros poseedores al tiempo que fué introducida la tercería, y, por consiguiente, son aplicables al caso las disposiciones de la ley 38 de 1882 y del Decreto número 607 de 26 de Octubre del mismo año, en virtud de las cuales la Nación dejó de ser dueña de todas las fincas que le fueron adjudicadas en las expresadas condiciones, y volvió el dominio de ellas á los primitivos propietarios.

Por tal motivo, soy de concepto que debéis confirmar la sentencia consultada.

Bogotá, 28 de Junio de 1887.

CARMELO ARANGO M.

CORRECCIÓN

En el número 32, página 249, columna 2.ª línea 42 dice: no puede *empequeñecer*; léase: no puede *empecer*.

Año I REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 34

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 27 de Agosto de 1887.

CONTENIDO.

PÁG

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

Acuerdo número 53, relativo á una consulta del Tribunal Superior de Popayán ... 365
Id. número 54, id. á consultas de varios Jueces de Honda y Facatativá y del Juez Superior de Bolívar ... „
Id. número 56. id. á consultas de varios Jueces de Bogotá ... 266
Id. número 57, id. á una consulta elevada por el Tribunal Superior del Tolima ... „
Id. número 58, sobre un pedimento hecho por el recluso Luis V. Herrera para solicitar rebaja de pena ... 267
Id. número 59, sobre id. del reo Federico Montero para idéntico objeto ... „
Id. número 60, relativo á una nota de lseñor Procurador general sobre los documentos que ha pedido á sus Agentes para formar la estadística Judicial ... „

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES

De sobreseimiento en una acusación entablada contra el Magistrado doctor Emilio Ruíz Barreto ... 268
De confirmación de un auto de proceder dictado por el Tribunal Superior de Cundinamarca ... 269
De id. de un au o de sobreseimiento proferido por el Tribunal Superior de Antioquia ... „

NEGOCIOS CIVILES.

De revocación de un auto dictado, en un juicio sobre expropiación, por el Juez del Circuíto de Manizales ... 270
Sobre incompetencia de la Corte para conocer de una apelación indebidamente elevada ... „

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL.

Emitida respecto de la acusasión entablada contra el doctor Emilio Ruíz Barreto ... 271

DOCUMENTOS VARIOS.

GACETA JUDICIAL.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

ACUERDO NUMERO 53.

En Bogotá, á seis de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, el señor Magistrado doctor Fernández presentó el siguiente proyecto de resolución en la consulta que hace el señor Juez del Circuíto de Santander, en el Departamento del Cauca, al Tribunal Superior del Distrito judicial de Popayán, sobre el procedimiento que se debe adoptar en la secuela de las causas criminales y de los juicios civiles, por los Jueces Municipales; consulta que el Tribunal de Popayán resolvió someter á la consideración de esta Suprema Corte, y asunto que tocó en repartimiento al referido señor Magistrado:

"Por medio de un oficio marcado con el número 68 y fechado el 2 de Junio último, consultó el señor Juez del Circuíto de Santander, en el Departamento del Cauca, al Tribunal del Distrito judicial de Popayán, sobre el procedimiento que deban adoptar en la secuela de las causas criminales y de los juicios civiles, los Jueces Municipales, una vez que al empezar á regir el Código Judicial Nacional en todos los Departamentos, no se encuentra en él nada relativo á Juzgados Municipales. El Tribunal ordenó, por resolución de diez del mismo mes, que se pasara la nota aludida á esta Suprema Corte, para que resolviera lo relativo á la duda á que se refiere el Juez.

"La Corte, haciendo uso de la atribución que le confiere el artículo 116 de la ley 57 de 1887, y teniendo en consideración lo que dispone la parte final del artículo 117 de la ley 61 de 1886, resuelve la expresada consulta así:

"Las atribuciones, jurisdicción y competencia de los Jueces de Distrito Municipal, serán las mismas que conforme al Código Judicial adoptado, correspondía ejercer á los Corregidores; y lo que en dicho Código se dice de los Prefectos en relación con los Corregidores, se entenderá dicho respecto de los Jueces de Circuíto.

"Transcríbase esta resolución al Tribunal Superior del Distrito judicial de Popayán, en respuesta á su nota número 50, de fecha 15 de Junio del corriente año y publíquese."

Discutido detenidamente el anterior proyecto, la Corte lo aprobó por unanimidad de votos.

Con lo cual se dió por terminado el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 54.

En Bogotá, á nueve de Agosto de mil ochocientos ochenta y y siete, se reunieron los señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia del infrascrito Secretario.

El señor Magistrado doctor Morales, á quien se dió en comisión un telegrama, de fecha 27 de Julio próximo pasado, dirigido por el señor Juez del Circuíto de Honda, á su S. Señoría el Ministro de Gobierno, quien se sirvió remitirlo á S. Señoría el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, con nota de fecha 30 del mismo mes, número 2,307 de la Sección 1.ª, junto con dos notas, la una del Juez Superior del Distrito Judicial de Bolívar, fecha 30 de Julio último, número 210, y la otra del Juez 2.° del Circuíto de Facatativá, fecha 7 de Julio citado, número 465, presentó el siguiente proyecto de resolución:

"Los Jueces segundos de los Circuítos de Honda y Facatativá, en los Departamentos del Tolima y Cundinamarca, respectivamente, y el Juez Superior del Distrito Judicial de Bolívar, han elevado á S. Señoría el Ministro de Gobierno algunas solicitudes, con el objeto de que se fije el sentido que deba darse á las leyes últimamente expedidas sobre organización judicial; y tales solicitudes han sido pasadas á esta Suprema Corte para que resuelva las dudas allí consignadas.

"El Juez del Circuíto de Honda dijo al Ministro de Gobierno lo que en seguida se transcribe:

"Sírvase S. Señoría resolver y avisarme oportunamente si los juicios criminales de que conocen Jueces Circuíto iniciados antes de expedirse ley 57 y llamados á juicio antes 20 presente, se celebran con ó sin intervención judicial.....

"Parece que lo que el Juez ha querido consultar en el parágrafo anterior, es si los asuntos criminales de que conocían los Jueces de Circuíto, iniciados antes de expedirse la ley 57 y elevados á causas antes del 20 del mes pasado, deben decidirse con intervención *del Jurado*; pues no se concibe cómo pueda seguirse y fallarse un juicio sin la intervención judicial, es decir, sin la participación del Juez.

"El Juez segundo del Circuíto de Facatativá consulta también, si desde el 22 del mes pasado en adelante deben conocer los Jueces de Circuíto con intervención del Jurado, en asuntos criminales relativos á delitos cometidos hasta dicha fecha.

"Una vez vigente la ley 57 del presente año, los Jueces de Circuíto no conocen de ningún asunto con intervención del Jurado; de suerte que los juicios no decididos hasta el 22 del mes próximo pasado, fecha desde la cual se cuenta la vigencia de la ley 57, han quedado, por ministerio de la ley, bajo la jurisdicción de los Jueces Superiores de Distrito, si la investigación es referente á los delitos de que trata el artículo 102 de la ley 61 de 1886, ó bajo la jurisdicción exclusiva de los Jueces de Circuíto, si la actuación versa sobre otros delitos.

"Basta la anterior explicación para aclarar las dudas presentadas por los Jueces de los Circuítos de Honda y Facatativá.

"La solicitud del señor Juez Superior del Distrito Judicial de Bolívar se reduce á consultar si en todo caso existe el Jurado de acusación; si, por regla general, todo sumario, una vez perfecto, debe someterse á su censura; cuáles reglas deben observarse para ello; cuál la fórmula de las cuestiones que deben ser presentadas por el Juez; y cómo debe formular su resolución; ó si el Jurado de acusación sólo existe para el el caso determinado en el artículo 251 de la ley 57 del presente año.

"En este punto la ley no ofrece oscuridad de ninguna especie. Conforme al artículo 251 de la citada ley 57, el Jurado de acusación no puede convocarse, sino en el caso de que el Juez Superior no encuentre prueba legal suficiente para llamar á juicio á un sindicado; siempre empero que haya en el proceso datos de otra especie de los cuales pueda deducirse, en concepto del Juez, que se ha cometido un delito de los que le estén atribuídos, y que una ó más personas determinadas son ó pueden ser responsables. Este es el único caso en que interviene el Jurado de acusación en los juicios criminales.

"En cuanto á las reglas para el perfecto funcionamiento del Jurado de acusación, ellas están señaladas con precisión en los artículos 252 á 262 de la ley referida."

Discutido el anterior proyecto, fué aprobado por el voto unánime de los señores Magistrados.

En seguida dispuso la Corte que se comunique este Acuerdo á S. Señoría el Ministro de Gobierno, en contestación y como resultado de su citada nota número 2,307; y á los Jueces de los Circuítos de Honda y Facatativá y al del Distrito Judicial de Bolívar.

Con lo cual se concluyó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados por ante el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 56.

En la ciudad de Bogotá, á trece de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario.

El Magistrado doctor Fernández sometió á la consideración de la Corte, el siguiente proyecto de resolución, en la solicitud que los Jueces de Circuíto de Bogotá, en lo civil, y el Juez 1.° Municipal de la misma ciudad, hacen para que la Corte Suprema aclare un punto relativo á la jurisdicción de los Jueces de Circuíto y de los Municipales, por razón de la cuantía de los negocios; asunto que tocó en repartimiento al referido señor Magistrado:

"Los Jueces del Circuíto de Bogotá, en lo civil, y el Juez 1.° Municipal de la misma ciudad, solicitan que la Corte Suprema aclare el siguiente punto que, en su concepto, presenta duda en el procedimiento.

"La legislación del extinguido Estado de Cundinamarca fijaba la jurisdicción de los Jueces de Circuíto y de Distrito, por razón de la cuantía, asignando el conocimiento de las demandas cuyo valor excediera de trescientos pesos, á los Jueces de Circuíto, y á los de Distrito las que no alcanzaran este valor; pero exceptuaba de la regla general los Juzgados de Bogotá, en donde los Jueces de Distrito conocían de demandas cuya cuantía fuera hasta de quinientos pesos. Preguntan si, según lo dispuesto en el artículo 117 de la ley 57 de 1887, deben seguir conociendo los Jueces Municipales de Bogotá, en lo civil, de los juicios que estaban en curso ante ellos, el día que empezó á regir la ley citada, aun cuando el interés de los juicios pasara de trescientos pesos; ó si á virtud de la nueva legislación dejan de ser competentes para conocer de demandas que pasen de este valor.

"Para la Corte no hay motivo de duda en el caso que se ha presentado á su consideración. Es principio de Jurisprudencia generalmente reconocido, que las leyes procesales se aplican á los juicios desde el día en que empiecen á regir, sin que afecten en nada lo que hasta entonces se hubiere hecho de acuerdo con leyes anteriores. El artículo 117 de la ley 57 á que se refieren los señores Jueces que han elevado la consulta, establece como regla general, *sin excepción alguna*, que las demandas de mayor cuantía son aquellas cuyo interés es ó pasa de trescientos pesos, y las de menor cuantía, aquellas cuyo interés es menor de trescientos pesos."

"Desde la fecha en que empezó á regir la disposición citada, obliga en todo el país, cualesquiera que fuesen las diferencias que, sobre cuantía existiesen en los diferentes Estados, y los procesos deben pasar á los Juzgados que tengan jurisdicción para seguir conociendo de los negocios desde la fecha en que está rigiendo la nueva ley.

"La Corte, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 116 de la ley 57 de 1887, resuelve la duda que ha dado motivo á la consulta, así:

"Desde el día en que entró en vigencia la ley que acaba de citarse, ningún Juez Municipal tiene jurisdicción para conocer en demandas cuyo valor sea ó exceda de trescientos pesos, y los expedientes relativos á juicios cuyo interés sea ó exceda de esta suma, deben pasarse al Juez Superior respectivo para que siga conociendo."

Discutido el anterior proyecto, fué aprobado por unanimidad de votos.

La Corte dispuso que se comunique esta resolución á los Jueces que hicieron la consulta, y que se publique en la *Gaceta Judicial*.

Con lo cual se terminó el presente Acuerdo que firman los señores Magistrados y el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 57.

En Bogotá, á trece de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, se reunió la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, y el Magistrado doctor Noguera, á quien pasó en comisión la consulta hecha al Secretario de Gobierno del Departamento del Tolima, por el primer designado encargado del Juzgado 1.° del Circuíto de Neiva, consulta que fué transcrita á esta Corte Suprema, en telegrama de 11 del presente, por Su Señoría el Presidente del Tribunal Superior del Distrito judicial del Departamento mencionado, sobre si dicho designado debe continuar ó nó funcionando como Juez del referido Circuíto, por cuanto ha cesado la vigencia del Código Judicial del extinguido Estado, que faculta á los Concejos municipales para nombrar tales designados y por cuanto el Código que actualmente rige no les da la referida facultad,—sometió á la consideración de la Corte el siguiente proyecto de resolución:

"El artículo 3.° de la ley 46 del presente año, que adiciona y reforma, entre otras, la 61 de 1886, dispone esto: "Los Tribunales de Distrito nombrarán dos suplentes para cada uno de los Jueces cuyos nombramientos les corresponden, y para un período igual al de los principales. Los suplentes reemplazarán á los principales en el orden de su numeración, en las faltas temporales y también en las absolutas, mientras no se haga nuevo nombramiento."

"Es, pues, absolutamente claro que la legislación vigente no reconoce otra manera de suplir las faltas de los Jueces prin-

cipales de Circuíto, cualquiera que sea la naturaleza de ellos que la determinada en la disposición transcrita, y que, por con, siguiente, lo que sobre el particular hubieren dispuesto las leyes de los extinguidos Estados, aún para llenar las faltas de los mismos suplentes, ha quedado sin efecto desde la promulgación de la ley que se acaba de citar.

"A no ser así, habría que atender en ciertos casos, para la provisión de los empleos de Jueces suplentes, á las disposiciones que regían en cada una de las secciones en que estaba dividida la República bajo el régimen federal, y esto sería enteramente opuesto al principio de unificación de la legislación nacional, sobre que descansan las nuevas instituciones; y resultaría, además, que la elección de tales Jueces vendría, tal vez, á hacerse con abstracción de lo prevenido en el artículo 157 de la Constitución.

"En fuerza de estas consideraciones, la Corte Suprema de la Nación resuelve la consulta de que se trata, declarando: que el Juez 1.° designado por el Concejo municipal de Neiva para ejercer el empleo de Juez principal de aquel Circuíto, no puede yá tener existencia legal, como tampoco pueden tenerla los suplentes de los Jueces de los demás Circuítos de la República que no hayan sido nombrados en conformidad con lo estatuído en la ley 46 á que se ha hecho referencia.

"Comuníquese por telégrafo al Tribunal consultante, y publíquese en la *Gaceta Judicial* para los efectos legales.

El mismo Tribunal se servirá informar acerca del motivo por el cual el Juzgado del Circuíto de Neiva no está ó no ha estado servido hasta la fecha de la consulta por el principal suplente que previene la ley."

Discutido el anterior proyecto, fué aprobado por unanimidad de votos.

Con lo cual se concluyó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 58.

En Bogotá, á trece de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de los señores Magistrados y del infrascrito Secretario,—con el objeto de tomar en consideración la solicitud que hace Luis V. Herrera, preso en el Panóptico de esta ciudad, para que se le rebaje una parte de la pena á que fué condenado.

Habiendo tocado dicho asunto en repartimiento al señor Magistrado doctor Fernández, éste presentó á la Corte el siguiente proyecto de resolución:

"Luis V. Herrera ha solicitado que la Corte Suprema pida al Poder Ejecutivo le rebaje una parte de la pena á que fué condenado por fallo de la Corte, recaído con fecha 23 de Septiembre de 1886.

"Sin entrar á examinar las razones en que se apoya la solicitud, se observa que como la decisión á que se refiere el peticionario fué pronunciada antes de la vigencia de la ley 56 de 1886, que se publicó en el número 6,883 del *Diario Oficial*, correspondiente al 6 de Diciembre de 1886,—tanto por lo dispuesto en el artículo 1.° de dicha ley, como por la resolución del Ministerio de Gobierno, recaída en desarrollo de ella, con fecha 31 de Mayo del año en curso, (número 7,070 del *Diario Oficial*), le corresponde al Poder Ejecutivo ejercer libremente la atribución que le confiere el inciso 6.° del artículo 119 de la Constitución, sin que deba preceder solicitud del Tribunal que haya impuesto la pena; pues éste no tiene facultad para pedir rebaja, sino respecto de los negocios que se hayan fallado ó se fallen después de la vigencia de la lel 56 citada.

"Por lo expuesto, la Corte se abstiene, por incompetencia, de ocuparse de la petición elevada por Luis V. Herrera, y ordena que se le comunique esta resolución por medio de una nota.

"Notifíquese, cópiese y publíquese."

La Corte aprobó por unanimidad el anterior proyecto.

Con lo cual se concluyó el presente Acuerdo, que firman todos los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 59.

En Bogotá, á trece do Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario; y se tomó en consideración la solicitud que hace Federico Montero, preso en el Establecimiento de castigo de la ciudad de Santa-Marta, para que se le rebaje una parte de la pena á que fué condenado.

El señor Magistrado doctor Angarita, á quien tocó en repartimiento tal asunto, presentó á la decisión de la Corte el siguiente proyecto de resolución, que fué aprobado por el voto unánime de los señores Magistrados:

"Federico Montero, preso en el Establecimiento de castigo de la ciudad de Santa-Marta pide que, de conformidad con el artículo 8.° de la ley 56 de 1886, este Supremo Tribunal solicite del Excelentísimo señor Presidente de la República la rebaja de la quinta á la tercera parte de la pena que le fué impuesta por este mismo Tribunal, con fecha 14 de Octubre de 1884.

"La Corte, para resolver, considera:

"El artículo 1.° de la mencionada ley 56 dispone que el Presidente de la República puede ejercer *libremente* las facultades que le confiere el artículo 119, inciso 6.° de la Constitución, respecto de reos sentenciados, con arreglo á la legislación particular de cada Departamento ó al Código de Cundinamarca.

"Conforme á los artículos 3.° y 8.° de la expresada ley, el Presidente de la República no puede ejercer la facultad de que habla el artículo 119 de la Constitución, respecto de reos sentenciados después de la unificación de la legislación nacional, sino previa solicitud elevada por el Tribunal que sentenció en última instancia.

"Como en el presente caso el reo fué sentenciado antes de la vigencia de la ley sobre unificación de la Legislación nacional, corresponde al Presidente de la República ejercer libremente la indicada atribución, sin necesidad de que preceda la solicitud de que habla el sentenciado.

"En consonancia con las disposiciones legales citadas, el Ministerio de Gobierno ha dictado la resolución de fecha 31 de Mayo próximo pasado (*Diario Oficial* número 7,070) en que se dispone que: 'corresponde *exclusivamente* al Presidente de la República la facultad de conceder libremente rebaja de penas por delitos comunes á los reos condenados antes de la vigencia de la ley 57 de 1887.'

"A mérito de las consideraciones que preceden, la Corte se abstiene, por incompetencia, de acoger la solicitud de Federico Montero, de que se ha hablado. Comuníquese al interesado y publíquese."

Con lo cual se concluyó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER.—*Manuel J. Angarita.—Francisco A. Fernández.—Antonio Morales.—Benjamín Noguera.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 60.

En Bogotá, á diez y seis de Agosto de mil ochocientos cohenta y siete, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario.

Inmediatamente S. Señoría el Presidente de la Corte hizo dar lectura á una nota del señor Procurador general de la Nación, número 447, de diez del que cursa, en la cual da cuenta de que, con el propósito de formar la estadística judicial y criminal de la República, se dirigió, desde principios del presente año, á los Agentes del Ministerio Público, á los Jueces de

Circuíto y á los Tribunales y Jueces superiores de Distrito, en solicitud de los datos necesarios para la realización de aquel trabajo; y que á pesar de haber repetido con instancia las circulares del caso, casi todos los Agentes del Ministerio público á quienes se dió el encargo de recoger los datos pedidos, han manifestado que no les ha sido posible obtenerlos de los respectivos Tribunales y Juzgados, razón por la cual no pueden cumplir con lo que en el particular les corresponde; por lo cual, concluye el señor Procurador general, expresando que se dirige á la Corte Suprema, para ver de conseguir, si es posible, que se ordene, por medio de Acuerdo, á los Tribunales y Juzgados, que dén pronto cumplimiento á lo dispuesto por ese Ministerio, en las circulares que les fueron remitidas en oportunidad, y en las cuales se les advirtió el deber en que estaban de suministrar los datos de que se deja hecha referencia, correspondientes al primer semestre del presente año, y para que, en lo sucesivo, continúen suministrándolos sin demora.

El señor Magistrado doctor Morales, á quien tocó tal nota en repartimiento, presentó el siguiente proyecto de resolución, que fué aprobado por el voto unánime de los señores Magistrado:

"Exíjase á los Tribunales de Distrito judidial, á los Jueces, Superiores y á los Jueces de Circuíto, que remitan al Despacho de la Corte los datos estadísticos que les fueron pedidos por el señor Procurador de la Nación en las circulares que oportunamente se les enviaron, ajustándose á los modelos publicados en el *Diario Oficial*.

" Una vez que la Corte reciba los datos referidos, los pasará al Despacho del señor Procurador, á fin de que este empleado pueda cumplir con el deber de formar los cuadros indicativos del estado de la Administración de justicia en la República.

"Transcríbase esta resolución al señor Procurador, como respuesta á su nota de fecha 10 de los corrientes."

Con lo cual se dió por terminado el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Julio diez y ocho de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—A principios de Enero último ocurrieron á esta Superioridad Gabriela Olaya, amparada como pobre de solemnidad, y su apoderado Agustín Calvo M., acusando al señor Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, doctor Emilio Ruiz, por violación del artículo 386 del Código de Procedimiento criminal de Cundinamarca, del 116 de la ley 19 de 1883, orgánica del Poder Judicial del mismo extinguido Estado; de los 375 y 382 del Código Judicial, y del inciso 2.° del artículo 256 del Penal.

Hácese consistir el primer cargo en que habiéndosele pedido á dicho Magistrado copia de unos documentos para acusarlo, no la mandó expedir del modo prescrito en el artículo primeramente citado.

El segundo, en que usurpó jurisdicción confirmando un auto que no le fué remitido en apelación.

El tercero, en que mandó admitir una excepción dilatoria de incompetencia de jurisdicción propuesta fuera de tiempo.

Y el cuarto, en que sólo por afecto personal en favor del demandado y desafecto en contra del demandante, pudo el referido Magistrado pronunciar el auto de fojas 16 en lenguaje tan impropio como el que usó.

Aunque los acusadores presentaron para fundar su querella copia de algunos documentos, la Corte, en cumplimiento del artículo 1,741 del Código Judicial de la Nación, pidió el juicio promovido por Gabriela Olaya contra el doctor Simón Rafael Olaya López, sobre entrega de unos bienes, en caso de que tal juicio estuviera fenecido, y si no, testimonio de todo lo conducente, por ser en ese juicio en el que recayeron los autos materia de la acusación; y como aún estuviese pendiente, se sacó y remitió la copia pedida, la cual se mandó agregar al proceso.

El señor Procurador general, á quien se dió traslado de la acusación y de sus comprobantes, es de concepto que éstos no prestan mérito para proceder contra el señor Magistrado acusado, y ha pedido, en consecuencia, que se dicte auto de sobreseimiento.

Examinado prolijamente el expediente, y en particular los autos que han motivado la acusación, y las disposiciones legales que se dicen infringidas, considera la Corte, para resolver lo que corresponda:

1.° Que aunque del escrito en que Gabriela Olaya pidió copia de algunos documentos para acusar al señor Magistrado Ruiz, mandó éste dar traslado á la parte contraria por cuarenta y ocho horas, quien lo contestó, pidiendo testimonio de varias piezas que aquél dispuso se dieran, junto con las solicitadas para apoyar la acusación, con ese procedimiento, que á primera vista se advierte tuvo por objeto impedir que la copia pedida fuera diminuta, ningún agravio se irrogó á la Olaya, y menos si se considera que la Corte tenía el deber legal de pedir, y en efecto pidió, el expediente íntegro si estaba fenecido, ó si no lo estaba, copia, no sólo de los documentos presentados, sino de todo lo actuado desde que se entabló la demanda hasta que se dictó el último de los autos que han motivado la acusación;

2.° Ha servido de fundamento al segundo cargo el oficio de fojas doce, cuaderno segundo, dirigido por el Juez 4.° del Circuíto de Bogotá al Secretario del Tribunal Superior del Distrito Federal, porque habiéndose dicho en él que se remitía el expediente en apelación de los autos dictados en doce y veintiséis de Julio del año próximo pasado, y omitídose mencionar el de trece de Mayo, ha usurpado, se dice, jurisdicción el Magistrado doctor Ruiz confirmando el último auto; pero resultando que la Olaya y su apoderado pidieron, el trece de Mayo de mil ochocientos ochenta y seis (fojas 22, cuaderno principal), revocatoria del auto de trece del mismo mes, agregando que, en caso de no accederse á ella, se les otorgara apelación en el efecto devolutivo; petición que reprodujeron en el escrito que obra en copia al folio veintiséis; y resultando además que en treinta de Junio de mil ochocientos ochenta y seis les fué concedido el recurso interpuesto (fojas 26), el Tribunal pudo y debió conocer de él en ejercicio de una de sus atribuciones legales. Lejos, pues, de haber usurpado jurisdicción, hizo uso de la que por derecho le corresponde, pues, como él mismo lo dijo en su auto de fojas diez y seis, cuaderno segundo, la jurisdicción no se adquiere por la nota remisoria del expediente, sino por la concesión del recurso;

3.° El tercer cargo lo derivan los acusadores de que por medio de un despacho se notificó la demanda al demandado, señalándole cinco días para presentarse ó estar á derecho en el juicio, y de que fué después de transcurrido ese término, más el de seis días en que debió contestarse la demanda, que el apoderado del doctor Olaya López opuso la excepción dilatoria de incompetencia de jurisdicción por no ser el último, vecino de esta ciudad; pero consta de autos que al notificársele la demanda, dijo: que tenía de apoderado en Bogotá, para este asunto al doctor Luis Rubio Sáiz, quien como tál propuso el doce de Julio de mil ochocientos ochenta y seis la excepción mencionada, que fué admitida por el Juez; y como esto se verificó antes de que el despacho fuera devuelto, y el artículo 345 del Código Judicial de Cundinamarca dispone que desde que se cumpla el término que al demandado se le señale para comparecer á estar á derecho en el juicio, le empezará á correr el de la contestación de la demanda, *si habiendo sido devuelto el despacho consta en él la respectiva diligencia de notificación*, es claro que, á falta de este requisito, tanto el Juez que dictó el auto remitiendo la excepción, como el Magistrado del Tribunal que la confirmó, obraron de conformidad con esa disposición, por cuanto ella exige como condición para que empiece á correr el término de la contestación de la demanda, que se haya devuelto el despacho y conste en él que ésta ha sido notificada;

4.° El cuarto y último cargo hecho al señor Magistrado Ruiz, es el de prevaricato, á que se refiere el inciso segundo del artículo 256 del Código Penal de Cundinamarca. Tal artículo dice: "Son prevaricadores..... 2.° Los Jueces y los

árbitros que dan consejo ó defienden á alguno de los que litigan ante ellos, ó que "por interés personal, afecto ó desafecto á alguna persona ó Corporación proceden contra leyes expresas, dejando de hacer lo que ellas ordenan"; y supuesto que de las pruebas presentadas y pedidas no aparece absolutamente que el señor Magistrado Ruiz haya dado consejo ó defendido á alguna de las partes, ni que por interés personal, afecto ó desafecto á alguna de éllas, haya obrado contra leyes expresas ú omitido lo que ellas mandan, es claro que no ha incurrido en el caso de que trata el inciso copiado. Verdad es que el Magistrado acusado empleó en dos de sus autos palabras fuertes contra el apoderado de la Olaya, refiriéndose á las cuales dice éste que sólo por desafecto hacia él ó afecto hacia el demandado pudo valerse de ellas; pero á esto dió lugar el lenguaje irrespetuoso empleado por dicho apoderado contra el señor Magistrado Ruiz, semejante al de que abunda el escrito de acusación, y como lo ha observado el señor Procurador general, los Magistrados pueden imponer, conforme al artículo 2.° del Código de Organización Judicial de Cundinamarca, correcciones disciplinarias á las partes por las faltas que cometan en el desempeño de sus funciones respectivas, entre lo cual y la prevaricación á que alude el inciso 2.° del artículo 256 del Código Penal, hay notabilísima diferencia.

Por lo tanto, y de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador general, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara infundada la acusación intentada por Gabriela Olaya y su apoderado Agustín Calvo M., por los cuatro cargos mencionados, y no encontrándose, en consecuencia, motivo legal para llamar á juicio de responsabilidad al señor Magistrado del Tribunal de Cundinamarca, doctor Emilio Ruiz, sobresee en el procedimiento.

Hágase saber y archívese el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y nueve del mismo mes, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Julio veintitrés de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Por demoras ocurridas en un sumario que se instruía con el fin de averiguar quienes fueron culpables de la fuga de Juan Niño del Panóptico de esta ciudad, declaró el Tribunal Superior de Cundinamarca con lugar á formación de causa de responsalidad, por los trámites extraordinarios, contra los doctores Jesús Palau, José Lisardo Porras é Isidoro Gaitán, porque, encargados sucesivamente del Juzgado 6.° del Circuíto de Bogotá, descuidaron dar curso á dicho sumario, cuya instrucción les correspondía. Notificado el auto á los tres llamados á juicio, el doctor Gaitán pidió revocatoria, é interpuso, para el caso de que no le fuera otorgada, recurso de apelación, fundándose en que la acción criminal estaba prescrita, porque habían trasncurrido más de dos años desde el día en que incurrió en la falta hasta aquel en que se le llamó á juicio. El Tribunal negó la revocatoria y concedió la apelación para ante esta Superioridad; y habiéndose oído al señor Procurador general, quien es de concepto que el auto apelado debe confirmarse, por no ser exacto que la pena haya prescrito, la Corte pasa á examinar este punto, motivo del recurso.

De lo actuado resulta que el doctor Gaitán sirvió el Juzgado 6.° del Circuíto en el tiempo transcurrido del 21 de Marzo al 15 de Julio de 1885, y posteriormente desde el 8 de Agosto del mismo año hasta el 5 de Octubre, fecha en la cual se dió curso al sumario paralizado en los meses anteriores; y siendo esto así, es claro que los dos años de la prescripción por las demoras causadas desde el 8 de Agosto hasta el 5 de Octubre de 1885, no se vencen hasta el 5 de Octubre del corriente año, y que aun las causadas hasta el 15 de Julio de 1885 no estaban prescritas el 22 de Febrero del año en curso, en que el doctor Gaitán fué llamado á juicio, ni aun el 31 de Mayo, en que se le notificó el auto de proceder.

En fuerza de estas observaciones, y teniéndose también en consideración que el doctor Gaitán no ha ocurrido á sostener el recurso que interpuso, la Corte Suprema, de conformidad con lo pedido por el señor Procurador general, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto apelado, y declara de cargo del doctor Isidoro Gaitán las costas del recurso.

Hágase saber esta resolución, déjese copia de ella, publíquese en la *Gaceta Judicial*, y devuélvase el expediente al Tribunal Superior de Cundinamarca para que le dé el curso legal.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veinticinco de Julio de mil ochocientos ochenta y siete notifiqué al señor Procurador el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Julio veintiocho de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—De estas diligencias sumarias que, por via de consulta del auto de sobreseimiento, dictado en ellas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, han venido á esta Superioridad, resulta lo siguiente:

En uno de los días del mes de Febrero de 1885 reñían en una cantina, en el Distrito de Aná del extinguido Estado de Antioquia, Manuel Redondo y Antonio José Escobar, y el Alcalde, Juan B. González, dispuso que fueran llevados á la cárcel. En los momentos de entrar en esta se presentó Aureliano Redondo, hermano del primero, en actitud amenazante y armado de un cuchillo, y habiéndolo notado el Prefecto del Departamento de Sur-Oeste, Rafael Cadavid, ocurrió al lugar en que esto sucedía y disparó dos tiros de revólver. Para averiguar si por parte del Prefecto hubo el designio de cometer un homicidio, ó, en otros términos, tentativa de ese delito, es para lo que se ha instruído este sumario, y como en él no aparece probado que tal fuera la intención de Cadavid, sino que hizo los tiros al aire con el fin de intimidar al que pretendía oponerse á la orden de arresto de los dos que reñían, dada por el Alcalde, según lo han declarado algunos testigos; y á demostrar ésto viene la circunstancia de no haberse encontrado en las paredes del edificio señal alguna del proyectil, que no habría podido faltar si los tiros se hubieran disparado en dirección al punto en que estaban los Redondos y Escobar; razón hubo para sobreseer en el procedimiento, como lo ha manifestado el señor Procurador general de la Nación al emitir concepto en el negocio.

Sobre lo que pudiera caber alguna duda sería sobre la competencia de la Corte para conocer del asunto en última instancia; pero ella desaparece si se tiene en cuenta, como lo ha observado el señor Fiscal del Tribunal de Antioquia, que estándole atribuído á la Corte, conforme al numeral 7.° de la Sección 2.ª del artículo 21 de la ley 61 de 1886, el conocimiento en dicha instancia de las causas de responsabilidad ó por delitos comunes contra los Jefes superiores de las Provincias, que han venido á reemplazar á los antiguos Prefectos de Departamento, lo dicho respecto de aquéllos debe entenderse respecto de éstos, por identidad de razón.

Siendo esto así, y estando, como se ha dicho, arreglado al mérito del sumario el auto de sobreseimiento consultado, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, lo confirma.

Hágase saber esta resolución, déjese copia de ella, publíquese en la *Gaceta Judicial*, y devuélvase el expediente al Tribunal de su procedencia.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En treinta de Julio de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto que precede al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintinueve de Julio de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 38 de 1882, que manda devolver las propiedades que habían sido rematadas por orden del Gobierno, para atender al pago de empréstitos, expropiaciones y exacciones que tuvieron lugar en todo el país durante la guerra civil de 1876 y 1877, y en el extinguido Estado de Antioquia en el año de 1879, expidió el Poder Ejecutivo nacional el decreto número 607 de 26 de Octubre de 1882, publicado en el *Diario Oficial* número 5,514, y por medio de el les ordenó á los Gobernadores y Presidentes de los Estados que dieran las órdenes correspondientes á sus Agentes, para que les intimaran á los actuales poseedores de las fincas expropiadas que se las devolvieran á sus primitivos dueños.

El Presidente de Antioquia mandó, por medio del decreto número 207 de 15 de Diciembre de 1882, que los Jefes Municipales les previnieran á los poseedores de fincas rematadas que se las devolviesen á sus dueños dentro del término de quince días.

El Jefe Municipal de Manizales llenó su deber para con varios individuos que se encontraban en este caso, y figura entre aquellos á quienes se les hizo la notificación ordenada por el Gobierno, el señor Liborio Gutiérrez E., poseedor de unas fincas que eran de propiedad del señor Silverio Arango, y que le fueron rematadas el diez de Marzo de mil ochocientos setenta y nueve, para cubrir el valor de un empréstito forzoso que se le había asignado.

El señor Gutiérrez E., al recibir la notificación, expresó que no entregaba voluntariamente la finca que le había sido adjudicada, porque le pertenecía en plena y absoluta propiedad, y aguardaba que el Gobierno, haciendo uso de la ley de expropiación, se la arrebatara.

El Ministerio de Hacienda y Fomento de Antioquia, con nota fechada el 6 de Febrero de 1883, le remitió las diligencias al señor Fiscal del Circuito de Manizales, para que diera cumplimiento á lo dispuesto en el artículo 8.° del decreto ejecutivo número 607 yá mencionado.

El Fiscal entabló demanda de expropiación contra el señor Liborio Gutiérrez, de los terrenos que había rematado, para devolvérselos al señor Silverio Arango, fundándose en la ley 38 de 1882 y en el decreto que dictó el Poder Ejecutivo en ejecución de ella.

Se admitió la demanda por el Juez nacional de primera instancia de Manizales, se le corrió traslado al demandado, y éste, antes de contestar, opuso la excepción dilatoria de inepta demanda, apoyado en que no se acompañó por el Agente del Ministerio público la prueba del motivo de necesidad pública que obligara á solicitar la expropiación, como lo dispone el artículo 1,268 del Código Judicial.

Substanciada la excepción, la declaró probada el Juez, por auto de siete de Febrero de mil ochocientos ochenta y cuatro.

El Fiscal apeló del fallo y, otorgado el recurso, vino el expediente á la Corte, en donde se repartió el veinte de Junio último.

Se ha surtido la tramitación legal y, para decidir sobre el auto apelado, se tienen en cuenta estas consideraciones:

1.ª Según el artículo 401 del Código Judicial, la excepción de inepta demanda no tiene cabida sino cuando la que se entabla no está arreglada á la ley; cuando se dirige contra diversa persona de la obligada á responder sobre la cosa ó el hecho que se demanda, ó cuando se le da al juicio una tramitación distinta de la que le corresponde.

En el caso en cuestión no concurre ninguna de estas circunstancias, porque la demanda está debidamente redactada; se dirigió contra quien debía responder, que lo era la persona que estaba poseyendo la finca de cuya devolución se trata, y se entabló en la forma prevenida por el artículo 8.° de la ley 38 de 1882.

No hay razón, pues, para afirmar que la demanda es inepta.

2.ª Respecto del argumento que se hace para sostener que al entablar la acción debió comprobar el Fiscal que se habían puesto previamente, para arreglar con el demandado, los medios á que hace referencia la disposición legal antes citada, debe observarse, primero: que si el demandado cree que tiene este medio de defensa, no es para oponer excepción de inepta demanda, para lo que puede hacer uso de él; y segundo; que de autos aparece que al hacérsele saber al señor Gutiérrez que debía devolver las fincas que había rematado y que le habían sido adjudicadas en obedecimiento de la ley 38,—éste manifestó que no estaba dispuesto á entrar en ningún arreglo, cuando dijo que no las entregaba voluntariamente y que aguardaba á que el Gobierno, haciendo uso de la ley de expropiación, se las arrebatase. Se ve, pues, que si debía preceder iniciación de arreglos, ésta tuvo lugar antes de que se entablara la demanda por medio de la notificación de que se ha hecho mérito y que fué expresamente desechada por la persona que estaba directamente interesada en que se determinaran las bases sobre las cuales podía llegarse á ellos.

3.° Que la expropiación demandada por el Fiscal está fundada en motivo de necesidad pública, aparece claro de las palabras del artículo 8.° varias veces citado, allí donde dice: "..... para lo cual se declara que es causa de necesidad pública la de devolver las fincas de que se trata á sus dueños....."

4.° Que la ley 38 y el decreto dado en su ejecución, estuvieran ó nó de acuerdo con la Constitución, no era cosa que debía averiguar el representante del Gobierno al promover la acción; pues en tanto que estos actos no fueron anulados por la mayoría de las Asambleas de los antiguos Estados como inconstitucionales, debían cumplirse rígidamente, tanto por los particulares como por los empleados públicos. (Véase el artículo 25 de la Constitución de 8 de Mayo de 1863, vigente cuando se entabló este juicio). No tiene, en consecuencia, fuerza alguna el razonamiento sobre inconstitucionalidad, de que se sirve la parte demandada para afirmar que la demanda es inepta.

El auto que declara probada la excepción es injurídico, por las razones que se han expuesto, que están de acuerdo con el concepto del señor Procurador general de la Nación, y por ello, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, lo revoca, y ordena que el demandado conteste la demanda dentro del término fijado en el artículo 407 del Código Judicial.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente al Juzgado de su origen.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En treinta de Julio de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador el auto que antecede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogota, Julio veintinueve de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Substanciábase en el Juzgado 1.° del Circuito de Medellín, el incidente sobre las excepciones propuestas por el apoderado de Ireneo Escobar, en el juicio ejecutivo promovido por el Administrador pricipal de Hacienda nacional, por la pérdida de una encomienda en oro, que afectaba solidariamente la responsabilidad del ejecutado,—cuando por parte de éste se entabló una articulación que tiene el carácter de prévio y especial pronunciamiento, cuyo efecto debía ser la suspensión del juicio de excepciones, y destinada á enmendar la apelación del auto ejecutivo, fallada yá actualmente, y á impedir la intervención del Administrador de Hacienda en el incidente pendiente ante el Juzgado.

El Juez, con muy buenas razones, negó la entrada á la articulación; pero cambiado el personal del Juzgado, y á virtud de pedimento del representante de Escobar, fué revocado el auto primero y admitida la articulación, en diez de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis. Sesenta y seis días después el mismo Juez, desentendiéndose de lo articulado, encontró otra nulidad, aparte de las yá rebuscadas por el ejecutado, y por auto de veintiséis de Febrero del corriente año declaró sin vigor ni efecto el auto ejecutivo, y consiguientemente todo el proceso, fundándose en que el Administrador de Hacienda no había firmado ese auto sino con la inicial de su nombre y con su apellido, y

que lo mismo había sucedido con el Contador que funcionaba como Secretario, con lo cual había contrariado el artículo 188 del Código Judicial de la Nación; siendo de advertir que, al hacer tal declaratoria, el Juez reconoce la excepción contenida en el indicado artículo, aplicable al caso, como si á pesar de ello quisiera demorar el curso de este juicio que yá de antemano ha sido artificialmente alargado.

El ejecutante reclamó y pidió revocatoria de tal providencia, interponiendo en subsidio apelación, pero habiéndosele negado lo primero se le concedió la apelación para ante el Tribunal Superior. Enviados allí los autos, y después de las dilatorias consiguientes, substanciándose el impedimento del Secretario, que resulta ser hermano del ejecutado, al fin el Tribunal, en veinticuatro de Mayo, se declaró incompetente para conocer en el negocio, y devolvió el expediente al Juzgado del Circuíto, por estar en el asunto interesada la Nación. El Juez concedió entonces el recurso para ante esta Suprema Corte, y notificada la concesión al Agente del Ministerio público en persona, y por edicto á los demás interesados, se ha enviado el expediente á esta Superioridad.

Substanciado en ella el recurso, con audiencia del señor Procurador general, quien es de concepto que debe revocarse la providencia apelada, y acabándose de vencer el término de la fijación en lista, es tiempo de entrar á tratar del recurso interpuesto.

Aun cuando lo referente á la articulación no está sometido por ahora á la decisión de la Corte, ella cree conveniente, para fijar regla de procedimiento, corregir la irregularidad cometida por el Juez de la primera instancia en este punto. Las articulaciones de previo y especial pronunciamiento no tienen yá cabida en la legislación nacional, ni las de cualquiera otra clase en los juicios de naturaleza breve y sumaria, como lo es el ejecutivo, en el cual la ley quiere que toda la defensión consista en la presentación y prueba de las excepciones que enervan la ejecución; siendo un juicio especial que está reglado únicamente por la tramitación particular que la ley le asigna. Es verdad que en este juicio pueden también ocurrir nulidades, aquellas nulidades que la tramitación especial determina, y es verdad también que ellas pueden alegarse y hacerse notar; pero no en forma de articulación, porque esto da por resultado el que se desnaturalice el juicio.

Cuando el ejecutado, que fué hallado con dificultad para intimarle el mandamiento de pago, apeló de éste en el mes de Abril de mil ochocientos ochenta y seis, es verdad, que la apelación le fué concedida para ante el Juez del Circuíto, y que ante él alegó el apoderado de Escobar. Y como luégo el Juez indicara que la apelación debía tener lugar para ante la Corte Suprema, devuelto el expediente al Administrador de Hacienda, éste ordenó que para ante aquélla se elevarán los autos, lo cual tendía á señalar el Tribunal que debía conocer de la apelación concedida yá; y tanto esta última providencia como la del Juez fueron aceptadas por las partes sin réplica alguna. En Junio de ese mismo año de mil ochocientos ochenta y seis, vino el expediente á la Corte que existía entonces, y fué repartido, y se substanció el recurso, oyéndose al Procurador, fijándose el negocio en lista y poniéndose en estado de decisión, todo lo cual equivalía, por autos ejecutoriados, á declarar admitido el recurso. La nueva Corte encontró en esta situación el expediente, y no tenía por qué hacer novedad en él, tanto por lo yá dicho, como porque no había ocurrido ninguna nulidad de las especificadas para el juicio ejecutivo, y entró á resolver la materia del recurso admitido, por providencia de treinta de Septiembre del año anterior.

Aclaradas así las cosas, pasa á ocuparse la Corte del auto de veintiséis de Febrero del corriente año, que es el que motiva la apelación pendiente.

En los autos aparece otra irregularidad, alegada por las partes, que aun cuando no pertenece directamente al punto apelado, sí viene á decidir de él, á saber: la indebida intervención del Administrador principal de Hacienda, como funcionario ejecutor, en el juicio de excepciones ante el Juez del Circuíto. Desde que las excepciones son presentadas ante el funcionario que procede con jurisdicción coactiva y toma conocimiento de ellas el Juez ordinario, desde ese momento no representa la causa nacional sino el respectivo Agente del Ministerio público, que en un caso como el presente es el Fiscal del Circuíto. Mientras la actuación conserva su naturaleza sumaria, puede el funcionario respectivo mantener el doble carácter de parte y de ejecutor; pero no así desde que el asunto toma aspecto de controversia, variando de Juez. Tan es esto así, que el inciso 11 del artículo 1.262 del Código Fiscal no permite á los Administradores principales de Hacienda que lleven la voz fiscal en los juicios en que la Nación está interesada, sino en defecto completo del respectivo Agente del Ministerio público.

Y como la apelación no fué interpuesta ni coadyuvada por este último, sino únicamente por el Administrador principal de Hacienda, es claro que tal apelación ha sido entablada por parte ilegítima, que por lo mismo no se ha transmitido debidamente la jurisdicción al Superior, y que, por lo tanto, la Corte no puede entrar á decidir del recurso, por no estar legalmente apoyado, no obstante que el auto sobre que versa la alzada perjudica á la Hacienda pública y debe ser materia de consulta siempre que ella se establezca.

Por lo tanto, la Corte Suprema de la Nación, se abstiene de conocer en la apelación interpuesta y de que se ha hecho referencia, y dispone que el expediente vuelva al Juez remitenta para que él proceda de acuerdo con la reforma vigésima octava de la ley 46 de 1887.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintinueve de Julio de mil ochocientos ochenta y siete, noitfiqué el auto anterior al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL

Señores Magistrados.

Gabriela Olaya y su apoderado Agustín Calvo Mendívil acusan ante vosotros al Magistrado del Tribunal Superior de Cundinamarca, doctor Emilio Ruiz, por infracción de las siguientes disposiciones legales:

1.ª Del artículo 386 de la ley 35 de 1886 (Código de procedimiento criminal de Cundinamarca). Este cargo se hace consistir en que, habiendo ocurrido la señora Olaya al Magistrado doctor Ruiz en solicitud de una copia para fundar la acusación contra dicho funcionario, éste no dió á la solicitud la tramitación indicada en el expresado artículo.

2.ª Del artículo 116 de la ley 19 de 1883 (Código de organización judicial de ibidem). Este cargo se hace consistir en que el Magistrado acusado usurpó jurisdicción, con motivo de haber conocido de un auto, confirmándolo, sin habérsele consultado, ni haberle sido sometido en apelación.

3.ª De los artículos 375 y 382 del Código Judicial de ibidem, por haber confirmado un auto en que se admitió una excepción dilatoria, propuesta fuera del término legal.

4.ª Del inciso 2.º del artículo 256 del Código Penal de ibidem, infracción en que se dice haber incurrido el doctor Ruiz al dictar los autos de 22 y 29 de Septiembre de 1886 (fojas 12 vuelta y 16 del cuaderno número 2.º).

Vuestra jurisdicción para conocer del asunto en una sola instancia, se deriva del inciso 4.º, sección 1.ª, artículo 21 de la ley 61 de 1886, y el carácter público del doctor Ruiz, como Magistrado del Tribunal Superior de Cundinamarca, está acreditado con copia auténtica del nombramiento y de la diligencia de posesión correspondientes.

Sentado esto, paso á examinar, en el mismo orden en que han sido expuestos, los cargos á que se contrae la acusación.

1.º A fojas 4 vuelta del cuaderno número 2.º, consta que las copias solicitadas por la señora Olaya y su apoderado, se mandaron expedir por el Magistrado doctor Ruiz, por auto de 8 de Octubre de 1886, pero precediendo la circunstancia de que dicho funcionario omitió exigir á los solicitantes el juramento de que trata el artículo 387 del Código de procedimiento crimi-

nal de Cundinamarca, y la de haberse dispuesto un traslado innecesario del pedimento.

Como se ve, la resolución dictada en este particular no recayó sobre juicio ó negocio de que estuviera conociendo el Magistrado acusado, sino sobre un simple pedimento de copias destinadas á intentar contra el mismo Magistrado una queja ó acusación, independiente del juicio civil en que se dicen cometidas las faltas procesales de cuya investigación se trata.

Agréguese á esto, que con el traslado del pedimento no se infirió agravio ni perjuicio á nadie, ni se impidió que se llevara adelante, sin demora notable, la acusación contra el doctor Ruiz, y que la omisión del juramento, que debió pedirse á los interesados en intentar la acusación, mas bien que constituir una falta, revela en el citado Magistrado suma delicadeza, pues debiéndose emplear las copias pedidas para entablar acusación en su contra, quiso eximir á los peticionarios de la formalidad del juramento, dejándolos en libertad de que hicieran de las copias pedidas por ellos el uso que mejor les conviniera, evitándoles así una traba de simple procedimiento para la realización de sus propósitos.

2.° Basta verificar las citas hechas por el Magistrado doctor Ruiz en su auto de fojas 16 (cuaderno número 2.°), para convencerse de que, efectivamente, el auto de 13 de Mayo de 1886, dictado por el Juez 4.° del Circuito de Bogotá y confirmado por aquel Magistrado (fojas 12 vuelta de id), le fué remitido á este á virtud de apelación concedida por el expresado Juez en 30 de Junio de 1886; de donde se deduce que el Magistrado doctor Ruiz sí tuvo jurisdicción para conocer del referido auto (foja 26 del cuaderno que contiene la acusación).

3.° En el juicio ordinario seguido por la señora Olaya y su apoderado contra el doctor Simón Rafael Olaya López, el Juez 4.° del Circuito de Bogotá admitió, por auto de 12 de Julio de 1886, la excepción de incompetencia de jurisdicción, propuesta por el apoderado del demandado. De este auto apelaron los demandantes y el recurso les fué concedido para ante el Tribunal Superior de Cundinamarca.

El Magistrado doctor Ruiz, por auto de 22 de Septiembre de 1886, confirmó el que fué materia del recurso; por lo cual la señora Olaya y su apoderado, han hecho del referido auto confirmatorio capítulo de acusación contra aquel Magistrado, fundándose para ello en que la excepción no se propuso por el demandado dentro del término que tenía para contestar la demanda, según lo prevenido en el artículo 375 del Código Judicial de Cundinamarca.

Sobre esto se observa que, aun cuando es verdad que la demanda de la señora Olaya se notificó al demandado por el Juez del Distrito de Sesquilé, en 22 de Junio de 1886, el despacho librado con tal objeto no volvió al Juzgado comitente sino hasta el 19 de Julio siguiente (fojas 44 vuelta y 45 del cuaderno de la acusación), y esto cuando yá se había reconocido por dicho Juzgado como apoderado del demandado al señor Luis Rubio S., quien al contestar el traslado de la expresada demanda, propuso la excepción de que se ha hecho referencia.

§ Es incuestionable que la circunstancia de no haberse devuelto todavía el despacho, cuando por parte legítima se excepcionó la demanda, justifica la admisión judicial de la excepción propuesta, por cuanto el artículo 345 del Código Judicial respectivo dispone que desde que se cumpla el término señalado al demandado para que comparezca á estar á derecho, le empezará á correr el término legal para la contestación de la demanda, *si habiendo sido devuelto el despacho consta en él la respectiva diligencia de notificación.*

Por lo demás, es sabido que el demandado puede, al notificársele la demanda, abstenerse de contestarla personalmente y limitarse á designar el apoderado que ha de hacerlo por él; lo cual se funda en que, si al demandante le es permitido *iniciar* y seguir el juicio por medio de otra persona que, constituída con las formalidades legales, se llama *apoderado judicial* (artículo 263 del Código Judicial de Cundinamarca), la misma razón existe para que el demandado pueda usar de igual derecho, cuando lo tenga por conveniente.

4.° He examinado los autos á los cuales se contrae este cargo, y puedo asegurar que ni en ellos, ni en sus antecedentes, he podido encontrar la razón que haya habido para acusar de prevaricato al doctor Ruiz, pues lo único que á este respecto se advierte, es que, si dicho funcionario empleó, en alguno de esos autos, términos que causaron ofensa al apoderado de la señora Olaya, tal procedimiento, bien considerado, no tuvo otro objeto que el de moderar ó reprimir los de que antes había usado dicho apoderado en varios de los escritos que de él cursan en los autos; con lo cual el citado Magistrado no hizo sino ejercer la facultad que le confería el artículo 20 del Código de organización judicial de Cundinamarca, de imponer correcciones disciplinarias, entre las cuales figura la de reprensión, á las partes, á los abogados, defensores, etc., por faltas que cometan en el desempeño de sus funciones.

Habida consideración á lo expuesto, creo que la acusación intentada ante vosotros contra el doctor Emilio Ruiz, no presta mérito para proceder contra él, y, por lo tanto, os pido que así lo declaréis, dictando el consiguiente auto de sobreseimiento.

Bogotá, 20 de Junio de 1887.

CARMELO ARANGO M.

DOCUMENTOS VARIOS.

Biblioteca de la Corte Suprema.

El señor Secretario de Gobierno del Departamento de Bolívar ha remitido con nota número 462, de 3 de Junio, lo siguiente:

Código Penal.
" Político y Municipal.
" Civil.
" de Elecciones.
" de Comercio.
" de Procedimiento.

Recopilación de leyes de 1857 á 1875, y leyes expedidas en los años de 1861 á 1884, con las cuales se han formado cuatro gruesos volúmenes.

Se acusó recibo el 27 de Junio, bajo el número 745.

Ramón Guerra A., Secretario.

ANUNCIOS.

CONSTITUCIÓN DE COLOMBIA.

ESTÁ DE VENTA en la Tesorería general, en edición de cuaderno, á 20 centavos el ejemplar.

IMPORTANTE.

En beneficio del buen servicio público, se suplica á los caballeros que tengan en su poder Códigos, Compilaciones, tomos de leyes nacionales y de los extinguidos Estados, ú otros libros de propiedad de la Corte Suprema, se sirvan devolverlos, que se ocurre con frecuencia la necesidad de consultar tales obras.

" GACETA JUDICIAL. "

El Gobierno ha resuelto bajar á la mitad el valor de las suscripciones á este periódico, desde el número 27 en adelante, precio que tendrán igualmente las colecciones de la *Gaceta*.
El Subsecretario de Gobierno, *Julio A. Corredor*.

BOGOTÁ.—IMP. DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 35

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 3 de Septiembre de 1887.

CONTENIDO.

Pág.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

Acuerdo número 61, relativo á una consulta sobre excarcelación en causa por delito de heridas 273
Id. número 63, sobre una consulta relativa á la pena para los delitos de hurto 274
Id. número 65, relativo á una consulta del Tribunal Superior de Antioquia sobre listas para Jurados ..... „
Id. número 62, con relación á una consulta del Tribunal Superior de Popayán ..... „
Id. número 66, sobre reforma del Acuerdo número 48 475
Id. número 67, relativo á un informe del Tribunal Superior del Tolima ..... „

SENTENCIAS DEFINITIVAS

NEGOCIOS CIVILES.

Pronunciada respecto de un juicio de reivindicación seguido en Cartagena ..... „

AUTOS INTERLOCUTORIOS

NEGOCIOS CIVILES

Sobre nulidad de un juicio ejecutivo, seguido en asunto de Bienes desamortizados 476
Sobre incompetencia de la Corte para conocer de un juicio relativo á expropiación 477

NEGOCIOS CRIMINALES

De sobreseimiento en un sumario por responsabilidad ..... „

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL.

Emitida respecto de un sumario por abandono de empleo 478
Id. con relación á un juicio ejecutivo por derechos de importación. 479
Id. respecto de un recurso de casación por imposición de pena de muerte 479

GACETA JUDICIAL.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

ACUERDO NUMERO 61.

En la ciudad de Bogotá, á diez y siete de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, constituída la Corte en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, se ocupó en considerar la consulta dirigida por el señor Inspector de la Sección 4.ª de la Policía municipal de esta ciudad, contenida en el oficio de 16 de los corrientes, número 322; y examinado el asunto, se adoptó por mayoría de seis votos el siguiente proyecto, presentado por el señor Magistrado doctor Martínez, á quien se dió el negocio en repartimiento:

"Consulta el Inspector de la Sección 4.ª de la Policía municipal de Bogotá, sobre si, por la manera como está escrito el artículo 1,561 del Código Judicial, oficialmente adoptado, ó sea por los signos ortográficos que dividen ese artículo, debe entenderse que los reos del delito de heridas inferidas á particulares, están también excluídos del beneficio de excarcelación; y la Corte, para resolver dicha consulta, establece lo siguiente:

"Indudablemente que el último miembro del indicado artículo del Código Judicial, está mal dividido ó mal determinado por el signo ortográfico que lo separa; pero hay también que tener en cuenta que la partícula conjuntiva, ó sea la *ó*, que en este caso viene á ser *disyuntiva, no tendría* significación ni efecto, si no sirviera para diferenciar las heridas de los maltratamientos ocasionados á los funcionarios públicos; lo cual equivale á decir en dicho artículo, que tanto las heridas como los maltratamientos inferidos á los funcionarios públicos, constituyen un delito que no da lugar á excarcelación.

"A esto se agrega el propósito y el espíritu de la ley, señalando, tanto por la naturaleza de las penas á que dan lugar, como por el efecto que producen en la seguridad pública, los delitos que llamaremos gravísimos, para no conceder en éstos el beneficio de excarcelación; á diferencia de otros muchos, entre los cuales están los de heridas comunes, que por la clase del castigo que se les inflige, como por la menor alarma á que dan lugar, no demandan las mismas precauciones que aquellos otros.

"Esto, además, está confirmado por las legislaciones que comunmente han regido en el país, y por las doctrinas de los expositores, cuando tratan de la fianza de la haz ó carcelera.

"Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación resuelve la consulta mencionada, declarando que el artículo 1,561 del Código Judicial, no excluye del beneficio de excarcelación á los reos de heridas comunes ó que no sean inferidas á funcionarios públicos.

"Comuníquese así al empleado que ha dirigido la consulta, y publíquese para conocimiento de los Tribunales y Juzgados de la República."

Con lo cual se concluyó el presente Acuerdo, que firman todos los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

En el Acuerdo de esta fecha, relativo á la consulta que hace el señor Inspector de la Sección 4.ª de la Policía municipal, el señor Magistrado doctor Fernández salvó su voto, expresando que, con pena, se separaba del modo de pensar de sus muy respetables colegas, en lo relativo á la manera como han decidido el punto consultado, fundándose en las consideraciones que pasa á exponer:

El artículo 116 de la ley 57 de 1887 faculta á la Corte Suprema para resolver "sobre las dudas que ocurran en la inteligencia de las leyes sobre organización y procedimientos judiciales."

La Corte, según esta disposición, puede determinar lo que deba observarse en los casos dudosos, pero sin separarse del verdadero sentido y del tenor literal de las leyes.

El hecho que ha dado margen á la consulta de que aquí se trata, está resuelto clara y terminantemente en la disposición legal que ha entrado á interpretar la Corte en el Acuerdo, y lo que dice la ley no está en armonía con la determinación adoptada, surgiendo de aquí nó la resolución de un punto dudoso, sino la reforma de la ley.

En efecto: el artículo 1,561 del Código Judicial (nueva edición, que reproduce el 1,476 de la edición de 1874) dice así:

"No podrán ser excarcelados, ni con la fianza de que se habla en el artículo anterior, los sindicados como reos de los siguientes delitos: hurto, robo, falsedad y falsificación, asesinato, homicidio premeditado, incendio, estupro, alzamiento con caudales públicos, homicidio voluntario, rebelión, sedición, castración, piratería y heridas, ó maltratamientos á los empleados ó funcionarios públicos."

Enumerados los delitos por los cuales no se admite fianza

carcelera, en ningún caso, queda comprendido entre éstos el de heridas, porque está unido con el anterior (piratería) por medio de la conjunción copulativa *y*, y separado del que le sigue (maltratamientos á los empleados ó funcionarios públicos), por una coma.

Si el artículo dijera: "No podrán ser excarcelados..... ..... piratería y heridas ó maltratamientos de obra á los empleados ó funcionarios públicos;" si la coma colocada después de la palabra heridas, no le pusiera término á la enumeración de los delitos por los cuales no es admisible la fianza carcelera; si no se viera que en este caso empleó el legislador un signo indispensable *para evitar ambigüedades y equivocaciones.* (Véanse los tratados de Ortografía de Marroquín, novísima edición, página 117, de la Academia española y de Salvá); si la frase que le sigue á la coma quedara sin sentido ó sin aplicación aceptando el artículo 1,561 en su sentido literal, podría ocurrirse á las reglas de hermenéutica jurídica para interpretarlo; pero nada de eso ocurre en el presente caso.

Lo que ordena la disposición citada es que no se admita fianza por los delitos en él enumerados, inclusive el de heridas, sea que se causen éstas á particulares ó á empleados ó funcionarios públicos; y que si el delito consiste en maltratamientos de obra, sin causar heridas, es admisible la fianza carcelera, si se le infligen á particulares, y no lo es, si afectan á empleados ó funcionarios públicos.

No estableció el legislador excepción para desechar la fianza, al tratarse de heridas, cualquiera que fuese el carácter de ellas, como no la admitió para los delitos de hurto ó robo, por insignificante que fuera el valor de las cosas hurtadas ó robadas.

El argumento de que por la clase de pena que se impone por el delito de heridas y por la menor alarma que produce en la sociedad, debe contarse entre aquellos delitos por los cuales se admite fianza, es razón para que el legislador reforme la ley; pero no para que las autoridades dejen de aplicarla tal como ella está escrita.

Los artículos 27 y 31 del Código Civil confirman esta opinión.

Por las consideracienes que preceden cree el que suscribe que no hay razón para interpretar el sentido del artículo 1,561 del Código Judicial, una vez que su tenor literal es perfectamente claro, y que, por odiosa que sea una ley, debe cumplirse, hasta tanto que se reforme ó se derogue por el legislador.

Bogotá, diez y siete de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete.

Francisco A. Fernández—Martínez—Samper—Angarita—Morales—Noguera—Sanclemente—El Secretario, *Ramón Guerra A.*

ACUERDO NUMERO 63.

En Bogotá, á veintitrés de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario; y se tomó en consideración la consulta que hace el Juez del Circuito de Santander (Departamento del Cauca) relativa á la pena que se debe imponer por hurto de un objeto cuyo valor no pasa de veinte pesos, por no traer el Código Penal vigente hoy, pena para este delito.

El señor Magistrado doctor Angarita, á quien se repartió tal consulta, propuso el siguiente proyecto de resolución, que fué adoptado por unanimidad de votos:

"En contestación al telegrama fecha diez y seis del mes en curso, dirigido á esta Superioridad por el Juez del Circuito de Santander (Departamento del Cauca) sobre el vacío que ofrece el Código Penal de Cundinamarca, con relación á la falta de pena *en el caso* de hurto de objetos cuyo valor no exceda de veinte pesos, dígase que el Honorable Consejo Legislativo aprobó en tercer debate el artículo 175 del proyeto de ley que adiciona y reforma los Códigos Nacionales y la ley 57 de 1887, publicado en el *Diario Oficial* de primero del presente mes, número 7,123; de manera que si este proyecto fuese sancionado por el Gobierno, quedará llenado el mencionado vacío."

Con lo cual se concluyó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados, con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 65.

En Bogotá, á veintitrés de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, reunidos los señores Magistrados de la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con asistencia del infrascrito Secretario, se dió lectura á los siguientes telegramas dirigidos por Su Señoría el Presidente del Tribunal de Antioquia:

Medellín, 13 de Agosto de 1887.

A Su Señoría el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

"¿Se podrá formar una lista de designados superiores? Esto sería muy conveniente á la buena administración de justicia. Suplícase pronta resolución.

SILVERIO ARANGO."

Medellín, 20 de Agosto de 1887.

A Su Señoría el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

"Los designados á que me referí en telegrama del 13 son aquéllos á que se contraen los artículos 238 y 239, ley 57, sobre adopción de Códigos, etc.; sería muy conveniente una lista para cada Juzgado, en opinión del Tribunal.

SILVERIO ARANGO."

Habiendo tocado esta consulta en repartimiento al señor Magistrado doctor Samper, éste propuso el siguiente proyecto de resolución:

"Es evidente que los artículos 238 y 239 de la ley 57 del presente año "sobre adopción de Códigos y unificación de la legislación nacional," fueron concebidos en el supuesto de que sólo habría en cada Distrito judicial un Juez Superior; pues de este modo, ninguna dificultad ofrece la formación de una sola lista de individuos designados para componer los Jurados, con cuya intervención han de conocer y fallar los Jueces Superiores. Pero los inconvenientes serían numerosos y frecuentes, entre otros, para resolver sobre las excusas de los designados, cuando una misma lista hubiera de servir para dos Jueces Superiores, como habría de suceder en los Departamentos de Antioquia y Cundinamarca; y á fin de conjurarlos, la Corte es de concepto, y así resuelve la consulta, que los Tribunales Superiores, cuando en el Distrito judicial haya más de un Juez Superior, dividan la lista de designados para jurados, en partes iguales, de modo que cada Juez Superior tenga á su disposición, con separación ó independencia del otro, una lista propia para los sorteos que ocurran en su Juzgado.

"Comuníquese por telégrafo al Tribunal de Antioquia, y por nota oficial al Tribunal de Cundinamarca; y publíquese en la *Gaceta Judicial*, como regla para lo futuro."

Considerado que fué este proyecto, la Corte lo aprobó por unanimidad de votos.

Con lo cual se concluvó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 62.

En la ciudad de Bogotá, á veintidós de Agosto de mil ochocientos ochenta y y siete, constituída la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, se ocupó en considerar la consulta dirigida por el Tribunal Superior del Distrito judicial de Popayán, contenida en telegrama de 16 del mes en curso, número 64, y relativa á los inconvenientes que presenta el

artículo 263 de la ley 57 de este año; y examinado el asunto, se adoptó por unanimidad de votos el siguiente proyecto de resolución, presentado por el señor Magistrado doctor Fernández, á quien se dió el negocio en repartimiento:

"Contéstese al señor Presidente del Tribunal Superior del Distrito judicial de Popayán, que el punto á que se refiere la consulta que hace en su telegrama de 16 de los corrientes, relativa á los inconvenientes que ofrece en la práctica el artículo 273 de la ley 57, queda resuelto en la ley que reforma la yá citada, pero que aún no ha sido publicada, en el sentido de que el proceso se ponga á la disposición del reo ó de su defensor en el despacho de la Secretaría, *con las debidas precauciones*, sin permitir que el expediente salga de la oficina.

"Oportunamente se le pasará al Cuerpo Legislativo copia del telegrama, para que resuelva lo que crea conveniente en lo relacionado con la reforma del artículo 1,640 del Código Judicial."

Con lo cual se concluyó el presente Acuerdo, que firman todos los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 66.

En la ciudad de Bogotá, á veinticuatro de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, reunidos en Sala de Acuerdo todos los señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con asistencia del infrascrito Secretario, el señor Magistrado doctor Samper, manifestó:

1.° Que á virtud de consulta hecha por el Tribunal Superior de Antinquia, la Corte había resuelto en su Acuerdo número cuarenta y ocho, del veintiséis de Julio último, que los Tribunales de Distrito "debían pronunciar sus fallos en cuerpo de todos sus Magistrados, en cualquier instancia, si no estaban divididos en dos Salas, y si lo estuvieren, en Sala entera, según que el respectivo negocio fuese civil ó criminal; todo sin perjuicio de que la secuela del juicio ó de la instancia fuese encargada á un Magistrado substanciador, hasta la preparación de cada fallo inclusive."

2.° Que si esta resolución era conforme con lo establecido por la legislación vigente entonces, posteriormente se ha promulgado (*Diario Oficial* número 7,133 del diez de los corrientes) la ley 143 del presente año, "por la cual se adiciona y reforma la 61 de 1886," cuyas disposiciones, por lo tocante al modo de proceder los Tribunales, modifican las que sirvieron de base al citado Acuerdo, número 48 de la Corte.

3.° Que, por lo tanto, conviene hacer la modificación y aclaración del caso, y para ello propone el siguiente proyecto de resolución:

"Los Tribunales Superiores de Distrito ajustarán sus procedimientos á las reglas siguientes:

"1.ª Cuando ejerzan las atribuciones especificadas en los incisos ó numerales 1.°, 2.°, 3.° y 4.° del artículo 8.° de dicha ley 143 del presente año, lo harán con asistencia de todos sus miembros, cualquiera que sea su número, como que han de proceder en Sala de Acuerdo;

"2.ª Cuando hayan de ejercer las atribuciones expresadas en los numerales 5.°, 6.°, 7.°, 8.°, 9.°, 10.°, 11.° y 12.° del mismo artículo 8,°, lo harán en Sala de tres Magistrados, cualquiera que sea el número de los que compongan, según la ley, el Tribunal ó la Sala respectiva; pero debiendo ser uno de los que dicten el fallo el Magistrado substanciador, que será el ponente.

"Debe entenderse que cuando los Tribunales hayan de funcionar conforme á lo dispuesto en el numeral 13.° del citado artículo 8.°, procederán, según el caso que ocurra, conforme á las disposiciones anteriores, respectivamente; á menos que la función sea de aquéllas que únicamente corresponden, como de mera substanciación, al Magistrado substanciador;

"3.ª También ejercerán los Tribunales en Sala de Acuerdo la atribución que les confiere el artículo 9.° de la citada ley 143.

"Queda así revocado el Acuerdo número 48 de veintiséis de Julio ultimo,"

Considerado que fué este proyecto, la Corte Suprema lo aprobó por unanimidad de votos.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 67.

En la ciudad de Bogotá, á veinticinco do Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, se ocupó en considerar el informe enviado por Su Señoría el Presidente del Tribunal Superior del Distrito judicial del Tolima, fechado en diez y ocho del corriente mes; y, á propuesta del señor Magistrado doctor Martínez, á quien tocó el negocio en repartimiento, se adoptó, por unanimidad de votos, la siguiente resolución:

"Dígase á Su Señoría el Presidente del Tribunal del Tolima, que la Corte ha visto con satisfacción los esfuerzos empleados por ese Tribunal para proveer oportunamente al personal de los Juzgados de Circuíto en el Departamento, sin que le sean imputables las dificultades ocurridas para atender al cabal servicio de la administración de justicia.

"Transcríbase á Su Señoría el Ministro de Gobierno la parte final del indicado informe, á efecto de que, por conducto del señor Ministro, se atienda á las necesidades del Tribunal del Tolima, proveyéndolo de local adecuado, de mueblaje y de los útiles que reclama."

Con lo cual se dió por terminado el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Julio veintinueve de mil ochocientos ochenta y siete,

Vistos:—Por disposición del Jefe del Resguardo de la Aduana de Cartagena, se embargó la canoa denominada "Nilo," á causa de haberse empleado en la conducción de artículos de contrabando; embargo que dió lugar al juicio ordinario de reivindicación, promovido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1,852 del Código Judicial de la República, por el apoderado de los que se consideran dueños ó propietarios de la mencionada embarcación.

El actor ocurrió en tiempo á hacer uso de sus derechos, y acompañó á su demanda el testimonio de la escritura pública, fecha tres de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cuatro, otorgada por ante el Notario de la ciudad de Cartagena, con la cual se acredita que Domingo Gallardo, primitivo dueño de la misma embarcación, la entregó á los señores Oquendo & Henríquez, de aquel comercio y vecindad, con todos sus útiles y aparejos, en pago de la suma de cuatro mil doscientos once pesos treinta y seis centavos ($ 4,211-36) que les adeudaba, procedentes de mercancías tomadas á dichos señores; y acompañó también algunas informaciones de testigos, practicadas con citación del encargado del Ministerio público, para comprobar que Enrique de la Espriella, á cuyo cargo se encontraba el vehículo de que se trata, lo entregó en alquiler á Félix García, para que éste hiciera por su cuenta y riesgo un viaje á Colón, con escala en las poblaciones del río Sinú, llevando víveres á dicha ciudad y regresando de ella con artículos de consumo que importaría por aquella Aduana con las formalidades legales.

Reproducidas en el término competente de pruebas, las que quedan enunciadas, sin contradicción alguna por parte del representante de la Nación, se pronunció sentencia por el Juez 1.° de la Provincia de Cartagena, con fecha quince de Diciembre

del año próximo pasado, mandando entregar la canoa á los demandantes, y disponiendo al mismo tiempo se consultara dicho fallo con esta Superioridad, por no haberse interpuesto recurso alguno contra él.

Dada á la consulta la substanciación determinada por los artículos 885 y siguientes del Código Judicial, se tiene en consideración para resolverla:

1.° Que á virtud de las indicadas pruebas, los derechos de Oquendo & Henríquez, han quedado perfectamente establecidos, sin que pueda quedar duda alguna acerca del de propiedad que ha servido de fundamento á la demanda;

2.° Que aunque parece inverosímil que una embarcación de la importancia de la que se reclama hubiera sido entregada por el dueño al fletador ó arrendatario, sin la formalidad de un contrato escrito en que estuvieran claramente determinados el objeto y demás condiciones del contrato mismo, para evitar dudas y las controversias á que pudieran dar lugar estipulaciones de palabra, una vez que hay testigos que así lo aseguran bajo juramento, la Corte no tendría fundamento legal alguno en qué apoyarse para infirmar el mérito de tales testimonios, y debe aceptarlos, dándoles el valor de una prueba completa;

3.° Que la vaguedad de las declaraciones, en cuanto á la naturaleza del contrato, dió motivo á la Corte para ordenar se exigiese, por auto de veintinueve de Abril último, para mejor proveer, el contrato de fletamento, el cual, caso de haberse celebrado, debió extenderse precisamente, según el caso, en escritura pública ó privada, al tenor de lo dispuesto en los artículos 168 y siguientes del Código de Comercio marítimo, modificado por la ley 10.ª de 11 de Marzo de 1873;

4.° Que habiendo manifestado el dueño de la embarcación que no hubo contrato escrito, debe suponerse que el celebrado con el contrabandista Rafael García, no fué verdaderamente de fletamento, sino de simple arrendamiento de bienes muebles; pues para que hubiera existido el primero había sido necesario que Espriella, por sí ó por un Patrón ó Capitán, se hubiese obligado á la conducción de las mercaderías, y nó á entregar á García, como parece le entregó, únicamente el casco vacío para que lo tripulase por su cuenta; y

5.° Que aparte de todo lo relacionado, no existe la prueba de que la canoa "Nilo" se hubiese empleado con conocimiento y consentimiento de los demandantes ó de su recomendado en la conducción de los artículos de contrabando que motivaron le embargo de ella;

Por tales consideraciones y demás en que se funda la sentencia consultada, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, la confirma en todas sus partes.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintinueve de Julio de mil ochocientos ochenta y siete, publiqué en la audiencia la sentencia que precede.

Ramón Guerra A., Secretario.

En el mismo día se notificó al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

En dos de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué la sentencia anterior al señor doctor José Camacho Roldán.

JOSÉ CAMACHO ROLDÁN—*Guerra A.*, Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Julio veintinueve de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Administrador principal de Hacienda Nacional del extinguido Estado de Boyacá, dictó, con fecha 3 de Agosto de 1880, un auto de ejecución que, entre otras cosas, dice;.....

"Resultando: que los señores Pedro y Evaristo Goyeneche, como deudores principales, y el señor Agustín Goyeneche, como fiador, son deudores al Ramo de Bienes Desamortizados del principal de ciento sesenta pesos, que antes correspondía á la iglesia de Socha, según consta en la escritura otorgada ante Francisco Sánchez, Juez de aquel Distrito;.....

....."Resultando: que para seguridad del expresado principal se hipotecó un terreno ubicado en Socha, en el sitio de Sagra, demarcado así: por el Norte linda con el camino real que va de Socha á Socotá; por el Sur, con la laguna del Fraile, lindando con páramos altos; por el Oriente linda con terrenos del señor Frutos Goyeneche, y por el Occidente toda una quebrada, lindando con terrenos del señor Ignacio Riaño.....

....."*Considerando:*.....

....."Tercero: que el mandamiento ejecutivo se puede librar ó contra el deudor directamente obligado, ó contra el poseedor de la finca hipotecada;

"Por tales fundamentos, la Administración, en nombre de los Estados Unidos de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve:

"Los señores Pedro y Evaristo Goyeneche, ó el señor Agustín Goyeneche, ó el poseedor de la finca hipotecada, pagarán por la vía ejecutiva la suma de cuatrocientos veintiún pesos, ochenta centavos, según la siguiente liquidación:".....

.....

Esto dice el auto ejecutivo dictado por el mencionado Administrador de Hacienda.

Ahora bien, el Juez del Distrito de Socha, á quien se comisionó para que practicase las diligencias ejecutivas, dictó, con fecha diez y seis de Septiembre de mil ochocientos ochenta, el siguiente auto:

"Como los deudores Pedro y Evaristo Goyeneche, y el fiador Agustín Goyeneche, todos fallecieron, el Juzgado resuelve: llámense á los poseedores del terreno; hágaseles saber el auto anterior, y entiéndase con éstos para las demás diligencias que sean necesarias en este juicio."

En seguida aparece una diligencia en que consta que "se hizo comparecer en la pieza del Despacho del Juzgado á los poseedores del terreno hipotecado por los señores Pedro y Evaristo Goyeneche, á saber: Elías Carvajal, Genaro Goyeneche y otros cuyos nombres se expresan, con el fin de notificarles el mencionado mandamiento de ejecución."

Los individuos á quienes se notificó el auto, presentaron para el pago de la cantidad indicada los terrenos hipotecados, cuyo embargo decretó el Juzgado.

Citados para sentencia de pregón y remate los ejecutados, el apoderado de Elías Carvajal opuso varias excepciones que fueron admitidas.

Por sentencia de seis de Abril de mil ochocientos ochenta y uno, el Juez declaró probadas las excepciones de pago y error de cuenta, y en consulta de dicha sentencia remitió el proceso á esta Superioridad, en donde se ha substanciado el negocio debidamente.

Ahora bien, el auto de ejecución se libró, como queda dicho, contra los deudores Pedro y Evaristo Goyeneche ó su fiador Agustín Goyeneche, ó el poseedor de la finca hipotecada, cuyo nombre no se expresó en el auto; y la notificación de éste únicamente se hizo á quienes el Juez comisionado consideró poseedores del terreno. Estos hechos sugieren á la Corte las siguientes consideraciones:

1.ª Que dirigida la ejecución contra los deudores personales, á ellos ha debido notificarse el auto ejecutivo; que si no se les hallaba, era el caso de citarlos por edictos conforme al artículo 362 del Código Judicial; que comprobada la defunción de los ejecutados, debió citarse personalmente á los herederos, si en el proceso constaba quiénes eran éstos, y de nó, citarlos también por edictos, como personas inciertas; y finalmente, nombrar en oportunidad el respectivo defensor, con quien seguir el juicio, ninguno de los cuales requisitos se ha verificado;

2.ª Que el ejercicio de la acción real contra una finca hipotecada, requiere la designación expresa, en el auto ejecutivo, del nombre del poseedor, de conformidad con el artículo 936 del Código Judicial; que, como en el presente caso no se expresó dicho nombre en aquel auto, no ha habido persona determinada á quien se haya ejecutado con el carácter de poseedora

de la finca cuyo embargo se decretó; que, en consecuencia, hecha la notificación del auto ejecutivo por el Juez del Distrito de Socha, á las personas á quienes éste Juez hizo comparecer á su despacho, por considerarlas poseedoras del terreno hipotecado, no produce tal notificación al efecto legal de que se estime debidamente notificado al verdadero poseedor ó poseedores de la finca hipotecada el auto ejecutivo de que se habla;

3.ª Que aun cuando el artículo 180 de la ley 57 de 1887 establece que el Magistrado ó Juez que conozca de un juicio, cuando notare alguna causal de nulidad la mande poner en noticia de las partes para que éstas, si quieren, ratifiquen lo actuado, en el presente caso no puede tener aplicación el mencionado artículo, porque éste presupone que los individuos que figuran en el pleito tienen derecho á intervenir en él, y que como partes que son, pueden ratificar ó nó lo actuado. Mas como los individuos á quienes se notificó el auto de ejecución no son las personas á quienes conforme á la ley debió hacerse la notificación, es claro que no hay razón para cumplir, respecto de dichos individuos, lo que dispone el artículo 180 de la ley 57.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara nulo todo lo actuado, á virtud de la ejecución de que se ha hablado, decretada por el Administrador principal de Hacienda Nacional en Boyacá, con fecha tres de Agosto de mil ochocientos ochenta.

Condénase en las costas á Leopoldo Franco, que fué quien, como Administrador de Hacienda, dictó el auto de ejecución, y se comisiona al señor Secretario de este Despacho para que, dentro de tres días, haga la regulación de aquellas.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente al Juez remitente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En treinta de los mismos notifiqué el auto que precede al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Agosto primero de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Gobierno Nacional celebró un contrato con el señor Francisco J. Cisneros, para la construcción del Ferrocarril de "La Dorada" y de un puente sobre el río Magdalena, á inmediaciones de la ciudad de Honda. Este contrato, que fué aprobado por la ley 5.ª de 1882, declaró, en una de las cláusulas del artículo 7.°, que las obras expresadas se considerarían de utilidad pública, para todos los efectos legales.

Fundado en el contrato citado, el señor Agente Fiscal del Circuíto de Guaduas entabló juicio de expropiación de una porción de terreno perteneciente al señor Alejandro Wecbecker, por considerar que ese terreno era necesario para llevar á efecto la construcción del puente, y por creer también que el Gobierno, á quien el demandante representaba, tenía el deber de prestar al contratista todas las facilidades que la construcción de la obra requería.

El demandado contestó la demanda, por medio de apoderado legalmente constituído, y éste opuso las excepciones dilatorias de ilegitimidad de la personería y de inepta demanda. El Juez no admitió las excepciones propuestas, y declaró que la tramitación aplicable al juicio era la detallada en las leyes del Departamento de Cundinamarca; el apoderado del demandado pidió revocatoria de esa resolución, y en subsidio interpuso recurso de apelación, y el Juez revocó su auto, pero sólo en la parte en que no admitió las excepciones, y lo dejó subsistente en la que declaraba cuál era la tramitación que debía aplicarse al asunto. El demandado insistió en la apelación, respecto de esta última parte, y después de haberse elevado el proceso al despacho del Tribunal del Distrito Judicial de Cundinamarca, el cual se declaró incompetente, ha sido sometido al estudio de la Corte.

La relación precedente era indispensable para fijar con precisión el punto sobre que versa el recurso; pues por lo que respecta á la facultad que esta Corporación pueda tener para resolverlo se observa:

1.° Que la demanda se entabló en nombre y representación del Departamento de Cundinamarca, cuando yá regía la ley 61 de 1886, y en consecuencia, la Nación no ha figurado en el juicio ni como demandante ni como demandada; y

2.° Que el inciso 2.°, sección 2.ª del artículo 21 de dicha ley, atribuye á la Corte Suprema de Justicia el conocimiento en última instancia "de los juicios de expropiación ó enajenación forzosa de que trata el artículo 32 de la Constitución, seguidos ante los Jueces de Circuíto por los Agentes del Ministerio público y á virtud de orden del Gobierno.

..... Según esta disposición, la orden dada por el Gobierno para la iniciación de los juicios de expropiación, es una condición indispensable para que la Corte pueda ejercer la atribución indicada; y como en el caso que se examina el Agente del Ministerio público procedió de una manera oficiosa, es claro que la Corte no puede ocuparse del recurso interpuesto.

En este asunto no han figurado, pues, realmente como partes, sino el Departamento de Cundinamarca, representado por el Agente Fiscal del Circuíto de Guaduas como demandante, y el señor Alejandro Wecbecker como demandado; y la Corte no tiene facultad para ocuparse de él en última instancia, mientras no conste que el Gobierno, es decir, el Presidente de la República y los Ministros, ó el Ministro respectivo, ha ordenado expresamente la iniciación del referido juicio, según la doctrina de la disposición últimamente citada.

Es de observarse también que la apelación fué concedida para ante esta Superioridad, y los autos fueron remitidos al Tribunal del Distrito Judicial de Cundinamarca; de suerte que, por este preferente motivo, al Tribunal le había bastado pasar los autos á la Corte, sin necesidad de declararse incompetente por razón del asunto; si bien es cierto que tal providencia en nada podría afectar la jurisdicción real de aquella Corporación para conocer del juicio, llegado el caso.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, se declara incompetente para resolver la apelación intentada por el demandado; y dispone que el proceso sea devuelto al señor Juez del Circuíto de Guaduas, con el objeto de que el recurso se conceda para ante el Tribunal competente.

Notifíquese, cópiese y publíquese en la *Gaceta Judicial*.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En primero de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Se notificó por edicto.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, treinta de Julio de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Código de Organización Judicial del extinguido Estado de Cundinamarca dispone, en su artículo 198, que los negocios civiles pendientes se repartieran nuevamente por el Juzgado 1.° del Circuíto entre él y los otros tres Jueces, y el artículo 72 del mismo Código ordenó lo siguiente. "En los Circuítos en que dos ó más Jueces conozcan de lo civil y de lo criminal, los trabajos se distribuirán por igual, haciéndose el repartimiento de las causas por turno. El repartimiento se hará á la suerte y estará á cargo de uno de los Jueces, quienes alternarán para hacerlo semanalmente."

El Juez 1.° del Circuíto de Bogotá, de acuerdo con los otros tres, hizo formar un inventario de las diversas clases de juicios pendientes en los Juzgados, y repartió cada una de ellas por iguales partes entre los cuatro Jueces, por medio de sorteo, procurando así la igualdad en el repartimiento de los diversos negocios. Con tal motivo, se dirigió el doctor Manuel Salvador Rodríguez al señor Procurador del Estado pidiéndole que al pro-

moviera el puntual cumplimiento del artículo 198 del Código de Cundinamarca antes mencionado, lo cual dió lugar á que se indagara si el Juez 1.° del Circuíto de Bogotá habia incurrido en responsabilidad por haber obrado del modo dicho. Practicadas las diligencias que dan á conocer que el repartimiento se verificó como yá se ha insinuado, se pasaron al Tribunal Superior del Distrito judicial de Cundinamarca, quien, habiendo oido al señor Fiscal, declaró, de acuerdo con lo pedido por éste, prescrita la acción criminal, y ordenó la cesación de todo procedimiento, por cuanto el hecho materia de la investigación sería el de que trata el artículo 278 del Código Penal, al cual impone éste la pena de dos meses á un año de suspension de empleo, que se prescribe por el transcurso de dos años, conforme al artículo 49 del mismo Código.

Consultado el auto con esta Superioridad, y pasado el sumario en que recayó al estudio del señor Procurador general de la Nación, es éste de concepto que el procedimiento adoptado por el Juez 1.° del Circuíto de Bogotá, lejos de tener el carácter de delito, consultó mejor la equidad y el espíritu del artículo 72 citado al principio, y que en consecuencia debe sobreseerse en el asunto, en lugar de declararse prescrita la pena, por la sencilla razón de que no puede prescribirse la de un delito que no se ha cometido. La fuerza de esta observacion no puede desconocerse, porque, en verdad, declarar prescrita la pena equivale á dar por sentado que ha habido delito, ó, lo que es lo mismo, voluntaria ó maliciosa violación de la ley por la cual se incurre en alguna pena, y que ésta deja de imponerse por haber transcurrido cierto tiempo; declaratoria que, si bien libra al presunto reo de la responsabilidad legal, no lo pone á cubierto de la sanción pública y por el contrario lo sugeta á ella. Esto es tan cierto, que en el caso de que se trata ha tenido el señor Magistrado que ha conocido del negocio en primera instancia que partir del principio, para el efecto de dar por prescrita la acción criminal, nó la pena, que el delito sería el determinado en el artículo 278 del Código Penal, que sujeta al sindicado á suspensión de empleo por dos meses á un año; pero como ese artículo lo que castiga es la falta de cumplimiento de un deber, ó el mal desempeño de éste, y el Juez 1.° del Circuito de Bogotá no faltó al suyo ni lo cumplió mal clasificando previamente los expedientes y repartiendo los de cada clase por iguales partes y á la suerte, como lo ordenaba el artículo 72 del Código de Organización Judicial de Cundinamarca; es claro que, no encontrándose en el caso del artículo 278 del Código Penal de dicho Estado, no pudo hacerse acreedor á la pena que él asigna y que se ha declarado prescrita. Tan es así, que dicho Tribunal, en su tercer considerando, establece "que desde Enero de mil ochocientos ochenta y cuatro en que tuvo lugar el hecho que pudiera calificarse de falta ó delito, *si se hubiera comprobado la verdad de su existencia*, van corridos más de tres años;" y al expresarse de este modo reconoce implícitamente la falta del delito sujeto á la pena que ha declarado prescrita. Deducese de esto que el auto consultado no está ajustado á las leyes, en cuanto á la apreciación de las pruebas y a la aplicación del derecho, en cuyo caso la Corte Suprema se encuentra en el deber que le impone el artículo 140 de la ley 61 de 1886, de dictar auto resolviendo el punto, de manera que no tenga que volver á decidirlo dicho Tribunal; artículo que está en consonancia con la reforma 15.ª de la ley 53 de 1882 que establece que la sentencia sea conforme con la verdad en los hechos, y conforme á la ley sustantiva en el derecho.

Por tales consideraciones, y en virtud de lo pedido por el señor Procurador general, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el auto dictado por el Tribunal Superior de Cundinamarca en treinta y uno de Mayo último, dando por prescrita la acción criminal para perseguir o juzgar al Juez 1.° del Circuíto de Bogotá por el repartimiento de causas de que se ha hecho mérito, y por no haber motivo para llamar á juicio de responsabilidad á dicho Juez, sobresee en el procedimiento.

Hágase saber, déjese copia, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuelvase el sumario al Tribunal Superior de Cundinamarca encargado del despacho de lo criminal.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En primero de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL

Señores Magistrados.

El Tribunal Superior del Distrito judicial de Tundama os remite en consulta el auto que profirió con fecha 1.° de Junio último, en el cual sobresee en el sumario instruído contra Domingo Medina Martínez, por haberse ausentado sin licencia del Juzgado civil del antiguo Departamento de Sugamuxi.

Estudiado el expediente por este Ministerio, aparece que efectivamente el señor Medina se separó de su destino durante los días 7 y 8 de Noviembre de 1884, que el día 9 del mismo mes fué domingo y que el 10 regresó á su oficina el mencionado Juez, y encontró el Juzgado desempeñado por el señor Zoilo Reyes G., llamado á reemplazar al Juez principal en su calidad de designado.

El llamamiento hecho á Reyes G. por el Jefe Municipal se funda en que este empleado consideró la ausencia del Juez principal como un abandono del destino, y ordenó, en consecuencia, que siguiera despachando el designado, aun después de haber vuelto á su oficina el Juez Medina Martínez. Este, en su informe de fojas 3 á 4, dice que, aunque se separó de la oficina el día 7, esto no ocurrió sino yá muy avanzada la tarde, y se trasladó á Tunja en desempeño de un asunto urgente de familia en que estaba comprometida la salud de su señora esposa.

Sobre la excusa presentada por Medina, declaran de conformidad los testigos Félix María Archila y Enrique Navas.

Sin entrar á examinar si el hecho que se averigua constituye ó nó una violación de la ley penal, el infrascrito se limita á haceros observar que es inútil la continuación del procedimiento, por haber prescrito la pena que hubiera de aplicarse, al calificar de delito el hecho de que se trata. Esta prescripción se ha cumplido de acuerdo con la parte final del artículo 40 del Código Penal de Boyacá.

No consta de autos que se haya interrumpido la prescripción por alguna de las circunstancias del artículo 51 ibidem, porque aunque la firma del sindicado aparece en alguna de las piezas del sumario, esto no puede considerarse como la comparecencia del reo *en juicio*, no habiéndose citado siquiera al sindicado por el Tribunal competente.

Por consiguiente, no estando probado el carácter de delito del hecho que se averigua, y habiendo prescrito la pena que hubiera de imponerse, suponiendo que se tuviera dicha prueba, el infrascrito es de concepto que debe suspenderse el procedimiento y confirmarse el auto consultado.

Bogotá, 27 de Julio de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

Con fecha dos de Mayo último, el Administrador-Tesorero de la Aduana de Barranquilla libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva contra los fiadores de Alejandro Danouille, por suma de pesos procedente de derechos de importación. Los ejecutados apelaron del auto ejecutivo y el recurso les fué concedido para ante esa Superioridad.

El infrascrito, en exposición de esta fecha, referente á otra ejecución que se sigue contra los mismos deudores, también por derechos de importación, os manifestó lo siguiente:

"A virtud de apelación ha venido á vuestro conocimiento el auto ejecutivo dictado el 1.° de Abril del presente año, contra Molinares & C.ª é I. Castellanos & C.ª en su calidad de fiadores de Alejandro Danouille, deudor de derechos de importación causados en el mes de Marzo último.

"La ejecución se ha seguido contra los fiadores, por ser éstos solidarios y porque el deudor principal manifestó no tener bienes para responder de la deuda.

"Sirvió de recaudo ejecutivo copia de los reconocimientos hechos en la respectiva cuenta á cargo de Danouille y á favor del Tesoro, á lo cual se agregó copia del documento de fianza.

"El infrascrito no estima fundadas las alegaciones presentadas por los apelantes para negarle mérito ejecutivo al reconocimiento que sirvió de base á la ejecución, pues es fuera de duda que la copia de tal reconocimiento sí tiene el mérito que se le pretende negar contra lo dispuesto en el artículo 1,007 del Código Judicial.

"Siendo solidaria la fianza, los fiadores no pueden oponer siquiera el beneficio de excusión (artículo 2,384 del Código Civil); máxime si se considera que el deudor principal ha manifestado no tener bienes para responder de la obligación, la cual está perfectamente determinada en el documento de la fianza, donde se dice que ésta se da para responder 'mancomunada y solidariamente por los derechos de importación que cause á deber (Danouille) en el curso del presente año.'

"Por lo demás, el infrascrito cree suficiente comprobante del carácter de fiadores de los ejecutados, la copia del documento de fianza, documento que si lo objetan los ejecutados, negando tener el referido carácter, bien pueden excepcionar sobre la falsedad de él á su debido tiempo."

Siendo aplicables en un todo las consideraciones preinsertas al auto ejecutivo de dos de Mayo último, el infrascrito las reproduce, á efecto de que, á virtud de ellas y salvo vuestro mejor parecer, confirméis el expresado auto.

Bogotá, 28 de Julio de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

En las últimas horas de la noche del día 28 de Noviembre próximo pasado, tuvo lugar en la sección de *El Valle*, jurisdicción del Distrito de Quibdó, en el Departamento del Cauca, una violenta riña entre Juan Chaves y Narciso Pineiro, quienes, en compañía de otros, estaban jugando naipes en casa de Joaquín González. Esta riña la describe y explica el testigo Inocencio Viveros en los términos siguientes:

"En la noche del 28 de Noviembre y al amanecer del día 29 del mismo, me hallaba en compañía de los señores Juan Chaves, Narciso Pineiro, Isaías Rodríguez y Joaquín González, los cuales estaban jugando naipe, y vi que á Juan Chaves se le cayó una moneda de dos reales y la cogió Narciso Pineiro. Cuando Chaves la reclamó le dije que Pineiro la había cogido. Este fué el motivo de haberse trabado entre los dos una terrible lucha. Al principiar la pelea, los separámos, pero volvieron de nuevo á acometerse. Viendo que el desorden era mucho y que no atendían al dueño de la casa, Isaías Rodríguez los echó á la calle, donde continuaron la riña. Entonces salímos á separarlos, lo cual logró el mismo Rodríguez. Pineiro subió con nosotros á la casa, y Chaves se retiró. A pocos momentos volvió éste armado de un garrote para darle á Pineiro, quien, al verlo, le acometió también, y volvió á trabarse la lucha. Los contendores fueron desarmados y separados por tercera vez, &c."

Otros testigos afirman haber visto en manos de Pineiro, en el momento de la riña, el mismo palo ó garrote traído por Chaves, ó sirvirse para acometer á su enemigo de un taburete y de un tizón del fogón que estaba inmediato. Todos los testigos afirman que la lucha fué larga y encarnizada. Refieren igualmente de acuerdo, que pocos momentos después de haberse ausentado Chaves se retiró Pineiro, el cual bajó de la casa, no por la escalera, sino por "un costado de la casa que está descubierto" (foja 5 vuelta). Entonces vió Pineiro y vieron también casi todas las personas de quienes se había despedido éste, que alguien estaba en acecho debajo de la casa. Pineiro preguntó: "¿Quién está ahí?" Y recibió por respuesta un golpe en el pecho, golpe que fué oído por todos los concurrentes. Desanduvo Pineiro su camino, y apenas tuvo tiempo para llegar á donde sus compañeros, y cayó para no levantarse más. Al verle una mancha de sangre en el pecho, fué examinado por las personas presentes, y le encontraron cerca del corazón una herida á la que se atribuyó la muerte. Nadie dudó de la responsabilidad de Juan Chaves como autor único de la muerte de Pineiro; y, en el instante mismo, á la una de la mañana del día 29 de Noviembre de 1886, el funcionario de instrucción inició la formación del sumario correspondiente.

Las declaraciones que se han tomado han servido de base al infrascrito para haceros la anterior relación del modo como ocurrieron los hechos.

El expediente ha venido á esa Superioridad en consulta de la sentencia que condena á Chaves á la pena de muerte, para que esa Suprema Corte, en su calidad de Tribunal de casación, decida en definitiva sobre la validez de dicha sentencia, pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito judicial del Cauca, el veintiséis de Marzo último.

Para contestar el traslado que se ha conferido á este Ministerio, el infrascrito ha estudiado los autos con la atención que reclama asunto tan grave y de tanta trascendencia.

La ley ha querido que se aplique la pena capital en los casos más graves de asesinato, y al explicarse así, no hay que hacer esfuerzo para comprender que no en todos casos de asesinato tiene aplicación dicha pena.

Mucha prudencia y muchas precauciones se requieren para el juzgamiento de los individuos que se consideran responsables de los delitos atroces expresados por el artículo 29 de la Constitución de la República; las pruebas deben ser suficientemente claras, hasta la evidencia, para salvar los inconvenientes del error, que sería funesto é irreparable; y al acusado deben dársele todas las facilidades posibles para que ejerza amplia y libremente el derecho de defensa, sin el cual la justicia degeneraría en opresión. Este derecho es sagrado: no sólo corresponde al delincuente; también es un derecho de la sociedad, porque á ella, más que al mismo condenado, ofenden las injusticias en la aplicación indebida de una pena.

Antes de entrar en la calificación del delito de que resulta responsable Juan Chaves, se harán notar algunas de las imperfecciones de la causa que constituyen las nulidades que debéis declarar al conocer en casación de la sentencia del Tribunal Superior del Distrito judicial del Cauca.

Dice el artículo 38 de la ley 61 de 1886:

"Artículo 38. Son causales de nulidad, para el efecto de interponer recurso de casación, los hechos siguientes:

.....

"8.° Haberse incurrido, en la apreciación de las pruebas, en error de derecho ó en error de hecho, si este último resulta de documentos ó actos auténticos que demuestren la equivocación evidente del juzgador;

"9.° Haberse faltado en el procedimiento á alguna de las formalidades que de suyo inducen nulidad, y no haberse podido, en consecuencia, hacer eficaz el derecho por parte del demandante, ó la defensa por parte del demandado. Las infracciones en el procedimiento que no hayan de producir necesariamente uno de estos dos efectos, no servirán de fundamento para la casación.

"En los asuntos criminales y para los efectos de este inciso, se considerará á la parte del reo asimilada á demandado; y al acusador particular ó al representante del Ministerio público, asimilado á demandante."

En primer lugar se advierte que el reo es menor de veintiún años, y sin embargo no se le nombró curador, precisamente cuando era más necesario; y esta circunstancia es indudable que privó á Chaves de uno de los medios legítimos de defensa, durante el sumario, porque el defensor apenas interviene en el plenario. En su indagatoria, Chaves declaró ser mayor de veinte años, es decir, que no había cumplido los veintiuno, y el funcionario de instrucción no se preocupó de nombrarle curador, como lo hizo con la testigo Petra María González P., al afirmar ésta que era mayor de diez y ocho años.

La influencia de la edad sobre las condiciones de imputabilidad y de la culpabilidad del reo es bien conocida, y cabe en este lugar reproducir aquí el análisis científico que hace Ortolán sobre esta materia, en su Tratado de Derecho penal.

Divide la edad en cuatro períodos, así:

"Primer período, en el cual es cierto que la concepción de lo justo ó de lo injusto, ó en otros términos, la razón moral, no existe todavía suficientemente en el niño, y no podría tener lugar contra él ninguna imputabilidad penal. Le llamaré *período de no imputabilidad*, y propondré que se le fije desde el nacimiento hasta los siete años. Hasta esa edad ningún procedimiento penal podría dirigirse contra el niño.

"Segundo período, en el que es dudoso, y por lo tanto no se podría decidir de una manera general y absoluta, si el agente

tenía ó nó la razón moral, y en el que, por consiguiente, hay que resolver una cuestión para cada individuo y para cada hecho. Le llamaré *período de duda*, y propondré que se fije desde los siete años cumplidos hasta los catorce. El Juez deberá decidir si el procesado ha obrado ó nó con discernimiento; en caso de afirmativa sobre la existencia de la imputabilidad, la culpabilidad es mucho menor.

"Tercer período, en el cual cesa la duda y puede afirmarse que, habiendo seguido las cosas su curso regular, el agente tenía la concepción de lo justo y de lo injusto en un grado suficiente para constituír la imputabilidad, con la culpabilidad penal: mas, sin embargo, no habiendo llegado todavía sus facultades morales á su completo desarrollo, la culpabilidad, aunque más elevada que en el caso anterior, no es todavía en el nivel común. Le llamaré *período de imputabilidad cierta con culpablidad todavía inferior*, y propondré que se fije desde los catorce años cumplidos hasta los veintiuno. El procesado convencido, salvas, se entiende, las excepciones individuales, es punible, pero todavía no se le puede imponer la pena ordinaria.

"Cuarto período, en el que el desarrollo moral se ha completado, en el que se ha llegado á la línea normal, y en el que, por consiguiente, la culpabilidad ha llegado al nivel común. Le llamaré *período de plena culpabilidad*, y propondré que se fije desde los veintiún años cumplidos, lo cual se llama en Francia la mayoría: la penalidad ordinaria es yá aplicable."

Esa falta de desarrollo de las facultades morales del menor, no sólo atenúa su culpabilidad, como se ha visto, sino que lo expone durante el juicio á errores involuntarios, producidos por su inexperiencia, y esto es lo que ha tenido en cuenta la ley al disponer el nombramiento de un curador que proteja al menor en el juicio.

Esta omisión está comprendida en el inciso 9.° del artículo 38 de la ley 61 citada.

Por otra parte, se observa que el término de pruebas se redujo á seis días, cuando la ley procedimental del Cauca, que rigió la causa, dispone que sean ocho.

Toda restricción del término de pruebas que la ley señala, priva al acusado de otro de los medios principales de defensa, y no hay necesidad de entrar en disertaciones para demostrar la injusticia que envuelve esa restricción, y la nulidad que apareja al procedimiento.

La ley 59 de 1.° de Octubre de 1875, expedida por la legislatura del Cauca, sobre procedimiento en los negocios criminales, ha sido la ley aplicada por el Juez de primera instancia en este juicio. El artículo 384 de esa ley previene á los Jueces de Circuito que ajusten sus procedimientos con especialidad á lo dispuesto en el modo de proceder los Jueces de Distrito, con muy pocas variaciones, las cuales se refieren á la segunda instancia. En el capítulo que determina el procedimiento de los Jueces de Distrito, el artículo 368 manda abrir la causa á prueba por el término de ocho días. Pero como el Juez de primera instancia limitó ese término á seis días, es manifiesta la nulidad.

En los dos días que se suprimieron es posible que se hubieran producido pruebas suficientes para establecer la verdad que requiere la conciencia de un Magistrado honrado, para fallar sobre la vida de un hombre. Entre las nulidades que vician los juicios criminales, el artículo 319, inciso 4.° señala el no haberse recibido la causa á prueba, se entiende que por todo el término de la ley; luego si ese término se restringe, no puede decirse con propiedad que la causa se recibió á prueba, sino de un modo imperfecto, y eso vicia la actuación, y hace que no sea eficaz la defensa por parte del reo ó su defensor, causal 9.ª del artículo 38 de la ley 61 de 1836, nacional, que sirve de fundamento para la casación.

El error del Juez de primera instancia consistió en haber procedido de conformidad con el artículo 386 de la misma ley 59, que señala el término de seis días para producir pruebas en segunda instancia.

Como en la Corte pueden tenerse dificultades para consultar esa ley, me permito transcribir sus artículos 385 y 386, que dicen así:

"Artículo 385. Recibidos los autos que se le hubiesen remitido por el Juez de Distrito para que conozca en segunda instancia, el de Circuito prevendrá inmediatamente que se notifique á las partes su recibo, para que dentro de los tres días inmediatos al de la última notificación puedan promover prueba, nombrando antes y posesionando al defensor ó defensores, si el reo ó reos no los hubieren nombrado.

"Artículo 386. Si cualquiera de las partes, dentro de este término, pidiese que la causa se reciba á prueba, se recibirá por un término que no pase de seis días. Si hubiesen de practicarse pruebas fuera del lugar del juicio, se arreglará á lo dispuesto en el artículo 369."

Muchas otras informalidades ocurrieron en la causa seguida contra Juan Chaves, que no son indiferentes, aunque no todas ocasionen nulidad.

Los peritos reconocedores del cadáver no son facultativos, y mal han podido hacer una apreciación exacta de las causas que produjeron la muerte de Narciso Pineiro.

A ninguno de los testigos se le leyeron los artículos del Código Penal que hablan de las penas á los perjuros.

Al testigo Trinidad Hurtado no se le recibió juramento.

El curador nombrado al menor Inocencio Viveros tampoco fué juramentado.

Estas formalidades omitidas son de las conocidas como tutelares y como garantías para la estricta aplicación de la justicia.

Estudiados los vicios del procedimiento, para el caso de que la Corte no quiera corregirlos, cree el infrascrito que es fácil demostrar el error del Tribunal Superior del Cauca, en la apreciación del delito, y, por consiguiente, en la pena que juzga aplicable.

Según el artículo 440 del Código Penal de Cundinamarca, del año de 1858, vigente hoy en toda la República, en los casos especiales determinados por el artículo 29 de la Constitución, se consideran asesinos los que matan á otra persona, no sólo con premeditación, sino también con algunas de las circunstancias que el mismo artículo expresa.

El artículo 437 dice así:

"Cualquiera que sea la provocación, ofensa ó injuria que mueva al homicida, se tendrá por premeditado el homicidio en el caso de que se cometa sin riña ni pelea, no en el acto mismo de la provocación, injuria ú ofensa, sino algún tiempo después, suficiente para obrar con reflexión."

Pero como los testigos del sumario declaran que el delito perpetrado por Juan Chaves en la persona de Narciso Pineiro, resultó de una lucha ó riña que ellos califican de terrible y encarnizada, y aseguran que duró por un tiempo largo, es claro que, al aplicar el criterio de la ley, que está en armonía con el criterio moral, desaparecen las condiciones que revelan la premeditación.

Esta circunstancia que se refiere á los actos de preparación y ejecución del delito, supone la ausencia de las causas que se oponen á la reflexión; y en una persona ignorante como Chaves, afectada su sensibilidad por la excitación que naturalmente produce el juego, se comprende que la idea de que Pineiro le había robado su dinero lo indujese á la riña, y la riña es suficiente para afectar las facultades psicológicas que dirigen la voluntad del hombre.

Con las anteriores observaciones, el delito por que se juzga á Chaves no puede calificarse como asesinato, sino como simple homicidio voluntario, comprendido en el artículo 332 del Código Penal del Cauca, que es el aplicable desde que no se trata de ninguno de los delitos expresados en el artículo 29 de la Constitución.

Por lo tanto, este Ministerio os pide que declaréis las nulidades apuntadas, llamando la atención especialmente á la que tiene por causa el error en la apreciación del delito y en la aplicación de la pena; disponiendo se reponga el proceso al estado que tenía cuando se incurrió en la primera de esas nulidades.

Bogotá, 13 de Junio de 1887.

CARMELO ARANGO M.

BOGOTÁ.—IMP. DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 10 de Septiembre de 1887.

CONTENIDO.

	Pág
ACUERDOS DE LA CORTE.	
Acuerdo número 68, relativo á una consulta del Prefecto de la Provincia del Centro del Tolima	281
Id. número 69, relativo á una consulta del Ministerio de Gobierno	"
DOCUMENTOS VARIOS.	
Informe del Secretario de la Corte, cuadro y resolución	"
SENTENCIAS DEFINITIVAS.	
Sobre el alcance deducido en sus cuentas á Alejandro La-Rotta	283
AUTOS INTERLOCUTORIOS.	
NEGOCIOS CIVILES.	
Sobre revocatoria de un auto ejecutivo librado contra los fiadores de Alejandro Donouille	"
Sobre id. de otro id. id. contra id.	284
Sobre id. de otro id. id. contra id.	285
Sobre un juicio por expropiación de un terreno	"
NEGOCIOS CRIMINALES.	
Sobre incompetencia de la Corte para conocer de un sumario	"
Sobre id. de la misma para id.	"
Sobre confirmación de un auto de sobreseimiento	286
Sobre id. de un auto del Tribunal Superior de Cundinamarca que mandó abrir causa al Sr. José María Lombana Domínguez	"
Sobre nulidad de un proceso por delito militar	"
Sobre incompetencia de la Corte para conocer de una consulta	287
Sobre id. de la misma para id.	"
Sobre confirmación de un auto de sobreseimiento por prescripción	"
Sobre incompetencia de la Corte para conocer de una consulta	"
Sobre confirmación de un auto de sobreseimiento del Tribunal Superior de Tunja	288
Sobre conclucción de un sumario, por fallecimiento del sindicado	"
Sobre incompetencia de la Corte para conocer de una consulta	"

GACETA JUDICIAL.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

ACUERDO NUMERO 68.

En Bogotá, á veinticinco de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, se tomó en consideración la consulta que hace el señor Gobernador del Departamento del Tolima sobre si puede computarse á los reos cada día de detención sufrida antes de la respectiva sentencia condenatoria, por otro de presidio;—y el Magistrado doctor Morales, á quien tocó tal asunto en repartimiento, propuso la siguiente resolución, que fué aprobada por unanimidad:

Dígase á Su Señoría el Ministro de Gobierno que, para resolver la duda que ha ocurrido al Prefecto de la Provincia del Centro en el Departamento del Tolima, sobre cómputo de la pena impuesta á un reo, es preciso que por ese Ministerio se pida á dicho empleado copia de la sentencia pronunciada contra el expresado reo, y por lo menos un informe, en que conste la fecha en que la sentencia fué dictada, la pena que fué impuesta, y cuál fué el cómputo que, de la pena, se hizo en la misma sentencia."

Con lo cual se dió por terminado el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados, y el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 69.

En Bogotá, á veintiséis de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, constituída la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con asistencia del infrascrito Secretario, el señor Magistrado doctor Noguera, á quien tocó en repartimiento una nota del Ministerio de Gobierno, fecha 22 del presente mes, número 2,594 de la Sección 1.ª, á la cual acompaña dos comunicaciones y copia de una resolución del Gobernador del Departamento de Panamá sobre sorteo de jurados, sometió á la consideración de la Corte, el siguiente proyecto de resolución:

"Lo que el Ministerio de Gobierno ha remitido á esta Corte Suprema, no ha sido una solicitud de las que determina el artículo 116 de la ley 57 del presente año, "sobre adopción de Códigos etc.," sino una resolución del Gobernador del Departamento de Panamá, referente á una consulta que asegura haberle hecho el Juez Superior de aquel Distrito, y en cuya resolución se establece que el enunciado Juez debe hacer los sorteos de Jurados hasta el 31 del presente, al tenor de la legislación de aquel extinguido Estado, puesto que la lista que, según el artículo 238 de la citada ley, debe formar el Tribunal, no puede tenerse en cuenta para el correspondiente sorteo, sino desde el 1.° del entrante Septiembre.

"Esto sentado, parece fuera de duda que la Corte no tiene de qué ocuparse en el presente asunto, una vez que no le es dado reformar, aprobar, ó improbar las resoluciones que dicten los Gobernadores Departamentales, aun en el caso de que hayan carecido de facultad para dictarlas.

"A lo expuesto se agrega que, próximo como está el 1.° de Septiembre, lo que la Corte determinara, si llegara á entrar en el fondo del negocio, vendría talvez á sancionar ó aprobar implícitamente hechos consumados, respecto de los cuales, si llegase el caso, no podría ejercer la correspondiente censura.

"Por las razones expuestas, la Corte resuelve abstenerse de considerar la mencionada resolución, comunicándose así, en respuesta al Ministerio de Gobierno."

Discutido el anterior proyecto, la Corte lo aprobó por unanimidad.

Con lo cual se concluyó el presente Acuerdo que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

DOCUMENTOS VARIOS.

INFORME.

Secretaría de la Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Septiembre tres de mil ochocientos ochenta y siete.

Señores Magistrados.

Un año ha transcurrido desde que se organizó la actual Corte Suprema de Justicia, con la posesión de los siete Magistrados creados por la ley; y para celebrar á la medida de mis escasas fuerzas tan fausto acontecimiento, me permito dar un ligero informe sobre el trabajo que ha terminado este Tribunal, porque redunda en honor de los respetables jurisconsultos que lo forman.

La Corte se instaló con tres de sus miembros principales y cuatro suplentes, así: principales, los señores doctores R. Antonio Martínez, José M. Samper y Antonio Morales; suplentes, los señores doctores Froilán Largacha, Luis S. de Silvestre, Manuel J. Angarita y Salomón Forero. Posteriormente llegaron los señores Magistrados principales doctores Julián R. Cock Bayer, Manuel A. Sanclemente y Benjamín Noguera, y por último, en Marzo de este año, quedó la Corte con todos sus miembros principales, por haber aceptado el cargo el señor doctor Aristides Calderón. Pero ésto no duró más que diez y seis días, porque este último señor Magistrado se ausentó con licencia. Se ha ausentado igualmente y renunciado su puesto el señor doctor Cock, y el señor doctor Largacha ha obtenido licencia por enfermedad en dos ocasiones. Estas alternativas han producido doce variaciones en el personal durante el año.

Paréceme ésta la oportunidad de hacerme el eco de todo el Supremo Tribunal, lamentando la muerte del ilustrado y modesto doctor Luis S. de Silvestre, que tan gratos recuerdos supo dejarnos en los pocos meses en que desempeñó la Magistratura.

En el año transcurrido se han despachado 434 asuntos, de los 482 repartidos. Sin temor de equivocarme puedo decir que la cuarta parte de ellos estaban demorados en la Secretaría, pues en sólo el primer mes se repartieron 106, y después se han encontrado otros muchos, olvidados de diez años á esta parte. Los que quedan sin despachar no están demorados: unos están en prueba; otros en poder de las partes, y otros acaban de ser repartidos; siendo de advertir que las numerosas consultas que se han hecho á la Corte por las autoridades judiciales, sobre inteligencia y aplicación de las nuevas leyes, se han despachado en Sala de Acuerdo dentro de veinticuatro horas. De manera que las pequeñas demoras que han podido notarse, han dependido de la Secretaría que está á mi cargo, y es de justicia que explique los motivos.

Mi antecesor no pudo entregarme la Oficina con las formalidades de estilo, y se limitó á poner en mis manos las llaves de las puertas; y digo que no pudo, porque el desorden y amontonamiento de los papeles eran aterradores, y provenían de diversas causas, tres de las cuales están á la vista; á saber: la falsificación de expedientes y sentencias que se consumó hace casi veinte años, y trajo consigo la desorganización completa del archivo, que, en años enteros de labor, había arreglado el doctor Nepomuceno Esguerra, cuya memoria es digna de veneración, como modelo de empleados; las constantes enfermedades del doctor Rafael E. Santander, que no le permitieron subsanar el daño causado por la falsificación expresada, ni darle forma á lo que se falló en su tiempo; y por último, la manera como se verificó la translación del archivo, de las oficinas de Santo-Domingo al Capitolio, dejando que una partida de soldados se apoderara de los papeles, para llevarlos y amontonarlos en la nueva oficina. En esta situación, no era posible la entrega formal.

A virtud de la nueva legislación, la Corte dejó de ser competente para conocer de los asuntos procedentes de los antiguos Territorios nacionales y de las reclamaciones por empréstitos y suministros en las guerras civiles, y me ordenó remitir los expedientes que estuvieran en curso á los Tribunales de Distrito y á la Comisión de Crédito público, respectivamente. Obedecí, mandando á los primeros 74 expedientes, y á la segunda cerca de 400; números que se han aumentado después con los que se han ido encontrando, entre los cuales debo mencionar *doce* que paraban en poder de un abogado de nota, desde el año de 1880, sin que se sepa por qué, ni hubiera dato alguno en la oficina sobre la salida de esos expedientes. En el mismo caso estaban otros *dos*, que presentó á la Comisión otro abogado, sin tomarse el trabajo de devolverlos á la Corte, como lo hizo el primero. Otro abogado trajo una causa criminal que había sacado, hacía más de un año, para hacer la defensa del infortunado reo, que estaba preso. Así puede explicarse la falta de *más de treinta* expedientes que reclaman los interesados y no han parecido.

La busca de estos expedientes, y la de otros sobre los cuales ha solido la Corte pedirme informes, me hizo notar más la falta de protocolos de autos y sentencias, que la ley manda formar, y la Secretaría había descuidado desde mediados del año de 1873, hasta Agosto de 1884; y me propuse crearlos, recogiendo y coleccionando las pocas copias que se han encontrado, y tomando copia de las que faltaban, según las relaciones de lo repartido y despachado mensualmente. De esta manera he formado y hecho empastar el del segundo semestre de 1873, y los de los años de 1874, 75, 76, 77 y 1778. En uno de esos años, faltaban las copias de 198 sentencias.

Una de las fuentes que he tenido que consultar para encontrar esas resoluciones, ha sido el *Diario Oficial*, en el cual se publicaban algunas de ellas, y casi todas las relaciones de lo despachado cada mes; pero para hacerlo, tuve que ocurrir á otras oficinas á pedir prestado dicho *Diario*, porque se han perdido las colecciones de esta Oficina, de diez años, y aunque las solicité del Archivo Nacional, sólo conseguí las de los años de 1867, 1874, 75, 76 y 1877, las cuales hice empastar, junto con las de 1885, 86 y primer semestre del año en curso. Según nota oficial del señor Archivero Nacional, se agotó la edición de las de los años de 1865, 68, 70, 71 y 1881, de manera que no me es dado reemplazar las que se perdieron.

Las copias de las demandas estaban también en hojas sueltas, y algunas de ellas extraviadas. Coleccioné é hice empastar las de treinta y cinco años. Las presentadas en ésta época se están copiando en un libro empastado de antemano.

A pesar de las repetidas excitaciones que se han hecho en la *Gaceta Judicial* para que se devuelvan los libros que faltan en la Biblioteca de la Corte, ni uno se ha recibido, y de las pocas obras que existen hay algunas descompletas. Se pidieron las leyes de los extinguidos Estados, y las que se han recibido las he hecho empastar en volúmenes gruesos, así:

De Antioquia, 3 volúmenes.
De Bolívar, 4 id.
Del Cauca, 3 id.
Del Magdalena, 1 id.
Y de Panamá, 2 id.

Algunos de los otros Departamentos no han remitido sino muy poca cosa, que no merece la pasta, y uno no ha contestado todavía.

También hice empastar en seis volúmenes la acreditada obra de Seijas, "Derecho internacional," que por fortuna estaba completa.

Excusado me parece decir que lo ejecutado hasta ahora se debe á mis compañeros de Oficina, quienes han seguido con eficacia y buena voluntad el plan de trabajo que me propuse realizar.

Pero lo hecho es nada en comparación de lo que falta por hacer. Los expedientes mandados archivar desde el año de 1824 hasta 1885, están revueltos unos con otros, y es preciso separarlos, arreglarlos por sus fechas, y formar un inventario de ellos que exprese la verdad. Para esto he mandado hacer, á mi costa, setecientas tarjetas de lata barnizada, con los nombres de los meses y años respectivos, y están preparados los libros necesarios.

Mis aspiraciones han sido y son, llegar á merecer el alto honor que por gracia me hizo la Corte al nombrarme su Secretario.

Concluyo presentando el cuadro específico de los fallos dados por la Corte durante el año.

Señores Magistrados,

Ramón Guerra A.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, tres de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete.

El precedente informe, que acredita la asiduidad, el esmero y pulcritud con que el señor Secretario desempeña las funciones de su cargo, ha sido visto por la Corte con satisfacción tanto mayor, cuanto él pone de manifiesto la previsión y acierto con que se confió al señor doctor Guerra la Secretaría de este Supremo Tribunal.

Publíquese dicho informe en la *Gaceta Judicial*, junto con un cuadro que especifique el número de negocios despachados por la Corte en el año que terminó ayer, con las clasificaciones respectivas.

Solicítese de S. Señoría el Ministro de Gobierno la inserción en el *Diario Oficial* del informe y cuadro mencionados.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente.

CUADRO de los asuntos despachados por la actual Corte Suprema de Justicia, desde su instalación (3 de Septiembre de 1886) hasta hoy, 2 de Septiembre de 1887.

ACUERDOS.

Sobre organización y servicio	14
Snbre competencia entre diversas antoridades	7
Dcclaratorias de incompetencia de la Corte	9
Sobre la conveniencia de expedir ciertas leyes	2
" consultas de las Autoridades Judiciales	18
" id. de otras id	3
" calificación de los nombrados para Jueces	10
" rebaja de penas	3
" inconstitucionalidad de una ley	1
" estadística judicial	1
	68

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

Civiles	27
Criminales	39
	66

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

Civiles	67
Criminales	228
	295

RECURSOS DE CASACIÓN.

Civiles	1
Criminales	1
Resoluciones diversas	3
Total	434

El Seeretario, *Ramón Guerra A.*

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Súprema de Justicia—Bogotá, Agosto cinco de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Administrador principal de Hacienda Nacional de Tunja, Alejandro La-Rotta, rindió la cuenta de su cargo correspondiente al mes de Junio de 1885, en la cual aparece un gasto de mil cuatrocientos cincuenta y un pesos, setenta y cinco centavos ($ 1,451-75 cs.), hecho por anticipación á cargo del responsable; y no apareciendo la debida legalización, la Sección 2.ª de la Oficina general de Cuentas, por auto número 701, de veintiuno de Diciembre de mil ochocientos ochenta y cinco, glosó esa cuenta, concediendo al responsable el término de la distancia y diez días más para contestar los reparos.

No habiéndose comprobado dentro del término concedido á La-Rotta la legalización de los gastos hechos por anticipación, la misma Oficina general, por auto de diez y siete de Febrero de mil ochocientos ochenta y seis, número 719, elevó á alcance líquido la suma en que consistía la glosa, y que queda mencionada atrás.

De este auto apeló el responsable, y la Sección 2.ª le concedió el recurso, por auto de veintisiete de Marzo de mil ochocientos ochenta y seis, para ante la Sala de apelación. En esta segunda instancia desvaneció La-Rotta la mayor parte del cargo, acompañando la legalización parcial emanada de la Secretaría de Fomento de la Unión, según consta de las notas de nueve de Junio y veinticuatro de Julio de mil ochocientos ochenta y cinco, fojas 7 y 8 del expediendiente; pero la Secretaría de Fomento no convino en legalizar varios gastos hechos en las telegrafías de Belén y de Chiquinquirá, por exceso en el pago, ni los gastos hechos en Ayudantes de telegrafistas de Tunja, Santa-Rosa y Guateque, por no estar autorizados en el Presupuesto general de gastos.

Con tal motivo, la Sala de apelación de la Oficina general de Cuentas, por auto de nueve de Agosto de mil ochocientos ochenta y seis, feneció provisionalmente la cuenta presentada por el Administrador La-Rotta, correspondiente al mes de Junio de mil ochocientos ochenta y cinco, aceptando los gastos legalizados y elevando á alcance líquido los no legalizados, que ascienden á la suma de cuatrocientos noventa y tres pesos, ochenta centavos ($ 493-80 cs.)

De este último auto apeló La-Rotta para ante esta Superioridad, y el recurso le fué concedido, enviándose la cuenta y los documentos que la acompañan. Substanciado el negocio en debida forma, es tiempo de que sea resuelto; y para ello le basta á la Corte la siguiente consideración:

Ni en los cinco días siguientes á la notificación del auto de la Sala de apelación, notificación que duró noventa días, conforme al artículo 2,028 del Código Fiscal, ni en el curso del juicio, ha acreditado el responsable que pudo hacer los gastos por los cuales se le ha deducido alcance, es decir, no ha presentado la legalización respectiva; y como cuando falta la legalización, la responsabilidad subsiste, es claro que en el presente caso el cargo deducido por la Oficina general de Cuentas subsiste en toda su fuerza; máxime, no existiendo partida en el Presupuesto, cosa que hace ilegal el gasto, conforme á los artículos 1,145 y 2,071 del Código Fiscal, aun cuando estuviera legalizado por el ordenador.

Por lo tanto, la Corte Suprema Nacional, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador general, confirma el auto apelado, pronunciado por la Oficina general de Cuentas, en nueve de Agosto de mil ochocientos ochenta y seis, en Sala de segunda instancia, deduciendo un alcance líquido contra Alejandro La-Rotta, Administrador principal de Hacienda Nacional de Tunja, por la suma de cuatrocientos noventa y tres pesos, ochenta centavos ($ 493-80 cs.), que no fueron legalizados en la cuenta del mes de Junio de mil ochocientos ochenta y cinco.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase á la Oficina respectiva.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernandez—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En cinco de los mismos notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Agosto ocho de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—En veinticinco de Enero del corriente año, otorgaron en la ciudad de Barranquilla Alejandro Danouille, I. Castellanos & Compañía y Molinares & Compañía, un documento en el cual los dos últimos se obligaron como fiadores mancomunada y solidariamente con el primero, á responder por los derechos de importación que éste causara en el curso del año. El compromiso de las casas Castellano y Molinaress fué condicional, mientras se hacían los pagos ó se otorgaban nuevas seguridades para verificarlos.

La Aduana aceptó este documento, y en el mes de Abril liquidó contra Danouille la suma de dos mil trescientos once pesos, cincuenta centavos ($ 2,311-50 cs.), procedentes de derechos de importación; y el Administrador libró mandamiento ejecutivo por esa suma contra el deudor, en dos de Mayo último. Notificado el mandamiento resultó que Danouille no tenía bienes suficientes para hacer el pago, por cuyo motivo se dirigió la ejecución contra los codeudores Castellanos y Molinares.

Apelaron éstos del mandamiento ejecutivo: se les concedió el recurso y se les hizo saber la concesión de éste, y con tal motivo ha venido el expediente á la Corte.

Substanciada la apelación y oído el dictamen del señor Procurador, quien es de concepto que debe confirmarse el auto apelado, pasa esta Superioridad á resolver el asunto.

Son varias las alegaciones en que los apelantes fundan su querella; pero la Corte no cree necesario ocuparse sino de una que es cardinal y decisiva, á saber: que el documento en virtud del cual se mandó proseguir la ejecución contra Castellanos y Molinares no ha sido debidamente reconocido por éstos.

Es cierto que los reconocimientos hechos por los Recaudadores á cargo de los deudores al Fisco, por rentas y contribuciones, prestan mérito ejecutivo; pero como los pagarés ó vales simples no lo prestan mientras no estén reconocidos ó hayan sido registrados, circunstancia de que carece el documento que ha servido de base como recaudo para el mandamiento de ejecución contra Castellanos y Molinares, es claro que, conforme al inciso 6.° del artículo 925 del Código Judicial, tal documento que aun no está revestido de las formalidades legales no ha podido servir para librar dicho mandamiento ejecutivo.

Por lo tanto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el auto apelado en lo relativo á los recurrentes.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente al señor Administrador de la Aduana de Barranquilla.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En nueve de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

En nueve de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Francisco Groot.

GROOT—*Guerra A.*, Secretrrio.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Agosto doce de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Administrador de la Aduana de Barranquilla, en uso de la jurisdicción coactiva que le conceden las leyes fiscales, dictó, el primero de Abril del presente año, mandamiento ejecutivo contra Alejandro Danouille, como deudor principal, y subsidiariamente contra I. Castellanos y Compañía y Molinares y Compañía, por la suma de dos mil seiscientos ocho pesos, ochenta y cinco centavos ($ 2,608-85 cs.), importe de los derechos causados por dicho Danouille con cuatro importaciones, verificadas así:

El veintisiete de Marzo del presente año, doscientos veinte pesos, sesenta centavos.....$	220-60
En veintiocho de id. id. mil seiscientos cincuenta y tres pesos, veinticinco centavos.....	1,653-25
El veintinueve de id. id. cuarenta y seis pesos, veinte centavos.....	46-20
El treinta y uno de id. id. seiscientos ochenta y ocho pesos, ochenta centavos.....	688-80
Total antes expresado.....$	2,608-85

Fundóse el mandamiento ejecutivo en cuatro documentos, esto es, en las copias suscritas por el Administrador Tesorero (fojas 2, 3, 4 y 5) de las partidas sentadas en el respectivo libro de la Aduana por el mismo Administrador Tesorero y el Contador, de liquidación y reconocimiento de los derechos causados por las cuatro importaciones de Danouille de que se ha hecho mérito, documentos en los cuales no están mencionados los dos fiadores á quienes se refiere el auto ejecutivo.

Notificado el mandamiento ejecutivo al deudor, éste declaró no tener dinero ni bienes con qué pagar la suma exigida; entonces el funcionario ejecutor trabó la ejecución directamente contra los fiadores, á virtud de auto del treinta y uno de Mayo; y notificados que fueron los representantes de I. Castellanos & Compañía y Molinares & Compañía, dijeron que apelaban del mandamiento ejecutivo. En seguida, en diligencia del mismo día, dijeron que no pagaban la suma por la cual se les ejecutaba, pero que para hacer valer su derecho, consignaban, en cálidad de depósito, la misma cantidad. Llenáronse las formalidades del caso, y el funcionario ejecutante, por auto del ocho de Junio, concedió la apelación en el efecto devolutivo para ante esta Superioridad. Se ha substanciado legalmente el recurso, y oído el señor Procurador general, éste es de concepto que debe confirmarse el auto ejecutivo.

Muy recientemente ha fallado la Corte sobre un juicio ejecutivo idéntico en todo al presente, y trabado contra el mismo deudor y los mismos fiadores; y para resolver ahora, esta Superioridad considera:

1.° Es incuestionable que los asientos de reconocimientos hechos por la Aduana en el mes de Marzo del presente año, prestaban mérito ejecutivo por sí sólos contra el introductor Alejandro Danouille, conforme al numeral 2.° del artículo 1,057 del Código Judicial de la Nación, por manera que el auto ejecutivo librado contra dicho Danouille, que está ejecutoriado en cuanto á éste, no ofrece lugar á discusión;

2.° Pero es muy distinta la situación de los fiadores en el asunto. No hay constancia alguna en las cuatro partidas de reconocimiento que han servido de recaudo ejecutivo, de que I. Castellanos & Compañía y Molinares & Compañía fuesen fiadores por las cuatro cantidades líquidas cargadas á Danouille, y solamente se designa á éste en aquellas como deudor, sin mencionarse á los fiadores ni otras personas. Por lo mismo, si dichos reconocimientos servían de recaudo ejecutivo "á cargo de un deudor al Fisco," como era Danouille, ningún mérito probatorio ni fuerza tenían contra terceras personas no mencionadas allí como deudores.

3.° Mas en defecto de los documentos fiscales á que se ha hecho referencia, ¿hubiera podido ocurrir el funcionario ejecutor al documento que corre á la foja 1.ª del expediente, que aparece como otorgado por Danouille el veinticinco de Enero del año en curso, en el cual da por sus fiadores á I. Castellanos & Compañía y Molinares & Compañía, para responder mancomunada y solidariamente por los derechos de importación que el mismo Danouille "cause á deber en el curso del presente año?" Aunque este documento no fué mencionado en el auto ejecutivo como elemento de la ejecución, pues ésta fué librada solamente á virtud de estas palabras: "Resultando de las precedentes partidas del 'Diario' que el señor Alejandro Danouille es deudor al Tesoro Nacional" etc., la Corte debe considerarlo, ya porque encabeza los autos, ya porque los ejecutados lo han tachado en su memorial de fojas 3 á 5 del segundo cuaderno. Sin entrar en consideraciones relativas al contexto y demás condiciones intrínsecas del mencionado documento, es patente que este carece de una condición extrínseca indispensable: no está reconocido judicialmente por ninguno de los tres otorgantes, ni tampoco, á falta del reconocimiento, ha sido registrado. Por lo tanto, no presta mérito ejecutivo, conforme á la terminante disposición del numeral 6.° del artículo 1,010 del Código Judicial, nueva edición, ó 925 del mismo, edición antigua.

Por estas consideraciones, y apartándose del concepto del señor Procurador general, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el auto apelado del primero de Abril del presente año, en cuanto se refiere á I. Castellanos & Compañía y Molinares & Compañía, y el consecuencial de fecha treinta y uno de Mayo.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En trece de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

En trece de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Francisco Groot.

GROOT—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Agosto doce de mil ochocientos ochenta y siete.

El Administrador de la Aduana de Barranquilla libró mandamiento ejecutivo, con fecha diez de Junio último, contra el señor Alejandro Danouville, como deudor principal, y contra los señores Molinares & Compañía é I. Castellanos & Compañía, como fiadores solidarios de aquél, por la suma de tres mil siete pesos veinte centavos ($ 3,007·20), sus intereses y costas. Procede el crédito del valor de los derechos de Aduana causados por la introducción de varias partidas de mercancías, efectuada por el señor Alejandro Danouville, según aparece de las copias de los asientos del "Diario," marcadas con los números cuatrocientos setenta y siete cuatrocientos ochenta y ocho), quinientos treinta y uno y quinientos setenta y uno que han servido de fundamento al auto de ejecución.

Al notificarles la orden de pago á los señores Molinares & Compañía é I. Castellanos & Compañía apelaron, y por habérseles otorgado el recurso vino el expediente á la Corte, en donde se ha substanciado oyendo á las partes; y para decidir, se considera:

Por dos razones únicamente pudo entablarse ejecución contra los apelantes: por haberse inscrito sus nombres como introductores de mercancías en las partidas de liquidacón, sentadas en el libro "Diario" de la Aduana, ó por haber subscrito, con el carácter de fiadores solidarios de Alejandro Danouville, el documento firmado por éste el veinticinco de Enero del corriente, año que en copia se ha agregado al expediente.

Como en los asientos del "Diario" no figura como deudor sino Danouville, sin que se haga alusión siquiera á los ejecutados como responsables por las sumas que aquel salía á deber, la liquidación hecha contra el deudor *solamente* no puede perjudicar á los fiadores, ni servir, en consecuencia, de título ejecutivo contra ellos, por faltar el requisito exigido por el artículo 936 del Código Judicial nacional.

La copia del documento por el cual se constituyeron fiadores solidarios del deudor, no presta mérito ejecutivo contra aquellos, en la forma en que ha sido presentada en este juicio, según lo preceptuado en el artículo 622 del Código Judicial. Allí se dispone que los documentos privados deben presentarse originales para que tengan valor, á menos que se encuentren en alguno de los casos de excepción mencionados en el mismo artículo, y en ninguno de ellos está comprendido el documento privado de que aquí se trata.

Tampoco ha sido reconocido por los ejecutados el documento de donde se tomó la copia, y sin esta condición ó la de haberse registrado no trae aparejada ejecución por haberse omitido la formalidad exigida por el ordinal sexto del artículo 925 del Código Judicial.

Las observaciones que preceden bastan para demostrar que no está ajustado á la ley el auto ejecutivo que ha sido apelado, sin que sea necesario que la Corte se ocupe de las demás razones alegadas por los apelantes para solicitar su revocatoria.

Por lo expuesto, la Corte, separándose del concepto del señor Procurador, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley, revoca el auto ejecutivo de que se ha hecho mérito, en lo que se refiere á los apelantes.

Notifíquese, cópiese, publíquese esta decisión y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En trece de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

En diez y siete de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto que precede al señor Francisco Groot.

GROOT—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Agosto veintitrés de mil ochocientos ochenta y siete.

El Síndico municipal del Distrito de Bogotá demandó al señor Dimas Cruz para que, con audiencia de éste, se decretase la expropiación de la zona de tierra necesaria para poner en comunicación la Carrera cuarta con la Carrera quinta, al Occidente de la ciudad. Se surtió el juicio y se falló por el Juez cuarto del Circuíto de Bogotá, con fecha veintisiete de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis. Apeló de la sentencia la parte demandada, se le concedió el recurso para ante el Tribunal Superior del Distrito judicial de Cundinamarca, y, por haberse declarado éste incompetente, se remitió el expediente á la Corte.

Se substanció el recurso; y cuando se encontraba en estado de fallar, se expidió la ley 143 de 5 de los corrientes, que se publicó en el *Diario Oficial* número 7,133.

En los artículos 1.° y 8.° (ordinal 9.°) se determinó que la Corte no conozca de juicios de expropiación, sino cuando en ellos tengan interés los Gobiernos nacional ó de los Departamentos, y como en este juicio aparece interesado únicamente el Distrito de Bogotá, es al Tribunal de Cundinamarca á quien corresponde decidir el recurso intentado.

Por las razones expuestas, que están de acuerdo con la vista del señor Procurador, se resuelve: remítase el expediente al Tribunal del Distrito judicial de Cundinamarca, en la Sala de lo civil, para que decida el punto que ha motivado el recurso de que se ha hecho mérito.

Notifíquese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la misma fecha notifiqué el auto anterior al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Agosto dos de mil ochocientos ochenta y siete.

El Juez del Circuíto de Toro ha remitido en consulta el auto que profirió en treinta y uno de Mayo del corriente año, por el cual sobresee en el sumario instruído contra Toribio Lerma y otros por delitos políticos.

No siendo de la competencia de esta Superioridad el conocimiento de esta clase de asuntos, á virtud de lo que dispone la ley 61 de 1886, como muy bien dice el señor Procurador general, la Corte se declara incompetente para conocer en este negocio; ordena la remisión del expediente al Tribunal Superior del Distrito judicial del Cauca, y que se dé conocimiento de ella al Juez del Circuíto de Toro.

Notíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En tres de los mismos se notificó al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario,

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, dos de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete.

El Juez del Circuíto de Toro ha remitido en consulta el auto que profirió en siete de Junio del corriente año, por el cual sobresee en el sumario instruído contra Pedro Manrique y otros, por delitos políticos.

No siendo de la competencia de esta Superioridad el conocimiento de esta clase de asuntos, á virtud de lo que dispone la ley 61 de 1886, como muy bien dice el señor Procurador general, la Corte se declara incompetente para conocer en este negocio; ordena la remisión del expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca, y que se dé conocimiento de ella al Juez del Circuíto de Toro.

Notifíquese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Rumón Guerra A., Secretario.

En tres de los mismos notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, cuatro de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Juez 2.° del Circuíto de Bogotá, Marceliano Vargas, confirmó en segunda instancia la sentencia que en primera dictó el Juez 2.° del Distrito, condenando á Esteban Daza á pagar, dentro de seis días, á Purificación y Dolores Zapata, la cantidad de ochenta y cinco pesos de ocho décimos (85 pesos) que éstas le demandaron. Posteriormente ocurrió Daza al Juez primeramente citado pidiéndole que, en vista del expediente en que dichas sentencias recayeron, certificara sobre varios puntos, y con ese documento se quejó ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, no sólo por la sentencia proferida por el Juez Vargas, sino por las respuestas que éste dió al expedir su certificado.

Pasado el negocio al estudio del señor Fiscal, fué de concepto que, siendo el principal motivo de la querella la sentencia que puso término á un juicio civil entre particulares, no era permitido proceder de oficio; y aunque el Tribunal fué del mismo concepto, dijo, sin embargo, que atribuyéndose al Juez Vargas haber faltado á la verdad, debía investigarse de oficio este punto, y dispuso al efecto, que Daza jurara su denuncia y que se pidiera original el expediente á que dicho Juez se refirió en su certificación. Con estos datos, y comprobada la calidad de Juez del doctor Vargas, el Tribunal, de acuerdo con lo pedido por el Ministerio público, dictó auto de sobreseimiento y lo ha consultado con esta Superioridad.

Oído el señor Procurador general, ha pedido que el auto se confirme, y con razón, porque no habiendo formalizado Daza acusación contra el Juez 2.° del Circuíto de Bogotá por la sentencia que pronunció, y habiéndose averiguado únicamente de oficio si el mismo Juez faltó á la verdad en lo que expresó á pedimento del denunciante, no se ha obtenido la prueba de esa falsedad. A dicho Juez se le preguntó si la prueba testimonial era la única producida por las demandantes, y él contestó que además de esa prueba existían otras en favor de las pretensiones que sostuvo la parte contraria á Daza, y en efecto las posiciones hechas por éste á Purificación y Dolores Zapata, afirman hechos que favorecen las pretensiones de éstas y que forman la prueba de confesión. Siendo esto así, la Corte debe confirmar, y en efecto confirma, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, el auto de sobreseimiento consultado.

Hágase saber esta resolución, déjese copia de ella, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En cuatro de Agocto de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Agosto cinco de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Por auto de treinta de Junio del corriente año, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca llamó á juicio de responsabilidad, por los trámites extraordinarios, al doctor José M. Lombana Domínguez, por violación del artículo doscientos setenta y ocho del Código Penal del extinguido Estado de Cundinamarca, referente á mal desempeño y omisión en el cumplimiento de los deberes que el expresado doctor Lombana tenía como Fiscal del Circuíto Judicial de Bogotá.

Notificado dicho auto, el enjuiciado solicitó revocatoria de él por contrario imperio, y en subsidio apelación; y como lo primero le fué negado, y concedido lo segundo, han sido remitidos los autos á esta Superioridad, para que ella conozca del recurso interpuesto.

Substanciada la apelación y oído el dictamen del señor Procurador general, pasa la Corte á ocuparse del auto apelado.

El funcionario llamado á juicio no niega el cargo que se le ha deducido por el Tribunal: apenas alega que el artículo en que el auto de enjuiciamiento se funda, no le es aplicable, porque ese artículo, que es el 278, hace parte del Título en que se detallan los delitos que embarazan la ejecución de las leyes, y que el hecho motivo del procedimiento que le afecta, es referente á los delitos contra el servicio público, calificado en el artículo 287, del mencionado Código Penal. En resumen: se acepta por el apelante el cargo de morosidad y de mal desempeño en los deberes de su cargo; pero se pretende que la disposición aplicable no sea la deducida por el Tribunal, sino otra distinta.

Para resolver el punto basta la siguiente consideración: el artículo 287 del Código Penal mencionado, que es aquél en que el apelante se cree comprendido, se refiere únicamente á los empleados judiciales que sean morosos y que no despachen con la brevedad que prescriben las leyes, y dentro de los términos que ellas señalan, los negocios que tienen á su cargo; y el artículo 278 comprende no sólo á los empleados que sean morosos, sino á los que sean omisos, esto es, á los que falten al cumplimiento de sus deberes; no habiendo otra disposición especial para este último caso, es decir, para la omisión. Y como consta de autos que el doctor Lombana Domínguez no sólo retuvo por diez meses un expediente criminal que se le había pasado en vista para que expusiera su dictamen como Fiscal, sino que devolvió el expediente sin despacho; es claro que no sólo fué moroso, sino omiso en el cumplimiento de sus deberes, faltando á éstos. Por consiguiente, la disposición penal aplicable al caso, según lo dicho atrás, no puede ser otra que la contenida en el arlículo 278 mencionado repetidas veces, como se establece en el auto que ha motivado la alzada.

Por lo expuesto, y por los demás sólidos fundamentos contenidos en el auto apelado, en la exposición del señor Fiscal del Tribunal y en la del señor Procurador general, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma dicho auto pronunciado por el Tribunal de Cundinamarca, en el que llama á juicio extraordinario de responsabiliad al doctor José M. Lombana Domínguez.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el proceso al Tribunal remitente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En cinco de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto auterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Agosto cinco de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—En la causa seguida contra el Teniente Jacinto Rodríguez, por insubordinación, se pronunció contra éste, en Consejo de Guerra de Oficiales generales, sentencia condenatoria, con fecha nueve de Julio próximo pasado, la cual se ha remitido á esta Superioridad en consulta.

Substanciado debidamente el negocio, y siendo llegado el caso de resolver, se observa que el Coronel Julio Añez, á quien el procesado nombró defensor, no tomó posesión del cargo, ni á dicho defensor se notificó el auto de proceder dictado con fecha nueve de Mayo último (foja 41), pues aunque se hallan extendidas y firmadas por el Secretario, Jorge Pardo, las respectivas diligencias de posesión del cargo y de notificación del auto, no se encuentra la firma del expresado defensor, y se advierte que se dejó en blanco el lugar que debía ocupar dicha firma. Como la falta de la notificación indicada es causa de nulidad, conforme al inciso número 2.° del artículo 1,536 del Código Mi-

litar, siendo de notar que esta es la segunda vez que se ha incurrido en causa de nulidad en el presente juicio, la Corte Suprema, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara nulo lo actuado, á partir de la mencionada diligencia de posesión.

Notifíquese, cópiese y devuélvase.

Y por cuanto la omisión del Secretario Jorge Pardo, en hacer la notificación de que se ha hablado, y la circunstancia de autorizar con su firma las expresadas diligencias, sin estar firmadas por el defensor, puede aparejarle alguna responsabilidad, se ordena sacar copia de las mismas diligencias y pasarla al respectivo Agente del Ministerio público para lo de su cargo.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del cinco de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, se publicó esta sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En ocho de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué la sentencia que precede al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Agosto diez de mil ochocientos ochenta y siete.

Estaban instruyéndose las diligencias sumarias respectivas para averiguar la responsabilidad en que hubieran podido incurrir Cayetano Díaz y algunos otros, por haber desempeñado funciones oficiales, sin haber obtenido nombramiento de autoridad legítima, cuando se expidió el decreto de indulto de 20 de Julio de 1886. El Juez del Circuito de Toro sobreseyó y ordenó que se suspendiera el procedimiento, por auto de veintisiete de Mayo último, remitiendo el expediente en consulta de la decisión dictada.

Según la ley 61 del año de 1886, el conocimiento de esta clase de negocios corresponde á los Tribunales Superiores de Distrito, y así se ha resuelto en casos análogos.

Por esta consideración, y acogiendo el concepto emitido por el señor Procurador general de la Nación, la Corte se declara incompetente para ocuparse de la consulta que se le ha elevado por el señor Juez del Circuito de Toro, y ordena que se remita el expediente al Tribunal Superior del Distrito judicial del Cauca, residente en Buga, y que se dé aviso de esta resolución al Juez de Toro.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En once de los mismos notifiqué el auto que precede al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, diez de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—En la investigación sumaria instruída para averiguar la responsabilidad en que hubieran podido incurrir los señores Andrés García y otros por haber ejercido destinos en el Distrito de Quinchía, Departamento del Cauca, á virtud de nombramientos hechos por los revolucionarios, durante la última rebelión, pronunció auto el señor Juez del Circuito de Toro, con fecha treinta y uno de Mayo último, sobreseyendo, y ordenando la suspensión de todo procedimiento y que se consultara la decisión con la Suprema Corte.

Substanciada la consulta, se observa que el auto que la motiva tiene por fundamento el hecho de que la responsabilidad en que hubieran podido incurrir aquellos contra quien se dirigía la investigación, provenía de delitos políticos, comprendidos en los decretos de indulto expedidos por el Poder Ejecutivo nacional, con fecha 20 de Julio de 1886, y por el Gobierno del Cauca el 23 de Mayo del mismo año, y que, según la ley 61 del año próximo pasado, no corresponde á la Corte, sino á los Tribunales Superiores de Distrito, conocer de esta clase de negocios.

Por esta consideración, que está en un todo de acuerdo con el concepto del señor Procurador general de la Nación, se declara incompetente la Corte para conocer de la consulta de que se hecho mérito, y ordena que se pase el expediente al Tribunal Superior del Distrito judicial residente en Buga, Departamento del Cauca, por ser él el que tiene jurisdicción para resolver acerca del auto consultado. Dése aviso al señor Juez del Circuito de Toro.

Notifíquese, déjese copia y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En once de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, doce de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—En la instrucción sumaria seguida contra Isidoro Ruiz y otros por el delito de falsificación, se observó que en el Juzgado cuarto del Circuito de Bogotá habían ocurrido varias demoras en la actuación; y con el fin de averiguar la responsabilidad en que hubieran podido incurrir los individuos que desempeñaron el referido Juzgado, se ordenó sacar copia de las piezas conducentes del sumario, y después de haberse practicado algunas diligencias, el Tribunal Superior del Distrito judicial de Cundinamarca profirió el auto de fecha veinticinco de Junio del presente año, por el cual declara prescrita la acción criminal respecto de los Jueces sindicados, y ha consultado dicho auto con esta Superioridad.

Las demoras ocurrieron en el año de mil ochocientos ochenta, y como, conforme al Código Penal del extinguido Estado de Cundinamarca, la acción criminal en delitos de la clase del de que se trata prescribe en dos años, es patente que en el presente caso la prescripción se ha consumado.

En consecuencia, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto consultado.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En trece de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, doce de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Juez del Circuito de Toro, en el Departamento del Cauca, consulta con esta Suprema Corte, el auto que dictó con fecha siete de Junio del presente año, por el cual sobresee en el sumario instruído contra Eduardo Calle y Pedro Alvarez por el delito de rebelión.

Conforme á la ley 61 de 1886, la Corte no tiene facultad para ocuparse de esta clase de asuntos; y por lo tanto, esta Corporación, se declara incompetente para conocer de la consulta referida, y dispone que el proceso se remita al Tribunal Superior del Distrito judicial del Cauca, por ser el asunto de su competencia, y que se dé noticia de esta resolución al Juez del Circuito de Toro.

Notifíquese cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial*.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín

Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En trece de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto que precede al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, diez y seis de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Habiendo funcionado Abdón Albarracín, en el año de mil ochocientos ochenta y cinco, con el carácter de Juez del extinguido Territorio de Casanare, á virtud de nombramiento del Jefe civil y militar que mandaba allí, por comisión del Gobierno nacional, se inició sumario para averiguar la responsabilidad en que hubiese podido incurrir dicho Albarracín por indebido ejercicio de las funciones judiciales; y al cabo, el Tribunal Superior de Tundama pronunció auto de sobreseimiento, con fecha primero de Abril del presente año, fundándose en muy justas consideraciones; auto que consultó con esta Superioridad.

Antes de resolver, teniendo noticia privada del fallecimiento de Albarracín, la Corte dispuso, para mejor proveer, por auto del quince de Junio, que se librase exhorto al Juez del Circuíto de Sugamuxi (Departamento de Boyacá), con el objeto de comprobar aquel fallecimiento. El despacho ha sido devuelto diligenciado, y de las diligencias resulta la comprobación del hecho, esto es, que Albarracín falleció en Sogamoso, según se afirma en el certificado de defunción, y fué sepultado en Gámeza el día doce de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cuatro; siendo de advertir, como lo certifican el Juez y Secretario del mencionado Circuíto, que, conforme al régimen practicado en Boyacá, las defunciones no se hacían constar por medio de los Notarios, sino de los registros de los párrocos respectivos.

Resulta, pues, que, ó el comprobante que se ha emitido en Gámeza está errado, si se refiere al Abdón Albarracín de quien trata el sumario, puesto que los actos judiciales de éste fueron ejecutados en mil ochocientos ochenta y cinco; ó hubo dos personas de un mismo nombre y apellido, y el Abdón Albarracín que falleció en Noviembre de mil ochocientos ochenta y cuatro no podía ser el que funcionó como Juez de Casanare en mil ochocientos ochenta y cinco. No pudiendo, pues, la Corte, mandar que cese todo procedimiento por muerte del sindicado, puesto que no está comprobada la identidad de la persona, es el caso de entrar en el fondo del asunto.

Al efecto, la Corte considera que, al decidir sobre un sumario absolutamente idéntico, instruído contra Heliodoro Reina, por haber funcionado también como Juez de Casanare, á virtud de nombramiento del Jefe civil y militar, pronunció fallo, el ocho de Junio del presente año, confirmatorio del auto de sobreseimiento. En el presente caso todo es igual, con diferencia de los nombres de los sindicados, y las razones que militan son unas mismas. Por lo tanto, y de acuerdo con el concepto del señor Procurador, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto de sobreseimiento consultado.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y seis de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Agosto diez y siete de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Administrador Tesorero de la Aduana de Ipiales, en nota número 18 del mes de Octubre de mil ochocientos ochenta y dos, participó á la Secretaría de Hacienda de la República que Salvador Herrera, ex-Administrador de la misma Aduana, había tomado por su cuenta y para sus usos particulares la suma de dos mil ciento veintisiete pesos treinta y seis y medio centavos ($ 2,127-36½ centavos) pertenecientes á las rentas nacionales, y que se resistía á entregar dicha suma, así como las armas con que anteriormente tenía armado el Resguardo.

A virtud de este aviso, el Secretario de Hacienda excitó al señor Procurador general de la Nación para que promoviera el juicio competente de responsabilidad contra el ex-Administrador Herrera, y con tal motivo se iniciaron en la Corte Suprema, desde Noviembre del mencionado año de 1882, las presentes diligencias sumarias.

Después de considerables demoras ocasionadas por la distancia, por la falta de deligencia y mal cumplimiento de los diversos comisionados para exclarecer los hechos, y también por la situación de guerra en el país, no volvió á tomar curso activo la información sumaria sino en Septiembre del año anterior. Librados nuevos despachos y practicadas muchas diligencias, se encontraba yá el asunto en estado de ser resuelto; pero en el mes de Junio último hizo notar el señor Procurador que había tenido informe del Juez del Circuíto de Obando sobre la muerte del sindicado. Esto originó nuevo despacho, que ha venido últimamente con nota de veintiséis de Julio próximo pasado.

De esta diligencia recientemente practicada, resulta que efectivamente Salvador Herrera, contra quien se dirigía esta actuación, murió en San-Pedro de Ipiales el siete de Enero del corriente año, lo cual está comprobado con la partida de defunción y con la atestación afirmativa del Juez del Circuíto de Obando en el despacho de lo criminal.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ordena que cese todo procedimiento criminal contra Salvador Herrera por los cargos á que pudieran dar lugar los hechos al principio mencionados, sin que por esto quede eximido de la responsabilidad civil á que hubiere lugar.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y nueve de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, diez y nueve de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Juez del Circuíto de Toro, en el Departamento del Cauca, consulta con esta Superioridad el auto de fecha treinta y uno de Mayo del presente año, por el cual sobresee en la instrucción sumaria iniciada contra Ezequiel Duque y socios por el delito de rebelión.

La Corte, en repetidas providencias, ha declarado que, conforme á la ley 61 de 1886, no tiene facultad para ocuparse de estos asuntos; y en consecuencia, esta Corporación se declara incompetente respecto de la consulta referida, y dispone que el procoso se remita al Tribunal Superior del Distrito judicial del Cauca, á quien corresponde el conocimiento, y que se dé aviso al Juez del Circuíto de Toro.

Notifíquese, cópiese y publíquese en la *Gaceta Judicial*.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la misma fecha notifiqué el auto anterior al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

IMPORTANTE.

En beneficio del buen servicio público, se suplica á los caballeros que tengan en su poder Códigos, Compilaciones, tomos de leyes nacionales y de los extinguidos Estados, ú otros libros de propiedad de la Corte Suprema, se sirvan devolverlos, que se ocurre con frecuencia la necesidad de consultar tales obras.

BOGOTÁ.—IMP. DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 37

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 17 de Septiembre de 1887.

CONTENIDO.

PÁG.

ACUERDOS DE LA CORTE.

Acuerdo número 70, relativo á una consulta del Tribunal Superior de Tunja 289

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Sobre nulidad de un juicio seguido sobre denuncia de bienes ocultos. "

Sobre la consulta de dos sentencias proferidas por el Juez del Circuito de Yarumal [Antioquia] respecto de dos tercerías en un juicio ejecutivo 291

AUTO INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Pronunciado respecto de dos apelaciones en pleitos sobre minas promovidos en Neiva 292

Sobre incompetencia de la Corte para conocer de un juicio de expropiación, de interés municipal ..... "

NEGOCIOS CRIMINALES.

Sobre incompetencia de la Corte para conocer de una denuncia por responsabilidad de un ex-Secretario de Estado 294

De sobreseimiento en un sumario relativo á un reclutamiento decretado por el ex-Presidente de Bolívar 295

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL.

Emitida respecto de un sumario remitido en consulta por el Tribunal Superior de Antioquia ..... "

Id. sobre un sumario seguido, por responsabilidad, ante el Tribunal Superior de Cundinamarca ..... "

GACETA JUDICIAL.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

ACUERDO NUMERO 70.

En Bogotá, á tres de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete, constituída la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, se dió cuenta de la consulta que Su Señoría el Presidente del Tribunal Superior de Tunja hace, por telegrama de fecha 30 de Agosto último, sobre si en las causas en que, antes del 22 de Julio de este año, había señalado el Jurado un día posterior á esta última fecha para la celebración del juicio, debe concederse nuevo término de prueba, de conformidad con las disposiciones vigentes hoy; ó si solamente se señala nuevo día para la celebración del juicio. El señor Magistrado doctor Samper á quien había tocado el asunto en repartimiento, sometió á la consideración de la Corte el siguiente proyecto de resolución:

"El artículo 270 de la ley 57 del presente año dispone que los Jueces de Circuito al conocer,—yá sin intervención del Jurado,—de los delitos cuyo juzgamiento les corresponde, observen el procedimiento prescrito en el Capítulo 3.°, Título 9.° del Libro 3.° del Código Judicial; y como las leyes concernientes á la substanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores, desde el momento en que deben empezar á regir (artículo 40, ley 153 de 1887), es claro que las disposiciones del mencionado Capítulo 3.° deben aplicarse á los juicios en el estado en que se hallen, respetando sí los términos que hubieran empezado á correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieran iniciadas, pues así lo dispone el mencionado artículo 40. Ahora bien, como respecto del caso que se consulta, se dice que la celebración del juicio no se había verificado aún, y la nueva ley ordena la práctica de dicha celebración—artículo 1,795 del Código Judicial,—edición de 1887—es indudable que ésta debe tener lugar; pero como la misma nueva ley—artículo 1,797, Código Judicial—dispone que el Juez, en el *mismo* auto en que señala día para la celebración del juicio, señale también el término dentro del cual deben las partes producir sus pruebas, la Corte estima que esta disposición debe cumplirse íntegramente, y, en consecuencia, concederse término probatorio, yá porque al seguirse este procedimiento no se viola el mencionado artículo 40, que, como se ha dicho, lo que dispone es que se respeten los términos *en curso* y las actuaciones y diligencias *iniciadas*; ya porque, conforme á la Constitución y al artículo 44 de la ley 153, en materia penal, prefiere en los juicios la ley favorable ó permisiva á la odiosa ó restrictiva; y conforme al inciso final del artículo 45 de ésta última ley, los casos dudosos deben dicidirse por interpretación benigna. Así, pues, siendo, como es, favorable á los reos la concesión del término probatario de que habla el artículo 1,797, debe concedérseles, máxime cuando en los juicios en que intervenían los Jurados los términos eran generalmente cortos y las pruebas no demandaban rigor jurídico.

"En consecuencia, la Corte resuelve la duda presentada, disponiendo que los Jueces, al señalar, como deben, nuevo día para la celebración del juicio, en las causas en que esta celebración no haya tenido lugar, señalen también, en el mismo auto, término probatorio dentro de los límites que fija el artículo 1,795 del Código Judicial, edición de 1887.

"Comuníquese por telégrafo al Tribunal consultante, y luégo por nota, y publíquese."

Discutido el anterior proyecto, fué aprobado por unanimidad.

Con lo cual se concluyó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Agosto veinticinco de mil ochocientos ochenta y siete.

Con fecha nueve de Enero de mil ochocientos ochenta y dos Juana Rita Guerrero, del vecindario de La Chorrera, en el hoy Departamento de Panamá, ocurrió al Juez de primera instancia en lo nacional, residente en dicha ciudad, denunciando y demandando *como bien oculto de la Nación* (dice el libelo), *el terreno arenoso formado por relleno del mar, en una larga serie de años, en la marisma del Estero del puerto de La Chorrera; terreno* que antes cubría el mar y era y es del soberano y que está separado de la tierra firme por el Estero del puerto, sometido á la influencia de las mareas; que nunca ha sido

de "El Hato de la Boca;" que ese terreno, poseído y ocupado hacía muchos años por la demandante, constituye costa, pertenece al soberano, está á la margen de un río navegable, "El Caimito"; es una península de marina rellena de arena por el mar, y por último, que el señor Hortensio Icaza, quien pretende tener derecho al mismo terreno, carece del título de indulto, *único que podría oponerse al soberano contra su derecho de dominio eminente.*

Conferido el traslado de esa demanda, por auto de veintitrés del citado mes, al Procurador del extinguido Estado y al mencionado Icaza, aquél, por escrito de trece de Febrero de dicho año, exigió previamente para poder contestar, que se diese cumplimiento á ciertos requisitos determinados para los casos de denuncios de bienes ocultos de la República, en la circular de la Secretaría de Hacienda, número 623; solicitando, además, se agregase copia de un remate ejecutado en Noviembre de mil ochocientos ochenta, á favor de H. de Icaza, de los expresados terrenos de "La Boca;" y el segundo opuso la excepción de inepta demanda, fundándola en las mismas omisiones observadas por el Procurador.

Acogida la excepción primero, y revocado el auto después, á consecuencia de haber el Procurador insistido en su anterior pretensión, se ordenó á la demandante que presentase, como presentó, el plano de los terrenos en cuestión, y se agregó la copia de la diligencia de remate, que se tenía solicitada, como yá se ha dicho.

En este estado del negocio se pidió, por parte de la actora, que se practicase una inspección ocular en el terreno denunciado, siempre que se hiciese el veintidós de Marzo del referido año, en que debía haber gran marea del equinoccio de la primavera; diligencia que, rechazada primeramente, con el fundamento de ser extemporánea, por no haberse aún contestado la demanda, y acordada luégo, á pedimento del Procurador del Estado, quedó al fin sin practicarse, porque habiéndose comisionado para ello al Juez del Distrito de La Chorrera, se revocó, á pedimento de la actora, el auto en que así se dispuso, por haber pasado el día en que aquella diligencia debía tener objeto.

Después de tal revocatoria, la cual tuvo lugar el veintisiete de Marzo del mismo año de mil ochocientos ochenta y dos, el Procurador del Estado contestó la demanda, en primero de Abril siguiente, adhiriéndose á ella; y habiendo dispuesto el Juzgado que se substanciase la excepción pendiente, sobre lo cual no se oyó á dicho Procurador, sino solamente á la actora, se dictó auto, en tres de Mayo, declarando no probada tal excepción, y disponiendo que el demandado Icaza contestase la demanda dentro del término de veinticuatro horas; providencia que aparece consentida por todas las partes.

Más tarde, esto es, el veinte del propio mes de Mayo, la demandante pidió se declarase confeso al demandado por haber transcurrido el término dentro del cual debió contestar; y resuelto así, por providencia de nueve de Junio, ésta se reformó, á petición del demandado, por la de veinticinco de Julio, en la cual se dispuso abrir la causa á prueba por el término de veinte días comunes sin que, respecto á tal determinación, se hubiese hecho por los interesados reclamación ni observación alguna.

Así permaneció el negocio, hasta el cinco de Diciembre, en que, habiendo el Procurador solicitado su continuación, á causa de estar vencido con exceso el término probatorio, el Juez proveyó, en ocho de ese mes, anulando toda la actuación, por cuanto ni la autoridad judicial era competente para conocer del asunto, ni se había seguido la tramitación prevenida por el artículo 883 del Código Fiscal.

Pidió el Procurador del Estado la revocatoria de ese fallo, que le fué concedida por auto de diez de Enero de mil ochocientos ochenta y tres, aduciendo como razón bastante para ello, la doctrina general de que es atribución constitucional y exclusiva del Poder Judicial, conocer de los asuntos contenciosos que se refieran á bienes de la Unión, y que lo dispuesto en los artículos *883 y 960 del Código Fiscal, que sirvieron de fundamento* á la providencia reclamada, se refieren *á denuncios no contenciosos.*

Poco antes de esto, H. de Icaza presentó un escrito de fecha trece de Diciembre de mil ochocientos ochenta y dos, manifestando que, *en los primeros días de Agosto*, había dirigido otro escrito al Juzgado, solicitando revocatoria del mencionado auto de nueve de Junio, por el cual se le declaró confeso, y que se le concediese el recurso de apelación en el caso de que tal auto no fuese anulado; escrito que se proveyó con fecha diez de Enero de mil ochocientos ochenta y tres, en el sentido de que, por no haberse pedido en tiempo la revocatoria del citado auto de veinticinco de Julio, no había de qué conceder aquel recurso.

Notificados á las partes, tanto ese auto como el otro de la misma fecha, en que se revocó, á petición del Procurador del Estado, el de ocho de Diciembre, por el cual, como yá se ha visto, se anula la actuación, el mismo funcionario interpuso apelación, que en ambos efectos le fué concedida para ante la Suprema Corte Federal, por decreto de treinta del último de los citados meses, sin determinarse por el Juez ni por el apelante, á cuál de las dos providencias notificadas se refería el recurso.

En nueve de Diciembre de mil ochocientos ochenta y dos, es decir, antes de haberse hecho la reclamación y concedídose el recurso que se menciona en los dos párrafos anteriores, la demandante, fundándose en el artículo 485 del Código Judicial de 1873, vigente entonces, pidió se agregase al expediente la resolución de la Secretaría de Hacienda de la Unión, fecha diez y ocho de Septiembre de mil ochocientos ochenta y dos, inserta en el número 739 de la *Gaceta de Panamá*, por la cual se adjudicaron á la demandante misma, como terrenos baldíos, exactamente los mismos que ella había denunciado como un bien oculto de propiedad de la República, dando así, por consiguiente, un giro enteramente distinto á su primitiva pretensión.

Para conocer del expresado recurso se remitieron los autos originales á la Corte, con fecha veintinueve de Marzo de mil ochocientos ochenta y tres, sin que aparezca haberse dictado en ellos providencia alguna, hasta el diez y ocho de Julio del presente año en que, por haberlos encontrado el Secretario en dicho estado, confundidos entre algunos otros expedientes, también paralizados, se pusieron al repartimiento.

Seguida en esta segunda instancia la tramitación que la ley previene, y puesto el asunto en estado de dictar el correspondiente fallo, se tiene previamente en consideración:

1.° Que aunque el señor Procurador general, en su respuesta de dos del presente mes, opina *que no puede accederse á lo pedido por el señor Icaza en su memorial de fecha trece de Diciembre de mil ochocientos ochenta y dos, en que solicita se le tenga como apelante de un auto que fué notificado á las partes el nueve de Junio del mismo año, es decir, más de seis meses antes, y que no obsta para tal negativa la afirmación del peticionario de haber dirigido otro escrito al Juez, en los primeros días del mes de Agosto, interponiendo la apelación, porque en dicho tiempo tampoco era admisible el recurso, por estar ejecutoriado el auto que con él se impugnaba, y por constar, además, que Buenaventura Asprilla, apoderado de Icaza, pidió en tiempo la revocatoria del auto de nueve de Junio, solicitud que fué resuelta en el sentido de reformar el auto reclamado, y reforma que no fué impugnada por el interesado, lo que prueba su aquiescencia á lo resuelto por el Juez*, la Corte, aunque estima tal observación estrictamente arreglada á la ley y al mérito de lo actuado, cree que no es el caso de ocuparse de la confirmación ó revocatoria del referido auto, por las razones que se verán á continuación.

2.° Que Juana Rita Guerrero de Mata no tuvo ningún derecho para demandar en juicio ordinario el terreno motivo de esta actuación, aunque hubiera sido indebidamente ocupado ó disputado por un tercero, porque siendo los bienes denominados *ocultos* de propiedad de la Nación, ésta no le confirió poder ni autorización alguna para que gestionara en su nombre.

3.° Que así lo reconoció la misma demandante, una vez que, sin haberse decidido la demanda promovida por ella, ocurrió al Gobierno en solicitud de los terrenos en cuestión, obteniéndolos bajo un título distinto, lo que demuestra que, á su propio juicio, carecía de acción para reclamarlos en el sentido en que lo hizo.

4.° Que si bien es verdad que, conforme á las disposiciones comunes del derecho, está atribuído al Poder judicial el conocimiento de los asuntos contenciosos en que esté interesada la Nación, esto se debe observar cuando no haya disposiciones especiales en determinados asuntos que prevengan lo contrario; y en el caso presente, el artículo 967 del Código Fiscal establece con toda claridad no solamente la manera de intentar, y ante quién, sino la de substanciar los denuncios de bienes ocultos, nada de lo cual se ha observado en este asunto.

5.° Que en los casos como el de que se trata, la controversia no tiene propiamente lugar sino cuando, como lo dispone la circular de la Secretaría de Hacienda de 15 de Octubre de 1884, número 94, de la Sección 3.ª, *los colindantes ó individuos que se crean con derecho sobre los terrenos que se solicitan reclamaren durante el tiempo en que deben permanecer fijados los edictos*, y aun entonces no es á las autoridades judiciales á quienes corresponde decidir, pues como lo dice la misma circular, *estas reclamaciones se resolverán "administrativamente" en vista de los títulos legales que se exhiban*; y

6.° Que lo anteriormente expuesto demuestra con absoluta claridad que en este negocio se ha incurrido en la nulidad proveniente de incompetencia de jurisdicción, por haberse introducido el denuncio ante funcionarios á quienes no correspondía conocer de él, y haber éstos efectivamente conocido.

Por lo tanto, la Corte Suprema de la Nación, de conformidad en lo substancial con el concepto del señor Procurador general, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara nula y de ningún valor ni efecto toda la actuación, debiendo ser la mitad de las costas de cargo del Juez de la primera instancia, José M. Martín, que ha dado lugar á la nulidad insanable de incompetencia de jurisdición de que se acaba de hablar, y una cuarta parte de cargo de la demandante, al tenor de lo dispuesto en el inciso 2.° del artículo 1,491 del Código Judicial vigente, puesto que el encargado del Ministerio público se adhirió, según consta á fojas 16, al denuncio ó demanda propuesta por aquélla.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En 26 de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Agosto veintisiete de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Juez del Circuíto de Yarumal, en el extinguido Estado de Antioquia, dictó, con fecha veintiocho de Abril de mil ochocientos ochenta y dos, auto de ejecución en favor de Ulpiana Ortiz de R. y contra los poseedores de varias fincas hipotecadas en seguridad de un crédito de la ejecutante contra Aureliano Estrada.

Entre las fincas perseguidas por la ejecutante figuran dos casas situadas en el Distrito municipal de Ituango, deslindadas así: la primera linda por el frente, una calle de por medio—sin nombre conocido—con casa y solar de Félix Vera; por el un costado casa y solar de Celestino Martínez; por el otro, una calle sin nombre de por medio, con casa y solar de Tomás Barrera, y un solar del mismo Presbítero, y por la parte de atrás, con casa y solar de Lucrecia Ramírez. La otra linda, por el frente, una calle sin nombre, de por medio con una casa y solar perteneciente á Joaquín, Ventura y Serapio Gutiérrez; por el un costado proindiviso perteneciente al mismo Presbítero Madrid; por el otro, una calle de por medio, con casa y solar de Pedro León Gutiérrez, y por la parte de atrás, con casa y solar de Petrona Correa.

Estas casas eran propiedad del Presbítero Justiniano Madrid, con cuyo consentimiento se hipotecaron á Ulpiana Ortiz, según consta en la escritura otorgada con fecha diez y ocho de Junio de mil ochocientos setenta y siete, que se registró y anotó en el Circuíto de Yarumal con fecha veinte de los indicados mes y año.

Notificado el auto ejecutivo á Froilán Pérez, designado como poseedor de la casa primeramente deslindada, dijo no ser dueño de ella; y bajo juramento expuso haber oído decir que la casa pertenecía al Gobierno nacional, ó al Presbítero Justiniano Madrid.

Félix Pérez, indicado como poseedor de la otra casa deslindada, dijo, cuando se le notificó el auto ejecutivo, ser mero tenedor de ella como arrendatario, y que el poseedor era Pedro María Gutiérrez. Notificado éste del auto, manifestó que reconocía por suya la finca de que se trata.

Adelantada la ejecución, se presentó Pedro María Gutiérrez como tercerista respecto de la casa de que acaba de hablarse, y fundó su oposición en estos documentos:

1.° La copia de la diligencia de remate de la casa, verificado por Aurelio Botero ante el Colector de Hacienda del Distrito de Ituango, el veintiuno de Agosto de mil ochocientos setenta y siete; remate que se hizo para hecer efectivo el empréstito nacional que se había adjudicado al Presbítero Justiniano Madrid en la guerra de 1876 y 1877.

2.° La escritura de venta de la misma casa, otorgada en el Distrito de Ituango el trece de Julio de mil ochocientos setenta y ocho por el rematador Aureliano Botero á Pedro María Gutiérrez; y

3.° Una información sumaria que comprueba la identidad de la casa á que se refieren la escritura de venta y la diligencia de remate, y la embargada en la ejecución.

El tercerista denunció el pleito á la Nación, denuncia que le fué admitida por auto de seis de Septiembre de mil ochocientos ochenta y dos, y dió por resultado que el Agente del Ministerio público interviniera como parte en el juicio de tercería.

El mismo Agente del Ministerio público hizo tercería respecto de la otra casa de que se ha hablado, habitada por Froilán Pérez, fundándose esta tercería en una diligencia suscrita por el Colector de Hacienda del Distrito municipal de Ituango, cuya parte conducente dice así;

"En el Distrito de Ituango, á veintiuno de Agosto de mil ochocienios setenta y siete, como á la una de la tarde, siendo el día y hora señalados para sacar á pregón y remate las fincas raíces embargadas al Presbítero Justiniano Madrid, como deudor de empréstito nacional, se procedió á verificarlo, anunciando el hecho por medio de un redoble de tambor y por las claras é inteligibles voces del pregonero Cruz Cifuentes.....
.....No habiendo habido quien hiciera postura á las demás fincas, se adjudicó al Gobierno de la Unión una casa de tapia y teja, con dos solares, que está ubicada en este Distrito, por la mitad de su avalúo, y que fué el de seiscientos pesos, por lo que fué adjudicada en la suma de trescientos pesos. Expídase la copia al interesado y dése cuenta de la adjudicación que se hizo al Gobierno de la Unión. Con lo cual se concluyó esta diligencia; que firman el señor Colector de Hacienda del Distrito y el rematador. La casa adjudicada al Gobierno de la Unión está bajo estos linderos: por el Oriente, con casa de Tomás María Barrera; por el Occidente, con solar de Celestino Martínez; por el Norte, con solar de Félix Vera, y por el Sur, con casa y solar de Lucrecia Ramírez."

Adelantados separadamente los dos expresados juicios de tercería, fueron decididos en dos sentencias dictadas en una misma fecha—en seis de Febrero de mil ochocientos ochenta y tres,—y en cada una de ellas el Juez dispuso que, si no se interponía el recurso de apelación, se consultara la sentencia con esta Superioridad. El tercerista Gutiérrez interpuso dicho recurso contra la sentencia dictada en la tercería promovida por él; pero como luégo desistió de la apelación, dichas sentencias han venido en consulta á esta Corte, en donde, con el fin de resolver las tercerías en una misma sentencia, se ha decretado su acumulación, ordenada por el artículo 214 de la ley 57, y que debió decretar el Juez de la primera instancia, de conformidad con el artículo 1,121 del Código Judicial, edición de 1887.

Siendo llegado el caso de fallar, la Corte, para resolver, considera:

1.° En la sentencia del Juez *á quo*, relativa á la tercería introducida por Pedro M. Gutiérrez, se lee:

"Por la ley nacional número 38 de 19 de Julio de 1882, el Congreso colombiano decretó que las fincas raíces que hubieran sido rematadas para pago de contribuciones de guerra, les fueran devueltas á sus primitivos dueños, y que los actuales poseedores hicieran ante el Gobierno sus reclamaciones, según se determina en aquella ley."

2.° En la sentencia relativa á la tercería que introdujo el Agente del Ministerio público, dice el Juez:

"Por la ley 38 de 19 de Julio último, el Congreso de Colombia se desprendió de la propiedad que pudiera tener el Fisco Nacional en las fincas raíces adjudicadas por razón de empréstitos ó expropiaciones, y dispuso que le fueran devueltas á sus

dueños. Las disposiciones de tal ley son concluyentes, y como á ellas debe atenderse, administrando justicia en nombre de los Estados Unidos de Colombia y por autoridad de la ley, se declara que la Nación no tiene mejor derecho á la casa mencionada sobre que ha rodado el presente juicio de tercería, y que, por consiguiente, lo tiene la ejecutante, señora Ulpiana Ortiz de R., razón por la cual debe continuar la ejecución sobre dicha finca."

3.° La ley 38 de 1882 en que funda el Juez ambas sentencias, establece una diferencia substancial, según que las fincas sacadas á remate para hacer efectivo un empréstito se adjudicaran al Gobierno mismo, á falta de rematador, ó se remataran por tercera persona. Respecto de las primeras se ordena que lean devueltas á sus dueños, de manera que la ley reconoce que sa Nación no tiene sobre ellas derecho alguno, y en este caso se encuentra la casa á que se refiere la tercería introducida por el Agente del Ministerio público. No sucede esto mismo con las fincas que hayan sido rematadas, porque el artículo 2.° de dicha ley dispone que el Poder Ejecutivo éntre en arreglos con los poseedores, con el objeto de devolver las fincas á sus dueños; y el artículo 8.° de la misma ley dice que "si no fuere posible al Poder Ejecutivo concluír equitativamente los arreglos que se ordenan por el artículo 2.°, haga promover los correspondientes juicios de expropiación, para lo cual se declara que es causa de necesidad pública la de devolver las fincas de que se trata á sus dueños." Es, pues, fuera de duda que mientras no se verifiquen los arreglos con los poseedores de las fincas, ó no se decida el correspondiente juicio de expropiación, no pueden devolverse á su dueño las fincas raíces que se hayan rematado, pues la mencionada ley 38 reconoce, como acaba de verse, en los artículos 2.° y 8.°, derecho de dominio por parte de los rematadores sobre las fincas rematadas.

4.° Como el veinte de Junio de mil ochocientos setenta y siete se anotó la escritura de hipoteca de las fincas del Presbítero Madrid á favor de Ulpiana Ortiz; y como tanto la adjudicación hecha al Gobierno de la casa sobre que versa la tercería del Agente del Ministerio público, como el remate de la otra casa á que Pedro María Gutiérrez hace tercería, y que hubo de Aureliano Botero, se verificaron el veintiuno de Agosto del mismo año, es claro que el Gobierno se adjudicó aquélla y el rematador adquirió ésta con el gravamen que las afectaba, por lo cual el derecho de dominio que Gutiérrez alega respecto de la casa que compró á Botero y la adjudicación hecha al Gobierno, en nada desvirtúan la hipoteca constituída, ni enervan la acción real ejercitada por la ejecutante, de conformidad con el artículo 2,152 del Código Civil.

A mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se resuelve:

1.° Que no se ha probado que la Nación tenga derecho de dominio sobre la casa á que se ha hecho tercería excluyente por el representante del Ministerio público, y que, aunque la adjudicación que de esta casa se hizo al Gobierno constituyera título de propiedad á su favor, no por ello podría excluirse de la ejecución la finca perseguida.

2.° Que aun cuando Pedro M. Gutiérrez tenga sobre la casa á que se refiere su tercería el derecho de dominio que alega, no por ello puede sustraese dicha casa de la ejecución que en ejercicio de la acción real ha promovido Ulpiana Ortiz.

3.° Que, en consecuencia, debe continuar la ejecución de que se trata respecto de las dos casas por las cuales se ha hecho tercería excluyente y de que se habla en esta sentencia.

Quedan así reformadas las dos sentencias consultadas.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del veintisiete de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, se publicó la sentencia que precede.

Ramón Guerra A., Secretario.

En veintinueve de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué la sentencia anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Se notificó por edicto.

Ramón Guerra A., Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Agosto veintitrés de mil ochocientos ochenta y siete.

El Síndico municipal del Distrito de Bogotá demandó al señor Dimas Cruz para que, con audiencia de éste, se decretase la expropiación de la zona de tierra necesaria para poner en comunicación la carrera cuarta con la carrera quinta, al Occidente de la ciudad. Se surtió el juicio y se falló por el Juez 4.° del Circuito de Bogotá, con fecha veintisiete de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis. Apeló de la sentencia la parte demandada, se le concedió el recurso para ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, y por haberse declarado éste incompetente, se remitió el expediente á la Corte.

Se substanció el recurso y cuando se encontraba en estado de fallar, se expidió la ley 143 de cinco de los corrientes, que se publicó en el *Diario Oficial* número 7,133.

En los artículos 1.° y 8.° (ordinal nono), se determinó que la Corte no conozca de juicios de expropiación, sino cuando en ellos tengan interés los Gobiernos Nacional ó de los Departamentos; y como en este juicio aparece interesado únicamente el Distrito de Bogotá, es al Tribunal de Cundinamarca al que corresponde dirimir el recurso intentado.

Por las razones expuestas, que están de acuerdo con la vista del señor Procurador, se resuelve: remítase el expediente al Tribunal del Distrito Judicial de Cundinamarca, en la Sala de lo Civil, para que decida el punto que ha motivado el recurso de que se ha hecho mérito.

Notifíquese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la misma fecha notifiqué este auto al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

En veinticuatro de los mismos se notificó por edicto.

Guerra A., Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Agosto veintisiete de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—En siete de Junio de mil ochocientos ochenta y cuatro denunció Juan Bautista Botero Arango, ante el Prefecto del Departamento del Sur, en el Estado del Tolima, una mina de aluvión, á que dió el nombre de "La Apariencia," situada en el punto de "La Manga" y comprendida dentro de estos linderos: "De la boca de la quebrada Sardinata en la banda Occidental del río Magdalena, punto de la cuelga, aguas arriba de dicho río por uno y otro lado de sus riberas, hasta la boca de la quebrada llamada Río-frío, límite entre Neiva y Campoalegre." Prestado por el denunciante el correspondiente juramento y pagado el derecho de título, admitió el Prefecto el denuncio, y mandó fijar carteles por sesenta días y emplazar por edicto á los que se creyeran con derecho á la mina mencionada. Dentro de ese término ocurrió al Prefecto Genaro Jordán, Administrador de la hacienda de "La Manga," haciendo oposición al denuncio de Botero Arango, y fundándola en que éste había hecho cateos y otros trabajos en la mina sin conocimiento y consentimiento de los dueños del terreno y sin afianzar la indemnización de perjuicios. Con tal motivo suspendió el Prefecto las diligencias, y, pasadas al Juez del Circuito para lo de su cargo, declaró éste inadmisible la oposición, por haberla hecho Jordán sin poder de los dueños del terreno, y ordenó que se devolvieran las diligeacias al Prefecto para que le diera curso. Jordán pidió revocatoria de ese auto, é interpuso en subsidio recurso de apelación, y negada la primera se le otorgó el último en el efecto devolutivo para ante el Tribunal del Estado, quien confirmó el auto.

Por consecuencia de la guerra y luégo por otras causas, estuvo el expediente en suspenso hasta el catorce de Abril de mil ochocientos ochenta y seis, en que el apoderado de Botero Arango pidió se pasara á la Secretaría de Hacienda del Estado, para que mandara dar, con arreglo á la ley, la posesión de la mina; y aunque José E. Ucrós, uno de los dueños de la hacienda de "La Manga," fundándose en que Botero Arango no había ejercitado en tiempo sus derechos, solicitó en diez y nueve de Mayo que se declarara desierto el denuncio, se resolvió por dicha Secretaría, en diez y seis de Junio del mismo año, que no podía accederse á lo solicitado, por cuanto el término legal no estaba en efecto vencido.

Posteriormente ocurrió el apoderado de Botero Arango á la misma Oficina, pidiendo que se comisionara al Alcalde respectivo para darle la posesión de la mina de "La Apariencia," con prohibición, dijo, de que se admitiera oposición, por haber transcurrido el término en que pudiera hacerse; y si bien accedió á lo primero el señor Secretario de Hacienda, no así á lo segundo, dando por razón que lo hecho hasta entonces se había fundado en disposiciones reemplazadas por el Código de minas, y que éste debía aplicarse en su parte procesal, á los denuncios pendientes desde el estado en que estuvieran.

Conferida la comisión dicha al Alcalde de Neiva, señaló éste el veintiocho de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis para principiar la diligencia, y en ese día concurrió al acto Ucrós, y dijo que se oponía á la posesión que se le iba á dar al apoderado de Botero Arango, en uso del derecho que le concedía el artículo 68 del Código de Minas, y, además, por haber declarado el Tribunal desierta la oposición que hizo el apoderado de Botero Arango á la posesión que á Ucrós se le mandó dar de parte de dicha mina, en virtud de denuncio que también hizo de ella. Suspendióse por esto la diligencia, y remitido el expediente al señor Secretario de Hacienda, lo mandó pasar éste al Juez 1.° del Circuíto, á quien tocaba decidir la oposición hecha por Ucrós. Este formalizó su oposición por medio de apoderado, en cuatro de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, y pidió que se considerara como demandante á Botero Arango, y el Juez declaró que, no refiriéndose lo resuelto por el Tribunal á la mina de "La Apariencia," sino á la que con el nombre de "Vega de Suárez" había denunciado Ucrós, y siendo por regla general actor en el juicio el opositor, cuando no se encuentra en alguno de los casos de excepción establecidos por el Código de Minas, Ucrós era el llamado á ser actor en dicho juicio; y estimando la oposición hecha por él, como una demanda en forma, ordenó que se le notificara á Botero Arango por medio de un despacho. Ese auto, dictado en once de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, le fué notificado al apoderado de Ucrós el doce del mismo mes, y como al día siguiente ocurrió al Juzgado el doctor Lucas Tobar, apoderado general de Botero Arango, pidiendo que se le notificara la demanda de Ucrós, y el Juez accedió á su solicitud en auto de diez y siete de dicho mes, el apoderado de Ucrós interpuso el día diez y ocho recurso de apelación de ese último auto; pero es de advertir que el mismo apoderado pidió en quince de Noviembre revocatoria, y en subsidio recurso de apelación, del auto de once del mismo mes en que se le declaró actor en la oposición á la posesión que iba á darse á Botero Arango, de la mina de "La Apariencia," y que negada la revocatoria otorgó el Juez apelación en ambos efectos, para ante el Tribunal Superior del Departamento, el cual se declaró incompetente para conocer del recurso por estarle yá atribuído á la Corte Suprema el conocimiento en última instancia de los negocios contenciosos referentes á bienes, rentas ó cualesquiera otros derechos de la Hacienda de la Nación. Por consecuencia de esto, el Juez de primera instancia otorgó el recurso para ante esta Superioridad y le remitió el expediente.

Lo dicho se refiere á la denuncia de la mina de "La Apariencia;" pero de notarse es que en diez y seis de Febrero de mil ochocientos ochenta y seis, denunció Genaro Jordán, para José E. Ucrós, una mina denominada "Vega de Suárez," por los siguientes linderos: "Partiendo de la cabecera de la "Vega de Suárez" en el punto llamado "El Carrasposito," en el río *Magdalena, río abajo por la banda* Occidental, hasta el sitio denominado "Peñón Blanco;" de allí por toda la orilla del peñón que separa la Vega propiamente dicha de los terrenos de Sabana, y que están divididos por una cerca de guaduas hacia el Occidente, hasta volver al 'Carrasposito,' punto de partida."

El denuncio fué presentado al Secretario de Hacienda del Estado del Tolima, quien dispuso que el Alcalde de Guagua le diera á Ucrós, con las formalidades legales, posesión de la mina, y el doctor Lucas Tobar, apoderado de Botero Arango, ocurrió á la misma Oficina oponiéndose al denuncio, dando esto lugar á que el expediente se pasara al Juez primero del Circuíto, quien admitió la oposición, por auto de tres de Mayo de mil ochocientos ochenta y seis, y declaró que el opositor debía asumir el carácter de actor por no haber comprobado que le comprendiera alguna de las excepciones establecidas por el Código de Minas. Notificado ese auto al doctor Tobar, pidió revocatoria de él é interpuso subsidiariamente recurso de apelación, fundándose en que de autos aparecía el denuncio de la mina de "La Apariencia," hecha por Botoro Arango, en que, en la demarcación de esa mina, está comprendida la de la "Vega de Suárez," y en que siendo Botero Arango primer descubridor, se hallaba en el caso 3.° del artículo 73 del Código citado. En fuerza de estas razones, y traídos á la vista los antecedentes, declaró el Juez, por auto de diez de Mayo, que, no debiendo Botero asumir el papel de actor, el escrito en que el apoderado formalizó su oposición debía considerarse como mera impugnación, y ponerse ésta en noticia de Ucrós, para que formalizara su demanda dentro de seis días. El apoderado del último apeló de esa determinación, y el Juez concedió el recurso en el efecto devolutivo, por considerar el auto de pura substanción.

Así las cosas, el apoderado de Botero Arango propuso demanda oponiéndose á la posesión que se le mandó dar á Ucrós de la mina nombrada "Vega de Suárez," y, por auto de quince de Mayo de mil ochocientos ochenta seis, dispuso el Juez que se le devolviera, por haberla presentado fuera de tiempo. De ese nuevo auto pidió dicho apoderado revocatoria, y en defecto de ésta, interpuso recurso de apelación, y el Juez negó una y otra cosa.

El apoderado de Ucrós formalizó por su parte la demanda expresando que lo hacía, no porque su poderdante debiera ser actor en el juicio, ni porque diera por terminada la apelación que interpuso del auto de diez de Mayo, sino por haberlo ordenado así el Juez, y con copia de lo actuado ocurrió al Tribunal en prosecución del recurso de apelación pendiente; pero como éste se le concedió sólo en efecto devolutivo, lo interpuso de hecho en el suspensivo.

El apoderado de Botero Arango ocurrió también de hecho al Tribunal para que éste le otorgara en ambos efectos la apelación que interpuso, y le fué negado por el Juez *á quo* del auto de quince de Mayo; y substanciados los dos recursos de hecho, fueron admitidos por el Tribunal del Estado en los efectos pedidos. Preparados para resolver sobre lo principal, el Tribunal Superior confirmó el auto de quince de Mayo, apelado por Tobar, y revocando el de diez del mismo mes, apelado por el apoderado de Ucrós, dispuso:

"1.° Que no es lícito darle curso á la demanda de oposición hecha por Lucas Tobar, como apoderado de Juan Bautista Botero Arango, respecto al denuncio y posesión de la mina de oro corrido denominada "Vega de Suárez," ubicada en la hacienda de "La Manga," jurisdicción de la Aldea de Guagua;

"2.° Declarar, en consecuencia, desierta dicha oposición, por no haberla formalizado oportunamente ante el Juez primero de este Circuíto; y

"3.° Ordenar que se devuelvan los autos por el Juez *á quo* y por conducto de S. Señoría el Secretario de Hacienda del Estado, al Alcalde de Guagua, para que le dé posesión legal á José E. Ucrós de la expresada mina de aluvión denominada "La Manga" ó "Vega de Suárez."

Notificada esa sentencia y devuelto el expediente al Juzgado de primera instancia, el apoderado de Ucrós ocurrió al señor Secretario de Hacienda del Departameeto, solicitando la posesión de la mina "Vega de Suárez," de conformidad con lo resuelto por el Tribunal, y, accediéndose á lo pedido, se comisionó para la práctica de la diligencia al Alcalde de Guagua, quien procedió á dar la posesión, y la dió en efecto á Ucrós, el veinte de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, no obstante la oposición que hicieron Roberto Cuenca y Lucas Tobar, el pri-

mero en su propio nombre y el segundo como apoderado de Botero Arango.

Devuelto el expediente á la Secretaría de Hacienda, se declaró por ésta, nula la posesión dada á Ucrós, por juzgarla contraria á lo preceptuado por el artículo 70 del Código de Minas, y se dispuso que el Alcalde de Guagua, teniendo en cuenta lo dispuesto en los Capítulos 5.° y 6.° del mismo Código, señalara nuevo día para dar la posesión. De esa resolución pidió revocatoria el apoderado de Ucrós, y el señor Secretario de Hacienda insistió en ella, entre otras razones, por no haber estado en la facultad del Alcalde comisionado decidir si Cuenca y Botero Arango tenían derecho para oponerse, y si había ó nó cosa juzgada, por ser ésta de la competencia del Poder Judicial, y porque disponiendo el artículo 70 del Código de Minas que en caso de oposición se suspenda la diligencia, y se ordene al opositor que formalice su oposición ante la autoridad competente, así debió hacerse.

El Alcalde comisionado señaló el cinco de Noviembre del año próximo pasado para practicar la diligencia, é iniciada que fué, Tobar y Cuenca renovaron su oposición, fundándola el primero en que Botero Arango fué descubridor de la mina de "La Apariencia," y quien la denunció desde el año de 1884, y en que hace parte de esa mina la de la "Vega de Suárez," denunciada por Genaro Jordán, en favor de Ucrós, en el año de 1886; y el segundo, en que él era descubridor de mejor derecho, de la última mina mencionada y dió el aviso primero que Ucrós. Suspendióse, por lo tanto, la diligencia de posesión, y ordenóse que los opositores formalizasen su oposición ante el Juez competente, dentro del término que señala el artículo 69 del Código de Minas.

Tobar, como apoderado de Botero Arango, formalizó, en efecto, su oposición ante el Juez primero del Circuíto, y pidió que se tuviera como una impugnación del denuncio por Ucrós, á quien correspondía poner la demanda, y por auto de diez y siete de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis declaró dicho Juez, fundándose en lo dispuesto en el artículo 73 de la ley 45 de 1884, que José E. Ucrós debía ser el actor en el juicio, y que se le diera traslado del escrito de oposición presentado por el apoderado de Botero Arango para que dentro de seis días formalizara su demanda.

Notificado el auto á Uldarico Scarpetta, reputándolo apoderado general de José E. Ucrós, dijo que aunque no ha gestionado con tal carácter en estos asuntos, sino como apoderado para cierta clase de negocios, interponía recurso de apelación, y el Juez se la concedió en ambos efectos, para ante el Tribunal Superior del Departamento, teniendo, sin duda, en cuenta que el poder especial que obra en autos, es bastante para que el apoderado intervenga en todo lo relativo al juicio de que se trata.

Pasado el expediente al Tribunal, se declaró éste incompetente para conocer del recurso, razón por la cual lo otorgó el Juez de la primera instancia para ante esta Suprema Corte, por ser la llamada á decidirlo.

Recibidos y repartidos á distintos Magistrados los dos asuntos de que se trata, es decir, el relativo al denuncio de la mina de "La Apariencia" hecha por Botero Arango, y el de la denominada "Vega de Suárez," dado por Jordán á favor de Ucrós, el señor Procurador general, á cuyo estudio se pasaron, pidió acumulación, y la Corte la decretó en auto dictado en nueve de Mayo último.

Los autos apelados fueron, como se ha visto, los de once y diez y ocho de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, en los cuales declaró el Juez primero del Circuíto de Neiva que á José E. Ucrós corresponde hacer las veces de actor en el juicio en que haya de ventilarse á cuál de los dos denunciantes debe adjudicarse la mina á que uno y otro pretenden tener derecho; y para resolver ese punto, considera la Corte:

"1.° Que es incontrovertible que Botero Arango descubrió y denunció, desde el 7 de Julio de 1884, la mina á que dió el nombre de "La Apariencia," y que Genaro Jordán denunció para Ucrós, en 16 de Febrero de 1886, la denominada "Vega de Suárez," es decir, un año y siete meses después de denunciada la primera;

"2.° Que ambas partes están de acuerdo en que la mina "Vega de Suárez" está comprendida dentro de los límites de la de "La Apariencia" y hace, en consecuencia, parte de ésta;

"3.° Que siendo asi, el primitivo descubridor y denunciante de la mina íntegra denominada "La Apariencia," fué Botero Arango;

"4.° Que Ucrós se opuso á la posesión que de la mina iba á darse á Botero Arango, y por regla general el opositor debe ser actor en el juicio á que dé lugar su oposición, porque así lo disponía el artículo 73 del Código de Minas del Tolima, vigente cuando se dictaron los autos apelados, y lo dispone en el día el artículo 390 del Código de Minas del extinguido Estado de Antioquia, adoptado para la Nación, por la ley 38 del año en curso;

"5.° Que, sin embargo de que uno y otro artículo establecen casos de excepción, Ucrós no ha comprobado que se encuentre en ninguno de ellos, y se halla, por lo tanto, en el caso de la regla general, por haberse opuesto á la posesión que de la mina de "La Apariencia" iba á darse á Botero Arango;

"6.° Que aunque éste se opuso también á la posesión pedida por Ucrós de la mina denominada "Vega de Suárez," le favorece la tercera excepción establecida por el artículo 73 del Código de Minas del Tolima, que es la segunda del artículo 390 del Código Nacional, según la cual el opositor no está obligado á ser actor cuando es descubridor anterior de la mina, y lo comprueba, como lo ha hecho dicho Botero Arango, con el aviso del descubrimiento, publicado en el número 608 de la *Gaceta del Tolima* que obra en los autos; y

"7.° Que á esto no se opone el auto en que el Tribunal del Departamento declaró desierta la oposición hecha por Botero Arango, ya porque esa declaratoria se refiere, como lo observó el Juez *á quo* en su auto de once de Noviembre de mil ochocientas ochenta y seis, á la mina "Vega de Suárez," y no á la de "La Apariencia," y ya porque siendo indudable que el actor en el juicio relativo á ésta, que comprende aquélla, debe ser Ucrós, lo que se diga del todo debe decirse de la parte."

Por estas consideraciones, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma, de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador general, los autos de once y diez y ocho de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, en que el Juez primero del Circuíto de Neiva declaró que José E. Ucrós, debe ser el actor en el juicio relativo á la adjudicación de la mina de "La Apariencia," de la cual hace parte la de la "Vega de Suárez."

Notifíquese esta resolución, déjese copia de ella, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvanse los autos al Juez de la primera instancia.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintinueve de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Se notificó por edicto.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintiséis de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—La presente actuación fué motivada á virtud de denuncia dada por el doctor Simón Araújo, con el carácter de Representante al Congreso nacional por el Estado soberano de Cundinamarca, expresando que se le había perseguido en el mes de Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco para reducirlo á prisión, no obstante estar en el goce de la inmunidad constitucional; y que el Comisario por el Territorio nacional de San Martín, doctor Emiliano Restrepo E., había sido apresado.

En lo tocante á esta denuncia, con relación al doctor Araújo, yá se manifestó en el auto del veinte de Junio del corriente,—que se dá por reproducido aquí,—que del expediente no resulta prueba ni indicio alguno que corrobore tal denuncia; y es por lo tanto innecesario hacer más observaciones sobre el particular.

Queda, pues, únicamente en pie lo relativo á la prisión del doctor Emiliano Restrepo E., la que efectivamente tuvo lugar

en el tiempo mencionado y de orden del que entonces era Secretario de Guerra; pero no aparece comprobado el carácter público de que el doctor Restrepo estaba investido, según él lo afirma.

Sin entrar la Corte á calificar el hecho, ni á establecer si hubo ó nó delito, aún dando por sentado que el doctor Restrepo fuera realmente Comisario ó Miembro del Congreso en mil ochocientos ochenta y cinco; sin entrar á apreciar si en su carácter de Comisario gozaba ó nó de inmunidad, según la Constitución de 1863; sin investigar tampoco si es ó nó llegado el caso del artículo 118 del Código Penal nacional que regía anteriormente, por haberse impedido ó nó á un Miembro del Congreso la concurrencia á las sesiones;—es lo cierto que, como muy bien lo observa el señor Procurador, la Corte no tiene atribución para conocer en las causas que se sigan contra los Ministros de Estado, llamados antes Secretarios de Estado, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, sino por el tanto de culpa á que hubiere lugar conforme al artículo 97 de la Constitución actual, es decir, si merecen otra pena distinta que la de destitución del empleo ó la pérdida de los derechos políticos; pero procediendo siempre el fallo del Senado.

Por consiguiente, y no pudiendo principiarse ante la Corte esta clase de juicios de responsabilidad, ella es absolutamente incompetente para seguir conociendo en el estado que actualmente tiene el sumario; y así lo declara, ordenando que se pase la actuación á la Cámara de Representantes para los efectos á que haya lugar.

Notifíquese al señor Procurador general y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En 27 de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintiséis de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete.

A virtud de denuncia dada por los señores S. A. Galofre, José F. Quesada, R. Collante y Bolívar I. Franco, ante el Juez 2.° de la Provincia de Barranquilla, el 6 de Septiembre de 1886, contra las autoridades que habían reclutado gente en las madrugadas de los días 23, 24 y 25 del mes de Agosto del mismo año, el Juez practicó todas las diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos denunciados y á la averiguación de los que pudieran aparecer responsables, y, por auto de veinte de Enero último, ordenó que se le pasara el expediente al Tribunal Superior de Justicia, por considerar que el Gobernador del Estado en aquella época podía estar complicado, en cuyo caso no era competente para conocer de la causa. El Tribunal juzgó que debía corresponderle el conocimiento á la Corte, según lo preceptuado en el inciso 4.° artículo 21 de la ley 61 de 1886, y ordenó que se le pasara el expediente, por auto de diez y siete de Marzo próximo pasado.

La Corte para resolver considera:

De autos aparece que en las noches á que se refiere la denuncia se cogieron varios hombres por la fuerza y se les obligó á ir á la cárcel, al principio, y después á hacer parte de la Guardia nacional. Varias de las personas que estuvieron aprehendiendo gente, afirman que obraban por orden del Alcalde, y éste, que procedía obedeciendo órdenes superiores.

El Gobernador de la Provincia de Barranquilla, en nota marcada con el número 382 de 12 de Septiembre de 1883, le dice al Juez instructor, entre otras cosas, lo siguiente:

"El Poder Ejecutivo del Estado, por decreto número 132, distribuyó el contingente de ciento cincuenta hombres que correspondían al Estado, de acuerdo con la solicitud del Gobierno nacional hecha *en telegrama* número 1,191 del 17 de Abril del presente año; y, según ese decreto, á esta Provincia correspondieron diez y seis hombres, los cuales fueron distribuidos por esta Gobernación, por decretos números 60 y 67, según el inciso 1.°, artículo 2.° del citado Decreto Ejecutivo número 132. Por estos últimos decretos de la Gobernación, tocaron al Distrito de Barranquilla sólo seis hombres. En nota circular número 3, del 4 de Agosto, Sección de Hacienda y Guerra, el señor Secretario general comunicó que el contingente de esta Provincia, pedido anteriormente debía ser el doble, y en ese sentido se dictó por este Despacho el decreto número 68, por el cual correspondían á este Distrito capital doce hombres; pero entiendo que no se han presentado ni los principales ni los suplentes para prestar el servicio á que están destinados.

"Los actos relacionados con el sorteo de que antes he hablado, son distintos de los otros á que habré de referirme á continuación, también para informar al señor Juez 2.°, según su nota número 550, fecha 10 del mes en curso.

"El Poder Ejecutivo del Estado, por decreto número 174, de 20 de Agosto, por el cual se dictan medidas relacionadas con el orden público, declaró que había fundados temores de una invasión del Estado soberano del Magdalena, por fuerzas del Estado soberano de Santander, y que siendo el orden público solidario en toda la Unión, estaba obligado á auxiliar y defender su soberanía. Por ese decreto se delegaron al infrascrito todas las facultades que el Presidente del Estado puede delegar, y fué autorizado expresamente para levantar *inmediatamente* en esta Provincia fuerzas que debían ponerse á disposición del ciudadano General Comandante en Jefe de la 2.ª División, como *milicias del Estado* al servicio de la Nación.

"El señor Secretario general, en telegrama número 397, del 20 de Agosto, me comunicó la delegación de facultades de que me he ocupado arriba y la orden de levantar fuerzas *inmediatamente*, advirtiendo que el fundamento de esas providencias era, entre otros, el conocimiento que se tenía de que fuerzas del Estado soberano de Santander *se movían hacia los Estados de la Costa*. En igual sentido seguí recibiendo telegramas del Gobierno del Estado.

"Inspirado en los mismos deseos patrióticos del Poder Ejecutivo, de impedir todo trastorno del orden público, procedí en seguida á dar inmediato cumplimiento á sus órdenes y á usar de las facultades que se me habían delegado.

"Por decreto número 71 del 22 de Agosto, llamé al servicio de las armas un Batallón de infantería de las milicias del Estado, fuerte de trescientas plazas; y para organizar *inmediatamente* ese Batallón, como lo exigían el Ejecutivo y las circunstancias, de acuerdo también con el inciso 40, artículo 67, ley 26, parte 1.ª de la Recopilación de Bolívar, dí orden á los respectivos Agentes para que procedieran á cumplir el artículo 51, ley 5.ª, parte 9.ª de la Recopilación de Bolívar, tomando por conscripción el número de hombres necesarios, una vez que ni los individuos sorteados el doce de Agosto para el contingente se habían presentado, ni se había obtenido su reemplazo.

"A tiempo que estos hechos se cumplían, la opinión pública y los avisos frecuentes denunciaban un reclutamiento sin tregua en el Estado soberano de Santander, con el propósito de la invasión á los Estados de la Costa; y el Poder Ejecutivo nacional, con los mismos temores de un ataque á la soberanía de estos Estados por el Gobierno de Santander, dispuso que fuerzas nacionales ocuparan el Banco y que se formase un Batallón de las milicias del Estado al servicio de la Nación.

"La conscripción sólo tuvo lugar del 22 al 25 de Agosto próximo pasado; y sobre la cesación de las excepciones de la citada ley 'sobre sorteo y formación de la fuerza pública' del Estado, entiendo que sólo en el caso del artículo 39 es que puede suceder.

"Ocupándome del último punto de su nota, me permito expresarle que, sin embargo de que hubo motivos suficientes para declarar turbado el orden público en esta ciudad, con la esperanza de que las medidas tomadas por el Gobierno serían bastantes á prevenir la guerra, no quise someter esta población á las consecuencias casi siempre funestas de la suspensión de las garantías constitucionales.

"Con todo y la certeza que tengo de la legalidad de estos actos, así como de su justicia, creo oportuno advertir al señor Juez 2.° de la Provincia la incompetencia de su jurisdicción

para la averiguación de estos hechos que, aun en el caso de que aparejasen alguna responsabilidad, corresponde exclusivamente á la Asamblea Legislativa, según el inciso 1.° artículo 50 de la Constitución política del Estado, bien sea tratándose del ciudadano Presidente del Estado, ó del Gobernador de la Provincia de Barranquilla que ejercía las funciones del Ejecutivo por delegación general.

"Llamo la atención del señor Juez 2.° á la vista del señor Procurador general de la Unión sobre asunto semejante, publicada en el *Diario Oficial* número 5,804, de 17 de Agosto."

De la lectura de esta nota, cuyo contenido está corroborado con los documentos y con algunas de las declaraciones que hay en los autos, se deduce que el Gobernador de la Provincia de Barranquilla, haciendo uso de las facultades que le delegó el Presidente del extinguido Estado de Bolívar, pidió el contingente que le correspondía suministrar al Distrito, ó sea á la ciudad de Barranquilla, al Alcalde, y si éste empleado en vez de servirse de los medios de enganchamiento ó conscripción para suministrar el número de hombres que se le pedía, efectuó reclutamiento, de tal hecho no puede ser responsable el superior, una vez que no ha podido obtenerse comprobante de que éste lo hubiera ordenado.

Por las consideraciones que se han expuesto y por las expuestas por el señor Procurador, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: sobreséese en la actuación en lo relativo al ex-Presidente del Estado de Bolívar, y remítase el expediente al Tribunal Superior de Distrito del Departamento del mismo nombre para que dé el curso correspondiente al sumario, en ó referente á personas cuyas responsabilidad no está sujeta á la jurisdicción de la Corte en primera instancia.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintisiete de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador.

NICOLÁS ENCISO.—*Guerra A.*, Secretario.

NOTA.—En este juicio actuó el señor Procurador suplente don Nicolás Enciso, por estar impedido el principal, doctor Carmelo Arango M.

Ramón Guerra A., Secretario.

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL

Señores Magistrados.

Instruídas las diligencias sumarias del caso para averiguar la responsabilidad que pudiera caber á Alejandro Zea por ciertos cargos que se le hicieron como Prefecto que fué del extinguido Departamento del Cauca en el antiguo Estado de Antioquia, el Tribunal Superior del Distrito de Medellín declaró infundados los cargos y sobreseyó, en consecuencia, sobre ellos, por auto de 11 de Junio último que, en consulta, ha venido al conocimiento de esa Superioridad.

La responsabilidad contra el sindicado se ha pretendido deducir del supuesto de que él tuvo participación en el alzamiento de fondos públicos por que fué juzgado y condenado el Colector de Hacienda y Telegrafista del Distrito de Titiribí, Felipe Giraldo; pero tal supuesto no se ha confirmado con los datos que suministra el sumario, pues lo único que resulta de esto es que Zea tomó prestados al citado Colector $ 20, y que $ 300 que entregaron los fiadores de éste para cubrir el desfalco de los fondos á su cargo, los recibió dicho Zea de orden del Administrador general del Tesoro, quien lo autorizó para que los invirtiera en *los gastos que se indican en el informe* rendido por el citado Administrador á fojas 85 del sumario.

Es fuera de duda que el primero de los hechos apuntados consistió en un contrato ó convenio lícito entre particulares que ninguna responsabilidad criminal apareja á los contratantes; y que el segundo se verificó de orden superior, sin que baste á darle el carácter de criminoso la circunstancia de que, por no haber sido hallada la cuenta respectiva, se ignore si la suma á que se contrae el cargo fué invertida debidamente, en el modo y términos indicados por el Administrador general del Tesoro.

Esto último podría originar un juicio de cuentas contra el responsable; pero no es motivo legal suficiente para abrirle causa criminal, mientras no se compruebe que él dispuso de la expresada suma en provecho propio ó en gastos distintos de los del servicio público.

A virtud de lo expuesto, este Ministerio estima legal el auto de sobreseimiento consultado y, de consiguiente, os pide que lo confirméis.

Bogotá, 25 de Julio de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

Por mandato del Tribunal Superior del Distrito judicial de Cundinamarca, se instruyeron las diligencias sumarias del caso para averiguar la responsabilidad en que hubiera podido incurrir el doctor José María Lombana Domínguez, por haber demorado y haber devuelto sin despachar un sumario que se le pasó por el Juez 5.° del Circuíto de Bogotá, para que emitiera el concepto correspondiente, en su calidad de Agente Fiscal del mismo Circuíto.

En vista de tales diligencias, el citado Tribunal, por auto de 30 de Junio último, declaró con lugar á seguimiento de causa de responsabilidad, por los trámites extraordinarios, contra el doctor Lombana, por infracción del artículo 278 del Código Penal de Cundinamarca sancionado en 1883.

El encausado pidió la revocatoria del expresado auto, é interpuso en subsidio el recurso de apelación y, habiéndosele negado aquélla, se le concedió éste, razón por la cual ha venido el negocio á vuestro superior conocimiento.

El examen del expediente convence de que, efectivamente, el doctor Lombana recibió el día 7 de Abril de 1886 un sumario contra Lino Roa, para emitir concepto sobre su mérito, el cual retuvo en su poder y no devolvió sino hasta el 9 de Febrero del presente año; y esto con la circunstancia agravante de que dicho sumario fué devuelto sin el concepto de que se deja hecha referencia, causando con ello una demora de diez meses. Este hecho consta de la certificación que se lee al folio 4 vuelto de los autos, y de la copia corriente al folio 8 de los mismos, tomada del libro de recibos del Juzgado que pasó el expediente al estudio del Fiscal doctor Lombana.

También está debidamente acreditado el hecho de que en todo ese tiempo la Fiscalía estuvo únicamente á cargo del doctor Lombana, pues, á contar del acta de posesión dada á dicho doctor del referido empleo, en Noviembre de 1885, no se ha encontrado otra posterior que corresponda al lapso de tiempo en que se incurrió en la demora (fojas 10 vuelta).

La razón disculpativa alegada y no probada por el empleado responsable, consistente en recargo de trabajo en el Despacho, no es admisible en presencia de las prevenciones contenidas en el artículo 393 del Código de procedimiento criminal de Cundinamarca, según las cuales "ningún empleado ó funcionario público se eximirá de la pena impuesta por la ley por las omisiones y faltas de cumplimiento á un deber anexo á su destino, aunque alegue *y pruebe* que el cúmulo de los negocios que estaban á su cargo no le permitieron llenar aquel deber ó hacer lo que le incumbía dentro de los precisos términos fijados al efecto por las leyes y disposiciones de la materia."

El infrascrito no se detiene á refutar las alegaciones con que el doctor Lombana ha pretendido sostener que no le corresponde la sanción penal del artículo á cuya infracción se contrae el auto de proceder, pues sobre este punto, este Ministerio considera concluyentes las razones consignadas en la resolución por la cual se negó la revocatoria del referido auto de proceder y en la vista fiscal que la precedió.

Habida consideración á lo anterior, el infrascrito estima legal el auto materia del recurso interpuesto y, en consecuencia os pide que lo confirméis.

Bogotá, 30 de Julio de 1887.

CARMELO ARANGO M.

BOGOTÁ.—IMP. DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 38

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 24 de Septiembre de 1887.

CONTENIDO.

	Pág.
ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.	
Acuerdo número 71, relativo á una consulta del Tribunal Superior de Tunja	297
Id. número 72, id. á otra id. del id. de Popayán sobre conjueces	297
Id. número 73, id. á otra del id. del Magdadalena, con relación á Jurados	"
Id. número 75, relativo á otra id. del Tribunal Superior de Cundinamarca	298
Id. número 76, id. á otra id. del id. de Antioquia	"
Id. número 77, id. á otra de id. del Prefecto de Río-Sucio (Cauca) sobre excarcelación en caso de heridas	"
Id. número 78, id. á otra del Tribunal Superior de Santander, sobre apelación de órdenes de detención	299
SENTENCIAS DEFINITIVAS.	
NEGOCIOS CIVILES.	
Pronunciada respecto de una reclamación sobre expropiación	"
NEGOCIOS CRIMINALES	
Absolutoria en confirmación de otra pronunciada por el Tribunal Superior del extinguido Estado del Cauca	300
Sobre nulidad de un proceso militar seguido en Bogotá	"
AUTOS INTERLOCUTORIOS.	
NEGOCIOS CRIMINALES	
Revocatorio del Tribunal Superior de Tundama, por prescripción	301
Confirmatorio de otro del Tribunal Superior de Cundinamarca sobre cesación de un procedimiento	"
Id. de otro del Tribunal Superior de Antioquia, de sobreseimiento	302
Sobre incompetencia de la Corte para conocer, por consulta, de un juicio militar	"
Confirmatorio de un auto de sobreseimiento del Tribunal Superior de Antioquia	"
NEGOCIOS CIVILES	
Sobre incompetencia de la Corte para conocer en su estado actual, de un juicio civil promovido por Alejandro Weckbecker	"
Idéntico al anterior	303
ASUNTOS DIVERSOS	
NOTAS OFICIALES	
Notas dirigidas por los Presidentes de varios Tribunales	304
VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL	
Relativas á diversos asuntos de la Corte	"

GACETA JUDICIAL.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

ACUERDO NUMERO 71.

En Bogotá, á catorce de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete, se reunió la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario; y tomando en consideración el telegrama de Su Señoría el Presidente del Tribunal Superior de Tunja, de 6 de los corrientes, el señor Magistrado doctor Morales, á quien tocó en repartimiento este asunto, propuso la siguiente resolución, que fué aprobada por unanimidad de votos:

"Como respuesta al telegrama de Su Señoría el Presidente del Tribunal Superior del Distrito judicial de Tunja, trascríbase íntegramente el Acuerdo de esta Suprema Corte, de fecha tres de los corrientes, por estar resuelta en la parte expositiva del expresado Acuerdo, la duda á que se refiere el telegrama del Tribunal de Tunja."

Con lo cual se dió por terminado el presente Acuerdo, que firman todos los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 72.

En Bogotá, á catorce de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete, constituída la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, el señor Magistrado doctor Fernández, á quien tocó en repartimiento la consulta que hace Su Señoría el Presidente del Tribunal Superior del Distrito judicial de Popayán, por telegrama de cinco de los corrientes, presentó el siguiente proyecto de resolución, que fué aprobado por unanimidad de votos:

"Por medio de telegrama fechado el cinco de los corrientes, consulta el Tribunal del Distrito judicial de Popayán sobre si los Conjueces de los Tribunales pueden ser abogados ó defensores en negocios civiles ó criminales, y sobre si la frase "lugares en que no hubiere notarios," á que hacen referencia los artículos 1,071 y 2,549 del Código Civil, comprende los Circuítos, las ciudades ó los distritos.

"Para resolver lo relativo al primer punto, se considera:

"Todo individuo puede desempeñar funciones de abogado ó defensor en causas civiles ó criminales, con excepción de aquellos á quienes se lo prohibe la ley.

"No existe disposición alguna que impida á los Conjueces gestionar en causas distintas de aquellas en que ejercen funciones de Jueces, luégo no hay motivo para considerar que *en ninguna causa ó juicio pueden ser defensores ó abogados.*

"Respecto al segundo, se abstiene la Corte de emitir concepto, por no autorizarla la ley para decidir puntos dudosos en materia civil.

"En consecuencia, la Corte resuelve la duda presentada por el Tribunal de Popayán en estos términos:

"Con excepción de las causas en que los Conjueces deben conocer con el carácter de tales, en las demás pueden obrar como defensores ó abogados.

"Pásese el telegrama en oportunidad al Cuerpo Legislativo para que, si lo tiene á bien, aclare la parte que le ha ofrecido duda al Tribunal que elevó la consulta, relativa al Código Civil, por no ser competente esta corporación para ocuparse de ella.

"Comuníquese, cópiese y publíquese."

Con lo cual se terminó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 73.

En la ciudad de Bogotá,, á quince de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, se ocupó en considerar la consulta que en nota de veintitrés de Junio último y referente á la que hizo el Juez del Circuíto de Padilla, dirige Su Señoría el Presidente del Tribunal del Departamento del Magdalena.

El señor Magistrado doctor Martínez, á quien tocó el negocio en repartimiento, presentó el siguiente proyecto de resolución que fué unánimemente adoptado, á saber

"Por conducto del Tribunal Superior del Magdalena, ha venido la consulta que dirige el Juez del Circuíto de Padilla sobre si en aquellas causas para las cuales se había señalado la celebración del juicio por Jurados para un día posterior al en que empezó la vigencia de la ley 57 del corriente año, deben esos juicios celebrarse siempre con la intervención del Jurado y ser decididos por éste, ó si el fallo se dicta por el Juez de Circuíto exclusivamente.

"Ya la Corte en Acuerdos números 54 y 55, publicados en la *Gaceta Judicial* números 33 y 34, á virtud de consultas elevadas por el Tribunal del Tolima y el Juez del Circuíto de Honda, resolvió el punto á que se contrae la presente, declarando que los Jueces de Circuíto, no obstante el haber señalado día para la celebración del juicio con intervención del Jurado, deben prescindir de éste y proceder por sí solos; y posteriormente, en Acuerdo número 70, resolvió también la Corte, que en casos de esta naturaleza, lo que el Juez debe hacer es señalar nuevo día para la celebración del juicio, en la forma determinada en los artículos 1,795 hasta el 1802 del Código Judicial vigente hoy.

"Por lo tanto, la Corte Suprema resuelve la consulta preindicada, remitiéndose á las resoluciones que se acaban de mencionar, dándolas como insertas aquí, y diciendo á Su Señoría el Presidente del Tribunal del Magdalena, que es á esas resoluciones á las que debe ajustarse el señor Juez del Circuíto de Padilla en el caso que ha considerado como dudoso.

Transcríbase este Acuerdo en respuesta, y publíquese en la *Gaceta Judicial.*

Con lo cual se terminó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 75.

En Bogotá, á diez y seis de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, se dió cuenta de una consulta que le ha sido dirigida por el Tribunal Superior del Distrito judicial de Antioquia, por medio de un telegrama de fecha 13 de los corrientes, concebido en estos términos:

"*Presidencia del Tribunal—Medellín, 13 de Septiembre de 1887.*

A Su Señoría el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

"Dígnese Su Señoría someter á la consideración de ese Supremo Tribunal esta consulta. En el caso del artículo mil trescientos trece del Código Judicial, el juicio ordinario debe principiar por demanda formulada contra el contradictor, ó, dando por establecidas con lo hecho hasta allí las bases de la controversia, se recibe la causa á prueba y se sigue la vía ordinaria. La condición de demandado asignada al contradictor implica la duda, mina por entero la eficacia de la diligencia del deslinde en la parte contradicha, al tenor del artículo quinientos cuarenta y dos del Código, y contraría las reglas generales establecidas en los artículos quinientos cuarenta y tres y doscientos setenta y cinco. Casos frecuentes en este Distrito judicial.

"SILVERIO ARANGO."

Leída la anterior consulta, el Magistrado doctor Sanclemente, á quien previamente le fué repartido el negocio, propuso lo siguiente:

"Dígase en respuesta al Tribunal Superior de Antioquia, que la Corte no encuentra discordancia entre lo dispuesto en el artículo 1,313 del Código Judicial y lo establecido en los artículos 542, 543 y 275 del mismo; y que no la encuentra, porque dando el artículo primeramente citado el carácter de demandado al que contradice el deslinde practicado, ó la demanda misma de deslinde, y al que solicita éste, el de demandante, ha sometido al último en el juicio ordinario á las reglas establecidas en los artículos 542 y 543; y lo ha hecho, sin duda, porque el que solicita el deslinde reviste la condición de demandante, conforme á lo dispuesto en los artículos 1,304 y 1,305 de dicho Código, y en fuerza de lo prevenido en el artículo 1,306, debe acompañar á su demanda una prueba sumaria siquiera que acredite los linderos de su finca. Según esto, él se considera desde el principio dueño del predio á que el juicio se contrae, por los linderos que señala, y el que contradice la operación niega ambas cosas, ó por lo menos la última; en cuyo caso corresponde al peticionario dar la prueba de lo que afirma. No hay contradicción, pues, entre los artículos mencionados, y si la hubiera, provendría de haberse dado el carácter de demandante al que solicita el deslinde y de demandado al que lo contradice, cosa que sólo al Legislador le es permitido variar.

"De resto, el artículo 1,313 del Código Judicial tampoco es contrario al 275, porque él no obliga al que solicita un deslinde á proponer demanda ordinaria, sino que en caso de contradicción, dispone que la demanda intentada siga la tramitación del juicio ordinario, lo cual en nada se opone á lo establecido en el artículo 275 antes citado."

Sometido este proyecto de resolución á la consideración de la Corte, fué aprobado por el voto unánime de los señores Magistrados.

Con lo cual, y después de disponer que se comunique al Tribunal consultante, se dió por terminano el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados y el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 76.

En la ciudad de Bogotá, á diez y seis de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, S. Señoría el Presidente mandó dar lectura al siguiente telegrama recibido el día anterior.

"Riosucio, 14 de Septiembre de 1887.

"Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

"Para observar con todo acierto, sírvase usted determinar cuáles son las heridas comunes, por las cuales pueden gozar del beneficio de fianza los reos de tal delito. Ruego á S. Señoría se digne darle el curso legal á la presente consulta.

"El Prefecto, BENIGNO GUTIÉRREZ."

El señor Magistrado doctor Samper, á quien tocó el negocio en repartimiento, propuso el siguiente proyecto de resolución que fué considerado y en seguida aprobado por unanimidad:

"Dígase por telégrafo al funcionario consultante, que la Corte ha considerado que en todos los casos de heridas hay lugar á excarcelación con fianza, salvo cuando son inferidas á empleados ó funcionarios públicos; y así se declaró por el Acuerdo número 61 de fecha diez y siete de Agosto último, al cual deben ajustarse los procedimientos.—Publíquese."

Con lo cual se dió por terminado el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 77.

En Bogotá, á diez y seis de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete, reunidos en Sala de Acuerdo los señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con asistencia del infrascrito Secretario, el Magistrado doctor Noguera, á quien pasó en examen la consulta que en telegrama de 9 del presente mes elevó á este Supremo Tribunal el del Distrito Judicial de Santander, sobre si es apelable el auto de detención provisional de un sindicado, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 825 y 1,722 del Código Judicial vigente,—sometió á la consideración de la Corte el siguiente proyecto de resolución:

Según el artículo 1,506 del Código Judicial vigente, se da el nombre de Sumario á la reunión de todas las diligencias

propias para comprobar el cuerpo del delito y descubrir los delincuentes.

"En ese estado de la averiguación el sindicado no es parte y no se le notifica la orden de detención, por lo cual ésta no puede ser apelada.

"Las apelaciones, además, contra la referida orden, supondrían, por lo menos, la necesidad de expedir copia de lo conducente para la concesión del recurso, y esas copias no podrían expedirse, por prohibirlo terminantemente el artículo 225 de la ley 57 de 1887, el cual da á esta instrucción sumaria el carácter de absoluta reserva, aun para los funcionarios que no sean los llamados á intervenir en el asunto.

"En tal virtud, la Corte Suprema resuelve la consulta de que se ha hecho mérito, declarando que las órdenes de detención ó arresto dictadas por los funcionarios de instrucción en la práctica de los sumarios, no son apelables."

Este proyecto fué aprobado por unanimidad, con lo cual, y habiéndose dispuesto que se comunique lo resuelto al Tribunal consultante, se terminó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados y el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 78.

En Bogotá, á diez y siete de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, se ocupó en considerar la consulta de que se hará mención en seguida, hecha por el Tribunal Superior de Cundinamarca, y el señor Magistrado doctor Martínez, á quien tocó el negocio en repartimiento, propuso el siguiente proyecto de resolución, que fué unánimemente adoptado:

"Consulta la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Cundinamarca, compuesta de cuatro Magistrados, sobre si en el caso de que alguno ó algunos de ellos, que componen la Sala sentenciadora, estén impedidos en algún negocio, el reemplazo se hace con el Magistrado sobrante, es decir con el cuarto, ó si en todo caso se ocurre á sortear Conjuez ó Conjueces para completar la Sala.

"La Corte, para resolvêr la consulta, considera que, conforme á la Constitución y á las leyes, la facultad que reside en los Tribunales para juzgar y decidir en los negocios de su competencia, debe ser ejercitada primordialmente por los Magistrados principales, como que sólo de una manera subsidiaria ó secundaria entran los suplentes para llenar las faltas de los principales, y los Conjueces para los casos de recusación é impedimento, ó para dirimir las competencias; no obstando para ello lo que está dispuesto en el artículo 69 del Código Judicial, porque ese artículo fué dictado antes especialmente para la Corte, y nó para la organización que últimamente han tenido los Tribunales á virtud de las nuevas leyes. Según esto, no se ve razón alguna para que, habiendo en un Tribunal uno ó más Magistrados principalas hábiles, esto es, no impedidos ni recusados, para resolver en un negocio, haya de apelarse á Conjueces, pasando por cima de aquellos que están primitivamente llamados á ejercer la jurisdicción.

"Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación decide el punto consultado, estableciendo: que en los casos en los cuales en la Sala de un Tribunal llamada á conocer de cierta clase de negocios y compuesta de cuatro Magistrados, alguno de los sentenciadores esté impedido ó recusado, debe completarse dicha Sala con el cuarto Magistrado: si los impedidos en la Sala sentenciadora son dos, se completará el Tribunal con el cuarto Magistrado y además con un Conjuez; y cuando el Tribunal se componga de cinco ó más Magistrados, no estando dividido en dos Salas, el cuarto, el quinto y el sexto entrarán, respectivamente, á completar la Sala sentenciadora, cuando uno ó dos de los Magistrados que compongan ésta, y que no deban pasar de tres, sean recusados ó estén impedidos.

"Transmítase en copia este Acuerdo al Tribunal de Cundinamarca, y publíquese en la *Gaceta Judicial* para conocimiento y como regla general para los demás Tribunales de la República."

Con lo cual, y no habiendo otro asunto de qué ocuparse al presente la Corte, se dió por terminado este Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Agosto veintinueve de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Por pedimento del señor Procurador general, á virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 44 de 1886, ha venido á la Corte este expediente. Contiene él la reclamación introducida por Rafael Bravo, natural de Pasto y residente en Popayán, para que le sea reconocido á cargo del Tesoro Nacional, el valor de cuarenta y un bultos de anís que le fueron expropiados en veinticuatro de Agosto de mil ochocientos setenta y seis, por el Alcalde de la ciudad de Popayán, y los cuales fueron recibidos en la Administración de Hacienda Municipal de la misma ciudad, como todo consta del certificado expedido por el Jefe Provincial respectivo.

Introdujo Bravo su reclamación directamente y por medio de apoderado, ante la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, establecida en esta ciudad por la ley 44 yá mencionada, en uso del derecho que le concedía el artículo 9.° de la ley 56 de 1887. Probó no sólo el despojo de la cosa cuyo valor reclama, sino también su precio; y adujo, además, testimonios para probar que no había podido antes hacer su relación ante el Jefe del Estado del Cauca, ni aprovechar el tiempo oportuno para entablar su demanda, por hallarse en el Territorio del Ecuador, sin poder regresar á su domicilio.

La Comisión de suministros, por resolución de 14 de Junio último, reconoció á favor de Bravo y á cargo al Tesoro Nacional, la suma de mil seiscientos cuarenta pesos ($ 1,640), valor del anís expropiado, á virtud de las pruebas creadas por el reclamante. Como consecuencia de este fallo, S. Señoría el Ministro de Guerra encontró arreglada la resolución y justificado el procedimiento extra-juicio adoptado por el peticionario; y en tal virtud, ordenó que se librara por la Sección respectiva, á favor de Bravo ó de su apoderado Francisco Groot, la orden de pago por los mil seiscientos cuarenta pesos reconocidos.

Pasado el expediente al señor Procurador, éste ha ocurrido á la Corte, sosteniendo que la Comisión de suministros ha extralimitado sus funciones, por cuanto reconoce un crédito acerca del cual no había juicio pendiente ante los Tribunales ó Juzgados, fundándose para ello en lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 44 dos veces citada, por cuanto dicho artículo, en su parágrafo 1.°, establece que la Comisión debe resolver por las pruebas que se hayan producido en los respectivos juicios pendientes, habiendo dicho atrás que para el reconocimieto de las expropiaciones inherentes á la guerra civil de 1876 á 1877 se debían pasar á la Comisión los expedientes que existieran en los Juzgados Nacionales ó en la Suprema Corte.

La alegación del señor Procurador sería fundada y concluyente, si la ley 56 de 1887 no hubiera reformado la 44 de 1886, ampliando en su artículo 8.° el término para iniciar toda clase de reclamaciones contra el Tesoro, procedentes de la guerra civil de 1876 á 1877; permitiendo, en su artículo 9.°, á los interesados, que éstos entablaran directamente ante la Comisión de suministros, las reclamaciones consiguientes á las expropiaciones verificadas en esa guerra, sin necesidad de que hubieran empezado su gestión por la vía judicial.

Es verdad que el artículo 3.° de la ley 152 de 11 de Agosto de 1887, aclaratoria y reformatoria de las anteriores sobre suministros, ha venido á limitar las facultades de la Comisión, explicando qué es lo que se debe entender por negocios pendientes para que las reclamaciones sean admitidas; pero esta última ley fué dictada cuando yá había surtido sus efectos antel

la mencionada Comición, la reclamación de Bravo; reclamación entablada en virtud del derecho que le daba la ley 56 del corriente año. El reclamante Bravo estaba en posesión de un derecho que liberalmente la ley le otorgó; y la Comisión tuvo facultad para conocer y decidir de la reclamación introducida por aquél, porque hasta entonces no estaba coartada ni limitada la facultad de acoger las demandas de suministros, que no hubieran empezado por la vía judicial. Si en este caso y para los efectos dichos hubiera de aplicarse lo dispuesto en la ley 152 últimamente mencionada, se le daría un efecto retroactivo y se contrariaría lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución nacional.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el fallo de la Comisión de suministros dictado en catorce de Junio último, y aprobado por S. Señoría el Ministro de Guerra en once de Julio del corriente año.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase al Ministerio de Guerra.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Bnjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del veintinueve de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, publiqué la sentencia que antecede.

Ramón Guerra A., Secretario.

En el mismo día la notifiqué al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintinueve de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete.

El Tribunal Superior del extinguido Estado del Cauca abrió juicio de responsabilidad á Daniel Rueda, ex-Jefe del Municipio de Obando y ex-Juez del Circuíto del mismo nombre, por infracción de los artículos 285 y 303 de la ley 222 de 1867, del extinguido Estado del Cauca. Seguido el juicio, el Tribunal Superior del Distrito judicial de Pasto pronunció sentencia absolutoria, con fecha tres de Mayo del año en curso, sentencia que se ha remitido á esta Superioridad en consulta, por no haberse interpuesto recurso de apelación.

Substanciada la consulta, la Corte, para resolver considera:

En el auto de proceder, de fecha veintidós de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, se deducen dos cargos contra Rueda. Es el primero que como Jefe municipal de Obando, en 1881, convino con Evangelista Burgos en adjudicar á éste el remate del derecho de extracción del Municipio, á virtud de haber pagado Burgos á Rueda la cantidad de cien pesos ($ 100). El otro cargo consiste en que Rueda, como Juez del Circuíto de Obando, suspendió ilegalmente la ejecución de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del mismo extinguido Estado que mandó restituir á varios indígenas en la posesión de los terrenos de Güitungo, Cnidad y Yalambás.

Fúndase el primer cargo en las declaraciones de Mercedes Muñoz y Renato Ignacio Suárez.

Mercedes Muñóz dice que le consta que Daniel Rueda, como Jefe municipal de Obando, convino con su finado esposo, Evangelista Burgos, en adjudicarle á éste el remate de las rentas de extracción del Municipio, sólo por noventa y cuatro pesos mensuales, y, que en premio de la condescendencia del señor Daniel Rueda, le dió su finado esposo la cantidad de cien pesos. Pero es digno de notar que la declarante no da razón de su dicho, y además, que su aseveración se halla infirmada en parte por la misma declarante, quien dice luégo que recuerda "que en los inventarios existe un recibo que le dió el señor Rueda á la que declara de la suma de diez pesos fuertes ($ 10), como último resto del compromiso pactado, cuyos reales se los estregó la declarante después del fallecimiento de su esposo Burgos."

Con respecto al testigo Ignacio Suárez, se observa que al dar razón de su dicho, dice constarle los hechos por habérselos referido el mencionado Burgos, y conforme al artículo 371 del Código de enjuiciamiento civil del extinguido Estado del Cauca, este testimonio carece de fuerza probatoria.

Dicho primer cargo no se halla, pues, plenamente probado.

En cuanto al segundo cargo á que se ha aludido, relativo á la suspensión ilegal de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de aquél extinguido Estado, no se ha presentado la prueba de su existencia, como lo reconoce el Tribunal sentenciador.

A mérito de lo expuesto, y teniendo además en consideración los conceptos del señor Procurador de la Nación, en su vista de 16 de Julio, quien solicita la confirmación del fallo absolutorio de que se ha hablado; la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la mencionada sentencia de fecha tres de Mayo del año en curso, remitida á esta Superioridad en consulta por el Tribunal Superior del Distrito judicial de Pasto.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase la actuación.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia de dicho día publiqué esta sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En el mismo día nitifiqué la sentencia que antecede al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Agosto veintisiete de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El ciudadano General, Jefe de la Sección de Dirección y mando del Ejército, ha pasado en consulta á esta Suprema Corte la sentencia pronunciada por el Consejo de Guerra ordinario, en la causa seguida al soldado Faustino Castro, por el delito de homicidio.

El suceso que ha dado origen á la causa y á la sentencia citada, ha sido relatado por varios testigos presenciales, de la manera siguiente:

"Una Compañía suelta correspondiente á un Batallón que estaba acantonado en la ciudad de Honda, fué comisionada para custodiar, desde esa ciudad hasta la de Facatativá, las cargas que componían el Correo de encomiendas. Cumplida su comisión, regresaba la Compañía para Honda, y el día catorce de Febrero del corriente año llegó al punto llamado "Guayabalito," en jurisdicción del Distrito del Guayabal, Departamento de Cundinamarca, y allí se detuvo á almorzar. Estando los soldados ocupados, unos en comer, otros en beber licor y otros en conversar ó en divertirse, se oyó un tiro, y se observó que el soldado Cipriano Corrales había sido herido en el estómago, y por último, que murió á los pocos momentos.

Tres de los individuos de la Compañía aseveran que ellos presenciaron que el soldado Faustino Castro disparó su rifle sobre Corrales, sin antecedente alguno ostensible. Con ese motivo, Castro fué puesto en seguridad, y remitido á esta capital para su juzgamiento, pues en la plaza de Honda no existen todos los empleados que necesariamente tenían que intervenir en el juicio militar.

Seguido éste por todos sus trámites, el Consejo de Guerra ordinario, con fecha seis del presente mes, condenó al soldado Faustino Castro á sufrir la pena de seis años de presidio y á las demás subsidiarias de que tratan los Códigos Militar y Penal.

Antes de entrar en cualquiera otra consideración, es indispensable establecer la jurisdicción á que pertenece el hecho ejecutado por el soldado Castro.

El señor Auditor general de Guerra, en su exposición de fojas 43 vuelta del expediente, hizo notar que el delito de que se trata correspondía á la jurisdicción ordinaria; pero el señor General, Jefe de la Sección de Dirección y mando del Ejército, conceptuó que correspondía el conocimiento á la autoridad militar, por cuanto el delito se había cometido por el soldado Castro "en el tránsito del camino en que venía prestando servicio, punto en que la comisión de que hacía parte escoltaba el correo."

El artículo 1,365 del Código Militar dice:

"Son delitos militares los que se cometen con infracción de las leyes militares en asuntos del servicio ó dentro del cuartel,

Todos los demás delitos ó culpas cometidos fuera de estos dos casos, serán juzgados como delitos comunes por los Juzgados y Tribunales civiles."

Debe advertirse, en primer lugar, que cuando Castro ejecutó el hecho mencionado, yá la Compañía á que pertenecía había cumplido su Comisión; pues según el parte dado por el Comandante de la escolta, y que se halla á la foja primera del proceso, dicha escolta vino hasta el punto de "Agua-Larga," donde entregó el correo á la comisión que había salido de esta capital; y fué al regreso para Honda cuando tuvo lugar el suceso referido; de suerte que en el sitio de "Guayabalito" la mencionada escolta ó Compañía no iba custodiando nada.

Pero aun en el supuesto de que el soldado estuviera incorporado en una fuerza que, á la sazón, prestaba un servicio, esa sola circunstancia no bastaba para calificar como militar el delito cometido. El contexto del artículo 1,365 no se presta para deducir que es suficiente el hecho de que un miembro del Ejército esté prestando un servicio, para que todos los delitos ejecutados por él, durante la prestación del servicio, sean de carácter militar: lo que aquella disposición exige es que la prestación del servicio sea la causa eficiente del hecho criminoso. Un Jefe de día, por ejemplo, que en la calle y sin motivo alguno hiere á un individuo que va pasando, no comete un delito militar, sin embargo de estar el sindicado prestando un servicio. El centinela que hiere ó da muerte al preso que custodia, y el cual intenta fugarse, comete un delito militar, porque el hecho ha tenido por motivo inmediato la naturaleza de las funciones del centinela; como lo sería también si el soldado Castro hubiera ejecutado el homicidio por defender el correo confiado á su custodia.

De lo expuesto se infiere que el hecho objeto de esta investigación, no fué ejecutado por motivos del servicio; tampoco con infracción de un deber impuesto por una ley militar; ni menos dentro del cuartel, por no ser dable considerar como tal un sitio de un camino público á donde llega transitoriamente cualquier tropa ó destacamento para tomar descanso.

Si el delito no es militar, como se ha observado, corresponde su conocimiento á los Tribunales y Jueces ordinarios, y en consecuencia, los funcionarios que intervinieron en la instrucción del proceso y el Consejo de Guerra que dictó la sentencia carecían de facultades para conocer del asunto.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo con los artículos 1,534 y 1,535 del Código Militar, después de haber dado cumplimiento al artículo 1,545 del mismo Código, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara nulo el juicio seguido contra Faustino Castro por atribuírsele el delito de homicidio, desde el auto de proceder inclusive; y dispone que, por conducto del señor General, Jefe de la Sección de Dirección y mando del Ejército, se pase el proceso al Juez 1.° Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca para los fines legales.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase lo actuado.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del veintisiete de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, publiqué la sentencia que antecede.

Ramón Guerra A., Secretario.

En veintinueve de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué esta sentencia al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Agosto veintinueve de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Consulta el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tundama en el Departamento de Boyacá, el auto de sobreseimiento dictado en la instrucción sumaria iniciada para averiguar la responsabilidad del ex-Juez del Departamento de Sugamuxi (hoy Provincia) por abandono del destino.

En el año de 1884 ejercía las funciones de Juez en lo civil de dicha Sección, el señor Domingo Medina Martínez. Con fecha veintiocho de Septiembre del mismo año solicitó de la autoridad respectiva, que lo era el Jefe departamental, licencia para separarse del ejercicio de su empleo por el término de quince días prorogables, contados desde el primero del mes de Octubre siguiente. Esta licencia le fué concedida y posteriormente prorogada por quince días más, esto es, hasta el treinta del mes expresado; pero habiendo solicitado nueva prórroga, por ocho días, el Jefe departamental se la negó, y lo excitó, al propio tiempo, para que se encargara inmediatamente de su empleo. El señor Medina no volvió al Juzgado sino el seis de Noviembre; y al día siguiente se ausentó de nuevo y no regresó hasta el diez, fecha en la cual yá despachaba uno de los Designados, quien había sido llamado para reemplazarlo.

Sean cuales fueren las razones en que el Jefe Departamental hubiera fundado su negativa, el hecho es que el expresado señor Medina dejó de ejercer sus funciones de Juez desde el primero hasta el seis de Noviembre y desde el siete hasta el diez del mismo mes sin haber obtenido licencia.

Es cierto que el empleado sindicado presentó una información sumaria de testigos, dirigida á comprobar el grave motivo que le había impedido ejercer su empleo en oportunidad; mas esa circunstancia puede justificar su ausencia desde el siete hasta el diez, pero en manera alguna la del primero al seis; pues consta que en la tarde de este día, fué cuando él marchó para la ciudad de Tunja con el objeto de trasladar su familia.

Según lo expuesto, el señor Medina se hizo responsable por violación del artículo 115 del Código Penal del extinguido Estado de Boyacá, y habría mérito para proceder contra él; pero como lo observa el señor Procurador, la acción criminal en el presente caso ha prescrito, pues conforme á los artículos 13 y 14 del mismo Código, la acción criminal en los delitos públicos, como el de que se trata, prescribe en el término de un año, contado desde la fecha en que se cometió el delito; y como el hecho imputado al señor Medina Martínez se ejecutó en el año del mil echocientos ochenta y cuatro, es claro que ha transcurrido mayor tiempo que el necesario para la prescripción.

Así, pues, la Corte Suprema, de acuerdo con el concepto del señor Procurador general, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el auto de sobreseimiento consultado; y en su lugar, declara que ha prescrito la acción criminal, ó sea el derecho de imponer pena al ex-Juez del Departamento de Sugamuxi (hoy Provincia) por abandono de su empleo, y en consecuencia, debe cesar todo procedimiento.

Notifíquese, cópiese, publíquèse en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el proceso.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la misma fecha notifiqué el auto que antecede al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Agosto veintinueve de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—En el mes de Septiembre de mil ochocientos ochenta y dos, denunció Feliciana Ruiz al señor Procurador general de la Nación el estado deplorable en que se hallaba la Administración pública en el Territorio de San-Martín en ese tiempo, y muy especialmente en lo relativo á la Administración de justicia.

Con tal motivo se iniciaron las presentes diligencias, para averiguar la responsabilidad en que pudiera haber incurrido Juan Convers, por estar él encargado del Juzgado nacional en dicho Territorio, en aquél tiempo. Adelantóse la investigación, y resulta ahora comprobado á las fojas 3, 5, 14 y 15 del último cuaderno de este sumario, que el indicado Convers murió en Cartagena el treinta de Abril de mil ochocientos

ochenta y cinco; y á virtud de esto, además del tiempo yá transcurrido, que hace efectiva la prescripción, el Tribunal Superior del Distrito de Cundinamarca, por auto de ocho de los corrientes, ha declarado cesante todo procedimiento contra el indicado Convers, enviando en consulta el referido auto.

La Corte, según lo expuesto, encuentra perfectamente arreglado y legal el auto consultado; y en consecuencia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, lo confirma.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase al Tribunal de su procedencia.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la misma fecha se notificó al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Agosto treinta de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Fidel Rodríguez presentó denuncia, el primero de Abril del presente año, ante el Fiscal del Circuíto de Santa-Rosa de Osos, contra el Prefecto de la Provincia respectiva, Abel González; y aunque en la denuncia no se precisó el delito cometido, el cargo parece ser el siguiente, que pudiera caracterizarse como una violencia ejercida contra la propiedad, los intereses y aún la persona de Ulpiana Muñoz, en cuyo nombre obró Rodríguez: que estando pendiente un juicio de policía sobre minas, y la apelación de un fallo de esta clase dictado por el Prefecto de la mencionada Provincia, en la segunda instancia del juicio de policía dictó, sin embargo, una resolución contra la expresada Muñoz, antes de que el Gobernador del Departamento fallase sobre la segunda apelacion; y esto, con la circunstancia de tener el Prefecto González interés personal en el asunto, y la de haber sido recusado formalmente por este motivo.

El Fiscal del Circuíto promovió la investigación del caso, y una vez formado el sumario y transmitido al Tribunal Superior de Antioquia, este ordenó ciertas ampliaciones para perfeccionarlo. Al cabo, el Tribunal, el seis de Junio, dictó auto de sobreseimiento, por cuanto no se había comprobado la comisión de delito alguno, y lo consultó con esta Superioridad. Substanciada la consulta, el señor Procurador general ha abundado en las razones emitidas por el Tribunal Superior, y pedido que el auto de sobreseimiento sea confirmado.

Para resolver, la Corte considera:

1.° Consta á folios 8 á 12 que se siguió legalmente el procedimiento de las dos apelaciones, de modo que, habiendo fallado el Alcalde de Santa-Rosa en el juicio de policía seguido entre Eladio Restrepo F. y Ulpiana Muñoz, con relación á la mina de "Aguas-frías," con fecha veintitres de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, y apelando Rodríguez, como apoderado, confirmó el fallo el Prefecto, por decisión de veintinueve de Marzo del siguiente año; y en seguida, aprobada que fué esta segunda resolución, la confirmó S. Señoría el Gobernador del Departamento de Antioquia, por decisión dictada el veintidós de Abril siguiente; sin que se infiriese ofensa alguna á la Muñoz con resoluciones del Prefecto, ni éste se extralimitase en cosa alguna;

2.° En cuanto al otro cargo, consta al folio 16 vuelto y 17, que Fidel Rodríguez ocurrió desde el quince de Febrero último, ante la Gobernación de Antioquia, desistiendo de la recusación propuesta contra el Prefecto González en el mencionado asunto de policía, y que S. Señoría el Gobernador declaró aceptada la desistencia, con fecha veintiuno del mismo mes, y dispuso que se devolviese el expediente al Prefecto "para los fines consiguientes."

Es, por lo tanto, patente, que el denunciado no ha ejecutado *acto alguno censurable, ni se ha producido la menor* prueba de la comisión de un delito. En consecuencia, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto consultado.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En treinta y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, treinta y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete.

A virtud de un aviso dado por el Fiscal de la Columna de Panamá al Coronel Jefe de Estado Mayor, se iniciaron las diligencias del caso para averiguar la responsabilidad en que hubiera podido incurrir el Habilitado del Cuerpo, Teniente Camilo Vásquez, por haberse notado, al examinar la cuenta relativa á los fondos que él manejaba, pertenecientes á la guarnición, que faltaba en la caja la suma de mil treinta y cuatro pesos, diez centavos ($ 1,034-10).

Complementado el sumario, se dictó auto de proceder contra Vásquez por el Comandante general, con fecha quince de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, y terminó el juicio en primera instancia por veredicto absolutorio pronunciado por el Consejo de Guerra de Oficiales generales el veinticuatro de Mayo del año en curso. Se remitió el expediente á esta Suprema Corte para los efectos del artículo 1,541 del Código Militar, y, cuando debía recaer el fallo, empezó á regir la ley 153, publicada en el *Diario Oficial* número 7,151 y 7,152 de 28 de los corrientes, la cual dispone, en el artículo 281, que contra sentencias definitivas dictadas por Consejos de Guerra *no podrá* interponerse ante la Corte Suprema otro recurso que el de nulidad, por las causales que establece el artículo 1,534 y siguientes del Código Militar.

Esta disposición modificó ó reformó el artículo 1,541, en el sentido de quitar á la Corte la facultad que tenía de revisar las sentencias definitivas pronunciadas por los Consejos de Guerra que se le remitieran por apelación ó consulta, quedando limitada su jurisdicción á conocer en los casos en que se interpongan recursos de nulidad. La ley citada es procesal, obliga en la capital de la República desde la fecha en que se publicó (artículo 12 del Código Civil) y debe aplicarse al juicio en el estado que tenía el día en que se promulgó.

Hoy no tiene, pues, facultad la Corte para ocuparse del fallo consultado, una vez que no fué por recurso de nulidad por lo que se le pasó el expediente.

Por estas consideraciones, la Corte resuelve:

1.° Declararse incompetente para revisar el fallo pronunciado por el Consejo de Guerra de Oficiales generales el veinticuatro de Mayo del corriente año, en la causa que se seguía contra Camilo Vásquez por malversación de caudales públicos; y

2.° Ordenar que se le devuelva el expediente original al Jefe que lo remitió.

La devolución se hará por conducto del Ministerio de Guerra.

Notifíquese, cópiese, publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En 1.° de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Agosto treinta y uno de mil ochocientos ochenta y siete.

El Tribunal Superior del Distrito del Departamento de Antioquia, promovió la investigación del caso para averiguar la responsabilidad en que hubiera podido incurrir el señor Alejandro García, por haber puesto, con fecha nueve de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, un auto que, según el orden cronoló-

gico que se observa en el sumario que se seguía contra Rodolfo Mejía, debía haber tenido la fecha del cinco del mismo mes.

Por auto de catorce de Junio próximo pasado, sobreseyó el Tribunal y ordenó que se consultara su decisión.

Para resolver se considera :

Está probado en los autos con la confesión expresa del sindicado, que es cierto que puso en el auto que motivó la investigación de que se trata, fecha nueve de Octubre donde debía haber puesto cinco, y explica el motivo que tuvo para incurrir en la falta por que se le cree responsable, así :

Dice que el Fiscal solicitó que se decretase una ampliación, que por el deseo que tenía de que la causa se adelantara con actividad le puso al auto fecha nueve aunque realmente en ese día era cinco ; que quería con eso ganar tiempo para el despacho de otros asuntos graves, y que se prometía que el sumario contra Mejía, aunque despachado el cinco, no saldría de la oficina hasta el nueve, fecha del auto mencionado ; pero que el Secretario se lo remitió al funcionario instructor el seis.

Es un hecho. pues, que el sindicado voluntariamente le puso una fecha anticipada al auto de que se ha hablado ; pero se ve que no tuvo ánimo de proceder contra la ley, ni de ejecutar un acto que impidiera el curso de la causa ó que exhibiera al Juez como empleado que faltara maliciosamente al cumplimiento de sus deberes.

Es verdad que se ha cometido una falta con poner en el proceso una fecha que no corresponde al día en que el auto recayó ; pero el objeto de éste, que no era otro sino el de ordenar la ampliación que solicitaba el Fiscal, revela que el ánimo del Juez era el de agitar la causa, sin que en manera alguna se descubra de parte de él malicia ó mala fe, circunstancias esenciales para declarar que se ha cometido un delito.

Así lo resolvió la Corte en el sumario que se instruyó contra Vicente Javier Vidal, que fué quien intervino como Fiscal en el juicio contra Rodolfo Mejía, por auto de diez y seis de Junio último, publicado en la *Gaceta Judicial* número 29.

Por las razones expuestas, que son las mismas en que se apoyan el auto consultado y la vista del señor Procurador que solicita su confirmación, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, la Corte confirma el auto pronunciado por el Tribunal del Distrito de Antioquia, de fecha catorce de Junio último.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la misma fecha notifiqué el auto anterior al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, treinta y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete.

El Tribunal Superior del Distrito judicial de Cundinamarca, á virtud de advertencia hecha por el señor Fiscal, se declaró incompetente para conocer de la apelación entablada contra la sentencia que dictó el Juez del Circuíto de Guaduas, en el juicio seguido entre Alejandro Weckbecker y el Departamento de Cundinamarca, á que se refiere este expediente ; y dispuso remitir á esta Corte los autos, considerando que es á ella á quien corresponde decidir acerca del recurso intentado.

La ley 61 de 1886, publicada desde el cinco de Diciembre del mismo año, atribuyó, en su artículo 100, á los Tribunales Superiores de Distrito, el conocimiento en primera instancia en los litigios que se susciten entre particulares y los Gobiernos de los Departamentos ; y en el inciso 3.°, sección 2.ª del artículo 21, atribuyó á la Corte Suprema el conocimiento en los recursos que se interpongan contra las sentencias definitivas pronunciadas por los Tribunales Superiores de Distrito en los negocios á que se ha hecho referencia.

De lo dicho resulta, que después de la vigencia de la ley mencionada, los Jueces de Circuíto no han tenido atribución para decidir acerca de las contiendas entre los particulares y los Departamentos, como lo hizo el Juez de Guaduas en su sentencia de cinco de Febrero del corriente año : que el Tribunal de Cundinamarca tampoco pudo avocarse el conocimiento en segunda instancia en el negocio de Weckbecker y el Departamento de Cundinamarca, como lo hizo, substanciando el negocio y llevándolo hasta el estado de citar para sentencia ; y últimamente, que la Corte no puede, en modo alguno, conocer en el estado que actualmente tiene este asunto, porque ella sólo puede ocuparse de los recursos que se interpongan contra las sentencias definitivas que dicten los Tribunales en primera instancia, cosa que no sucede en el presente caso.

Por lo expuesto, la Corte Suprema se declara incompetente para conocer en este asunto, en la forma y estado que tiene ; y ordena devolver el expediente al Tribunal Superior del Distrito de Cundinamarca, para que él providencie lo que sea legal y oportuno.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En primero de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, treinta y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos :—Alejandro Weckbecker entabló ante el Juez del Circuíto de Guaduas interdicto de restitución de posesión, por despojo, respecto de varios terrenos ubicados en jurisdicción del Distrito de Puerto de Bogotá, y como se hiciera oposición, se siguió juicio ordinario de posesión. Al cabo, dicho Juez pronunció sentencia, el treinta de Mayo del presente año, y Aparicio Saavedra, como apoderado de Weckbecker, pidió revocatoria de la sentencia, y subsidiariamente que se le concediese apelación para ante el Tribunal Superior del Distrito judicial de Cundinamarca ; y no habiendo accedido el Juez al pedimento sobre la revocatoria, concedió la apelación en ambos efectos, para ante dicho Tribunal, como lo había solicitado la parte interesada.

Vino el expediente al Tribunal, y éste, por resolución del día diez y siete del presente mes, se declaró incompetente para conocer del negocio en segunda instancia, conforme, dijo, á lo dispuesto en el artículo 21, sección 2.ª, inciso 3.° de la ley 61 de 1886 y en el artículo 9.° de la ley 46 del presente año ; y en consecuencia, dispuso que el negocio pasase á esta Superioridad. Se hace necesario, antes de dar paso alguno, resolver si la Corte tiene ó nó facultad para conocer de la apelación, en su estado actual.

En el presente caso la cuestión tiene un aspecto particular. Conforme al artículo 100 de dicha ley 61, la jurisdicción pertenece, en primera instancia, al respectivo Tribunal Superior, cuando hay litigio entre un particular y el Gobierno de un Departamento ; y la Corte no es competente, según el citado inciso ó numeral 3.° del artículo 21, sección segunda de la misma ley 61, para conocer de los recursos que se interpongan en dichos litigios especiales, sino cuando la sentencia apelada ha sido pronunciada en primera instancia por un Tribunal Superior de Distrito.

Ahora bien, en el caso de que se trata, la sentencia de primera instancia ha sido pronunciada el treinta de Mayo del presente año, por el Juez de Circuíto de Guaduas, cuando yá estaba rigiendo la ley 61 de 1886, cuya publicación se hizo en el *Diario Oficial*, del cinco de Diciembre del mismo año. Quince días después de su promúlgación en la capital del Departamento estaba en vigor en Guaduas esa ley, y desde ese momento el Juez de Circuíto dejó de ser competente, y debió pasar el negocio al Tribunal Superior para que continuase conociendo en primera instancia, conforme al citado artículo 100 de la ley de que se trata.

Es, pues, evidente la irregularidad de todo lo que ha hecho el Juez del Circuíto de Guaduas desde que en esa ciudad comenzó á regir la tantas veces citada ley 61.

Por estas consideraciones, la Corte Suprema de Justicia se declara incompetente para conocer de este negocio, en su estado actual, dado que no se trata de la apelación de una sentencia

pronunciada en primera instancia por un Tribunal Superior; y dispone que se devuelva el expediente al Tribunal Superior de Cundinamarca para que resuelva lo que sea de su incumbencia.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En primero de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto que antecede al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

NEGOCIOS DIVERSOS

República de Colombia—Departamento de Panamá—Presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial—Número 28—Panamá, 8 de Agosto de 1887.

Señor:

He tenido el honor de recibir el día 3 del mes en curso, el telegrama que S. Señoría se sirvió dirigirme con fecha 27 del pasado, en que se me comunica la resolución adoptada por el alto Tribunal que dignamente presidís, relativa á la manera como deben pronunciar los Tribunales de Distrito todos sus fallos en cualquier instancia, si no están divididos por la ley en dos Salas, y cómo deben proceder también si lo estuvieren, según el respectivo negocio, ya sea civil ó criminal. Todo sin perjuicio de que la secuela del juicio ó de la instancia sea encargada á un Magistrado substanciador.

Grato me es acusar á S. Señoría el correspondiente recibo del telegrama origen de la presente, teniendo la satisfacción de manifestarle que las doctrinan que lo entrañan yá están puestas en práctica en este Tribunal y surten desde luégo sus efectos legales.

Soy de S. Señoría á quien tengo el honor de dirigirme, su muy atento y seguro servidor,

AGUSTÍN JOVANÉ.

A S. Señoría, el Presidente de la Corte Suprema de la República.—Bogotá.

República de Colombia—Departamento Nacional del Cauca—Presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial—Número 47—Pasto, 11 de Agosto de 1887.

A S. Señoría el Presidente de la Excelentísima Corte Suprema de la Nación—Bogotá.

En vista de la importante circular de V. Señoría, de 27 de Julio próximo anterior, alusiva á la manera como los Tribunales Distritoriales deben pronunciar todos sus fallos en Cuerpo de todos sus Magistrados, en cualquier instancia, si no están divididos por la ley en dos Salas, y lo demás que ella contiene, la Corporación que tengo la honra de presidir, en el Acuerdo de fecha 9 del mes que rige, dispuso que por mi órgano se contestara á V. Señoría, que los actos por ella ejecutados, han sido conformes con las prevenciones contenidas en la nota referida.

Preséntaseme esta nueva ocasión, para repetirme de V. Señoría, obsecuente y respetuoso servidor,

JOSÉ MARÍA NAVARRETE.

República de Colombia—Poder Judicial del Magdalena—Número 67—Presidencia del Tribunal Superior — Santa Marta, 26 de Agosto de 1887.

Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia.—Bagotá.

Tengo el honor de avisar recibo á Su Señoría del telegrama de fecha 27 de Julio próximo pasado, en el cual se sirve transmitirme la resolución que con fecha 26 del mismo mes dictó esa Suprema Corte, sobre el deber que tienen los Tribunales de Distrito de pronunciar sus fallos en cuerpo de todos sus Magistrados, en cualquier instancia; sin perjuicio de que la secuela del juicio ó de la instancia sea encargada á un Magistrado substanciador, hasta la preparación de cada fallo inclusive.

Dios guarde á Su Señoría.

M. R. FLÓREZ.

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL

Señores Magistrados.

El Tribunal Superior del Distrito judicial del Cauca os consulta la sentencia que profirió el 1.° de Abril último, por la cual confirma la dictada en 24 de Febrero id. por el Juez de la Provincia en lo criminal de Palmira, en la causa seguida contra Alejandro Pino por el delito de asesinato.

Por la sentencia confirmada se condenó al reo Alejandro Pino á sufrir la pena de muerte señalada por el artículo 441 del Código Penal de Cundinamarca sancionado en 1858.

Este Ministerio prescinde del examen jurídico de la sentencia consultada, y se limita á observar que el proceso adolece de la causal de nulidad proveniente de falta de jurisdicción en el Juez que falló el juicio en primera instancia, pues estando vigente la ley 61 de 1886 cuando se profirió el fallo condenatorio confirmado por el Tribunal, no era el expresado Juez provincial el competente para conocer de la causa, sino el Juez Superior del Distrito judicial del Cauca, á cuya circunscripción pertenece la Provincia de Palmira, por cuanto así quedó establecida, por ministerio del artículo 102 de la citada ley 61, la jurisdicción para los delitos de la naturaleza del que es materia del fallo que se consulta.

Por idéntico motivo se anuló el proceso seguido contra el reo Juan Chaves, según puede verse de la sentencia dictada en dicho proceso por esa Superioridad, el día 15 de los corrientes.

En consecuencia, este Ministerio os pide que, previa la correspondiente reposición de la causa, ordenéis que el asunto vuelva al Juez Superior del Distrito del Cauca, para que él aprehenda el conocimiento y le dé el curso legal, debiéndose hacer la devolución por conducto del Tribunal que os dirigió la consulta.

Bogotá, 19 de Julio de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

El Tribunal Superior de Cundinamarca, en la Sala de lo criminal, os remite en consulta el auto de sobreseimiento dictado en estas diligencias, instruídas para averiguar si el señor Marceliano Vargas, en su calidad de Juez 2.° del Circuíto de Bogotá, había incurrido en responsabilidad, al expedir un certificado á petición de Esteban Daza.

El cargo por el cual el Tribunal de primera instancia, declaró que había lugar á seguir de oficio la instrucción de estas diligencias, consiste en lo siguiente:

Daza solicitó, entre otras cosas, que el Juez 2.° del Circuíto certificara en un juicio civil seguido contra el mismo Daza, sobre esta pregunta: "Si es verdad que la prueba testimonial es la *única* aducida por mis contrapartes en favor de sus pretensiones." El Juez contestó: "Además de la prueba testimonial á que se refiere este punto existen otras en favor de las pretensiones que sostuvo la parte contraria á la solicitante." El denunciante tachó de falsa esta respuesta y ese es el motivo del denuncio; pero basta examinar el expediente á que se refiere el certificado, y se viene en conocimiento de que en la sentencia que condenó al peticionario y que figura en dicho juicio civil se tuvo como prueba (y lo era en efecto), la contestación de la demanda dada por el denunciante, en la cual Daza había negado su carácter de heredero. Ninguna prueba produjo Daza sobre el hecho que negaba, mientras que el denunciante sí probó lo contrario, es decir, que Daza sí era heredero de su padre, y que estaba en posesión de la herencia. La negativa de Daza y la comprobación de que con ella faltó á la verdad, ha sido considerada, pues, como una prueba, que no es testimonial, en favor de las pretensiones de la parte contraria á Esteban Daza, en el juicio civil de que se ha hablado.

En consecuencia, el señor Marceliano Vargas no ha incurrido en responsabilidad alguna por el hecho denunciado, y debe confirmarse, por consiguiente, el auto de sobreseimiento consultado.

Bogotá, 22 de Julio de 1887.

CARMELO ARANGO M.

BOGOTÁ.—IMP. DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 39

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 1.° de Octubre de 1887.

CONTENIDO.

Pág.

PERSONAL DE LA CORTE SUPREMA.

Nota relativa al mes de Septiembre..... 305

ACUERDOS DE LA CORTE.

Acuerdo número 74, relativo á una consulta del Tribunal Superior de Antioquia sobae suplentes de Jueces..... 305
Id. número 79, relativo á una competencia negativa..... "
Id. número 80, sobre una consulta del Tribunal Superion del Tolima, relativa á varios puntos dudosos..... 306
Id. número 81, para resolver una consulta del Tribunal Superior de Cundinamarca, relativa á ciertos delitos de falsificación..... "

RECURSOS DE CASACIÓN.

Auto por el cual se declara inadmisible un recurso relativo á casación..... 307

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Absolutoria, en un juicio de cuentas, á favor de José María Forero Segura..... "

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES

Sobre incompetencia de la Corte para conocer de un sumario sobre contrabando..... 308
Sobre nulidad de un proceso, por asesinato, seguido en Palmira..... "
Revocatorio de un auto proferido por el Tribunal Superior de Pasto. 309
De sobreseimiento en un sumario seguido contra un Administrador de Aduana..... "
Que revoca un auto del Tribunal Superior de Antioquia y ordena abrir un juicio de responsabilidad..... 310

NEGOCIOS CIVILES

Confirmatorio de un auto dictado en juicio ejecutivo por un Juez del Circuito Bogotá..... "
Que niega la revocatoria del precedente auto..... 311

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL

Relativa á un juicio de expropiación..... "
Id. á un juicio ejecutivo trabado en Medellín á virtud de jurisdicción coactiva..... 312

GACETA JUDICIAL.

PERSONAL DE LA CORTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE.

El 20 de Septiembre de 1887 entró el 6.° Suplente, doctor Aristides Forero, en reemplazo del doctor Manuel J. Angarita, quien se retiró con licencia.

El 26 de los mismos volvió á ocupar su plaza de principal el doctor Aristides Calderón, y salió el doctor Francisco A. Fernández, que la ocupaba como 2.° Suplente.

El 28 entró de nuevo el señor doctor Fernández, por llamamiento del Poder Ejecutivo, conforme á la ley, en el lugar que ocupaba el señor doctor Aristides Forero.

El Secretario,

Ramón Guerra A.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

ACUERDO NUMERO 74.

En la ciudad de Bogotá, á diez y seis de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, se ocupó en considerar la consulta que hace el Tribunal del Distrito judicial de Antioquia, por telegrama fecha tres del mes en curso, el cual es como sigue:

"Señor Presidente de la Corte Suprema.

"Sírvase Su Señoría someter á la decisión de la Corte Suprema la siguiente consulta: Agotados en el Juzgado de un Circuíto los Jueces principales y suplentes, por impedimento, y no existiendo medio de llenar el vacio como lo prevee el artículo 54 del Código Judicial Antioqueño ¿qué se hace para que los juicios puedan seguir su curso legal? El caso ha ocurrido en el Circuíto de Antioquia.

De Su Señoría atento servidor.

SILVERIO ARANGO."

El señor Magistrado doctor Angarita, á quien se repartió esta consulta, presentó el siguiente proyecto de resolución:

"El artículo 116 de la ley 57 de 1887 confiere á la Corte la facultad de resolver sobre las dudas que ocurran en la inteligencia de las leyes sobre organización y procedimientos judiciales; pero no le asignó la de llenar los vacios en la aplicación de las leyes, lo cual es precisamente lo que ocurre en el caso materia de la consulta, como lo reconoce el mismo Tribunal, quien dice que no existe 'medio de llenar el vacío.' En consecuencia la Corte se abstiene, por carecer de facultades, de resolver la consulta indicada; no omitiendo hacer presente que conforme al artículo 321 de la ley 153 de este año, las legislaciones seccionales quedaron abolidas, y en consecuencia, ni tiene objeto la cita de ellas, ni aplicación en casos como el presente, de puro procedimiento."

Discutido el anterior proyecto, la Corte lo aprobó por unanimidad, y dispuso que se comunique por telégrafo, mientras se transmite por nota de la Secretaría, y que se publique en la *Gaceta Judicial*.

Con lo cual se concluyó el presente Acuerdo, que firman todos los señores Magistrados, por ante el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 79.

En Bogotá, á veinte de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, se ocupó en considerar la competencia de que se hablará en seguida, y el señor Magistrado doctor Morales, á quien tocó tal asunto en repartimiento, propuso el siguiente proyecto de resolución, que fué aprobado por unanimidad de votos:

"Vistos. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar, con fecha dos de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis, conformándose con el fallo del Jurado de revisión, declaró con lugar á formación de causa contra Fermín Rosario, por el delito de abuso deshonesto.

"Posteriormente el mismo Tribunal observó que el hecho ejecutado había sido el de estupro, y dispuso pasar el proceso al Juez Superior del mismo Distrito judicial, á fin de que aprehendiera su conocimiento, según el artículo 102 de la ley 61 de 1886. El Juez, después de haber expuesto las razones en que se fundaba para no considerarse competente en el asunto, volvió los autos al Tribunal, anunciándole que, en caso de insistencia

quedaba provocada competencia negativa. El Tribunal aceptó la competencia, y con tal motivo ha sido sometido el punto á la decisión de la Corte.

"Las dos observaciones siguientes bastan como fundamento á la presente decisión:

"1.ª Del proceso aparece con claridad que el hecho ejecutado por Fermín Rosario fué el de estupro, y aunque en el auto de proceder se le llamó á juicio por abuso deshonesto, tal circunstancia no tiene significación en el fondo; pues las distintas denominaciones que se den á los hechos, no pueden alterar en nada la naturaleza de éstos; siendo de advertir, en el presente caso, que el hecho "abuso deshonesto" es genérico, y comprende, en consecuencia, otros hechos, entre ellos el estupro que es su especie; y

2.ª Si el hecho ejecutado es el de estupro, el conocimiento del juicio corresponde, con intervención del jurado, al Juez Superior del Distrito Judicial, de conformidad con el artículo 102 de la ley 61 de 1886.

"En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo con el señor Procurador, dirime la competencia, resolviendo que es al Juez Superior del Distrito Judicial de Bolívar á quien compete el conocimiento del juicio seguido á Fermín Rosario.

"Notifíquese al señor Procurador, dése aviso al Tribunal y y al Juez Superior del Distrito judicial de Bolívar, remítase á este funcionario todo lo actuado y publíquese en la *Gaceta Judicial*."

Con lo cual se concluyó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados y el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Francisco A. Fernandez—Aristides Forero Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 80.

En Bogotá, ó veintidós de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, el señor Magistrado doctor Fernández, á quien tocó en repartimiento la consulta de que en seguida se hablará, presentó el siguiente proyecto de resolución:

"Consulta el Tribunal del Departamento del Tolima sobre qué procedimiento debe adoptarse por los Tribunales en los siguientes casos:

"1.° Cuando se trate de recursos de apelación de autos relativos al fenecimiento de cuentas, pronunciados por los empleados superiores de Hacienda del Departamento, ó del Tribunal de Cuentas del mismo.

"2.° Cuando ocurran consultas sobre validez ó nulidad de los Acuerdos de los Concejos municipales, previa suspensión dictada por el Gobernador; y

"3.° Cuando se trate de hacer efectivos los derechos de impuestos sobre las mortuorias, que reconoce el artículo 3.° de la ley 48 del año en curso.

"Procede la Corte á resolver los puntos consultados en la forma siguiente:

"1.° Según la ley 140 de 2 de Agosto último, los Tribunales Superiores de Distrito no deben ocuparse yá en el examen de las cuentas fenecidas por los empleados superiores de Hacienda ó por los Tribunales de Cuentas de los mismos, y no hay, en consecuencia, necesidad de designar determinado procedimiento judicial para cuando se trate de apelaciones de esta clase.

"2.° Los casos comprendidos en el punto segundo deben resolverse en Sala de Acuerdo, como lo establecen el ordinal 4.° del artículo 8.° de la ley 143 de 1887 y la resolución de esta Superioridad de fecha 24 de Agosto próximo pasado (Acuerdo número 66, publicado en la *Gaceta Judicial* número 35); y

"3.° Las cuestiones que se susciten en caso de debate judicial sobre el cobro de los derechos que afecten las mortuorias, se substancian y deciden, según sea la naturaleza de ellas, en la forma establecida en el Código Judicial Nacional, y las leyes que lo adicionan y reforman.

"En ningún caso se aplicarán las disposiciones procesales contenidas en Códigos ó leyes seccionales á la secuela de los juicios que se sigan ante el Poder Judicial."

Discutido el anterior proyecto, fué aprobado por unanimidad disponiendo la Corte que se comunique al Tribunal consultante; con lo cual se concluyó el presente Acuerdo, que firman los sañores Magistrados y el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Francisco A. Fernández—Aristides Forero—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 81.

En Bogotá, á veintitrés de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, se ocupó en considerar la consulta hecha por la Sala de lo criminal del Tribunal Superior de Cundinamarca, relativa á falsificación de monedas, y el señor Magistrado doctor Forero, á quien tocó el asunto en repartimiento, presentó el siguiente proyecto, que fué aprobado por unanimidad de votos:

"El Tribunal Superior de Cundinamarca, en la Sala de lo criminal, ha consultado con esta Suprema Corte algunas dudas que se le ocurren en la aplicación de la legislación penal, las que condensa en los términos siguientes:

"'En resumen: duda el Tribunal si en el intervalo de tiempo que transcurrió desde el 22 de Julio último, día en que quedó abrogado el Código Penal Nacional de 1873 (26 de Junio) que castigaba el delito de que se trata (falsificación, cercenamiento y circulación de monedas) y día también en el cual comenzó la nueva vigencia del Código Penal adoptado, que no define ni castiga el delito de falsificación, hasta el 28 de Agosto de este mismo año, fecha esta última en que comenzó á regir para esta capital la ley de 1887, que nuevamente define y castiga los delitos de falsificación, cernamiento y circulación de monedas, los reos de este delito han dejado de ser justiciables por haber adquirido, durante el período legal de que se ha hablado, el derecho á que se les considere irresponsables, y si conforme á los artículos 4.°, 44 y 45 de la misma ley 153, la nueva ley quitó en dicho interregno el caráter de delito á los hechos yá mencionados, de suerte que los responsables de ellos, por esta omisión del legislador, deban considerarse indultados y rehabilitados.'"

"En vista de los puntos sobre que versa esta consulta, estima la Corte que no es de su competencia resolverla, por no hallarse comprendida en la atribución que le confiere el artículo 116 de la ley 57 de 1887.

"En efecto, como se ve por el contexto de esta disposición, no se atribuye á la Corte la función de resolver sobre todas las dudas que ocurran en *materia de legislación*, como lo cree el Tribunal que hace esta consulta, sino solamente sobre aquellas que se susciten en la inteligencia de las leyes sobre *organización y procedimientos judiciales*, de manera que toda duda referente á la inteligencia de leyes de otra naturaleza, como las substantivas, no puede resolverse por la Corte sin usurpar facultades que no se le han concedido, y sin violar lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución y en el 212 del Código Judicial.

"Tanto la legislación civil como la criminal tienen su parte substantiva y su parte adjetiva; aquélla, que determina la fuente de los derechos y obligaciones, en lo civil, y establece los delitos y las penas aplicables, en lo criminal; y ésta, que establece el procedimiento para hacer efectivos los primeros y averiguar y castigar los segundos. El Código Penal, es, pues, la legislación substantiva en materia criminal; él no señala procedimiento alguno para los juicios de esta clase, ni hace otra cosa que determinar los actos punibles y señalarles las penas correspondientes.

"Ahora bien: como la consulta que se hace no se refiere al procedimiento que deba seguirse en la investigación ó juzgamiento de éste ó aquel delito, sobre lo cual parece que no abriga dudas el Tribunal consultante, sino sobre la calidad de punibles que tengan los actos de falsificación de moneda, ejecutados con anterioridad al 24 de Agosto último, fecha en que se puso en vigencia la ley 153 del corriente año; es decir, sobre si estos hechos pueden considerarse como delitos para el efecto de juzgarlos y castigarlos, lo cual, indudablemente pertenece al dominio de la legislación substantiva en materia criminal; es claro que la Corte carece de facultad para resolver consultas de esta naturaleza.

"A juicio de la Corte, las dudas que en la inteligencia de las leyes ocurran á los Magistrados ó Jueces en puntos distintos de los que á ella corresponde resolver, deben resolverlas en cada caso particular, formando su criterio de acuerdo con las reglas generales de interpretación, intertanto que el legislador las aclare, é interprete las disposiciones que las originan, de un modo generalmente obligatorio.

"En fuerza de las consideraciones que quedan expuestas, la Corte declara que no es competente para resolver la consulta mencionada.

"Comuníquese esta determinación al Tribunal que hizo la consulta, y publíquese para conocimiento de los demás Tribunales y Juzgados."

Con lo cual se concluyó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados y el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Francisco A. Fernández—Aristides Forero—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

RECURSOS DE CASACIÓN Y DE HECHO.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Septiembre cinco de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—En un juicio civil seguido entre Leonisa Jordán, curadora de su hija menor Clemencia Ismenia Fernández y Carolina y Felisa Fernández, sobre sucesión intestada de Gertrudis Sánchez, el Tribunal Superior del Distrito judicial de Popayán pronunció sentencia en veinticinco de Abril del año en curso, declarando que la menor dicha es heredera de Gertrudis Sánchez, en concurrencia, y por partes iguales con Carolina y Felisa Fernández, en cuyos términos confirmó, con costas, la sentencia de primera instancia.

Las dos últimas interpusieron, con fecha veintiuno de Mayo último, recurso de casación, fundándolo en las causales 1.ª y 2.ª del artículo 38 de la ley 61 de 1886, y el Tribunal lo negó en virtud de lo dispuesto en el artículo 65 de la misma ley. Del auto en que esto se hizo apeló, para ante esta Suprema Corte, el doctor Salvador Valencia, como apoderado de Carolina y Felisa Fernández, y concedido el recurso y traída la causa para resolverlo, lo primero que ocurre examinar es si el auto es apelable.

Según el artículo 898 del Código Judicial (nueva edición) "siempre que se deniegue el recurso de apelación en cualquier juicio, podrá la parte agraviada ocurrir de hecho al Superior para que él lo conceda y substancie si fuere legal;" y de esto se deduce que el auto en que se niega la alzada, no es apelable, y que el recurso de hecho se dirige á que se otorgue el de apelación denegado por ese auto, que en el caso de que se trata fué el de casación relativo á la sentencia dictada en segunda intancia sobre el negocio principal.

De notarse es, por otra parte, que dicho apoderado apeló el treinta y uno de Mayo del auto de veintisiete del mismo mes, en que negó el Tribunal el recurso de casación, y que, sin embargo de que la apelación le fué concedida, ocurrió de hecho el once de Junio ante esta Superioridad, la cual declaró inadmisible el recurso por las razones legales consignadas en el auto de diez y nueve de Julio último, notificado al apoderado de Carolina y Felisa Fernández el veinticinco del mismo mes. Intentado, pues, y resuelto el recurso de hecho, el de apelación es inadmisible, no sólo por las razones expresadas, sino por las siguientes:

1.ª Porque en los negocios de que conocen los Tribunales en segunda instancia, la Corte Suprema sólo puede conocer de los recursos de casación que se interpongan de las sentencias definitivas que en ellos recaigan, ó de los de hecho cuando aquellos se nieguen;

2.ª Porque aun suponiendo que el recurso intentado fuera el de casación y relativo á una sentencia, él sería inadmisible, por no fundarse ésta en leyes que rijan en toda la República, ó de carácter general, como lo exige el artículo 65 de la ley citada, sino en leyes del Cauca, aplicables solamente á los negocios de aquel Departamento hasta que comenzó á regir la ley sobre unificación de la Legislación Nacional; y

3.ª Porque para intentar recurso de casación, por medio de apoderado, requiere el artículo 42 de la ley 61 de 1886 poder especial, y el que obra en autos no es de esta clase ni menciona siquiera tal recurso.

Por estas razones, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara inadmisible el recurso de apelación que el apoderado de Carolina y Felisa Fernández interpuso en treinta y uno de Mayo último, del auto en que el Tribunal Superior del Distrito de Popayán negó el recurso de casación por falta de derecho para intentarlo.

Hágase saber esta resolución, déjese copia de ella, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente al Tribunal de su procedencia para los fines consiguientes.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En siete de Septiembre de mil ochocientos ochenta, y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, quince de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Administrador general de Correos nacionales, José María Forero S., interpuso apelación para ante la Sala respectiva, del auto que dictó el Contador de la Sección 2.ª de la Oficina General de Cuentas, con fecha veinticinco de Junio de mil ochocientos ochenta y cinco, deduciendo á cargo del responsable de las cuentas de aquella Administración, correspondientes al mes de Febrero del mismo año, un alcance líquido de novecientos setenta y cuatro pesos, cincuenta y siete y medio centavos ($ 974-57½ centavos).

Confirmado dicho auto por el de la Sala de apelación, de diez y nueve de Julio de mil ochocientos ochenta y seis, se apeló á su vez de él, en el acto de la notificación, para ante esta Corte Suprema, á la cual se han remitido los correspondientes fallos originales, con todos los documentos que constituyen la cuenta del referido mes de Febrero

Substanciado el recurso en la forma legal, ha llegado el caso de decidirlo y para ello se considera:

1.° Que el cargo deducido contra el responsable se hace consistir en que Ignacio Ruiz, Oficial de recibo de la Oficina telegráfica central, encargado como tal del expendio de las estampillas telegráficas en esta Capital, resultó alcanzado en la suma expresada, tomándola de los fondos que había recaudado; y como dicho Oficial dependía del Jefe de la misma Oficina, Clemente Martín, quien debió exigirle la fianza que asegurara su manejo, éste quedó responsable del desfalco para ante la Administración general de Correos, como la misma Administración lo era para ante la Oficina General de Cuentas, por virtud del principio fiscal de las tres unidades de cuenta, caja y responsabilidad, consignado en el artículo 1,384 del Código Fiscal, que afecta directa é inmediatamente á todos los Jefes de las Oficinas de manejo;

2.° Que el responsable ha convenido en la exactitud del alcance de que se trata, así como es exacto también que la Oficina telegráfica central depende de la Administración general de Correos nacionales, en lo relativo al ramo de Contabilidad y manejo, puesto que ésta examina las cuentas de aquella y las incorpora en la suyas propias, después de cuya incorporación es cuando las remite á la Oficina General de Cuentas para su examen, reparos y fenecimiento.

3.° Que no obstante lo expuesto, no existen fundamentos bastante claros para decidir que la Oficina telegráfica central sea dependiente de la Administración general de Correos, para

el efecto de la responsabilidad de que trata el primer inciso del artículo anteriormente citado, pues aparte de que esas son oficinas que tienen cada una su Jefe inmediato, distinta organización, empleados también distintos y con funciones heterogéneas, hay la circunstancia de que el artículo 125 del Decreto número 873 de 1881, orgánico del Ramo telegráfico, dispuso que dicha Oficina central dependiera de la Sección de Telégrafos de la Secretaría de Fomento, pero que rindiera sus cuentas á la referida Administración General; á lo cual se agrega que Su Señoría el Ministro de Fomento, en oficio de diez y nueve de Agosto último, número 1,028, de la Sección 5.ª, ha informado á esta Superioridad, en cumplimiento del auto de la misma, fecha once de ese propio mes: "Que en los años de 1884 y 1885 no se dictó por el Poder Ejecutivo decreto ni resolución por virtud de la cual la Oficina telegráfica Central quedara dependiente de la Administración general de Correos, continuando vigente el artículo 125 del Decreto número 873 de 1881;"

4.° Que aun en el supuesto de que el Administrador general tuviera que responder del manejo y conducta de empleados subalternos que no reciben órdenes de él ni obran bajo su inmediata autoridad, inspección y dependencia, ni aun así alcanzaría á dicho funcionario la responsabilidad por el desfalco descubierto, porque está perfectamente comprobado que exigió del Jefe de la Oficina Central una fianza de seiscientos pesos ($ 600), fijada y establecida así, no por un hecho prudencial ó arbitrario de su parte, sino en cumplimiento de claras y terminantes disposiciones consignadas en el artículo 1,408 y parte final del 189, respectivamente, del Código y Decreto anteriormente citados;

5.° Que la prueba del hecho mencionado en el número anterior, la constituye la segunda parte de la nota del Ministerio de Fomento á que se ha hecho alusión, la cual dice *que el señor Clemente Martín funcionó como Jefe de la expresada Oficina en los referidos años, y otorgó la fianza determinada en la parte final del artículo 189 del citado Decreto, á satisfacción del Administrador general de Correos;* y en la otra comunicación, de primero del presente, número 1,072, explicatoria de la primera, manifiesta no constar en el archivo de aquél Despacho que el Administrador general, Forero, tuviera autorización expresa para exigir y aceptar la fianza. Sólo hay constancia, dice, *de que dió cuenta con fecha 22 de Julio de 1881, señalada con el número 219, al señor Secretario de Fomento, con el testimonio de la escritura de fianza otorgada por el señor Martín en seguridad de su manejo;* y

6.° Que si en la exigencia de dicha fianza el responsable procedió oficiosamente ó en cumplimiento de su deber, siempre es indisputable que llevó la previsión hasta donde pudo legalmente llevarse, para preservar al Gobierno del abandono ó fraude que en el presente caso pudieran cometer los encargados de la recaudación de la renta de estampillas; y tanto más, cuanto fué él quien dispuso la visita en la Oficina Central, descubrió el fraude cometido por el 2.° Oficial de recibo, practicó la liquidación correspondiente y dió cuenta, con los documentos del caso, al Juez ejecutor, para asegurar, en cuanto dependió de su parte, los derechos de la Nación, cuya determinación fué aprobada por el Secretario de Gobierno, según consta de la nota de ese Despacho de fecha 23 de Febrero de 1885, número 2,225, de la Sección 3.ª.

Por lo tanto, la Corte Suprema de la Nación, oído el concepto del señor Procurador general, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el mencionado auto de la Sala de apelación, de la Oficina general de Cuentas, fecha diez y nueve de Julio de mil ochocientos ochenta y seis, en la parte en que eleva á cargo líquido contra el Administrador general de Correos nacionales, José María Forero Segura, la suma de novecientos setenta y cuatro pesos, cincuenta y siete y medio centavos ($ 974-57½ centavos) deducido de las cuentas de dicha Administración correspondientes al mes de Febrero de mil ochocientos ochenta y cinco, y se absuelve en consecuencia á dicho responsable del expresado cargo ó alcance que contra él se dedujo.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del quince de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete, publiqué esta sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Septiembre tres de mil ochocientos ochenta y siete.

El Juez del Circuíto de Lorica, en el Departamento de Bolívar, ha remitido á esta Superioridad, en consulta, el auto de sobreseimiento de fecha dos de Julio próximo pasado, proferido en el sumario instruído en averiguación del delito de contrabando y de los responsables de él; instrucción que se verificó á virtud de una denuncia en que aparecen como sindicados un señor Castañeda y Diego y José Miguel Martínez. No siendo yá competente la Corte para conocer de las causas por delitos de contrabando, de conformidad con la ley 61 de 1886, se ordena remitir la actuación al Tribunal Superior del Distrito judicial de Bolívar. Dése conocimiento de esta resolución al Juez del Circuíto de Lorica.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la misma fecha notifiqué el auto que antecede al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Septiembre tres de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Por el delito de asesinato, perpetrado en la persona de Juan de Dios Cuesta el nueve de Enero del año en curso, en el Distrito de Palmira del Departamento del Cauca, fué llamado á juicio Alejandro Pino por el Juez provincial del crimen, quien ajustó su procedimiento á la ley caucana, número 59, de 15° de Octubre de 1875. Conforme á ésta, tocaba al Jurado del Circuíto calificar los hechos, y sacados á la suerte los individuos que debieran componerlo, dictaron su veredicto el veinticuatro de Febrero último en estos términos:

"Se ha cometido el delito de asesinato.

"Alejandro Pino es responsable de esta infracción.

"Alejandro Pino es autor principal."

Y se abstuvieron de resolver la cuarta cuestión propuesta por el Juez de la causa y formulada así:

"En qué grado es responsable Alejandro Pino?"

En vista del veredicto y teniendo el Juez en consideración que, siendo la pena determinada, y no admitiendo máximo ó mínimo, era innecesaria la resolución de dicha cuestión, pronunció sentencia en la misma fecha, declarando infame á Pino y condenándolo á sufrir la pena de muerte, á pagar las costas del proceso, y á indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, sujetándose á las disposiciones del Código Penal de Cundinamarca de 16 de Octubre de 1858 adoptado para la Nación.

Notificada esa sentencia, interpuso el defensor del reo los recursos de nulidad y apelación para ante el Tribunal del Distrito judicial del Cauca, y éste, previa audiencia del Fiscal y del defensor, declaró en su sentencia de primero de Abril último que no había nulidad en la causa, y, confirmando el fallo de primera instancia, dispuso que se consultara el suyo con esta Suprema Corte, de conformidad y para los efectos del artículo 37 de la ley 61 de 1886.

Redibido el proceso y substanciada la consulta del modo prevenido en la ley que se acaba de citar, tanto el señor Pro-

curador general como el defensor que se le nombró al reo, han pedido que se declare nula la causa por incompetencia del Juez que ha conocido de ella, y traída á la vista, para resolver el punto, considera la Corte:

1.° Que el artículo 102 de la citada ley 61 creó en cada Distrito judicial un Juzgado Superior llamado á conocer, entre otros delitos graves, del de homicidio, que, conforme al Código Penal vigente, comprende el de asesinato;

2.° Que sancionada dicha ley el 25 de Noviembre de 1886 y publicada en el número 6,886 del *Diario Oficial* de fecha 5 de Diciembre del mismo año, ella estaba en vigor en el Departamento del Cauca el 18 de Enero de 1887 en que el sumario instruído para averigvar el delito de que se trata y su autor, le fué pasado al Juez del crimen de la Provincia de Palmira por el funcionario de instrucción; pues hay constancia en la Corte de que tal ley comenzó á regir en aquél Departamento desde el trece de dicho mes;

3.° Que retirada á los Jueces de Circuíto ó provinciales la facultad de conocer de los delitos mencionados en el artículo 102 de la ley 61 de 1886, y atribuídos únicamente á los Jueces Superiores, el Juez provincial de Palmira no pudo avocar el conocimiento de una causa que no era yá de su competencia, y por haberlo hecho, lo actuado por él, y el fallo que pronunció, adolecen de nulidad, á virtud de lo dispuesto en la causal 7.ª del artículo 38 de la ley 61 varias veces citada, y porque, por regla general, la falta de jurisdicción induce nulidad en los juicios, particularmente cuando ella es improrogable, como en el caso presente;

4.° Que nulo como es lo actuado en la primera instancia, lo es consiguientemente ló actuado en la segunda, inclusa la sentencia consultada;

5.° Que según esto, la Corte no puede ni debe entrar en el fondo del negocio, porque el inciso 2.° del artículo 51 de la ley 61 dispone, que cuando la nulidad se funde en las causales 7.ª ó 9.ª del artículo 38, la Corte se limite á declararla, y á resolver lo que sea consecuencial; y

6.° Que por igual motivo declaró nulo la Corte, en quince de Julio último, el juicio seguido por asesinato, contra Juan Chaves, por el Juez provincial del Atrato.

Por estas consideraciones la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara nula la sentencia consultada, y todo lo actuado desde que el sumario se le pasó al Juez del crimen de la Provincia de Palmira y dictó éste el auto de 18 de Enero del corriente año, que obra al reverso de la página 13; y dispone, en consecuencia, la reposición de la causa desde esa página en adelante, para lo cual, y para que aprehenda su conocimiento, se pasará lo actuado al Juez Superior del Distrito judicial del Cauca, por conducto del Tribunal del mismo.

Hágase saber esta sentencia, cópiese, publíquese y devuélvase el proceso á dicho Tribunal con el fin expresado.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia de tres de Septiembre de 1887 se publicó esta sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En el mismo día la notifiqué al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Septiembre cinco de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Ha venido á esta Superioridad, á virtud del recurso de apelación, interpuesto por el encargado del Ministerio público, el auto que, con fecha veinticinco de Abril del presente año, pronunció el Tribunal Superior del Distrito judicial de Pasto, llamando á juicio de responsabilidad, por los trámites extraordinarios, al Juez del Circuíto de Túquerres, doctor Víctor Muriel, como infractor de la segunda parte del artículo 316 del Código Penal del Cauca; haciéndose consistir tal infracción en que el acusado, en su carácter de Juez, admitió fianza de cárcel segura á los sindicados del delito de atentado contra la libertad individual, Damián y Antonio Mora y Gregorio Goyes, prescindiendo de la audiencia del Agente fiscal, exigida expresamente para estos casos por el parágrafo 19 del artículo 1.° de la ley del Cauca de 1.° de Octubre de 1885, viniendo, de este modo, á dictar auto de substanciación contra la terminante disposición de la ley.

Substanciado el recurso en esta segunda instancia, se encuentra yá en estado de dictar el correspondiente fallo, y la Corte procede á hacerlo, previas las siguientes consideraciones:

1.ª Es indudable que el acusado omitió el deber que le imponía el parágrafo diez y nueve yá citado, puesto que, según consta de la copia que obra á fojas segunda vuelta de la actuación, al escrito de los sindicados, fecha quince de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis, presentando como fiador de cárcel á Aparicio Mesa, recayó inmediatamente el auto de la misma fecha, admitiendo al fiador; pero á esto observa con mucha razón el señor Procurador general, que la excarcelación no fué concedida por delitos que no la admitían, y que no aparece de autos ninguna circunstancia de la cual pudiera deducirse que el acusado procedía maliciosamente al incurrir en aquella omisión; y

2.ª El acusado es tanto más inculpable en el presente caso, cuanto el referido auto de quince de Diciembre, fué debidamente notificado al Fiscal, sin que por parte de éste se hubiera hecho la menor observación; y no habría equidad en hacer responsable al Juez de un error que pudo haberse corregido inmediatamente por medio del recurso ó de la reclamación correspondiente; sobre todo si se tiene en cuenta que esa notificación surtió en cierto modo los efectos de la audiencia requerida por la ley, puesto que puso al encargado del Ministerio público en camino de oponerse, como sin duda se habría opuesto á la excarcelación, si ésta hubiera sido ilegal.

En tal virtud, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo en todo con el razonado concepto del señor Procurador general, revoca el auto apelado y sobresee en el procedimiento.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la misma fecha se notificó al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Septiembre cinco de mil de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Comenzó esta actuación, formada con el objeto de averiguar la responsabilidad que pudiera caber contra el Administrador Tesorero de la Aduana de Ipiales, Miguel Caicedo, á virtud de una nota de la Jefatura municipal de Obando, fechada en 30 de Septiembre de 1884, en la cual se hace mención de otra nota del mismo funcionario, de 30 de Junio de ese año, que no se encuentra en autos; y también por consecuencia de unas copias pasadas por la Secretaría de Hacienda al señor Procurador general, acompañadas de una larga información de nudo hecho.

La vaguedad de los cargos, y la ninguna precisión tocante á especificar los fraudes que someramente se indican, contra el expresado Administrador de esa época, dieron lugar á repetidas ampliaciones ordenadas por este Supremo Tribunal, empleándose en ello largo tiempo, y formándose un voluminoso expediente, sin resultado alguno que determine un cargo que pueda ser motivo para llamarlo á juicio.

El sumario no tiene sino una serie de recriminaciones recíprocas entre el Jefe del Municipio, el del Resguardo y el Administrador de la Aduana, amén de varios informes del mismo tenor, evacuados por algunos Alcaldes. En suma, como con mucha exactitud lo ha observado el señor Procurador en las repetidas vistas que ha dado yá en esta actuación, no se ha conseguido aclarar, ni menos precisar debidamente, los hechos que puedan constituír fraude ó mal manejo del Administrador Caicedo, tocante á la Aduana que estaba á su cargo; y ni aun hay motivo para adelantar la investigación respecto de

otros funcionarios que aparecen mencionados en el expediente y, á virtud de las recíprocas inculpaciones, porque respecto de ninguno aparece un cargo determinado.

Por lo expuesto, la Corte Suprema Nacional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que las precedentes diligencias no prestan mérito para proceder; y en consecuencia, ordena el sobreseimiento.

Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Bnjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En seis de Septiembre de 1887, notifiqué al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Septiembre diez y nueve de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Inspector de Policía de San-Cristóbal, en el extinguido Estado de Antioquia, llamó, por resolución de dos de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco, á Emiliano Amaya y á otros individuos á responder del cargo comprobado de haber infringido el Código de Policía, jugando dinero á los dados, el treinta de Agosto del mismo año, en el sitio del Guamo, y, por sentencia proferida en ocho de Marzo de mil ochocientos ochenta y seis los condenó á trabajar en obras públicas por el término de doce días. Apelado ese fallo para ante el Prefecto de la Provincia del Centro; fué confirmado, y, cuando se trataba de darle cumplimiento, ocurrieron Pedro Alvarez y Emiliano Amaya al Inspector de Policía de San-Cristóbal, pidiendo que se declarara prescrita la pena por haber transcurrido el término señalado al efecto por el artículo 37 de la ley 137 de 1882, adicional y reformatoria del Código de Policía. El Inspector no accedió á la solicitud, y, apelada su determinación, el Prefecto de la Provincia, Rubén Restrepo, mandó cumplir la sentencia, por cuanto estaba ejecutoriada.

Emiliano Amaya ocurrió entonces al Juez del Circuíto en lo criminal, denunciando el abuso de autoridad en que, dijo, había incurrido el Prefecto, por no haber declarado prescrita la pena, y recibida su declaración jurada y las de los testigos que citó. pasó dicho Juez lo actuado, incluso el juicio de que se ha hecho mérito, al Tribunal Superior de Antioquia, quien dictó auto de sobreseimiento que ha consultado con esta Superioridad.

Dado en vista el expediente al señor Procurador general, éste, después de manifestar que el auto apelado se funda en disposiciones posteriores é inaplicables al hecho que se investiga, ha concluído por pedir su confirmación, por no advertirse en la providencia dictada por el Prefecto voluntaria y maliciosa violación de la ley.

Para resolver este punto y la consulta en el fondo, observa la Corte lo siguiente:

El hecho que motivó el juicio de policía tuvo lugar, como se ha dicho, el treinta de Agosto de mil ochocientos ochenta y cinco, y el cuatro de Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis, es decir, después de un año, fué cuando Amaya alegó prescripción de la pena, no cumplida hasta entonces, fundándose en el artículo 37 de la ley 137 antes citada.

Según ese artículo, *las penas* de que trata el Código de Policía se prescriben dentro de doce meses las no corporales, y dentro de diez y seis las corporales, contados desde la comisión del hecho que las ocasionó; y no corporal es la de trabajar en obras públicas, conforme al inciso 9.° del artículo 21 del Código Penal de Antioquia, citado también por Amaya en el escrito en que pidió se declarara prescrita la pena.

Si, pues, el artículo 37 de la ley 137, general como es, comprende no sólo los juicios pendientes, sino también los fenecidos, y el tiempo de la *prescripción* de la pena había transcurrido, el Prefecto Restrepo debió declararla, máxime habiéndosele citado las disposiciones legales que la establecían, y no decir, como dijo en su resolución de la página 40, que no adivinaba el objeto con que el expediente había vuelto á su despacho, estando ejecutoriada la sentencia que recayó, porque claramente manifestó Amaya que pedía la declaratoria de prescripción, apoyado en disposición expresa de la ley, punto que debió resolver de conformidad, en vez de mandar cumplir la sentencia.

Para justificar ese procedimiento, son inconducentes las citas que se hacen, en el auto consultado, de los artículos 85 y 88 del Código Penal de Antioquia, del 33 del de Policía de 16 de Julio de 1886, y del 86 del Nacional, ora porque los dos primeros son inaplicables á los juicios de policía sometidos á disposiciones especiales de preferente cumplimiento, conforme al artículo 6.° del Código Civil del extinguido Estado de Antioquia; ora porque los otros artículos mencionados pertenecen á Códigos expedidos con posterioridad al hecho por que fué llamado á juicio Amaya, y no pueden tener efecto retroactivo, fuera del caso de que trata el artículo 26 de la Constitución en su segunda parte, caso en que no se está. De lo cual se deduce que la única disposición aplicable á la prescripción alegada por Amaya y favorable á éste, era la del artículo 37 de la ley 137 á que se acogió; y no habiéndola cumplido el Prefecto Restrepo, resulta contra él un cargo á que debe responder, porque en toda violación de la ley se supone voluntad y malicia, mientras no se pruebe ó resulte claramente lo contrario.

Por lo tanto, y habida consideración á que el Prefecto de la Provincia del Centro de Antioquia, Rubén Restrepo, faltó al cumplimiento y ejecución de una ley expresa, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el auto de sobreseimiento consultado, y declara con lugar á formación de causa de responsabilidad, por los trámites extraordinarios, contra dicho funcionario, por violación del artículo 475 del Código Penal de Antioquia, vigente al tiempo en que incurrió en la falta. En consecuencia, el Tribunal Superior de aquel Distrito judicial le oirá en los términos prevenidos para el caso en la sección 3.ª, capítulo 3.°, libro 3.° del Código Judicial de la Nación.

Hágase saber este auto, déjese copia de él, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente al Tribunal mencionado, para lo de su cargo.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintiuno de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, cinco de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—En el juicio ejecutivo seguido en esta ciudad contra Clemente Martín por deuda á la Nación, el apoderado del ejecutado interpuso la apelación de *error de cuenta* ante el Juzgado de ejecuciones nacionales, y éste dispuso que se pasara el proceso al Juez del Circuíto para los efectos legales. Admitida la indicada excepción, se abrió á prueba el artículo, y concluído el término probatorio, se dió el expediente en traslado á cada una de las partes por tres días, habiéndolo recibido el 27 de Julio de 1886 el apoderado de Martín, doctor Gonzalo Currea, quien no lo devolvió sino á fines de Marzo del presente año, á virtud de requerimiento ordenado por el Juez. Citadas las partes para sentencia, el Secretario pidió el papel sellado necesario al mismo apoderado, y éste manifestó que suministraría papel común por no deber suministrar de otra clase. Previa solicitud del Agente del Ministerio público, el Juez, por auto de trece de Mayo último, señaló al actor el término de veinticuatro horas para que diese el papel para la actuación, conminándolo, si así no lo hacía, con la declaratoria de haber desistido de la excepción propuesta, todo de conformidad con el artículo 489 del Código Judicial, edición de 1887. De esta resolución interpuso apelación el apoderado de Martín, recurso que le fué otorgado en el efecto devolutivo, por auto de 24 de Mayo próximo pasado, habiéndole concedido el término de diez días para compulsar la copia. El Secretario del Juzgado informó que se había vencido el término para sacar la copia sin que ésta se hubiese compulsado, por no haber suministrado la parte el papel necesario para

ello, é informó también que se había vencido el término de que habla el auto de trece de Mayo, para que la parte suministrara el papel para la sentencia, sin haberlo suministrado, por lo cual el Juez declaró por auto de 24 de Junio último, y previo pedimento del Agente del Ministerio público, que la parte había desistido tanto de la apelación interpuesta como de la petición sobre excepciones. El apoderado de Martín pidió revocatoria del auto de 24 de Junio, é interpuso en subsidio el recurso de apelación. Negada la revocatoria del auto, se concedió de él el recurso de apelación para ante esta Superioridad; y para resolver se considera:

El apelante funda su derecho en que el auto de fecha 24 de Mayo, por el cual se concedió recurso de apelación respecto del de trece del mismo mes, que conminó con la declaratoria de haber desistido el actor de la excepción propuesta, se ha notificado indebidamente, porque la notificación se surtió por edicto extendido en papel común; y que no estando notificado dicho auto, no ha comenzado aún el término para la compulsa de la copia.

Pero como ni el decreto ejecutivo, número 480 de 1886, sobre papel sellado y timbre nacional, ni ley alguna establecen la nulidad de las actuaciones judiciales en que se use papel común, debiendo emplearse sellado, es claro que está debidamente surtida la notificación del auto de trece de Mayo.

Con respecto al auto de veinticuatro de Junio, que es materia de la presente apelación, esta Superioridad lo encuentra enteramente arreglado á las prescripciones del artículo 489 del Código Judicial, edición de 1887, y por ello, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, la Corte Suprema de Justicia lo confirma, con costas á cargo del apelante, que serán tazadas por el señor Secretario dentro de tres días.

Y por cuanto los autos de diez y seis de Junio (foja 43 vuelta) y veintidós de Julio de mil ochocientos ochenta y seis (foja 44 vuelta) de 22 de Marzo y de veinticuatro de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete (foja 49) y las correspondientes diligencias de notificación, se extendieron en papel común, debiendo haberlo sido en papel sellado, se impone á los responsables una multa de cinco pesos á cada uno por cada foja de papel sellado que se omitió, así: Diez pesos al señor Juez, doctor Jesús María Quintero; diez pesos al señor Juez, doctor Adolfo León Gómez y veinticinco pesos al Secretario, señor Nicanor Sánchez Domínguez.

Dése cumplimiento á lo dispuesto en el artículo 232 del Código Judicial, edición de 1887. Notifíquese, cópiese, publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En siete de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Septiembre diez y siete de mil ochocientos ochenta y siete.

El apoderado de Clemente Martín, en ejecución decretada contra éste por el Juzgado de ejecuciones nacionales, ha pedido revocación del auto de esta Superioridad de fecha cinco de Septiembre en curso, por el cual se confirma el de veinticuatro de Junio próximo pasado, en que el Juez *a quo* declara que la parte ejecutada ha desistido de la apelación interpuesta contra el auto de trece de Mayo y de la petición sobre excepciones; y la Corte para resolver, considera:

El solicitante funda su pedimento en dos razones.

Es la primera, que al verificarse en papel común la notificación del auto de fecha veinticuatro de Mayo, se ejecutó un acto contrario á la expresa disposición contenida en el ordinal 10.° del artículo 3.° del Decreto Ejecutivo número 480; y que si para este acto no se señaló por la ley de procedimiento la sanción de nulidad, quedó sin embargo bajo la misma sanción, á virtud de lo que establece el inciso 2.° del artículo 6.° del Código Civil, aplicable en concepto del reclamante, á todos los actos ejecutados contra el expreso mandato de la ley.

Para la Corte, esta razón carece enteramente de fuerza, ya porque la nulidad que consagra el mencionado artículo 6.° del Código Civil no se refiere á los procedimientos, sino á materia civil substantiva; ya porque es indispensable, para que haya nulidad, que el acto ejecutado esté *prohibido* por la ley, porque si nó lo está, no hay nulidad, aunque el acto ejecutado sea *contrario á un mandato expreso de la ley*; y ya porque, conforme al mismo Decreto número 480, la violación del memorado ordinal 10.° apareja responsabilidad al respectivo funcionario, de manera que aun cuando el empleo de papel común fuese un acto de naturaleza tal que estuviera comprendido en el citado artículo 6.° del Código Civil, no sería nulo, por cuanto en el mismo decreto se dispone otra cosa distinta de la nulidad para el caso de contravención.

La segunda razón que se alega es la falta de notificación del auto conminatorio de trece de Mayo de mil ochocientos ochenta y siete, porque la diligencia de notificación se refiere al *auto anterior* "y éste no es el de trece de Mayo, dice el reclamante, contra el cual interpuse el recurso de apelación, sino el de diez y ocho del mismo mes."

Esta Superioridad no estima que tenga carácter de auto la resolución del Juez de Circuito de fecha diez y ocho de Mayo del presente año, relativa á la contestación que debía darse á la comunicación del Juez de Ejecuciones nacionales; y en consecuencia, cuando en la diligencia de notificación de veinte de Mayo se habló de *auto anterior*, se designó indudablemente el auto de trece de Mayo, y así lo entendió el Juez, según consta en el auto de concesión de la apelación, sin que el solicitante hiciera entonces reclamación alguna.

A mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, la Corte niega la revocación del auto reclamado.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL

Señores Magistrados.

El Juez del Circuito de Manizales, en auto de fecha 7 de Febrero de 1884, declaró probada la excepción de inepta demanda propuesta por el apoderado de Liborio Gutiérrez E., en el juicio de expropiación mandado iniciar por orden del Gobierno, para obtener la devolución de una finca raíz, de acuerdo con la ley 38 de 1882.

El Agente del Ministerio público en Manizales, en su calidad de demandante, interpuso para ante vosotros el recurso de apelación contra el mencionado auto, y el expediente ha permanecido demorado hasta el día 16 de Junio último, en que el señor Secretario de ese Supremo Tribunal lo encontró confundido entre los asuntos pendientes, anteriores al año de 1885, y lo puso á vuestro despacho.

Según el artículo 401 del Código Judicial de la Nación, la excepción de inepta demanda tiene lugar: 1.° Cuando la que se propone no está arreglada á lo dispuesto en el Capítulo II, Título I., Libro primero del Código Judicial; 2.° Cuando la demanda se dirija contra diversa persona de la obligada á responder sobre la cosa ó hecho por que se demanda; y 3.° Cuando á la demanda se le da un curso distinto del que le corresponde.

El primer caso se refiere á la forma material del escrito ó libelo de demanda, y, haciendo de él aplicación al caso presente, además de reconocerse por la sola inspección de la demanda que ésta reúne las condiciones legales requeridas, el Juez así lo declaró por auto de fecha 10 de Enero de 1884 (foja 13 vuelta), luego la demanda de que se trata no es inepta, por el primero de los casos enumerados en el artículo 401 citado. Y es evidente que tampoco lo es por haberla dirigido contra diversa persona de la llamada á responder, pues que tal circunstancia no ha sido reclamada por el demandado.

El curso que el demandante pidió se diera á la demanda es el señalado para los juicios de expropiación, y ese es el proce-

dimiento que determina la ley 38 de 1882. Por consiguiente, la demanda tampoco es inepta en este último caso.

La ley 38 de 1882, por la cual se mandó devolver á sus dueños las fincas raíces adjudicadas, durante la guerra civil de 1876 á 1877, al Fisco Nacional ó al de los Estados, para hacer efectivos los empréstitos, suministros, etc., dispuso que por el Poder Ejecutivo se promovieran arreglos con los actuales poseedores ó acreedores hipotecarios de dichas fincas, para facilitar la devolución; pero para el caso de que esos arreglos no se pudieran concluír equitativamente, se previene al Gobierno que haciera promover los correspondientes juicios de expropiación. En ejecución de esta ley, el Poder Ejecutivo dictó el decreto número 607, de 26 de Octubre del mismo año de 1882 (*Diario Oficial* número 5,514), y con el fin de entrar en los arreglos de que trata el artículo 2.° de la ley 38 citada, el Presidente del extinguido Estado de Antioquia, por decreto número 207, de 15 de Diciembre, dispuso notificar á los poseedores ó acreedores hipotecarios de las fincas existentes en aquel Estado. Liborio Gutiérrez E., como poseedor de una de esas fincas, fué notificado, y contestó lo siguiente: "que no entrega voluntariamente la finca que le fué adjudicada el 11 de Marzo de 1879, por la suma de setenta y ocho pesos, porque le pertenece en plena y absoluta propiedad, y aguarda que el Gobierno, haciendo uso de la ley de expropiación, se la arrebate." Después de esa contestación que lleva la firma de Gutiérrez E., y que está autorizada por la autoridad encargada de notificar el deseo del Gobierno, de celebrar los arreglos que debían preceder á la devolución de las fincas, está claro que se estaba en el caso de proceder conforme con lo dispuesto en el artículo 8.° de la misma ley 38 de 1882, promoviendo el respectivo juicio de expropiación.

La excepción dilatoria de inepta demanda, propuesta por el demandado, se funda en que no precedieron los arreglos indicados en el artículo 2.° de la ley, y en eso apoya el Juez de primera instancia el fallo que ha sido apelado.

La ley no exige como indispensable el arreglo, para entrar en el juicio de expropiación, ni podía exigirlo, porque habiéndolo no hay lugar á la expropiación. Esta se debe llevar á efecto en el caso de que no sea posible el arreglo, y como el demandante Gutiérrez E. manifestó que no haría entrega voluntaria de la finca que poseía, sino que esperaba que el Gobierno hiciera uso de la facultad que le concedía la ley para expropiársela, no se comprende la razón de la excepción propuesta.

Por lo expuesto, el infrascrito es de concepto que debéis revocar el auto apelado, disponiendo que el demandado conteste la demanda dentro del término de la ley.

Bogotá, 11 de Julio de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

En el juicio ejecutivo que se sigue contra Ireneo Escobar como fiador solidario de Ulpiano Isaza, Mensajero del Correo Nacional de encomiendas de Medellín á Barranquilla, para hacer efectiva la fianza del citado Escobar en lo referente á la pérdida de una encomienda de $ 1,000, remitida de la primera de dichas ciudades á la segunda, el apoderado del ejecutado propuso en tiempo todas las excepciones enumeradas en el artículo 965 del Código Judicial Nacional.

Admitidas dichas excepciones por el Juez 1.° del Circuíto en lo Civil de Medellín, el excepcionante introdujo articulación para regularizar, según se dice, el procedimiento, á fin de evitar nulidades en el juicio.

El Juez, sin detenerse á considerar las irregularidades apuntadas por el excepcionante, y sin resolver nada sobre ellas, declaró de oficio, por auto de 26 de Febrero último, nulo todo lo actuado en el juicio ejecutivo, fundándose para ello en que el auto por el cual se libró la ejecución no fué autorizado con firma entera por el empleado ejecutor y su Secretario.

El auto en que se declaró la nulidad ha venido á vuestro conocimiento, á virtud de apelación interpuesta por el Administrador principal de Correos Nacionales de Medellín.

El infrascrito comienza por observar que el Juez del conocimiento, al notar la causal de nulidad con que, según él, están viciados desde su principio los autos, en vez de declararla de oficio, debió sujetar su procedimiento al artículo 843 del Código Judicial, que dice en su primera parte: "En cualquier estado del juicio, en primera ó segunda instancia, si el Juez ó Magistrado que conoce de él observare, antes de pronunciar sentencia, que hay alguna causal de nulidad, la pondrá en noticia de las partes, y si cualquiera de ellas pidiere la reposición del proceso, dentro de veinticuatro horas de notificado el auto respectivo, se anulará lo actuado por el Juez ó Tribunal, y se repondrá el proceso al estado que tenía cuando se incurrió en la nulidad. Mas si ninguna de las partes pidiere la reposición del proceso, éste seguirá su curso legal, y yá no podrán alegarse tales nulidades en la ulterior instancia ni en otro juicio de nulidad."

Para prescindir de la disposición transcrita, el Juez se fundó en que, siendo absoluta la nulidad á que se contrae la declaratoria, ésta pudo hacerse sin que precediera para ello pedimento de parte.

Según parece, el Juzgado deriva su opinión de que á la nulidad declarada por él le son aplicables las disposiciones substantivas que reglan las nulidades absolutas en los actos y contratos civiles; lo cual no es aceptable, en concepto del infrascrito, pues claramente se ve que no se trata de actos de esa naturaleza, sino de uno que, por ser puramente procedimental, está sujeto en sus efectos á las reglas del Código respectivo, en el cual están determinados de un modo expreso los casos de nulidad en general, y los especiales para cada juicio.

Sentado esto, y contrayendo, en consecuencia, el punto á las prescripciones del Código Judicial, se viene en conocimiento de que la irregularidad proveniente de no haberse autorizado con firma entera el auto ejecutivo, no está comprendida entre las omisiones é informalidades que constituyen las causales de nulidad que el artículo 838 del Código citado señala como comunes á todos los juicios, ni entre las que son especiales al juicio ejecutivo, según el artículo 480 de idem.

Agréguese á lo expuesto que, en el juicio que se pretende anular, concurre la circunstancia de que el auto ejecutivo en que se incurrió en la irregularidad que ha dado margen á la declaratoria que se examina, fué confirmado, en lo substancial, por auto dictado por esa Superioridad en 30 de Septiembre de 1886.

Verdad es que ese auto, aun cuando ejecutoriado, no le imprimía validez al juicio, si se tratara de una nulidad absoluta; pero esto no ocurre en el caso que nos ocupa, por cuanto la nulidad alegada en él, como se observó antes, no tiene jurídicamente ese carácter.

Por todo lo expuesto, cree el infrascrito que el Juez de primera instancia no debió declarar de oficio la nulidad de que, según él, adolecen los autos, y que, no habiendo pedido ninguna de las partes la reposición de aquéllos por consecuencia de la expresada nulidad, ésta no puede alegarse yá ni aún en juicio separado, y el proceso debe seguir su curso legal como lo previene el citado artículo 843 del Código Judicial.

El infrascrito cree innecesario ocuparse de las irregularidades apuntadas por el personero de los ejecutados, pues, aparte de que el Juez no las tuvo en cuenta para fundar la resolución materia del recurso, ellas están virtualmente resueltas en el auto ejecutoriado de la Corte de que se deja hecha referencia.

En cuanto á la intervención en el incidente, del Administrador principal de Correos de Medellín, el infrascrito estima conveniente observar que, si bien es cierto que dicho empleado está investido de jurisdicción coactiva, y, en esa virtud, pudo, como lo declaró la Corte en el auto antes citado, iniciar la ejecución, no obstante que sobre él pesa la responsabilidad consiguiente al Jefe de la Oficina en que se hizo la entrega de la encomienda perdida, esa jurisdicción no le da personería para intervenir, como ha intervenido, en el incidente de excepciones de que conoce el Juez del Circuíto, pues en ese incidente la Nación ha debido y debe estar representada por el respectivo Agente del Ministerio público.

El infrascrito termina pidiendoos la revocatoria del auto apelado, para que siga adelante el incidente sobre excepciones.

Bogotá, 12 de Julio de 1887.

CARMELO ARANGO M.

BOGOTÁ.—IMP. DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 8 de Octubre de 1887.

CONTENIDO.

Pág.

ACUERDOS DE LA CORTE.

Acuerdo número 82, relativo á una consulta del Tribunal Superior del Cauca, sobre juicios por abuso de la prensa..... 313
Id. número 83, id. á otro id. del Juez 3.° del Circuito de Bogotá..... "
Id. número 84, id. á otro id. del Juez del Circuito de Aguachica..... 314

RECURSOS DE CASACIÓN.

Auto relativo á otro anterior sobre casación..... "
Advertencia..... 315

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Pronunciada en la apelación entablada en juicio contra el Departamento de Antioquia..... "
Id. en confirmación de resoluciones relativas á la reclamación de Braulio Rodríguez, por empréstitos y suministros..... "
Id. id. de id. relativas á la id. de Francisco Vargas y Hermanos, por id..... 316
Id. de id. relativa á la id. de José María Sánchez, por id..... "

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CIVILES

Confirmatorio de un auto relativo á un juicio de cuentas..... 317
Reformatorio de otro del Tribunal Superior de Tunja..... 318

NEGOCIOS CRIMINALES

Sobre incompetencia de la Corte para conocer de un juicio militar... "
Sobre id. de la misma para conocer de otro i..... "
Sobre id. de la misma para id. en un sumario sobre falsificación..... "
Sobre id. de la misma para id. en un juicio militar..... 319

RESOLUCIONES VARIAS.

Relativa á un pedimento sobre rebaja de pena..... "

DOCUMENTOS DIVERSOS.

Diligencia de visita..... "
Nota oficial..... "

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL

Relativas á varios asuntos..... 320

GACETA JUDICIAL.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

ACUERDO NUMERO 82.

En Bogotá, á veintisiete de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, se ocupó en considerar la consulta de que se hablará en seguida, y el Magistrado doctor Morales, á quien tocó tal consulta en repartimiento, propuso el siguiente proyecto de resolución, que fué unánimente aprobado:

"Su Señoría el Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca, consulta con esta Suprema Corte los siguientes puntos:

"1.° Si en los juicios por abuso de la prensa hay lugar á apelación cuando recae veredicto del Jurado;

"2.° Si lo dispuesto en el artículo 48 del Decreto sobre libertad de imprenta es extensivo á todos los casos;

"3.° Si en caso de apelación puede ocuparse el Tribunal en observar y resolver las nulidades comunes á todos los juicios; y

"4.° Si puede actuarse en papel común.

"Respecto del primer punto observa la Corte que el Decreto en referencia expresa los casos en que el Juez conoce con la intervención del Jurado, y el caso único en que el Juez conoce por sí solo, sin la intervención de dicha cooperación: detalla, además, separadamente, el procedimiento que debe adoptarse en cada caso, y únicamente establece el recurso de apelación cuando se trata del inciso 1.°, caso 1.°, del artículo 2.°, esto es, cuando el Juez pronuncia su fallo sin la intervención del Jurado: en los demás casos no se establece ese recurso.

"Esta doctrina del aludido Decreto tiene una explicación muy natural. Al efecto, cuando se trata del inciso 1.° del artículo 2.°, la cuestión se reduce, en rigor, á la investigación de un delito, y de consiguiente debe mediar la calificación legal de las pruebas, y por último resolverse el punto en derecho; lo cual supone la remisión del fallo por el Superior, á fin de que se corrijan los defectos legales que se noten. No sucede lo mismo cuando interviene el Jurado, pues éste aprecia las pruebas y pronuncia su fallo en conciencia, es decir, sin someterse á ninguna tarifa legal.

"El segundo punto está completamente aclarado con las observaciones precedentes, pues en los juicios de imprenta no hay lugar á recurso de apelación, sino cuando se trata del inciso 1.°, caso 1.° del artículo 2.° del Decreto, al cual se refiere el artículo 48.

"Ninguna disposición se encuentra en el mismo Decreto que manifieste hasta dónde se extienden las facultades del Superior, tratándose de la revisión de una sentencia pronunciada en juicios de imprenta; pero la Corte es de concepto que, por analogía, deben aplicarse, respecto de las nulidades, las reglas generales consignadas en el Código de procedimiento, para los negocios criminales; y así resuelve el tercer punto.

"Por último, acerca de la clase de papel que deba emplearse en esos juicios, cree la Corte que debe ser el sellado de 1.ª clase, según el número 11 del artículo 3.° del Decreto sobre papel sellado y timbre nacional, disposición especial para el caso en que intervenga acusador particular.

"En resumen, la Corte resuelve los puntos sometidos á su estudio, de la manera siguiente:

"1.° En los juicios de imprenta, cuando interviene el Jurado no hay lugar á recurso de apelación;

"2.° Lo dispuesto en el artículo 48 del Decreto sobre la materia, solo tiene lugar cuando se trata del inciso 1.°, caso 1.° del artículo 2.°;

"3.° En caso de notarse nulidades, deben aplicarse las reglas generales de procedimiento en materia criminal; y

"4.° En la actuación de dichos juicios debe emplearse papel sellado de 1.ª clase, de conformidad con el inciso 11 del artículo 3.° del Decreto sobre papel sellado y timbre nacional.

"Comuníquese al Tribunal qué ha hecho la consulta, y publíquese en la *Gaceta Judicial*."

Con lo cual se dió por terminado el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados y el infracrite Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Aristides Forero—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*. Secretario.

ACUERDO NUMERO 83.

En Bogotá, á treinta de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte en Sala de Acuerdo con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, el Magistrado señor doctor Noguera, á quien pasó en

comisión la consulta que en oficio de 26 del presente, número 196, eleva á la Corte el Juez 3.° del Circuíto de Bogotá, "acerca de lo que debe practicarse con ciertos expedientes civiles pendientes en dicho Juzgado, que no fueron repartidos cuando debieron haberlo sido, como lo prevenía el artículo 198 (transitorio) de la ley 19 de 1883, del Estado soberano de Cundinamarca," sometió á la consideración de este Supremo Tribunal el siguiente proyecto de resolución:

"Según el artículo 198 anteriormente citado, todos los negocios que, á la expedición de la referida ley, estaban pendientes en los tres Juzgados de lo civil, que existían en el Circuíto de Bogotá, debieron repartirse por el Juez 1.°, entre él y los otros tres Jueces del mismo ramo; y la circunstancia de no haberse dado oportunamente cumplimiento á tal deber, no es una razón para que se omita en absoluto, puesto que ello no sólo redundaría en perjuicio de la Administración de justicia, una vez que, si el repartimiento no se hiciera, los negocios quedarían paralizados por no haber entonces Juez alguno que pudiera legalmente aprehender su conocimiento, sino que, de otra manera, se faltaría á la igualdad en la distribución del trabajo, recomendada expresamente por las leyes y exigida por la equidad.

"En tal virtud, la Corte resuelve la consulta de que se trata, declarando: que todos los negocios pendientes en el Juzgado 3.° del Circuíto de Bogotá y demás Juzgados del mismo Circuíto, respecto de los cuales debió procederse como lo dispone el artículo 198 de que yá se ha hecho mérito, deben repartirse por el Juez á quien toque en turno como lo previene el artículo 22 de la ley 143 de 1887 por la cual se adiciona y reforma la 61 de 1886.

"Comuníquese al Juez que ha hecho la consulta y publíquese en la *Gaceta Judicial*."

Este proyecto fué aprobado por unanimidad, con lo cual se terminó el presente Acuerdo que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamin Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 84.

En Bogotá, á treinta de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete, constituída la Corte en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, se ocupó en considerar el proyecto de resolución presentado por el Magistrado señor doctor Martínez, á quien tocó en repartimiento la consulta de que se hablará en seguida; y cuyo proyecto, que después de examinado, fué unánimemente adoptado, dice así:

"En telegrama fechado en Puerto Nacional el veintiocho de los corrientes, recibido ayer, consulta el señor Juez del Circuíto de Aguachica, cuál es el Juez competente para seguir conociendo en una causa abierta por el delito de rapto de una mujer púber, en la cual causa el Juez consultante ha conocido, y la que se encuentra en estado de confesionar al procesado; y la Corte para resolver esta consulta y todas las dudas que sobre hechos análogos puedan ocurrir, establece la siguiente doctrina:

"Desde que por la ley 61 de 1886 y por las 143 y 153 de 1887, se determinaron las atribuciones de los Jueces Superiores de Distrito en los negocios criminales, y se señalaron los delitos sujetos á su conocimiento, yá los Jueces de Circuíto no han podido ni pueden continuar conociendo en las causas referentes á tales delitos, cualquiera que sea la fecha de su iniciación y cualquiera que sea el estado en que se encuentren, porque media el óbice insuperable de la falta de jurisdicción.

En la ley 61 se había limitado, para el conocimiento de los *Jueces Superiores*, el delito de rapto, cuando este se refería á una persona impúber; pero en la ley 143 se le atribuyó en general el conocimiento en todos los delitos de rapto, cualquiera que sea la edad y circunstancias de la persona ofendida.

Por lo expuesto, la Corte Suprema resuelve la consulta hecha por el señor Juez de Aguachica, declarando que yá él no puede continuar conociendo en la causa mencionada al principio, y que deben pasar el reo y el proceso al respectivo Juez Superior.

Transmítase por telégrafo esta resolución al Juez consultante y publíquese en la *Gaceta Judicial*.

Con lo cual se terminó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

RECURSOS DE CASACIÓN Y DE HECHO.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Septiembre diez y nueve de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El apoderado de Carolina y Felisa Fernández ha pedido revocatoria del auto de cinco del corriente mes, en que se declaró inadmisible el recurso de apelación de otro en que el Tribunal Superior del Distrito judicial de Popayán negó el recurso de casación de la sentencia que recayó en un juicio sobre petición de herencia, en que figuraron como partes dichas Fernández.

El referido apoderado funda su solicitud: 1.° en que las disposiciones del Capítulo 1.°, Título 7.° del Libro 2.° del Código Judicial dan derecho de apelar de las sentencias definitivas é interlocutorias y aun de los autos de substanciación, sin excluír aquellas que niegan apelaciones; 2.° en que el artículo 45 de la ley 61 de 1886 dispone que, interpuesto el recurso de casación en tiempo hábil y hecha la consignación mencionada en el artículo 44, el Tribunal lo conceda; de lo cual se deduce que si lo niega ejerce una atribución que no le está conferida y usurpa la jurisdicción concedida únicamente á la Corte Suprema por el artículo 50 de la ley citada; 3.° en que no arguye contra lo dicho el que la parte agraviada por la denegación del recurso hubiera interpuesto el de hecho, porque esta circunstancia no hace inapelable el auto; 4.° en que correspondiendo á la Corte conocer de los recursos de casación, tócale á ella proteger á los que lo interponen, si se les niegan; 5.° en que aunque, es verdad que en la sentencia dictada en el pleito alu dido se aplicó el artículo 1,072 del Código Civil caucano, esa disposición tiene el carácter de general, por encontrarse en los Códigos de los nueve Departamentos de Colombia y en todos los del mundo civilizado; y 6.° en que aunque la ley requiere para intentar recurso de casación poder especial, el de que se trata fué interpuesto directamente por las interesadas.

Estos fundamentos son inexactos, unos por la generalidad que se les da, y otros en absoluto: lo es el primero, porque sin negar el principio que él establece, salvas las excepciones legales, del auto en que se niega un recurso de apelación sólo permite la ley el de hecho, que tiene por objeto el que el Superior admita ó niegue la apelación negada por el inferior, y ese recurso, que suple el de apelación, se interpuso y decidió. Lo es el segundo, porque no hay recurso de casación de toda sentencia, entre otras, de aquéllas que se funden en leyes que no rijan en toda la República ó que no sean de carácter general; y aunque es cierto q ue el Tribunal de Popayán no pudo fundarse en esa razón para negar el recurso, atendido lo dispuesto en los artículos 45 y 50 de la ley 61, por atribuir el último á la Corte Suprema, y nó á los Tribunales, la facultad de examinar y decidir si la sentencia es de aquellas contra las cuales puede interponerse recurso de casación, bien hubiera podido negarlo, conforme á los artículos 43 y 45 de dicha ley, por no haber presentado las interesadas, con el escrito de apelación, la fianza ó la cantidad necesaria para asegurar el valor de las costas, una vez que se hubiera fijado la cuantía del negocio, sobre lo cual nada promovieron. A lo que se agrega que la Corte corrigió el error en que se incurrió, declarando por sí, tanto en el recurso de hecho como en el de apelación á que se refiere la solicitud de revocatoria, que la sentencia no es casable conforme á la ley; siendo ésto indudable, la objeción carece de fundamento.

Lo es el tercero, porque interpuesto y decidido el recurso de hecho, el de apelación no tenía objeto; y porque en ningún

caso concede la ley uno y otro sobre un mismo punto y para ante un mismo Tribunal.

Lo es el cuarto, porque la Corte no dejó de tomar en consideración el recurso de hecho ni el de apelación, sino que los declaró inadmisibles, por razones estrictamente legales.

Lo es el quinto, porque fallado el pleito conforme á la Legislación civil del extinguido Estado del Cauca, que no rige en toda la República ni es de carácter general, faltan esos requisitos exigidos por el artículo 65 de la ley 61 de 1886, para admitir recurso de casación.

Y lo es el sexto, porque aunque Carolina y Felisa Fernández interpusieron el recurso de casación de la sentencia que recayó en el pleito, fué Salvador Valencia F. quien sin poder *especial* apeló del auto en que se negó aquel recurso por el Tribunal de Popayán.

Por lo tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara sin lugar la revocatoria solicitada del auto dictado por ella el día cinco del corriente mes.

Hágase saber y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

ADVERTENCIA.

Por distracción se hizo incluír, en el número anterior, en la sección de simples "Autos interlocutorios" (Negocios criminales) un auto sobre nulidad de un proceso criminal fallado en Palmira, que debió figurar en la sección de "Recursos de casación."

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Septiembre veintiuno de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—En diez y siete de Julio de mil ochocieutos ochenta y dos, ocurrió al Tribunal del Distrito Judicial de Antioquia, Timoteo Bravo, apoderado de Remigio Santos, intentando demanda ordinaria contra el Gobierno de aquel extinguido Estado, por la suma de mil trescientos setenta y cinco pesos, ochenta y cinco centavos ($ 1,375-85 cs.), que aseguró se debían á su poderdante como alcance deducido á favor de éste, en el fenecimiento de las cuentas á su cargo, como Administrador particular de Hacienda del Circuíto de Occidente en los años de 1877 y 1878.

Confeído el correspondiente traslado al representante de la entidad demandada, se opuso éste á la pretensión del demandante; y después de haberse practicado las pruebas que en tiempo se solicitaron, de haberse presentado los alegatos y de haberse hecho la citación para sentencia, se pronunció la de 13 de Julio 1883, en la cual se absolvió á la parte demandada.

Interpuesto por el actor recurso de apelación contra la sentencia expresada, le fué concedido para ante esta Superioridad, y habiéndose observado los trámites de la segunda instancia, ha llegado el caso de resolver, para lo cual se hacen previamente las siguientes observaciones:

El actor apoyó su demanda en dos autos proferidos por el Contador general del extinguido Estado de Antioquia, como Tribunal de segunda instancia, y en otro auto del Administrador general del Tesoro.

Los autos de la Contaduría general tuvieron por objeto el examen y fenecimiento de las cuentas de fondos comunes á cargo del demandante, correspondientes á algunos meses de los años de 1877 y 1878.

En dichos dos autos *se dedujo una suma* de pesos como saldo en contra de Remigio Santos, expresándose que esa suma debía descontarse de la que el mismo Santos aseguraba tener á su favor en las cuentas por contribución de guerra y gastos militares, que estaban aún sin fenecer.

Como se ve, estas dos resoluciones en nada favorecen al demandante, porque después de que en ellas se le deduce un cargo, se insinúa un descuento ó compensación, que depende de la condición de que efectivamente resulte algún saldo á favor del responsable; pero no se le hace ningún reconocimiento concreto.

El tercero de los autos referidos, y que constituye el fundamento principal de la demanda, es el dictado por el Administrador general del Tesoro, en las cuentas de gastos militares y contribución de guerra, de que yá se ha hablado. Ese auto concluye declarando fenecidas dichas cuentas, de que es responsable Remigio Santos, porque no resulta cargo alguno en su contra.

Respecto de la resolución anteriormente mencionada, pueden aducirse algunas consideraciones, que destruyen por completo su fuerza probatoria, á saber:

1.ª Aunque es cierto que en la parte expositiva de tal resolución se hizo un cómputo de los ingresos y egresos que arrojaban las cuentas, y se conceptuó que resultaba un saldo á favor del responsable, el hecho es que en la parte resolutiva, que es en la que se determinan los derechos ó las obligaciones que se trata de conceder ó imponer respectivamente, no se adujo alcance alguno á favor del demandante, y en consecuencia, esa comparación sobre ingresos y egresos, y el resultado que de ella se dedujo, no pueden considerarse sino como observaciones particulares del empleado que feneció las cuentas, y que, por lo mismo, no tienen fuerza legal obligatoria;

2.ª Suponiendo que en la parte resolutiva del auto que se examina se hubiera deducido algún alcance á favor de Remigio Santos, no era el Administrador general del Tesoro la autoridad competente para hacer tal deducción. Al efecto, conforme á la ley seccional número 97 de 1879, el Poder Ejecutivo estaba facultado para contratar con individuos particulares el examen y fenecimiento de cuentas pendientes. En cumplimiento de esa disposición legislativa fueron contratados dos individuos, quienes asumieron el carácter de Contadores del Estado, y eran los únicos que podían examinar y fenecer en primera instancia las cuentas de contribución de guerra y gastos militares;

3.ª En el caso de que se reconociera que el Administrador estaba investido de facultad legal suficiente, no puede aceptarse el saldo deducido á favor del demandante, sino como una operación provisional, y no como el resultado fiel de todas las cuentas, pues algunas de éstas no se habían incorporado en la general del Tesoro; y

4.ª El saldo deducido por el Administrador del Tesoro no fué definitivo, por cuanto este empleado sólo podía examinar y fenecer las cuentas en primera instancia; y por consiguiente, la providencia que se examina no reconocía al demandante ningún derecho efectivo, una vez que dicha providencia podía ser revocada ó reformada.

Infirmados como han sido los documentos en que se basó la demanda, es forzoso concluír que el demandante no ha probado su pretensión; y en consecuencia, la Corte Suprema, de acuerdo con el señor Procurador, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la sentencia apelada, siendo las costas del recurso de cargo del apelante.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Forero—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del veintiuno de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete, se publicó la sentencia que antecede.

Ramón Guerra A., Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintiuno de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—En su calidad de cesionario de Avelino Alonso, Manuel Pineda, Florencio Niño, Manuel La Rotta, Joaquín Granados, Francisco Zea, Agustín Duque, Gregorio Aponte, Agustín N. Grillo, Trinidad Sánchez, Jacobo Rodríguez, Prudencio Gómez y Jesús González E.; Braulio Rodríguez reclamó

de la Comisión administrativa legal el reconocimiento de un crédito por la suma total de dos mil trescientos veinte pesos ($ 2,320), procedente de varios empréstitos y suministros hechos al Gobierno nacional durante la última guerra civil. Dicha suma ha sido reconocida por la Comisión, por resolución del primero de Agosto último, y aprobada que fué ésta por el Ministro de Guerra el veintiuno del mismo mes, el señor Procurador general, en uso de sus facultades legales, hizo observaciones, en resolución ó vista del diez y siete de los corrientes, y pasó el expediente á la Corte Suprema para que decidiese definitivamente.

Las observaciones del señor Procurador general se refieren, una á todos los comprobantes de los créditos, que él tacha por no estar reconocidos los endosos; y otra al crédito de doscientos pesos ($ 200) causado á favor de Avelino Alonso, por cuanto el recibo que lo comprueba no fué registrado en tiempo oportuno. Ninguna otra observación puede hacerse, puesto que los comprobantes están debidamente autenticados y todos registrados en tiempo.

La Corte, para resolver considera:

1.° No se halla fundamento para tachar los endosos de cesión de los documentos, yá porque ninguna ley anterior á su presentación exigía la ratificación de los endosos, yá porque la Comisión administrativa, que la había exigido, expresamente exoneró de tal formalidad al reclamante, por auto del veintiocho de Junio del presente año; yá, en fin, porque el requisito de hacer el endoso ante dos testigos, que exige el inciso 3.°, artículo 1.° de la ley 152 de 11 de Agosto último, no puede ser aplicada con efecto retroactivo.

2.° Cuanto á la objeción hecha al recibo que comprueba el empréstito de doscientos pesos ($ 200) hecho por Avelino Alonso, es también infundada. La ley 44 (3 de Noviembre) de 1886 "sobre suministros, empréstitos y expropiaciones," (rectificada en su contexto) fué publicada el veintinueve del mismo mes, en el número 6,875 del *Diario Oficial*, y su artículo 16, en su tercer párrafo, prorogó por noventa días el término señalado antes para el registro de los comprobantes de crédito. Contados los noventa días desde el siguiente á la fecha de la publicación de la ley en Bogotá, esto es, desde el treinta de Noviembre, el término se cumplió en la misma ciudad el veintisiete de Febrero del presente año; y como consta del documento respectivo (foja 3 del expediente) que fué registrado en la Gobernación del Distrito federal el día diez y nueve de dicho mes de Febrero, es patente que la diligencia se practicó en tiempo hábil, y el documento no es tachable.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma en todas sus partes la resolución dictada por la Comisión administrativa, aprobada por el Ministro de Guerra, á que se ha hecho referencia, en favor de Braulio Rodríguez.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente á dicho Ministerio.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Francisco A. Fernández—Aristides Forero—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.; Secretario.

En la audiencia del veintiuno de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete, se publico la anterior sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintitrés de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Francisco Vargas & Hermanos ocurrieron á la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones solicitando el reconocimiento de un crédito á su favor, por valor de dos mil quince pesos veinte centavos (2,015-20), procedentes de suministros hechos al Director general de la Maestranza, en la guerra de 1884 á 1885.

En apoyo de su reclamación presentaron el recibo expedido por dicho empleado, con fecha dos de Abril de mil ochocientos ochenta y cinco, por aquella cantidad, recibo que lleva al pie una resolución de la Secretaría de Guerra, en la cual se declara que el mismo recibo es aceptable á la par y como dinero sonante en pago de los derechos de Aduana que hayan de cubrirse desde la fecha en que se declare restablecido el orden público, en adelante hasta la concurrencia de quince mil pesos mensuales, según lo dispuesto en el artículo 5.° del Decreto número 213 de 1885.

Como, no obstante lo dispuesto en esta resolución, los créditos de la naturaleza del yá referido deben reconocerse por la Comisión creada por la ley 44 de 1886, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 2.° de la misma ley, la Comisión habo de ocuparse de la aludida reclamación, y al efecto, reconoció el crédito objeto de ella á favor de los reclamantes y á cargo del Tesoro nacional.

Esta resolución fué aprobada por el Ministerio de Guerra; pero el señor Procurador la ha reclamado ante esta Suprema Corte, fundándose en que aquel recibo no fué registrado con arreglo al Decreto número 685 de 1885 y á la citada ley 44, con el objeto de que se decida si la falta del registro en los documentos sujetos á tal formalidad impide que tales documentos se estimen como comprobantes legales de los créditos que por medio de ellos se reclaman.

Para resolver sobre el recurso interpuesto, la Corte, considera:

No obstante la exigencia que respecto al registro envuelven las disposiciones de los mencionados ley y decreto, exigencia que hace que los documentos que no tengan tal requisito no puedan estimarse como comprobantes legales, juzga la Corte que los documentos como el de que se trata no quedan comprendidos en esta prohibición, por cuanto el crédito á que se refieren fué reconocido y mandado pagar por el Gobierno, de acuerdo con las terminantes prescripciones de un Decreto ejecutivo; de manera que la existencia del crédito es un hecho reconocido que no necesita comprobantes distintos de la resolución que hizo el reconocimiento.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la resolución de la Comisión, aprobada por el Ministerio de Guerra.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el proceso.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Francisco A. Fernández—Aristides Forero—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del veintitrés de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete, se publicó la anterior sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En veintitrés de los mismos notifiqué la sentencia que precede al señor Francisco Vargas.

VARGAS—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Septiembre veintinueve de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—José María Sánchez ocurrió á la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, reclamando el reconocimiento de la cantidad de trece mil cuatrocientos ochenta y siete pesos noventa y dos centavos ($ 13,487-92) procedente de expropiaciones que se le hicieron en la guerra de 1884 á 1885.

Después de subsanarse por el interesado algunas informalidades en la documentación, anotadas por la Comisión, se dictó por ésta la resolución de veinticinco de Junio próximo pasado, reconociendo á cargo del Tesoro nacional y á favor del reclamante la cantidad de diez mil pesos ($ 10,000).

Como el interesado manifestara conformarse con esta resolución, hubo de remitirse al Ministerio de Guera, junto con el expediente y allí se confirmó en todas sus partes, por resolución de la misma fecha.

Pasado el asunto al señor Procurador, este funcionario pidió la reconsideración de aquel fallo, fundándose en las razones siguientes: 1.ª Que las declaraciones que apoyan parte de la reclamación no le recibieron con asistencia del Agente del Ministerio público. 2.° Que una de las mismas firmas puestas en el expediente por el señor Primitivo Crespo, como Secretario de Hacienda del Departamento del Cauca, no está autenticada; y 3.° Que hay varias firmas autenticadas en una sola diligencia, sin que á esta se adhiriera más que una estampilla.

La Corte estimó conveniente, para mejor proveer, que se recibieran nuevamente las declaraciones en que se apoyó la reclamación, con asistencia del Agente del Ministerio público, y al efecto, se libró el correspondiente despacho que, debidamente diligenciado, ha sido devuelto.

Hallándose, pues, la reclamación en estado de ser fallada, pasa la Corte á decidir, mediante algunas consideraciones:

El defecto relativo á la forma en que fueron recibidas las declaraciones, por no haberse hecho constar en el expediente que hubiera concurrido el Fiscal ni las hubiera presenciado, quedó corregido, cumpliéndose como se cumplió el auto para mejor proveer, dictado por la Corte con fecha treinta de Julio último.

Con las declaraciones rendidas en debida forma por Manuel Astudillo, Jesús Uribe y Nepomuceno Valverde, queda demostrado que se le expropiaron por las fuerzas del Gobierno al señor Sánchez, de su hacienda de Buenavista noventa y cinco bueyes y novillos y treinta y dos bestias de silla, casi todas de superior calidad, cuyo valor, tomando el precio mínimo fijado por los testigos, asciende á cinco mil ochenta pesos ($ 5,080). Con las deposisiones de los testigos Demetrio Zúñiga, Raimundo Mosquera, José Ignacio Hidalgo y Jesús Perafán, está probado que le fueron expropiados al mismo Sánchez, de las dehesas de Antó-Moreno, doscientas sesenta reses de cría, de valor de diez y seis pesos ($ 16) cada una, y diez y seis bestias, que tomando el menor valor dado por los testigos avaluadores es de veinte pesos ($ 20) cada una. Valen los animales expropiados en la dehesa citada y destinados al servicio del Gobierno cuatro mil cuatrocientos ochenta pesos ($ 4,480). El valor total de los animales expropiados, es, pues, según los avalúos de que se ha hablado, la cantidad de nueve mil quinientos sesenta pesos ($ 9,560). El producto de las fincas que el Gobierno le tomó á Sánchez y de que estuvo disfrutando por varios meses, fué estimado por peritos en mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos noventa y dos centavos ($ 1,469-92). Vale la totalidad de los cargos hechos por el reclamante y que ha probado debidamente, la suma de once mil veintinueve pesos noventa y dos centavos ($ 11,029-92).

Por la exageración que haya podido haber en los avalúos, le reconoció la Comisión solamente la suma de diez mil pesos ($ 10,000), y tanto con esta rebaja como con la parte en que se absuelve á la Nación por la reclamación que se había hecho por indemnización de los daños y perjuicios sufridos en las fincas, durante la ocupación efectuada por el Gobierno, se conformó el peticionario. Las pruebas aducidas por el reclamante al principio y complementadas por orden de la Corte después, son suficientes para establecer que Sánchez tiene perfecto derecho de exigir que se le cubra la suma que ha reconocido á su favor la Comisión.

La falta de autenticación de la firma del señor Primitivo Crespo, puesta en su carácter de Secretario de Hacienda del Departamento del Cauca, al pie de la relación presentada por Sánchez, no le quita su fuerza de documento, pues en el artículo 17 del Decreto número 485 de 9 de Agosto de 1886, publicado en el *Diario Oficial* número 6,766, de 14 del mismo mes, al reglamentar la manera cómo deben autenticarse las firmas puestas en documentos sobre empréstitos, suministros, etc., no se exige que deban autenticarse las de los Secretarios de Gobierno de los antiguos Estados, hoy Departamentos; y no hay razón para desestimar un documento por no reunir al tiempo de su presentación un requisito que la ley no exige.

El hecho de que no se hubieran puesto tantas estampillas para autenticar las firmas como documentos se presentaron con tal objeto, no les quita la fuerza probatoria á los documentos á que hace referencia el señor Procurador, porque cuando se efectuaron las autenticaciones regía el ordinal 4.° del artículo 16 del decreto ejecutivo sobre papel sellado y timbre nacional, y allí no se ordenaba que á cada documento se le pusiera estampilla para el efecto de autenticar la firma respectiva. Además, la falta de estampilla no invalida los documentos, sino que hace incurrir en pena al empleado que los admite sin que llenen este requisito, cuando la ley le exige.

Por las razones expuestas, la Corte, administrando justicia en nombre de República y por autoridad de la ley, confirma la resolución de la Comisión, de fecha veinticinco de Junio del año en curso, que fué aprobada por el Ministerio de Guerra en la misma fecha.

Notifíquese, remítase el expediente á Su Señoría el Ministro de Guerra y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Francisco A. Fernández—Aristides Forero—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del veintinueve de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete, se publicó esta sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En primero de Octubre del mismo año la notifiqué al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veinticuatro de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Juez de ejecuciones nacionales, á virtud de exitación de la Oficina General de Cuentas, dictó auto ejecutivo contra Manuel Monroy, con fecha diez y seis de Marzo de mil ochocientos ochenta y cinco, para hacer efectivo el cobro de una multa importante de diez pesos ($ 10) y de dos alcances, uno por valor de veintidós pesos cincuenta centavos ($ 22-50 centavos) y otro por el de treinta pesos ($ 30), impuesta la primera y deducidos los segundos en el examen de las cuentas que, como Administrador de la Salina de Chita y Muneque, rindió á dicha Oficina en los meses de Enero, Marzo y Julio, respectivamente, de mil ochocienios ochenta y uno; y cuyo total, materia del mandamiento ejecutivo asciende á la cantidad de sesenta y dos pesos cincuenta centavos ($ 62-50 centavos).

El ejecutado interpuso contra aquella providencia el recurso de apelación, que le fué concedido en el efecto devolutivo, y remitido el expediente original á esta Superioridad, lo que tuvo lugar el treinta y uno de Agosto del presente año, se dió al asunto la tramitación prevenida por la ley.

Encontrándose, pues, el negocio en estado de dictar el correspondiente fallo, se considera para ello:

1.° Que la ejecución se dictó á virtud de tres autos de la Sección 5.ª, de la mencionada Oficina General, de veintinueve de Octubre y diez y seis de Diciembre de mil ochocientos ochenta y uno, números 116 y 149, y de veintinueve de Julio de mil ochocientos ochenta y dos, número 231, los cuales se declararon ejecutoriados, los dos primeros; por los de fecha veinte, y el último por el de veintinueve de Febrero de mil ochocientos ochenta y cuatro, á causa de no haber el responsable interpuesto el recurso que le permitía el artículo 2,022 del Código Fiscal de la República;

2.° Que tales determinaciones prestan mérito ejecutivo al tenor de lo prevenido claramente en los incisos 1.° y 3.° del artículo 1,096 del Código Judicial y en el artículo 2,013 del Código Fiscal; y

3.° Que el apelante no ha aducido en la primera ni en esta segunda instancia, razón alguna en demostración de la ilegalidad ó injusticia de la providencia reclamada.

Por lo tanto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el concepto del señor Procurador general, confirma el auto apelado, con costas de cargo del apelante, según así lo ordena el inciso 2.° del artículo 862 del citado Código Judicial.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase,

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Francisco A., Fernández—Aristides Forero—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Septiembre veintisiete de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Celedonio Umaña ocurrió al Tribunal Superior del extinguido Estado de Boyacá, por memorial de 6 de Diciembre de 1879, entablando demanda ordinaria contra el Gobierno de dicha entidad, para que se declarara nulo un contrato celebrado por éste con la Compañía empresaria de la Ferrería de Samacá. Esta demanda fué reformada por memorial de 1.° de Septiembre de 1884, el cual no tuvo efecto, y reformada últimamente con fecha 28 de Febrero del presente año, cuando yá regía la ley 61 de 1886.

En la última reforma se hizo extensiva la demanda á la Nación, subsidiaria y condicionalmente; y el Tribunal, después de haberla admitido, observó que había dejado de ser competente para conocer del juicio, desde la introducción de dicha reforma, por cuanto yá figuraba la Nación como demandada; y por auto de 8 de Agosto del presente año, declaró nulo lo actuado, desde que se admitió la referida reforma, y ordenó pasar el proceso al Juez respectivo, para que ante él se surtiera la primera instancia. Este auto fué apalado por la parte demandante, y con ese motivo ha venido el proceso al despacho de esta Superioridad.

Conforme á la legislación boyacense, el Tribunal Superior era competente para conocer del expresado juicio, y expedida la ley 61 de 1886, siguió siendo competente para conocer del mismo juicio, en primera instancia, por ministerio de esta ley, pues se trataba de una controversia entre el Gobierno del Departamento y un individuo particular.

Introducida la reforma á la demanda primitiva, y comprendida yá la Nación en ella, el Tribunal no era competente para conocer del asunto en esa parte, y en consecuencia, la reforma era inadmisible, porque venía á interesar en una misma cuestión dos jurisdicciones distintas.

Pero si esto es verdad, también lo es que el Tribunal no pudo ordenar que el proceso pasara al Juez respectivo, ora porque la introducción de la reforma no era bastante para que dicho Tribunal se desprendiera de la jurisdicción privativa que legalmente había adquirido, para conocer del juicio contra el Gobierno del Departamento; ora porque la demanda contra la Nación fué dirigida en un aspecto meramente subsidiario y condicional.

En atención á lo expuesto, la Corte Suprema, oído el concepto del señor Procurador, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto apelado en la parte en que declara la nulidad de lo actuado, desde que se admitió la reforma última á la demanda, y lo revoca en la parte en que ordena pasar el expediente al Juez 2.° del Circuíto del Centro. En consecuencia, se declara que la reforma á que se ha hecho alusión es inadmisible en la parte en que se hizo extensiva la demanda á la Nación; y se dispone que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja siga conociendo del juicio intentado contra el Gobierno del extinguido Estado de Boyacá, hoy Departamento del mismo nombre (artículo 140 de la ley 61 de 1886.)

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Aristides Forero—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclenmente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintinueve de los mismes notifiqué el auto que antecede al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Septiembre veinte de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Este proceso ha venido á la Corte á virtud del recurso de apelación interpuesto por el Sargento 2.° Antonio Lozano, y los soldados Pablo B. Pacheco y Trinidad Rozo, contra la sentencia dictada en Popayán por el Consejo de Guerra ordinario, en veintinueve de Agosto último, en la que se condena por el delito de deserción al primero de los apelantes, á tres años de reclusión penitenciaria, y á los soldados Pacheco y Rozo á un año de reclusión, con más, para todos, la pérdida de los derechos políticos, la pérdida de toda pensión y la inhabilitación para ejercer empleo ó cargo público.

Pero después de la vigencia de la ley 153, de 24 de Agosto del corriente año, la cual dispone en sus artículos 278 y 281, que los delitos militares son de la exclusiva competencia de la jurisdicción militar, y que á la Corte Suprema no se puede ocurrir contra las sentencias definitivas dictadas por los Consejos de Guerra, sino por el recurso de nulidad y para los casos definidos en el artículo 1,534 del Código Militar; es claro que la Corte es absolutamente incompetente para conocer de la apelación por la cual se han elevado estos autos, y que es del todo innecesario substanciar un recurso que es de suyo baldío.

Por lo expuesto, la Corte Suprema se abstiene de conocer en el recurso sobredicho, y dispone que se devuelva el expediente á la autoridad militar remitente, para lo que sea de su resorte.

Sáquese copia de esta determinación y publíquese en la *Gaceta Judicial.*

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Forero—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Septiembre veintitrés de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Llamado á juicio militar el Subteniente Guillermo Hernández por el delito de deserción, y absuelto del cargo por sentencia dictada en treinta de Agosto último por el Consejo de Guerra de Oficiales generales, el señor Comandante en Jefe de la Sección de Dirección y Mando del Ejército ha remitido la causa á esta Suprema Corte para los efectos, dice, de los artículos 281 de la ley 153 de veinticuatro de Agosto del presente año y 1,534 del Código Militar; pero como el primero de esos artículos sólo deja expedito para ante la Corte el recurso de nulidad por las reglas que establece el segundo, y tal recurso no se ha interpuesto, la Corte no puede intervenir en el negocio y dispone, en consecuencia, que se devuelva la causa al señor Comandante general para los fines legales.

Hágase saber, déjese copia y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Francisco A. Fernández—Aristides Forero—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

El veinticuatro de los mismos lo notifiqué al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

En el mismo día lo notifiqué al defensor, General Dimas Atuesta.

ATUESTA—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Septiembre veinticuatro de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—En veintiséis de Mayo de mil ochocientos ochenta y uno, se iniciaron estas diligencias, á virtud de denuncia dada por Joaquín Gómez, ante el Juez del Circuíto de Ubaté, para que se averiguase si Lisandro Torres había falsificado unos aparatos para Remington, invención propia del denunciante y para cuya fabricación y venta había obtenido privilegio exclusivo del Gobierno de la Unión, en Enero del año anteriormente citado.

Adelantada la averiguación hasta donde se creyó conveniente, se dictó auto, en cuatro de Julio último, declarando prescrita por el transcurso del tiempo, la acción criminal contra Lisandro

Torres, y el consiguiente derecho de imponerle pena; disponiéndose asimismo que dicho auto fuese consultado con esta Superioridad, para lo cual se remitió el expediente original, con fecha doce del referido mes.

Dada á la consulta la tramitación legal, ha llegado el caso de dictar el fallo que por derecho corresponde, y para ello se considera:

1.° Que entre las atribuciones que la sección 2.ª, artículo 21 de la ley 61 de 1886 señala á la Corte Suprema de Justicia, no está la de conocer de los asuntos de la naturaleza del presente; y

2.° Que conforme al inciso 2.°, artículo 99 de la misma ley, es á los Tribunales Superiores de Distrito á quienes, en casos como éste, está claramente atribuído el conocimiento.

Por lo tanto, la Corte Suprema de la Nación, de conformidad con el concepto del señor Procurador general, declara que carece de jurisdicción para censurar él auto consultado de que viene hecha referencia, y que es al Tribunal Superior del Distrito judicial de Cundinamarca, en la Sala de lo criminal, á quien corresponde ejercer tal censura.

Notifíquese, déjese copia, publíquese y remítanse los autos á dicho Tribunal, dándose aviso de ello al Juez de la primera instancia.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Francisco A. Fernández—Aristides Forero—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En el mismo día la notifiqué al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Septiembre veintiocho de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Juzga la Corte inoficioso dar vista de estos autos al señor Procurador general y seguir el procedimiento propio de las consultas que antes se hacían, conforme al Código Militar, de las sentencias que pronunciaban los Consejos de guerra; procedimiento que al presente sería baldío, una vez que, á virtud de expresa disposición legal, la Corte no tiene competencia para conocer de la sentencia que se le consulta.

En efecto, el asunto de que se trata es el siguiente:

El Sargento 2.°, Juan J. Sierra ha sido juzgado en Cartagena, por el delito de deserción, y por sentencia judicial, proferida el veintinueve de Agosto último, el Consejo de guerra ordinario le condenó á sufrir varias penas, declarándole culpable de aquel delito. El Comandante militar respectivo resolvió, al día siguiente, consultar "el proceso" (tal vez quiso decirse la sentencia) con la Corte Suprema, para los efectos del artículo 1,508 del Código Militar; y así ha venido el proceso á esta Superioridad, sin que nadie haya entablado recurso de nulidad.

Ahora bien, el artículo 281 de la ley 153 (24 de Agosto) del presente año, ha establecido que contra las sentencias definitivas dictadas por los Consejos de guerra no podrá interponerse ante la Corte Suprema otro recurso que el de nulidad, por las causales que establecen el artículo 1,534 y siguientes del Código Militar; y como tal recurso no ha sido interpuesto en el presente caso, es patente la incompetencia de la Corte para conocer del asunto consultado, y que yá no existe el conocimiento por consulta.

Por lo expuesto, la Corte Suprema se abstiene de intervenir en este asunto, por incompetencia manifiesta, y dispone que se devuelva el expediente al señor Jefe militar que lo remitió en consulta, para que le dé el curso legal.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintinueve de los mismo notifiqué el auto que antecede al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

RESOLUCIONES VARIAS.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Septiembre veintiuno de mil ochocientos ochenta y siete.

Misael Garcés ha ocurrido á esta Superioridad pidiendo que por ella se solicite del Poder Ejecutivo, la rebaja del tiempo que le falta para cumplir la pena de dos años de presidio que le fué impuesta por sentencia de la misma Corte, y aunque ha acompañado documentos con los cuales comprueba que yá ha sufrido más de las dos terceras partes de la expresada pena, y que su conducta ha sido ejemplar, sin haber tratado de fugarse, la Corte se abstiene, no obstante, de hacer la solicitud que se desea, por cuanto la pena se impuso con arreglo á la Legislación particular del extinguido Estado de Antioquia, y la sentencia se pronunció con fecha ocho de Junio último, cuando aún no estaba vigente la ley 57 de 1887, "sobre adopción de Códigos y unificación de la Legislación Nacional," en cuyo caso, según lo prevenido en el artículo 1.° de la ley 56 de 1886, y en los números 1.° y 2.° de la resolución ejecutiva de 31 de Mayo de 1887, publicada en el número 7,079 del *Diario Oficial*, el Poder Ejecutivo puede ejercer libremente la facultad que sobre el particular le concede el artículo 119 de la Constitución.

Remítase, sin embargo, el expediente á S. Señoría el Ministro de Gobierno para que le dé el curso que sea conveniente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Francisco A. Fernández—Aristides Forero—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

NEGOCIOS DIVERSOS

DILIGENCIA DE VISITA.

En Bogotá, á veintinueve de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete, siendo la una de la tarde, se presentaron en el local de la Corte Suprema de Justicia Su Señoría el Ministro de Gobierno y el señor Procurador general de la Nación, con el objeto de practicar la visita mensual de que trata el artículo 240 de la ley 153 (24 de Agosto) del presente año; y recibidos por Su Señoría el Presidente de la Corte y los señores Magistrados con asistencia del Secretario, se procedió á poner de manifiesto todos los libros económicos de la Secretaría, relativos á las operaciones que se practican en la Corte. Asimismo, el señor Secretario dió lectura al siguiente cuadro que manifiesta el movimiento y despacho de todos los negocios que han cursado en la Corte desde el 3 de Septiembre de 1886 hasta el 28 de los corrientes.

DESPACHADOS.							PENDIENTES.							TOTAL DE ENTRADAS.
ACUERDOS.	NEGOCIOS MILITARES.	SENTENCIAS.		AUTOS.		TOTAL.	EN PODER DEL PROCURADOR.	EN PRUEBA.	ESCRIBIÉNDOSE LA SENT.ª	EN PODER DE LAS PARTES.	FIJADOS EN LISTA.	CUMPLIENDO TÉRMINO EN LA SECRETARÍA.	TOTAL.	
		Civiles.	*Criminales.*	*Civiles.*	*Criminales.*									
82	22	31	42	78	222	477	39	17	2	3	4	14	79	556

Verificado que fué todo esto, y haciéndose constar que no hay demora alguna en el despacho de los negocios repartidos, imputable á los señores Magistrados ni á la Secretaría, se dió por terminada la presente visita, extendiéndose esta diligencia que firman Sus Señorías el Ministro de Gobierno, el Presidente de la Corte y el señor Procurador general, conmigo el Secretario.

El Ministro de Gobierno, FELIPE F. PAÚL—El Presidente de la Corte, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Procurador general, CARMELO ARANGO M.—El Secretario, *Ramón Guerra A*,

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL

Señores Magistrados,

El juicio de sucesión intestada á los bienes del finado presbítero Zoilo María Arce, se abrió ante el Juez Superior del Circuíto de Ocaña, en el Departamento de Santander, el día 30 de Noviembre de 1886; y como existiesen bienes del finado en el Distrito de Aguachica, jurisdicción del Circuíto del Sur, en el Departamento del Magdalena, el Juez del conocimiento libró despacho suplicatorio al del citado Circuíto del Sur, para que, como comisionado, procediese á inventariar, depositar y avaluar los bienes que allí hubiese pertenecientes á la sucesión.

El Juez de Aguachica creyó de su deber no aceptar la comisión, fundándose para ello en que el juicio de sucesión del presbítero Arce debía seguirse ante su Juzgado, y no ante el del Circuíto de Ocaña, á quien provocó desde luégo competencia afirmativa.

Aceptada ésta, por el Juez provocado, los autos y las respectivas actuaciones originadas por el incidente os han sido remitidas para que, ejerciendo la atribución que os confiere el inciso 3.°, sección 3.ª del artículo 21 de la ley 61 de 1886, dirimáis la controversia.

Cumplida debidamente la correspondiente tramitación legal, es llegado el caso de decidir la competencia, y en esa virtud, paso á exponer las razones alegadas por los dos funcionarios entre quienes ella se ha suscitado.

El Juez del Circuíto de Ocaña sostiene que el lugar del último domicilio del presbítero Arce fué el Distrito de Ocaña, por cuanto allí tenía la mayor parte de sus bienes, entre los cuales figura una finca raíz, y porque allí mismo tenía el asiento de sus negocios y radicada su familia; sin que obste en contrario la circunstancia de que dicho presbítero se hubiera hallado al tiempo de su fallecimiento en el Distrito de Aguachica, donde residía ejerciendo, accidentalmente, las funciones de su ministerio.

A estas razones opone el Juez del Circuíto del Sur las de que en el Distrito de Aguachica, de su jurisdicción, el presbítero Arce también tenía bienes muebles y raíces, consistentes estos últimos en una casa y un solar, y en que allí residía al tiempo de su muerte, como que á la sazón era el cura de almas del lugar, siendo estos los motivos que el Juzgado tuvo en cuenta para disponer la práctica de las diligencias conducentes á la guarda de los bienes de la sucesión hasta declarar yacente la herencia.

Desde luégo, se hace preciso examinar, como cuestión previa indispensable, qué legislación es la que debe consultarse para practicar el análisis jurídico de las precedentes alegaciones.

Me mueve á dilucidar este punto, la circunstancia de que, no habiéndose unificado la legislación nacional, está vigente en cada Departamento, por ministerio del artículo H transitorio de la Constitución nacional, la legislación del respectivo Estado.

En el caso que nos ocupa, parte de los bienes raíces de la sucesión están ubicados en territorio del Departamento del Magdalena, y parte en el de Santander, secciones territoriales que, aun cuando administrativamente distintas, no tienen ante las *nuevas instituciones* el carácter de soberanas que las anteriores reconocían á los extinguídos Estados, puesto que hoy la soberanía reside esencial y exclusivamente en la Nación. Resulta de aquí que, si antes era, hoy no es permitido aplicar á controversias de la naturaleza de la que nos ocupa los principios y reglas del Derecho internacional que se consideraban como incorporados en la anterior Carta constitucional.

No obstante esto, creo que para formar criterio jurídico acertado sobre la controversia, yá que no es dado consultar las leyes del uno ó del otro Departamento ni las de la Nación, por lo menos habrá que tener presentes algunos de los principios generales de Derecho público que han sido aplicados en casos análogos.

A este propósito me permito llamar la atención de esa Superioridad á la doctrina consignada en el Acuerdo dictado en 7 de Febrero de 1876, con ocasión de la competencia suscitada entre el Juez del Circuíto de Antioquia, para conocer de la causa mortuoria del Reverendo Obispo de Antioquia, doctor Domingo A. Riaño.

Por ese Acuerdo la Corte resolvió que al extinguido Estado de Antioquia, último domicilio del finado, le correspondía conocer de la causa mortuoria, en lo relativo á los bienes muebles que hubiera dejado el Reverendo señor Riaño en cualquier parte, y de los inmuebles ubicados en el territorio de dicho Estado, y al Poder Judicial de Cundinamarca le correspondía conocer de la misma mortuoria, en lo relativo á los bienes raíces ubicados en su territorio.

Aceptada, como juzgo que debe aceptarse, la expresada doctrina de la Corte, ninguna dificultad habrá para resolver respecto de los bienes raíces dejados por el finado presbítero doctor Arce, pues el Poder Judicial de Santander deberá conocer de aquellos de dichos bienes que se encuentren dentro de su jurisdicción, y al del Magdalena le corresponderá el conocimiento en cuanto á los bienes de la misma clase que se hallen en su territorio

Por lo que hace á los bienes muebles, si hemos de estar á la misma doctrina sentada por la Corte, debería abrirse la causa mortuoria de ellos, cualquiera que sea el lugar donde se hallen, en el último domicilio del finado, para determinar el cuál han ocurrido algunas dudas á los Jueces entre quienes versa la competencia.

A fin de esclarecer este punto, debe recordarse que, por regla general, el domicilio lo constituye la residencia acompañada, real ó presuntivamete, del ánimo de permanecer en ella. El presbítero doctor Arce residía al tiempo de su muerte en el Distrito de Aguachica, Departamento del Magdalena, y por el hecho de estar ejerciendo allí sus funciones sacerdotales se presume que en él existía el ánimo de permanecer en ese lugar, sin que baste á admitir lo contrario la circunstancia de que desempeñaba el Curato accidentalmente, pues es de notar que en el expediente se insinúa por algunos de los testigos que han declarado en el asunto, que los beneficios eclesiásticos en el Departamento del Magdalena no se otorgan sino temporalmente.

"La mansión ó permanencia en el lugar en que se tiene algún empleo ó ministerio eclesiástico ó secular para cumplir con las obligaciones que le son análogas," constituyen, según Escriche, residencia acompañada de la presunción de permanecer en el lugar, pues no otra cosa implica la aceptación del empleo ó cargo que se desempeña.

Si se conviene, y creo que debe convenirse, en considerar como último domicilio del presbítero Arce el Distrito de Aguachica, sería al Juez del Circuíto del Sur á quien correspondería abrir la causa mortuoria, en lo relativo á los bienes muebles en general, y á los raíces ubicados en dicho Distrito. Lo mismo que al Juez del Circuíto de Ocaña le correspondería seguir la causa con referencia á los bienes raíces situados dentro de su jurisdicción.

Tal es mi concepto en el asunto, y salvo vuestra mejor inteligencia en contrario, así os pido que lo decidáis.

Bogotá, 11 de Julio de 1887.

CARMELO ARANGO M.

IMPORTANTE.

En beneficio del buen servicio público, se suplica á los caballeros que tengan en su poder Códigos, Compilaciones, tomos de leyes nacionales y de los extinguidos Estados, ú otros libros de propiedad de la Corte Suprema, se sirvan devolverlos, pues se ocurre con frecuencia la necesidad de consultar tales obras.

BOGOTÁ.—IMP. DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I. REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 41

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 15 de Octubre de 1887.

CONTENIDO.

Pág.

ACUERDOS DE LA CORTE.

Acuerdo número 85, relativo á una consulta del Presidente del Tribunal Superior de Panamá 321
Id. número 86, sobre otro id. del Juez 2.° del Circuito de Facatativá ..... „
Id. número 87, relativa á otro id. del Tribunal Superior de Bolívar. 322
Id. número 88, id. á otro id. del Tribunal Superior del Cauca ..... „
Id. número 89, id. á otro del Inspector de la Sección 2.ª de Policía de Bogotá ..... „
Id. número 90, id. á otra del Tribunal Superior del Tolima 323

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Pronunciada en un juicio ejecutivo por Bienes desamortizados ..... „

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CIVILES

Proferido en una apelación en tercera instancia, declarándose la Corte incompetente 324
Id. sobre incompetencia de la Corte para conocer de un juicio de expropiación municipal ..... „

NEGOCIOS CRIMINALES

Confirmatorio de un auto de sobreseimiento proferido por el Tribunal Superior de Cundinamarca 325
Sobre condenación al pago de una multa, por demora 326

ASUNTOS VARIOS.

Nota de Su Señoría el Presidente del Tribunal Superior de Antioquia ..... „
Biblioteca de la Corte Suprema ..... „
Nota del Presidente del Tribunal de Pasto relativa á un juicio de cuentas 327

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL

Relativa á la demanda propuesta contra la Nación por José Miguel de Paz ..... „
Id. á un juicios sobre expropiación municipal 238

GACETA JUDICIAL.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

ACUERDO NUMERO 85.

En treinta de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con asistencia de sus siete Magistrados y del infrascrito Secretario, dió cuenta éste de un telegrama que copiado á la letra dice así:

"*Panamá, Septiembre 26 de 1887.*

«Señor Presidente de la Corte Suprema—Bogotá.

"¿Negándose un Magistrado concurrir Acuerdos, conferencias y firmar sentencias acordadas por mayoría, qué apremios pueden emplearse para obligarlo y cómo se reemplaza su firma?

"JOVANÉ."

Impuesta la Corte del punto consultado, el Magistrado doctor Sanclemente, á quien previamente le fué repartido, sometió á aquélla el siguiente proyecto de resolución:

" Vista la consulta que acaba de leerse, y considerando:

1.° Que en materia de apremios no hay disposición legal alguna aplicable á los casos de que se trata, pues las que los establecen se refieren á los subalternos de los Tribunales, á los litigantes, peritos, testigos y demás personas que intervienen en los juicios, pero nó á los Magistrados;

2.° Que esto proviene acaso de que el legislador no ha podido creer que quien acepta el delicado cargo de Magistrado pueda denegarse á concurrir á los actos á que la ley lo llama y á desempeñar los deberes que ha jurado cumplir;

3.° Que habiendo, en consecuencia, vacío en la ley para el efecto de apremiar en los casos consultados, á la Corte no le es dado llenarlo, por no estar esto en sus facultades;

4.° Que aun cuando no hubiera tal vacío, la facultad de apremiar correspondería al Tribunal en cuerpo, y nó á dos de sus Magistrados, respecto del tercero que incurra en falta, mientras la ley no los autorice expresamente para esto;

5.° Que respecto de las sentencias no firmadas, no habiendo falta absoluta, temporal ó accidental de un Magistrado, únicos casos en que puede llamarse á un suplente ó sortearse un Conjuez, no puede ocurrirse á este medio para suplir la firma del que se deniega á ponerla; y

6.° Que el único remedio á que puede ocurrirse para remover las dificultades á que la conducta de un Magistrado puede dar lugar, en lo tocante al pronto y buen despacho de los asuntos encargados al Tribunal, es el de exigirle la responsabilidad por falta al cumplimiento de sus deberes.

Por estas consideraciones, acuerda la Corte:

1.° Decir á Su Señoría el Presidente del Tribunal de Panamá que no está en las atribuciones de ella llenar el vacío que la ley ofrece para imponer apremios en los casos consultados;

2.° Pedir al Secretario del Tribunal Superior de Panamá copia de las actas ó documentos que den á conocer que algún Magistrado se ha denegado á concurrir á los Acuerdos y conferencias del Tribunal, y certificación de las sentencias demoradas porque el mismo Magistrado no haya querido firmarlas; copias que se pasarán al señor Procurador general de la Nación para que promueva el juicio de responsabilidad á que ellas den lugar;

3.° Comunicar este Acuerdo á Su Señoría el Ministro de Gobierno para que resuelva el punto consultado, si juzga aplicable á él la facultad que le otorga el artículo 10 de la ley 46 de 16 de Marzo último; y

4.° Dar cuenta al Congreso y al Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en la atribución 15, sección 3.ª, capítulo 2.° del Código Judicial, del vacío que las leyes ofrecen sobre el punto consultado, para que procuren llenarlo."

Tomado en consideración por la Corte el proyecto precedente, lo aprobó unánimemente y dispuso que se publicara en la *Gaceta Judicial*.

Con lo cual se terminó el Acuerdo, que firman los señores Magistrados conmigo el Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 86.

En Bogotá, á treinta de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete, constituída la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, se dió cuenta de la consulta que el Juez 2.° del Circuito de Facatativá hace, por nota de diez y seis del mes en curso, número 585. El señor Magistrado doctor Fernández, á quien tocó el asunto en repartimiento, sometió á

la consideración de la Corte el siguiente proyecto de resolución, que fué aprobado por unanimidad:

"Consulta el Juez 2.° del Circuíto de Facatativá sobre si, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 46 de la ley 153 del año en curso, deben someterse á la decisión del Jurado las causas iniciadas antes de la vigencia de la ley 57 de este año.

Yá el mismo Juez, en nota que le dirigió á Su Señoría el Ministro de Gobierno, bajo el número 465, de fecha siete de Julio próximo pasado, elevó una consulta en el mismo sentido que la que motiva la de que ahora se trata, y la Corte resolvió acerca de la manera como debía procederse, en Acuerdo número 54, publicado en la *Gaceta Judicial* número 34.

En consecuencia, dígase al señor Juez 2.° del Circuíto de Facatativá, en contestación á la nota de que se ha hablado, que le dé cumplimiento, cuando llegue el caso, al Acuerdo número 54 citado."

Con lo cual se concluyó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 87.

En la ciudad de Bogotá, á primero de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, Su Señoría el Presidente hizo dar lectura á la siguiente consulta dirigida por Su Señoría el Presidente del Tribunal Superior de Bolívar en nota fechada en Cartagena el diez y siete de Septiembre próximo pasado:

"Oportunamente llegó á mis manos vuestro telegrama circular de fecha de 25 del mes pasado, distinguido con el número 1.°, contraído á participar á los Tribunales de los Distritos judiciales del Magdalena, Santander y Bolívar, lo resuelto por la Honorable Corporación que con tanto acierto presidís, acerca de la manera como debe procederse al ejercer dichos Tribunales las atribuciones expresadas en los numerales que relaciona el artículo 8.° de la ley 143 del presente año, de cuyo telegrama quedó enterado este Tribunal en Acuerdo celebrado el cinco del corriente, habiéndose resuelto manifestar á la Corte por vuestro respetable conducto lo siguiente:

"No cabe ni puede caber duda sobre la inteligencia de la primera parte del telegrama, es decir, lo que se refiere al ejercicio de las atribuciones de los numerales 1.° á 4.° inclusive del mencionado artículo 8.°, porque debiendo procederse en tales casos en Sala de Acuerdo, es claro que se necesita la concurrencia de todo el personal del respectivo Tribunal, ó á lo menos de su mayoría relativa, para resolver el punto que se ventile; pero sí le asisten á este Tribunal dudas bastante fundadas sobre la segunda parte del telegrama, esto es, sobre el modo como debe proceder cuando tenga que hacer uso de las atribuciones especificadas en los numerales 5.° á 12.° inclusive del precitado artículo 8.°, porque debiendo entonces dictarse el fallo precisamente en Sala de tres Magistrados, cualquiera que sea el número de los que compongan el Tribunal, no alcanza á explicarse esta Corporación cómo pueda esto tener lugar cuando el personal sea de más de tres Magistrados, como sucede en el de este Distrito judicial. Constando el Tribunal de cuatro Magistrados, ¿cuál de ellos es el que se excluye, y cómo se verifica la exclusión? Qué razón legal puede aducirse en tal caso para que el Magistrado excluído no crea lesionados sus derechos como parte integrante del Tribunal al apartársele del conocimiento de determinado asunto sin hallarse impedido para ello?

"Dudas son estas que el Tribunal necesita que desaparezcan cuanto antes, para salvar las dificultades en que pueda hallarse envuelto de un momento á otro al tener que ejercitar algunas de las atribuciones de que se ocupan los numerales 5.° á 12.° del referide artículo 8.°, y es por esto que me permito dirigirme á la Corte Suprema por vuestro respetable conducto en solicitud de una resolución que ponga término á la perplejidad en que se halla esta Corporación respecto de la inteligencia de la parte aludida de vuestro importante telegrama."

En seguida el señor Magistrado doctor Samper, á quien había tocado en repartimiento el asunto, propuso el siguiente proyecto que, después de considerado, fué aprobado por unanimidad de votos:

"La Corte Suprema no halla fundamento para dudas en el caso consultado, y resuelve se diga al Tribunal Superior de Bolívar que, en todo caso en que deba ejercer las atribuciones 5.ª á 12.ª inclusive, detalladas en el artículo 8.° de la ley 143 del presente año, obrando conforme á su reglamento, deberá determinar, según el turno correspondiente al respectivo negocio, los dos Magistrados que han de fallar junto con el substanciador.

Publíquese esta resolución para que surta sus efectos, así como para regla de todos los Tribunales Superiores que estén compuestos de más de tres Magistrados."

Con lo cual se terminó el presente Acuerdo que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 88.

En la ciudad de Bogotá, á cuatro de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, se ocupó en considerar el proyecto de resolución presentado por el Magistrado doctor Calderón, á quien tocó en repartimiento la consulta de que se hablará en seguida; y cuyo proyecto, que, después de examinado, fué unánimemente aprobado, dice así:

"Su Señoría el Presidente del Tribunal Superior del Cauca, elevó á esta Superioridad una consulta del Juez de Palmira para que sea resuelta: '¿Quién suspende un Personero municipal á quien hay que aplicar pena por delito de abuso de la prensa?'

"Los delitos por abusos de la prensa no tienen señalada pena corporal; por consiguiente, no hay lugar á suspensión. Tampoco hay lugar á arresto ó detención provisional. Sólo en el caso del artículo 11 del decreto ejecutivo de 5 de Noviembre de 1886, puede imponerse confinamiento, circunstancia que no puede conocerse sino después de dictada la sentencia; por tal motivo, en el caso consultado, no puede suspenderse al Personero municipal."

Con lo cual se concluyó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 89.

En Bogotá, á cinco de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, se ocupó en considerar la consulta que hace el Inspector de la Sección 4.ª de la Policía municipal de Bogotá y de que se hablará á continuación; y el señor Magistrado doctor Morales, á quien tocó tal consulta en repartimiento, presentó el siguiente proyecto de resolución, que fué aprobado por unanimidad de votos:

"El señor Inspector de la Sección 4.ª de la Policía municipal de Bogotá, consulta con esta Superioridad si, según el artículo 208 de la ley 153 del presente año, la Policía es competente para conocer de los juicios por abuso de confianza, cuando excede de veinte pesos el valor de la cosa respecto de la cual se cometió dicho delito.

"Para resolver la duda que asiste al empleado consultante, basta considerar que el artículo 208 de la ley 153 se refiere directamente al 207 de la misma ley; y como en esta última disposición, están detallados los casos en que debe conocer la Policía y las penas que debe aplicar, es lógico deducir que á esa tarifa están sometidos los Inspectores del ramo, cuando se trate de dar aplicación al artículo 208 á que se ha hecho referencia.

"Así, pues, la Corte resuelve la consulta declarando: que los empleados de Policía no son competentes para conocer de los juicios por abuso de confianza cuando el valor de la cosa excede de veinte pesos.

"Comuníquese al señor Inspector de la Sección 4.ª de la Policía municipal y publíquese."

Con lo cual se terminó este Acuerdo que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 90.

En la ciudad de Bogotá, á seis de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, dió cuenta éste de la comunicación en que Su Señoría el Presidente del Tribunal Superior del Departamento del Tolima transcribió al de esta Suprema Corte la nota que, con fecha veintisiete de Septiembre último, dirigió al Gobernador del mismo Departamento, en la cual expresa las razones en que se ha fundado dicho Tribunal para abstenerse de proponer las ternas sobre que debe recaer el nombramiento de Notarios y Registradores para los Círculos de Altamira y Chaparral; transcripción que se ha hecho por vía de consulta, y estimándose que ésta se refiere á un punto de organización judicial, digno de detenido estudio y merecedor de una resolución que sirva de positiva garantía á los intereses públicos.

El señor Magistrado doctor Noguera, á quien se dió en comisión el referido asunto, sometió á la consideración de la Corte el siguiente proyecto de Acuerdo que fué unánimemente adoptado:

"El artículo 12 de la ley 14 de 1887 dice: 'Los Notarios y Registradores serán nombrados por los Gobernadores á propuesta en terna de los respectivos Tribunales de Distrito;' pero como estos empleados no son miembros del Poder Judicial, ni la simple propuesta para ese nombramiento hecha por un Tribunal de Distrito puede darles este carácter, que en nada es conforme con la naturaleza de sus funciones, es evidente que no se trata aquí de punto alguno de organización ni de procedimiento sobre cuya inteligencia puedan suscitarse dudas de que deba ocuparse la Corte, en conformidad con lo prevenido en el artículo 116 de la ley 57 de 1887 sobre adopción de Códigos.

Por lo tanto, la Corte Suprema de la Nación resuelve que no está en sus facultades ocuparse de la consulta de que se trata."

Con lo cual se terminó el presente Acuerdo que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Septiembre veintinueve de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Administrador principal de Hacienda nacional en Tunja, Departamento de Boyacá, libró mandamiento ejecutivo, con fecha veinte de Enero de mil ochocientos setenta y seis, contra Francisco García Rojas y José María Rodríguez ó sus herederos, por la suma de setecientos veintisiete pesos cincuenta y cinco centavos, valor del capital de trescientos pesos que, según se dijo, reconocían los ejecutados á favor de la Iglesia del Distrito de Cómbita, más los intereses de demora, según la liquidación que se formó al efecto con el mismo auto de ejecución.

Adelantado el juicio hasta el estado de citarse para sentencia de pregón y remate, el apoderado de los ejecutados propuso las excepciones siguientes:

1.ª Falsedad del instrumento ejecutivo;
2.ª Nulidad del mismo;
3.ª Pago;
4.ª Incompetencia de jurisdicción; y
5.ª Ilegitimidad de la personería del demandante.

Pasado el expediente al Juez respectivo y sustanciadas las excepciones en la forma legal, fueron resueltas por sentencia de diez y seis de Diciembre de mil ochocientos ochenta, en la cual se declararon probadas las de falsedad y nulidad del recaudo en que se fundó la ejecución, y no probadas las otras.

Dicha sentencia ha sido consultada con la Corte, y esta Corporación aduce las siguientes observaciones, como fundamento de su decisión.

La liquidación tuvo por base la copia de un registro ó inscripción hecha por el Agente respectivo del ramo de Bienes Desamortizados, en veintiséis de Abril de mil ochocientos sesenta y dos, en la cual se hacía constar que los herederos de Francisco García Rójas y José María Rodríguez adeudaban la suma de trescientos pesos que reconocían á censo redimible, correspondientes á la iglesia de Cómbita, suma por la cual pagaban el interés de seis por ciento anual, según lo estipulado en escritura otorgada ante el Notario 2.° de Tunja, en diez y siete de Septiembre de mil ochocientos cincuenta y ocho.

Contra este documento presentaron oportunamente los ejecutados las pruebas siguientes:

Una certificación expedida por los Notarios primero y segundo del Circuíto de Tunja, en que aseveran que en el archivo de su cargo no existe escritura alguna, correspondiente al año de mil ochocientos cincuenta y ocho, otorgada por Francisco García Rojas y Jssé María Rodríguez, para asegurar en favor de la iglesia del Distrito de Cómbita la cantidad de trescientos pesos; y que solamente han encontrado una escritura, otorgada en diez y seis de Septiembre de mil ochocientos cincuenta y ocho, por los dos individuos últimamente mencionados, en la cual aseguran la suma de trescientos pesos á las rentas de la Escuela del mismo Distrito de Cómbita;

Una certificación del Administrador principal de Hacienda Nacional en Tunja, en la cual afirma que del libro de cuentas corrientes que llevó el Agente de Cómbita, aparece que las sumas que pagaron las viudas de Francisco García Rojas y José María Rodríguez, en el año de mil ochocientos sesenta y dos, fueron por el capital que éstos adeudaban á las rentas de la Escuela del Distrito de Cómbita; y que en el expresado libro no aparece cuenta abierta á los mismos, como deudores á las rentas de la iglesia de dicho Distrito.

Por último, el Registrador de Instrumentos públicos del Circuíto de Tunja, á virtud de resolución de la Corte, certifica que en los libros de Registro y anotación de hipotecas, correspondientes al año de mil ochocientos cincuenta y ocho, no ha encontrado diligencia alguna en que conste que los mencionados Rojas y Rodríguez asegurarán suma alguna á favor de la iglesia de Cómbita; que sólo existe una escritura en que ellos aseguran la suma de trescientos pesos á favor de las rentas de la Escuela; y que esta escritura tiene la nota respectiva de cancelación.

De los documentos que preceden se deduce, de una manera incontrovertible, que no ha existido realmente crédito alguno á cargo de los ejecutados y á favor de la Iglesia del Distrito de Cómbita, por no aparecer la escritura de que se hizo mérito en la inscripción; y que este documento adolece de falsedad, por haberse consignado en él un hecho inexacto.

En cuanto á la nulidad de la inscripción, que también se ha alegado, basta leer dicho documento para comprender que le faltan muchas de las condiciones exigidas por el artículo 23 del Acuerdo de la Junta Suprema directiva del Crédito nacional, condiciones imprescindibles, y por sobre las cuales no podía pasarse sin dejar un vicio patente de nulidad.

Respecto de las excepciones de pago, incompetencia de jurisdicción é ilegitimidad de la personería, es clara la impertinencia de ellas, una vez que está demostrado que no hay crédito en contra de los ejecutados.

En atención á los razonamientos que preceden, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la sentencia consultada, por la cual se declaran probadas las excepciones de nulidad y falsedad del documento que sirvió de recaudo ejecutivo, y no probadas las otras que fue-

ron propuestas, y la adiciona resolviendo que debe cesar la ejecución, y que se deben desembargar los bienes que fueron denunciados para el pago.

Notifíquese, cópiece, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Francisco A. Fernández.—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclamente—Ramón Guerra A. Secretario.

En la audiencia del veintinueve de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete se publicó esta sentencia.

Ramón Guerra A.. Secretario.

En treinta de los mismos la notifiqué al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Se notificó por edicto.

Guerra A., Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veinticuatro de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos.—El diez y nueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta y dos se presentó Estanislao B. Zuleta, ante el Presidente del extinguido Estado de Antioquia, denunciando, para que le fuera adjudicada, una mina de oro corrido con el nombre de "Mata-Mundo," "Las-Dantas", etc., ubicada en las dos márgenes del río Mata, en jurisdicción de los Distritos de Amalfi y Remedios. Siguióse la tramitación establecida por el Código de Minas y leyes adicionales y reformatorias, de Antioquia, y como formalizaran oposición varios interesados en el asunto (Félix Muñoz, Emiliano Llano y Antonio María Llano), manifestando que tenían títulos legales respecto de la mina denunciada y que ésta no había sido abandonada, hubo de abrirse y seguirse el juicio ordinario correspondiente ante el Juzgado del Circuíto de Amalfi; siendo de advertir que figuró como demandante ó sostenedor de la denuncia Jesús María Pérez, por cuanto Zuleta declaró haber obrado por comisión de aquél, quien fué tenido como parte legítima por el Juez y por los denunciantes.

En veinte de Septiembre de mil ochocientos ochenta y tres, el Juez de la causa pronunció sentencia definitiva, y falló contra la legitimidad de la denuncia de Zuleta y Pérez, esto es, declarando que la mina por éstos denunciada estaba comprendida en aquella de que se hallaban en posesión los oponentes, y que, por lo tanto, la denuncia no podía surtir sus efectos en favor del denunciante.

De esta sentencia interpuso apelación el perjudicado por ella, Jesús María Pérez, y substanciada la apelación, falló el Tribunal Superior, en Sala de un solo Magistrado, por sentencia de veintiuno de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco, revocando la primera sentencia y declarando que debía llevarse á efecto la denuncia de la mina con todos sus efectos legales.

Segunda apelación se interpuso, y en esta vez contra el primitivo apelante, para ante la Sala plural del mismo Tribunal Superior, al notificarse la sentencia, y el recurso fué concedido (foja 118 vuelta), el doce de Diciembre, para que se surtiese la tercera instancia que permitían las leyes del extinguido Estado de Antioquia. Comenzó el Tribunal Superior á funcionar para el conocimiento en dicha tercera instancia, cuando advirtió que yá las minas de oro habían pasado á ser bienes de la Nación, conforme al artículo 202 de la nueva Constitución Nacional; y en tal virtud, por auto del siete de Julio del presente año, se declaró incompetente para conocer del pleito, aduciendo en apoyo de su resolución lo estatuído en la atribución 3.ª de la Corte Suprema (artículo 151 de dicha Constitución) y en la Sección 2.ª, artículo 21 de la ley 61 de 1886 "provisional sobre organización judicial, etc." En consecuencia, el Tribunal dispuso que el expediente fuese enviado á esta Superioridad para la decisión.

Se ha oído al señor Procurador, quien es de concepto que la Corte no es competente para conocer del asunto, y antes de adelantar la actuación, importa, para evitar un procedimiento que pudiera ser baldío, resolver la cuestión de competencia.

Desde luégo es incuestionable: 1.° Que el miembro 3.° del artículo 202 de la Constitución ha declarado que las minas de oro son bienes de la Nación, sin perjuicio de los derechos antes adquiridos; 2.° Que el inciso ó numeral 3.° del artículo 151 de la misma Constitución atribuye á la Corte Suprema el conocimiento de los negocios contenciosos en que tenga parte la Nación; por lo que, en tesis general, á la Corte corresponde conocer de los litigios relativos á minas. ¿Pero en qué condiciones ha de ejercer esta atribución la Corte? Como lo disponga la ley en desarrollo de la Constitución. Así la ley determina en qué instancia conoce la Corte: en última, cuando han conocido en primera los Jueces de Circuíto.

La legislación actual de la República no reconoce tercera instancia en los juicios en ningún caso general; pues si bien establece recursos de casación, de nulidad, de revisión, de hecho, etc. estos son procedimientos especiales para determinados objetos y no terceras instancias de los pleitos. Y además, en el presente caso no se trata de apelación interpuesta contra la sentencia de un Juez de Circuíto (caso á que se refiere el numeral 1.° de la sección 2.ª del artículo 21 de la citada ley 61 de 1886, pues sobre tal apelación falló en tiempo oportuno el Tribunal competente), sino de apelación de una sentencia de Tribunal Superior, dictada en segunda instancia, en asunto que debía tener su conclusión ante el mismo Tribunal, cuando las minas de oro pertenecían á los Estados, y las leyes de Antioquia permitían una tercera instancia en los pleitos sobre la materia.

Pero el caso, como acertadamente lo indica en su vista el señor Procurador general, está especialmente previsto en la ley 57 del presente año (15 de Abril). Su artículo 190, relativo al Código Judicial, dice lo siguiente:

"En los asuntos judiciales en que, conforme á la legislación de los extinguidos Estados, había tres instancias, conocerán los respectivos Tribunales Superiores de Distrito Judicial de los recursos de tercera instancia, interpuestos y no decididos antes de la vigencia de la ley 61 de 1886."

Ahora bien: como el recurso de que se trata fué interpuesto para tercera instancia, desde el veintiuno de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco, y no había sido decidido cuando se puso en ejecución en Antioquia dicha ley 61, es claro que, ni por excepción, ésta en manera alguna puede tener lugar en la Corte Suprema, sino ante el respectivo Tribunal Superior.

Por lo expuesto la Corte se declara incompetente para conocer de la apelación interpuesta, y dispone que el expediente vuelva al Tribunal Superior de Antioquia para que éste continúe conociendo en la tercera instancia que está iniciada.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Francisco A. Fernández—Aristides Forero—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintinueve de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

Ramón Guerra A., Secretario.

Corte Suprema de Juticia—Bogotá, Septiembre treinta de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Síndico Municipal del Distrito de Bogotá ocurrió, en veintiocho de Febrero de mil ochocientos ochenta y cuatro, al Juzgado del Circuíto, promoviendo juicio de expropiación de un lote de tierra perteneciente á José Manuel y Joaquín París, con el fin de prolongar la carrera 7.ª al Occidente de la ciudad; demanda que fué coadyuvada por el Agente Fiscal y por Cristóbal Díaz. Repartido el negocio al Juez 2.° del Circuíto, oídos los demandados, quienes se opusieron á la expropiación, y seguido el juicio por la vía ordinaria, recayó sentencia absolutoria, de la cual apelaron el Síndico Municipal y Cristóbal Díaz. Concedido el recurso para ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, éste se declaró incompetente para conocer de él, fundándose en el ordinal 2.° del artículo 21 de la ley 61 de 1886

referente al artículo 32 de la Constitución, y mandó devolver el expediente al Juez *á quo* para que le diera el curso legal. El Juez otorgó el recurso para ante esta Superioridad, y el señor Procurador general, á cuyo estudio se pasó la causa, considera infundada la declaratoria de incompetencia de dicho Tribunal; y por esto, y porque lo primero que debe inquirir la Corte es si los negocios que vienen á su despacho le están atribuídos, pasa á examinar el punto.

La disposición legal citada por el Tribunal atribuye á la Corte Suprema el conocimiento en última instancia "de los juicios de expropiación ó enajenación forzosa de que trata el artículo 32 de la Constitución, seguidos ante los Jueces de Circuito por los Agentes del Ministerio público y á virtud de *orden del Gobierno*".....; y como, según el artículo 59 de la misma Constitución "el Presidente y los Ministros, y en cada negocio particular el Presidente con el Ministro del respectivo ramo, constituyen el Gobierno," y éste no ha ordenado la expropiación de que se trata, sin más que por esto no podría la Corte conocer del recurso otorgado últimamente para ante ella. Pero menos puede hacerlo después de expedida la ley 143 de 5 de Agosto último que contiene estas disposiciones:

"Art. 1.° Corresponde á la Corte Suprema conocer en última instancia de los juicios de expropiación ó enajenación forzosa de que trata el artículo 32 de la Constitución, cuando la expropiación interese *á un Departamento ó á la Nación.*"

"Art. 8.°—Atribucion 9.ª conferida á los Tribunales de Distrito:

"Conocer en primera instancia de los juicios de expropiación ó enajenación forzosa de que trata el artículo 32 de la Constitución, en todos los casos en que la expropiación interese á un Departamento ó á la Nación; y en *segunda instancia* de los mismos juicios de expropiación *en que no tengan interés el Departamento ó la Nación. En el primer caso* se consultará la sentencia con la Corte Suprema de Justicia.

Es, pues, claro que no es á ésta sino al Tribunal Superior de Cundinamarca á quien corresponde conocer del recurso á que se ha aludido, por no tratarse de una expropiación que interese á un Departamento ó á la Nación, sino única y exclusivamente al Distrito de Bogotá, por tener por objeto la prolongación de una calle de la ciudad.

En fuerza de estas consideraciones, que están de acuerdo con el concepto emitido por el señor Procurador general, la Corte Suprema se declara incompetente para conocer del recurso de apelación concedido para ante ella por el Juez 2.° del Circuito de Bogotá, y dispone que se remita la causa al Tribunal Superior de Cundinamarca, á quien toca conocer del recurso y para ante el cual se otorgó primeramente, dándose cuenta de esto á dicho Juez.

Hágase saber este auto, déjese copia de él y publíquese en la *Gaceta Judicial.*

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En primero de Octubre del mismo año, notifiqué el auto que antecede al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Septiembre treinta de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Intentada acusación por Miguel H. Campillo contra el Juez 1.° del Distrito Federal, doctor Isaías Castro Vélez, por infracción de los artículos 279 y 308 del Código Penal de Cundinamarca, el Tribunal Superior de ese Departamento, á quien correspondía conocer del negocio, dictó, previa la debida instrucción sumaria, auto de sobreseimiento que ha consultado con esta Superioridad.

Substanciada la consulta y traído á la vista el expediente, para resolverla, resulta de él lo siguiente:

En un sumario que por el delito de robo instruyó el Inspector de la Sección 6.ª de Policía, y que, pasado al Juez del Estado, le fué repartido al Juez 1.° del Distrito Federal, pidió el Procurador del mismo, entre otras diligencias, que se practicara un careo, que juzgó importante, entre Gumersinda Gómez Lara, sindicada de dicho delito, y la testigo Rosario Delgado; y accediendo el Juez á la solicitud, cometió la práctica de las diligencias al funcionario de instrucción. Este, que lo era Miguel H. Campillo, acatando, dijo, el mandato del artículo 24 del Código Penal, dispuso que se practicara el careo que había creído bueno pedir el Ministerio público, y que al efecto se citara á las personas antedichas. El Secretario informó dos días después que Rosario Delgado no había sido hallada por los gendarmes y que se tenía noticia de que estaba ausente, y el Inspector Campillo declaró de *imposible práctica* el careo y entró en observaciones dirigidas á demostrar que esa diligencia era innecesaria, y que por esto "ya no había lugar á que el Ministerio público, firme en sus propósitos, insistiera en que se practicara el innecesario careo, por haber la prueba suficiente para abrir causa..."

Devuelto el sumario con semejante declaratoria al Juez 1.° del Distrito Federal, doctor Isaías Castro V., dispuso éste que se pasara copia de lo conducente al señor Procurador del mismo Distrito, para que promoviera el juzgamiento y castigo del Inspector de la Sección 6.ª de Policía, por mal desempeño de sus funciones y por arbitrariedad en sus procedimientos; le impuso y mandó hacer efectiva la multa de $ 20 por haber resistido á dar cumplimiento á las órdenes del Juzgado; mandó dar cuenta de lo ocurrido al señor Gobernador del Distrito Federal y al Alcalde de la ciudad para los fines convenientes, y ordenó, por último, que se publicara su resolución en el periódico oficial.

El auto de que se acaba de hablar fué el que motivó la acusación mencionada al principio de éste, en la cual Campillo le hace cargo al Juez de haber violado el artículo 308 del Código Penal de Cundinamarca, imponiéndole arbitrariamente una multa, y el 279 porque, teniendo el sumario el carácter de reservado, conforme al artículo 22 del Código de Procedimiento Criminal, mandó pasar copia de él al Ministerio público, y otra del auto en referencia al Gobernador del Distrito Federal y al Alcalde de la ciudad, y porque dispuso además, que ese auto se publicara.

Practicado, como lo fué posteriormente por otro funcionario, el careo pedido por el Fiscal y ordenado por el Juez, el hecho está demostrando que esa diligencia no era de imposible práctica, como lo declaró el Inspector Campillo; y si á esto se agrega que con el simple informe del Secretario de que se tenía noticia que Rosario Delgado estaba ausente, se apresuró á devolver el sumario al Juez respectivo, sin cerciorarse de la exactitud de lo informado ni practicar alguna diligencia que pudiera conducir á obtener el resultado que se deseaba; y si, por otra parte, se tiene en cuenta todo el contexto de la resolución de dicho Inspector, encaminada á increpar la conducta del Fiscal y á dar una lección al Juez, cuando debió arreglar su procedimiento al tenor literal de la comisión, como lo disponía el artículo 98 del Código de organización judicial de Cundinamarca, lógico es deducir que él no tuvo voluntad de practicar la diligencia que le fué encomendada, y que el Juez, en ejercicio de la 1.ª atribución que en negocios criminales le confería el artículo 74 del Código últimamente citado, pudo imponerle, como corrección disciplinaria, la multa que ha motivado la acusación.

En cuanto al otro punto de ésta, relativo á lo que el Juez Castro dispuso para que se averiguara la responsabilidad en que el Inspector Campillo pudo haber incurrido por falta de cumplimiento á una orden superior, y á la publicidad que el mismo Juez mandó dar al auto que dictó, basta observar, que si bien es cierto que el artículo 22 del Código de Procedimiento Criminal de Cundinamarca, daba al sumario el carácter de reservado, también lo es que concluía así: "salvo el caso de que se procediera contra alguno de los funcionarios que intervengan en él, para averiguar la responsabilidad en que en la misma instrucción puedan haber incurrido."

Y si se atiende á que por el hecho de haberse publicado dicho auto, que tuvo por objeto demostrar que el procedimiento del Inspector de policía fué indebido, no se publicó ninguna diligencia del sumario que debiera mantenerse reservada; la

acusación en lo tocante á ésto es también completamente infundada.

Infiérese, pues, de lo dicho, que el Juez Castro no violó los artículos 279 y 308 del Código Penal de Cundinamarca, como lo da por sentado el acusador: nó el primero, porque no ejecutó algún hecho que le estuviera expresamente prohibido; y tampoco el segundo, por no haberse excedido de las atribuciones de su empleo.

Por lo tanto, y de acuerdo con lo expuesto y pedido por el señor Procurador general, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto consultado, que sobresee en el procedimiento por no haber motivo legal para llamar á juicio de responsabilidad al Juez Isaías Castro Vélez.

Hágase saber, déjese copia, publíquese y devuélvase el sumario al Tribunal Superior de Cundinamarca.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Francisco A., Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En primero de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto que antecede al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Octubre cuatro de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El veinticinco de Agosto del presente año dictó la Corte un auto relativo á un juicio criminal seguido por el Juez del extinguido Territorio de Nevada y Motilones, y al disponer lo que debía hacerse con dicha causa, cuyo expediente había sido presentado al Secretario de la Corte por el doctor Mariano Manrique B., en su calidad de defensor del reo, ordenó que se compulsara copia de lo conducente, á fin de que se resolviese lo que fuese legal sobre la responsabilidad en que el mismo Manrique hubiese podido incurrir, por la demora de un año y días en la devolucion del expediente que le había sido entregado el dos de Agosto de mil ochocientos ochenta y seis, como á defensor legítimo del reo á quien se juzgaba en segunda instancia, por consulta del Juez de Nevada y Motilones.

Pasada la copia á que se ha aludido, y formado con ella el sumario respectivo, se substanció el asunto conforme al procedimiento prescrito por los artículos 1,826 y 1827 del Código Judicial (nueva edición), y una vez emitido su informe por el sindicado, el señor Procurador general dió su concepto en vista del treinta de Septiembre último, en la cual hace observaciones contra la legalidad del procedimiento; observaciones que, así como la explicación exculpativa del sindicado, deben ser consideradas para fallar. Dichas objeciones son las siguientes:

Primera. Que ningún artículo del Código Penal de 1873, que sería el aplicable, define como delito ni castiga la demora en que incurra un defensor que no devuelve oportunamente los autos que se le entregan para alegar; y que el artículo 243 de dicho Código no es aplicable al caso, porque sólo se refiere, como todo el título de que hace parte, á delitos de los funcionarios públicos, y un defensor no tiene este carácter.

Segunda. Que tampoco es aplicable el artículo 463 del Código Judicial de 1873, porque el expediente demorado ha sido devuelto á la Corte sin apremio alguno; y

Tercera. Que las penas en que incurren las partes son puramente disciplinarias, y no dan lugar á procedimiento judicial.

Fundado en estas razones, el señor Procurador es de concepto que se suspenda todo procedimiento, ó que, si se ha de continuar, se pase el sumario al Juez competente, por no parecerle que lo sea la Corte.

La Corte considera contra lo observado:

1.° Que no por faltar en el Código Penal de 1873 el artículo que defina la falta calificada como demora, por parte de un defensor, deja de haber motivo para castigar correccionalmente la falta, si así lo dispone el Código Judicial, y éste detalla el procedimiento y la pena;

2.° Que bien puede tratar de "funcionarios públicos" el título 9.°, libro 3.° del Código Penal, y sin embargo ser aplicable á los defensores, si éstos han sido asimilados á los funcionarios públicos en cuanto á las demoras en que incurran; lo que precisamente sucedió con el artículo 423, que impone una multa de ocho á cincuenta pesos á "los Fiscales, Secretarios y *demás* que por razón de su *cargo*, empleo ú oficio *intervienen en el seguimiento de las causas*," y que "sean morosos ó no *despachen* ó *actúen* con la brevedad que prescriben las leyes, y *dentro de los términos que ellas señalan*;"

3.° Que aunque las penas en que incurran las partes sean disciplinarias, hay que seguir, para imponerlas, un procedimiento legal y nunca arbitrario; y para este caso, el artículo 1,718 del citado Código Judicial, refiriéndose expresamente al capítulo 4.°, título 1.° del libro 3.°, manda seguir los trámites que en este capítulo se detallan, y son los que se han seguido; siendo de notar que dicho artículo alude á las faltas cometidas por los subalternos de los Juzgados ó Tribunales, *los defensores, etc.*

Es, pues, evidente que las demoras en que incurren los defensores están sujetas á penalidad (multa), sin perjuicio de los apremios y recursos legales.

Cuanto á la explicación dada por el sindicado, de ella, y del hecho mismo de haber sido espontáneamente entregado por él el expediente demorado, resulta la prueba de la falta de malicia en el hecho, no obstante ser éste punible por razones de disciplina y en bien de la administración de justicia, que deben ser atendidas.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y calificando la falta en tercer grado, condena al doctor Mariano Manrique B. á pagar la multa de ocho pesos ($ 8), mínimun de la pena impuesta por el artículo 423 del Código Penal de 1873 (que regía cuando se cometió la falta) definida como demora en el despacho respectivo.

Dése el correspondiente aviso al Tesorero general de la República, para lo de su cargo.

Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

ASUNTOS VARIOS.

República de Colombia—Departamento de Antioquia—Poder Judicial—Presidencia del Tribunal Superior del Distrito—Medellín, 9 de Septiembre de 1887.

Señor Secretario de la Suprema Corte de Justicia.—Bogotá.

Con su atenta nota circular de 18 de Agosto último, señalada con el número 905, se recibió el número 7,126 del *Diario Oficial*, correspondiente al 3 de dicho mes, en el cual se halla inserto un Acuerdo de la Corte Suprema, de fecha 26 de Julio anterior, sobre el procedimiento que deben adoptar los Tribunales Superiores de Distrito judicial para el despacho de los asuntos de su cargo.

Al avisar á usted recibo del documento á que dejo hecha referencia, me permito manifestarle, para que llegue á conocimiento de ese Supremo Tribunal, que el expresado Acuerdo se puso en vigencia en el Tribunal de Antioquia desde el 28 de Julio, y que el nuevo Acuerdo expedido el 24 de Agosto sobre el mismo asunto se observa desde el 29 del propio mes.

Su atento y seguro servidor.

SILVERIO ARANGO.

BIBLIOTECA DE LA CORTE SUPREMA.

Se han recibido las siguientes leyes de los extinguidos Estados:

Los 12 Códigos de Cundinamarca, remitidos por Su Señoría el Ministro de Gobierno, procedentes del Gobernador del Departamento.

Leyes de Boyacá, de 1857, 1860, 1863, 1882 á 1884, y 3 volúmenes de Códigos, remitidos por señor Gobernador del Departamento.

Bogotá, 6 de Octubre de 1887.

Ramón Guerra A., Secretario.

República de Colombia—Departamento nacional del Cauca—Presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judiciai—Número 58.—Pasto, 15 de Septiembre de 1887.

Señor Secretario de la Corte Suprema de Justicia.—Bogotá.

Tan luégo como se recibió la interesante circular de ese Despacho, de fecha 18 de Agosto último, marcada con el número 905, en la cual se sirve incluirme el número 7,126 del *Diario Oficial*, con la correspondiente autenticación, en el que se halla inserto el Acuerdo de la Excelentísima Corte Suprema, acerca del procedimiento que los Tribunales Superiores deben adoptar para el despacho de los asuntos que se hallan á su cargo; se dió cuenta al Tribunal en Sala de Acuerdo, el día 13 del mes que rige, el que dispuso se avisara su recibo, ofreciendo se le daría su puntual cumplimiento.

Soy del señor Secretario muy atento seguro servidor.

JOSÉ MARÍA NAVARRETE.

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL

Señores Magistrados.

La Sala de apelación de la Oficina general de Cuentas, en auto de fecha 19 de Julio último, confirmó á cargo del señor José María Forero S., Administrador general de Correos Nacionales, un cargo líquido de novecientos setenta y cuatro pesos, cincuenta y siete y medio centavos ($ 974-57½ cs.), deducido en la cuenta correspondiente al mes de Febrero de 1885.

El auto apelado y los comprobantes de la cuenta fueron recibidos en la Corte el día 10 de Enero del presente año, y repartido el asunto, se ha dado traslado á este Ministerio en cumplimiento de vuestro auto de fecha 11 de los corrientes.

Deben, pues, estudiarse los fundamentos del cargo deducido y las razones alegadas por el responsable en su favor.

Desde luégo se advierte que el señor Forero no niega que haya ocurrido el desfalco de los $ 974-57½ cs., cuya suma figura entre las entradas de la cuenta á su cargo, sin que aparezca que ella se ha invertido legalmente, ni resulta comprendida en la existencia en Caja.

Examinados los comprobantes de la cuenta, el desfalco se explica así: el señor Ignacio Ruiz, empleado encargado del expendio de las estampillas telegráficas en Bogotá, resultó alcanzado en dicha suma. El señor Ruiz desempeñaba su destino bajo la inmediata dirección y responsabilidad del señor Clemente Martín, quien á su vez dependía del señor Administrador general de Correos, en su calidad de empleado de manejo. Esta dependencia no la ha negado tampoco el señor Forero.

No parece dudosa, al caso de que se trata, la aplicación del principio de la "unidad de responsabilidad," establecida en el artículo 1,384 del Código Fiscal de la Nación, que dice:

"La 'unidad de responsabilidad' es el principio en virtud del cual el Jefe de cada oficina es el *único* responsable de cualquiera falta que en ella se note, salvo el derecho que la ley deja al mismo Jefe para repetir por *fraude ó malversación* comprobada contra cualquier subalterno, y el derecho que también se reserva la Unión de repetir contra los subalternos *en caso de muerte*, fuga ó insolvencia del Jefe y sus fiadores."

De acuerdo con la transcrición anterior el señor Administrador general de Correos es el único responsable, desde el punto de vista fiscal, de la suma que le ha sido glosada, y, antes que otro alguno, á él debe exigirse la devolución de ella, sin perjuicio de que pueda procederse subsidiariamente contra los subalternos, pudiendo también el señor Forero recabar de ellos la indemnización por el pago que haga.

Para premunirse de gravámenes de esta naturaleza, los Jefes de las oficinas de manejo tienen el derecho de exigir fianza á los subalternos que no son de su confianza, y, en algunos casos, es un deber para ellos cumplir ésta formalidad. Así lo ha hecho algunas veces el señor Administrador general de Correos Nacionales, como puede verse en el *Diario Oficial* número 6,230, correspondiente al 18 de Octubre de 1884, en que se registra una resolución firmada por el mismo señor Forero, asignando fianza al sub-Jefe de la Sección 4.ª que corresponde á los recomendados.

El señor Forero alega en su descargo que, á su vez y oportunamente, glosó las cuentas rendidas por el señor Clemente Martín, y le dedujo el cargo líquido de $ 974-57½ cs., y dió cuenta al señor Juez Ejecutor Nacional. Tal procedimiento, en concepto del infrascrito, no exime al señor Forero de responsabilidad, y habría igual razón para que se exigiera directamente del señor Ignacio Ruiz el reembolso de la suma de que se trata.

Sólo en el caso de que el señor Administrador general de Correos Nacionales comprobara que el señor Clemente Martín no era su subalterno, como empleado de manejo quedaría á cubierto su responsabilidad.

De acuerdo con lo expuesto, os pide el infrascrito que confirméis el auto apelado.

Bogotá, 27 de Julio de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

Contestando el traslado de la demanda propuesta ante vosotros por el señor José Miguel de Paz contra el Gobierno de la República, por la suma de $ 1,751.30 centavos, procedente de un remate que le fué adjudicado de Vales de Renta sobre el Tesoro al portador de inscripción al seis por ciento anual, paso á manifestaros lo siguiente:

Que en nombre y representación de la Nación me opongo á dicha demanda, negando expresamente los hechos marcados en ella con los ordinales 3.°, 4.° y 5.°, por cuanto las conclusiones que de ellos pretende derivar el demandante son contrarias á las razones que paso á expresar:

1.ª Basta considerar que, excepción hecha del señor Paz, todos los demás tenedores de Renta sobre el Tesoro han dado á las disposiciones fiscales vigentes sobre amortización de esa Renta, la misma inteligencia que les ha dado Su Señoría el Ministro del Tesoro, al aprobar lo resuelto por el señor Tesorero general de la Nación, respecto de la liquidación de la suma que debe corresponder al señor Paz por razón del remate que le fué adjudicado. Hago mérito de esta consideración, porque ella permite presumir con bastante fundamento que el señor Paz ha incurrido en error al interpretar como ha interpretado las referidas disposiciones; pues no es dado admitir, ni aún siquiera es sostenible, que solamente dicho señor tenga interés en la defensa de sus derechos, y que los demás tenedores renuncien, voluntariamente, por ignorancia ó por descuído, á las ventajas manifiestas que derivarían de la ley, al ser interpretada en los términos en que lo ha sido por el expresado señor.

2.ª Sostiene el señor Paz, y en esto hace consistir el fundamento principal de su demanda, que las disposiciones del Código Fiscal que tratran de los Vales de Renta al portador, han sido derogadas por la ley 87 de 1886 sobre Crédito público. A esta aserción se puede oponer, además de las razones consignadas en la resolución de Su Señoría el Ministro del Tesoro, del 17 de Febrero último, las siguientes:

(*a*) De acuerde con el artículo 71 del Código Civil nacional, una ley no se debe considerar tácitamente derogada, sino cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior; lo cual no ocurre, en mi concepto, en el caso que nos ocupa, pues las disposiciones de la ley 87 de 1886, lejos de pugnar con las correspondientes del Código Fiscal, las confirman en lo substancial.

(*b*) El artículo 2,192 del Código Fiscal previno que las leyes posteriores derogatorias ó reformatorias de alguna ó algunas de sus disposiciones, deberían expresar claramente el artículo, capítulo ó título derogado ó reformado por ellas; y la citada ley 87 nada dice á este respecto.

(*c*) Admitida la derogatoria que sostiene el demandante, no quedaría legislación substantiva vigente que aplicar en el asunto, una vez que es evidente que la simple derogatoria de una ley no restablece la vigencia de lo que ésta había derogado anteriormente, de donde resultaría que, en defecto del Código Fiscal, no sería posible determinar cuál, de las muchas leyes referentes á la Renta sobre el Tesoro, sería la que debería observarse, indeterminación que alcanzaría también al interés abonable, como que éste se redujo desde la expedición de la ley de 1872 al 4 %₀ anual.

3.° Aún cuando llevo indicado que, en mi opinión, la ley 87 de 1886 no modificó en lo substancial las disposiciones correlativas del Código Fiscal, creo conveniente insistir sobre este punto, pues para ello me asiste, aparte de las consideraciones que llevo expuestas, la de que, consistiendo, como es sabido, la diferencia entre la Deuda consolidada y la flotante, principalmente, en que en la primera no se amortiza el capital y únicamente se pagan los intereses, mientras que en la segunda se amortiza primero aquel y luégo éstos, es fuera de duda que, desde que la ley 87 de 1886 dispuso que la amortización del capital é intereses de los Vales de Renta sobre el Tesoro al portador se ejecutara por medio de remate, asignando con tal objeto el fondo que se tuvo por justo y conveniente; es claro, repito, que se reconoció por ministerio de la misma ley, la vigencia de la que varió la naturaleza de la Deuda, convirtiéndola de consolidada al 6 °/o que fué hasta 1872, en flotante al 4 °/o, que adquirió por virtud de la ley de crédito público expedida en aquel año (Ley 60) y que reprodujo después el Código Fiscal.

Dejo en estos términos contestada la demanda instaurada ante vosotros por el señor José Miguel de Paz, y me ratifico en negar el derecho que dicho señor pretende tener á que se le liquide su crédito de un modo diferente del adoptado por el señor Tesorero general de la Nación, el cual se confirmó por el Ministerio del Tesoro y ha sido de la general aceptación de los demás Tenedores de la misma clase de documentos, quienes se han conformado en un todo con liquidaciones iguales á la rechazada por el demandante, según se afirma en la resolución que se lee al folio 3.° vuelto del expediente.

Bogotá, 16 de Junio de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

El Síndico Municipal del Distrito de Bogotá entabló juicio de expropiación, por causa de necesidad pública, de una zona de terreno perteneciente al señor Dimas Cruz, la cual debe destinarse á poner en comunicación la carrera 4.ª con la carrera 5.ª al Occidente en esta ciudad.

El Juez del conocimiento, que lo fué el 4.° del Circuíto de Bogotá, decretó la expropiación y fijó la cantidad que debe pagarse por vía de indemnización, según puede verse de la sentencia proferida con ese objeto en 27 de Noviembre de 1886.

De dicha sentencia apeló el apoderado de Dimas Cruz y el recurso le fué concedido para ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, el cual se declaró incompetente para conocer del expresado recurso, dando lugar con ello á que el incidente haya venido al conocimiento de esa Superioridad.

El infrascrito prescinde de examinar el mérito legal del fallo apelado, y se limita á objetar la competencia de la Corte para conocer de la apelación de dicho fallo, fundándose para ello en las razones que pasa á reproducir, y de las cuales hizo uso para pediros que os declararais incompetentes en el juicio de expropiación seguido á nombre del Distrito de Bogotá, contra los señores José Manuel y José Joaquín París:

"La ley 143 del presente año (5 de Agosto), reformó el inciso 2.°, sección 2.ª del artículo 21 de la ley 61 de 1886, en los siguientes términos: 'Artículo 1.° Corresponde á la Corte Suprema conocer en última instancia de los juicios de expropiación ó enagenación forzosa de que trata el artículo 32 de la Constitución, cuando la expropiación interesa á un Departamento ó á la Nación.'

"La novena de las atribuciones conferidas á los Tribunales de Distrito por el artículo 8.° de la misma ley, consiste en conocer en primera instancia de los juicios de expropiación ó enagenación forzosa de que trata el artículo 32 de la Constitución, *en todos los casos en que la expropiación interese á un* Departamento ó á la Nación; y en segunda instancia, *de los mismos juicios de expropiación en que no tenga interés el Departamento ó la Nación.* En el primer caso se consultará la sentencia con la Corte Suprema de Justicia.

"Como se ve, la intervención de la Corte en los juicios de expropiación por causa de utilidad pública, está limitada á conocer en segunda instancia de aquellos de dichos juicios en que tiene interés un Departamento ó la Nación.

"Ahora bien: tal interés se deduce del hecho de haberse iniciado la demanda de expropiación á nombre de una de las dos entidades dichas, y de tener la obra ó mejora que haya originado la expropiación demandada, el carácter de departamental ó nacional, según que dicha obra haya sido dispuesta por ordenanza ó decreto de un Departamento, ó por ley ó decreto de la Nación, y que la indemnización consiguiente haya de hacerse con fondos de aquel ó de ésta.

"De lo expuesto se desprende que cuando la expropiación, como sucede en el caso que nos ocupa, no ha sido demandada sino á nombre de un Distrito, y en cumplimiento de resoluciones de la autoridad local, siendo, por lo tanto, de cargo de las rentas municipales la indemnización á que pueda haber lugar, tal expropiación no incumbe al Departamento ni á la Nación, y de consiguiente, la Corte no tiene por qué ingerirse en ella.

"De los juicios de expropiación de procedencia de los Distritos, es de los que los Tribunales Superiores deben conocer en segunda instancia, conforme á la atribución 9.ª preinserta; pues de otra suerte ¿cuáles serían los juicios de expropiación que, no interesando á la Nación ó á un Departamento, quedaran sujetos en segunda instancia á la jurisdicción de dichos Tribunales?

"Para convencerse de esto, basta considerar que fuera de las expropiaciones por causa de necesidad pública en que tengan interés la Nación ó los Departamentos, no pueden admitirse razonablemente otras que las que interesan á los Distritos; pues no es posible decretar expropiaciones de esa clase, en puro beneficio de particulares, y con prescindencia de los intereses públicos representados en los respectivos casos, por la Nación, los Departamentos ó los Distritos."

A virtud de lo expuesto, el infrascrito es de concepto que no sois competentes para conocer del asunto, por cuanto se trata de un juicio de expropiación, diferente de los de que os corresponde decidir en segunda instancia, de conformidad con el artículo 1.° de la ley 143 del presente año.

Bogotá, 18 de Agosto de 1887.

CARMELO ARANGO M.

ANUNCIOS.

CONSTITUCIÓN DE COLOMBIA.

ESTÁ DE VENTA en la Tesorería general, en edición de cuaderno, á 20 centavos el ejemplar.

"GACETA JUDICIAL."

El Gobierno ha resuelto bajar á la mitad el valor de las suscripciones á este periódico, desde el número 27 en adelante, precio que tendrán igualmente las colecciones de la *Gaceta*.
El Subsecretario de Gobierno, *Julio A. Corredor*.

IMPORTANTE.

En beneficio del buen servicio público, se suplica á los caballeros que tengan en su poder Códigos, Compilaciones, tomos de leyes nacionales y de los extinguidos Estados, ú otros libros de propiedad de la Corte Suprema, se sirvan devolverlos, pues se ocurre con frecuencia la necesidad de consultar tales obras.

BOGOTÁ.—IMP. DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 42

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 22 de Octubre de 1887.

CONTENIDO.

PÁG.

ACUERDOS DE LA CORTE.

Acuerdo número 91, relativo á una consulta del Tribunal Superior de Popayán 329
Id. número 92, id. á otra id. del Tribunal Superior de Tunja 329
Id. número 93, id. á otra id. del Juez del Circuíto de Toro (Cauca) .. 330
Id. número 94, id. á otra id. del Juez del Circuíto de Málaga (Santander) ..... "
Id. número 95. id. á otra id. del Prefecto de la Provincia del Centro del Tolima 331
Id. número 96, id. á otra id. del Tribunal Superior de Cundinamarca .. "
Id. número 97, id. á otra id. del Tribunal Superior del Cauca ..... "
Id. número 98, id. á otra del Tribunal Superior del Tolima ..... "

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Sobre incompetencia de la Corte para conocer de un juicio entre particulares 332
Revocatorio de un auto dictado en un juicio ejecutivo en que tienen interés el Banco Nacional ..... "

NEGOCIOS CRIMINALES

Confirmatorio de un auto de sobreseimiento proferido por Tribunal Superior de Antioquia, en un sumario por responsabilidad ..... "
Sobre incompetencia de la Corte para conocer de una consulta sobre delito de falsificación 333
Sobre un recurso de nulidad en causa militar ..... "
Confirmatorio de un auto de sobreseimiento proferido por el Tribunal Superior del Magdalena ..... "

DOCUMENTOS DIVERSOS.

Notas de la Secretaría de la Corte 334

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL

Emitida con relación á un recurso de nulidad ..... "
Id. con respecto á una demanda promovida contra el Gobierno de Antioquia ..... "
Id. acerca de un juicio ejecutivo Fiscal 335
Id. acerca de un juicio de expropiación 336
Id. relativa á un punto de competencia de jurisdicción ..... "

GACETA JUDICIAL.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

ACUERDO NUMERO 91.

En la ciudad de Bogotá, á seis de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete, se reunió la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, y con el objeto de considerar la consulta hecha por S. S. el Presidente del Tribunal de Popayán, en telegrama de fecha cuatro de los Corrientes, sobre estos dos puntos: 1.° ¿Quién conoce en segunda instancia de las apelaciones ó consultas relativas á las sentencias dictadas por los Jueces de Circuíto antes de las leyes de unifiación, en los delitos de hurto de menor cuantía, que han sido elevadas al Tribunal, y cuyos delitos pertenecen actualmente al conocimiento de la policía?

2.° Cuando en un mismo sumario y contra un mismo individuo aparecen comprobados dos delitos de hurto, uno de mayor y otro de menor cuantía, ¿puede el Juez de Circuíto acumular los autos, conociendo de ambos delitos?

El Magistrado Señor Dr. Martínez, á quien tocó el negocio en repartimiento, presentó el siguiente proyecto de resolución, que fué *unanimemente adoptado*:

"Dígase á Su Señoría el Presidente del Tribunal de Popayán, acerca del punto primero de su consulta: que habiendo regido transitoriamente, á virtud del artículo *H* de la Constitución, las leyes seccionales, los efectos consiguientes á las actuaciones iniciadas, deben regirse por esas leyes seccionales, en su parte procesal, en tanto cuanto no pugnen abiertamente con la Constitución y las leyes adoptadas y en los casos no prevenidos en las leyes nacionales, que señalan atribuciones expresas sobre el modo de conocer; pues así lo establece el artículo 40 de la ley 153 del corriente año. Por consiguiente, si conforme á la legislación del Cauca los Jueces de Circuíto conocían de los hurtos que hoy son de menor cuantía; si las sentencias fueron dictadas antes de la ley 153 que se acaba de citar; y si tales sentencias eran apelables ó consultables, es al Tribunal del Distrito, como el inmediato Superior, á quién corresponde conocer en segunda instancia, no obstante lo establecido hoy en el artículo 207 de la última ley de unificación.

"En cuanto al 2.° punto, yá la Corte tiene resuelto, en observancia de lo dispuesto en el Código Judicial, que no permite que contra un mismo individuo se sigan distintas procesos, aun cuando ese individuo sea culpable de distintos delitos, y que no quiere que se divida la continencia de la causa en asuntos que pertenecen á la jurisdicción común ú ordinaria; ha resuelto, se repite, que tanto en los Juzgados Superiores de Distrito, como en los Juzgados de Circuíto, cuando concurran en un reo delitos de mayor y de menor graduación, conoce en todos el Juez que decide acerca del más grave. Así, en el caso propuesto, el Juez que conoce del hurto de mayor cuantía debe conocer también conjuntamente del hurto de menor cuantía.

"Transmítase esta resolución por telégrafo y publíquese en la *Gaceta Judicial*."

Con lo cual se dió por terminado el presente Acuerdo, que firman los Señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 92.

En la ciudad de Bogotá, á seis de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los Señores Magistrados y del infrascrito Secretario, se ocupó en considerar el proyecto de resolución presentado por el Magistrado Doctor Fernández, á quien tocó en repartimiento la consulta de que se hablará en seguida; y cuyo proyecto, que fué unánimemente adoptado, dice así:

"Consulta Su Señoría el Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, sobre si los juicios civiles que antes eran de mayor cuantía y hoy lo son de menor, fallados yá por los Jueces de Circuíto en primera instancia y que se hallan en el Tribunal en apelación, quedan comprendidos en lo resuelto por esta Suprema Corte en el Acuerdo Número 56 de diez y siete de Agosto último; y sí, en consecuencia, deben devolvérseles los expedientes á los Jueces Municipales para que fallen de nuevo, á fin de que se interponga el recurso respectivo para ante el Juez competente, ó si el Acuerdo citado es referente tan sólo á los negocios en curso y que no se hayan sentenciado en primera instancia.

"La Corte resuelve la consulta así: Si los negocios fueron resueltos antes de la vigencia de la ley 57 del año en curso, el Superior á quien correspondía conocer en la apelación del fallo

de primera instancia, según la legislacion vigente al tiempo en que recayó la decisión, es competente para conocer en la segunda.

"La resolución contenida en el Acuerdo Número 56, á que alude el Tribunal que elevó la consulta, es referente á los negocios que no se habían fallado en primera instancia antes de la vigencia de la ley 57.

"Transmítase esta resolución al Tribunal que ha hecho la consulta, y publíquese en la *Gaceta Judicial*."

Con lo cual se terminó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 93.

En la ciudad de Bogotá á siete de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, se leyó, de orden de Su Señoría el Presidente, una nota oficial de fecha catorce del mes próximo pasado, número 597, en que el señor Juez del Circuíto de Toro en el Departamento del Cauca consulta los tres puntos siguientes:

"1.° Si los indígenas están exceptuados del uso del papel sellado en los negocios judiciales y extrajudiciales que se les ocurran;

"2.° Si los suplentes de los Jueces de Circuíto, no estando en ejercicio del destino, están cnmprendidos en la disposición del artículo 95 de la ley 57 del año en curso, que prohibe á los empleados del orden judicial ejercer poderes ó abogar en negocios judiciales; y

"3.° Si los mismos suplentes tienen algun honorararío cuando conocen en asuntos civiles."

El Magistrado Doctor Sanclemente, á quien de antemano se le repartió este negocio para su estudio, propuso lo siguiente:

"Aunque el artículo 16 de la ley 3.ª, Parte 6.ª, Tratado 1.° de la Recopilación Granadina consideraba á los indígenas como pobres de solemnidad, no en general, sino en los pleitos que tuvieran que sostener por mejoras, arrendamientos, ó por cualquier otro motivo, sobre los resguardos que se les distribuyeran, esa ley, como todas las demás del mismo Código relativas á resguardos y protección de indígenas, quedó virtualmente derogada por la Constitución de 1863, según lo cual el negociado de que se trata pasó á ser materia de la Legislación civil que los Estados se reservaron. Si estos les otorgaron la misma gracia á los indígenas, tanto en común como individualmente, las leyes seccionales expedidas con tal objeto han quedado sin efecto, desde que, restablecida la forma central y convertida en nacional la renta de papel sellado, expidió el Gobierno el Decreto número 480 de 5 de Agosto de mil ochocientos ochenta, y seis y no comprendió á los indígenas entre los favorecidos con las exenciones relativas al uso del papel sellado; exención que tampoco les concede la ley 3.ª de 20 Enero del corriente año; y no siendo permitido en la materia ocurrir á otra fuente que á la que acaba de mencionarse, es indudable que las actuales disposiciones sobre papel sellado son extensivas á los indígenas, salvo que éstos soliciten y obtengan para sus gestiones judiciales, declaración de pobres de solemnidad, conforme al artículo 10 de dicho Decreto.

"Esto es cuanto al primer punto consultado.

"En cuanto al 2.°, basta observar que la prohibición del artículo 95 de la ley 57 citada se refiere é los *empleados* del orden judicial, y que este calificativo no puede aplicarse á los suplentes de los Jueces, mientras no sean llamados á sustituir á los principales, porque no es empleado el que no está en ejercicio de funciones públicas. A confirmar esto viene el artículo 206 del Código Judicial, que, al establecer la misma prohibición la contrae á los *Jueces* nacionales de primera instancia, y por tales no pueden entenderse sino los que están en ejercicio, circustancia que no concurre en los suplentes no llamados á él. Es, pues, claro que la prohibición legal citada no comprende á éstos, ni sería razonable y justo.

"Por lo que hace al tercer punto, la consulta parece referirse á los casos en que los suplentes de los Jueces sean llamados á conocer de causas civiles, por impedimento ó recusación de los principales, y no por falta absoluta ó temporal de estos; y para aquellos casos, ni el título 8.° del Libro 1.° del Código Judicial, relativo á gastos judiciales, ni ninguna otra ley nacional, han señalado honorario á los suplentes de los Jueces; de lo cual se deduce que no tienen derecho á él."

Considerado y aprobado unánimemente por la Corte lo propuesto por el Señor Magistrado ponente, dispuso que se comunicara al Señor Juez consultante como resolución de los puntos consultados; quedando con esto terminado el acuerdo, que firman los Señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Francisco A. Fernández.—Antonio Morales—BenjamínNoguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.* Secretario.

ACUERDO NUMERO 94.

En la ciudad de Bogotá, á ocho de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete, reunióse la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia do todos los Señores Magistrados y del infrascrito Secretario, con el objeto de resolver la siguiente consulta hecha por el Señor Juez del Circuíto de Málaga (Departamento de Santander), en telegrama del día seis:

"Por artículo 321 ley 153 del presente año, queda complemente abolida la legislación departamental relativa procedimientos judiciales; sinembargo, ¿deberá este Juzgado, conforme al artículo 40 de aquella ley, seguir hoy aplicando ley departamental en actuaciones iniciadas antes del 22 de Julio último, cuando regía dicha ley departamental?. ¿Hay presente caso, incompatibilidad entre los dos mencionados artículos?"

En seguida el Señor Magistrado Doctor Samper, á quien había tocado el asunto en repartimiento el día anterior, propuso el siguiente proyecto de resolución, que fué aprobado por unanimidad:

"El objeto evidente del artículo 321 de la ley 153 del presente año (24 de Agosto) fué poner término á la situación transitoria de la República, ocasionada por el cambio substancial de legislación que había de ser consecuencia del nuevo régimen de la Nación, rigorosamente unitario, en cuanto no fuese de la exclusiva competencia administrativa de los Departamentos. Por lo tanto, la unificación de la legislación, no solamente comprendía lo substancial del Derecho, en lo civil y penal, sino también lo procesal; y conforme á este plan está concebida la parte primera del artículo 40 de la citada ley.

"Pero á fin de que no se afectaran con los nuevos procedimientos derechos yá adquiridos en los anteriores, dispuso la segunda parte de dicho artículo que "los términos que hubieran empezado á correr, y las actuaciones y diligencias que yá estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación." Esta disposición no puede ser entendida, sino en cuanto ella respete los derechos yá adquiridos por la concesión de un término judicial ó por la iniciación de una diligencia ó actuación especial, los cuales deben completarse hasta quedar concluídos conforme á las leyes bajo cuya garantía tuvieron su principio; sin que por esto dejen de aplicarse las nuevas leyes, en cuanto ellas modifican la jurisdicción ó los procedimientos, — modificaciones que deben cumplirse respecto de diligencias y actuaciones que no estaban iniciadas ó consumadas el día en que la nueva legislación fué puesta en práctica. No hay, pues, discordancia ni contradición entre los artículos 40 y 321 de la citada ley 153; y la Corte resuelve la consulta, disponiendo que los Jueces, sin perjuicio de dar cumplimiento á la disposición general del artículo 321, se atengan en cada caso especial de término no cumplido ó diligencia ó actuación no consumada, ó que estuviere incompleta, á lo prevenido en la segunda parte del mismo artículo 40; sin que por esto se entienda que ha de reputarse como diligencia ó actuación, cosa especial, todo un pleito ó proceso, en cuya ritualidad ó substanciación generales deben atenderse las nuevas disposiciones legales."

Con lo cual se terminó el presente Acuerdo, que firman los Señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente,—R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente

JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 95.

En la ciudad de Bogotá, á trece de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, se ocupó en considerar el proyecto de resolución presentado por el señor Magistrado doctor Morales, á quien tocó en repartimiento la consulta de que se hablará en seguida; y cuyo proyecto que fué unánimemente aprobado, dice así:

"Consulta el Prefecto de la Provincia del Centro, en el Departamento del Tolima, si á un reo sentenciado yá, puede hacérsele el cómputo de que habla el artículo 1,937 del Código Judicial Nacional.

La Corte ha tenido á la vista la respeetiva sentencia, y en ella aparece que el procesado Antonio Barragán, que es á quien se refiere la consulta, fué condenado por el Juez de derecho á sufrir la pena de doce meses de presidio y á otras subsidiarias que también se le impusieron. Posteriormente el Prefecto de la Provincia, al tratar de hacer ejecutar la sentencia, dedujo al reo el tiempo que había estado detenido, y señaló la pena líquida que debía sufrir.

Como se ve, al reo se hizo yá, en oportunidad, la deducción legal correspondiente; y en consecuencia, cualquier solicitud posterior del mismo reo, envuelve, en rigor, una pretensión sobre rebaja de pena, la cual no puede resolverse por esta Superioridad, á causa de no estar facultada para ello.

Así, pues, la Corte resuelve la consulta, declarando: que en el caso concreto que se ha mencionado, no hay lugar á hacer el cómputo de que trata el artículo 1,937 del Código Judicial Nacional.

Comuníquese y publíquese."

Con lo cual se terminó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario,

ACUERDO NUMERO 96.

En la ciudad de Bogotá, á trece de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, se ocupó en considerar la consulta que el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Departamento de Cundinamarca, en la Sala de lo civil, ha elevado, con fecha cinco del mes en curso, sobre la aplicación ó inteligencia que debe dársele al artículo 40 de la ley 153 de 1887.

El señor Magistrado doctor Calderón, a quien había tocado el asunto en repartimiento, propuso el siguiente proyecto de resolución, que fué aprobado por unanimidad:

"La consulta del Tribunal de Cundinamarca, en la Sala de lo civil, respecto de la inteligencia que deba dársele al artículo 40 de la ley 153 de 1887, está resuelta yá en el Acuerdo de fecha ocho de Octubre del presente año, número 94, con motivo de una de la misma naturaleza, que fué elevada á esta Superioridad por el señor Juez del Circuito de Málaga (Departamento de Santander) en telegrama del día seis. En tal virtud, remítasele copia del expresado Acuerdo al Tribunal Superior del Distrito Judicial del Departamento de Cundinamarca, en contestación á su referida consulta, y comuníquese por telégrafo á todos los Tribunales de la República, para que la hagan trascendental á los Juzgados respectivos, y les sirva de norma en los casos sobre aplicación ó que deba dársele inteligencia al 40 de la ley 153 de 1887."

Con lo cual se terminó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 97.

En la ciudad de Bogotá, á quince de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, con el objeto de tomar en consideración la consulta de que en seguida se hará mención, el señor Magistrado doctor Morales, á quien tocó dicha consulta en repartimiento, presentó el siguiente proyecto de resolución, que fué adoptado por unanimidad:

"Consulta Su Señoría el Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca sobre cuál es la inteligencia que debe darse al segundo miembro del artículo 40 de la ley 153 del presente año.

"La Corte, en Acuerdo de ocho de Octubre del presente año, ha fijado, con precisión, el sentido del artículo citado; y en consecuencia, esta Corporación dispone: que se esté á lo resuelto en el expresado Acuerdo"

Con lo cual se concluyó este Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 98.

En la ciudad de Bogotá, á diez y siete de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, se ocupó en considerar la consulta de que se hará mención en seguida; y el señor Magistrado doctor Fernández, á quien tocó en repartimiento, presentó el siguiente proyecto que fué aprobado por unanimidad:

"Pregunta el señor Juez 4.° del Circuito de Bogotá, qué Juez debe conocer de un juicio de que otro se ha separado por impedimento fundado en causa legal, en los Circuitos en que hay más de uno del mismo despacho?; el que le sigue en el orden numérico, el suplente respectivo, ó debe sujetarse á repartimiento entre los otros Jueces no impedidos?

"Proviene la duda que le ha ocurrido al Juez que eleva la consulta, de que el artículo 753 del Código Judicial dispone que una vez que un Juez quede separado del conocimiento de una causa por estar impedido para conocer en ella, debe pasar el expediente al funcionario llamado á subrogarlo, sin determinar, cuando haya más de un Juzgado, el procedimiento que deba adoptar.

"Uno de los objetos del procedimiento es el de facilitar á las partes la manera de hacer efectivos sus derechos, consultando la celeridad en la secuela de los juicios. Este principio no sería atendido en los casos de impedimento de un Juez para conocer de una causa en los Circuitos en que haya más de un Juez en lo civil ó en lo criminal, si en vez de pasar el expediente al Juez que le siguiera en turno, por el orden numérico de los Juzgados del despacho de una clase de juicios, hubiera de llamarse al suplente respectivo ó de sujetarse el negocio á nuevo repartimiento, ocasionando demoras.

"Por la razón expuesta, la Corte resuelve la consulta declarando que en el caso previsto en el artículo 753 del Código Judicial (edición de 1887), cuando haya más de un Juzgado en el Circuito en el despacho de lo civil ó de lo criminal, debe seguir conociendo del pleito ó causa el Juez á quien le corresponda en turno, según el orden numérico de los Juzgados.

"Comuníquese esta resolución al Juez consultante y publíquese en la *Gaceta Judicial*."

Con lo cual se conluyó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Brnjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEOOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Octubre tres de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El juicio seguido entre José de la Rosa Torres y Felipe Navas versa únicamente sobre ventilación de derechos entre particulares, y no es atribución de la Corte ocuparse en asuntos de esta especie, en el caso de que se interpongan recursos de apelación de autos ó sentencias recaídos en ellos.

De acuerdo con lo dispuesto en el ordinal 2.° del artículo 99 de la ley 61 de 1886, en relación con el ordinal 11 de la ley 143 del año en curso, la Corte se declara incompetente para conocer de la apelación interpuesta por José de la Rosa Torres, respecto del auto pronunciado por el Juzgado de la provincia de Corozal, de fecha nueve de Diciembre de mil ochocientos ochenta, y ordena que se le remita el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial del Departamento de Bolívar, que es el competente para conocer del recurso de que se ha hablado, y que se comunique esta resolución al Juez que conoció en la primera instancia.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, trece de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—En la ejecución intentada por Jesús María Gutiérrez contra el General Juan N. Mateus y hermanas, por suma de pesos, el apoderado del primero, doctor Francisco E. Alvarez, con el fundamento de que los ejecutados no habían prestado la fianza de saneamiento, é invocando también lo preceptuado en el número 6.°, artículo 8.° del Código Judicial de Cundinamarca, bajo cuyo imperio se inició este juicio, denunció, para que además de la finca hipotecada, fueran igualmente embargadas, depositadas y avaluadas, dos casas altas y dos bajas, situadas en esta capital, que aseguró pertenecían á alguno ó algunos de los ejecutados; y el Juez 4.° del Circuíto de Bogotá así lo dispuso, por providencia de primero de Julio del presente año, previo el juramento del denunciante de no proceder de malicia; providencia que quedó cumplida en todas sus partes, pues aunque el apoderado de los ejecutados, doctor Emiliano Restrepo E., apoyéndose en lo que dispone el artículo 315 del citado Código, pidió la revocatoria de tal providencia y consiguiente reducción del depósito, interponiendo en subsidio el recurso de apelación que le fué concedido, este recurso se declaró al fin desierto, por auto de diez y ocho del mismo Julio, á consecuencia de no haber el apelante suministrado el papel necesario para la substanciación del mismo recurso.

Antes de esto, ó sea el ocho, del varias veces citado mes de Julio, la parte ejecutada, apoyándose en el artículo 315 yá mencionado, promovió articulación para comprobar que la hacienda de "El Diamante," hipotecada en seguridad del crédito del ejecutante y presentada para el pago al tiempo de la ejecución, tenía y representaba un valor más que suficiente para cubrir la deuda y costas; articulación admitida por auto de once de aquel mes, del cual interpuso apelación el ejecutante, por no haberse accedido á la revocatoria que de él había solicitado.

Venidos los autos á esta Superioridad, por cuanto está interesado en el asunto el Banco Nacional como opositor coadyuvante, por la suma de seis mil pesos ($ 6,000) y sus intereses, se adoptó la tramitación legal, y la Corte procede á dictar el correspondiente fallo, al cual sirven de base las siguientes consideraciones:

1.° Que las articulaciones no son adaptables á la naturaleza del juicio ejecutivo, por no permitirlo el Código Judicial de la Nación sancionado en el año de 1873, y cuyas disposiciones eran las que debían tenerse en cuenta desde que se admitió la tercería introducida por el Banco Nacional;

2.° Que las disposiciones del parágrafo 2.°, capítulo 5.°, título 1,° del Código Judicial vigente, las cuales pueden estimarse como una fiel reproducción de las que sobre el mismo asunto se encuentran contenidas en el citado Código de 1873 y en el de Cundinamarca, no pueden acomodarse sino á los juicios ordinarios, puesto que de lo que se trata en dicho parágrafo es de una de las acciones accesorias del demandante (acciones que no tienen cabida en el juicio ejecutivo) para pedir que la cosa sobre que versa la acción principal, sea mueble, semoviente ó raíz, se deposite á cargo de un tercero, cuando por concurrir ciertas circunstancias que pueden poner en peligro la existencia de la cosa misma, se necesita asegurarla, á fin de que no sea ilusorio el resultado del juicio;

3.° Que es verdad que por el artículo 308 del mencionado Código se podía también pedir y decretar el depósito de los bienes propios del deudor en la cantidad suficiente para cubrir la deuda y costas; pero también lo es que eso no podia tener lugar sino en los especiales casos que el mismo artículo designa, los que nunca pueden ocurrir en el juicio ejecutivo, en el cual no se exigen para el embargo y depósito de los bienes los requisitos que establecía aquel artículo, sino que basta que se presenten por el deudor ó se denuncien por el acreedor; y

4.° Que el ejecutado no ha prestado la fianza de saneamiento exigida por las leyes; y no existiendo disposiciones que restrinjan el derecho del acreedor á denunciar bienes, cuando no se preste dicha fianza, siendo, al contrario bien explícitas, repetidas y terminantes las que reconocen el expresado derecho, ningún fundamento habría para limitarlo en el caso presente.

Por lo tanto la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y conformándose con las razones aducidas por el señor Procurador general, revoca el auto apelado de que viene hecha mención, y declara que no hay lugar en este juicio á la articulación promovida por el apoderado de los ejecutados para que se reduzca el depósito de los bienes que han sido denunciados por el acreedor. No se hace especial condenación de costas.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Juticia—Bogotá, Octubre cuatro de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—En un proceso criminal por el delito de amancebamiento, de que conocía el Juez 2.° del Circuíto de Santo Domingo, en el Departamento de Antioquia, declaró, entre otras cosas, Francisco Giraldo Z., refiriéndose á Mamerto Patiño y Santiago Restrepo, " que el Juez del Circuíto de Medellín, Manuel María Villa, era de opinión que no debía castigarse tal delito, porque después de la audiencia pública de un jurado, y al entregarles el expediente á los Jueces de hecho les decía: "Cuidado cómo los van á condenar." El Juez primeramente citado mandó sacar copia de dicha declaración y que se pasara para los fines legales al Tribunal Superior del Distrito Judicial, y éste dispuso que se evacuaran las citas hechas por Giraldo y se practicaran otras diligencias, con el fin de poner en claro si era cierto lo que se atribuía al Juez Villa; pero como los testigos á quienes Giraldo se remitió no están de acuerdo en lo afirmado por éste con relación á ellos, el Tribunal de Antioquia, no encontrando fundamento para abrir causa de responsabilidad al Juez Villa, dictó auto de sobreseimiento.

Consultado éste con la Corte, oído el concepto del señor Procurador general, quien ha pedido su confirmación, y teniéndose en cuenta " que la declaración del testigo que deponga refiriéndose á otra persona, no tiene más fuerza que la que tenga el dicho de aquél á quien se refiere," según el artículo 1,678 del Código Judicial, es fuera de toda duda que el dicho de Giraldo carece de valor, por no estar apoyado por el de los testigos á quienes se remite. No habiendo, por lo tanto, motivo alguno para llamar á juicio al Juez Villa, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, con-

firma el auto de sobreseimiento consultado, y dispone se devuelva el sumario al Tribunal Superior de Antioquia.

Hágese saber, déjese copia y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Octubre cuatro de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—A virtud de excitación oficial del Gobernador de la Provincia del Centro, en el extinguido Estado del Tolima, dirigida al Alcalde del Distrito del Guamo, se han practicado las presentes diligencias, con el objeto de averiguar quién fuera el responsable de la falsificación de un billete de diez centavos del Banco Nacional, que obra á foja 1.ª, tan imperfectamente formado, que basta la simple inspección de él para conocer la falsedad.

Adelantóse la averiguación hasta donde se estimó conveniente, y creyendo el Juez del Circuíto del Guamo que no había podido obtenerse la prueba legal respecto de la persona del delincuente, dictó el auto de trece de Agosto del presente año, que ha consultado con esta Superioridad, sobreseyendo en el procedimiento.

A la consulta se ha dado en esta segunda instancia el curso determinado por la ley, y llegado yá el caso de dictar el fallo que por derecho corresponda, se tiene para ello en consideración que entre las atribuciones que el artículo 21 de la ley 61 de 1886 confiere á la Corte Suprema, no está la de conocer en 2.ª instancia de los delitos de la naturaleza del de que aquí se trata; y en esta virtud se declara, de conformidad con el concepto del señor Procurador general, que la Corte no es competente para ocuparse en la mencionada consulta, sino el Tribunal Superior del Distrito judicial del Departamento del Tolima, al tenor de lo prevenido en el inciso 2.º del artículo 99 de la ley citada arriba, al cual Tribunal se remitirá el expediente, dándose aviso al Juez consultante.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Octubre diez de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos: El defensor del Subteniente Rafael Mateus, condenado éste por el Consejo de Guerra de Oficiales generales el día catorce de Septiembre del año en curso, por el delito de abuso de autoridad, ejecutado en la noche del ocho de Mayo del mismo año, interpuso en tiempo el recurso de nulidad para ante esta Superioridad.

Como á la Corte no corresponde examinar hoy sino las causales de nulidad que hubiere en el juicio y que establecen el artículo 1,534 y siguientes del Código Militar, según el artículo 281, parte sexta de la ley 153 de 24 de Agosto, se limita al examen sobre ese punto; y encontrando que no adolece de nulidad alguna el referido juicio, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, así lo declara.

Notifíquese, cópiese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez.—José M. Samper.—Aristides Calderón.—Francisco A. Fernández.—Antonio Morales.—Benjamín Noguera.—Manuel A. Sanclemente.—Ramón Guerra A., Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Octubre once de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Pedro M. Núñez R. presentó un memorial al Tribunal Superior del Distrito judicial del Departamento del Magdalena, el 17 de Mayo próximo pasado, denunciando el hecho de que á las diez y media de la noche del nueve del mismo mes, en momentos en que el denunciante se encontraba en la puerta principal de la casa de Gobierno, prestando un servicio lícito á la Compañía dramática dirigida por Julio Montemar, fué arrebatado y arrastrado por la policía á la cárcel pública, sin motivo legal y por orden verbal del Prefecto de la Provincia, señor Calixto D. Esparragoza; afirma, además, que cuando estaba yá en la cárcel, se le puso en el cepo, de ambos pies, durante doce horas, en una forzadísima posición, y que el Prefecto le impuso primero la pena de dos meses de arresto en el establecimiento de castigo, y reformó después su resolución reduciéndola á cinco días, que es lo más que le permite la atribución 39 del artículo 77 del Código de régimen Político y Municipal. Pide que se castigue al denunciado, por haber infringido la ley y la Constitución, y acompaña á su queja unas declaraciones y copia de las resoluciones por las cuales le impuso el acusado la pena de que se ha hecho mérito.

Ordenó el Tribunal que se investigaran los hechos denunciados, y, una vez complementado el sumario, pronunció auto de sobreseimiento, con fecha tres de Agosto del corriente año.

Vino el expediente á la Corte, en consulta, y substanciada, se pasa á resolver, haciendo las siguientes consideraciones:

1.ª En el expediente aparecen comprobados estos hechos:

1.º Que en la noche del nueve de Mayo último, se formó un tumulto en la puerta del teatro de la ciudad de Santa-Marta, que el Prefecto de la Provincia, señor Calixto D. Esparragoza, quiso disolver, para evitar, según lo expresa éste, todo motivo de desorden.

2.º Que Pedro Núñez R. vertió expresiones ofensivas contra el Prefecto, lo que motivó que este empleado le ordenara á la policía que condujera á aquel á la cárcel.

3.º Que por haberse resistido Núñez á seguir con la policía, se le obligó á ir por la fuerza, en una parte del trayecto, hasta que José Gregorio Abello consiguió que la policía se separara, tomó de brazo á Núñez y lo condujo á la cárcel.

4.º Que por haber seguido Núñez insultando, amenazando é infiriendo ultrajes al Prefecto, éste ordenó que se le pusiera en el cepo, orden que cumplió el Alcaide de la casa de castigo.

5.º Que por resolución de diez de Mayo le impuso el Prefecto á Núñez R. la pena de dos meses de arresto, por los ultrajes y ofensas que le había irrogado, en los momentos en que estaba ejerciendo funciones de autoridad, y que por resolución de fecha doce del mismo mes reformó la anterior, en el sentido de limitar la pena á cinco días, fundándose en la atribución que le daba el artículo 77 del Código de Régimen Político y Municipal del Departamento, en su ordinal 38.

6.º Que en el acto en que Núñez R. le faltó á Esparragoza, ejercía éste las funciones de Prefecto de la Provincia de Santa-Marta; y

7.º Que el artículo 11 del Reglamento de la casa de reclusión del Estado del Magdalena, hoy Departamento del mismo nombre, expedido el 14 de Febrero de 1873, autoriza al Director y al Ayudante de éste para imponer á los presos que falten al respeto debido y al orden y disciplina que deben conservarse en el establecimiento, entre otras penas, la de *cepo*

Los testigos Martín Vergara, José de la Cruz Jiménez, Florencio A. Castro, José María Arvilla, José Campo y Manuel E. Noriega afirman que Núñez R. insultó al Prefecto, calificándolo de ladrón, pillo, que le exigía que renunciara la Prefectura para darle de patadas; que se resistió á cumplir la orden de ir á la cárcel, y que después de estar en ella, siguió injuriando y amenazando á la autoridad. Los dos últimos testigos aseveran que oyeron que Núñez, al ir del teatro para el establecimiento de castigo, le pedía al hermano un revolvers para atacar al Prefecto; y

2.ª Según el artículo 27 de la Constitución, pudo Esparragoza, en su carácter de funcionario que ejercía autoridad, castigar, sin juicio previo, con arresto á Núñez, por haberlo injuriado y faltádole al respeto en el acto en que estaba desempeñando las funciones de su cargo. Pudo decretar, como lo hizo, el arresto hasta por cinco días, por permitírselo el artículo 77 del Código de Régimen Político y Municipal del Departamento del Magdalena, vigente cuando tuvieron lugar los hechos que han motivado la presente investigación, de acuerdo con el artículo H, transitorio, de la Constitución; y el Alcaide de la cárcel tuvo

facultad para castigar á Núñez por haber irrespetado al Prefecto, dentro del establecimiento, faltando al orden y disciplina á que están subordinados los presos, según el Reglamento.

No hay razón para juzgar que el Prefecto hubiera incurrido en responsabilidad por los hechos en que se fundó el denuncio, y por ello la Corte, procediendo en armonía con el concepto del señor Procurador general de la Nación, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto de sobreseimiento consultado, en lo que hace referencia á la investigación seguida contra Calixto D. Esparragoza como Prefecto de la Provincia de Santa-Marta, á virtud del denuncio dado contra él por Pedro M. Núñez R.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En el mismo día lo notifiqué al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

ASUNTOS VARIOS.

República de Colombia.—Poder Judicial.—Secretaría de la Corte Suprema nacional.—Número 1,044.—Bogotá 11 de Octubre de 1887.

Señor Procurador general de la Nación.—Presente.

Tengo el honor de remitir á Usía la relación que ha enviado á este Despacho el Juez Superior del Distrito Judicial del Cauca, de los sumarios recibidos en ese Juzgado en el semestre que se cuenta desde el 21 de Marzo hasta el 21 de Noviembre de 1887.

Cuanto al Juez del Circuíto de Buga, avisa á este Supremo Tribunal, por oficio número 257 de 24 del próximo pasado mes, que las relaciones de las causas civiles y criminales pendientes y despachadas en ese Juzgado, en el semestre corrido de Enero a Junio del presente año, se han pasado al Fiscal del Tribunal Superior del Cauca para que por su conducto lleguen á la Corte ó al señor Procurador general de la Nación.

Dios guarde á Usía.

Ramón Guerra A.

República de Colombia.—Poder Judicial.—Secretaría de la Corte Suprema nacional.—Número 1,055.—Bogotá, 14 de Octubre de 1887.

Señor Procurador General de la Nación.—Presente.

Tengo el honor de remitir á Usía la relación de los negocios criminales que han cursado en el Tribunal Superior de Tunja en el mes de Septiembre de 1887.

Dicha relación ha sido enviada á este Despacho con nota oficial número 217, de 10 del presente mes, en la cual anuncia el señor Secretario de dicho Tribunal el próximo envío de los cuadros ó relaciones referentes á los negocios civiles.

Dios guarde á Usía,

RAMÓN GUERRA A.

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL

Señores Magistrados.

El Agente fiscal del Circuíto del Gigante solicitó del Juez del mismo Circuíto que, en cumplimiento de lo resuelto por la Corte Suprema en un incidente promovido en el juicio ejecutivo que siguen los herederos de Ramón María Vargas, contra la herencia yacente de Eustaquio Muñoz, declarara nulo el expresado juicio, desde que fué admitida la tercería coadyuvante hecha en él por la Nación.

El Juez, por auto de 31 de Enero de 1881, negó la solicitud del Agente del Ministerio público, quien apeló de tal resolución para ante esa Superioridad.

Para apreciar el mérito legal de la providencia apelada, debe advertirse, ante todo, que los autos no contienen el expresado incidente de tercería, y que de la sentencia cuyo cumplimiento se pide por el Agente del Ministerio público no hay más constancia que la refencia que de ella hacen, el expresado Agente, en sus memoriales de 26 de Octubre de 1880 y 14 de Enero de 1881, y el Juez en la mencionada providencia.

Bien se comprende que tal deficiencia dificulta la decisión del recurso interpuesto, pues sin tener á la vista la sentencia cuyo cumplimiento se pide, no es posible saber hasta dónde habrá de surtir sus efectos la nulidad decretada en ella.

Por lo tanto, estimo indispensable que dispongáis se agregue á los autos copia auténtica de la referida sentencia de la Corte, y si es posible, el incidente que la originó, el cual parece que podrá encontrarse en el Tribunal Superior del Departamento del Tolima, según se colige del informe, auto y nota que se leen á los folios 2 (frente y vuelta), y 8 de los autos respectivamente.

Podrá observarse que, tratándose como se trata, de la apelación de un auto interlocutorio, no tiene cabida la diligencia anteriormente indicada, por razón á que en esa clase de autos el expresado recurso debe decidirse por lo que resulte de lo actuado (artículo 894 del Código Judicial, edición del presente año.)

Juzgo pertinente manifestaros que, en mi concepto, la disposición procedimental citada no se opone á que se agreguen á los autos las piezas antedichas, pues si es verdad que, según ella, el recurso debe decidirse oídos los alegatos de las partes, y sin más actuación que la remitida al Superior, no lo es menos que ese procedimiento supone que en los autos figuran las piezas ó elementos esenciales del incidente, tales como la providencia á que se contrae el recurso, ó aquella cuyo cumplimiento se ordena ó se niega en la misma; pues no se comprende cómo sería dado apreciar, en sus efectos y en su mérito jurídico, una decisión de cuyo contexto y espíritu no hay la debida constancia en el expediente respectivo.

En el caso que nos ocupa, se trata nada menos que de conocer el fallo en que se decretó la nulidad cuyo alcance y efectos se discuten, y al cual se contrajo la petición fiscal negada en el auto apelado; siendo, por lo tanto, incuestionable que, para decidir sobre el mérito de éste, se hace preciso tener á la vista el enunciado fallo.

No obstante lo expuesto, si esa Superioridad considera innecesaria ó fuera de las reglas á que debe ceñirse el procedimiento especial señalado, á las apelaciones de autos interlocutorios, y juzga que el punto debe decidirse en términos generales y por lo que resulta de lo actuado, soy de concepto que se está en el caso de resolver dicho punto, en el sentido de que la nulidad decretada por la Corte afecta solamente el artículo de tercería, y que, de consiguiente, éste debe reponerse al estado en que dicho artículo fué admitido por el funcionario ejecutor.

Fundo este concepto en que la tercería coadyuvante, que es de la que se trata, se ventila por artículo separado del juicio ejecutivo, sin suspenderse éste; no pudiéndose, en rigor, considerar al tercerista como parte en dicho juicio, sino hasta tanto que el artículo haya sido sentenciado definitivamente y á su favor.

Sentado esto, la Nación, por el solo hecho de habérsele admitido la tercería coadyuvante, no debe ser considerada, antes de decidirse si ella tiene realmente el carácter de acreedora de la herencia ejecutada, como parte en el juicio ejecutivo; y por lo tanto, no alcanza á éste la nulidad en que se incurrió en el incidente según lo declarado por la Corte.

Si aceptáis este concepto, habría que decidir el recurso en el sentido de confirmar la providencia apelada.

Bogotá, 3 de Agosto de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

Con fecha 17 de Julio de 1882 y por medio de apoderado, Remigio Santos demandó ante el Tribunal Superior del extinguido Estado de Antioquia, al Gobierno del mismo Estado, por suma de pesos, á cuya devolución cree tener derecho el demandante, á virtud de un saldo deducido á su favor en el fenecimiento de una de las cuentas que estuvieron á su cargo como

Administrador particular de Hacienda del Circuíto de Occidente.

Seguido el juicio por los trámites ordinarios, el Tribunal, por sentencia proferida en 13 de Julio de 1883, declaró infundados los cargos de la demanda y absuelto de ellos al Gobierno del Estado.

De dicho fallo apeló el actor, y el recurso le fué concedido para ante este Supremo Tribunal, de conformidad con lo prevenide en el inciso 3.°, sección 2.ª, artículo 21 de la ley 61 de 1886, vigente al tiempo de la concesión del expresado recurso.

Examinados los autos por el infrascrito para emitir el concepto que le corresponde, ha llegado á la conclusión de que ellos no justifican legalmente las pretensiones del demandante, por cuanto éstas se hacen derivar de un saldo deducido del examen incompleto de la cuenta respectiva, practicado por un funcionario cuya intervención en el fenecimiento de dicha cuenta se ha tachado de ilegal, con bastante fundamento, por falta de competencia.

En efecto, según el informe rendido, á virtud de pedimento del Tribunal, por el Administrador general de Hacienda del Estado (fojas 32 á 35), se viene en conocimiento de que cuando se examinó la cuenta de "Contribución de Guerra," que es la misma de que se dedujo el saldo que cobra del Gobierno de Antioquia el responsable Remigio Santos, no se habían incorporado á ella las cinco cuentas subalternas que especifica el informante, ni se había llevado por dicho responsable la cuenta de "suplementos," ordenada por el Reglamento de Contabilidad expedido en 15 de Marzo de 1872.

Sentado esto, es obvio que el referido saldo no puede considerarse como definitivo, pues á nadie se oculta que él es relativo por su naturaleza al examen parcial de la cuenta, y que, por lo mismo ,puede desaparecer y aún convertirse de activo en pasivo, al verificarse dicha cuenta, en vista y con apreciación cabal de la totalidad de los elementos que la constituyen.

La circunstancia de haberse cancelado la escritura de fianza del responsable, por consecuencia del fenecimiento de que se viene hablando, no da al saldo deducido á favor de aquél el carácter de deuda efectiva y exigible del Gobierno del extinguido Estado, hoy Departamento de Antioquia; pues tal circunstancia, y la de haberse compensado con parte de dicho saldo algunos alcances deducidos en otras cuentas contra el mismo responsable, implican, á lo sumo, que el funcinario que dispuso esos actos festinó los efectos del fenecimiento de una cuenta que no fué examinada en su totalidad.

Ignorándose, pues, si el saldo en cuestión subsistió ó nó en presencia de lo que resulta de las cuentas parciales que no se incorporaron á la de "Contribución de Guerra," el infrascrito cree que eso basta para no ordenar su reconocimiento á cargo del Departamento de Antioquia, y, por lo tanto, no considera necesario ocuparse en la competencia del empleado que examinó la referida cuenta.

Habida consideración á las razones expuestas, que en el fondo son las mismas en que se fundó el fallo apelado, el infrascrito estima legal dicho fallo, y, en consecuencia, os pide que lo confirméis.

Bogotá, 25 de Agosto de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

En el juicio ejecutivo seguido contra Clemente Martín, por deuda á la Nación, el apoderado del ejecutado propuso la excepción de error de cuenta, la cual fué admitida por el Juez 3.° del Circuíto de Bogotá, á quien el juzgado de ejecuciones nacionales pasó el expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1,008 del Código Judicial.

Suspendida la substanciación del artículo, por falta del papel necesario para proseguir la actuación, el Juez, previo pedimento fiscal y cumplidas las formalidades de señalamiento de término y de conminación de declaratoria de desistencia de la instancia, prevenidas en el artículo 1,008 del Código Judicial, declaró al actor, por auto de 24 de Junio último, desistido del artículo, así como del recurso de apelación que el mismo actor interpuso del auto de 13 de Mayo anterior, por el cual se dispusieron las formalidades antedichas.

El excepcionante pidió la revocatoria del mencionado auto de 24 de Junio, interponiendo en subsidio el recurso de apelación ; y como el Juez negase la primera, hubo de conceder el segundo para ante ese Supremo Tribunal.

Fúndase el apelante en que, habiéndosele notificado el auto de 24 de Mayo, por el cual se le concedió la apelación del de 13 del mismo mes (fojas 47 vuelta y 49), por medio de edicto extendido en papel común, dicha notificación no se surtió legalmente, á causa de no haber sido hecha en papel sellado de la clase correspondiente.

En concepto del infrascrito, es válida la notificación tachada por el apelante, pues no es razonable convenir en que, por el hecho de que éste, como consta de autos, no concurriera al Juzgado ni suministrara el papel necesario para la actuación, hubiera de suspenderse indefinidamente el curso del juicio, con detrimento del interés que en él tiene fincado la Nación, máxime si se considera que la providencia de cuya notificación se trata fué precedida de la reclamación que en tales casos le incumbe hacer al Agente del Ministerio público.

En previsión de que los ejecutados por deudas al Fisco nacional eludieran los apremios del procedimiento ejecutivo, no suministrando papel para la actuación, fué por lo que seguramente se dispuso en el inciso 5.° del artículo 9.° del decreto número 480 de 1886 "sobre papel sellado y timbre nacional," que no es obligatorio extender en papel sellado las diligencias que practiquen los empleados que tengan jurisdicción coactiva, para cobrar las sumas que se deban á los fondos de su cargo, cargándose en la tasación de costas el valor de cada hoja de papel común que se empleare, como si fuera de la clase correspondiente, según la cuantía de la ejecución.

Es verdad que la notificación tachada por el apelante ocurrió en el artículo de excepciones, del cual no conoce el empleado de jurisdicción coactiva que inició la ejecución, sino un Juez de Circuíto ; pero eso no obsta, en concepto del infrascrito, para que la excepción de que se deja hecha referencia tenga cabida en el expresado artículo, una vez que éste procede y es un mero incidente del juicio ejecutivo, el cual se suspende mientras se decide tal incidente; por manera que las demoras ocurridas en éste afectan también al referido juicio, siendo, por lo tanto, aplicable la regla general de derecho de que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición de la ley.

Las dificultades y demoras suscitadas por la falta, deliberada en muchos casos, del papel correspondiente para la actuación, se han obviado por la ley 57 del presente año (artículos 140 á 143), permitiendo que el Secretario del Tribunal ó del Juzgado supla con papel común el sellado que no ha suministrado la parte requerida para ello, la cual queda obligada, so pena de no ser oída en el juicio, á pagar el doble valor de tantos sellos cuantas hojas de papel común se hayan empleado en la actuación.

Al hacer esta referencia, el infrascrito no pretende someter el caso que nos ocupa á las citadas disposiciones de la ley 57, pues esta ley no estaba vigente aún cuando ocurrió dicho caso, y únicamente se propone hacer ver que por la ley 57 se ha hecho extensivo á la actuación en todos los juicios lo dispuesto por el decreto número 480 de 1886 para la actuación en los juicios ejecutivos sometidos á la jurisdicción coactiva; con lo cual se pone de manifiesto que si se ha reconocido la conveniencia que hay de impedir que las partes, dejando de suministrar el papel que les corresponde, demoren, cuando les convenga, el curso y decisión de los negocios sujetos á la tramitación judicial.

Conviene advertir, además, que lo dispuesto en la citada ley 57 no se opone á lo prevenido en los artículos 423 y 424 del Código Judicial, que se refieren á las reclamaciones de la contraparte del actor para que se declare á éste desistido de la instancia, por haber sido omiso en suministrar el papel necesario para la actuación.

A virtud de las precedentes consideraciones, el infrascrito estima legal la providencia apelada, y, en consecuencia, os pide que la confirméis.

Bogotá, 27 de Agosto de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

Por resolución de 14 de Junio de 1883, el Alcalde de Bogotá declaró de necesidad pública la apertura de la cuadra comprendida entre las calles 5.ª y 6.ª al Norte, para la prolongación de la Carrera 7.ª al Occidente de la ciudad.

Como la calle en proyecto debe ocupar en parte una zona de terreno perteneciente á los señoresJosé Manuel y José Joaquín París, el Síndico Municipal del Distrito inició el juicio de expropiación de dicha zona, por causa de utilidad pública, ante el Juez 2.° del Circuíto de Bogotá.

Además del Síndico municipal, han intervenido en dicho juicio como actores, el Agente fiscal del Circuíto y el señor Cristóbal Díaz, este último en calidad de coadyuvante del Distrito.

Practicada la inspeccción ocular del terreno que se trata de expropiar, avaluado éste por peritos y puesto el juicio en estado de ser decidido en definitiva, el Juez, por sentencia de 25 de Octubre de 1886, negó la demanda, fundándose en que lo pedido en ella no había sido la expropiación, sino la cesión del terreno á favor del Distrito.

De dicha sentencia apelaron el Síndico municipal y el apoderado del coadyuvante, y el recurso les fué concedido para ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, el cual se declaró incompetente para conocer de él, dando lugar con ello á que el incidente haya sido sometido á la decisión de esa Superioridad.

No creyendo fundada la declaratoria de incompetencia del Tribunal, el infrascrito pasa á expresaros las razones en que se apoya para sostener que es á dicho Tribunal, y nó á la Corte Suprema de Justicia, á quien corresponde el conocimiento del asunto.

La ley 143 del presente año (5 de Agosto), reformó el inciso 2.°, sección 2.ª del artículo 21 de la ley 61 de 1886, en los siguientes términos: "Artículo 1.° Corresponde á la Corte Suprema conocer en última instancia, de los juicios de expropiación ó enajenación forzosa, de que trata el artículo 3.° de la Constitución, cuando la expropiación interesa á un Departamento ó á la Nación."

La 9.ª de las atribuciones conferidas á los Tribunales de Distrito por el artículo 8.° de la misma ley, consiste en "conocer en primera instancia de los juicios de expropiación ó enajenación forzosa de que trata el artículo 32 de la Constitución, en todos los casos en que la expropiación interese á un Departamento ó á la Nación; y en segunda instancia, *de los mismos juicios de expropiación en que no tengan interés el Departamento ó la Nación.* En el primer caso se consultará la sentencia con la Corte Suprema de Justicia."

Como se ve, la intervención de la Corte en los juicios de expropiación por causa de utilidad pública, está limitada á conocer en 2.ª instancia de aquellos de dichos juicios en que tiene interés un Departamento ó la Nación.

Ahora bien: tal interés se deduce del hecho de haberse iniciado la demanda de expropiación, á nombre de una de las dos entidades dichas, y de tener la obra ó mejora que haya originado la expropiación demandada el carácter de departamental ó nacional, según que dicha obra haya sido dispuesta por ordenanza ó decreto de un Departamento, ó por ley ó decreto de la Nación, y que la indemnización consiguiente haya de hacerse con fondos de aquel ó de ésta.

De lo expuesto se desprende que cuando la expropiación, como sucede en el caso que nos ocupa, no ha sido demandada sino á nombre de un Distrito y en cumplimiento de resoluciones de la autoridad local, siendo, por lo tanto, de cargo de las rentas municipales las indemnizaciones á que pueda haber lugar, tal expropiación no incumbe al Departamento ni á la Nación, y, de consiguiente, la Corte no tiene por qué ingerirse en ella.

De los juicios de expropiación de procedencia de los Distritos, es de los que los Tribunales Superiores deben conocer en segunda instancia, conforme á la atribución 9.ª preinserta; pues de otra suerte, ¿cuáles serán los juicios de expropiación que, no interesando á la Nación ó á un Departamento, quedaron sujetos en segunda instancia á la jurisdicción de dichos Tribunales?

Para convencerse de esto, basta considerar que fuera de las expropiaciones por causa de necesidad pública, en que tengan interés la Nación ó los Departamentos, no pueden admitirse razonablemente otras que las que interesen á los Distritos; pues no es posible decretar expropiaciones de esa clase, en puro beneficio de particulares, y con prescindencia de los intereses públicos representados en los respectivos casos, por la Nación, los Departamentos ó los Distritos.

Habida consideración á las precedentes razones, el infrascrito es de concepto que debéis declaros incompetentes para decidir el recurso interpuesto, por cuanto la expropiación á que se contrae el juicio fallado por la sentencia, materia del expresado recurso, no está comprendida entre aquellas de que debe ocuparse la Corte en segunda instancia, de conformidad con el artículo 1.° de la ley 143 del presente año.

Bogotá, 18 de Agosto de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

Con fecha 6 de Diciembre de 1879, el señor Celedonio Umaña instauró demanda contra el entonces Estado de Boyacá, por suma de pesos, procedente del valor de una parte del fundo denominado "Gachanica," de que el demandante asegura haber sido despojado por el referido Estado, á virtud de un contrato celebrado por éste con el señor Bernardo González, en Junio de 1878.

El actor reformó y adicionó su demanda en 1884 y volvió á adicionarla y reformarla en el mes de Marzo del presente año, lo cual pudo hacer en ambos casos por no haberse abierto aún la causa á prueba.

A virtud de la última reforma, el actor dirige su acción no solamente contra el Departamento de Boyacá, sino también contra la Nación, á quien hace extensiva la responsabilidad civil de aquél en los siguientes términos:

"Entablo acción legal y demando en la forma y de la manera más arreglada á la ley, en juicio ordinario, al Departamento nacional de Boyacá, sustituto ó sustituyente del Estado del mismo nombre en sus derechos y obligaciones; y condicional y subsidiariamente (esto es para el caso de que esta acción contra la mencionada entidad no tenga completo éxito), á la Nación de que es parte dicha sección, y por ambas entidades á sus respectivos representantes ó personeros según la ley, á fin de que una de las mismas entidades, en su caso, sea condenada por la definitiva á pagarme la cantidad de veintiocho mil quinientos cuarenta pesos ($ 28,540), de que hago cargo solidario á dichas entidades..."

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Boyacá, por auto de 19 de Marzo último, admitió la precitada adición reformatoria de la demanda, y continuó conociendo de ésta hasta que, por auto de 8 de Agosto próximo pasado, se declaró incompetente y anuló lo actuado, desde que se dictó el referido auto de 19 de Marzo, disponiendo, además, que el expediente pasara al Juez 2.° del Circuíto del Centro, por estimar que este funcionario es el competente para conocer del negocio en primera instancia.

Apelado el supradicho auto de 8 de Agosto, el Tribunal concedió el recurso para ante esa Superioridad.

Nada tiene que agregar el infrascrito á las razones en que se fundó el Tribunal para declinar su jurisdicción por consecuencia de haber entrado á figurar en el juicio la Nación como parte demandada; pues si bien es cierto que dicho Tribunal tenía jurisdicción para conocer en primera instancia, cuando el único demandado era el Departamento, no así después de que la demanda se hizo extensiva á la Nación, puesto que los litigios en que media el interés de ésta deben ser decididos en primera instancia por los Jueces de Circuíto y en segunda por la Corte Suprema de Justicia (inciso 1.°, sección 2.ª del artículo 21 de la ley 61 de 1886.)

A virtud de lo expuesto, el infrascriso es de concepto que el auto apelado es legal y, por lo tanto, os pide que lo confirméis.

Bogotá, 13 de Septiembre de 1887.

CARMELO ARANGO M.

BOGOTÁ.—IMP. DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 43.

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 29 de Octubre de 1887.

CONTENIDO.

Pág.

ACUERDOS DE LA CORTE.

Acuerdo número 99, relativo á una consulta del Tribunal Superior de Santander 337

SENTENCIAS DIFINITIVAS

NEGOCIOS CIVILES.

Pronunciada con relación á un juicio ejecutivo seguido contra Federico A. Byrne ..... „

Id. en reclamación, sobre expropiación, de José María Sonchez O.... 338

Id. en id. sobre id. de Rafael Mariño C..... „

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES

Revocatorio de otro proferido por el Tribunal Superior de Tundama 339

Reformatorio de otro del Tribunal Superior de Cundinamarca sobre responsabilidad de varios Jueces de Circuíto..... „

Sobre nulidad de un auto proferido por el Tribunal Superior de Cundinamarca..... 340

Sobre incompetencia de la Corte para conocer de un juicio de responsabilidad..... 341

Confirmatorio de un auto de sobreseimiento proferido por el Tribunal Superior de Cundinamarca..... „

Id. de otro id. proferido por el Tribunal Superior del Magdalena..... 342

Relativo á una consulta sobre proceso por tentativa de acesianto... „

NEGOCIOS CIVILES

Relativo á la apelación del apoderado del General Juan N. Mateus, de un auto ejecutivo..... „

Confirmatorio de un mandamiento ejecutivo librado por el Administrador de la Aduana de Cartagena..... 343

DOCUMENTOS DIVERSOS.

Notas de la Secretaría de la Corte..... „

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL

Emitida con relación á una denuncia..... „

Id. con relación á un juicio ejecutivo contra Manuel Monroy..... „

Id. con relación á un juicio de responsabilidad abierto contra varios Jueces..... „

Id. con relación á un juicio ejecutivo trabado contra el General Juan N. Mateus y sus hermanos..... 344

GACETA JUDICIAL.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

ACUERDO NUMERO 99.

En Bogotá, á diez y ocho de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, se ocupó en considerar la siguiente consulta elevada por el Tribunal Superior del Distrito judicial de Santander, en telegrama de trece de los corrientes, á saber:

"¿Los Jueces suplentes nombrados conforme al artículo 3.° de la ley 46 del presente año, para funcionar en caso de falta absoluta ó temporal de los Jueces principales, tienen también atribuciones para conocer por faltas accidentales, atendida la ley 57 del presente año?"

Y el señór Magistrado doctor Noguera, á quien previamente pasó el asunto en estudio, presentó el proyecto de resolución que sigue:

"En los Circuítos en que haya un solo Juez, los suplentes de que habla el artículo 3.° de la ley 46 del presente año, deben reemplazar, en el orden de su nombramiento, al Juez principal, en los casos de falta accidental de éste; pues llamados á reemplazarles en las faltas absolutas y también en las temporales, no hay razón para que no lo sean en las de que se trata, principalmente cuando, de otra manera, se paralizaría en muchos casos, por carencia de Juez, la administración de justicia.

"Pero si en el Circuíto hubiere más de un Juez, ya para el despacho de los negocios civiles, ya para el de los criminales, se procederá entonces como está resuelto en Acuerdo de ayer, número 98, el cual se comunicará junto con el presente al Tribunal consultante."

Este proyecto fué aprobado por unanimidad.

Con lo cual se concluyó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEOOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, diez y seis de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Administrador de la Aduana de Buenaventura dictó mandamiento ejecutivo, el diez y seis de Febrero de mil ochocientos ochenta, contra Federico A. Byrne y sus fiadores Eduardo Holguín y Tiberio Sánchez, por la suma de novecientos ochenta y siete pesos ($ 987) y los intereses de demora, procedentes de derechos de importación liquidados á cargo del primero, y cuya obligación, según el pagaré de diez de abril de mil ochocientos setenta y ocho, venció el diez de Agosto del citado año.

Como el deudor principal y los fiadores residían en la ciudad de Cali, el empleado ejecutor, en uso de la facultad que le concedía el artículo 1,012 del Código Judicial de la República, cometió la práctica de las diligencias ejecutivas al Juez del mencionado Circuíto en el despacho de los asuntos nacionales, el cual, excediéndose de los términos de su comisión é incurriendo en ciertas faltas que no es tiempo de examinar, adelantó el juicio hasta el estado de citar á los deudores para sentencia de pregón y remate, mandando dar los correspondientes pregones que no tuvieron efecto por no haberse presentado licitadores y por último, admitiendo la oposición coadyuvante que en diez y ocho de Junio de mil ochocientos ochenta y uno hizo Isaías Vega, á efecto de que se le abonara de preferencia la cantidad de mil doscientos sesenta y tres pesos seiscientos milésimos ($ 1,263-600 ms.) que le adeudaba Byrne.

Abierta la articulación á prueba y dádose al asunto el curso que se creyó conveniente, el Juez de la primera instancia, que lo fué el del mencionado Circuíto, después de haber mandado acumular la oposición al juicio principal, pronunció sentencia definitiva, con fecha seis de Mayo de mil ochocientos ochenta y dos, anulando toda la actuación referente á la oposición de que se trata, de cuya sentencia interpuso en tiempo el opositor el recurso de apelación, que le fué concedido en ambos efectos para ante este Supremo Tribunal.

Substanciado el recurso hasta poner el asunto en estado de citación para sentencia, lo que se dispuso así, por auto de diez

de Junio último, hizo constar la Secretaría, en diligencia de veintiocho de Julio, que el actor no había suministrado papel sellado para la actuación; y así continuó ésta hasta que el señor Procurador general, en pedimento de veinte de Agosto próximo pasado, solicitó que, previas las formalidades prevenidas en el artículo 423 del Código Judicial de 1873, ó sea el 490 del vigente, se declare al actor desistido de la instancia, y ejecutoriada, por consiguiente, la sentencia apelada.—Hecho el requerimiento correspondiente, en los términos de la citada disposición, por auto de veintidós del referido mes, que se notificó por edicto, la Secretaría informó, en veinticinco de los mismos, que habían trascurrido las veinticuatro horas concedidas para suministrar el papel, sin que el actor lo hubiese verificado, hasta que últimamente el señor Procurador ocurrió á la Corte por segunda vez, en doce del presente, insistiendo en su anterior pretensión.

Y considerando que lo solicitado por el señor Procurador está arreglado á la ley, habiéndose observado estrictamente el procedimiento detallado en el artículo 489 anteriormente citado, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara á Isaías Vega desistido de esta segunda instancia, quedando en su virtud ejecutoriada la mencionada sentencia, de fecha seis de Mayo de mil ochocientos ochenta y dos, con costas de cargo del apelante.

Notifíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la misma fecha notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Octubre catorce de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—José María Sánchez O., vecino de Popayán, en el Departamento del Cauca, inició, por medio de apoderado, ante la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, la reclamación correspondiente por el valor de las expropiaciones que fueron causadas á la señora Concepción Ibarra, esposa del reclamante, en la guerra próxima pasada.

Dicha reclamación se hizo consistir en el valor de los siguientes bienes:

Veinticinco vacas paridas, á treita pesos cada una	$	750 ...
Trece novillos y toros, á veinte pesos cado uno		260 ...
Veinticinco vacas horras y novillas, á veinte pesos cada una		500 ...
Un caballo de superior calidad que valía doscientos pesos		200 ...
Un macho pardo que valía cien pesos		100 ...
Un caballo moro, estimado en ochenta pesos		80 ...
Y doce caballos de carga á veinticinco pesos		300 ...
Mas los daños causados en la hacienda de "Calicanto," estimados en quinientos pesos		500 ...
Y por último, el producto de la misma hacienda durante el tiempo que estuvo embargada por el Gobierno, estimado en ciento cincuenta y siete pesos ochenta y dos centavos		157 82
Suma	$	2,847 82

La Comisión, después de hacer obtenido algunas modificaciones en las pruebas, dictó su resolución, con fecha veinte de Junio del presente año, por la cual reconoció á favor de la señora Concepción Ibarra la suma de mil ochocientos noventa y cinco pesos ($ *1,895*), por expropiaciones, declarando, al propio tiempo, que ese crédito estaba comprendido en el ordinal 3.°, artículo 2.° de la ley 44 de 1886.

Notificada esa resolución al apoderado de la parte reclamante, pidió la reconsideración del caso, y la Comisión, por providencia de cinco de Julio, también del presente año, modificó la que había dictado anteriormente. En este segundo fallo declaró que ninguna ley autorizaba el reconocimiento, por parte del Gobierno, de daños y perjuicios causados á particulares en guerra civil; pero que en el caso que se examina debía tomarse en consideración el lucro cesante ó sea el valor del usufructo de la hacienda de "Calicanto" durante el tiempo que estuvo ocupada por el Gobierno; y en consecuencia, aumentó el valor total del reconocimiento con la cantidad de ciento cincuenta y siete pesos ochenta y dos centavos ($ 157-82), valor del usufructo de la finca referida.

El Ministerio de Guerra se conformó con la decisión de la Comisión; pero el señor Procurador general ha pasado la actuación á esta Superioridad, para que se resuelva por ella lo que sea legal, tanto respecto de las pruebas como sobre el fondo mismo de la reclamación.

Acerca del hecho de las expropiaciones y de su valor, no hay motivo ninguno de duda; pues está demostrado con la aseveración de tres testigos presenciales que en el mes de Enero de mil ochocientos ochenta y cinco fueron sacados de la hacienda de Antomoreno, en el Departamento del Cauca, por fuerzas del Gobierno, los semovientes mencionados en la relación que ha servido de fundamento á la demanda, y que el valor de esos semovientes era mayor del indicado en tal relación; en lo cual está la Corte de acuerdo con lo resuelto por la Comisión.

Respecto del reconocimiento hecho del valor del usufructo de la finca de "Calicanto," tampoco hay observación alguna que oponer, pues consta en el proceso que la expresada finca fué ocupada y esufructuada por el Gobierno, desde el veintisiete de Enero hasta el veinticuatro de Septiembre de mil ochocientos ochenta y cinco, y el valor de dicho usufructo ha sido fijado por peritos en la suma de ciento cincuenta y siete pesos ochenta y dos centavos ($ 157-82),

En atención á lo expueste, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma en todas sus partes la resolución dictada por la Comisión y aprobada por el Ministerio de Guerra, en la reclamación intentada por la señora Concepción Ibarra de Sánchez.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase á la Oficina de su origen, por conducto del expresado Ministerio.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del catorce de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete, se publicó esta sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En quince de los mismos notifiqué esta sentencia al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

En el mismo día la notifiqué al señor Tomás Sánchez.

SÁNCHEZ—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, quince de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—La Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones reconoció con fecha tres de Agosto último, á favor de Rafael Mariño C. y á cargo del Tesoro nacional la suma de quinientos diez y seis pesos, en estos términos:

Cuatrocientos pesos procedentes de los arrendamientos de un potrero, en territorio de Chocontá, en que estuvieron algunas brigadas del Ejército en mil ochocientos ochenta y cinco;

Setenta y dos pesos valor de dos bueyes suministrados á la primera brigada de la 5.ª División del mismo Ejército; y

Cuarenta y cuatro pesos en que fué estimado un novillo dado al Batallón 25 de la 2.ª División.

Lo resuelto por dicha Comisión fué aprobado por Su Señoría el Ministro de Guerra, y pasado el expediente al señor Procurador general, ha reclamado éste del reconocimiento de las dos últimas partidas, fundándose en que la de setenta y dos pesos no podía estimarse, por faltar la prueba de que no hubo Intendente de Hacienda que diera el recibo, y en que el comprobante de la de cuarenta y cuatro pesos expedido por un Comandante de Batallón carece de fuerza, por no haberse con-

vertido en la certificación de que trata el Decreto número 102 de 1886.

La Corte, para mejor proveer, pidió informe al Ministro de Guerra, sobre si hubo Intendente de Hacienda, ó Comisionado especial que hiciera sus veces, en la 1.ª brigada de la 5.ª División del Ejército; y resultando de la nota oficial de seis del corriente, número 688, que el General Juan N. Valderrama, que fué quien expidió el recibo de los dos bueyes, como Comandante general de dicha brigada, ejerció en el año de mil ochocientos ochenta y cinco, en varias ocasiones, las funciones de Intendente, y que no hubo otro que las desempeñara, su atestación merece entera fe y crédito, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2.° del artículo 2.° de la ley 44 de 1886, para el efecto de reconocer y mandar pagar el valor de los dos bueyes suministrados por Mariño.

El suministro del novillo está comprobado con el recibo, debidamente autenticado, expedido por el Comandante del Batallón 25 de la 2.ª División del Ejército, Jesús Cándido Torres, y concurren á demostrar la certeza del hecho las declaraciones de tres testigos contestes, según las cuales, Mariño suministró algunos animales para la subsistencia del Ejército, y no exceden de tres los que él ha pedido se le paguen; y aunque es verdad que por el artículo 3.° del Decreto 102 de 1886 se dispuso que las Oficinas principales de Hacienda, los Gobernadores de los Estados, el del Distrito federal de Cundinamarca y el del Departamento nacional de Panamá cambiaran los documentos contra el Tesoro, por certificaciones ó recibos en debida forma, también lo es que se refiere á las atestaciones ó recibos dados por sus subalternos ó agentes con autoridad suficiente, y que un Comandante de un cuerpo del Ejército nacional no es dependiente ni agente de ninguno de dichos funcionarios. De lo cual se deduce que el comprobante autenticado que obra en el expediente no carece de fuerza por no haberse hecho la conversión mencionada.

Por lo tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma lo resuelto en el asunto de que se trata, por la Comisión de suministros, y aprobado por el Ministerio de Guerra.

Por conducto de éste devuélvase á aquella el expediente, previa notificación de este fallo, del cual se dejará copia.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del quince de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete, se publicó esta sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y siete de los mismos notifiqué la sentencia que antecede al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

En el mismo día la notifiqué al señor Rafael Mariño C.

MARIÑO C.—*Guerra A.*, Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, cinco de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Instruía la Corte un sumario para averiguar si habían incurrido en responsabilidad el Juez 5.° del Circuíto de Bogotá, y su Secretario, por omisiones denunciadas por José Trinidad Moreno, y para ponerlas en claro libró un despacho, con fecha trece de Agosto de mil ochocientos ochenta y cinco, cometido al Juez nacional del Territorio de Casanare encargándole la práctica de algunas diligencias. Paralizado dicho sumario por muchos meses, por no haberse recibido las pruebas pedidas, solicitó el señor Procurador general que se procediera á investigar el motivo del retardo del despacho, para hacerle el cargo correspondiente al Juez comisionado, por falta en el cumplimiento de su deber, si resultaba culpable. Con este fin se han pedido y obtenido varios datos, y en vista de ellos y con audiencia del señor Fiscal, dictó el Tribunal Superior de Tundama, llamado por la ley 61 de 1886 á conocer del negocio, auto de sobreseimiento, fundándolo en que consta del sumario que los correos sufrieron largas interrupciones, por causa de la guerra en el año de 1885, y en que del informe dado por el Secretario del Juez del Circuíto de Casanare, con fecha diez y ocho de Mayo último, resulta que en siete de Septiembre de mil ochocientos ochenta y cinco se devolvieron diligenciadas á la Corte Suprema las providencias relativas al sumario contra el Juez 5.° de Bogotá.

Consultado ese auto con esta Superioridad, se ha oído sobre él al señor Procurador general, quien es de concepto que debe revocarse, para ampliar el sumario y poner más en claro los hechos. Funda su concepto en que en la fecha del informe á que se alude, el último número del año está enmendado, y el Tribunal ha partido del supuesto de que el despacho fué devuelto en siete de Septiembre de mil ochocientos ochenta y cinco, cuando de los informes del Administrador de Correos de Tunja, del Corregidor de Nunchía y del Secretario de esta Corte Suprema se deduce que la devolución se hizo en Septiembre de mil ochocientos ochenta y seis, en cuyo caso resulta una demora notable é inmotivada. Siendo esto así, y conviniendo practicar las diligencias pedidas por el señor Procurador general de la Nación en su vista de veinticuatro del mes próximo pasado, para el mejor esclarecimiento de los hechos, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el auto consultado, y dispone que se perfeccione el sumario en los términos pedidos por dicho señor Procurador, para que con mayores datos declare el Tribunal de Tundama si hay ó nó lugar á formación de causa.

Hágase saber, déjese copia y devuélvase el sumario al Tribunal mencionado, para los fines expresados.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Manuel J. Angarita—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En siete de Septiembre de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al señor Procurador general el auto anterior.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, catorce de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Conocía el Tribunal Superior de Cundinamarca, en segunda instancia, de una causa seguida contra Isaías Escobar en el Circuíto de Facatativá, por varios delitos, cuando advirtió que tal causa había sufrido indebidas demoras en primera instancia, desde el doce de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cuatro hasta el diez y nueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis. Mandóse compulsar copia de lo conducente, pidiéndose á Facatativá los respectivos comprobantes sobre posesión de los individuos que pudieron haber funcionado como Jueces durante el tiempo de la demora, y así preparado el sumario, el Tribunal, en Sala de un sólo Magistrado, profirió auto, el seis de Junio del presente año, por el cual declaró con lugar á seguimisnto de causa contra los que consideró sindicados (Nicanor Sánchez D., Félix Piñeros, José Vicente García y Juan de J. Esguerra), por los trámites extraordinarios y por el delito definido en el artículo 278 del Código Penal del extinguido Estado de Cundinamarca. Al proqio tiempo declaró el Tribunal prescrita la acción criminal, por el transcurso del tiempo determinado por el mismo Código Penal, por lo tocante al que había funcionado primeramente (David Salgado Q.,) como Juez del Circuíto de Facatativá, entre los presuntos causantes de la demora.

De los cuatro individuos sometidos á juicio, Esguerra se conformó con el auto de proceder y emitió en su defensa el informe del caso con pedimento de pruebas, que fueron evacuadas; pero los otros individuos (García, Piñeros y Sánchez Domínguez) interpusieron recurso de apelación, el cual fué concedido en el efecto suspensivo. El recurso ha sido debidamente substanciado ante esta Superioridad, y para resolverlo deben consi-

derarse, antes de entrar en el fondo del asunto, dos observaciones sobre nulidad en el procedimiento que han aducido el señor Procurador general y uno de los sindicados.

Juzga el señor Procurador que el auto de proceder de que se trata es nulo, por cuanto fué proferido por un solo Magistrado del Tribunal, conformo á las reglas de procedimiento que la Legislación del extinguido Estado de Cundinamarca había establecido; y apoya esta opinión en la doctrina siguiente: que debiendo conocer los Tribunales Superiores en primera instancia, de las causas de responsabilidad contra los Jueces de Circuíto, á virtud de lo dispuesto en el artículo 100 (numeral 3.°), de la ley 61 de 1886 (25 de Noviembre), y habiendo tenido esta atribución la Corte Suprema, el procedimiento de los Tribunales Superiores debía ser el mismo á que se ajustaba la Corte; y por lo tanto, el Tribunal Superior de Cundinamarca no ha podido conocer del asunto de que se trata en Sala de un solo Magistrado, sino en Sala plural. En apoyo de esta doctrina, el señor Procurador aduce también lo resuelto por la Corte en su Acuerdo número 43 de 27 de Julio del presente año.

Por su parte, uno de los sindicados, Nicanor Sánchez Domínguez, observó que en la copia suministrada por la Prefectura de Occidente (Facatativá), de la diligencia de posesión de Jueces, no aparecen, en cuanto á él, las firmas del Prefecto y Secretario; y que careciendo de valor esta prueba necesaria del carácter oficial que tuvo el sindicado, es nulo el proceso.

A la primera observación, opone la Corte lo siguiente:

El artículo H de la Constitución, transitorio, estatuyó que mientras el Poder Legislativo no dispusiese otra cosa, continuara rigiendo en cada Departamento la Legislación del respectivo Estado; aun cuando la ley 61 de 1886, atribuyó á los Tribunales Superiores en primera instancia, y á la Corte Suprema en segunda, el conocimiento de las causas de responsabilidad que se siguiesen contra los Jueces de Circuíto (numeral 7.° de la sección 2.ª, artículo 21 y numeral 2.° del artículo 100), nada dijo sobre el modo como debían proceder dichos Tribunales al ejercer su atribución; y si la Corte, por su Acuerdo número 48 del 26 de Julio último, determinó cuál había de ser el procedimiento, este acto no podía obligar á los Tribunales sino en lo sucesivo, pero no infirmaba los autos pronunciados anteriormente, conforme á las legislaciones locales. Ahora bien, la ley 57 del presente año, que ordenó á los Tribunales ejercer de cierto modo sus atribuciones de carácter judicial (artículo 270), no comenzó á regir sino el 22 de Julio, en tanto que el auto de proceder que se examina fué proferido el 6 de Junio; y así mismo, fué muy posterior á esta fecha el Acuerdo número 48 de la Corte, por el cual se decidió que los fallos de los Tribunales fuesen pronunciados en Sala plural. No hay, por lo tanto, razón para estimar ilegal el auto que se considera, por cuanto lo pronunció un solo Magistrado, lo que el 6 de Junio era conforme á la Legislación de Cundinamarca.

Cuanto á la objeción hecha por uno de los sindicados (Sánchez Domínguez), es evidente su fundamento. La copia de la diligencia de posesión que á él se refiere (folio 6 vuelto), sólo contiene como firma el nombre del posesionado, y faltan la del Prefecto que le dió posesión y la del Secretario que autorizó el acto. Pero de aquí no se deduce que sea nulo el auto del Tribunal, sino que no hace fe el documento en copia, en lo que se refiere á Sánchez Domínguez, por cuanto no contiene la prueba del carácter oficial de este individuo.

Es de observar, además, que el auto que se censura declara con lugar á formación de causa contra cuatro individuos; á saber: Nicanor Sánchez Domínguez, posesionado, según el documento deficiente á que se ha aludido, del *cargo* de *segundo designado* del Juzgado 2.°; Félix Piñeros, posesionado del empleo de Juez 2.° principal; José Vicente García, posesionado del empleo de Juez único principal; Juan de J. Esguerra, posesionado como Juez 2.° principal; todos del Circuíto de Facatativá. De estos cuatro individuos, es evidente que aquellos que funcionaron como empleados principales, han podido ser responsables de la demora, por cuanto es notorio que ejercieron las funciones de Juez en el Circuíto de Facatativá. Pero no hay razón alguna para llamar á juicio á Sánchez Domínguez, simple segundo designado, cuando de autos no resulta ninguna prueba de que él hubiese ejercido las funciones de Juez durante el tiempo de la demora; caso en que se hallaba Carlos Fernández, posesionado como Juez suplente, y á quien el Tribunal no ha comprendido en su auto.

De lo expuesto resulta que, si bien el auto fué legítimamente proferido por un solo Magistrado el 6 de Junio del presente año, fué doblemente infundado por lo tocante á Sánchez Domínguez. Con legal fundamento se sobreseyó, por razón de prescripción, con respecto á David Salgado Q.; pero los otros tres individuos llamados á juicio no han sostenido de modo alguno su apelación, ni hay razón que infirme las que se aducen en el auto apelado.

Por estas consideraciones, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, reforma el auto apelado en los términos siguientes: 1.° Se declara prescrita la acción con respecto á David Salgado Q., debiendo cesar el procedimiento relativamente á él; 2.° no hay lugar á proceder contra Nicanor Sánchez Domínguez; 3.° declárase haber lugar á seguimiento de causa, por los trámites extraordinarios, contra Félix Piñeros, José Vicente García y Juan de J. Esguerra, por violación del artículo 278 del Código Penal de Cundinamarca, de 1883, vigente cuando se incurrió en las demoras notadas.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Bonjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En el mismo día notifiqué al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Octubre catorce de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Esta Suprema Corte, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 116 de la ley 57 del presente año, sobre adopción de los Códigos y unificación de la legislación nacional, resolvió, en Acuerdo número 48, fecha veintiséis de Julio último, publicado en la *Gaceta Judicial* número 30, á virtud de consulta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, y en observancia de las leyes 61 de 1866 y 57 del presente año, lo siguiente:

"Los Tribunales de Distrito deben pronunciar todos sus fallos en cuerpo de todos sus Magistrados, en cualquier instancia, si no están divididos por la ley en dos salas, y si lo estuvieren, en sala entera, según que el respectivo negocio sea civil ó criminal. Todo sin perjuicio de que la secuela del juicio ó de la instancia sea encargada á un Magistrado sustanciador, hasta la preparación de cada fallo inclusive:"—resolución que fué ratificada por las disposiciones de los artículos 10 y 11 de la ley 143 del presente año, por la cual se adiciona y reforma la 61 de 1886.

Contra semejante determinación, dictada con el objeto de uniformar los procedimientos judiciales, en conformidad con el espíritu y el mandato de las leyes, se ha procedido en las presentes diligencias, seguidas á virtud de denuncia de Abraham Antorveza contra el Juez 5.° del Circuíto de Bogotá, Enrique Rojas B., por varios hechos indebidos que se suponen ejecutados por dicho Juez, en la causa que se seguía contra Cosme Velandia.

En efecto, el auto de sobreseimiento, que se ha remitido en consulta á esta Superioridad, aparece redactado y suscrito por un solo Magistrado, cuando debió serlo por todos los que componen la sala de lo criminal del Tribunal de Cundinamarca; y como dicho auto tiene fecha 28 de Julio, cuando yá estaba vigente la citada ley 57, es evidente que el auto de que se trata no ha sido dictado por autoridad competente y que, por lo mismo, no hay materia sobre qué pueda recaer un fallo de segunda instancia.

En tal virtud, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el parecer del señor Procurador general, declara nulo el auto consultado, y dispone que se devuelvan la diligen-

cias al Tribunal remitente para que se proceda á fallar el asunto de acuerdo con lo prevenido en la regla segunda del Acuerdo número 66 de 24 de Agosto próximo pasado, publicado en el número 35 de la *Gaceta Judicial*.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En quince de los mismos notifiqué el auto que precede al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Octubre diez y siete de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—En el mes de Agosto de mil ochocientos ochenta y dos, y ante la Prefectura de Policía del extinguido Estado de Cundinamarca, se inició el correspondiente sumario con el objeto de averiguar la responsabilidad en que pudiera haber incurrido el señor Julio Estévez Bretón, por varios cargos que le fueron hechos en su calidad de Jefe de la Sección 3.ª de la Secretaría de Fomento de la República.

Adelantada la actuación conveniente, el señor Juez 1.° Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, por resolución de cuatro de Agosto del presente año, ha declarado que el asunto no es de su competencia, y ha remitido el proceso á esta Superioridad, por creer que á la Corte Suprema corresponde su conocimiento, á causa de hallarse actualmente el señor Estévez Bretón desempeñando el cargo de Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Tolima.

La Corte, para fijar su jurisdicción, razona de la manera que en seguida se expresa:

El inciso 4.°, artículo 21 del Código Judicial vigente, faculta á la Corte Suprema de Justicia para conocer, en una sola instancia, de las causas que, por delitos de responsabilidad, por infracción de la Constitución ó las leyes, ó por mal desempeño de sus funciones, se promuevan contra los Magistrados de los Tribunales de Justicia; y el artículo 1819 del mismo Código llama juicios de responsabilidad los que se siguen contra los empleados públicos, por abuso en el ejercicio de sus funciones oficiales ó por falta de cumplimiento de los deberes de su destino.

De esta última disposición se deduce, en tesis general, que todo empleado público es responsable por los hechos criminosos que ejecute con motivo del ejercicio de su empleo, y que desde que ejecuta esos hechos queda sometido á la jurisdicción de una autoridad encargada de su juzgamiento y castigo, jurisdicción que no podría variar aunque variara posteriormente la categoría del funcionario primitivamente sindicado.

En el caso que se examina, el expresado señor Estévez Bretón no ejecutó los hechos que se le imputan, en su calidad de Magistrado de un Tribunal, sino como Jefe de la Sección 3.ª de la Secretaría de Fomento; y por consiguiente, no quedó entonces, ni está en la actualidad, sometido á la jurisdicción de la Corte, según el artículo primeramente citado.

Así, pues, esta corporación se declara incompetente para conocer del presente asunto; y como el Juez 1.° del Distrito Judicial de Cundinamarca era quien estaba substanciándolo últimamente, y este empleado no tiene jurisdicción para ello, se dispone, además, remitir el proceso á uno de los Juzgados del Circuito de Bogotá en lo criminal, para que allí se surta la primera instancia.

Notifíquese, cópiese y publíquese en la *Gaceta Judicial*.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Octubre diez y siete de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Las presentes diligencias sumarias tuvieron origen en la denuncia dada ante el Juez del Circuito de Guatavita por Olimpio Piedrahíta, en ocho de Febrero del corriente año, y con el objeto de averiguar la responsabilidad que pudiera caber al doctor Ricardo Pizarro, por abandono del destino de Prefecto de aquella Provincia.

Pasadas las diligencias al Tribunal de Cundinamarca, éste, después de agotada la investigación, dictó, de conformidad con el parecer del Ministerio público, el auto de veintiuno de Septiembre último, por el cual sobreseyó en el procedimiento, declarando sin lugar al seguimiento de causa.

Venido este auto en consulta y surtida la tramitación respectiva, la Corte, de acuerdo con el dictámen del señor Procurador general, encuentra fundada la resolución en referencia; porque del expediente, y especialmente del informe evacuado por el señor Secretario de Gobierno del Departamento de Cundinamarca (fojas 13 y 14) resulta, que en tres veces en que el doctor Pizarro se separó de la Prefectura, una de ellas fué á virtud de licencia concedida por la Gobernación, y las otras dos, á virtud de comisiones dadas por el señor Gobernador en servicio público y con el objeto de tranquilizar la Provincia de Guatavita.

No existiendo, pues, motivo alguno de culpabilidad, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto consultado.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de su procedencia.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Octubre veinticuatro de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—En el mes de Mayo del corriente año, cuando aún no se había unificado la legislación nacional, y cuando, á virtud del artículo H de la Constitución, regían transitoriamente las leyes de los extinguidos Estados,—se seguía en el Juzgado del Circuito del Valle-Dupar una causa contra Margarita Fragoso por el delito de heridas; y al tiempo de verificarse el sorteo de los Jurados que debían decidir en el proceso, el defensor de la reo recusó dos de esos Jurados, cosa á que no tenía derecho, porque estando presente la Fragoso, era ella únicamente la que tenía facultad de hacer tal recusación, según las leyes del Magdalena.

Como el hecho indicado producía nulidad y aparejaba responsabilidad al Juez que presidía el acto, el Tribunal Superior del Magdalena declaró esa nulidad, y llamó á dicho Juez á juicio de responsabilidad por los trámites extraordinarios y por violación del artículo 359 del Código Penal que regía cuando el hecho se verificó.

El Fiscal del Tribunal, creyendo que el artículo violado y aplicable era el 402 del Código Penal vigente hoy, pidió reforma de la providencia del Tribunal en el sentido últimamente indicado; y como ella le fuera negada, entabló apelación para ante esta Superioridad, del referido auto de enjuiciamiento, la que le fué concedida en el efecto devolutivo.

Venido el expediente y substanciado el recurso, se pasa á resolver acerca de él.

Como se deja insinuado atrás, el hecho punible tuvo lugar bajo el imperio de la legislación anterior; y conforme á las disposiciones constitucionales y legales, que con notable acierto ha estampado el Tribunal, ese hecho no podía calificarse ni penarse conforme á leyes postetiores, porque éstas no preexistían cuando se cometió la falta. Y como por otra parte la ley nueva, tratándose del caso presente, no sólo no es favorable y permisiva, sino que es restrictiva, porque duplica la pena; es claro que tampoco bajo ese aspecto podría tener cabida el fuero nuevo.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia y por autoridad de la ley, confirma el auto apelado, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador general.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvanse los autos.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

Corte Supremade Juticia—Bogotá, veinte de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—En veintiséis de Junio de mil ochocientos ochenta y tres dió parte el Sargento 1.° del Batallón 10.° de Zapadores, Antonio Romero, al Capitán Ayudante Mayor del mismo Cuerpo, de haber atentado contra su persona el Teniente Vicente A. Nariño. disparándole un tiro de rifle; hecho que tuvo lugar en el punto de "La Venta," á tiempo en que dicho Batallón marchaba de Popayán hacia el Sur de la República. Elevado dicho parte al Comandante del Cuerpo, dispuso éste que el Mayor del mismo instruyera el correspondiente sumario para comprobar la tentativa de homicidio denunciada, y habiéndolo verificado y pasado las diligencias informativas al Comandante del Batallón, quien las transmitió al Comandante en Jefede la 3.ª División, se declaró éste incompetente para conocer del negocio y lo mandó pasar, por considerarlo común, al Juez del Circuíto de Túquerres, quien se lo devolvió, fundándose en que, por razón del lugar en que el delito se cometió, el Juez llamado á conocer de la causa era el del Circuíto de Popayán. Remitida á éste la actuación, declaró, previa audiencia del Fiscal, con lugar á formación de causa contra Nariño, por tentativa de homicidio, lo mandó reducir á prisión, y dispuso que para su captura y remisión al lugar del juicio, se librara exhorto al Juez 2.° del Circuíto de Bogotá. Reclamado Nariño al General en Jefe de la sección de Mando y Dirección del Ejército, fué éste de concepto que, estando aquél en servicio activo, no teniéndose conocimiento de la causa que se le sigue, ni de la competencia del Juez, y siendo dispendioso remitirlo desde el Norte de la República, en donde se encontraba, hasta el Sur, lo mejor era que se remitiera la causa á esta Capital para el juzgamiento de Nariño por uno de los Jueces de Circuíto.

En vista de lo que se acaba de expresar, el Juez Superior del Distrito Judicial de Popayán, á cuyo despacho se había pasado la causa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 102 del Código Judicial, ha ocurrido al expediente de remitirla á esta Superioridad para que ordene, dice, lo que estime conveniente, fundándose en que la Corte Suprema es Tribunal Militar y conoce de los negocios de esa clase; en que el Batallón Zapadores número 10 estaba en servicio cuando ocurrió el hecho de que se trata; en que hay dificultad para la comparecencia del acusado en Popayán, y en que él (el Juez Superior), se considera incompetente para conocer de la causa. Pero el primer fundamento carece de la extensión que se le da, porque si bien es cierto que, conforme al artículo 281 de la ley 153 del año en curso, la Corte está llamada á conocer de los recursos de nulidad que se interpongan de las sentencias que recaigan en juicios militares, y que le está atribuída por el artículo 280 de dicha ley, y por el 1,375 del Código Militar, la facultad de decidir en Sala de Acuerdo las competencias de jurisdicción que puedan ocurrir entre las autoridades ó Tribunales Militares y los Jueces ó Tribunales ordinarios, también lo es que no se ha interpuesto ni podido interponerse dicho recurso, por no haber recaído sentencia que pudiera motivarlo, y que, por otra parte, no se ha suscitado competencia en la causa abierta contra Vicente A. Nariño, ni se ha preparado en los términos prevenidos en el artículo 1,738 del Código Judicial, ni por razón de ella pudiera suspenderse la prosecución de la causa, atendido lo dispuesto en el artículo 1,739 del mismo Código; razones por las cuales la Corte no puede ingerirse, sin extralimitar sus funciones, en la causa mencionada.

Los demás fundamentos apuntados presuponen que la causa es militar, sin advertirse que el Juez del Circuíto de Popayán, considerándola común, aprehendió su conocimiento, llamando á juicio á Nariño, y que hasta ahora tiene el carácter de común, por no haberse promovido competencia ni dirimídose ésta en sentido contrario.

De notarse es, además, que ningún asunto pendiente ante un Tribunal ó Juzgado puede suspenderse y remitirse á la Corte Suprema, para el efecto de que resuelva dudas que le ocurran al que conoce de él, pues aunque el artículo 116 de la ley 57 de 1887 le confiere á la Corte la facultad de resolver en abstracto, á solicitud de los Tribunales Superiores de Distrito ó á propuesta de cualquier Magistrado de la misma Corte, las dudas relativas á la inteligencia de las leyes sobre organización y procedimientos judiciales, el caso es muy distinto, y cuando ocurre no se suspende ni se remite á la Corte el negocio que haya motivado la duda, sino que se le somete únicamente la consulta.

Dispone, por lo tanto, esta Superioridad, de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador general, que se devuelva el proceso al Juez Superior del Distrito de Popayán, para que, empleando los medios que están en sus facultades, le dé sin demora el curso legal.

Hágase saber esta resolución, déjese copia de ella y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, quince de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete.

El apoderado del General Juan N. Matéus y señoritas María Josefa y Cristina Mateus, interpuso apelación para ante el Tribunal Superior del Distrito judicial de Cundinamarca, del auto que pronunció el Juez 4.° del Circuíto de Bogotá, con fecha diez y seis de Mayo del presente año, librando mandamiento de pago por la vía ejecutiva á favor de Jesús María Gutiérrez y en contra de los expresados Matéus, por la suma de cuarenta y dos mil trescientos pesos y sus intereses ($ 42,300) al uno y medio por ciento (1½ %) mensual, computados desde el día veintitrés de Febrero último, hasta el día en que se verifique el pago, deduciéndose lo que confesó el acreedor haber recibido á cuenta de los intereses.

La apelación fué concedida en el efecto devolutivo y los autos se remitieron al referido Tribunal; pero teniendo este en consideración, á virtud de reclamación del ejecutante que la Nación había venido á ser interesada en el asunto, desde que por auto del Juez inferior, fecha once de Julio de este año, había admitido una tercería coadyuvante propuesta por el Banco Nacional, se declaró incompetente, por providencia de ocho de Agosto del presente año, y dispuso se pasase la actuación en el estado que tenía á esta Superioridad, por ser á quien correspondía como en efecto corresponde, conocer del recurso pendiente.

Adoptada en esta segunda instancia la tramitación dispuesta por la ley, entra la Corte á decidir el expresado recurso.

La parte ejecutada objeta el auto ejecutivo, sosteniendo: 1.° Que hay un objeto ilícito en el contrato contenido en la escritura pública que ha servido de fundamento á la ejecución, por cuanto los ejecutados se obligaron á pagar en determinada especie de moneda, excluyendo terminantemente los billetes del Banco nacional, con expreso quebrantamiento de las disposiciones que establecieron el curso forzoso de los expresados billetes; y 2.° Que dicha escritura no presta mérito ejecutivo contra las señoritas María Josefa y Cristina Matéus, por no haberse insertado en ella el poder ó autorizaciones que para obligarlas hubieran conferido al General Juan N. Matéus.

Para la Corte basta tener en cuenta que el instrumento con el cual se entabló la ejecución, está revestido de todas las condiciones exigidas por los artículos 1,008, 1,011 y 1,012 del Código Judicial, por lo cual el Juez no pudo negar el mandamiento ejecutivo. Si contra el indicado instrumento hubiere objeciones que oponerle, por la parte interesada, esas tendrán cabida en otra forma y en otra ocasión.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de conformidad con el concepto del señor Procurador general, confirma el auto apelado de que viene hecha referencia. Las costas son de cargo del apelante.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y siete de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

En la misma fecha lo notifiqué al señor doctor Francisco E. Alvarez.

ALVAREZ.—*Guerra A.*, Secretario.

En diez y ocho de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor doctor Emiliano Restrepo E.

RESTREPO E.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Octubre veinte de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Fundado en una partida escrita en toda regla en el Diario de la Aduana de Cartagena, transcrita como cabeza de proceso civil, el Administrador de la misma Aduana libró mandamiento ejecutivo, el 8 de Enero de 1884, contra Federico Térrill, por la suma de doscientos quince pesos, cuarenta centavos ($ 215-40), valor total de los derechos de importación causados (primitivo y adicional) por un cargamento introducido á bordo de la goleta "Dos Amigos," el 11 de Julio de 1881; siendo de advertir que se procedía también á virtud de una decisión del Jurado de Aduanas que era y es inapelable.

El ejecutado apeló del auto ejecutivo, y se le concedió la apelación, en el efecto devolutivo, para ante esta Superioridad, previo el depósito de la suma respectiva. Pero el ejecutado, lejos de sostener su apelación, la dejó abandonada, llegando la actuación hasta oirse al señor Procurador general, sin que el asunto fuese fijado en lista, por no haber suministrado papel el interesado. Llenadas recientemente por la Secretaría de la Corte las formalidades prevenidas por el artículo 152 de la ley 57 del presente año, y cumplido el mayor término del artículo 141, es el caso de fallar, y para ello la Corte considera simplemente:

El documento en qne se fundó la ejecución, presta mérito ejecutivo, conforme á la expresa disposición del artículo 1,007 del Código Judicial (numeral 2.°) antigua edición; y nada se ha alegado ni podido alegar en contrario; por lo que el auto ejecutivo es inatacable.

Por lo tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador general, confirma el auto apelado, y condena en costas al apelante.

Notifíquese, cópiese, publíquese, y devuélvase el expediente al Administrador de la Aduana de Cartagena.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

ASUNTOS VARIOS.

República de Colombia—Poder Judicial—Secretaría de la Corte Suprema nacional—Bogotá, 21 de Octubre de 1887.

Señor Procurador general de la Nación.—Peesente.

Tengo el honor de remitir á Usía los cuadros estadísticos del mes de Septiembre último, referentes al Ramo civil, de los juicios pendientes y fallados en el Tribunal Superior de Tunja; y el cuadro de los sumarios pendientes y fallados en el primer semestre del año en curso, en el jnzgado del Circuíto de Manizales.

El señor Secretario del Tribunal Superior de Tunja, en su nota remisoria, avisa que los datos referentes á los meses anteriores, se hallan en poder del señor Fiscal de ese Tribunal.

Dios guarde á Usía.

Ramón Guerra A.

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL

Señores Magistrados.

Por memorial de 20 de Agosto último, el señor Fidel H Rosas denunció ante vosotros á varios funcionarios públicos entre quienes figura el actual Gobernador del Departamento de Cundinamarca.

Contrayéndose los cargos á que se refiere la denuncia á actos oficiales, se trata de iniciar el juicio de responsabilidad consiguiente, si á él hubiere lugar, para lo cual el denunciante debió cumplir con lo prevenido en el artículo 1,824 del Código Judicial (última edición), acompañando la prueba siquiera sumaria de su relato, formalidad de que está destituída la denuncia y sin la cual no es posible dar á ésta el curso correspondiente.

Por lo tanto, soy de concepto que se devuelva al señor Rosas el memorial de que se deja hecha referencia, á fin de que, si lo tiene á bien, lo complemente con la prueba ó principio de prueba exigido por la ley.

Bogotá, 3 de Septiembre de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

El señor Manuel Monroy apeló para ante vosotros del auto ejecutivo dictado contra él, en 16 de Marzo de 1885, por el Juez de Ejecuciones nacionales.

La ejecución se inició á virtud de mandamiento de la Oficina general de Cuéntas, y la suma á que ella se contrae procede de una multa impuesta al responsable, y de dos alcances deducidos contra el mismo, en el examen de las cuentas que rindió como Administrador de las Salinas de Chita y Muneque, en los meses de Enero, Marzo y Julio de 1881.

Los documentos en que se funda el auto apelado prestan mérito ejecutivo, por ser de los comprendidos en los incisos 1.° y 3.° del artículo 1,096 del Código Judicial (última edición), sin que á ello se oponga el que el primero de los incisos citados se refiera á alcances definitivos, pues si se han ejecutoriado, como sucede con los que son materia de la ejecución contra el apelante, no son provisionales y deben surtir sus efectos, por disponerlo así el artículo 2,013 del Código Fiscal.

En concepto del infrascrito, bastan estas breves consideraciones para concluír que el auto apelado es legal y que, por lo tanto, debéis confirmarlo.

Bogotá, 10 de Septiembre de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

Por apelación ha venido á vuestro conocimiento el auto proferido por el Tribunal Superior del Distrito judicial de Cundinamarca, el seis de Junio último, y por el cual fueron llamados á juicio de responsabilidad por los trámites extraordinarios, los señores Nicanor Sánchez D., Félix Piñeros, José Vicente García y Juan de J. Esguerra, por demoras en el ejercicio de las funciones que les correspondían como Jueces del Circuíto de Facatativá.

La competencia de los Tribunales Superiores de Distrito para conocer en primera instancia de los juicios de responsabilidad contra los Jueces de Circuíto, fué conferida por el artículo 99 de la ley 61 de 1886, que dice así, en la parte conducente:

"Las atribuciones conferidas á la Corte Suprema en el Código Judicial (edición de 1873) y no asignadas á la Corte Suprema de Justicia en la Constitución ni en esta ley, serán ejercidas por los Tribunales Superiores de Distrito.

Y como entre las atribuciones que tenía la Corte Suprema y que hoy no le corresponden, es la de conocer en esta clase de juicios, en virtud de lo dispuesto en el artículo 99, la competencia es privativa de los Tribunales Superiores de Distrito; pero al conocer de esos negocios debe ser con observancia del procedimiento que seguía la Corte cuando á ella correspondía el conocimiento.

El capítulo 3.°, título 3.°, libro 1.° del Código Judicial de 1873, disponía que en los negocios atribuídos á la Corte en una sola instancia, la substanciación correspondía á un solo Magis-

trado, y reservaba á toda la Corte la decisión ó el fallo. Luego los Tribunales Superiores de Distrito, al ejercer las funciones asignadas á la Corte Suprema, deben dar fallos colectivos, aunque para la substanciación sólo intervenga un Magistrado.

Muy acertadas son las consideraciones del acuerdo número 48, de esa Superioridad, fecha 26 de Julio, publicado en el número 30 de la *Gaceta Judicial*, al resolver una consulta del Tribunal Superior de Antioquia, sobre el procedimiento que debían adoptar al ejercer sus atribuciones, los cuales considero aplicables á este asunto.

En consecuencia, soy de concepto que, sin entrar á estudiar el fondo del asunto, devolváis el expediente al Tribunal Superior de Cundinamarca, para que en el fallo del sumario intervengan todos los Magistrados de la Sala de lo criminal.

Bogotá, 30 de Septiembre de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados,

El apoderado de las señoritas María Josefa y María Cristina Mateus y del señor Juan N. Mateus, en el juicio ejecutivo que contra ellos sigue el señor Jesús María Gutiérrez, promovió articulación para que el depósito ó secuestro de los bienes embargados en el expresado juicio se limite á la hacienda del "Diamante," especialmente afecta al pago de la deuda, y, que se excluyan los demás á que se quiere hacer extensivo dicho secuestro.

Fúndase este pedimento en que la expresada hacienda es más que suficiente para responder de la obligación, que se trata de hacer efectiva, y de las costas, etc. de la ejecución.

Admitida la articulación, por auto de 11 de Julio último, el apoderado del ejecutante se opuso á ella, pidió la revocatoria por contrario imperio de dicho auto y, en subsidio, interpuso el recurso de apelación.

El Juez del conocimiento, que lo es el 4.° del Circuito de Bogotá, negó la revocatoria pedida y concedió en el efecto suspensivo y para ante esa Superioridad, el mencionado recurso.

Vuestra jurisdicción para decidir éste, os viene de que la Nación tiene interés en el juicio, á causa de que el Banco Nacional hizo y le fué admitida tercería coadyuvante á los bienes de la ejecución.

El apelante sostiene que, dada la naturaleza del juicio ejecutivo, no tiene cabida, y por consiguiente, no debió admitirse la articulación, la cual es del todo estraña á la tramitación breve y especial señalada á dicho juicio por el Código de Procedimiento Judicial.

Sobre esto observa el infrascrito que, admitida la tercería coadyuvante hecha por el Banco Nacional, el procedimiento ulterior hubo de seguirse, y así se dispuso en el auto respectivo (fs. 5, cuaderno número 5.°,) por los trámites establecidos para los juicios de concurso de acreedores (artículo 1,028 del Código Judicial), trámites que no excluían las articulaciones, según se deduce del artículo 1,111 del mismo Código.

Tales eran las disposiciones procedimentales vigentes, en punto á tercerías, al tiempo en que se dictó el auto apelado (11 de Julio), pues la ley 57 de 1887 que, en su artículo 213, modificó dichas disposiciones, en el sentido de que las tercerías se substancien por los trámites del juicio ordinario, no comenzó á regir (artículo 1.°) sino el 22 del mismo mes de Julio.

Ahora bien: el auto en que se admitió el artículo sobre reducción del depósito, no está ejecutoriado, pues sobre él versa la apelación interpuesta para ante esa Superioridad; y, por lo tanto, le son aplicables las nuevas disposiciones procedimentales, si se atiende á la regla general de que estos surten sus efectos sobre los actos subsiguientes del proceso y sobre aquellos que, aun cuando comenzados, no se hubieren consumado legalmente, como sucede con las providencias que no se han ejecutoriado.

Sentado esto y habida consideración á que el juicio ejecutivo tiene sus trámites bien definidos en el capítulo respectivo del Código Judicial, y sin más modificaciones que las introducidas por los artículos del título IX de la ley 57 del presente año, hay que convenir en que el expresado juicio no admite otras incidencias que las referentes á tercerías y artículo de excepciones propuestas oportunamente, pudiéndose considerar las primeras, toda vez que deben iniciarse por medio de demanda formal y substanciarse por los trámites del juicio ordinario, no como incidentes propiamente dichos, sino como juicios separados del ejecutivo, el cual debe proseguirse por sus trámites especiales.

Por razón, pues, de la naturaleza peculiar del juicio ejecutivo, cree el infrascrito que no debe admitirse la articulación intentada por el apoderado de los ejecutados.

Aquí debiera terminar el infrascrito, pidiendoos la revocatoria de la providencia apelada, más como el apelante funda su solicitud de revocatoria de dicha providencia, y el recurso de apelación subsidiario de la misma, en consideraciones que van al fondo del asunto, puesto que se dirigen á discutir el derecho que puedan tener los ejecutados para pedir la reducción del depósito, el infrascrito estima del caso presentaros algunas breves apreciaciones sobre la falta de fundamento del expresado derecho.

Es incuestionable que el depósito debe considerarse como una diligencia consecuencial y complementaria del embargo de los bienes presentados ó denunciados en la ejecución, y que, por lo tanto, él debe comprender á éstos en su totalidad; pero, si se decretase el depósito parcial, se incurriría en la irregularidad de que una parte de tales bienes quedaría substraída, en cierto modo, á la ejecución, siendo así que ésta los alcanza, por razón y como consecuencia del embargo que pesa sobre ellos.

Por lo demás, el derecho que asiste al ejecutante para exigir que todos los bienes comprendidos en el embargo se retengan en secuestro, se deriva de disposiciones civiles terminantes que, por ser substantivas, prevalecen sobre las puramente procedimentales citadas en apoyo de la reducción del depósito.

En efecto, el artículo 2,488 del Código Civil dispone que "toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre *todos* los bienes raíces ó muebles del deudor, sean presentes ó futuros, exceptuándose solamente los no embargables designados en el artículo 1,677."

El artículo 666 del mismo Código define así los derechos personales: "Derechos personales ó creditos son los que sólo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo ó la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas; como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado, ó el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales."

La circunstancia de haber una finca especialmente afecta á la deuda por hipoteca, da al acreedor acción real hipotecaria sobre dicha finca; pero tal acción no perjudica la personal que puede ejercitar para hacerse pagar sobre los bienes del deudor que no le han sido hipotecados (artículo 2,449 del Código Civil).

Aparte de esto, conviene tener en cuenta que, estando el Fisco nacional interesado en el juicio, deben respetarse sus privilegios, entre los cuales hace al caso recordar el de que los créditos fiscales afectan, por regla general, todos los bienes del deudor; lo cual ha debido bastar para que el Juez ejecutor se abstuviera de admitir un artículo tendiente á desvirtuar ese privilegio, tratándose de una ejecución en que el Banco Nacional tiene interés, y siendo así que los derechos de dicho Banco deben sostenerse y hacerse valer en los mismos términos y con las mismas garantías con que la ley favorece los derechos, en general, de la Hacienda pública.

Las disposiciones civiles anteriormente citadas prefieren á las del parágrafo segundo, capítulo V, título 1.°, libro 1.° del Código Judicial á que hace referencia el apoderado de los ejecutados, mayormente si se considera que las últimas no son aplicables sino á los casos determinados en los artículos 124 y 125 de la ley 57 tantas veces citada, los cuales difieren substancialmente del juicio ejecutivo, que se rige por reglas especiales.

Como la apelación no se contrajo sino al auto en que se admitió la articulación, y ésta no ha sido resuelta aún por el Juez inferior, el infrascrito se limita á pediros la revocatoria de dicho auto, por cuanto por él se admite una articulación extraña al juicio ejecutivo y desprovista en el fondo de fundamento legal.

Bogotá, 17 de Agosto de 1887.

CARMELO ARANGO M.

BOGOTÁ.—IMP. DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 44

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 5 de Noviembre de 1887.

REPUBLICA DE COLOMBIA BIBLIOTECA

CONTENIDO.

Pág.

ACUERDOS DE LA CORTE.

Acuerdo número 100, relativo á una consulta del Tribunal Superior del Cauca 345
Id. número 101 id. sobre id. del Tribunal Superior de Santander.... "
Id. número 102 id. á otra id. del Juez Superior del Tolima..... 346

RECURSOS DE CASACION

Auto relativo á una apelación motivada por un recurso de casación denegado por el Tribunal Superior de Pasto..... "
Salvamento de voto del señor Magistrado doctor Calderón..... "
Id. id. del señor Magistrado doctor Samper..... 347
Id. id. del señor Magistrado doctor Fernández..... 348

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES

Confirmatorio de un auto de sobreseimiento del Tribunal Superior de Antioquia..... 349
Id. de otro id. del mismo Tribunal..... "
Id. de otro id. del Tribunal Superior del Magdalena, sobre formación de causa á un Juez de Circuito..... "
Id. id. de otro del Tribunal Superior de Antioquia, de sobreseimiento 350

NEGOCIOS CIVILES.

Sobre incompetencia de la Corte para conocer de una reclamación de extranjero, por expropiación..... "
Sobre confirmación de un auto ejecutivo librado en Bucaramanga 351

DOCUMENTOS DIVERSOS.

Personal de la Corte..... "
Nota sobre datos estadísticos..... "

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL

Relativa á un juicio por delito de abuso deshonesto..... 352
Id. á un juicio ejecutivo..... "

GACETA JUDICIAL.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

ACUERDO NUMERO 100.

En Bogotá, á veintidós de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete, constituída la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, se dió cuenta de la consulta que Su Señoría el Presidente del Tribunal del Distrito Judicial del Cauca ha elevado en telegrama, fecha diez y ocho del mes en curso, número 62, que dice lo siguiente:

"Reformado el inciso 18, artículo 5.° del Decreto sobre timbre nacional,—¿tiene aplicación respecto de sentencias definitivas lo dispuesto en el artículo 17, sobre adherencia de estampillas?

El señor Magistrado doctor Calderón, á quien tocó el asunto to en repartimiento, sometió á la consideración de la Corte el siguiente proyecto de resolución, que fué aprobado por unanimidad:

"Las disposiciones citadas en la consulta dicen:

"Art. 5.° Se extenderán en papel de 3.ª clase los actos documentos y diligencias que á continuación se expresan.....
..... 18. Las sentencias que se dicten por los Tribunales y por los Juzgados de la República, cuando el valor del pleito exceda de mil pesos.

"Art. 17. Los actos, documentos y diligencias de que hablan los incisos 1.°, 2.°, 3.°, 10.° y 18 del artículo 5.°, los artículos 6.° y 8.° y el inciso 1.° del artículo 16 de este Decreto, cuya cuantía sea de cinco mil pesos ó de cinco mil hectáreas de tierras baldías, llevarán una estampilla más de 3.ª clase, por cada cinco mil pesos ó cinco mil hectáreas de exceso, ó por un excedente que no alcance á esta suma. Además irán extendidas en el papel sellado que les corresponda."

"Basta la lectura de las disposiciones transcritas para deducir claramente que las sentencias que se dicten por los Tribunales y por los Juzgados, cuando el valor del pleito exceda de mil pesos, deben extenderse en papel sellado de 3.ª clase, y cuando la cantidad exceda de cinco mil pesos ó cinco mil hectáreas de tierras baldías, llevarán, además de ser extendidas en papel de 3.ª clase, una estampilla más de 3.ª clase, por cada cinco mil pesos ó cinco mil hectáreas de exceso, ó por un excedente que no alcance á esta suma; y la Corte resuelve así la consulta referida.

"Comuníquese en contestación y publíquese."

Con lo cual se concluyó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 101.

En Bogotá, á veintisiete de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, se consideró una consulta hecha por el Tribunal Superior de Santander, en telegrama del día diez y ocho, recibido el veinte; y el señor Magistrado doctor Samper, á quien había tocado el asunto en repartimiento, propuso el siguiente proyecto de resolución:

"Consulta el Trihunal Superior mencionado sobre la oposición que halla entre los artículos 141 y 168 de la ley 57 del año en curso, y si solamente debe aplicarse el último cuando ocurre el caso de que trata el 493 del Código Judicial.

"Para resolver la consulta, la Corte considera que, aun cuando realmente pudiera existir incompatibilidad entre lo dispuesto en los artículos 140 hasta 143 inclusive, y lo prevenido en el artículo 168 de la ley 57 de 1887, pues que al cumplirse extrictamente lo ordenado por los primeros, difícilmente llegará el caso del último; no obstante, como todas estas disposiciones tienen la misma fuente, por encontrarse en la misma ley, y como á la Corte no le es dado establecer la inobservancia de una disposición legal, sino aclarar las dudas y conciliar las dificultades, es preciso procurar la compatibilidad posible entre los indicados artículos.

"Por lo tanto, la Corte determina lo siguiente:

"En la generalidad de los casos y en toda actuación tienen cabida los artículos 140 hasta 143 de la citada ley 57; pero si un expediente se remite á un Juzgado ó Tribunal, por vía de apelación, sin ir acompañado del papel necesario y pasaren treinta días sin suministrarlo, después de la constancia del recibo del proceso, tendrá lugar lo dispuesto en el artículo 168

"Comuníquese al Tribunal que hace la consulta y publíquese en la *Gaceta Judicial*, para conocimiento de los demás Tribunales de la República."

Este proyecto fué aprobado por unanimidad, con lo cual se concluyó este Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER——*Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 102.

En Bogotá, á veintiocho de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, se dió lectura á una consulta elevada á ella por el Juez Superior del Distrito Judicial del Tolima, por conducto del Tribunal Superior; y en seguida el señor Magistrado doctor Samper, á quien el día anterior había tocado el asunto en repartimiento, propuso el siguiente proyecto de resolución, que fué aprobado por unanimidad de votos:

"La consulta de que se trata versa sobre este punto:

"¿Quién conoce de los impedimentos y recusaciones relativos á los Jueces Superiores?—La duda proviene de dos circunstancias; primera; que el Juez Superior es único en su Distrito Judicial, y por lo tanto, si se trata de impedimentos ó recusaciones que se refieren á él, no hay un segundo Juez que conozca del incidente; y segunda: que el artículo 3.° de la ley 46 del presente año no llama á los suplentes á reemplazar á dicho Juez, sino cuando ocurren faltas absolutas ó temporales, sin preveer nada sobre las accidentales.

"La misma consulta ha sido hecha con respecto á los Jueces de Circuíto, cuando son únicos, ora en lo civil, ora en lo criminal, y la Corte acaba de decidir el punto por su Acuerdo número 99, del diez y ocho de los corrientes, referente, en parte, al número 98 del día anterior. Como en todo caso en que falta disposición legal expresa, es regla de derecho que donde militan unas mismas razones y necesidades se apliquen ó adopten iguales disposiciones, lo natural es que se resuelva, en cuanto á los Jueces Superiores, lo mismo que se ha resuelto con relación á los de Circuíto, cuando éstos son únicos.

"En consecuencia, la Corte resuelve la consulta, disponiendo lo siguiente: cuando se trate de impedimentos ó recusaciones de Jueces Superiores, si éstos son únicos, conocerán y decidirán de este incidente los respectivos suplentes, por su orden, así como se ha dispuesto en lo tocante á los Jueces de Circuíto, en los citados Acuerdos números 98 y 99. Si fueren dos ó más los Jueces Superiores, conocerá el que siga en turno.

"Comuníquese esta resolución por telegrama al Juez Superior del Tolima, por conducto del respectivo Tribunal, llamándole la atención hacia los citados Acuerdos."

Con lo cual se terminó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Francisco A. Fernandez—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemen—Ramón Guerra A.*, Secretario.

RECURSO DE CASACIÓN Y DE HECHO.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Octubre veintisiete de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Tribunal Superior del Distrito judicial de Pasto dictó auto, con fecha veinticinco de Julio próximo pasado, por el cual niega el recurso de casación interpuesto en el juicio civil seguido por Angel María Delgado y Francisco Recalde contra Rafael Erazo Meléndez, por suma de seis mil quinientos pesos y cuatro reales de á ocho décimos, con sus réditos legales.

Con fecha veintisiete de Julio del mismo año, Matías Argos, procurador especial de Rafael Erazo Meléndez, interpuso el recurso de apelación contra dicho auto para ante esta Suprema Corte, y el Tribunal, por auto de fecha veintiocho del mismo mes, concedió la apelación. Por tal motivo han venido los referidos autos á esta Superioridad.

La Corte, al ocuparse en este asunto, no entra á considerar las razones, buenas ó malas, en que el Tribunal se apoyara para negar el recurso de casación, ni entra á estimar la legalidad de esos documentos. Se ocupará únicamente en lo relativo al procedimiento y á la forma en que el expediente ha venido, porque esto sirve de base á la resolución que haya de dictarse.

La regla general en materia de apelaciones es ésta: de toda sentencia definitiva ó de toda interlocutoria que agravie á una parte y que no sea reparable por la definitiva, puede ésta apelar para ante el inmediato superior; y si la apelación se le niega, no le queda otro camino que ocurrir de hecho. Así es y así debe ser, porque el recurso de hecho es un remedio subsidiario contra la negativa del Juez inferior, que suple á la apelación, como que el lo substancia y decide, y si lo admite, entra á conocer y resolver en el punto primeramente apelado. Si así no fuera, resultaría una de dos cosas: ó el recurso de hecho no tendría jamás aplicación alguna, si pudiera apelarse del auto que niega la alzada; ó existirían simultáneamente dos recursos que se excluyen: el de apelación y el de hecho.

Ahora bien: el recurso de casación es alzada, es apelación, es recurso al Superior, solicitando reparación ó enmienda; es, en puridad de verdad, aun cuando no tenga tal nombre, una tercera instancia, puesto que la ley lo ha establecido para decidir acerca de lo resuelto en la segunda. Siendo apelación, es evidente que está comprendido en la regla general de las apelaciones; y si el Tribunal que hubiera de permitirlo lo niega, es evidente también que á la parte agraviada no le queda sino el recurso de hecho; y así lo ha resuelto esta Corte yá en casos análogos.

Esto no quiere decir que la apelación indebidamente concedida en el presente juicio, quede sin enmienda, ni que la parte recurrente no pueda todavía entablar el recurso de hecho, pues que su derecho está latente, en virtud de habérsele concedido la alzada.

Por lo expuesto, para devolver la jurisdicción al Tribunal, y para que, sin menoscabo de la justicia, pueda conceder á la parte el recurso que aún le queda, si ella quisiere emplearlo; se revoca el auto de veintiocho de Julio último, volviendo el expediente al Tribunal de Pasto, como así se dispone.

Notifíquese, cópiese, publíquese.

R. Antonio Martínez.—Firmo en cumplimiento de mi deber, pero salvando mi voto, *José M. Samper*—Firmo en cumplimiento de mi deber, pero salvando mi voto.—*Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

El Magistrado que suscribe tiene la pena de disentir del presente auto, acordado por la mayoría de la Corte, y salva su voto, por las consideraciones siguientes:

En su opinión, el recurso de casación es un recurso especial, diferente de la apelación, principalmente en el procedimiento; en el primero se puede anular lo hecho, limitándose la acción á ciertas causales de nulidad. En la apelación no está la acción limitada á esas causales, y por consiguiente, el campo es más amplio, y las reglas del procedimiento son distintas.

Escriche define la casación: "La acción de anular y declarar por de ningún valor ni efecto algún acto ó instrumento"; y la apelación: "La provocación hecha del Juez inferior al Superior, por razón del agravio causado ó que pueda causarse por la sentencia."

Los artículos 43 y 45 de la ley 61 de 1886 y el 110 de la ley 57 del presente año, no exigen más condiciones para conceder el recurso de casación, sino las siguientes: 1.ª Que la cuantía del negocio sea ó exceda de mil pesos; 2.ª Que se asegure la fianza de costas á sátisfacción del Tribunal; 3.ª Que se interponga el recurso en tiempo hábil; 4.ª Que se haga la consignación de que trata el artículo 44 de la misma ley. Aparece del expediente que se llenaron tales requisitos (fs. 9 y 11).

Se puede argüir, y así se ha hecho, que la ley 61 de 1886, que estableció el recurso de casación, no determina si en caso de negarse, es apelable el auto ó providencia que así lo determine.

Es cierto que existe el vacío en la mencionada ley, pero el artículo 885 del Código Judicial concede el derecho á la parte agraviada de apelar contra la sentencia de un Juez, bien sea definitiva ó interlocutoria con fuerza de definitiva, ó que produzca gravamen irreparable por la sentencia definitiva.

La doctrina constitucional establece como primera atribución de la Corte, la de conocer de los recursos de casación conforme á las leyes.

El artículo 8.° de la ley 153 del presente año (15 de Abril), dispone que cuando no hay ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos semejantes, y en su defecto la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho.

Para conceder ó negar la apelación interpuesta, al Tribunal no le correspondía examinar si no se estaba en el caso del artículo 885 del Código Judicial;—por consiguiente la apelación fué bien concedida en el efecto suspensivo (artículo 888 del mismo Código); y pudiendo concederse éste, era preferible al recurso de hecho, que es gravoso para el apelante, y deben facilitarse los medios de hacer valer sus derechos á las partes, en tanto que no se vulnere disposición legal alguna.

Para conceder ó negar el recurso de casación, al Tribunal no le competía sino examinar si se habían llenado los cuatro *únicos requisitos* que exige la ley, que son de pura ritualidad ó procedimiento, y que yá se ha dicho se cumplieron. El Tribunal, por consiguiente, no debió negar el recurso de casación. Es á la Corte á quien corresponde examinar, llegado el caso, después de substanciar el recurso, si el negocio es casable ó nó. Este es el espíritu y la letra de la ley (artículo 50 de la ley 61 de 1886). Si así no se hubiera dispuesto, el recurso podría hacerse ilusorio, la parte agraviada quedaría abandonada en la defensa de sus derechos, y no se llenaría el pensamiento del legislador, claramente concebido en el artículo 36 de la referida ley.

Según el artículo 65 de la ley 61 citada, los recursos de casación y revisión podrán intentarse y podrán ser admitidos cuando las sentencias que dieron lugar á ellos se funden en leyes que rijan en toda la República. Este punto, llegado el caso, á quien corresponde decidirlo también, es á la Corte.

Ahora, "siempre que un Juez Superior, ya sea la Corte Suprema ú otra entidad judicial, conozca de algún asunto por apelación ó consulta y haya de reformar ó revocar un auto ó sentencia del inferior por no estar ajustada á las leyes, ya sea en cuanto al procedimiento, ya en cuanto á la apreciación de pruebas ó á la aplicación del derecho, dictará el auto ó sentencia superior de modo que en éstos *resuelva el punto, y no tenga que volver á decidirlo el Juez* inferior." (Art. 245 del Código Judicial).

—

Aristides Calderón—Martínez—Samper—Fornández—Morales—Noguera—Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

El señor Magistrado doctor Samper manifestó que estaba de acuerdo con lo substancial del proyecto de auto redactado por el señor Magistrado ponente, doctor Calderón, en tanto que disentía de la redacción y decisión propuesta, en nombre de la mayoría de la Corte, por el señor Magistrado doctor Martínez; y para fundar su concepto, hizo las siguientes observaciones:

1.ª Es cosa clara é incontrovertible que, cuando ante un Tribunal Superior se interpone el recurso de casación contra una sentencia definitiva, el Tribunal no tiene autoridad ni para resolver sobre si el caso es ó nó de decisión; esto es, si hay razón ó nó para interponer el recurso por las causales que lo hacen legal y admisible ante la Corte, conforme al artículo 38 del actual Código Judicial, ó si necesita ó no de la aplicación dada en la sentencia á leyes de carácter general. Lo único que al Tribunal incumbe es examinar estos puntos:

1.° Si se ha interpuesto el recurso en tiempo hábil, es decir, dentro de treinta días después de notificada la sentencia;

2.° Si se han hecho las consignaciones ante el mismo Tribunal, de las sumas de que tratan el artículo 43 y el segundo aparte del 42.

3.° Si el escrito en que se interpone el recurso ha expresado claramente la causal legal en que lo funda el recurrente.

Una vez llenadas estas formalidades de tramitación previa, no es lícito al Tribunal respectivo negar la concesión del recurso; debe concederlo y remitir el proceso y la sentencia á la Corte Suprema, según lo previene el artículo 45.

2.ª En el caso de que se trata, el Tribunal Superior de Pasto extralimitó su autoridad, porque entró á resolver si el asunto era ó nó materia de casación, lo que sola y privativamente correspondía á la Corte resolver; y debió lisa y llanamente conceder el recurso, por cuanto el recurrente había llenado todas las formalidades legales; y en lugar de esto, negó el recurso, y como el recurrente apeló del auto de negación, se le concedió apelación de éste. Se trata, pues, de saber si tal auto era apelable, y si, por lo tanto, la Corte debe resolver sobre esta apelación secundaria ó incidental. Se alega que del auto en cuestión no podía reclamar el interesado sino por recurso de hecho; lo que equivale á reconocer que si el recurrente hubiese ocurrido *de hecho* á la Corte, habría que oírle, pero que no se le debe oír si ocurre *de derecho*, esto es, por el medio sencillo y natural de la apelación; doctrina que es inadmisible cuando la ley no dice expresamente que *sólo de hecho* se puede ocurrir ante el superior.

3.ª El Código Judicial en su título VII, libro II, al tratar de las *Apelaciones y recursos*, distingue los dos medios de obtener justicia ocurriendo al Superior contra las decisiones del Inferior: en el primer capítulo, trata solamente de las *Apelaciones*, y dicta reglas sobre ellas; y, para el caso de que indebidamente se nieguen las apelaciones, concede un recurso subsidiario, el *de hecho*, que conduce á producir los mismos resultados que la apelación. De tal recurso subsidiario trata el capítulo 2.°

Ahora bien: por lo tocante á las apelaciones, el Código estatuye:

"Art. 885. La parte que se creyere agraviada con la sentencia de un Juez, bien sea definitiva ó interlocutoria con fuerza de definitiva, ó que cause gravamen irreparable por la sentencia definitiva, tiene derecho de apelar de ella de palabra en el acto de la notificación, ó por escrito dentro de las setenta y dos horas siguientes á la notificación, si la sentencia fuere definitiva, ó de cuarenta y ocho horas, si fuere interlocutoria.

"Atr. 886. Los autos de substanciación, aunque causen gravamen irreparable, sólo son apelables en el efecto devolutivo, con excepción de los que se expresan en seguida, los cuales son apelables en ambos efectos..... (aquí sigue la enumeración de dos clases de autos relativos á pruebas).

"Art. 888. Los autos expresados en el artículo 885 son apelables en el efecto suspensivo, lo cual quiere decir que la ejecución de ellos y el progreso de la causa deben suspenderse hasta que la apelación sea resuelta por el Superior.

"Entiéndese esta disposición sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en casos especiales."

Resulta claramente de estas disposiciones que todo auto y toda sentencia son apelables, salvo caso de prohibición expresa, como cuando se apela de sentencia definitiva pronunciada en última ó en única instancia. Toda la diferencia está en que de unas sentencias ó autos se apela dentro de cierto tiempo, y de otras dentro de distinto ó menor término; y en que con respecto á unos autos ó sentencias la apelación surte efecto suspensivo, y con respecto á otros, solamente se surte el devolutivo.

Tal es el derecho. Pero este derecho puede ser desconocido ó violado por un Juez ó Tribunal, que niega el recurso de apelación. Queda entonces para la defensa del derecho el recurso subsidiario que se llama *de hecho*; y el artículo 898 (yá en otro capítulo), dice:

"Siempre que se deniegue el recurso de apelación, en cualquier juicio, *podrá* la parte agraviada ocurrir *de hecho* al superior para que él lo conceda y substancie si fuere legal."

No es, pues, el recurso de hecho un recurso único, ni obligatorio, ni que pueda emplearse en todo caso; es un recurso de que la parte puede valerse, si quiere, pero *solamente* cuando se le ha negado la apelación que había interpuesto, y es esencialmente subsidiario para obtener justicia contra una denegación de apelación. La ley, de un modo general, concede los dos derechos: primero, el de apelar; segundo, el de ocurrir de hecho, si la apelación es injustamente negada.

Por lo tanto, en el caso de que se trata, yá que el Tribunal de Pasto se extralimitó, rechazando la casación, hizo bien al conceder la apelación del auto que la rechazó.

4.ª Pero se observa que yá la Corte resolvió el punto en sus

autos de fechas cinco de Septiembre último (*Gaceta Judicial* número 39) y diez y nueve del mismo mes (*Gaceta Judicial* número 40), con ocasión de un recurso de casación entablado por Carolina y Felisa Fernández, el cual dió ocasión sucesivamente á un recurso de hecho y á una apelación sobre el mismo incidente; esto es: sobre la negativa que del recurso de casación hizo el Tribunal Superior de Popayán, extralimitando su autoridad. Y con ocasión de este asunto se sostiene que no es apelable ante la Corte un auto en que se niega el recurso de casación, y que en este caso, sólo hay lugar al recurso de hecho.

Si en el auto del cinco de Septiembre se negó el recurso de casación, diéronse para ello razones irrefutables; pero es de notar que en el tercer párrafo se dijo: "Según el artículo 898 del Código Judicial (nueva edición), siempre que se deniegue el recurso de apelación en cualquier juicio, podrá la parte agraviada ocurrir de hecho al Superior para que él lo conceda y substancie si fuere legal," y de esto se deduce que el auto en que se niega la alzada no es apelable, y que el recurso de hecho se dirige á que se otorgue el de apelación denegado por ese auto, que en el caso de que se trata fué el de apelación, relativo á la sentencia dictada en segunda instancia sobre el negocio principal."

De este párrafo se desprenden dos afirmaciones que, en concepto del infrascrito Magistrado, no son exactas; y si con ellas la Corte erró, ésta, en vez de sostenerlas, debe corregir su error para establecer la verdadera doctrina legal. La una afirmación es que el auto en que se niega la alzada no es apelable, sino que contra él no hay más recurso que el de hecho. Como se ha patentizado con los artículos 885, 886 y 888, todo auto es apelable: esta es la regla general, mientras no diga la ley lo contrario, con respecto á una sentencia ó auto, como sucede, por ejemplo, con las sentencias que se dictan en última instancia. El Código no ha establecido el recurso de hecho como único para remediar un auto adverso, sino como subsidiario para el caso en que se niegue la apelación, y ésta es el recurso natural y ordinario concedido en primer lugar.

La otra afirmación es la que parece confundir la alzada con el recurso de casación. La alzada ó apelación tiende, es verdad, á corregir los errores ó desaciertos del Juez inferior, por medio del Superior, á quien se pide justicia; pero este recurso tiene por condiciones precisas dos requisitos: primero, que no haya cesado, en el asunto de que se trata, la jurisdicción del inferior; y segundo, que sea lícito al Superior el conocimiento del mismo asunto, por apelación ó en nueva instancia. Más es evidente que la Legislación colombiana no reconoce tercera instancia en ningún asunto civil ni criminal, y que, cuando en la segunda se ha fallado definitivamente, no cabe alzada ó recurso de apelación. ¿Qué cosa es, pues, la casación? No es una apelación, puesto que el asunto está definitivamente fallado y la autoridad del Juez inferior ha concluído; es un recurso especial, no una tercera instancia,—tan especial y particular como el de *revisión*, como el de *nulidad* en causas militares,—que tiene un objeto determinado y una tramitación singularísima. Si el legislador hubiera querido que la casación fuese la misma cosa que la apelación, ni habría exigido formalidades especiales para aquel recurso, ni habría determinado con precisión los casos en que puede ser entablado y los motivos en que debe fundarse. Le hubiera bastado decir que en todo caso en que se quisiese entablar la casación se procediese como en la apelación. El Código Judicial tenía establecida la apelación, y podía mantenerla y ampliarla cuanto se quisiese; y sin embargo, el legislador constituyente creyó necesario instituír el recurso de casación, como cosa más alta y trascendental que la apelación, y lo instituyó en el artículo 151 (inciso 1.°) de la Constitución de 1886. Después de reglamentada la casación por la ley 61 de 1886, esta ley ha quedado incorporada en el Código Judicial, y en éste ocupa lugar muy distinto del que corresponde á las apelaciones, y los procedimientos establecidos para casaciones y apelaciones, son muy diferentes.

5.ª De lo dicho se desprende que el auto proferido por el Tribunal Superior de Pasto en que negó el recurso de casación, es apelable y debe ser considerado por la Corte, no como un auto dictado en segunda instancia, pues esta segunda instancia estaba concluída, sino como auto dictado en la tramitación de un recurso de casación, que es cosa muy distinta y diferente. Y como, según lo expresamente prevenido por el artículo 245 del Código Judicial (*Disposiones varias* del Libro primero), el Superior que revoca ó reforma un auto del Inferior debe dictarlo tal como debe quedar, á fin de que el último no tenga que volver á resolver, es obvio que la Corte debe dictar su auto revocando el que negó la casación y concederla, y consiguientemente debe, en seguida, substanciar y decidir este mismo recurso de casación, sin caer en el círculo vicioso de devolverlo al Tribunal de Pasto para que lo conceda; lo que es innecesario si se han llenado las formalidades legales.

En conclusión, y por las razones expuestas, el infrascrito Magistrado salva su voto con respecto al auto propuesto por el Magistrado señor doctor Martínez y adoptado por la mayoría de la Corte.

José M. Samper—Martínez—Calderón—Fernández—Morales—Noguera—Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

El Magistrado doctor Fernández manifestó que, por estar en desacuerdo, en parte, con las opiniones y con la resolución de la mayoría de la Corte, salva su voto en lo relativo al punto en que difiere, en los siguientes términos:

Conviene el infrascrito en que la casación equivale á una tercera instancia que la ley establece para que la Corte pueda revisar, en determinados casos, los fallos pronunciados por los Tribunales, ya enmendando el agravio inferido por ellos, ya sentando doctrina que tienda á uniformar la Jurisprudencia. Opina que los recursos de casación y apelación tienen por objeto facilitarles á las partes perjudicadas por la decisión del Inferior, que se ocupe de ella el Superior para que la confirme, la reforme, la revoque ó la anule, sin que se pueda reconocer otra diferencia sino la de que la apelación es aplicable á mayor número de casos y abarca un radio más amplio que la casación; pues de ésta no puede hacerse uso sino en determinados casos y observando una tramitación especial designada por la ley; pudiendo establecerse que el término *apelación* es genérico y comprende á la especie *casación*, sin que el mayor ó menor número de casos en que se haga uso del uno ó del otro recurso, ni la distinta substanciación que corresponda á cada uno, cambie la esencia ni los efectos que la ley les asigna, los cuales consisten en que la decisión del Superior respectivo prevalezca sobre la que ha motivado el recurso.

Siendo esto así, no queda duda de que lo que la ley diga respecto de la apelación debe aplicarse á la casación, salvas las disposiciones espociales relativas á cada uno de los recursos y que deben reputarse como excepciones hechas á las reglas generales.

Dedúcese de aquí que así como en los casos en que se niega un recurso de apelación, no permite la ley que se apele el auto que contiene la negativa, sino que faculta al perjudicado para que ocurra de hecho al Superior, cuando se niega un recurso de casación, asimilable, como se ha dicho, á la apelación, no le queda á la parte afectada con la negativa otro remedio que ocurrir de hecho para que la Corte repare el mal que se le haya causado con la decisión del Tribunal. Pero una vez que la Corte ha reconocido que la casación es una especie de apelación, debe cumplirse, cuando se le haya dado una tramitación defectuosa, lo que respecto de ésta determina el artículo 245 del Código Judicial que dice así: "Siempre que un Juez Superior, ya sea la Corte Suprema ú otra entidad judicial, conozca de algún asunto por apelación ó consulta, y haya de reformar ó revocar un auto ó sentencia del inferior, por no estar ajustado á las leyes, ya sea en cuanto al procedimiento, ya en cuanto á la apreciación de pruebas ó á la aplicación del derecho, dictará el auto ó sentencia el Superior de modo que en éstos se resuelva el punto, y no tenga que volver á decidirlo el Juez inferior."

En el presente caso el Tribunal no debió conceder recurso de apelación del auto por el cual se negó la admisión del de casación, pues á la parte agraviada no le quedaba otro camino, cuando se le negó el recurso, sino el de ocurrir de hecho para ante la Corte; se adoptó, es verdad, un procedimiento que no estaba ajustado á las leyes, pero cumpliendo con el espíritu y con la letra del artículo transcrito, cree el que suscribe que al revocar la Corte, como lo ha hecho, el auto apelado, debió decidir si en el fondo era ó nó casable la sentencia que ocasionó el recurso, *de modo que se hubiera resuelto el punto*, en vez de orde-

nar que se le devuelva el expediente al Tribunal é indicarle el giro que el negocio deba tomar. En esta parte de la resolución es en la que no está de acuerdo el que suscribe con la mayoría de la Corte, y es á ella á la que se refiere este salvamento.

El artículo 245 citado le deja amplio campo al Poder Judicial para que, á fin de evitar demoras en la secuela de los juicios, perjudiciales y gravosas siempre para los litigantes, pueda y deba resolver los negocios de que conozca por apelación ó consulta, con prescindencia de algunas irregularidades en el procedimiento que no afectan el fondo del negocio que haya llegado á su conocimiento.

Francisco A. Fernández—Martínez—Samper—Calderón—Morales—Noguera—Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Octubre veintiuno de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia ha remitido en consulta el auto que profirió con fecha 3 de Agosto del presente año, por el cual sobresee en la instrucción iniciada contra José Cupertino Lara, como Juez suplente del Circuíto de Sopetrán, por atribuírsele el hecho de haber dado lugar á algunas demoras en un juicio civil.

En el Juzgado del Circuíto de Sopetrán se formó concurso de acreedores á los bienes de Manuel S. Córdoba. Al mismo tiempo, en el Juzgado de Distrito de Sopetrán, se seguían tres ejecuciones contra el mencionado Córdoba; el sindicado, como Juez suplente del Circuíto, fué quien declaró formado el concurso, pero no ordenó expresamente que las tres ejecuciones de que se ha hablado se acumularan al juicio principal. En esta omisión hace consistir el denunciante el cargo de morosidad premeditada ó maliciosa contra el Juez sindicado; pues afirma que, por consecuencia de no haberse pedido los juicios que se hallaban en el Juzgado inferior, fué rematada una finca por uno sólo de los acreedores, con perjuicio de los demás y del mismo denunciante.

Dos son los hechos que pueden tenerse en cuenta como circunstancias infirmativas del cargo, y de que se ha hecho mérito, tanto por el Tribunal, como por el señor Procurador:

1.ª El auto que declaró formado el concurso, y en el cual se notó la omisión indicada, fué notificado personalmente al concursado cuatro días antes de que se rematara la finca en el Juzgado del Distrito; de suerte que pudo muy bien reclamar del auto ó proponer lo que creyera más favorable á sus derechos, y sin embargo nada dijo;

2.ª El Juez, en el auto de formación del concurso, después de enumerar las diligencias que debían practicarse, concluyó diciendo que debían practicarse todas las demás que exigían las leyes. Ahora bien: como la ley exigía la acumulación de los otros juicios, ésta quedó implícitamente ordenada, y al concursado le habría bastado suministrar papel y exigir el pedimento de los juicios.

Por lo expuesto, y de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto de sobreseimiento consultado.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial*, y devuélvase el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Francisco A. Fernández.—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A. Secretario.

En el mismo día notifiqué al señor Procurador el auto que antecede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Octubre veintisiete de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Se iniciaron estas diligencias por el Alcalde del Distrito de Sonsón, á excitación del Juez de aquel Circuíto, con el objeto de averiguar si el Fiscal principal del mismo, Nicomedes Botero, había cometido el delito de abandono del destino; y adelantada convenientemente la actuación, se dictó por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia el auto de veinticuatro de Septiembre del presente año, sobreseyendo en el procedimiento, el cual auto ha sido consultado con esta Superioridad.

Dada al asunto en esta segunda instancia la tramitación que la ley previene, y llegado el caso de resolver la expresada consulta, se considera para ello:

1.° Que el funcionario de que se trata solicitó del Alcalde del Distrito una licencia de treinta días, con fecha veintisiete de Mayo último, para separarse del destino, licencia que le fué concedida con prevención de que se llamara en su reemplazo al primer suplente, resolución que se notificó tanto al uno como al otro empleado, según consta á fojas 2.ª vuelta de la actuación; y

2.° Que de la copia que obra á foja 4.ª vuelta, expedida por la Secretaría de Gobierno de la República, resulta comprobado que el Fiscal Botero renunció el destino antes de haber terminado la licencia antes referida, renuncia que le fué admitida con fecha veintitrés de Junio de este mismo año; de todo lo cual resulta plenamente demostrado que el funcionario sindicado no ha incurrido en responsabilidad alguna á causa de la separación del destino de Fiscal que estaba á su cargo.

Por lo tanto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el concepto del señor Procurador general, confirma el auto consultado.

Notifíquese, cópiese en el libro respectivo, publíquese en la *Gaceta Judicial*, y devuélvase el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintiocho de los mismos notifiqué al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Octubre veintiocho de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Del presente sumario, remitido á esta Superioridad en apelación, por el Tribunal Superior del Magdalena, resulta que, sumariado el Juez de la Provincia del Sur, Buenaventura Clavijo, por el delito del abandono de su empleo, el Fiscal pidió que se declarase con lugar á formación de causa por los trámites extraordinarios, por infracción del artículo 389 del Código Penal que rige actualmente; pero el Tribunal, si bien declaró haber lugar á la causa, no lo hizo sino citando como infringido el artículo 346 del antiguo Código Penal, que regía en el extinguido Estado del Magdalena cuando se cometió el delito. De este auto, proferido el 16 de Agosto del presente año, apeló el Fiscal, para ante esta Superioridad, por cuanto no se definió el delito conforme al nuevo Código Penal, sino al antiguo, y no creyó que con esto se violase el artículo 26 de la Constitución. Concedióse la apelación en el efecto devolutivo, y, substanciado como ha sido el recurso, el señor Procurador general opina que debe confirmarse el auto apelado, y así lo solicita.

Como están plénamente comprobados los hechos, constando que el sindicado abandonó su empleo de Juez de la Provincia del Sur, en Diciembre de 1885, y la apelación sólo se refiere á la designación del Código y artículo penal aplicables, el punto es de puro derecho; y para resolverlo, la Corte considera:

1.° El texto del artículo 26 de la Constitución dice:

"Nadie podrá ser juzgado sino conforme á leyes preexistentes al acto que se impute, ante Tribunal competente, y observando la plenitud de las formas propias de cada juicio.

"En materia criminal, la ley permisiva ó favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia á la restrictiva ó desfavorable."

De aquí ha deducido el Fiscal del Tribunal Superior del Magdalena, qne la causa contra Clavijo debe seguirse conforme al nuevo Código Penal, por cuanto *juzgar* es *sentenciar*, y el auto por el cual se declara haber lugar á seguimiento de causa no juzga, no falla sobre la culpabilidad del procesado; y por cuanto el nuevo Código Penal es el que rige, conforme á la ley de unificación de la Legislación, sin más excepciones que las de los incisos 2.° y 3.° del artículo 380.

Considera la Corte que la opinión del Fiscal del Magdalena es errónea, porque el nuevo Código Penal no podía ni puede ser aplicado con efecto retroactivo, sino en el caso de que una disposición penal posterior sobre el mismo delito, sea permisiva ó favorable. Un auto de proceder es un fallo, un juzgamiento, siquiera no sea definitivo, sino iniciativo ó apertorio de la causa. Juzgar á una persona es seguirle juicio, y el juicio se compone de varias partes, entre ellas y muy esencial, el auto que lo manda abrir, convirtiendo el sumario en causa, proceso ó juzgamiento. La sentencia definitiva no es más que el fallo que pone fin al juicio; pero el individuo es *juzgado* por los Tribunales desde que se le abre juicio. Como el juzgamiento ha de hacerse conforme á la ley preexistente, no en lo tocante al procedimiento, pues en esto y en la jurisdicción es aplicable la ley nueva, sino en cuanto á lo substantivo, esto es, á la calificación del delito y á la pena que le corresponde; es claro que toda la cuestión se reduce á comparar los textos de los dos artículos penales: el 346 del Código del extinguido Estado del Magdalena, de 1874, bajo cuya vigencia se comotió el delito, y el 389 del Código Nacional adoptado en 1887.

Ahora bien, los dos artículos son absolutamente iguales, y la pena que en uno y otro se fija es una misma. Por lo tanto, no habiendo innovación favorable ó permisiva, no tiene aplicación en el presente caso el artículo 26 de la Constitución, que tiende á dar una garantía en lo tocante á la pena, y no á la clase de procedimiento que debe seguirse, el cual ha de ajustarse á la ley de la materia.

2.° Sería de todo punto irregular que se declarase con lugar á formación de causa conforme al artículo 389 del nuevo Código Penal, si el artículo aplicable, al pronunciarse la sentencia, debiera ser el infringido, esto es, el 346 del Código que regía en el Magdalena, cuando se cometió el delito de abandono del empleo. Esto equivaldría á asegurar la impunidad del acusado, puesto que no se puede condenar, en causas de responsabilidad, sino por el artículo ó cargo definido en el auto de proceder.

3.° Por último, ya la Corte ha decidido el punto, en auto proferido el 26 del presente mes, con motivo de otra apelación interpuesta, en negocio enteramente idéntico, por el Fiscal del Tribunal del Magdalena; y lejos de haber razón para modificar aquella decisión, la hay para confirmarla.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, de acuerdo con lo pedido y demostrado por el señor Procurador general, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto apelado.

Notifíqnese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintiuueve notifiqué al señor Procurador el auto anterior.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, veintiocho de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Instruíase en el Juzgado de lo criminal del Circuíto de Santo-Domingo, en el extinguido Estado de Antioquia, un sumario por homicidio de que fué víctima Florentino Bazá, y Rodolfo Mejía C., como Juez, profirió auto, el 7 de Septiembre de 1882, por el cual declaró con lugar á seguimiento de causa contra Isidoro y José A. Cárdenas, por el delito de homicidio; con respecto á otro sindicado, Torcuato Cárdenas, sobreseyó absolutamente, declarando no ser el caso de convocar Jurado de acusación; y también declaró terminado el procedimiento en cuanto á Manuel A. Cárdenas S. Añadió que el juicio se adelantase conforme á la tramitación de aquellos en que intervenía el Jurado, y que se consultase el auto con el Tribunal Superior, por lo tocante al sobreseimiento.

Como los delitos de homicidio pasaron á ser del conocimiento de los Jueces Superiores, el del Distrito de Antioquia, conforme á la ley 61 de 1886, aprehendió el conocimiento del expresado sumario; y como encontrara pendiente la consulta, y aun la apelación parcial del Agente Fiscal, relativas al auto de que se ha hecho mérito, dispuso que dicho sumario fuese elevado al Tribunal. Asimismo, como parecía resultar que el Juez de Santo-Domingo y su Secretario habían faltado á su deber, se mandó compulsar copia de lo conducente respecto á cada uno. El Tribunal Superior dispuso la ampliación, y ésta suministró las siguientes pruebas:

Primera. Copias auténticas del acta de nombramiento de Mejía para el empleo de Juez de lo Crimiual en el Circuíto de Santo-Domingo, hecho por la Asamblea Legislativa en Marzo de 1882, y de la diligencia de posesión, tomada el 5 de Abril subsiguiente; y

Segunda. Cuatro declaraciones contextes de convecinos, rendidas en Santo-Domingo, sobre la buena conducta que había observado el Juez Mejía, en el ejercicio de sus funciones.

Además, en la copia que sirvió de cabeza del sumario consta que, á los dos días de haber dictado el Juez Mejía el auto que dispuso consultar y que fué apelado en parte por el Agente fiscal, informó oficialmente el Secretario que se habían fugado de la cárcel los sindicados reos Isidoro y José Antonio Cárdenas; y tres días después del informe (el 12 de Septiembre), dictó el Juez la providencia del caso, mandando librar requisitorias, etc.; con lo que el sumario permaneció en suspenso.

En vista de estos datos, el Tribunal Superior de Antioquia profirió auto de sobreseimiento el 12 de Septiembre del presente año, por cuanto el sindicado de delito de responsabilidad, Mejía C., tenía suspendido el sumario contra los Cárdenas, por la fuga de dos de éstos; y si los reos no habían sido notificados del auto de formación de causa, mal podía imputársele falta por no haber adelantado una apelación que, faltando los reos era baldía. No había, por lo tanto, delito de parte de Mejía; y así lo declaró el Tribunal, no obstante haberse hecho constar la prescripción, y haber pedido el Fiscal que por este motivo cesase todo procedimiento.

Consultado con esta Superioridad el auto del Tribunal, se ha substanciado el asunto, y el señor Procurador general es de concepto que se sobresea, por causa de prescripción, dado que, desde Septiembre de 1882, han transcurrido más de cuatro años que la establecen, puesto que no habría lugar á pena corporal.

Pero es evidente que la cesación de procedimiento por prescripción de pena no tiene lugar, sino cuando se ha cometido delito, y que si éste no existe, lo que debe declararse es la inocencia del sindicado, y nó que la acción está prescrita. Así, la Corte Suprema, reproduciendo las acertadas consideraciones del Tribunal Superior de Antioquia, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto de sobreseimiento consultado.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y nueve de los mismoo notifiqué al señor Procurador el auto anterior.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Juticia—Bogotá, Octubre veintisiete de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Francisco Groot, como apoderado sustituto de Bramma Hermanos, residentes en París, ocurrió á la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, reclamando el reconocimiento de la cantidad de mil trescientos sesenta y dos

pesos ($ 1,362), valor de doce cargas de mercancías que fueron expropiadas por los rebeldes en la guerra última, mercancías que estaban consignadas en los almacenes de la Compañía Unida en Barranquilla, por cuenta de los reclamantes.

La Comisión, por resolución del 14 de Julio del presente año, se declaró incompetente para decidir dicha reclamación por cuanto los señores Bramma Hermanos eran extranjeros, y de consiguiente, es al Ministerio de Relaciones Esteriores á quien competía ocuparse de ese negocio.

El Ministerio de Guerra, á donde fué elevado el asunto, ratificó en todas sus partes lo dispuesto por la Comisión, y una vez devueltos á ella los documentos, el apoderado de los reclamantes interpuso recurso de apelación, para ante esta Superioridad.

El apoderado, en su libelo de demanda, dijo que renunciaba el carácter de extranjeros, que tenían sus poderdantes, para el efecto de que el punto fuera resuelto de conformidad con la ley 44 de 1886.

Es verdad que, tratándose de indemnizaciones, el carácter de extranjeros lleva consigo ciertos privilegios en cuanto al procedimiento y en cuanto á la forma de pago, privilegios que bien podrían renunciarse; pero también lo es que á esas concesiones indicadas en los artículos 1.° y 10 de la ley 10 de 1886, está unida una condición ó salvedad desfavorable para los extranjeros, la cual está consignada en el artículo 3.° de la misma ley, que dice:

"La Nación no es responsable de un modo absoluto por los daños y las exaciones causadas á extranjeros por los rebeldes."

Como se ve, hay en la ley citada privilegios y gravámenes anexos al carácter de extranjeros; y por consiguiente, al renunciarse dicho carácter se renunciarían no sólamente los privilegios sino también los gravámenes, lo cual no puede hacerse legalmente. Así, pues, la renuncia hecha por el apoderado, no es en manera alguna aceptable, porque tiende á substraer á los reclamantes de la sanción del artículo 3.° citado.

Por otra parte, el artículo 4.° de la ley 44 de 1886, dispuso que el reconocimiento de los créditos procedentes de suministros, empréstitos y expropiaciones debía hacerse por una comisión compuesta de tres miembros nombrados por el Poder Ejecutivo; pero exceptuó expresamente los créditos de extranjeros, los cuales, dijo, debían reconocerse de acuerdo con lo dispuesto en la ley 10 del mismo año. Esta última ley, es pues, la que debe aplicarse de preferencia, por ser especial para el caso; y como el artículo 1.° de la dicha ley atribuye al Ministerio de Relaciones Exteriores el reconocimiento de los créditos de extranjeros, es á este Ministerio á quien incumbe privativamente dictar la decisión á que haya lugar.

En consecuencia, y no teniendo competencia la Comisión para conocer de reclamaciones de extranjeros, tampoco la tiene la Corte para ocuparse de los mismos asuntos en segunda instancia, por no pérmitirselo la ley 44 de 1886; y, de consiguiente esta Corporación resuelve abstenerse de dar decisión alguna en este caso, y dispone que se devuelva el expediente á la oficina de su origen.

Notifíquese, cópiese y publíquese en la *Gaceta Judicial*.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y nueve de los mismos se notificó al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Octubre veintisiete de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Administrador Nacional de Hacienda de Bucaramanga libró ejecución, en veinte de Abril de mil ochocientos ochenta y tres, en uso de la jurisdicción coactiva de que estaba investido, contra varios deudores al Tesoro Nacional, por derechos de consumo causados por introducción de sal marina en el Estado de Santander (hoy Departamento). Uno de los individuos contra quienes se dirigió la ejecución fué Vicente Uscátegui, deudor al Fisco por la causa expresada, de la suma de doscientos veintiséis pesos, y al notificársele el mandamiento ejecutivo consignó, para que se depositara, una suma igual á la demandada, y apeló para ante esta Superioridad del auto de ejecución, fundando el recurso en que las cargas de sal por las cuales se le cobraba el impuesto no estaban sujetas á éste, por haber sido introducidas en el Estado, como lo comprobaría, antes del primero de Septiembre de mil ochocientos ochenta y dos.

Otorgado el recurso en el efecto devolutivo, y dirigidas en copia á esta Suprema Corte las diligencias ejecutivas, han estado en suspenso desde el veintiocho de Julio de mil ochocientos ochenta y tres, por no haber suministrado Uscátegui, por sí ni por medio de apoderado, el papel timbrado necesario para continuarlas; omisión que ha venido á suplirse empleando papel común á cargo del apelante, en los términos del artículo 141 de la ley 57 del año en curso.

Vencida así la dificultad, procede la Corte á determininar el recurso, y para ello, considera:

1.° Que la ejecución se fundó en la copia del reconocimiento hecho á cargo de Uscátegui por el Recaudador del derecho de consumo, de ciento trece cargas de sal introducidas por él al Estado de Santander, y ese documento presta mérito ejecutivo, conforme al numeral 2.° del artículo 1,096 del Código Judicial;

2.° Que Uscátegui no interpuso el recurso por que el documento dejara de tener fuerza ejecutiva, ni por razón del empleado que libró la ejecución, sino fundándose en que las cargas de sal fueron introducidas en el Estado antes del primero de Septiembre de mil ochocientos ochenta y dos, cosa que no aparece de lo actuado y que no puede hacerse valer antes del tiempo señalado por la ley para proponer excepciones;

3.° Que lo alegado por Uscátegui, probablemente tiene por objeto excusarse del pago del derecho de consumo establecido por el artículo 7.° de la ley 46 de 1882 sobre la sal que se introdujera en el Estado de Santander hasta el último de Diciembre del mismo año, por haber introducido la suya antes de ponerse en vigor dicha ley; pero su solo dicho, en contradicción con el reconocimiento que ha motivado la ejecución, no puede servir de fundamento para revocar el auto ejecutivo.

Por tales consideraciones, la Corte Suprema, de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador general, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto apelado, con costas á cargo del apelante, Vicente Uscátegui, las cuales serán tasadas por el Secretario, comprendiendo en ellas el doble valor de tantos sellos de papel cuantas hojas de común se hayan empleado en la actuación y en esta sentencia, para que el ejecutante las haga efectivas y pase el valor del papel á la Oficina del ramo.

Hágase saber este auto, déjese copia de él, publíquese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

Con la misma fecha se notificó.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

ASUNTOS VARIOS.

PERSONAL DE LA CORTE.

El 29 de Octubre de 1887 tomó posesión del puesto de Magistrado principal el señor doctor Luis M. Isaza, y salió el señor doctor Fernández, quien lo ocupaba como suplente.

Ramón Guerra A., Secretario.

República de Colombia—Poder Judicial—Secretaría de la Corte Suprema de Justicia—Número 1,094—Bogotá, 31 de Octubre de 1887.

Señor Procurador general de la Nación—Presente.

El señor Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, por oficio de fecha 6 de los corrientes, número 60, comunica á la Corte que el señor Fiscal del Tribunal Superior de ese Distrito remitió á Usía la Estadística especial de dicho Tribunal, constante de 4 cuadros.

Lo que tengo el honor de participar á Usía como resultado de la solicitud que se ha hecho de tales datos.

Dios guarde á Usía.

Ramón Guerra A.

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL

Señores Magistrados.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar os remite el expediente formado contra Fermín Rosario, por el delito de abuso deshonesto, á fin de que la Corte dirima la competencia negativa suscitada entre dicho Tribunal y el Juez Superior de aquel mismo Distrito.

No obstante lo dispuesto por el artículo 698 del Código Judicial (edición de 1873), el Tribunal Superior de Bolívar, en sala de primera instancia, aceptó la competencia provocada por el Juez Superior del Distrito, " por el interés de que la Suprema Corte resuelva previamente si entre un Juez Superior del mismo Circuíto Judicial del Tribunal, al cual está aquél subordinado, y éste, puede ocurrir competencia como la provocada en el presente caso " (f. 85 vuelta).

Aunque no es de presumirse que ocurran con frecuencia competencias de esta naturaleza, ellas están previstas por el numeral 3.°, sección 3,ª del artículo 21 de la ley 61 de 1886, que atribuye á la Corte Suprema la facultad de dirimirlas; pero, contrayéndonos al caso presente, á él son aplicables las siguientes observaciones:

La legislación del extinguido Estado de Bolívar estableció para la administración de la justicia criminal jurados, llamados *provinciales*, que debían ejercer sus atribuciones con intervención de los Jueces de Provincia, y reunirse en las capitales de cada una de las diez provincias en que estaba dividido el Esta. do. La misma legislación instituyó lo que se llamó *Jurado de revisión*, que debía reunirse en la capital del Estado y ejercer sus atribuciones con intervención del Tribunal Superior.

El delito de abuso deshonesto, por que se procede en esta causa, era de la competencia del Jurado de revisión de Bolívar, y en tal virtud conoció del asunto el Tribunal Superior del Estado, hasta el día 14 de Abril último, en que el Tribunal del conocimiento se declaró incompetente para seguir actuando en juicio, por ser, en su concepto, el delito por que se procedía el mismo denominado con el nombre de *estupro* en la ley 61 de 1886, y estar atribuido su conocimiento en primera instancia á los Jueces Superiores de Distrito Jucicial.

Recibido el expediente por el Juez Superior de Bolívar, éste, á su vez, se declaró incompetente para conocer del juicio, alegando que la legislación aplicable al caso era la antigua de Bolívar, y que en ésta no estaba definido el delito de *estupro* ni lo está en el Código Penal adoptado. El mismo Juez cita en apoyo de su opinión el artículo 525 del Código Penal nacional de 1873, en el cual está definido el delito de estupro, y caracterizado por circunstancias que no han concurrido en el hecho ejecutado por Fermín Rosario.

Sin entrar á examinar las alegaciones de incompetencia en que se fundan el Juez y el Tribunal de la contienda, este Ministerio observa que, según el artículo 40 de la ley 153 del presente año, las leyes concernientes á la substanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar á regir, y la aplicación de esta regla basta para resolver la conpetencia suscitada.

Las disposiciones del capítulo 69 del Código Penal de Bolívar, vigentes en aquel Departamento al tiempo en que se perpetró el delito materia de la causa que se sigue contra Fermín Rosario, son semejantes á las contenidas en el capítulo 3.°,título 1.°, libro 4.° del Código Penal nacional vigente hoy en toda la República, y el delito de abuso deshonesto por que se juzga á Rosario está comprendido en esos capítulos de uno y otro Código.

Ahora bien, como el artículo 16 de la ley 143 del corriente año atribuye á los Jueces Superiores de Distrito el conocimiento de los delitos mencionados en el capítulo 3.° citado, del Código Penal nacional, que comprende el de abuso deshonesto, y debiendo esta ley aplicarse de preferencia á las anteriores que dieron lugar á la duda, queda resuelto *ipso jure* el punto de jurisdicción que es el objeto de la competencia que vais á dirimir.

De acuerdo con lo expuesto, el infrascrito es de concepto que debéis resolver que al Juez Superior del Distrito Judicial de Bolívar, corresponde el conocimiento de la causa criminal seguida contra Fermín Rosario.

Bogotá, 14 de Septiembre de 1887.

CARMELO ARANGO.

Señores Magistrados.

Con fecha 18 de Mayo último y á petición del señor Jesús María Gutiérrez, el Juez 4.° del Circuíto de Bogotá libró orden de pago por la vía ejecutiva á favor del peticionario y en contra de las señoritas María Josefa y Cristina Mateus y del señor Juan Nepomuceno Mateus, en su doble carácter de deudores personales é hipotecarios del capital de $ 42,300 é intereses estipulados, según contrato de mutuo celebrado en Bogotá el día 3 de Marzo de 1886.

Surtida la notificación del auto ejecutivo, el apoderado general de los ejecutados, doctor Emiliano Restrepo E., apeló de él, y el recurso le fué concedido para ante el Tribunal Superior del Departamento de Cundinamarca.

Como en el curso del juicio hubiese cambiado la jurisdicción, pasando á ser nacional, por consecuencia de una tercería coadyuvante hecha por y admitida al Banco Nacional, el Tribunal, por auto de 8 de Agosto último, se declaró incompetente para decidir el recurso interpuesto, y dispuso la remisión del expediente á esa Superioridad.

Debiéndose contraer mi dictamen al mérito jurídico del auto apelado, debo hacer presente, ante todo, que dicho auto se dictó por Juez competente y en fuerza de una escritura pública otorgada ante el Notario segundo del Círculo de Bogotá, respecto de la cual se llenó la formalidad del registro y la de la anotación de la hipoteca por ella constituída.

Esa escritura no ha sido cancelada, y, por lo tanto, debe considerarse subsistente, mientras no se pruebe y decida lo contrario, la obligación expresa, clara y de plazo cumplido, garantizada con ella, de pagar la cantidad líquida á que se contrae la ejecución.

Ahora bien: es indudable que un documento que reúne las condiciones apuntadas trae aparejada ejecución (artículo 855 del Código Judicial de Cundinamarca y 1,011 del id. de la Nación); de suerte que el funcionario ejecutor debe reconocerle ese mérito, sean cuales fueren, por otra parte, las circunstancias á virtud de las cuales haya podido extinguirse ó modificarse la obligación consiguiente, pues tales circunstancias, antes que oponerse á que se libre el mandamiento ejecutivo, requieren, para ser apreciadas y decididas debida y convenientemente, que el juicio se formalice y se adelante hasta el estado en que se les puede hacer valer como excepciones.

En suma, si contra el documento que ha de servir de recaudo ejecutivo no se puede alegar falta de registro y anotación, en los casos en que la ley exige tales formalidades, ó de reconocimiento, cuando dicho documento es privado y no ha sido registrado, etc. etc., tal documento prestará mérito ejecutivo, hasta tanto que no se compruebe, haciendo uso de las excepciones á que haya lugar, la no existencia ó extinción de la obligación que por medio de él se trata de hacer efectiva.

Por lo demás, es patente la inconveniencia que habría en cortar la ejecución, por consecuencia de alegaciones que afectan substancialmente la obligación misma, sin que hayan precedido para ello los trámites, probanzas y debates consiguientes al artículo de excepciones, el cual tiene primariamente por objeto suplir la insuficiencia del procedimiento breve y sumario que corresponde al juicio ejecutivo.

A virtud de lo expuesto, me abstengo de entrar en la apreciación jurídica de las alegaciones en que el señor apoderado de los ejecutados se funda para pedir la revocatoria del auto ejecutivo, pues estimo que tales alegaciones, dirigidas en su mayor parte á probar la nulidad de la escritura que sirvió de base á la ejecución, no deben ser consideradas y decididas, sino mediante el correspondiente artículo de excepciones, entre las cuales puede proponerse la de *nulidad del instrumento ejecutivo*, que no en vano es de las que se expresan en el artículo 1,053 del Código Judicial.

Para tales efectos, si juzgareis que á ellos pudiese haber lugár, os pido que confirméis el auto ejecutivo materia de la apelación.

Bogotá, 27 de Septiembre de 1887.

CARMELO ARANGO M.

BOGOTÁ.—IMP. DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 45

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 12 de Noviembre de 1887.

CONTENIDO.

PÁG.

ACUERDOS DE LA CORTE.

Acuerdo número 103, relativo á una consulta del Juez del Circuito de Santander (Departamento del Cauca)..... 353
Id. número 104, id. á otra id. del Juez de la Provincia del Sur (Departamento) del Magdalena..... 354
Id. número 105, relativo á una competencia negativa mal preparada "
Id. número 106, id. á una consulta del Juez del Circuito de Sugamuxi (Boyacá)..... "
Id. número 107, id. á una nota de S. S. el Ministro de Gobierno..... "
Id. número 108, id. á una consulta del Tesorero Municipal de Bochalema (Departamento de Santander)..... 355

REBURSOS DE CASACION Y DE HECHO

Reproducción de un fallo de la Corte publicado en el número 44 de esta *Gaceta*..... "

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CRIMINALES

Absolutiva, en la causa seguida al Juez de Circuito Alejandro López Caro..... "

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Sobre cesación de todo procedimiento en una causa, por prescripción 356

NEGOCIOS CIVILES.

Confirmatorio de un auto ejecutivo apelado... 357

ASUNTOS VARIOS

Diligencias de Visita..... "

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL

Relativas á diversos sumarios 358
Id. á la demanda propuesta por José Miguel de Paz contra la Nación "
Id. á un juicio sumario por demora..... "
Id. á una tercera instancia en juicio sobre minas..... 359
Id. á un sumario seguido contra el señor Prefecto Salustiano Chaparro..... 360

EDICTOS.

Nota y Edicto..... "

GACETA JUDICIAL.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

ACUERDO NUMFRO 103.

En Bogotá, á veintiocho de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida en Sala de Acuerdo la Corte Suprema con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, se dió lectura, de orden de S. Señoría el Presidente, á una nota de fecha 4 de los corrientes, número 186, en que el señor Juez del Circuito de Santander, en el Departamento del Cauca, consulta á la Corte los siguientes puntos:

1.° En el término de horas que señalan los artículos 1,644, 1,723, 1,790, 1,791 y otros del Código Judicial se comprenden las horas de la noche?

2.° Cuando contra un mismo individuo se sigan dos ó más causas por distintos delitos, como el de homicidio, de la competencia del Juez Superior, el de heridas atribuído al Juez del Circuito, y el de hurto de una cabeza de ganado menor, de que conoce el Jefe de Policía, se remiten los procesos al Juez Superior para que los acumule y avoque su conocimiento?

3.° Cuando un individuo hurte dos ó más cabezas de ganado menor, cuyo valor no exceda de veinte pesos, y una de ganado mayor estimada en menos de esa suma, corresponde el conocimiento de esas causas al Juez del Circuito, ó al Municipal respectivo?

4.° Los Jueces de Circuito están directamente subordinados á los Jueces Superiores de Distrito Judicial, y se extiende á ellos la prohibición que para suscitar competencia establece el artículo 772 del Código Judicial?

El Magistrado doctor Sanclemente, á cuyo estudio pasó, en virtud de repartimiento, la nota que contiene los cuatro puntos consultados, sometió á la consideración de la Corte el siguiente proyecto de resolución:

"Disponiendo el artículo 515 del Código Judicial que los términos de horas empiecen á correr desde la siguiente á la en que se haga la respectiva notificación, y los de días desde el siguiente al en que tenga lugar la notificación, y no permitiendo ese artículo ni ninguno otro que dichos términos se interrumpan durante las horas de la noche, es claro que los de 24 horas (un día), fijados en los artículos 1,644, 1,723 y 1,791 del Código citado, son continuos, y no se suspenden sino en los días feriados ó de vacantes y en los demás casos excepcionales mencionados en el artículo 508 del Código Judicial. En consecuencia, debe así resolverse el primer punto consultado.

"El segundo está resuelto en los artículos 103 y 104 de dicho Código, según los cuales los Jueces Superiores de los Distritos, llamados á conocer de los delitos mencionados en el artículo 102, son también competentes para conocer de cualesquiera otros delitos *que estén comprobados en la misma actuación* y de los cuales sean ó puedan ser responsables unas mismas personas, y de los demás delitos, es decir, de los que no están comprobados en la misma actuación, conocen los respectivos Jueces de Circuito ó Municipales, según el caso; y terminantes como son estas disposiciones, no es dado á los Jueces que se acaban de mencionar remitir al Superior del Distrito, después de pronunciados los respectivos autos de enjuiciamiento, los procesos que les están atribuídos, porque en materia de jurisdicción no pueden los Jueces apartarse ni una línea de lo dispuesto expresamente por la ley.

"A facilitar la resolución del tercer punto viene el artículo 207 de la ley 153 del año en curso, concebido en estos términos: 'El castigo de hurtos y estafas de menor cuantía (*cosa* cuyo valor no exceda de veinte pesos ó una sola cabeza de ganado menor), es de la competencia de la policía,"disposición que manifiesta que, por regla general, el conocimiento de todo hurto ó estafa que no pase de veinte pesos, corresponde á la policía, y también el de una sola cabeza de ganado menor, cualquiera que sea su valor. Y no puede ser de otra manera, porque la palabra *cosa*, que emplea el artículo, lata como es, incluye todo lo corporal, mueble ó semoviente, cuyo valor no exceda de veinte pesos; y siendo así, la frase contrapuesta 'ó una sola cabeza de ganado menor,' no tendría explicación, comprendida como está en la palabra *cosa*, si no se refiriera únicamente al valor, sea cual fuere; de lo cual se deduce que toca á la Policía conocer, en general, de todo hurto ó estafa de cosa cuyo valor no exceda de veinte pesos, y aun de los que pasen de esa suma, si se trata de una sola cabeza de ganado menor.

"Por lo que hace al cuarto punto, basta observar que aunque los Jueces Superiores tienen jurisdicción en todo el Distrito, y los de Circuito sólo la tienen en éste, no por esto los últimos están subordinados á los primeros, ya porque la ley no ha establecido esta sujeción, y ya porque las atribuciones de unos y otros son distintas y las ejercen independientemente, sin que en ningún caso los actos de los Jueces de Circuito estén sometidos á los Jueces Superiores de Distrito. A confirmar esto

viene el artículo 112 del Código Judicial, que dice así: 'Los recursos que conforme al Código Judicial concedían los Jueces de Circuíto para ante la Corte Suprema, serán concedidos para auto el respectivo Tribunal de Distrito, *que es su inmediato Superior*. En consecuencia, la prohibición del artículo 772 del Código Judicial no comprende á los Jueces Superiores de Distrito y á los de Circuíto, y puede haber entre ellos competencia afirmativa ó negativa, cuando ocurran casos que las motiven."

La Corte aprobó unánimemente lo propuesto por el señor Magistrado ponente, y dispuso que se comunique al señor Juez del Circuíto de Santander, como resolución de los puntos consultados por él; y terminado con esto el Acuerdo, lo firman los señores Magistrados conmigo el Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Francisco A. Fernandez—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 104.

En Bogotá, á treinta y uno de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, se dió lectura á un telegrama del señor Juez del Circuíto de Aguachica, de la Provincia del Sur del Departamento del Magdalena, fechado en 22 de los corrientes, y en el cual consulta si puede considerarse como delito de envenenamiento el hecho de pescar con *barbasco;* y el señor Magistrado doctor Sanclemente, á quien se repartió tal consulta, propuso la siguiente resolución, que fué unánimente adoptada:

"Dígase al señor Juez del Circuíto del Sur en el Departamento del Magdalena, en respuesta á su telegrama fechado en Aguachica el 22 del corriente mes, que la facultad concedida á la Corte Suprema por el artículo 116 de la ley 57 del año en curso, es para resolver las dudas que ocurran en la inteligencia de las leyes sobre organización y procedimientos judiciales, pero nó las relativas á la legislación substantiva, y que, en consecuencia, no se considera autorizada para declarar si será ó nó delito el hecho sobre que versa la consulta."

Con lo cual se terminó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados y el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 105.

En Bogotá, á dos de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, se constituyó la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, con el objeto de tomar en consideración la competencia provocada por la Mayoría del Batallón 7.° de Carabobo, estacionado en Puente Nacional, al Juez del Circuíto de Ubaté, sobre conocimiento en el sumario instruído contra Aurelio Cruz, por los delitos de deserción y hurto. El señor Magistrado doctor Isaza, á quien tocó en repartimiento este asunto, presentó el siguiente proyecto de resolución:

"Vistos:—Se ha instruído este sumario por el Sargento Mayor encargado del detall del Batallón Carabobo número 7.°, con el objeto de averiguar quién ó quienes pueden ser responsables del hurto de la suma de cuatro mil setecientos noventa y cuatro pesos, setenta y cinco centavos ($ 4,794-75), que conducía de Zipaquirá á Puente Nacional el Teniente José Ramón Rueda, Habilitado del Batallón mencionado, delito verificado en Ubaté en la noche del diez de Mayo último, al mismo tiempo en que se verificó la deserción del Sargento 2.° Aurelio Cruz, segundo Comandante de la Comisión encargada de conducir la suma expresada.

"Adelantadas las diligencias sumarias con la actividad que el caso requería, el funcionario de instrucción, contra su parecer, y sólo por conformarse con el dictamen del Auditor de Guerra de la tercera División, determinó, por auto del 30 del mismo Mayo, enviar la actuación al Juez del Circuíto de Ubaté en lo criminal, sin expresar claramente que provocaba competencia negativa. El Juez referido entendió, por los antecedentes del asunto, y especialmente por los argumentos del Auditor de Guerra, que tácitamente se le provocaba competencia negativa: la aceptó, por resolución de cuatro de Julio último, y ordenó la remisión de los autos á esta Corte para la decisión de la competencia.

"Basta la breve relación que precede y la lectura del artículo 780 del Código Judicial, aplicable á los negocios criminales, en virtud de lo que ordena el 1,738 del mismo Código, para comprender al punto que propiamente no se ha provocado competencia y que no se ha dado al incidente la tramitación legal.

"Si el funcionario de instrucción se cree incompetente, debe expresar en un auto las razones en que se funda para creer que le corresponde á otro y remitirle los autos, declarando á la vez que si aquel no se cree competente, provoca la competencia negativa.

"No estando legalmente substanciado este incidente, y sobre todo, no habiéndose provocado la competencia de un modo expreso y arreglado á las fórmulas legales, la Corte no puede entrar en el fondo de la cuestión para resolver de una vez cuál es el empleado que debe seguir conociendo del asunto.

"Por lo tanto, la Corte, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, dispone que se devuelvan estas diligencias al Juez del Circuíto de Ubaté en lo criminal, para que les dé el curso legal."

Discutido el anterior proyecto de resolución, fué aprobado por el voto unánime de los señores Magistrados, quienes dieron por concluído el presente Acuerdo, que firman con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER.—*Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 106.

En Bogotá, á dos de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, con el objeto de considerar la consulta de que se hablará en seguida,—el señor Magistrado doctor Morales, á quien tocó en repartimiento tal consulta, propuso lo siguiente:

"Consulta el Juez del Circuíto de Sugamuxi, en el Departamento de Boyacá, cuál es el Juez competente para conocer del delito de heridas cuando la incapacidad del ofendido es de diez días.

"En los artículos 508, 517 y 518 del Código Penal adoptado están fijados los casos en que son competentes los Jueces municipales para conocer del delito de heridas; y de consiguiente, fuera de dichos casos, son compententes los Jueces de Circuíto para conocer de los expresados delitos.

"Así resuelve la Corte la consulta indicada.

"Comuníquese, cópiese y publíquese."

Este proyecto fué aprobado por unanimidad, con lo cual se concluyó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 107.

En Bogotá, á tres de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, se ocupó en considerar una nota de Su Señoría el Ministro de Gobierno, número 3,404, sección 1.ª, de 24 de Octubre último, en la cual solicita se reconsidere el Acuerdo celebrado por la Corte en 13 del mes próximo pasado, "sobre cómputo de penas á los reclusos."

El señor Magistrado doctor Morales, á quien pasó en repar-

timiento este asunto, por haber conocido del principal, presentó el siguiente proyecto, que fué unánimemente adoptado:

"En el Acuerdo de la Corte, de fecha trece de Octubre de este año, se estableció con claridad, que en el caso concreto á que se refería la consulta del Prefecto de la Provincia del Centro, en el Departamento del Tolima, no tenía aplicación el artículo 1,937 del Código Judicial Nacional, por haberse hecho en oportunidad el cómputo de que trata el artículo citado; y que una vez impuesta la pena, cualquier solicitud de los reos envolvía una pretensión sobre rebaja, para resolver la cual no estaba facultada la Corte.

"En consecuencia, ésta Corporación no halla motivo para reconsiderar el Acuerdo á que se ha hecho referencia.

"Dígase así á Su Señoría el Ministro de Gobierno, en respuesta á su nota de 24 del mes próximo pasado.

"Cópiese y publíquese en la *Gaceta Judicial*."

Con lo cual se concluyó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER——*Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 108.

En Bogotá, á cuatro de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, constituída la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, se ocupó en considerar la siguiente consulta hecha por el Personero municipal de Bochalema, Departamento de Santander, en telegrama de 31 de Octubre, que dice así:

"¿Juez Municipal aquí nombrado interinamente por Alcalde en Septiembre último, funciona legalmente?"

El Magistrado doctor Calderón, á quien tocó tal asunto en repartimiento, propuso la siguiente resolución que fué aprobada por unanimidad:

"La consulta que hace el Personero municipal de Bochalema está resuelta por la vigencia de las leyes, y no puede haber duda alguna.

"El artículo 116 de la ley 61 de 1886, atribuyó el nombramiento de Jueces municipales á los Concejos municipales, pero esta atribución quedó abrogada por el artículo 9.° de la ley 143 del presente año, por la cual se adiciona y reforma la 61 de 1886,—que atribuye el nombramiento de los Jueces municipales á los Tribunales Superiores de Distrito. En consecuencia, no hay duda que resolver en el presente caso.

Comuníquese y publíquese."

Con lo cual se terminó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

RECURSOS DE CASACIÓN Y DE HECHO.

Se reproduce esta sentencia por haber salido con algunos errores susbtanciales en el número anterior.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Octubre veintisiete de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Tribunal Superior del Distrito judicial de Pasto dictó auto, con fecha veinticinco de Julio próximo pasado, por el cual niega el recurso de casación interpuesto en el juicio civil seguido por Angel María Delgado y Francisco Recalde, contra Rafael Erazo Meléndez, por suma de seis mil quinientos pesos y cuatro reales de á ocho décimos, con sus réditos legales.

Con fecha veintisiete de Julio del mismo año, Matías Argos, procurador especial de Rafael Erazo Meléndez, interpuso el recurso de apelación contra dicho auto para ante esta Suprema Corte, y el Tribunal, por auto de fecha veintiocho del mismo mes, concedió la apelación. Por tal motivo han venido los referidos autos á esta Superioridad.

La Corte, al ocuparse en este asunto, no entra á considerar las razones, buenas ó malas, en que el Tribunal se apoyara para negar el recurso de casación, ni entra á estimar la legalidad de esos fundamentos. Se ocupará únicamente en lo relativo al procedimiento y á la forma en que el expediente ha venido, porque esto sirve de base á la resolución que haya de dictarse.

La regla general en materia de apelaciones es ésta: de toda sentencia definitiva ó de toda interlocutoria que agravie á una parte y que no sea reparable por la definitiva, puede ésta apelar para ante el inmediato superior; y si la apelación se le niega, no le queda otro camino que ocurrir de hecho. Así es y así debe ser, porque el recurso de hecho es un remedio subsidiario contra la negativa del Juez inferior, que suple á la apelación, como que el Superior lo substancia y decide; y si lo admite, entra á conocer y resolver en el punto primeramente apelado. Si así no fuera, resultaría una de dos cosas: ó el recurso de hecho no tendría jamás aplicación alguna, si pudiera apelarse del auto que niega la alzada; ó existirían simultáneamente dos recursos que se excluyen: el de apelación y el de hecho.

Ahora bien: el recurso de casación es alzada, es apelación, es ocurso al Superior, solicitando reparación ó enmienda; es, en puridad de verdad, aun cuando no tenga tal nombre, una tercera instancia, puesto que la ley lo ha establecido para decidir acerca de lo resuelto en la segunda. Siendo apelación, es evidente que está comprendido en la regla general de las apelaciones; y si el Tribunal que hubiera de permitirlo lo niega, es evidente también que á la parte agraviada no le queda sino el recurso de hecho; y así lo ha resuelto esta Corte yá en casos análogos.

Esto no quiere decir que la apelación indebidamente concedida en el presente juicio, quede sin enmienda, ni que la parte recurrente no pueda todavía entablar el recurso de hecho, pues que su derecho está latente, en virtud de habérsele concedido la alzada.

Por lo expuesto, para devolver la jurisdicción al Tribunal, y para que, sin menoscabo de la justicia, pueda conceder á la parte el recurso que aún le queda, si ella quisiere emplearlo; se revoca el auto de veintiocho de Julio último, volviendo el expediente al Tribunal de Pasto, como así se dispone.

R. Antonio Martínez.—Firmo en cumplimiento de mi deber, pero salvando mi voto, *José M. Samper*—Firmo en cumplimiento de mi deber, pero salvando mi voto.—*Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

En el salvamento de voto del señor Magistrado doctor Samper deben leerse los dos primeros párrafos así:

"El señor Magistrado doctor Samper manifestó que estaba de acuerdo con lo substancial del proyecto de auto redactado por el señor Magistrado ponente, doctor Calderón, en tanto que disentía de la redacción y decisión propuesta, en nombre de la mayoría de la Corte, por el señor Magistrado doctor Martínez; y para fundar su concepto, hizo las siguientes observaciones:

"1.ª Es cosa clara é incontrovertible que, cuando ante un Tribunal Superior se interpone el recurso de casación contra una sentencia definitiva, el Tribunal no tiene autoridad *alguna* para resolver sobre si el caso es ó nó de *casación*; esto es, si hay razón ó nó para interponer el recurso por las causales que lo hacen legal y admisible ante la Corte, conforme al artículo 38 del actual Código Judicial, ó si *se trata ó nó* de la aplicación dada en la sentencia á leyes de carácter general. Lo único que al Tribunal incumbe es examinar estos puntos:".....etc.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintiocho de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—En el juicio instaurado por Antonio Amaya Daza contra la Nación, para que se le restituyese y estableciese en la

propiedad y posesión de una cantidad de carbón de piedra extraída de los terrenos llamados "Cerrejón," y del terreno mismo, ocupado violentamente, por orden del Secretario de Hacienda del Gobierno de la Unión, y para que por este hecho se condenase al Tesoro Nacional en costas, y se le obligase á indemnizarle de los daños y perjuicios causados, pronunció sentencia el Juez del Circuíto de Padilla, con fecha 27 de Octubre de 1883, reconociendo que Antonio Amaya Daza tenía derecho de posesión y dominio sobre el terreno de "Cerrejón," ordenando la restitución de los terrenos y de la cantidad de carbón de piedra extraída de las minas de dicho globo, ó su equivalente en dinero. Condenó, además, á la Nación en costas y á indemnizar los daños y perjuicios que se hubieran causado al despojado.

El Fiscal del Circuíto apeló de esta decisión en lo relativo á la condenación en costas, y la consintió implícitamente en lo demás.

Al ocuparse la Corte del recurso interpuesto, observó que el Juez había dejado de consultar el fallo, que por ser adverso á la Nación era consultable, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 755 y 884 del Código Judicial de la Nación, y en la reforma 48 de la ley 46 de 1876. Ordenó que se pidiera el expediente original y, por sentencia de 17 de Septiembre de 1884, revocó en todas sus partes el fallo del Juez de primera instancia, previniendo que se pusiera al repartimiento copia de lo conducente para averiguar la responsabilidad en que hubiera podido incurrir el Juez del Circuíto de Padilla, Alejandro López Caro.

Preparada la documentación del caso, declaró con lugar á seguimiento de causa, por los trámites extraordinarios, el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Departamento del Magdalena contra el expresado Juez, por infracción de los artículos 415 y 428 del Código Penal de la Nación. Siguió el juicio su curso, y el Tribunal, por sentencia de 30 de Junio último, condenó al acusado, previa la calificación de la culpa en primer grado, á la pena de suspensión del empleo de Juez del Circuíto del extinguido Departamento de Padilla, al pago de cien pesos ($ 100) de multa, más las costas á favor del Tesoro Nacional, considerándolo responsable por la violación del artículo 415 del Código Penal Nacional, y absolviéndolo por la infracción del artículo 428 del id. id. Expresa la sentencia que, por no estar desempeñando López Caro el destino de Juez en el Circuíto donde se cometió la falta, se convierte la pena en la de quinientos cinco pesos ($ 505), así: ochenta y cinco por la multa á que se refiere el artículo 415, y cuatrocientos veinte pesos por lo relativo al 658 del Código Penal citado.

Notificada la sentencia al encausado, se substanció el recurso en la primera instancia en la forma prevenida por la ley, y habiendo pasado el expediente á esta Superioridad, se procede á fallar haciendo previamente las siguientes consideraciones:

Es un hecho que el Juez acusado cometió varias faltas al pronunciar la sentencia que ha motivado la investigación de que aquí se trata, siendo notables, entre otras, las siguientes: 1.ª Decidió en un juicio sumario de restitución, por despojo, sobre el dominio del terreno del "Cerrejón," y este punto no podía ventilarse sino en juicio ordinario; 2.ª Ordenó que se pagaran en dinero las muestras de minerales que de allí se tomaron por empleados del Gobierno, y condenó á indemnización de perjuicios; hechos que estaban en el mismo caso que el anterior; y 3.ª Condenó á la Nación al pago de costas contra lo preceptuado en el ordinal 2.° del artículo 1,046 del Código Judicial Nacional. Omitió el ordenar que se consultara un fallo adverso á la Nación, contra lo prevenido en el artículo 884 del Código Judicial, y en la reforma 28 de la ley 46 de 1876, pero el fallo fué apelado en parte por el Fiscal y la Corte lo revocó en todas sus partes.

Como según el artículo 429 del Código Penal, vigente cuando se incurrió en las faltas de que se ha hecho mérito, no incurre en pena el Juez de derecho que dicta auto ó sentencia *contra ley expresa*, cuando el auto ó sentencia es consentido expresa ó tácitamente por las partes, teniendo éstas el recurso de apelación, ó cuando el auto ó sentencia fuere consultable con el Superior, y en uno y otro caso se encontraba la sentencia que ha dado margen al juicio de que aquí se trata, por ser apelable, según el artículo 1,240 del Código Judicial, y consultable, de acuerdo con el 884 de id. y con la reforma 28 de la ley 46 de 1876, el Juez López Caro está comprendido en la excepción contenida en el artículo 429 del Código Penal que regía en 1883.

Si alguna duda quedara sobre esto, desaparecería consultando la sentencia de 17 de Septiembre de 1884, por la cual revocó del todo la Corte Suprema Federal la pronunciada por el Juez del Circuíto de Padilla, estimando que ésta no podía considerarse ejecutoriada, ni, por consiguiente, producía efecto alguno, mientras no fuera revisada por el Superior.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, reforma la sentencia apelada en la parte condenatoria, y absuelve á Alejandro López Caro de los cargos formulados contra él en el auto de proceder, dictado por el Tribunal del Distrito Judicial del Departamento del Magdalena con fecha 19 de Abril último.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del veintiocho de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete, se publicó esta sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En veintinueve de los mismos la notifiqué al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Se notificó por edicto.

Guerra A., Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Octubre veintiocho de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Tribunal de Cundinamarca, por auto de 23 de Junio de 1882, y aplicando las leyes del extinguido Estado, llamó á juicio de responsabilidad, por los trámites extraordinarios, á los Jueces principal y suplente del Circuíto de Cáqueza, doctor Senén González D. y José E. Currea, por el cargo de repetidas demoras en el despacho de varios asuntos criminales, y por violación del artículo 163 del Código Penal respectivo.

Con notable negligencia que el proceso revela respecto de los funcionarios inferiores, el auto de llamamiento á juicio no fué notificado en Cáqueza á los encausados, y eso á virtud de repetidas providencias del Tribunal, sino un año después de dictado. El doctor González D. evacuó su informe y presentó pruebas en Agosto de 1883, y como José E. Currea no alegara nada por su parte y estuviera debidamente aparejada la actuación, el Tribunal dictó sentencia condenatoria, en 13 de Septiembre del mismo año, imponiendo á los procesados la pena de treinta y cuatro días de suspensión del destino, ó la subsidiaria de treinta pesos de multa á cada uno.

Inmediatamente libró el Tribunal el despacho respectivo para la notificación de la sentencia; diligencia que tuvo lugar únicamente respecto del doctor González D., en 5 de Octubre de 1883. González apeló inmediatamente para ante la Sala de segunda instancia; pero el expediente volvió á quedar en reposo hasta el año de 1885; y luégo, andando por los Juzgados de esta ciudad, no volvió al Tribunal hasta el 7 de Julio del corriente año. Allí se notó por el señor Fiscal que la sentencia no había sido notificada á Currea; lo cual originó nuevo despacho, que fué cumplido en Fómeque el 30 de Julio último, haciendo saber la sentencia condenatoria á Currea, quien apeló de ella sin presentar alegación alguna. Vuelto definitivamente el expediente al Tribunal de Cundinamarca, el señor Fiscal hizo notar que no correspondía yá á éste el conocimiento en la apelación; y el Tribunal, por resolución de 31 de Agosto último, así lo determinó, enviando los autos á esta Superioridad,

lo que tuvo lugar en 5 de Septiembre próximo pasado; habiéndose luégo surtido la tramitación respectiva, y evacuando el señor Procurador su dictamen con fecha 24 de los corrientes.

Entrando ahora á ocuparse la Corte en lo tocante al recurso interpuesto, no tiene para qué examinar la naturaleza de la falta cometida por los procesados ni las pruebas que la acreditan; pues que le basta tener en cuenta, como lo observa el señor Procurador, que los individuos llamados á juicio están yá exentos de persecución legal por el transcurso del tiempo.

Aun cuando pudiera caber duda respecto de la prescripción al tiempo de la sentencia, á lo menos respecto de uno de los procesados, por haber hecho acto de presencia en el juicio, no sucede lo mismo respecto de la prescripción de la pena, sobre lo cual no cabe duda alguna, pues la sentencia condenatoria fué dictada en 13 de Septiembre de 1883, como se deja dicho atrás; y según la Legislación vigente entonces, que es la aplicuble, no sólo por ser la que existía cuando se incurrió en la falta, sino por ser la más favorable, esas penas quedaron sin efecto desde Septiembre de 1885.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el dictamen del señor Procurador general, declara que están prescritas las penas impuestas al doctor Senén González D. y á José E. Currea, por la sentencia de que se ha hecho mención y por el cargo expresado al principio, quedando, en consecuencia, exentos esos individuos de tales penas.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Octubre veintiocho de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Según consta del documento que obra en copia á la página 4.ª de este expediente, el Administrador de la Aduana de Cúcuta, previa comprobación del hecho, le impuso una multa de quinientos pesos ($ 500) al Comandante del Resguardo de la misma Aduana, Clímaco Reyes Patria, por haber examinado y entregado al interesado un equipaje que contenía artículos sujetos al pago de derechos de importación, violando de esa manera el artículo 92 del Código Fiscal de la Nación. Notificada á Reyes tal resolución, no quiso firmarla, y asentada por dicho Administrador la partida de reconocimiento de la expresada suma á favor del Tesoro y á cargo del responsable Reyes Patria, libró por ella ejecución contra éste. Requerido para el pago, se le embargó la mitad de su sueldo, por haberse denegado á verificar aquél, á presentar bienes y á firmar la notificación, y apeló del mandamiento ejecutivo, cuyo recurso le fué concedido en el efecto devolutivo, dando esto lugar á que el expediente viniera en copia á esta Suprema Corte.

Por falta de papel ha estado en suspenso en ella, desde Agosto de mil ochocientos ochenta y uno, hasta que, en virtud de lo dispuesto en los artículos 141 y 142 de la ley 57 del año en curso, se ha ocurrido al expediente de actuar en papel común á cargo del apelante.

Para resolver el recurso tiene en consideración la Corte:

1.° Que según el artículo 92 del Código Fiscal, mientras las mercancías no hayan sido reconocidas y despachadas por la Aduana, ninguna persona particular ni empleado público fuera del Jefe de la Oficina y de los empleados que designe el Poder Ejecutivo, puede apoderarse de ellas, y los que lo hagan, y los que lo manden y ordenen, incurrirán en una multa de quinientos ($ 500) á mil pesos ($ 1,000) que les impondrá el Administrador de la Aduana y que se cobrará ejecutivamente, si fuere necesario;

2.° Que una vez impuesta la multa por el llamado á hacerlo, y librada ejecución por el mismo, en uso de la jurisdicción coactiva de que está investido, á la Corte sólo le es dado decidir el recurso interpuesto, que es el de apelación del auto ejecutivo;

3.° Que el artículo citado da fuerza ejecutiva á las resoluciones en que se impongan las multas establecidas por él; y el numeral 3.° del artículo 1,096 del Código Judicial se la da también á las copias de los decretos que, en ejercicio de sus funciones, expidan los funcionarios públicos imponiendo multas que deben ingresar al Tesoro Nacional; y

4.° Que, en consecuencia, la ejecución de que se trata se libró conforme á derecho.

Por lo tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto apelado por el Comandante del Resguardo de la Aduana de Cúcuta, Clímaco Reyes Patria, y declara de cargo de éste las costas del recurso, que tasará el señor Secretario de la Corte, comprendiendo en ellas el doble valor de tantos sellos de papel cuantas hojas de papel común se hayan empleado en la actuación y en esta sentencia, y haciéndolas efectivas el Administrador de dicha Aduana, las pasará á la Oficina respectiva.

Hágase saber esta determinación, déjese copia de ella, publíquese y devuélvase el expediente para los fines legales.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintinueve de los mismos se notificó este auto al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

ASUNTOS VARIOS.

DILIGENCIA DE VISITA.

En Bogotá, á treinta y uno de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete, siendo la una de la tarde, se presentaron en el local de la Corte Suprema de Justicia Sus Señorías el Ministro de Gobierno y el Procurador general de la Nación, con el objeto de practicar la visita mensual de que trata el artículo 240 de la ley 153 (24 de Agosto) del presente año; y fueron recibidos por Su Señoría el Presidente de la Corte y los señores Magistrados, con asistencia del Secretario, quien, con vista de los libros que se llevan en la Oficina, manifestó lo siguiente:

1.° Que en 29 de Septiembre anterior había pendientes en la Corte 79 expedientes, así: 13 en sentencias civiles y 3 en sentencias criminales; 24 en autos civiles y 19 en autos criminales; 3 consultas, 1 proceso militar, 2 competencias, 2 negocios varios y 12 negocios de una sola instancia;

2.° Que en el mes que concluye hoy se han repartido 59 negocios, así: 3 en sentencias civiles y 4 en sentencias criminales; 15 en autos civiles y 13 en autos criminales; 21 consultas, 1 proceso militar, 1 competencia y 1 recurso de hecho;

3.° Que de los 138 expedientes á que ascendían los pendientes á fines de Septiembre y los repartidos en Octubre, se han despachado 48, así: 4 sentencias civiles y 2 sentencias criminales, 6 autos civiles y 14 autos criminales, 18 consultas, 1 proceso militar, 1 recurso de hecho, 1 negocio vario y 1 negocio de una sola instancia;

4.° Que quedan pendientes en esta fecha 90 expedientes, así: 12 en sentencias civiles y 5 en sentencias criminales, 33 en autos civiles y 18 en autos criminales, 6 consultas, 1 proceso militar, 3 competencias, 1 negocio vario y 11 negocios de una sola instancia; y

5.° Que los 90 expedientes á que se refiere el aparte anterior se distribuyen, así: 23 en prueba, 8 fijados en lista, 5 en poder de las partes, 10 al despacho del señor Procurador y 44 en que están cumpliéndose los términos legales.

Verificados con los libros que se llevan en la Oficina todos los anteriores datos suministrados por el Secretario de la Corte, se hallaron conformes, notándose también que no hay demora alguna en el despacho de los negocios repartidos, imputable á los señores Magistrados ni á la Secretaría.

Se hace constar también en esta diligencia la laboriosidad del señor Procurador, pues que de tántos expedientes como ha

tenido últimamente á su estudio no le quedan hoy por despachar sino diez.

Con lo cual se dió por terminada la visita, exteniéndose de ella la presente diligencia, que firman Sus Señorías el Ministro de Gobierno, el Presidente de la Corte Suprema y el Procurador general, por ante el iufrascrito Secretario de la Corte.

La síntesis de esta relación se encuentra en el cuadro siguiente:

CUADRO que manifiesta los expedientes recibidos y despachados por la Corte Suprema de Justicia en el mes de Octubre de 1887.

	SENTENCIAS. civiles.	SENTENCIAS. criminales.	AUTOS civiles.	AUTOS criminales.	CONSULTAS.	PROCESOS MILITARES.	COMPETENCIAS.	RECURSOS DE HECHO.	NEGOCIOS VARIOS.	NEGOCIOS DE UNA SOLA INSTANCIA.	TOTALES.
Pendientes en Septiembre	13	3	24	19	3	1	2	...	2	12	79
Repartidos en Octubre	3	4	15	13	21	1	1	1	...	...	59
Totales	16	7	39	32	24	2	3	1	2	12	138
Depachados	4	2	6	14	18	1	...	1	1	1	48
Pendientes	12	5	33	18	6	1	3	...	1	11	90

Los asuntos pendientes están de esta manera:

En prueba	23
Fijados en lista	8
En poder de las partes	5
En poder del Procurador	10
Cumpliendo términos	44
Suma	90

FELIPE F. PAUL—R. ANTONIO MARTÍNEZ—CARMELO ARANGO M.—*Ramón Guerra A.*, Secretario.

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL

Señores Magistrados.

El Tribunal Superior de Cundinamarca consulta con esa Superioridad el auto de sobreseimiento proferido en Sala de primera instancia, con fecha 7 de Octubre de 1886, por el cual se declara no haber lugar á seguimiento de causa de responsabilidad contra Isaías Castro Vélez, acusado en su calidad de Juez 1.° del Distrito Federal, por infracción de varias disposiciones del Código Penal.

Examinadas las diligencias informativas que se han practicado como conducentes al esclarecimiento de los cargos hechos al funcionario acusado, se viene en conocimiento de que los actos en que se hacen consistir tales cargos (imposición de una multa y otros apremios), no tienen el carácter punible que les atribuye el acusador; pues resulta que ellos fueron ejecutados *con perfecta facultad legal*, y como medida disciplinaria encaminada á corregir la conducta irregular observada por dicho acusador, en su calidad de comisionado, como Agente de la Policía, para practicar una diligencia ampliatoria, considerada como de importante necesidad en un sumario levantado en averiguación del delito de robo.

A virtud de lo expuesto, y considerando fundadas las apreciaciones hechas por el Tribunal, este Ministerio os pide la confirmación del auto consultado.

Bogotá, 6 de Septiembre de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

Por denuncia anterior al 2 de Octubre de 1887, la Corte Suprema Federal ordenó se iniciara el sumario correspondiente para averiguar la responsabilidad en que hubiera podido incurrir el señor Antonio María Ramírez, en su calidad de Juez del antiguo Territorio nacional de Bolívar, por haber radicado su despacho fuera de la capital de dicho Territorio, y por abandono del destino.

En auto de fecha 13 de Mayo de 1882, la Corte Suprema decretó la suspensión de todo procedimiento criminal contra el expresado Juez, por prescripción de la pena, y quedó, por consiguiente, terminado el asunto, en cuanto al abandono del destino y la radicación del Despacho del Juez fuera de la capital del Territorio. Pero resulta que en el Tribunal Superior de Bucaramanga se han encontrado otras diligencias sumarias contra el mismo ex-Juez Ramírez, por demoras que tuvieron lugar antes del año de 1878. No se comprende por qué no se acumularon estas últimas diligencias á las primeras de que se ha hablado, para que la responsabilidad de Ramírez hubiera podido decidirse en una misma sentencia, y como la acumulación es yá imposible, es preciso decidir separadamente el sumario instruído por las demoras, y así lo ha hecho el Tribunal Superior de Bucaramanga, declarando también suspendido el procedimiento por prescripción de la pena. Esta providencia ha venido en consulta á esa Superioridad, y el infrascrito es de concepto que debéis confirmarla.

Bogotá, 13 de Septiembre de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

En un remate de dinero por documentos de deuda pública, ejecutado el día 28 del mes de Enero del presente año, según lo prevenido por la ley 87 de 1886, sobre crédito público, el señor José Miguel de Paz hizo propuestas de Vales de Renta sobre el Tesoro, de 6 por 100, que fueron erróneamente admitidas por la Junta ante la cual se verificó dicho remate; y pasada la respectiva diligencia al señor Tesorero general para el pago de las cantidades adjudicadas, el señor Tesorero hizo la liquidación correspondiente de la suma á que el señor Paz tenía derecho por el remate, con aplicación de lo dispuesto por el artículo 2,141 del Código Fiscal.

No conformándose el señor Paz con aquel procedimiento, ocurrió al Ministerio del Tesoro pidiendo se improbara, por considerar al pagador sin derecho para objetar el pago que se le había ordenado. A la solicitud del señor Paz recayó la siguiente resolución:

"*Ministerio del Tesoro—Bogotá, 17 de Febrero de 1887.*

"El artículo 2,141 del Código Fiscal dice así: 'La rata de amortización será hasta del 32 por 100 en el primer semestre, incluyendo en este precio el de los cupones del interés vencido en los semestres próximamente anteriores; y así sucesivamente, aumentando 2 por 100 en cada semestre para incluír el valor de los intereses del semestre anterior.' *Esta disposición no ha sido modificada hasta hoy por ninguna ley.* Lo que la Legislación posterior ha modificado únicamente, ha sido el artículo 2,140 del mismo Código, que destinaba $ 30,000 mensuales para la amortización de la Renta al portador, y que la ley 87 de 1886, ha reducido á $ 3,333 mensuales. Es claro, pues, que en el precio de 88 por 100, hasta el cual puede elevarse actualmente la oferta de la Renta al portador, están incluídos los intereses devengados desde Marzo de 1872 (cupón 8.°), hasta el semestre que se vencerá en Julio próximo, según lo han entendido los demás tenedores de esta clase de documentos en el último remate.

"Por lo tanto, se declara que el procedimiento de la Tesorería general está arreglado á la ley, y que en caso de falta de cupones debe tenerse en cuenta lo que dispone el artículo 2,160 del Código Fiscal."

Esa resolución ha dado origen á la demanda propuesta ante vosotros, por el señor Paz, contra el Tesoro de la República, para que se le pague la suma de mil setecientos cincuenta y un pesos, treinta centavos ($ 1,751-30 cs.), que le fueron adjudicados, por error, en el remate de dinero, por Vales de Renta sobre el Tesoro al portador, que tuvo lugar el 28 de Enero último, con más los intereses de demora.

El demandante sostiene que el sistema *mixto* de propuestas libres y sorteo establecido por el artículo 2,139 del Código Fiscal, para la amortización de los documentos de crédito de la naturaleza de los presentados por el señor Paz al remate del 28 de Enero, no podía variarse como lo ha variado la ley 87 de 1886, por el sistema simple de remates, sin modificar de hecho las otras disposiciones del mismo Código que se refieren al precio de tales documentos, y que, por consiguiente, al haber dispuesto el artículo 4.° de la ley 81 citada que la deuda representada en Vales de Renta sobre el Tesoro al portador se amortizara por el sistema de remates, y nó por el sistema mixto de que trata el artículo 2,139 del Código Fiscal, quedaba derogado el artículo 2,147 que determina el precio de aquellos Vales y el interés abonable,

¿Qué relación tiene el sistema que se adopte para la amortización de una deuda, con el precio y el interés señalados por ley especial á la misma deuda?

Ninguna, y no habrá la menor dificultad para demostrar que, á pesar de la variación de sistema para la amortización de los Vales de Renta sobre el Tesoro, introducida por la ley 87 de 1886, continúa en vigencia el artículo 2,141 del Código Fiscal.

Dando por cierto que esa disposiciión hubiera sido derogada por la ley 87 de 1886, habría que convenir, por lo menos, en que aquel artículo estuvo en vigencia hasta la expedición de la nueva ley que se supone lo ha derogado, y es natural que durante el tiempo de su vigencia hubiera de surtir sus efectos; es decir, que hasta el día 1.° de Enero del corriente año, fecha en que comenzó á regir la ley 87, según lo dispuso el artículo 20 de la misma ley, los Vales de Renta sobre el Tesoro al portador debieron estar regidos por el artículo 2,141. Si esto es así, el interés abonable á esos documentos durante la vigencia de dicho artículo no puede ser otro que el 4 por 100 allí determinado.

Pero el señor Paz no hace cuenta absolutamente de aquella disposición, y quiere exceptuar de sus efectos los Vales que él presentó al remate, dándoles un valor que la ley no les ha reconocido.

Entre las propuestas que hizo el señor Paz, para el remate del día 28 de Enero, figura ésta:

En Vales de Renta sobre el Tesoro al portador, al 74 por 100.

Por capital	$ 400.
Por intereses	292.
Total	$ 692

Por los documentos presentados al remate se adeudaban intereses desde el mes de Marzo de 1874, que son veinticinco semestres hasta Septiembre de 1886, fecha en la cual estaba en vigencia el artículo 2,141, que desde 1872 había señalado el 4 por 100 de interés anual, y el 32 por 100 como precio del capital para la amortización; y al hacer la liquidación resulta que corresponde lo siguiente por cada cien pesos:

Por capital	$ 32.
Por intereses en 12 años y ½ al 4 por 100	50.
	$ 82.

Por los $ 400 tendría derecho el señor Paz á la suma de $ 328.

Para obtener el resultado que desea el demandante, sería preciso confundir el valor nominal del documento con su valor real; sería preciso también que el artículo 1,141 del Código Fiscal no tuviera aplicación respecto de aquellos documentos ni para el tiempo en que el señor Paz reconoce la vigencia de dicho artículo; y, por último, habría que dar á la ley 87 de 1886 efecto retroactivo.

Pero es el caso que aun dándole retroactividad á esta ley, no podría encontrar en ella el demandante apoyo ninguno para sus pretensiones, porque la ley 87, aun suponiendo que hubiera derogado el artículo 2,141, no restableció la vigencia de ninguna de las leyes anteriores, que sí habían sido especialmente derogadas por otras leyes, y es obvio que la simple derogatoria de una ley, no restablece la vigencia de la que ésta había derogado.

La ley que dispuso la emisión de los Vales de Renta sobre el Tesoro, consideró la deuda que ellos representaban como consolidada, en la cual no se amortizaba el capital y únicamente se pagaban los intereses, á razón del 6 por 100 anual; pero la ley 60 de 1872, reproducida en el Código Fiscal de 1873, derogó la ley anterior, cambió el carácter de aquella deuda y la declaró deuda flotante, puesto que autorizó la amortización del capital é intereses, determinando la rata de amortización y reduciendo los intereses al 4 por 100.

Ahora bien, continuando en el supuesto de que la ley 87 de 1886 hubiera derogado el artículo 2,141 del Código Fiscal, y de que por el solo hecho de la derogatoria se restablecía la vigencia de la ley primitiva que daba á la deuda el carácter de consolidada al 6 por 100, tendría que convenir forzosamente el señor Paz en que según esa ley que señaló el 6 por 100 de interés, sólo tendría derecho al pago de los intereses y no á la amortización del capital.

Pero como esto sí se opone á la letra y al espíritu de las nuevas leyes sobre crédito público, hay que reconocer la vigencia del artículo 2,141, que ni expresa ni tácitamente ha sido derogado por la ley 87 de 1886.

Lo alegado es suficiente para que, reconociendo la legalidad de la resolución del Ministerio del Tesoro, absolváis á la Nación de la demanda que contra ella ha promovido el señor Paz; pero como al practicar alguna de las pruebas que produje en tiempo, el demandante impugnó, por inconducente, la testimonial, que se dirigió á probar el hecho afirmado en el numeral 1.° de la contestación de la demanda, asegurando también que aquella prueba no estaba comprendida entre las determinadas por el Magistrado substanciador, en el auto por el cual se abrió á pruebas este juicio, deseo llamar la atención de los señores Magistrados al referido auto de pruebas, para que se vea que sí se mandó expresamente que se probara aquel hecho.

La fuerza moral de las declaraciones recibidas no se puede negar, porque los testigos son negociadores de documentos de crédito público, inteligentes especialmente en esos negocios y honrados, y, como dije al contestar la demanda, no es dado admitir, ni aun siquiera es sostenible, que solamente el señor Paz tenga interés en la defensa de sus derechos, y que los demás tenedores renunciaran, voluntariamente, por ignorancia ó por descuido, á las ventajas manifiestas que derivarían de la ley al ser interpretada en los términos en que lo ha sido por el expresado señor Paz.

Por todo lo expuesto, os pido que absolváis á la Nación en esta demanda.

Bogotá, 29 de Septiembre de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

El hecho atribuído al señor doctor Mariano Manrique en estas diligencias, debe ser considerado en relación á lo que dispone el Código Penal Nacional de 1873. Ninguno de los artículos de este Código define como delito, ni por consiguiente señala pena, á la demora en que incurran las partes en juicio civil ó criminal, reteniendo los autos ó traslados por más tiempo que el determinado por la ley ó que el fijado por los Jueces ó Magistrados.

El artículo 423 de dicho Código no es aplicable, en concepto del infrascrito, al caso de que se trata, porque tal artículo hace parte del Título 9.°, Libro 3.°, que define únicamente "los de-

litos y culpas de los funcionarios ó empleados públicos en general."

Tampoco se trata del caso previsto en el artículo 463 del Código Judicial de 1873, porque el expediente demorado ha sido devuelto á la Corte, aún sin apremio alguno.

Las penas en que incurren las partes que demoran la entrega de los autos que reciben en traslado, están determinadas en los artículos 449 á 462 y 464 del Código Judicial citado, vigente cuando se incurrió en la demora que se averigua, y esas penas son simplemente correccionales ó disciplinarias y aplicables por el Juez ó Tribunal respectivos, sin necesidad de la actuación de un proceso criminal. (Véase el artículo 190 *ibidem*).

Por consiguiente, soy de concepto que suspendáis la instrucción sumaria y archivéis estas diligencias; pero si no creyereis conveniente resolverlo así, el expediente debe ser remitido al Juez competente, pues la Corte carece de jurisdicción para conocer en este asunto en 1.ª instancia.

Bogotá, 30 de Septiembre de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

Estanislao Zuleta denunció como abandonada una mina en el extinguido Estado de Antioquia, suscitando con ello la oposición de Estanislao Llano, Félix Muñoz, Antonio María Llano y Rómulo A. Jaramillo, quienes alegaron el título de dueños y poseedores de mejor derecho de varias minas que están comprendidas dentro de los linderos fijados por Zuleta á la que es materia de su denuncio.

Dirigida la demanda de oposición originariamente contra Zuleta, y luégo contra Jesús María Pérez B., por haber manifestado aquél que el denuncio de la mina se había hecho por recomendación y á cuenta de éste, el Juez del conocimiento en primera instancia, que lo fué el del Circuíto de Amalfi, la decidió, por sentencia proferida en 20 de Septiembre de 1883 (fs. 91), de la cual apeló la parte demandada, por haber sido favorable en un todo á los opositores.

Concedido el recurso, el Tribunal Superior del extinguido Estado de Antioquia, después de subsanar una causal de nulidad (fs. 109 y 110), revocó, por sentencia de 21 de Noviembre 1885, (fs. 111) la sentencia apelada, y absolvió á los demandados Zuleta y Pérez.

De esta segunda sentencia apelaron, á su vez, los opositores, y el recurso les fué concedido para ante la Sala de tercera instancia, la cual, después de dictar un auto para mejor proveer, terminó por declararse incompetente, por auto de 7 de Julio del presente año (fs. 123 y 131 vueltas).

Fúndase la declaratoria del Tribunal en que, habiendo pasado las minas de oro á ser propiedad de la Nación, los litigios que sobre ellas se susciten deben decidirse en *última instancia* por la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con la atribución conferida por el inciso 1.° de la sección 2.ª, artículo 21 de la ley 61 de 1886.

Sin negar que la Corte Suprema de Justicia es la competente para conocer en última instancia de todos los negocios contenciosos que se refieran á bienes, rentas y cualesquiera otros derechos de la Hacienda pública, y los cuales se hayan decidido en primera instancia por los Jueces de Circuíto, es el caso de que el negocio que nos ocupa estaba pendiente en tercera instancia cuando se expidió la ley 61 de 1886, orgánica del Poder Judicial y del Ministerio público, y, por lo tanto, es de preferente aplicación á dicho negocio la siguiente disposición especial contenida en la ley 57 del presente año. "Artículo 109. En los asuntos judiciales en que, conforme á la legislación de los extinguidos Estados, había tres instancias, conocerán los respectivos Tribunales Superiores de Distrito judicial de los recursos de tercera instancia, interpuestos y no decididos antes de la vigencia de la ley 61 de 1886."

En cumplimiento, pues, de esta disposición legal, el infrascrito os pide que, previa declaratoria de vuestra falta de jurisdicción, dispongáis la devolución del expediente al Tribunal de su procedencia, donde debe decidirse el recurso de tercera instancia interpuesto por los demandantes.

Bogotá, 22 de Septiembre de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

Estos autos contienen el sumario instruído contra Salustiano Chaparro por hechos cometidos durante el tiempo que desempeñó las funciones de Prefecto del Territorio de Casanare, con el carácter de Jefe civil y militar.

El artículo 21 de la ley 61 de 1886, enumera los funcionarios justiciables en una sola instancia por la Corte Suprema de Justicia, por delitos comunes ó de responsabilidad, y entre esos funcionarios no figuran los *Prefectos de los Territorios*, ni los Jefes civiles y militares de los mismos.

De acuerdo con los precedentes sentados por ese Supremo Tribunal, los Prefectos de los antiguos Departamentos en que estaban divididos algunos de los extinguidos Estados, tienen el mismo carácter político que los funcionarios llamados *Jefes superiores de las Provincias*, en el artículo 21 de la ley 61 de 1886. Con motivo de la última guerra casi todos los antiguos Prefectos asumieron el carácter de Jefes civiles y militares, lo cual no varía la condición de dichos empleados para los efectos de la jurisdicción á que están sometidos.

Por consiguiente, soy de concepto que, de acuerdo con el inciso 2.° del artículo 100 de la ley 61 tantas veces citada, á quien corresponde conocer en primera instancia en estas diligencias es al Tribunal Superior del Distrito judicial de Tundama, y así os pido que lo resolváis.

Bogotá, 17 de Septiembre de 1887.

CARMELO ARANGO M.

EDICTOS.

República de Colombia—Departamento del Tolima—Poder Judicial—N.° 1,876—Juzgado 2.° del Circuíto—Honda, Octubre 27 de 1887.

Señor Secretario de la Corte Suprema de Justicia—Bogotá.

Tengo el honor de adjuntar á ésta un edicto emplazando los reos del delito de heridas Enrique Uricoechea y Erasmo Tavera, vecino el primero del Municipio de Fusagasugá, y el segundo de ese, para que el señor Secretario se sirva ordenar su publicación en la *Gaceta Judicial* órgano oficial de esa Superioridad.

Dios guarde á U.,

ALFREDO CROSTHWAITE.

EDICTO.

El Juez 2.° del Circuíto de Honda.

Por el presente cita, llama y emplaza á Enrique Uricoechea y Erasmo Tavera, el primero vecino del Municipio de Fusagasugá, y el segundo del de Bogotá, en el Departamento de Cundinamarca, para que dentro del término legal de tres días, se presenten en este Despacho á estar á derecho en la causa criminal que se les sigue por la comisión del delito de heridas, causadas en la población de Mariquita de esta comprensión, en la persona de Rito Uribe. Si dichos individuos se presentaren dentro del indicado término, este Juzgado les oirá y administrará la justicia que les asista, y de lo contrario les parará en el perjuicio á que hayan dado lugar. No se inserta la filiación de los emplazados por no constar en los autos; pero para su inmediato conocimiento se hace presente que el expresado Uricoechea era Coronel, primer Jefe del Batallón 12 de línea, y Tavera subalterno de éste, en el año de 1883.

Se recuerda á las autoridades de la República el deber que les impone el artículo 1,751 del Código Judicial que rige hoy.

Honda, Octubre veinticinco de mil ochocientos ochenta y siete.

ALFREDO CROSTHWAITE.

Horacio Mora C., Secretario en propiedad.

BOGOTÁ.—IMP. DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 46

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 19 de Noviembre de 1887.

CONTENIDO.

PÁG.

ACUERDOS DE LA CORTE.

Acuerdo número 109 relativo á una consulta del Tribunal Superior del Tolima..... 361
Id. número 110, id. á otra id. del Tribunal Superior del Magdalena "
Id. número 111 id. á otra id. del Juez del Circuito de Zipaquirá..... 362

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Pronunciada con relación á una reclamación sobre empréstito y suministro..... "

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Revocatorio de otro del Juez del Circuito de Antioquia, sobre una excepción en juicio de expropiación..... 363
Id. de otro del Administrador principal de Hacienda de Barranquilla, sobre traba en un juicio ejecutivo..... "

NEGOCIOS CRIMINALES.

Sobre incompetencia de la Corte para conocer de un sumario por delito de contrabando..... 364
Sobre id. de la misma para conocer de una queja sobre encarcelamiento..... 365
Confirmatorio de un auto de cesación de procedimiento, por prescripción..... 366
Revocatorio de otro, sobre imposición de multa, proferido por el Tribunal Superior de Cundinamarca..... "
Confirmatorio de otro de sobreseimiento proferido por el Tribunal Superior de Antioquia..... "
Sobre seguimiento de causa contra el Jefe Municipal de Palmira Nemesio Colmenares Paz..... "

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL

Emitida con respecto á un juicio ejecutivo..... 367
Id. con relación á una tercería de un juicio ejecutivo..... 368
Id. en una causa por responsabilidad..... "

GACETA JUDICIAL.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

ACUERDO NUMERO 109.

En Bogotá, á cuatro de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los Señores Magistrados y del infrascrito Secretario, se ocupó en considerar la consulta hecha por el Tribunal Superior del Distrito judicial del Tolima, en nota número 141 de 15 del pasado mes, acerca de los particulares siguientes:

1.° Qué medio debe adoptarse para hacer efectivo el pago del doble valor de los sellos que deben emplearse en la sentencia ó en la actuación, según lo prevenido en el artículo 168 de la ley 57 de 1887; y

2.° Si es necesario requerimiento previo, á la parte, para declarar ejecutoriado el auto ó sentencia en los casos del artículo 168 de la misma ley.

El Magistrado señor doctor Noguera, á quien fué repartido el negocio, propuso el siguiente proyecto, que fué adoptado unánimemente:

"1.° La manera de hacer efectivo el valor del papel, en los casos de que se trata, es un asunto de pura administración, sujeto á la competencia de los empleados de Hacienda, y la Corte nada tiene, por consiguiente, que resolver sobre el particular, pues los funcionarios del Poder Judicial deben limitarse á negar la audiencia á la parte, cuando no compruebe legalmente haber pagado dicho valor; y

"2.° La inteligencia que la Corte ha dado á las disposiciones de los artículos 141 á 143 y 168 de la citada ley, se encuentra consignada en el Acuerdo número 101 de veintisiete de Octubre último; y no habiendo motivo alguno para adicionar ó reformar el expresado Acuerdo, debe cumplirse lo establecido en él sin ninguna variación."

Con lo cual se terminó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados conmigo el Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 110.

En Bogotá, á cuatro de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, se ocupó en considerar la consulta que en seguida se expresará, y el señor Magistrado doctor Martínez, á quien tocó el negocio en repartimiento, presentó el siguiente proyecto de resolución, que fué unánimemente adoptado:

"Consulta el Tribunal del Magdalena si al abrirse á prueba un juicio por tentativa de delito, y que, por consiguiente, no ha tenido efecto en su acción principal, tiene lugar lo dispuesto en el artículo 113 de la ley 57 del presente año, ordenando el Juez que se estimen los perjuicios causados.

"Consulta también sobre si el perdón que reconoce el artículo 188 de la ley 153 del presente año, por los delitos de estupro, violación ó forzamiento de mujer y abusos torpes, comprende á los cómplices, auxiliadores y encubridores de esos mismos delitos.

"Para resolver el primer punto, la Corte considera que porque un delito haya dejado de consumarse por circunstancias fortuítas é independientes de la voluntad del autor,—que es lo que constituye la tentativa punible, no por eso puede considerarse que de la preparación del hecho criminoso no resulte perjuicio alguno; pues que puede sobrevenir, por ejemplo, una enfermedad á la persona amenazada ó á sus inmediatos allegados; puede haber objetos destruídos para la preparación ó principio del delito; y pueden acumularse muchas circunstancias perniciosas ó dañinas, como en todo lo que se refiere á la perturbación del orden público. No hay, por lo tanto, razón para que al enjuiciar á un individuo por tentativa de un delito, no se entre en la apreciación de los perjuicios, como lo requiere la ley. Ahora, si de la apreciación pericial resulta en alguno ó algunos casos particulares, que no hubo lugar á perjuicios, eso toca resolverlo al Juez en la sentencia, no fijando cuota de indemnización.

"Cuanto al segundo punto de la consulta, como él no es ni de organización ni de procedimiento, sino que se refiere á la parte substantiva penal, y tiene por objeto saber si la pena consiguiente á cierta acción criminosa queda remitida ó nó, es claro que el asunto no puede ser resuelto por la Corte, por no entrar en la órbita de sus facultades.

"Por lo expuesto, la Corte resuelve:

"1.° En ningún caso debe prescindirse, al abrir á prueba un juicio criminal, ya sea por delito, ya por tentativa de delito, de hacer estimar pericialmente los perjuicios en cada caso que ocurra, como lo tiene resuelto la Corte en Acuerdo de fecha 12 de Agosto, número 55; y

"2.° Abstenerse de dar resolución al segundo punto consultado por el Tribunal del Magdalena, en nota de 12 de Octubre último, número 77, por carecer de facultades legales para ello y por corresponder á los Jueces, según los principios generales de jurisprudencia y las reglas de la recta crítica, aplicar la ley en el caso propuesto.

"Comuníquese al Tribunal consultante y publíquese en la *Gaceta Judicial* para conocimiento de los demás Tribunales y Juzgados de la República."

Con lo cual se terminó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 111.

En Bogotá, á siete de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, con el objeto de resolver la consulta que en seguida se expresará; y el señor Magistrado doctor Morales, á quien tocó en repartimiento tal consulta, presentó el siguiente proyecto que fué aprobado unánimemente.

"El Juez del Circuíto de Zipaquirá consulta con esta Suprema Corte si deben conocer los Jueces de Circuíto de los juicios por heridas, iniciados antes del 22 de Julio del presente año, en que haya incapacidad para trabajar por ocho días.

"Esta Corporación ha resuelto yá el caso que es materia de la anterior consulta, en el Acuerdo de fecha dos del presente mes, con motivo de la que elevó el Juez del Circuíto de Sugamuxi, en el Departamento de Boyacá; y, en consecuencia, resuelve que se esté á lo dispuesto en ese Acuerdo, y que se comunique esta resolución y aquella á que se refiere, al Juez consultante.

"Publíquese en la *Gaceta Judicial*."

Con lo cual se dió por terminado el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados conmigo el Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente Ramón Guerra A.*, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Noviembre cinco de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Gonzalo Ramos Ruiz, apoderado sustituto de Donaldo E. Grau, quien lo es principal de Marcial Viñas, vecino de Magangué, departamento de Bolívar, inició ante la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones una reclamación por valor de los siguientes bienes:

La suma de cinco mil pésos que le fué asignada como contribución de guerra, y que consignó al Recaudador de la expresada contribución Francisco Polanco, según consta del recibo expedido por dicho empleado el veinticuatro de Marzo de mil ochocientos ochenta y seis.....$ 5,000

La suma de tres mil trescientos ochenta y tres pesos que vale la certificación número veintiuno, de fecha veintinueve de Abril de mil ochocientos ochenta y seis, expedida por el Gobernador del Departamento de Bolívar (entoces Jefe civil y militar), como prueba de la consignación de varios recibos de suministros y empréstitos, y que son:

Por siete vacas gordas, dos novillas, un caballo de silla y un burro que entregó en Buena Vista el día veintiocho de Mayo de mil ochocientos ochenta y cinco.....$	308	
Por empréstito que pagó en Magangué el día ocho de Agosto del mismo año.....	400	
Por id. que pagó en la misma ciudad el día diez y nueve siguiente, id.....	2,000	
Por id. que pagó el once de Octubre id. id...	150	
Por id. que pagó el diez y seis de Noviembre del mismo año.....	525	3,383
Suma.....$		8,383

La Comisión, en vista de los decumentos enumerados, dictó su resolución, con fecha diez y ocho de Abril de mil ochocientos ochenta y siete, por la cual reconoce á favor de Gonzalo Ramos Ruiz, apoderado de Marcial Viñas, vecino de Magangué, Departamento de Bolívar, la suma de ocho mil trescientos ochenta y tres pesos ($ 8,383) á cargo del Tesoro nacional, clasificando dicho crédito como de los comprendidos en el inciso 2.° del artículo 2.° de la ley 44 de 1886.

El Ministerio de Guerra no encontró objeción que hacer á la resolución, y fué ratificada y aprobada con fecha dos de Mayo del año en curso, y mandó pasar el expediente al señor Procurador general para los efectos legales.

El señor Procurador juzgó conveniente insinuar á esta Superioridad que debían complementarse las pruebas en que se fundó la reclamación de Viñas, á fin de aclarar si en el recibo expedido en Magangué el veinticuatro de Marzo de mil ochocientos ochenta y seis estaban ó nó comprendidos los empréstitos de ocho y diez y nueve de Agosto, once de Octubre y diez y seis de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco, que ascienden á tres mil setenta y cinco pesos ($ 3,075), que hacen parte de la suma total de ocho mil trescientos ochenta y tres pesos ($ 8,383) reclamada.

La Corte, en atención á la opinión del señor Procurador, dictó auto para mejor proveer, según lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 44 de 1886, y resolvió librar exhorto al Gobernador del Departamento de Bolívar, quien informó que los comprobantes originales de la certificación número veintiuno, de veintinueve de Abril del año de mil ochocientos ochenta y seis, expedida á Marcial Viñas, de Magangué, por la cantidad de tres mil trescientos ochenta y tres pesos, fueron remitidos al Ministerio del Tesoro, expresando, además, que según el artículo 3.° del decreto número 102 de 1886, él no estaba autorizado para convertir por certificaciones más que los recibos expedidos por subalternos y agentes suyos, y que de acuerdo con dichas disposiciones, la Gobernación dispuso que no se cambiaran por certificaciones los recibos que expidió el empleado nacional que estuvo encargado del recaudo de la contribución de guerra.

No obstante que este informe dió luz, se volvió á dictar auto para mejor proveer, por pedimento del señor Procurador, y se libró exhorto al señor Ministro del Tesoro.

Puestos á disposición de la Corte por el expresado Ministerio los comprobantes originales de los tres mil trescientos ochenta y tres pesos del certificado número veintiuno, de veintinueve de Abril, no queda absolutamente la menor duda de que ninguna de esas partidas fué incluída en el recibo de los cinco mil pesos por contribución de guerra, expedido con fecha veinticuatro de Marzo de mil ochocientos ochenta y seis por el Recaudador Francisco Polanco, quedando, en consecuencia, perfectamente esclarecido el derecho de Viñas al reconocimiento y pago total de los ocho mil trescientos ochenta y tres pesos demandados.

A mérito de lo expuesto, de acuerdo con el último parecer del señor Procurador general, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

confirma en todas sus partes la resolución dictada por la Comisión y aprobada por el Ministerio de Guerra, en la reclamación de que se trata.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente á la oficina de su origen por conducto del respectivo Ministerio.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del cinco de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, se publicó esta sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En el mismo día se le notificó al señor Gonzalo Ramos Ruiz, y firma.

RAMOS RUIZ—*Guerra A.*, Secretario.

En el mismo día notifiqué al señor Procurador la sentencia que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Noviembre dos de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—A excitación del Secretario de Hacienda y Fomento del extinguido Estado de Antioquia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.° del decreto ejecutivo número 607, de mil ochocientos ochenta y dos, publicado en el *Diario Oficial* número 5,514,—procedió el Fiscal del Circuito de Antioquia, con fecha treinta y uno de Octubre de mil ochocientos ochenta y tres, á intentar demanda de expropiación de dos casas situadas en el Distrito de Ituango, que habían sido rematadas para pago de contribución de guerra y poseídas á la sazón por Pedro María Gutiérrez, vecino del referido Distrito.

Hecha la citación al demandado, confirió poder á Néstor Quirós para que lo representase en el juicio, y fué dicho apoderado quien, notificado de la demanda, la tachó de inepta, oponiendo en tiempo la correspondiente excepción, que fundó: 1.° En que no se había determinado en el libelo la persona para la cual se reclamaban las casas que se trataban de expropiar. 2.° En que no se había dado cumplimiento á lo prevenido en el artículo 2.° de la ley 38 de 1882, sin lo cual no se estaba en el caso de proceder á la expropiación. 3.° En que una de las casas reclamadas fué rematada por Benjamín Moreno, en Junio de mil ochocientos setenta y nueve, y no estaba comprendida, por consiguiente, en las fincas cuya devolución dispuso el artículo 1.° de la citada ley; y 4.° En que el remate de la otra casa tuvo lugar ante el Poder Judicial, para pago de una deuda hipotecaria á que estaba obligado Alejandro Toro, y que no es á las fincas así rematadas á las que se refiere la mencionada ley de 1882.

Substanciada dicha excepción en la forma legal, el Juez de la primera instancia pronunció el auto de catorce de Febrero de mil ochocientos setenta y cuatro declarándola probada, por cuanto en el correspondiente libelo, dice el auto, no se había llenado la exigencia de la disposición contenida en el artículo 200 del Código Judicial de 1873, bajo cuya vigencia se intentó la acción.

Dicho auto fué apelado por el mismo Agente del Ministerio público, representado yá por una persona distinta, y con este motivo se dispuso remitir el expediente á esta Superioridad, por providencia del Juez inferior, de diez y seis de Febrero de mil ochocientos ochenta y cuatro; y así ha estado paralizado en la Secretaría de la Corte, hasta que el señor Secretario dió con él, en el cúmulo de papeles que está arreglando, y lo informó así, poniéndolos al repartimiento, con fecha veintiuno de Septiembre último.

Adoptada en esta segunda instancia la tramitación conveniente, se tiene en consideración para decidir el recurso pendiente:

1.° Que conforme al artículo 3.° del decreto ejecutivo yá citado, los Presidentes ó Gobernadores de los extinguidos Estados tenían el deber de disponer que se formara, en cumplimiento del artículo 4.° de la ley, la relación de las fincas raíces rematadas y de las cantidades consignadas por los rematadores en las Oficinas de Hacienda; y de dar, además, á sus agentes, las instrucciones convenientes, á fin de que los individuos incluídos en tal relación devolvieran las fincas á sus respectivos dueños, ó de que manifestaran si se denegaban á efectuar la devolución.

2.° Que el Gobierno de Antioquia dió cumplimiento al expresado deber, formando la correspondiente relación, que se publicó en los números 894 y 895 del *Registro Oficial del Estado*; y consta á fojas 5.ª y 6.ª del proceso, que al ser notificado Pedro María Gutiérrez para que hiciese la entrega de las fincas reclamadas, se opuso á ello dando razones que no es del caso examinar.

3.° Que conforme al artículo 8,° del mismo decreto, las contestaciones negativas de los rematadores ó poseedores de las fincas, debían pasarse á los Agentes respectivos del Ministerio público para que entablarán los juicios de expropiación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.° de la ley, y esto fué precisamente lo que se hizo y lo que dió origen á la demanda, como se expresa al principio de esta determinación.

4.° Que refiriéndose el libelo de demanda á las mencionadas diligencias con las cuales se acompañó, y haciéndose también en el mismo libelo la designación de las fincas con especificación de sus linderos, nombre del poseedor ó rematador y motivo de la demanda, no se encuentra la razón que haya tenido el Juez de la primera instancia para aseverar que se habían omitido los requisitos ó condiciones exigidos por el artículo 200 del Cód go Judicial; pues aunque es cierto que en el escrito en que se pidió la expropiación, se dejó en blanco el nombre de la persona para la cual se reclamaban las fincas, esa omisión quedó su bsanada al contestar el traslado de la excepción, en que se dijo terminantemente que tales fincas eran para José Antonio Soto y Sebastián Mejía, como se había dicho igualmente en las diligencias de notificación de que yá se ha hecho mérito; y

5.° Que la excepción de inepta demanda no puede fundarse en cualesquiera defectos ú omisiones que se noten en el libelo respectivo, sino en los que están clara y especialmente det allados en los números 1.° á 3.° del artículo 467 del Código Judicial vigente, que es una fiel reproducción del 401 del de 1873, en ninguno de los cuales se encuentran comprendidos los demás que fueron alegados por el demandado al oponer la excepción.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de conformidad con lo pedido por el señor Procurador general, revoca el auto apelado, declarando que no está probada la excepción de inepta demanda propuesta por el demandado, el cual está en la obligación de contestarla directamente. No se hace especial condenación en costas.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En tres de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, dos de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—De esta actuación resulta lo siguiente:

El 20 de Diciembre de 1881 fué nombrado por el Gobierno el doctor Clemente Salazar M., Secretario de la Legación de Colombia en el Brasil, y recibió para su marcha mil pesos ($ 1,000) por viático doble de ida, y dos mil pesos ($ 2,000) por sueldos de un año, anticipados.

El 29 de Abril de 1882 firmó en Barranquilla un documento, haciendo constar que había recibido dichas partidas, y obligándose á devolver al Tesoro Nacional *la suma que no al-*

canzara á devengar en el ejercicio de tal empleo, afectando expresamente para la devolución el viático de regreso, de conformidad, dijo, con lo dispuesto en el artícul 1,171 del Código Fiscal; y para mayor seguridad de tal compromiso dió como fiadores á Francisco José Palacio y José del C. Varela, quienes se obligaron mancomunada y solidariamente á cumplir *lo estipulado*.

Al pie del documento, que no figura original en los autos, sino en copia suscrita por el Administrador de la Aduana de Barranquilla, anotó éste, en 15 de Agosto de 1882, que el doctor Salazar recibió, además, quinientos cuarenta pesos ($ 540) por cambio de moneda, y agregó la cuenta correspondiente y también dos notas del Ministerio de Relaciones Exteriores, fechada la primera en 10 de Junio de 1882, y la segunda en 3 de Agosto del mismo año, en que se ordenó á dicho Administrador que hiciera efectivo el reintegro de las sumas recibidas por el doctor Salazar, porque no habiendo ido éste á desempeñar el destino que se le confirió, desde Diciembre de 1881, debía considerarse como no aceptado, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo número 924, de 13 de Diciembre de 1880; agregándose en la segunda nota que se procediera inmediatamente contra los fiadores por haberse ausentado el doctor Salazar, y que esto se hiciera por el Administrador principal de Hacienda.

Pasados á éste los antecentes, liquidó á cargo de los fiadores no sólo lo entregado al doctor Salazar por viáticos y sueldos, sino también lo recibido por él, por cambio de moneda, y después de requerirlos particularmente, sin resultado, para que pagaran, libró ejecución contra ellos por la suma de tres mil quinientos cuarenta pesos ($ 3,540) á que montó la liquidación; siendo de notar que el auto en que tal hizo está concebido, en su parte substancial, en estos términos:

"Se intima á los señores citados, Palacio y Valera, que paguen por mitad en el acto de la notificación, en dinero sonante, la suma de tres mil quinientos cuarenta pesos ($ 3,540), que en su calidad de fiadores del señor Clemente Salazar M., les manda reintegrar en el Tesoro Nacional el señor Secretario de Relaciones Exteriores."

Notificado el auto á los ejecutados, presentaron bienes para el pago é interpusieron para ante esta Superioridad recurso de apelación, que les fué concedido en el efecto devolutivo, con fecha 11 de Septiembre de 1882. Desde entonces vino el expediente original á la Corte, y repartido y pasado al estudio del señor Procurador general, quien fué de concepto que se revocara el auto apelado, nada más se hizo en el negocio, y ha permanecido en suspenso, sin saberse por qué, hasta ahora en que, á virtud de informe del señor Secretario y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 de la ley 57 de 1887, se le ha dado curso en papel común, á cargo de los apelantes, por no ser yá competente el timbrado que se acompañó al expediente.

Substanciado legalmente el recurso y conocidos los hechos por la relación precedente, se está en el caso de determinarlo, y para esto considera la Corte:

1.° Que el auto de ejecución no pudo fundarse, como se fundó en la orden dada en 1882, por el señor Secretario de Relaciones Exteriores, para que se procediera contra los fiadores del doctor Salazar, porque esa orden estaba muy lejos de ser un documento de los que, conforme á la ley, prestan mérito ejecutivo;

2.° Que inútilmente se agregó al expediente la liquidación que figura en la página 8.ª, porque, aun suponiéndola como un reconocimiento, no ha sido hecha á cargo de deudores al Fisco, por rentas ó contribuciones, que es á lo que le dá fuerza ejecutiva el inciso 2.° del artículo 1,096 del Código Judicial;

3.° Que la obligación que se ha pretendido hacer efectiva proviene de la fianza que Palacio y Varela prestaron á favor del doctor Salacar, y el documento en que se constituyeron fiadorer tampoco presta mérito ejecutivo, ya porque no ha sido *reconocido por ellos en la forma legal*, como lo exige el artículo 1,010 del Código Judicial (inciso 6.°), y ya porque la obligación que en dicho documento contrajo el doctor Salazar, y que afianzaron Palacio y Varela, "fué la de devolver al Tesoro Nacional la suma que no alcanzara á devengar en el ejercicio de su empleo"; obligación futura que, por no ser expresa y clara, ni de plazo determinado, ni de pagar alguna cantidad líquida, no trae aparejada ejecución, según el artículo 1,012 de dicho Código;

4.° Que no resultando, por lo tanto, que se obligaran á responder de los tres mil pesos ($ 3,000) anticipados al doctor Salazar, en caso de que éste no emprendiera su marcha para el Brasil en cierto plazo, mal ha podido librarse ejecución contra ellos por dicha suma, y menos por la de quinientos cuarenta pesos ($ 540), que por cambio de moneda recibió posteriormente el doctor Salazar, y de que no se hizo mérito en el documento que, en calidad de fiadores, firmaron Palacio y Varela, porque á estos no se les puede considerar legalmente obligados á más de aquello á que expresamente se comprometieron; y

5.° Que no constando, por otra parte, que pasados los veinte días señalados por el artículo 1.° del Decreto Ejecutivo número 924, de 13 de Diciembre de 1880, para aceptar el empleo, más el de otros veinte para emprender la marcha, se declarara insubsistente el conferido al doctor Salazar, como lo exige el mismo artículo, ha faltado un requisito indispensable para demandar de los fiadores el reintegro de las sumas anticipadas, á cuyo pago sólo se obligaron ellos, en la parte que el deudor principal no alcanzara á devengar en el ejercicio de su empleo, lo cual supone posesión de éste y ejercicio de él por algún tiempo.

Por estas consideraciones y de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador general, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el auto apelado de 30 de Agosto de 1882, por el cual libró ejecución el Administtador principal de Hacienda Nacional de Barranquilla contra Francisco J. Palacio y José del C. Valera, por la cantidad de tres mil quinientos cuarenta pesos ($ 3,540), de que los juzgó responsables al Tesoro público, como fiadores del doctor Clemente Salazar M.

Los apelantes deberán pagar el doble valor del papel sellado que debieron suministrar y no suministraron, para la actuación del recurso y esta sentencia.

Hágase saber, déjese copia, publíquese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Sumper—Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En tres de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Octubre veintiocho de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—A excitación del Administrador general de las Salinas marítimas, se procedió á averiguar por el Alcalde del Distrito de Cartagena si por Clemente Julio, patrón de la canoa "California," se había cometido el delito de contrabando de una cantidad de sal procedente del Departamento del Magdalena; pero por cuanto aparecía que tal delito se había consumado en la Provincia de Lorica, correspondiente al Departamento de Bolívar, se remitieron las diligencias al Juez del Circuito últimamente mencionado, por ser el conpetente para conocer del asunto de que se trata.

Adelantada la averiguación por dicho Juez hasta que creyó perfeccionado el sumario, dictó al fin el auto de diez y nueve de Agosto último, sobreseyendo en el procedimiento, y dispuso que se remitiera en consulta á esta Superioridad.

Adoptada en esta segunda instancia la tramitación correspondiente, se tiene en consideración para resolver lo que convenga, que el conocimiento de los delitos de la naturaleza del presente no está atribuído á la Corte Suprema por la Constitución ni por la ley 61 de 1886, en cuyo caso, según lo prevenido en el inciso 2.° del artículo 99 de la misma ley, es al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar á quien compete conocer de este negocio.

Por lo tanto, la Corte Suprema de la Nación, de acuerdo con

el concepto del señor Procurador general, declara que no es competente para conocer del auto consultado, debiendo remitirse el expediente, previo aviso al Juez de la primera instancia, al Tribunal referido, á quien está atribuído el conocimiento, como queda expresado.

Notifíquese, cópiese, publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Francisco A. Fernández—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En de los mismos notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Juticia—Bogotá, Octubre treinta y uno de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Juzgábase á Bernardino y Nicanor Portilla, en el Juzgado 5.° del Circuíto de Bogotá, por el delito de resistencia á las órdenes de la autoridad, cuando Ramón Olivos, defensor legal de los interesados, pidió una prórroga del término probatorio, la cual le fué negada por el Juez respectivo, doctor Enrique Rojas B. Del auto que negó la prórroga pidió revocatoria el defensor, y subsidiariamente interpuso apelación para el caso de que no se revocase aquella providencia; y como el Juez negó la revocatoria y negó también la apelación, Olivos, pidió se le diese copia de lo conducente para ocurrir de hecho al Tribunal de Cundinamarca, y ocurrió en efecto. Pero es el caso que, al conocer del recurso el Tribunal, advirtió que, tanto el pedimento de copia hecho por Olivos, como la copia misma que se le expidió en el Juzgado, se habían escrito en papel común; por lo cual, dicho Tribunal ordenó la devolución del expediente, y dispuso que se compulsara copia para averiguar la responsabilidad en que hubiera incurrido el mencionado Juez, por haber permitido la preparación del recurso de hecho en papel blanco.

Substanciado que fué el incidente, establecido en debida forma el carácter oficial del sindicado, y comprobado que eran tres las fojas útiles de papel blanco empleadas, el Tribunal por auto del 24 de Agosto último, condenó al doctor Rojas B., á pagar la multa de quince pesos ($ 15), á razón de cinco pesos por cada hoja de papel; invocándose para la imposición de la pena lo dispuesto en el artículo 531 del Código de Procedimientos Judiciales del extinguido Estado de Cundinamarca, y en el 27 del Decreto Ejecutivo, con fuerza de ley, número 480 de 1886. El interesado pidió revocatoria del auto condenatorio y apoyó su pedimento en numerosas consideraciones, por lo que, á virtud de auto para mejor proveer,, se practicaron nuevas diligencias. Al cabo, el Tribunal negó, el 9 de Septiembre, la revocatoria pedida, y concedió la apelación de su auto, en el efecto suspensivo. Así, ha venido el asunto á esta Superioridad, y para resolverlo, después de seguida la tramitación del caso, se considera:

1.° Es verdad que el artículo 531 del Código de Procedimientos Judiciales del extinguido Estado de Cundinarca, prevenía que para la copia de lo actuado, que había de presentar el que interpusiese recurso de hecho, cuando fuese el acusador particular ó el procesado, debía acompañar á su pedimento el papel sellado necesario para la compulsa, y lo es también que á principios de Julio del presente año, cuando fué expedida la copia de que se trata, regía el Código de Enjuiciamientos de Cundinamarca, en la generalidad de sus disposiciones. Pero asímismo es cierto que la renta de papel sellado había pasado á ser de la República, y así quedó organizada por el Decreto número 480 de 5 de Agosto de 1886. Desde ese momento quedó sin vigor toda disposición legislativa de los extinguidos Estados relativa al empleo de papel sellado, sin que debieran aplicarse otras disposiciones que las nacionales. No siendo, pues, aplicable al caso presente el artículo 531 del Código citado, es en el mencionado Decreto donde debe buscarse la disposición pertinente.

2.° El artículo 9.° del citado Decreto estatuye que no será obligatorio extender en papel sellado las catorce clases de documentos y diligencias que enumera, entre ellos, los siguientes:

"8.° Las diligencias que se practiquen en negocios criminales de policía, de fraude á las rentas públicas, y en general, todas aquellas actuaciones que tengan por objeto la imposición de alguna pena.

"10. Los documentos, actos, providencias ó diligencias de cualquiera especie para los cuales esté admitido el uso de papel común por el Código Civil, por el Código Judicial ó por leyes vigentes."

Ahora bien: entre las leyes vigentes existía, en cuanto quedaba compatible con el decreto número 480, la ley 46 de 1880, que organizó el derecho de timbre nacional, y su artículo 9.° disponía que se continuasen extendiendo en papel común (sin timbre ni sello): "La actuación en los sumarios y causas criminales de la competencia del Poder Judicial de la Unión; los escritos de los detenidos y encausados por motivo criminal de la misma competencia, etc." Y es evidente que si esta ley estaba vigente, conforme á ella el papel común era suficiente para toda actuación en causa criminal, así como para los escritos ó pedimentos de los individuos encausados. Por consiguiente, si el defensor, cuando en causa criminal obra en representación y defensa de su defendido, tiene los mismos derechos que éste para tal objeto, por lo mismo, puede servirse de papel blanco para todo lo que la defensa legal requiera en la causa.

Cuanto al número 8.° del citado artículo 9.° del Decreto número 480 de 1886, es claro que la palabra *diligencias* de que usa, abarca todo lo que en un juicio criminal puede practicarse; por ejemplo, todo lo relativo á los recursos de apelación interpuestos por los reos ó sus defensores. Y siendo esto así, y siendo, como lo es, el recurso de hecho un medio subsidiario que reemplaza el de apelación y conduce al mismo resultado, es evidente que las actuaciones en los recursos de hecho de los procesados criminalmente, están comprendidas en la regla relativa á las actuaciones comunes.

3.° Es notorio que nadie se promueve á sí mismo juicio criminal; que en este caso, nadie litiga espontáneamente, sino que se defiende, obligado por la acusación; que es el Estado quien inicia la causa y está interesado en su prosecución; que el reo, al defenderse, no obra por un interés puramente personal, de aquellos que motivan el impuesto del papel sellado; y que, por lo tanto, es justo facilitarle los medios de defensa, entre los cuales uno de los más eficaces es lo gratuito del papel que sirve para la actuación. A esto se añade que es incomparablemente mayor, entre los procesados, el número de los ignorantes y pobres, y por lo mismo, á estos comprende con mayor eficacia la justa exención que la ley ha querido establecer en materia de impuesto nacional de timbre y papel sellado. Debe, pues, deducirse y establecerse que, cuando se sigue causa criminal de cualquiera clase, y el procesado ó su defensor tiene que interponer recurso de hecho para obtener justicia, en defecto de apelación, sus pedimentos preparatorios del recurso, así como las copias que consiguientemente se le han de compulsar, no deben extenderse en papel sellado, sino en papel común.

Por estas consideraciones, y de acuerdo en todo con el parecer y pedimento del señor Procurador general, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la sentencia apelada, y absuelve al doctor Enrique Rojas B., de la multa que por ella se le había impuesto.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Rnmón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del treinta y uno de Octubre se publicó esta sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En dos de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué la sentencia que antecede al señor Procurador.

ARANGO M.—Guerra A., Secretario.

Se notificó por edicto.

Guerra A., Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Noviembre dos de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Juan G. Calderón ocurre desde la cárcel provincial de Cartagena, solicitando excarcelación; y pide esto en un memorial, en el que ni entabla denuncio respecto de algún funcionario que pudiera ser justiciable por la Corte, ni formula queja, ni acompaña documento alguno, hasta el punto de no saberse si en realidad está preso. Y aun cuando no faltaran estos comprobantes, como lo que solicita no es de competencia de la Corte, nada puede ella resolver sobre el particular.

Más, como hace varios cargos al ex-Jefe Civil y Militar (así lo llama), de la Provincia de Mompox en la Aldea de Río Viejo, —por si acaso en ello hubiere algún fundamento de verdad, y teniendo presente el artículo 19 de la Constitución, que establece que las autoridades de la República están instituídas para protejer á todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y asegurar el respeto recíproco de los derechos naturales, previniendo y castigando los delitos; pásese este memorial al señor Procurador general, para que dicte las providencias que en su prudencia y en la esfera de sus atribuciones juzgue adecuadas, para que, por quien corresponda, haga averiguar los hechos que Juan G. Calderón menciona.

Transmítase á éste la presente resolución de conformidad con el artículo 45 de la Constitución.

Martínez—Samper—Calderón—Isaza—Morales—Noguera—Sanclemente—Guerra A., Secretario.

En tres de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete. notifiqué el auto anterior al señor Procurador general,

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Noviembre tres de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Averiguábase en la Corte, á virtud de denuncia dada desde el año de 1877, la responsabilidadad en que hubiera podido incurrir Antonio María Ramírez, Juez que fué del extinguido Territorio de Bolívar, por haber radicado el despacho Judicial en lugar distinto de la capital del mismo Territorio; y como, despues de considerables dilaciones, se advirtió que estaba pendiente otro sumario instruído contra el mismo Juez, por demora en el seguimiento de un juicio criminal contra Anacleto López, por heridas, la Corte mandó acumular los dos sumarios para considerarlos conjuntamente. Pero fuese por causa del extravío del segundo sumario, ó por algún otro motivo que se ignora, es lo cierto que no se llevó á efecto la acumulación de autos, y que esta Superidad pronunció, con respecto al primero, el 15 de Mayo de 1882, un auto por el cual mandó suspender el procedimiento, en razón de estar prescrita la acción criminal, por el delito de abandono del empleo.

Remitido años despues al Tribunal Superior de Santander el sumario relativo á la demora causada por el Juez, en el juicio contra López, se halló que también estaba prescrita, desde muchos años antes la acción criminal, conforme á los artículos 68, 69, 71, 72 y 422 del Código Penal de la Nación, y á la reforma cuadragésima tercera de la ley 46 de 1876, y en consecuencia, por auto dictado el 2 de Julio último, el mismo Tribunal Superior declaró la prescripción de la pena, y que, por lo tanto, debía cesar el procedimiento. Este auto fué consultado con esta Superioridad, y como faltaba el expediente relativo al sumario seguido con relación á la causa de López, por auto del 14 de Septiembre se resolvió pedir ese mismo expediente al Tribunal Superior.

Se ha recibido dicho expediente, y substanciado el asunto, volviendo á emitir dictamen el señor Procurador general, se descubre que, si bien fué comprobada la falta cometida por el Juez del extinguido Territorio de Bolívar, no hay objeto alguno en el examen de su naturaleza y los descargos que dió el sindicado, muchos años há, puesto que, habiendo sido cometida la falta en 1876, la acción criminal está prescrita, y no hay motivo para continuar la investigación.

En consecuencia, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador, confirma el auto consultado.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En cuatro de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Noviembre tres de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Ha sido remitido en consulta á esta Superioridad el auto de sobreseimiento que el Tribunal Superior del Distrito judicial de Antioquia dictó, con fecha diez de Septiembre del presente año, en el sumario instruído para averiguar la responsabilidad en que pudiera haber incurrido Julio Ferrer, como Juez del Circuíto de Antioquia, al decretar, el veinticinco de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco, la excarcelación, con fianza, de Juan C. Lora.

La Corte para resolver el punto, considera:

1.° Que el veinticinco de Noviembre de mil ochocientos ocheta y cinco en que fué dictada la orden de excarcelación por el Juez Julio Ferrer, no estaban comprobados los hechos imputados á Juan C. Lora, porque no había sino una declaración en contra, de testigo hábil.

2.° Que aunque por el delito de golpes ó maltratamientos de obra á los funcionarios ó empleados públicos la ley no permitía excarcelación (artículo 1,515 del Código Judicial del extinguido Estado de Antioquia, ó sea el artículo 21 de la ley 186 de 1884) aparece que el Juez Ferrer la concedió al sindicado Lora, á los veinticinco días de estar preso, impulsado más bien por el temor de incurrir en responsabilidad, y no por malicia, ó que tuviera voluntad de violar la ley, como lo reconoce en su auto el Tribunal, en el cual hace mérito también de las atestaciones sobre la buena conducta observada por Ferrer como Juez, deduciendo de tales antecedentes, que pudo haber cometido un error, pero no un delito, puesto que no hubo voluntad ni malicia.

Por lo expuesto, y de acuerdo con el dictamen del señor Procurador general, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto consultado, por el cual se sobresee en el sumario instruído contra Julio Ferrer, Juez del Circuíto de Antioquia, por haber admitido una fianza indebidamente, pronunciado por el Tribunal Superior del Distrito judicial de Antioquia el diez de Septiembre último.

Notifíquese, cópiese y devuélvase el expedienie.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En cuatro de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Noviembre cinco de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Las precedentes diligencias sumarias han tenido por objeto averiguar la responsabilidad que pudiera caber al Jefe Municipal de Palmira, Nemesio Colmenares Paz, por el hecho de haber sacado de la cárcel de esa ciudad á los presos Gabriel Olave y Jesús Palomino, sumariados y detenidos por la Alcaldía por el delito de hurto, incorporando á dichos presos en el Batallón 3.° de línea á su paso por Palmira; hecho que tuvo lugar en veinticinco de Marzo de mil ochocientos ochenta y seis, según se deduce de la boleta que original y en copia corre á las fojas 6 y 7 de la actuación.

Adelantado el sumario y acreditada la condición oficial del sindicado, el Tribunal Superior del Distrito judicial del Cauca, por auto de veintidós de Septiembre del presente año, separándose del dictamen del Ministerio público, declaró sin lugar al seguimiento de causa, sobreseyendo en el procedimiento y consultando su providencia con ésta Superioridad.

Substanciada la consulta, con audiencia del señor Procurador general, éste es de concepto que debe revocarse el auto en referencia, decretando el enjuiciamiento; y para resolver el asunto, la Corte considera lo siguiente:

El Tribunal funda su auto en que en la fecha en que tuvo lugar el procedimiento de Colmenares, éste estaba autorizado por el Gobierno del Cauca, como Jefe Municipal, para obrar militarmente; en que conforme al artículo 1,339 del Código Militar, las reglas del Derecho de Gentes dadas para el caso de guerra exterior, son también aplicables por el Gobierno y por los Jefes de operaciones militares, en los casos de rebelión y de guerra civil; en que según el artículo 1,340 de ese Código, la ley marcial produce también sus efectos durante el estado de guerra, aun en el propio país sometido á la obediencia de las autoridades constitucionales, siempre que deba aplicarse á los desafectos, sospechosos de ser auxiliadores del enemigo, según el artículo 1,246; en que Colmenares podía emplear medidas de rigor contra los desafectos, juzgando como tales á los detenidos Olave y Palomino; y últimamente, en que, no estando aún en esa época restablecido el orden público, la ley marcial autorizaba, en beneficio de la autoridad militar del *Ejército ocupante*, la suspensión de las leyes civiles y criminales y de la administración y gobierno del país perteneciente al territorio ocupado.

Para la Corte ninguna de las consideraciones en que el Tribunal se apoya, aun dando por cierto que en el Territorio del Cauca fuera apremiante la situación de guerra en el mes de Marzo de mil ochocientos ochenta y seis,—cosa que no es conforme con la notoriedad pública,— son suficientes para sostener el auto consultado; pudiendo estimarse aquellas consideraciones como altamente peligrosas para el régimen civil en un país constituído y sujeto á régimen legal.

El artículo 1,246 del Código Militar permite, es cierto, á los Jefes de tropas, ocurrir á medidas de rigor contra los desafectos á su causa ó contra los sospechosos; pero es cuando ese Jefe se encuentra en presencia del enemigo ó amenazado de cerca por él, y cuando las necesidades imperiosas de la situación lo requieren así para defender el país de los invasores ó de sus cómplices. Se comprende esto perfectamente en una situación extrema, porque se trata de la salvación del país, y porque esos Jefes representan en tales momentos á la sociedad y al régimen legal amenazados, debiendo sobreponerse á todo la salud de la patria. Pero cuando nada de eso ocurre, cuando no intervienen tan premiosas circunstancias, los Jefes militares no tienen que ver sino con las operaciones de su oficio, quedando las autoridades civiles y políticas para todo lo demás concerniente á la seguridad pública y á la marcha social.

Según el artículo 1,238 del mencionado Código, un territorio se considera ocupado cuando el Gobierno legal es, por el hecho de la invasión, incapaz de ejercer en él públicamente su autoridad; y cuando el invasor se encuentra en posibilidad de sustituír allí el ejercicio de la autoridad que existía. Concurriendo esas dos circunstancias, la ocupación comienza; y cesa en el momento en que esas circunstancias dejan de existir.

Ahora bien: en el territorio del Cauca y en la ciudad de Palmira, cuando el hecho materia de la investigación ocurrió, regían las leyes, existían las autoridades políticas y judiciales, y no había enemigo ninguno al frente, que exigiera medidas especiales de rigor, menos contra individuos que, suponiéndolos desafectos, estaban incapacitados de obrar, por la circunstancia de hallarse presos.

No había, por lo tanto, ni sombra de lo que pudiera llamarse ocupación militar en tiempo de guerra; y es completamente inconducente la cita de las disposiciones que tal ocupación establecen, para autorizar el hecho de Colmenares, quien, sin razón justificativa, se sobrepuso á las autoridades judiciales y civiles. Y aun cuando la ley nacional produce sus efectos en estado de guerra, aun en el propio país sometido á la obediencia de las autoridades constitucionales, es para aplicarla, en los términos yá dichos del artículo 1,246, citado atrás, á los sospechosos ó auxiliadores del enemigo; en cuyo caso no se encontraba la ciudad de Palmira ni los individuos encarcelados, según lo revela el expediente.

Por último, según el certificado de Su Excelencia el Vicepresidente de la República, que corre á la foja 29, las autorizaciones de que fueron investidos los Jefes Municipales del Cauca, desde Diciembre de mil ochocientos ochenta y cuatro hasta mediados de mil ochocientos ochenta y seis, fué para obrar militarmente en cuanto á la organización de fuerzas, disciplina, subordinación, moralidad, servicio y régimen de tales fuerzas; lo cual no tiene que ver con el régimen de las cárceles ni con la custodia de los criminales; máxime cuando conforme á los artículos 1,345 hasta 1,346 inclusive del Código Militar, las medidas de guerra, aun siendo necesarias, deben ponerse en armonía con las garantías individuales, respetando éstas en lo posible.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el auto consultado y del que se ha hecho mención al principio; y debiendo aplicarse el Código Penal del extinguido Estado del Cauca, por cuanto el hecho punible de que se trata fué cometido cuando regía esa legislación, y por ser menor la pena que para el caso contiene ella; se declara que hay lugar á seguir juicio de responsabilidad, por los trámites extraordinarios, contra el Jefe Municipal de Palmira, Nemesio Colmenares Paz, por violación de la parte final del artículo 327 del Código Penal del extinguido Estado del Cauca.

El Tribunal del Cauca, al que se devolverá la causa, dará curso al juicio, como Juez de primera instancia, observando el procedimiento respectivo.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En siete de los mismos se notificó este auto al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL

Señores Magistrados.

El Tribunal Superior del Distrito judicial de Antioquia os consulta la sentencia que profirió en 15 de Julio último, por la cual declaró probada la excepción de pago propuesta por Vicente López en la ejecución librada contra él por el Colector de Hacienda de San Vicente, en el Departamento de Antioquia.

La ejecución se libró para hacer efectiva la fianza de cárcel segura, por cantidad de $ 100, otorgada por el ejecutado á favor de Joaquín é Idelfonsa Alzate, enjuiciados por un delito común.

De conformidad con el artículo 1,000 del Código Judicial del extinguido Estado de Antioquia, vigente cuando el ejecutado articuló de excepciones, correspondía al Tribunal Superior conocer en todas las instancias de las excepciones que se propusieran en los juicios seguidos por jurisdicción coactiva, siempre que en éstos mediara el interés del Estado.

Tal facultad quedó limitada posteriormente (artículo 100 de la ley 61 de 1886) á conocer en primera instancia de los expresados negocios, razón por la cual el Tribunal, surtida dicha instancia, ha consultado la sentencia proferida en ella con esa Superioridad, á quien corresponde decidir la consulta, según lo prevenido en el inciso 3.° de la sección 2.ª del artículo 21 del Código Judicial.

Para mejor fijar vuestra competencia en el asunto conviene advertir de paso que por el citado artículo 1,000 del extinguido Estado de Antioquia, se daba el carácter de contenciosos, en todo lo relativo á excepciones y tercerías, á los juicios iniciados por los empleados con facultad coactiva.

Por lo que hace al mérito del fallo consultado, el infrascrito es de concepto que está arreglado á la ley y al mérito de los

autos, pues es un hecho que el fiador ejecutado cumplió con la obligación de aprehender á sus fiados y de ponerlos á disposición de la autoridad; á lo cual se hace preciso agregar que, si en la presentación de los reos hubo alguna demora, no cabe duda que ella dependió de circunstancias que infirman por completo la responsabilidad del expresado fiador, quien de esa manera, ó sea con la prestación de lo que debía, quedó libre de la obligación y, de consiguiente, tuvo motivo legal suficiente para fundar la excepción de pago.

Por lo tanto, el infrascrito es de opinión que confirméis el fallo consultado, adicionándolo con la declaratoria de que las otras excepciones propuestas por el ejecutado no están probadas, pues sobre tales excepciones nada se resolvió en el expresado fallo.

Bogotá, 23 de Septiembre de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

A tiempo en que se iban á sacar á licitación pública los bienes sobre los cuales se trabó la ejecución seguida por el Administrador Tesorero de la Aduana de Barranquilla contra el señor Isaac Senior, se presentó el señor Jacob Cortizzos haciendo tercería coadyuvante, á nombre de la Sociedad Colectiva denominada "Sucesores de J. J. Senior," tercería que fué admitida y substanciada debidamente por el Juez 1.° de la provincia de Barranquilla, quien por sentencia de 31 de Diciembre de 1885 estableció la prelación de los créditos, dando la preferencia en el pago al crédito del tercerista sobre el del fisco nacional.

Procede este último crédito de derechos de importación causados á deber por el ejecutado, y que ascienden á la suma de $ 7,228-15 centavos.

Justificada plenamente la existencia de los créditos á que vino á contraerse la ejecución, se dictó el fallo de prelación de que se deja hecha referencia; el cual fué elevado en consulta á esa Superioridad.

Fúndase este fallo en que la concurrencia del Fisco como acreedor de primera clase, por tratarse de un impuesto fiiscal (artículo 2495 del Código Civil), no afecta en nada la hipoteca especial constituída, como seguridad del crédito del tercerista, en los bienes en que se ha hecho la traba de la ejecución.

Baste saber, en efecto, que el artículo 2 500 del Código Civil dispone que los créditos de la primera clase no se extenderán á las fincas hipotecadas, sinó en el caso de no poderse cubrir en su totalidad con los otros bienes del deudor.

Como se vé, los expresados créditos no excluyen los hipotecarios, sino en la contingencia de que los otras bienes, esto es los no hipotecados, no alcancen á cubrir dichos créditos en su totalidad; caso en el cual no se halla el crédito fiscal que nos ocupa, pues de autos no consta que la ejecución se haya dirigido sobre otros bienes del deudor distintos de los afectos á la hipoteca que ha servido para introducir la tercería, no pudiéndose concluír, por lo tanto, que aquellos bienes son insuficientes para el pago de la deuda.

Si la ejecución se hubiera dirigido sobre todos los bienes del deudor, y estos no hubieran alcanzado á cubrir la deuda, comprometidos habrían quedado también los gravados con hipoteca, pues en ese supuesto si se habría cumplido la condición exigida para que los créditos de primera clase alcancen á excluír los hipotecarios.

Mas como esto no ha sucedido, debe convenirse en que el crédito asegurado con la hipoteca prefiere al del fisco, siendo, por lo tanto, confirmable el fallo de primera instancia en que así se declaró.

Bogotá, 12 de Octubre de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

El presente sumario se instruye contra el señor Julio Estévez Bretón por faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones como Jefe que fué del Ramo de Telégrafos en la Secretaría de Fomento. La instrucción fué iniciada con fecha 17 de Agosto de 1882; y hasta la fecha aún no está perfecta, por no haberse practicado la ampliación solicitada por el Agente fiscal del Circuíto de Bogotá, en su vista de fecha 13 de Octubre de 1885 (foja 19 vuelta). La averiguación siguió su curso con notables demoras, hasta el 4 de Agosto último, en que el Juez 1.° Superior del Distrito judicial de Cundinamarca, se declaró incompetente para conocer en el asunto por ser de notoriedad que el señor Julio Estévez Bretón desempeña actualmente las funciones de Magistrado del Tribunal Superior del Tolima.

Los juicios de responsabilidad dan lugar á varias consideraciones que es preciso examinar detenidamente, para el efecto de fijar la competencia de las autoridades que deben intervenir en dichos juicios.

Si el procesado ha dejado de ejercer las funciones del empleo en el cual incurrió en responsabilidad y no desempeña ningún otro destino público, la naturaleza de la causa es suficiente á determinar la competencia; en esas causas no se juzga al individuo particular, se juzga al funcionario público, por los abusos ú omisiones en que hubiese incurrido en el ejercicio de su empleo y no obsta que el procesado haya perdido su categoría oficial para que en el juzgamiento siga sometido á la jurisdicción de la autoridad llamada por la ley á conocer de las causas de responsabilidad contra aquel empleado.

Ahora bien: si el procesado ha dejado de ejercer las funciones del empleo en el cual incurrió en responsabilidad, pero ha sido promovido á un empleo de mayor categoría ¿esa circunstancia influye por sí sola para que varíe la jurisdicción á que estaba sometida la causa?

Concretando el estudio de esta cuestión al presente caso, que se refiere á la averiguación de la responsabilidad en que pueda haber incurrido el señor Julio Estévez Bretón, en el ejercicio de sus funciones como Jefe del Ramo de Telégrafos, pero que en la actualidad desempeña el destino de Magistrado del Tribunal Superior del Distrito judicial del Tolima, conviene determinar con claridad á qué auteridad corresponde el conocimiento.

El inciso 4.°, sección 1.ª, artículo 21 de la ley 61 de 1886, da á la Corte Suprema la atribución de conocer en una sola instancia, de las causas de responsabilidad, por infracción de la Constitución ó leyes, ó por mal desempeño de sus funciones, que se promuevan contra los Magistrados de los Tribunales de Justicia.

La infracción de la Constitución ó leyes y el mal desempeño de funciones de que trata la disposición anterior, con relación á los Magistrados de los Tribunales de Justicia, no pueden comprender las infracciones cometidas por los mismos individuos que hoy ejercen la magistratura y que fueron ejecutados en ejercicio de un empleo inferior que no expresa el inciso 4.° citado arriba.

Pero como el espíritu de la ley tiende á substraer á los altos funcionarios de la esfera jurisdiccional de los Jueces inferiores, para darles garantías contra los odios que nacen del ejercicio de su misma autoridad, debe considerarse esa prerrogativa como elemento principal para asegurar la integridad é independencia de esos altos funcionarios; por consiguiente, este Ministerio cree que de este sumario debe conocer esa Superioridad, y os pidé que dispongáis se agregue al expediente copia autorizada del nombramiento de Magistrado del Tribunal del Tolima, hecho en el señor Estévez Bretón, y del acta de posesión respectiva; ordenando, además, que se cumpla la ampliación solicitada por el Fiscal del Circuíto de Bogotá.

Practicadas esas diligencias que exige el perfeccionamiento del sumario, el infrascrito emitirá concepto sobre lo principal del asunto.

Bogotá, 13 de Octubre de 1887.

CARMELO ARANGO M.

CONSTITUCIÓN DE COLOMBIA.

ESTÁ DE VENTA en la Tesorería general, en edición de cuaderno, á 20 centavos el ejemplar.

BOGOTÁ.—IMP. DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 47

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 26 de Noviembre de 1887.

CONTENIDO.

PÁG.

ACUERDOS DE LA CORTE.

Acuerdo número 112, motivado por una consulta del Juez del Circuíto de Amalfi (Departamento de Antioquia)..... 369
Id. número 113, propuesto por el señor Magistrado doctor Calderón..... „
Salvamento de voto del señor Magistrado doctor Isaza..... „
Acuerdo número 114, motivado por una consulta del Tribunal Superior do Cundinamarca..... 370

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

Pronunciada por apelación de Concepción Méndez, en asunto de suministros..... „
Id. con relación á un juicio ejecutivo seguido contra Vicente López A..... 371

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Confirmatorio de otro de sobreseimiento del Tribunal Superior de Antioquia..... 372
Sobre incompetencia de la Corte para conocer de un juicio militar.. „
Sobre nulidad de un auto proferido por el Tribunal Superior de Bolívar..... „
Confirmatorio de un auto de sobreseimiento proferido por el Tribunal Superior de Antioquia..... „
De sobreseimiento respecto de la denuncia de Isidoro Burgos contra el Magistrado del Tribunal Superior de Panamá Dr. Enrique López Zapata..... 373

NEGOCIOS CIVILES.

Sobre nulidad de una actuación en juicio ejecutivo..... 374
Revocatorio de otro proferido por el Juez del Circuíto de Medellín en un juicio ejecutivo..... „

CORRESPONDENCIA.

Notas del Secretario de la Corte..... 375

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL.

Relativa á un sumario por responsabilidad de un Juez de Circuíto. „
Id. á un juicio civil con el Departamento del Cauca..... „
Id. á una competencia sobre juicio ejecutivo..... 376
Id. á un auto proferido por el Tribunal Superior del Magdalena, en negocio criminal..... „

GACETA JUDICIAL.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

ACUERDO NUMERO 112.

En Bogotá, á ocho de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, con el fin de tomar en consideración la consulta que hace el Juez del Circuíto de Amalfi, relativa á las multas que se puedan imponer por dicho Juzgado, por nota número 100, de 23 de Septiembre del año en curso; y el señor Magistrado doctor Isaza, á quien tocó el asunto en repartimiento, propuso la siguiente resolución, que fué unánimemente adoptada:

"Devuélvanse estas diligencias al señor Juez del Circuíto de Amalfi, para que si desea consultar á la Corte algunos puntos sobre dudas acerca de la inteligencia de las leyes sobre organización y procedimiento, lo haga en esta forma:

"1.° Formulando las cuestiones en términos claros y precisos, de modo que por ellas solas se comprenda el asunto de que se trata, sin referencia á casos particulares ocurridos.

"2.° Haciendo una consulta para cada caso dudoso, pues esto es necesario para la división del trabajo entre los Magistrados y para evitar complicaciones.

"Cumplidas estas condiciones, si alguno de los Magistrados lo juzga conveniente, someterá las dudas á la Corte, pues sólo ellos y los Tribunales de Distrito pueden hacer estas consultas, de conformidad con el artículo 116 de la ley 57 de 1887.

"Publíquese para que sirva de regla general en materia de consultas."

Con lo cual se terminó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados y el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NÚMERO 113

QUE ACLARA EL DE 22 DE OCTUBRE ÚLTIMO, NÚMERO 100.

En Bogotá, á nueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, constituída la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, se tomó en consideración el siguiente proyecto de resolución, que presentó el señor Magistrado doctor Calderón, el cual fué aprobado por mayoría de seis votos:

"Como el Acuerdo número 100, de 22 de Octubre último, publicado en el número 44 de la *Gaceta Judicial*, sólo tuvo por objeto resolver la consulta relativa á la adherencia de estampillas de 3.ª clase, respecto de las sentencias que se refieran á una cantidad que sea ó exceda de cinco mil pesos ó cinco mil hectáreas de tierras baldías, proporcionalmente, pues que la Corte no ha considerado derogado el artículo 17 del Decreto ejecutivo de 5 de Agosto de 1886, por el artículo 5.° de la ley 3.ª del corriente año, es claro que lo resuelto en el indicado Acuerdo, no quiere decir que está alterada la regla general de que las sentencias definitivas que dicten la Corte Suprema y los Tribunales Superiores de Distrito, se extiendan todas en papel sellado de 3.ª clase, y que las sentencias definitivas que dicten los Jueces de Circuíto, deben extenderse en papel sellado de 2.ª clase. Se aclara en estos términos el Acuerdo número 100 citado al principio; advirtiéndose que uno y otro Acuerdo se refieren á los casos que ocurran en adelante.

"Publíquese para conocimiento de los Tribunales y Juzgados de la República."

Con lo cual se terminó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

SALVAMENTO DE VOTO.

El señor Magistrado doctor Luis M. Isaza salvó su voto en los términos siguientes:

"El infrascrito Magistrado, Luis M. Isaza tiene la pena de separarse de la opinión de sus respetables colegas, en la expedición del Acuerdo que precede, por el cual se aclara ó adiciona el de veintidós de Octubre último, número 100. El infrascrito emitió en la Corte, tan luégo como vió publicado el Acuerdo que acaba de citarse, la idea de que debía declararse

insubsistente, no sólo porque se omitió en él hacer mérito del artículo 5.° de la ley 3.ª del corriente año, que en su concepto derogó implícitamente el inciso 18, artículo 5.° del Decreto ejecutivo, con fuerza de ley, de 5 de Agosto de 1886, sobre papel sellado y timbre nacional, sino también porque juzga que el artículo 17 de este mismo Decreto está reformado en lo relativo al empleo de estampillas para las sentencias que se dicten en juicios que excedan de cinco mil pesos.

Juzga el suscrito, derogado el citado inciso 18 del artículo 5.°, porque el artículo 5.° de la referida ley 3.ª lo reemplazó completamente, y hoy no se aplica aquel inciso en ningún caso, sino éste artículo.

"Derogado como está el inciso 18, la referencia que á él hace el artículo 17, queda necesariamente sin efecto, y, por consiguiente, no hay hoy una disposición vigente que exija el empleo de estampillas en las sentencias definitivas.

"Corrobora esta opinión la consideración de que la ley 57 del año en curso, en sus artículos 140 y 141, dispuso que los juicios se adelantaran de oficio, aunque la parte no diera el papel sellado para la actuación ó para la sentencia definitiva, después de requerida, ó cuando no comparezca á la Secretaría; pues en este caso el Secretario debe suplir con papel común el sellado, que la parte debería suministrar. Se infiere de estas disposiciones que el Legislador estimó que para extender la sentencia, sólo se requiere el papel sellado competente ó el común suplido por el Secretario. Nada dijo acerca de las estampillas para las sentencias, y si han de exigirse éstas, como lo ha resuelto la Corte en los pleitos que pasen de cinco mil pesos, no podría cumplirse respecto de ellos lo que ordena el artículo 141 citado, puesto que, á pesar de haber papel sellado suministrado por la parte, ó común suplido por el Secretario, la sentencia no podría extenderse, por falta de estampillas.

"Por estas consideraciones, el infrascrito es de opinión que el Acuerdo número 100, á que se ha referido, debe derogarse ó declararse insubsistente, y salva en consecuencia su voto.

Luis M. Isaza— Martínez— Samper—Calderón— Morales—Noguera—Sanclemente—Guerra A., Secretario.

ACUERDO NUMERO 114.

En Bogotá, á doce de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, se ocupó en considerar la consulta de que se hablará en seguida; y el señor Magistrado doctor Martínez, á quien tocó el negocio en repartimiento, presentó el siguiente proyecto de resolución, que fué adoptado por unanimidad:

"Por consecuencia de dos resoluciones contrarias, dictadas por dos Magistrados del Tribunal de Cundinamarca, en la Sala de lo Civil, y á virtud de reclamación expresa de parte interesada, solicitando remedio y deplorando la anarquía á que dan lugar las resoluciones dictadas por Tribunales unitarios; el de Cundinamarca, por acuerdo celebrado el día siete de los corrientes, remitido el día ocho, envió á esta Superioridad, para que dicte la resolución que estime legal, los dos citados autos contrapuestos, por considerar dudoso el caso y considerarlo como punto de procedimiento.

La sujeta materia de la duda estriba en saber si los documentos ó pagarés simples, otorgados á favor de los Bancos particulares de emisión, giro y descuento, antes de la ley 27 de 1887, prestan mérito ejecutivo después de esta última ley, para hacer efectivos los créditos, sin ser previamente reconocidos por los obligados, ó si conservan el caracter de escrituras que les daba la ley 15, de 20 de Enero de 1874, dando en consecuencia lugar á la acción ejecutiva.

Este parece ser el objeto de la consulta, aun cuando el Tribunal se limita á referirse á los autos mencionados y á decir que *el caso es dudoso. Planteado así el asunto,* la Corte considera:

"Si lo que se quiere saber es cuál de los dos Magistrados discrepantes tuvo razón y cuál es el auto legal, eso no lo puede hacer la Corte en vía de consulta y en la forma en que el asunto ha venido. Si lo que se quiere es—cosa que en esencia vendría á ser lo mismo que se acaba de indicar—que la Corte decida de una manera abstracta y general, si los pagarés otorgados á favor de los Bancos prestan actualmente mérito ejecutivo sin ser reconocidos; eso tampoco lo puede resolver la Corte por consulta, porque no se trata de procedimientos, sino de la estimación ó valoración de un instrumento, de un título ó de una prueba, lo cual pertenece al derecho sustantivo civil.

"Es verdad que en el Código de procedimiento se determinan las diversas especies de pruebas para los diversos juicios; pero eso es cosa distinta de establecer el valor de las pruebas de las obligaciones y la fuerza de los instrumentos, lo cual está determinado en el Código Civil.

"Si la Corte entrara á resolver esta consulta, fallaría *á priori* multitud de litigios no sujetos á su conocimiento, y abriría un campo pernicioso en la secuela de los juicios, ofreciendo también á los Tribunales el medio de evadir la responsabilidad cuando faltaran contra ley expresa. Podría consultársele cuándo una confesión, ó unas posiciones rendidas de este ó del otro modo, una escritura, una inspección ocular, etc., constituyen prueba clara en un caso particular: y yá se comprende el caos á que esto conduciría en la Administración de Justicia.

"La Corte, en tiempo y forma debidas, puede establecer jurisprudencia, y eso servirá de regla; pero no puede avocarse la resolución de los casos particulares extra-juicio.

Por lo expuesto, la Corte se abstiene de resolver la consulta mencionada, ordenando que se devuelvan los antecedentes al Tribunal remitente, con copia de lo resuelto."

Con lo cual se terminó el presente acuerdo, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER.—*Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente. Ramón Guerra A.*, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, ocho de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—En el mes de Enero de mil ochocientos ochenta y cinco dió Concepción Méndez, en la ciudad de Moniquirá, al Comisario pagador del Ejército del Norte, la suma de mil cuatrocientos pesos ($ 1,400) en moneda de plata, y recibió la misma suma en billetes del Banco Nacional.

Posteriormente el expresado Méndez reclamó de la Secretaría de Guerra de la República el pago de la diferencia de la moneda de plata sobre los billetes y aunque la Secretaría ordenó el pago respectivo al reclamante, por resolución de diez y nueve de Marzo de mil ochocientos ochenta y seis, tal pago no se hizo, y el interesado tuvo que ocurrir á la Comisión de suministros, demandando el pago de la cantidad de ochocientos cuarenta pesos ($ 840) á que se dice asciende la diferencia de que se ha hecho mención.

La Comisión, por providencia de doce de Agosto del presente año, se declaró incompetente para conocer del asunto, estimando que la operación ejecutada con Méndez no tenía el carácter de suministro, de empréstito ni de expropiación, sino que más bien era un perjuicio inferido al reclamante, de lo cual no podía ocuparse la Comisión por carencia de facultades.

El Ministerio de Guerra ha aprobado en todas sus partes la providencia indicada; pero el apoderado del reclamante ha interpuesto recurso de apelación para ante esta Superioridad.

Está comprobado en el expediente con la certificación de Su Señoría el Ministro de Gobierno, quien fué el Jefe de operaciones sobre el Norte, que Concepción Méndez dió la suma de mil cuatrocientos pesos ($ 1,400) en dinero, en cambio de la misma cantidad en billetes del Banco Nacional, sin descuento alguno.

Aparece también plenamente demostrado que en el mes de Enero de mil ochocientos ochenta y cinco los billetes del Banco Nacional estaban al cuarenta por ciento (40 por 100) como rata máxima, no solamente en la plaza de Moniquirá sino en todas las poblaciones importantes del Estado de Boyacá.

Según estos antecedentes, para la Corte es fuera de duda que la operación ejecutada por Concepción Méndez fué un verdadero suministro, ó si se quiere, un suplemento hecho al Gobierno, según la calificación que le dió el señor Ministro del Tésoro en su resolución de fecha cinco de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis. Este suministro ó suplemento consistió en la suma de mil cuatrocientos pesos ($ 1,400) que Méndez entregó en dinero efectivo al Comisario pagador del Ejército del Norte; y como lo que recibió en cambio fué una cantidad mucho menor, puesto que en esa época los billetes del Banco Nacional se cotizaban en la plaza de Moniquirá á la rata máxima del cuarenta por ciento (40 por 100), es evidente que el Gobierno debe, en realidad, al reclamante la diferencia entre el valor de los mismos billetes y el de la moneda metálica. Así lo reconoció también de una manera expresa el Ministerio de Guerra, en la providencia que dictó con fecha diez y nueve de Mayo de mil ochocientos ochenta y seis.

Es cierto que, conforme al decreto de diez y nueve de Febrero del año últimamente expresado, los billetes del Banco Nacional quedaban asimilados á moneda metálica desde el primero de Mayo siguiente; pero esta circunstancia no puede afectar en nada los derechos adquiridos por el reclamante; pues en primer lugar el suministro fué hecho en el mes de Enero de mil ochocientos ochenta y cinco, cuando nose había expedido el decreto; y en segundo lugar, Méndez entabló su primera reclamación en el mes de Marzo de mil ochocientos ochenta y seis, cuando todavía no estaba en vigencia dicho decreto, para el efecto de la asimilación de los billetes á la moneda metálica.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, oído el concepto del señor Procurador, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que el Tesoro de la Nación debe pagar á Concepción Méndez la cantidad de ochocientos cuarenta pesos ($ 840), valor de la diferencia que tenía la moneda metálica sobre los billetes del Banco Nacional cuando aquél dió al Comisario pagador del Ejército del Norte la suma de mil cuatrocientos pesos ($ 1,400) en dinero efectivo.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y pásese el expediente al Ministerio de Guerra, para que se haga el reconocimiento del crédito de acuerdo con el número 2.° del artículo 2.° de la ley 44 de 1886.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del ocho de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, se publicó esta sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En nueve de los mismos la notifiqué al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

En el mismo día la notifiqué al señor Francisco Groot.

GROOT—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Noviembre diez de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Habíase abierto causa criminal en el Juzgado del Circuíto de Río-Negro (en el extinguido Estado de Antioquia), contra Joaquín é Ildefonsa Alzate, por el delito de heridas, y, para no ser reducidos á prisión, ofrecieron fiador por suyo á Vicente López A., quien, por cierto, no quería prestar la fianza ni tenía ningún motivo personal para comprometerse. Pero á excitación de los funcionarios públicos que intervenían en el asunto, prestó la fianza carcelera, el 4 de Junio de 1885, y se obligó á pagar cien pesos en caso de que, requerido por la autoridad competente, no presentase á los reos y no los solicitase y aprehendiese á su costa, si fuere necesario.

Habiendo sido después condenados los reos, se le notificó á López, *en día feriado*, el 6 de Enero del presente año, auto por el cual se le exigía la presentación de los reos Alzates, para lo cual se le dió el término de *quince días;* y como no se hubiese verificado oportunamente la presentación, el Juez prorrogó el término, ó mejor dicho, fijó uno nuevo de un mes, lo que se notificó á López el 14 de Febrero. Este tomó interés en la aprehensión de los reos, y presentó á la Ildefonsa el día 21 y á Joaquín Alzate el 22, esto es, á los siete y ocho días de recibir la intimación; con lo cual la administración de justicia no quedó burlada.

Pero desde que López no presentó los reos en el primer término, se sacó la copia de algunos de los documentos conducentes, y con ellos, el respectivo Colector de Hacienda libró mandamiento de ejecución contra el fiador de cárcel de los Alzates, por la suma de cien pesos ($ 100) á que se había obligado, y los costos de la cobranza; y como López no tuviera más bienes que su casa de habitación, que fué avaluada en aquella misma suma, sobre ella se trabó la ejecución. El ejecutado opuso la excepción de nulidad, pago ó cumplimiento de la obligación y condición no cumplida; y como se trataba de asunto en que estaba interesado el Tesoro del Departamento, hubo de conocer de las excepciones el Tribunal Superior, conforme á la Legislación que regía en Antioquia.

Dicho Tribunal falló sobre las excepciones, por sentencia pronunciada el 15 de Julio del año en curso, declarando probada la de pago ó cumplimiento de la obligación, y mandando, en consecuencia, que cesase la ejecución trabada contra Vicente López A.; y después, por cuanto en la segunda instancia correspondía el asunto á la Corte Suprema, por tratarse de interés del Departamento de Antioquia, resolvió, por auto del 23 del mes citado, consultar la sentencia con esta Superioridad. Seguida la tramitación del caso, el señor Procurador general es de concepto que se confirme la sentencia, y puestos los autos al despacho el 8 de los corrientes, la Corte, para resolver, considera:

Primero. Es patente, como lo observa en su sentencia el Tribunal Superior, que fué nula la notificación hecha á López el 6 de Enero, para que presentase á sus fiados, puesto que se le hizo en día feriado, y conforme á los artículos 182 y 183 del Código Judicial que rigió en Antioquia hasta el 22 de Julio último, *no debían* despacharse en días feriados por los funcionarios y empleados públicos, sino aquellas diligencias urgentes de cuya demora podría seguirse algún perjuicio especial. Y la notificación que se hizo á López en día feriado no era urgente, porque ni la declaró tal el Juez de la causa, ni el delito de que se trataba era grave, ni había el menor riesgo de que López ó sus fiados se fugasen del Distrito de San Vicente. Así, como la diligencia de notificación se practicó contra lo expresamente prohibido por la ley, fué nula, según el artículo 7.° del Código Civil de Antioquia, aplicable al caso; y entonces, es claro que López no fué responsable de la falta relativa al plazo.

Segundo. Pero suponiendo que así no fuese, el Juez de la causa prorrogó el plazo á López, ó le concedió uno nuevo, por auto del 28 de Enero, el cual fué notificado el 14 de Febrero, y dentro de este término que era de un mes, esto es, dentro de ocho días, López cumplió con su deber entregando los reos fiados, sin que la administración de justicia sufriese perjuicio. Es claro, pues, que López cumplió con la obligación contraída, prestó la cosa ó ejecutó el hecho á que se había obligado, y como esto constituye pago, conforme al Código Civil y á la estricta justicia, es obvio que está probada la excepción de pago. Las otras dos excepciones, que eran impertinentes, no han sido probadas, y sobre ellas nada resolvió el Tribunal de la primera instancia.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la sentencia consultada.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del diez de Noviembre se publicó esta sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En once los mismos, notifiqué al señor Procurador la sentencia que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogota, cuatro de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—En el año de 1884, María Isabel Durango dió denunció ante el Jefe Muncipal del Distrito de Bolívar, en el Departamento de Antioquia, de que su esposo, Jesús María Rondón, había incendiado la casa en que la denunciante vivía con sus hijos, hecho motivado por un disgusto que entre los dos esposos había tenido lugar.

Pasado el proceso al Juez del Circuíto de Andes, este empleado dictó auto de prisión contra el sindicado Rondón, y después de haberse practicado algunas otras diligencias, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, sobreseyó en el asunto, según así consta en los autos.

Con motivo del sobreseimiento, el Tribunal ordenó se averiguara si la detención del sindicado había sido arbitraria, y al efecto se han instruído las presentes diligencias, que tienen por objeto examinar si el Juez del Circuíto de Andes pudo incurrir en responsabilidad por haber dictado su auto de prisión.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia ha sobreseído también en este asunto, y ha consultado dicha resolución con esta Suprema Corte.

Según aparece de la copia del sumario primitivo, el Juez sindicado ordenó la detención de Jesús María Rondón, fundado en la declaración de varios testigos que decían haber presenciado que éste había ejecutado el hecho que se le atribuía. Es verdad que posteriormente fué desvanecido el cargo; pero esta circunstancia nada arguye contra la conducta del Juez, pues en la época en que el auto fué dictado existía la prueba legal suficiente para decretar la detención provisional del expresado Rondón.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador general, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto de sobreseimiento consultado.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el proceso,

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretarto.

En cuatro de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto anterior al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Noviembre ocho de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El General en Jefe, Comandante general del Ejército, remitió á esta Suprema Corte el expediente que contiene el juicio militar seguido contra el soldado Juan Nepomuceno Rodríguez, del Batallón Boyacá, número 3.°, en consulta de la sentencia que pronunció el Consejo de Guerra ordinario, con fecha veintiséis de Julio del presente año, condenando al reo como responsable de dos hurtos cometidos, uno en el local de la Exposición de Bellas Artes, estando de facción, y otro en el cuartel, á la pena de presidio por el término de cuatro años, lanzamiento del Ejército, privación de todo empleo público nacional, de toda pensión pagada por la República, suspensión de los derechos políticos, mientras dure la pena corporal y pago de costas é indemnización de daños y perjuicios.

Adoptada en esta segunda instancia la tramitación prescrita por el artículo 1,540 del Código Militar, se está yá en el caso de resolver lo conveniente y para ello se tiene en consideración:

1.° Que notificada dicha sentencia al reo, á su defensor y al Fiscal no interpusieron contra ella recurso alguno.

2.° Que, si bien, cuando se dictó tal sentencia la Corte podía conocer, por vía de consulta, de las pronunciadas por los Consejos de Guerra, esto no puede tener lugar en la actualidad, vigente como se encuentra el artículo 231 de la ley 153 del presente año, según el cual, contra las sentencias definitivas que dicten dichos Consejos, no podrá interponerse para ante la Corte Suprema otro recurso que el de nulidad, por las causales que establece el artículo 1,534 y siguientes del referido Código Militar.

Por lo tanto, la Corte Suprema de la Nación se declara incompetente para conocer del presente negocio, debiendo devolverse los autos á la autoridad remitente para que les dé el curso legal.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderon—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, diez de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Con fecha ocho de Agosto del presente año, el Tribunal Superior del Distrito judicial de Bolívar dictó, en Sala de un solo Magistrado, auto de sobreseimiento en la instrucción sumaria iniciada para averiguar la responsabilidad que hubiera podido corresponderle á Nicolás L. Lozano como Gobernador de la Provincia de Magangué, por haber dejado de aprehender á un reo que se hallaba en el territorio de su mando.

El Magistrado que pronunció el auto lo mandó consultar con el resto del Tribunal, y éste, por resolución de cinco de Septiembre próximo pasado, ordenó que se surtiera la consulta ante esta Suprema Corte, y al efecto le fué remitido el proceso.

Esta Corporación ha determinado, en casos como el presente, que desde la vigencia de la ley 57 del presente año, los Tribunales de Distrito, cuando tengan que pronunciar sus fallos de primera instancia, deben hacerlo en Sala de tres Magistrados; y que, por consiguiente, un proceder contrario deja viciado el proceso de nulidad, por insuficiencia de jurisdicción.

En atención á lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo con el parecer del señor Procurador, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara nulo este proceso desde el auto de sobreseimiento inclusive; y dispone que vuelva al Tribunal remitente para que sea decidido en la forma legal.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la misma fecha se notificó al señor Procurador este auto.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Noviembre diez de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—A tiempo en que se instruía en el Circuíto de Amalfi, del Departamento de Antioquia, un sumario contra Alejandro Botero G. y José María Palacio, por riña y heridas, ejercía las funciones de Fiscal en el mismo Circuíto el doctor Isidoro Isaza, y como tal, pidió el juzgamiento de los sindicados. Dos meses después, cuando la causa debiera estar abierta y adelantada, fué nombrado Juez del Circuíto, y con este carácter continuó conociendo de ella y la siguió hasta ponerle término en primera instancia, sin manifestar, mientras tanto, que en su persona concurriera alguna causal de impedimento.

Llevado el negocio al Tribunal Snperior del Distrito, dispuso éste, en el fallo que pronunció en segunda instancia, en Sala de un solo Magistrado, que se sacara copia de lo conducente para averiguar la responsabilidad en que pudiera haber incurrido dicho Juez, por no haberse manifestado impedido para intervenir en el juicio; y preparado, en consecuencia, el sumario, declaró el Tribunal, en Sala plena, sin lugar á formación de causa, y sobreseyó en el procedimiento, fundándose particularmente en que los términos en que está concebido el numeral

7.° del artículo 1,682 del Código Judicial de Antioquia, vigente cuando se incurrió en la omisión, son un tanto ambiguos ú ocasionados á error; en que no había motivo que pudiera inducir á dicho Juez á incurrir voluntaria y maliciosamente en la falta expresada, y en que, por el contrario, en sus intereses estaba manifestar el impedimento para ahorrarse trabajo, cosa que no hizo, á pesar de lo recargado de su Juzgado, en el cual se ha distinguido por su laboriosidad, honradez y acierto.

Consultado el auto de sobreseimiento con esta Suprema Corte, y substanciado del modo legal, el señor Procurador general es de concepto que se le revoque, y para resolver el punto se tiene en consideración:

1.° Que estando el negocio en estado de sumario fué cuando el Fiscal Isaza promovió acusación contra los sindicados Botero y Palacio y pidió que se les llamara á juicio; pero como no fué *parte* en éste, sino Juez, y los impedimentos y recusaciones de que tratan los artículos 1,682 y 1,683 de dicho Código se refieren á las partes, que no las hay hasta que se declara con lugar á seguimiento de causa, excusable es el Juez Isaza por haber omitido expresar lo que á su juicio no era impedimento y que no lo embarazaba para absolver á los procesados, si en el plenario justificaban su inocencia;

2.° Que la manifestación de cualquiera de los motivos que producen impedimentos en el Juez, tiene por objeto separarlo, si no se le prorroga la jurisdicción, del conocimiento de la causa en que él ó sus parientes hasta cierto punto tengan interés personal, y faltaba éste en el caso presente;

3.° Que, por otra parte, el inciso 7.° del artículo 1,682 del Código Judicial del extinguido Estado de Antioquia, no es efectivamente muy expreso, porque al emplear la palabra *acusador*, no da á conocer con claridad si se refiere al acusador público, que no lo es en todo caso el Fiscal, porque su oficio es de buena fe, acusa ó nó, según el mérito de lo actuado; y

4.° Que tal ha sido posteriormente el concepto del legislador, supuesto que en el artículo 749 del actual Código Judicial de la Nación no ha comprendido entre los impedimentos de los Jueces y Magistrados el de que se trata; y aunque es verdad que lo que se investiga es si el Juez Isaza estuvo en el deber, conforme á la legislación de Antioquia, de manifestarse impedido en la causa contra Botero G. y Palacio por haber pedido en el sumario el juzgamiento de éstos, no sería bien visto llamarlo á juicio por una omisión, si acaso lo fué, que la ley actual no considera como falta y que por consiguiente no castiga.

Por lo tanto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, comfirma el auto de sobreseimiento consultado, proferido en cinco de Septiembre último por el Tribunal Superior del Distrito judicial de Antioquia.

Hágase saber el presente, déjese copia de él, publíquese y devuélvase el sumario á dicho Tribunal.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En el mismo día se notificó este auto al señor Procurador general.

ARANGO M.— *Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Noviembre diez de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El señor Procurador general del Departamento de Panamá, ocurrió al Juez 1.° de lo criminal, en veinticuatro de Octubre del año próximo pasado, acompañando un ejemplar del número 668 de *El Cronista*, que contenía un remitido titulado "Compras y ventas," firmado por el doctor Isidoro Burgos, en el cual se formulaban cargos de mucha gravedad contra el Magistrado de aquel Tribunal, doctor Enrique López Zapata; y pidió que, estimándose dicho remitido como un denuncio, se procediese á la práctica de las diligencias conducentes á la comprobación de los hechos denunciados.

En dicho remitido se asevera lo siguiente: 1.° Que el señor López Zapata iba en las sombras de la noche á la casa de Francisco Ardila, abogado de la Compañía del Ferrocarril de Panamá; 2.° Que era enemigo de Burgos y quería conocer en negocios en que éste funcionaba como apoderado, descendiendo así, de Juez, ... á parte interesada, y 3.° Que López Zapata había tenido tiempo para leer el expediente del juicio que sostenía Felipe Ramírez, poderdante de Burgos, contra la expresada Compañía, y sin embargo, lo retenía indebidamente. El mismo remitido, concluye así: "No sé por cuanto hayan avaluado al señor López Zapata; pero es de suponer que no sea por poco, según el interés que demuestra por conocer en el negocio y la cólera que manifiesta para el que tiene el valor de recusarlo."

En veinticuatro de Noviembre del año citado se hizo comparecer á Burgos, quien declaró, bajo juramento, que el remitido "Compras y ventas" de que se ha hablado, fué escrito, firmado y llevado por él á la imprenta; que se ratificaba en su contenido; que parte de los comprobantes los había presentado en ese mismo día á la Secretaría de Gobierno y Guerra del Departamento, y que eran igualmente auténticos unos documentos que aparecieron con su firma en el número 665 del mencionado periódico, con el título de "Se vende y se oculta."

Examinado Francisco Ardila tres días después, declaró que efectivamente el doctor López Zapata lo había visitado dos veces, entre siete y siete y media de la noche, una por mero cumplimiento, en correspondencia de la visita que el declarante le había hecho, y la otra con el objeto de enterarse de la salud de Eduardo López Zapata, á quien Julio Ardila, hijo del testigo, había dejado enfermo en Colón.

Los documentos presentados á la Secretaría de Gobierno y Guerra á que aludió Burgos en su referida declaración, fueron á su vez presentados al Juzgado, con oficio de veintisiete de Noviembre, por el Procurador general del Departamento, á quien sin duda los pasó aquel Gobierno, y esos documentos constituyen la prueba de que, habiendo sido entregado en lectura al Magistrado López Zapata, con fecha treinta de Octubre del año anterior, el expediente de que ya se ha hecho mención, no lo devolvió sino el día nueve del siguiente mes.

El mismo Agente del Ministerio público, con el objeto de complementar el sumario, pidió también, por escrito de diez y ocho de Enero del presente año, que se pidiese al Tribunal del Departamento copia auténtica de la resolución definitiva en el incidente de recusación propuesta por Isidoro Burgos contra el Magistrado López Zapata; resolución que se remitió en copia y de la cual consta, en substancia, que la recusación se fundó en la causal de enemistad entre Burgos y el Magistrado y en que un hijo de éste había recibido dinero de la Compañía del Ferrocarril; que negados los hechos por el recusado, se abrió el incidente á pruebas; y antes de que se practicaran las que había solicitado el recusante, sustituyó éste el poder en Antonio Ramírez E., el cual manifestó que no continuaba en la recusación, á cuyo desistimiento se opuso el apoderado de la Compañía, por envolver aquélla una acusación gravísima contra los representantes de ésta; que en semejante caso, el legislador, en guarda de la dignidad y honra del Tribunal y del Magistrado recusado, había dispuesto, por el artículo 723 del Código Judicial, que se diera por terminada la incidencia, y así se resolvió en efecto, declarando no probada la recusación y condenando al recusante en costas y al pago de una multa de cincuenta pesos.

Remitidas las diligencias á esta Suprema Corte, como á quien competía conocer del juicio de responsabilidad á que pudiera haber lugar contra el Magistrado denunciado, se dictó el auto de cuatro de Marzo último, disponiendo su ampliación, de la cual no se ha obtenido la más ligera prueba de los hechos referidos en el denuncio.

En efecto, los testigos citados para comprobar que el doctor López Zapata frecuentaba, en horas avanzadas de la noche, la casa de Francisco Ardila, declaran que sólo lo vieron una vez, como á las siete de la noche, dijo uno, y otro, entre ocho y media ó nueve, sin que les conste el objeto de tal visita.

El Magistrado del mismo Tribunal, doctor Agustín Jované, certifica á foja 22, cuaderno 2.°, que el Magistrado López Zapata pidió, en el acto de la audiencia pública en el juicio mencionado, se hiciese constar que la presencia de Burgos en aquel acto implicaba la ratificación expresa, de su parte, á la resolución dictada por el Tribunal en el incidente de recusación de que yá se ha hablado; quedando así desvanecida la imputación hecha

por Burgos, de odio y enemistad contra él, é interés de parte del doctor López Zapata en conocer del juicio mencionado.

Que la propuesta de transacción del pleito, que se dice hecha por el denunciado, sólo consta por el dicho del denunciante, lo cual no constituye ni una semiplena prueba del hecho en referencia.

Y por último, que los cargos del denuncio se hacen consistir en actos que no tienen nada de punibles, sino que, al contrario, deben reputarse inocentes mientras no se pruebe lo contrario.

Por lo tanto, y reproduciendo las razones aducidas por el señor Procurador general, como deducidas fielmente del mérito de lo actuado, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, sobresee en las presentes diligencias.

Y por cuanto resulta que el Magistrado José María Rodríguez se resistió á firmar la sentencia acordada por la mayoría del Tribunal, en el pleito tantas veces mencionado, la Secretaría compulsará copia de la declaración del mismo Rodríguez, de foja 34 á 35, cuaderno 2.°, y la agregará á la copia de que trata el punto 2.° de la resolución de la Corte, contenida en el Acuerdo número 85 de treinta de Septiembre último.

Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En once de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto que precede al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Noviembre siete de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Por comisión de la Tesorería general de la República, el Juzgado de ejecuciones nacionales libró mandamiento ejecutivo, en 26 de Marzo de 1885, contra Evaristo de la Torre, por la cantidad de seis mil cuatrocientos sesenta y un pesos, ochenta y cinco centavos ($ 6,461-85 cs.), procedentes, según dicho auto, de saldo á cargo del responsable, como contratista de las Salinas de Chita y Muneque, en el año de 1862, y por liquidación y resolución de la Secretaría de Hacienda.

Permaneció inactivo el asunto, sin que conste el motivo, hasta 28 de Junio del corriente año, en cuya fecha, sin más antecedentes, el Juzgado ejecutor ordenó se remitiera un edicto emplazatorio al Tesorero general, contra los herederos de Evaristo de la Torre, á fin de que ese edicto fuera publicado en el *Diario Oficial*; envío que se cumplió en el mismo día, según nota del Secretario.

Cerca de dos meses después el Juzgado ejecutor, sin haeer constar por qué se expidió aquel edicto, sin que él figure original en los autos, como debiera ser, y sin que aparezca que tal edicto fuera cumplido, procedió de plano, en 22 de Agosto último, á nombrar defensor de bienes á la mortuoria de la Torre; y llamado y posesionado el defensor, se intimó á éste el auto ejecutivo del año de 1885, mencionado al principio. El defensor apeló de él, y la apelación le fué concedida en el efecto devolutivo; por lo cual fueron enviados los autos á esta Superioridad, con nota de 12 de Septiembre.

Substanciado el recurso en esta segunda instancia, es tiempo de que la Corte se ocupe del asunto en referencia; y no entrará en estimar el auto ejecutivo apelado, ni los fundamentos en que él se apoya, por existir vicio en la actuación, como se hace notar en seguida.

Por regla general, el mandamiento ejecutivo debe notificarse en persona al ejecutado, citándolo y requiriéndolo para ello; siendo ésta una garantía preciosa, porque sin ella cualquier individuo podría ser sorprendido con una ejecución, viéndose envuelto en los perjuicios y sinsabores á ella consiguientes, tal vez sin motivo y, sobre todo, sin su conocimiento. Así, la notificación personal no puede omitirse, sino cuando después de buscado el ejecutado, resulte que absolutamente no es hallado, ni se tiene noticia de su paradero; en cuyo caso, con constancia de ese antecedente, se puede hacer la citación por edicto, que debe permanecer constantemente fijado en lugar público por treinta días, y que debe publicarse tres veces por lo menos en los periódicos oficiales, trayendo á los autos todas esas diligencias. Y si el ejecutado ha muerto, y si su domicilio y representantes son conocidos, hay que citar á todos éstos personalmente, cosa que no ha sucedido, aun cuando se insinúa en este expediente el fallecimiento de la Torre, quien parece que residía en esta ciudad.

Como las diligencias enviadas á la Corte en este asunto están destituídas de todas estas formalidades, la consecuencia recta es que la notificación del mandamiento ejecutivo no ha sido hecha legalmente, y que el defensor de bienes nombrado no ha podido representar debidamente la causa del ejecutado; y como además de la nulidad consiguiente á la insuficiencia é ilegitimidad de la personería, que es común á todos los juicios, existe la nulidad especialísima para el juicio ejecutivo designada en el inciso 1.° del artículo 916 del Código Judicial, y en el artículo 173 de la ley 57 de 1887; es claro que la actuación está viciada de nulidad procedimental, en su clase y en su forma, no saneada hasta ahora.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el dictamen del señor Procurador general, declara nulo todo lo actuado en este expediente, desde el auto dictado por el Juzgado de ejecuciones nacionales, en 28 de Junio del corriente año en adelante, y el cual corre á la foja 57. En consecuencia, se ordena la devolución de estos autos al Juzgado Ejecutor, para que proceda conforme á derecho, subsanando las faltas cometidas.

Notifíquese, cópiese, publíquese y cúmplase.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En el mismo día notifiqué al señor Procurador general el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Noviembre nueve de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Por resolución del Juez 3.° del Circuíto de Medellín, en el despacho de lo civil, dictada en veintitrés de Septiembre del corriente año, ha venido en consulta á esta Superioridad el auto proferido por el Juzgado 1.° del mismo Circuíto, en veintiséis de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete, en el cual declara nulo el mandamiento ejecutivo dictado por el Administrador principal de Hacienda nacional, fechado el diez y ocho de Marzo de mil ochocientos ochenta y seis, en el que, usando de la jurisdicción coactiva, libró orden de pago contra Ireneo Escobar por la suma de mil pesos en oro, en monedas de á cinco pesos, procedentes de una encomienda perdida por el Mensajero Ulpiano Isaza, y de quien era fiador solidario el ejecutado.

Substanciada la consulta, con audiencia del señor Procurador general, es tiempo de resolver acerca de ella; para lo cual se considera lo siguiente:

Fúndase la nulidad declarada en que aquel mandamiento ejecutivo librado por el Administrador principal de Hacienda de Medellín, está firmado de un modo ilegal por el empleado ejecutor, porque no tiene sino la inicial del nombre, aunque comprende el apellido entero; y que lo mismo acontece con el Contador que autoriza aquel mandamiento, funcionando como Secretario; y para declararla se apoya el Juez en el artículo 188 (hoy 139) del Código Judicial, el cual ordena que los empleados usen en los decretos, sentencias y autos que dicten, firmas enteras, sin emplear abreviaturas en el primer nombre y en el primer apellido.

El Juez llama á esta informalidad nulidad absoluta, aplicándole las reglas consiguientes á las nulidades de los actos ó contratos civiles, sin tener en cuenta que si esa informalidad existiera, sería referente á la parte procedimental, como que es la ley de procedimiento que el mismo Juez cita, la que pudiera estar infringida. Olvida también que ni en las nulidades comunes á todos los juicios, ni en las especiales referentes al juicio ejecutivo, se encuentra esa que el Juez ha establecido; debiendo concluírse de todo esto, que si alguna cosa pudiera existir, sería un motivo de responsabilidad contra el empleado que faltó

á una formalidad, pero no un vicio completo en la actuación.

Pero ni aun lo último acontece, porque el artículo que el Juez consultante supone violado, establece terminantemente, en su parte final, que los autos interlocutorios pueden ser firmados con media firma; y como el mandamiento ejecutivo es auto interlocutorio, ni aun por ese lado puede tacharse la providencia del Administrador de Hacienda.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, administrando jnsticia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el dictamen del señor Procurador, revoca el anto consultado y de que se deja hecha mención, ordenando que se dé al expediente el curso legal.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

El el mismo día se notificó al señor Procurador general este auto.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

CORRESPONDENCIA.

Número 1,134—Bogotá, Noviembre 9 de 1887.

Señor Procurador general de la Nación—Presente.

Remito á Usía la Relación de los negocios criminales despachados por el Tribunal Superior del Cauca en el semestre comprendido entre el 1.° de Abril y el 30 de Septiembre del corriente año, Relación que se ha enviado á esta Superioridad por la nota número 634 de la Secretaría del mencionado Tribunal.

Dios guarde á Usía.

Ramón Guerra A.

Número 1,157—Bogotá, 15 de Noviembre de 1887.

Señor Procurador general de la Nación—Presente.

Tengo el honor de remitir á Usía los cuadros de la Estadística judicial correspondiente al primer semestre del año en curso, en los Circuítos de Charalá y el Socorro, en el Departamento de Santander.

Dios guarde á Usía.

Ramón Guerra A.

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL

Señores Magistrados.

Manuel S. Córdoba se presentó, con fecha 27 de Septiembre de 1886, ante el Juez del Circuíto de Sapetrán, en el Departamento de Antioquia, pidiendo se le abriera juicio de concurso de acreedores, por existir pendiente contra él tres juicios ejecutivos de menor cuantía, y por no tener bienes suficientes para el pago total de todos sus créditos pasivos.

Por impedimento del Juez principal aprehendió el conocimiento del juicio el segundo suplente, señor José Cupertino Lara, quien después de algunas diligencias preliminares, declaró formado el concurso, por auto de fecha 15 de Noviembre de 1886. Este auto no fué notificado personalmente al concursado hasta el 22 de Noviembre del mismo año, por no haber el interesado ocurrido en tiempo oportuno, ó suministrado el papel que se necesitaba para la actuación (foja 21).

Cuatro días después de hecha la notificación de aquel auto, es decir, el 26 de Noviembre de 1886, fué rematada en uno de los juicios ejecutivos, pendientes al tiempo que se hizo la cesión de bienes, una casa de propiedad de Córdoba, la cual fué denunciada por éste al pedir la formación del concurso.

Con este motivo el concursado pidió al Juez del Circuíto de Sopetrán declarase la nulidad del remate verificado ante el Juez del Distrito, y esta petición fué resuelta negativamente, por cuanto el procedimiento que se insinuaba no estaba autorizado por el Código Judicial del extinguido Estado de Antioquia, que era el vigente entonces.

Esta última providencia ha servido de fundamento al concursado, para denunciar ante el Tribunal de Antioquia la conducta del Juez del Circuíto de Sopetrán, señor José Cupertino Lara, y pedir se abriera contra éste el correspondiente juicio de responsabilidad.

El denunciante asevera que el remate en el juicio ejecutivo pudo verificarse porque el Juez del concurso fué moroso y negligente en la substanciación del juicio, y atribuye esa morosidad y negligencia á mala voluntad del Juez hacia la persona del consursado.

Ninguna de tales circunstancias resulta comprobada en el proceso; por consiguiente, faltando la prueba del hecho criminoso, el Tribunal de primera instancia, con fecha 3 de Agosto último sobreseyó en la actuación, y remitió en consulta el expediente á esa Superioridad.

Y siendo el auto de sobreseimiento un fiel extracto del proceso y legales sus fundamentos, el infrascrito os pide su confirmación.

Bogotá, 1.° de Octubre de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

Con fecha 15 de Junio de 1886, y ante el Tribunal del Sur del Departamento del Canca, Sergio Duarte demandó al extinguido Estado del Cauca, representado hoy por el Departamento del mismo nombre, por la suma de $ 2,400 á que, según el demandante, ascienden los daños y perjuicios que se le causaron por consecuencia de la infracción del contrato de arrendamiento del impuesto sobre el degüello de ganado mayor, contrato que le fué adjudicado en remate público, en el bienio de 1884á 1886.

El Procurador del Departamento del Sur contestó el traslado de la demanda reconviniendo al actor por la suma de $ 1,114, los intereses al uno por ciento mensual y los costos, suma que éste quedaba á deber al Fisco por cuenta del referido contrato. A la demanda de reconvención opuso Duarte la excepción de compensación la cual le fué admitida, y substanciado el juicio con tales antecedentes, el Tribunal lo falló en primera instancia, por sentencia de 31 de Enero del presente año, cuya parte resolutiva está concebida en estos términos:

"1.° El Tesoro del extinguido Estado soberano del Cauca, representado hoy por el Tesoro del Departamento, debe al rematador señor Sergio Duarte, por daños y perjuicios la suma de $ 2,400;

"2.° El señor Sergio Duarte debe al Tesoro del mismo Departamento, por el contrato de arrendamiento de la renta de degüello, las pensiones que dejó de pagar desde Noviembre de 1885 en adelante, y los intereses legales hasta que termine la vacante; y

"3.° Practíquese una liquidación del crédito á cargo del señor Sergio Duarte, y hasta la concurrencia de los valores de dicho crédito se declara compensado con los valores que son á cargo del Fisco. La parte restante es la cantidad que debe abonarle el Tesoro del Departamento."

De dicha sentencia apeló el Agente del Ministerio público, y el recurso le fué concedido para ante esa Superioridad en cumplimiento de lo prevenido en el inciso 3.°, sección 2.ª del artículo 21 de la ley 61 de 1886.

Para fundar su concepto y para la debida inteligencia del asunto, el infrascrito comienza por advertir que los daños y perjuicios cuya indemnización reclama el demandante, proceden de la reducción ocurrida en el producto de la renta de degüello, con motivo del impuesto adicional decretado por el Gobierno del Estado para atender á los gastos de la última guerra, impuesto que redujo, en más de la mitad, los rendimientos de la expresada renta que, por consecuencia de él, disminuyó notablemente el número de reses degolladas para el abasto público.

Sentado lo que precede y admitiendo como exacta y comprobada la liquidación que sirvió de base, para fijar la cuestión de la demanda, el infrascrito pasa á examinar los fundamentos de ésta para ver de concluír si es ó nó exequible la reclamación.

Ante todo, hace al caso observar que, según se expresó en el pliego de cargos á que se subordinó el contrato de arrendamiento de la renta de degüello, el contratista Duarte se sujetó (cláusula 6.ª) á todas las condiciones previstas por el decreto número 277 de 7 de Noviembre de 1871 (foja 120).

Por dicho decreto (artículo (artículo 21), se previno que los rematadores no podían exigir del Tesoro indemnización alguna por la supresión legal del impuesto ó renta que hubieren rematado, ni por la pérdida ó quebranto que sufran, á virtud de accidente ó caso fortuíto que reduzcan los productos del mismo impuesto ó renta.

Ahora bien: de autos aparece que el estado de guerra en que se halló el país en los años de 1884 y 1885 fué la causa á virtud de la cual hubo de alzarse, por vía de recurso fiscal extraordinario, el impuesto sobre la renta de degüello; por manera que los perjuicios provenientes de esa medida, son de los previstos en el citado decreto número 277, y, por lo tanto, no son reclamables, máxime si se considera que ni del pliego de cargos ni de ningún otro documento aparece que el Estado se hubiera comprometido con Duarte á no aumentar el impuesto sobre los derechos de degüello en el período de duración del contrato.

Conviene recordar que las leyes que rigen sobre reconocimiento de créditos procedentes de gastos motivados por la guerra, no permiten reconocer á cargo de la Nación lo que se reclame por daños y perjuicios; precedente que debe tenerse en cuenta respecto de las reclamaciones de igual procedencia que se dirijan contra los extinguidos Estados ó actuales Departamentos.

Habida consideración á lo expuesto, y estando como está justificada la deuda á que se contrajo la demanda de reconvención, el infrascrito es de concepto que se reforme la sentencia apelada, en el sentido de absolver al Departamento del Cauca del crédito demandado, sin perjuicio de hacer efectiva á cargo del demandante la cantidad por que fué reconvenido.

Bogotá, 3 de Octubre de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

El Juez del Circuíto de Sugamuxi, en el Departamento de Boyacá, provocó competencia afirmativa al Juez del Circuíto del Centro del mismo Departamento, sobre conocimiento de un juicio ejecutivo que Andrés Avelino Mendoza seguía ante el último contra Jesús Lasprilla, por suma de pesos que éste le adeudaba.

Sometida la competencia á la decisión del Tribunal Superior de Tundama, dicho Tribunal, considerando que los dos Jueces que la sostienen ejercen su jurisdicción en diferentes Distritos Judiciales (Tunja y Tundama), se declaró incompetente y devolvió el expediente al Juez del Circuíto del Centro, quien determinó pasarlo al estudio de la Corte Suprema de Justicia, para los efectos de la atribución conferida á esa Superioridad por el inciso 3.°, sección 3.ª, artículo 21 del Código Judicial.

La razón á virtud de la cual se suscitó la competencia viene de que en el Juzgado del Circuíto de Sugamuxi cursa también una ejecución contra Lasprilla, la cual se dirige, por acción real hipotecaria, contra la misma finca que fué embargada para atender á la ejecución seguida, por acción personal, ante el Juez del Circuíto del Centro; siendo de advertir que dicha finca está ubicada en el primero de esos Circuítos y que allí mismo se dice que está avecindado el ejecutado.

Este Ministerio cree que, para la mejor apreciación de los antecedentes jurídicos que han dado margen á la controversia, y para que tenga su debido cumplimiento la disposición consignada tanto en el artículo 707 del Código Judicial del extinguido Estado de Boyacá, como en el 776 de la Nación, se hace preciso tener á la vista lo actuado por ambos Jueces con relación á la competencia, y lo actuado en la ejecución seguida en el Circuíto de Sugamuxi, por Oliverio Reyes contra Jesús Lasprilla; pues respecto á lo primero solamente han venido las comunicaciones del Juez que provocó la competencia, y, por lo mismo, no se conocen, sino por las referencias que á ellas se hacen en dichas comunicaciones, las razones alegadas en contrario por el Juez provocado; y respecto de lo otro, falta el expediente del juicio ejecutivo de Reyes, el cual es indispensable consultar, para saber si, efectivamente, es real la acción ejecutiva ejercitada en él.

Bien se comprende que sin tales datos, la competencia no ha venido aparejada como lo exige la ley, y que, por lo tanto, podría incurrirse en error de apreciación, al decidir solamente en vista de una parte de los autos sobre que versa dicha competencia, y con prescindencia de los demás á que se ha referido éste Ministerio.

Bogotá, 13 de Octubre de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial del Magdalena con fecha 8 de Agosto último, dictó auto de enjuiciamiento por los trámites extraordinarios contra Antonio María Baute, Juez del Circuíto del Valle de Upar, por violación del artículo 359 del Código Penal del extinguido Estado del Magdalena.

Consta de las copias que se han remitido á la Corte que el hecho por que se procede fué cometido antes del 15 de Junio del presente año, es decir, bajo el imperio de la Legislación del extinguido Estado, de acuerdo con el artículo H transitorio de la Constitución.

La falta imputada á Baute consiste, en haber presidido un sorteo de jurados en un juicio criminal, y no haber hecho observación alguna á la circunstancia de que las tachas presentadas contra los Jurados, fueron propuestas por el defensor del reo y no directamente por éste, como lo dice el artículo 1,440, inciso 3.° del Código Judicial de Cundinamarca, adoptado también en el Magdalena, y el Tribunal Superior estimó tal omisión como causal de nulidad, de que se ha considerado responsable al expresado Juez.

El Fiscal del Tribunal Superior pidió la reforma del auto de enjuiciamiento, del 8 de Agosto del corriente año, interponiendo en subsidio apelación del mismo auto, para ante esa Superioridad, para el caso de que no se accediera á la reforma pedida. Negada la reforma el, expediente ha venido á vuestro conocimiento por apelación.

La regla general sancionada por la Constitución de la República, sobre los efectos de las leyes con relación al tiempo en que éstas ejercen su imperio, niega á dichas leyes efecto retroactivo, y la excepción se refiere á los asuntos criminales, cuando la ley posterior imponga imperio. El principio general debe ser la norma del Juez, y á ese principio debe ajustar su criterio hasta el momento de aplicar la pena, que para entonces, si hubiere una nueva ley permisiva ó favorable, ésta tendrá aplicación preferente á la restrictiva, vigente en la época en que se cometió el delito.

El Tribunal Superior del Magdalena abrió causa de responsabilidad contra Antonio María Baute, por infracción del artículo 359 del Código Penal del extinguido Estado del Magdalena, vigente al tiempo de la infracción, sin embargo de haberse expedido la ley 57 del presente año, y de estar en vigencia, en la fecha del auto de enjuiciamiento apelado, el Código Penal de Cundinamarca de 1858, adoptado por aquella ley. El Fiscal del Tribunal no considera aplicable el Código Penal del Magdalena, sino el de Cundinamarca de 1858, y ese es el fundamento de su apelación.

El artículo aplicado por el Tribunal dice así:

"Artículo 359. El Juez de primera instancia que falte en los procesos á las formalidades substanciales cuya omisión los anule, sufrirá, además de la obligación de pagar las costas causadas á las partes, una multa de *veinticinco á cien pesos.*"

El artículo del nuevo Código que considera el Fiscal de preferente aplicación es éste:

"Artículo 402. El Juez de primera instancia, que falte en los procesos á las formalidades substanciales cuya falta los anula, sufrirá, además de la obligación de pagar las costas, una multa de *cincuenta á doscientos pesos.*"

El artículo 359 del Código Penal del extinguido Estado del Magdalena regía cuando tuvo lugar el hecho que motiva la responsabilidad, é impone menor pena que la nueva ley; por consiguiente no hay razón ninguna que justifique la apelación interpuesta por el señor Fiscal, y este Ministerio os pide, en consecuencia, la confirmación del auto apelado.

Bogotá, 14 de Octubre de 1887.

CARMELO ARANGO M.

BOGOTÁ.—IMP. DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 48

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 3 de Diciembre de 1887.

CONTENIDO.

PÁG.

ACUERDOS DE LA CORTE.

Acuerdo número 115, relativo á una consulta del Juez del Circuíto del Norte de Boyacá, elevada por el Tribunal Superior de Tundama 377
Id. número 116, id. á otra id. del Juez 4.° del Circuíto de Bogotá... 377
Id. número 117, id. á otra id. del Juez del Circuíto de Purificación 378
Id. número 118, id. á otra id. del mismo Juez 378
Id. número 119, id. á otra id. del Tribunal Superior del Tolima..... 378
Id. número 120, id. á la decisión de una competencia promovida por el Juez 1.° del Crimen de Medellín 739
Id. número 121, id. á una consulta del Juez municipal de Málaga.... 380
Id. número 122, id. á otra id. del Juez 2.° municipal, en lo civil, de Medellín 380
Id. número 123, id. á otra id. del Juez del Circuíto de Buga, elevada por el Tribunal Superior del Cauca 381
Id. número 124, id. á otra de Su Señoría el Ministro de Gobierno.... 381
Id. número 125, id. á otra id. del Fiscal del Circuíto de Honda..... 381

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

Pronunciada respecto de una reclamacion de Ramón Calderón Angel, por suministros..... 382

DOCUMENTOS VARIOS.

Nota del Secretario de la Corte..... 382

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL

Relativa á una apelación en juicio ejecutivo..... 382
Id. á una reclamación sobre suministros &c., hecha por José A. Carvajal..... 383
Id. á una competencia entre la autoridad judicial y la militar 383
Id. á un juicio de expropiación de dos casas de Pedro María Gutiérrez 384
Id. á una reclamación por suministros, de Juan B. Feijoo..... 384
Id. á un sumario contra Jesús María Rondón, por el delito de incendio 364

GACETA JUDICIAL.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

ACUERDO NUMERO 115.

En Bogotá, á catorce de Noviembre de mil ochocientos ochenta siete, constituída la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, se ocupó en considerar la consulta de que se hablará en seguida. El señor Magistrado doctor Noguera, substanciador en este asunto, presentó el siguiente proyecto de resolución, que fué aprobado por el voto unánime de los señores Magistrados:

"La consulta del Juez del Circuíto del Norte, en el ramo de lo criminal, que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tundama elevó á esta Superioridad, en telegrama de 28 de Octubre último, está concebida en los siguientes términos: Atendidos los artículos 1,560 y 1,561 del Código Judicial, 185 y 43 de la ley 153 de 1887, y siendo las disposiciones sobre arresto provisional del sindicado asunto de puro procedimiento, ¿debe negarse la excarcelación á los sindicados, como reos de forzamiento de mujer, perpetrado antes de la vigencia de la citada ley 153?'

"El artículo 525 del Código Penal Nacional de 1873 dijo: '*comete estupro el que abusa deshonestamente de niño ó niña que no ha cumplido la edad de la pubertad.*'

"El artículo 1,476 del Código Judicial del mismo año, exceptúa de la excarcelación, aún ofreciendo fianza de cárcel segura, á los sindicados de varios delitos, entre otros, del de estupro, cuyos caracteres no podían ser otros que los determinados en el artículo anteriormente copiado.'

"El artículo 102 de la ley 61 de 1886, al atribuír á los Jueces Superiores de Distrito el conocimiento, con intervención del Jurado, de varios delitos, entre los cuales se menciona el de estupro, no pudo referirse sino al definido como tal en el citado Código de 1873, puesto que, á la sazón, no había otro Código Penal vigente.

"Así, pues, si el artículo 185 de la ley 153 del presente año, ha declarado que los expresados delitos están comprendidos en el de estupro, es claro que quiso exceptuarlos, como lo estaba éste, de la excarcelación con fianza, sin consideración á la época de su perpetración, puesto que la razón de la excepción milita con igual fuerza, tanto en los cometidos después como en los cometidos antes de la publicación de la ley; y como además se trata aquí de un punto de puro procedimiento, la doctrina del artículo 40 de la citada ley 153, es terminante sobre el particular.

"En estos términos queda resuelta la consulta de que se trata."

Con lo cual se concluyó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NÚMERO 116.

En Bogotá, á quince de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, S. Señoría el Presidente hizo leer la consulta hecha por el señor Juez 4.° del Circuíto de Bogotá, en nota número 142, del día nueve de los corrientes; y el señor Magistrado doctor Samper, á quien tocó el asunto en repartimiento, presentó el siguiente proyecto de resolución, que fué aprobado por unanimidad:

"Aunque las consultas que se dirigen al objeto previsto en el artículo 116 de la ley 57 del presente año, deben emanar de los Tribunales Superiores ó de los Magistrados de la Corte misma, habiendo ella establecido el precedente de atender todas las consultas, conforme á las proposiciones que sobre estas presentan los señores Magistrados, se considera:

"Sobre dos puntos consulta el Juez 4.° del Circuíto de Bogotá, á saber:

"1.° Si habiendo establecido la antigua Legislación de Cundinamarca (ley 19 de 5 de Noviembre de 1883, Código de

Organización Judicial, artículo 125), que el Juez que conocía de un juicio de sucesión, conociera también de todo asunto relacionado con la mortuoria, por manera que en este caso la competencia no se fijaba según las reglas generales; y no habiendo establecido cosa alguna semejante la nueva Legislación, sino que la competencia se divide entre los diversos Jueces respectivos, ¿qué deberá hacerse en la actualidad? ¿Deberá hacerse nuevo repartimiento de diversos pleitos acumulados en un solo Juzgado, á virtud de la ley anterior? ¿O continuará conociendo de todo el Juez que había acumulado los diversos negocios?

"2.° Si ocurre el caso (como se afirma que ha ocurrido) de que el juicio de sucesión sea acumulado á otro de que conozca un Juez distinto, ¿qué se hace con las demandas entabladas contra la mortuoria? ¿Se remiten al Juez de la acumulación ó se retienen?

"Cuanto al primer punto, la Corte estima que el objeto del repartimiento entre varios Jueces de una misma clase, es distribuír entre ellos el trabajo conforme á reglas fijas que eviten anarquía y confusión, y radicar los negocios en los respectivos Juzgados, de modo que las partes sepan á qué atenerse y no se trastornen la secuela y continencia de las causas. Por lo tanto, una vez hecho el repartimiento y radicados los negocios en los Juzgados, á virtud de anteriores disposiciones legales que surtieron sus efectos, no hay razón alguna para trastornar esa situación. Deben, pues, mantenerse las cosas en el estado que tenían, á menos que, por disposición expresa de la nueva Legislación, pertenezca el conocimiento de alguno de los negocios á distinto Juez.

"Por lo tocante al segundo punto consultado, siendo deficientes los datos en que se apoya la consulta, la Corte se abstiene de resolverla en su estado actual."

"Comuníquese, cópiese y publíquese."

Con lo cual se terminó el presente Acuerdo que firman los señores Magistrados y el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—BenjamínNoguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 117.

En Bogotá, á diez y seis de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los Señores Magistrados y del infrascrito Secretario, tomó en consideración la consulta que con fecha cuatro del corriente y en nota marcada con el número 341, ha sometido á su decisión el señor Juez del Circuíto de Purificación, reducida á saber quién debe figurar como actor en un juicio de deslinde, cuando el contradictor sea el mismo que lo ha promovido, ó si en ese caso el que haya solicitado el deslinde no tiene derecho para contradecirlo; y el señor Magistrado doctor Sanclemente, á cuyo estudio había pasado dicha consulta, propuso el proyecto de resolución siguiente, que la Corte aprobó por unanimidad.

"Conforme al artículo 1,313 del Código Judicial, la contradicción puede recaer, ó sobre el deslinde practicado ó sobre la demanda misma de deslinde; y como naturalmente el que haya intentado ésta, no se opondrá á lo que haya afirmado en ella, de suponerse es que su contradicción sea relativa á la operación del deslinde, por no haberse practicado de acuerdo con los términos de la demanda, caso en el cual el demandante está en su derecho para contradecir tal operación si le perjudica; pero estableciendo dicho artículo que el contradictor se considere como demandado, carácter que no puede asumir por ser él mismo el demandante, conforme á lo dispuesto en los artículos 1,305 y 1,306 del Código citado, es claro que el punto sobre que versa la contradicción se aparta de la regla establecida en el artículo 1,313 del Código Judicial, que supone al contradictor distinto del demandante.

"Hay, por lo tanto, deficiencia en la ley, sobre el primer punto consultado, y la Corte se considera incompetente para suplirla porque según el artículo 116 de la ley 57 de 1887, á ella le toca resolver las dudas que ocurran en la inteligencia de las leyes sobre organización y procedimientos judiciales, pero nó llenar los vacíos ó imperfecciones en que el legislador haya incurrido.

"En el caso en referencia, es decir, en el de que el mismo que haya solicitado el deslinde sea quien contradiga la operación, y venga por esto á revestir los caracteres opuestos de demandante y demandado, corresponde al que se encuentre en tal dificultad elegir el medio legal de removerla, que al Juez ó á la Corte no le es permitido indicarle."

Resuelta así la consulta, la Corte dispuso que se comunicara al señor Juez consultante.

Con lo cual se dió por terminado el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados conmigo el Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 118.

En Bogotá, á diez y siete de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, se ocupó en considerar la consulta de que luégo se hablará; y el señor Magistrado doctor Martínez, á quien correspondió el negocio en repartimiento, presentó el siguiente proyecto de resolución, que fué unánimente adoptado:

"En nota de 11 de los corrientes, número 357, consulta el Juez 1.° del Circuíto de Purificación, sobre si los poderes que se otorguen para pleitos deben ponerse en noticia de la parte contraria, conforme al artículo 332 del Código Judicial, aun cuando no haya todavía juicio y tales poderes se refieran á un litigante presunto.

"La resolución es sobradamente sencilla, y la Corte allana la duda, estableciendo lo siguiente:

"El artículo 332 mencionado se refiere á los cuatro que inmediatamente le preceden, que tratan de los poderes especiales ó generales para pleitos; y éstos no se presentan ante el Juez de la causa, sino para demandar ó para responder en un juicio. Es entonces cuando el Juez debe ver primero si tienen las condiciones legales, y luégo ponerlos en conocimiento de la parte contraria, respectivamente. Por consiguiente, nada de esto puede ocurrir mientras no haya litigio judicial, y sería irregular conferir el traslado de un poder á quien todavía no puede afectar en su aplicación.

"Comuníquese así al Juez consultante y publíquese en la *Gaceta Judicial*."

Con lo cual se terminó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados conmigo el Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 119.

En Bogotá, á diez y ocho de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, se ocupó en considerar la consulta que hace el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Tolima, en oficio de veinte de Octubre próximo pasado, sobre los puntos de que luégo se hablará. El señor Magistrado doctor Luis M. Isaza, á quien tocó el asunto en repartimiento, presentó el siguiente proyecto de resolúción, que fué aprobado por unanimidad:

"El Tribunal Superior del Distrito del Tolima, no esti-

mando suficientemente clara y explícita la resolución que dió la Corte en el Acuerdo número ochenta, de 22 de Septiembre último, á varios puntos dudosos, consultados por el mismo Tribunal, pide una explicación sobre lo siguiente:

"1.° ¿Qué procedimiento debe adoptarse en las apelaciones del Ministerio público en los casos de los artículos 566 567 del Código Fiscal del Tolima y 139 de la ley 49 de 1884 que lo adiciona y reforma, tratándose de casos anteriores al mes de Febrero de 1888, en que debe principiar á regir la ley 140 del corriente año?

"2.° ¿Qué procedimiento deben adoptar los Jueces de primera instancia y los Tribunales Superiores de Distrito, cuando se trate de resolver sobre la nulidad de actos de los Concejos Municipales?

"3.° ¿Cuál es el procedimiento que debe seguirse en la liquidación del impuesto sobre las mortuorias, establecido por leyes fiscales del extinguido Estado del Tolima?

"4.° Si la suspensión de un Acuerdo por el Gobernador del Departamento es un requisito previo é indispensable para que el Juez competente en primera instancia y el Tribunal en segunda, puedan ejercer ls atribuciones que les confieren respectivamente, el artículo 3.°, inciso 4.°, y el artículo 21, inciso 7.° de la ley 142 de 1887.

"Respecto al punto primero, no hay motivo alguno para dudar sobre lo resuelto por esta Corte en el Acuerdo de 22 de Septiembre último, pues los Tribunales de Distrito no tienen hoy competencia en ningún caso, ni aun en negocios pendientes, para conocer de apelaciones sobre cuentas de los responsables al Erario departamental, porque las leyes procesales y de organización judicial, vigentes, que se aplican desde su promulgación (artículos 40 y 43 de la ley 153 de 1887), no atribuyen á los mencionados Tribunales el conocimiento de negocios de esta naturaleza.

"Cuanto al segundo punto consultado, la Corte considera lo siguiente:

"1.° Que todas las leyes de los extinguidos Estados que determinaban el procedimiento de los Juzgados y Tribunales en los casos de anulación de Acuerdo de las Corporaciones municipales, están hoy abolidas y no pueden observarse en ningún caso, ni tenerse en cuenta ni aún para buscar en ellas casos semejantes, porque han dejado de existir, según lo preceptúa el artículo 321 de la ley 153 citada.

"2.° Que ni en el Código Judicial, ni en las leyes que lo adicionan y reforman, ni en ningnna otra se encuentra detallado el procedimiento que deben seguir los Juzgados de Circuíto y los Tribunales Superiores de Distrito, para decidir á cerca de la nulidad ó legalidad de los Acuerdos de los Concejos municipales.

"3.° Que estando estos negocios atribuídos á dichos Jueces y Tribunales, no pueden suspenderlos por causa de deficiencia ú obscuridad en las leyes.

"4.° Que en semejante evento debe adoptarse una tramitación que cuadre con la naturaleza del asunto, y con casos semejantes previstos en las leyes de organización y procedimiento judicial.

"5.° Que es enteramente análogo al caso de que se trata, el que prevée el capítulo 3.° de la ley 61 de 1886, (artículo 21, sección 3.ª, inciso 2.°), al tratar del procedimiento que debe observar la Corte Suprema, para decidir sobre la validez ó nulidad de las ordenanzas departamentales que hubieran sido suspendidas por el Gobierno ó denunciadas ante los Tribunales como lesivas de derechos civiles.

"6.° Que en tal virtud los Jueces y Tribunales que tengan que decidir sobre la nulidad de Acuerdos de las Corporaciones municipales, que hayan sido suspendidos por los Gobernadores ó denunciados como contrarios á la Constitución ó las leyes, ó á las respectivas ordenanzas departamentales, deben, como en el caso referido, dar traslado al Agente del Ministerio público y oír en audiencia pública al representante que nombre el Concejo municipal y al acusador ó demandante, si lo hubiere, pues éste, como parte, debe ser oído.

"El punto tercero de la consulta, que versa sobre el modo de liquidar el impuesto establecido sobre las sucesiones en el Departamento del Tolima, no es de los puntos dudosos que debe resolver la Corte, porque no se refiere á dudas en la inteligencia de las leyes de organización y procedimiento judicial, sino á ordenanzas departamentales del Tolima, sobre negocios puramente administrativos, en que no deben intervenir los Jueces conforme á la nueva Legislación.

"El último punto de la consulta que se considera no ofrece ninguna dificultad:

"Los artículos 8.°, inciso 4.° y 21, inciso 7.°, de la citada ley 61 de 1886, atribuyen á los Jueces de Circuíto en primera instancia y á los Tribunales Superiores en segunda, el conocimiento de los asuntos sobre nulidad de los actos que expidan los Concejos municipales cuando sean contrarios á la Constitución ó leyes de la Nación, ó á las respectivas ordenanzas departamentales; y como para el ejercicio de esta atribución no se ha exigido por la ley, el requisito de suspensión previa por el Gobernador del Departamento; es claro que los Jueces y Tribunales pueden ejercerla sin que para ello obste la falta de suspensión previa decretada por el Gobernador.

"Por las consideraciones que preceden, la Corte Suprema se abstiene de resolver los puntos dudosos determinados bajo los números primero y tercero de este Acuerdo. Respecto del segundo, decide que cuando se trate de la anulación de los actos de los Consejos Municipales, deben proceder los Jueces de Circuíto y los Tribunales Superiores de Distrito del modo que queda indicado en este mismo Acuerdo; y en cuanto al punto cuarto, determina que no es necesario que el Gobernador del Departamento haya suspendido un acto del Concejo Municipal para que los Jueces de Circuíto y los Tribunales Superiores de Distrito, respectivamente, puedan conocer de la nulidad de él, en los casos que determina la ley.

"Comuníquese y publíquese en la *Gaceta Judicial.*"

Con lo cual se dió por terminado el presente Acuerdo, que firman los señores Magistados, conmigo el Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 120.

En la ciudad de Bogotá, á diez y ocho de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, se reunió la Corte Suprema de Juscia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, con el objeto de tomar en consideración la competencia negativa promovida por el General en Jefe del Ejército al Juez 1.° del Circuíto de Medellín en lo criminal, sobre conocimiento de un sumario contra Manuel Abello, y el Magistrado substanciador Luis M. Isaza, presentó el siguiente proyecto de resolución, que fué discutido y aprobado por unanimidad:

"El veintinueve de Marzo de mil ochocientos ochenta y cinco, denunció Macario Mejía al Inspector de Policía del barrio Sur de la ciudad de Medellín, que el Oficial del Ejército de la República, Manuel Abello, le había arrancado con amenaza de muerte la suma de cincuenta pesos, y que además se había llevado cinco pesos que Abello había perdido en el juego. Se dió principio á la instrucción del sumario, se examinaron algunos testigos y después de mucho tiempo pudo recibirse la indagatoria del sindicado, quien refiere los hechos de una manera muy distinta. Asegura que en la casa de juego á que alude el denunciante, trataron de darle de puñaladas, que le quitaron una suma con trampas y que el Jefe del Batallón Vélez, que se trasladó á la casa con una pequeña escolta, se la hizo devolver.

"El Comandante general del Ejército, á quien fué remitido el sumario, porque se trataba de un hecho punible ejecutado en campaña por un militar en servicio, resolvió en treinta de Marzo último, de acuerdo con el Auditor general de Guerra, devolver los autos al Juez 1.° del Crimen, del Circuíto de Medellín, porque no juzgó que el asunto perteneciera al fuero militar y le anunció competencia negativa si no aprehendía su conocimiento. El Juez provocado no convino y remitió los autos á esta Corte, que debe decidir la competencia suscitada, en virtud de lo que establece el artículo 280 de la ley 153 del corriente año.

"Oído el dictamen del señor Procurador general, la Corte considera:

"1.° Que el hecho que ha sido materia de la investigación sumaria, caso de que resulte punible, no tiene el carácter de delito militar, según la definición del artículo 1,365 del Código Militar, porque no es una infracción de las leyes militares, en asuntos del servicio ó cometida dentro del cuartel.

"2.° Que estando la República en paz, no hay fuero militar para los delitos comunes ejecutados por militares, como lo establecen los artículos 1,360 y 1,553 del Código Militar y 278 de la ley 153 antes citada.

"3.° Que aunque los artículos 1,373 y 1,366 del Código Militar determinan que los delitos comunes cometidos por individuos militares, en tiempo de guerra y desde que empieza el servicio de campaña, son de la competencia de la jurisdicción militar, estas disposiciones sólo tratan de la jurisdicción militar en campaña ó mientras dure el estado de guerra, porque así se desprende fácilmente del tenor literal del citado artículo 1,366, de los que le siguen y de la comparación de estos artículos con los que que arriba quedan citados, pues de lo contrario resultarían contradicciones y conflictos tales entre las disposiciones de un mismo Código, que no habría medio alguno de interpretar la voluntad del Legislador.

"4.° Que la inteligencia que la Corte da á las disposiciones mencionadas establece armonía y uniformidad en los diferentes artículos del Código referentes á la jurisdicción militar, y consulta perfectamente el fin que indudablemente se propuso la ley al establecer el fuero militar en campaña para los delitos comunes que cometan los militares, como el pronto castigo de los delincuentes, y el que los procedimientos de los Jueces ordinarios no puedan poner embarazos y dificultades á las operaciones militares,—motivos que dejan de obrar cuando, al abrigo de la paz, vuelven todas las cosas á su estado normal.

"Por estas consideraciones, la Corte, de acuerdo con la opinión del señor Procurador general, dirime esta competencia, declarando que el negocio de que se ha tratado no es del fuero militar, y que su conocimiento corresponde á los Jueces y Tribunales ordinarios.

"Comuníquese á los Jueces que han sostenido la competencia, devuélvanse los autos al Juez 1.° del Circuíto de Medellín, en lo criminal, y notifíquese lo resuelto al señor Procurador."

Con lo cual se dió por terminado este Acuerdo, que firman los señores Magistrados, conmigo el Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 121.

En Bogotá, á diez y nueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, se ocupó en considerar la siguiente consulta, hecha por el Juez municipal de Málaga, Provincia de García Rovira, Departamento de Santander, en nota de fecha 31 de Octubre último, número 138:

"¿Si los delitos de maltramiento de obra que no causen al ofendido impedimento para trabajar ó que aunque lo causen, no exceda de dos días, cometidos antes del 22 de Julio último, en que no se encontraba vigente el Código Judicial nacional en este Departamento, tienen que ser castigados por los Alcaldes como jefes de Policía, ó por los Jueces municipales que no pueden proceder de oficio, sino por acusación (artículo 1,604 del Código Judicial expresado), dándoles la tramitación determinada por el artículo 40 de la ley 153 de 1887?"

El *Magistrado doctor Calderón, á quien tocó* en repartimiento dicha consulta, sometió á la consideración de la Corte el proyecto de resolución siguiente, que fué aprobado por unanimidad:

"El inciso 2.° del artículo 118 de la ley 61 de 1886 atribuye á los Jueces municipales el conocimiento de los negocios criminales por heridas, golpes y maltratos, en los casos especificados en los artículos 504, 516 y 518 en su 2.° inciso, del Código Penal, y como según la ley 57 de 1887 (15 de Abril) "sobre adopción de Códigos y unificación de la Legislación nacional," rigen en la República, noventa días después de publicada dicha ley, los Códigos que expresa el artículo 1.° de la mencionada ley, claro es que aunque los delitos fuesen ejecutados antes de la vigencia de la ley 57, ó sea el 22 de Julio último, corresponde el conocimiento de los referidos hechos á los Jueces municipales, y así lo ha resuelto la Corte en el Acuerdo número 107 de fecha tres del presente mes, con motivo de la consulta del Juez del Circuíto de Sugamuxi, Departamento de Boyacá; debiendo entenderse que por yerro tipográfico se citó en dicho Acuerdo el artículo 506 del Código Penal por el 504. Así queda resuelta la consulta indicada.

"Comuníquese, cópiese y publíquese."

Con lo cual se concluyó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados, con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 122.

En la ciudad de Bogotá, á diez y nueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, el señor Magistrado doctor Samper manifestó que, habiéndole tocado en repartimiento una consulta, elevada directamente por el Juez 2.° municipal, en lo civil, del Distrito de Medellín, fechada el 25 de Octubre último, proponía á la Corte, conforme al artículo 116 de la ley 57 del presente año, el siguiente proyecto de resolución:

"Tanto por obtener una decisión que establezca regla de procedimiento, como por haber ocurrido discordancia entre el Juez consultante y otro Superior á él, de Circuíto, desea el mencionado funcionario que la Corte decida si en las demandas de menor cuantía son aplicables ó nó los artículos 947, 948 y 949 del Código Judicial, que permiten oponer *reconvención* al tiempo de contestarse una demanda. Para resolver la duda, la Corte considera:

"1.° La razón filosófica y de justicia y orden que ha inspirado al Legislador el establecimiento de la demanda de *reconvención*, milita con toda su fuerza en todos los juicios ordinarios, ya sean de mayor ó de menor cuantía. Por lo tanto, si en uno y otro caso existe la misma razón para justificar un arbitrio que concurre á la defensa y evita multiplicidad de pleitos, debe estarse á la misma disposición para unos y otros juicios.

"2.° No hay en todo el Código Judicial disposición alguna que prohiba entablar demanda de *reconvención*, cuando el pleito de que se trata es de menor cuantía; y por lo tanto, cabe de lleno la aplicación del siguiente artículo:

"261. A falta de otra regla general ó especial, todo vacío en el procedimiento se llenará según lo dispuesto en este Código para casos semejantes."

"Por lo mismo, si con respecto á los juicios de menor cuantía no hay disposición general ni especial que prohiba la reconvención, ésta es admisible.

"3.° Los juicios ordinarios por demanda de menor cuantía no son *especiales*. Son ordinarios y así los define el Código en el Capítulo 2.°, Título 10.° de su Libro 2.° Es el título 11 el que contiene todo lo relativo á los juicios especiales. Por consiguiente, si la cuantía no modifica la naturaleza del juicio, aunque sí cambia las formas ó ritualidades del procedimiento, es claro que, en cuanto sean racionalmente aplicables, deben serlo al caso de la menor cuantía, los artículos 947 á 949 del Código, que rigen expresamente en los juicios civiles ordinarios, sin distinción de cuantía.

"4.° En fin, las dificultades materiales que pueda haber para acumular la contrademanda ó reconvención á la demanda, cuando el pleito no se lleva rigorosamente por escrito, no son

motivo que justifique el rechazo de dicha reconvención; pues del mismo modo que se oye, contesta, prueba, decide y hace constar la demanda, puede oirse, contestarse, probarse, decidirse y hacerse constar la reconvención.

"En fuerza de estas consideraciones, la Corte resuelve sobre la consulta hecha, declarando que en los juicios civiles ordinarios, por demandas de menor cuantía, hay lugar á la reconvención y ésta debe seguir los trámites de aquella.

"Comuníquese al Juez consultante y publíquese en la *Gaceta Judicial* para regla común."

El precedente proyecto fué aprobado por unanimidad de votos.

Con lo cual se terminó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados con el infrascrito Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ.—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER.—*Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente. Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 123.

En Bogotá, á diez y nueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados,—yo, el Secretario, dí cuenta de una nota acompañada de otros documentos, en que el señor Juez del Circuíto de Buga consulta, por el conducto del Tribunal Superior del Distrito judicial del Cauca, los siguientes puntos:

"1.° ¿Qué Juez debe conocer del delito de fuga de un preso? y

2.° ¿Debe penarse al reo de un delito á pesar de lo dispuesto en el inciso 1.° del artículo 45 de la ley 153 del corriente año?"

Repartido de antemano este negocio al señor Magistrado doctor Sanclemente para su estudio, propuso el proyecto de resolución que á continuación se copia:

"Examinadas las razones en que el Juez del Circuíto de Buga funda su consulta sobre el primer punto, se viene en conocimiento que para él es claro que el Juez que debe conocer del delito de fuga de un preso, que tiene causa criminal pendiente, es el Juez que conoce de esta causa, por deducirse así de lo dispuesto en el artículo 252 del Código Penal de la Nación; y puesto que lo que se consulta con la Corte, según el artículo 116 de la ley 57 del año en curso, son las *dudas* que ocurran en la inteligencia de las leyes sobre organización y procedimientos judiciales, y que para dicho Juez no hay ninguna sobre el punto en referencia, la consulta ha sido y es innecesaria. Y lo es todavía más si se tiene en cuenta que estando él en el concepto de que no le corresponde conocer de una causa determinada sobre fuga de un preso, puede ocurrir al medio legal de promover competencia negativa para que, preparada en debida forma, la decida el Tribunal llamado á ejercer esa función. Prescindir de ese medio expedito y someter el punto á la Corte por vía de consulta, equivale á pedirle que dirima una competencia que no le corresponde, y que lo haga, además, sin conocimiento de causa; ó en otros términos, sin que esté legalmente aparejada, cosa que no le es permitido á la Corte, y que privaría al Tribunal competente del ejercicio de una de sus atribuciones. Debe abstenerse, por lo tanto, esta Corporación de resolver el primer punto consultado.

"Y debe hacer lo propio respecto del segundo: 1.° porque él versa sobre un asunto ó materia de legislación penal substantiva, y la facultad otorgada á la Corte por el artículo 116 de la ley 57 antes citada, se limita, como se ha dicho, á resolver las dudas que ocurran en la inteligencia de las leyes sobre organización y procedimientos judiciales, á lo cual no se contrae la consulta; y 2.° porque ésta se refiere á un punto decidido por el Tribunal del Cauca en sentencia dictada en segunda y última instancia, y á la Corte no le es dado entrar á examinarla para el efecto de resolver lá consulta de que se trata, porque esto equivaldría á darle al negocio resuelto en ella una instancia más, confirmándola, reformándola ó decidiendo lo contrario de lo que ella decide.

"La Corte es, por lo dicho, incompetente para resolver el segundo punto consultado."

Tomado en consideración lo propuesto por el señor Magistrado ponente, la Corte lo aprobó unánimemente, y dispuso que se comunicara su determinación al Juez consultante, por conducto del Tribunal Superior del Distrito del Cauca.

Con esto terminó el Acuerdo, que firman los Señores Magistrados conmigo el Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 124.

En la ciudad de Bogotá, á veintiuno de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario, se dió cuenta de la nota de Su Señoría el Ministro de Gobierno, de fecha 19 del mes en curso, número 3,706 de la Sección 1.ª, en la cual solicita, de acuerdo con lo establecido en el inciso 2.° del artículo 119 de la Constitución, la presentación de terna para llenar la vacante de primer suplente de los Magistrados del Tribunal Superior del Distrito judicial de Bolívar. El señor Magistrado doctor Samper hizo la siguiente proposición, que fué aprobada por seis votos afirmativos contra uno negativo:

"La Corte Suprema de Justicia considera que, no habiendo disposición constitucional ni legal, clara y expresa, que la autorice para proponer ternas para el nombramiento de suplentes de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito, debe abstenerse en el presente caso de proponer dicha terna.

"Comuníquese á Su Señoría el Ministro de Gobierno."

Con lo cual se concluyó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados conmigo el Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER——*Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 125.

En Bogotá, á veintiuno de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Socretario, se procedió á tomar en consideración la consulta que ha elevado á esta Superioridad el Fiscal del Circuíto de Honda, en telegrama de 12 del presente, que dice así:

"Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

"Ocurre Juzgado 2.° este Circuíto duda sobre si disposición artículo trescientos veintiocho (328), ley cincuenta y siete (57) este año, comprende sentencias dictadas por Jueces de derecho, ó si solamente las intervienen Jurado. Primer caso ¿regirá artículo 1,724 del Código?

EZEQUIEL NAVARRO."

El Magistrado doctor Noguera, á quien tocó el asunto en repartimiento, presentó el siguiente proyecto de resolución, que fué aprobado por unanimidad:

"El artículo 328 de la ley 57 del presente año, se refiere claramente á las sentencias que se pronuncien en los juicios en que interviene el Jurado, y no puede, por consiguiente, tener aplicación á los casos que determina el artículo 1,724 del Código Judicial, en el que se prescribe igualmente, con toda claridad, así como en los anteriores del mismo Capítulo en que aquel está consignado, cómo y cuándo debe tener lugar la apelación de las sentencias que se pronuncien en los juicios criminales comunes, cuándo deben esas sentencias consultarse, y en

qué casos deben declararse ejecutoriadas; siendo de advertir que los artículos 1,720 y 1,804 expresan también de una manera indudable el tiempo y modo de notificarlas. En estos términos queda resuelta la consulta de que viene hecha mención.

"Comuníquese y publíquese."

Con lo cual se concluyó el presente Acuerdo, qne firman los señores Magistrados conmigo el Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, doce de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—La Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones reconoció á favor de Ramón Calderón Angel, con fecha 14 de Julio del presente año, y á cargo del Tesoro Nacional, la suma de seiscientos cuarenta y cuatro pesos ($ 644), procedentes de las siguientes partidas:

Un recibo dado por el Inspector Fiscal del empréstito forzoso nacional, á favor de Pacífico Méndez, por doscientos pesos ($ 200), el 4 de Septiembre de 1885.....$ 200

Otro recibo dado por el mismo Agente, Bernabé Caicedo á favor de Víctor Méndez, por doce pesos ($ 12), de fecha 20 de Octubre del mismo año..... 12

Uno id. por el Agente del mismo Inspector Fiscal, dado en Pacho á favor de José María Vega, por cincuenta y dos pesos ($ 52), de fecha 22 de Octubre de 1885..... 52

Otro id. por el mismo empleado á favor de Custodio Vega, expedido también en Pacho el 20 de Octubre del citado año de 1885, por sesenta pesos..... 60

Una certificación expedida por el Gobernador del Departamento de Cundinamarca, de fecha 21 de Junio del presente año, á favor de Ramón Calderón Angel, como endosatario á favor de Rafael Bayona, por el valor de tres caballos en trescientos pesos..... 300

Otra certificación expedida por el mismo empleado, de fecha 21 de Junio del año en curso, como endosatario de Bernardino Matiz por valor de un caballo avaluado en veinte pesos..... 20

Suma.....$ 644

El señor Ministro de Guerra aprobó y confirmó el expresado auto, pero el señor Procurador general pasó el expediente á esta Superioridad para su revisión, presentando tres objeciones á los documentos que apoyan la reclamación en referencia.

La Corte dictó entonces auto para mejor proveer, con fecha 20 de Septiembre último, y, en consecuencia, ordenó se practicaran las pruebas y se llenaran las formalidades, á que se contrajeron las tres observaciones del señor Procurador.

El interesado comprobó la personería para representar en la reclamación á Francisco, José María y Custodio Vega.

Comprobó que los créditos á que hace referencia el certificado expedido por Julio Fernández M., Secretario de la Comisión de empréstitos, suministros y expropiaciones, fueron inscritos bajo los números y en las fechas á que alude el certificado en referencia.

Fueron autenticadas debidamente las firmas del señor Gobernador Jaime Córdoba, del Secretario de Gobierno Manuel Vicente Umaña, del Oficial Mayor, Roque Morales, y las de Adolfo Leon Gómez y Nicanor Sánchez Domínguez; y quedando así llenadas las formalidades que faltaban y que observó el señor Procurador, no hay objeción que hacer á los documentos que forman la reclamación de que se trata.

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma en todas sus partes la sentencia de la Comisión de empréstitos, suministros y expropiaciones, dictada el 14 de Julio del presente año, por la cual reconoce á favor de Ramón Calderón Angel y á cargo del Tesoro Nacional, la suma de seiscientos cuarenta y cuatro pesos ($ 644), y que fué aprobada y confirmada per el Ministerio de Guerra con fecha 19 de Agosto último.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del doce de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, se publicó esta sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En quince de los mismos, notifiqué al señor Procurador la sentencia que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

CORRESPONDENCIA.

República de Colombia—Poder Judicial—Secretaría de la Corte Suprema de Justicia—Número 1,186—Bogotá, Noviembre 24 de 1887.

Señor Procurador general de la Nación—Presente.

Tengo el honor de remitir á Usía los cuadros de la Estadística judicial en los ramos civil y criminal, correspondientes al mes de Octubre último, de los negocios que han cursado en el Tribunal Superior del Distrito judicial de Tunja.

Dios guarde á Usía.

Ramón Guerra A.

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL

Señores Magistrados.

Por auto de 26 de Marzo de 1885, el Juez de Ejecuciones nacionales libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva contra el señor Evaristo de la Torre por la suma de $ 6,461-85 que dicho señor quedó á deber á la Nación, según liquidación hecha por la Secretaría de Hacienda en Noviembre de 1884, como arrendatario que fué de las Salinas de Chita y Muneque.

No habiendo sido posible notificar al deudor señor de la Torre el auto ejecutivo, el empleado ejecutor determinó hacer tal notificación á un defensor de bienes, quien apeló del expresado auto para ante esa Superioridad.

Este Ministerio prescinde del examen de los fundamentos legales de la ejecución, y se limita á observar que ésta adolece de nulidad desde que se hizo la notificación del auto ejecutivo al defensor de bienes nombrado por el Juez, ó sea desde su orígen, pues es sabido que el juicio ejecutivo comienza cuando se notifica el mandamiento de ejecución (V. reforma trigésima, ley 46 de 1876).

Despréndese la anterior observación de las razones que se pasan á exponer:

El artículo 940 del Código Judicial vigente cuando se inició la ejecución que nos ocupa disponía, entre otras cosas, lo que en seguida se copia: "El Juez de la causa cuando proceda por sí, ó el comisionado en su caso, tiene los deberes siguientes:

"1.° Notificar personalmente al deudor el auto ejecutivo, cuya diligencia se firmará por el Juez ejecutor, su Secretario y el ejecutado, haciéndolo un testigo en vez de éste, si no supiere, ó no quisiere ó no pudiere firmar....."

El artículo 957 del mimo Código decía: "Cuando la ejecución se dirija contra una cosa especial afecta al pago de la deuda por hipoteca expresa ó tácita, se entenderán las notificaciones con el deudor obligado, si pudiere ser habido, y si no con un defensor que se nombrará para llenar las formalidades del juicio, y defender la hipoteca en cuanto haya lugar."

Estas disposiciones se hallan también en el Código Judicial vigente hoy (artículos 1.027 y 1.045).

Limitada como está la facultad del funcionario ejecutor para nombrar defensor de bienes al ejecutado, al caso en que, no habiéndose podido obtener la comparecencia de éste, el crédito que se persigue sea hipotecario, esa facultad no tiene ni puede tener cabida tratándose de una obligación puramente personal.

Ahora bien: como de autos no aparece que el deudor señor de la Torre hubiera constituído hipoteca en alguno de sus bienes para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones como arrendatario de la Salina de Chita y Muneque, pues sobre ese particular nada se estipuló en el contrato respectivo que en copia legalizada corre á los folios 37 y 38 del expediente, ni de ello hay constancia en ninguno de los otros documentos que se han exhibido, se hace preciso concluír que no está comprobada la existencia de la garantía hipotecaria, y que por lo tanto, falta la condición requerida por la ley para justificar y tener por legalmente hecho el nombramiento de defensor de bienes.

Y como á falta de hipoteca expresa, el citado artículo 957 admite la tácita para los efectos del nombramiento de defensor de bienes, es necesario advertir que esta última garantía tampoco puede alegarse como existente en el caso que nos ocupa, pues si bien es cierto que, según el artículo 2,496 del Código Civil, algunos créditos del Fisco pueden afectar todos los bienes del deudor, no lo es menos que entre esos créditos no está comprendido el de que es responsable el ejecutado señor de la Torre, por cuanto ese privilegio se limita á los créditos procedentes de impuestos fiscales, y tal procedencia no es la del crédito de que se deja hecha mención, el cual deriva la suya de un contrato de arrendamiento.

Bien puede ser que en la escritura pública que debió extenderse para perfeccionar el contrato, se exprese el otorgamiento de la hipoteca de que se deja hecha referencia; pero, aun cuando así fuere, las precedentes consideraciones no perderían de su mérito, sino en tanto que dicha escritura hiciera parte de los autos, sin lo cual no es posible conocer siquiera la situación y naturaleza de los bienes contra los cuales había de dirigirse la ejecución en caso de existir el mencionado gravamen.

Esto sentado, debe concluírse que la notificación del auto ejecutivo, hecha como lo fué en la persona del defensor de bienes, no es legal y trae, de consiguiente, aparejada la 1.ª de las causales de nulidad enumeradas para los juicios ejecutivos en el artículo 840 del Código Judicial anterior, correspondiente al 916 del que está en vigencia.

Por lo tanto, y salvo vuestra más ilustrada opinión, soy de concepto que debéis declarar nulo lo actuado desde la notificación que se ha tachado de ilegal, lo cual no impide que la ejecución se siga contra el albacea, herederos ó el que legítimamente represente al deudor, señor Evaristo de la Torre.

Bogotá, 14 de Octubre de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

Por resolución de 14 de Septiembre último, el Ministerio de Guerra revocó la dictada por la Comisión de suministros, empréstos y expropiaciones, en 13 de Agosto anterior, por la cual se reconocía á cargo del Tesoro y á favor de José A. Carvajal la suma de $ 607 que éste cobra por expropiaciones en la última guerra.

Habiendo reclamado de la resolución del Ministerio de Guerra el apoderado de Carvajal, el expediente pasó á esa Superioridad, donde debe fallarse en definitiva, conforme á lo dispuesto en el artículo 2.° de la ley 152 del presente año.

Atentamente he examinado las declaraciones exhibidas como prueba de la reclamación, y de ese modo he podido verificar la exactitud de las observaciones que sobre ellas hace el Ministerio de Guerra para calificarlas de insuficientes, y solamente debo agregar que la ratificación de tales declaraciones, que dicho sea de paso, el Ministerio de Guerra parece admitir como corriente, bien pudiera no serlo, si se atiende á la siguiente disposición del Código Judicial:

"Art. 571. Las ratificaciones de testimonios recibidas extrajuicio no serán válidas, si no se repitieren los hechos declarados, es decir, si los testigos se limitaren á decir que se afirman y ratifican, sin tener nada que añadir ni quitar."

Aun cuando en esta clase de reclamaciones la Corte debe apreciar la prueba testimonial, según su juicio, verdad sabida y buena fe guardada, tanto al resolver sobre la comprobación de los hechos, como al fijar la cuantía de la reclamación, he creído conveniente citar la anterior disposición, por creer que de ella no se debe prescindir razonablemente, si se quiere que aquella prueba llene, en lo posible y esencial, los requisitos exigidos en punto á testimonios por las leyes generales que rigen el procedimiento judicial.

En caso, pues, de que la prueba referida no se perfeccione ante esa Superioridad, soy de concepto que debéis confirmar la resolución del Ministerio de Guerra, reclamada por el interesado.

Begotá, 14 de Octubre de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

Acusado, desde Junio de 1883, el Teniente Antonio Nariño, del Batallón 10.° de Zapadores, por el delito de tentativa de homicidio y por el de maltratamientos de obra en la persona del Sargento del mismo Cuerpo Antonio Romero, la autoridad militar correspondiente inició el sumario en averiguación de los expresados delitos y lo pasó luégo al Juez del Circuíto de Popayán, en lo criminal, quien, por auto de 23 de Agosto de 1884, declaró con lugar á seguimiento de causa contra el sindicado.

Dilatado el juicio, entre otros motivos, por no haberse obtenido de la autoridad militar superior la remisión del procesado á Popayán, y suscitándose dudas acerca de la competencia para conocer de dicho juicio, el Juez Superior del Distrito judicial de Popayán, á quien hubo de pasarse el proceso después de la expedición de la ley 61 de 1886, resolvió consultar tales dudas con esa Superioridad, fundándose para ello en las razones expuestas en el auto de 6 de Agosto último (f. 27).

En vista de esas razones, este Ministerio pasa á exponeros su concepto en el particular.

Aun cuando de conformidad con el artículo 280 de la ley 153 del presente año, corresponde á la Corte Suprema de Justicia la decisión de las competencias que se susciten entre los Jueces y Tribunales militares y los de la jurisdicción civil, no es el caso de que la Corte ejerza esa facultad respecto de la causa del Teniente Antonio Nariño, pues sobre el conocimiento de ella, como queda dicho, apenas han ocurrido dudas al Juez del Distrito judicial de Popayán, sin que se haya promovido y formalizado competencia alguna entre dicho Juez y la autoridad militar.

No tratándose, pues, de una competencia propiamente dicha, resta examinar si la Corte puede ocuparse, por vía de consulta, nó de una providencia en que judicialmente pudiera tener cabida esa formalidad, sino de puntos dudosos sobre jurisdicción, como son los que el Juez consultante pretende que le sean resueltos.

Este Ministerio observa, por lo que á tal consulta hace, que la Corte no puede ejercer la facultad de resolver sobre las dudas que se le consulten, sino en tanto que se trate de la inteligencia de las leyes sobre organización y procedimientos judiciales, y siempre que le sea dirigida á propuesta de cualquier Magistrado de la misma Corte ó á solicitud de los Tribunales Superiores de Distrito; caso en el cual no se halla la que es materia de esta breve exposición (artículo 416 de la ley 57 de 1887).

Por lo tanto, este Ministerio es de concepto que la Corte debe abstenerse de resolver el punto dudoso sometido á su consideración, y limitarse á devolver el proceso al Juez de su pro-

cedencia, para que por este funcionario se lleve adelante, empleando para ello todos los medios legales que estén á su alcance en la prosecución de la causa.

Bogotá, 15 de Octubre de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

Con fecha 31 de Octubre de 1883, el Agente Fiscal del Circuíto de Antioquia en el extinguido Estado del mismo nombre, promovió demanda de expropiación de dos casas situadas en el Distrito de Ituango, de que era poseedor Pedro María Gutiérrez. La demanda se propuso en acatamiento de la ley 38 de 1882, por la cual se mandaron devolver á sus dueños las fincas raíces adjudicadas al Fisco nacional durante la guerra civil de 1886 á 1887, con el objeto de hacer efectivos los empréstitos, expropiaciones, etc., que fueron necesarios para atender á los gastos de la guerra.

El poseedor demandado tachó de inepta la demanda, al contestarla, por cuanto en ella no se expresó el nombre de los dueños de las fincas á quienes debían éstas ser devueltas. De la contestación se dió traslado al demandado, y éste oportunamente subsanó la omisión, expresando que los dueños de las fincas que pedían fueran expropiadas eran los señores José Antonio Soto y Sebastián Mejía.

Apesar de esto, el Juez del reconocimiento, con fecha 14 de Febrero de 1884, declaró probada la excepción de inepta demandada, por cuanto en ella, según dice el auto, no se expresó con claridad la cantidad ó el hecho demandado. De este auto apeló el Agente del Ministerio público que promovió la demanda, y es por eso que los autos han venido á nuestro conocimiento.

El expediente ha permanecido demorado sin haberse repartido siquiera, hasta el día 21 de Septiembre último, en que el activo y diligente Secretario de esa Superioridad lo puso al despacho.

Para resolver la apelación debe tenerse en cuenta que en este juicio no se demanda ninguna cantidad ni ningún hecho, se demanda la expropiación de dos casas, cuyos linderos se han determinado, y eso lo expresa el escrito presentado al Juez de primera instancia, que ha dado origen al juicio.

La expropiación se entabla en nombre del Gobierno, para devolver las fincas á sus dueños, una vez que la expropiación sea decretada judicialmente; por consiguiente no es requisito indispensable para la validez de la demanda el que se exprese el nombre de los dueños, por no ser ellos demandantes.

No viene al caso averiguar si á la demanda ha precedido el arreglo que exige la ley 38 que se promueva con los actuales poseedores, porque vuestra decisión debe limitarse á resolver sobre la legalidad del auto apelado, que declara probada la excepción de inepta demanda; y como resulta de lo expuesto que la demanda reune las condiciones de la ley, este Ministerio es de concepto que debéis revocar el auto apelado, y á sí os lo pide.

Bogotá, 15 de Octubre de 1887.

CARMELO ARANGO. M.

Señores Magistrados.

Por resolución de 17 de Agosto último, el Ministerio de Guerra revocó el reconocimiento hecho por la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, á favor del señor Juan B. Feijoo y á cargo de la Nación, de la suma de $ 37,024, parte de mayor cantidad reclamada por dicho señor, por exacciones sufridas en la guerra civil de 1860 á 1861.

El apoderado del señor Feijoo, usando del derecho reconocido en el artículo 2.° de la ley 152 del presente año, reclamó de la citada resolución del Ministerio de Guerra para ante esa Superioridad.

Fundóse la revocatoria del fallo de la Comisión, en que la reclamación del señor Feijoo no puede considerarse como pendiente, para los efectos del artículo 14 de la ley 44 de 1886, por cuanto ella se ventiló en un juicio ordinario anterior que fué decidido definitivamente por la Corte Suprema Federal, el 26 de Noviembre de 1868, en sentido adverso al reclamante; de donde resulta que, con la decisión de la Corte, se puso fin á la expresada reclamación, la cual no se debe, por lo mismo, considerar como pendiente.

El infrascrito estima fundado el concepto del Ministerio de Guerra, con tanto mayor razón, cuanto por la ley 152 del presente año, se previno que los créditos á que se refiere el artículo 1.° de la ley 61 de id., son aquellos respecto de los cuales estaba pendiente la reclamación judicial del caso, cuando se expidió la ley 44 de 1886; circunstancia que no concurre en la que nos ocupa, puesto que el juicio de que ella fué materia, no podía estar pendiente en la época indicada, una vez que dicho juicio había sido decidido en definitiva por la Corte Suprema Federal.

A virtud de lo expuesto, el infrascrito es de opinión que debéis confirmar la resolución del Ministerio de Guerra reclamada por el interesado.

Bogotá, 17 de Octubre de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

Por auto del Tribunal Superior de Antioquia, de 9 de Octubre de 1886, dictado en un sumario seguido contra Jesús María Rondón, por el delito de incendio, se dispuso averiguar, con copia de lo conducente, si la detención de Rondón había sido arbitraria, una vez que de autos no resultaba la prueba suficiente para llamarlo á juicio.

Practicada la averiguación, el mismo Tribunal con fecha 22 de Agosto, ha decretado el sobreseimiento, por estimar que el Juez del Circuíto de los Andes procedió legalmente al ordenar la detención de Rondón, y ese auto ha venido en consulta á esa Superioridad.

Para resolver la consulta, es necesario conocer los antecedentes que dieron lugar á la detención que originó este sumario por creerse que con ella se atentaba contra la seguridad individual.

El día 15 de Septiembre de 1884, se presentó María Isabel Durango ante el Juez municipal del Distrito de Bolívar, en el Departamento de Antioquia, denunciando á Jesús María Rondón por el delito de incendio.

La Durango, titulándose esposa del denunciado, aseguró que éste, a consecuencia de un disgusto que con ella tuvo, puso fuego á la casa de habitación en que vivían, habiendo producido el incendio la ruina completa del edificio y todo lo que en él existía, y que después de cometido el delito, Rondón abandonó á su esposa, dejándola en la calle con cuatro hijos y en completa desgracia (foja 1 vuelta). El hecho denunciado tuvo lugar en el sitio denominado *Cascajosa* el día 8 de Septiembre de 1886, es decir, siete días antes de haber sido presentado el denuncio.

En el sumario contra Rondón, declararon como testigos Indalecio Restrepo, Ana María Ortiz, Abdona Arroyave y otros, confirmando el denuncio dado por María Isabel Durango. El funcionario de instrucción pasó las diligencias al Juez del Circuíto de los Andes, poniendo á su disposición al sindicado, y el Juez, con vista del denuncio jurado y de las declaraciones que lo confirmaban, decretó la detención de Rondón. Adelantado el sumario, se declaró sin lugar á seguimiento de causa, habiendo confirmade el sobreseimiento el Tribunal de Antioquia, en el mismo auto de 9 de Octubre que dispuso la presente averiguación.

Cuando se procede por delito ó culpa que tenga señalada pena corporal, es suficiente para decretar la detención del sindicado, que resulte contra él, por lo menos, una declaración de testigo hábil, aunque no se haya todavía escrito; basta un indicio grave de que es autor, cómplice, auxiliador ó encubridor; y como existían varias declaraciones de testigos que no había razón para tacharlos como inhábiles, todas en contra de Rondón, por estar conformes con el denuncio, el Juez del conocimiento procedió de acuerdo con lo que la ley de Antioquia prevenía á este respecto, sin incurrir en responsabilidad.

Por lo tanto, este Ministerio os pide la confirmación del auto consultado.

Bogotá, 17 de Octubre de 1887.

CARMELO ARANGO M.

BOGOTÁ.—IMP. DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 49

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 10 de Diciembre de 1887.

CONTENIDO.

Pág.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Pronunciada sobre la reclamación de Manuel J. Dueñas, por varios empréstitos y suministros..... 385
Id. sobre la id. de Wenceslao Rengifo, por idem, idem..... 386
Id. sobre la id. de Juan Nepomuceno Lozano por idem, idem..... 387
Revocatoria, por causa de prescripción, de otra proferida por el Tribunal Superior de Pasto..... "

AUTOS INTERLOCUTORIOS

NEGOCIOS CRIMINALES.

Confirmatorio de otro de sobreseimiento proferido por el Tribunal Superior de Tunja..... 388
Sobre abstención de la Corte para resolver sobre una consulta insuficientemente preparada..... "
Confirmatorio de otro de sobreseimiento consultado por el Tribunal Superior de Cundinamarca..... "
Id. de otro de id., proferido por el Tribunal Superior de Antioquia. 389
Id. de otro de cesasión de procedimiento, por prescripción, pronunciado por el Tribunal Superior del Magdalena..... "
Sobreseimiento en un sumario iniciado contra el Presidente de Panamá Gerardo Ortega..... 390

RESOLUCIONES VARIAS

Relativa á una denuncia de Miguel A. Peña..... 391

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL

Emitida con relación á una competencia mal preparada..... "
Id. con respecto á un auto consultado por el Tribunal Superior de Bolívar..... "
Id. acerca de una sentencia condenatoria á la pena de multa..... 392
Id. á un sumario por delito de responsabilidad..... "

GACETA JUDICIAL.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, diez y seis de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Ante la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, ocurrió Manuel J. Dueñas, en 8 de Marzo del presente año, reclamando el reconocimiento y pago de la cantidad de dos mil doscientos cincuenta y dos pesos ($ 2,252), valor de los suministros y empréstitos que, en la última guerra hizo á los Agentes del Gobierno nacional Francisco Corsi, vecino de la ciudad de Tunja, quien cedió sus créditos oportunamente.

A la reclamación se acompañaron los documentos siguientes:

1.° Una certificación expedida por el Intendente general del Ejército, con fecha 16 de Abril de 1885, en que aparece que Corsi es acreedor de la cantidad de mil cuatrocientos treinta y ocho pesos ($ 1,438), en que fué apreciado el ganado que suministró espontáneamente, para raciones del Ejército del Norte, en dos partidas, á saber: en el Distrito de Samacá, doce reses, avaluadas en cuatrocientos ochenta pesos; y en la ciudad de Tunja, seis novillas, avaluadas en trescientos pesos; y catorce reses más, apreciadas en seiscientos cincuenta y ocho pesos;

2.° Un certificado expedido por el Secretario de Gobierno del Departamento de Boyacá, con que fué cambiado un recibo dado por el Alcalde del Distrito de Samacá, en constancia de que Corsi suministró voluntariamente un caballo de valor de sesenta y cuatro pesos;

3.° Otro certificado expedido por el empleado últimamente mencionado, en que fué convertido un recibo dado por el Agente de Hacienda de la Provincia del Centro á favor de Rafael Barrera, quien consignó á nombre de Francisco Corsi, la suma de doscientos cincuenta pesos que, como empréstito, le fué asignada;

4.° Otro certificado expedido por el mismo Secretario de Gobierno, en cambio de un recibo dado á favor de Corsi, por doscientos cincuenta pesos, que consignó como empréstito voluntario, al comisionado para recaudar el empréstito forzoso en la Provincia del Centro;

5.° Un recibo dado por el Comisionodo para recaudar el empréstito forzoso en la Provincia del Centro, en que aparece que Francisco Corsi enteró la cantidad de doscientos cincuenta pesos que le fué asignada como empréstito; y

6.° Una certificación del Gobernador del Departamento de Boyacá, en que asevera que Corsi no tuvo ingerencia en la última guerra, y que antes bien sirvió, con sus intereses, voluntariamente al Gobierno.

Todos estos documentos fueron registrados y autenticados respectivamente; y de ellos el mencionado en el número primero de esta enumeración, fué cedido ó endosado por Francisco Corsi á Ricardo A. Herrera, y por éste á Manuel J. Dueñas y los demás, con excepción del último, fueron endosados por Corsi á Dueñas directamente.

La Comisión resolvió, en definitiva, de acuerdo con las pretensiones del reclamante, y en consecuencia, condenó á la Nación al pago de la suma de dos mil doscientos cincuenta y dos pesos ($ 2,252). Esa providencia fué aprobada en todas sus partes por el Ministerio de Guerra; pero el señor Procurador general ha pasado el expediente á esta Suprema Corte, con el objeto de que, una vez aclarados ciertos puntos que él consideró dudosos, se dicte la resolución que deba poner punto al negocio.

El representante del Ministerio público hizo notar que en el expediente figuraban un certificado y un recibo, en los cuales aparecía una misma suma, consignada en igual fecha, á un mismo empleado recaudador, y que procedía en ambos casos de empréstito; y en consecuencia, la Corte, para asegurarse de que la suma de doscientos cincuenta pesos, expresada en esos dos documentos, eran dos créditos distintos ó era en realidad uno mismo, dictó auto para mejor proveer, y pidió informe al Secretario de Gobierno del Departamento de Boyacá en aclaración de esas circunstancias; disponiendo, además, que fueran reconocidos los endosos hechos por Francisco Corsi y Ricardo A. Herrera.

Esas diligencias se practicaron, reconociendo los individuos mencionados ser ciertos los endosos, y rindiendo su informe el Secretario de Gobierno. De este informe resulta que á Fran-

cisco Corsi se le expidió recibo por la suma de doscientos cincuenta pesos que consignó como empréstito, y que ese recibo fué cambiado por el certificado respectivo; de suerte que el crédito expresado en los dos documentos es uno mismo, y no distintos, como pretendió hacerlos considerar el reclamante, y que, como se asevera en el informe, solamente por una distracción dejó de recogerse el recibo, el cual debía quedar archivado.

Por lo demás, las otras partidas están plenamente comprobadas en el expediente, y respecto de ellas no hay observación alguna que hacer.

Así, pues, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: que el Tesoro de la República debe pagar á Manuel J. Dueñas la suma de dos mil dos pesos ($ 2,002), á que asciende el valor de los suministros y empréstitos que ha comprobado hizo Francisco Corsi al Gobierno, en la última guerra, crédito que queda comprendido en el caso 2.°, artículo 2.° de la ley 46 de 1886. En estos términos se reforma la resolución dictada por la Comisión y aprobada por el Ministerio de Guerra.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel M. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del diez y seis de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, se publicó esta sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y siete de los mismos la notifiqué al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

En diez y ocho de los mismos la notifiqué al señor Manuel J. Dueñas.

MANUEL J. DUEÑAS—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Noviembre diez y seis de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Wenceslao Rengifo, como apoderado de Benjamín Terreros, vecino de Santander, en el Departamento del Cauca, ocurrió á la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, con fecha diez y siete de Junio del presente año, pidiendo el reconocimiento del crédito de setecientos cincuenta y cuatro pesos ($ 754) que importaron las expropiaciones hechas á su poderdante, por los revolucionarios en la última guerra civil.

El reclamante apoyó su pretensión en algunas informaciones de nudo hecho y en un recibo firmado en "El Credo," el diez y ocho de Enero de mil ochocientos ochenta y cinco, por Francisco Güeinas, en que consta la entrega que Terreros hizo de un novillo para racionar las fuerzas que obraban al mando de aquél, avaluado por Jesús Delgado y José Antonio Arenas en la suma de veinticuatro pesos ($ 24).

La referida Comisión, por resolución número 121, de fecha tres de Agosto último, reconoció á Terreros como acreedor del Tesoro nacional, comprendido en el caso 3.° del artículo 2.° de la ley 44 de 1886, por la suma de setecientos treinta pesos ($ 730) importe de veinticinco novillos, á razón de veintiséis pesos ($ 26) cada uno, y de un caballo, estimado en ochenta pesos ($ 80); pero desechó el crédito de veinticuatro pesos que expresa el recibo de Güeinas, por no resultar debidamento comprobado.

El Ministerio de Guerra, á quien se dió cuenta, dictó, á su vez, *la resolución número 85, de fecha siete de Septiembre* del presente año, aprobando la anterior; pero el señor Procurador general, á cuyo estudio fué pasado el expediente, ocurrió á esta Superioridad, en treinta y uno de Octubre próximo pasado, pidiendo la revocatoria de lo resuelto por la Comisión y la consiguiente absolución del Tesoro de la República.

Para resolver lo conveniente la Corte considera:

1.° Que el hecho de la expropiación de veinticinco novillos y un caballo, de propiedad del reclamante, sólo apareció comprobado primeramente con las declaraciones que en Mayo de mil ochocientos ochenta y cinco rindieron ante el Juez de Santander Juan Candela y Manuel Paz, los cuales aseguran haber visto una partida comandada por Lisandro Salazar, sacar las reses del pastal de "La Robleda" y conducirlas, parte á la ciudad de Santander y parte á "La Bolsa," asegurando también que un caballo nuevo de color *peseño claro*, de buenas condiciones, perteneciente á Terreros, fué tomado por los revolucionarios de una manga de la hacienda de Quintero, habiendo visto después cabalgar en dicho caballo á un Oficial de la revolución;

2.° Que dichos testigos se ratificaron ante el mencionado Juez, con citación y á presencia del Fiscal, en Marzo del presente año, y como al pedir la ratificación se solicitó que Rafael Jaramillo fuese examinado al tenor del mismo interrogatorio y con iguales formalidades, así se practicó, habiendo el testigo declarado de conformidad con los anteriores, con la diferencia de que fué de oídas que supo la expropiación del caballo y de que calculó el valor de los novillos á razón de veinticuatro pesos cada uno ($ 24);

3.° Que de lo expuesto se deduce con absoluta claridad que la expropiación de los veinticinco novillos resulta comprobada en los términos prevenidos por la última parte del inciso 3.° del artículo 2.° de la ley 44 de 1886; no pudiendo decirse lo mismo de la expropiación del caballo, por cuanto dos testigos únicamente, Candela y Paz que para el caso no constituyen plena prueba, han declarado sobre la realidad del hecho;

4.° Que tampoco existe suficientemente probado el valor de los novillos, puesto que los dos testigos últimamente citados los estimaron á veintiséis pesos ($ 26) cada uno, Jaramillo á veinticuatro ($ 24), Serafín Mora y Lisandro Salazar á veinte ($ 20) y Fermín Astudillo dice que diez y seis fueron avaluados en la plaza de Santander á razón de veintidós pesos ($ 22) cada uno;

5.° Que si bien es verdad que las tres últimas declaraciones nada prueban en favor del reclamante, por haberse recibido sin citación é intervención del encargado del Ministerio público, también lo es que aquél no puede rechazarlas, puesto que los testigos no pueden ser tachados por la misma parte que los presenta;

6.° Que en el conflicto que producen declaraciones tan diversas, debiera deferirse á lo aseverado por el mayor número; pero como dos testigos avalúan los novillos á veintiséis pesos ($ 26), y otros dos á veinte ($ 20), (los demás son singulares), debe tenerse como avalúo un término medio, que es lo que más aconseja la equidad en casos como el presente;

7.° Que aunque el señor Procurador general contradice, en absoluto, la pretensión del reclamante, fundándose en que la relación que éste presentó á la Secretaría de Hacienda del Cauca carece de los requisitos exigidos por la resolución de la Secretaría de Guerra, de diez y siete de Marzo de mil ochocientos ochenta y seis, preciso es tener en cuenta que tal relación fué expedida en veinticuatro de dicho mes y año y no era posible que aquella resolución se hubiera conocido en Popayán á los siete días de haber sido dictada, principalmente cuando no fué publicada sino en el *Diario Oficial* número 6,634 correspondiente al veintisiete del mismo mes;

8.° Que aparte de lo relacionado, los requisitos que se echan de menos en la relación constan en las declaraciones de los testigos presentados por el reclamante; y llenados, como realmente lo han sido, no hay razón para que se sacrifique la justicia á la exterioridad de las fórmulas;

9.° Que el crédito de veinticuatro pesos ($ 24) á que se refiere el recibo de Güeinas, de que antes se ha hablado, fué justamente rechazado por la Comisión, por no haber sido reconocido ni constar el carácter con que se hizo á aquél el suministro de que se trata.

Por lo tanto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que Benjamín Terreros, ó quien legalmente lo represente, es acreedor del Tesoro de la República por la suma de quinientos setenta y cinco pesos ($ 575), importe de veinticinco novillos que le expropiaron las fuerzas revolucionarias en la última guerra civil, estimados á razón de veintitrés pesos ($ 23) cada uno, y se absuelve al mismo Tesoro del reclamo de ochen-

ta pesos ($ 80), importe de un caballo, y de veinticuatro pesos ($ 24) valor de un novillo, por no aparecer esas partidas debidamente comprobadas; en cuyos términos queda reformada la resolución de la Comisión de suministros á que se ha hecho referencia.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del diez y ocho de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, fué publicada la anterior sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y nueve de los mismos la notifiqué al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, diez y siete de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—La Comisión de empréstitos, suministros y expropiaciones reconoció con fecha 17 de Agosto del año en curso, á favor de Juan Nepomuceno Lozano y á cargo del Tesoro Nacional, la suma de mil ciento setenta y cinco pesos por suministros hechos por él, y como cesionario de Laureano Ayala y Andrés Lozano, que comprobó con los documentos siguientes:

Con una certificación número 1,689, de 16 de Abril de 1887, del señor Secretario de Gobierno del Departamento de Boyacá, á favor de Juan Nepomuceno Lozano, por la suma de seiscientos cincuenta pesos ($ 650), de unas mulas que suministró voluntariamente al Jefe Civil y Militar, Patrocinio Muñoz, del entónces Departamento de Ricaurte, hoy Provincia..... $ 650

Con una id. número 1,560, expedida por el mismo Secretario, á favor de Andrés Lozano, por la suma de veinticinco pesos ($ 25), empréstito voluntario, fecha 15 de Julio de 1886,..... 25

Con una atestación del Secretario de Hacienda del extinguido Estado de Cundinamarca, de 24 de Noviembre de 1885, por dos mulas tomadas á Andrés Lozano, á doscientos pesos cada una..... 400

Con una id. del Procurador general del mismo extinguido Estado, de fecha 24 de Noviembre sobre el mismo hecho 000

Con una certificación del Comandante general de la Columna Sucre, General Luis Capella Toledo, por valor de dos bueyes á cincuenta pesos..... 100

Suman.....$ 1,175

No se le reconoció la suma de mil ciento cincuenta pesos ($ 1,150), que incluyó el reclamante en su solicitud, por ser procedente de daños y perjuicios, y no creerse autorizada la Comisión para reconocer reclamaciones de esa naturaleza, según la ley 44 de 1886.

El Ministerio de Guerra, con fecha 17 de Octubre último, declaró legalmente comprobados créditos por mil ciento setenta y cinco pesos ($ 1,175), y aprobó la resolución de la Comisión; pero el señor Procurador general observó en su escrito de fecha 31 de Octubre, "que entre los documentos presentados como prueba del crédito que se reclama, figuran certificados expedidos por el Secretario de Gobierno del Departamento de Boyacá, y que respecto de tales certificados ha hecho la objeción, como en otros casos, de que el artículo 3.° del Decreto número 102 de 17 de Febrero de 1886, dispone que los Gobernadores sean los que expidan los certificados."

Como los Secretarios son los órganos de comunicación de los Gobernadores, y lo que estos autorizan con su firma tiene el mismo valor como si lo fuera por los mismos Gobernadores, lo que así se ha reconocido en los actos de estos empleados especialmente en la práctica de diligencias de la naturaleza de que se trata, carece en consecuencia, de fuerza la observación del señor Procurador, y ya se ha sentado precedente aceptando esa clase de documentos como prueba.

Por lo tanto, y estando suficientemente comprobado el crédito, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma la resolución de la Comision de empréstitos, suministros y expropiaciones, de fecha 17 de Agosto del presente año, y aprobada el 17 de Octubre del mismo por el Ministerio de Guerra, por la cual se le reconoce y manda pagar á Juan Nepomuceno Lozano la suma de mil ciento setenta y cinco pesos ($ 1,175).

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase á la Oficina de su origen, por conducto del respectivo Ministerio.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del diez y siete de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, fué publicada la anterior sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y ocho de los mismos notifiqué esta sentencia al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

En veintiuno de los mismos la notifiqué al señor Juan N. Lozano.

LOZANO—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Noviembre diez y seis de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Contra Martín Ortiz, Juez del Circuíto de Barbacoas, en el extinguido Estado del Cauca, dictó la Corte Suprema auto de enjuiciamiento, por los trámites extraordinarios, con motivo de haber sobreseído en un sumario que se seguía para averiguar la responsabilidad del Administrador de la Aduana de Tumaco, sin tener jurisdicción para ello.

Una vez vigente la ley 61 de 1886, esta Superioridad dispuso remitir la actuación al Tribunal del Distrito judicial de Pasto para que siguiera conociendo en primera instancia; y al efecto dicho Tribunal, por sentencia de diez de Agosto del presente año, condenó á Martín Ortiz á las penas de apercibimiento y multa de cuarenta pesos. Esta sentencia fué apelada por el sindicado, y en consecuencia, se halla el proceso al estudio de la Corte.

Como lo observa el señor Procurador, fué antes del cuatro de Mayo de mil ochocientos ochenta y tres cuando Ortiz ejecutó el hecho por el cual ha sido condenado, y por lo tanto, ha transcurrido el término para la prescripción, según el artículo 71 del Código Penal de 1873, que es el artículo 82 del Código Penal adoptado; y aunque en este Código se registra el artículo 83 que dispone que la prescripción respecto de los empleados públicos empezará á contarse desde que dejaren de ser empleados, esta disposición no existía en el Código primitivo y no puede aplicarse en el presente caso, por ser desfavorable al reo.

En atención á lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo con el señor Procurador, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, rovoca la sentencia apelada, y en su lugar declara que ha prescrito la pena en que incurrió Martín Ortiz, Juez del Circuíto de Barbacoas, y que debe cesar todo procedimiento contra él.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del diez y seis de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, se publicó esta sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y siete de los mismos la notifiqué al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Se notificó por edicto.

Guerra A., Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CRIMINALES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Noviembre doce de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—En la tarde del 21 de Agosto de 1886, Pedro Mora Vargas, que, en calidad de suplente, funcionaba como Juez departamental de Occidente en el extinguido Estado de Boyacá, se encontró en la ciudad de Chiquinquirá (yendo en compañía de su Secretario Ambrosio Hernández), con Juan N. Toledo, y éste hizo un ademán de burla y le dirigió ciertas palabras injuriosas. Ofendido Mora por este desacato, mandó poner á Toledo en la cárcel por tres días, así como hizo arrestar por dos horas á un hijo del mismo Toledo, de edad como de catorce años, quien en la puerta de la cárcel irrespetó al Juez Mora, cuando ordenaba la detención de Toledo, amenazándole en términos muy vituperables.

Además, al llegar el Juez á la cárcel en pos de Toledo y dar al Alcalde la orden de arresto, Toledo volvió á proferir contra dicho Magistrado expresiones injuriosas.

Aparte de otros incidentes, el Juez Mora ocurrió ante el Jefe departamental inmediatamente después de lo sucedido, manifestándole que tenía motivos para temer ataques de la familia Toledo, y por lo tanto, pedía se exigiese á éste fianza de guardar paz y buena conducta. El Jefe departamental levantó la información del caso, comprobándose con dos declaraciones suficientes y la confesión de Toledo, que éste había irrespetado é injuriado al Juez, según lo referido; y en consecuencia, se procedió á dictar la resolución del caso, y se exigió á dicho individuo una fianza de cien pesos, que fué prestada.

Pero el 20 de Enero del presente año, Toledo formuló denuncia escrita contra Mora, ante el Prefecto de la misma Provincia de Occidente, quejándose de atropellos, abuso de autoridad y violación de derechos individuales, por lo ocurrido en Agosto del año anterior, y el Prefecto practicó de oficio las diligencias del caso. Después de numerosas investigaciones practicadas para mejor proveer, el Tribunal Superior de Tunja ha proferido auto, el 4 de Octubre último, por el cual dispone se sobresea en el sumario contra Mora Vargas, y se saque copia de lo conducente para averiguar si Toledo es culpable de faltas cometidas contra un Juez departamental en ejercicio de autoridad.

Se ha substanciado debidamente la consulta del auto de sobreseimiento, el señor Procurador general pide la confirmacion, y la Corte para resolver considera:

Es patente la ligereza con que procedió el Juez Mora, pues si bien la buena educación y las costumbres nacionales tienen establecido que en la calle los particulares cedan la acera ó el lado de la pared á las personas que ejerzan autoridad, esto no es de obligación legal, y la descortesía de un indiuiduo no autoriza al que es objeto de ella para formalizarse y hablar con dureza al descortés.

Pero es lo cierto que, una vez advertido Toledo formalmente de que Mora era actual Juez departamental en ejercicio, la manera burlesca con que le trató y el calificativo injurioso que le dió indirectamente, constituyen un grave desacato infe*rido á funcionario público, en ejercicio de* autoridad y jurisdicción, el cual pudo, según sus facultades legales, castigar con un arresto correccional á quien le irrespetó é injurió, á sabiendas de que lo hacía con un Juez y con el propósito de injuriarle.

Y como de las diligencias no aparece prueba alguna de que Mora hubiese abusado de su facultad correccional, ni impuesto una pena excesiva ni ilegal, sino que antes bien, procedió con benignidad con respecto al hijo de Toledo, y redujo á tres días el arresto del ofensor, es patente que no hay razón para abrir juicio de responsabilidad al ex-Juez Mora, denunciado por dicho Toledo.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto consultado por el Tribunal Superior de Tunja.

Notifíquese, cópiese, publíquese, y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En catorce de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis notifiqué este auto al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secrelario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Noviembre quince de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Por consulta elevada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, ha venido á esta Superioridad la sentencia dictada en 10 de Septiembre del corriente año, en la cual se absuelve al ex-Juez del Circuito de Manizales, doctor Ignacio Londoño P., del cargo que se le había deducido por morosidad en el desempeño de sus deberes oficiales.

Substanciada la consulta, el señor Procurador cree, en primer lugar, que existe la nulidad determinada en el inciso 4.º del artículo 1,756 del Código Judicial, por cuanto no se le hizo saber al encausado el auto señalando día para la celebración del juicio; deduciendo, en consecuencia, que la sentencia es nula.

Para la Corte esta nulidad no existe, porque ella se refería á la secuela de los juicios ordinarios comunes, y nó á la de los procedimientos especiales, como es el de que aquí se trata.

Pero sí es exacta la segunda observación del señor Procurador, á saber: que la sentencia no fué notificada al procesado, como terminantemente lo prescribe el artículo 1,916 del Código Judicial, librándose el competente despacho al Juez de la residencia del doctor Londoño, que no es la del Tribunal que decidió en primera instancia. Pudiera decirse que por ser dicha sentencia absolutoria, el procesado no tenía para qué apelar; pero existiendo una prescripción legal para la notificación personal de la sentencia de primera instancia, ésta no debe omitirse.

De aquí resulta que la consulta no ha venido debidamente preparada, y que es preciso subsanar la omisión advertida; dejando para otra ocasión el apreciar los fundamentos de la sentencia.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación se abstiene por ahora de decidir la indicada consulta, ordenando que vuelva el expediente al Tribunal Superior de Antioquia, para que él dé cumplimiento al mencionado artículo 1,916 del Código Judicial; practicado lo cual, se volverá á dar á los autos el curso legal.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Nogera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y seis de los mismos notifiqué este auto al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Noviembre diez y siete de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Suprimido en 31 de Diciembre de 1884 el Juzgado del Circuito de Tocaima, su archivo, que quedó por al

gún tiempo en abandono por consecuencia de la guerra de 1885, se mandó trasladar, y se trasladó en efecto, á la capital del Circuíto de Tequendama, en donde fué entregado al Juez 1.°, quien pasó al 2.° los negocios criminales que eran de su cargo.

Posteriormente se le dirigió al señor Procurador del Distrito Federal un denuncio reservado y sin firma haciéndole saber, para los fines legales consiguientes, que en dicho archivo existía un sumario instruído en Tocaima contra Januario Afanador, por heridas causadas al Juez Bautista Cuenca, á tiempo en que ejercía una función de su cargo, y que ese sumario desapareció del Juzgado 2.° del Circuíto de Tequendama, servido entonces por el doctor Joaquín Hoyos, siendo Secretario Ramón E. Olaya y Fiscal el doctor Domingo Suescún.

Promovidas y practicadas todas las diligencias necesarias para comprobar la existencia de dicho sumario, su pérdida y la persona ó personas responsables, resulta que fué en efecto instruído, pero no que hiciera parte del archivo que le fué *entregado* al Juez 1.° del Circuíto de Tequendama, y menos que éste lo pasara al Juez 2.°, de cuya oficina, dice el denuncio, desapareció, pues no figura en el inventario que el primero formó y bajo el cual recibió el segundo los negocios criminales.

Por esto ha declarado el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en Sala de lo criminal, sin lugar á formación de causa contra el Juez del Circuíto de Tequendama, doctor Joaquín Hoyos, y contra el Fiscal doctor Domingo Suescún, á quienes supone responsables el denunciante anónimo, y ha dispuesto que se pase el expediente al Juez 2.° de dicho Circuíto para que resuelva lo que estime legal, en cuanto á la responsabilidad del Secretario del Juzgado.

Remitido el sumario á esta Suprema Corte en consulta del auto de sobreseimiento, y oído el señor Procurador general, quien es de concepto que se confirme, se tiene en consideración, para dictar la resolución correspondiente, que las diligencias que se han practicado han sido en efecto ineficaces para descubrir quién ó quienes de los funcionarios públicos, sometidos en primera instancia á la jurisdicción del Tribunal de Cundinamarca y en segunda á esta Superioridad, sean responsables de la pérdida, substracción ó extraxío del sumario en referencia, cuya reposición se ordenó y consta que se está practicando.

Confírmase, por lo tanto, de acuerdo con lo pedido por él señor Procurador general, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, el auto de sobreseimiento consultado.

Hágase saber el presente, déjese copia, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el sumario al Tribunal de su procedencia.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En diez y ocho de los mismos notifiqué este auto al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, diez y nueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Inicióse este sumario para averiguar la responsabilidad en que incurriese el ex-Prefecto del extinguido Territorio nacional de Casanare, José Trinidad Moreno, por no haber auxiliado unos exhortos que libró el Juez nacional del mismo Territorio, en el mes de Diciembre de mil ochocientos ochenta y uno, con el objeto de obtener algunas copias é informes que se necesitaban en un sumario que se instruía contra Cayetano y José María Estrada y Enrique Alejandro Isaza, por irrespetos y amenazas al Corregidor de Nunchía.

En auto dictado por la Corte Suprema federal en dos de Marzo de mil ochocientos ochenta y cinco, se observó que no había motivo legal para proceder contra el indiciado, porque no estaba probado que tales exhortos llegarán á la Prefectura y allí fueran demorados, que sería lo que constituiría el delito, y ordenó la ampliación del sumario en el sentido indicado.

Con el propósito de dar cumplimento á lo mandado por la Corte, se pidieron los informes del caso al Secretario de la Prefectura de la Provincia de Casanare y al del Juzgado del Circuíto del mismo nombre. El primero informó que en el archivo no había constancia alguna sobre el recibo de los exhortos librados por el Juez nacional de Casanare, á que se refiere la investigación, y el segundo, que tampoco en el archivo del Juzgado constaba la entrega y recibo de los pliegos de que se ocupa el auto de la Corte, y que esos documentos que figuraban originales en la causa contra los mencionados Estradas é Isaza, se perdieron con ella, que se ordonó su reposición y volvió á perderse, sobre lo cual están haciéndose las averiguaciones del caso.

Vese, por lo expuesto, que están agotados los medios de investigación y que no se ha podido obtener la prueba necesaria para abrir juicio de responsabilidad.

Por esta razón el Tribunal Superior del Distrito judicial de Tundama, en el Departamento de Boyacá, sin necesidad de resolver sobre la prescripción de la pena, que acaso ha tenido lugar, dictó auto de sobreseimiento, con fecha veintitrés de Septiembre último, y dispuso se consultase con esta Superioridad.

Y, como esa providencia es arreglada á derecho, la Corte Suprema, de acuerdo con el parecer del señor Procurador, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, la confirma.

Déjese copia de esta resolución y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veinticinco de los mismos, notifiqué el auto que precede al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Noviembre diez y nueve de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Se instruyó este sumario con el objeto de averiguar la responsabilidad en que incurriera el Juez del Circuito del Banco, en el extinguido Estado del Magdalena, José María Rioja, por no haber mandado averiguar el delito de fuga cometido por Trinidad Rodríguez, procesado por el delito de parricidio, y por haber declarado pendiente la causa que había sido yá fallada en última instancia por la Corte Superior.

Los hechos que han dado origen al sumario, se verificaron así:

El Juez del Circuíto del Banco dictó sentencia condenatoria contra Rodríguez, en 19 de Marzo de 1879, y remitió los autos en consulta á la Corte Superior del Magdalena, Tribunal que confirmó la sentencia de primera instancia, con fecha 1.° de Mayo del mismo año. Cuando los autos fueron devueltos al Juzgado de su origen, el Juez Rioja, con fecha 6 del mismo mes, y en atención á que el reo se había fugado de la cárcel el 23 de Abril del mismo año, declaró que quedaba en suspenso la actuación, mientras se obtenía la captura del reo, y ordenó la práctica de algunas diligencias con el fin de obtener la captura.

Se ha creído que este procedimiento pudo comprometer la responsabilidad del Juez, porque no ordenó la investigación correspondiente, acerca de la fuga del reo y sus responsables, y porque se limitó á ordenar que se practicasen ciertas diligencias para su aprehensión.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial del Magdalena, por auto de 23 de Agosto último, declaró terminada la instrucción sumaria, porque consideró prescritas las penas en que podía incurrir el sindicado, y dispuso que se consultara tal providencia con esta Corte.

La Corte, para resolver, considera:

1.° Que el Juez Rioja hizo bien en ordenar que se dieran órdenes para la captura del procesado, puesto que, aunque fallada la causa en última instancia no se había notificado la sentencia al reo, no era posible entregarlo á la autoridad política para la ejecución de la sentencia, diligencias que debieron poner fin al procedimiento judicial, y sin las cuales no podía archivarse el proceso:

2.° Que no consta en estos autos que dejara de instruírse sumario para averiguar la fuga de Rodríguez y sus responsables; pero dado caso que no se hubiera iniciado la sumaria y que la omisión fuera imputable al Juez José María Rioja, no podría adelantarse el procedimiento, porque las penas que deberían imponérsele serían las de suspensión y multa, que señala el artículo 347 del Código Penal del extinguido Estado del Magdalena, penas que se prescriben en cuatro años, conforme al artículo 62 del mismo Código.

Por estos fundamentos, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el parecer del señor Procurador general, confirma el auto consultado.

Notifíquese, cópiese, publíquese esta providencia y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Sumper—Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Snnclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintiuno de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto que antecede al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Noviembre diez y nueve de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Por excitación del Poder Ejecutivo nacional, así como por denuncia del General Manuel Briceño, se ha instruído el presente proceso, con el objeto de averiguar la responsabilidad que pudiera corresponderle al ex-Presidente del extinguido Estado de Panamá, Gerardo Ortega, por el cargo de haber permitido, según se dijo, el tránsito de algunos elementos de guerra destinados á la República del Perú, durante la guerra que dicha República y la de Bolivia sostenían con la de Chile en el año de 1879.

En la investigación de los hechos atribuídos al funcionario sindicado, se nota una natural actividad por parte de todos los empleados que en ella han intervenido, con excepción de los miembros de algunas de las administraciones ejecutivas del mismo Estado de Panamá.

Preparados muchos documentos en la antigua Secretaría del Interior y Relaciones Exteriores de Colombia, y acumuladas, por resolución de esta Suprema Corte, las diligencias practicadas en el Juzgado Departamental de Panamá á los que se habían aparejado por el Juzgado 3.° del Distrito de Bogotá, el señor Procurador general de la Nación solicitó la práctica de algunas pruebas que juzgó necesarias para el completo perfeccionamiento del proceso. Entre estas, unas se dirigían á acreditar el verdadero carácter que tuvieran los vapores en que se dice fueron embarcados para el Perú los elementos de guerra; otras á obtener un informe del Gobierno de Chile sobre el apresamiento del Vapor *Lanza-torpedos*; otras á solicitar del Gobierno del Perú informes acerca del juicio seguido al Capitán del expresado Vapor, con motivo del apresamiento de éste; y otras, en fin, á esclarecer puntos importantes que se relacionaban con los hechos materia de la investigación.

Yá esta Corporación, por disposisión de 12 de Agosto de 1880, había ordenado se pidiera al Gobierno del Estado de Panamá, un informe referente á la clase de buques en que siguieron á su destino los elementos de guerra, de que se ha hecho mención; y como el informe no fué dado, á pesar de la insistencia en obtenerlo, la Corte ordenó se sacara copia de las piezas conducentes, á fin de hacer efectiva la responsabilidad de los mismos empleados del Gobierno Ejecutivo del Estado de Panamá, por su morosidad en la práctica de dicha prueba.

Ultimamente la Corte ha pedido informe al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia sobre el resultado que hubiera tenido la discusión diplomática suscitada por el representante de Chile en esta Nación, con motivo de los hechos que es examinan.

Todas estas pruebas han venido al proceso, excepto el dato pedido a las autoridades del Perú; de suerte que está agotada la investigación, y si se nota alguna demora en ella, no ha consistido en manera alguna en los empleados colombianos encargados de dirigirla y activarla.

De todas las diligencias practicadas resulta que dos son los cargos concretos deducidos contra el Presidente del extinguido Estado de Panamá, á saber: el haber permitido que se armara en el puerto de este nombre, un Vapor *Lanza-torpedos* destinado al Perú; y el haber consentido también el embarque en buques peruanos de algunos elementos de guerra dirigidos á la misma Nación.

Respecto del primer cargo, consta en el proceso que en el año de 1879 llegó á Panamá, en consignación á la casa comercial de Dellatorre y Compañía una lancha de Vapor, que se dijo era nave de guerra; que apenas se recibió el denuncio del caso, hecho por el Cónsul de Chile en Panamá, el Gobierno de aquel Estado hizo reconocer por peritos la Nave expresada, y éstos conceptuaron que no era de guerra, aunque sí susceptible de recibir esa aplicación; que como los consignatarios solicitaban con urgencia el permiso para que pudiera salir del puerto la lancha indicada, el Presidente seccional creyó conveniente exigirles una fianza, que diera la seguridad de que aquella nave no se dirigía á ninguno de los puertos de las Repúblicas entonces comprometidas en la guerra del Pacífico. Esta fianza fué otorgada por los consignatarios, por la suma de doce mil pesos, hipotecando una finca valiosa de su propiedad. Con estas condiciones la embarcación pudo salir de Panamá, y efectivamente llegó al Puerto de Manta en la República del Ecuador, según así se comprobó satisfactoriamente.

De lo dicho se infiere que respecto de este punto el Presidente de Panamá hizo lo que la prudencia aconsejaba para evitar que la lancha referida pudiera ir á servir á alguna de las Naciones combatientes, comprometiéndose así la neutralidad de Colombia; y que si procedimientos ulteriores pudieron hacer servir la nave en favor de los intereses peruanos, el empleado sindicado no podía evitar aquel acontecimiento.

Acerca del segundo cargo, debe observarse que, con motivo de deuncias repetidas, dadas por el mismo Cónsul Chileno, respecto de la llegada á Panamá de elementos de guerra destinados al Perú, el Poder Ejecutivo Nacional excitó al de aquel Estado para que procediera con la circunspección que el caso demandaba, sin comprometer la neutralidad del país ni entrabar tampoco la libertad de tráfico que había garantizado la Nación por el Itsmo.

Según varias declaraciones presentadas por el Cónsul Chileno, es muy posible que se hubieran hecho embarques de elementos de guerra en buques peruanos; pero además de que no ha podido comprobarse el verdadero carácter de tales buques, aparece que las lanchas de la Compañía del Ferrocarril de Panamá eran las que servían para facilitar tales embarques; y en tal caso, como lo afirma el señor Procurador, es más admisible la responsabilidad por parte de la Compañía, que por parte del Presidente de Panamá. Por lo demás, respecto de este punto, el estado actual del proceso no se presta en manera alguna para deducir legalmente un cargo efectivo contra el Presidente de Panamá; pues si realmente hubo embarques de elementos de guerra, con destino al Perú, estos hechos pudieron ser el fruto de maniobras más ó menos sigilosas y hábiles, que el empleado sindicado estaba en dificultad de prevenir y frustrar, dadas las condiciones especiales del Itsmo.

En lo tocante al cargo personal contra el ex-Presidente de Panamá, consistente en haber recabado indirectamente del Cónsul Chileno una remuneración pecuniaria, tal cargo aparece enteramente gratuíto.

Con efecto, quien hizo dicha aseveración fué el Representante de Chile en Panamá en aquella época, y señaló á José Florentino Ucrós como la persona que le había hecho la proposición de que se ha hablado, á nombre de Gerardo Ortega; pero interrogado Ucrós, niega categóricamente el hecho, y da varias explicaciones que tienden á demostrar que, en ese incidente, hubo, más bien que justicia, exceso de celo por parte del Agente de Chile.

Como una corroboración implícita de la no culpabilidad de las autoridades oclombianas en los hechos referidos, puede también aducirse la circunstancia de no haberse insistido, por parte de la Nación Chilena, en la gestión diplomática iniciada por su Representante, con motivo de los acontecimientos que se han mencionado, según la nota del Ministro de Relaciones Exte-

riores de Colombia, de fecha 21 de Septiembre del presente año, que se registra en el expediente.

Basada en los razonamientos que preceden, la Corte Suprema, de acuerdo con el concepto del señor Procurador general de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, dicta auto de sobreseimiento en las presentes diligencias.

Notifíquese, cópiese, publíquese y archívese el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintiuno de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué este auto al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

RESOLUCIONES VARIAS.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, diez y seis de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—En el presente año había ocurrido á esta Superioridad Miguel A. Peña, desde la cárcel de Mompox, según fechó su pedimento, quejándose de que arbitraria é injustamente se le mantenía preso en la cárcel pública de dicha ciudad, y pidiendo que se decretase su excarcelación. La Corte no pudo dictar providencia alguna en el asunto, ya porque no era de su competencia el poner remedio directo á la prisión de Peña, caso de ser arbitraria ó ilegal, ya porque el peticionario no acompañó á su queja la prueba sumaria indispensable para darle curso legal.

Nuevamente ha ocurrido Peña á la Corte, en memorial del seis de Octubre, y en esta vez fechado en la cárcel provincial de Cartagena, y vuelve á quejarse de que se le mantiene preso arbitrariamente, denunciando, además, expropiaciones violentas de que dice ha sido víctima. Otra vez la queja viene desprovista de toda prueba sumaria y de todo documento que acredite la verdad de lo que se denuncia; y el hecho mismo de haber sido trasladado el querellante de la cárcel de Mompox á la de Cartagena, á veintiséis miriámetros de distancia, hace conjeturar que contra Peña existe alguna causa criminal pendiente que no da lugar á excarcelación.

Como quiera, siendo posible que el encarcelamiento del reclamante haya provenido de algún abuso de autoridad que dé lugar á una investigación para averiguar quien pueda ser el responsable, la Corte resuelve:

Pase original á Su Señoría el Procurador general el memorial de Miguel A. Peña, con el objeto de que se sirva dictar las órdenes del caso á los Agentes del Ministerio público en Cartagena y Mompox, á fin de que se averigüe lo que haya de cierto en cuanto á la queja del reclamante y los motivos de la prisión de éste; y que si resultare haber motivo para exigir responsabilidad á algún funcionario público, promueva lo conveniente ó lo haga promover, con arreglo á las leyes; informando del resultado á esta Superioridad.

Comuníquese al peticionario como resultado de su memorial, notifíquese, cópiese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En el mismo día notifiqué este auto al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*. Secretario

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL

Señores Magistrados.

El Teniente José Ramón Rueda, Habilitado del Batallón Carabobo número 7.°, que hacía la guarnición en Puente Nacional á principios del corriente año, recibió del Administrador general de Salinas de Zipaquirá la suma de cuatro mil setecientos noventa y cuatro pesos, setenta y cinco centavos ($ 4,794-75) en billetes del Banco Nacional, valor de unas libranzas que había entregado al mismo Administrador, por raciones del Batallón expresado. El Habilitado Rueda, acompañado del Sargento 2.° Aurelio Cruz, del Cabo 2.° Francisco Guerrero y de los soldados Januario Torres y Cesáreo Miranda, pertenecientes al mismo Cuerpo, conducía á Puente Nacional la suma que había recibido del Administrador de Salinas de Zipaquirá. En la tarde del 10 de Mayo último, el Habilitado y sus compañeros llegaron á Ubaté, donde resolvieron pasar la noche para seguir su viaje al día siguiente, habiéndose alojado todos los de la comisión en el "Hotel Americano" de aquel lugar.

Rueda en su indagatoria declara, que en la tarde del 10 de Mayo, en Ubaté, al salir de la pieza del hotel en que se había alojado, para ir á comer, dejó allí el dinero, quedando en dicha pieza el Sargento 2.° Aurelio Cruz y los otros individuos de la escolta; que al regresar del comedor con el objeto de acostarse, el Cabo Guerrero le dijo notar la falta de la petaquita de paja que contenía los $ 4,794-75 en billetes del Banco Nacional; que en ese mismo momento al averiguar quién había cogido los billetes, se notó que el Sargento Cruz se había desertado, y eso dió origen á que se le considerara como autor del hurto de la suma que se llevaba para racionar al Batallón Carabobo número 7.°

Por denuncia del Habilitado se inició por la autoridad militar el correspondiente sumario; pero como el Auditor de Guerra conceptuó que el delito era de la competencia de la justicia civil, se pasaron estas diligencias al Juez del Circuito de Ubaté para que aprehendiera el conocimiento, quien á su turno las devolvió á la autoridad militar, juzgando que se le había provocado competencia negativa, y declarando que la aceptaba, por lo cual ha venido á la Corte para su decisión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280 de la ley 153 del presente año.

Para resolver la controversia se hace preciso que ésta venga arreglada en la forma exigida por la ley; por consiguiente, antes de entrar á estudiar en su fondo el asunto principal, debe exigirse que por las respectivas autoridades que parecen figurar en la competencia negativa, se llenen las condiciones previas, determinadas en el capítulo 3.°, título 3.°, libro 2.° del Código Judicial.

Propiamente el funcionario de instrucción militar no cree ser incompetente para conocer de este sumario; él se ha limitado á respetar el concepto del Auditor, que no estaba obligado á seguir, y por aquella circunstancia pasó las diligencias al Juez del Circuito de Ubaté, sin dar cumplimiento á lo dispuesto en el artículo 780 del Código Judicial citado.

Por lo tanto, este Ministerio es de concepto que debéis devolver el expediente para que la autoridad militar, si no creyere que el asunto es de su competencia, exprese todas las razones legales que tenga para creer que corresponda á otra, y que si llegare el caso provoque formalmente la competencia negativa.

Bogotá, 18 de Octubre de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

Con fecha 8 de Agosto último, estando yá en vigencia la ley 57 del presente año, el Tribunal Superior del Distrito judicial de Bolívar dictó auto de sobreseimiento en estas diligencias, instruídas en averiguación de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir el señor Nicolás D. Lozano, como Gobernador de la extinguida Provincia de Magangué, por no haber perseguido y aprehendido á varios reos rematados que se encontraban en la cabecera de la Provincia sometida á su jurisdicción. Aquel auto fué dictado por un solo Magistrado, sin embargo de que la ley 57 y vuestro Acuerdo número 48, de 26 de Julio último, publicado en la *Gaceta Judicial* número 30, declaraban que los fallos de los Tribunales de Distrito, en cualquiera instancia, debían ser colectivos.

Al ocuparse la Corte de un auto semejante del Tribunal de Cundinamarca, del 28 de Julio del corriente año, resolvió lo siguiente:

"En efecto, el auto de sobreseimiento que se ha remitido en consulta á esta Superioridad aparece redactado y suscrito por un solo Magistrado, cuando debió serlo por todos los que componen la sala de lo criminal del Tribunal de Cundinamarca; y como dicho auto tiene fecha 28 de Julio, cuando yá estaba vigente la citada ley 57, es evidente que el auto de que se trata no ha sido dictado por autoridad competente, y que, por lo mismo, no hay materia sobre que pueda recaer un fallo de segunda instancia.

"En tal virtud, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo con el parecer del señor Procurador general, declara nulo el auto consultado, y dispone se devuelvan las diligencias al Tribunal remitente, para que se proceda á fallar el asunto de acuerdo con lo prevenido en la regla 2.ª del Acuerdo número 66, de 24 de Agosto próximo pasado, publicado en el número 35 de la *Gaceta Judicial*."

A mérito de las anteriores consideraciones, este Ministerio os pide que antes de decidir el asunto en el fondo, declaréis la nulidad, y dispongáis se devuelva el proceso al Tribunal de su origen, para que se corrija la irregularidad apuntada.

Bogotá, 19 de Octubre de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

En auto de fecha 15 de Julio del corriente año, el Tribunal Superior de Cundinamarca, en Sala de lo criminal, ordenó se averiguara la responsabilidad del señor Enrique Rojas B., Juez 5.° del Circuíto de Bogotá, por haber admitido un recurso de hecho interpuesto en un juicio criminal por el defensor del acusado, sin que la solicitud ni los documentos que la acompañan estuvieran escritos en papel sellado. Practicada la averiguación, el mismo Tribunal de Cundinamarca, con fecha 24 de Agosto último, condenó al Juez Rojas B. á pagar una multa de quince pesos ($ 15), y por apelación de este fallo han venido los autos á vuestro conocimiento.

Por el decreto número 480 de 5 de Agosto de 1886, "sobre papel sellado y timbre nacional," se dispone lo siguiente:

"Artículo 9.° No será obligatorio extender en papel sellado los autos, documentos y diligencias que se expresan en seguida:

.....

"8.° Las diligencias que se practiquen en negocios criminales de policía, de fraude á las rentas públicas, y en general, todas aquellas actuaciones que tengan por objeto la imposición de alguna pena."

Si se demuestra que la solicitud y documentos presentados al Juez 5.° del Circuíto de Bogotá por el defensor del acusado, están comprendidos en el inciso 8.° del artículo 9.°, transcrito arriba, de hecho queda demostrada la inculpabilidad de dicho Juez.

Es principio general sancionado por las leyes de todos los pueblos, que nadie puede ser juzgado y penado sin que se le oigan sus defensas; por consiguiente, no es lógico admitir ninguna condición que limite aquel derecho sagrado, establecido para proteger al inocente y como garantía de la justicia.

Si á los procesados no se les oyera porque no representaban en papel sellado, era lo mismo que coartarles la libertad de la defensa, porque los más de ellos es seguro que son absolutamente pobres, á quienes el Gobierno tiene que proveer de alimentos y vestidos; y si les falta lo necesario para la vida, no se les puede exigir que tengan recursos para comprar el papel sellado en que deban consignar su defensa.

Estas razones serían suficientes para concluír que todos los escritos de los reos y las diligencias que se practiquen á su solicitud *para sostener sus derechos ó su inocencia*, no están comprendidos entre las diligencias y documentos que deben extenderse en papel sellado; pero del texto mismo del inciso 8.°; artículo 9.° del decreto número 480 resulta la excepción que sostengo en favor de los reos.

Según ese inciso, no es obligatorio extender en papel sellado *las diligencias que se practiquen en negocios criminales...* y en general, *todas aquellas actuaciones que tengan por objeto la imposición de alguna pena;* y como entre esas diligencias se comprenden todas las que sean conducentes á la defensa del procesado, porque sin ellas la ley no permite el juzgamiento ni la aplicación de la pena, es forzoso admitir que la solicitud del recurso de hecho y los documentos en que se apoya pudieron extenderse en papel común.

Ampliando más el verdadero sentido del inciso 8.° citado, el Ministerio de Hacienda, por resolución del 14 de Septiembre último, aprobatoria de otra del Gobernador de Bolívar del 6 de Agosto anterior, declara que hasta los escritos de los particulares para denunciar un delito, pueden hacerse en papel común.

El decreto número 480 comenzó á regir desde el 1.° de Enero del presente año, y por su artículo 36 se dispuso, que desde aquella fecha los Departamentos no podían exigir la contribución de papel sellado ó de timbre. Por lo tanto, el recurso de hecho de que se trata, propuesto el 2 de Julio del mismo año en curso, no se regía por la legislación del extinguido Estado de Cundinamarca, relacionada con la contribución de papel sellado del Estado; lo que deja comprender que el artículo 531 del Código de Procedimiento criminal de Cundinamarca, que considera infringido el Tribunal, no tiene aplicación en este caso.

De acuerdo con lo expuesto, os pido que revoquéis la sentencia que ha sido materia de la apelación.

Bogotá, 20 de Octubre de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

El Tribunal Superior de Antioquia os consulta el auto de sobreseimiento que ha dictado, con fecha 10 de Septiembre último, en el sumario instruído en averiguación de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido Julio Ferrer, como Juez del Circuíto de Antioquia, al decretar la excarcelación con fianza de Juan C. Lora, sindicado de un delito que no admitía excarcelación según la legislación del extinguido Estado.

En un baile que tuvo lugar en la ciudad de Antioquia en la noche del 30 de Octubre de 1885, hubo una pelea, en la que tomaron parte muchos de los concurreutes, entre otros Juan C. Lora y el que entonces ejercía las funciones de Alcalde, señor Marco A. Villa, quien asegura que Lora lo irrespetó y lo maltrató de obra. Esto último dió origen al sumario que se instruía contra Lora; pero cuando no se había comprobado la existencia del delito, se solicitó la excarcelación con fianza del que figuraba como sindicado, y el Juez Ferrer tuvo que concederla para no incurrir en responsabilidad por atentado contra la seguridad individual.

La existencia del hecho criminoso es la base y fundamento de todo juicio criminal, y probado éste, se decreta la detención del sindicado, si resulta contra él, por lo menos, la declaración de un testigo hábil, ó un indicio grave de que sea responsable, y siempre que el delito tenga señalada pena corporal.

Si bien podía justificarse el arresto de Lora por los otros hechos que ejecutara durante la pelea, no sucede lo mismo con respecto al cargo que se le hacía de haber maltratado á la autoridad, cuando ésta se encontraba en actual ejercicio de sus funciones, como se ve de la parte del sumario contra Lora que figura en este expediente.

Por lo expuesto, cree este Ministerio, que el Juez Julio Ferrer no incurrió en responsabilidad al decretar la excarcelación del sindicado Lora, y os pide, en consecuencia, que confirméis el auto de sobreseimiento consultado.

Bogotá, 18 de Octubre de 1887.

CARMELO ARANGO M.

BOGOTÁ.—IMP. DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 30

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 17 de Diciembre de 1887.

CONTENIDO.

Pág.

Acuerdo número 126, relativo á una consulta del Juez del Circuíto del Norte (Boyacá)..... 393
Id. número 127, id. á otra id. del Juez del Circuíto de Chinácota (Santander)..... "
Id. número 128, id. á otra id. de Su Señoría el Ministro de Gobierno 394

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Pronunciada en un juicio reivindicatorio promovido por Bartolomé Martínez Bossio..... "
Id. sobre una reclamación de Simón Hurtado, por suministros..... 396
Id. en un juicio ejecutivo seguido contra Gaviria é Hijos ..... "
Id. en otro id. ordinario ocasionado por una obligación de fianza..... 397

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Sobre incompetencia de la Corte para conocer de un juicio ejecutivo por vía de consulta..... 398

NEGOCIOS CRIMINALES.

Confirmatorio de auto de sobreseimiento proferido por el Tribunal Superior de Pasto..... 399
Revocatorio de otro proferido por el Tribunal Superior de Tundama..... "

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL.

Emitida con relación á un sumario por responsabilidad..... "
Id. id. á otro id. por id..... 400
Id. id. á otro id. por id..... "
Id. id. á otro id. por id..... "

GACETA JUDICIAL.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

ACUERDO NÚMERO 126.

En la ciudad de Bogotá, á veinticuatro de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, y luégo se procedió á tomar en consideración la consulta que, en telegrama de 22 del presente, elevó á esta Superioridad el Juez del Circuíto del Norte, en el Departamento de Boyacá, encargado del Despacho de lo Criminal, consulta que, en substancia, dice lo siguiente:

"Contra Jesús Moreno, preso en la cárcel, se siguen dos procesos, uno en que está llamado á juicio por heridas y maltratamientos de obra, pendiente en el Juzgado del Circuíto, y otro por estupro y otros delitos, en estado de decidir sobre el mérito del sumario. ¿Cómo se substancian y deciden esos dos asuntos, perteneciendo á distintas jurisdicciones, y quién es el Juez competente para conocer de ambos, atendidas las disposicianes de los artículos 1,750 del Código Judicial y 103 de la ley 61 de 1886?"

El señor Magistrado doctor Noguera, á quien pasó el asunto para su examen y presentación del correspondiente proyecto de resolución, sometió el siguiente á la consideración de la Corte:

"Dígase al Juez consultante que una consulta enteramente igual en el fondo, elevada por el Juez del Circuíto de Santander, en el Departamento del Cauca, fué resuelta en el punto 2.° del Acuerdo de esta misma Corte, número 103, fecha 28 de Octubre último, publicado en la *Gaceta Judicial* número 43, correspondiente al 12 del mes en curso."

Considerado este proyecto, fué aprobado por unanimidad, con lo cual se concluyó el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados, conmigo el Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 127.

En la ciudad de Bogotá, á veinticinco de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señoros Magistrados y del infrascrito Secretario, se ocupó en considerar la consulta que á continuación se expresa; y el señor Magistrado doctor Morales, á quien tocó en repartimiento dicha consulta, presentó el siguiente proyecto de resolución, que fué aprobado por unanimidad:

"Consulta el Juez del Circuíto de Chinácota, en el Departamento de Santander, cuándo empieza á correr al demandado el término que tiene para contestar la demanda, si, vencido el que le señala el Juez para estar á derecho en el juicio, según el artículo 426 del Código Judicial, no se ha devuelto oportunamente el despacho de emplazamiento, y si recibido luégo, consta en él la respectiva diligencia de notificación.

"El artículo es claro en su contexto. Allí se establece que, cuando el demandado está ausente, el término que tiene para contestar la demanda empieza desde que se cumpla el término señalado por el Juez para que el demandado esté á derecho en el juicio, si dicha demanda hubiere sido notificada; de suerte que, una vez notificada la demanda y cumplido el término para estar á derecho en el juicio, si el demandado no comparece, toca al actor hacer uso de las acciones accesorias que las leyes conceden.

"Queda así resuelta la consulta elevada.

"Comuníquese y publíquese."

Con lo cual se concluyó este Acuerdo, que firman los señores Magistrados, conmigo el Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

ACUERDO NUMERO 128.

En Bogotá, á veintiséis de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, con el objeto de tomar en consideración una consulta elevada al Ministerio de Gobierno por Arturo Correa, para que se resuelva cuál es el procedimiento que debe observarse en los juicios de sucesión, respecto de la intervención que el Síndico del Lazareto tenía en esos juicios, conforme á la legislación del extinguido Estado de Cundinamarca.

El Ministerio de Gobierno redactó el respectivo proyecto de resolución, pero ha tenido por conveniente pasar á la Corte, tanto el proyecto referido como el memorial en que está consignada la consulta, á fin de que esta Corporación resuelva el punto consultado, si estima que es de su competencia.

El proyecto del Ministerio de Gobierno es como sigue:

"El artículo transitorio H de la Constitución dispuso que quedara rigiendo en cada Departamento la legislación del respectivo Estado, mientras el Poder Legislativo no dispusiese otra cosa.

"La ley 57 del corriente adoptó, entre otros Códigos, el Judicial de la Nación, sancionado en 1872, y dispuso que todos ellos comenzasen á regir en toda la República, noventa días después de la publicación de dicha ley.

"El artículo 321 de la ley 153 de este año, declaró que, por virtud de ella y de la citada ley 57, el artículo transitorio H de la Constitución había surtido sus efectos íntegros; y que, en consecuencia, quedaba abolida la legislación de los extinguidos Estados, excepto las disposiciones de carácter administrativo seccional y las de policía, ó sea aquéllas que versasen sobre materias cuya regulación compete á las Asambleas departamentales, conforme á los artículos 185 y 186 de la misma Constitución, las cuales continuarán en vigor como ordenanzas departamentales en cuanto no fuesen contrarias á la Constitución y á las leyes de la República.

"Conforme al artículo 185 de la Constitución corresponde á las Asambleas departamentales dirigir y fomentar, por medio de ordenanzas y con recursos propios del Departamento, la instrucción primaria, la beneficencia, las industrias establecidas, etc. etc.

"El artículo 3.° de la ley 48 de 1887 declaró rentas de los Departamentos, destinadas, entre otras cosas, á los gastos de fomento de que trata el citado artículo 185, las establecidas por leyes expedidas por las Legislaturas de los extinguidos Estados, excepto la de Salinas, la de timbre y papel sellado, la de degüello de ganado mayor y el impuesto sobre minas.

"Uno de los impuestos que se hallan en ese caso, es el establecido por la ley cundinamarquesa de 10 de Noviembre de 1870, sobre las mortuorias y las donaciones entre vivos, destinado al sostenimiento del Lazareto del Estado.

"Esta ley de Cundinamarca dispuso, entre otras cosas, que los Recaudadores de las rentas del Lazareto intervendrían *como parte* en las mortuorias, las cuales no serían aprobadas por el Juez, sin que se hubiesen pagado los derechos del ramo; y que los mismos funcionarios tendrían en las diligencias de inventarios y avalúos las mismas atribuciones que daba el Código Judicial del Estado á los Recaudadores de manumisión, esto es, nombrar un avaluador de los bienes hereditarios, presenciar los avalúos é inventarios y liquidar los derechos del ramo, para lo cual se les debía dar oportunamente traslado del expediente.

"El nuevo Código Judicial de la República no exige el pago de impuesto alguno para que pueda el Juez aprobar la partición en las causas mortuorias, ni da en ellas intervencion como parte, ni de ningún otro modo, á los Recaudadores del impuesto sobre las mortuorias, ni nombra siquiera tales funcionarios en el capítulo III que trata de los juicios de sucesión por causa de muerte.

"Como el *Código Judicial de la República*, y por consiguiente, la parte de él relativa á juicios mortuorios, es una ley nueva que regula íntegramente la materia á que se referían las anteriores disposiciones cundinamarquesas de que se ha hablado, no puede ponerse en duda que estas últimas han quedado insubsistentes, en virtud de la disposición terminante del artículo 3.° de la ley 153 del corriente año.

"De todo lo dicho se sigue:

"Primero. Que subsiste el impuesto sobre las mortuorias y donaciones en los Departamentos en que estaba establecido por leyes de los extinguidos Estados.

"Segundo. Que quedaron insubsistentes, desde que comenzó la vigencia del nuevo Código Judicial, las disposiciones legales de los extinguidos Estados que daban intervención á los Recaudadores de ese impuesto en los juicios mortuorios, y que exigían el pago de él como una formalidad necesaria para la aprobación judicial y terminación de dichos juicios.

"Hay, pues, necesidad de que se disponga cómo debe cobrarse en lo sucesivo el impuesto sobre las mortuorias. Deben hacerlo las Asambleas departamentales, en virtud de la facultad que les concede el numeral 5.° del artículo 4.° de la ley 14 de 1887, y, en defecto de ellas, los Gobernadores de los Departamentos, en uso de la atribución que les confiere el artículo 6.° de la misma ley.

Por supuesto que aquellas Corporaciones ó estos funcionarios no pueden restablecer lo que el Código Judicial ha dejado insubsistente, pues el legislar sobre esta materia es de competencia exclusiva del Congreso."

En este estado el señor Magistrado doctor Morales propuso lo que á continuación se expresa:

"Siendo el punto consultado de competencia de la Corte, por tratarse de procedimientos, y estando el proyecto del Ministerio de Gobierno estrictamente ajustado á las disposiciones legales vigentes, esta Corporación lo acoge como suyo, y en consecuencia, resuelve la consulta en los términos del indicado proyecto.

Comuníquese á Su Señoría el Ministro de Gobierno y publíquese en la *Gaceta Judicial*."

Habiendo sido aprobada por unanimidad la anterior proposición, se dió por terminado el presente Acuerdo, que firman los señores Magistrados conmigo el Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A.*, Secretario.

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, diez y nueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El tres de marzo de mil ochocientos ochenta y cuatro, Bartolomé Martínez Bossio, por medio de su legítimo apoderado, Gregorio Blanco, formuló demanda contra la Nación, ante el Juez nacional, en lo civil, de la Provincia de Sincelejo (antiguo Estado de Bolívar), entablando la acción reivindicatoria con respecto á la canoa denominada "América," por cuanto esta embarcación era de la propiedad del demandante y había sido embargada, por resolución judicial, como vehículo empleado para hacer efectivo un contrabando de sal. Conforme á los artículos 1,937, 1,938 y 1,939 del Código Judicial (nueva edición) debía convocarse por un edicto á los que se creyesen con derecho á reclamar la devolución de los vehículos, y la reclamación debía hacerse dentro del término de quince días, apoyada en una información sumaria, con la cual se comprobase, á más del derecho de propiedad del reclamante, que los vehículos le habían sido quitados por fraude ó fuerza, ó que se aplicaron al uso fraudulento sin noticia del dueño, ó sin su consentimiento expreso ni tácito. Dadas estas condiciones, el Código manda que se siga el juicio reivindicatorio con el respectivo Agente fiscal, por los trámites civiles de la vía ordinaria; y así se hizo en el presente caso, por cuanto, según el certificado del Juez respectivo (foja 8 del expediente principal) constaba que el cinco de Marzo del citado año se había vencido el término fijado para la reclamación, y que la mencionada canoa había sido embargada judicialmente,

á virtud de la actuación criminal seguida por delito de contrabando.

Contra lo expresamente preceptuado por la ley fué admitida la acción reivindicatoria, puesto que la información sumaria presentada en apoyo de la reclamación, si bien contenía la prueba plena del derecho de propiedad de Martínez Bossio sobre la canoa "América," no entrañaba ninguna comprobación con respecto á la inculpabilidad del dueño de dicha embarcación en el contrabando que motivó el embargo. Con efecto, las declaraciones de José F. Caballero, Patricio Licona y Lucio Paut (fojas 4 vuelta á 7 del cuaderno de pruebas) ratificadas en el plenario, en las cuales los testigos dan plena razón de su dicho) comprueban que la mencionada canoa era de la propiedad de Martínez Bossio. Pero por lo tocante á la inculpabilidad del reclamante, solamente el testigo Caballero afirma (foja 6 citada) "que sabe que José de la Rosa Villalobo la tiene en arrendamiento (la dicha canoa) para viajar en ella los artículos en que libremente se negocia en este lugar (Cartagena), con las formalidades exigidas por la ley, y lo sabe *porque Villalobo le dijo* que al terminar este viaje, la iba á dejar para arrendarle al exponente una canoa." Los otros dos testigos (Licona y Paut) declaran que nada saben sobre el alquiler de la canoa contratada con Villalobo; por manera que la afirmación de Caballero, á más de ser de referencia, es única, y no basta, según la ley, para comprobar el hecho importantísimo y necesario de la inculpabilidad de Martínez Bossio (dueño de la canoa) en el contrabando de sal para cuya ejecución sirvió de vehículo la embarcación.

Es muy de notar que Martínez Bossio, así como comprobó plenamente su propiedad, no hubiese pedido la declaración de Villalobo sobre el contrato de alquiler de la canoa "América," que con este hubiera celebrado, ni de otro modo hubiera comprobado que cuando dicho vehículo sirvió para el contrabando estaba alquilado y en poder de tercera persona; con lo cual quedaba comprobada la inculpabilidad del propietario en el contrabando en que había sido empleada su canoa. Como no existía la prueba de tal inculpabilidad, faltaba la base requerida por el citado artículo 1939 del Código Judicial para que se siguiera el juicio de reivindicación, y el Juez nacional de lo civil no debió admitir la demanda, ni el Agente fiscal pudo aceptarla para que se abriese el juicio á prueba. Pero con eso y todo, se entabló el juicio, y seguido que fué por los trámites legales, el Juez pronunció sentencia, por la cual declaró "comprendida en la confiscación á la canoa "América," y como auxiliador del fraude al señor Bartolomé Martínez Bossio." De esta sentencia apeló el demandante para ante esta superioridad, y en la segunda instancia se ha seguido la tramitación legal, oyéndose á las partes.

Tres incidentes han ocurrido en la segunda instancia, que importa tomar en cuenta; á saber:

Primero, que el general Lázaro María Pérez, admitido como apoderado del apelante, presentó, en el término de prueba, una información adicional de nudo hecho, solicitando que se ordenase la ratificación de los dichos que la componen, y son los de Francisco Javier Pérez y Francisco J. Pardo; ratificación que sólo tuvo efecto con respecto al primer testigo, por no haberse hallado al segundo en el Departamento de Bolívar. Es de notar que el testigo Pérez, al ratificarse en su declaración (foja 13, actuación de la Corte) confirmó lo afirmado por los testigos anteriores, en lo tocante á la propiedad de Martínez Bossio sobre la mencionada canoa; pero nada dijo sobre la inculpabilidad del dueño de ella.

Segundo, que el señor Procurador general, en su vista de fojas 21 y 22, hizo presente que, en su concepto, la Corte no era competente para conocer de la causa, por cuanto el juicio reivindicatorio era ó debía ser un incidente ó accesorio del juicio sobre contrabando, y que, una vez devuelto por esta Superioridad dicho juicio criminal al conocimiento del Tribunal Superior de Bolívar, era lógico enviarle también el juicio de reivindicación para que lo fallase en segunda instancia:

Tercero. Que la corte halló insuficiente lo actuado, y ordenó, por auto del ocho de Junio del presente año, dictado para mejor proveer, que el Tribunal Superior de Bolívar emitiese ciertos informes relativos á la causa criminal seguida por contrabando, á que se ha hecho referencia, á fin de que la Corte supiese si en esta causa se había fallado ó nó definitivamente sobre la confiscación de la canoa "América," materia del juicio reivindicatorio.

Y es de advertir, respecto de estos incidentes, que la Corte, por medio de su citado auto del ocho de Junio, se declaró competente para conocer del juicio reivindicatorio en segunda instancia, por cuanto el asunto es contencioso é interesa á la Hacienda Nacional, y es muy distinto del juicio criminal por contrabando, cuyo conocimiento sí correspondía, y así se resolvió, al Tribunal Superior de Bolívar.

De las diligencias mandadas practicar por dicho Tribunal, á virtud de dos exhortos de esta Superioridad, resulta (según el certificado del Juez de Sincelejo, fojas 8 á 9, cuaderno 4.° ó *D.*): 1.° Que el auto por el cual el Juzgado, en lo criminal, mandó fijar edictos por quince días para emplazar á los que se creyeran con derecho á la propiedad de la canoa "América." fué proferido el catorce de Febrero de mil ochocientos ochenta y cuatro; 2.° que en el mismo auto se dijo que, "habiendo constancia de que se había entablado juicio de reivindicación, era al Juzgado 2.° á quien correspondía decidir si la canoa "América" había caído ó nó en la pena de comiso"; y 3.° que el Tribunal Superior del Distrito de Bolívar profirió auto, en catorce de Abril del presente año, por el cual confirmó el de catorce de Febrero citado; y mandó cesar el procedimiento relacionado con el contrabando en referencia, por cuanto en la Aduana se había confundido la sal aprehendida en la "América," con las existencias del Fisco:

Así establecidos los hechos, la Corte, para resolver, considera:

El artículo 1,939 del Código Judicial, nueva edición, que en la de 1873 era el 1,852, estatuye lo siguiente, en correspondencia con los cuatro precedentes: "Si compareciere alguno reclamando como *de su propiedad* los expresados vehículos y efectos, y *acreditare* sumariamenie que *se le quitaron por fraude ó fuerza*, ó que se aplicaron á aquel uso *sin su noticia*, ó *sin su consentimiento expreso ni tácito*, se seguirá el juicio de reivindicación con el respectivo Agente Fiscal por los trámites civiles de la vía ordinaria."

Ahora bien: la información sumaria que, conforme al artículo transcrito, presentó el apoderado de Martínez Bossio, contenía, como se ha relatado, la prueba irrefutable (reforzada después en el plenario y en la segunda instancia) de la propiedad que el mismo Martínez Bossio tenía sobre la mencionada canoa, embargada como vehículo que había servido para el contrabando; pero ninguna prueba suministraba con respecto á la inculpabilidad del propietario del vehículo; ni posteriormente, durante todo este juicio, se ha producido prueba alguna que lo exculpe. Así, en rigor de legalidad, no pudo ni iniciarse siquiera el juicio de reivindicación, faltando, como faltaba, la prueba sumaria requerida por el citado artículo 1,939, ni menos debió el Juez admitir la demanda, viciada como estaba desde su principio. Pero yá que así se faltó á la ley, y que la parte del Ministerio público no se opuso, al menos debió el demandante comprobar su derecho en el plenario. Lo comprobó solamente en parte, acreditando la propiedad que tenía, indisputable, sobre la canoa "América"; pero por lo mismo estaba obligado á probar que la tenía dada en alquiler, y que sin su conocimiento ni consentimiento fué aplicada por el fletador ó arrendatario á servir como vehículo para el contrabando; ó bien, que la mantenía de su cuenta y se la quitaron por fraude ó fuerza para ejecutar el delito; condiciones que, junto con la comprobación de la propiedad, son indispensables para que la acción reivindicataria produzca sus efectos.

Faltando, pues, la prueba complexa exigida por el citado artículo 1,939, se está en el caso de proceder conforme al 1,940 del mismo Código Judicial, el cual dispone que "*si el reclamante no acompañare á su reclamo* la prueba sumaria de que se habla en el artículo anterior, *se procederá contra él como auxiliador del fraude*, y lo mismo se verificará cuando en el *juicio civil* se desvanezcan completamente las pruebas *de su no participación en el fraude.*"

Esto pone de manifiesto que, según el procedimiento especial establecido por la Sección 3.ª, Capítulo 5.°, Título 9.°, Libro 3.° del Código Judicial, la inculpabilidad del dueño de los vehículos que han servido para el contrabando, está siempre en tela de juicio y sujeta á prueba en el proceso civil reivindicatorio, y si ella no queda justificada ó comprobada, en vano se comprueba la propiedad sobre los vehículos ó objetos empleados para el fraude. Esta recta doctrina es confirmada por el artículo 1941, el cual dice que, "en el caso que en el jui-

cio criminal fuere absuelto el reclamante de los expresados vehículos y efectos" (el mismo que ha entablado la acción reivindicatoria), "si acreditare suficientemente la propiedad de los efectos que reclama, en la sentencia absolutoria se decretará también la devolución de lo que resulte ser de su propiedad."

Todo esto es de elemental justicia, pues es obvio que, si se declara que no hubo delito de contrabando; que fué inocente el hecho materia del proceso, también era inocente la propiedad, la cosa empleada en la ejecución del hecho, y si estaba embargada, debe ser devuelta, en vez de confirmarse la confiscación. Es patente así que, para el Legislador, son inseparables en la acción reivindicatoria dos condiciones: que el reclamante sea legítimo dueño de la cosa reclamada, y que él, como dueño, no sea culpable del contrabando, si lo hubo. Por lo tanto, si media en el juicio criminal sentencia absolutoria, el absuelto obtiene por el mismo hecho la devolución de los objetos embargados que le pertenecen; ó si comprueba su inculpabilidad, al ejercer la acción reivindicatoria, y durante el juicio civil subsiste la prueba de esa inculpabilidad, también debe devolverse al reclamante ó actor lo que pruebe ser suyo.

Pero en el presente caso, no solamente no ha subsistido la prueba de la inculpabilidad del reclamante, sino que nunca la dió; no solamente no hubo sentencia absolutoria, en el juicio criminal por contrabando, sino que este juicio fué indebidamente suspendido, sin que se pronunciase sentencia, por una razón inadmisible, esto es, por cuanto la sal decomisada se había confundido con la sal del Estado en los almacenes de la Aduana. Falta, pues, una de las dos condiciones legales indispensables—la inculpabilidad del reclamante—para que surta sus efectos la acción reivindicatoria y se devuelva la cosa reclamada; y además, son patentes las irregularidades que se han cometido tanto en el juicio civil como en el criminal. Entre ellas es de notar la condenación que contiene la sentencia apelada, contra Martínez Bossio, á quien el Juez declara auxiliador del contrabando, cosa indebida, puesto que en este juicio *civil* de reivindicación no se ha juzgado á dicho Martínez Bossio como á contrabandista ó auxiliador del contrabando.

Por estas consideraciones la Corte Suprema, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca la sentencia de primera instancia y falla en los términos siguientes:

1.° Declárase que Bartolomé Martínez Bossio no ha justificado su acción reivindicatoria, ni el derecho, consiguiente á su propiedad, de que se le devuelva la canoa embargada.

2.° El Juez respectivo, que lo es el de lo criminal en la provincia de Sincelejo (Departamento de Bolívar), procederá contra Martínez Bossio, como auxiliador del fraude, iniciando y siguiendo la investigación respectiva, y tomando por base los documentos existentes.

No se hace especial condenación en costas.

Y por cuanto de los autos resulta que se han cometido varias irregularidades, se ordena, para inquirir quienes hayan incurrido en responsabilidad:

1.° Que el Juez del Circuito de Sincelejo emita nuevo informe, ampliando el de fojas 8 á 9 del cuarderno *D* ó cuarto, y acompañe á él copia de todos los autos que menciona y del que profirió el Tribunal Superior de Bolívar el catorce de Abril del presente año, sobre suspensión de la causa criminal, y lo remita directamente á esta Superioridad.

2.° Que se saque copia y se certifique sobre lo conducente para averiguar la responsabilidad en que hayan podido incurrir el Juez que conoció en primera instancia de la reclamación reivindicatoria, y el Fiscal que intervino en el juicio civil. Producidos que sean los documentos, se pondrán al despacho.

Notifíquese, cópiese y publíquese en la *Gaceta Judicial*, y devuélvase el expediente al Juez de la primera instancia, tan luégo como se hayan compulsado los documentos del caso.

R. Antonio Martínez.—José M. Samper.—Aristides Calderón.—Luis M. Isaza.—Antonio Morales.—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del diezinueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete se publicó esta sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En veintiuno de los mismos la notifiqué al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

En veintitrés de los mismos la notifiqué al señor doctor Lázaro María Pérez.

PÉREZ.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintidós de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—A favor de Simón Hurtado, vecino de Popayán y amigo y servidor del Gobierno, y á cargo del Tesoro Nacional, reconoció la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones, por resolución de 1.° de Abril de 1887, y en virtud de lo dispuesto en el inciso 2.° del artículo 1.° de la ley 44 de 1886, la suma de dos mil quinientos veinte pesos ($ 2,520), valor de sesenta y nueve novillos que le fueron expropiados al primero en el año de 1885, por fuerzas revolucionarias encabezadas por José María Sánchez, y de uno más de que dispuso para raciones de tropa, Liborio Peña, Agente del Gobierno. Su Señoría el Ministro de Guerra aprobó dicha resolución, y pasado el expediente al señor Procurador general, para lo de su cargo, lo sometió al conocimiento de esta Suprema Corte, haciendo notar que, habiéndose practicado la prueba testimonial en que Hurtado fundó su reclamación sin intervención del encargado del Ministerio público, debiera rehacerse llenándose ese requisito. Para mejor proveer, lo dispuso así la Corte, y examinados de nuevo los testigos en debida forma, han declarado en todo de conformidad con lo que primeramente expusieron; por lo cual, y por no haberse objetado sus declaraciones en lo substancial, y por probar ellas plenamente los hechos que sirvieron de fundamento á las resoluciones mencionadas de la Comisión de expropiaciones y del Ministerio de Guerra, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma tales resoluciones y dispone que se devuelva el expediente por conducto del mismo Ministerio á dicha Comisión.

Hágase saber, déjese copia y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del veintidós de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, se publicó la anterior sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En veintitrés de los mismos, se notificó esta sentencia al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Noviembre veintidós de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El treinta de Diciembre de 1884, giró la casa comercial de Gaviria é Hijos, de Bogotá, una letra de cambio, número 712, á diez días vista, por valor recibido, á la orden del Tesorero general de la República, y á cargo de Gaviria é Hijos de Cali, por la suma de dos mil pesos ($ 2,000); y el 5 de Enero del siguiente año, giraron segunda letra de cambio, número 712 también, los mismos Gaviria é Hijos de Bogotá, á diez días vista, á cargo de los mismos Gaviria é Hijos de Cali, á la orden igualmente del Tesorero general, por la suma de mil pesos ($ 1,000) también por valor recibido. Estas dos letras fueron ambas endosadas al Administrador principal de Hacienda Nacional de Cali, y la primera, oportunamente presentada, fué aceptada por Gaviria é Hijos de dicha ciudad, el *doce de Enero*

de mil ochocientos ochenta y cinco, según la nota firmada en el anverso; pero después, según otra nota firmada en el reverso, fué frustrado el pago por los que debían hacerlo, en estos términos, el *once de Abril*: "Estando las Cajas, almacenes y propiedades de los señores Gaviria é Hijos en poder del Gobierno del Estado, es imposible cubrir el valor de la presente letra.

"PP. GAVIRIA É HIJOS. V. V. VELÁSQUEZ."

Cuanto á la segunda letra, no fué oportunamente presentada, puesto que no tiene nota alguna de aceptación, sino la siguiente, puesta en el reverso, el *veintisiete de Abril*:

"Estando embargados por el Gobierno del Estado todos nuestros bienes y propiedades, no podemos aceptar la presente letra.

"PP. GAVIRIA É HIJOS. V. V. VELÁSQUEZ.

Habiendo sido devueltas las dos letras al Tesorero general, por el empleado endosatario, y dado el Ministro del Tesoro órdenes terminantes para que ejecutivamente se cobrara de los giradores el valor de ellas, practicóse por el Juez Ejecutor el reconocimiento, y Juan de la Cruz Gaviria declaró judicialmente que, como Gerente de la casa de Gaviria é Hijos, había girado las letras, y reconoció las firmas puestas por él en ellas. Llenada esta formalidad, dicho Juez libró mandamiento ejecutivo contra Gaviria é Hijos de Bogotá, por la suma de tres mil pesos ($ 3,000) y sus intereses, contados desde el día en que debieron cubrirse, y los costos de la ejecución. De este auto ejecutivo apeló Juan de la Cruz Gaviria, en su calidad de Gerente de la casa en liquidación, y habiéndose seguido la tramitación legal, han sido oídos el señor Procurador general y el apelante, siendo de concepto el primero que debe revocarse dicho mandamiento, por cuanto las letras de cambio de que se trata no prestan mérito ejecutivo. La Corte, para resolver, considera lo siguiente:

El artículo 1,014 del Código Judicial dice que "para que una letra de cambio ó libranza ó vale endosados presten mérito ejecutivo, *basta* que reconozca su firma aquel contra quien *en su caso* haya de procederse ejecutivamente." etc; y en esta disposición se apoyó únicamente el Juez Ejecutor para librar el mandamiento ejecutivo. Pero es patente que dicho artículo 1,014 no puede ser entendido ni aplicado, sino en relación precisa con el artículo 1,010, en el cual se especifican los documentos que prestan mérito ejecutivo, siendo su numeral 5.° el pertinente, el cual dice:

"Las letras de cambio contra los aceptantes, contra los endosantes ó contra los libradores en sus respectivos casos, según el Código de Comercio."

Es obvio, por lo tanto, que si basta el reconocimiento de la firma de aquel contra quien, *en su caso*, haya de procederse ejecutivamente, este caso ha de estar establecido conforme al Código de Comercio, y según sea el que ocurra, se librará el mandamiento ejecutivo contra el librador, el endosante ó el aceptante que, estando obligado, haya reconocido su firma. En consecuencia, para saber si en el presente caso son ejecutables los libradores, es necesario consultar las disposiciones del Código de Comercio.

El nacional, reformado en 1873, que regía sobre los giros hechos de un Estado á otro, cuando las letras fueron giradas, disponía en su artículo 507 que, en materia de contratos de cambio y de *letras*, se estuviese á lo que dispusiese la Legislación de los Estados, salvo lo contenido en el mismo Código con respecto á los giros hechos de Estado á Estado ó en relación con el Exterior. Y según las reglas que se fijan en seguida, las letras de cambio estaban sujetas á las formalidades siguientes:

1.ª Debían ser presentadas á la aceptactón, por ser á días vista, de un Estado á otro y entre dos plazas que no distaban más de cien miriámetros, dentro de dos meses (artículo 508 inciso 1.°); y es sabido que Cali solamente dista de Bogotá, cincuenta y medio miriámetros;

2.ª Si el librado *tiene provisión*, no está exento de aceptar el giro, aun cuando la letra no sea presentada en tiempo oportuno (artículo 509).

3.ª Negada la aceptación, el portador deberá protestar la letra en el tiempo y la forma prescritos en la ley del Estado respectivo, y dar aviso por el primer correo (artículo 510);

4.ª El artículo 511 determina los derechos que tiene el portador de la letra, una vez protestada; y el 512 declara que tales derechos se pierden si el portador no requiere la aceptación y hace el protesto, por defecto de ella, dentro de los términos legales;

5.ª El portador de la letra de cambio, aceptada ó no aceptada, debe exigir su pago el día de su vencimiento, y no obteniendo el pago protestará la letra, y dará aviso al cedente, con remisión del protesto (artículo 513);

6.ª Las letras no cobradas el día de su vencimiento ni protestadas en la oportunidad legal, se tienen por *perjudicadas* y en tal evento caducan los derechos del portador contra el librador y endosantes, salvo ciertos casos que se detallan (artículo 514. Véase también el 515);

7.ª Por último, el Código de Comercio del Cauca, que es el mismo de Cundinamarca, con ligeras variantes, determina (artículos 485 á 498) todo lo concerniente á las letras no aceptadas ó no pagadas, y á las protestas que deben hacerse para que se establezcan respectivamente los derechos del portador contra los endosantes ó el girador.

De todo esto resulta, comparando los hechos con las disposiciones legales:

1.° Que la letra por dos mil pesos ($ 2,000) no fué presentada para la cobranza de su valor á los diez días de su aceptación (esto es, el vuintidós de Enero), sino noventa días despues de la fecha en que debió hacerse efectiva;

2.° Que la segunda letra, por mil pesos ($ 1,000) fué presentada á la aceptación ciento doce días despues de su giro y noventa y ocho días después de su llegada á Cali;

3.° Que el portador no verificó (pues no consta de modo alguno en autos) las protestas que debió haber hecho, por ante Notario público y con las formalidades establecidas por el Código de Comercio particular que regía en el Estado del Cauca; y por lo mismo, las dos letras quedaron *perjudicadas* legalmente, y corren la suerte que *en sus casos* les asignan el inciso 5.° del artículo 1,010 y el artículo 1,014 del Código Judicial;

4.° Que, conforme al artículo 517 del Código nacional de Comercio, aplicable al caso (el de 1873), "en defecto de pago de una letra *presentada y protestada en tiempo y forma*, el portador tiene derecho á exigir el reembolso de su importe y gastos del librador y endosantes á su elección;

5.° Que, en consecuencia, no habiéndose cobrado oportunamente la letra por dos mil pesos ($ 2,000), ni presentado en tiempo á la aceptación la de mil pesos ($ 1,000), ni hecho los protestos y dado los avisos legales, ambas letras quedaron legalmente *perjudicadas*, y no se hallan en los casos que el Código Judicial requiere para que las letras de cambio reconocidas presten mérito ejecutivo.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen y pedimento del señor Procurador general, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el auto ejecutivo apelado, y ordena que cese la ejecución trabada contra Gaviria é Hijos de Bogotá.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente al Juez de la primera instancia.

R. Antonio Martínez—Jose M. Samper—Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintitrés de los mismos notifiqué al señor Procurador el auto que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

En la misma fecha lo notifiqué al señor doctor Manuel Restrepo H.

RESTREPO H.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintitrés de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos: Con fecha dos de Junio de mil ochocientos setenta y nueve, el Fiscal del Circuíto de Medellín, en el extinguido Estado de Antioquia, entabló juicio ordinario contra José María

Ramírez Gómez por la cantidad de cincuenta y seis pesos, ochenta centavos ($ 56-80), más los intereses al seis por ciento anual y las costas del juicio.

En el año de mil ochocientos setenta y siete, José María Ramírez Gómez se constituyó fiador solidario de un hijo suyo, quien entró en la Escuela normal de Institutores de aquella sección, como alumno pensionado por el Gobierno; y como el joven Ramírez no cumplió con los compromisos que contrajo y que constan en el respectivo documento, se ha demandado de su fiador el pago de la suma valor de los gastos que causó el expresado joven derante los días que permaneció como alumno.

Seguido el juicio por todos sus trámites el Juez del Circuíto de Medellín, en lo civil, dictó sentencia definitiva, condenando á Ramírez Gómez al pago de lo que resulte á deber por no haber cumplido su hijo con las obligaciones que contrajo. Esta sentencia fué apelada por el demandado, y con ese motivo han venido los autos á esta Superioridad.

En el documento de compromiso consta que el joven José Ramón Ramírez se obligó á seguir los cursos de la escuela, cumpliendo los deberes impuestos por los Decretos del Gobierno y por los reglamentos del Establecimiento; y á pagar, en casos de faltar á algunos de esos deberes, todos los gastos que ocasionara como alumno.

Está demostrado de una manera satisfactoria, que el joven Ramírez no permaneció en el Establecimiento sino unos pocos días, habiéndose separado de hecho, sin el beneplácito de sus superiores, y que esa separación fué autorizada por su padre, violando así una de las cláusulas del compromiso, y haciéndose, por consiguiente, responsable del reembolso de los gastos hechos, al tenor de otra de las cláusulas del mismo compromiso

Según la liquidación formada por el Inspector de Instrucción pública del extinguido Estado de Antioquia, los gastos á que dió lugar la permanencia del alumno Ramírez en el Establecimiento importan la suma de cincuenta y seis pesos, ochenta centavos ($ 56-80); y como esta liquidación, formada por un empleado nacional debe considerarse como documento auténtico, y como, por otra parte, no ha sido infirmada en manera alguna, tal documento conserva toda su fuerza en el presente caso.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador general, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, condena á José María Ramírez Gómez á pagar al Tesoro nacional la cantidad de cincuenta y seis pesos, ochenta centavos (56-80), más los intereses á la rata legal y las costas del juicio. Queda así reformada la sentencia apelada de primera instancia.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial*, y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del veintitrés de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, se publicó esta sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En veinticuatro de los mismos la notifiqué al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Se notificó por edicto.

Guerra A., Secretario.

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Noviembre veintidós de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Iniciado sumario en la Jefatura municipal de San Vicente, en el extinguido Estado de Antioquia, en Noviembre de 1884, contra Antonio Arbeláez Zapata, por delito común, el Jefe instructor lo mandó reducir á prisión, pero anticipándose á concederle el beneficio de excarcelación, si prestaba fianza de persona abonada, respondiendo por la suma de cien pesos.

Notificada la providencia á Arbeláez, ofreció en el acto por su fiador á Angel Zapata; y éste se obligó, bajo la multa de cien pesos y de los gastos necesarios para hacer la captura y conducción del sindicado, llegado el caso; pero sin expresar que se comprometía á entregar á su fiado dentro del término que se le señalara, ni á solicitarlo y aprehenderlo por su cuenta. En una palabra, no se prestó la fianza carcelera en los términos que exigía el artículo 1,516 del Código Judicial de Antioquia; y la diligencia que Zapata firmó contiene una obligación enteramente deficiente al efecto, tal vez por ahorrar palabras, como se ve á la foja 2.ª de este expediente, aun cuando se comprende que la intención del funcionario instructor fuera otra.

Dos años después se requirió á Zapata para que entregara á Arbeláez, por medio de despacho librado á San Vicente por el Juez del Circuíto de Rionegro; y después de alguna moratoria, el procesado se presentó espontáneamente tres días después de vencido el último plazo que le había sido concedido.

Como consecuencia de esta demora, y previo el certificado del Juez, que no contiene la diligencia de fianza—debiendo suponerse que se acompañaría—el Colector de Hacienda de San Vicente, en uso de la jurisdicción coactiva, y por auto de tres de Marzo del corriente año, libró mandamiento ejecutivo contra el mencionado Zapata por la suma de cien pesos; y adelantado el juicio ejecutivo, denunciados, depositados y avaluados los bienes, llegó el caso de oponer excepciones, y se opusieron varias por el ejecutado, entre otras la de nulidad, obligación cumplida y extinción de ésta; todo lo cual sucedía en el mes de Marzo último.

Rigiendo todavía entonces la legislación de Antioquia,—que no permitía que otra autoridad que el Tribunal conociera del juicio de excepciones en los asuntos de rentas en que estaba interesado el Estado,—pasó el expediente al Tribunal Superior; y surtida allí la tramitación respectiva, terminó la primera instancia, por sentencia de quince de Julio del presente año, en la que después de varias disertaciones, se declaró probada la excepción perentoria de obligación cumplida, y no probadas las demás, pero mandando cesar la ejecución y desembargar el semoviente depositado.

Como en la indicada sentencia se ordenó la consulta de ella, han venido los autos á esta Superioridad. Substanciada la consulta y oído el dictamen del señor Procurador, éste cree que la Corte no es competente para conocer en el asunto, por no tener en él ningún interés directo la Hacienda de la República.

En concepto de la Corte la opinión del señor Procurador es fundada, no precisamente por la razón que él expresa, sino porque en este caso no se trata de recurso de parte, que es para el que da jurisdicción á la Corte el artículo 2.º de la ley 143 de 1887. Según ese artículo conoce la Corte en última instancia de los recursos que se interpongan contra sentencias definitivas ó contra los autos pronunciados por los Tribunales en los litigios entre los particulares y los Gobiernos de los Departamentos; y se comprende que tal disposición fué dictada para dejar amparo á los particulares que luchan contra los intereses de un Departamento, cuando el derecho de los primeros pudiera ser sacrificado, ó para amparar también á la entidad departamental, que puede ocurrir por medio de sus Personeros legales, cuando la injusticia pese contra ella; pero en uno y en otro caso, por voluntad del perjudicado. Mas, no sucede lo mismo cuando una sentencia viene por vía de consulta, porque deja de subsistir el motivo por el cual se estableció aquel amparo del débil contra la entidad fuerte, ó contra la injusticia que pudiera afectar al Departamento, puesto que por parte de éste no se ocurre. Y se confirma esta opinión por la definición que los jurisconsultos dan á la palabra recurso, diciendo que es la acción que queda á la persona condenada en juicio para recurrir á otro Juez ó Tribunal Superior; lo cual es cosa muy distinta de la consulta de oficio. Demás de esto, no existe disposición alguna que haga consultables para la ante la Corte las sentencias en que estén interesadas las rentas de los Departamentos.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación se abstiene de conocer en la consulta mencionada, ordenando que se devuelvan los autos al Tribunal remitente.

Notifíquese, cópiese y publíquese.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera —Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En veintitrés de los mismos se notificó este auto al señor Procurador.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Noviembre veintitrés de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Tribunal Superior del Distrito judicial de Pasto consulta con esta Corte el auto de sobreseimiento que pronunció en trece de Agosto del corriente año, en el sumario instruído por orden del Secretario de Hacienda del Departamento del Cauca, contra Roberto Rosero, Juez del Circuíto de Obando en lo criminal, al substanciar varios juicios de contrabando.

De la copia de uno de esos juicios, el seguido para averiguar el contrabando de ocho bultos de mercancías extranjeras aprehendidos en el pueblo de Guachucal, se observa que el expresado Juez siguió el procedimiento detallado en el capítulo 5.°, título 10, libro 3.° del Código Judicial de la Nación, que señala los trámites comunes en juicios de esta clase; y se le hace cargo al citado Juez por no haber observado la tramitación más breve que determina el artículo 6.° de la ley 60 de 1881.

La Corte considera que la disposición consignada en el artículo 6.° de la citada ley 60 de 1881, ofrece un motivo de justa duda, porque no deroga para este caso el procedimiento especial del Código Judicial, ni establece que se siga otro aparte para declarar el fraude y los responsables.

Que el sumario copiado en estas diligencias, no aparece que se hubiera iniciado á instancia del denunciante ó aprehensores, y finalmente, que en un caso dudoso como el de que se trata, no es justo imputar falta ó violación de la ley al Juez que resuelve la duda en el sentido de las mayores garantías de acierto.

Por estas consideraciones, la Corte, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador general, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el auto consultado.

Notifíquese este auto, cópiese en el libro respectivo, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase el expediente al Tribunal Superior del Distrito judicial de Pasto.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En el mismo día se notificó este auto al señor Procurador general.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Diciembre dos de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—En despacho librado en 13 de Agosto de 1885, comisionó la Corte al Juez nacional del Territorio de Casanare para que practicara ciertas diligencias que debían figurar en un sumario que se instruía contra el Juez 5.° del Circuíto de Bogotá y su Secretario, por faltas denunciadas por José Trinidad Moreno, y como hasta el 27 de Octubre del mismo año no hubiera llenado dicho Juez su cometido, mandó averiguar la Corte la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por la demora. De lo actuado resulta que la correspondencia se mandaba á Nunchía, capital de dicho Territorio, por la vía de Tunja, pero que por razón de la guerra no hubo correo para aquella población, desde Enero hasta Diciembre de 1885, y que, por consecuencia de esto, el despacho librado por la Corte no fué recibido por el Juez de Casanare hasta el 16 de Febrero de 1886, desde cuya fecha permaneció en el Juzgado, hasta el 7 de Septiembre del mismo año, en que, según el informe de fojas 15 fué devuelto á la Corte.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tundama dictó en 22 de Junio último, en Sala de un Magistrado, auto de sobreseimiento, y lo ha consultado con esta Superioridad, y, pasado al estudio del señor Procurador general, es éste de concepto que tal auto se revoque y que se amplíe el sumario con el fin de comprobar quiénes sirvieron el Juzgado del Territorio de Casanare, desde el 16 de Febrero hasta el 7 de Septiembre de 1886; pues si bien aparece que en 17 de Agosto de 1884 tomó posesión del empleo de Juez el doctor Melchor Isaza, no consta que estuviera en ejercicio de sus funciones en el tiempo expresado, ni que él sólo las desempeñara. De acuerdo, pues, con lo pedido por dicho señor Procurador, la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, revoca el auto de sobreseimiento consultado y dispone que se perfeccione el sumario en los términos sobredichos, para que, en vista de los nuevos datos que se obtengan, se declare de nuevo si há ó nó lugar á formación de causa.

Y por cuanto resulta que el auto consultado fué proferido y mandado consultar en 22 de Junio del año en curso, y que hasta el 28 de Octubre no fué remitido al Secretario de la Corte por el Tribunal de Tundama, causándose así una demora de más de cuatro meses en la secuela del negocio, dicho Tribunal mandará sacar copia de lo conducente, y procederá á averiguar la responsabilidad del culpable en el retardo.

Hágase saber este auto, déjese copia de él, publíquese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales —Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Por falta temporal del Secretário, el Oficial Mayor—*Joaquín Esguerra O.*

En tres de los mismos notifiqué el auto anterior al señor Procurador.

ARANGO M.—*Joaquín Esguerra O.*, Secretario interino.

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL

Señores Magistrados.

El Tribunal Superior del Distrito judicial del Magdalena os remite en consulta el auto que profirió con fecha 23 de Agosto último, y por el cual declaró suspendido todo procedimiento criminal contra José María Rioja, Juez del Circuíto del Banco, por prescripción de la pena, en un sumario que contra dicho Juez se instruía por responsabilidad (f. 12).

A la iniciación de este sumario dió origen la circunstancia siguiente:

Con fecha 7 de Julio de 1887, el Juez del Circuíto de Valle de Upar, remitió al Juez Superior del Distrito Judicial del Magdalena ocho causas criminales y un sumario pendientes en el Juzgado remitente, los cuales, á virtud de lo dispuesto por el artículo 102 de la ley 61 de 1886, dejaron de ser de la competencia del Juez del Circuíto y pasaron á la jurisdicción de dicho Juzgado Superior. (f. 7).

El Juez Superior nombrado dictó el siguiente auto en uno de los expedientes que recibió (f. 7 v.)

"*Santa Marta, Julio 30 de 1887.*

"El Juez del Circuíto de Valle de Upar remite la presente causa contra Trinidad Rodríguez (a) Campito, por el delito de parricidio, por creer que es á este Juzgado á quien compete su conocimiento. Efectivamente: entre los delitos de que debe conocer este despacho, al tenor del artículo 102 de la ley judicial de 1886, se encuentra el parricidio.

"Pero resulta del expediente que Trinidad Rodríguez fué evocado á juicio; que se siguió éste por los trámites respectivos; que fué condenado por el Jurado, y en consecuencia, por el Juz-

gado, y que la sentencia fué confirmada por la extinguida Corte Superior del Estado, y que se pasó copia de ambas sentencias á la autoridad política respectiva para la ejecución de ellas. En consecuencia, quedó terminado el juicio, y nada tiene que hacer este Juzgado con un asunto que ha pasado en autoridad de cosa juzgada. Si el reo se fugó en el lapso de tiempo en que se consultaba la sentencia con la Corte Superior, el Juez debió instruír la respectiva sumaria para comprobar el delito y averiguar quiénes fueran responsables de él; más no se hizo así, sino que al disponerse lo conveniente para la ejecución de la sentencia, se conformó el Juez con decir que se había fugado el reo y que se practicaran ciertas diligencias para su aprehensión. La causa está terminada y debe, por consiguiente, reposar en el archivo respectivo, sacándose copia de las sentencias y de lo conducente para averiguar la fuga del reo y de sus responsables.

"Y como la omisión de este deber apareja responsabilidad á los Jueces, sáquese copia desde la foja 21 hasta el presente auto, y remítase al Tribunal Superior para lo que haya lugar....."

Las copias de que se habla en el auto anteriormente transcrito han sido sacadas, y ellas han servido de fundamento á este sumario y auto de sobreseimiento consultado. Según ellas (f. 3) la fuga del reo tuvo lugar el 23 de Abril de 1879, desde cuya fecha hasta el presente han transcurrido ocho años y más de cinco meses.

Pero no hay constancia en el expediente, de la fecha en que el señor José María Rioja dejó de ser Juez del Circuíto del Banco, y desde la cual debe contarse el término de la prescripción; ni si ésta se ha interrumpido por haber incurrido el sindicado en nuevos hechos ú omisiones sujetos á responsabilidad. Faltan también las copias del nombramiento y posesión de Rioja, como Juez del Circuíto del Banco.

Esta deficiencia del sumario hace necesaria una ampliación del expediente en el sentido indicado, y así os pide el infrascrito que la decretéis, previa revocatoria del auto consultado.

Bogotá, 22 de Octubre de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

El Tribunal Superior del Distrito judicial de Antioquia os remite en consulta el auto que profirió en 5 de Septiembre último, y por el cual sobresee en el sumario contra Isidoro Isaza, Juez del Circuíto de Amalfi, por responsabilidad.

El hecho que dió motivo á la responsabilidad que se averigua, es el siguiente:

El señor Isaza desempeñaba el destino de Agente fiscal del Circuíto de Amalfi y en su calidad de tal, el día 7 de Enero último, pidió el enjuiciamiento de Alejandro Botero G. y José María Palacio B. por el delito de riña, en un sumario que contra ellos se instruía ante el Juez de aquel Circuíto. Poco tiempo después el señor Isaza fué nombrado Juez del mismo Circuíto, empleo que aceptó. Encontró pendiente el juicio que se seguía contra Botero G. y Palacio, y en el cual había antes intervenido como Fiscal, y sentenció el asunto, sin haber declarado el impedimento que tenía para conocer en él. El Tribunal Superior de Antioquia, al revisar la causa contra Botero G. y Palacio, ordenó que se averiguara la responsabilidad de Isaza por el hecho apuntado.

No queda duda de que Isaza, en su calidad de Fiscal, desempeñó funciones de acusador público cuando pidió el enjuiciamiento de los sindicados, y, por consiguiente, al conocer después como Juez en el juicio seguido contra los mismos acusados, concurría en él la causal de impedimento señalada en el artículo 1,682, inciso 7.° del Código Judicial del extinguido Estado de Antioquia.

El Código Penal del mismo Estado, que es el aplicable al caso de que se trata, dice:

"Art. 503. Los funcionarios de instrucción, los Jueces y cualesquiera otros funcionarios ó empleados públicos que á sabiendas conozcan en un proceso, juicio ó nogocio verbal ó por escrito, en que tengan algún impedimento legal ó motivo de recusación sin manifestarlo y excusarse en la forma prevenida por la ley, ó sin habérseles prorrogado debidamente la jurisdicción, serán suspendidos de sus empleos por tres meses á un año y pagarán una multa de diez á cuarenta pesos....."

Según el artículo 4.° *ibidem*, en toda violación de la ley se supone voluntad y malicia, mientras no se pruebe ó resulte claramente lo contrario; y en el expediente no hay otra prueba justificativa del procedimiento de Isaza, que su misma exposición. Las declaraciones de Antonio María Aguilar, Fidel Escobar E. y Emiliano Llano se limitan á establecer la buena conducta anterior del Juez Isaza, y nó á comprobar que el sindicado procedió inocentemente al incurrir en la omisión que se le imputa. Por consiguiente, dado el estado actual del sumario, hay suficiente prueba para decretar el enjuiciamiento; pudiendo el procesado vindicarse en el plenario del cargo que le resulta.

En consecuencia, os pido la revocatoria del auto consultado y que declaréis el enjuiciamiento.

Bogotá, 22 de Octubre de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

Narciso Colmenares Paz, como Jefe Municipal de Palmira, en el extinguido Estado del Cauca, y en ejercicio de las funciones de Jefe militar, el 25 de Marzo de 1886, dió orden para que de la cárcel pública sacaran á los detenidos Jesús Palomino y Gabriel Olave, para incorporarlos en el Batallón 3.° de línea, sin embargo de estar aquellos individuos detenidos por orden del Alcalde del Distrito, como sindicados de delitos comunes que no eran de la competencia del Jefe Municipal.

Para averiguar la responsabilidad de Colmenares Paz, por aquel procedimiento, se ha instruído este sumario, en el cual, el Tribunal Superior del Distrito judicial del Cauca, ha dictado auto de sobreseimiento, con fecha 22 de Septiembre, el que ha venido en consulta á esa Superioridad.

Las consideraciones alegadas para el sobreseimiento están desprovistas de fundamento legal, porque el informe de Colmenares Paz, con que pretende disculpar el hecho materia de esta averiguación, antes bien justifica su culpabilidad. Colmenares Paz informa "que tuvo conocimiento de que en la cárcel pública existían dos individuos en calidad de detenidos y de malos precedentes como dañinos, contra quienes no había prueba legal para privarlos de su libertad, por lo cual ordenó que se incorporasen en el Batallón 3.° de línea; que aparte de esta circunstancia y mientras el orden público se restablecía, tenía autorizaciones para obrar con carácter de Jefe civil y militar, y que en el caso que se investiga procedió en virtud de tal autorización."

A esto se observa, que sólo el funcionario de instrucción es el llamado á calificar si en el sumario existe ó nó la prueba requerida por la ley para decretar la detención de los sindicados; que el mismo hecho de tratarse de individuos de malos precedentes, debió bastar para presumir su culpabilidad en el hecho que se les imputaba; y, por último, que los Jefes militares no tienen facultad para poner en libertad á los detenidos ó presos por delitos comunes, sometidos á la acción judicial: por el contrario, las autoridades militares tienen el deber de custodiar á esos detenidos ó presos y deben prestar su apoyo á la justicia.

Por otra parte, ese hecho jamás ha sido calificado como delito político en las condiciones en que se verificó. Antes, cuando hechos semejantes se cumplían por los revolucionarios, con el fin de aumentar los elementos propios para la guerra, pudieron reputarse delitos políticos; pero tratándose de un Jefe civil y militar que representa la legitimidad, no se pueden estimar sino como delitos comunes para su juzgamiento.

A mérito de lo expuesto, este Ministerio es de concepto que debéis revocar el auto de sobreseimiento consultado, y os pide que decretéis el consiguiente enjuiciamiento.

Bogotá, 26 de Octubre de 1887.

CARMELO ARANGO M.

BOGOTÁ.—IMP. DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 51

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 24 de Diciembre de 1887.

CONTENIDO.

Pág.

ACUERDOS DE LA CORTE.

Acuerdo número 129, relativo á una consulta del Juez del Circuito de Gutiérrez, elevada por el Tribunal Superior de Tundama..... 401
Id. número 130, á otra idem del Tribunal Superior de Pasto..... "
Id. número 131, id. á otra idem del Juez 6.° del Circuito de Bogotá.. 402
Id. número 132, id. á otra idem del..... "
Id. número 133, id. á otra idem de..... 403

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Pronunciada en un juicio ejecutivo sobre Bienes Desamortizados.... "
Id. sobre una reclamación de Francisco Leiva B., por suministros..... 404

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Proferido en apelación, en juicio que sigue Julio Arboleda contra el Tesoro Nacional ..... "

NEGOCIOS CRIMINALES.

Confirmatorio de otro de sobreseimiento proferido por el tribunal Superior de Cundinamarca. 505

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL.

Emitida con relación á un sumario contra los Magistrados del Tribunal Superior de Cundinamarca en la Sala de lo criminal..... 406
Emitidas sobre diversos asuntos..... ..... 408 y 40

GACETA JUDICIAL.

ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA.

ACUERDO NUMERO 129.

En Bogotá, á veintinueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, con el objeto de tomar en consideración la consulta que hace el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tundama, en oficio de 25 de Octubre último. El señor Magistrado doctor Isaza presentó el siguiente proyecto de resolución:

"El Juez 1.° del Circuito de la Provincia de Gutiérrez, en el Departamento de Boyacá, consultó con el Tribunal Superior del Distrito de Tundama, los siguientes puntos dudosos:

"1.° ¿Debe ó nó intervenir el Jurado en los juicios de que conocen hoy los Jueces de Circuito, iniciados antes de la vigencia de la ley 57 de 1887?

"2.° ¿La disposición del artículo 4.° de la ley 46 de 1887, se refiere á *Jueces de Circuito* ó á Jueces de Distrito?

"3.° ¿En conformidad con el artículo 195 del Código Judicial, deben los Secretarios de los Juzgados cobrar derechos por las certificaciones que requiere el artículo 633 del mismo Código, cuando son expedidas fuera de juicio?

"4.° ¿El designado para desempeñar las funciones de Juez 1.° del Circuito, nombrado por el Concejo municipal, de acuerdo con el artículo 74 del Código Judicial del extinguido Estado de Boyacá, ejerció legalmente sus funciones en los meses de Marzo y Abril del presente año?

"El Tribunal mencionado remitió la consulta á la Corte, por no ser él competente para resolverla.

"La duda expresada bajo el número 1.° está claramente resuelta en el Acuerdo número 54 de 6 de Agosto último, en el sentido de que después de la vigencia de la ley 57 del corriente año, los Jueces de Circuito no conocen en ningún caso, con intervención del Jurado, de los negocios que les están atribuídos; lo cual se ratifica.

"El punto segundo de la consulta, referente á la interpretación del artículo 4.° de la ley 46 de 1887, se resuelve en el sentido de que dicha ley, indudablemente adolece de error en donde dice los actuales *Jueces de Distrito*; pues atendida la referencia que ella misma hace al artículo 113 de la ley 61, que trata del nombramiento de Jueces de Circuito que deben hacer los Tribunales, y á que la ley 61, yá vigente, no reconoce *Jueces de Distrito*, sino Jueces municipales, no queda duda de que hubo un error caligráfico en el artículo que se examina, consistente en poner *Jueces de Distrito* por *Jueces de Circuito*; y en este sentido resuelve la Corte esta duda.

"El punto tercero se decide así: las certificaciones de que trata el artículo 195 del Código Judicial, son las que se pidan fuera de juicio; y como la certificación que conforme al artículo 633 del mismo Código, debe dar el Juez ó Magistrado que reciba una declaración, no se expide a petición de parte, sino como una formalidad necesaria en la declaración, es claro que no pueden exigirse derechos de ninguna clase por ella.

"El cuarto punto no se refiere á dudas sobre leyes vigentes, sino á la validez ó nulidad de actos pasados bajo el imperio de otra Legislación, y no es de los que debe decidir la Corte, según el artículo 116 antes citado. La Corte se abstiene, por lo tanto, de decidirlo.

"En el sentido indicado resuelve la Corte los puntos materia de esta consulta."

Puesto en discusión este proyecto, fué aprobado por unanimidad de votos; con lo cual se concluyó este Acuerdo, que firman los señores Magistrados conmigo el Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente*—Por falta temporal del Secretario, el Oficial Mayor, *Joaquín Esguerra O.*

ACUERDO NUMERO 130.

En la ciudad de Bogotá, á veintinueve de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, se reunió la Corte Suprema en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados y del infrascrito Secretario,—con el objeto de tomar en consideración la consulta de que en seguida se hablará;—y el señor Magistrado doctor Martínez, á quien tocó en repartimiento el

asunto, presentó el siguiente proyecto de resolución, que fué discutido y aprobado por unanimidad:

"Consulta el Tribunal de Pasto sobre si las demandas que antes eran de mayor cuantía, según la legislación del Cauca, y que hoy son de menor cuantía, según la legislación nacional, pueden ser decididas por el Tribunal en segunda instancia, á virtud de recurso yá substanciado ante él.

"La Corte, teniendo presente el artículo 40 de la ley 153 del presente año, resuelve la consulta así:

"Si el asunto estaba ya fallado ó el recurso concedido, conforme á las leyes seccionales anteriores, y habían conocido los Jueces de Circuíto, de modo que no quedara otro Superior que el Tribunal, es éste el que debe conocer en segunda instancia, porque aquel recurso debe regirse por la ley que existía en el tiempo en que fué entablado; y así lo resolvió la Corte en Acuerdo número 92, publicado en la *Gaceta Judicial* número 42.

"Dígase así en contestación á Su Señoría el Presidente del Tribunal Superior de Pasto y publíquese."

Con lo cual se dió por terminado el Acuerdo, que firman los señores Magistrados, conmigo el Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente*—Por falta temporal del Secretario, el Oficial Mayor, *Joaquín Esguerra O.*

ACUERDO NUMERO 131.

En Bogotá, á primero de Diciembre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos los señores Magistrados, yo el Secretario leí, de orden del señor Presidente, una nota fechada en 22 de Noviembre último y marcada con el número 387, en que el señor Juez 6.° del Circuíto de Bogotá consulta "si la jurisdicción de que trata el artículo 1,745 del Código Judicial, es en todo caso improrrogable;" y el señor Magistrado doctor Sanclemente, á cuyo estudio se pasó previamente dicha nota, emitió el siguiente proyecto de resolución:

"El artículo 1,745 del Código Judicial, sobre que versa la consulta, está escrito ciertamente en estos términos: 'La excepción de incompetencia de jurisdicción, cuando ésta no es prorrogable, no podrá proponerse por el reo sino en la confesión ó veinticuatro horas después. Si no es prorrogable, podrá proponerse en cualquier tiempo.

"Pero sin esfuerzo se comprende que inadvertidamente, ó por error caligráfico ó de imprenta, fue que se puso en la primera parte del artículo el adverbio NO, antes de la frase 'es prorrogable,' porque salta á la vista que si la excepción de incompetencia de jurisdicción improrrogable sólo pudiera proponerse en el corto término fijado al principio del artículo, no permitiera éste, en seguida, proponerla en cualquier tiempo. Cuando en él se dijo, pues, por contraposición 'si no es prorrogable' (la jurisdicción), se dió á entender claramente que antes habló de otra distinta ó sea de la prorrogable:—de otra manera el artículo sería notoriamente contradictorio, por el hecho de establecer primeramente que cuando la jurisdicción *no es prorrogable*, sólo puede proponerla el reo como excepción en la confesión ó veinticuatro horas después, y á renglón seguido, que *si no es prorrogable* podrá proponerla en cualquier tiempo, cosas inconciliables y repugnantes á la razón, que no pueden atribuírse al legislador sin dar por sentado, lo que no es permitido, que él quisiera incurrir en un absurdo. Cuando limitó, pues, el término en que el reo pudiera proponer la excepción de incompetencia de jurisdicción, se refirió á la prorrogable, y cuando lo hizo extensivo á cualquier tiempo, á la improrrogable, porque ésta en todo caso produce nulidad, conforme al artículo 921 del Código Judicial, sin que haya necesidad de ponerla en noticia de las partes ó de que éstas la propongan, y la otra no, si el reo se somete á ella expresa ó tácitamente.

"Si á primera vista no se conociera que tal fué la intención del legislador, el espíritu del artículo 1,745 se pondría de manifiesto aplicando las reglas de interpretación por vía de doctrinas, establecidas por el artículo 30 del Código Civil, que dicen así:

"'El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya en ellas la debida correspondencia y armonía.

"'Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto.'

"Pues bien: los artículos 126 y 127 del Código Judicial establecen distinción entre jurisdicción prorrogable é improrrogable, y las definen, y el artículo 1,745, si se atiende á su substancia ó á su esencia, se refiere indudablemente á una y otra.

"El artículo 1,756 del mismo Código dice terminantemente que 'produce nulidad en los negocios criminales la incompetencia del Juez, cuando habiéndola propuesto el procesado como excepción en la confesión ó veinticuatro horas después, se haya aquél declarado competente, ó aun cuando no se haya propuesto, la *jurisdicción sea improrrogable;* y esto manifiesta que la primera parte comprende también la prorrogable, y da así á conocer el genuino sentido del artículo 1,745.

"Otra ley, la 57 del corriente año, confirma también lo que se ha expuesto, porque sus artículos 170 y 182 concurren á ilustrar el sentido del que es materia de la consulta.

"Esta se resuelve, pues, en estos términos: El artículo 1,745 del Código Judicial vigente, se refiere en su primera parte á la jurisdicción prorrogable, y en la segunda, á la no prorrogable."

La Corte aprobó unánimemente esta proposición y dispuso que, con las razones que le sirven de fundamento, se trasmita al Juzgado 6.° del Circuíto de Bogotá, y se publique en la *Gaceta Judicial.*

Con lo cual se dió por terminado este Acuerdo, que firman los señores Magistrados, conmigo el Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente*—Por falta temporal del Secretario, el Oficial Mayor, *Joaquín Esguerra O.*

ACUERDO NUMERO 132.

En Bogotá, á dos de Diciembre de mil ochocientos ochenta y siete, reunida la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, Su Señoría el Presidente mandó dar lectura á una nota de consulta del Tribunal Superior del Distrito judicial de Bolívar, de fecha 8 de Noviembre; marcada con el número 77; y en seguida el señor Magistrado doctor Samper, á quien había tocado el asunto en repartimiento, presentó el siguiente proyecto de resolución, que fué aprobado por unanimidad de votos:

"Consulta el Tribunal Superior de Bolívar sobre si, existiendo en ese Departamento leyes sobre juicios ó procedimientos de policía, que son muy breves y sumarios, y habiéndose atribuído el conocimiento de ciertos delitos menores á los Jefes de policía conforme al artículo 207 de la ley 153 del presente año, debe aplicarse para este caso el procedimiento detallado en las respectivas leyes de policía, ó más bien el señalado á los Jueces municipales por el artículo 269 de la ley 57, que ofrece mayores garantías de defensa á los acusados.

"Es evidente que habiéndose declarado por el artículo 321 de la citada ley 153 que las leyes sobre policía de los extinguidos Estados subsisten vigentes, y habiéndose simplemente atribuído á los Jefes de policía por dicho artículo 207, el conocimiento de ciertos delitos, sin determinarse que procedimiento han de adoptar, la Corte no es competente para resolver el punto consultado, pues no se trata de un asunto de organización judicial ni de procedimientos en negocios judiciales, sino de un asunto reservado á los Jefes de policía, cuyo funcionamiento está reglado por leyes que han pasado á tener el carácter de ordenanzas departamentales. Dígase así al Tribunal Superior consultante, en contestación y publíquese esta resolución en la *Gaceta Judicial.*"

Con lo cual se dió por terminado este Acuerdo que firman los señores Magistrados, conmigo el Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente, JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente.* —Por falta temporal del Secretario, el Oficial Mayor, *Joaquín Esguerra O.*

ACUERDO NUMERO 133.

En Bogotá, á dos de Diciembre de mil ochocientos ochenta y siete, se reunió la Corte Suprema de Justicia en Sala de Acuerdo, con asistencia de todos sus Magistrados y del infrascrito Secretario, con el fin de resolver una consulta de que en seguida se hablará; y el señor Magistrado doctor Calderón, á quien se le repartió tal consulta, propuso lo siguiente, que fué adoptado por unanimidad de votos:

"Consulta el Tribunal Superior del Distrito judicial de Tunja, en telegrama de fecha 25 del próximo pasado mes, marcado con el número 23, si la prueba de inspección ocular solicitada ante el Tribunal, teniendo en cuenta lo dispuesto por los artículos 25 y 727 del Código Judicial, debe practicarse por todo el Tribunal, que es el Juez, conforme al 727, ó por sólo el Magistrado substanciador, conforme al 25.

"La Corte para resolver esta consulta considera: que como la inspección ocular es una prueba y corresponde al Magistrado substanciador dictar por sí solo todos los autos de substanciación, y recibir las pruebas hasta poner el negecio en el estado de ser decidido, tal inspección se ha de practicar, por regla general, por el Magistrado substanciador; sin perjuicio de que cuando alguna de las partes ó ambas, soliciten que la inspección se verifique por el Tribunal entero, se haga así; ó que él mismo así lo resuelva para juzgar con más acierto.

"Dígase así al Tribunal consultante y publíquese."

Con lo cual se dió por terminado el Acuerdo, que firman los señores Magistrados conmigo el Secretario.

El Presidente, R. ANTONIO MARTÍNEZ—El Vicepresidente' JOSÉ M. SAMPER—*Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente*—Por falta tomporal del Secretario, el Oficial Mayor, *Joaquín Esguerra O.*

SENTENCIAS DEFINITIVAS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintitrés de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Según consta del testimonio de la escritura pública número 119, otorgada ante el notario de Facatativá, con fecha 3 de Julio de 1860, los miembros de la Junta Directiva Católica de aquel lugar vendieron á Narcisa Pulido de Montes, viuda, una capilla de tapia, piedra y teja, con el terreno en que estaba edificada, situada en la esquina de la plaza de aquel Distrito, cuya venta se hizo por la suma de cuatrocientos pesos de ley ($ 400), que la compradora debía entregar en el valor de otra capilla, que se constituía á edificar en la parte que la Junta designara, de buenos materiales y de teja, etc., etc.; siendo entendido que tal entrega debía hacerla dentro de un año, contado desde el día en que la misma compradora diera principio á la edificación de su propia casa, quedando constituída en la obligación de pagar todos los costos, costas, daños y perjuicios que se originasen á la Junta por la demora, etc.

Semejante contrato sirvió de fundamento al Agente subalterno de Bienes Desamortizados del referido Distrito, para extender la diligencia de inscripción número 3, fecha 29 del citado mes y año, del capital de cuatrocientos pesos ($ 400), como perteneciente á la Iglesia de Facatativá y comprendido, por consiguiente, entre los bienes sujetos á la desamortización.

Con copia de tal inscripción procedió el Agente general del Ramo á formular la liquidación de lo que Narcisa Pulido adeudaba, en su concepto, á la República; liquidación que, con el capital y los intereses en nueve años, al cinco por ciento (5 por 100) anual, ascendió á la suma de setecientos sesenta y seis pesos, sesenta y cinco centavos ($ 766-65 cs.), por la cual se libró mandamiento ejecutivo con fecha 20 de Diciembre de 1879.

Interpuesto contra dicho auto el recurso de apelación, la Corte Suprema Federal lo confirmó, por providencia de 13 de Junio de 1882, por cuanto el auto apelado se dictó con las formalidades legales, y por cuanto el documento que le sirvió de base era de los que conforme á la ley, prestaban mérito ejecutivo.

Seguido el juicio por sus correspondientes trámites, hasta ponerlo en estado de citar para sentencia de pregón y remate, la ejecutada opuso en tiempo las excepciones de falsedad, nulidad, pago, ilegitimidad ó falta de personería en el demandante, falta de jurisdicción y carencia de derecho para pedir el cumplimiento de la obligación contraída por la ejecutada.

Substanciado el artículo en debida forma, se pronunció por el Juez 2.° de dicho Circuíto, la sentencia de 7 de Julio último, ordenando que cesara la ejecución, por cuanto se habían probado todas las excepciones propuestas, menos las de falsedad y pago, sentencia de la cual se alzó para ante esta Suprema Corte el encargado del Ministerio público, siendo ese el motivo por el cual se encuentran los autos sujetos al conocimiento de esta Superioridad.

Adoptada en esta segunda instancia la tramitación prevenida por la ley, se está yá en el caso de decidir el recurso interpuesto y para ello se tiene en consideración:

1.° Que la obligación contraída por Narcisa Pulido de Montes no fué la de entregar á la Iglesia ó Junta de Católicos de Facatativá una determinada cantidad de dinero, sino de construír y entregar á satisfacción de la misma Junta y dentro de cierto plazo, una capilla en cambio de la que había recibido; de manera que el contrato no fué propiamente de venta, sino de permutación con la obligación de ejecutar una obra;

2.° Que siendo las capillas unos oratorios ó edificios pequeños con altar y advocación particular, y destinados, por consiguiente, al culto divino, quedaron expresamente exceptuados de la desamortización por el artículo 4.° del decreto de 9 de Septiembre de 1861, y en tal virtud la Junta de Fábrica ó de Católicos, ó los encargados de la administración de esos bienes tuvieron libertad para disponer de ellos de la manera que lo permitieran la fundación ó estatutos, sin que en el caso concreto á que estos autos se refieren haya necesidad de examinar, por no ser ese el punto controvertido, si la Junta Católica de Facatativá procedió ó nó con facultades legales á verificar la permutación mencionada;

3.° Que una vez que ni la capilla recibida por la ejecutada ni la obligación contraída por ésta, se referían á bienes de aquellos que se adjudicaron á la Nación por el artículo 1.° del citado Decreto, la inscripción que se hizo de la expresada obligación en el registro de los Bienes Desamortizados de Facatativá no tuvo ningún valor, ni puede producir efecto alguno, puesto que la simple inscripción no podía cambiar la naturaleza de los bienes ni sujetarlos á condiciones distintas de las establecidas claramente por las leyes;

4.° Que en el presente caso es tanto más nula la inscripción cuanto no se trataba de bienes cuyo destino y propiedad podían ser dudosos, y que la ejecución se intentó bajo el imperio de la ley 41 de 1864 (29 de Mayo), la cual ratificó y aun amplió las excepciones contenidas en el Decreto de 9 de Septiembre dos veces citado:

5.° Que por lo expuesto es indudable que la excepción de nulidad de la inscripción está suficientemente demostrada, puesto que tal inscripción no se refiere á bienes, capitales, derechos, etc., declarados de propiedad de la Nación; pero no lo están las demás que opuso en tiempo la ejecutada, sobre las cuales parece innecesaria toda discriminación, yá que la comprobada basta para hacer ineficaz la acción intentada por el ejecutante.

Por estos fundamentos, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de acuerdo en lo substancial con el concepto del señor Procurador general, declara que está probada la excepción de nulidad opuesta en tiempo por la ejecutada, y que aunque no lo están las demás que quedan al principio mencionadas, debe cesar la ejecución y desembargarse y entregarse á Narcisa Pulido de Montes la finca sobre que se hizo la traba, en cuyos términos se reforma la sentencia materia de la apelación, sin especial condenación de costas.

Notifíquese, cópiese, publíquese en la *Gaceta Judicial* y devuélvase.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del veintitrés de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, fué publicada la anterior sentencia.

Ramón Guerra A., Secretario.

En veintitrés de los mismos notifiqué al señor Procurador general la sentencia que precede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, veintiséis de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—Reconocida por la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones en contra del Tesoro Nacional y á favor de Francisco Leiva B., la suma de dos mil diez pesos ($ 2,010), que éste reclamó como valor de veintidós mulas y un macho de silla que suministró en el año de 1885, para la movilización de las tropas nacionales que hicieron las campañas del Tolima, Antioquia y la Costa Atlántica, y aprobado dicho reconocimiento por Su Señoría el Ministro de Guerra, se pasó el expediente al señor Procurador general para los fines del artículo 10 de la ley 44 de 1886. Este último funcionario ocurrió á esta Superioridad pidiendo la ampliación de algunas pruebas, y, verificada, se está en el caso de resolver definitivamente lo que corresponda.

Del expediente resulta que Leiva hizo dichas campañas como primer Jefe del Batallón 12 de la Calera y se sirvió hasta Antioquia de bestias propias.

Que faltando caballerías para mover el parque, suministró espontáneamente en La Mesa veintidós mulas con sus correspondientes equipos, las cuales fueron estimadas por el Coronel Nicolás Perdomo, Jefe del Batallón 1.° de Bogotá, á razón de ochenta y cinco pesos (85) cada una.

Que esas mulas fueron conduciendo el parque hasta Antioquia y quedaron allí al servicio de la 1.ª División del Ejército, junto con un macho de silla de muy buenas condiciones, perteneciente al mismo Leiva y estimado en ciento cuarenta pesos ($ 140).

Lo expuesto resulta respectivamente de las atestaciones del General Rafael Reyes, Comandante general del Ejército del Atlántico, del General Enrique Arboleda, Comandante general de la tercera División y del Coronel Perdomo, Jefe de un Cuerpo, cuyas firmas están debidamente autenticadas; y á corroborar sus dichos concurren las declaraciones de los Oficiales del mismo Ejército, José Manuel y Francisco Cabrera y Pascual Rodríguez.

En vista de las pruebas últimamente recibidas, es de concepto el señor Procurador general que la certificación del señor General Arboleda, reforzada por las declaraciones del Coronel Perdomo y del Capitán Pascual Rodríguez, constituye prueba suficiente del suministro de las veintidós mulas, y que el del macho de silla y su valor (ciento cuarenta pesos), están comprobados por las declaraciones contextes de tres testigos, todo lo cual es exacto; pero fundándose en que, si bien las veintidós mulas fueron avaluadas por el Coronel Perdomo á ochenta y cinco pesos ($ 85) cada una, el testigo Rodríguez *crec* que por el estado de guerra en que estaba el país valdrían á sesenta pesos ($ 60), es de parecer dicho señor Procurador que deben computarse á este último precio. Así se expresa ciertamente el referido testigo; mas los otros dos afirman que las mulas que conocieron de las veintidós valían á ochenta pesos ($ 80) sin sus aparejos, é inclusos éstos y teniendo porsupuesto en consideración el estado de guerra, las estimó el Coronel Perdomo á ochenta y cinco pesos ($ 85). Hay, pues, congruencia en lo aseverado por los tres últimos y no se debe dar mayor importancia á la declaración singular de Rodríguez, fundada en su simple creencia de que los otros declarantes no participan. Y si, por otra parte, se tienen en cuenta la espontaneidad del servicio y las circunstancias en que se prestó, menos razón hay para computar las mulas á sesenta pesos ($ 60) solamente.

Por lo tanto, la Corte, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, confirma lo resuelto por la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones en veintitrés de Mayo último, y aprobado por el Ministerio de Guerra en 31 del mismo, reconociéndole á Francisco Leiva B., y mandándole pagar los dos mil diez pesos ($ 2,010) por éste reclamados.

Hágase saber esta determinación, déjese copia de ella, publíquese, y devuélvase el expediente á dicha Comisión por el conducto respectivo.

R. Antonio Martínez—José M. Samper—Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretario.

En la audiencia del veintiséis de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, fué publicada la anterior sentencia.

Por falta temporal del Secretario—El Oficial Mayor, *Joaquín Esguerra O.*

En veintiocho de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué la anterior sentencia al señor Procurador.

ARANGO M.—Por falta temporal del Secretario—El Oficial Mayor, *Esguerra O.*

En dos de Diciembre de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué al apoderado, señor Rufino Gutiérrez, la sentencia anterior.

RUFINO GUTIÉRREZ—Por falta temporal del Secretario—El Oficial Mayor, *Esguerra O.*

AUTOS INTERLOCUTORIOS.

NEGOCIOS CIVILES.

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Noviembre veintitrés de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—En el juicio que Julio Arboleda sigue en el Juzgado 3.° del Circuíto de Bogotá, contra el Tesoro Nacional, por una cantidad de pesos, se pidió por la parte demandante una prueba pericial, la cual fué decretada y admitida por el Juzgado.

Como uno de los peritos debía ser nombrado por el Fiscal, quien representa á la Nación, aconteció que por esta parte se hicieron varios y sucesivos nombramientos de peritos, sin resultado alguno, pues que todos los nombrados rehusaron el cargo, con motivos más ó menos plausibles para excusarse de él. Demorada así la práctica de la prueba, con positivo perjuicio del actor, el apoderado de éste pidió al fin que el Juez hiciera el nombramiento del perito que correspondía á la parte fiscal; y el Juzgado así lo acordó por auto de siete de Octubre del corriente año.

Notificada al Fiscal esta providencia, apeló inmediatamente de ella; y después de algunas vacilaciones de parte del Juzgado concedió éste, al fin, la apelación, en el efecto devolutivo, para ante esta Superioridad, por auto de trece de Octubre próximo pasado, notificándose debidamente la concesión del recurso.

Con tal motivo han venido los autos á la Corte; y practicada la debida substanciación, el señor Procurador es de concepto que debe revocarse el auto apelado, por cuanto el Juez ha debi-

do compeler á los nombrados, sin hacer nombramiento por su parte. Y estando el asunto en ocasión de ser decidido, para verificarlo, la Corte entra en las siguientes consideraciones:

La dificultad procede de que el Código Judicial ha guardado silencio en un caso como el presente, no determinando qué debe hacerse cuando los nombrados peritos sean indefinidamente excusados, sin atribuír expresamente al Juez la facultad de suplir la falta; por lo cual, y no debiéndose demorar la actuación por falta de disposición expresa, hay que ocurrir á aplicar la doctrina legal más probable, armonizando las disposiciones dentro de la equidad natural y la sana crítica.

Es cierto que conforme al artículo 675 del Código, el perito ó intérprete que, sin justa causa, se denegare á practicar el encargo que se le confía, puede ser compelido por medio de multas, siendo responsable por su desobediencia al Juez; pero todo esto supone obstinación caprichosa, renuencia ó rebeldía, pues que el mismo artículo admite como excusa alguna justa causa, dejando al Juez,—una vez que no determina tramitación al efecto ni especifica la naturaleza de las causales—dejando al Juez, se repite, la pudente apreciación de la excusa alegada por el perito. De otro modo se incurriría en la injusticia, y talvez en el absurdo, de que á pesar de todo y contra poderosos motivos, el Juez empleara la compulsa para la práctica de un dictamen pericial que no se puede ni se sabe desempeñar. Las leyes siempre revisten á los Jueces de cierta potestad discrecional en todos aquellos casos en que no han podido preverse todas las circunstancias, puesto que las mismas leyes virtualmente suponen en el Juez la imparcialidad necesaria, y porque, como decían los sabios antiguos, "los judgadores son homes bonos, que son puestos para mandar et fasser derecho."

Si por un lado puede correrse el peligro de que el Juez intervenga demasiado en la práctica de la prueba pericial, pudiendo suplir la omisión ó la falta, y nombrando también el tercero en discordia; por otro, se corre el gravísimo riesgo de que el derecho de una de las partes sea sacrificado por el malicioso ó estudiado proceder de aquella que estuviere escogiendo permanentemente peritos que puedan alegar causal fundada para excusarse, demorando, entorpeciendo ó imposibilitando así la prueba; y el Juez puede verse detenido para el apremio, por no creer justo emplearlo contra aquel que absolutamente está incapacitado para desempeñar el oficio. A la previsión de la parte interesada, que quiera proceder rectamente, corresponde escoger la persona que haya de servirle en la apreciación pericial, allanando con su propia diligencia los inconvenientes posibles; lo cual se corrobora, por analogía, con lo dispuesto en el artículo 661 del Código Judicial y con la doctrina de los expositores, que establecen que sólo los peritos públicos pueden ser obligados á aceptar el encargo. (Escriche. Diccionario de Legislación).

Por lo expuesto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el memorado auto apelado, de siete de Octubre del presente año.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

R. Antonio Martínez—José M. Sumper.—Aristides Calderón.—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente—Ramón Guerra A., Secretaio.

En veintitrés de las mismos se notificó al señor Procurador el auto que antecede.

ARANGO M.—*Guerra A.*, Secretario.

NEGOCIOS CRIMINALES

Corte Suprema de Justicia—Bogotá, Noviembre veintiséis de mil ochocientos ochenta y siete.

Vistos:—El Tribunal Superior del Distrito judicial de Cundinamarca remitió en consulta á esta Superioridad el auto que pronunció con fecha veintiséis de Octubre del presente año, sobreseyendo en el procedimiento adoptado para averiguar si el Juez 5.° del Circuito de Bogotá, doctor Enrique Rojas B., se había hecho responsable, en el sentido de las faltas que le imputó Abraham Antorveza R., como cometidas en la causa que se seguía á su defendido Cosme Velandia por el delito de hurto.

Las faltas atribuídas al Juez denunciado fueron las siguientes:

1.ª No haber tomado á Velandia la correspondiente declaración de inquirir;

2.ª Haber manifestado el deseo de que Velandia fuera condenado, hasta tomar parte en el debate contrariando la defensa;

3.ª Haber interrumpido al defensor en su segundo alegato, diciendo al juzgado "que aquél se empeñaba en destigurar la verdad porque era el único medio de defensa que tenía," y

4.ª Haber mandado reducir nuevamente á prisión á Velandia, librando la boleta respectiva, no obstante el fallo absolutorio del Jurado.

Dada á la consulta la tramitación legal, se encuentra yá el negocio en estado de resolverlo, para lo cual se tiene en consideración:

1.° Que el denuncio ha sido del todo infundado en cuanto á las imputaciones contenidas bajo los números 1.°, 2.° y 4.°: respecto del 1.°, porque está perfectamente comprabado que el doctor Rojas B. no intervino como funcionario de instrucción en el sumario que se instruyó contra Velandia, sino que el expediente se pasó al Juzgado 5.°, á su cargo, cuando se hallaba en estado de practicar el sorteo de los individuos que debían componer el Jurado; porque respecto del 2.°, todos los testigos y el mismo denunciante dicen que al hacer éste el cargo de que se había omitido la declaración indagatoria, el Juez tocó la campanilla manifestando que no era el el que había incurrido en semejante omisión; de modo que con esto sólo tuvo por objeto rectificar un hecho inexacto en cuanto á él pudiera referirse y no contradecir al defensor tomando parte en el debate; y porque respecto del 4.°, lejos de resultar ni un indicio siquiera de la perpetración del hecho á que tal punto se refiere, consta, al contrario, que á Velandia se le mandó poner en libertad en la sentencia pronunciada, de acuerdo con el veredicto y en la fecha de éste, con la circunstancia de que el denunciante dijo en su declaración de fojas 12 y 13 que la resistencia del Juez á decretar la excarcelación había tenido lugar antes del pronunciamiento de dicha sentencia, en lo cual es justo reconocer que procedio rectamente.

Por lo que hace relación al cargo contenido en el número 3.°, su gravedad no podría desconocerse si resultara plenamente comprobado; pero los testigos Elías Páramo, Ricardo Umaña, Antonio María Racines y Alfredo Valenzuela dicen que nada saben ó nada recuerdan sobre el particular; Aníbal García Herreros, que intervino como Fiscal en la causa de Velandia, *no tiene completa certeza* acerca de las palabras proferidas por el Juez, y la declaración de Hermenegildo Ahumada, además de ser singular, carece de los requisitos exigidos por el artículo 1,677 del Código Judicial; sin que por lo mismo puedan esas declaraciones constituír la prueba que se necesita para proceder.

Por lo tanto, la Corte Suprema de la Nación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, y de conformidad con el concepto del señor Procurador general, confirma el auto de sobreseimiento consultado.

Notifíquese, cópiese, publíquese esta providencia y devuélvase el expediente al Tribunal que lo remitió.

R. Antonio Martínez—José M. Sumper—Aristides Calderón—Luis M. Isaza—Antonio Morales—Benjamín Noguera—Manuel A. Sanclemente.—Por falta temporal del Secretario, el Oficial Mayor, *Joaquín Esguerra O.*

En treinta de Noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, notifiqué el auto que antecede al señor Procurador.

ARANGO M.—Por falta temporal del Secretario, el Oficial Mayor, *Esguerra O.*

VISTAS DEL PROCURADOR GENERAL

Señores Magistrados.

En auto de 25 de Junio último, proferido en el sumario que se instruyó contra Tiberio C. Rubio, para averiguar si había incurrido en responsabilidad al conocer, como Juez del Circuito de Chocontá del juicio seguido contra Cerbeleón y Adelaida Medellín por falsificación y circulación de billetes del Banco Nacional, la Corte juzgó que el Tribunal Superior de Cundinamarca pudiera ser responsable de algunas faltas cometidas en el mismo juicio contra los Medellín, y dispuso iniciar esta averiguacion con copia de lo conducente.

El Juez del Circuito de Chocontá llamó á juicio á Cerbeleón y Adelaida Medellín por los delitos de falsificación y circulación de billetes del Banco Nacional, habiendo insinuado en la parte motiva del auto de proceder que aquellos delitos estaban comprendidos en los artículos 269 y 270 del Código Penal nacional. Seguido el juicio por todos sus trámites, el mismo Juez dictó sentencia absolutoria, la que fué apelada para ante el Tribunal de Cundinamarca. Al resolver la apelación, el Tribunal confirmó la sentencia absolutoria de primera instancia, apoyándose en el supuesto de que los delitos cometidos por los Medellín no resultaron ser los mismos por los cuales habían sido llamados á juicio, y que el artículo 1,630 del Código Judicial de 1873, prohibe que la sentencia recaiga sobre cargos distintos de aquellos por que se ha declarado con lugar á seguimiento de causa. El fundamento del fallo del Tribunal no resultó exacto, porque no es cierto que los Medellín fueran onjuiciados por infraccion de los artículos 269 y 270 del Código Penal, sino por los delitos de *falsificación* y *circulación de billetes del Banco Nacional*, como se lee en la parte resolutiva del respectivo auto.

Pero el error del Tribunal, aunque evidente, no es motivo para suponer que al resolver la apelación de la sentencia absolutoria de los Medellín, sin hacer mérito del error en que fundó su fallo, no hubiera encontrado otras razones legales para llegar al mismo fin de la confirmación de la sentencia apelada.

El error del Tribunal no está compreudido en ninguno de los delitos definidos por el Código Penal de Cundinamarca de 1883, que sería el aplicable, porque no puede decirse que la sentencia que ha ocasionado esta averiguacion, haya contrariado ninguna ley expresa y terminante. Si así fuera, el Juez de primera instancia que dictó el fallo absolutorio, confirmado por el Tribunal, tambien habría incurrido en la misma responsabilidad; y con igual razón habría que considerar que los Magistrados y Jueces fallaban contra ley expresa y terminante, siempre que sus fallos fueran revocados en segunda instancia, por no estimarlos arreglados á la ley y al mérito de los autos.

La Corte indicó en su auto de 25 de Junio del presente año, que "ya que el Tribunal Superior creyó necesario absolver, sólo por atencion al artículo 1,630 del Código Judicial, debió en cumplimiento de su deber, mandar que se instruyera nuevo sumario, á fin de que se castigasen los delitos cometidos, por medio de un procedimiento regular."

Tal vez el Tribunal tuvo en cuenta el principio seguido por los criminalistas, *bis in idem non judicatur*, ya admitido como doctrina invariable de Derecho público. A nadie que haya sido juzgado legal y definitivamente, puede perseguirse de nuevo por el mismo delito. La cosa juzgada extingue la acción penal, y ella protege al acusado si ha sido absuelto por error.

Por lo expuesto, este Ministerio es de concepto que debéis sobreseer en estas diligencias.

Bogotá, 19 de Octubre de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

Desde el año de 1884 se encuentra demorada en esa Suprema Corte la apelación interpuesta por el señor Francisco J. Palacio, del auto de la Oficina general de Cuentas de fecha 3 de Octubre de 1883, auto que dedujo á cargo del apelante, en su calidad de Administrador del Ferrocarril y Telégrafo de Bolívar, un alcance líquido de $ 14,064-30

A esta suma alcanzaron los gastos comprobados hechos en la empresa; y la glosa se funda en que la partida votada en el Presupuesto del año respectivo para tales gastos estaba agotada, y por consiguiente, el Administrador debió abstenerse de hacer las erogaciones que han servido de fundamento al auto apelado.

Con fecha 25 de Noviembre de 1884, el Procurador general emitió concepto sobre el fondo del asunto, y data desde entonces la demora de la actuación, por no haber el actor suministrado el papel correspondiente.

Lo dispuesto en los artículos 141 á 143 de la ley 57 de 1887, no destruye el derecho concedido á las partes por el artículo 489 del Código Judicial adoptado; de suerte que, aunque según el informe del Secretario de ese Supremo Tribunal, de fecha 11 de los corrientes, la actuación pudiera seguir en papel común, el infrascrito reclama contra la omisión del actor, y os pide que, previas las formalidades prevenidas en el artículo citado, lo declaréis desistido de la instancia.

Bogotá, 22 de Octubre de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

Con fecha 16 de Agosto último, el Tribunal Superior del Distrito judicial del Magdalena, llamó á juicio de responsabilidad, por los trámites extraordinarios, á Buenaventura Clavijo, Juez que fué del Circuito del Sur en el extinguido Estado. El delito por que se declaró con lugar á formación de causa fué el de *abandono del destino*, el cual tuvo lugar, según el auto de enjuiciamiento, antes de la vigencia del nuevo Código Penal adoptado por la ley 57 de 1887.

Notificado que fué dicho auto al Fiscal, este funcionario interpuso para ante vosotros el recurso de apelación, no porque creyera que no había lugar al enjuiciamiento, sino porque, en su concepto, el artículo de la ley penal aplicable no era el 346 del Código del extinguido Estado, sino el 389 del Código Penal actualmente en vigencia. El tenor literal de los dos artículos citados es idéntico, siendo el uno una copia textual del otro, de suerte que la apelación no ha tenido otro fundamento que la creencia del apelante de que, no obstante haberse cometido la infraccion antes del 22 de Julio último, era aplicable el actual Código Penal al dictarse el auto de proceder, y el del extinguido Estado al pronunciarse la sentencia definitiva.

El apelante interpreta el artículo 26 de la Constitución en el sentido de que el efecto retroactivo nunca puede tener lugar, cuando se trata de sentenciar ó aplicar el castigo, el cual debe ser siempre el señalado en la ley penal anterior; pero sostiene que la retroactividad sí es aplicable respecto del auto de proceder. El escrito en que se interpuso la apelación no expresa los fundamentos de esta distincion, ni en ninguna ley pueden encontrarse. Las mismas razones en que se apoya la nó retroactividad de las leyes penales en su aplicación definitiva, militan en favor de esa misma aplicación en cada uno de los grados é incidentes del juicio criminal.

Ademas, si hubiera de llamarse á juicio por violación de un artículo y dictarse la sentencia por violación de otro, se infringiría lo dispuesto en el artículo 1,716 del Código Judicial adoptado, el cual dispone que la sentencia no podrá recaer sino sobre los cargos por que se ha declarado con lugar á seguimiento de causa.

De acuerdo con lo expuesto, soy de concepto que debéis confirmar la sentencia apelada.

Bogotá, 24 de Octubre de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

Francisco Groot, con poder de Concepción Méndez, reclamó ante la Comisión de suministros, empréstitos y expropiaciones el reconocimiento y pago de la suma de $ 840, por la diferencia de precio de billetes del Banco Nacional sobre la suma de $ 1,400 que Méndez suministró en dinero efectivo, en Enero de

1885, en Moniquirá, al Comisario pagador del Ejército del Gobierno, para gastos de guerra.

La parte final del memorial de foja 11, dirigido por Méndez al Secretario de Gobierno de la República, hace ver con toda claridad que lo que ocurrió entre Méndez y el Comisario pagador fué un simple cambio de una suma en dinero por otra en billetes, los cuales recibió Méndez á la par, sin hacer entonces ninguna observación por el descuento que tenían. Fué una simple operación de cambio en la cual resultó perjudicada una de las partes, pero no un empréstito ó suministro, y menos una expropiación. Pero aun en el supuesto de que se tratara de un empréstito ó suministro hecho en dinero, como la ley ha asimilado á moneda metálica los billetes del Banco Nacional, no hay razón legal en que se funde esta reclamación.

Por consiguiente, razón tuvo la Comisión para declararse incompetente para cococer en el asunto, porque el caso en cuestión no está deteminado en ninguno de los artículos de la ley 44 de 1886, ni en ninguna de las leyes que la adicionan y reforman.

Su Señoría el Ministro de Guerra aprobó lo resuelto por la Comisión; pero como con este fallo no se ha conformado el apoderado del reclamante, éste ha ocurrido ante vosotros reclamando contra lo resuelto.

Y siendo el expresado fallo estrictamente legal, este Ministerio os pide su confirmación.

Bogotá, 24 de Octubre de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

Pantaleón Ballesteros ha propuesto acusación ante vosotros contra el Gobernador del Departamento de Cundinamarca, General Jaime Córdoba, por extralimitación de sus facultades, falta de cumplimiento de la ley y abuso de autoridad.

Para el adelantamiento de la averiguación deben practicarse las diligencias siguientes:

1.ª Ratificación jurada de la acusación;

2.ª Que el acusador se obligue, bajo juramento, á continuar la acusación y á probar la verdad de su relato (artículo 1,602 del Código Judicial);

3.ª Poner la acusación en conocimiento del acusado para el caso de que este quiera hacer uso del derecho que le concede el artículo 1,609 del mismo Código Judicial;

4.ª Agregar copia autorizada del decreto número 160, de 17 de Mayo de 1886, dictado por el Gobernador de Cundinamarca, sobre crédito público; y agregar también constancia de si ese decreto ha sido ó nó aprobado por el Gobierno nacional; y

5.ª Que se pida á quien corresponda copia autenticada del decreto de nombramiento de Gobernador, hecho en el General Jaime Córdoba, y copia de la diligencia de posesión respectiva.

Perfeccionado el sumario, pediré lo que fuere conforme con su mérito legal.

Bogotá, Octubre 24 de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

A virtud de apelación ha venido á vuestro conocimiento la sentencia proferida el 13 de Septiembre de 1883, por el Tribunal Superior de Cundinamarca, por la cual fueron condenados los señores Senén González D. y José E. Currea, á la pena de suspensión del destino de Juez, por el término de treinta y cuatro días; y, subsidiariamente, á pagar una multa de treinta pesos cada uno, por las demoras en que incurrieron en el ejercicio de las funciones de Juez del Circuíto de Cáqueza.

Para resolver la apelación, son oportunas las siguientes consideraciones:

Las demoras que son materia de la responsabilidad de González D. y Currea, ocurrieron en los meses de Febrero á Junio de 1881.

La sentencia apelada, del 13 de Septiembre de 1883, fué notificada á González D. el 5 de Octubre del mismo año de 1883; y á Currea, el 30 de Julio último.

El Código Judicial de Cundinamarca de 1859 y el Penal de 1877, fueron los aplicados por el Tribunal.

El artículo 1,805 del primero de estos Códigos disponía que las penas que la ley impusiera á los empleados ó funcionarios públicos, por delitos ó culpas en el ejercicio de sus funciones, se prescribieran en el modo y dentro de los términos señalados en el Código Penal.

Este Código contenía las siguientes disposiciones:

"Artículo 34. La acción criminal, ó sea el derecho de perseguir al delincuente y de imponerle pena, se prescribe por el transcurso de diez años, cuando se trata de delitos graves; por el transcurso de cuatro años, en los delitos contra el orden público; y por el transcurso de dos años, en los demás casos.

"Estos términos se contarán desde el día en que se cometió el delito.

"Artículo 35. Las penas á que fuere condenado un individuo se prescriben, en sus respectivos casos, dentro de los mismos términos que señala el artículo anterior, contados desde el día de la notificación de la sentencia que las impuso."

De la fecha en que se incurrió en las demoras (Junio de 1881) al 13 de Septiembre de 1883 en que se dictó la sentencia, transcurrieron más de dos años; por consiguiente, en la fecha de la sentencia había prescrito la acción criminal, y con mayor razón al tiempo en que esa sentencia fué notificada á los procesados, porque debe tenerse en cuenta que ningún auto produce efectos antes de haberse notificado legalmente.

Sin embargo, como según el artículo 36 del Código Penal de 1877 citado, la prescripción de la acción criminal tanto como de la pena, se interrumpía por la asistencia del reo al juicio, por sí ó por apoderado, y como la notificación del auto de enjuiciamiento, que tuvo lugar el 15 de Junio de 1883, pudiera considerarse como circunstancia comprendida en aquel artículo para el efecto de la interrupción, debe contarse desde esta fecha el término de la prescripción.

Respecto del señor Currea, del 15 de Junio de 1883 en que se le notificó el auto de proceder, al 30 de Julio del corriente año, fecha de la notificación de la sentencia, han transcurrido más de cuatro años, tiempo mayor del necesario para la prescripción de la acción criminal.

Y respecto del señor González D., aunque por la apelación de la sentencia que le fué notificada el 5 de Octubre de 1883 ésta no quedó ejecutoriada, y por lo tanto, por el tiempo transcurrido hasta hoy puede considerarse también prescrita la acción, si así no fuera y hubiera que averiguar si ha prescrito la pena, contando desde el día de la notificación de la sentencia, (5 de Octubre de 1883) hasta hoy, se llegaría al mismo resultado.

Por lo expuesto, soy de concepto que declaréis terminado el procedimiento por prescripción.

Begotá, 24 de Octubre de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

Por auto de 29 de Julio del presente año, ese Supremo Tribunal resolvió abstenerse de conocer de la apelación interpuesta por el Administrador principal de Hacienda de Medellín, del auto de 26 de Febrero último, por el cual el Juez 1.° del Circuíto en lo civil, de Medellín, declaró nulo todo lo actuado en el juicio ejecutivo seguido contra Ireneo Escobar, como fiador solidario de Ulpiano Isaza, Mensajero del correo nacional de encomiendas, para hacer efectiva la fianza del citado Escobar en lo referente á la pérdida de una encomienda de $ 1,000 remitida á la ciudad de Barranquilla.

La razón que tuvo la Corte para proceder como se deja indicado, fue la de que no habiéndose entablado el recurso por parte legítima, la Corte no podía entrar á decidirlo, por no estar aparejado en la forma legal y por no habérsele transmitido debidamente la jurisdicción.

Devuelto el expediente al Juez inferior, éste, cumpliendo con lo prevenido en la reforma vigésima octava de la ley 46 de 1886, ha sometido nuevamente á vuestro conocimiento, por vía

de consulta, el auto que fue materia del recurso de apelación no decidido por la Corte.

Siendo así que el infrascrito, en su exposición de 12 de Julio del presente año, os pidió la revocatoria del auto en referencia, fundándose para ello en las consideraciones allí consignadas, las cuales subsisten en el estado actual del negocio, no hay motivo alguno en qué apoyar la desistencia de tal pedimento, y en esa virtud y con reproducción de las expresadas consideraciones, el infrascrito insiste en él, siempre que mereciere vuestra aprobación.

Bogotá, 28 de Octubre de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

Por auto de 19 de Agosto del presente año, y á pedimento de este Ministerio, dispusisteis la ampliación del sumario que se instruye contra el General Wenceslao Ibáñez, para averiguar la responsabilidad que pueda caberle, en su calidad de Administrador principal de las Salinas de Cundinamarca, por haber dispuesto de un depósito hecho para seguridad de un contrato de conducción de sal.

Entre las diligencias cuya práctica se ordenó en el referido auto de esa Superioridad, dejó de cumplirse puntualmente la que se refiere á la ampliación del informe del Gerente del Banco de Zipaquirá, quien, no obstante habérsele exigido, no remitió copia, para agregarla al sumario, de la diligencia, partida de los libros ó recibo en que conste la devolución del depósito al señor General Ibáñez, y se limitó á hacer referencia á los asientos de los folios 334 y 353 del libro Diario número 1.

Como la obtención de los datos relativos á la devolución del depósito, es indispensable para establecer de una manera plena la existencia del hecho criminoso, y habida consideración á que el informe del Gerente del Banco de Zipaquirá no presta el mérito probatorio reconocido á los documentos públicos ó auténticos por el artículo 1,667 del Código Judicial, que no son otros que los que se especifican en el artículo 678 del mismo Código, el infrascrito insiste en que la enunciada diligencia informativa se complemente con copia de los asientos indicados por el Gerente del Banco de Zipaquirá en el informe de que se deja hecha referencia.

Perfeccionado así el sumario, el infrascrito yá no tendrá inconveniente para emitir concepto en el fondo del asunto.

Bogotá, Octubre 28 de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

El Juez del Circuíto del Sur, en el Distrito judicial del Magdalena, señor Buenaventura V. Clavijo, al conocer de la causa seguida contra Gregorio Villalba y otros por el delito de rapto, declaró, por auto de 8 de Enero del presente año, que el procedimiento debía regirse por las leyes nacionales, con prescindencia absoluta de las leyes adjetivas del eytinguido Estado. En tal virtud, ese juicio cuyo conocimiento estaba atribuído al Jurado, según las leyes del Magdalena, fue decidido sin su intervención por el Juez del Circuíto del Sur, con aplicación del Código Judicial de la Nación.

El artículo H transitorio de la Constitución nacional dispuso que continuara rigiendo en cada Departamento la legislación del respectivo Estado, mientras el Poder Legislativo no dispusiera otra cosa.

La ley 61 de 1886, que fué erróneamente interpretada por el Juez Clavijo, se limitó á señalar provisionalmente la organización y atribuciones del Poder Judicial y del Ministerio público, *con más algunos procedimientos especiales* relativos á los nuevos recursos de casación y revisión; pero las leyes procedimentales de cada Estado continuaron en vigencia en los respectivos Departamentos, hasta el 22 de Julio último, en cuya fecha comenzó á regir en toda la República el Código Judicial de la Nación, con todas sus reformas, en virtud de lo dispuesto por el artículo 1.° de la ley 57 del presente año.

De consiguiente el error del Juez del Circuíto del Sur del Distrito del Magdalena, es manifiesto; pero falta averiguar si ese error constituye un delito y si por él es justificiable su autor.

El Tribunal Superior del Magdalena, por auto del 21 de Octubre del año en curso, ha decretado el sobreseimiento, el cual consulta con esa Superioridad.

Dos son los fundamentos del auto consultado: es el primero, que el artículo 1,877 del Código Judicial no permite seguir juicio de responsabilidad, de oficio, cuando sólo se trate de resarcimiento de daños y perjuicios á particulares, y considerándose comprendido en este caso el hecho materia de esta averiguación, se deduce que de oficio no ha debido adelantarse el procedimiento; y el segundo se refiere á que, según el numeral 1.° del artículo 87 del Código Penal del Magdalena aplicable, no están sujetos á pena alguna los Jueces de derecho que dicten auto ó sentencia contra ley expresa, cuando fueren consentidos por las partes, teniendo el recurso de apelación.

El Tribunal, en el auto de sobreseimiento, juzga que el hecho de que se considera responsable al Juez Clavijo está comprendido en el artículo 359 del Código Penal del Magdalena, que dice así:

"El Juez de primera instancia que falte en los procesos á las formalidades substanciales, cuya omisión los anula, sufrirá, además de la obligación de pagar las costas causadas á las partes, una multa de veinticinco á cien pesos,"

En esa disposición, á más del resarcimiento de daños y perjuicios á particulares, se establece la pena de multa, y por esta circunstancia no tiene aplicación el artículo 1,877 del Código Judicial.

Pero como es evidente que la ley penal del Magdalena es la que rige para este juicio, siendo cierto que el error en el procedimiento constituye violación de la ley expresa, el artículo 87 de dicha ley penal declara excusable de toda pena al Juez qne incurrió en la violación. Por lo tanto, este Ministerio es de concepto que debéis confirmar el auto consultado, y así os lo pide.

Bogotá, Octubre 28 de 1887.

CARMELO ARANGO M.

Señores Magistrados.

En cumplimiento de vuestro auto de fecha 14 de Septiembre último, el Tribunal Superior de Bucaramanga ha remitido á vuestro despacho el expediente creado para averiguar la responsabilidad en que hubiera podido incurrir el señor Antonio María Ramírez, en su calidad de Juez del extinguido Territorio nacional de Bolívar, por demoras que tuvieron lugar antes del 1.° de Abril de 1878. Consta en dicho expediente que la Corte Suprema, en auto de fecha 28 de Agosto de 1879, ordenó la acumulación de esta actuación á otras dos que se seguían ante el mismo Supremo Tribunal contra el Juez Ramírez, por abandono de su destino y por haber radicado su despacho fuera de la capital del Territorio. No obstante esto, las presentes diligencias no fueron acumuladas, y la Corte resolvió separadamente, en otro juicio, sobre la responsabilidad de Ramírez, por los cargos últimamente mencionados, declarando la cesación de todo procedimiento criminal contra el sindicado, por prescripción de la pena.

El presente sumario, que no fué decidido por la Corte antes de la vigencia de la ley 61 de 1886, pasó al conocimiento del Tribunal Superior de Bucaramanga, quien, con fecha 2 de Julio último, declaró suspendido el procedimiento, por prescripción de la pena. Por consulta de este último auto se ha remitido el expediente al despacho de la Corte.

Y siendo evidente que desde que tuvo lugar el hecho que ha dado motivo á la responsabilidad que se averigua, han transcurrido más de cuatro años, el infrascrito es de concepto que debe confirmarse el auto consultado.

Bogotá, Octubre 29 de 1887.

CARMELO ARANGO M.

BOGOTÁ.—IMP. DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.

Año I REPUBLICA DE COLOMBIA. Número 52

GACETA JUDICIAL

(Organo oficial de la Corte Suprema de Justicia)

Bogotá, 31 de Diciembre de 1887.

INDICE ANALÍTICO

del contenido de la

GACETA JUDICIAL,

en el año 1.° de su publicación.

A

Abandono de destino. Procesos por este motivo págs. 22, 228, 301 341, 349.
Abello Manuel. Competencia entre la autoridad civil y la militar, por robo 379.
Abuso de autoridad. 54, 97, 128, 131, 151, 157, 166, 167, 173, 174, 188, 189, 201, 207, 212, 213, 222, 228, 244, 246, 302, 310, 325, 332, 341, 356, 366.
Abuso de confianza. Cuando el interés no pasa de $ 20, es asunto de la policía, 322.
Abuso deshonesto. El conocimiento de las causas por este delito es de la competencia de los Jueces Superiores, 305
Acevedo Ricardo. Proceso contra él por abuso de autoridad, 131 201.
Acosta Mariano. Causa por hurto, 111.
Acuerdos de las Municipalidades.
Su validez ó nulidad la deciden los Tribunales en Sala de Acuerdo 306, observando cierta tramitación 379, aunque no preceda suspensión de ellos decretada por el Gobernador 379.
Administrador de Salinas de Nemocón. Abuso de autoridad 128.
Id. Id. Id. de Zipaquirá. (Véase *R Acevedo*, y *W. Ibáñez*).
Aguardiente. Reclamos contra el monopolio 26, 96.
Agudelo Miguel. Juicio de expropiación 27.
Aguilar Reinaldo. Causa contra él por demoras 68.
Ahumada Matías. Ejecución contra él 242.
Albarracín Abdón. Proceso contra él por usurpación de autoridades 288.
Alcaldes. Son, como antes, funcionarios de instrucción 257.
No pueden nombrar Jueces interinos 355.
Algarra Jacinto. Maltratamientos á un Guarda 142.
Alvarez Lisandro. Nulidad de un juicio ejecutivo 145.
Alvarez Pedro y otros. Sumario por delitos políticos 245.
Alzate Ciriaco y otros. Sumario por delitos políticos 246.
Amaya Argilio. Juicio de cuentas 142.
Andrade Arturo. Proceso por negligencia 229.
Angulo Antonio. Cambio de una encomienda 151.
Apelación. Los autos de arresto ó detención no son apelables 298.
Tampoco lo son las sentencias en los juicios de imprenta en que inetrvienen Jurados 313.
Apelante que no suministra papel sellado se da por desistido 164, 180, 182, 189, 345.
Arango Mateo. Circulación de moneda falsa 43.
Araújo Silverio. Reivindicación de una casa 270.
Araújo Simón. Denuncia un atentado contra el Congreso 88, 294.
Arbeláez Joaquín M. Abuso de autoridad 174.
Arboleda Julio. Es válido el nombramiento de perito hecho por el Juez en cierto caso 404.
Arenas Marcos. Causa contra él por falsificación de billetes del Banco Nacional 74.
Arocha Felipe. Ejecución contra él 51.
Arraigo (Véase *Cano José H.*)
Asesinato (Véase *Homicidio*).
Astaiza Carmen. Solicita que se someta á la Comisión de suministros un juicio fallado por la Corte 214.
Avalúo de daños. Solicitud de Indalecio Liévano 83.
Es obligatorio en causas criminales 259.
Aun cuando el delito no se haya consumado 361.
Aya José María. Juicio por expropiaciones en la guerra de 1860 185.
Avila Pedro A. Ejecución contra él 85.

B

Balanta Juan C. Causa militar contra él por la fuga de un preso 251.
Baños Enrique. Causa por hurto de sal 130.
Barbasco. La Corte no puede decidir la consulta que se le hace, sobre si es delito, ó nó, la pesca con esa planta 354.
Barraza Avelino. Causa contra él por circulación de moneda falsa 174.
Barriga Rafael y otros. Causa por violación de neutralidad 68.
Batallón 4.° de infantería. Causa militar por sedición 69.
Bedoya Pedro C. y otros. Causa por falsedad 253.
Benítez José Tobías. Proceso por trasmisión de un kalograma falso 154.
Bernal Juan P. Abuso de autoridad 213.
Betancourt Pedro y Jesús. Sumario por circulación de moneda falsa 15.
Biblioteca de la Corte. 152, 160, 176, 325 403.
Bienes desamortizados. Juicios. 114, 145, 211, 221 403
Bienes ocultos. Id. 289.
Blanco Mútiz Antonio. Causa contra él por falsedad y estafa 61.
Bongo "Superior." Sumario contra él por hurto al vapor "Simón Bolívar" 37.
Borbúa Miguel. Juicio por negligencia 151.
Botero Arango Juan B. Demanda una mina 292.
Botero Hermenegildo. Juicio sobre expropiación de un terreno 170.
Botero Pedro. Causa por demoras 178.
Bravo Rafael. Demanda á la Nación por expropiaciones y suministros en 1876 299.
Bravo Timoteo. Id. id. id. 315.
Bravo Nicomedes. Juicio contra él por abandono del destino 349.
Bramma Hermanos. Reclaman lo que les expropiaron los rebeldes en 1885 350.
Briceño Manuel. Denuncia el paso de armas por Panamá 390.
Brigard Juan de. Juicio sobre posesión de las minas de Esmeraldas de Muzo 189.
Burbano Quiteria. Sentencia de la Corte anterior, sobre expropiaciones en 1860 41
Byrne Federico. Ejecución contra él 337.

C

Caamaño Soto Miguel. Sumario por rebelión 126.
Cabal Fortunato. Juicio por nulidad de un remate 181.
Cabrera Rita. Solicita una recompensa 65.
Cadavid Rafael. Proceso por tentativa de homicidio 269.
Caicedo Manuel. Sumario por falsificación de moneda 45.
Caicedo Miguel. Proceso contra él por diversos cargos 309.
Caicedo Pedro José. Juicio de cuentas 102.
Calderón Juan G. Se queja contra el Tribunal del Departamento de Bolívar 151, 366.
Calderón Angel Ramón. Demanda por suministros en 1885 382.
Calificación de Jueces. 4, 17 á 20, 49, 50, 57, 58, 65.
Calle Eduardo y otros. Sumario por delitos políticos 287.
Calle Manuel J. Causa contra él por sustracción de documentos públicos 5.
Cambio de una encomienda. Véase *Angulo Antonio.*
Cambio de letras militares. Solicitudes 55, 137.
Campo Felipe. Sumario por demoras 227.
Campuzano Julián. Demanda el deslinde de un terreno 202.
Canoa "América." Juicio por contrabando 141.
La reclama su dueño 225, 394.
Canoa "Mora." Sumario por contrabando 158.
Canoa "Nilo." Juicio de reivindicación 275.
Cano José H. Solicita un arraigo 183.
Pide la restitución de unas fincas 194.
Caro Eusebio L. Juicio por expropiaciones en la guerra de 1876 261.
Caro José E. Solicita excarcelación 141.
Véase *Ribas José G.*
Casación. Circunstancias que han de concurrir para obtenerla 307.
Recursos intentados 249, 250. 308, 314.
Casas Eusebio. Proceso por usurpación de facultades 7.
Castellanos & C. y otros. Ejecución contra ellos 283 á 285.
Castellanos Tomás. Nulidad de un contrato. 164.
Castillo F. Jesús. Sumario por abuso de autoridad 166.
Castro Alejandro. Id. id. id. 97, 151, 167.
Castro Benjamín. Id. id. id. 171
Castro Faustino. Proceso por homicidio 300.
Castro Vélez Isaías. Id. por abuso de autoridad 325.
Cayuco. Reclamo intentado por José Zúñiga 252.
Certificaciones. Las que dan los Jueces y Magistrados de haber recibido por sí mismos las declaraciones no causan derechos 401.
Ceballos Eleuterio. Proceso por negligencia 195.
Chávez Guillermo. Id. por abandono del destino 220.
Id. por demoras 239.
Chaves Juan. Recurso de casación contra la sentencia que lo condenó á muerte 249.
Circulación de moneda falsa. Procesos por este delito 15, 23, 25, 30, 32, 40, 43, 45, 65. 68, 71, 79, 140, 142, 150, 152, 156, 166, 174.
Clavijo Buenaventura. Causa por abandono del destino 349.
Cobo Pedro Antonio y otros. Causa por el asesinato de varios Jamaicanos en "Culebra" 122.
Colmenares Nemesio. Abuso de autoridad 366.
Compañía de Ferrocarril de Bolívar. Demanda contra ella entablada por Ramón B. Jimeno 108.
Compañía Trasatlántica. Demanda contra ella 112, 163.
Competencias. Cómo deben substanciarse 351.
Entre autoridades civiles 21, 25, 233, 237.
Entre la autoridad civil y la militar 89, 113, 121, 354. 379.
Compras indebidas. Sumario por... 126, 130.
Cómputo de penas. Una vez rebajado el tiempo que ha estado preso un reo, durante el juicio, no puede hacerse nuevo cómputo 331, 354.
Conjueces de la Corte. Nombramiento 121.
de los Tribunales. No tienen en la actualidad, sueldo señalado 257.
Pueden ejercer la abogacía mientras no estén en ejercicio 297.
Consultas á la Corte Suprema. Cómo deben hacerse 369.
Corsi Francisco. Demanda por suministros y expropiaciones en la guerra de 1885 386.
Conto Nicomedes. Juicio de responsabilidad 156.
Contrabando. Juicios por... 36, 62, 102, 141, 158, 165, 197, 308.
Convers Juan. Proceso por negligencia 301.
Córdoba & Arango. Ejecución contra ellos 149.
Corrales César. Sumario por falsificación de moneda 139.
Correspondencia perdida. Diligencias 197.
violada. Sumarios 85, 127.
Cortés Rafael. Véase *Mesa Juan N.*
Corte Suprema. Instalación de la actual 2.
Cambios de personal 25, 121, 153, 193, 217, 351.
Dejó de ser competente para conocer:
de juicios promovidos en los Territorios 9.
de las solicitudes de pensión 90.
y sobre cambio de Letras 55, 137.
de las causas por delitos políticos 103, 125, 127, 140, 142, 157, 166, 168, 173, 245, 247, 254, 262, 285, 287.
de las causas por delitos comunes 54, 141, 142, 150, 152, 157, 158, 165, 172, 194, 288, 364.
de las id. por moneda falsa 127, 140, 150, 152, 156, 166, 174.
de las id. contra el Administrador de las Salinas Marítimas 222.
de las id. contra *Ministros de Estado* 88, 171, 294.
No puede modificar los decretos de los Gobernadores 26, 281.
aunque eliminen un Distrito 186.
ni decidir, por vía de consulta, puntos de legislación civil 297, 321, 378, 402.
como tampoco si un hecho es delito, ó nó, 306, 354, 361.
ni si está, ó nó, cumplida una pena 167.
ni aconsejar lo que deba hacerse cuando algún Magistrado rehuse firmar 321 .....
ó cuando se agote la lista de Jueces y suplentes 305.
No tiene jurisdicción para juzgar á los Magistrados de los Tribunales por delitos cometidos antes de ser Magistrados 341.
ni para conocer de juicios en los que no tenga parte la Nación 226, 332.
aunque versen entre extranjeros 180, 190, 194, 277, 285, 292.
ni de los de expropiaciones de fincas, que no emanen del Poder Ejecutivo 179, 285.
ni de la división territorial 185.
Cortíssoz & C.ª Ejecuciones contra ellos 28, 164.
Cruz Aurelio. Competencia entre dos autoridades sobre conocimiento de esta causa por deserción y hurto 354.
Cruz Dimas. Expropiación de un terreno 285.
Cuéllar Miguel. Juicio por expropiaciones de 1860 169.
Cuentas—Juicios de..... 94, 142.
Culebra. Asesinatos en ese sitio 122.

D

Danouille Alejandro. Véase *Castellanos & C.ª*
D. de Castro & C.ª Véase *Molina Modesto.*
Defrancisco José María. Ejecución contra él 150.
De la Paba Daniel y otros. Sumario por delitos políticos 88.
De la Torre Evaristo. Ejecución contra él 374.
Delgado Angel María. Véase *Erazo Meléndez Rafael.*
Delgado Francisco y otros. Sumario por delitos políticos 125.
Delgado G. Carlos. Proceso por malversasión de caudales públicos 150.
Delgado Manuel Antonio. Sumario por sustracción de una encomienda 87.
Delgado Ruperto. Causa contra él por estropeos á un Guarda 93.
Del Gordo Demetrio. Delitos políticos 55.
Delitos políticos. Juicios por..... 7, 35, 38, 46, 53, 55, 57, 60, 62, 67, 85, 86, 88, 96, 125, 126, 127, 130, 142, 143, 157, 168, 172, 173, 245, 246, 254, 262, 285, 287, 288.
Del Río Petronila. Se le declara con derecho á una pensión 42.
Demoras. Causas por ..... 8, 32, 59, 63, 68, 87, 125, 140, 141, 165, 178, 212, 227, 239, 245, 255, 262, 269, 287, 326, 339, 349, 356.
Dencourse Juan. Auto del Tribunal de Cundinamarca en el juicio por falsificación de moneda 96.
Denegación de justicia. Queja de J. G. Calderón 151.
Deserción. Causas por este delito 260, 318, 319.
Deslinde de predios. Juicios sobre..... 202, 226.
El que solicita un deslinde asume el carácter de demandante 298.

Detención. El auto de detensión ó arresto no es apelable 298.
Devolución de derechos de Aduana. Juicios por..... 209.
Diago Dolores y otros. Causa por cuadrilla de malhechores 141.
Diago Pablo. Sumario por usurpación de facultades 7.
Díaz Cayetano y otros. Sumario por delitos políticos 287.
Díaz Escobar Joaquín. Id. por malversasión de caudales públicos 24.
Díaz Granados Miguel. Proceso por demoras 8, 125.
Id. por compras indebidas 126.
Díaz Granados Pascual. Id. por negligencia 67.
Díaz Norberto. Id. por falsedad 152.
Díaz Ricardo. Id. por robo 152.
División territorial. La Corte no es competente para conocer de ese asunto 185.
Dousdebés Arturo. Ejecución contra él 182.
Duque Ezequiel y otros. Sumario por delitos políticos 288.

E

Echeverría Melquiades. Proceso por circulación de moneda falsa 71.
Edicto del Juez de Honda llamando á unos sumariados 360.
Ejecuciones. (Juicios ejecutivos) 26, 27, 28, 31, 51, 85, 105, 138, 147, 149, 159, 164, 169, 170, 180, 181, 182, 187, 195, 211, 242, 243, 248, 276, 283, 284, 285, 291, 317, 323, 342, 343, 351. 357, 363, 371.
Empréstitos y expropiaciones. Solicitud elevada por la Corte al Consejo Legislativo 3.
Resoluciones consecuenciales 90, 153, 193.
Demandas. Por las de 1860 y 1861, 169, 185, 214.
" " " 1876 y 1877 180, 261, 299, 315.
" " " 1884 y 1885 315, 316, 338, 350, 362, 370, 382, 385, 386, 387, 396, 404.
Encomienda cambiada. Juicio por..... 151.
Perdida. Sumario y ejecución 12, 31, 270 373.
Enríquez Manuel. Sentencia dictada por la Corte anterior por expropiaciones en la guerra de 1860 41.
Envenenamiento. Sumario por tentativa 32.
Erazo Antonia. Se le niega el derecho á pensión 66.
Erazo Meléndez Rafael. Apela del auto en el cual se le negó el recurso de casación 346.
Escobar Guillermo. Proceso militar contra él por la fuga de un preso 241.
Escobar Ireneo. Juicios por la pérdida de una encomienda 12, 31, 270, 374.
Escobar Manuel. Proceso por falsificación de moneda 59.
Esparragoza Calixto. Sumario por abuso de autoridad 333.
Estadística. *Se piden datos* para formar la judicial 267.
Se remiten algunos al señor Procurador 343, 351, 375 382.
Estampillas. Sumario por falsificación 29.
Id. por hurto de..... 29.
Deben adherirse las de 3.ª clase al papel sellado en que se escriban las sentencias, cuando el interés exceda de $ 5,000, á razón de una estampilla por cada $ 5,000 de exceso 345.
Estévez Bretón Julio. Sumario por varios cargos 341.
Estrada Aureliano. Ejecución contra él 291.
Excarcelación. Se concede excarcelación en los juicios por heridas, menos en las inferidas á funcionarios públicos 273, 298.
No se concede en el delito de estupro 377.
Expropiaciones. Demandas 27, 73, 170, 179, 303, 320, 362.
Las que no han sido ordenadas por el Poder Ejecutivo no caen bajo la jurisdicción de la Corte 179 ,285.
Juicio criminal 140.
Extranjeros. El carácter de extranjeros no puede renunciarse en los reclamos por expropiaciones en la guerra 350.

F

Falsedad. Causas por ese delito 157, 197, 228, 240, 253, 286, 302.
Falsedad y estafa 61, 77, 152, 217.
Falsificación de aparatos de Remington 318,
de billetes del Banco Nacional 74, 129, 134, 140, 333.
de guías de Sal 60.
de Moneda 34, 45, 59, 94, 99, 100, 17, 138, 139,2 156.
Fernández Arnaldo. Competencia entre dos Jueces sobre conocimiento del sumario creado para descubrir el culpable de la trágica muerte de este señor y de su esposa y un niño 233.
Fernández Carolina y Felisa. Recurso de casación 307, 314.
Fernández Francisco J. Proceso por falsedad 157.
F. & A. Franco. Ejecución contra ellos 170.
Ferrocarril de Bolívar. Véase *Ramón B. Jimeno.*
Ferrocarril de Panamá. Demanda de Felipe Ramírez por daños y perjuicios 170.
Fierro Jacinto. Causa por circulación de moneda falsa 152.
Figueredo Cenón. Sumario por delitos políticos 60.
Figueroa Pantaleón. Juicio por falsificación de moneda 99.
Fetecua Juana. Juicio de divorcio que estaba con otros expedientes de la Corte sin saberse por qué 226.
"Flavio Gioja." *Crucero italiano.* Véase *Vásquez Carlos.*
Flórez Zenón. Proceso por abuso de autoridad 54.
Forero Heliodoro. Id. por delitos políticos 176.
Forero S. José María. Juicio de cuentas 307.
Fractura de un sello. Sumario por... 87.
Franco Leopoldo. Juicio de cuentas 181.
Fuente "El Chamizo." Expropiada para la ciudad de Salamina, Departamento de Antioquia 73.
Fuga de presos. Causas por... 76, 82, 95, 241, 251.
Ferrer Julio. Proceso por abuso de autoridad 360.

G

Gaceta Judicial. Decreto que ordena la publicación de este periódico, y objeto que se tiene en mira 1.
Condiciones de la suscripción 8, 248.
Gaitán Isidoro y otros. Proceso por demoras 246.
Gamarra Heliodoro. Heridas. Competencia entre la autoridad civil y la militar 121.
Garcés Misael. Causa por falsedad y estafa 217.
Solicitud sobre rebaja de pena 319.
García Alejandro. Proceso por falsedad 302.
García Antonio y otros. Sumario por delitos políticos 287.
García Cruz. Proceso por abuso de autoridad 54.
García Mayorga Ezequiel. Id. id. id. 188.
García Rojas Francisco. Ejecución contra él 323.
Gaviria é Hijos. Id. id. 396.
Gobernador de Bolívar. Sumario por reclutamiento 295.
de Cundinamarca. Id. id. id. 129, 133.
de Santander. Id. id. id. 166.
Gómez Avelino y Constantino. Sumario por delitos políticos 168.
Gómez Adolfo. Asesinato en "Ciénega de oro" 110.
Gómez Ignacio. Proceso por circulación de moneda falsa 32.
Gómez Lucas. Id. por contrabando 158.
González Abel. Id. por abuso de autoridad 302.
Id. por negligencia 172.
González Antonio. Demanda á la Nación por expropiaciones de 1876 180.
González Enrique Z. Ejecución contra él 195.
González José Manuel. Sumario por delitos políticos 157.
González Lineros Fídolo. Sentencia dictada á su favor por la Corte anterior, en una causa por negligencia 230.
González Ortega Antonio. Por id. 141, 229.
González Pastor. Causa por heridas 80.
González Pedro. Ejecución contra él 187.
González Plutarco. Id. id. 181.
González Senén. Causa por demoras 356.
Goyeneche Pedro y Evaristo. Ejecución contra ellos 276.
Goyes Manuel. Proceso por falsificación de moneda 45.
Grafe Antonio. Asesinatos. Consulta de un Juez 21.
Grau Eusebio. Juicio de cuentas 94, 153.
Guerrero Juana Rita. Denuncia como oculto un terreno en "Chorrera" 289.
Guerrero Manuel María. Expropiaciones de 1860 214.
Guías falsas. Sumario por... 60.
Gutiérrez de Piñeres José María. Solicita el cambio de sus Letras militares 137.
Gutiérrez Liborio. Véase *Arango Silverio.*
Gutiérrez Paz. Juicio por circulación de moneda falsa 79.
Gutiérrez Pedro M. Juicio por expropiación de dos casas 363.

H

Hardy John. Juicio por contrabando 62.
Heridas. Procesos por... 69, 80, 90, 117, 246.
Las inferidas á funcionarios públicos no dan lugar á excarcelación 298.
Hernández Guillermo. Causa por deserción 318.
Hernández Lino. Id. por homicidio 54.
Hernández Simón y otros. Id. por heridas 246.
Herrera Guillermo. Id. por la fuga de un preso 82.
Herrera Joaquín. Causa por maltratamientos á un empleado nacional 35.
Herrera Luis V. Causa por sustracción de documentos de un archivo 5.
Solicita rebaja de pena 267.
Herrera Pastor. Causa por falsedad y estafa 77.
Herrera Salvador. Id. por malversación de caudales públicos 288.
Homicidio. Causas por... 37, 54, 103, 110, 122, 150, 161, 233, 249, 300, 308.
Hoyos Ignacio A. Proceso por abuso de autoridad 173.
Hoyos Joaquín. Id por la pérdida de un sumario 388.
Hoyos Ramón. Ejecución contra él 243.
Hurtado Ezequiel. Sumario por delitos políticos 86.
Hurtado Manuel A. Id. id. id. 46.
Hurtado Nicanor. Id. por homicidio 33.
Hurtado Primitivo. Ejecución contra él 180.
Hurtado Simón. Expropiaciones de 1885. 396.
Hurto y robo. Causas por... 26, 29, 31, 37, 51, 79, 91, 111, 182, 138, 152.

I

Ibarra de S. Concepción. Demandada por expropiación en 1885, 338
Izaza Isidoro. Juicio por abuso de autoridad 372
Impedimento de un Juez. Decisión de la Corte 46.
Incompetencia de la Corte. Veáse *Corte Suprema*.....
Id. de los Tribunales. Véase *Tribunales*.
Id. de jurisdicción. La excepción de incompetencia de jurisdicción *prorrogable* debe proponerse en la confesión, ó 24 horas después; la *no prorrogable* puede ponerse en cualquier estado del juicio 402.
Inconstitucionalidad de una Ley. Veáse Ponce de O' Levy.
Informe Sobre lo ejecutado por la Corte Suprema 281.
Inmunidad Desacatada. Sumarios 88, 294.
Inspección ocular. Cuando no se pide que todo el Tribunal practique esta prueba, la inspección se hará sólo por el Magistrado substanciador. 408.
Insubordinación. Juicios Militares por... 167, 286.
Inventario. Necesidad que tienen ciertos herederos de hacerlo 137.
Isaza Ricardo. Véase Encomienda Perdida.
Izquierdo Miguel. Causa por hurto de sal 26.
Indígenas. No están eximidos del uso de papel sellado 330.
Los juicios sobre resguardos de indígenas se rigen por las leyes comunes 241.

J

Jimenes Silvia. Demanda pensión del Tesoro 93.
Jimeno Ramón B. Demanda á la Nación como á representante de la Compañía de Ferrocarril de Bolívar 108.
Jueces de Circuíto. Fallan en las causas criminales sin la intervención del jurado 266. 401.
Tienen las atribuciones que las leyes daban á los Prefectos respecto de los Corregidores 265.
En el artículo 4.° de la ley 46 de 1887 se cometió el error de poner *Jueces de Distrito*, donde debía decir *Jueces de Circuíto* 401.
No están subordinados á los Jueces Superiores de Distrito, sino á los Tribunales 353,
Hay caso en que pueden nombrar perito por una de las partes 404.....
Habiendo varios Jueces, el que esté impedido debe ser reemplazado por el que le siga en orden numérico 331.
Los de Bogotá deben repartirse los expedientes que quedaron sobrantes, ó resagados 313.
La Corte Suprema aprobó los siguientes nombrados.
de Antioquia 4, 19, 49
Bolívar 49.
Cauca " 49.
Cundinamarca 17, 18.
Pasto 20.
Popayán 50.
Santander 58.
Tolima 57.
Tundama 50.
Tunja 50, 58.
Juez del Circuíto de Andes. Juicio por abuso de autoridad 372.
1.° id. de Bogotá id. id. id. 277.
4.° id. id. id. demoras 287.
5.° id. id. id. negligencia 195, 339.
del id. de Facatativá id. demoras 178, 239, 245, 262.
" id. de Riohacha id." usurpación de facultades 142.
" id. de Valle-Dupar id " abuso de autoridad 341.
Jueces Municipales. Son nombrados por los Tribunales 355.
Modo de proceder en ciertos casos 265.
Tienen las atribuciones que las leyes daban á los antiguos Corregidores 265.
Conocen de las causas por heridas y maltratamientos que no causen impedimento por más de dos días 380.
Jueces Designados. Han dejado de existir 266.
No existen tampoco los que con el carácter de Suplentes nombraban los alcaldes 355.
Jueces Superiores de Distrito. Conocen de las causas por abuso deshonesto 305.
Y por rapto 314.
En el caso de acumulación de autos, extienden su jurisdicción á todos los delitos que resulten probados 259.
Pero no de aquellos en que otro Juez haya dictado auto de proceder 353.
Cada Juez Superior debe tener su lista de Jurados 274.
Los impedimentos y recusaciones de los Jueces Superiores deben ser sustanciados y decididos por sus Suplentes 346.
Juez Superior del Distrito de Antioquia. Juicio de responsabilidad por violación de ley 254.
Juicios de Cuentas. 94, 102, 153, 181, 283, 307, 310.
Juicios de Mayor Cuantía. Cuales son... 266.
Julio Clemente. Proceso por contrabando 364.
Jurados. La eliminación del juicio por Jurados no ataca los derechos constitucionales 259.
Casos en que interviene el Jurado de acusación 266.
Los juicios que debían haber sido decididos por Jurados, y en los cuales se había citado para audiencia, al señalarse nuevo día para esta, debe concederse nuevo término probatorio 289.

L

Lafont Rafael. Juicio por mala administración de caudales públicos 131, 135.
La Palma. Denuncio de varios vecinos 140.
Lara José Cupertino. Juicio por demoras 349.
Larrota Alejandro. id. de cuentas 283.
Leal Lisandro. Causa por abuso de autoridad 97, 151.
Lerma Toribio. id. por delitos políticos 285.
Ley declarada inexequible 235.
No hay ninguna que haya previsto el caso de que un Magistrado de Tribunal se desniegue á firmar los fallos etc. 321.
Leiva B. Francisco. Demanda por suministros en 1885 404.
Lidueñas Francisco. Sumario por rebelión 130.
Liévano Francisco de P. Juicio por malversación de caudales públicos 22.
Liévano Indalecio. Solicita que se avalúen los daños que sufrió una casa de su propiedad en la guerra 83.
Lizarralde Enrique. Juicio por demoras 255.
Lombana José María id. por negligencia 286.

Londoño P. Ignacio. id. por demoras 140, 141, 263. 388.
Londoño P. Pedro. id. id.
Lôpez Caro Alejandro. id. por usurpación de facultades 127.
Lòpez Caro Antonio. id. por negligencia 356.
Lòpez Penha David. Concurso á los bienes de C. Hoyer 180.
Lòpez Vicente. Ejecución contra él 371.
López Zapata Enrique. Denuncio contra él 121.
Acusación de Isidoro Burgos 373.
Lorica. Sumario por rebelión en ese distrito 7.
Lozano Alonso. Juicio militar por deserción 318.
Lozano Juan N. Demanda por suministros en 1885. 387.
Lozano Nicolás L. Sumario por negligencia 372.
Lugo José María. Proceso por fuga de presos 95.
Luque Jesús. id. por delitos políticos 53.

LL

Llinás José Vicente y otros. Sumario por rebelión 142.

M

Maltratamienos de obra. Causas por..... 35, 80, 93, 143.
Los que no causen impedimento por más de dos días son de la competencia de los Jueces municipales 380.
Malversación de caudales públicos. Id. 22, 23, 24, 131, 159, 288, 302.
Manrique Enrique. Proceso por circulación de moneda falsa 140.
Manrique B. Mariano. Diligencias por demora en la defensa de un reo 326.
Manrique Pedro. Sumario por delitos políticos 285.
Mantilla Rafael. Id. id. id. 172.
Mariño C. Rafael. Demanda por suministros en 1885 338.
Mármol de la Torre Delfín. Causa militar por deserción 260.
Márquez Guillermo y otros. Sumario por delitos políticos 152.
Martín Clemente. Juicio de cuentas 310.
Martínez Adolfo. Causa por fuga de presos 76.
Martínez Bossio Bartolomé. Véase *Canoa "América."*
Martínez Diego y otros. Juicio por contrabando 308.
Martínez Pablo y otros. Cuadrilla de malhechores 79.
Martínez Valentina Balbina. Pretende heredar la pensión que disfrutaba su hermano 20.
Mateus General Juan N. Reclama contra la denuncia de bienes en juicio ejecutivo, habiendo hipoteca 332.
Apela del mandamiento ejecutivo 342.
Mateus Rafael. Juicio por abuso de autoridad 333.
Marulanda Francisco. Sumario por daños en el telégrafo 24.
Medellín Cerbeleón y Adelaida. Causa por falsificación de billetes del Banco Nacional 129, 134.
Medina Martínez Domingo. Proceso por abandono del destino 301.
Medina Wenceslao. Causa por la pérdida de unos billetes 13.
Mejía Rodolfo. Causa por negligencia 300.
Mendez Concepción. Demanda por suministros en 1885 370.
Méndez Salvador. Se le concedió pensión como á inválido 42.
Mercado O. Leonidas. Sumario por negligencia 63.
Mery Pascual y otros. Id. por delitos políticos 143.
Mesa González José. Incidente, en el cual se declara que el apoderado de sus herederos no puede ratificar lo actuado 137.
Mesa Juan N. y Cortés Rafael. Ejecución contra ellos 211.
Minas de Esmeraldas de Muzo, Demanda de Juan de Brigard 189.
"La Apariencia." Juicio de posesión intentado por Juan B. Botero Arango 292.
"Matamundo." Demanda de 324.
"Vega Suárez." Tanto en esta como en "La Apariencia" el actor en el juicio es José E. Ucrós 292.
Ministro de Gobierno. Sumario por negligencia 171.
" de Italia. Visita á la Corte 16.
Millán Ricardo. Juicio por la fuga de un preso 251.
Mogollón José Vicente. Id. por abuso de autoridad 222.
Molina Modesto. Ejecución contra él 180.
Moneda falsa. Véase *Circulación y Falsificación.*
Monopolio. Véase *Aguardiente.*
Montaña Joaquín. Competencia entre la autoridad civil y la militar sobre el conocimiento de la causa contra este soldado por heridas 89.
Monroy Domingo. Proceso por negligencia 197.
Monroy José Tomás. Id. por abuso de autoridad 189.
Monroy Manuel. Ejecución contra él 317.
Montenegro Fernando. Sumario por varios delitos 245.
Morales doctor Antonio. Denuncia la pérdida de su correspondencia 197.
Mora Vargas Pedro. Sumario por abuso de autoridad 388.
Moreno de los Ríos Martín. Id. por delitos políticos 67.
Moreno Elías. Sumario por la pérdida de unos billetes 6.
Moreno José Trinidad. Proceso por negligencia 380, 399,
Mortuorias. En igualdad de circunstancias, el Juez del lugar donde uno muera es el competente para conocer de la mortuoria 237.
Los impuestos sobre las mortuorias se hacen efectivos por los trámites comunes 306,
Las Asambleas Departamentales deben legislar sobre este asunto 394.
Motín y Robo. Causa por..... 119.
Movilla Samuel. Id. por varios delitos 157.
Muñoz Federico. Proceso por usurpación de facultades 220.
Muriel Víctor. Causa por haber admitido fianza carcelera á un reo 309.

N

Nariño Vicente Antonio. Juicio por tentativa de homicidio 342.
Naveros Waldo y Molina Pedro. Id. por usurpación de facultades 253.
Negligencia. Procesos por..... 7, 52, 63, 67, 140, 141, 151, 171-172, 189, 193, 195, 197, 206, 229, 230, 286, 301, 339.
Neutralidad. (Violación de) Proceso 68, 390.
Nieto Julián y Manuel Caballero. Id. por homicidio 233.
Noguera Dámazo. Sumario por demoras 165.
Noguera Maza Demetrio. Id. por delitos políticos 55.
Notarios. Los Notarios no son miembros del Poder Judicial 323,
Nulidad de contratos 164, 318.
de un juicio ejecutivo 145,
de un remate 114, 181.

O

Olave Roberto. Proceso por circulación de moneda falsa 142.
Olier Juan C. Id. por contrabando 102,
O'Pick Olivier. Id. por la fractura de un sello 87,
Opositor. El opositor de un deslinde puede llegar á ser actor y demandado 378.
Oquendo & Henríquez. Reclaman la canoa "Nilo" 275.
Ortega Gerardo. Sumario en averiguación del paso de armas por el Istmo de Panamá, con violación de la neutralidad 390.
Ortiz Martín. Juicio por usurpación de autoridad 63, 174.
Ortiz de R. Ulpiana. Ejecuta á *Aureliano Estrada* 291.
Osorio Santiago. Causa por falsificación de meneda 52.
Ospina Belisario. Id. por malversación de caudales públicos 23.
Ovalle David. Id. por responsabilidad 247.

P

Pagnamenta Aníbal. Se le exonera del pago de unos derechos de Aduana 147.
Palacios Francisco J. Ejecución contra él 263.
Papel sellado. En los casos comunes, el papel sellado se suplirá con blanco, á costa de quien deba suministrar aquél; mas cuando en segunda instancia, el apelante no diere desde el principio el necesario, se le tendrá por desistido 345.
Al papel sellado hay que adherir estampillas en cierto caso 369.
Pardo Fidela Causa por falsificación de moneda 34.
París José Manuel y José Joaquín. Se pretende expropiarles un terreno, en Bogotá, para una calle 324.
Patiño Anastacio. Véase *Compañía Trasatlántica.*
Paz Faustino. Promueve juicio por demoras 32.

Peaje de quinas. Denuncio dado por varios, contra el Gobernador de Santander, por el cobro de esta contribución 196.
Pensiones. Consulta que se le hace á la Corte, sobre si subsisten, ó no, las concedidas por el extinguido Estado de Panamá, sobre su Tesoro 64.
Demandas por..... 3, 11, 20, 42, 50, 66, 80, 90, 93, 154.
Peña Félix. Juicio contra él por heridas 117.
Peña Luis Francisco. Sumario contra él por atribuírsele el designio de hacer volar las murallas de Cartagena 62.
Peña Miguel A. Se queja contra el Juez de Mompox 206, 391.
Peña Zenón. Consulta que hace un Fiscal sobre el mérito probatorio de los documentos creados para averiguar quiénes fueron los autores del asesinato de Zenón Peña 150.
Pereira Eusebio. Sumario por daños en el telégrafo 36.
Pereira Marcos. Id. por falsificación de moneda 94.
Pérez Juan. Id. por circulación de moneda falsa 156.
Peritos. Es válido el nombramiento hecho por el Juez en cierto caso 404.
Perjuicios. En las cuasas criminales es obligatorio el avalúo de los perjuicios sufridos; 259; aun cuando no se haya consumado el delito 361.
Pernet Cayetano. Juicio contra él por heridas 90.
Personal de la Corte. Cambios ocurridos 1, 25, 121, 153, 193, 217, 351.
Pinillos Edelmira. Causa por circulación de moneda falsa 66.
Pino Alejandro. Interpone el recurso de casación contra la sentencia que lo condenó á muerte por asesinato 308.
Piñeros Félix y otros. Juicio por demoras 338.
Pizarro Ricardo. Id. por abandono del destino 341.
Poderes. Los poderes que se refieren á un juicio presunto, mientras este no aparezca, no se notifican ni se dan en traslado 378.
Policía. A la policía compete conocer de las causas por hurto y estafa de cosa cuyo valor no exceda de $ 20 353.
Ponce de Leon Fernando. Ejecución contra él y Segundo Lozano como fiadores 248.
Ponce de O'Levy Juana. Inexequibilidad de la ley que le concedió pensión 235.
Prefecto de Medellín. Sumario por expropiación de unas caballerías 140.
Prescripción de las penas Solicitud de la Corte 3.
Fallos sobre... 22, 23, 24, 54, 59, 63, 67, 165, 166, 171, 189, 196, 197, 220, 228, 229, 239, 253, 255, 262, 287, 301, 356, 387.
Prieto Daniel. Juicio por heridas 69.
Procedimiento. Cómo deben fallar y resolver los Tribunales 238 275.
Procedimiento cuando se trata de anular los Acuerdos municipales 379.
Pulido de Montes Zoila. La desamortización de bienes de manos muertas no alcanzo á las obligaciones á plazo contraídas antes del decreto de 1861. 403.
Pulido Zoilo, Proceso por usurpación de facultades 48.
Putnam Francisco W. Auto dictado por el Tribunal de Cundinamarca 104.

Q

Queja de Juan G. Calderón contra el Tribunal de Bolívar 151.
Quijano W. Elías. Sumario por usurpación de facultades 28.
Quiñones Eladio. Competencia entre la autoridad civil y la militar sobre conocimiento de la causa por la muerte de Nicomedes Rodriguez 113.

R

Ramírez Antonio María. Se le declara desistido de un recurso de apelación en el juicio sobre "Planadas" y "Mundo nuevo." 248.
Sumario contra él por haber radicado su despacho de Juez, fuera del poblado 366.
Ramírez Jesús y otros. Sumario por delitos políticos 262.
Ramírez Manuel María. Denuncio que contra él da Isidoro Burgos 207.
Ramírez Felipe. Intenta demanda contra la Compañía del Ferrocarril de Panamá 170.
Se queja contra el Tribunal de Panamá 164.
Ramírez Gómez José María. Ejecución contra él. 397.
Rebelión. Véase *Delitos políticos.*
Reclutamiento. Procesos por...70, 129, 166, 295.
Recompensa. Se concede 65.
Reconvención. Puede haberla en las demandas de menor cuantía 380.
Recurso de casación. Véase *Casación.*
Reina Heliodoro. Juicio por usurpación de facultades 221, 244.
Reivindicación. Juicios de... 270, 275.
Rengifo Aristides. Sumario por delitos políticos 38.
Repartimiento. Los expedientes que quedaron sin repartir en los Juzgados deben repartirse 313.
Repartido un expediente, se entiende que lo están los incidentes y los juicios acumulados 378.
Véase *Juez 1.° de Bogotá.*
Resguardos de indígenas. Los juicios sobre resguardos se rigen por las leyes comunes 241.
Restitución de despojo. Demanda de José Hilario Cano 194.
Restrepo é Hijos (Fernando).Ejecución contra ellos 138.
Restrepo Rubén. Proceso por abuso de autoridad 310.
Reyes Patria Clímaco. Ejecución contra él 357.
Ribas José G. y José E. Caro. Incidentes de una causa contra ellos 46.
Riaño Ricardo. Demanda al Gobierno nacional 206.
Rincón Motta Juan N. Sumario por abuso de autoridad 228,
Rioja José María. Id. por negligencia. 389.
Robles Luis A. Sumario por violación de correspondencia 85.
Rodas Clímaco y otros, Id. por delitos políticos 254.
Rodríguez Braulio. Demanda por suministros en la guerra de 1885, 316.
Rodríguez Federico. Proceso por negligencia 142.
Rodríguez Florentino y otros. Sentencia del Tribunal de Cundinamarca en la causa contra ellos por motín y robo 119.
Rodríguez Jacinto. Causa militar contra él por insubordinación 167, 177, 186.
Rodríguez Juan N. Causa militar por hurto 372.
Rodríguez Nicolás. Ejecución contra él 27.
Rodríguez Pedro. Proceso por falsificación de moneda 52.
Rodríguez Rafael. Id. por contrabando 36.
Rojas B. Enrique. Denuncio de A. Antorveza contra él 340. 405.
Sumario por haber actuado ciertas diligencias en papel blanco 365.
Romero Torres Ignacio. Denuncio de Ignacio Franco contra él por falta de asistencia al despacho 227.
Rosario Fermín. Competencia entre autoridades civiles sobre conocimiento de la causa contra él por abuso deshonesto 305.
Rosero Roberto. Proceso por abuso de autoridad. 399.
Rubiano Florentino. Concurso de acreedores contra él 105.
Rubio Tiberio. Sumario por responsabilidad 239.
Rueda Daniel. Causa por id. 300.
Rueda Severo. Solicita el cámbio de sus Letras militares 55.
Ruiz Carlos B. Proceso por negligencia 189, 193, 255.
Ruiz Barreto Emilio. Lo acusan Gabriela Olaya y Agustín Calvo Mendivil 268.
Ruiz Librada. Se le niega el derecho á una pensión 11.

S

Salvamento de votos 38, 45, 83, 116. 346, 347, 348, 369.
Sánchez Bárbaro. Sumario por delitos políticos 53.
Sánchez Inocencio. Id. por tentativa de envenenamiento 32.
Sánchez José María. Demanda por suministros en 1885 316.
Sánchez Julio. Tercería en una ejecución 190.
Sánchez Juan y Luis Alberty. Juicio por falsificación de moneda 156.
Sánchez Segundo. Id por demoras y abuso de autoridad 212.
Sanclemente Vicente id. por circulación de moneda falsa 32.
"Sáncote" hacienda de. Juicio sobre la nulidad de las diligencias de desamortización 114.
Santamaría David. Ejecución contra él 169.
Santamaría Fermín. Expropiación de un terreno 179.

Santamaría & Lalinde. Ejecución contra ellos 147.
Santodomingo Luis. Sumario por delitos políticos 96.
Santos Isidora. Solicita pensión del Tesoro 80.
Santos Onofre. Juicio por daños en el telégrafo 55.
Sarmiento Esteban y Fermín. Causa por asesinato 161.
Secretario de Gobierno de Panamá. Sumario por demoras 87.
Sedición. Causa por... 69, 81.
Sentencias. Las dictadas en juicios de imprenta, con intervención del Jurado no son apelables 313.
Las que aprueban ó imprueban el fallo del Jurado deben dictarse dentro de tres días 258.
Las que recaigan en pleitos que valgan más de $ 5,000, llevarán una estampilla de 3.ª clase por cada $ 5,000 de exeso 345.
Serrano Clímaco. Juicio por negligencia 52.
Sicard Joaquín. Id. por abuso de autoridad 157.
Sierra Juan. Id. por deserción 319.
Silva Alejandro y otros. Id. por delitos políticos 263.
Silva Pastor. Juicio de deslinde de las tierras de "San Ignacio" 226.
Silva Remigio. Id. por circulación de moneda falsa 30.
Smith Edmundo W. P. Ejecución contra él 181.
Soto Magín y Cancio. Sumario por rebelión 59.
Suárez Domingo. Id. por falsedad 197.
Suescún Domingo. Id. por la pérdida de un expediente. 388.
Suplentes de los Jueces. Pueden ejercer la abogacia cuando no están en ejercicio 330.
No tienen señalado sueldo 331.
Reemplazan á los Jueces en las faltas *absolutas, temporales y accidentales* 337.
de los Magistrados de Tribunales. La Corte no tiene facultad de presentar ternas al Poder Ejecutivo para su nombramiento 381.
Suspensión de leyes de los extinguidos Estados 73.
Sustracción de documentos. Causa por... 5.
de encomiendas. Id. 31, 87.

T

Telégrafos. Daños en las líneas de ..... 24, 36, 55.
Telegrama falso. Véase *Benítez José Tobías.*
Téllez Rudecindo. Causas por hurto 51, 91.
Tentativa de envenenamiento. Véase *Sánchez Inocencio.*
de homicidio 269, 342.
Términos. En los judiciales se cuentan las horas de la noche 353.
Los términos comenzados á correr y las diligencias, principiadas no se interrumpen por causa de la unificación de las leyes 330, 331.
El que tiene el demandado para contestar principia cuando termine el que se le haya señalado para que esté á derecho en el juicio 393.
Terreros Benjamín. Demanda por expropiaciones de 1885. 386.
Terril Federico. Ejecución contra él 343.
Territorios. Quedaron haciendo parte de los Departamentos, la Corte no conoce yá de sus litigios 9.
Tobón Toribio. Causa por circulación de moneda falsa 166.
Torres Lisandro. Sumario por falsificación de unos aparatos de Remington 318.
Traición. Juicio por..... 44.
Tribunales. Deben fallar en Sala plural 239, 257, 275.
Cuando se compongan de cuatro ó más Magistrados, los que queden sobrantes en cada juicio reemplazarán á los que estén impedidos ó sean recusados 299, 322.
Deben conocer en segunda instancia de los juicios de menor cuantía que fueron fallados por los Jueces de Circuíto, conforme á las leyes de los extinguidos Estados 329, 401.
Deciden en Sala de Acuerdo sobre la validez ó nulidad de los Acuerdos de las Corporaciones municipales 306.
Trámites que deben seguir para ello 379.
No tienen jurisdicción para conocer de los juicios de cuentas 379.
Tremblay & Recabado. Demandan á Target & Bolesta 170.
Troquel hallado en la quebrada de Santa Elena 60.
Troqueles equivocados en la Casa de Moneda de Bogotá 21.
Trotet Jacques. Demanda á Poppes & Pilides 171.

U

Ucrós José E. Véase Mina "La Apariencia."
Umaña Celedonio. Juicio sobre nulidad de un contrato 318.
Unidad de responsabilidad no puede tener efecto cuando el principal y el subalterno dependen de diversos Ministerios 307.
Urdaneta Enrique. Juicio por falsificación de moneda 138.
Uscátegui Valentina. Dejó de tener derecho á disfrutar la pensión que se le había concedido 154.
Uscátegui Vicente. Ejecución contra él 351.
Usurpación de facultades. Causas por..... .. 7, 28, 48, 63, 127, 220, 221, 244, 253, 254, 288.

V

Valenzuela Teófilo. Sumario por demoras 227.
Vallarino Bernardo. Id. por varios cargos 248.
Vallejo Antonio. Solicita la devolución de unos derechos de Aduana 209.
Vanegas Isaura é Ismenia. Causa por falsificación de moneda 34.
Vargas & Hermanos. Demanda por suministros en 1885 316.
Vargas Marceliano. Sumario por falsedad 286.
Vargas Rafael. Causa por hurto de sal 128, 131.
Vásquez Carlos y otros. Id. por traición 44.
Vásquez Camilo. Id. por malversación de fondos 302.
Vela Avelino. Id. por falsedad 240.
Vidal Francisco J. Id. id. 228.
Vila David y Hermanos. Ejecución contra ellos 221.
Villa Leal José. Sumario por detención arbitraria 244.
Villa Manuel. Id. por abuso de autoridad 332.
Villacob Medardo. Id. por homicidio 103.
Villamizar Vicente. Id. por abuso de autoridad 246.
Vinasco Fidel y otros. Id. por delitos políticos 262.
Viñas Marcial. Demanda por suministros de 1885 362.
Viola Manuel S. Causa por sedición 81.
Violación de correspondencia 85, 127.
de leyes 254.
Visitas de Su Señoria el Ministro de Gobierno 319, 357.
del señor Ministro de Italia 16.
Vistas del señor Procurador de la Nación.
En la acusación de Apolinar Ruiz contra el Tribunal del Cauca 200.
" " " " de Gabriela Olaya contra el doctor Emilio Ruiz 271.
" " " " de Pantaleón Ballesteros contra el General Jaime Córdoba 407.
" causa contra Alejandro Pino 304.
" " " " Antonio M. Baute 376.
" " " " Buenaventura Clavijo 406,
" " " " El bongo "Superior" 39.
" " " " Ezequiel García M. 223.
" " " " Enrique Rojas B. 392.
" " " " Gobernador de Cundinamarca 133.
" " " " Juan Chaves 279.
" " " " Misael Garcés 223.
" " " " Nicolás Lozano 391.
" " " " Pablo Martínez 171.
" " " " Pedro Rodríguez 56.
" " " " Rafael Vargas 131.
" " " " Senén González 407.
En la competencia por la causa contra Antonio Nariño 383.
" " " " Fermín Rosero 352.
" " " " Heliodoro Gamarra 133.
" " " " Jesús Lasprilla 376.
" " " " Ramón Rueda 391.
" " " " Teodoro Samudio 143.
" " consulta sobre pensiones en Panamá 171.
" " demanda de Eusebio L. Caro por suministros 264.
" " " " Juan A. Carvajal id. 383
" " " " Juan B. Feijoo id. 384
" " " " J. Miguel de Paz por un remate 327, 358.
" " " " Miguel Cuéllar por suministros 199.

" " " " Rosa Cruz de Molano por pensión 172.
" " " " Sergio Duarte por pesos 375.
" " " " Concepción Méndez por suministros 406.
" el denuncio de Abraham Antorveza 256.
" " " " doctor Antonio Morales, Magistrado de la Corte 199.
" " " " Fidel H. Rosas 343.
" " " " una mina por E. Zuleta 360.
" las diligencias contra Mariano Manrique B. 359.
" la ejecución contra Alejandro Danouille 278.
" " " " David Vila 232.
" " " " Evaristo de la Torre 382.
" " " " General Juan N. Mateus 344, 352.
" " " " Ireneo Escobar 312, 407.
" " " " Isaac Sennior 368.
" " " " Manuel Monroy 343.
" " " " Matías Abumada 231.
" " " " Pedro y Mercedes Avila 183.
" " " " Pedro González 207.
" " " " Vicente López 367.
Expropiación contra Alejandro Weckbecker 263.
" " " " Fermín Santamaría 198.
" " " " Liborio Gutiérrez E. 311.
" " " " José Manuel París 328, 336.
" " " " Pedro M. Gutiérrez 384.
En el juicio de cuentas con Leopoldo Franco 183.
" " " " Francisco J. Palacios 406.
" " " " José María Forero S. 327.
" " " " Clemente Martín 335.
" " " entre C. Umaña y el Estado de Boyacá 336.
" " " " R. Vargas y Eustaquio Muñoz 334.
" " " " R. Santos y el Estado de Antioquia 334.
" " " " Varios por la mina "La Apariencia" 231, 255.
" " sobre una casa del Presbítero Justiniano Madrid 266.
" " " " sucesión de Zoilo M. Arce 320.
" la queja de Juan G. Calderón contra el Tribunal de Bolívar 158.
" la solicitud de Alejandro Castro sobre excarcelación 175.
" el sumario contra Argilio Amaya 164.
" " " " Alejandro Zea 296.
" " " " Antonio M. Ramírez 358, 408.
" " " " Buenaventura Clavijo 408.
" " " " Domingo Medina 278.
" " " " Domingo Monroy 199.
" " " " Eleuterio Ceballos 198.
" " " " Federico R. Rodríguez 176.
" " " " Félix Piñeros 343.
" " " " Gerardo Ortega 191.
" " " " General en Jefe del Ejército 168.
" " " " Gobernador de Santander 159.
" " " " Ignacio A. Hoyos 191.
" " " " Isaías Castro Vélez 358.
" " " " Isidoro Isaza 400.
" " " " Joaquín Arbeláez 198.
" " " " Joaquín Sicard 159.
" " " " José Cupertino Lara 375.
" " " " José María Rioja 399
" " " " José María Lombana D 296.
" " " " Juez del Circuito de Andes 384.
" " " " Juan P. Bernal 200.
" " " " Julio Estévez Bretón 368.
" " " " Julio Ferrer 392.
" " " " Marceliano Vargas 304.
" " " " Narciso Colmenares 400.
" " " " Salustiano Chaparro 360.
" " " " Tribunal de Cundinamarca 405.
" " " para averiguar el asesinato de Zenón Peña 144.

W

Weckbecker Alejandro. Expropiación de un terreno 277, 303.
Wilches Solón. Sumario por reclutamiento 166.

Z

Zaldúa Manuel María. Denuncio contra varios funcionarios 156.
Zamudio Teodoro. Causa por alteración de Billetes del Banco nacional 140, 143.
Zapata Angel. Ejecución contra él 398.
Zapata José María. Id. por circulación de moneda falsa 43.
Zuleta Estanislao B. Denuncia la mina de "Matamundo', 324.
Zuleta Tomás. Proceso por usurpación de autoridad 254.
Zúñiga José L. Reivindica un Cayuco 252.

El Secretario, Ramón Guerra Azuola.

ANUNCIOS

GACETA JUDIAL.—Se publica este periódico ordinariamente una vez por semana (los sábados), y se admiten suscripciones en el Banco Nacional así:

Por un semestre (26 números).....$ 3 00
Por un año (25 id, ... 5 00

No se venden números sueltos.

Es de cargo del Ministro de Gobierno hacer repartir el periódioco á los suscriptores en la capital, y en los Departamentos por medio de los correos; sin perjuicio de la distribución á las oficinas públicas que deben recibirlo.

No se admite anuncios que no sean de carácter oficial, ni inserciones que no sean autorizadas por la Corte Suprema.

"GACETA JUDICIAL"

El Gobierno ha resuelto bajar á la mitad del valor de las suscripciones á este periódico, desde el número 27 en adelante, precio que tendrán igualmente las colecciones de la *Gaceta*.

El Subsecretario de Gobierno, *Julio A. Corredor*.

IMPORTANTE.

En venecficio del buen servicio público, se suplica á los caballeros que tengan en su poder Códigos, Compilaciones, tomos de leyes nacionales y de los extinguidos Estados, ú otros libros de propiedad de la Corte Suprema, se sirvan devolverlos, pues ocurre con frecuencia la necesidad de consultar tales obras.

CONSTITUCIÓN DE COLOMBIA.

Está de venta en la Tesorería general, en edición de cuaderno, á 20 centavos el ejemplar.

BOGOTÁ.—IMP. DE PIZANO, POR J. DELIO URIBE.